

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA



TESIS DOCTORAL

**La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en la Edad Moderna.
Siglos XVII-XVIII**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Miguel Fernando Gómez Vozmediano

DIRIGIDA POR

Enrique Martínez Ruiz

Madrid, 2002

ISBN: 978-84-8466-057-6

© Miguel Fernando Gómez Vozmediano, 1992

MIGUEL FERNANDO GÓMEZ VOZMEDIANO

LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL EN
LA EDAD MODERNA. SIGLOS XVII-XVIII.

Tesis Doctoral dirigida por :

Dr. D. Enrique Martínez Ruiz
Catedrático del Departamento de
Historia Moderna. Universidad Com
plutense de Madrid.

LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL EN LA EDAD MODERNA.

SIGLOS XVII Y XVIII.

-ÍNDICE.....	1
-INTRODUCCIÓN.....	8
1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD DE VIEJA REAL	
DURANTE LOS SIGLOS XIII AL XVI.....	16
1.1. Baja Edad Media. Cimentación y esplendor.....	18
1.1.1. Precedentes y origen.....	21
1.1.2. Desarrollo institucional.....	32
1.1.2.a. Juntas y concordias de la Santa Hermandad.....	32
1.1.2.b. Ordenanzas de la entidad manchega.....	40
1.1.3. Intervención de la Corona.....	43
1.1.3.a. Privilegios y disposiciones reales.....	45
1.1.3.b. Actuaciones político-militares de la Hermandad.....	50
1.1.4. Conformación del ordenamiento procesal abreviado.....	53
1.1.5. La Hermandad de Chillón.....	59
1.2. Inicios de la Edad Moderna. Consolidación jurisdiccional y expansión territorial.....	61
1.2.1. Los Reyes Católicos y la Santa Hermandad Vieja.....	64
1.2.1.a. Disposiciones regias.....	66
1.2.1.b. Control y reordenación jurídico-institucional: los Capítulos de Maldonado.....	70
1.2.1.c. Relación con la Hermandad Nueva.....	77
1.2.2. La Hermandad de Ciudad Real en el siglo XVI.....	82

1.2.2.a. Confirmación de privilegios y peticiones de Cortes..	85
1.2.2.b. Relaciones jurisdiccionales.....	90
A. Problemas en los territorios de Órdenes. La Hermandad Vieja de Almagro.....	93
B. Defensa de la asadura ante colectivos privilegiados.....	98
C. El corregimiento ciudarrealeño y el Santo Instituto.....	103
D. La Hermandad General en La Mancha.....	109
-NOTAS AL CAPÍTULO 1.....	115
2. ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN CIUDARREALEÑA EN LA EDAD MODERNA. AUSTRIAS MENORES Y BORBONES.....	159
2.1. Privilegios y disposiciones regias.....	164
2.2. Mecanismos de control sobre la Hermandad.....	168
2.2.1. Los juicios de residencia. Siglo XVII.....	169
2.2.2. Supervisión de Consejos y Chancillerías. Siglo XVIII....	176
2.3. Cabildos hermandinos.....	188
2.3.1. Asambleas particulares.....	192
2.3.2. Asambleas generales y extraordinarias.....	194
2.4. Ordenanzas.....	196
-NOTAS AL CAPÍTULO 2.....	203
3. MIEMBROS DE LA HERMANDAD MANCHEGA.....	228
3.1. Los hermanos. Formalidades de ingreso y extracción socioeconómica.....	231
3.2. Privilegios personales.....	239
3.2.1. Económico-fiscales.....	243
3.2.2. Honorífico-profesionales.....	250
3.2.3. Jurídico-procesales.....	259
3.3. Facultades y jerarquización del personal hermandino.....	267
3.3.1. Oficios de elección periódica.....	269
3.3.1.a. Alcaldes.....	275
3.3.1.b. Regidores.....	279

3.3.1.c. Alguacil mayor.....	281
3.3.1.d. Cuadrillero mayor.....	282
3.3.1.e. Mayordomo.....	284
3.3.1.f. Contador.....	288
3.3.1.g. Procurador General.....	290
3.3.1.h. LLavero mayor.....	292
3.3.2. Cargos de designación directa.....	294
3.3.2.a. Letrados.....	296
3.3.2.b. Portero.....	302
3.3.2.c. Alcaide y sotalcaide.....	304
3.3.2.d. Ejecutor.....	309
3.3.2.e. Personal sanitario.....	316
3.3.2.f. Capellán.....	319
3.3.2.g. Amo del hospital.....	322
3.3.2.h. Alguaciles y Cuadrilleros.....	324
3.3.3. Empleos enajenados. Los escribanos hermandinos.....	328
3.3.4. Personal delegado: comisarios y ministros receptores..	333
3.3.5. Colaboradores no adscritos a la corporación.....	356
3.4. Tensiones en el seno de la entidad.....	363
3.4.1. Problemas derivados de la "mitad de oficios".....	364
3.4.2. La cuestión de las escribanías enajenadas.....	369
3.4.3. Rencillas profesionales, económicas y personales.....	375
-NOTAS AL CAPÍTULO 3.....	381
4. FINANZAS DE LA HERMANDAD.....	519
4.1. La contabilidad.....	519
4.2. Los ingresos.....	525
4.2.1. Rentas Ordinarias.....	526
4.2.1.a. El derecho de Asadura.....	526
A. Periodo bajomedieval.....	526
B. Edad Moderna.....	530

B.1. Estaciones de cobro y sujetos contributivos.....	530
B.2. Procedimientos recaudatorios.....	535
B.2.1. Arrendamiento general.....	536
B.2.2. Administración directa.....	542
B.2.3. Fórmula mixta.....	545
B.3. Defensa de su recaudación....	549
4.2.1.b. Rendimientos inmobiliarios.....	564
A. Réditos censales sobre viviendas.	566
B. Alquileres de casas-tienda.....	570
C. Arrendamiento de los balcones de la plaza.....	576
4.2.2. Rentas Extraordinarias.....	578
4.2.2.a. Liquidación de superávits.....	578
4.2.2.b. Almoneda de bienes incautados.....	580
4.2.2.c. Percepción de sanciones pecunarias.....	585
4.2.2.d. Ingresos menores y partidas sin especificar.....	589
4.3. Los gastos.....	591
4.3.1. Nóminas.....	591
4.3.2. Administración de justicia y diligencias policiales.....	593
4.3.3. Mantenimiento y adecentamiento de propios.....	594
4.3.4. Liquidación de déficits.....	597
4.3.5. Cargas censales.....	598
4.3.6. Celebraciones religiosas y gastos de culto.....	600
4.3.7. Limosnas a vergonzantes y socorros a dependientes.....	602
4.3.8. Dispendios durante las elecciones.....	604
4.3.9. Gastos derivados de la percepción de la asadura.....	606
4.3.10. Aguinaldos navideños.....	608
4.3.11. Desembolsos menores.....	611
4.4. Deudas e Impagos.....	614
4.5. Préstamos.....	618
-NOTAS AL CAPÍTULO 4.....	624

5. RECURSOS MATERIALES DE LA HERMANDAD.....	690
5.1. La Sede del Santo Tribunal manchego..	690
5.1.1. Descripción del inmueble.....	690
5.1.2. Condiciones de vida de los reclusos.....	698
5.1.3. Fugas de la galera hermandina.....	706
5.2. Peralvillo.....	719
-NOTAS AL CAPÍTULO 5.....	721
6. ASPECTOS RELIGIOSOS Y DE BENEFICENCIA.....	744
6.1. Funciones religiosas del cabildo.....	744
6.2. Oratorio del Espíritu Santo.....	748
6.3. Asistencia religiosa a reos y dependientes.....	750
6.4. Limosnas a vergonzantes.....	754
6.5. Relación con congregaciones piadosas:	
La Cofradía de la Santa Caridad.....	757
6.6. El Hospital de la Mejora.....	760
-NOTAS AL CAPÍTULO 6.....	765
7. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.....	776
7.1. Facultades jurídico-territoriales....	776
7.2. Casuística jurisdiccional. Labores preventivas y policiales.	783
7.2.1. Prevención y coerción de la delincuencia rural.....	785
7.2.2. Regulación y amparo de la actividad apícola.....	798
7.3. Funcionamiento del tribunal.....	802
7.3.1. La corte de justicia hermandina.....	802
7.3.1.a. Conservación de la primera instancia criminal.....	805
A. Los alcaldes.....	806
B. Los asesores.....	811
7.3.2.b. Subrogación de la sentencia a los tribunales	
superiores.....	816
7.3.2. El proceso criminal.....	823
7.3.2.a. La Sumaria.....	825

7.3.2.b. El Juicio Plenario.....	843
7.3.2.c. La Sentencia.....	860
7.3.2.d. El Procedimiento en rebeldía.....	882
7.3.2.e. Los medios legales de sustraerse a la condena ordinaria.....	884
A. Retirada de querella.....	884
B. Recurso de nulidad.....	887
C. Apelación.....	889
D. Procedimientos extraordinarios: perdones, conmutaciones e indultos.....	893
-NOTAS AL CAPÍTULO 7.....	898
8. RELACIONES INTERJURISDICCIONALES DE LA HERMANDAD DE CIUDAD REAL.....	988
8.1. Hermandades Viejas de Toledo y Talavera.....	991
8.2. Justicias locales.....	997
8.3. Jurisdicciones especiales.....	1014
8.4. Tribunales superiores del Reino.....	1019
8.5. Iglesia y Santa Hermandad. El derecho de asilo.....	1030
8.6. Un caso paradigmático: el comisario don Juan Bruno de Aranda y Puertas.....	1040
-NOTAS AL CAPÍTULO 8.....	1051
9. APROXIMACIÓN A LA CRIMINALIDAD RURAL DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII.....	1086
9.1. Actos delictivos.....	1086
9.2. Delincuentes.....	1105
9.3. Los gitanos y la Hermandad Vieja de Ciudad Real.....	1130
9.4. Dimensión real de la delincuencia y su coerción.....	1142
-NOTAS AL CAPÍTULO 9.....	1151
10. LAS HERMANDADES VIEJAS EN EL SIGLO XIX.....	1174
-NOTAS AL CAPÍTULO 10.....	1183

11. CONCLUSIONES.....	1188
12. APÉNDICE DOCUMENTAL.....	1205
12.1. Textos.....	1205
12.2. Organigrama de su estructura jerárquica.....	1284
12.3. Mapa localización lugares de exacciones pecuarias.....	1285
12.4. Gráfica evolución percepción de la asadura.....	1286
12.5. Desglose de ingresos y gastos.....	1287
12.6. Evolución de los balances contables.....	1289
12.7. Listado de alcaldes, mayordomos y depositarios (ss. XVII-XVIII).....	1291
12.8. Repertorio de conflictos jurisdiccionales.....	1301
12.10. Relación de encausados por el Santo Tribunal ciudarrealeño.	1312
13. FUENTES MANUSCRITAS.....	1374
14. FUENTES IMPRESAS Y BIBLIOGRAFÍA.....	1397

INTRODUCCIÓN.

La Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real se configuró, a lo largo de sus más de cinco siglos de vigencia, como una entidad de primer orden para ayudarnos a entender la evolución histórica de múltiples aspectos sobre la realidad social, económica, institucional y política de la Corona de Castilla durante tan dilatado periodo cronológico. Algunas de estas cuestiones hasta épocas recientes no habían sido abordadas por la historiografía, mientras que sobre buena parte de ellas pesan aún hoy serios interrogantes que hemos intentado de responder, en la medida de lo posible, con la presente investigación.

El Santo Tribunal manchego fue en su origen una asociación comarcal de colmeneros, fundada por iniciativa gremial bien entrado el siglo XIII, cuando todavía no estaba totalmente consolidada la Reconquista. Su objetivo prioritario era defender los intereses apícolas de sus integrantes frente a la delincuencia endémica de la frontera meridional castellana. Dicha inestabilidad estaba favorecida por la inexistencia de una autoridad firme en el área, dadas las carencias político-militares de una zona demográficamente débil, así como por tratarse de un medio físico montuoso en sus extremos -Montes de Toledo al norte, Sierras Morena y de Alcaraz al sur-, cubierto de un denso monte bajo.

Coordinada su labor preventiva y coercitiva en el despoblado frente a los golfines en los albores del siglo XIV, al sumarse a la iniciativa integradora de toledanos y talaveranos. Desde el primer momento la Corona auspiciaría dicha federación, amparando el proceso

de conformación orgánica del Triple Instituto, y otorgando los privilegios que garantizaron la viabilidad de una iniciativa que, bien encauzada, sería sin duda provechosa para sus mutuos intereses. La operatividad de una fuerza estable de seguridad del yermo propiciaría la repoblación, estimularía el desarrollo económico del área y consolidaría , en definitiva, la presencia cristiana en un espacio geográfico problemático.

Cimentada, no sin problemas, esta organización con el patrocinio regio. contaría desde el periodo fundacional con el favor de pobladores y concejos; logrando ganarse la aquiescencia, más o menos forzada, del Arzobispado toledano, del Honrado Concejo de la Mesta, y de los claveros de las Órdenes Militares. con los que llegaría a concordias particulares en cuyo marco desarrollar su actuaciones.

Las Hermandades tuvieron su periodo de esplendor en la Baja Edad Media, cuando conformarían una estructuras y se irían dotando de unos medios de actuación peculiares que, con ciertas modificaciones, se mantuvieron durante su azarosa existencia hasta fechas relativamente recientes.

La corporación de Villa Real mantuvo durante la Edad Media una trayectoria nitidamente diferenciada respecto de sus homónimas de Toledo y Talavera, pese a su integración formal en su coalición. Ya en pleno siglo XV, y sobre todo durante la siguiente centuria, se desmarcaría de los Tribunales Viejos, siguiendo una evolución distinta respecto de la Hermandad Nueva, y la de sus herederas naturales. las Hermandades concejiles, así como de las congregaciones piadosas y de los cuerpos de seguridad auspiciados desde la administración

ilustrada, con todas las cuales mantiene sin embargo determinadas similitudes estructurales o jurisdiccionales.

Inevitablemente la asociación manchega se vería imbuida de la impronta marcada por los tiempos, con todo lo que ello conlleva de adaptación procedimental, pero en esencia conservó gran parte de sus peculiaridades en el contexto del entramado institucional medieval heredado y asumido por el nuevo Estado surgido en la Edad Moderna. La Santa Hermandad Vieja manchega fue una institución más del intrincado mosaico jurisdiccional del Antiguo Régimen, especializada en el mantenimiento de la seguridad en caminos y yermos, siendo su actuación encauzada por los órganos rectores de la Monarquía, aunque manteniendo un elevado grado de autonomía orgánica y de discrecionalidad actuacional.

La importancia de la imposición de una justicia regia en los lugares de su ámbito territorial, eminentemente centrado al Sur de la línea del Tajo, fue palpable por la cantidad y calidad de sus miembros; su incidencia demográfica, propiciando la colonización de zonas assoladas por el bandidaje; económica, al asegurar las vías de comunicación, facilitando el libre tránsito de personas y bienes, o contribuyendo directamente a las arcas del Tesoro Real.

De igual forma, trascendió a su amplio marco físico, por su ostensible repercusión en el desarrollo jurídico castellano, propiciando la conformación de un procedimiento criminal abreviado; institucionalmente, al ser tomada como modelo para la Hermandad Nueva de los Reyes Católicos; jurisdiccionalmente, al ampliar paulatinamente su presencia a gran parte de la Península y entendiendo de delitos no previstos en principio en su instituto; e incluso, influyendo

politicamente, al tomar partido o inhibirse en el delicado equilibrio de fuerzas de la época.

El objetivo de la presente tesis consiste en intentar profundizar en su realidad institucional y procedimental, en la realidad cotidiana de una organización, que bien sea por desconocimiento, desinterés u olvido, raramente ha tenido el lugar que merece en la historiografía. En las escasas ocasiones en que ha hecho acto de presencia nunca ha sido estudiada global, y apenas particularizadamente en los siglos que nos ocupan, restringiéndose dichos análisis a aspectos puntuales como su financiación, su incidencia socio-demográfica, o en su vertiente como entidad dispensadora de caridad, a menudo ceñido a la Edad Media o al Renacimiento.

No hemos querido pasar por alto aspectos tan importantes para la interpretación del fenómeno hermandino como pueden ser la evolución socioeconómica de su ámbito actuacional, centrándonos particularmente en los avatares de la ciudad sede del tribunal; un análisis pormenorizado de sus componentes; la intervención fiscalizadora de los tribunales superiores y de los órganos polisindiales del Estado; la administración pública de justicia; su labor benéfica; el mantenimiento de una flexible duplicidad procedimental penal; su relación institucional con el resto de las jurisdicciones; o un esbozo de la criminalidad rural de los siglos XVII y XVIII, entre otros temas. Una investigación de este tipo plantea cuestiones colaterales de incuestionable interés general, como el esbozo de los cauces seguidos por la caridad institucionalizada; un bosquejo de su relación con entidades homólogas de su área actuacional; una aproximación a la criminalidad rural coetánea y su coerción; la valoración de los

factores político-administrativos que alientan su mantenimiento y expansión, etc.

Para la realización de este trabajo hemos utilizado un material documental, en gran parte inédito, que se especifica en su lugar. Fundamentalmente procede del propio archivo de la entidad manchega, parcialmente conservado en diversos depósitos de Madrid y de Ciudad Real. En menor proporción han sido consultados fondos de otros lugares, como Granada y Simancas, así como los pertenecientes a determinados municipios de su ámbito territorial y los depósitos toledanos de alguna forma relacionados con el tema que nos ocupa.

De interés accesorio han sido las aportaciones al tema realizadas desde la literatura coetánea, como poesía, teatro, novela picaresca, libros de viajes, sermones religiosos, literatura jurídica y otras fuentes escritas u orales de la época, a menudo consultadas en sus fuentes primigenias.

Esta investigación no pretende sino aportar, en la medida de lo posible, nuevos datos e interpretaciones ante el vacío historiográfico existente respecto a las fuerzas de imposición del orden durante el Antiguo Régimen en la Corona de Castilla, arrojando luz sobre una de las instituciones antaño más temida y respetada de La Mancha.

El presente estudio ha sido dividido en diez capítulos. En el primero de ellos realizamos una aproximación al fenómeno hermandino desde el periodo bajomedieval hasta el final del reinado del último de los Austrias Mayores, analizamos las peculiares características de dichas solidaridades colectivas y la evolución particular del Santo Tribunal manchego inserto en la supraorganización conformada por el

Triple Instituto apícola, para la redacción del cual nos hemos apoyado de manera significativa en la bibliografía existente sobre el tema, limitándonos a realizar algunas aportaciones en cuestiones puntuales. En el capítulo segundo abordamos la organización y funcionamiento interno de la corporación colmenera ciudarrealeña durante la Edad Moderna desde la óptica de los resortes fiscalizadores de su devenir institucional por parte de la Corona, la significación de sus cabildos y el desarrollo de los preceptos vertidos en sus estatutos. El capítulo tercero está íntegramente dedicado a un análisis pormenorizado de las formalidades de ingreso, extracción socioeconómica y profesional del personal adscrito y colaboradores esporádicos de la Santa Hermandad, así como las franquicias, atribuciones y jerarquización derivadas de su status, fórmulas de provisión de empleos y dignidades, terminando con un acercamiento a las tensiones existentes en su seno. En el cuarto capítulo acometemos la difícil empresa de cuantificar e introducir un mínimo de rigor metodológico en la confusa hacienda hermandina durante los siglos XVII y XVIII. El quinto capítulo analiza los medios materiales con los que cuenta el Santo Instituto para desempeñar tan loable ministerio, polarizando nuestra atención en la cárcel de Hermandad y la vida de los allí custodiados. El sexto capítulo está consagrado a hacer un repaso de los aspectos piadosos, inherentes a este tipo de organizaciones durante el Antiguo Régimen. El séptimo, a fijar sus facultades jurídicas y territoriales, establecer su casuística jurisdiccional y abordar su práctica forense durante los siglos que nos ocupan, determinada por su flexibilidad procesal y su expeditividad coercitiva. El capítulo octavo contiene las consideraciones tanto generales como específicas que rodean la espinosa cuestión de su relación institucional con el resto de las justicias del Reino, ejemplificando la dificultades existentes en el

desempeño de su labor al centrarnos en el azaroso ministerio de un activo comisario antequerano. El noveno pretende aproximarnos a las particularidades de la criminalidad rural a través de un análisis de los delitos y de la delincuencia de la época, sin olvidarnos de señalar la específica casuística que rodea a la etnia gitana con respecto a la justicia hermandina. En el noveno incidimos en los niveles de criminalidad del periodo que nos ocupa en el ámbito actuacional de la Hermandad de Ciudad Real y la efectividad de su tribunal de justicia respecto de su homónima toledana, con idéntico ministerio, similar -aunque perceptiblemente inferior- alcance territorial y parecido devenir institucional. Terminamos con el capítulo décimo, en el que trazamos una somera reflexión sobre el devenir de las decadentes Fraternidades Viejas durante el primer tercio del siglo XIX, epígono en el se constata su irrecuperable y ya definitivamente periclitado modelo actuacional. Tras unas conclusiones pretendidamente esclarecedoras sobre la cambiante y hasta ahora prácticamente desconocida evolución institucional y procedimental de la entidad colmenera ciudarrealeña, la presente tesis se completa con un ilustrativo apéndice documental, el análisis de las fuentes empleadas y un exhaustivo repertorio bibliográfico.

Este esfuerzo ha sido motivado por el deseo de una mayor aproximación a nuestro pasado histórico regional, a través de una entidad comarcal con notable proyección en la Monarquía Católica, lo que le hace tener un sitio destacado, por mérito propio, en una historiografía que, salvo excepciones, la ha ignorado durante años.

No quiero terminar esta presentación sin expresar mi gratitud al director de la tesis, el doctor don Enrique Martínez Ruiz, cuyas valiosas aportaciones han resultado decisivas a la hora de abordar el

tema que nos ocupa; las inestimables orientaciones archivísticas generosamente realizadas por los profesores doctores don Manuel Martín Galán y don José Manuel Carretero Zamora; así como el apoyo científico y humano prestado por nuestros compañeros de estudio sobre cuestiones de seguridad durante la Edad Moderna, Teresa Engenios Martín y Rosa Isabel Sánchez Gómez, sin olvidar los consejos de David García Hernán y de Jesús Payo de Lucas. A todos ellos mi más sincero afecto y agradecimiento.

1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA HERMANDAD DE VILLA REAL DURANTE LOS SIGLOS XIII AL XVI.

Previamente a perfilar el desarrollo institucional de la entidad manchega, es necesario precisar una definición válida del término "hermandad". En la Edad Media es utilizado este vocablo de origen germánico para expresar la mancomunidad de particulares, concejos u otras organizaciones de cualquier tipo, que se unen en defensa de intereses mutuos, ante la imposibilidad de contar con otros medios que los que ellos mismos movilizasen para garantizarlos. Se trataría, pues, de aunar la voluntad de los interesados frente a una situación previa de indefensión jurídica e institucional, real o ficticia; pudiendo interpretarse como una respuesta puntual y coordinada ante un determinado reto. Los objetivos a cubrir serán gremiales, militares, mercantiles o piadosos, según el carácter de la hermandad, redundando todo ello en una tipología tan heterogénea como distinta su finalidad e integrantes.

Dejando aun lado las fraternidades religiosas, es decir, las cofradías, estudiadas genéricamente en su día por T. RUIZ JOSUE¹, básicamente existieron tres tipos de hermandades municipales en la Castilla medieval:

.las ligas de ciudades mercantiles, entre la que destaca la Hermandad de la Marina, que agrupaba a ciudades de la cornisa cantábrica.

.las alianzas de villas, y ocasionalmente magnates laicos o eclesiásticos, en defensa de sus privilegios y de una seguridad amenazada por la anarquía social o política. Este modelo de

asociacionismo tiene su máximo exponente en las Hermandades Generales de Castilla y León.

.las agrupaciones de propietarios, creadoras de cuerpos especiales para defender sus haciendas y personas; constituyendo el caso más sobresaliente el protagonizado por las Hermandades Viejas².

En todos estos supuestos su origen debe buscarse en el desarrollo de los burgos acontecido desde el siglo XII, y en la incapacidad de la Corona para hacer frente eficazmente a la salvaguarda de unos intereses en precario. Ante la evidencia de la debilidad de un Estado en ciernes para adecuarse a las demandas de sus vasallos, éstos se unen para solucionar por sí mismos los problemas que les acucian.

En este contexto, el fenómeno hermandino alcanzará una notable extensión en gran parte de Europa, pero es en Castilla donde tuvieron un mayor auge las ligas ciudadanas o particulares con una clara finalidad coercitiva y defensiva en el convulso periodo bajomedieval.

1.1. BAJA EDAD MEDIA. CIMENTACIÓN Y ESPLENDOR.

Desconocemos cual fue el preciso momento del nacimiento de las Hermandades , y tampoco existe un consenso historiografico acerca de los motivos directos que propiciaron su aparición. Para la Península Ibérica, se han esbozado algunas hipótesis sobre su fecha de aparición y posibles antecedentes³.

ALMIRANTE remonta su origen al 736 , cuando en el floreciente califato de Córdoba nace un cuerpo especial, denominado "kaschef", dedicado al mantenimiento del orden público en la ciudad. OPISSO señala que ya existía una hermandad en Navarra hacia el siglo XI. QUEVEDO Y SIDRO sugieren el final de dicha centuria como fecha probable de la creación de las primeras mancomunidades; mientras que MONTALVO Y JAFDÍN sitúan los precedentes fundacionales en el año 1110, sobre argumentos poco sólidos⁴.

Lo cierto es que durante los siglos XI y XII comienzan a perfilarse las condiciones ideales para la aparición de este asociacionismo con el crecimiento sostenido de las ciudades castellanas. El citado desarrollo urbano ofrecía el caldo de cultivo ideal para que cristalizase una mayor coordinación de fuerzas en el seno de la mayor concentración demográfica, lo que añadido a su propia dinámica socioeconómica repercutiría necesariamente en la conformación paulatina de los cauces que canalizasen las aspiraciones populares.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, junto a PUYOL Y ALONSO⁵, entre otros, hacen coincidir la aparición de las Hermandades con la primera mitad del

siglo XIII. Es en esta época cuando está documentalmente probada su existencia en las áreas castellano-leonesa, aragonesa, y vasco-navarra, por citar los lugares donde fueron más activas dichas ligas.

Las hermandades tenían un carácter meramente temporal, al formarse como respuesta inmediata a necesidades perentorias que, una vez solventadas, dejan sin razón de continuidad el instrumento que hizo posible su resolución. Secuela espontánea de la autonomía municipal, se superará el localismo imperante, y los individuos designados como brazo armado de la entidad fundada actuarán indiscriminadamente como partícipes de los poderes ejecutivo y judicial.

Nacidas, la mayor parte de ellas, al tomar conciencia los burgos de su propia fuerza ante los abusos nobiliarios y la debilidad de una Monarquía embrionaria, proliferan las uniones de ciudades y estamentos en Castilla durante el reinado de Alfonso X hasta la minoridad de Alfonso XI. Fernando IV y Alfonso XI pretendieron restringir el notable desarrollo de las hermandades, por temor que banderías nobiliarias, ligas ciudadanas o confederaciones de diverso signo que proliferaban en el Reino se convirtiesen en un contrapoder frente a la Corona que o bien las había alentado o había sido incapaz de controlar. Desde entonces se empieza a proyectar sobre estas entidades un interés en asumir acciones jurídico-preventivas, como vehículo propicio de la difícil empresa del mantenimiento del orden.

En este contexto, el fenómeno más notable de la Corona de Castilla será la tendencia a crear una Hermandad General lo que culminaría con la fundación de una nueva entidad, durante el reinado de los Reyes Católicos, que retomó este espíritu asociacionista pero dotándolo de un principio de utilidad pública a gran escala del que hasta entonces

había carecido. Los restos, si bien muy disminuidos, de esta basta Hermandad Nueva, será la Hermandad General del Reino, nominalmente vigente hasta el primer tercio del siglo XIX.

1.1.1. PRECEDENTES Y ORIGEN.

Como sucede con el nacimiento del resto de las hermandades, hay una polémica abierta sobre la fecha fundacional de las Fraternidades Viejas manchegas, sus precedentes inmediatos y el orden de aparición de cada una de las asociaciones que integrarían el Triple Instituto, cuestionándose incluso su origen popular o regio.

Fuente de primera mano resulta la tradición oral apócrifa, recogida en el preámbulo de las Ordenanzas dieciochescas de la corporación ciudarrealena, mantenidas en su memoria colectiva, y que fueron retomadas por los cronistas, hallando luego eco en los libros de viajes y obras literarias durante los siglos XVI al XVIII, aunque distorsionada⁶. Dicha tradición fue aceptada por los eruditos del siglo XIX, y por la historiografía de principios de la siguiente centuria. En las últimas décadas se ha acometido una revisión crítica de las noticias llegadas por estos cauces, relativas al periodo fundacional, demostrándose la falta de rigor de muchas de las suposiciones tenidas como verídicas hasta fechas recientes⁷.

Antes que pasar a esbozar las hipótesis sobre el origen y carácter de la entidad manchega, hay que tener en cuenta el marco físico de su inicial área de implantación, las circunstancias socio-políticas que la hicieron posible, y, por último, las posibles raíces jurídicas e institucionales que influyeron en su concepción, así como en unos comienzos que se adivinan vacilantes.

Geográficamente, la organización de Villa Real se extendería pronto del pequeño alfoz de realengo que rodea el núcleo poblacional recientemente fundado, a las vecinas tierras de la Orden de Calatrava en cuyo territorio estaba enclavada. Su área natural de expansión sería, a grandes rasgos, la comprendida desde los montes de Toledo hasta la vertiente sur de Sierra Morena, extendiéndose por el oeste hacia las áreas limítrofes extremeñas, y por el este a los dominios de las Órdenes Militares de Santiago y San Juan. Se trata pues de una zona relativamente amplia, configurada morfológicamente por un relieve de llanura limitado al norte y al sur por agrestes elevaciones, cubiertas de jaras, monte bajo y encinas; la fauna es rica, abundando la caza mayor y menor. Este medio abrupto es susceptible de aprovechamiento cinegético, forestal y apícola; la tierra es poco favorable para la agricultura intensiva, restringida a las riberas de ríos y arroyos pequeños huertos para el autoconsumo. Por otra parte, la ganadería trashumante y las labores cerealísticas extensivas adquirirían importancia al compás de la colonización y del afianzamiento de la Reconquista. Estas características físicas determinarían el poblamiento débil y disperso de esta amplia demarcación de la submeseta.

Los golfines fueron la causa última que desencadenaría la creación de ligas de propietarios particulares, al articularse unas asociaciones que garantizaran la explotaciones en el yermo. El término golfín designaba al bandolero que actuaba en grupo en las regiones antes mencionadas, entre los siglos XIII y XIV, aunque el fenómeno del bandolerismo endémico de este área no se enraizaría totalmente hasta bien entrado el siglo XIX, y aún después⁸.

El nacimiento de la Hermandad de Villa Real, como la del resto de sus homónimas, posiblemente se remonte a la primera mitad del siglo XIII, debido a las especiales circunstancias que concurren en la frontera sur del Tajo durante la Reconquista. La inestabilidad de esta línea defensiva, a lo largo de todo el siglo XII, la conquista de Toledo por Alfonso IV en 1085, y la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, supusieron un fuerte empuje a la expansión castellana, cuya debilidad se evidenciaría ante la incapacidad de resistir a la presión almohade y a las continuas razzias musulmanas.

En condiciones tan extremas de supervivencia, el control sobre los asentamientos poblaciones de este límite meridional castellano fue dejado por los soberanos cristianos en manos de las Órdenes Militares. Se confiaba su defensa a los caballeros mediante el procedimiento de donar tierras a los maestros claveros, quienes a su vez nombran a los comendadores de castillos y plazas fuertes; dichos caballeros y sus dependientes defienden a los escasos labradores, pastores y cazadores de las incursiones islámicas, obteniendo por ello ciertas rentas de los colonos. La organización territorial de La Mancha queda, de esta forma, en manos de las Órdenes de Santiago, San Juan y Calatrava, siendo los territorios toledanos confiados a la Mitra arzobispal y al señorío de la propia ciudad de Toledo⁹.

Los continuos enfrentamientos bélicos y escaramuzas de la zona propiciaron la existencia de los golfines, designación que englobaba a desertores, proscritos de uno u otro bando, malhechores de todo tipo que se amparaban en el fragor de los montes de la frontera cristiano-musulmana para perpetrar sus fechorías. Sobrevivían gracias al conocimiento del terreno y las exacciones a colonos y viajeros, debido a la inexistencia de una autoridad efectiva en el despoblado. Sus

correrías, en grupos numerosos, amedrentaban a los esporádicos pobladores de cabañas y aldeas, quedando a su merced colonos y haciendas¹⁰.

El pillaje a que eran sometidos colmeneros, leñadores, cazadores, pastores, pequeños labradores y trajinantes amenazaba su misma supervivencia, por lo que era imperiosa una decidida actuación que impidiese los frecuentes atropellos de estos forajidos fronterizos. La falta de garantías de que las instancias superiores, reales o señoriales, pudiesen hacer frente a esta situación de indefensión determinaría la asociación espontánea de propietarios apícolas para defender al personal asalariado que hacía posible dicha explotación¹¹. RUMEU DE ARMAS asegura que

"El espíritu de fraternidad llegó a tales extremos que hasta los golfines, salteadores y malhechores refugiados en los Montes de Toledo, se constituyeron en cofradías y hermandades...contra ellos formó Alfonso VIII, después de la batalla de las Navas de Tolosa, hermandad o junta de vecinos honrados, para su propia defensa, y Fernando III la organizó el año 1245 en Villa Real y Talavera, puntos estratégicos contra las correrías de aquellos merodeadores, más adelante, en las Cortes de Sevilla, de 1250, condenó y prohibió todas las hermandades, cofradías o ayuntamientos hechos a mengua de la tierra y del servicio real, alentando las buenas Hermandades, esto es, las consagradas a la seguridad personal de los campos y caminos..."¹².

Un documento del archivo municipal de la Ciudad Imperial hace retroceder la fecha fundacional de la organizaciones toledanas al siglo XII, cuando a la acción depredadora de los golfines se sumaban las banderías nobiliarias de las familias de Castro y Lara en la comarca talaverana durante el reinado de Alfonso VIII, aunque dicha hipótesis carece seguramente de visos de realidad¹³.

Algunos autores, como PAZ Y MELIÁ o QUIVEDO Y SIDRO, entre otros, se refieren a la carta de privilegio y confirmación concedida en 1220 en virtud de la cual el rey Fernando III refrendaba a los moradores de la capital toledana la exclusividad del aprovechamiento cinegético de sus montes, merced ya otorgada por su antecesor, Alfonso VIII. Este diploma será considerado la carta fundacional del Santo Instituto, aunque en puridad solo va dirigido a la colectividad de cazadores de conejos de Toledo, sin mencionarse expresamente hermandad alguna¹⁴.

XIMÉNEZ DE SANDOVAL, CAMPOS CARRANZA, y MONTALVO Y JARDÍN, aceptan sin más que en tiempos de Fernando III (1230-1252), ya existían las luego denominadas Hermandades Viejas. En cambio, SUÁREZ FERNÁNDEZ sitúa su periodo fundacional a fines del siglo XIII; mientras que PESCADOR DEL HOYO y SÁNCHEZ BENITO se limitan a admitir como probable periodo de su nacimiento dicha centuria, sin concretar ninguna fecha precisa¹⁵.

Por lo que atañe a la asociación de Villa Real, la tradición apócrifa, recogida en un preámbulo de los Estatutos de 1792, cuajado de anacronismos e inexactitudes de todo tipo, puntualiza que en el año 1249 de la Era¹⁶, estando Fernando III en Pozo Seco, tuvo noticia del robo a su comitiva en el puerto del Miraclo, camino de Andalucía. Espoleado por este incidente, ordenó a don Gil que sus dependientes preservasen en adelante este área de los forajidos; el propio don Gil se encargaría del yermo en torno a Pozo Seco -futura Villa Real-, enviando a sus dos hijos, Pascual Ballesteros y Miguel Turro, a velar el primero los Montes de Toledo y el segundo a hacer lo propio en la Jara talaverana, pues era inexcusable el que "con algunos otros caballeros y labradores se empleasen en extinguir los citados Golfines, como ya estaban practicando"¹⁷. De esta manera, se

conciliaba el origen en Villa Real del Triple Instituto con el pronto respaldo regio a dichas corporaciones, lo que daba mayor prestigio ante un Consejo de Castilla que por entonces cuestionaba la posibilidad de su abolición, sin olvidar de hacer patente la primacía de la entidad manchega sobre el resto de los tribunales coaligados.

Pero esta hipótesis, basada en una tradición apócrifa de dudosa autenticidad, ya recogida en las Ordenanzas de la Hermandad de Villa Real de 1435¹⁸, tal vez con el larvado propósito de acallar las protestas de los pecheros ante el monopolio oligárquico de los oficios más preeminentes de la corporación, es poco verosímil. Aunque existen ciertos paralelismo toponímicos en el área de la Jara con el nombre de los magnates de Pozo Seco, parece improbable que en Toledo y Talavera se aceptase la supeditación a caballeros de cuantía forasteros de un rango tan poco elevado. Tampoco hay que menospreciar el hecho de que cualquier referencia a estos supuestos orígenes son ignorados por las Hermandades toledanas, citándose únicamente en todas ellas al famoso golfín Carchena y sus correrías por la Jara, ya en pleno siglo XIV.

Comúnmente se ha aceptado que la entidad de Villa Real sería posterior a sus homónimas de allende el Tajo basándose principalmente en dos argumentos: la unidad de toledanos y talaveranos formalizada en 1300, a la que se sumarían los manchegos dos años después; y las cartas de privilegio de 1220, ya mencionada, junto a la de 17 de junio de 1173, en la que se excusaba a los saeteros de Talavera de tributar, debido a la fidelidad mostrada ante las incursiones musulmanas. Por otro lado, el tribunal de Toledo siempre esgrimió la sobrecarta de 1220 para justificar una preponderancia jerárquica cimentada sobre la calidad de sus miembros.

Aunque la posterior colonización de los límites meridionales de la submeseta sur respalda dichas justificaciones, no es menos cierto que esta argumentación carece de sólidas bases sobre las que sustentarse. La relativa tardanza a adherirse a la coalición podría justificarse por la mayor distancia entre las sede manchega respecto de las toledanas o deberse a la resistencia a integrar una entidad de mayor envergadura que menoscabase su autonomía; en tanto que las supuestas pruebas documentales aportadas distan mucho de ser concluyentes. Serán necesarias nuevas aportaciones al respecto para arrojar luz sobre este controvertido asunto, quedando mientras tanto pendiente de resolución el origen fundacional de dichas organizaciones.

Como conclusión, puede adelantarse la hipótesis de que a lo largo del siglo XIII se fraguarían las tres hermandades autónomamente; así, Celestino V respondería a la petición de autodisolución de los colmeneros de Villa Real intitulándola con el apelativo de Santa en las postrimerías de dicha centuria¹⁹. Estas entidades, conformadas espontáneamente por los dueños de los enjambres -los hombres buenos- y sostenidas por sus sirvientes en las explotaciones -ballesteros-, se mancomunaron en defensa de sus intereses gremiales, logrando de inmediato el apoyo de concejos; el auxilio de campesinos, cazadores y pastores; así como la aquiescencia de los comendadores y señores laicos, contando desde época temprana con el decidido apoyo de la Corona gracias a lo expeditivo y efectivo de sus actuaciones.

No estuvo ajeno a este proceso fundacional el arzobispado toledano que, contando con la aprobación de Roma, otorgó hacia 1394 a los asociados de Villa Real la exención del diezmo de miel y cera, así como del tributo sobre los salarios de sus dependientes que eran

recaudados por la Mitra hasta entonces, conocido como diezmo de mozos²⁰.

Pero estas fraternidades no surgen de un vacío institucional ni procedimental absoluto. Algunas de sus peculiaridades, que con el tiempo llegarían a identificarse con su instituto, hunden sus orígenes en realidades ya existentes.

PESCADOR DEL HOYO sostiene que no se creó nada nuevo, sino que se adaptaron a nuevas necesidades las pautas de comportamiento ya iniciadas por los "caballeros de la Sierra". Esta institución se había venido perfilando en los diplomas del siglo XI, concretándose su existencia en los antiguos fueros de Molina de los Caballeros en 1152, extendiendo de aquí a los de Cuenca, Cáceres, Iznatoraf, Alcázar. Alcaraz. Alarcón y Montiel. Dicha historiadora recoge algunas de las similitudes entre los caballeros de la sierra y los hermanados manchegos: los primeros debían tener casa poblada en la villa, ejercían su vigilancia a caballo y por parejas, castigaban los incendios a los montes, cobraban por su protección al pastoreo una res de cada rebaño en concepto de montazgo, ejerciendo su actividad en el campo y contando con el auxilio de las justicias; los segundos tenían colmenas guardadas permanentemente, ejercían su labor en el yermo, tenían jurisdicción sobre los daños a montes, percibían derecho pecuario y gozaban de la protección de las autoridades locales²¹. Sin embargo, los caballeros de la sierra son designados por los concejos entre sus vecinos cualificados, mientras que los cuadrilleros gozan de total autonomía al respecto, estando dotados de unas atribuciones jurídico-policiales más amplias.

Tampoco son las Hermandades Viejas un caso único en la Monarquía de asociación apícola. En 1255 se creó en Sevilla una corporación que regulaba la explotación colmenera de las inmediaciones, contando para ello con alcaldes propios que entendían de los ligios derivados de la citada actividad económica, Diferencia sustancial con las entidades que nos ocupan es que no poseía atribuciones policiales para garantizar la seguridad de dicha labor extractiva²².

Asimismo, la organización interna de las Hermandades se asemeja a los concejos de la época, adoptando terminología y procedimientos propios de aquellos: sus máximos dirigentes se denominan alcaldes, y sus inferiores jerárquicos alguacil mayor, mayordomo, regidores, etc; las juntas se llamarían cabildo, a imagen de los celebrados por las instituciones seculares o eclesiásticas; y el carácter plebiscitario de los cargos tienen un claro paralelismo con lo acontecido en la vida municipal, por citar algunas de las similitudes más ostensibles.

Durante la Edad Media, en la Corona de Castilla se empleó el apellido, procedimiento usual para convocar al vecindario en caso de peligro o calamidad mediante el tañir de campanas, hogueras encendidas o mensajeros, congregándose en un sitio determinado para acometerlo con las medidas oportunas. GARCÍA DE VALDEAVELLANO señala que este recurso fue utilizado para coordinar salidas contra delincuentes, llamar para fines defensivos y, en definitiva, para hacer frente a cualquier tipo de agresiones externas a la comunidad. Alejados de los núcleos urbanos, y en ausencia de letrados, se procedería a la ejecución inmediata de los sospechosos aprehendidos²³.

Las Hermandades populares presentaron, igualmente, ciertas coincidencias con el Triple Instituto, pero se diferencian de éste en

que dependían directamente de los ayuntamientos y que sus alcaldes perseguían indiscriminadamente a todos los criminales amparados en el despoblado, siendo su radio de acción puramente local. Mientras que las primeras fueron objeto de reiteradas restricciones y reactivaciones al albur de los acontecimientos políticos de la Monarquía, la permanencia de las Hermandades Viejas no sería cuestionada al permanecer fieles en todo momento a los soberanos. Por su parte, los colmeneros nunca participaron de las ligas de la ciudad de Toledo con su extremadura de 1295 y 1315, ni se adhirieron a la Hermandad General constituida por entonces en los reinos de Castilla y León.

Precedente directo de las corporaciones toledanas, o en todo caso coetánea a ellas hasta bien entrado el Setecientos, fue la Hermandad de San Martín de la Montaña, cuyos primeros pasos datan del periodo bajomedieval. Desconocemos casi todo de esta organización, salvo que se instituyó para erradicar a los golfines, pasando luego a asumir la seguridad de los montes en su circunscripción, conformada por los términos de Mora, Orgaz, Villaminaya, Casalgordo, Sonseca, Villaseca de la Sagra, Almonacid, Mascaraque, Arisgotas, Ajofrín, Layos, Quero, Borox, Majarambroz, Pulgar y Manzanique, ingresando Toledo a mediados del Quinientos²⁴.

Para finalizar, hay que dejar constancia de que no es casualidad que fuesen los colmeneros los motores fundacionales aglutinantes de los Tribunales Viejos. Con la paulatina colonización de un área tan hostil, las posadas de colmenas se multiplicaron, siendo uno de los escasos elementos estables de aprovechamiento económico, pues la agricultura tardaría en prosperar en circunstancias tan adversas. La apicultura tenderá a concentrarse en manos de propietarios residentes

en los núcleos urbanos, siendo los encargados de dotar de una estructura orgánica unas instituciones cuyo brazo armado serían en un primer momento los guardas permanentes de las citadas explotaciones.

Siendo la miel y la cera uno de los pilares económicos de esta zona, su vulnerabilidad derivada de la permanencia en despoblado, se convertía en objetivo preferente de las rapiñas, resultando sus propietarios los más interesados en defenderse de dichas depredaciones mediante sus asalariados.

Durante siglos ha existido un fuerte desarrollo de la explotación colmenera en las áreas de implantación del Triple Instituto, denominándose las localidades de la divisoria entre el Tajo y el Guadiana con el apelativo de "pueblos de la miel", que incluso ha dejado secuelas en la toponimia local. La mayoría de los campesinos contaban con enjambres como fuente complementaria de recursos, debido a la facilidad de su aprovechamiento: no es preciso tener la propiedad de las tierras, en condiciones propicias pueden ubicarse los corchos en los lugares apropiados, y solo se acudía a ellos para ejecutar revisiones periódicas, realizar traslados estacionales o para su castración; mientras tanto podían permanecer en propiedades ajenas, dejando para su seguridad guardas que respondiesen con su retribución de la integridad de la explotación, siempre que se tratase de una dedicación exclusiva o a gran escala.

En el marco espacio-temporal esbozado se daban las condiciones óptimas para la aparición de unas asociaciones de este tipo, pero lo que nadie podría prever era su trascendental incidencia en el devenir social, económico e institucional que rebasaría incluso su área de implantación.

1.1.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL.

1.1.2.a. JUNTAS Y CONCORDIAS DE LA SANTA HERMANDAD.

Documentalmente, hay constancia de la existencia de las corporaciones apícolas de Toledo y de Talavera a partir del año 1300. Meses antes de la llega convocada en la Aliseda de Estena²⁵, los hermanados lograron el respaldo formal de sus institutos por parte de sus respectivos concejos²⁶. El 17 de noviembre de dicho año, los colmeneros dispusieron en junta general la obligatoriedad de asistir a las asambleas y colaborar en las salidas tras los delincuentes, so pena de sanción pecuniaria a los infractores, regulándose el armamento que habrían de contar sus miembros para dar una efectiva operatividad a su actuación en defensa de la continuidad de dichas explotaciones apícolas. Esta concordia es considerada por algunos autores, en la práctica, su carta fundacional²⁷.

Hasta agosto de 1302 , no se conformará definitivamente el Triple Instituto coincidiendo con la adhesión de los colmeneros de Villa Real. La concertación alcanzada es fruto de unos acuerdos de cooperación entre entidades autónomas que habían seguido desarrollos paralelos pero que, al compartir objetivos y procedimientos, aunan sus fuerzas, coordinando sus actuaciones. Nunca se planteó la necesidad de crear un entramado suprainstitucional único, como tampoco la existencia de una jerarquía común, sino la elaboración de una segunda carta similar a la de 1300, añadiendo acuerdos que fortalecían el dispositivo de seguridad hermandino al preceptuar el debido auxilio

mutuo con bastimentos y socorros, facilitando la colaboración con los ministros ajenos en jurisdicción propia y estableciendo una periodicidad anual para las juntas generales. Esta coalición es concebida con un carácter temporal, a semejanza de los las ligas de la época²⁸, fijándose septiembre de 1312 como fecha de su autodisolución.

Durante el citado periodo, las Hermandades se mostraron muy activas en la represión de los golfines, pero solo la concesión de mercedes regias podría coadyuvar a la indefinida continuación institucional de las mismas.

Las juntas anuales, convocadas el año anterior a su celebración, en principio tuvieron la apariencia de alardes, con la comparecencia de todos los hermanos armados en el lugar de los Montes de Toledo convenido, montando sus tiendas en un punto equidistante a las sedes de sus respectivos tribunales. La asistencia era costeada por los propios participantes, lo que pronto suscitaba quejas e incluso la inasistencia de algunos aduciendo pretextos más o menos convincentes.

En 1325, los alcaldes talaveranos ya manifestaban que únicamente convocaban a dichas reuniones generales a parte de sus integrantes; y en 1389 la Hermandad de Toledo decidía establecer un cupo de asistentes de su corporación para concurrir a dichas ligas, a partir de entonces sufragada por la organización a la que pertenecían, como ya venían haciendo los de Talavera y Villa Real.

La periodicidad anual de las juntas durante la minoridad de Pedro I se quebró²⁹, pero salvo coyunturales interrupciones, parece haberse respetado la cadencia puntual de dichas asambleas.

Hacia el Cuatrocientos se evidencia ciertas modificaciones en estas juntas del Triple Instituto. A partir de entonces se perderá paulatinamente su anterior connotación militar, y se reducirá considerablemente el número de los emplazados. Cada hermandad elige la forma de su representación: bien por cabildos y caballeros, bien por procuradores, o recurriendo a una fórmula mixta, imponiéndose a la postre esta última modalidad por ser la menos gravosa para sus caudales. Si algún tribunal pretendía representarse mediante apoderados debía notificarlo al resto de los federados con tiempo suficiente.

Durante esta centuria, la entidad de Villa Real normalmente acudía con sus dos alcaldes, un número variable de hermanos, siempre inferior a la decena, contando con la presencia del procurador de la Hermandad de Chillón.

Cada una de las entidades confederadas montaba su tienda en el punto de encuentro consensuado, siendo la mayor parte de los gastos generados por la junta sufragados por los de Toledo, que, en virtud de su preeminencia jerárquica, contribuían con un oratorio portátil, panadero, herrero y barbero, transportando los alimentos necesarios para los reunidos. El orden protocolario era rigurosamente mantenido, situándose los toledanos en el centro, los talaveranos a su derecha y los de Villa Real a su izquierda³⁰. Esta relegación formal de los colmeneros manchegos levantará con cierta frecuencia el descontento de sus representantes, llegando ocasionalmente a presentar protestas airadas al considerar injustificada dicha discriminación.

Días antes de la reunión se congregaban los hermanos en cada una de las sedes para consensuar voluntades y partir en comitiva al lugar de

encuentro preestablecido³¹. El primer domingo de septiembre tiene lugar la llega, siendo el primer trámite celebrado la comprobación de los poderes de los delegados. Acreditados los diputados, pasaban a constituirse en cabildo, pregonándose el plazo para la admisión de quejas contra estas corporaciones o sus miembros; a continuación se confirmaban y prorrogaban por otro año la unidad y continuidad de los federados, promulgándose tras su consenso los acuerdos comunes adoptados. El cabildo se erigía como tribunal de primera y segunda instancia de las resoluciones de los alcaldes en materia civil y criminal.

Los acuerdos convenidos regulan asuntos tan dispares como la fijación de sus respectivas circunscripciones territoriales; la elección de los "hombres buenos" que asumirían las alcaldías, y los colmeneros que desempeñarían los oficios de alguaciles y cuadrilleros; el veto a la venta de vino o los juegos de azar durante la junta; se regula el número de sus miembros; se establece que los ganados de los hermanos no pagasen asadura en las estaciones de cobro de la organización hermana, acreditando pastores o mayoresales la adscripción de su propiedad³²; o prohibiéndose, como en 1306, que se prendiese fuego durante el estío. Las actas capitulares terminan garantizando el abastecimiento preciso para la siguiente junta³³.

El último día, se celebra misa conjunta, oficiada por los capellanes hermandinos, y se despiden los asistentes, partiendo primero los de Villa Real, seguidos por el resto de los congregados. En el momento de la marcha los manchegos corearían la siguiente estrofa tradicional:

"Dios, ayuda! Santa María, Val!
e San Juan de Letrán,

e San Cristóbal de la agua pasar,
e Don Pedro de Ultramar,
a los Reyes, nuestros Señores,
e a todos los que tienen
e sostienen la Santa Hermandad
de Toledo, e Talavera e Cibdad Real.'³⁴ *

En 1439, se interrumpe de nuevo la cadencia anual de las llegas, esta vez a causa de la peste que asolaba Castilla, pero sentado este peligroso precedente se empezó a resquebrajar el principio de autoridad de este órgano colegiado asambleario. Jurídicamente el acto de confirmación mutuo fue solventado renovándose mediante cartas cruzadas entre dichas entidades.

Hasta mediado el Cuatrocientos, las juntas se celebran en Navas de Estena, pero a partir de entonces tomaron un carácter itinerante, siendo los lugares de encuentro las riberas del río Bullaque -cerca de Torre Abraham-, en 1453, 1456 y 1458; Peña Aguilera, en 1453; San Pablo de los Montes, en 1459; retornándose a Navas de Estena en 1460, 1463 y 1465; celebrándose en el puerto del Miraclo en 1464 y 1467. Dichas juntas tendrían lugar en el yermo, ámbito jurisdiccional por excelencia de la Hermandad, reafirmando su presencia en dichas áreas con estos actos. La indisposición de los colmeneros de Villa Real a reunirse en Navas de Estena, pretextando lo peligroso del camino, desvirtuaría este punto de encuentro, despertando un malestar entre los talaveranos que solo sería solventado con la mediación de Toledo.

En 1473, se concentran en Molinillo, volviéndose a esta aldea en 1491, 1392, 1496 y 1499. De esta forma se consolida un cambio cualitativo, al celebrarse los cabildos en su iglesia parroquial. No se convocan o son anuladas las juntas de 1441, 1442, 1457, 1460, 1461, 1463, 1465, 1466, 1468, 1470 y 1494; aunque no a todas las llegas

asistieron en pleno los hermanados, debido a epidemias, carestías, conflictividad política o disensiones internas.

En 1491 se pactó el que cada parte estaría representada mediante sus dos alcaldes y cuatro hermanos en el cabildo, a los se sumarían el portero, algunos cuadrilleros, un cocinero y un clérigo; y en 1496 se acuerda que la que concurriese con más representantes pagaría el total de las costas ocasionadas, estableciéndose una regularidad trienal. Si en 1499 se hizo junta con la sola comparecencia de dos alcaldes y dos caballeros por cada parte, un número inferior al previsto, lo que despertaría el malestar de los manchegos; en 1503, en Ventas con Peña Aguilera serían confirmadas las Hermandades en la iglesia de San Pedro. En 1505, debido a que no se reunieron en Toledo, como se había pactado, en la junta del Villar del Pedroso -cerca de Talavera- se manifestó la contrariedad de los toledanos; no alcanzándose la unanimidad en la concreción de ulteriores asambleas, que de hecho probablemente cesaran a partir de entonces.

A grandes rasgos, este fue el proceso por el cual desde mediado el siglo XV el concepto de junta general como órgano colegiado supremo del Triple Instituto se desvirtúa, oscilándose de la reducción paulatina de sus asistentes para excusar gastos, a la supresión temporal de la llega en determinados años, pasando por la inasistencia de alguna entidad alegando factores endógenos o exógenos. Desde la década de 1460 la conflictividad política obliga a demorar las reuniones, que en la coyuntura finisecular y a principios del siglo XVI se nos aparecen en gran parte desnaturalizadas.

De forma extraordinaria, serían convocadas asambleas generales para solventar problemas graves de ineludible demora en su resolución. Así,

tenemos conocimiento de la existencia de una reunión en Orgaz, hacia 1416, para reconducir la situación de insumisión de algunos toledanos a su corporación; en otra ocasión, en 1454, se intentó atajar las disputas internas en Talavera, dirimiéndose una disputa por la posesión de unos enjambres, etc.

Paralelamente a estas juntas de los confederados, cada entidad celebraba periódicamente cabildos particulares. La Hermandad de Villa Real, integrada como sus homónimas toledanas, por los propietarios de las posadas -paulatinamente identificados con parte de la oligarquía urbana- y los guardas de los colmenares, prontamente daría cabida como hermanos o colaboradores ocasionales a un heterogéneo grupo socioprofesional integrado por cazadores, pastores, pequeños labradores, leñadores y otros pobladores permanentes o temporales del yermo³⁵.

Los cabildos de la corporación manchega tenían lugar desde época muy temprana en el monasterio de San Francisco, extramuros de la ciudad³⁶, siendo partícipes la mayoría de los hermanos y los oficiales previa citación por parte del portero. Discutían todos los asuntos concernientes a la entidad, regulándose sus relaciones interpersonales, ordenándose el arriendo de sus rentas, estudiando y resolviendo las peticiones de ingreso, supervisando el puntual desempeño de lo encomendado, renovando los cargos, y garantizando, en definitiva, el correcto funcionamiento institucional y jurisdiccional.

Excepcionalmente, únicamente cuando las tensiones internas amenazaban con dañar irreparablemente su estructura orgánica, se acudiría al arbitrio de las Hermandades coaligadas. Cuando ello no era posible, al requerirse el consenso de las partes en litigio para no

considerarlo una injerencia inadmisible en asuntos internos, podría recurrirse a la mediación de terceros e incluso apelar a la intervención directa de la Corona. En el primer tercio del siglo XIV, reclamaron los de Villa Real a Talavera parte de su asadura para costear los gastos derivados de su litigio con la Orden de Calatrava; en 1334 se acordó que la Hermandad talaverana intercediese ante la Corte para que les fuese devuelta el monto de dicha gabela retenida por el clavero calatravo, ocupándose de ello los toledanos en caso contrario. En 1438, la entidad manchega, minada por la elección de sus oficios, recabó la colaboración de los hermanados; los apoderados de Toledo y de Talavera suspenden temporalmente los cargos controvertidos hasta su resolución; esta intervención fue interpretada por algunos como una intromisión intolerable, por lo que hubo de recurrirse a llevar el caso ante el monarca³⁷.

La corta estancia de la Real Chancillería en la capital manchega contribuyó el que, ocasionalmente, se gestionasen asuntos relativos a alguno de los federados mediante la colaboración de la Hermandad ciudarrealeña. Por ejemplo, en 1498 la entidad talaverana solicita a su homónima manchega sus buenos oficios en la resolución de asuntos pendientes sobre los que tenía particular interés.

Asimismo, durante la Baja Edad Media se mantuvo una fluida correspondencia institucional entre los integrantes del Triple Instituto, no dudándose, a veces, en contribuir solidariamente en el costeo de los largos pleitos, generalmente de tipo económico, elevados conjunta o individualmente a los altos tribunales de justicia regia.

1.1.2.b. ORDENANZAS DE LA HERMANDAD MANCHEGA.

Los cabildos particulares de las fraternidades que nos ocupan emitieron a lo largo del periodo bajomedieval múltiples disposiciones que, junto a la reglamentación común emanada de las llogas, conforman un cuerpo legislativo propio de cada instituto. La compilación ordenancista solo sería acometida por decisión de la junta de septiembre de 1499 en Ventas con Peña Aguilera.

Por lo que respecta a la Hermandad de Villa Real, desconocemos los acuerdos capitulares de la organización al no conservarse la inmensa mayoría de dichas actas. En cambio, sabemos que en 1337 se dotaría de unas ordenanzas, aprobadas por Alfonso XI, cuyo texto sólo conocemos indirectamente, pero en las que se deja traslucir que se trataba de un instrumento codificado mucho más elaborado que los deshilvanados preceptos de las corporaciones toledanas.

En efecto, el primero de abril de 1337 fueron confirmadas por la Corona, en la ciudad de Toledo, un cuaderno de reglamentos que menciona la existencia de hermanos colmeneros e hidalgos, entre los cuales se repartían los cargos por igual, pero monopolizando los segundos los empleos honoríficos; anualmente, el domingo anterior a la fecha en que cesan sus oficios los alcaldes, se proveen durante cabildo general a sus sustitutos. La defensa de los intereses hermandinos era encargada a los hermanos letrados, quienes no llevarían derechos, siendo las sentencias de los alcaldes apelables ante los cabildos; ningún reo sería excarcelado bajo fianza hasta substanciarse su causa. Los alcaldes debían visitar regularmente las

cuadrillas, supervisando su perfecto pertrechamiento, so pena de sanción pecuniaria incondonable³⁸.

Habr  que esperar al 19 de septiembre de 1435 para que un nuevo texto unificado fuese confirmado por Juan II, en Segovia³⁹. En su breve prefacio pone de manifiesto la importancia de la entidad para la erradicaci n de los golfines y la repoblaci n del  rea. Respecto a su reglamentaci n, prescribe que todos los hermanos han de tener al menos media posada de colmenas poblada en el monte, guardadas "con colmenero e perro segund la costumbre antigua de la dicha Hermandad"; vetando el ingreso a los que poseyesen enjambres, losados⁴⁰ o huertos en despoblado; el escribano debe asentar en un libro el nombre de los hermanos y sus propiedades, y en caso de no acreditarse lo anterior tendr a un plazo de cuatro meses para cumplir lo estipulado. Establece la obligatoriedad del juramento de hermanamiento, en el momento del ingreso formal, y determina una distribuci n equitativa de los cargos "en tal manera que las honras e provechos e trabajos sean repartidos todos e non quede alguno quexoso"; alcaid as y alguacilazgo ser an renovados anualmente, sustituyendo su periodicidad bianual, no pudiendo ser elegidos en el plazo de dos a os siguientes a su salida para dichos oficios. Se consagra su jurisdicci n civil y criminal en primera instancia, aconsejando la brevedad de las detenciones y que si el encartado no fuese hermano costease con sus bienes las costas devengadas. Notario y letrado deben ser miembros del Santo Tribunal, no llevando salario alguno por su trabajo. La entidad sufragar a las diligencias realizadas institucionalmente. Cada a o, dos contadores examinar an las cuentas presentadas por el arquero saliente; se ordena visitar por mayo los colmenares y se establecen otra serie de preceptos menores que regulan minuciosamente su funcionamiento interno.

De este cuerpo normativo se trasluce un notable cúmulo de desarreglos que enturbiaban la vida de la asociación: algunos hermanos no poseían posadas, huertos ni losados poblados, si no que las arrendaban para acceder a la entidad; algunos miembros no habían jurado en el acto de ingreso; los caballeros monopolizaban las principales dignidades; frecuentemente se excusaban de comparecer a los cabildos o a las llegas; los encausados veían demorarse sus pleitos, satisfaciendo los hermanos gastos procesales contra precepto; alcaldes y mayordomos manejaban a su antojo las rentas corporativas; y cabildos parciales empañaban la credibilidad de la Hermandad, menudeando las ocasiones en las que se levantaban voces airadas entre sus integrantes.

La existencia de ordenanzas medievales exclusivas de la organización manchega tal vez pueda interpretarse no tanto en relación a una hipotética mayor pujanza y desarrollo institucional, como en razón con la magnitud de las irregularidades o del calado de los enfrentamientos en su seno; pero lo cierto es que su homónima de Talavera no contará con ordenanzas propias hasta 1523⁴¹, y aún tardaría muchos años en hacer lo propio el tribunal de Toledo.

1.1.3. INTERVENCIÓN DE LA CORONA.

La Monarquía desempeñó un papel decisivo para el mantenimiento, encauzamiento y desarrollo del fenómeno hermandino. Eran precisas unas instituciones intermedias entre el Rey y sus súbditos para mantener bajo control a sus vasallos, confiándose en las autoridades locales para hacer respetar el orden social vigente.

Descartada la interpretación regia en la fundación de las asociaciones colmeneras manchegas, es innegable que el amparo prestado desde la Corona fue decisivo en muchos instantes de su historia. Los reyes castellanos estimularían su continuidad institucional, dotándola de los adecuados privilegios económicos y jurisdiccionales excepcionales, habida cuenta del dispar talante político hacia unas organizaciones que, a semejanza de las ligas concejiles, podrían indisponerse contra quienes las alentaban⁴².

Los soberanos castellanos normalmente atenderán las peticiones elevadas por sus procuradores al ser considerados defensores de sus propios intereses. Se asumía que un buen monarca debía de ser un juez recto, dispensador de gracia y justicia, e ir contra unas organizaciones tan loables como las creadas en torno a las citadas poblaciones manchegas iría contra este principio general. El respaldo de la Corte era patente porque convenía contar con una fuerza armada fiel a sus designios, cuya actividad estimulaba la colonización de un área conflictiva y cuyo desarrollo económico contribuiría a engrosar en último término las arcas reales, pudiendo ser utilizada la

Hermandad de Villa Real como cuña de realengo en los levantiscos territorios de las Órdenes Militares.

1.1.3.a. PRIVILEGIOS Y DISPOSICIONES REALES.

La inestabilidad bélica y política durante la minoría de edad de Alfonso VIII y el traumático reinado de Enrique I, crearon las condiciones precisas para la aparición y ulterior desarrollo del bandolerismo en la frontera sur castellana, al quedar como tierra de nadie una extensa área débilmente poblada entre los Montes de Toledo y Sierra Morena. Esta situación se mantuvo en décadas posteriores ya que los enfrentamientos entre Alfonso X y su hijo Sancho IV paralizará el avance cristiano, síntoma inequívoco del agotamiento castellano debido a disensiones internas.

En este contexto surgiría el fenómeno hermandino, ligas concejiles que hunden sus raíces en el siglo XII, pero que sería en la centuria siguiente cuando se generalizaría, ante la necesidad de cubrir mediante solidaridades colectivas los vacíos de poder existentes.

A los reinados de Fernando III o de Alfonso X se remonta la tradición para fechar el periodo fundacional de las organizaciones colmeneras manchegas, pretendiendo que ya en tiempos de Sancho IV se habría concedido el derecho a percibir la asadura. Poco antes de su muerte, pretextando el apaciguamiento de los golfines, los hermanos de Villa Real solicitaron a Roma que les relevase del juramento de servicio realizado años antes, devolviendo las cartas reales de privilegio "por parecerles mucho rigor el que hasta entonces habían usado"⁴³. Sancho IV, para disuadirles, solicitó al Sumo Pontífice que estimulase la continuidad de su instituto, a lo que Celestino V se mostró solícito y pródigo, concediéndoles las citadas mercedes.

La minoridad de Fernando IV hizo posible la reactivación de las hermandades municipales de 1295, constituídas al margen de la voluntad regia pero confirmadas ese mismo año en las Cortes de Valladolid, como respuesta a los abusos nobiliarios. Su tutora, María de Molina, hubo de recurrir a los burgos para contrarrestar la pujante oposición de los magnates, ya que los hombres de armas costeados por las ciudades eran la única opción a que podía acudir para preservar la continuidad dinástica.

En julio de 1302, Fernando IV se dirigía con sus mesnadas hacia la frontera musulmana, deteniéndose en Toledo. En dicha ciudad, atendiendo a los procuradores hermandinos, prorrogó indefinidamente su ministerio. Poco después se incorpora Villa Real a la liga hermandina toledana, y el 25 de septiembre del citado año, el rey ordenaba el nombramiento de "dos homes buenos de vos que sean" para asumir el mando de sus respectivas entidades⁴⁴.

En 1303, el monarca dota al Triple Instituto de los medios financieros precisos para su mantenimiento mediante la asignación del derecho de asadura, gabela sobre el tráfico ganadero que gravaba con una res el tránsito de cada hato que transitase por sus áreas de influencia⁴⁵, quedando sujetos a dicho arbitrio pastores y vaquerizos so pena de ir a la Corte donde se les tomaría audiencia; igualmente, les eximía del pago de portazgos y pontazgos cuando fuesen a vender sus productos, con la única salvedad del puente de Alcántara.

El 12 de abril de 1309, en Toledo, se vuelven a confirmar sus privilegios personales y tributarios, conminando a las justicias, en especial a las de los territorios de órdenes, que no amparasen

malhechores, y a los pastores que no defraudasen a las Hermandades al agrupar rebaños de distintos dueños en manadas para exonerarse de sus obligaciones. Los días 7 y 13 de julio de 1312, el rey, esgrimiendo la necesidad de su continuidad institucional, prorroga a perpetuidad estas asociaciones apícolas, reiterando las mercedes por él concedidas⁴⁶. A pesar de estipularse así, fue costumbre durante la Edad Media que los cabildos coaligados se confirmasen mutuamente cada año, expresando así su desvinculación formal de los designios regios.

Durante la minoridad de Alfonso XI, sus tutores refrendaron las cartas reales concedidas por su antecesor⁴⁷. Cuando el soberano alcanzó la mayoría de edad, en 1327, consagró dicha disposición, aconsejándose la periodicidad anual de unas alcaldías que deberían recaer en sujetos cualificados. Ese año se condenaba la actitud de porquerizos y merchanes que, con el pretexto de no ser pastores, pretendían excusarse del pago de la asadura⁴⁸; debiendo insistirse posteriormente ante la tenaz inobediencia de los gañanes ante tal imposición⁴⁹. A pesar de suprimirse la Hermandad General en 1325, el monarca no dudó en respaldar las asociaciones gremiales del reino, como la Hermandad de la Marina o las de los colmeneros manchegos.

Pedro I, poco después de acceder al trono, en las Cortes de Valladolid de 1351, confirmó las cartas de 1338 y 1348, por las cuales las personas y propiedades de los hermanados quedaban bajo protección regia, con las únicas excepciones de deudas contraídas en negocios particulares, negativa a satisfacer derechos legítimos o por delitos de contrabando⁵⁰.

Los Trastámaras seguirán prestando todo su apoyo al Triple Instituto. Enrique II otorgó, en las Cortes de Toro de 1371,

confirmación general de todas las mercedes anteriores⁵¹; colocándose luego de parte del cabildo de Villa Real en el pleito que lo enfrentaba con la Orden de Calatrava⁵², y con el propio ayuntamiento de la villa⁵³. Juan I hizo lo propio en Guadalajara, en 1390⁵⁴, mientras que Enrique III atendió las quejas elevadas por el procurador manchego, apremiando a los ganaderos a contribuir a la asadura, ante la práctica frecuente de eludir los puertos reales o transitar durante la noche por trochas y veredas⁵⁵.

Hacia 1416, los colmeneros de Villa Real han de acudir de nuevo a la Corona, esta vez encarnada en Juan II, para dilucidar la pugna mantenida con el claverero de Almagro, al contravenir la percepción de la asadura encarcelando a sus recaudadores⁵⁶; a principios de 1417 se expidió carta de seguro al Santo Instituto como salvaguarda de injerencias externas⁵⁷. Dicho monarca avalaría sus privilegios, consecutivamente, el 9 de julio de 1418⁵⁸; el 1 de mayo de 1425, en Fuensalida; el 10 de septiembre de 1425, en Roa; y el 2 de febrero de 1438. Juan II medió en el conflicto suscitado por la supuesta injerencia de talaveranos y toledanos en asuntos internos de los de Ciudad Real, arbitrando al respecto el 21 de agosto de 1439.

Enemistadas las corporaciones toledanas con los colmeneros manchegos, el recientemente coronado Enrique IV, en 1456 refrendó las franquicias concedidas en 1417, previo consenso de los toledanos⁵⁹; mientras que los hermanos de Ciudad Real obtendrían su aprobación expresa el 13 de julio de 1465.

Este fue, a grandes rasgos, el proceso en virtud del cual el Triple Instituto ve reconocido y auspiciado el desarrollo de cada uno de los federados, paso previo ineludible para su continuidad. La Corona

otorgó mercedes personales y fiscales, potenció su desarrollo corporativo, respaldándolas ante los excesos de maestros y justicias locales, no vacilando en mediar en sus disensiones internas en caso de ser requerida. Pero esta actitud en ningún caso puede ser interpretada como un acto de prodigalidad de la Corte, si no el resultado de una opción premeditada del poder real, aún en precario, al sentirse amenazado por los poderes fácticos de la época: nobleza, alto clero, magnates de las Órdenes Militares, ciudades, etc.

1.1.3.b. ACTUACIONES POLÍTICO-MILITARES DE LA HERMANDAD.

El potencial bélico de las entidades coaligadas, a comienzos del Cuatrocientos, no pasaba desapercibido a ninguna de las fuerzas beligerantes en la turbulenta Baja Edad Media castellana. Aún en curso la expansión cristiana, nobles y ciudades pujaban por la hegemonía ante la debilidad de una monarquía embrionaria, aquejada de la falta de una efectiva autoridad en sus dominios, y minada su autoridad por minoridades o tutelas. En este complicado juego de intereses, el alto clero y las Órdenes Militares actúan como factores desestabilizadores, inclinándose de un bando u otro a tenor del momento y siempre según su propia conveniencia.

Aunque Alfonso VIII había concedido a los saeteros de Talavera exención de contribuir con pechos, facendera y portazgo, debido a sus servicios al lado de las huestes reales en defensa de la zona frente a las incursiones islámicas⁶⁰, privilegio confirmado por Fernando III, tales cartas reales no mencionaban a la Hermandad como tal.

Alfonso X, en 1255, fundó Villa Real en el emplazamiento de la aldea de Pozo Seco⁶¹, tras dudar sobre el lugar exacto de su ubicación, creándose así un pequeño enclave de realengo en territorios de la Orden de Calatrava. Esta villa sería a la postre sede de la Santa Hermandad manchega, iniciando desde su fundación un paulatino crecimiento poblacional al actuar como polo de atracción de colonos ante las libertades concedidas por el soberano.

Fernando IV, firme impulsor de las iniciativas de los colmeneros, se granjeó la fidelidad de los ballesteros de Villa Real, celosos de su independencia frente a los poderosos maestros de Calatrava, a menudo insumisos a su voluntad⁶², datando de esta época la concesión a la localidad de la distinción del uso de sello. Justicias locales y hermanos colaboraron activamente en la represión del bandolerismo. Así, en 1329, la justicia de Talavera y los cuadrilleros de la villa coordinan sus esfuerzos, levantando un nutrido contingente que acabase con los golfines de la Jara, acaudillados por un tal Eas Paes⁶³. En 1340, los ballesteros del Triple Instituto participan en la batalla del Salado. Once años más tarde Pedro I exime a los vecinos de Toledo que contribuyesen militarmente al esfuerzo bélico, pues gozaban de fonsadera en todo su reino, pero en 1366 el soberano exigía al arrendador de la asadura toledana pagar lo adeudado mientras estuvo guerreando en la contienda contra los aragoneses⁶⁴.

Los Trastámara recabaron con relativa frecuencia la participación militar de los efectivos hermandinos, adquiriendo un papel destacado en algunos momentos transcendentales para la evolución política del reino. Los ballesteros manchegos liberaron a Juan II de su confinamiento en el castillo de Montalbán, y por la bravura de las huestes aportadas por su Hermandad en la batalla de Olmedo concedería a la ciudad el título de Muy Noble y Muy Leal, merced sin duda auspiciada por la proximidad a los círculos cortesanos de destacados personajes próximos a la entidad local⁶⁵. En 1440, los colmeneros de Ciudad Real pedían a los talaveranos cuentas de los gastos ocasionados por la comitiva de Alonso Pérez Vivero durante la Reconquista, lo que le valdría a la Hermandad de dicha villa la exención real de contribuir en la guerra contra el infiel⁶⁶.

Por último, el firme apoyo a la causa del infante Alfonso, permitió al cabildo manchego la confirmación de sus privilegios, aunque en fechas tardías. Por entonces, la Hermandad de Talavera, radicada su sede en el señorío de la Mitra toledana y secundando a su arzobispo, prestó al pretendiente cien mil maravedís, cuya devolución quedó en suspenso por la temprana muerte del sucesor, deuda que luego sería asumida por la triunfante Isabel I.

1.1.4. CONFORMACIÓN DEL ORDENAMIENTO PROCESAL ABREVIADO.

Las solidaridades colectivas nacieron con la finalidad de llenar las grandes lagunas institucionales y procedimentales de la época. A este respecto, las federaciones supralocales medievales intentan establecer el marco jurídico en el que desenvolverse cuando sus vecinos se hallaban en el término de la ciudad asociada, en un periodo en el que imperaba un régimen de excepción foral, garantizándose la protección mutua a los rebaños trashumantes o a unos intercambios económicos amenazados por la inseguridad de caminos y yermos.

Los privilegios municipales, concedidos por los soberanos en sus cartas pueblas, solían contener un capítulo en el que se recogía a los concejos la posibilidad de asumir la venganza de las ofensas inferidas a la comunidad o a cualquiera de sus integrantes. Esta capacitación no era exclusiva de los concejos, extendiéndose de igual modo a los vasallos la posibilidad ejercer dicho derecho, sin necesidad de incoar expediente criminal alguno⁶⁷. La Hermandad de Villa Real, desde su etapa fundacional, asumió dichos preceptos, demostrando una efectividad de la que no dejó de hacer gala durante siglos.

Durante este periodo, los hermanos usaron toscos ropajes de paño o pieles, tocados de gorros o monteras y calzados con albarcas; su armamento se reduciría a ballestas, lanzas, armas blancas, hondas e incluso aperos de labranza, no contando con más instrucción que la práctica en las escaramuzas fronterizas y la rudeza que proporciona la vida en despoblado y la defensa de sus escasas pertenencias⁶⁸.

Los ballesteros, denominación genérica que integraba a cuantos perseguían a los golfines en nombre de la Hermandad, utilizarían el procedimiento de apellido para dichas salidas. Capturados algunos forajidos por hombres conocedores del terreno y curtidos en la dura vida de la zona, poco podrían hacer si eran detenidos en flagrante delito o concurriesen en ellos indicios palpables de culpabilidad, en cuyo caso, apenas sin dilación y sin mediar garantía judicial alguna, serían ejecutados y expuestos en un lugar transitado para atemorizar a los delincuentes, dar ejemplo a los pasajeros y habitantes del yermo.

Sin autoridades jerárquicas ni tribunales permanentes, esta justicia popular se articula como autodefensa en regiones marginales donde ningún poder establecido pasaba de ser nominal. El rigor con que eran tratados los malhechores era proverbial, y los cronistas posteriores recogieron dichos como los que atestiguaban que "la Hermandad los ahorca y después les lee la sentencia" o "la Hermandad de Peralbillo, que después de asaetear al hombre hacia pesquisa".

Según un antiguo manuscrito, atribuido a J. DÍAZ JURADO, la expeditividad de su procedimiento era evidente: registraban los montes y quienes eran considerados sospechosos eran ajusticiados, quedando suspendidos en los árboles con unos garfios de hierro sujetos a su garganta, siendo luego asaeteados y abandonados sus cuerpos de tal guisa⁶⁹. Nos parece innecesario cualquier otro comentario sobre la discrecionalidad de estos trámites, que sin duda redundarían en una amplia capacidad coercitiva por lo implacable de su proceder.

En la segunda mitad del siglo XIV los golfines serían prácticamente exterminados, afianzada la Reconquista y repoblado el yermo, a lo que sin duda contribuiría de manera decisiva la Santa Hermandad⁷⁰,

reintegrándose algunos de dichos malhechores a la sociedad mediante el servicio militar como mercenarios o adoptando una vida más arreglada las leyes, abandonando los excesos que habían caracterizado su modo de vida. Sin embargo la desaparición de la delincuencia endémica de la zona nunca será completa, pues "como eran muchos y grande la espesura de los arboles nunca faltaban algunos que acudían al exercício de rovar"⁷¹. El periodo que abarca las postrimerías del siglo XIII y toda la centuria siguiente favoreció la proliferación de solidaridades colectivas⁷²; los ballesteros manchegos unieron sus fuerzas para combatir cualquier agresión a sus intereses, lo que por extensión les hacía entender en toda falta en despoblado salvo las ofensas orales.

Para asumir tan extensas atribuciones, la Santa Hermandad configurará un entramado de vigilancia y persecución eficaz, al que progresivamente se dotará de facultades jurisdiccionales concretas. Los guardas de las colmenas, permanentemente establecidos en las posadas⁷³ conforman su núcleo ejecutivo, asegurándose la colaboración de serranos y aldeanos, bajo el mando de alcaldes y cuadrilleros⁷⁴, quienes a partir de 1303 vestirían el uniforme verde distintivo de su instituto, aunque posiblemente reservado para los actos más solemnes.

Se reguló el ámbito actuacional de cada una de las entidades coaligadas, estableciéndose en la concordia de 1459 que pudiesen penetrar cuadrilleros de una organización en la jurisdicción de la hermanadas, respondiendo el reo ante el tribunal al que se presentó la demanda, retribuyéndose por la corporación correspondiente a los miembros de la partida.

La Hermandad, paulatinamente, contaría con atribuciones procesales civiles y criminales formales. Los alcaldes conocerían de los pleitos

civiles siempre que atañesen a sus integrantes o a asuntos relativos a actividades apícolas; en tanto que criminalmente les concernían hurtos y robos, violación de doncellas, quebrantamientos de casas, iglesias y cárceles, así como de los daños a montes y posadas, siempre que tales agravios se hubiesen intentado o cometido en yermo, así como si se hubiesen perpetrado en poblado con huida de los involucrados al campo.

Constreñida territorial y jurisdiccionalmente la asociación manchega por los señoríos de órdenes, su implantación no igualó en esta época al control sobre la tierra ejercido por sus homónimas toledanas. Para solventar esta situación, los colmeneros de Villa Real hubieron de llegar a concordias particulares con los maestros de Calatrava mediante las cuales regular su status en la zona; así, en 1405, se acordó con el comendador de Piedrabuena y su concejo guardar la exención tributaria a sus paniaguados, a cambio de contemplarse la posible enajenación de cierta dehesa y de asegurarse su abastecimiento de vino⁷⁵. Una sentencia de 1425 consagraba la restricción de la jurisdicción hermandina al yermo del Campo de Calatrava, quedando en suspenso sus pretendidas atribuciones civiles sobre colmeneros y hermanos bajo vasallaje en los territorios de órdenes, regulándose la explotación apícola del área, y admitiéndose únicamente que el Santo Tribunal "ha tenido y tiene jurisdicción criminal para poder correr y penar los golhines e robadores e malfechores...en los montes e xaras del Campo de Calatrava". Apelada en 1428, se concretaron los términos actuacionales de la entidad manchega en los lugares y villas del área fuera de su alfoz y del campo cultivado circundante, reservando a las justicias locales el encartamiento judicial de sus vasallos⁷⁶.

La Hermandad desarrolla en torno a la figura del alcalde un estilo procesal sumarisimo derivado de fórmula del derecho cacónico "Saepe

contingit", por la cual se hace justicia de manera rápida, excluyendo los elementos accesorios del enjuiciamiento y acortando los plazos legales establecidos en el sistema procesal común esbozado desde entonces. Ya en el siglo XV, este mecanismo de administración jurídica se iniciaba con la presentación de demanda jurada ante los alcaldes o los cuadrilleros, a la que seguía la inmediata presentación de testigos por parte de la acusación y el encarcelamiento del sospechoso. Detenido y llevado ante los alcaldes, ante ellos se representaban las pruebas aportadas y un informe de las diligencias practicadas hasta entonces por un letrado del propio tribunal. Tomadas las declaraciones pertinentes, se siguen unas tan necesarias como breves réplicas y contrarréplicas de los procuradores; concluido este trámite, se abre el periodo probatorio, recibiendo todas las pruebas estimadas como convenientes para esclarecer el caso. Todo, o la mayor parte del proceso había de ser escrito, dándose el cumplido traslado a las partes litigantes. Prejuzgándose a menudo la culpabilidad de los indiciados, las sentencias suelen ser condenatorias, aunque no faltan las condenas contra los perjurios y falsos delatores. La retirada de querellas o la espontánea confesión de los pequeños delincuentes hacía aminorar la severidad penal, aunque raras veces no se exigían responsabilidades pecuniarias a los enjuiciados. Los alcaldes, como únicos magistrados, dictan sentencia definitiva, sólo recurrible ante los cabildos particulares o a las Juntas generales, pudiendo ser revocadas de manera excepcional por el monarca.

La Santa Hermandad tenía unas atribuciones jurídicas imprecisas en cuanto a los delitos, y aún más inconcretas respecto a las penas a aplicar, dejadas ambas al buen arbitrio de alcaldes o cuadrilleros. En un principio, los sospechosos detenidos serían ejecutados sin mayores formalidades, pero el desarrollo jurídico-institucional ulterior

propiciaría la diversificación de las sanciones, haciéndose cada vez más esporádicas las imposiciones de la pena capital, que la historiografía tradicional las ha teñido de un carácter entre ejemplificador y festivo poco verosímil⁷⁷.

Desafortunadamente, la escasa documentación conservada de esta época deja grandes lagunas al respecto, pero sabemos que en el Cuatrocientos la forma normal de ejecución era atar al reo a un poste, para que los ballesteros lo asaeteasen hasta su muerte, quedando el cadáver expuesto hasta su descomposición, seguramente precipitada por las inclemencias climáticas y la depredación de los animales carroñeros. Con anterioridad, los cuadrilleros de Villa Real habían ahorcado a los golfines, quedando sus cuerpos sin vida colgados de los árboles y con algún dardo clavado como distintivo de la entidad que había hecho justicia. Paulatinamente, y conforme se consolida su estructura orgánica, los sospechosos serán llevados a la sede del tribunal para responder ante sus magistrados, utilizando en último extremo el altozano de Peralvillo para llevar a cabo la ejecución pertinente. Progresivamente, el cumplimiento público de las sentencias se revistió de un elaborado aparato público entre propagandístico y moralizador, muy de acuerdo con la mentalidad de la época.

1.1.5. LA HERMANDAD DE CHILLÓN.

La fraternidad establecida en Chillón era una organización local con funciones y procedimientos muy similares a los empleados por los colmeneros de Villa Real, de cuya Hermandad depende formalmente, aunque por su relativa lejanía de la capital manchega dispondría en la práctica de una amplia autonomía.

Chillón, pequeña localidad del extremo suroccidental de la actual provincia de Ciudad Real, era el único señorío nobiliario existente en dicha circunscripción a la altura del siglo XV⁷⁸. Durante esta centuria se ubicaba en su término una floreciente manufactura pañera, que durante el reinado de Enrique III competía en calidad y precios con los tejidos flamencos o lombardos. Esta cierta prosperidad económica, unida al hecho de su proximidad a los beligerantes maestros de Calatrava⁷⁹, impelería probablemente a los señores de la villa a estrechar sus relaciones con el tribunal de Villa Real.

Excluida Chillón de la concordia de 1428, debido a su peculiaridad jurisdiccional, la primera referencia documental de la que tenemos noticia sobre su Hermandad data de 1439, al confirmarse las corporaciones toledanas por parte del cabildo manchego y el del procurador de Chillón. En 1458, 1459 y 1464 se encuentra un representante de Chillón entre los diputados de Ciudad Real en las juntas anuales⁸⁰. A fines del Cuatrocientos, su presencia entre los delegados manchegos sería contestada al incrementar el número de los convocados, con el consiguiente encarecimiento de los gastos ocasionados, disensión tal vez motivada en última instancia por su

segregación, inacción o por su autonomía orgánica efectiva respecto de la Hermandad matriz que le brindaba cobertura jurisdiccional.

En 1493, los Reyes Católicos comisionan al licenciado Muñoz, a instancia del "comun y homes buenos" del Campo de Calatrava, para que la Santa Hermandad y los vecinos de Chillón, entre los cuales probablemente hubiese miembros de su tribunal local, cumpliesen los capítulos de la concordia estipulada tras complicadas vicisitudes con la Orden de Calatrava, relativa al aprovechamiento ganadero y forestal de sus dehesas⁸¹. La última ocasión en que se menciona la Hermandad de Chillón tiene lugar en el asiento de una partida de gastos del Santo Instituto presentada por el mayordomo Martín Fernández en 1502, en la que se deja constancia del pago de ciertas diligencias de la organización asociada⁸². En el informe de la villa remitido como respuesta al interrogatorio para las Relaciones Topográficas de Felipe II no se menciona en ningún momento esta institución.

Tales tipos de entidades, que cubrían territorios donde no llegaban los representantes hermandinos, no fueron exclusivas de La Mancha Baja, y así sabemos que hacia 1467 en tierra de Toledo actuaba la "Santa Hermandad del alhondiga Guadarrama aquende con las villas de Maqueda, Santa Olalla e la Torre de Esteban Labran e la Puebla de Montalvan", con una estructura semejante a la estudiada y con idéntica misión de represión de la delincuencia en el yermo que las luego denominadas Hermandades Viejas⁸³.

1.2. INICIOS DE LA EDAD MODERNA. CONSOLIDACIÓN JURISDICCIONAL Y EXPANSIÓN TERRITORIAL.

Los epígonos de la Casa de Trastámara, a finales del siglo XV y principios del XVI, así como durante los reinados de los Austrias Mayores, coinciden con el periodo de reordenación de las atribuciones jurisdiccionales del Triple Instituto. El tribunal manchego extendería por entonces su radio de acción hacia el sur y poniente de la línea meridional del Tajo, allende del cual establecían su ámbito territorial las Hermandades de Toledo y de Talavera.

La situación del núcleo urbano que acogía a la corporación manchega se caracterizaba por el mantenimiento de la manufactura del cuero, de origen musulmán; concretamente sus guantes perfumados eran vendidos en algunas de las ferias internacionales más importantes del occidente europeo, teniendo gran demanda en la propia Península. Esta industria especializada era complementada con la existencia de telares en la ciudad⁸⁴, y de batanes en las riberas del Guadiana, cuya pequeña producción de paños pardos se destinaba casi exclusivamente al mercado comarcal. La base económica por excelencia era agropecuaria, acentuándose esta tendencia rural a lo largo del siglo XVI.

La nobleza local, en su mayoría integrada por caballeros de cuantía ennoblecidos y por hidalgos con fortunas más o menos saneadas según su situación personal y familiar, está íntimamente ligada a la propiedad territorial circundante, viviendo en Ciudad Real y dejando la gestión directa de sus posesiones rurales en manos de administradores. En el

1.2.1. LOS REYES CATÓLICOS Y LA SANTA HERMANDAD VIEJA.

Las realizaciones llevadas a cabo durante el reinado de los Reyes Católicos no supusieron una ruptura con el orden anterior, antes al contrario se mezclan por igual elementos medievales y renacentistas, siendo la novedad más sobresaliente la firmeza y continuidad con que se persiguieron objetivos que antes resultaban inalcanzables.

La política interior castellana, dejada en manos de la reina, no pretendía meramente rescatar el poder de los magnates para someterla a las ciudades, si no someter bajo su control los privilegios forales, nombrándose sistemáticamente tras 1480 corregidores mediante los cuales supervisar estrechamente la vida municipal del realengo⁹⁵. Paralelamente, se crearon las bases de la administración territorial del estado moderno, sentándose, junto con otros muchos logros, los cimientos sobre los que se sustentará la hegemonía castellana de los siglos venideros.

En este marco intervencionista de la Corona sobre los poderes forales, se esboza entre los círculos próximos a Isabel I⁹⁶, la fundación de una Hermandad Nueva General, remodelando la organización constituida en 1465 y revitalizada en 1473 por la presión ciudadana encauzada por las cortes. Se incorporarían elementos ya experimentados en el seno de las fraternidades apícolas manchegas, sirviéndose de este nuevo entramado bajo esfera regia en su política de imposición de su renovado poder, siendo susceptible de ser empleado como fuerza bélica⁹⁷.

Este planteamiento hizo posible la aparición de una organización bien estructurada y perfectamente dotada de medios personales, financieros y jurisdiccionales que la convierten en la más formidable fuerza de seguridad de cuantas existieron hasta la fecha. Tanto es así que desde 1476 hasta 1498, la Hermandad Nueva cumplió con creces todas las expectativas depositadas en ella. Financiada por ciudades, nobles y clero, jerárquicamente dependía del Consejo de Hermandad como órgano supremo centralizado. La nueva entidad desempeñó un papel decisivo en la reducción de la aristocracia solariega, la conservación del orden público, comportándose como una auténtica milicia en la reserva y siendo pieza clave para conocer de primera mano los recursos demográficos y económicos de la Monarquía⁹⁸.

Los vasallos gozaron, durante su periodo operativo, de una etapa de relativa paz y seguridad, advertida por sus coetáneos, por otra parte volcados hacia una propaganda laudatoria de los nuevos soberanos. El desmantelamiento de la burocracia centralizada que regía los destinos de la Hermandad Nueva mediante la real pragmática de Zaragoza de 1498, mantiene en cambio el armazón local de su instituto, aunque palpablemente menoscabado, ahora dejado en poder de los concejos⁹⁹.

Abandonada a su suerte desde principios del Quinientos¹⁰⁰, se desvirtuó paulatinamente su ministerio, desapareciendo formalmente en muchos lugares o quedando en otros como refugio de los valores honoríficos, esclerotizándose sus funciones policiales y jurídicas. Fue extinguida la Hermandad Nueva por el alto coste de su mantenimiento, principalmente cargado sobre los pecheros.

1.2.1.a. DISPOSICIONES REGIAS.

Siguiendo a sus predecesores, los Reyes Católicos, entre sus primeras actuaciones de gobierno, confirmarán la entidad ciudarrealena en abril de 1475, incluyéndose en esta carta de seguro la repuesta a una petición sobre el sistema de elección de sus oficiales, concluyéndose que se continuase haciendo de la forma acostumbrada¹⁰¹. En 1479 Fernando el Católico recordó mediante real provisión la obligación de los hermanos ciudarrealenos de tener posadas de colmenas para validar su ingreso¹⁰². Entre 1485 y 1486, con la reordenación de la corporación apícola manchega, se confirmaron sus privilegios, no lográndose el refrendo del Triple Instituto hasta el 29 de marzo de 1494¹⁰³, y confirmándose de nuevo al siguiente año¹⁰⁴.

No escapó la Hermandad de Ciudad Real a la política intervencionista de la Corona, dictándose desde la Corte itinerante frecuentes disposiciones con un claro contenido de arbitraje, control y fiscalizador. De esta forma se pretendía también solventar los conflictos internos que aquejaban con demasiada frecuencia a su cabildo, impregnándose durante este periodo de una fuerte connotación regia que ya nunca abandonaría.

Tal fue la influencia que los nuevos monarcas, en especial Isabel I, tuvieron en el desarrollo institucional de esta organización, que pueden considerarse sus refundadores. En la memoria histórica corporativa aparecen como los garantes por excelencia de dicha entidad, y por ello recordados anualmente con los sufragios por su

alma celebrados solemnemente por los distintos cabildos que conforman el Triple Instituto¹⁰⁵.

La Hermandad apícola no desapareció durante el reinado de los Reyes Católicos absorbida por la recién estructurada Hermandad Nueva, como en su día afirmó L. SUÁREZ FERNÁNDEZ¹⁰⁶, sino que compartieron ambas similares atribuciones jurídico-territoriales, manteniéndose esta duplicidad de estructuras afines hasta bien entrado el siglo XIX¹⁰⁷.

Isabel I, desde Sevilla, requirió en 1478 a los ciudarrealeños para que recibiesen como alcalde a Rodrigo de Santa Cruz, conforme al capítulo de la junta de Toledo¹⁰⁸, celebrado con anterioridad. Y, en 1479, se remite por parte de la reina al corregidor de la capital manchega una sobrecarta, a instancia de los vecinos de la ciudad, para que cumpliesen puntualmente lo referente a la renovación de los oficios hermandinos.

Pese al establecimiento de un nuevo ordenamiento en 1485 y 1486, impuesto por los monarcas, no fue fácil poner orden entre los colmeneros manchegos, por lo que emplearán todos los resortes de poder en manos de la Corona, ora mediante cartas órdenes desde la Corte, ora prescribiendo la intervención de los comendadores del Campo de Calatrava, pasando por la supervisión ejecida a través los sucesivos corregidores de la ciudad, o por los oficiales de la Real Audiencia establecida en Ciudad Real.

El precedente próximo en el empleo de los representantes reales en labores fiscalizadoras sobre las Hermandades Viejas data de 1477, cuando se encargó al corregidor de Toledo, Gómez Manrique, tomar las cuentas a dicha entidad¹⁰⁹. Así, en 1479, se conmina a su homólogo

ciudadarrealeno para que hiciese respetar el procedimiento electoral en el seno de la entidad local¹¹⁰; y un año después el Consejo Real asignó a su delegado doscientos maravedís, en concepto de salario por haberse ocupado de las cosas tocantes al Santo Instituto¹¹¹. A principios de 1489, desde la misma instancia, se ordena al bachiller Diego Criptana que ocupase el puesto del corregidor en la toma de cuentas a los alcaldes salientes de los colmeneros manchegos¹¹²; y en 1491 se encarece al licenciado Lope Sánchez del Castillo, también corregidor ciudadarrealeno, que hiciese respetar escrupulosamente los Capítulos de Maldonado¹¹³.

Con la ubicación de la Real Chancillería en Ciudad Real, será esta instancia superior la encargada de supervisar cuentas, actuaciones y desarrollo institucional de la entidad apícola. En noviembre de 1494, el obispo de Córdoba es comisionado por el Consejo Real a tomar las cuentas de los gastos realizados por el Santo Tribunal¹¹⁴. Dos años más tarde, el Supremo Consejo ordena a los oidores informarse sobre la conveniencia de modificar el sistema de elección de los alcaldes hermandinos, al recaer frecuentemente en jóvenes inexpertos dichos empleos y quedar los más experimentados como alguaciles, precribiendo la remisión de una relación de los gastos de la corporación, cifrada por entonces en unos trescientos mil maravedís¹¹⁵.

En 1501, el bachiller Fabián Megía, al tomar las cuentas de los propios, sisas y derramas municipales, también hará lo mismo con los balances contables presentados por los mayordomos de la Hermandad Vieja, hallando durante su pesquisa notables desarreglos¹¹⁶. Cuando en 1505, el pesquisidor Martín de Córdoba gire visita a la Audiencia de Ciudad Real, encontrará tal cantidad de excesos y anomalías en el funcionamiento arbitrario de sus oficiales que muestra bien claramente

la desvirtuada equidad de este tipo de tribunales, lo que de ningún modo exculpa de sus excesos a los oficiales del Santo Instituto.

Tales fueron los frutos de la política intervencionista de los Reyes Católicos sobre las Hermandades Viejas que éstas, según fray Andrés de TORREJÓN

"...por eso los tienen por patronos y ponen sus armas en sus casas porque fue como fundarla de nuevo y de aquí viene que piensan muchos que fueron estos Reyes los que dieron principio a la hermandad..."¹¹⁷.

1.2.1.b. CONTROL Y REORDENACIÓN JURÍDICO INSTITUCIONAL: LOS CAPÍTULO
DE MALDONADO.

El proceso de conformación de las atribuciones juríco-penales del Triple Instituto se fraguó paulatinamente desde su periodo fundacional, no definiéndose formalmente hasta el último cuarto del siglo XV. La Hermandad General renovada en Villacastín, concedía a esta organización jurisdicción criminal en los supuestos de fabricación o compraventa de moneda falsa; robo, pillaje e incendio en despoblado; abusos contra doncellas, casadas o viudas; muerte en camino o yermo y prisión ilegal. Probados dichas infracciones la sentencia de los involucrados era la pena capital, ejecutándose igualmente en caso de abigeato comprobado por tercera vez. Los ajusticiamientos eran llevados a cabo congregados todos los oficiales, asaeteando a los reos atados a postes, según se estilaba en las Hermandades Viejas. Sin embargo este encomiable esfuerzo ordenancista no pasó de quedar en un mero proyecto, ante la imposibilidad de imponerse en medio de la caótica situación interna castellana en las postrimerías del reinado de Enrique IV.

Los Reyes Católicos retomaron parte de esta reglamentación, esbozándose en la junta de Dueñas de 1476 las facultades jurisdiccionales hermandinas. Los cinco casos de su instituto serían a partir de entonces los siguientes:

- robo de bienes muebles e inmuebles;
- muertes y heridas;
- incendios provocados en montes y cultivos o edificios del yermo;
- excesos contra mujeres honradas en despoblado;

-desobediencia o desacato a la justicia y a la hacienda real.

Esta misma disposición se hizo extensiva a los tribunales apícolas, concretándose de una forma explícita lo que ya venía ejecutándose en la práctica, aunque limitando en parte su indiscriminado proceder contra toda la delincuencia rural de su circunscripción.

De capital importancia para la corporación manchega sería la adopción de unos nuevos estatutos, cuya vigencia a la postre excederían los tres siglos. Sería por entonces cuando se acometiera la reforma del reglamento aprobado por Juan II, al ser inaplicables algunos artículos, quedando desvirtuados otros, en desuso parte de los arcaicos procedimientos y relajados los vínculos de fraternidad al estar constantemente minada la entidad por disensiones internas suscitadas principalmente por la provisión de oficios; siendo evidente la necesidad de revitalizar una institución de incierto futuro, dotándola de los adecuados medios para asumir la labor encomendada.

En efecto, en abril de 1485 se dirimía ante el Real Consejo el litigio seguido por el procurador hermandino, Antón Sánchez, contra Juan de Cervera, regidor perpetuo y hermano del Santo Instituto, en razón de la inobservancia de la reglamentación existente relativa a la renovación de las alcaldías¹¹⁸. Para remediar el deterioro al que parecía abocada la asociación manchega, la reina comisionó a Francisco de Maldonado, salmantino próximo a la corte y ex-diputado general de la Hermandad Nueva por los distritos de Córdoba y Jaén¹¹⁹. Este caballero letrado afrontó la difícil tarea encomendada con el respaldo de la Corona, disponiendo de amplias facultades y un elevado margen de maniobra, dotando a la corporación ciudarrealeña de unos capítulos de

visita que adquirirán rango de ordenanzas con su refrendo por los soberanos el 10 de diciembre de 1485¹²⁰.

Maldonado, en veintidós capítulos, reorganizará dicha institución con la pretensión de solventar de una vez por todas las dos principales irregularidades que la aquejaban: las continuas disputas por la adjudicación de los cargos preeminentes, y la falta de control sobre la hacienda hermandina, en definitiva, acabar con las disensiones en su seno suscitadas por el control de los resortes económicos e institucionales del Santo Tribunal, que amenazaban con deteriorar irremisiblemente su credibilidad.

Las líneas maestras de su labor, plasmada en unos nuevos estatutos que a la postre tomarían su nombre, fueron las siguientes:

a/ Determinación de las condiciones de ingreso en la entidad; derechos y obligaciones de los hermanos.

Se establecen como condiciones ineludibles para ser admitidos como hermanos la tenencia en propiedad de, al menos, media posada de colmenas¹²¹, "poblada de día y de noche" por guardas. Los solicitantes deberían ser aceptados por el cabildo, jurando ante él servir bien y fielmente a Dios, la Virgen, al Rey y a su Santo Instituto.

Las mujeres podrían pertenecer a la organización, quedando ligadas a los mismos requisitos que los varones y gozando de los mismos privilegios, pero quedando excluidas de desempeñar cargos de responsabilidad en su tejido orgánico¹²², que subsidiariamente recaerían en varones de su confianza, fueren o no sus parientes.

Aunque se contempla que los vasallos de los señoríos laicos y eclesiásticos confinantes pudieran ingresar como hermanos, gozando de las franquizas inherentes a su calidad, igualmente quedaban inhabilitados para desempeñar oficios hermandinos preeminentes, consagrándose de esta forma el monopolio rector de la entidad en manos de los vecinos de Ciudad Real¹²³.

b/ Reparto de oficios según criterios estamentales y regulación del sistema electoral.

Previo reconocimiento sobre el número y status de los hermanos que componían la asociación, Maldonado los estructurará en cuatro cuadrillas atendiendo a criterios espaciales. Caballeros y pecheros son asignados a una cuadrilla concreta que toma el nombre de las parroquias locales -Santa María, San Pedro, Santiago- y de la antigua sede capitular hermandina -el monasterio de San Francisco-. En total había cincuenta y seis hidalgos, a los que hay que sumar y treinta y un miembros del estado llano, distribuidos en grupos en el que los primeros suelen doblar a los segundos¹²⁴.

Si, por enajenación o sucesión, una posada pasa a un nuevo propietario, este sujeto pasará a integrar la cuadrilla de su antiguo propietario, independientemente de su calidad estamental, lo que a largo plazo aumentaría aún más el peso específico de la oligarquía urbana al contar con un mayor poder adquisitivo. Si era poblada una nueva posada, su poseedor entraría en la cuadrilla que ese año hubiese aportado los alcaldes.

Caballeros y escuderos monopolizan las dos alcaldías y cuatro de los regimientos; los pecheros proveían otros tantos los regimientos y

los empleos de cuadrillero mayor, escribano y portero; estando capacitados ambos estamentos para ocupar los cargos de alguacil mayor, contador y procurador general¹²⁵.

Bianualmente, por San Miguel -el día 29 de septiembre-, la cuadrilla que correspondiese por rotación aportaría la mayoría de los oficios, dejando al resto de los grupos proporcionar dos regidores cada uno. La cuadrillería mayor, la contaduría y el empleo de pregonero serían renovados cada década, dentro de la cuadrilla rectora del momento. Todos los oficios se proveían mediante sorteo, por el sistema del encantaramiento, excluyéndose de la elección los hermanos que ya hubiesen disfrutado de algún empleo, hasta que no lo hubieren hecho el resto de los integrantes de su cuadrilla. No podían delegarse los oficios en otros hermanos ni en personas ajenas a la entidad, salvo la escribanía, la mayordomía y la contaduría, al tomarse en cuenta que se trataba de cargos que requerían una cierta cualificación profesional para su desempeño.

Aquellos que infringían el juramento de su oficio eran sancionados como perjuros, perdiendo sus bienes a favor de la corporación e inhabilitados profesionalmente, a la vez que expulsados a perpetuidad de la fraternidad.

c/ Regulación de los cabildos.

Se prohíbe taxativamente la celebración de reuniones secretas, en las cuales solo eran convocados parte de los hermanados o sin preceder las solemnidades requeridas, llegándose a acuerdos espurios, perjudiciales en todo caso para la credibilidad de la asociación. A este efecto, se prescribe que se tenga en la sede de juntas una

campana, siendo su tañir toda la tarde anterior a la asamblea el sistema de convocatoria empleado para evitar tales parcialidades.

d/ Ajuste de los asuntos financieros.

Maldonado tuvo particular cuidado de establecer una cuidadosa reglamentación de los asuntos económicos institucionales. Reguló el arrendamiento de la percepción del derecho de asadura, recordando la obligación de ser subastada públicamente, y rematada en el mayor postor, se tratase o no de algún hermano. Igualmente moderó los estipendios innecesarios, reduciendo los gastos del ágape del día de las renovación de oficios, al considerar impropios de tales convites todos los agasajos que no consistiesen en carneros o vacas. Los superávits acumulados deberían destinarse a la edificación y mantenimiento de un hospital para pobres.

Al final de los estatutos se consigna que "no se pueda alterar en poco ni en mucho dichas ordenanzas y que cualquier duda que surgiere sobre su contenido solo podrían resolverlo los Reyes y los de su muy Alto Consejo".

Aunque bienintencionados los capítulos dictados entre 1585-1586, resultarían de difícil aplicación práctica. El acudrillamiento de los hermanos sería encargado por el cabildo a dos individuos, pero prevaleció la falta de consenso y la Corona designó a Lope de Atugía, comendador de Malagón y montero mayor, y al corregidor local Juan Pérez de Barradas para tan delicada labor¹²⁶. Probablemente esta mediación no se llevaría a término o fuese desestimada a última hora, pues debió de ser el propio Francisco Maldonado quien, recorriendo personalmente las posadas, establecería las cuadrillas hacia el primer

semestre de 1486. Por entonces, se dirimió que en la próxima elección se consintiera usar de los oficios a los elegidos, de acorde a lo recientemente establecido¹²⁷.

Otros problemas surgirían o se recrudecerían en los años siguientes, al pretender los pecheros alcanzar una de las alcaldías¹²⁸, cuestionarse la periodicidad de algunos cargos según lo estipulado¹²⁹, etc. Invariablemente el Consejo Real dictaminó que los hermanados se atuviesen a sus estatutos, solo cediendo en algún caso concreto y con carácter interino¹³⁰.

1.2.1.c. RELACIÓN CON LA HERMANDAD NUEVA.

La Hermandad de los Reyes Católicos, concebida como fuerza de seguridad en despoblado, pronto se mostraría como un poderoso instrumento de su política antiseñorial, siendo financiada en gran parte por los concejos, y utilizándose eventualmente como fuerza de choque, labores secundarias o de reserva durante la guerra de Granada. Pero dicho instrumento ejecutivo del poder real halló una fuerte oposición a su implantación en la Monarquía.

La historiografía ha puesto de relieve las dificultades que concurrieron en su implantación en tierras señoriales y en el reino de Aragón, pero apenas ha dedicado unas líneas a la resistencia suscitada en el realengo o en aquellos territorios donde ya funcionaban instituciones similares.

Constituída la Santa Hermandad General en las Cortes de Dueñas de 1476, ese mismo año en las Cortes de Madragal y Cigales se conformará su ordenamiento, que cristalizaría definitivamente en las juntas generales de Dueñas y de Santa María de Nieva. Se prescribía que cada localidad estaba sujeta a mantener oficiales hermandinos mediante el producto de sisas, derramas y repartimientos entre los pecheros, costeando un balletero cada ciento cincuenta vecinos y un jinete cada cien en los reinos de Castilla y León; la contribución prevista para sufragar cada jinete se estimaba en la exorbitante cifra de dieciocho mil maravedís. Por lo que se refiere al reino de Toledo, circunscripción territorial por excelencia de las corporaciones

agícolas, se establecía una capitanía general, con sede en la propia Ciudad Imperial.

Como quiera que los monarcas no contaban con los recursos suficientes para continuar los preparativos bélicos con los que terminar con la tenaz resistencia Nazarí, en la junta de Dueñas tomaron dinero de lo recaudado para la Hermandad Nueva para costear la onerosa guerra de Granada; ello motivó el malestar de los destinatarios de esa suma, y en las Cortes de Toledo siguientes se presentó un memorial que cuestionaba la discrecionalidad de la Corona para disponer de dicho dinero sin preceder la correspondiente bula pontificia¹³¹.

Las ciudades, mayoritariamente a favor de los planteamientos generales sobre los que se sustentaba la nueva organización supralocal, se mostraron en cambio eventualmente remisas a adoptar determinadas premisas previstas en las Cortes de Madrigal; así, Sevilla, en junio de 1477, aún no había constituido hermandad. La extensión organizativa al señorío laico comportó notables problemas, que fueron allanados por la actitud colaboradora del condestable de Castilla uno de los principales señores de vasallos de Castilla la Vieja.

A fines de 1476, y principios del siguiente año, una real provisión fijaba la contribución para la nueva entidad al señorío eclesiástico de la Mitra Toledana, entre la cual se menciona Talavera de la Reina¹³². En 1477, Isabel I confirmaba la exención de moneda forera de los miembros del Santo Instituto talaverano¹³³; mientras que poco antes se conminaba a la Hermandad Nueva de Toledo que nombrase diputado para la junta general¹³⁴. Al mismo tiempo era confirmada la

Hermanidad de las Dos Sislas, conminándose al retorno a dicha entidad a las villas que se habían separado, se ordenaba a sus villas integrantes que sufragasen la organización regia mediante repartimiento¹³⁵.

Ante los recelos del Triple Instituto de verse relegado por la poderosa estructura levantada en el Reino, en primavera de 1481 se exhortó al corregimiento toledano para que se designase diputado general para asistir a la Junta Suprema, embrión del futuro Consejo de Hermandad¹³⁶. Al año siguiente fue convocada la junta hermandina de Illescas, con el objetivo de recabar fondos para contribuir a la guerra de Granada¹³⁷.

La modificación en la concepción hacendística castellana evoluciona en este periodo de tránsito al Estado Moderno y, hasta conseguirse los servicios de Cortes, sería una institución ajena al fisco real, la Santa Hermandad, la que asumiría funciones recaudatorias tradicionalmente asignadas a las Cortes del Reino¹³⁸. En efecto, en 1478, en las Cortes de Toledo fueron sustituidos los habituales "pedidos y monedas" por una fuerte cantidad teóricamente destinada a la Santa Hermandad, pretendiéndose declarar exentas de servicio las ciudades que levantasen Hermandad antes de San Juan de dicho año. Los datos proporcionados por LADERO y LUNENFELD, al respecto, ponen de manifiesto la importancia de estas contribuciones, en algunas ocasiones superiores a los propios servicios de Cortes¹³⁹.

En diciembre de 1485 y marzo de 1486, el Consejo Real recuerda al ayuntamiento ciudarrealeño que se había arbitrado una sisa sobre las carnicerías y pescaderías de la ciudad para sufragar los gastos derivados de las campañas contra los Nazaríes y la contribución a la

Hermandad Nueva¹⁴⁰. Poco después se regulaba, mediante real provisión, la imposición de sisa a los pecheros de la capital manchega con idéntica finalidad¹⁴¹.

Concluida la Reconquista, a principios de 1492, Alonso de Quintanilla realizó un cuidadoso informe sobre armamento, población y empadronamiento militar de Castilla. Por entonces, este cortesano, pieza clave del ordenamiento de la estructura hermandina del Reino, gestó un proyecto de financiación de dicha organización que, por considerarse demasiado gravoso, fue desestimado, siendo propuesto un impuesto general alternativo sobre el patrimonio.

El malestar de los contribuyentes hacia la Hermandad Nueva era creciente, y buena prueba de ello es el informe requerido por la administración polisinodial al corregidor de Córdoba, para acabar con los fraudes cometidos por su vecindario, pretendiendo excusarse a la contribución traspasándose bienes a clérigos y otras personas exentas¹⁴². Según CARRETERO ZAMORA, el fuerte incremento de los gastos de la Monarquía desde 1495 desbordaron los esquemas fiscales de la Hermandad, debiéndose recurrir al crédito. La nueva institución creada tras 1496 fue limitada a funciones estrictamente policiales de alcance local, pero legó una experiencia hacendística vigente hasta bien entrado el reinado de Carlos I¹⁴³.

Esbozadas, a grandes rasgos, la vicisitudes históricas de la magna empresa creada por los Reyes Católicos, debemos apuntar que desconocemos los términos exactos del presumible descontento que albergó el Triple Instituto hacia esta estructura supralocal, pero no creo aventurado suponer que las Hermandades Viejas vieron con alivio

el desmantelamiento del imponente entramado conformado durante su reinado. En todo caso, a partir de 1498, los recursos económicos y humanos asignados a la Hermandad General del Reino distaron mucho de hacerlas competitivas con las asociaciones apícolas, renovadas en el caso concreto de la entidad ciudarrealeña, y todas con gran arraigo en sus correspondientes áreas de implantación.

Desde las corporaciones confederadas no se olvidó de desprestigiar en todo momento a sus posibles competidoras, las hermandades concejiles. Así, un memorial de la entidad toledana de fines del Seiscientos es claro en su valoración:

"...ordenaron -los Reyes Católicos- que en todos sus reinos y señoríos a la semejanza desta Santa Hermandad se instituyese la Hermandad Nueva...y aviendose executado en todos los Reynos ciudades villas y lugares dellos como oy se experimenta nombrar ...alcaldes y ministros de la Hermandad, solo en los lugares de los propios y montes de Toledo ni se nombran ni los ay y en ellos -los- nombra el cabildo de la Santa Hermandad Vieja de Toledo... aunque Santo y como propio de los señores Reyes Catolicos el zelo en la fundacion de la Hermandad Nueva...la experiencia ha mostrado no ha correspondido en las obras y efectos lo que della se esperavan pues solo a servido de multiplicar en los lugares ministros de justicia sin fruto de sus obras pues ni se ve ni se oye que ellos aseguren caminos, sigan y persigan los malhechores ..."144

El punto débil de la organización creada por los Reyes Católicos fue su sistema de financiación directa por parte de los pecheros, aumentando la agobiente presión fiscal y despertando el lógico malestar entre los contribuyentes por lo que, pasado el momento más delicado de su reinado, la Corona accedió a las presiones populares para su remodelación. En cambio, las entidades creadas por los colmeneros manchegos se automantenían mediante la percepción de rentas inmobiliarias y las gavelas indirectas sobre el tránsito ganadero, viendo garantizada de esta forma su supervivencia durante siglos.

1.2.2. LA HERMANDAD DE CIUDAD REAL DURANTE EL SIGLO XVI.

Si el Siglo de Oro supuso para la Monarquía Católica una etapa de esplendor, sustentada por los recursos financieros propios y los empréstitos extranjeros, avalados por las riquezas del Nuevo Mundo, la repercusión local de la incuestionable pujanza político-militar castellana cristalizó en una recesión de la ciudad que albergaba al Santo Instituto manchego.

En efecto, Ciudad Real a lo largo de la centuria entró en un periodo de paulatina decadencia, ya apuntada a fines del Cuatrocientos, añadiéndose al menoscabo demográfico e institucional de la localidad, el movimiento migratorio a Indias¹⁴⁵ y, en mayor medida, hacia la Corte o los grandes puertos andaluces, sin olvidar a los grandes contingentes absorbidos por la beligerante política expansionista de los Austrias Mayores.

Económicamente, se asiste a un proceso que culminaría con la pauperización de los pecheros, en contraste con la reafirmación socioeconómica de la oligarquía urbana, volcada hacia unas explotaciones agropecuarias que facilitan su autarquía y en inversiones en juros o censos. Unos y otros sufrirían, aunque con desigual intensidad, el imparable deterioro ciudarrealeno, agravado por la desaparición del mercado franco y la inflación galopante de los precios durante la centuria.

En La Mancha, donde la tierra es relativamente pobre y proliferan los baldíos, débiles habían de ser los ingresos derivados de la

agricultura extensiva, por lo que las inversiones del patriciado urbano se dirigen a otros lugares del Reino, manteniéndose comparativamente estable el valor de la tierra. Se llevó a cabo un tímido proceso de compra de propiedades en el campo, más por voluntad de reafirmar su prestigio estamental que por las magras rentas agrícolas derivadas de su explotación.¹⁴⁶

La Hermandad General entró en un periodo de acelerado declive. Desvirtuado su instituto, desasistida por las instancias jurídico-administrativas, sin estímulos sus integrantes al supeditarse a las autoridades municipales, minada por los defectos derivados de su anquilosamiento procedimental; la inercia que presidía sus actos parecía presagiar su extinción como fuerzas de seguridad del despoblado, quedando a menudo convertidas en un reducto honorífico cuando no impregnadas de un cúmulo de connotaciones peyorativas que en nada contribuían a su credibilidad ante sus vecinos.

El desprestigio de la Santa Hermandad en la literatura de la época, particularmente reflejado en la obra de autores tales como MATEO ALEMÁN, CERVANTES, ESPINEL, VÉLEZ DE GUEVARA o SUÁREZ DE FIGUEROA, entre otros, actúan como caja de resonancia de las arbitrarias actuaciones achacadas a tales ministros. Esta organización se considera tan relajada de su antiguo ministerio, que el pícaro Guzmán exclama:

"Líbrete Dios del delito contra las tres Santas: Inquisición, Hermandad y Cruzada, y, si culpa no tienes, líbrete de la Santa Hermandad. Porque las otras santas, teniendo como tienen jueces rectos, de verdad, sciencia y conciencia son los ministros muy diferentes; y los santos cuadrilleros, en general, es toda gente nefanda y desalmada, y muchos por muy poco jurarán contra tí lo que no hiciste ni ellos vieron, mas el dinero que por testificar llevaron, si ya no fue jarro de vino el que les dieron, son, en

resolución, de casta de porquerones, corchetes, o vellequines, y por consiguiente ladrones..."¹⁴⁷.

1.2.2.a. CONFIRMACIÓN DE PRIVILEGIOS Y PETICIONES DE CORTES.

Con la muerte de la reina Isabel I, en 1504, se volvía a hacer necesaria la preceptiva confirmación del Triple Instituto por parte de sus legítimos sucesores. En agosto de 1505, Juana I dió licencia a alcaldes, alguaciles y cuadrilleros de la Hermandad Vieja para portar vara alta de justicia por todo el reino, cuando fuesen en persecución de malhechores, quedando de esta forma investidos de la autoridad requerida para desempeñar sin embarazo sus diligencias como justicias reales que eran¹⁴⁸. De esta forma, se pretendía reactivar unos tribunales que habían perdido su protagonismo en las décadas anteriores.

Probablemente, los tribunales apícolas tampoco se hubiesen sustraído de una cierta dejación de sus funciones. En 1510, es elevada una queja ante el Consejo Real por el procurador toledano en la que se da cuenta de que su ayuntamiento aportaba de sus propios y rentas unos doscientos mil maravedís anuales al cabildo de su Hermandad Vieja para costear una labor preventiva y judicial que por entonces había dejado de asumir, sintiéndose defraudada la ciudad. Ante la omisión de sus obligaciones, se solicita el envío de un juez pesquisidor para tomar residencia a los oficiales hermandinos que hubiesen ejercido su mandato desde hacía veinte años, aunque al final el Supremo Consejo la redujo a los empleados del Santo Instituto toledano durante los cuatro últimos mandatos¹⁴⁹.

En todo caso, la adopción del distintivo de justicia autorizado por doña Juana no fue automático, ni extensible a la Hermandad General¹⁵⁰.

Ello fue debido a una tenaz resistencia por parte de las autoridades de los territorios de órdenes, debiendo reiterarse dicho privilegio en 1524 a los ministros manchegos¹⁵¹. Serán confirmadas las cartas reales de seguro de 1417, 1423 y 1485, en la ciudad de Burgos, y en 1512, recordando a todas las justicias que colaborasen con el Triple Instituto, declarando conforme a derecho la percepción de la asadura mayor y menor¹⁵². Dos años después, la reina rubricará la real provisión reiterando su favor a los colmeneros ciudarrealeños¹⁵³.

Los Austrias se mostrarán, como todos sus predecesores, receptivos a las pretensiones de las entidades coaligadas, pese a estar igualmente dispuestos a ceder en algunas de las peticiones elevadas por los procuradores a Cortes, limitándose unas atribuciones que se consideraban lesivas para las autoridades locales y modificando algunos comportamientos ya superados por el desarrollo normativo y la praxis jurídica de la época.

Los procuradores ciudadanos hicieron llegar a los monarcas sendas quejas por el proceder arbitrario de los ministros de las Hermandades Vieja y Nueva en las reuniones llevadas celebradas en los años 1525, 1532, 1534, 1537, 1548, 1555 y 1585. Tales propuestas componen un cuadro completo, y ciertamente caótico, de los defectos atribuidos a los cuadrilleros, siendo acusados de enjuiciar por motivos livianos para quedarse con los bienes de los reos; suspender las diligencias sumariales, prolongando innecesariamente los pleitos; ser sobornados frecuentemente por aquellos contra quienes deberían dirigir sus diligencias, etc. Es decir, les aplicaban los mismos calificativos de cobardía, ignorancia y venalidad que les eran imputados por nuestros literatos del Siglo de Oro y de épocas posteriores¹⁵⁴.

Por lo que concierne a las Hermandades Viejas, particularmente importantes serán las resoluciones acordadas durante las Cortes de Segovia de 1532. La petición setenta y tres nos da cuenta de que el sistema en virtud del cual se quedaban los alcaldes con parte de las condenaciones pecuniarias favorecía el abuso de incrementarlas abusivamente para engrosar su peculio personal, empobreciendo a los vasallos y haciendo caso omiso a las leyes del Reino; la número setenta y cuatro es respondida con la negativa regia a extrapolar a los colmeneros lo dispuesto para con la Hermandad Nueva en 1525 y 1528, es decir, que en los casos de su competencia inferiores a seis mil maravedís se pudiese apelar ante el corregimiento más cercano, mientras que si se sobrepasaba dicha cantidad se recurrirían ante los tribunales superiores de justicia de Casa y Corte, Audiencias o Chancillerías; la petición setenta y cinco proponía sujetar a sus oficiales a la residencia efectuada por corregidores o alcaldes entrantes de su distrito, al constarse que "son muy mal gastados -las rentas- por los dichos alcaldes convirtiéndolos en su propio provecho y de sus deudos, y amigos por vías indirectas y cautelosas", siguiendo lo realizado para con los miembros de la corporación concejil, a lo que se dirimió que solo podría hacerse si se obtenía mandato especial, como se actuaba hasta la fecha respecto a las organizaciones apícolas; por último, la petición setenta y seis es aceptada, estableciéndose que antes de ser asaeteados los reos de hermandad se les diese garrote, pues castigo tan severo estaba reservado a los herejes¹⁵⁵.

El comienzo del reinado de la Casa de Habsburgo fue traumático para Castilla, teniendo la revuelta de las Comunidades un amplio eco en el ámbito actuacional del Triple Instituto. Carlos I, quien en 1518 reconocía los privilegios y franquezas del tribunal ciudarreal¹⁵⁶, halló una fuerte oposición en las ciudades manufactureras castellanas.

Toledo, Talavera de la Reina y Ciudad Real, apoyaron la causa comunera desde el primer momento, al albergar unos centros de tradición artesana en decadencia que poco tendrían que ganar en la ambiciosa empresa imperial del soberano.

Desconocemos la actitud institucional de las corporaciones hermanadas hacia el fenómeno que por entonces sacudía el reino, pero no puede descartarse una división interna entre sus miembros según sus lealtades personales; lo que sí constatamos es un apreciable descenso de la actividad judicial del tribunal manchego¹⁵⁷, así como un tenue descenso de sus rentas pese a que no dejaron de percibirse sus percepciones inmobiliarias y pecuarias, contabilizándose sendos déficits en 1520 y 1522¹⁵⁸.

El procurador de la Orden de Calatrava, Hernando Chacón, ganó en 1520 provisión real del Consejo de Castilla, exigiendo el cumplimiento de una disposición anterior, según la cual los cuadrilleros manchegos debían de rendir cuentas ante el mayordomo hermandino de cuantas condenaciones pecuniarias hubiesen cobrado desde hacía seis años a esa parte, pues "muchas personas que an sido condenadas se an quedado con los maravedis...e otros que las an cobrado no an dado cuenta ni razon de ella", siendo obligado desde entonces que dichas penas se ejecutasen ante notario para su aplicación consecuente, ya que la carta expedida poco antes en tal sentido se consideraba letra muerta¹⁵⁹.

Carlos I. en 1522, preceptúa que los alcaldes ciudarrealeños no permitiesen entrar en suerte de oficios a los hermanos ordenados de prima corona, recordando lo legislado por Juan II sobre el particular en las Cortes de Valladolid de 1419¹⁶⁰. El 8 de mayo de 1536 se

confirmaba la jurisdicción de los cuadrilleros en delitos de fuerzas contra mujeres y estupros; y en Valladolid, hacia 1542, se dictaminaba que los hermanos elegidos para oficiar en la entidad no podían renunciar a sus empleos, ni enajenarlos a ninguna persona, salvo a los miembros de su propia cuadrilla¹⁶¹.

En 1552, se ordenaba al licenciado Contreras, juez de residencia para supervisar la labor de los colmeneros manchegos -lo que no se verificaba desde hacía más de una década-, que no se excediese en su comisión, pues pretendía exigir responsabilidades a oficiales que aún no habían cumplido su mandato. Cuando dicha misiva llega a su destino, el corregidor ya había encarcelado al regidor Lope Carrillo, al escribano hermandino e incluso al mismo alcalde Cristóbal de la Torre, mandándose que fuesen puestos en libertad y que no se entrometiese en los pleitos criminales fulminados por el Santo Instituto¹⁶².

Felipe II sancionó las atribuciones jurídico-fiscales de la Hermandad de Ciudad Real en 1560 y 1561¹⁶³, determinándose en esta última provisión que el justicia mayor Diego López de Zúñiga respetase todas las prerrogativas de los federados, entregándole los reos de su jurisdicción. El 7 de junio de 1567 se declaran de su competencia los delitos de lesa magestad perpetrados en yermo y los cometidos en poblado con huida al campo; mientras que el 5 de noviembre de 1573 se reconoce su jurisdicción privativa para encartar a sus miembros en razón de sus oficios¹⁶⁴.

1.2.2.b. RELACIONES JURISDICCIONALES.

La Hermandad Vieja de Ciudad Real, cimentada institucionalmente en los siglos XIV y XV, entra en la Edad Moderna lastrada por la rémora que suponen la multitud de enfrentamientos, directos o soterrados, con las autoridades de las Órdenes Militares, los dirigentes del Honrado Concejo de la Mesta, la Mitra Toledana y la justicia de la propia sede de su instituto.

Con dichas instancias hubo de llegar, a lo largo de toda la Baja Edad Media, a trabajosas concordias particulares que regulasen su ámbito jurisdiccional, intentándose solventar unos conflictos que ralentizaban su actuación y comprometían sus rentas. Los litigios, substanciados ante el Consejo Real o las chancillerías, resultaban costosos y embarazosos de seguir; aunque los dictámenes solían ser favorables al Santo Tribunal, el recurso a este continuo pleitear menoscababa la autoridad de los litigantes y restaba operatividad a sus ministros, redundando en la frecuente inhibición de unos o el excesivo celo del que hacen gala otros.

Confirmadas sus mercedes por la Corona, respaldados sus fueros judicialmente en audiencias y chancillerías, instalada una retícula de seguridad de cierta importancia desde los Montes de Toledo hasta Sierra Morena, y continuando en posesión de la renta de la asadura sobre el tránsito ganadero trasvesío y merchaniego, el próximo paso sería su expansión actuacional a las comarcas circundantes, nominalmente factible no sólo a dichas áreas limítrofes, si no aún al resto de la Monarquía Hispánica.

Se ha conservado parcialmente una interesante procura otorgada por los alcaldes hermandinos de Ciudad Real, don Cristóbal de la Torre y don Juan Sánchez Carrillo en 1552, a su convecino y hermano letrado Antonio Treviño de Loaysa para girar visita a los puertos y caminos de Los Yébenes, así como a las ferias de Medina del Campo y de Villalón, actuando en defensa de comerciantes y caminantes, guardando sus vidas y bienes, y haciendo cuantas diligencias considerase adecuadas a su calidad y a los amplios poderes concedidos¹⁶⁵. Pese a este pretendido intento de presencia de un miembro de la corporación manchega en los centros neurálgicos del comercio lanero castellano no pasaría de ser testimonial, pues tal empresa excedía con creces, por el momento, la capacidad operativa del cabildo ciudarrealeno, que por entonces habría de conformarse con extender sus redes preventivas a La Mancha, al cercano campo extremeño y a la vertiente meridional de Sierra Morena.

Una primera aproximación a los pleitos substanciados durante el Quinientos por su el Santo Tribunal demuestra que la mayoría de las diligencias efectuadas por sus ministros se circunscriben a los límites de la antigua provincia de La Mancha, con esporádicas actos de aparición en los yermos toledanos de Los Yébenes, Consuegra, Madridejos, Villaminaya o Fuensalida; el término pacense de Fuenlabrada de los Montes; los despoblados jiennenses de Beas de Segura, Bailén o Baeza; y la villa conquense de Belmonte.

Por la importancia económica y jurisdiccional del antagonismo con las autoridades de los territorios de órdenes, las desavenencias con el corregimiento ciudarrealeno, y la disparidad de intereses respecto de la Mesta, nos centraremos en esbozar las líneas generales de tales

enfrentamientos, sin olvidarnos de dilucidar el estado en que se hallaban las Hermandades concejiles manchegas durante esta centuria.

A. Problemas en los territorios de Órdenes. La Hermandad Vieja de Almagro.

Secularmente fueron los maestros de la Orden de Calatrava, o bien las justicias de sus villas, quienes con mayor premura y vigor colisionaron con los colmeneros manchegos. Documentalmente, está contrastado este enfrentamiento jurisdiccional desde el siglo XIV, enmarcado por entonces en el pulso entre la Corona y los poderosos claveros, quedando el pequeño realengo de Villa Real al albur de cruentas luchas por el poder. En aquel periodo era estrecha la identificación entre las autoridades municipales de la ciudad y las dignidades hermandinas, luchando conjuntamente en la defensa de sus intereses mutuos.

Aparte de este punto de fricción, no era menos importante el que en el Campo de Calatrava se enclavaban las estaciones donde se exigía el derecho de asadura a los ganados trashumantes. De esta forma, a la doble fiscalización pecuaria impuesta por los poderes públicos como contrapartida a la reglamentación administrativa del tránsito pecuario y por los poderes locales que exigen montazgo, portazgo o castillería, viene a unirse este gravamen por el Santo Instituto, al menos desde el siglo XIV. Estos derechos se depreciarían, convirtiéndose a menudo en económicamente simbólicos para los ganaderos, aunque al cobrarse muchos de ellos en especie en vez de en metálico se preservarían, en parte, del imparable proceso inflacionista del Quinientos.

En términos generales, a estas alturas la Orden y Común de Calatrava ya no cuestionaba la legitimidad de la asadura, si no que

dejaban patente que al percibirse en los mismos puntos donde se pagaban derechos maestres, los recaudadores hermandinos eran considerados unos advenedizos que medraban a costa de sus vasallos, cuando no restaban rentas a las mesas maestres. A esta indisposición evidente, habría que sumar la certidumbre de que la concentración de las exacciones en los puertos reales de Socuéllamos, Villarta o la Perdiguera, propiciarían la entrada clandestina a las hierbas de Calatrava a través de veredas o cañadas poco transitadas y sobre las que era más difícil controlar la afluencia de rebaños, lo que a la postre pronto tuvo lugar. Por último, hay que tener en cuenta que la aparente cesión de una parcela de poder, como era la capacidad recaudatoria de la Hermandad, en las posesiones de órdenes iría en detrimento de su autoridad y prestigio ante sus vasallos.

Los conflictos no se hicieron esperar, y ya en 1334 el maestre de Calatrava embargaba la asadura hermandina a su perceptor, no consintiendo cobrarla en su demarcación¹⁶⁶; tras múltiples vicisitudes, se llegó al acuerdo tácito de permitir el cobro del citado gravamen sobre los ganados travesíos del Campo de Calatrava, no así de los merchaniegos. Durante el reinado de Enrique II, se litigó con el concejo de Almagro, al pretender éste que no estaban sujetos los hatos que concurrían a su feria al pago de la asadura¹⁶⁷.

Como quiera que en 1418 se reavivaron los choques dialécticos entre el claverero y los arrendadores de esta gabela, hubo de intervenir la Corona, mediando a favor del Santo Instituto¹⁶⁸. En 1424, un primer veredicto permitía el cobro de la asadura en los puertos donde se venía haciendo, pero excluyendo las reses merchaniegas¹⁶⁹. Se alcanzaba la concordia en 1428, quedando la controversia pendiente de arbitraje regio¹⁷⁰. Al finalizar la centuria volvió a recrudecerse la

tensión, siempre latente, entre el Santo Tribunal y Almagro; y en 1497 una sentencia reconoce el derecho de asadurar en el puerto de Torre de Juan Abad¹⁷¹.

A mediados del Cuatrocientos el gran maestre de Calatrava, don Pedro Girón (1445-1466), creó en las dos villas más importantes del maestrazgo manchego, Almodóvar del Campo y Almagro, dos tribunales semejantes al instituido en Villa Real. Autónomos de los concejos y con ordenanzas propias, se consagraban a la salvaguarda de orden público en los territorios de la Orden confinantes a sus respectivas sedes. Con la fundación de la Hermandad Nueva, dichas entidades tomaron el calificativo de "viejas" para diferenciarse de la nueva estructura supralocal del Reino y asimilarse al prestigio que por entonces gozaba la asociación apícola manchega. A fines de 1489, el Real Consejo comisionó al corregidor de Ciudad Real, don Diego Attuid, que hiciese pesquisa sobre este tribunal almagraño establecido "en perjuicio de la dicha Santa Hermandad de la dicha Ciudad Real, haziendo estatutos e ordenanzas contra ella a fin de la enflaquecer", pretendiendo infructuosamente los vecinos de Almagro estar exentos del pago de asadura¹⁷².

Con relativa frecuencia, durante el periodo bajomedieval, las relaciones de la Santa Hermandad con los maestros calatraveños estuvo salpicada de disputas que, si bien suelen solventarse judicialmente a favor de la corporación ciudarrealeña, dilataban innecesariamente los pleitos pendientes¹⁷³ y dificultaban, en gran medida, la puntual recaudación de sus rentas. En el Quinientos, la situación, lejos de cambiar substancialmente, refleja una tendencia continuista al no respetarse por ninguna de las partes las concordias, desvaneciéndose acuerdos trabajosamente logrados, y volviendo a plantearse los mismos

problemas que formalmente habían sido solventados. A la sazón, y coincidiendo con la ampliación territorial de sus actuaciones, la conflictividad se extendió desde el Campo de Calatrava¹⁷⁴ al maestrazgo de Santiago y al priorato de San Juan de Jesusalén, con las consecuencias negativas inherentes que caben suponer.

Reales provisiones y ejecutorias, a lo largo de la centuria, reiteran los exhortos a las autoridades de los territorios de órdenes para que consintiesen recaudar la asadura y respetasen, en sus distritos, la privativa jurisdicción hermandina sobre sus asuntos¹⁷⁵. Su casuística tiene algunos factores comunes: cuadrilleros u oficiales manchegos que penetran con vara alta de justicia en las villas para hacer pesquisa sobre el paradero de sospechosos o custodiar a los detenidos en las prisiones locales; los hermanos que son injuriados o agredidos físicamente, despojándoles de sus distintivos de justicia, llegándoles a encarcelar o vejear cuando intentan resistirse a tales agravios, etc. Asimismo, los ministros de Hermandad suele excederse en sus cometidos, pasando al interior de las poblaciones haciendo gala de su calidad o pretendiendo extender su jurisdicción al interior de los lugares, alegando que los caminos entraban en las villas. La reiteración de este abuso suscitó una agria polémica, y Juana I, en 1512, hubo de recordar la concordia de 1428 por la que se regulaba la jurisdicción de los colmeneros excluyéndola de los términos de Almagro, Bolaños y Valenzuela, es decir de la base territorial de la de la Hermandad Vieja de Almagro.

En la década de 1560 vuelve a litigarse ante la Chancillería de Granada cuestionándose el arbitrio pecuario hermandino sobre las reses que se dirigían a la feria de Almagro. El 21 de agosto de 1551 el procurador almagreño, Rodrigo de Mérida, se había quejado ante el juez

de residencia del Campo de Calatrava, aduciendo estar exenta su parte desde tiempo inmemorial de la citada gabela; seis días más tarde se personaba ante el citado juez el ciudarrealeno Martín Sánchez, arrendador de la asadura del Santo Instituto, acreditando los documentos legales que legitiman su derecho arrendado y reclamando el pago de mil ducados por los daños ocasionados¹⁷⁶; el 6 de abril de 1562 se emite veredicto en grado de vista a favor del arrendador, siendo recurrida por el procurador de Almagro, el licenciado Gonzalo Fernández. La sentencia definitiva, en grado de revista, supone el respaldo de las tesis hermandinas, resolviendo que dicha corporación estaba capacitada para asadurar "de los ganados merchaniegos que se truxieren a vender e vendieren en la dicha villa de Almagro y su termino."¹⁷⁷

No se agotan aquí los recursos elevados a la audiencia andaluza por similar motivo, ya que en 1570, 1589 y 1595 se querelló el Común de Calatrava por no considerarse sus integrantes sujetos a esta imposición de la Hermandad manchega¹⁷⁸.

B. Defensa de la asadura ante colectivos privilegiados.

Este espinoso asunto jalonaría siempre la contestada percepción de la asadura hermandina, siendo preciso hacer valer el citado privilegio frente a otros colectivos igualmente amparados por las mercedes regias. Se planteaba así un auténtico pulso de fuerza en el cual los distintos grupos de presión ejercerían un papel primordial en el desarrollo del litigio, quedando la resolución de las disputas sujeta a los intereses cambiantes de la Corona, y sujetos a unos desembolsos elevados, suscitándose, a veces, enfrentamientos irreconciliables entre los vasallos del Reino¹⁷⁹.

Ya a finales del siglo XIV, y mediada la siguiente centuria, el Hospital del Rey burgalés hubo de hacer valer la exención impositiva de sus ganados ante el cabildo hermandino talaverano¹⁸⁰; pero, probablemente, fue la Mesta la entidad que, por el propio carácter y amplitud de sus intereses, resultó ser el escollo más importante que hubo de salvar la Hermandad en su defensa a ultranza de la renta más saneada y el pilar económico vital para su continuidad institucional.

Fundado el Honrado Concejo de la Mesta por el privilegio de Gualda, en 1273, contemporánea probablemente de la etapa primigenia del Santo Instituto, sería articulada desde la Corona para estimular el desarrollo ganadero del Reino, regulándose los desplazamientos periódicos del ganado trashumante y concediendo a sus miembros multitud de franquizas. Durante el Cuatrocientos, y como única salida viable al caótico panorama fiscal pecuario castellano, la Mesta hubo de llegar a acuerdos contractuales con el Triple Instituto y con cada

una de las Hermandades coaligadas, para definir el canon fijo que excusase a los mesteños de los frecuentes abusos cometidos por sus exactores¹⁸¹. Los soberanos de la Castilla bajomedieval, desde el reinado de Fernando IV, confirmaron puntualmente la legitimidad del cobro de la asadura mayor y menor por parte de los delegados hermandinos, pero sin establecerse la tasa exigible, indicándose únicamente que se tomase anualmente una asadura de cada hato de ganado, resultando particularmente afectados los rebaños mesteños de esta indeterminación impositiva.

En 1501 la Mesta efectúa una reclamación ante la Hermandad de Ciudad Real contra la familia Treviño, linaje vinculado prácticamente desde el periodo fundacional con el Santo Instituto, querellándose por usurpar, supuestamente, sus ganados ciertos derechos de pastos¹⁸². Entre 1500 y 1505, la Real Audiencia establecida por entonces en la capital manchega, entendió en el pleito promovido por el Honrado Concejo, a instancias de algunos de sus hermanos, sobre la validez de la gabela hermandina a vecinos de Almagro, Huélamo y Villalba de la Sierra que alegaban la novedad de la exacción en los términos de Torre de Juan Abad y Socuéllamos, esgrimiendo el que las Cortes de Toledo la había suprimido, negando a la chancillería como instancia legitimizada para entender del caso, e invocando al Consejo Real en un esfuerzo por sustraer el pleito del alto tribunal donde la corporación hermandina tenía poderosos valedores¹⁸³. En 1503, se acordó que los rebaños que transitasen por el paso de Socuéllamos hacia el Campo de Montiel, perteneciente a la Orden de Santiago, quedasen exentos de la citada contribución, no así los que se dirigiesen al Campo de Calatrava¹⁸⁴. Mientras tanto, el procurador manchego presentaba las cartas regias que le permitían exigir la asadura, refrendándose su posesión por sentencia definitiva de la Real Chancillería de Granada¹⁸⁵.

Bien entrado el Quinientos, volvió a cuestionarse el controvertido derecho de asadura, en esta ocasión la exacción llevada a cabo en la estación de Villarta, así como el diferente trato fiscal de los ganados cabañil y merchaniego. El 30 de abril de 1543, Bernardino de Castro, alcalde entregador de Mesta y Cañadas, requirió al alcalde ordinario de Villarta para que convocase al Santo Tribunal para que su procurador alegase prueba documental que justificase la recaudación de la asadura en aquella parte de la cañada: ese mismo día comparece su arrendador, Juan Serrano, respondiendo ante los alcaldes entregador y ordinario, así como ante los delegados mesteños, de la acusación de cobro abusivo, al haber tomado un carnero del hato de cien ovejas propiedad de Juan Marín, con el pretexto de ser merchaniegas, llegando a percibir seis o más maravedís en concepto de albalá, aún cuando los mesteños dicen estar exentos de dichas cargas. El arrendador niega la autoridad del juez entregador para cuestionar un privilegio real consagrado por siglos de tradición, y en octubre de 1565 la Real Chancillería fallaba inapelablemente fijando un arancel sobre los ganados que hollasen el Campo de Calatrava, pero castigando los excesos consistentes en sustraer reses escogidas de los rebaños o cobros de albalás algunos¹⁸⁶.

Otro de los colectivos implicados en litigios por el derecho de asadura fueron los carreteros segovianos. Enclavado estratégicamente el término de la Hermandad ciudarrealeña entre la Corte y Andalucía, los centros del poder político y económico de la época, las vías de comunicación que pasaban por su distrito eran muy transitadas tanto por los carreteros segovianos como por los conquenses, quienes abastecían las Reales Minas de azogue de Almadén. Para garantizar la fluidez del imprescindible acarreo de mercancías, leña y materias

primas, los monarcas castellanos concedieron a los carreteros del Reino, que normalmente utilizaban bueyes como fuerza motriz, multitud de franquezas entre las cuales se contemplaba el libre pasto de sus animales por las cercanías de los caminos que transitasen , así como la dispensa de servicio y montazgo, junto a otros derechos de paso¹⁸⁷.

El 30 de marzo de 1531, comparecía ante los alcaldes manchegos un apoderado de Juan Gordo y Antón Montero, vecinos de Espinar del Rey, diciendo estar agraviadas sus partes por la actitud insolente del arrendador de la asadura Gonzalo Sánchez. Sus cobradores de la Fuente del Emperador, les habían tomado tres bueyes pertenecientes a la ganadería vacuna de reses carreteras en tránsito hacia los invernaderos de la Zarzuela, Darazután y Guadalerza. Debido a esta protesta formal, los carreteros hubieron de satisfacer penas pecuniarias y costas procesales, siendo desterrados de Ciudad Real. El 1 de abril, el recaudador, junto a los alcaldes hermandinos Alonso de Mora y Juan de Funes, presentan un alegato al procurador de los presuntos agraviados, según el cual aseguran percibir asadura

"...de todos los ganados mayores y menores de qualquier suerte o qualidad que sean vacunos o ovejunos o cabrios que hollaren Calatrava ahora sean ganados travesios o merchaniegos y cavañiles y que desto la Santa Hermandad tiene privilegios usados y guardados."

Asimismo, arguye la Hermandad que las mercedes de los carreteros no mencionaban expresamente el derecho de asadura, que consideran más antiguo que sus cartas reales; exponen que dichas exenciones atañían a los bueyes uncidos, no a las manadas de ganado vacuno; y, por último, que su exoneración de los derechos de tránsito no podían extenderse a la gabela hermandina. Desconocemos el veredicto de este importante litigio pero, debido la documentación judicial y extrajudicial

aportada por ambas partes, presumiblemente no sería fácil, quedando zanjado dicho conflicto definitivamente desde entonces¹⁸⁸.

Resulta paradójico que algunos de los colectivos que teóricamente debieran estar más interesadas en el fortalecimiento de esta retícula de seguridad en el despoblado, imprescindible en último extremo para el fomento de sus intereses, fuesen los primeros en amenazar una renta de era indispensable para el funcionamiento de la fraternidad vieja¹⁸⁹, pero por ello mismo habían sido designados como sujetos impositivos.

C. El corregimiento ciudarrealeno y el Santo Instituto.

La correcta interrelación institucional entre los sucesivos corregidores de Ciudad Real, nombrados a tal efecto por el Consejo de Castilla a lo largo del Quinientos, y la corporación colmenera, establecida desde siglos atrás en la localidad, era elemento decisivo para el mantenimiento de la necesaria correspondencia entre justicias que auspiciase la debida administración de justicia en la comarca, coordinándose jurisdicciones en principio complementarias.

Durante el periodo fundacional y de conformación de una y otra entidad hubo una total identificación personal y de intereses entre quienes ostentaban la autoridad concejil y hermandina, contribuyendo conjuntamente a la consolidación del alfoz de realengo. Pasado el tiempo, e introducidos delegados reales forasteros como representantes de la máxima jurisdicción civil y criminal de la ciudad, unos y otros querrían asumir sus parcelas de poder, pudiendo derivar sus ambiciones personales o derechos mal interpretados en conflictos de competencias.

En líneas generales, hubo una correcta interrelación entre el corregimiento y el Santo Tribunal, plegándose el primero a las atribuciones criminales en despoblado que secularmente poseían los colmeneros, y cediendo éstos en cuanto a la substanciación de los procesos civiles de sus miembros. Predominó el respeto mutuo, pese a que este equilibrio de fuerzas fuese roto eventualmente en circunstancias puntuales.

La primera referencia a rivalidades jurisdiccionales entre unos representantes del engranaje de la administración de justicia real data de 1414, cuando se ordena al concejo de Villa Real entregar los delincuentes capturados en el yermo a la Hermandad local, a pesar que la querella había sido interpuesta por la justicia ordinaria de la ciudad¹⁹⁰.

Con la implantación de las bases del Estado Moderno en la Castilla de los Reyes Católicos, se consagró la práctica del nombramiento de oficiales de la Corona en los municipios de realengo con el objeto de controlar a los órganos del gobierno municipal. Tales individuos fueron investidos de una amplia autoridad jurisdiccional que redundaba en la asunción de la segunda instancia civil y criminal, y la capacidad para residenciar a sus predecesores, así como a los oficiales hermandinos salientes, previa obtención de especial comisión. Por prescripción del Consejo Real, a fines del Cuatrocientos ya se había comisionado ocasionalmente a algún corregidor a tomar cuentas de las rentas del Santo Instituto, pero sería en los dos siglos posteriores cuando se fijaría e imprimiría mayor cadencia al recurso arbitrado para la fiscalización periódica de esta entidad.

Apenas tenemos noticia durante el siglo XVI de la presumible colaboración entre ambas instancias de justicia, aunque, anecdóticamente, puede señalarse que a principios de la centuria la Hermandad procedió contra Jerónimo y Alonso Sánchez Solís, criados del corregidor ciudarrealengo, acusados de robar a su señor¹⁹¹.

Colmeneros y concejo, siguieron compartiendo la misma aspiración de permanecer independientes de las autoridades del circundante señorío de Órdenes¹⁹², estando ambas audiencias locales aquejadas de similares

males en su administración de justicia¹⁹³ Hay que señalar que, si la Santa Hermandad cobró tributos pecuarios en el Campo de Calatrava, algunos munícipes gozaron de derecho de asadura sobre los carneros sacrificados cada sábado en las carnicerías de la ciudad¹⁹⁴.

Ambos cabildos ciudarrealeños llegaron a una concordia semejante a la alcanzada en Toledo en 1535, con el objetivo de delimitar con exactitud sus competencias¹⁹⁵, aunque en fecha más tardía. En mayo de 1569, el alcalde hermandino don Pedro Carrillo Dávila, prendió a un tal don Juan García de Albarado, pretendido hijo del adelantado don Martín López de Albarado y portador de cédulas falsas que le acreditaban como poseedor del hábito de Santiago, sin más finalidad que la de casarse con la hija de un rico hacendado de la ciudad; como quiera que el corregidor pretendiese entender en la causa, el conflicto de competencias se torna tumulto cuando públicamente los alguaciles afrentan al alcalde de la Hermandad Vieja, encarcelándole en la galera real y despojándole de su vara. Desde el Consejo de Castilla hubo de regularse que, siguiéndose el mismo trámite que el empleado en los continuos litigios en los territorios de órdenes, se devolviese su libertad al alcalde y se reintegrase al reo a los cuadrilleros que le habían prendido¹⁹⁶.

No fue fácil la aplicación de esta concordia, impuesta desde instancias superiores ajenas a las directamente implicadas. Meses después, el procurador hermandino Juan de Guzmán, comparecía de nuevo ante la Corte en nombre de los alcaldes Alonso Dávila Carrillo y Miguel de Villalobos, exponiendo que, habiéndose incoado sumaria por querrella de un sujeto herido por arma blanca en una pelea habida en la aldea de Poblete, en el que halla envuelto también su hermano, siendo detenidos y embargados Diego de Poblete y sus criados; uno de éstos se

lamenta ante el corregidor, el licenciado Luis Lara de Cepeda, de ser amenazado por los alcaldes hermandinos, lo que suscita la intervención del representante real, quien priva de libertad a los alcaldes al encerrarlos en prisión. Forzado por la gravedad de los acontecimientos, interviene el presidente del Supremo Consejo, ordenando excarcelar a los alcaldes, sin llevarles pena alguna, y remitir los autos y reos de la discordia al Santo Tribunal¹⁹⁷. El fallo es comunicado a fines de 1574 a los alcaldes hermandinos don Alonso Dábila Carrillo y don Francisco de Mena, al corregidor Jorge de Balca y al alcalde mayor licenciado Valernández, jurándose respetar por todos dicho acuerdo¹⁹⁸.

Pecor suerte corrieron los involucrados en un nuevo conflicto una década después. Estando ausente el corregidor Diego Argame y Vargas, haciendo algunas diligencias por cuenta del Consejo en Villarrubia de los Ojos, su alcalde mayor, el licenciado Osorio de Guevara, encarcela al alcalde de la fraternidad apícola don Fernando de Treviño durante unos días y solo lo pone en libertad previo pago de diez ducados de costas. El oficial hermandino apela a Granada a mediados de noviembre de 1584, y a principios de 1586 la Sala del Crimen granadina condena al corregidor a la sanción de sesenta ducados, emplazando a su alcalde mayor a que en el término de dos meses se presentase ante sus oidores. Presentado personalmente Osorio de Guevara en mayo del citado año ante la Real Chancillería, salió bajo fianza de sus cárceles tras pagar quince ducados y ser satisfecha la totalidad de la multa impuesta a su superior¹⁹⁹.

Enrarecidas las relaciones, la discordia no se zanjó aquí. El 23 de diciembre de 1585, el procurador de los colmeneros, Gonzalo Ruiz de Aguado, presentó querella ante el alto tribunal granadino contra los

aludidos corregidor y subordinado, su alguacil mayor Rodrigo Ostiz y su criado Diego de Ribera porque, estando sobrecartado que la justicia local y la de hermandad no se prendiesen por conflictos jurisdiccionales sino que ambos instruyesen autos por separado que luego enviarían ante el Supremo Consejo para su dilucidación, el lunes 16 de diciembre de 1585 había tenido lugar un grave incidente. Dicha quimera se desencadenó cuando, habiéndose solicitado por el alcalde Francisco de Salazar un paño negro al mercader Francisco de Zarza, para ornato del túmulo anual que levantaba la Santa Hermandad en la iglesia de San Pedro, detuvo al comerciante por no acceder de grado a dicha petición, acusándolo de desacato; esta prisión irregular, es contestada por el corregimiento con el arresto del alcalde infractor "con mucho escandalo y alboroto y malos tratamientos, le havian prendido, y habian llevado preso tratandole- muy mal, rompiendo las bestiduras, y la vara de justicia que llevaba", desatendiéndose la calidad hidalga y la suprema autoridad hermandina del agraviado, aplazándose indefinidamente misas y responsos²⁰⁰.

Ignoramos el desenlace de esta pendencia, sin duda poco aleccionadora, ya que al filo del Seiscientos los alcaldes manchegos hubieron de requerir al corregidor licenciado Diego Vallejo, para que se inhibiese en la causa seguida contra el mayordomo hermandino, al pretender cobrarle los débitos adeudados a la entidad apícola, aduciendo que la Santa Hermandad Vieja "tiene jurisdiccion cibil y criminal y mero mixto imperio para en todas las causas a ella tocante y a sus haciendas y rentas y a el beneficio de ellas", no debiendo proseguir las diligencias judiciales instruidas y remitiendo la causa a la Corte. El representante real admitió dicha solicitud parcialmente, al remitir por correo ordinario los autos fulminados a la Real Chancillería andaluza²⁰¹.

A partir de entonces, la tensión entre el corregimiento ciudarreleño y la Santa Hermandad parece atemperarse, no suscitándose choques jurisdiccionales tan virulentos como los antes mencionados por razón de competencias criminales. La efectividad de la concordia finisecular se respetó sin apenas fisuras de importancia en las décadas posteriores, siendo a partir de entonces los juicios de residencia los principales factores de desestabilización del difícil equilibrio institucional conseguido en la ciudad durante el siglo XVII. Por otra parte, nada habían de temer los hermanados de las justicias ordinarias o de la hermandad concejil, pues unas y otras estaban integradas mayoritariamente por sujetos pertenecientes, afectos, o temerosos del Santo Instituto.

D. La Hermandad General en La Mancha.

Desmantelados los órganos centrales de la Hermandad Nueva en 1498, los concejos habrían de elegir dos alcaldes, uno por cada estamento, y el personal auxiliar necesario para mantener unos mínimos de seguridad en el despoblado de su término concejil. Sufragados sus derechos con las rentas de propios, dichos ministros se vieron desprovistos paulatinamente de las atribuciones jurídico-penales de su instituto, hasta convertirse, en numerosas localidades, en reducto de la oligarquía local, vaciándose de contenido jurisdiccional este cargo municipal en beneficio de su carácter honorífico²⁰².

La descomposición del aparato coercitivo que representaba la estructura levantada en el reinado de los Reyes Católicos, al quedar reducido a ministerios locales descoordinados y controlados por los poderes concejiles, parecía inexorable desde el primer momento. Los agravios e injusticias perpetrados por alcaldes y alguaciles sobre los encartados pobres y los enfrentamientos capitulares con motivo de la provisión de oficios, determinó el establecimiento de la figura del diputado provincial y fiel ejecutor en el año de 1500²⁰³.

Pese a los intentos por solventar los excesos cometidos por los citados alcaldes, los desórdenes derivados de su elección; los antagonismos derivados de sus actuaciones y el irregular proceder de algunos de estos jueces legos, menudearán a lo largo del Quinientos. Los casos se suceden: en 1516, en Sevilla se dilucidaba el litigio planteado por el recibimiento de los alcaldes de la Hermandad General²⁰⁴; en 1525 Carlos I hubo de expedir cédula real para que los

alcaldes de Zamora no conocieran otros casos que los consignados en las leyes de Hermandad, encargado al corregidor celar en el cumplimiento del mandato²⁰⁵; en 1536, desde Valladolid, se comisiona a Francisco de Almaguer para cobrar las penas de cámara indebidamente retenidas por los alcaldes hermandinos desde 1533 hasta la fecha, en Andalucía, las provincias de Santiago y León, labor que se adivinaba complicada pues se manifiesta que "en lugares de señorío et ordenes se ponian en no querer cumplir las dichas mercedes"²⁰⁶; y en 1588 estaba planteada una encendida polémica por el establecimiento de un alcalde general, remitiéndose informes contradictorios por parte de corregidores y autoridades del Reino ante esta posibilidad²⁰⁷.

De singular importancia para esbozar una visión particularizada del estado de la atomizada Hermandad concejil en La Mancha, ante la imposibilidad de consultar todos los archivos locales, faltos de catalogación cuando no de documentación sobre la época, son las respuestas remitidas al Consejo de Castilla al interrogatorio enviado durante el reinado de Felipe, conocido bajo el nombre genérico de Relaciones Topográficas²⁰⁸. Entre 1575 y 1576, la mayoría de los pueblos y aldeas de la antigua provincia de La Mancha, salvo excepciones tan notables como Agudo, Almagro o Ciudad Real, enviaron a la Corte una preciosa información sobre diversos aspectos de la vida local, entre la cual hacían referencia a la administración pública de justicia²⁰⁹, que ahora expurgamos para completar nuestro trabajo.

A tenor de lo manifestado en ellas, la mayoría de las villas contaban con uno o dos alcaldes de Hermandad, nombrándose como sus subordinados a un alguacil o cuadrillero para perseguir malhechores en despoblado²¹⁰; pudiéndose dar el caso de que dispongan de un escribano²¹¹, o de un mayordomo propio²¹². Estos cargos anuales²¹³

cumplen por San Miguel, siendo respetado en todos los casos la mitad de oficios entre hidalgos y pecheros; ya que aún en el supuesto que sólo se proveyese una única alcaldía, en dicho oficio rotan alternativamente ambos estados, mientras que si son dos las plazas se designa a un miembro por cada estamento. El sistema de cubrir dichos cargos es heterogéneo: nombramiento directo por parte de los alcaldes ordinarios, a quienes se supeditan²¹⁴, participando en dicha designación incluso el alguacil mayor²¹⁵ o dos regidores²¹⁶; mediante insaculación pura²¹⁷; encantaramiento de doble número de candidatos, consensuados previamente entre justicias y regidores mediante votación²¹⁸; o nombrados otros por los gobernadores de su distrito²¹⁹. A veces, se consigna que debían ser confirmados por el alcalde mayor correspondiente²²⁰. Ocasionalmente se menciona la falta de emolumentos de dichos cargos²²¹, o la necesidad de ser acompañados de un letrado para dictar sentencias judiciales²²².

En los informes presentados, pueden rastrearse algunos indicios sobre la presencia de las Hermandades Viejas de Ciudad Real y Toledo en el área que nos ocupa. En Alcoba de los Montes, lugar del señorío urbano toledano, se dice contribuir con "el asadura de la Hermandad" de Toledo²²³; en Navas de Estena, perteneciente a los Montes de Toledo, hacia 1576 se dice que los vecinos son tan pobres que al estar sujetos a apelación a Granada, distante "setenta leguas...se quedan los pleitos indefensos y nunca se siguen", enumerando los colmenares de su término como su principal fuente de riqueza, aunque la mayoría están en manos de propietarios de la Ciudad Imperial, haciendo relación de un caso atroz substanciado por la Hermandad Vieja toledana²²⁴. En la localidad de Retuerta, sita en los Montes de Toledo, se consigna que dos cuadrilleros eran nombrados por dicha corporación toledana²²⁵.

La única ocasión en la que se cita expresamente la Hermandad Vieja de Ciudad Real es en la representación remitida por las autoridades de Villarrubia de los Ojos en 1575, villa enajenada en 1552 por el duque de Híjar, en la que se recoge la doble imposición pecuaria en su puerto por parte de los poderes locales y por la Santa Hermandad.

Un caso peculiar lo constituye la villa de Almodóvar del Campo, localidad del extremo meridional del Campo de Calatrava y cabeza de partido de una extensa comarca, que cuenta con una Hermandad Vieja, establecida en 1456 por el maestro calatravo frey Pedro Girón, siendo confirmada institucionalmente por los Reyes Católicos y por Carlos I, consagrándose desde su creación en la erradicación de la delincuencia en el yermo²²⁶. En el Quinientos se encuentra en plena vigencia, conformándose como una entidad autónoma del concejo, celebrando sus cabildos en la pequeña iglesia de San Benito y dirigiendo sus miembros sus propias actuaciones policiales y jurídicas. De esta época se conservan en el archivo municipal local algunos pleitos criminales, referencias difusas sobre sus rentas, noticias sobre sus preeminencias y parte de las elecciones celebradas entre los años 1590 y 1599. Durante toda la Edad Moderna y hasta principios del Ochocientos serán elegidos dos alcaldes y un alguacil mayor, contando con escribano propio. Ya en las Relaciones Topográficas se hace constar que dicha Hermandad "tiene antiguo privilegio para seguir malhechores por todo el Reino"²²⁷.

A semejanza de Almodóvar del Campo, la próxima villa de Puertollano hace constar entre sus justicias a dos alcaldes de la Hermandad Vieja, provistos mediante nombramiento de dobles candidatos y suertes, a semejanza de los ordinarios. Podría especularse sobre su adscripción a

la entidad de la cabeza de partido, pero, dada su condición de cargos concejiles, con toda seguridad se tratase de un error de intitulación, al asimilarse a los antes citados, donde no se elegían ministros de la Hermandad General por parte de su ayuntamiento.

A fines de la centuria, muchas villas del Campo de Calatrava estaban endeudadas. En 1566, Felipe II les había privado de la primera instancia civil y criminal en favor de los gobernadores de sus respectivos distritos²²⁸, lo que redundó en el descontento generalizado de los vecinos afectados. A principios de 1572, la villa de Abenójar pleitea con la de Almodóvar del Campo por la jurisdicción de ciertas dehesas y "sobre la hermandad jeneral", haciendo frente a unos gastos que, al no poder ser asumidos indefinidamente, hacen que sea solicitado por su procurador ante la Chancillería granadina el permiso para vender los alcornocales del término²²⁹.

Acuciado por la crisis financiera del fisco real, Felipe II les ofreció en 1589 la posibilidad de recuperar el privilegio enajenado, mediante el pago de una fuerte suma, según las posibilidades de cada lugar, estimada dos años antes por su comisionado, don Fernando del Pulgar²³⁰. La oligarquía local, deseosa de recuperar los resortes de poder que asegurasen su autonomía, respondieron con la aceptación de estas cartas de seguro real, pero recurrieron a empréstitos que empobrecieron aún más a los pecheros e hipotecaron las rentas municipales durante años²³¹, levantando no pocas críticas entre quienes debían asumir el peso económico de su rescate²³².

Por entonces, tal vez por haberse visto relajado momentáneamente el control de la justicia local por parte de los hacendados en ciertas villas de órdenes, comenzó a relanzarse en algunos lugares la figura

del caballero de la sierra, estimulando su instituto al concedérseles competencias policiales que excedían las meramente preventivas que habían dispuesto desde la Edad Media²³³. Estas iniciativas particulares pondrían en precario la jurisdicción de la Hermandad General, al desdoblarse en la práctica ministerios similares dependientes del concejo. Tales proyectos serían posteriores a las Relaciones Topográficas, en las que se omiten las referencias a los caballeros de la sierra, salvo excepciones²³⁴, constatándose su decadencia institucional respecto al resto de los ministros de justicia municipales e incluso de los guardas de campo particulares, quienes deben asumir la defensa de las propiedades rurales y los cultivos del agro circundante ante la pasividad de los referidos oficiales.

En Ciudad Real, donde se proveía anualmente dos alcaldías y el cargo de alguacil mayor de la Hermandad General, el mismo día en que se renuevan la totalidad de los oficios de su ayuntamiento, se respetó escrupulosamente el principio de mitad de oficios entre hidalgos y pecheros, acreditándose la elección de caballeros de la sierra desde fines del Cuatrocientos, al menos, hasta bien entrada la Edad Moderna²³⁵. La operatividad de unos y otros sería arrogada en la práctica por la Hermandad Vieja, erigida como auténtica fuerza garante del mantenimiento de la paz en el despoblado en toda su comarca²³⁶.

NOTAS AL CAPÍTULO 1.

¹ "Las Cartas de Hermandad en España", en *AHDE.*, nº 15 (1944), pp. 387-463.

² L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, "Evolución histórica de las Hermandades castellanas", en *CHE.*, nº 16 (1951), pp. 5-78.

³ Una concisa puesta a punto historiográfica sobre esta cuestión en E. MARTÍNEZ RUIZ, "El mantenimiento de la seguridad pública antes de la creación de la Guardia Civil", en *I Seminario La Guardia Civil: Pasado, Presente y Futuro*, Aranjuez, 24/25 de abril de 1989, pp. 27-30.

⁴ A. OPISSO, *La Guardia Civil y su tiempo*, 2 vv., Barcelona, 1916; A. QUEVEDO Y DONIS y J. SIDRO SURGA, *La Guardia Civil. Historia de esta institución y de todas las que se han conocido en España con destino a la persecución de malhechores, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*, Madrid, 1858; L. MONTALVO Y JARDÍN, *Las Hermandades de Castilla. Juicio de esta institución. Apoyo que prestaban a la unidad monárquica*, Madrid, 1862, p. 11.

⁵ El primero de dichos autores hace remontar los orígenes de esta entidad a la "gilda" germánica, especulando con la posible conexión con las cofradías religiosas implantadas por la Orden de Cluny, en pleno desarrollo hacia la segunda mitad del siglo XI, aunque no sería hasta principios del siglo XIII cuando surgiesen este tipo de fraternidades en Castilla La Vieja. Op. cit., pp. 9-13. Asimismo vid.

J. PUYOL Y ALONSO, *Las Hermandades de Castilla y León. Estudio histórico seguido de las Ordenanzas de Castro Nuño, hasta ahora inéditas*, Madrid, 1913, p. 11.

⁶ M.C. PESCADOR DEL HOYO apunta como paradigma de esta tergiversación el poema de Lope de VEGA "Las bandoleras y Fundación de la Santa Hermandad de Toledo", romance repleto de inexactitudes , en M. MENÉNDEZ PELAYO (ed. y est. prel.) *Crónicas y leyendas dramáticas de España*, BAE., t. 211, Madrid, 1967, pp. 194-210; Cf. op. cit., pp. 175-176.

⁷ Para una visión más amplia y pormenorizada de de los anacronismos contenidos en las Ordenanzas ciudadrrealeñas de 1792, vid. M.C. PESCADOR DEL HOYO, "Los orígenes de la Santa Hermandad", en *Actas VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda, 1275-1975*, Ciudad Real, abril 1975, Madrid 1976, pp. 171-178.

⁸ Remitimos al lector a los estudios sobre los golfines llevados a cabo por C. MELA MARTÍN, *Los Golfines. Malhechores en la frontera castellana (siglos XIII-XV)*, memoria inédita de licenciatura UCM., 1984; S. MORETA VELAYOS, *Malhechores-Feudales*, Madrid, 1978, pp. 26-34; J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real (siglos XIII-XV)*, Toledo, 1937, pp. 32-41; R. SALILLAS PANZANO, *Golfines y Golfos*, Madrid, 1905; C. PELLEJERO SOTERAS, *Delincuencia en Castilla (desde Fernando III hasta Juan II)*, Zaragoza, 1916.

⁹ Vid. J. GONZÁLEZ, "La repoblación de La Mancha" en *Actas del VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda, 1275-1975*, op. cit.,

pp. 2 y ss.; y AA.VV, "La repoblación de la Mancha", Ib., pp. 107 y ss.

¹⁰ Una visión , un tanto apocalíptica, de la Castilla del siglo XIII se halla en la crónica de L. MARINEO SÍCULO:

"...había mucha multitud de malos hombres...-que- salteaban robaban y mataban a mercaderes, caminantes y hombres que iban a las ferias; que otros, que tenían mayores fuerzas y mayor locura, ocupaban posesiones y lugares y fortalezas de la Corona Real, y saliendo de allí con violencia robaban no solamente los ganados, más todos los bienes que podían haber; que asimismo captivaban a muchas personas, las que sus parientes rescataban..."

Cit. J. PEREIRA GARCÍA, "La Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina", en *Revista de Estudios de la Vida Local*, nº 81 (mayo-junio de 1955), p. 412.

¹¹ Las Ordenanzas manchegas, aprobadas por Juan II en Segovia, el 19-IX-1435, son explícitas al señalar que

"...la dicha Hermandad fue primeramente establecida por los colmeneros e vallesteros que tenían posadas de colmenas en los montes e xaras, e fuyentaban e matavan los golfines e malfechores, e ponían la tierra en paz e sosiego."

Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., apéndice documental nº 6, p. 326.

¹² A. RUMÉU DE ARMAS, *Historia de la previsión social en España. Cofradías, Gremios, Hermandades, Montepíos*, Madrid, 1944, p. 58.

¹³ AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 3; dicha fuente fue dada por buena por J. PEREIRA GARCIA, op. cit., pp. 412-413.

¹⁴ 3-III-1220. Pub. A. PAZ Y MELIA, "La Santa Hermandad Vieja y la Nueva Hermandad General del Reino", en *RAMB.*, año 1, nº 3 (marzo de 1897). La confusión, interesada o no, no era nueva, al referirse a

este privilegio un memorial del cabildo hermandino toledano fechado el 2-I-1682 (AHN. Div. Her., leg. 66, nº 2, s.f.), y en pleno siglo XVIII se refieren a él como "concedido por el Sr. Rey Don Fernando a los colmeneros de Toledo, que oi es la Hermandad que dizen Vieja", en *Privilegios Reales, 1220-1252*, BN., mss. 13.094, ff. 7r-vº.

¹⁵ C. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, *Las instituciones de seguridad pública en España y sus dominios de Ultramar*, Madrid, 1858; F. CAMPOS CARRANZA, *De las Hermandades al Somatén*, Madrid, 1957.

¹⁶ Se corresponde al año 1221. Dicha fecha ha sido matizada por PESCADOR DEL HOYO, quién la hace retroceder al año 1234 de la Era, e igualmente J. GONZÁLEZ la sitúa hacia el 1246 de la Era, para hacerla coincidir con el encuentro del monarca con doña Berenguela. Por último, PAZ Y MELIÁ considera más verosímil el año 1248 de la Era para datarla.

¹⁷ Preámbulo manuscrito de las Ordenanzas de la Hermandad machega de 1792 (AHN. Div. Herm., leg. 3, nº 18, f. 5r).

¹⁸ 19-IX-1435, Segovia(AGS. CC. Pueblos. leg. 6, nº 80, s.f.).

¹⁹ El Sumo Pontífice se refiere a esta entidad con las palabras "Haec vestra sancta fraternitatis". Esta cuestión, junto a otras del mismo tenor aquí aludidas en J.M. SÁNCHEZ BENITO. op. cit., pp. 55-56.

²⁰ Datada por M.C. PESCADOR DEL HOYO en 1295.

²¹ Ib., p. 173; sobre este asunto consultar J. CANO VALERO "La "policía rural" castellana en el siglo XVI: los Caballeros de la

Sierra de las Peñas de S. Pedro (Albacete)", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Ciudad Real, 16 al 20 de diciembre de 1985, t. 7, Talavera, 1988, p. 165 y ss.

²² cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 54 y A. ÁLVAREZ DE MORALES, *Las hermandades, expresión del movimiento comunitario en España*, Valladolid, 1974, p. 75.

²³ vid. L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, "El apellido. Notas para el procedimiento "in fraganti" en el Derecho español medieval", en *CHE.*, nº 7 (1947), pp. 67 y ss.

²⁴ Se conserva un voluminoso libro capitular y de confirmación de privilegios de esta liga de villas, también denominada Hermandad de las Dos Sislas mayor y menor, que abarca cronológicamente desde 1475 a 1720. Un estudio de esta valiosa documentación seguramente aportaría datos novedosos sobre su fundación y funcionamiento institucional (AMT. Archivo Secreto, Caja. 2, leg. 12, nº 1).

²⁵ El actual emplazamiento de la Alisea de Estena corresponde al término municipal de Navas de Estena, enclavado en el extremo noroeste de la provincia de Ciudad Real.

²⁶ El ayuntamiento de la Ciudad Imperial respaldó a la Hermandad toledana el 15-X-1300; BN. mss. 13.030, ff. 115r-117r; Pub. L SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 55-57. El concejo talaverano hizo lo propio con su Hermandad Vieja el 27-VI-1300 (A.M. Talavera de la Reina, leg. 23, nº 7), cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 61.

²⁷ cf. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., p. 31.

²⁸ Remitimos, entre otros títulos, a la siguiente bibliografía sobre las Hermandades medievales en los reinos hispánicos: A. ÁLVAREZ DE MORALES, "La evolución de las Hermandades en el siglo XV", en *La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, t. 1, Madrid, 1985, pp. 93-103; del mismo autor, "La Hermandad de Vitoria, Alava, Val de Lana y otras", en *Congreso de Estudios Históricos: Vitoria en la Edad Media*, Vitoria, 1982, pp. 341 y ss., y "La Hermandad navarro-aragonesa de 1469 y su influencia en el ordenamiento penal y procesal", en *Hispania*, nº 37 (1977), pp. 369-378; C. ARGENTE DEL CASTILLO, "Las hermandades medievales en el reino de de Jaen", en *Actas I Congreso de Historia de Andalucía*, t. 2, Córdoba, 1978, pp. 21 y ss.; E. BENITO RUANO, *Hermandades de Asturias durante la Edad Media*, Oviedo, 1971; P. BALLESTEROS SAN JOSÉ, "Hermandades de Zorita, Almoquera y sus tierras", en *La Ciudad Hispánica entre los siglos XIII al XVI*, t. 2, op. cit., pp. 973-990; I. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, "Carta de Hermandad entre los concejos de la Extremadura castellana y del arzobispado de Toledo", en *Revista Portuguesa da Historia*, nº 12 (1969), pp. 58-75; M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, "la Hermandad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII-XVI)", en *Actas I Congreso de Historia de Andalucía*, op. cit., t. 2, pp. 3 y ss.; C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, *Contribución al estudio de las hermandades en el reinado de Fernando IV de Castilla*, Vitoria, 1971; E. HINOJOSA Y NAVEROS, *Documentos sobre la historia de las instituciones de León y Castilla (siglos X-XIII)*, Madrid, 1919; C. JUAN LOVERA, "Hermandad entre Alcalá la Real y Priego (1345)", en *Boletín de Estudios Jiennenses*, nº 87 (enero-marzo de 1976), pp. 71-75; B. OLIVER Y ESTELLER, "Las Hermandades de Castilla en tiempo de Fernando IV", en *BRAH*, nº 14 (1889), pp. 382-387; A.E. RECIO, "Las Hermandades de Alava y la lucha antiseñorial a fines de la Edad Media", en *Congreso de Estudios Históricos. Vitoria en la Edad*

Media, op. cit., pp. 519 y ss.; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ, "Carta de Hermandad entre Palencia y Escalona", en *AHDE*, nº 3 (1926), pp. 502-507; M.J. SANZ FUENTES, "Cartas de Hermandad concejil en Andalucía: el caso de Écija", en *Historia, Instituciones, Documentos*, nº 5 (1978), pp. 403 y ss.

²⁹ A. TORREJÓN, *Libro de las Antigüedades de Talavera*, 1596, BN. ms. 1.498, f. 75 r.

³⁰ Paradójicamente, con mayor exactitud conocemos el protocolo seguido en las juntas de la Hermandad de San Martín de la Montaña, también presididas, desde su ingreso a mediados del Quinientos, por los representantes de Toledo. En 1694 se mantuvo el siguiente esquema por los representantes del común en su tradicional llega de San Miguel:

Dos diputados de Toledo	
Alcalde de Ajofrín	Alcalde de Mazarambroz
Orgaz	Villaminaya
Mora	Almonacid
Villaseca de la Sagra	Manzanegue
Sonseca	Pulgar
Mascaraque	Arisgotas
Layos	Casalgordo
mesa del oficio de escribano	

³¹ Existe una perceptible voluntad de los cabildos por mantener su coesión corporativa, tratando de estimular su participación en todos los actos de sus respectivos tribunales y conservar las buenas relaciones entre los asociados. Así los toledanos vetarán el 2-II-1307 el acceso a sus reuniones de apoderados de los hermanos; el 1-II-1320 se sanciona pecuniariamente al colmenero que tuviese amante en el monte, oscilando su importe a tenor de su estado civil; un mes después se ordena "que no se juegue en los montes dados nin saldeta, nin escaques, nin la rifa pena de 20 maravedís...por cada ves". Como las reuniones hermandinas suscitaban debates e incluso bromas pesadas

entre los participantes, se adoptaron las medidas prudentes para evitar que "ninguno juegue con cañas, sin echar a otro en el agua, nin luchar, nin juego vedado desde que salieren a la junta hasta que vinieran so pena de 20 maravedís" (BN. mss. 13.030, ff. 120vº, 121 r y 122 r, respectivamente).

³² Copia manuscrita del s. XVIII sobre documentos de la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial (BN. mss. 13.030, f. 122 vº).

³³ El abasto previsto para la llega de 1464 incluía carne, tocino, pan cocido, vino y cebada, garantizándose el herraje de cabalgaduras (AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 3, s.f.).

³⁴ Este ceremonial decayó a lo largo del Cuatrocientos, como lo demuestra el que la junta de 1505 acordará su reimplantación; vid. A. PAZ Y MELIA, op. cit., pp. 102-103.

³⁵ Existe la copia dieciochesca de un supuesto documento medieval en el que podría comprobarse la extracción popular de esta Hermandad Vieja primigenia. Su transcripción sería la siguiente:

"Caveça de las personas que destribuyen para la destruicion y persecucion de los golfines. Alonso Garcia Patas. Alonso de las Obejas, Juan Lato. Diego Pariente. Pedro de Garrabilla. Helipe Abad. Alonso Riqueño. Pedro Cesto. Juan Martin, Urraca. Juan Sanchez de la LLave. Francisco Zesto. Mª la Santa. Juan de Amores. Martin Travado. Alonso Copete. Francisco Rodeznillo. Juan Calhorro. Ana Nevada. Diego Mochillo. Alonso Panduro. Mª Palma. Juan Martin Nevado. Pedro Herrandez Malsepica. Juan Garcia Madexa. Alonso Lechuga. Antron Ternero. Teresa de Bastos. Pedro Diaz Carca. Juan Barrocal. Alonso de los titeres. Anton Gayferos, Juan de Boceguillas. Pedro Cacho. Juan de Nochebuena. Andres Sayler. Juan de Corporales. Francisca Emellico. Gracia de Lipendulas. Mª Cleriga. Pedro Luengo Medianero. Martin de las Niñas. Alonso Coçiençia. Juan de los Mulos. Pedro Buchon. Juan Turiago. Mª de Quinçes. Juan del Moço. Alonso Ronçero. Pedro Rodriguez Broquelete. Mª de los Adenanes. Alexo Pajorro. Mª de Ebra. Gonçalo Lechon. Juan de Dieço. Pedro de Titos. Alonso

Barriga. Ynes Conde. Lucas de Altabuz. Alonso Tormenta. Andres Fronton. Juan Letra Redonda. Miguel de Asteso. Anton de Ravadilla. Pedro Sanchez de Maripasquala. Balentin Chicharro. Ana Canales. Pedro dispuesto. Olalla Carnicera. Pedro Endrino. Alonso Raposo. Juan Capado. Juan Gato. Miguel de las Animas. Anton Borreguero. Jil Gorgojo. Juan Regañon. Diego de Atajon, Pedro Martin Nicodemus. Miguel Ojos de Gato. Juan Chichuerre. Bartolome Verenjeno. Pedro Gafo. Mª Mateos. Marta la Reçia. Anton Puches. Juan de Honrrubia. Pedro Salton. Pedro Hondo. Catalina Picaça. Mª la Torrontera. Jil Porro. Juan de los Hipos"

S.d.(AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 3, s.f.); J.M. SÁNCHEZ BENITO lo sitúa cronológicamente en el siglo XII aunque cuestiona su autenticidad; op. cit., p. 53.

³⁶ El cabildo de la Hermandad Vieja de Toledo durante esta centuria celebrará sus reuniones itinerantes el 25-VII-1307 en la iglesia de San Bartolomé; la cuaresma del año siguiente se juntaron en la parroquia de San Isidro, en los arrabales de la ciudad; el 2-IV-1320 en la de Santiago; en cuaresma de 1346, en la "casa de la clerecía" de Toledo; en 1353, en la capilla catedralicia del Corpus; el 18-II-1455 en las antiguas casas de Per Esteban, el mozo; el 19-II-1360 en la puerta del templo de San Bartolomé...(BN. mss. 13.030, ff. 118r-123r).

³⁷ Imprescindible sobre el particular y muchos de los temas aquí tratados ha sido la labor investigadora llevada a cabo por ya aludido J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., pp. 69-81.

³⁸ Cit. L. DÍAZ JURADO (?) *Singular idea del sabio rey don Alosno dibujada en la fundación de Ciudad Real*, AHPCR.ms. 3.601 (?), ff. 92vº- 93r, de cuyo manuscrito ilocalizado tomó sus datos L. DELGADO MERCHAN, *Historia documentada de Ciudad Real (la Judería, la Inquisición y la Santa Hermandad)*, 2ª ed., Ciudad Real, 1907., p. 312.

³⁹ Traslado de 5-IX-1457, Ciudad Real (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 80); Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., apéndice documental nº 6, pp. 325-340, cuya transcripción hemos manejado.

⁴⁰ La losa era una trampa formada por lajas de piedra colocadas de forma que atrapaban pequeños animales, como conejos o liebres. Los dueños de estos dispositivos cinegéticos solían guarecerse en chozas o en abrigos naturales de sus inmediaciones a la espera de cobrar la presa.

⁴¹ Un ejemplar de estos estatutos en AHN. Códices 817B.

⁴² A este respecto, J. VALDEÓN BARUQUE opina que

"Los constantes manejos de los tutores, deseosos de arrastrar a las ciudades a sus parcialidades, y la misma falta de homogeneidad social de los concejos (integrados por caballeros, hidalgos y hombres buenos pecheros), cuentan entre las principales causas que explican el relativo fracaso de las Hermandades"

Cit. *Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV*, Madrid, 1976, p. 71.

⁴³ Preámbulo manuscrito de las ordenanzas de la Hermandad Vieja de Ciudad Real de 1792 (AHN. Div.Her., leg. 3, nº 18).

⁴⁴ Pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., apéndice nº 9, pp. 62-63.

⁴⁵ Etimológicamente define las entrañas de un animal, y por extensión a toda la res; XIMÉNEZ DE SANDOVAL hace retroceder la concesión de este privilegio a la Hermandad Vieja a 1265, sosteniendo que dicho término derivaría de la palabra pasadura, por imponerse sobre el tránsito de los ganados. Referencias a dicho gravamen pecuario se

hallan en las siguientes obras: P. GARCIA MARTÍN "La ganadería mesteña en el área castellano-manchega durante la Edad Moderna", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 7, pp. 115-153; de este autor y J.M. SÁNCHEZ BENITO, "Arbitrios locales sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV", en *Contribución a la Historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1986, pp. 285-299; J. KLEIN, *La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836*, (1ª ed. Cambridge, 1920), 2ª ed., Madrid, 1985, pp. 143-303 y 441; C. J. BISHKO "El castellano, hombre de llanura, La explotación ganadera en el área fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media", en *Homenaje a Vicens Vives*, t. 1, Barcelona, 1965, pp. 201-218.

⁴⁶ AHN. Div. Her. leg. 1, nº 1, s. f.

⁴⁷ 10-X-1315, Burgos (BN. mss. 13.030 ff. 2r-6r y 13.100, ff. 16r-21r); pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 60-64.

⁴⁸ 30-III-1327 (AHN. Códices 818B, ff. 24vº-26vº); pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., apéndice documental nº 2, pp. 317-318.

⁴⁹ 11-X-1338, Alcalá de Henares (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 2 copia B)

⁵⁰ 18-X-1351 (BN. mss. 13.100, ff. 15r-21r y AHN. Códices 818B, ff. 41r-49r); pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 65-68. Y 25-IX-1351 (AHN. Div. Her. leg. 1, nº 5, s.f.).

⁵¹ 12-IX-1371; cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 99

⁵² 8-XI-1374, Orgaz; y 5-XI-1375, Sevilla.

⁵³ 14-III-1376, Sevilla.

⁵⁴ 5-IV-1390 (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 9).

⁵⁵ 3-VIII-1398, Olmedo (Ib. leg. 1, nº 12). Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., apéndice documental nº 5, pp. 322-325.

⁵⁶ Según DÍAZ JURADO, el 12-I-1414 se refrendaron las franquías del Santo Instituto y el 2-IX-1417 se confirmó su derecho al arbitrio pecuario. Cf. Ib., p. 100.

⁵⁷ 26-II-1417, Valladolid; pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., apéndice 13, pp. 70-72. Considerado por los propios colmeneros y en épocas posteriores como "el instrumento mas importante de todas las tres Hermandades" (BN. mss. 13.030. f. 104r).

⁵⁸ AHN. Div. Her. leg. 1, nº 14.

⁵⁹ Misivas de 3-XII-1454 y 27-I-1455, datadas ambas en Toledo; Cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 101.

⁶⁰ 17-VI-1173; Ib., p. 47.

⁶¹ Carta Puebla de 20-II-1255; AHMCR, nº 1; Pub. L. DELGADO DELCHAN, op. cit, pp. 355-357. En dicha carta fundacional otorgó a sus habitantes el fuero de Cuenca, y a sus caballeros los privilegios que gozaban sus homónimos toledanos.

⁶² Vid. J. VALDEÓN BARUQUE, op. cit., p. 63.

⁶³ 12-IX-1351, Cortes de Valladolid (BN. mss. 13.030, ff. 116r-117r);
pub. L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, op. cit., pp. 64-65.

⁶⁴ 10-III-1366, Burgos (BN. mss. 13.030, ff. 129r-vº).

⁶⁵ A. y A. GARCIA CARRAFFA recogen el dato de que

"Los miembros de esta casa -de Treviño-, que con más antigüedad figuran en documentos fehacientes, son los hermanos Juan y Lope Fernández Treviño. El primero fue contador mayor del Rey Don Juan II de Castilla, y el segundo su secretario de Cámara. Ambos ya residían en Ciudad Real por el año 1400 y otorgaron escritura en la ciudad de Arévalo (Ávila), el 30 de marzo de 1438, donde entonces se encontraba don Juan II, sobre unas tierras que habían comprado en el término de Ciudad Real."

Cf. *Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos Españoles y Americanos*, Madrid, 1952, t. 85, p. 201.

⁶⁶ 2-VIII-1443; Cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 101.

⁶⁷ C. PELLEJERO SOTERAS, *Delincuencia en Castilla (desde Fernando III, el Santo, hasta D. Juan II)*, Zaragoza, 1915, p. 13,

⁶⁸ Para tener una idea aproximada del aspecto y armamento de estos ballesteros cf. C. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, op. cit., p. 97 y F. DANVILA COLLADOS, *Trajes y armas de los españoles desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XIX*, Madrid, 1877.

⁶⁹ J. DÍAZ JURADO, op. cit., manuscrito detalladamente descrito por L. R. VILLEGAS DÍAZ, *Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus hombres. 1255-1500*, Ciudad Real, 1981, pp. 32-34.

⁷⁰ L.R. VILLEGAS DÍAZ, "La Hermandad de Ciudad Real, instrumento de colonización del territorio", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 6, pp. 87-93.

⁷¹ A. de TORREJÓN, op. cit., f. 74vº.

⁷² A este respecto, ÁLVAREZ DE MORALES puntualiza que:

"El siglo XIV, es además, precisamente, un siglo violento, en ciertos grupos sociales existe un gran desprecio a la vida, no es de extrañar por eso que las gentes, y sobre todo las gentes de las ciudades, pretendieran contrarrestar esta situación con otras medidas que las peticiones de Cortes, que, aunque atendidas normalmente por los reyes, quedaban sobre el papel, así acuden al remedio de crear hermandades, institución que iba en línea contraria a lo que nos indica aquellas peticiones de Cortes, que buscan la creación de un derecho procesal como garantía de justicia, las hermandades, en cambio, suprimen todo el derecho procesal..."

Op. cit., p. 98.

⁷³ Traslado del acta capitular de la Hermandad toledana, 18-II-1320 (BN. mss. 13.030, f. 120vº).

⁷⁴ El término cuadrillero suscitó una estéril controversia historiográfica. PAZ Y MELIÁ sostenía que dicho vocablo procedería de la forma cuadrada de la punta de la saeta, denominada cuadrillo; según ACOSTA, su nombre derivaría de los grupos integrados los sujetos armados con lanzas, ballestas y espadas; mientras que XIMÉNEZ DE SANDOVAL se suma a quienes sostienen que se debía al número de los componentes de su unidad operativa por excelencia, compuesta de cuatro hombres armados y un jefe.

⁷⁵ 29-XII-1405, Almagro (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 44, copia del siglo XVIII).

⁷⁶ Concordias de 2-X-1424, Alcolea y 23-VIII-1428 Almodovar del Campo; cf. L. R. VILLEGAS DÍAZ, "La Hermandad de Ciudad Real...", op. cit.; una síntesis de sus acuerdos económico-jurídicos más relevantes en M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO, *Casuística jurisdiccional de la Hermandad Vieja de Ciudad Real en el siglo XVIII*, memoria inédita de licenciatura UCM, 1990, pp. 57-58. Traslados notariales de dichos pactos en ACG, Cab. 3, leg. 1.337, nº 4, y AHN. Div. Her. leg. 1, nº 16 y leg. 23, nº 68.

⁷⁷ A. PAZ Y MELIÁ nos ofrece una visión un tanto novelesca del procedimiento hermandino durante el Medievo:

"Por el robo más insignificante, por el delito más ligero, perseguían al delincuente..., y una vez aprehendido le llevaban a las alturas o montículos señalados para las ejecuciones; hablaban familiarmente con el reo, y celebraban rústico banquete que el vino contribuía a hacer más regocijado. Acabada la comida, ataban a la víctima a un madero, y los ballesteros le disparaban unas veinte saetas o cuadrillos. Recibían un premio los que las clavaban en el corazón; per los que fuera del pecho, pagaban como multa el festín siguiente y quedaban inhabilitados para tomar parte en los sucesivos."

Op. cit., p. 102.

⁷⁸ Chillón, probablemente, surgió como población alrededor de una fortaleza musulmana, integrante del dispositivo de seguridad circundante de las minas de Almadén . En 1168, el rey Alfonso VIII entregó su castillo al conde don Nuño de Lara y a la Orden de Calatrava para su uso compartido. Con la ofensiva islámica de finales del siglo XII la zona quedó prácticamente deshabitada hasta su refundación. Fernando III adscribió su término al concejo de Córdoba, pasando luego a la casa de Tratámara, que luego lo enajenaría a Diego Fernández de Córdoba, primer señor del lugar. Un estudio más amplio de la trayectoria histórica de la villa en M.L. de VILLALOBOS Y MARTÍNEZ -PONTREMULI, "Régimen dominical de la provincia de Ciudad Real desde

el siglo XII hasta fines del Antiguo Régimen", en *Actas VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda, 1275-1975*, op. cit., pp. 198-199.

⁷⁹ Vid. S. MOXÓ, "Relaciones entre la Corona y las Órdenes Militares en el reinado de Alfonso XI", *Ib.*, pp. 117-158.

⁸⁰ En la junta anual de 1458 se menciona a un tal "Urban Garcia, procurador de la Hermandad de la villa de Chillón que es de la dicha Hermandad de Çibdad Real"; cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 121.

⁸¹ 28-IV-1493, Barcelona (AGS. RGS. f. 125); cf. AA.VV., *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello. Catálogo*, t. 10, Valladolid, 1967, p. 208.

⁸² 2-XI-1502, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 56, nº 9).

⁸³ Cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 129, en nota.

⁸⁴ De este periodo finisecular data la confirmación de privilegios a los tejedores de la ciudad, prescribiendo que a cambio enseñasen el oficio a sus menestrales, mencionándose explícitamente a los tintoreros de la localidad (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26 y CC. Pueblos, leg. 6, nº 88).

⁸⁵ Enajenados los oficios concejiles honoríficos en calidad de perpetuidad por la oligarquía local, los capitulares ciudarrealeños se mostraron reacios a admitir a individuos ajenos a su status, no dudando en hacer valer su condición privilegiada ante las instancias superiores. En 1515, los regidores contradicen la compra de un oficio vacante por parte de un converso en los siguientes términos:

"Por privilegio y merced del señor rey D. Henrique...y por costumbre y memorial a esta parte, ningún confeso no descendiente puede ser regidor de dicha cibdad, si no que de necesidad a de ser hombre limpio y de limpio linage. Y...que en Antonio de Belmar vezino de ella...no concurren las calidades necesarias..."

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 71, s.f.).

⁸⁶ En el informe sobre el estado de la Real Audiencia a principios de 1505, se menciona a Diego de Loaysa, hermano del Santo Instituto y figura descollante de su patriciado urbano, receptor de oficios de la chancillería y de la escribanía de los hijosdalgo, no sirviendo personalmente dichos oficios, contraviniendo por ello las ordenanzas del alto tribunal (AGS. CC. Pueblos, leg. 2.710, f. 6r); pub. S.M. CORONAS GONZÁLEZ, "La Audiencia y Chancillería de Ciudad Real (1494-1505)", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, nº 8 (1978), p. 124.

⁸⁷ Considerado por J. LYNCH como el tribunal menos severo de los del Santo Oficio, al encausar hasta 1530 a unos 269 individuos; *España bajo los Austrias*, (ed. ampl. y rev.), Barcelona, 1982, t. 1, p. 39.

⁸⁸ Son de obligada consulta las obras de L.R. VILLEGAS DÍAZ, Ciudad Real en la Edad Media..., op. cit.; J. M. SÁNCHEZ BENITO, "Poder y Propiedad: los hermanos de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real en el siglo XV" en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 6, pp. 95-100, y F. PILLET CAPDEPÓN, *Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980)*, Madrid, 1984.

⁸⁹ S.d.-VII-1493 (AGS. RGS. f. 127).

⁹⁰ Las inundaciones sobrevenidas por entonces fueron tan importantes que, en una localidad acostumbrada a padecer las periódicas crecidas

de las lagunas circundantes, dicha catástrofe será recordada más de siglo después. Vid. P. MEDINA, *Libro de las grandezas y cosas memorables de España*, Alcalá de Henares, 1566, f. 83r.

⁹¹ En dicha carta, elevada a la Reina el 5-I-1505 , se alegaba que

"...la çibdad en muchas partes esta llena de agua y las cuevas manan y los pozos donde la gente beve se hallan dañados, hanse caydo casa de muchos y aun en la casa de la misma Abdençia ovimos de dexar porque no se puede morar aunque se abrio puerta por atra parte, y se hizo escalera de nuevo y pasase el Abdençia a casa de un regidor, Cristobal Treviño, porque no se hallo otra mas dispuesta, que la de Gil Campo esta en lugar muy enfermo donde han adolecido y son muertos algunas personas que en ella moraban"

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, f. 63r); pub. S.M. CORONAS GONZÁLEZ, op. cit., pp. 108-109.

⁹² 8-II-1505, Toro (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 64); pub. Ib., pp. 109-110.

⁹³ AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 66.

⁹⁴ Ciudad Real es una de las pocas urbes castellanas en el que el servicio sería rebajado notablemente: si en 1500 contribuyó su vecindario con 103.600 mrs., en 1510 por igual concepto no se repartieron más que 40.000 mrs.; Vid. J.M. CARRETERO ZAMORA, *Cortes, Monarquía, Ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515)*, Madrid, 1988, p. 80.

⁹⁵ A este respecto han sido fundamentales las aportaciones realizadas por B. GONZÁLEZ ALONSO, *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1980.

⁹⁶ Algunos autores han visto el precedente inmediato de este concepto en la propuesta presentada por los procuradores burgaleses en Cortes, ante los excesos del alcaide de Castillonuño. Esta hipótesis fue apuntada primeramente por A. SALVÁ, *Páginas histórico-burgalesas. Los fueros, las hermandades, la Inquisición*, Burgos, 1907; siendo luego retomada por F. AGUADO SÁNCHEZ, "Antecedentes históricos del cuerpo de la Guardia Civil", en *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil*, nº 2 (1968), pp. 16-17.

⁹⁷ Remitimos al lector, entre otros, a los siguiente títulos, donde además encontrará referencia bibliográfica complementaria:

J. BENEYTO, "La política jurisdiccional y de orden público de los Reyes Católicos", en *Revista de Estudios Políticos*, nº 77 (1954), pp. 61-103; J. CAAMAÑO BOURNACELL, *Historia de la Policía española*, Madrid, 1972; C. LÓPEZ MARTÍNEZ, *La Santa Hermandad de los Reyes Católicos*, Sevilla, 1921; M. LUNENFELD, *The council of the Santa Hermandad*, Coral Gables -Florida-, 1970; J.A. MARAVAL, *Estado Moderno y mentalidad social, Siglos XV a XVII*, 2 vv., Madrid, 1972; J. PÉREZ, *La España de los Reyes Católicos*, Madrid, 1986; J. de SOTO Y MONTES, "Organización militar de los Reyes Católicos", en *Revista de Historia Militar*, nº 14 (1963), pp. 7-47; L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, *Los Tratámara y los Reyes Católicos*, Madrid, 1985.

⁹⁸ Buena muestra de ello es que en las Cortes de 1540 aún se recurriese a los vecindarios de la ya desarticulada Hermandad Nueva. Cit. E. MARTÍNEZ RUIZ, "El mantenimiento de la seguridad pública antes de la creación de la Guardia Civil", en *Actas I Seminario La Guardia Civil: Pasado, Presente y Futuro*, Aranjuez, 24/ 26-abril 1989, Madrid, 1990, p. 29.

99 Reales cédulas, pragmáticas de Cortes e instrucciones de la Hermandad Nueva entre 1476 y 1498 (AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 3). El panorama respecto a fuerzas de seguridad en despoblado se veía privado de un cuerpo calificado por J. PÉREZ de móvil, eficaz y garante de una justicia rápida y expeditiva; op. cit., p. 37. QUEVEDO Y SIDRO especulan con que tal medida fue producto de un doble error de apreciación:

"La primera, en creer que habiendo abatido el feudalismo y destruido las fortificaciones, guardadas de peligrosos bandidos, y teniendo armado el pueblo, sería imposible que volviesen a reproducirse aquellas hordas de criminales...-y- que no era necesaria una fuerza militar tan poderosa para el servicio ordinario de seguridad de las vías de comunicación; además que en caso necesario podían dedicarse a dicho servicio los cuerpos permanentes de Caballería ya organizados; la segunda, en creer que la causa del terror que solo el nombre de la Santa Hermandad inspiraba, los Alcaldes y Cuadrilleros elegidos anualmente en los pueblos, sin necesidad de la vigilancia que hasta entonces habían ejercido sobre ellos la Junta Suprema y los mismos reyes, bastarían para exterminar las cuadrillas de malhechores que pudieran organizarse."

Op. cit., pp. 370-371.

100 El 7-VII-1496 se había ordenado que dos alcaldes, uno por cada estado, ejerciesen su jurisdicción en despoblado en las villas pobladas por más de treinta vecinos, siendo sus cargos renovados anualmente por los concejos y mantenidos a costa de sus propios y de las percepciones pecuniarias impuestas sobre sus reos. Ley 18, tit. 35, lib. 12 Nov. R.

101 25-IV-1475, Valladolid (AGS. RGS. f. 380).

102 "Ordenamos que todos los hermanos tengan de aquí adelante, el que no tuviere posada, o mediazgo cada en los dichos montes e xaras poblada con colmenas e perro, segund costumbre antigua desta dicha Hermandad, e los que non tuviesen bienes, asi como losados o huertos en los dichos montes e xaras para servir a la dicha Hermandad, ni jurare ni fuere recibido en ella..., e porque sea savido quienes son los hermanos ordenamos que en el ayuntamiento

del cavildo de la dicha Hermandad haga matricula de todos los hermanos ..."

(AHN. Div. Her., leg. 21, 1).

103 AGS. RGS., f. 60.

104 28-II-1495 (Ib., f. 2).

105 Desconocemos con exáctitud la fecha en que empezaron a institucionalizarse tales aniversarios piadosos por los colmeneros manchegos , pero lo cierto es que, a principios del Quinientos, los ciudarrealeños el día de Nuestra Señora de la O ya ofrecían misas en memoria de los Reyes Católicos en la parroquia de San Pedro; los talaveranos por entonces hacían lo propio en la iglesia de Santa María de Rocamador el día de la Asunción; e igualmente oficiaban responso los toledanos, tras el pleno celebrado el primer lunes de Cuaresma, en San Juan de los Reyes.

106 Op. cit. , p. 33.

107 QUEVEDO Y SIDRO señalan que esta duplicidad estructural

"...solo se concibe, teniendo como tenían los mismos Reyes la idea de abolir un día las Capitanías, a causa de hallarse toda su atención fija en una reforma esencial y de grande trascendencia: la creación de un ejército permanente..."

Op. cit., p. 385.

108 29-IX-1478 (AGS. RGS., f. 159); Cf. AA.VV., op. cit., t. 2, p. 159.

109 13-IV-1477, Madrid (BN. mss. 13.030, f. 72vº y AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 4).

- ¹¹⁰ 28-VIII-1479, Trujillo (AGS. RGS. f. 75). Los oficiales del propio ayuntamiento ciudarrealeño habían sido residenciados entre 1478 y 1479 (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 86).
- ¹¹¹ 15-XII-1488, Valladolid (AGS. RGS. f. 132); cf. AA.VV., op. cit. t. 5, p. 630.
- ¹¹² 24-III-1489, Medina del Campo (AGS. RGS, f. 153); Cf. Ib., t. 6, p. 147.
- ¹¹³ 1-IX-1491, Córdoba (Ib. f. 226); ib., t. 8, p. 351.
- ¹¹⁴ 25-XI-1494 (Ib. f. 417); cf. Ib. , t. 11, p. 646.
- ¹¹⁵ 17-VIII/5-X-1496, Soria y Burgos respectivamente; Ib., t. 12, pp. 230 y 287. Un análisis de las cuentas de la Hermandad Vieja de la capital manchega durante el reinado de los Reyes Católicos en J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja de Toledo...*, op. cit., pp. 220 y ss. ; L. R. VILLEGAS DÍAZ "Sobre la financiación de la Hermandad de Ciudad Real. Sus ingresos (1491-1525)", en *La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, op. cit., pp. 911-928; y, del mismo autor "Pobreza y beneficencia de Ciudad Real a fines del reinado de los Reyes Católicos: las limosnas de la Santa Hermandad en 1501", en *Almud*, nº 4 (1981), pp. 121-132.
- ¹¹⁶ Las multas impuestas ascendieron a más de 40.000 mrs., reconociéndose estar involucrados algunos miembros del ayuntamiento, a pesar de lo cual en 1513 aún no se había satisfecho la totalidad de dichas sanciones (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 67).

117 A. TORREJÓN, op. cit., f. 75vº.

118 20-IV-1485, Córdoba.

119 Finales de 1479 ó principios de 1480. Isabel I impone este sujeto de su confianza a las citadas ciudades andaluzas como diputado de la Hermandad Nueva (AGS. RGS. f. 58; cit. AA.'VV., op. cit., t. 2, p. 200)

120 Traslado manuscrito de los capítulos en un cuaderno cosido en catorce hojas útiles, fechado en Ciudad Real el 6-IX-1512 (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 80).

121 Fernando el Católico, el 5-IV-1479, había reiterado el veto al ingreso en la Hermandad Vieja a quienes no fuesen propietarios de colmenas (AHN. Div. Her. leg. 21, nº 1).

122 Las ordenanzas de 1485 preceptuaban que, puesto que

"... en la dicha hermandad ay muchas dueñas hermanas e tyenen e mantyenen el dicho capitulo non entran ni salen con ellas -las cuadrillas- para en los ofiçios por su onestidad mas en quanto goçan de las dichas preeminencias de la dicha hermandad esto se entiende tanto quanto los tovierén e poseyerén podan dalas a fijos o yernos o a otras personas que ellos entendieren que les cumple."

(AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 80, f. 13vº).

123 Invocando intereses corporativos, se consignaba que quienes

"...no biven ni resyden en esta çibdad salvo en el canpo de Calatrava e prioradgo de San Juan e en tierra del conde Benalcaçar e Orgas e Yevenes e Manjalisa con sus mugeres e hijos e casas pobladas en la Syerra Morena e no vienen a la çibdad salvo a vender sus frutas e poniendolos en los tales ofiçios les seria mas dañoso que provechoso..."

124 El traslado de principios del Quinientos que hemos utilizado adjunta una relación de 113 hermanos, con expresión de su cuadrilla, calidad estamental y, en su caso, el oficio que había desempeñado en el seno de la entidad (Ib., ff. 7v2-9r).

125 Mediante Real Ejecutoria de 20-II-1477, el Consejo Real había sancionado un dictamen de los monarcas, disponiendo que caballeros y labradores compartiesen por igual los oficios hermandinos en el seno del Santo Tribunal ciudarrealeño (AGS. RGS, f. 280); pub. L. DELGADO MERCHÁN, op. cit., p. 19.

126 24-XII-1485 (AGS. RGS. f. 165); cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 169.

127 18-VIII-1486 (AGS. RGS. f. 71).

128 31-VII-1488 (Ib., f. 99)

129 2-IX-1491 (Ib., f. 226); cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 170.

130 En Orihuela, el 3-VII-1498, se prorrogan por un año, debiéndose ceñir luego la duración de los oficios de alcaldes a la cadencia estipulada en los Capítulos de Visita de Maldonado (AGS. CC. Pueblos. leg. 6, nº 74).

131 Ib., leg. 8, nº 10.

132 BN. mss. 13.030, ff. 88r-90v2; y AMN. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 5.

133 12-V-1477.

134 13-IV-1477, Madrid (BN. mss. 13.030, f. 72v2).

135 24-II-1477, Junta de la Hermandad de San Martín de la Montaña (AMT. Archivo Secreto, Caja 12, leg. 1; nº 1).

136 20-VI-1481, Valladolid (BN. mss. 13.030, ff. 96r-97r).

137 10-VIII-1482, Córdoba (Ib., f. 73r).

138 Una visión panorámica de las Cortes castellanas hasta el advenimiento de los Habsburgo puede consultarse en J.M. CARRETERO ZAMORA, *Cortes, Monarquía...*, op. cit., del mismo autor, "Las peticiones particulares de Cortes, fuente para el conocimiento de la vida concejil castellana", en *La Ciudad Hispánica...*, op. cit, t. 1, pp. 161-206; W. PISKORSKI, *Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna. 1188-1520*, (1ª ed. París, 1987) (est prel) J. VALDEÓN BARUQUE, Barcelona, 1977; etc.

139	<u>PERIODO</u>	<u>LUNENFELD</u>	<u>AÑO</u>	<u>LADERO</u>
	1484-85	29.800.000	1485	12.000.000
	1485-86	44.000.000	1486	-
	1487-88	-	1487	48.250.000
	1488-89	33.675.000	1488	24.125.000
	1489-90	-	1489	72.750.000
	1490-91	58.000.000	1490	24.125.000
	1491-92	64.000.000	1491	48.250.000

Fuente: J.M. CARRETERO ZAMORA, *Cortes, Monarquía...*, op.cit., p.79.

El repartimiento general de 1488-89 fija la contribución para la Hermandad General; por lo que respecta al área de implantación del Triple Instituto es el siguiente:

-Provincia de Toledo.....1.542.460 mrs.
 -Arzobispado de Toledo.....540.000 "
 -Provincia de Castilla de la Orden de Santiago....578.160 "
 -Ciudad Real.....72.000 "

(AGS. Contaduría del Sueldo, 1ª serie, leg. 53); Cit. C. LÓPEZ MARTÍNEZ, op. cit., pp. 57-58. Las requisitorias a Toledo, y su tierra, para distribuir los repartimientos hermandinos del periodo 1488-90 en AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 7.

140 17-XII-1485, Alcalá de Henares y 6-III-1486, Arévalo (AGS. RGS. f. 69); AA.VV., op. cit., t. 4, p. 350.

141 2-IV-1486, Medina del Campo (AGS. RGS. f. 49); Ib., p. 373.

142 28-V-1492, Córdoba (Ib., f. 507); Ib., t. 9, p. 299.

143 J.M. CARRETERO ZAMORA, op. cit., p. 79.

144 Representación del cabildo de la Hermandad Vieja de Toledo, 2-I-1682 (AHN. Div. Her. leg. 66, nº 2, s.f.).

145 Prototipo del flujo migratorio a Indias durante el Quinientos por parte de los ciudarrealeños fue la familia Maldonado, algunos de cuyos miembros participan activamente en su colonización; este es el caso de Don Juan Maldonado, fundador de la ciudad venezolana de San Cristóbal, en 1561. Vid. R.J. MALDONADO CCCAT, *Crónica de la familia y linaje del capitán Don Juan Maldonado y Ordoñez de Villaquirán*, Almagro, 1959. González López de Higuera, rico indiano manchego afincado en Potosí, constituía a fines del s. XVI un patronado para dotar doncellas, asignándole una elevada asignación anual (AHN. Cons., leg. 1.694, nº 40).

¹⁴⁶ Remitimos al lector a los estudios, hechos en tal sentido por C.R. PHILLIPS, *Ciudad Real, 1500-1750. Growth, crisis and reajustement in the Spanisch Economy*, Mass., 1979; de la misma autora "La propiedad urbana en Castilla: un testimonio adicional de Ciudad Real en el siglo XVII", en *Moneda y Crédito*, nº 144 (marzo de 1977), pp. 46-65; y J. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, *Estructuras agrarias y sociedad rural en la Mancha (siglos XVI-XVII)*, 2 vv., Ciudad Real , 1986.

¹⁴⁷ M. ALEMÁN, *Guzmán de Alfarache*, t. 1 (1ª ed., Madrid, 1599) ed. B. BRANCAFORTE, Madrid, 1979, pp. 193-194. Referencias literarias coetáneas a la Santa Hermandad pueden hallarse en: C. SUÁREZ DE FIGUEROA, "El pasajero", cit. A. VALBUENA PRAT, *La vida española en la Edad de Oro según sus fuentes literarias*, Barcelona, 1943, p. 197; R. ARCO Y GARAY, *La sociedad española en las obras de Cervantes*, Madrid, 1951, pp. 408 y 499; del mismo autor, "La ínfima levadura social en las obras de Cervantes", en *Estudios de Historia Social de España*, nº 2 (1952), pp. 209-291 y "La crítica social en Cervantes", ib., pp. 291-324; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *La sociedad española del siglo del Oro*, Madrid, 1983, p. 131; J. CARO BAROJA, *Ensayo sobre la literatura de cordel*, Madrid, 1969, p. 368; el ya citado M. ALEMÁN, op. cit., t. 2 (1ª ed. Lisboa, 1604), Madrid, 1984; M. de CERVANTES SAAVEDRA, *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, t. 1 (1ª ed., Madrid, 1605), Madrid, 1985, pp. 54, 86, 125-128, 290-293, etc; V. MARTÍNEZ ESPINEL, *Vida de Marcos de Obregón*, (1ª ed, Madrid, 1818), 2 vv. (ed. prol y not.) S. GILI GAYA, Madrid, 1969-1970, t. 1, p. 188.

¹⁴⁸ 20-VIII-1505, Segovia (AHN. Div. Her., leg. 1. nº 21). Meses antes el Consejo Real había aprobado las ordenanzas de la Hermandad de

Navarra, 13-III-1505, Pamplona (AGS. CC. Diversos de Castilla, leg. 8, nº 6).

149 1-IV-1510, Valladolid (BN. mss. 13.030, f. 74vº y AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1. nº 9).

150 El cabildo municipal toledano de 30-IV-1512 resolvía que "los cuadrilleros de la Ermandad -General- trajesen para su conocimiento y distincion la media vara de color verde con pena de pribaición de oficio y perdimiento de su salario". Dicho acuerdo capitular fue erróneamente interpretado como disposición de la Hermandad Vieja en BN. mss. 13.030, f. 74vº; una consulta a la fuente original corrige la confusión del copista (AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1. nº 10).

151 Provisión Real, despachada a petición de Antón Poblete, confirmando a alcaldes y ministros hermandinos de Ciudad Real el privilegio para portar varas de justicia, según lo dispuesto en 1505, 9-VIII-1524, traslado de 24-X-1625 (AHN. Div. Her. leg. 1, nº 27).

152 7-VIII-1512, Burgos (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 22).

153 S.d.-III-1514 (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 72).

154 J. CARO BAROJA menciona un opúsculo titulado "Los Juanillones", carboneros de los Montes de Toledo que llevan una doble vida como bandoleros y que , en connivencia con un escribano de la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial, actuaban impunemente, siendo al final traicionados por el citado oficial hermandino. Op. cit., p. 368.

¹⁵⁵ Actas de la Cortes de León y Castilla, t. 4, pp. 560-561 y H. de CELSO, *Repertorio Universal de todas las leyes destos Reynos de Castilla, abreviadas en forma de repertorio decisivo*, Medina del Campo, 1553, ff. 167 y 169.

¹⁵⁶ 25-I-1518, Valladolid (AHN. Div. Her. leg. 1, nº 23).

¹⁵⁷ Una rápida ojeada a los procesos del Quinientos en su práctica integridad conservados en el Archivo Histórico Nacional pertenecientes a la corporación manchega, arroja la cifra indicativa de que si hasta 1515 se contabilizan cerca de 35 pleitos civiles y criminales, de la década de 1520 apenas sí pueden consultarse seis sumarios.

¹⁵⁸ Vid. L. R. VILLEGAS DÍAZ, "Sobre la financiación...", op. cit., pp. 926-928.

¹⁵⁹ 31-I/17-II-1520, Valladolid (AHN. Div. Her. leg. 1, nº 24).

¹⁶⁰ Juan II preceptuaba en 1419 que

"... si los clerigos de menores ordenes que son casados no trujeren corona abierta ni bestiduras clericales pueden tener ofizios de juzgados, e de exeptores, e otro oficios publicos en qualesquier ziudades, villas e lugares salvo si fuere casado, y no trujeren corona abierta, ni havito de clerigo, porque si resumiesen corona que non puedan tener ni usar de los dichos oficios publicos, e si fuere clerigo, no casado, no pueda tener ni usar de los tales ofizios, e no vale la dispensazion que en lo contrario se diere o ganare."

Sobrecarta, 21-V-1522, Palencia (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 26).

¹⁶¹ 4-X-1542, Valladolid (AHN. Div. Her. leg. 1, nº 30). Con anterioridad, el 25-XI-1506, un hermano de la organización apícola manchega había renunciado a su cargo (AHN, Div, Her. leg. 4, 1).

¹⁶² 28-IV-1552, Ciudad Real (AHN, Div, Her., leg. 21, nº 46, doc. 7) y 2-VI-1552, Madrid (Ib, leg. 1, nº 25).

¹⁶³ 6-XI-1560 y 1-II-1561, ambas en Toledo (respectivamente en AGS. Mercedes y Privilegios leg. 278, nº 26 y AHN. Div Her., leg. 2, nº 6).

¹⁶⁴ Firme defensor de las mercedes hermandinas en la corte de Felipe II sería García de Loaysa. Nacido en Talavera de la Reina y doctorado en Teología por la universidad de Alcalá, ejercerá como arcediano en Guadalajara y canónico en la Ciudad Imperial. De esta etapa en Toledo data el sermón "Oratio in laudem dulcissime patria Ciudad Real", escrito en Ciudad Real el 1-II-1577, en el que se consignan los acontecimientos, personajes e instituciones emblemáticos de la ciudad, mencionándose a la Santa Hermandad con las palabras

"...veteris confraternitatis augustum Imperium, quorum beneficio et vigilantia nocentissimus et profligantissimus homines non solum finibus sarcemus, sed fere totam Hispaniam totam ac tranquillam redelimus."

(BN. mss. 5.739, f. 140r.) García Loaysa será nombrado luego preceptor del príncipe Don Felipe, limosnero del rey y su capellán mayor; investido en 1598 como arzobispo de Toledo, luego caería en desgracia.

¹⁶⁵ 14-VI-1552, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 35).

¹⁶⁶ 4-IX-1335 (AHN. Códices 818B, ff. 32vº-41r).

¹⁶⁷ 19-VI-1385, Almagro.

¹⁶⁸ 9-VI-1418, loc. cit.

¹⁶⁹ 2-X-1424, Alcolea (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 68). El 28-III-1604 el asadurero de la Hermandad toledana litigaba con un vecino de Puebla de Montalbán, por lo que su cabildo, conocedor de que los ciudarrealeños "tenían ganada ejecutoria para ganarse asadura del convento de Calatrava y sus comendadores", nombran a dos hermanos para ir a por una copia de dicha carta real, lo que ejecutan el 4-IV-1604 (AHN. Div. Her. leg. 63, ff. 41r-42r y AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 1).

¹⁷⁰ 23-VIII-1428, Almagro (AHN. Div. Her., leg. 23, 68).

¹⁷¹ 8-IX-1497 (Ib., leg. 22, nº 2).

¹⁷² 5-XI-1489, Úbeda (Ib., leg. 22, nº 1). Dicho documento fue erróneamente fechado en 1589 por I. HERVÁS Y BUENDÍA, *Diccionario histórico, geográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real*, Ciudad Real, 1914, p. 122.

¹⁷³ R.L. KAGAN demostró que el Quinientos fue un siglo sin paralelo ni precedentes en la proliferación de litigios substanciados ante la Chancillería vallisoletana, descendiendo su volumen solo tras 1620, debido a la restricción de los casos a los de mayor importancia, la caída de la prosperidad económica castellana y el menoscabo jurisdiccional de dichas cortes de justicias en favor del Consejo de Castilla. Este fenómeno, con ciertos matices, puede extrapolarse a la Chancillería de Granada, a cuya instancia se elevan la mayoría de las causas en las que está involucrada la Hermandad de Ciudad Real. Vid. "Pleitos y Poder Real. La Chancillería de Valladolid (1500-1700)", en *CIH.*, nº 2 (1978), pp. 291-316.

174 Durante el reinado de los Reyes Católicos la conflictividad entre autoridades, concejos y vasallos del Campo de Calatrava con la fraternidad apícola y el corregimiento ciudarrealeño, que por esta época arranca cronológicamente en 1478. Desde 1497 hasta 1504 duró el pleito entre el Común de Calatrava y la corporación Vieja, dirimiéndose la percepción del arbitrio pecuario en el maestrazgo ante el Consejo Real y la Chancillería de Granada. Esta pugna entre el Santo Instituto y las justicias de la Orden de Calatrava durante el Cuatrocientos fue objeto de una comunicación presentada por el ex-director del Archivo General de Simancas Armando REPRESA en el I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, y que desafortunadamente nunca sería publicada.

Una amplia documentación al respecto en: AGS. RGS. IV-1478, f.19; XII-1485, f. 180; X-1487, f. 172; V-1488, f. 70; V-1488, f. 59; VIII-1488, f. 139; XI-1488, ff. 172, 174 y 260; XII-1488, f. 132; I-1489, f. 145; II-1489, f. 258; VII-1489, f. 97; VIII-1489, f. 142; IV-1490, p. 240; IX-1490, f. 260; X-1490, f. 291; V-1492, f. 386; X-1493, f. 158; X-1494, ff. 226 y 307; los acuerdos de 1497 sobre delimitación jurisdiccional en ACG. Cab. 503, leg. 593, nº 5.

175 Documentación sobre competencias entre las justicias de Órdenes y la Hermandad ciudarrealeña en:

*Campo de Calatrava: 24-III-1505, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 11); 8-IV-1506, Almagro (Ib., leg. 23, nº 51); 21-IX-1510 (Ib., leg. 23, nº 54); 29-I-1525 (Ib., leg. 21, nº 20); 19-II-1528, Granada (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 29); 14-VII-1542 (Ib., leg. 1, nº 54), 10-III-1554, Granada (Ib., leg. 1, nº 32); 23-VIII-1554, Almodóvar del Campo (Ib., leg. 21, nº 26); 15-IV-1569, Ciudad Real (ACG. Cab. 321, leg. 4,403, nº 14); 18-II-1570/14-II-1571, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 34).

*Priorato de S. Juan: 26-VI-1515, Granada (Ib., leg. 1, nº 23, s.f.); 13-X-1531, Medina del Campo (Ib.), 8-VI-1543, Valladolid (Ib., leg. 1, nº 31); 16-I-1567 (Ib., leg. 1, nº 23, s.f.); 16-VII-1599 (Ib., leg. 1, nº 23, ff. 35vº y ss.).

*Distrito de Santiago: 6-VII-1501 (Ib., leg. 23, nº 49); 23-VIII-1524 (Ib. leg. 22, nº 7); 15-II-1594 y 18-I-1598 (ACG. Cab. 513, leg. 2.510, nº 1).

176 Martín Sánchez presenta un supuesto privilegio de Juan II que le capacitaría para asadurar a tenor del siguiente arancel:

GANADO LANAR

+100 cabezas...1 res
-100 " ...2 dineros por res

GANADO VACUNO

+50 cabezas...1 res
25-50 " ...1/2 res
-25 " ...2 dineros por res

GANADO PORCINO

+100 cabezas...1 cerdo
50-100 " ...1 mr. por cerdo
25-50 " ...1/2 cerdo

Sobrecarta, 6-XI-1570, Granada (AHN. Div. Her., leg. 22, nº 11).

177 15-V-1563 (Granada. Ib. leg. 22, nº 9).

178 6-XI-1570, Granada; 22-VIII-1589 y 19-IV-1595 (respectivamente en AHN. Div. Her. leg. 22, nº 11, 13 y 15).

179 Como bien apunta R.L. KAGAN,

"Los litigantes tenían que pagar innumerables gastos, propinas y sobornos a oficiales subalternos, y en ocasiones incluso a los jueces. Prara abrirse camino a través de este laberinto judicial era esencial la ayuda de un abogado, pero tal asistencia era costosa. Los abogados pedían como honorario sustanciosos salarios, además de algunos acuerdos privados y a menudo secretos que se hacían sobre pagos adicionales"

"Pleitos y Poder Real...", op. cit. p. 300.

180 Años del 1391 al 1442. Cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., pp. 218-219.

181 Ejemplos de algunas concordias del Honrado Concejo con instituciones o particulares en J. KLEIN, op. cit., pp. 478 y ss.

182 6-VII-1501, Ciudad Real (AHN. Div. Her. leg. 23, nº 48).

183 Este enmarañado proceso no estuvo exento de los coechos e irregularidades, tan frecuentes en la época. En la visita girada a la Real Audiencia ciudarrealeña de 1501, se consignaban entre un cúmulo de arbitrariedades el que el alcalde doctor Antonio Cornejo Alede,

"...por espeçial comision le cometieron una cabsa que pendia entre el Conçejo de la Mesta e la Hermandad Vieja de Çiudad Real, sobre çierta ymposicion que la Hermandad ponia en los ganados en los puertos de Socuellamos e la Torre de Juan Abad, e le mandaron que para entender en esta cabsa fuese a los dichos lugares e a otras partes donde viesse que cumplia e en ello se ocupase quinze dias e por cada dia llevase dozientos maravedis de las partes. Paresçe que no fue menester salir de Çiudad Real para entender deste negoçio, salvo alli entendio en el, e puesto que no salio llevo de la parte de la Hermandad Vieja mill e quinientos maravedis por razon de los dias que entendio en este pleito, lo qual paresçe que no pudo llevar por ser juez delegado e de comision pues no salio del domiçilio a entender en ello".

(AGS. CC. leg. 2.710, f. 2vº); pub. S.M. CORONAS GONZÁLEZ, op. cit., p. 111.

184 17-III-1503 (AHN. Div. Her., leg. 22, nº 4). Cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 219.

185 6-VI-1500/15-VII-1505, Granada (Ib. 1 leg. 1, nº 20).

186 5-X-1565 (Ib., leg. 22, nº 10 y AHN. Mesta, leg. 64, nº 7).

187 28-II/9-III-1500, Alcalá de Henares; 4-III-1501, Valladolid; 11-VII/12-XI-1516, Madrid; 1-IX-1517, Aranda de Duero y 29-IV-1530, Madrid.

188 Traslado del pleito fechado el 28-XI-1552, Madrid (AHN. Mesta, leg. 64, 6).

M. CORCHADO SORIANO, estudioso de las vías de comunicación manchegas, concretó en su día la amplitud, trayectoria y carácter de los intercambios llevados a cabo por estas rutas comarcales:

"El transporte a mayor escala en esta época parece se realizaba por medio de la arriería, preferentemente ejercida por antiguos moriscos y la Cabaña Real de Carreteros, con organización y privilegios análogos a la Mesta de los ganaderos; preferentemente provenían los carreteros que trabajaban en esta región del pueblo de Almodóvar del Pinar, en la provincia de Cuenca, y tenían sus cuarteles de invierno en el Valle de Alcudia, donde durante varios meses pastaban los bueyes de sus carretas en las dehesas del maestrazgo de Calatrava, de allí salían cargadas con pellejos de mercurio de Almadén hacia el puerto de Sevilla, subían otra vez a la meseta con pescados en salazón y aceite, seguían con lana hacia los puertos del Cantábrico, de donde bajaban hierros y seguían con madera para las minas de Almadén"

Cit. "La Mancha en el siglo XVI. Adiciones al estudio del Dr. Salomón sobre las Relaciones Topográficas", en *Hispania*, nº 33, nº 123 (1973), p. 148.

189 Como ejemplos pueden citarse los numerosos procesos fulminados a cuatreros, llegándose a perseguir en 1589 a unos ladrones ciudarrealeños que habían asaltado a un regidor conguense y a un hermano mesteño; 26-III-1589 (AHN. Div. Her., leg. 28, nº 5). En cuanto a la protección prestada a la arriería y carretería de la red viaria manchega, en 1524 se abre sumaria contra los ladrones de un trajinante de Villaminaya -Toledo-; 22-IV-1524 (Ib., leg. 24, 30). Y en 1571 se prende a un tal Juan Cervantes por herir en despoblado a un carretero de Torralba; 13-VI/3-XI-1571 (Ib., leg. 25, nº 8).

¹⁹⁰ 14-III-1414, Sevilla (BN. mss. 13.030, f. 130r).

¹⁹¹ 21-X-1505 (AHN. Div. Her. leg. 24, nº 13). No es la única ocasión en que la oligarquía local, acaparadora de los cargos concejiles honoríficos, vió defendidos sus intereses por los ministros manchegos. Ese mismo año, se encausó a Francisco de Arévalo por hurtar yeguas de la manada del regidor Antonio de Treviño; 20-II/27-VIII-1505, Ciudad Real (Ib., leg. 24, nº 11). En 1506 se juzga a un convecino acusado de robar en la huerta de otro regidor de la capital manchega; 7/28-VIII-1506 (Ib., leg. 24, nº 16): Por último en 1512 es condenado un criado del procurador Diego de la Cueva por estupro; 9-II-1511/26-I-1512 (Ib., leg. 24, 23).

¹⁹² El 6-IX-1506, en Tudela de Duero, Felipe I preceptúa que en la capital manchega no se permitiese la venta de heredades, tierras ni propiedades urbanas a los comendadores de las órdenes de Calatrava y Alcántara (AHMCR. Caja 1, nº 52). En 1526, el Consejo de Castilla ordena al corregimiento manchego que no aceptase como regidores a ningún comendador de las órdenes de Calatrava, Alcántara y San Juan; cit. E. BERNABÉU Y NOVALBOS, *Inventario del archivo del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real hecho en en año 1595*, Ciudad Real, 1952, p. 56. Durante largo tiempo se pleiteó por el derecho de sus vecinos a cortar madera en el Campo de Calatrava, fallándose en Granada sentencias definitivas el 16-XII-1561 (AHMCR. nº 129) y 1-IV-1600 (BN. mss. 2.431, ff. 111r-vº).

¹⁹³ El 2-XII-1539 el Supremo Consejo despacha Real Provisión por la que se manda que justicias, escribanos y alcaides de la ciudad no abusen de su autoridad, dilatando la excarcalación de sus reos una vez

sentenciados "por no tener con que satisfacer las costas, ni les tomen las ropas", ni les graven con carcelerías" (AHMCR. nº 84). El incumplimiento de esta instrucción en favor de los presos sin recursos fue evidente, al ser reiterada poco después a petición de Juan Fernández Treviño (E. BERNABÉU Y NOVALBOS, op. cit., p, 64).

¹⁹⁴ En 1584, los jurados ciudarrealeños elevaban una queja al corregimiento, lamentándose por verse despojados del acostumbrado medio menudo de carnero que semanalmente recibían los capitulares para su abastecimiento. Los regidores niegan legitimidad de dicha petición alegando sustentarse la petición en una gracia a algún regidor anterior, al no ser considerados los jurados "cuerpo" del ayuntamiento. Replican los jurados exponiendo su diligencia en cumplir sus labores municipales, agilizando los repartimientos fiscales, no habiendo más que quince individuos en el cabildo, por lo que la exacción no sería tan gravosa como pretendían quienes la cuestionaban. El 27-II-1587, el corregidor don Alonso de Guevara falló otorgando a los jurados la merced requerida (AHMCR, caja 9. nº 314).

¹⁹⁵ El 25-VI-1535, la Hermandad de Toledo y el corregidor local dirimen la competencia jurisdiccional suscitada en Los Yébenes, y fruto de su consenso cristaliza la concordia institucional entre ambas instancias de la justicia real (BN. mss. 13.030, f. 75vº y AMT. Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 11). El recurso a este tipo de resoluciones, inevitables para evitar desacuerdos que obstaculizasen la labor jurídico-policial, tampoco era novedoso en Ciudad Real, donde en 1504 ya se había establecido un acuerdo de este tipo entre el concejo local y la Real Chancillería allí establecida; cit. E. BERNABÉU Y NOVALBOS, op. cit., p. 48.

¹⁹⁶ 24-V-1569, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 36, s.f.).

¹⁹⁷ Notificada y solemnemente acatada por el corregidor el 13-I-1571 (Ib., s.f.).

¹⁹⁸ 6-XII-1574, Ciudad Real (Ib., s.f.).

¹⁹⁹ 25-X-1584, Ciudad Real/2-V-1586, Granada (Ib., s.f.).

²⁰⁰ 23-XII-1585, Ciudad Real/11-XII-1590, Granada (Ib., s.f.).

²⁰¹ 15/18-II-1599, Ciudad Real. (Ib., leg. 23, nº 56).

²⁰² La inexistencia de una bibliografía específica de fenómeno hermandino castellano durante la Edad Moderna nos impide hacernos una idea aproximada de las líneas generales de la evolución histórica seguida por dichas instituciones concejiles, con un desarrollo dispar aún dentro del propio ámbito comarcal. Nuestra visión está mediatizada por este hecho, tanto por el que los escasos trabajos de los que disponemos sean obras de eruditos o cronistas locales de fines del Ochocientos o principios del siglo XX, generalmente centrados en su vida institucional. Tales opúsculos son complementados por algunas referencias historiográficas deshilvanadas y los relatos de viajeros. A este vacío de conocimientos hay que sumar la escasez de monografías sobre fuerzas de seguridad y estudios históricos sobre criminalidad, en unos siglos donde el esplendor político y económico de la Monarquía polarizaron la inmensa mayoría de las investigaciones. Por lo que atañe a la pervivencia de la Hermandad General del Reino durante el Dieciseis hay que mencionar a los ya citados C. LÓPEZ MARTÍNEZ, quien aporta algunos datos dispersos sobre el Santo Tribunal sevillano

durante el Renacimiento, o A. SALVÁ, quien realiza una aproximación a la evolución particular hermandina en la ciudad de Burgos.

203 Real Cédula de 22-VI-1500; Cit. C. LÓPEZ MARTÍNEZ, op. cit., p. 18.

204 AGS. CC. Div. de Castilla, leg. 42, nº 79.

205 Real Cédula de 5-VIII-1525, Valladolid (Ib., leg. 8, nº 7).

206 AGS. Memoriales. leg. 199, nº 22, f. 2vº.

207 AGS. Patronato Real, leg. 78, nº 307-317.

208 Un estudio, ya clásico, de tales respuestas para el área de Castilla La Nueva, fue abordado por N. SALOMÓN, *La vida rural castellana en tiempos de Felipe II*, (1ª ed., París, 1964), Barcelona, 1982. Matizado en aspectos muy concretos por M. CORCHADO SORIANO, op. cit.; hemos manejado la transcripción de tales informes recopilados por C. VIÑAS y R. PAZ, *Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los Pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II*. Ciudad Real, Madrid, 1971, a la cual nos remitiremos para las notas siguientes.

209 De particular interés sobre el particular serán las respuestas a las cuestiones 7, 9, 43, 44 y 46; todas ellas referidas a asuntos jurisdiccionales y sobre la estructura de poder de los cabildos.

210 En Corral de Calatrava se nombran un alguacil y un cuadrillero "para los delitos de fuera del pueblo", mientras que en Daimiel ambos alcaldes hermandinos estarán acompañados por un alguacil mayor y dos o

tres cuadrilleros, practicándose lo mismo en Herencia y en Villarrubia de los Ojos. Cit. C. VIÑAS y R. PAZ, op. cit., pp. 211, 235, 270 y 606, respectivamente.

211 La respuesta remitida desde Calzada de Calatrava señala que "los alcaldes de la Hermandad tienen de por sí su escribano con quien hacen sus negocios"; Ib., p. 159.

212 Lo que acontece, igualmente, en la villa de Calzada de Calatrava; Ib. p. 159.

213 Únicamente hemos constatado una sola excepción a dicha periodicidad anual de los cargos concejiles, la de Campo de Criptana, villazgo de la Orden de Santiago, en el que se señala que

"...hay dos alcaldes ordinarios y trece regidores y dos alcaldes de Hermandad, solíase alegir unos a otros ahora de poco tiempo a esta viene el Gobernador del Partido y los hecha por cinco años por votos de los vecinos de la villa."

Ib., p. 170.

214 Son los casos de Alcubillas y de Daimiel; Ib., p. 29 y 234-235.

215 Calzada de Calatrava; Ib., p. 159.

216 Villahermosa; Ib., p. 568.

217 Esto se acredita en Argamasilla de Alba, recientemente fundada en territorio del priorato de San Juan, así como en Villarrubia de los Ojos. Ib. pp. 203 y 607.

218 Cabezarados, Puertollano y Terrinches; Ib., pp. 143, 417 y 499.

219 Montiel, villa de la Orden de Santiago, entre otras. Ib., p. 348.

220 De los alcaldes entrantes de la aldea de Tirteafuera, se dice que "...elegidos se llevan ante la Justicia de la villa de Almodovar y alli hacen la solemnidad del juramento para usar los dicho oficios"; Ib., p. 508.

221 Suelen ser pequeñas localidades, como Los Pozuelos, La Solana, Tirteafuera, Argamasilla de Alba, etc, cuyas rentas municipales no permiten excesivos dispendios. Ib., pp. 125, 382, 484 y 508.

222 En Daimiel, donde parecen mantenerse activos sus ministros de la Hermandad General, se sigue lo prescrito desde la Corte de que "cuando ellos -los alcaldes- no son letrados, toman en los negocios parecer de letrado a costas de las partes para determinacion dellos"; Ib., pp. 234-235.

223 Ib. p. 13.

224 "Otrosi acaecio en este dicho lugar pasar dos hombres por este dicho lugar vecinos del lugar de Navalnoral el uno viejo y el otro mozo y el viejo debia al mozo ciertos dineros y dijole el mozo que le pagase los dineros, si no que se los habia de pedir por justicia y a legua y media deste lugar se echaron a medio día a dormir en tramos, y despues de dormidos segun parecio se levanto el viejo y dio con un canto al mozo en la cabeza y la mato y despues de muerto le quemó y hizo polvos...y la Santa Hermandad lo siguio y le prendio y le ahorco al viejo"

Ib., p. 365.

225 Ib., p. 437.

226 La existencia de estas hermandades maestras ya fue apuntada por J. PEREIRA GARCÍA, aunque sin aportar pruebas documentales al respecto, al escribir que

"en realidad, eran tres las Hermandades más importantes de aquella época en Castilla: la de Toledo, Villa Real ...y Talavera, a las cuales se unían en sus fines el maestrazgo de Calatrava."

Op. cit., p. 413.

227 C. VIÑAS y R. PAZ, op. cit., p. 74.

228 Real Cédula de 8-II-1566.

229 6-I-1572, Granada (AMAC. Caja 5, nº 3, f. 14r).

230 28-3-1587, San Lorenzo del Escorial; Pub. A. ROMERO VELASCO, "De cómo Felipe II vuelve a conceder jurisdicción civil y criminal a los pueblos de las Órdenes Militares que él mismo se las había quitado", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 2ª época, nº 8, pp. 223-232.

231 Vid. J. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, *Mesta, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava durante el siglo XVI*, Madrid, 1987, p. 111.

232 La recuperación de la primera instancia jurídica no fue bien vista por todos. En el caso concreto de Almodóvar del Campo, el 6-I-1592, su procurador general exponía que dicha adquisición redundaba en perjuicio de la República, talándose los montes de Sierra Morena y las encinas de Alcudia con la anuencia entre las justicias, y consumiendo sus alcabalas, "porque haciendose las tales rentas por alcaldes ordinarios sus deudos amigos y parientes las pondran y las remataran en menos de lo que valen", alegando que el concejo estaba grabado con

innumerables censos, y que si "la dicha jurisdiccion se compre no se podra pagar si no haciendo repartimiento a pobres y ricos" (AMAC. Caja 1, nº 121). Tales quejas fueron desatendidas, y en 1594 los munícipes se comprometen a rescatar dicha jurisdicción, pagando cada vecino 4.500 mrs., hasta sufragar los 30.000 mrs., pagaderos en tres cuotas anuales (AMAC. caja 5, nº 4).

233 En el inventario realizado del archivo municipal de Almodóvar del Campo, probablemente realizado en la década de 1670, se consignan dos documentos al respecto sin fechar: una provisión relativa a los caballeros de la sierra registrada en el leg. 3, nº 15; y la disposición por la cual dichos oficiales electos podían prender, en el leg. 11, nº 15 (Ib., Caja 4, s. XVI, nº 2, s.f.).

234 En 1575, Terrinches -localidad del priorato de Santiago-, se responde a la cuestión 44 del Interrogatorio de Felipe II, que se "nombran cuatro caballeros de la sierra que corren la tierra para guardar los montes, cotos y vedados", votándose primero los candidatos que luego serán encantarillados tras el escrutinio para proveer ambas alcaldías de Hermandad General. C. VIÑAS Y R. PAZ, op. cit., p. 499.

235 La elección de caballeros de la sierra se contemplan en las ordenanzas ciudarrealeñas aprobadas en 1494 (AGS. CC. Div. de Castilla, leg. 1, nº 4), así como en las de principios del Seiscientos (AMCR. Actas Capitulares, leg. 10, s.f.).

236 En Toledo el panorama, si cabe, es más complicado, aunque la situación se estabilizaría paulatinamente. Entre 1512 y 1545, el ayuntamiento articula una serie de disposiciones que, recopiladas, actuarán como auténtico reglamento local de la Hermandad del Reino,

supeditada a los designios del cabildo municipal (AMT., caja 2, leg. 1, nº 10, s.f.).

La Hermandad de las Dos Sislas, confirmada por Carlos I, con la adhesión de la Ciudad Imperial se colocó bajo la órbita de la incontestable preeminencia de sus diputados. Por otro lado, el pulso entre los cabildos municipal y de la Hermandad Vieja de la ciudad se saldó con la concordia de 1534, en virtud de la cual se respetaba la jurisdicción de la entidad apícola en los Montes de Toledo, tan contestada desde mediados del Cuatrocientos, legitimando al ayuntamiento para dilucidar cuestiones apícolas en su señorío (AMT. caja 2, leg. 1, nº 2, 11, 13 y 29), logrando el concejo toledano la exención de la asadura para sus vecinos en 1539.

2. ORGANIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN CIUDADREAL EN LA EDAD MODERNA.

AUSTRIAS MENORES Y BORBONES.

El destino del Santo Tribunal manchego, que a lo largo de su existencia corre parejo a las vicisitudes que afectaron a la ciudad que lo alberga, entró en el siglo XVII en un estado de decadencia alarmante. Los Austrias Menores trataron, por todos los medios, de renovar una institución que empezaba a asemejarse por su inacción al resto de las Hermandades Generales del Reino, anquilosadas en gran parte por el peso de una tradición que, antes que fortalecerlas, parecía hundirlas ineludiblemente en la indolencia y la falta de operatividad. Sólo la voluntad regia de salvaguardar las preeminencias hermandinas, mediante la confirmación y acrecentamiento de sus privilegios o a través de los veredictos generalmente positivos de Consejos y Chancillerías lograrían mantener un dispositivo de seguridad que se mostraría imprescindible debido a los acontecimientos internos de la Monarquía¹.

El siglo XVII supuso un periodo de recesión para Ciudad Real. Ya a fines de la anterior centuria hospitales, pósitos y personas piadosas intentaban paliar, con mayor o menor fortuna, la indigencia de amplias capas de la población². En la coyuntura finisecular, se hace patente un "hambre de tierras" que se tradujo en el choque directo con los intereses de las Órdenes Militares circundantes, saldándose casi siempre a favor de los vecinos del realengo³. La repoblación entre el Taño y Sierra Morena continuó durante el quinientos, y en ese periodo aparece configurada una oligarquía urbana orientada hacia la explotación de los recursos pecuarios, al ser poco atractiva la puesta

en cultivo de tierras. La autarquía de este grupo de poder es apreciable, siendo su modo de vida ignorado por la burocracia de servicio que medraba en los principales centros neurálgicos de la Corona de Castilla, relativamente alejados de La Mancha.

El mantenimiento de un cierto nivel de intercambio comercial en la comarca había atraído a un puñado de judeoconversos portugueses a la ciudad, con el ánimo de intervenir en el pujante negocio lanero, pero que fiscalmente aportaban poco o nada al vecindario⁴, e incluso se ganarán la antipatía de la población tanto por las acusaciones populares de tibieza religiosa cómo al pretender Felipe IV donar Ciudad Real al duque de Aveiro, intento vano ante la indisposición unánime a esta pretendida enajenación.

Mayor importancia socioeconómica comportaba la población morisca, nutrida en Castilla La Nueva y Extremadura, asimilada en algunos casos a la población que la acogía, y cuyo número, en principio bajo, se incrementó por la diáspora subsiguiente a las revueltas de las Alpujarras del reinado de Felipe II; si en La Mancha se estima en una décima parte del total el porcentaje de moriscos, únicamente en su capital había entre dos mil a tres mil moriscos a principios del Seiscientos, conformando un contingente demográfico más importante por su peso económico que poblacional, al integrar una pequeña burguesía manufacturera muy activa en la artesanía del cuero, la orfebrería, la cerámica y la arriería. Las actuaciones contra los moriscos comienzan en 1609, alcanzando su cénit en 1611, pero no será hasta agosto de 1614 cuando se comunique al corregidor, licenciado Alonso Nieto, que se daba por concluida la expulsión definitiva de esta minoría, procediendo a castigar a los contraventores con penas de galeras, doscientos azotes y confiscación de todos sus bienes⁵. La

repercusión de la deportación de gran parte de los moriscos de la Península⁶, conllevó un notable descalabro a la capital manchega⁷, pese a lo cual se mantuvo la presión fiscal⁸, aunque se liberaron numerosos bienes patrimoniales a favor de los cristianos viejos.

El mercado franco local, confirmado por los Reyes Católicos, había languidecido durante décadas hasta su desaparición, eclipsado por el celebrado en Almagro, pese a lo cual funcionaban en La Mancha ferias rurales ajenas al necesario refrendo de la Corte⁹, y hasta 1623 no se volvió a conceder su reimplantación en Ciudad Real todos los sábados¹⁰, estimulándose a su "gente a poblar y criar".

Tras la expulsión de los moriscos la demografía urbana no presentará variaciones substanciales, permaneciendo la ciudad en una atonía de la que ya empezaban a salir la mayoría de las ciudades castellanas de la época. Esta decadencia suscita repetidas representaciones a Cortes para intentar que disminuyese la carga fiscal sobre los vecinos pecheros: a las plagas de langosta de 1620-1622, siguió en 1647 la peor cosecha del siglo, y la carestía de grano de 1679-1680 dio paso a un ciclo de peste endémica hasta 1685. La situación se hizo insostenible en 1681, cuando un memorial manifiesta

"...la ymposibilidad con que esta ciudad se alla de pagar sus Reales Servizios por aver proseguido en los encabezamientos desde año de seiscientos y diez que tenia mas de dos mil vezinos y allarse oy con menos de ochozientos y estos muy pobres por aver faltado mas de ochocientos mil ducados de los caudales de cavalleros ricos que an fundado conventos e obras pias y casado sus hijos y hijas fuera desta ciudad con que esta totalmente arruynada, que se junta el aver asimismo faltado seis mercaderes los mayores contribuyentes y siendo los tres portugueses que los llevo presos el Santo Oficio de la Ynquisicion y los otros tres por homicidas de otro de su trato an perdido la tierra y las haziendas en cuia ocasion -sobrevino- la baxa de la moneda..."¹¹

Unos años después, durante el segundo semestre de 1684, las tercianas sumaron más de un millar de víctimas como secuela de la epidemia que asoló Castilla por esas fechas¹², teniendo particular incidencia en la masa de jornaleros que componía la mayoría poblacional y cuyo número iba en aumento. Esta situación distaba mucho de ser aliviada ante la reiteración de los fraudes fiscales, perpetrados sobre todo por los poseedores de bienes amortizados y en régimen de mano muerta¹³.

Habrá que esperar al siglo XVIII, con el advenimiento de la Casa de Borbón, para que se asistiese a una moderada recuperación demográfica y económica de La Mancha¹⁴, pese a permanecer muchas propiedades agrícolas infrautilizadas, aunque fuesen enajenadas las mejores tierras comunales de muchos pueblos.

Políticamente, la guerra de Sucesión tuvo ciertas repercusiones en Ciudad Real. El 9 de julio de 1706 el ayuntamiento en pleno se proclamaba fiel a Felipe V, solicitando ayuda al obispo de Jaén y a los pueblos comarcanos para defenderse de los austriacos, pretendiendo reedificar la muralla¹⁵. Pese a esta postura, en 1710 la capital manchega se entrega a los migueletes, manifestándose el corregidor don Antonio Calderón de la Barca contra tal claudicación¹⁶.

Orientada la economía hacia la labranza y la ganadería, Ciudad Real queda sujeta a las periódicas crisis de sequías o inundaciones, malas cosechas y hambre al menos en los años 1734, 1737 y 1764¹⁷, persistiendo luego coyunturales plagas de langostas, cíclicas crisis agrarias y esporádicas epidemias¹⁸. En 1735 la ruina de la ciudad era tan ostensible, que los propietarios de los puestos ambulantes de su mercado se desviaron a la feria de Almagro.

La nobleza local conforma una oligarquía urbana cuyo ámbito de influencia raramente trasciende los límites comarcales, controlando con cierta frecuencia los invernaderos de la Alta Andalucía y del Campo de Calatrava, en particular el valle de Alcudia¹⁹, y los circuitos laneros de la zona. Los más acaudalados diversifican sus intereses en censos y juros en Ciudad Real y villas circundantes, así como de los principales emporios de Andalucía y de Castilla. Este patriciado no se constituye en un factor favorecedor del latifundismo, sino que posee multitud de posesiones dispersas, arrendando dehesas maestras en los límites meridionales de la provincia como invernaderos y los agostaderos de los extremos castellano-leoneses. Desde el Seiscientos es perceptible un moderado trasvase de propiedades de la nobleza a un tercer estado emergente, endeudándose durante el Setecientos algunas de las familias más distinguidas de la ciudad²⁰.

2.1. PRIVILEGIOS Y DISPOSICIONES REGIAS.

Con los Austrias Menores, las Hermandades Viejas llegan a gozar de la mayor cantidad de privilegios y mercedes de las que nunca tuvieron, coincidiendo con una decadencia general de la Monarquía de la que no se sustraerán estos tribunales de justicia.

Felipe III, en 1599, preceptúa que al trasladar cartas reales el escribano copiase únicamente el principio y el final del documento, prohibiendo a Audiencias y chancillerías aceptar traslados textuales de los documentos sin sello antiguo. En esta línea, en 1601, ordena que los privilegios confirmados se encabecen con el documento original cosido al expediente, debiéndose ser custodiado los diplomas reales por los propios hermanos²¹. En 1608 se manifiesta la preocupación del Supremo Consejo por el estado de postración e inoperancia de la corporación manchega, conminándose por real orden de octubre de dicho año que sus ministros

"...fuesedes personalmente a los dicho montes de Sierra Morena y caminos de las dichas ciudades de Sevilla y Granada, y a las demas partes donde fuese necesario, a costa de los propios y rentas de la Santa Hermandad..."²²

Una real provisión de la corte de justicia granadina, en 1621, reconoce la potestad del Santo Instituto ciudarrealeno para delegar su jurisdicción en comisarios de su confianza y en quienes concurriesen las calidades y cualidades previstas para los ministros de justicia²³. Meses después, Felipe IV confirmaba las franquías de los colmeneros de Ciudad Real²⁴, siendo el 3 de junio de 1622 refrendadas las del Triple Instituto en su conjunto. Por real cédula de 1639 se exhorta a todas

las autoridades del Reino a auxiliar a los cuadrilleros en razón de su oficio, sin exigirles la acreditación de sus comisiones particulares secretas, sino solamente la presentación de su título y cartas de seguro. En 1644 el soberano encomendó a las Hermandades Viejas y Nuevas de la capital manchega y de Toledo que extremasen su celo en la persecución de gitanos y bandoleros, debiendo coordinar sus fuerzas para obtener los objetivos marcados²⁵.

Carlos II ratifica lo concedido por sus predecesores en julio de 1667²⁶. El 5 de septiembre de 1668, se les ordena aplicarse, junto al resto de las justicias, a la represión de la delincuencia, recordando el preceptivo auxilio mutuo entre los ministros de las diversas jurisdicciones; y el 8 de septiembre de 1678 son encauzadas formalmente las diligencias hermandinas a la coerción de los facinerosos y gitanos en montes y despoblados. Una real cédula, en las postrimerías de 1682, fijaba la perpetuidad de las escribanías enajenadas del Triple Instituto, y la facultad de sus titulares para designar individuos que las sirviesen en su nombre²⁷. A fines del Seiscientos se confiaba a los alcaldes de la corporación manchega el correcto desempeño de su instituto²⁸.

Las Hermandades Viejas, que tanto debían a los Habsburgo y a su aparato administrativo-judicial durante dos siglos²⁹, no pareció sentirse incomodada por el cambio dinástico que trajo consigo la nueva centuria. En efecto, cuando parecía que todo apuntaba a que la corporación apícola ciudarrealeña permanecería sumida en la decadencia, siendo menguados sus ingresos al mismo tiempo que los interminables conflictos de competencias agotaban sus escasas rentas, la administración borbónica logró relanzar su tribunal. Monarcas y consejos, interesados en mantener y estimular la esclerotizada

Hermandad Vieja, reorganizaron su entramado policial, dotándolo para ello con los medios adecuados para reasumir su cometido fundacional, pero ahora en aras del bien público.

Felipe V, proclamado rey de España por la presión francesa al quedar desierto el trono por la prematura muerte sin descendencia de Carlos II, hubo de hacer frente a una contienda militar en la misma Península, propiciando el recrudecimiento de las tensiones internas en sus heterogéneas posesiones, y derivando en un notable incremento de la inseguridad de campos y ciudades. El nuevo monarca, en principio a remolque de los acontecimientos, no descuidaría el debido amparo que sus antecesores habían prestado al Triple Instituto. Desconocemos si sus cabildos tomaron partido corporativamente en la Guerra de Sucesión que asolaba amplias áreas de la Corona, pero lo cierto es que cualquier duda que albergaran sobre su futuro pronto se verían disipadas por la buena predisposición del Borbón hacia la liga apícola³⁰. A principios de 1702 se expidió carta de confirmación de toda la jurisdicción y fuero privativo hermandino³¹; y en 1705 se encargaba a los manchegos la correcta ejecución de las pragmáticas de 1695 y de ese mismo año, que preceptuaban el debido control sobre la comunidad gitana, pudiendo actuar judicialmente contra sus infractores sin necesidad de consultar sus fallos a tribunal superior alguno³².

Por real provisión de 1706, se concede el permiso a la Hermandad de Ciudad Real para que sus comisarios y ministros, siempre que fuesen acompañados de sus superiores y en comisiones de justicia, pudiesen portar armas de fuego cortas de las prohibidas³³. Ante los excesos cometidos por el uso y abuso de esta garantía para llevar a cabo las diligencias y la defensa de sus vidas, el monarca debió reiterar el verano de 1713 dicho privilegio, ateniéndose a lo arbitrado con

anterioridad³⁴. A pesar de ello, el 4 de mayo de 1715 se exhorta a las justicias que auxilien a los ministros hermandinos cuando fuesen en uso de su jurisdicción. Refrendada por los sucesivos soberanos la prerrogativa relativa al traslado de los privilegios³⁵, serían asimismo confirmados sus antiguas exenciones por Luis I, en 1724; de nuevo por Felipe V, en 1725, al reasumir el trono; Fernando VI, en 1746; Carlos III, en 1760; Carlos IV, en 1790 y Fernando VII, en 1814³⁶.

Tal fue el cúmulo de privilegios concedidos al Triple Instituto, que despertó la atención de otras entidades análogas hundidas en la decadencia cuando no en virtual abandono. El duque de Béjar solicitó al Consejo de Castilla que se extendiese a la Hermandad de Santiago, con sede en Puebla de Alcocer -en el extremo nororiental de la actual provincia de Badajoz-, las mismas prerrogativas que gozaban los tribunales apícolas manchegos; estudiada la petición el 29 de septiembre de 1728, se desestimó, aunque había sido auspiciada en primer término por el Fiscal con la condición de que se sujetase a lo preceptuado respecto de las Hermandad Viejas, alegándose defectos formales al no haberse aprobado en su instancia las ordenanzas presentadas³⁷. Este dictamen dilatorio es, en realidad, una negativa de la administración borbónica a la proliferación de lo que podría llegarse a convertir en una milicia nobiliaria que fortaleciese o extendiese su señorío jurisdiccional más allá de sus posesiones solariegas.

Habrá que esperar a la España Liberal para que se aboliesen estos tribunales especiales en las Cortes de Cádiz de 1812 y, definitivamente, en 1835, al considerarlos una herencia ya superada del Antiguo Régimen.

2.2. MECANISMOS DE CONTROL SOBRE LA HERMANDAD.

Parejo a esta consolidación institucional y jurisdiccional, es perceptible el reforzamiento de los mecanismos de control a los que serán sometidos estos tribunales por parte de las Reales Chancillerías y, sobre todo, por el Consejo de Castilla. Dichas altas instancias jurídico-administrativas territoriales, contando con la puntual colaboración de corregidores e intendentes, ejercerán a partir de ahora una más intensa fiscalización judicial y financiera, a las que por otra parte nunca habían renunciado desde que fueron asentadas las bases del Estado Moderno, durante el reinado de los Reyes Católicos.

2.2.1. LOS JUICIOS DE RESIDENCIA. SIGLO XVII.

Potenciada firmemente la figura del corregidor por Isabel y Fernando, desde 1480 pasa de ser este delegado real quien asumiese permanentemente el papel de representante de la Corona en los lugares más importantes del realengo. Como tales, nombrados por el Supremo Consejo y supeditados a él, actúan con plena independencia formal respecto a los municipios donde ejercen su cargo. La complejidad y acumulación de competencias municipales los convertirán en piezas claves de la administración local, fomentándose en todo momento su espíritu de servicio al corregimiento, mediatizado por el poder central. La plaza de Ciudad Real se conforma desde 1494 como una unidad territorial adscrita a un caballero letrado, ajeno a la localidad, y supervisor de todos los cabildos de su ayuntamiento, puntualmente ocupado en los asuntos de la Hermandad Vieja.

El corregidor, previa comisión especial del Supremo Consejo según lo estilado desde fines del Cuatrocientos, o bien un juez pesquisidor nombrado expresamente desde la Corte, se encargaría ocasionalmente de ejercer la siempre difícil labor de residenciar a los oficiales hermandinos que habían agotado sus cargos. La mayor parte de las ocasiones, tales juicios no pasaban de ser una ceremonia rutinaria, evitándose indisponer con la oligarquía local que controlaba sus destinos³⁸, o por no sacar a la luz irregularidades que enturbiasen su carrera en la administración. Pero este acto de sumisión y acatamiento al corregidor, como encarnación próxima de la Corona, nunca sería admitido de grado por alcaldes ni mayordomos, al considerarlo una intromisión impropia en los fueros que gozaban desde época inmemorial.

Los trámites en la residencia del personal de la Hermandad Vieja era siempre el mismo: previa comisión especial del Consejo de Castilla, el corregidor notificaba a los alcaldes su intención de ejecutarla en el plazo prescrito, aunque prorrogable; desde su cabildo suele responderse con evasivas, tratándose por todos los medios de excusarse de este control de sus actividades pasadas. Lograda trabajosamente la acatación de la comisión presentada por el corregimiento, se fijan los días en que tomará el juicio de residencia, acompañado el delegado real de notario, contador y oficiales de pluma para revisar, en la sala capitular y ante los oficiales hermandinos, los libros de registro de todas sus actividades institucionales, jurídicas y financieras. En la eventualidad de hallarse irregularidades, se presentarán los cargos pertinentes ante los implicados, asesorados de letrado, quienes en un breve plazo habrían de alegar los descargos convenientes. A continuación, el juez de residencia fallaba el dictamen pertinente, soliendo solventar los trámites a favor de los residenciados.

A lo largo del Quinientos, algunos de dichos juicios suscitaron vivas polémicas, e incluso enfrentamientos físicos, al pretender corregidores y pesquisidores imponer sus criterios por la fuerza, pero durante las siguientes centurias la tónica general de este mecanismo de control normalizado fue la desnaturalización de su contenido, al carecerse de la firme decisión para corregir los abusos presumiblemente cometidos por los inspeccionados.

Si en 1598 el recién nombrado corregidor el doctor don Luis de Haro Salazar pudo tomar las cuentas al arquero hermandino Cristóbal Sánchez Aguado³⁹; peor suerte corrió el licenciado Alonso Palomeque,

representante regio saliente en 1611, de quien se decía que se había adueñado de cuarenta mil maravedís de los caudales de la Hermandad Vieja, por lo que su sustituto fue obligado a desistir en residenciar a los oficiales de dicha corporación. Poco después, en 1615, el doctor Lázaro de Ocaña informaba al Supremo Consejo que tras tomar posesión del corregimiento manchego había pretendido verificar la correcta gobernación de su Santo Instituto, a lo que se oponían alcaldes y hermanos

"...diciendo que aunque sus comisiones les mandava tomar residencia a los alcaldes de la ermandad esto se entendia de los alcaldes de la ermandad nueva pero no con los de la ermandad Viexa porque para ello decian era necesario comision particular..."

Ante esta situación controvertida, el presidente del Consejo de Castilla ordena expedir el documento requerido para facilitar la labor de su delegado, emplazándole a que ejecutase la orden en el plazo acostumbrado de cuarenta días. Tras examinar los balances contables de los quince años anteriores, a mediados de septiembre, el escribano receptor de los Reales Consejos Francisco Pérez exponía las irregularidades verificadas: los ex-alcaldes don Sebastián Arriaga y don Pedro Gámez, en 1601 y 1606 habían tomado dinero de los propios de la organización, pese a no haberse efectuado las pertinentes salidas para "recorrer la tierra"; un día después se ponía de manifiesto que alcaldes y regidores en 1601 habían librado más de trescientos reales para distribuir perdices como aguinaldo entre los hermanados y sus dependientes, contraviniéndose lo dispuesto en los Capítulos de Maldonado, dándose cuarenta y ocho horas de plazo para exponer los descargos ante el corregidor. A su instancia, la Chancillería de Granada concede una prórroga de diez días en la residencia, y el juez, al límite de la fecha estipulada, exculpa a los oficiales hermandinos,

declarando a sus alcaldes "buenos ministros". La Hermandad hubo de sufragar todos los gastos, estimados en unos diez mil maravedís, con los que retribuir al escribano, al contador Francisco Pérez, a Alonso Ximénez y al resto de los oficiales asistentes a la residencia⁴⁰.

Tenemos referencias dispersas sobre controles efectuados por dichos comisionados a la Hermandad de Ciudad Real con una cadencia de diez años; así lo hicieron los corregidores don Fernando de Peñafiel Ortiz en 1622; el licenciado Marco Antonio de Oviedo, en 1632; don Antonio Laynez de Torreluenga, en 1642, "con los ministros de su juzgado sin que ni el ni ellos llevasen salarios algunos"; y, probablemente, lo intentase don Diego Palacios y Tovar en 1652; poniéndose de manifiesto mediada la centuria que "en las cuentas que asta acra se han tomado por los jueces particulares de residencia no a avido alcances algunos"⁴¹, es decir, que a tenor de esta información nunca habrían prosperado los pretendidos cargos contra los oficiales salientes.

Cuando en mayo de 1655 cumplió su etapa como delegado regio dicho corregidor, su juez de residencia y sustituto interino, don Rodrigo de Cantos Royo, en su celo pesquisidor, pretendió extender su labor al Santo Tribunal aún cuando no se habían consumido el tiempo de sus empleos, lo que soliviantó a los hermanados. De inmediato, el cabildo apícola otorga procura a dos diputados para hacer llegar al Consejo de Castilla tamaña arbitrariedad, aduciendo para tratar de eximirse de esta pretendida supervisión la cortedad de rentas de la organización, sus frecuentes salidas a Sierra Morena, las dehesas de Guadalerza y Extremadura, pacificando lugares tan conflictivos y mostrándose pródiga en socorrer a los pobres vergonzantes⁴².

Desde entonces no contamos con testimonios fidedignos de posibles residencias a los hermanados⁴³, aunque en el último cuarto del siglo, se volverá a encargar al corregimiento ciudarrealeno de hacer un informe sobre el Santo Instituto manchego.

Mientras tanto, durante el Seiscientos, la correlación de fuerzas era muy distinta en la Ciudad Imperial. Sus corregidores sí lograrán inmiscuirse en los asuntos tocantes a la Hermandad Vieja: en 1609 se presenta una provisión real que permitía al corregidor toledano, o a su lugarteniente, cobrar los alcances contra los mayordomos hermandinos⁴⁴. cuando en 1624 los alcaldes salgan a visitar los montes y lugares de la jurisdicción municipal, el cabildo de jurados se opondrá firmemente a ello⁴⁵; en 1659 el corregidor residenciaría a los ministros salientes de la Hermandad Vieja, teniendo "comision particular de los señores del Real Consejo de Justicia"⁴⁶. Meses más tarde, dicho delegado regio usurpaba con violencia la jurisdicción privativa del Santo Instituto "sacando la espada y tirando muchas estocadas", a los cuadrilleros para arrebatárles a un reo⁴⁷.

Estas rivalidades reiteradas en Toledo alcanzan su punto álgido a principios de 1682, cuando el corregidor de la Ciudad Imperial logra un decreto, fechado el 20 de diciembre anterior, por el que le capacitaba para presidir junto a los alcaldes las juntas de la Hermandad Vieja local. Desde la corporación agraviada se remite a la Corte un encendido memorial en que se rechaza terminantemente

"...novedad tan extraña que en tantos siglos como tiene de antigüedad esta Hermandad no ha necesitado para sus juntas y cabildos de que se presida ni asista otros que no sean sus alcaldes...desde que se insituyo esta Santa Hermandad Vieja dividida en Toledo, Ciudad Real y Talavera, siempre sus alcaldes se an governado por si presidiendolos y asistiendo a ellos sus alcaldes a quien los demas obedecen jamas se ha visto los

presida corregidor ni otro juez alguno; por si tienen su presumpcion de su acertado gobierno...".

Exponen la supuesta operatividad de las residencias a la que periódicamente se ven sometidos, nunca prosperando los cargos contra la corporación colmenera, y que el motivo final de esta pretensión era que como la Hermandad Vieja

"...tiene jurisdiccion a prevencion con los corregidores dales muy cara miran a sus ministros con zeño y desean por todos medios aniquilar esta jurisdiccion; causa los muchos zelos y no quisieran a sus ojos tener ministros que sin su dependencia sentencian a muerte azotes y galeras a presidios y destierros y como ellos teniendo la misma jurisdiccion con la prerrogativa ordinaria, no velan como lo hacen los ministros de la Santa Hermandad porque lo ocasiona la ocupacion de su gobierno y no tener sujetos a proposito e ynteligentes..."

Con el corregidor presidiendo sus cabildos -concluye la representación- se dilatarían las causas criminales así como los asuntos corporativos, aventurándose pronto el fin de la asociación, pues se presupondría su falta de rectitud, y "faltando el credito y buena fama se destruyen los progresos del Tribunal"⁴⁸.

A la vista de tan prolijo como bien argumentado memorándum, será el propio Supremo Consejo el que, el 18 de abril de 1682, revocará el real decreto que lo suscitó. El ayuntamiento toledano respondería, tardíamente, prohibiendo a los hermanos de la Hermandad Vieja permanecer en sus cabildos siempre que se tratasen asuntos que les concerniesen⁴⁹.

Ante la debilidad general que muestra la Corona, particularmente en las décadas centrales del Seiscientos, y la incapacidad evidente de sostener incluso la propia gobernabilidad de la Monarquía, la administración de justicia parece que vuelve momentáneamente a ser

considerado un asunto local, a menudo más allá del control central, con las implicaciones derivadas de ello. Una mayor autonomía de las jurisdicciones inferiores evidenciaba la imposibilidad de los Habsburgo por mantener el control efectivo sobre los órganos de justicia local y territorial castellanos, entre los que se encontraba el Triple Instituto.

2.2.2. SUPERVISIÓN DE CONSEJOS Y CHANCILLERÍAS. SIGLO XVIII.

La política de los Austrias de someter a las Hermandades Viejas al sistema de juicios de residencias, siguiendo el modelo de control aplicado a los corregidores, sus asistentes y a los munícipes, obtuvo unos resultados mediocres. En la práctica, la fiscalización de sus actividades mediante sus delegados investidos de comisión particular fracasó en último extremo, al oscilarse del enfrentamiento directo a la complacencia interesada entre instituciones tan poderosas del ámbito local. Siempre que el carácter autoritario de unos u otros titulares no prevaleciese sobre la comunidad de sus intereses, estos representantes del poder regio no iniciarían de motu propio acciones que comportasen una ruptura del difícil equilibrio alcanzado.

En este contexto, los corregidores entrantes preferirían no complicarse su labor bianual en la ciudad cuestionando mediante el juicio de residencia el proceder hermandino, suscitar tensiones innecesarias que emborronasen su hoja de servicios, o que entorpeciesen presumiblemente su trayectoria ascendente en la burocracia. Dejando a un lado la previsible influencia de la personalidad de los corregidores, mientras que en Ciudad Real, escalafón medio-bajo de la carrera administrativa, no suelen atreverse a enemistarse con la plutocracia urbana; en Toledo, corregimiento preeminente, dicha plaza solo sería alcanzada por aquellos de innegable valía personal o que se hubiesen destacado por su celo en el desempeño de sus funciones, siendo el evidenciar firmeza en su labor una buena plataforma para alcanzar metas más altas en el organismos sinodiales o en los altos tribunales de justicia del Reino,

suscitándose por ello con mayor reiteración una polémica más agria entre dichas instancias.

Los Borbones, mucho más dispuestos a centralizar los órganos de poder, dejaron a un organismo tradicional de la administración territorial austriaca, el Consejo de Castilla, la coordinación y supervisión directa de los tribunales Viejos de Toledo, Talavera y Ciudad Real. Finalizada la guerra de Sucesión, se reforzará notablemente el control sobre los colmeneros manchegos desde Madrid. Ésto se conseguirá bien directamente, articulando desde dicha instancia medidas de gobierno y de verificación de sus actuaciones jurídico-corporativas, o bien a través de los órganos delegados de la Corona. En este sentido, la Real Chancillería de Granada, en el caso ciudarrealeno, junto a las justicias de las poblaciones de su jurisdicción, estarían encargadas de velar por la correcta actuación de sus ministros, encomendándose al corregimiento manchego la toma de cuentas a sus mayordomos cuando se creyese conveniente. Los informes instruidos desde todas estas instancias se remitirían a Madrid por correo ordinario, dictaminándose en el Supremo Consejo lo más conveniente para el bien público.

El 9 de octubre de 1715 el cabildo de la Hermandad de Ciudad Real en pleno, consciente del despacho indiscriminado de títulos a personas indignas de ello, dispuso hacer un formulario para regular la admisión de solicitudes para el ingreso como comisarios. Se exigirían unas requisitos semejantes, aunque menos duros, que a los pretendientes a un hábito militar, adoptándose otros que respondiesen a las necesidades concretas de su instituto. El 17 del citado mes y año, ya estaba concretado los términos exactos del interrogatorio, en cuyos seis puntos se expresan las cualidades precisadas para la admisión:

legitimidad familiar y limpieza de sangre; limpieza de antecedentes criminales por causas de Hermandad; limpieza de oficios⁵⁰; así como disponibilidad patrimonial para mantener caballos y armas con los que estar prontos al servicio requerido; los dos últimos puntos regulan la toma de informes en aquellos lugares donde estuviesen afincados los solicitantes, previa remisión desde Ciudad Real de una copia manuscrita del cuestionario, rubricada por un escribano y un alcalde hermandinos, donde se expresase la fecha de su despacho, dicho formulario sería devuelto al tribunal cosido a la cabeza del memorial instruido con las respuestas de los testigos y los informes de las justicias del lugar⁵¹.

Aprobado este instrumento del cabildo manchego por el Supremo Consejo el 9 de junio de 1716, al menos desde noviembre anterior ya venía siendo utilizado regularmente por el Santo Instituto⁵². La orden de Madrid, formulada a principios de 1717, para que las Hermandades Viegas informasen sobre la calidad y cualidades de sus integrantes no cogió desprevenido a los ciudarrealeños, donde ya se había preceptuado la nulidad de los títulos expedidos irregularmente⁵³, cristaliza en el Real Decreto de marzo siguiente⁵⁴. Sin embargo, las diligencias se demoran, debiéndose establecer un nuevo plazo de dos meses para ejecutar la remisión de un registro de los títulos expedidos y de las causas substanciadas.

De inmediato, dichos mandatos serán cumplidos por los alcaldes manchegos, admitiendo su tribunal " el desorden de tantos ministros y titulos como estaban repartidos por el Reyno, y no nacidos los mas de ellos para empleos superiores"⁵⁵. Aunque el 2 de abril de 1717, se aseguraba por el cabildo ciudarrealeño que "se han recogido muchos -títulos-, y se recogeran los demas que se aberiguase estar en

personas no benemeritas", ninguna de las entidades coaligadas remitieron el informe requerido desde la Corte⁵⁶.

El 15 de diciembre de 1717, el Fiscal del Consejo, en vista de la representación hecha por el Triple Instituto, aconsejaba que los miembros del supremo órgano de la administración territorial castellana tuviesen una copia del formulario establecido por los ciudarrealeños en 1715, recomendándose su extensión al resto de los tribunales apícolas para su puntual observación. Conocedor que el Santo Tribunal manchego ya se habían recogido, a título propio, los nombramientos ilegítimos, solicitaba que continuasen tan loables diligencias⁵⁷.

Por entonces hay una fluida correspondencia entre los miembros del Triple Tribunal, cruzándose misivas en las que esbozaban las líneas argumentales básicas de sus respuestas individualizadas a Madrid. La Hermandad de Talavera argüía que sus cuadrillas estaban esparcidas por todo el Reino, siendo impracticable y muy costosa la recogida de títulos, reconociendo que "con la guerra -de Sucesión- se les defrauda la observancia de sus privilegios", a lo que sumado que no llevaban salarios hacía que era lógico que "tampoco los hombres de estimación an querido serlo -comisarios-", y también que las causas criminales seguidas resultaban muy onerosas al obligarseles a consultarlas ante la Chancillería de Valladolid. Desde Toledo se alegan similares argumentos, asegurándose que sus títulos expedidos eran anuales, debiendo ser ratificados ante el cabildo para prorrogar su legitimidad, así como que sus desvelos contra gitanos y malhechores resultaban inútiles por la dilación de los procesos en Valladolid y por el asilo concedido ineludiblemente por los eclesiásticos⁵⁸.

A principios de 1733, el cabildo hermandino de Toledo trató en su asamblea ordinaria de desmarcarse de la irregular actitud del resto de coaligados, proponiendo

"...recoger los títulos de quadrilleros y comisarios de la tres Hermandades Viejas que esten auxiliados por el respecto de los muchos que se abian despachado, y espezialmente por la de Ziudad Real."⁵⁹

El desorden en el despacho de títulos por parte de las Hermandades Viejas determina la declaración del Supremo Consejo de un interdicto de nombramientos el 26 de abril de 1735, no admitiéndose desde entonces a trámite las auxiliatorias por parte de los escribanos de Cámara, y recogiendo otras acreditaciones con la colaboración de las autoridades locales⁶⁰.

A finales de 1739 se solicita a la corporación manchega la remisión de una relación detallada de las calidades de sus dependientes, así como su valoración de una posible reducción de los mismos a un número fijo⁶¹. El 15 de mayo de 1740, el Fiscal del Consejo, pretendiendo erradicar los frecuentes abusos perpetrados, recomendó la retirada de los despachos expedidos sin validación del Consejo de Castilla en el plazo de dos meses, prescribiendo que "los que aya en la Corona de Aragon se recojan absolutamente"; que todos los asuntos relativos al Triple Instituto pasase de oficio a la Sala Primera de Gobierno, y que se remitiesen informes sobre sus ordenanzas, si las tuviesen, para su corrección o su creación, siguiendo los pasos de la fraternidad colmenera toledana⁶².

A este tenor, en mayo y junio de 1740 se instruyó una Real Provisión para que anualmente los tribunales Viejos de Toledo, Talavera y Ciudad Real remitiesen sus cuentas ante el Supremo Consejo,

que a su vez lo haría llegar a la Contaduría de Hacienda⁶³. Tales mandatos cristalizaron en el Auto Unico de 23 de mayo de 1740⁶⁴ y la Real Cédula de 18 de junio siguiente⁶⁵, mediante las cuales Felipe V confirmaría los privilegios y preeminencias de dichas entidades, mermando sus atribuciones jurisdiccionales, circunscribiendo el despacho de títulos y sometiendo su labor coercitiva al control central. Poco después establecía los requisitos de sus integrantes, derogando algunas de sus inmunidades el 30 de junio de 1740⁶⁶.

En septiembre de 1745, desde la Corte se dispone que se auxilien a los pretendientes toledanos, no así a los de Ciudad Real, y emplaza a que dentro de seis meses se le remitiesen cuentas y el estado de sus causas criminales instruidas hasta la fecha, lo que por entonces solo había cumplido la entidad de Toledo⁶⁷. El 28 de marzo de 1749 el cabildo manchego designa a su alcalde, don Bernardino Muñoz de Loaysa, para que expusiera ante los Reales Consejos la penosa situación en que se hallaba el Santo Tribunal como consecuencia del interdicto de títulos, multiplicándose los delitos

"...en grave perjuicio de los caminantes, pasajeros y demás avitantes en despoblado, para el cobro y custodia de sus caudales, y asimismo se han experimentado tropelías y robos en iglesias santuarios, hurtos en campo yermo, cuyas noticias aunque se han comunicado a este Santo Tribunal por sus ministros anteriormente nombrados a referido interdicto y por falta de ellos, y por no estar corrientes sus títulos no se les ha podido cometer la averiguación de referidos hechos..."⁶⁸

En 1751, tiene lugar la derogación de la suspensión en el despacho de auxilatorias al Triple Instituto; el 20 de septiembre de 1753 sería remitido a Madrid el informe requerido sobre pleitos instruidos hasta esa fecha. Hacia 1754 se redacta un nuevo formulario, trasunto del establecido en 1740, aunque con ciertas modificaciones: se ordena estimar la vecindad del lugar, y si hubiese algún otro comisario,

estableciéndose que en las cabezas de partido se nombrase en máximo de un ministro superior y tres jueces comisarios, en las villas de más de mil vecinos un comisario superior y dos cuadrilleros, en las poblaciones de quinientos a mil vecinos dos ministros, y en las de menos de quinientos un único dependiente⁶⁹. En diciembre de 1755, el cabildo general de la Hermandad Vieja de Ciudad Real, consensúa acatar la disposición precedente, regulando los derechos por la expedición de títulos a los comisarios superiores y a sus subalternos; los primeros pagarían doce pesos y ocho los segundos⁷⁰.

No se demoró demasiado un nuevo interdicto ante los abusos en la proliferación de nombramientos por el Triple Instituto, significándose negativamente la entidad manchega. El 4 de febrero de 1758 cesaba la tramitación de provisiones auxilatorias, dando lugar a un sombrío suplicatorio por parte de los ciudarrealeños en el que se consigna que esta medida amenazaba con colapsar el funcionamiento del tribunal por falta de personal cualificado⁷¹. Hasta enero de 1761 no se levanta el interdicto para los dependientes ciudarrealeños, tras haberse recibido informe puntual de las ordenanzas formadas y de los caudales corporativos⁷². En Madrid, el 3 de abril de 1762, el Fiscal del Supremo Consejo, expone ante dicha institución que, aunque siguen evidenciándose graves desarreglos en el seno de los colmeneros, pues

"...no puede haber justo motivo para embarazar su ejercicio, denegando las auxilatorias a los títulos que se despachan por ellas, nombrando comisarios, y quadrilleros, a menos que se juzgue convenientes extinguirlas del todo."⁷³

El 23 de julio de 1762 se prescribe por el Consejo de Castilla que las cuentas remitidas desde Ciudad Real se pasasen por la Contaduría General de Propios y Arbitrios para su liquidación, informándose a continuación al Fiscal de los resultados. Al día siguiente se expedía

Auto Acordado mandando que, sin embargo de lo prevenido en las ordenanzas formadas a mediados de la centuria por cada una de las entidades federadas, en adelante sólo podrían nombrar anualmente un juez superior, un comisario y cuatro cuadrilleros en los lugares de vecindad en un radio de treinta leguas en torno a sus respectivas capitales, señalando como límite el Tajo, y "prohibiéndoles expresamente el uso de armas blancas cortas"⁷⁴.

A partir de entonces, la concesión de auxilatorias supone, en la práctica, la expurgación de los beneficiados con el título hermandino, procediéndose a comprobar individualizadamente sus calidades en lo que puede considerarse un desdoblamiento del control sobre los candidatos aceptados en primera instancia en el Triple Instituto, duplicándose trámites y gastos por parte de los mismos. Desde la promulgación de dicho Auto, comienzan a emitirse auxilatorias a los nombramientos despachados por la corporación manchega por estricto orden de antigüedad en el Consejo. Poco duró esta liberalidad porque, el 2 de octubre de 1762, el Fiscal indicaba que desde marzo de ese año no se había tramitado auxilatoria alguna de los tribunales de Toledo ni Talavera, y debido a la mayor demanda de las pretensiones de ingreso al de Ciudad Real propone aumentar su cupo de cuatro a ocho cuadrilleros, en detrimento de sus homónimas, proyecto que parece no prosperar.

En enero de 1763 se reciben en Madrid las cuentas remitidas desde la Ciudad Imperial y desde la capital manchega, no así las encargadas al alcalde mayor talaverano. En 1772, el cabildo de la entidad toledana intentó infructuosamente desvincularse de nuevo de la suerte de las Hermandades Viejas, abogando que era arbitrario tratarlas por igual, argüyendo aspectos meramente formales como el que "no hay en

ella juez superior, sino tenientes cuadrilleros mayores, que hacen pruebas de su nobleza; que no hay tampoco comisarios sino cuadrilleros"; manifestando por la proximidad respecto de los otros tribunales era imposible no enzarzarse en continuos litigios de competencias⁷⁵. Ante la pertinaz falta de rigor en el despacho de títulos de hermandad por parte de los escribanos manchegos, el 11 de noviembre de 1773 vuelve a promulgarse un nuevo interdicto, en esta ocasión restringido a sus dependientes.

La desunión entre las corporaciones manchegas y sus fluctuantes relaciones con la administración borbónica ilustrada, vuelve a sufrir una dura prueba en 1774. El 14 de marzo de dicho año se interpreta que el testimonio de cuentas presentado tiempo atrás no estaba arreglado a lo dispuesto, por lo que el 8 de mayo siguiente se ordena al corregidor de Ciudad Real que fiscalizase la hacienda de la entidad local, recibiendo tal comisión el 16 de agosto⁷⁶. El mandato fue más fácil de ordenar que de ejecutar, y en mayo de 1777 aún no se había hecho efectivo, debido a una disputa entre inspector e inspeccionados. Dicho litigio se remonta a 1774, cuando el corregidor don Joseph Mendoza Jordán, en virtud de su comisión, retiene más de diecinueve mil reales en su poder de las arcas hermandinas, asegurándose en septiembre del citado año la percepción de lo tasado como derechos en tales diligencias⁷⁷. Como quiera que en diciembre de 1774 el corregidor seguía en posesión de los libros capitulares y de los balances contables, uno de los alcaldes eleva su queja al Consejo ante esta anomalía.

El conflicto permanece en vía muerta durante más de un año, hasta que en las Navidades de 1775 se decide elegir dos diputados por el concejo que, junto con el personero del común, mediasen en tan grave

desaveniencia⁷⁸. Al ser examinadas las cuentas se echan en falta las correspondientes al periodo 1768-1769, un letrado acompañado de escribano levanta acta de todo el proceso y la Hermandad pagó unos gastos de personal que ascendieron a mil reales de vellón⁷⁹. A pesar de este arbitraje, los malentendidos durarán, al menos, hasta febrero de 1778.

Ante los periódicos interdictos de títulos impuestos por el Consejo de Castilla, la entidad manchega articuló un sistema de dudosa legalidad para eludir tales directrices dictaminadas desde el cada vez más cercano poder central que entorpecía el seguimiento de los asuntos de justicia. Este método era el despacho de comisiones de justicia a quienes las solicitaban, argucia mediante la cual se concedían prácticamente los mismos privilegios que el título reglado, pero que se eximía el engorroso trámite de ser validado por el Consejo. Esta conducta, ciertamente irregular, sale a la luz en 1776, cuando el 11 de mayo de dicho año la justicia ordinaria de Talavera la Real -Badajoz-, procede contra el esquilador Andrés García y don Juan Muñoz Cabrera, éste último por entonces "un pobre hortelano que solo se mantiene y a su familia con el corto estipendio de la legumbre, que produce una pequeña huerta que tiene tomada a censo"⁸⁰. Mientras el primero, consciente de su indefensión, entrega su comisión por saberla nula, el segundo lleva sus quejas del alcalde ordinario ante la Real Chancillería granadina. El Consejo de Castilla, sabedor del caso, ordena la recogida de ambas comisiones y que el corregidor manchego comunicase a la Hermandad local que en la expedición de las referidas acreditaciones, particulares o generales, se ciñese en todo momento a la instrucción de 1760.

Los colmeneros de Ciudad Real prestan poca atención a esta recriminación, como lo demuestra el incendiario memorial del procurador síndico general don Agustín Pérez de Madrid, en febrero de 1779⁸¹. Alertado el Consejo, y que pese al interdicto de títulos la audiencia de Granada seguía auxiliando cuantas comisiones generales les habían presentado⁸², se prescribe que el corregimiento informase a los alcaldes hermandinos que no expidiesen nombramientos ni comisiones sin el debido fiat de la Corte, impeliéndoles a notificar relación de las acreditaciones libradas en el último decenio y remitiendo las no contrastadas por Madrid⁸³.

Recriminada la Real Chancillería de Granada, en 1781 una ejecutoria de su Sala del Crimen dispone que el tribunal manchego remitiese justificación de sus atribuciones, pues sus comisarios se arrogaban facultades impropias de su instituto, habiéndose

"...introducido en muchos pueblos del territorio a tomar conocimiento de causas que no les corresponden vejando los vasallos y usurpando las potestades lexítimas en termino de provocarles cada día nuevas y empeñadas competencias..."⁸⁴

El 15 de marzo de 1781, una real provisión dirigida a los alcaldes de Ciudad Real, inserta una petición del Fiscal don Antonio de Elizondo, para que le hiciesen llegar "por correo relativo", testimonio de los privilegios que gozasen en su distrito, habiéndose prevenido anteriormente a Granada de dicha instrucción⁸⁵.

La última referencia que tenemos en el Setecientos de una intervención directa del Consejo de Castilla en los asuntos internos de la corporación manchega data de 1782, cuando se libraban al corregidor don Francisco Toral y Almansa mil quinientos reales en

concepto de derechos por evacuar un informe a Madrid sobre las cuentas y las causas criminales de la Hermandad local⁸⁶.

En las últimas décadas del Siglo de las Luces parece haber una comunicación más fluida entre dicha entidad y la Corte⁸⁷, algo mejor predispuestos unos y otros por la validación de los nuevos estatutos aprobados por el Supremo Consejo en 1792, imbuídos en gran parte del espíritu ilustrado de la época⁸⁸, tanto como por el acelerado proceso de deterioro institucional del Santo Tribunal, plegado totalmente a las iniciativas de los órganos de poder central de la Monarquía⁸⁹. Aunque tardíamente, se había logrado imponer los criterios de la burocracia castellana sobre algunos de los particularismos encarnados por el Triple Instituto; en la práctica, la autonomía orgánica que habían disfrutado hasta la fecha persistió en gran medida, al no existir una política definida tendente a remodelar unas entidades tan deterioradas por el paso del tiempo. Cuando los traumáticos cambios que se anunciaban a fines del Setecientos tomasen forma en la siguiente centuria, se precipitaría lo inevitable: la abolición de unos órganos de seguridad medievales adaptados al Antiguo Régimen.

2.3. CABILDOS HERMANDINOS.

Conformada orgánicamente cada una de las Hermandades Viejas de forma análoga durante el periodo bajomedieval, las estructuras resultantes se asemejaban a la de los cabildos eclesiásticos y concejiles de la época. A sus sesiones capitulares asistían los miembros estantes en las localidades que albergaban las sedes de sus tribunales. Los dueños de las explotaciones en despoblado, seguramente desde el primer momento, se harían con el control efectivo de los resortes decisorios de dichas entidades; así, desde la ciudad, el patriciado local manejaba según sus intereses a colmeneros y serranos, colaboradores ejecutivos que constituyen el elemento directo y estable de autoridad sobre el yermo.

En su doble vertiente gremial y coercitiva se intentaba garantizar la estabilidad poblacional y la defensa de la propiedad. En este contexto, el cabildo hermandino se erige como el marco institucional deliberatorio y decisorio por excelencia, integrado por alcaldes, cuadrilleros y hermanos, siendo esta instancia colegiada la encargada de adoptar tanto las pautas como las directrices internas de cada entidad.

En un principio se reunirían la totalidad o al menos una gran mayoría de los asociados en la casa de algún hermano preeminente, en algún lugar público que ofreciese cierta intimidad o incluso en las inmediaciones de Villa Real. Probablemente estas asambleas populares congregaban a propietarios, colmeneros, labradores, cazadores y pastores, a semejanza de los cabildos abiertos de la época, bajo la

presidencia consuetudinaria de algún hermano que por su calidad individual o por sus dotes naturales de mando fuese de reconocida autoridad. Emplazados para una fecha y lugar prefijado, mediante avisos orales -mediante el bis a bis-, visuales -hogueras- o auditivos -tañido de campanas o clarines-, eran convocados con antelación a la junta. La asistencia masiva de los hermanados a tales reuniones poco a poco se iría restringiendo espontáneamente a los integrantes cuyas ocupaciones o proximidad al lugar de encuentro permitiesen su concurrencia. esbozándose desde una época temprana lo que sería el control institucional por parte de la oligarquía urbana.

Las asambleas de la Hermandad de Villa Real, al menos desde el siglo XIV y hasta bien entrado el siglo XV, se celebraban en el monasterio de San Francisco. Allí estaban reunidos cuando el 20 de febrero de 1353 reciben al mayordomo del arzobispo de Toledo para dirimir, mediante concordia, el litigio seguido en la Ciudad Imperial y en Roma. Por entonces, el encargado de llamar a cabildo a los hermanos se denominaba "muñidor"⁹⁰. Asimismo en dicho lugar formaron las Ordenanzas de 1435, estableciéndose en las mismas que

"...todos los cabildos se fagan de aqui adelante en el monesterio de Sant Francisco donde siempre acostumbraron faserse e non en otra parte alguna, e esto que se faga en los dias buenos e claros en el corral, en el tiempo lluvioso e de quand frio o viento en el refertorio."⁹¹

Dichos estatutos señalaban las facultades requeridas para constituirse en cabildo. Serían llamados todos los hermanos que se hallasen en la ciudad por el portero para debatir y disponer sobre asuntos del gobierno corporativo; quiénes no acudiesen a la junta por causa justificada serían sancionados con doce mil maravedís, preceptuándose ya por entonces el buen orden en las reuniones⁹².

En los cabildos se recibían y estudiaban las solicitudes de admisión, , tomando juramento a los hermanos, nombrando procuradores, destacando mensajeros, recibiendo informes orales o escritas sobre deudas e impagos, cuentas, estado de lo propios y de las rentas; la evolución de los procesos y, de la correspondencia institucional; los acuerdos de la llogas generales, etc. El primer domingo tras la junta del Triple Instituto de primeros de septiembre, se renovaban los oficios cumplidos, proveyéndose los nuevos cargos mediante consenso, recayendo los empleos en los individuos con las calidades requeridas para el buen gobierno de la corporación. Cuando los agraciados aceptasen el cargo para el que se les había propuesto, deberían jurar solemnemente ante los reunidos para tomar posesión inmediata del mismo, en un plazo máximo de tres días.

Construida la casa capitular a fines del Cuatrocientos, las asambleas ciudarrealeñas se trasladan definitivamente a esta nueva sede en la calle Pilas, esquina con la de Cuchillería. Convocados los cabildos siempre que se considera oportuno y con la aquiescencia de los alcaldes que los presiden, la asistencia a los mismos quedaba circunscrita en la práctica a los oficiales y hermanos hidalgos, no faltando las juntas celebradas por algunos de sus integrantes sin respetar el obligado concurso de todos los hermanados y las formalidades que regían similares reuniones en el Reino; se apercibe a los contraventores y se duplica el sistema de convocatoria a los hermanos, al añadir a los avisos del portero el tañido de una campana toda la tarde anterior al cabildo, haciendo saber de igual forma el principio y el final de cada sesión.

Ya durante la Edad Moderna el monopolio ejercido por la oligarquía local sobre todos los aspectos de la vida corporativa tenía el respaldo de dos siglos de práctica, convocándose cabildos restringidos a los miembros del estado caballero en la sede hermandina, so pena de nulidad, siempre que fuese oportuno y fijándose una periodicidad regular a las asambleas generales a las concurrirían la mayor parte de los hermanados⁹³.

2.3.1. ASAMBLEAS PARTICULARES.

Los cabildos particulares se celebran siempre y cuando los alcaldes, con o sin petición previa de algunos hermanos, creyesen preciso tratar algún asunto concreto para consensuar su resolución inmediata. Atendiendo a las formalidades y finalidades de la convocatoria, serían precisas reuniones periódicas para deliberar sobre asuntos internos rutinarios como estudio de solicitudes de ingreso, despacho de pleitos, expedición o recepción de memoriales o misivas, etc⁹⁴.

Cuando se considerase perentorio abordar algún asunto o asuntos pendientes generalmente los alcaldes prevenían al portero para que efectuase los preparativos pertinentes, como aprovisionarse de carbón o velas durante los meses invernales, o de agua durante el verano, convocando individual o colectivamente a los llamados a cabildo. Las ordenanzas manchegas de 1792 establecen que solo tienen voz y voto en estas asambleas ambos alcaldes, el alguacil y el cuadrillero mayores, y los ocho regidores por los estados noble y ciudadano. Solícitos a la convocatoria, entraban con el debido respeto a la sala capitular, ocupando sus escaños correspondientes a su puesto jerárquico y comenzaba el acto bajo la presidencia colegiada de los alcaldes, necesitándose una amplia mayoría de asistentes para tener validez los acuerdos alcanzados⁹⁵.

Tales reuniones solían celebrarse por la mañana, según se practicaba por el resto de las entidades del Reino⁹⁶, aunque podían prolongarse hasta bien entrada la tarde. Esta normativa se seguía para mejor

aprovechar la jornada, pues asambleas tardías podían consumir varias jornadas hasta la resolución de los casos planteados, lo que no contribuiría a aprovechar racionalmente el tiempo dedicado a este cometido por parte de un personal no profesionalizado.

Era inexcusable la presencia de al menos uno de los notarios hermandinos para asentar, manuscrita y fielmente, en el libro de actas, todos los acuerdos consensuados mediante votación por mayoría simple, preveyéndose el voto de calidad a los alcaldes en el supuesto de empate. De la sesión capitular nadie puede ausentarse antes de su conclusión, para preservar la pureza y confidencialidad de las resoluciones, siendo sancionados quienes no comparecieran con mil maravedís a fines de Setecientos.

Desconocemos si se respetó escrupulosamente una determinada cadencia temporal para la celebración de cabildos particulares, aunque presumiblemente la respuesta sería negativa; así, en los estatutos de 1792 se consagraba la discrecionalidad de los alcaldes y oficiales para disponer tales convocatorias, argumentando que "disponer haya numero fijo de cavildos particulares seria impedirles el tiempo que necesitan para el seguimiento de causas de reos, y otros graves asuntos."⁹⁷

2.3.2. ASAMBLEAS GENERALES Y EXTRAORDINARIAS.

Toman dicha denominación las asambleas hermandinas a las que concurre el cabildo en pleno, es decir todos los hermanos, o más frecuentemente sólo los hidalgos, quienes por su propia adscripción tienen voz y voto en tales actos solemnes. Convocados colectivamente mediante el tañir de la campana toda la tarde anterior a su celebración, dichas reuniones responden mayoritariamente a una periodicidad consuetudinaria consagrada por la tradición. Los reglamentos de 1792 preveen la celebración de tres cabildos generales el tercer domingo de los meses de septiembre, enero y mayo⁹⁸.

Sin duda el más importante era el convocado en otoño, cuando tras la asamblea general extraordinaria del primer domingo de septiembre se nombraban diputados para supervisar las siguientes elecciones. El tercer domingo eran previamente tomados los acuerdos precisos sobre los presos del tribunal, asuntos de gobierno y justicia; a continuación el capellán oficiaba misa en el oratorio del Espíritu Santo, consagrándose para el buen acierto en la renovación de oficios institucionales. Tras el acto de elección, en dicho cabildo solía emplazarse a los pujadores para el remate del arriendo de la asadura mayor y menor de la entidad, para lo cual, a veces desde primeros de septiembre, se había nombrado mayordomo con la finalidad de comenzar las diligencias pertinentes para la percepción de dicho arbitrio.

Tanto los cabildos particulares cómo los generales, ordinarios o extraordinarios, están protegidos por el secreto que los envuelve, juramentándose en tal sentido por sus miembros desde el mismo día de

su admisión en la Hermandad, para evitar injerencias ajenas a la entidad.

2.4. ORDENANZAS.

Sumido en la inercia procedimental, el cuerpo ordenancista de las Hermandades Viejas en el mejor de los casos databa de fines del Cuatrocientos o de principios del Quinientos, mientras que el Santo Tribunal toledano se regía por la compilación de los reglamentos consensuados durante siglos en leyes generales y cabildos particulares, no disponiendo de un texto unificado hasta el Setecientos.

Si bien durante las primeras centurias de la Edad Moderna, la estructura orgánica y el sistema procedimental hermandino en Ciudad Real se rigió sin demasiados problemas por los Capítulos de Maldonado. Ya durante el Setecientos, su expansión territorial y los cambios experimentados en su estructura al descentralizarse decididamente, creaban nuevos supuestos que escapaban a la normativa vigente, mostrándose inapropiados para su aplicación. La imperiosa necesidad de renovar dichos Capítulos de Visita, que el refrendo regio dotó de carácter estatutario en el reinado de los Reyes Católicos, confirmados por real ejecutoria de la Real Chancillería de Granada el 16 de abril de 1551, y constantemente mencionados en la documentación de este Santo Tribunal, tenía un trasfondo normativo y formal evidente: la grafía de la antigua documentación por la que se regían los hermanos pasados los siglos la hacían ininteligible para muchos, pudiendo tergiversarse por intereses espurios e incluso introducirse preceptos nuevos, contrarios al espíritu que animaba los dictados medievales⁹⁹.

Prácticamente hasta fines del Setecientos no desapareció el requisito ineludible de poseer posadas de colmenas en propiedad para acceder a la calidad de hermano de la Hermandad Vieja¹⁰⁰. En principio, la paulatina nominación de dependientes desde los albores de la Edad Moderna respetaba el principio de tenencia de posadas, huertas o losados¹⁰¹, pero la expansión territorial de los siglos XVII y XVIII creará y desarrollará la figura del comisario, lo que comportaría a medio plazo un cambio substancial cualitativo y cuantitativo en la evolución institucional. Buen ejemplo de esta transformación fue la demora, hasta su abandono, de las visitas periódicas que alcaldes y cuadrilleros debían realizar a los colmenares de los hermanos; la razón era evidente: la estructura de seguridad en despoblado, progresivamente, había ido prescindiendo de los guardas de las posadas como brazo ejecutivo en la medida en que dicha actividad extractiva perdía importancia respecto de las labores agropecuarias, por lo que se hacía insostenible la presencia de una red lo suficientemente tupida de colmeneros en el yermo que la posibilitasen.

Idéntico desfase se percibía en otros aspectos puntuales, como eran la minimización del monto real de las peras pecuniarias por el proceso inflacionista del quinientos y la depreciación del vellón subsiguiente; la tímida burocratización orgánica aunó los empleos de alcaide y portero, pero parece introducirse tímidamente la figura del sotalcaide como ayudante del carcelero; la única escribanía medieval se desdobló en dos a lo largo del siglo XVI, aumentándose a tres los notarios a mediados del siglo XVIII, etc. Por otra parte, el anquilosamiento procedimental hermandino en el ámbito jurídico criminal, daría paso, a partir del reinado de los Reyes Católicos y de

sus sucesores, a la asunción del ordenamiento regio de los tribunales inferiores de justicia para dilucidar los casos más importantes.

En la década de 1730 la falta de un marco normativo adecuado a los nuevos tiempos era tan palpable que el cabildo toledano, el más afectado por esta carencia, sería el primero en tomar esta iniciativa. Los trámites para dotarse de un auténtico reglamento por parte de la Hermandad Vieja de Toledo se prolongan a lo largo de los años centrales de la década, confiándose la aprobación de cada uno de sus capítulos a los sucesivos cabildos¹⁰². Sus estatutos serán autorizados definitivamente por el Consejo de Castilla el 4 de junio de 1740¹⁰³.

Catorce días después, a instancias del Fiscal, el Supremo Consejo libra dos provisiones al resto de las entidades federadas recomendándoles la reforma y modernización de sus ordenanzas, y seguir las diligencias llevadas a cabo por la de Toledo, ordenándoles remitir a Madrid sus normativas para proceder a las adiciones o modificaciones pertinentes que hubiese lugar. Siguiendo la estela de su homónima toledana, Talavera procede a consensuar las nuevas reglas que regirían en su corporación. A principios de 1741 el cabildo comisiona a varios hermanos la renovación del articulado de sus antiguas ordenanzas de 1523, cuyo borrador debía llevarse a junta general para su aprobación¹⁰⁴. El 12 de noviembre de 1743 se logra el beneplácito mayoritario interno a sus cincuenta y un capítulos, decidiéndose llevar ante el Consejo de Castilla para su sanción y ordenándose despachar un traslado de los mismos a todos sus hermanos al tiempo de la recepción como miembros del Santo Instituto. Como villa de señorío de la Mitra toledana, las ordenanzas pasaron primero por la cámara arzobispal, donde se mermaron ciertas atribuciones jurisdiccionales ya en desuso, como el privilegio para portar vara alta, asignando a la

justicia los delitos sobre los delincuentes huidos al campo, privándoles del control sobre las explotaciones apícolas y eximiendo a sus vasallos de sufragar las visitas periódicas a los montes. Remitidas ordenanzas y correcciones a Talavera desde el arzobispado el 21 de junio del citado año, su cabildo reafirmará su pretensión a llevar distintivo de justicia, cuyo privilegio aún estaban pagando, alegando que su jurisdicción era tradicionalmente superior a la de la Hermandad General y haciendo patente sus exenciones fiscales, aceptando el resto de las enmiendas. En Madrid, el 13 de abril de 1746 se aprobaron sus nuevos reglamentos, capacitándoles para llevar vara alta y no bastones pero se suprimía su jurisdicción en los colmenares, suspendiéndose cautelarmente las próximas elecciones hasta la promulgación de este cuerpo ordenancista, lo que tuvo lugar el 20 de julio de 1747¹⁰⁵.

Por su parte, la Hermandad Vieja de Ciudad Real tardaría casi una década en disponer de unos estatutos que renovasen los de Maldonado. Tan incomprensible tardanza se debió a las discrepancias entre sus hermanos, enzarzados en rencillas personales y profesionales, así como en la vigencia de la mayor parte de las antiguas normas, a lo que se unía las malas relaciones con el Consejo de Castilla motivada por la "inflación" de títulos y la insumisión implícita a sus preceptos. Las diligencias comenzaron tardíamente; entre los gastos ocasionados en 1742 ya se destinaba una elevada suma a evacuar y hacer valer sus nuevos estatutos ante los Reales Consejos¹⁰⁶, pero hasta otoño de 1754 no se pagaba a un profesional cualificado para copiar su articulado¹⁰⁷.

El 8 de abril de 1756 el Consejo dará vida legal a los nuevos reglamentos, encabezados por el Auto Unico Acordado de 1740¹⁰⁸. En

este texto se pondría énfasis en el sistema de elección de oficios, no habiendo demasiadas novedades respecto a lo preceptuado a fines del Cuatrocientos; los alcaldes, caballeros con experiencia en la corporación, podrían renovar dos años consecutivos su empleo; el resto de los cargos serían provistos mediante elección de los diputados y sorteo de los candidatos el segundo domingo de septiembre; se fijaría un cupo máximo de hermanos¹⁰⁹; y se mantuvo la cláusula que obligada a tener en propiedad un número mínimo de veinte colmenas pobladas, en un último intento de mantener su jurisdicción sobre los asuntos apícolas¹¹⁰, origen de su fundación.

A este ordenamiento se incorporarán los designios del Supremo Consejo, fechados el 25 de febrero de 1759, mandando observar estos nuevos estatutos, previniendo que pudiera dispensarse la remisión de informes por las Hermandades Viejas, previo control por parte del corregidor o alcalde mayor correspondiente, quedando copia en la escribanía del concejo, en su archivo o en un libro hecho a tal efecto, para que constase su ejecución¹¹¹.

Los estatutos manchegos de 1756 tendrían escasa vigencia, si es que funcionaron alguna vez como tales. A principios de la década de 1780 algunos hermanos solicitaron al Supremo Consejo la autorización para su remodelación; el 19 de septiembre de 1782 presentan al Fiscal un ejemplar impreso de dicha reglamentación, asumiéndose los autos acordados de 1740 y de 1762. Su reforma será aceptada por real decreto el 15 de mayo de 1783. Se confecciona su texto definitivo el 21 de mayo de 1785, siendo confirmadas las nuevas ordenanzas el 25 de junio de 1792¹¹².

Formalmente, dicho texto consta de un preámbulo, donde se aportan confusas referencias histórico-institucionales, abundando los anacronismos y las interpretaciones sesgadas relativas al periodo fundacional de las corporaciones apícolas coaligadas; se hace referencia al estado coetáneo de la asociación ciudarrealeña, achacándose la responsabilidad de posibles desarreglos e irregularidades pasadas

"...a lo defectuoso de sus ordenanzas, por el poco metodo que tienen, por la ninguna claridad, por la falta de expresion de los puntos principales, y finalmente a la confusion que arruinan todas ellas."¹¹³

En dichos estatutos, que a la postre serían los últimos de los que se dotó la corporación hermandina, se insertan los ya citados autos de 1740, recogidos en los títulos 13 y 14 de los libros 6 y 8 de la Recopilación, así como el de 24 de julio de 1762. En cincuenta y cinco artículos se desarrollan, minuciosamente, todos los aspectos sobre su funcionamiento institucional y judicial, dejándose poco lugar a la discrecionalidad de los hermanos. Las novedades introducidas son secundarias: se fijan las fechas de los tres cabildos generales; solo puede ser reelegido un mismo alcalde por tres periodos consecutivos; desaparece una de las escribanías enajenadas, otorgándose mayor poder al notario de libre designación del cabildo; se moderan sus competencias sobre las actividades apícolas, desapareciendo el requisito fundacional de ser propietario colmenero para el ingreso como hermano; y, por último, se evidencia la patrimonialización de las plazas honoríficas, aunque no se prevee cupo de admitidos como hermanos¹¹⁴.

Ejemplares impresos de estas ordenanzas serán remitidas por correo ordinario a la mayoría de los ministros superiores del Santo Tribunal

y a muchos de los nuevamente nombrados¹¹⁵; uno al resto de los cabildos federados y se proporciona un número indeterminado a chancillerías, audiencias y consejos del reino¹¹⁶. Parece que esta rectificación normativa integral finisecular es exclusiva de la organización manchega, aunque tenemos noticia de ciertas correcciones puntuales a los estatutos de Toledo y Talavera.

NOTAS AL CAPÍTULO 2

¹ Sin pretender entrar en el debate sobre la cronología de la controvertida decadencia castellana del Seiscientos, lo cierto es que parece que se recrudeció por entonces el problema siempre candente de la delincuencia, debido al deterioro socioeconómico y político de la Monarquía Católica. El hispanista francés B. BENNASSAR ha señalado al respecto que

"...la política de imposición del orden de los Reyes Católicos, protegida por Carlos V y por Felipe II, había convertido a Castilla en un país mucho más seguro de cuanto lo había sido en el pasado y de lo que llegaría a serlo después"

Cit. *La España del Siglo de Oro*, (1ª ed. París, 1982), Barcelona, 1983, p. 75.

² En 1585, la Hermandad Vieja de Ciudad Real elevaba a la Real Chancillería de Granada una queja por la injerencia en su jurisdicción por parte del corregidor, haciéndose una estimación un tanto abultada de su labor asistencial, consignándose que "davan limosnas a mas de trescientos pobres naturales y forasteros de la dicha ciudad"; 23-XII-1585, Granada (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 36, f. 5r). Un estudio más pormenorizado de la cuestión en M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, "Caridad y asistencia social de la Hermandad Vieja de Ciudad Real. Siglos XVI-XVIII", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 12 (1991), pp. 47-65.

³ En 1591 se expide real ejecutoria para que el licenciado Montero, alcalde mayor de Mestas y Cañadas, no procesase a ningún miembro del cabildo ciudarrealeño por razón de rcmpimiento de tierras, pero prohíbe que se siguieran con dichas roturaciones de baldíos (AHN. Div.

Concejos y Ciudades, leg. 44, nº 2); el 1-IV-1600 la Real Chancillería granadina dictaba sentencia a favor de los citados vecinos, lo que les garantizaba el libre aprovechamiento de dehesas y montes en el circundante Campo de Calatrava (BN. mss. 2.431, ff. 111r-vº).

⁴ El 13-II-1613 el ayuntamiento en pleno acordaba impeler a los portugueses de la ciudad a que tomasen vecindad en el plazo de tres días so pena de destierro, lo que hasta entonces no habían hecho para excusarse de contribuir al fisco real y municipal, al "no pagar alcavalas ni servicio" (AMCR. Actas Capitulares, leg. 10, f. 125r).

⁵ Carta Real, 5-VIII-1614, Madrid (Ib., leg. 9. ff. 296r-vº).

⁶ En el Campo de Calatrava había algunas familias mudéjares en las villas de Almagro, Bolaños, Villarrubia de los Ojos, Daimiel y Aldea de Rey perfectamente integradas en la comunidad cristiana, obteniendo de Felipe III la merced de quedarse en sus lugares de vecindad. Vid. L. VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, "Privilegio de no expulsión de los moriscos antiguos de las cinco villas del Campo de Calatrava (Ciudad Real)", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 7., pp. 289-299.

⁷ En la petición de la gracia para pedir la reimplantación del mercado franco en la ciudad se representaba que

"...teniendo en otro tiempo doze mil vezinos a benido a tanta disminucion su poblacion y vezindad qye oy tiene poco mas de mill los mas de ellos muy pobres y con la expulsion de los moriscos salieron de ella cinco mill que eran los que mas trabajaban en las cosas necesarias..."

15-III-1623, Madrid (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26).

⁸ En las postrimerías del reinado de Felipe III, las alcabalas exigidas en los distintos distritos manchegos eran las siguientes:

"los lugares del priorato de San Juan valen 29.550.000 -mrs.-
la villa de Almagro y su partido 7.570.000 -mrs.-
valen las yervas del montazgo de Calatrava que se venden cada año
3.438.000 -mrs.-
Ciudad Real paga 4.154.000 -mrs.-
Los Fucares pagan cada un año del arrendamiento de los maestrazgos
de Santiago, Calatrava y Alcántara 98.000.000 -mrs.-"

Vid. G. LASO DE LA VEGA, *Relación puntual, y tanteo de la Renta que el Rey N.S. tiene en cada un año en todos sus Reynos, islas, estados y señoríos...*, años 1620-1625, BN. mss. 6.494, f. 5v2.

⁹ Francisco Ruiz de Bastida es nombrado por la Contaduría Mayor de Hacienda para hacer observar la prohibición de celebrar mercados, como se venía practicando, entre otras localidades, en Ciudad Real, Pozuelo de Calatrava, Almodóvar del Campo, Puertollano, Daimiel, Manzanares, Membrilla y Argamasilla. Informe de 26-II-1613, Almodóvar del Campo (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26).

¹⁰ Los martes tenía lugar el mercado franco de Toledo. (AHN. Consejos, lib. 2.666), tradición que ha llegado hasta nuestros días.

¹¹ Procura al regidor don Cristóbal Treviño Bermúdez para llevar dicha representación ante los Reales Consejos, fechada 9-IV-1681, Ciudad Real (AHPCR. Prot. Not., leg. 204, ff. 64r-v2). Este suplicatorio cristalizó en un memorial impreso presentado ante el Consejo de Hacienda ese mismo año (AGS. Consejo y Juntas de Hacienda, leg. 1.038).

¹² H. KAMEN, *La España de Carlos II*, (1ª ed. Londres, 1980), Barcelona, 1987, p. 93.

¹⁷ Vid. J. MARINA BARBA, *El ayuntamiento de Ciudad Real a mediados del siglo XVIII*, Ciudad Real, 1987, p. 24; M. ESPADAS BURGOS, "Ciudad Real 1764: una grave crisis agricola", en *Boletín de Informacion Municipal*, Ciudad Real, agosto 1964.

¹⁸ Ubicada en las inmediaciones de un área pantanosa, nunca serán erradicadas totalmente los brotes epidemicos en la ciudad. Tal vez uno de los más importantes aconteció a fines del Setecientos, sobre el cual giró el cabildo de 6-I-1786 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 27, nº 8, f. 6). Secuela de un nuevo rebrote epidémico, en la aldea aneja de Las Casas el 18-VI-1787 se consigna que escorbuto contagioso afectaba a un tercio de sus ochenta vecinos, siendo su sintomatología

"...unas ulceras putridas y sordidas en la boca, que no solo interesan las partes blandas, sino tambien las duras pues las encias estan corroidas y los dientes nigrificantes (sic) y sus raices descubiertas y movibles con un fotor en la boca muy penetrante."

¹⁹ J. P. LE FLEM, "El valle de Alcudia en el siglo XVIII", en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, coloquio celebrado en Madrid, Segovia y Toledo el 13 al 16 de octubre de 1981, Madrid, 1984, pp. 235-249; y F. GASCÓN BUENO, *El valle de Alcudia. Un ejemplo típico de economía agropecuaria en la España del siglo XVIII*, La Solana, 1978.

²⁰ Un caso extremo lo representa a fines del siglo XVIII la familia integrada por Don Antonio Gascón, natural y vecino de Ciudad Real, anciano ministro honorario de la Hermandad Vieja de Toledo, su esposa doña Ana María de la Cerda, tres hijas solteras y un varón, pertenecientes a uno de los linajes más antiguos de la ciudad. En la década de 1790 su mujer había remitido al Consejo de Castilla un suplicatorio conteniendo su genealogía durante veinticinco generaciones, siendo "el mas anciano el Cid Campeador y Doña Jimena

13 Un diputado del ayuntamiento ciudarrealeño, en 1686 apuntaba que "los mayores fraudes que se cometen son por eclesiasticos, en todas las especies"; Ib., p. 352.

14 En 1691 se había creado la provincia de La Mancha, al segregarse del reino de Toledo los partidos de Alcaraz, Almagro, Ciudad Real e Infantes. En 1718 se dotaba de intendente a la nueva provincia, incorporándose a ella la mesa de Quintanar, a la que se sumó, en 1799, el Gran Priorato de San Juan de Jerusalén. Almagro obtuvo la capitalidad entre 1750-1761, volviéndo luego definitivamente a Ciudad Real. En la reorganización territorial en provincias e intendencias, acometida en 1785 por el conde de Florida Blanca, entre las treinta y una provincias creadas figura la de La Mancha.

15 En el acta capitular de esa fecha se consigna una supuesta estratagema, tal vez inventada para enmascarar el entreguismo del que parecen hacer hecho gala los capitulares, consistente en que:

"En el día nueve del corriente esta ciudad presto la obediencia al Archiduque Carlos y porque el prestar dicha obediencia fue solo ceremonia para lograr la prision de diferentes desafectos que se reconocieron haver en esta ciudad y que estos de no dar dicha obediencia por ser personas poderosas pudieran ocasionarse grandes disturbios...y para ello hazer cavildo en que concurriera el cavildo eclesiastico personas principales honrradas y ciudadanos".

(AMCR. Actas Capitulares, leg. 20, ff. 711-713).

16 J. CALVO POYATO, "Sierra Morena, como gozne entre La Mancha y Andalucía en la Guerra de Sucesión, durante el año 1710", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 7, pp. 183-190.

Díaz de las Asturias su muger", solicitando obtener una pensión del Estado.

El 29-V-1798 insistía el cabeza de familia en que su situación era límite, pues si bien antiguamente había llegado a regalar al rey Carlos IV una antigua espada toledana, actualmente se consideraban "los mas pobres que los mendigos que todos estan desnudos, y en muchos dias nos falta hasta el preciso y natural sustento...", debiendo limosnear para costear los estudios de su hijo y el sustento del resto de su familia (AHN. Consejos, leg. 1.418, nº 13, s.f.).

²¹ 22-I-1599, San Martín de la Vega, y 21-II-1601, Madrid; ambos sobrecartados en la carta de confirmación y privilegio otorgada el 20-X-1621 (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26).

²² AHN. Div. Her., leg. 2, nº 3, copia del siglo XVIII; original en Ib., leg. 2 , nº 1, doc. 1.

²³ 20-IV-1621, Granada (Ib., leg. 2, nº 1 y 11).

²⁴ 9-X/20-XI-1621 (AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26).

²⁵ 27-IV-1644, Madrid (BN. mss. 13.030, ff. 40r-vº).

²⁶ 25-VII-1667, Madrid.

²⁷ 7-XII-1682, Madrid (Ib., ff. 15r-20vº).

²⁸ 25-VI-1695, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 10).

²⁹ El presbítero L. DELGADO MERCHÁN escribía, a principios del siglo XX, que aunque las franquicias llegaron al máximo durante los reinados de los Austrias Menores ello no impediría el que se iniciase

"...para esta institución y para otros muchos organismos que habían nacido y vivido a la sombra del privilegio un periodo de acentuada decadencia con la entrada de la dinastía borbónica, que no se detiene ya hasta que la vieja Hermandad desaparece"

Op. cit., p. 321. A este mismo convencimiento llegaron la mayoría de los autores de su época y sus predecesores del siglo XIX, como QUEVEDO Y SIDRO, op. cit., pp. 412-413. Una excepción fue C. LÓPEZ MARTÍNEZ, quien especuló con que la decadencia de las Hermandades Viejas durante los siglos XVI al XVII daría paso a su coyuntural reactivación a mediados del Setecientos; op. cit., p. 27.

³⁰ Me parece significativo que en la cuentas de la Hermandad de Ciudad Real del periodo 1712-13 se asentase entre los gastos el pago de 15 rs. destinados a "componer la piedra que esta en el sitio de Peralbillo gravada con letras por averla derrivado los soldados enemigos quando entraron en esta ciudad"; 9-IX-1713, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 56, nº 19).

³¹ 25-I-1702, Madrid (AHN. Div. Her. leg. 2, nº 11, ff. 2vº y ss.).

³² Real Decreto impreso de 18-VIII-1705, acompañado de la Real Orden 1-IX-1705 (Ib., leg. 2, nº 12). Sin embargo, sabemos que el 6-XII-1706 las condenas a gitanos pronunciadas por los alcaldes de la Hermandad Vieja de Toledo serán consultads a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (Ib. leg. 68, nº 6, s.f.).

³³ 30-I-1706, Madrid (AHN. Div. Her. legs. 4, nº 57 y 2, nº 13).
Apéndice documental, texto nº 3.

³⁴ 22-VIII-1713, Madrid (Ib., leg. 2, nº 14). Dicho privilegio fue extendido a los cuadrilleros toledanos el 14-X-1713 (Ib., Consejos, leg, 3.163, nº 9, s.f.).

³⁵ 27-IV-1721, Madrid; 13-XI-1742, Buen Retiro; 6-XI-1746, San Lorenzo; 15-I-1760; 15-III-1789, Madrid; y 18-IX-1814 (todas sobrecartadas en AHN. Códices, 964B).

³⁶ 9-VII-1724, Madrid; 29-IV-1725, Madrid; 15-XII-1746 y 21-V-1748; 26-IV-1760, Madrid; 30-I-1790, Madrid y 14-XI-1814, Madrid. (Sobrecartados en Ib., s.f.).

³⁷ Sólo conocemos de la Hermandad de Santiago los datos aportados en dicha consulta de gracia. Fundada por Fernando III bajo el nombre de Escudería de Santiago, estaba integrada por hidalgos de sangre extremeños que lucharon en la Reconquista. Desvirtuada en siglos posteriores, los duques de Béjar la tomaron bajo su protección, y don Francisco de Zúñiga Sotomayor modera sus estatutos el 30-XII-1550, siguiendo el ejemplo de sus antecesores; desconociéndose documentación más antigua al haberse quemado el archivo nobiliario de su casa solariega en Ayamonte. Se presentó al Consejo un cuaderno impreso conteniendo sus ordenanzas, aprobadas por el duque el 1-VIII-1709, articuladas en 35 capítulos relativos al gobierno, ejercicio, calidad y alardes de sus hermanos, aunque desafortunadamente este ejemplar está ilocalizable. Siendo patronos perpetuos los titulares de dicha Casa Ducal, sus primogénitos visten y equipan a su costa a los 24 hermanos y al alcaide, solicitándose por entonces que:

"...respecto que dicha Hermandad se ocupa en limpiar el país de gitanos y gente de mal vivir, en mas de catorce leguas en circunferencia; evitando tambien los contrabandos...suplica el

Duque a V.M. que en atenzion a sus meritos y a los de su Casa serviria V.M. conzeder aa la dicha Hermandad las prerrogativas, privilegios y exempziones, que gozan y estan conzedidas a las Hermandades de Ziudad Real, Talavera y Toledo respecto que estas son menos antiguas..."

(AHN. Consejos, Consultas, leg. 5.947, nº 105, s.f.).

38 Algunos doctrinarios de la época levantaron sus voces ante la ineficacia de estos juicios de residencia, ya que los agraviados callaban por temor a represalias y entre los poderosos era infrecuente enejense el favor mutuo. Un ejemplo de esta opinión es la sostenida por J.A. IBÁÑEZ DE LA RENTERÍA, quien escribía en el Setecientos que

"Las residencias sirven poco porque regularmente son unos actos de pura formalidad y en que la voz del miserable no suele tener medios para hacerse escuchar. Las quejas injustas de los poderosos son muy terribles, y las que dan contra ellos los pobres quedan sofocadas en su principio."

Vid. "Discurso sobre el gobierno municipal" (1ª imp. 1790), pub. M. BAENA DEL ALCÁZAR, *Los estudios sobre Administración en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1968, p. 137.

39 Don Luis de Haro había sustituido a su predecesor en el cargo don Pedro Bonifacio, quien tras cumplir su oficio había sido residenciado según preveía la instrucción de corregidores. En las cuentas correspondientes al periodo 1597-1598, se asienta un desembolso de 350 rs. para costear el viaje del hermano Diego Fernández Treviño a la Corte, tal vez para acreditar la toma del citado balance contable (AHN. Div. Her., leg. 53, nº 26).

40 30-VI/25-IX-1615 (Ib., leg. 57, nº 1). El 31-III-1561 los derechos de la residencia a los oficiales de la Hermandad Vieja de Toledo serían pagados, por partes iguales, entre dicha institución y el corregimiento (AMT., Archivo Secreto, Caja 2, leg 1, nº 16).

⁴¹ Libro Registro de Poderes Notariales, 14-V-1655, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 37, s.f.).

⁴² Ib., s.f.

⁴³ Las cuentas rendidas anualmente por parte de los diversos arqueros silencian toda referencia al respecto; únicamente aparecen consignadas ayudas de costa a receptores de penas de Cámara que supervisan las sanciones pecuniarias y los gastos de justicia de los corregidores don Juan Enríquez de Zúñiga, en 1669-1670, pagándose 180 rs. a Diego Caso; el 28-II-1686 se destinan a idéntico fin 288 rs.; librándose 240 rs. el 25-VIII-1690, entre 1693-1694; por último en 1738-1739, el receptor don Joseph de León recibiría una cantidad similar por residenciar al corregidor don Marcos Joseph de Parada; cantidad que aumentaría a 300 rs. en la residencia del corregidor licenciado don Diego Falla, delegado regio en la ciudad entre 1743-1745.

⁴⁴ 3-V-1609, Toledo (Ib., leg. 63, s.f.).

⁴⁵ 25-IX-1624, Toledo (AMT., Archivo Secreto, Caja 2, leg. 1, nº 21).

⁴⁶ 20-IX-1659, Toledo (AHN. Div. Her., leg. 64, nº 1, s.f.).

⁴⁷ 14-IV-1660, Toledo (Ib., leg. 64, nº 2, s.f.).

⁴⁸ 2-I-1682, Toledo (Ib., leg. 66, nº 2, s.f.).

⁴⁹ 1684 (AMT., Archivo secreto, Caja 2, leg. 1, nº 25).

⁵⁰ Se concreta esta inhabilitación a cortadores, mesoneros, venteros "ni otros semejantes", considerados infamantes por ser oficios mecánicos. La difusión de los estatutos de limpieza de sangre y oficio, que aceptan la transmisión hereditaria de la calidad estamental y profesional, aparecen a principios del Quinientos. En 1600 el Capítulo General de las Órdenes Militares declaraba excluidos para acceder a la posesión de un hábito a mercaderes, pintores, orfebres, escribanos, taberneros, prestamistas, tenderos, bordadores, canteros, venteros, y sastres. Un compendio de las calidades exigidas para obtener un hábito, la evolución de sus criterios y bibliografía complementaria pueden consultarse en J.A. MARAVALL, *Poder, honor y élites en el siglo XVII*, Madrid, 1984, pp. 174 y ss.; y E. POSTIGO CASTELLANOS, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla*, Soria, 1988, pp. 133-154.

⁵¹ Un estudio pormenorizado de los distintos interrogatorios hermandinos en M.C. PESCADOR DEL HOYO, "Madrid y la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (siglos XVIII y XIX)", en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, nº 7 (1972), pp. 309-353, incluida la transcripción de los formularios utilizados entre 1715-1824.

⁵² La exigencia de adaptarse al cuestionario de octubre de 1715 fue inmediata. En el expediente original acreditado el 6-XI-1715 por Bartolomé García Obledos y Ramírez, vecino de Priego -Cuenca-, ya estaba encabezado por dicho documento (AHN. Div. Her. leg. 5, nº 11).

⁵³ 27-II-1717, Madrid (Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 16r).

⁵⁴ 9/16-III-1717, Madrid (Ib., Div. Her., leg. 4, nº 26, ff. 1r-2r).

⁵⁵ 20-III-1717, Ciudad Real (Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 16r-vº). Seguramente debamos a esta orden el que dispongamos hoy en día del libro registro de los comisarios nombrados entre 1705-1715, y que, aunque incompleto, está formado por 73 folios manuscritos a ambas caras, lo que nos aporta una valiosa información sobre los beneficiarios del despacho de títulos en fechas tan críticas (Ib., leg. 3, nº 15).

⁵⁶ El cabildo toledano de 17-V-1717 acuerda enviar un memorial al Supremo Consejo en el que se consignan los loables servicios desempeñados por el bien público por dicha entidad, así como las circunstancias en las que se despachaban nombramientos a sus dependientes (Ib., leg. 70, nº 1, s.f.).

⁵⁷ Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 33r y ss.

⁵⁸ S.d. (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 26, ff. 12r-vº).

⁵⁹ En 1757 uno de los testigos presentados por Antonio Tabajas, vecino de La Rambla, depone que

"Francisco Tovajas padre de dicho pretendiente sirvió el dicho empleo de ministro de dicha Santa Hermandad hasta el año de mil setezientos treinta y fue que según haze memoria le recogieron el título y a los demas que havia en esta villa y demas pueblos de este reinado en virtud de orden del Real y Supremo Consejo de Castilla."

(Ib., leg. 12, nº 4, s.f.).

⁶⁰ 24-I-1733, Toledo (Ib., leg. 71, nº 2, s.f.).

⁶¹ 17-XI-1739, Madrid; Cit. M.C. PESCADOR DEL HOYO, "Madrid y la Santa Hermandad...", op. cit., p. 317.

⁶² Desde el 14-III-1734 era discutido en sus cabildos el articulado de sus ordenanzas; tres años más tarde sus estatutos, ya formados por sus ponentes, serán leídos ante los convocados por el notario más antiguo, siendo refrendados casi en su totalidad con la salvedad de una ligera controversia en su capítulo noveno sobre aspectos formales en la concesión de plazas de gracia (Ib., leg. 71, nº 3 y 6, s.f.).

⁶³ 23-V/16-VI-1740 (Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

⁶⁴ ley 27, t. 35, lib. 12. Nov. R., inserta en las ordenanzas impresas de 1792 (ACG. cab. 321, leg. 4.411. nº 1. ff. 10r y ss.).

⁶⁵ AHN. Consejos, li. 1.510, nº 38.

⁶⁶ Por Real Provisión serían suprimidas las exenciones

"...que en lo antiguo disfrutaban extensivas de ser libres de toda contribucion de guerra, de no poder ser quintados para ella ni incluidos en los gravosos ofizios de Republica -con lo quezeso la solizitud que havia a semejantes titulos en los hombres que por la calidad y conbeniencias solicitavan de el caracter de ministros de sus Santas Hermandades Viejas desde entonces reduzidas la pretension unicamente a aquellos que por prezision de trajinar con sus comercios por el reino para llevar el resguardo de las armas cortas y largas y no el ejerzizio de la jurisdiccion..."

(Ib., Div. Her. leg. 71, nº 9, s.f.).

⁶⁷ 20-IX-1745, Madrid (Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 72r).

⁶⁸ Ib., Div. Her. leg. 4, nº 64, ff. 1r-2vº. Cit. M.C. PESCADOR DEL HOYO, "Madrid y la Santa Hermandad...", cp. cit., pp. 818-319.

⁶⁹ Ejemplares de los aludidos cuestionarios de 18-VI-1740 y 23-VII-1754, en Ib., legs. 10, nº 59 y 11, nº 23.

⁷⁰ 18-XII-1755, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nº 67, ff. 1r-2r).

⁷¹ 2-VI-1758, Ciudad Real (Ib., Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

⁷² 24-VI-1761 (Ib., s.f.).

⁷³ Ib., ff. 88vº-89r.

⁷⁴ Ib., ff. 87r-90vº.

⁷⁵ Ib., ff. 54r-55vº.

⁷⁶ El 28-VIII-1774, el alcalde mayor de Talavera de la Reina, a instancias del Consejo de Castilla, es encargado de remitir las cuentas de la corporación local. Dado el ingente trabajo que le aguarda, al no haberse efectuado nunca dicha labor, duda si el testimonio debía ser literal o bastaba un resumen desde la entrada en vigor de las Ordenanzas de 1747. Los desarreglos en el seno de La Hermandad de Talavera eran enormes, agravados por la pérdida de rentas pecuarias y el control de la entidad detentado desde hacía décadas por parte de don Antonio Ortiz. Ante esta caótica situación el alcalde mayor exponía el 19-I-1775 que

"...en estos ultimos años los ministros de dicha Santa Hermandad no lo son mas que en el nombre, sin que se les vea hazer una salida aunque han sido tan frecuentes los robos por este pais como es notorio en todo el Reyno."

(Ib., f. 46vº).

77 El 24-IX-1774 se libraban al corregidor 817'17 rs. de costas (Ib. Div. Her., leg. 61, nº 2).

78 Resultaron nombrados, para esta delicada labor de mediación, don Juan Bautista Bisedo, don Agustín de Madrid y don Ventura Stuart. Estos dos últimos a la sazón ingresarían como hermanos del Santo Instituto años después, mientras que el primero mantenía relaciones financieras con la corporación apícola (Ib., leg. 61, 1, s.f.).

79 En un papel suelto, contenido en el informe anteriormente mencionado, se conserva un borrador, sin data ni rúbrica, donde se recogen algunas de las líneas argumentales suscitadas por este litigio y que a continuación recogemos literalmente:

- "- primero acreditar lo inapurables que son los gastos para prender
 - el por que no condescendio a los dineros de los syndicos
 - las muchas cuentas que ha visto
 - los reos que se an castigado
 - los auxilios de justicias
 - las comisiones desempeñadas
 - las cuentas remitidas al Consejo
 - testimonios de causas
 - lo laudable que es el tribunal
 - el abandono de justicias a los subalternos, y favor que ha hecho en mi tiempo por administrar justicia
 - el desprecio en la cobranza del derecho de asadura traiendolo de abasto y que a su vez se acojen todos
 - los ningunos ministros que ay y falta que hacen, y que se aprueben sus titulos
 - que se cumpla cada año con dar testimonios de cuentas y causas
 - multa para los que no asisten a cabildos, fuerzas de iglesias y visita
 - guarda de esenciones a los ministros
 - paga por todos de derecho de asadura, pues cada ganadero le es nada y que hace un fondo util al reino"

(Ib., s.f.).

80 Don Juan Cabrera, comisario hermandino desde el 10-IX-1758 y con título auxiliado por el Supremo Consejo desde el 9-X-1759; Andrés García dispone de comisión general presentada ante el concejo de

1790.....	2	las solicitudes encauzadas a las distintas	
1791.....	1	corporaciones:	
1794.....	38		
1795.....	29	<u>HERMANDAD VIEJA</u>	<u>PORCENTAJE ESTIMATIVO</u>
1796.....	7	Ciudad Real.....	65%
1797.....	26	Toledo.....	25%
1798.....	17	Talavera.....	10%
1799.....	14		
1800.....	2		

⁸⁸ 14-VIII-1793, Ciudad Real (Ib., leg. 14, nº 14, s.f.).

⁸⁹ Igualmente problemáticas eran las relaciones del Concejo con los cabildos apícolas de Toledo y Talavera. Por auto de 25-VI-1774 se acuerda, conforme a lo expuesto por su Fiscal, que la Hermandad toledana se ciñese en sus despacho de títulos a los dispuesto en sus ordenanzas y siempree en la circunscripción de treinta leguas prescrita en 1762, con la exclusión expresa de Madrid. Una década después, el 19-VIII-1784 los hermanos de Toledo elevan un memorial al monarca solicitando la revocación del auto de 1774, y poder nombrar cuadrilleros en la Corte y al sur del Tajo "en que tuvo su cuna", manifestándose por la admisión de solicitudes al arbitrio de los pretendientes, al creer que

"...vino a conseguir la Hermandad de Ciudad Real, un terreno igual o excesivo al reservado para ambas de Toledo y Talavera: y no estaba señor, creído nuestro cabildo de que el de Ciudad Real fuese merecedor de mayores premios..."

El 27-XI-1786 se accede a dicha súplica, autorizándole a nombrar ministros

"...en las ciudades villas y lugares de su distrito como tambien en esta Corte, y en los pueblos de los Montes propios de Toledo del Tajo alla: con tal que no puede expedir titulos algunos para aquellos pueblos donde hay ministros de alguna de las otras dos Hermandades de Talavera y Ciudad Real."

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 127r-136vº).

La Hermandad de Talavera estaba sumida en la inacción: entre 1740 y 1784 no había nombrado cuadrilleros, tres quintas partes de su asadura

desde 1758 eran asignadas para la reconstrucción de los puentes sobre los ríos Alberche y Tajo, siendo consumidas sus parcas rentas en gratificar a sus oficiales, y sus cabildos raras veces contaban con el quorum preciso para su validación. (Ib., ff. 1r-89v2).

⁹⁰ Ib., leg. 23, nº 43 y BN. mss. 13.030, ff. 54r-57r; cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, p. 119.

⁹¹ 19-IX-1435, Segovia (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 80). Pub. Ib., p. 330.

⁹² "...que sean corteses e mesurados en su fablar los unos con los otros, mayormente estando en la noble congregación de su cabildo, e que de aquí adelante uno a otro no se diga palabra injuriosa ni desmesurada..., e sy alguno lo fisiere o cometiere de dicho o de fecho que cayga en pena de cient maravedis por cada vegada."

Ib., p. 334.

⁹³ Hay un notable vacío documental respecto de las actas capitulares de la organización ciudarrealeña, particularmente durante los siglos XVII y XVIII, con la notable excepción del libro de acuerdos del periodo comprendido entre el 3-X-1622 al 23-XII-1623, cuaderno cosido que consta de 19 hojas útiles manuscritas en ambas caras y que puede consultarse en el AHMCR., leg. 7, nº 202. Las ordenanzas de 1792 nos proporcionan datos interesantes sobre el particular subsanando, aunque sea parcialmente, esta carencia de fuentes directas sobre las mismas.

⁹⁴ Durante las varas de los alcaldes don Diego de Valdés y don Sebastián de Arriaga, se celebraron cabildos los días 3/29-X y 29-XII-1622; 30-III, 20-IV, 25/28-V, 5-VI, 30-VII, 3/10-IX-1623. Asistiendo a

ellos entre 8 a 24 hermanos, y siendo presididos por uno o ambos alcaldes indistintamente.

⁹⁵ En 1799, un memorial remitido desde Talavera argumentaba que puesto que se exigía la concurrencia a sus cabildos de tres quintos de los convocados, sus reuniones eran prácticamente irrealizables, debido a la disminución de las plazas de hermanos. El Consejo de Castilla, el 26 de agosto de ese año, se hace eco de dicha representación, concediendo validez a sus juntas siempre que se congregasen más de un cuarto de los hermanados (AHN. Consejos, leg. 3-163, nº 9, s.f.).

⁹⁶ El fiscal de la entidad talaverana, don Leonardo Joseph Tirado, el 2-VIII-1797 suplicaba que el cabildo general de mediados de agosto, cuando se renovaban los oficios hermandinos, se trasladase de las cuatro de la tarde a las diez de la mañana, según se estilaba y era "universal practica de las restantes Santas Hermandades de Toledo, Ciudad Real y ayuntamientos del Reyno que los celebraba de mañana". El establecimiento de dicha hora tan impropia tal vez obedeciese a los intereses de algunos hermanos, que supervisarían de mañana las labores agrícolas de sus posesiones de las afueras de la villa durante la recolección.

⁹⁷ AHN. Códices, 933B, f. 34r.

⁹⁸ El capítulo XV de las Ordenanzas talaveranas de 1747 explicita la convocatoria anual de dos cabildos, a celebrar en la iglesia de Rocamador, adjunta a la seda del Santo Tribunal, los días 1 de mayo y 15 de agosto (Ordenanzas del Ilustre Cavildo de la Hermandad Real de Talavera, impreso en 1749, p. 13).

En Toledo, desde hacía centurias, se celebraban juntas el primer lunes de Cuaresma, el día de San Pedro de los Arcos -el 1 de agosto- y el día de San Miguel -el 29 de septiembre-. El 1-VIII-1723 se acepta que las plazas de gracia y justicia se hiciesen sólo en uno de los cabildos generales anuales, según se practicaba antiguamente (AHN. Div. Her., leg. 70, 7, s.f.).

99 En el pleito suscitado entre hermanos y titulares de las escribanías enajenadas en la década de 1730, ante la pretensión de incrementar una una las notarías del Santo Instituto manchego, en la Cámara de Castilla el 1-X-1737 se justifica la prórroga del periodo probatorio porque

"...en el archivo de esa Santa Hermandad se habien podido reconocer los papeles y privilegios de el, por estar por el trascurso del tiempo y antigüedad de sus letras tan maltratadas, que no havian podido comprender los privilegios y creacion de sus unicos oficios..."

(Ib., Consejos, leg. 4.870, f. 5r).

100 Las Relaciones Topográficas de Felipe II, realizadas entre 1575-1576, aún mencionaban las explotaciones apícolas, más abundantes en los Montes de Toledo: así en Navas de Estena se respondía que "las haciendas señaladas que hay de particulares en el termino deste dicho lugar son posadas de colmenas"; pub. C. VIÑAS y R. PAZ, op. cit., p. 363. Los vecindarios del Setecientos evidencian una decadencia de tal actividad, aunque en algunos términos como el de Argamasilla de Alba se contabilizaban hacia 1851 más de cuatrecientos corchos poblados; I. PÉREZ VALERA, *Argamasilla de Alba. Datos; Notas y transcripción del Catastro que mandó hacer el marqués de la Ensenada*, Ciudad Real, 1973, p. 42. En 1785 los declarantes de Almodóvar del Campo aseguran

"...que de la varidad de flores que producen los valles y collados se mantienen gran cantidad de abejas, las que producen

una razonable cosecha de miel y cera en mucha mas abundancia, pero de infima calidad."

En similares términos se expresaban los informantes de Arroba de los Montes, Calzada de Calatrava y Horcajo, estimándose la producción anual en Retuerta del Bullaque en quinientas arrobas de miel y no menos de cien de cera; Pub. GRUPO AL-BALITITHA, *Los pueblos de la provincia de Ciudad Real a través de las descripciones del Cardenal Lorenzana*, Toledo, 1985, pp. 66, 102, 123, 132 y 243.

101 El 25-V-1623 se admiten como hermanos a Alonso Romero, vecino de Piedrabuena, a título de una posada de colmenas en el término de dicha villa del Campo de Calatrava; así como al ciudarrealemo Alfonso de Pastrana, propietario de un huerta en el término de la aldea aneja de la Poblachuela (AHMCR., leg. 7, nº 202, f. 6vº).

102 El cabildo de la Hermandad de Toledo de 1743 se acordaba que el nuevo reglamento fijase

"...por número perpetuo el de quarenta -hermanos- del que nunca se pueda exzeder mediante que ya no ay stilo de asistir un hermano para las audiencias de cada semana como antes se practico."

Y el 14-III-1737, en su asamblea general se discutieron los nuevos capítulos formados, aceptándose sin dificultad la mayor parte de su artuculado (AHN. Div. Her. leg. 71, nº 2 y 6, s.f.).

103 Intituladas "Ordenanzas del Ilustre Cabildo de la Santa Hermandad Vieja de esta Imperial Ciudad de Toledo, hechas en virtud de su acuerdo por el señor Don Juan Francisco Ortiz de Zarate y Rios, regidor perpetuo de la misma ciudad, secretario del Secreto del Santo Oficio de la Inquisicion de ella, y hermano Archivero mayor del referido Ilustre Cabildo". Un ejemplar impreso de las mismas en BN., mss. 13.030, ff. 21r-43vº.

Los aspectos más destacados de estos estatutos fueron comentadas, con mayor o menor fortuna, por J.A. ESCOBAR RAGGIO, *Historia de la Policía. Desde sus orígenes hasta finales del siglo XVIII*, Madrid, 1947, pp. 238 y ss.; A. QUEVEDO y J. SIDRO, op. cit., pp. 42-43, 55-61 y 309-314; o C. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, op. cit., pp. 121 y ss.

104 En su preámbulo se recoge que

"...por cuanto las Ordenanzas Antiguas, que han servido de regla ahora a este cavildo, no pueden observarse las mas de ellas, por las novedades de los tiempos, se resolvió dar comision en Cabildo, que se celebrou el día diez y seis de Febrero del año pasado de mil setecientos y quarenta y uno, a diez hermanos, para que en vista de aquellos, los addicionassen, añadiessen, o hiciessen de nuevo, segun y como les pareciesse, conforme a la estacion del presente tiempo: y que estos, assi puestos, con arreglo a los privilegios, Executorias, Buenos usos y costumbres, los trajesen a este dicho cabildo para que por Nos vistas y reconocidas, los mandassemos guardar..."

105 Las ordenanzas talaveranas de 1747 han sido estudiadas, entre otros , por parte de L. DELGADO MERCHÁN, op. cit., pp. 283 y ss.; y J. PEREIRA GARCÍA, op. cit., pp. 412-420. Ejemplares impresos de las mismas en AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9 y BN. 2-27869.

106 Se libraron 120 rs. de gratificación al comisionado que evacuó el informe al Supremo Consejo sobre el reglamento recientemente formado, destinándose otros 9.500 rs. al abogado madrileño don Nicolás Portillo para estimular la tramitación de esta iniciativa en la Corte (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 4, s.f.).

107 En Ciudad Real, el 17-X-1754, se asienta el pago "a Victor Martinez y Ormaza 82 reales y 12 maravedis para poner a limpio las Ordenanzas de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real." (Ib., leg. 60, nº 3, nº 13r.).

108 No hemos podido localizar ningún ejemplar de tales estatutos; sin embargo nos consta que, a principios del siglo XX, L. DELGADO MERCHÁN pudo consultar una copia de los mismos, a cuyas conclusiones nos vemos obligados a atenernos a falta de una fuente directa.

109 La reglamentación de Talavera de 1747 contempla el número de sesenta hermanos, mientras que en Toledo, más exclusivista, se preveían cuarenta miembros con dicha calidad. En la práctica ni unos ni otros llegaron a cubrir la totalidad de dichas plazas.

110 El texto del ordenamiento talaverano es claro, al señalar que:

"...teniendo presente el que en el termino de esta Santa Hermandad, no solo no ay el numero de sesenta posadas, que era necesario para que tuviese efecto esta tan antigua providencia, si no es, que las que ay, por la decadencia deste trato...estan desmontadas y reducidas a tierras labrantías, y que oy el prinzipal objeto deste cabildo, debe dirigirse a la persecucion, y extirpacion de vandidos y malhechores se ha tenido por conveniente, preciso el dispensar esta qualidad, como imposible de verificarse, pero sin perjuicio de la jurisdiccion concedida, y radicada en este cabildo (en el que nunca podran faltar dueños de posadas) para conocer en ellas, y sus colmeneros, y practicar las visitas de la tierra para averiguar sus daños, y perjuicios y exercer los demas actos de su jurisdiccion..."

Op. Cit., p. 8.

111 Nota 3 a la ley. 38, tit. 35, lib. 12. Nov. R., op. cit., p. 470.

112 Ejemplares manuscritos e impresos del protocolo e introducción de dichas ordenanzas en AHN. Div. Her., leg. 3, nº 18. El ordenamiento manuscrito de 1792 se conserva íntegro en AHN. Códices, 933B. Impresos en cincuenta y cinco hojas útiles en Madrid en 1793, en el taller de don Ramón Ruiz, pueden consultarse en AHN. Div. Her., leg. 3.162, nº 9

y ACG. cab. 321, leg. 4.411, nº 1; conservándose hojas sueltas de dicha impresión en ADPCR, s.c.

113 Se lamentan además de que

"...si en la misma forma se hubiera insertado en las Ordenanzas -de 1756- el auto recopilado sobre dación de títulos, no estaría el Consejo todos los días mandando recoger los títulos..."

(AHN. Códices, 933B, f. 7r-vº).

114 Siguiendo la línea argumental de lo expresado años antes por los talaveranos se consigna que

"... teniendo presente que en los terminos de esta Santa Hermandad no hay el numero de posadas de colmenas que se requeria porque cada hermano ubiese la suya, dimanado de la injuria de los tiempos, que ha menoscabado este efecto, y de que mucha parte de los montes se ha reducido a tierras labrantias, no obstante de que muchos las poseen, y que para que todos las adquirieran hacemos la exortacion correspondiente: ordenamos y mandamos no sea precisa qualidad, para ser recibido por hermano de este tribunal ha de tener posada de colmenas."

(Ib, ff. 29r-vº).

115 En los expedientes de algunos pretendientes al ingreso como comisarios se consigna que les eran remitidos ejemplares de dichos estatutos junto a sus nombramientos. esto sucede, por ejemplo, con don Francisco Antonio de Herrera y García, el 29-XI-1792, (AHN. Div. Her., leg. 14, nº 14) y con don Fermín María Martínez, el 1-IX-1793, (Ib. leg. 14, nº 15).

116 Una nota manuscrita suelta nos informa que desde Ciudad Real, el 8-VII-1793, se enviaron cincuenta ejemplares de este texto impreso. Diez días después se notificaba al presidente y oidores de la Real Chancillería de Granada que habían sido recibidos diez de éstos, que

serían distribuidos entre sus oidores y otro para cada una de las salas de este alto tribunal (ACG. cab. 321, leg. 4.411, nº 1, f. 1r).

3. MIEMBROS DE LA HERMANDAD MANCHEGA.

Desde el periodo fundacional la Corporación Vieja estuvo integrada por los propietarios apícolas, residentes o no en núcleos poblacionales más importantes. Pronto se sumarían a ellos los guardas asalariados de dichas explotaciones, sus criados y dependientes, que aunque en principio carecían de la condición formal de hermanos constituirían el auténtico brazo armado operativo de esta asociación.

Cinco miembros de pleno derecho de esta entidad, los hermanos, reunidos en cabildo, se configuran como el órgano colegiado decisorio por excelencia que dirige los destinos de la corporación colmenera. Paulatinamente al desarrollo institucional, los hermanos afincados en Villa Real es decir, los dueños de las posadas concentradas paulatinamente en unas pocas manos, debido a su preeminencia socioeconómica en el seno de la entidad y a su inmediatez o facilidad para acceder al punto de reunión prefijado, se harían con su control efectivo. Paralelamente se tendería a delegar los cometidos preventivos y coercitivos a todos cuantos tuviesen intereses patrimoniales en el despoblado, por propiedad o delegación, facilitando la oligarquía urbana armas a sus sirvientes en el monte, y solicitando la colaboración de pastores, campesinos y cazadores siempre que fuese precisa su concurrencia en misiones policiales.

Desde poco tiempo después de su fundación, puede percibirse una palpable delegación de las labores ejecutivas a los pecheros, monopolizando los caballeros los cargos honoríficos. No era precisa la condición masculina para el ingreso, ya que las propietarias de

colmenas tienen franqueadas las puertas de la institución, aunque sin gozar plenamente de las atribuciones personales que en cambio sí podían encauzar mediante sus parientes varones más próximos¹.

El ámbito actuacional hermandino, reducido a las inmediaciones de las explotaciones en el yermo de los hermanos, se fue homogeneizando progresivamente, abarcando por derivación todo el despoblado cercano, ampliándose a la par que aumentaban sus integrantes. Durante el quinientos y principios del Seiscientos, cuantitativamente su número permanece en unos parámetros relativamente estables, con una moderada tendencia alcista, siguiendo monopolizando los cargos rectores los vecinos o naturales de la capital manchega. Hacia la década de 1620, o tal vez antes, comienza a esbozarse lo que puede interpretarse como una huida adelante de la entidad, configurándose jurídicamente la figura del comisario.

La expansión territorial, auspiciada desde la Corona con la concesión de mercedes y privilegios, conllevaba irremisiblemente un aumento de sus dependientes proporcionado a la asunción de las tradicionales actividades hermandinas fuera del radio de acción natural del tribunal. A partir de entonces, y hasta fines del siglo XVII, los hermanos ciudarrealeños, asegurada su patrimonialización de las dignidades corporativas, proceden a admitir un número cada vez más desproporcionado de solicitudes de ingreso. Para evitar el ineludible desequilibrio a que conducía este proceso, se dispararán durante el Setecientos los despachos de cartas de comisarios, restringiéndose paralelamente con toda probabilidad las plazas de hermanos.

Se constituye de esta forma una doble estructura superpuesta, la integrada por los hermanos residentes en la sede hermandina, y una

heterogénea cohorte de dependientes que hacen posible el mantenimiento de una más o menos tupida red de seguridad, según las comarcas. Ambas conformarían un imponente aparato de seguridad supralocal, coordinado y centralizado en Ciudad Real, y cuyos puestos clave estarían en manos de hidalgos.

3.1. LOS HERMANOS: FORMALIDADES DE INGRESO Y EXTRACCIÓN SOCIOECONÓMICA.

Probablemente desde su periodo fundacional hasta mediados del Seiscientos, la corporación manchega admitía en calidad de hermanos a la mayoría de quienes presentaban solicitud formal de ingreso ante el cabildo. Los requisitos imprescindibles eran tener en propiedad o estar sujetos contractualmente a las explotaciones agrícolas, pecuarias, apícolas, forestales o que practicasen actividades cinegéticas, es decir aquellos que demostrasen tener intereses económicos vinculados al yermo en donde deberían ejercer su instituto. Acreditada su pretensión ante el cabildo, se procedía la votación decisoria, y siendo el escrutinio favorable a la solicitud, la asamblea siguiente recibía su juramento de fidelidad al servicio divino, al rey y a la Santa Hermandad.

Ta sea por dejación de sus prerrogativas o por la paulatina prosperidad de Villa Real, desde 1420 convertida en ciudad, lo cierto es que se consagró la práctica consistente en que su patriciado urbano acaparara los resortes deliberatorios y decisorios de la entidad apícola, delegando al resto de los confraternizados todo el peso de las labores preventivas y la mayor parte de las ejecutivas. Así, paulatinamente, se identificará la calidad de hermano con la vecindad en la localidad donde se centralizan los órganos rectores corporativos; la costumbre derivó en precepto, y a fines del Cuatrocientos era condición indispensable para participar activamente en los cabildos la residencia en la ciudad.

Paralelamente, la Hermandad venía recurriendo desde tiempo atrás, con cierta asiduidad, a la colaboración de personas ajenas a la entidad pero cuyo concurso resultaba inexcusable. Este es el caso de la participación de serranos, cazadores, carboneros u hortelanos en misiones policiales; correos que facilitaban la comunicación de órdenes; letrados que levantasen acta notarial de las diligencias judiciales; braceros que hiciesen determinadas faenas por cuenta del Santo Tribunal, etc. Se trataba, pues, de colaboraciones puntuales que ponían temporalmente al servicio de los hermanados a personas extrañas a la organización, reclamados por sus miembros o estimulados por intereses propios, y cuyo trabajo suele ser recompensado con la gratitud de la corporación, y una remuneración en especie o en dinero.

Cuando la estructura hermandina amplió su radio territorial actual, debió de abrir sus puertas a unos individuos que, de forma más o menos permanente, cumpliesen las diligencias despachadas desde Ciudad Real y mantuviesen lazos orgánicos estables con los superiores jerárquicos en su distrito. Sin renunciar a la colaboración circunstancial con otros sujetos, era preciso contar con personas de confianza permanente y estratégicamente distribuidos por aldeas y campos que complementasen a los guardas de los colmenares esparcidos por el yermo cuando éstos dejaron de ser numéricamente importantes. Para su captación se contaba con el apetecible señuelo de las notables exenciones que poseía la Hermandad, aunque sin permitirles acceder a los puestos rectores de la superestructura periférica creada².

De esta manera, hacia las décadas centrales del Seiscientos se operó un cambio cualitativo importante, a remolque de la tendencia expansionista en que inconsciente e involuntariamente se vería envuelta la corporación. Décadas atrás se había configurado el

comisario como persona adscrita al Santo Instituto, participe de sus mismas amplias prerrogativas jurídico-fiscales, pero supeditada su actuación a los mandatos de sus inmediatos superiores, los alcaldes hermandinos. La proliferación de títulos fue tal que en los albores del Setecientos se hubieron de crear clientelas comarcales entre sus dependientes.

Como entidad en que confluían voluntades de diverso cariz, no siempre convergentes, era preciso fijar una normativa válida que regulase la admisión de nuevos miembros, para lo cual se hubieron de establecer normas flexibles que regulasen, facilitando o entorpeciendo, su ingreso a tenor de las necesidades e intereses de sus rectores. A principios del Seiscientos, ya hemos apuntado que se admitían en la fraternidad manchega quiénes elevasen petición formal al cabildo y fuesen aceptados como tales, acreditándose reunir las calidades establecidas en los Capítulos de Maldonado y la antigua usanza del tribunal, introduciéndose ciertas modificaciones; las cualidades requeridas eran ser varones, haber cumplido veinticinco años -es decir ser mayores de edad-, poseer en propiedad al menos media posada de colmenas, ~~losados o huertos en despoblado desde hacía una década~~³, ser buenos cristianos, y estar siempre prontos al servicio inherente de su instituto, para lo cual no debían estar impedidos en razón de alguna tara física u oficio que los embarazase. Quedaban eximidos de dicha mayoría de edad los parientes cercanos de los hermanos, hasta su segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, aunque hasta alcanzarla no disponían de voz ni voto en cabildos, ni ser promovidos a obtener empleo orgánico alguno; esta admisión a efectos meramente formales solo tenía sentido para adquirir la antigüedad precisa para ascender en el escalafón jerárquico.

A principios del siglo XVII los trámites acostumbrados eran presentar petición formal de ingreso, personalmente o mediante apoderado si no residía en Ciudad Real o sus cercanías, logrando a menudo la mediación de alguna persona ligada a la institución para que velase por sus intereses⁴. Aceptada la petición por el cabildo, el aspirante que había verificado la solvencia de su persona y hacienda, juraba personal y solemnemente guardar los buenos usos y costumbres del Santo Tribunal. Anotado su nombre por el escribano presente, para los efectos correspondientes, era encuadrado en una de las cuatro cuadrillas en razón de su status estamental y las vacantes existentes, expidiéndole testimonio de su nueva condición. Alcanzada su pretensión, el recién ingresado pagaba una cantidad en metálico con concepto de gratificación por los trámites efectuados, agasajando a los presentes con un ágape a tenor de su calidad socioeconómica, y contribuyendo graciosamente a una limosna para adecentamiento y ornato de la capilla capitular⁵.

No era condición indispensable su vecindad o naturaleza en Ciudad Real para disfrutar de las preeminencias personales de los hermanos, con la notable excepción de ser apartados de sus órganos colegiados deliberatorios y decisorios, pese a lo cual no faltaron peticiones de admisión aún en los momentos de su mayor decadencia institucional por individuos de la más variada condición⁶. Tampoco escaseaban los ciudarrealeños, como lo demuestra que en 1602, los hermanos y dependientes beneficiados de las gratificaciones navideñas del Santo Instituto ascienden a ciento nueve⁷, por entonces ya no se admitían mujeres en la Hermandad Vieja, aunque se respetaban los derechos jurídicos que transmitían⁸, así como el mantenimiento del tradicional aguinaldo pascual a viudas, madres, hijas o esposas de los hermanos⁹, y la eventual paliación de sus necesidades más imperiosas.

Avanzada la centuria el trámite sufrirá ligeras modificaciones formales que encierran un trasfondo más profundo. Son recibidos como hermanos los naturales y vecinos de Ciudad Real, del estado noble "por sanguinidad" y del llano en quienes concurren idénticas cualidades que las exigidas desde hacía siglos, manteniéndose el requisito de ser propietarios de colmenas u otras tenencias en despoblado hasta fines del Setecientos. Esta precisión en señalar la naturaleza o vecindad de los hermanos no era nímia, al contemplar la argucia de oriundos ciudarreales que aparecen avecindados en lugares cercanos del Campo de Calatrava para eximirse de los gravámenes maestres sobre sus ganados.

Una vez dentro de la corporación sus status vitalicio era irrenunciable, con los deberes y derechos que ésto suponía, salvo expreso deseo del beneficiado o expulsión de la entidad, decidida por el cabildo como resultado de algún desacato grave al Santo Instituto por acción u omisión.

No tenemos constancia de que la Hermandad manchega restringiese nunca su acceso a un cupo numerario, a la que sí se vieron sujetos toledanos y talaveranos a mediados del siglo XVIII, aunque probablemente se redujo implícitamente su número, con el objetivo de dotarle del exclusivismo propio de una organización de su carácter. En 1748, cuando el cabildo de Talavera decide acometer una reforma de sus reglamentos, el pleno capitular congrega a cuatro oficiales y veintitrés hermanos, registrándose algunas ausencias; en marzo de 1791 el número de sus integrantes residentes en la villa era de veintisiete, la mayoría de avanzada edad, reduciéndose las plazas a veinticinco en 1797¹⁰. Por su parte, en Toledo tampoco se cubren todas

las plazas previstas, ya que su calidad patrimonial aconseja dejar sin proveer algunas de ellas para asignarlas a los descendientes de los hermanos difuntos.

La extracción socioeconómica de la corporación apícola ciudarrealense es heterogénea, aunque a estas alturas de la Edad Moderna mayoritariamente estaban representados en ella los miembros más destacados de la oligarquía urbana, quienes ven en esta asociación el marco perfecto para consolidar su esfera de influencia en la ciudad, y una manera relativamente accesible de los pecheros de exonerarse de las cargas fiscales a las que estaban sujetos, siendo para unos y otros una forma de acrecentar o adquirir prestigio en una sociedad estamental dominada por las solidaridades colectivas y por el privilegio¹¹.

El patriciado local, que había acaparado desde hacía siglos las dignidades rectoras del concejo y de cuantos resortes de poder efectivo había en la ciudad, copando desde el reinado de los Reyes Católicos los oficios municipales honoríficos enajenados por la Corona¹², aumentaron su peso específico en el gobierno local por la venalidad de cargos durante los siglos XVII y XVIII. Se trata de los linajes de Loaysa, Bermúdez, Treviño, Velarde, Xédler, Calderón de la Barca, Céspedes, Barona, Cárdenas, Muñoz de Figueroa, etc, algunos afincados en la ciudad desde el periodo bajomedieval y cuya endogamia aseguraba su privilegiada posición en Ciudad Real durante dilatado tiempo¹³.

Suelen ser hidalgos tenentes en propiedad de heredades rurales y urbanas vinculadas¹⁴; arrendatarios de pastos y dehesas¹⁵, o de tierras cultivables¹⁶; ganaderos¹⁷, algunos de ellos hermanos del

Honrado Concejo de la Mesta¹⁸; monopolizadores de los oficios perpetuos municipales y capitulares u oficiales públicos de la ciudad¹⁹; acaparadores de censos y juros²⁰; negociantes de cierta envergadura²¹; no faltando quiénes disfrutaban de un hábito de las órdenes Militares²², e incluso de encomiendas²³; ministros y familiares del Santo Oficio de la Inquisición²⁴; oficiales en activo o retirados de ejército o de la milicia provincial²⁵; maestrantes de las reales andaluzas²⁶; fundadores, patrones y administradores de pósitos²⁷, capellanías u obras pías²⁸; prestamistas eventuales²⁹; miembros de la segunda nobleza, como varones y marqueses³⁰, y señores jurisdiccionales³¹; futuros ostentadores de cargos en la alta administración³²; cofrades de las congregaciones religiosas de la capital manchega³³; arrendadores de rentas reales³⁴; etc.

Esta plutocracia controla la vida institucional hermandina, dejando los cargos que requieren una cierta cualificación profesional y personal -como escribanías, mayordomías o asesorías letradas- a personas de su confianza, así como los puestos que comportan potencialmente riesgos físicos, económicos o jurídicos -como los oficios de cuadrilleros al estado llano, la alcaidía y el empleo de verdugo- a individuos ajenos a la corporación. Los pecheros son relegados de esta forma a los puestos ejecutivos, y los no hermanados a los cargos que irrogaban infamia, siendo éste el precio que debían pagar por compartir las prerrogativas del estamento superior, y a cuyo papel secundario parecen resignarse durante siglos, reproduciéndose fielmente el ordenamiento vigente durante el Antiguo Régimen.

Los hermanos pertenecientes al estado llano suelen formar parte de círculo de deudos de esta clase rectora. Quienes acceden al tribunal en calidad de profesionales son personas vinculadas, de una u otra

forma, con el empleo a desempeñar: los arqueros hermandinos serán negociantes particulares o comisionados, administradores de pósitos o fundaciones religiosas, apoderados de personas influyentes, etc; los escribanos serán notarios numerarios del ayuntamiento; los letrados tendrán experiencia probada en asuntos judiciales; los cuadrilleros son, mayoritariamente, pastores, menestrales, mercaderes itinerantes, labradores, cazadores, soldados desmovilizados u otros individuos dedicados a ocupaciones semejantes.

Una visión, necesariamente parcial, de dichas actividades económicas y sociales de todo tipo, como litigios civiles; contratos y enajenaciones³⁵; capitulaciones matrimoniales y cartas dotalas³⁶; testamentos³⁷; toma de vecindad de futuros hermanos³⁸; e informes genealógicos y sobre limpieza de sangre³⁹ pueden rastrearse entre los protocolos notariales de la ciudad, libros de cofradías, memoriales elevados a los reales Consejos, y actas capitulares del ayuntamiento. En ellas no es difícil ver consignados algunos hermanos, generalmente los más preeminentes, quedando la mayoría en el anonimato.

Si hasta el siglo XVII es frecuente ver asistir asiduamente a hermanos hidalgos a las diligencias judiciales, preventivas o coercitivas pertinentes⁴⁰, a partir de entonces su servicio a la Hermandad se redujo a labores de representatividad de la corporación ante otras instancias jurisdiccionales, siendo sufragados sus gastos y derechos por la entidad a la que apoderan, salvo las esporádicas salidas masivas contra las nutridas partidas de bandoleros⁴¹.

3.2. PRIVILEGIOS PERSONALES.

El privilegio, elemento consustancial al ordenamiento socio-jurídico estamental de diferenciación honorífica, era codiciado por todo individuo que pretendiese medrar en la época y pretendiese sustraerse de la pesada carga impositiva a la que estaba sujeto por parte de la Corona, la Iglesia y los diversos poderes locales o supralocales a la que estaba obligado a responder mediante prestaciones económicas, militares y personales.

Pasados los primeros tiempos, cuando la adscripción a la Hermandad comportaba serios inconvenientes incluso para sus rectores, al deber cumplir tareas peligrosas o concurrir a costa de su peculio a las juntas generales y particulares de la institución, los asociados gozaron de un status preeminente tan codiciado por sus convecinos como igualmente cuestionado por quienes se veían perjudicados por sus franquicias. Durante el periodo fundacional el ingreso en la organización apícola comportaría más deberes que beneficios directos, ya que las temidas bandas de golfines eran difíciles de erradicar sin una férrea y constante vigilancia del despoblado, desarrollándose presumiblemente inevitables enfrentamientos armados de cierta envergadura con tal fin. Pero, sin duda, la defensa a ultranza de intereses propios o delegados justificaba sus desvelos y la aplicación en labores tan peligrosas como inexcusables para la viabilidad económica de las explotaciones rurales. En aquella época, pocos honores oatrian esperar de una actividad todavía sin ser sancionada formalmente por la Corona, a pesar de su loable labor, y únicamente la

calidad personal de algunos de sus miembros les permitiría distinguirse honoríficamente de sus convecinos.

Pronto esta situación daría un giro importante. El papa Celestino V, a instancia del Sancho IV de Castilla, otorgó hacia 1294 el título de Santa a la Hermandad, eximiendo del diezmo de miel y cera a los hermanos de Villa Real, así como del diezmo de los salarios de sus dependientes exigidos por la Mitra⁴², conocido como "diezmo de mozos". El arzobispo toledano, Gil de Albornoz, pleiteó con la Hermandad manchega al pretender arrebatarse esta merced; el proceso llega a Roma pero, en vista de la demora de su resolución y el descrédito que comportaba a ambas partes su seguimiento, el nuevo dignatario eclesiástico, don Gonzalo de Aguilar, destacó a su mayordomo Juan González Castaño ante al cabildo hermandino. La concordia llega el 20 de febrero de 1353, refrendándose la merced en litigio ante lo oneroso del control del yermo; sin duda ayudó a este acuerdo la buena voluntad de los colmeneros hermanados quienes ya venían entregando a los recaudadores eclesiásticos los corchos ya castrados, cuyo monto era similar, e incluso algo superior, al controvertido diezmo⁴³.

En 1370 los colmeneros manchegos elevaban sus protestas contra las veintenías que les eran impuestas en el Campo de Calatrava por la adquisición de posadas, lo que sería revocado desde la Corona al mandarse reembolsar lo cobrado por este concepto⁴⁴. La autonomía de las entidades integrantes del Triple Instituto tuvo su reflejo en las franquicias de sus hermanos, no extendiéndose los privilegios de una organización a los miembros de sus homónimas, compartiendo, en principio, únicamente la confirmación regia de la libertad del pago de pentagros y portazgos⁴⁵.

El manuscrito atribuido a DÍAZ JURADO contiene noticias sobre la posesión de cada una de las citadas instituciones de diez excusados, lo que les eximía temporalmente de prestaciones militares, en razón de su valiosa participación en la batalla de Olmedo⁴⁶. Hacia 1496 eran exigidas alcabalas a los colmeneros de Calabazas -en el término de Calzada de Calatrava- y de Malagón, lo que despertó la pronta reacción de la entidad; y en 1498 a los ciudarraleses les reclamaban pedidos, monedas y otros tributos maestrales en el Campo de Calatrava, sintiéndose agraviados por una contribución de la que se consideraban exentos desde tiempo inmemorial⁴⁷.

Los Habsburgo siguieron otorgando su favor a las Hermandades Viejas, llegando a aumentar incluso las mercedes al verse complacidos por su labor en los territorios por donde iba extendiendo sus actuaciones⁴⁸. Sumidas estas entidades en una relajación de sus cometidos durante parte del siglo XVI y, sobre todo, durante el XVII, los monarcas no hallaron otro medio para auspiciar su mantenimiento y recuperación que continuar respaldando con provisiones y ejecutorias la mayor parte de sus antiguos privilegios, en un intento de estimular con la concesión de honores su relanzamiento como fuerza insustituible para el control del despoblado. Pero habría de ser una coyuntura general favorable la que devolviese el papel que había desempeñado tiempo atrás.

Los primeros años del reinado de Felipe V se crearon las condiciones favorables para el incremento de su política de presencia por amplias áreas de la Monarquía Católica. Como institución, la proliferación de títulos no comportaba a corto plazo una carga directa, engrosándose las arcas de los escribanos, y multiplicando sus dependientes para eventuales colaboraciones futuras. La contienda

sucesos había distendido el control corporativo por parte de una administración sinodial colapsada y desprestigiada, mientras que los desórdenes del Reino hacía ineludible la restauración del orden, aprovechándose las Hermandades Viejas de la inoperancia de la Hermandad General. Estas circunstancias, algunas irrepetibles, hacen que un soberano recientemente instalado en precario en el trono, no dudase en favorecer a una fuerza armada que no podía permitirse colocar en su contra, y que reconducida según sus designios podía contribuir a la deseada seguridad de caminos o campos.

Pero duro la distension entre el Triple Instituto y la administración borbónica, forzada por los acontecimientos. A partir de 1715, cuando el titubeante entronamiento de la dinastía borbónica cedió paso a su consolidación indiscutida, se intentarán reforzar notablemente los resortes de supervisión centrales y a racionalizar, en medida de lo posible, la administración pública, lo que daría al traste con muchas de las supervivencias forales aún existentes. En la práctica, esta tendencia se tradujo en el respeto de su jurisdicción criminal tradicional, en detrimento de sus atribuciones civiles, territoriales y exclusivistas. A pesar de todo, el amparo regio se muestra decisivo para el mantenimiento de una serie de prerrogativas estrictamente jurídico-penales y honoríficas que trataban de garantizar la plena dedicación de sus miembros a las obligaciones operativas inherentes a su ministerio. Desde 1740 se produce la práctica desaparición de las exenciones personales y profesionales cuando ya el Santo Tribunal da muestras patentes de la imposibilidad de su reordenación racional; a fines del Setecientos era evidente la desnaturalización de su instituto, quedando relegadas por una realidad histórica que distaba mucho de la que contempló su nacimiento y ulterior desarrollo.

3.2.1. ECONÓMICO-FISCALES.

Los derechos económicos y tributarios que disfrutaban los dependientes hermandinos fueron, sin duda, los principales acicates para el ingreso en unas entidades de carácter tan peculiar como el Santo tribunal, pero su inmoderado crecimiento sería paradójicamente el fulminante que aceleraría su desnaturalización bien entrado el Setecientos.

Los integrantes de la entidad manchega, poseedores de colmenas desde el período fundacional, ya nunca se verían contrariados por los recaudadores de las rentas eclesiásticas de la Mitra toledana, siendo incontestada la concordia del siglo XIV en cuanto al diezmo de miel y cera. En el último cuarto del Quinientos, los alcaldes manchegos protestaron contra el ciudarrealeño Bernardo de Céspedes, perceptor de las exacciones eclesiásticas, por pretender cobrar el diezmo de mozos a Alonso de Molina y Diego Carrillo, vecinos de Argamasilla, pero hubo de plegarse a las exigencias de los hermanados tras acreditarle la citada bula pontificia⁴⁹; poco antes había desistido igualmente el cobrador de los derechos del arzobispado en Calzada de Calatrava, al exigirlo a un convecino asociado a dicha organización, siendo sancionado por su insumisión el recaudador a destierro y a una pena pecuniaria moderada⁵⁰.

El 9 de octubre de 1599, ante el alcalde don Fernando Treviño, comparece el apoderado de Pedro Garrido, querellándose de Juan Dávila Marcos, regidor de Malagón y también hermano del Santo Instituto recientemente designado perceptor del diezmo de mozos por el señor de

Malagón⁵¹. Una semana después se presenta el acusado, exponiendo sus sospechas de la legalidad sobre la adscripción como hermano de su oponente pues,

"...no tiene ninguna colmena ni colmenar en el termino de Malagon ny la Porçuna, sino malicia de defraudar: compro parte destrozada de un colmenar a un jurado de Malagon, sembrandolo sin tener colmenas desde hace mas de diez años como se requiere en los estatutos de la Santa Hermandad Viexa de Ciudad Real..."

Pedro Garrido alega su calidad de miembro de la citada asociación, acreditando su propiedad sobre la posada "La Peralosa", en el alfoz de Porçuna⁵². La parte contraria presenta testimonios de sus paisanos que juran que en dicho lugar no hay enjambres, si no una quintería de labor, y que desde que se instruyó expediente contra el infractor había colocado en él unos corchos prestados por Juan de Cuéllar para enmascarar su fraude; alega que la escritura de compra presentada estaba "rota y cancelada" y lanza una dura diatriba contra esta maniobra velada. A principios del 1600 se dictaminaría una sentencia salomónica por el Santo Tribunal: declarar nulo el ingreso en la organización del encartado, por lo que según los Capítulos de Maldonado no debía gozar de exención alguna, pero al haber adquirido recientemente los corchos a un jurado ciudarrealeno podría ser admitido como hermano, como tal gozaría de sus privilegios y no antes; cada uno de los litigantes pagarían las costas procesales devengadas. Es decir, la Santa Hermandad se mostraba inflexible sobre la adscripción apícola de sus integrantes, pero transigía mediante soluciones transaccionales cuando lo consideraba oportuno. Este proceso no sería el último en que se viese comprometido el diezmo de mozos⁵³, pero desde principios del Seiscientos no vuelven a mencionar las fuentes dicha cuestión.

En 1352 se determinó en la junta general de Navas de Estena que los hermanos de cada una de las corporaciones federadas no contribuyesen a la asadura de sus homónimas cuando transitasen sus rebaños por términos ajenos⁵⁴, aunque a fines del Cuatrocientos la entidad de Ciudad Real exigía el pago de su propia asadura a sus miembros⁵⁵, y no tenemos constancia de que se modificase esta normativa interna, no pudiéndose descartar esta eventualidad. Previamente, en la llega de seis de septiembre de 1335 se habían reconocido y fijado sus respectivas circunscripciones, así como las cabañas trashumantes sobre las que recaería su carga impositiva.

A pesar de estas disposiciones no faltaron excepciones a la norma, y un miembro tan destacado de la organización manchega como don Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa, en 1646, debía pleitear con la Hermandad Vieja de Toledo, al reclamarle su arrendador a sus mayoresales de los ganados ovinos dicho gravamen, sin atender a su calidad de "hermano vallastero"⁵⁶.

Los rebaños de los ganaderos ciudarrealeños lograron, tras prologadas gestiones judiciales, quedar exentos del pago de las rentas maestrazas sobre el tráfico pecuario de la mesa de Calatrava, lo que se concretaba en no sujeción a los arbitrios de puertos, servicio, travesíos, medio diezmo y montazgo⁵⁷, lo que sería contestado por Almagro, cabeza de partido del Campo de Calatrava secularmente enemistada con el realego manchego⁵⁸, por Almodóvar del Campo, cabecera del área meridional de la mesa de Calatrava segregada en el Quinientos, y por ciertos nobles solariegos⁵⁹. Igualmente se beneficiarían de otros privilegios pecuarios quienes tuviesen el doble status de miembros del Honrado Concejo de la Mesta y del Santo Instituto⁶⁰.

Juan II, en una fecha tan temprana como 1418, ya había aceptado la exoneración de los colmeneros de Toledo, Talavera y Villa Real de todo cuanto disfrutaban con anterioridad, lo que suponía

"...que a ningún ministro de la cicha Santa Hermandad, de el superior hasta el inferior, no se les a de poder ni pueda echar y repartir ningún tributo, pecho ni gavela ni derrama en que pechan y contribuyen los hombres llanos, a mi Real Hacienda, ni vagaxes ni casa de aposento, ni alardes generales ni ordinarios, ni otro tributo alguno concexil ni tutelar ni curadurias, ni mayordomias, ni thesorerias ni cobranzas, ni puentes, ni caminos, ni ninguna guarderia, salvo si fuese necesario para la guardia y custodia de mi Real Persona y de los señores Reyes y Reinas que me subcedieren, que en tal caso no podran por menos que asistirnos como mas ministros reales, que ocupan plaza real."⁶¹

Tan amplios privilegios fiscales, reales y concejiles, despertarían envidias y protestas, particularmente virulentas en el Setecientos por parte de los municipios, contrariados los pecheros por la proliferación de honores y el agravio comparativo que suponía que los vecinos económicamente más solventes se viesen libres de tributar, teniendo en cuenta que, al seguirse los sistemas recaudatorios de derramas y encabezamientos, menos contribuyentes habían de asumir idéntica o superior carga.

Comenzó bien el Siglo de Las Luces para los ministros manchegos, al fallarse en la Real Chancillería de Valladolid en 1708 a favor del respeto a las prerrogativas de un comisario de Villamartín, según lo preceptuado durante el reinado de los Reyes Católicos⁶². Pero ya consolidados los Borbones, comenzarían a dictarse reales mandatos que recortarian paulatinamente las excesivas franquezas que gozaban cada vez mayor número de súbditos⁶³.

Era evidente que la proliferación de exenciones redundaba en perjuicio de la solvencia de los municipios y del propio Tesoro Real, empobreciendo a los pecheros, por lo que algunos pueblos elevaron sus cuitas al Supremo Consejo⁶⁴, mientras que otros actuaban mediante una política de hechos consumados, imponiendo por la fuerza dichas exacciones, y suscitándose en todo caso un enfrentamiento abierto o soterrado con sus convecinos. En la década de 1720 comienzan a menudear los memoriales de los procuradores del Común en los Reales Consejos por dicha razón, cristalizando este sentimiento general en la abolición de las franquicias fiscales concedidas a dependientes de las rentas reales, hermanos síndicos de religiones, cuadrilleros de las Hermandades, ministros de cruzada, etc, luego confirmada por Reales Cédulas de 1728⁶⁵; asimilándose las dispensas de los ministros hermandinos a lo preceptuado para con los familiares de la Inquisición⁶⁶.

Desde 1740 el Consejo de Castilla dispuso que las autoridades locales en primer término, y luego los procuradores síndicos del común y personeros⁶⁷, o bien quienes ejerciesen como tales en los pueblos de la naturaleza o vecindad de los solicitantes, informasen sobre la precisión de crear nuevos exentos, indicando si perjudicaban de alguna manera al bien común.

En la sede del Santo Tribunal no tenemos noticia de ningún conflicto suscitado por las franquías fiscales de los hermanos, pero a medida que nos alejamos de la cabeza de la Hermandad y de su teatro tradicional de operaciones aumentan progresivamente las colisiones por tal motivo: en Gibraleón -Huelva-, el pretendiente Juan Díaz Morón vio vetada su admisión debido al informe negativo del alcalde mayor del marquesado, en el que se presumía su ánimo de defraudar a las

contribuciones reales, pechos y cargas concejiles, pues por ser labrador acomodado "librandoselos de su posible recaeran sobre el pobre desvalido", a lo que se suma el hecho de que en la localidad había otros dos dependientes de la organización manchega gozando las referidas libertades⁶⁸. En el testimonio secreto remitido por el alcalde ordinario de Arroyomolinos -Plasencia-, se estimaba que a cierto solicitante a la corporación ciudarrealeña

"...no llevo obtener semejante empleo el zelo de servir a la Santa Hermandad, si solo exonerarse de servir y contribuir a las cargas penosas de esta Republica, que por ser tan limitada su vecindad que apenas llegara a zien vecinos y estos todos rusticos operarios del campo, no a lugar a que aiga sujetos que pueda ayudar y contribuir, y que tanto este libre, las cargas que el puede sufrir recaera sobre otros pobres..."⁶⁹

Análogos argumentos serían esgrimidos por los representantes del común y notarios de puntos tan distantes de la geografía nacional como Valdepeñas -Ciudad Real-, Arahal -Sevilla-, o Vigo -Pontevedra-, aunque con desigual resultado⁷⁰.

Ocasionalmente los enfrentamientos aflorarán al presentar sus títulos ante el concejo de su vecindad. Así el juez comisario Pedro Abarques, en enero de 1716, se halla con la desagradable sorpresa de que en el ayuntamiento de Gandía -Valencia-, el síndico del común contradice sus privilegios impositivos, exigiéndole la aportación de tres testigos que corroborasen su nuevo status; el 7 de septiembre de dicho año comparece ante los municipales con cuatro paisanos, cuatro labradores como él y un cirujano, que acreditan su pertenencia a la Hermandad Vieja, pese a todo, un auto notarial deja de manifiesto la postura pertinaz del síndico general⁷¹.

Tampoco faltan los supuestos en que años después de estar en posesion de títulos de Hermandad, a menudo tras haber desempeñado alguna diligencia relevante a cargo del Santo Instituto e incluso a instancias de la justicia local, son apremiados al pago de las obligaciones concejiles⁷².

Desconocemos el resultado de cada una de los enfrentamientos suscitados por tal motivo, pero probablemente cuando su calidad personal e influencia social no soslayasen las afrentas a las que eran sometidos, no podían hacer más que manifestar públicamente su descontento y agravar aún más su descrédito ante los poderes públicos y sus propios convecinos. Cuando a lo largo de la segunda mitad del Setecientos fuesen despojados de sus franquicias tributarias, las peticiones de ingreso a la Santa Hermandad caerán ostensiblemente; pocas personas estaban interesadas en pertenecer a una entidad desacreditada y de cuya adscripción redundarían antes en recelos de las autoridades locales que beneficios palpables que no fuesen los meramente honoríficos.

3.2.2. HONORÍFICO-PROFESIONALES.

Pocos datos disponemos de las distinciones honoríficas de las que sin duda se hicieron acreedores los miembros de la Hermandad de Ciudad Real⁷³. Es fácil colegir que personas caracterizadas por la loable misión de librar de bandidos y malhechores caminos o yermos gozasen de una cierta reputación entre sus paisanos, lo que a largo plazo desembocaría en situaciones de preeminencia en determinados acontecimientos públicos, religiosos⁷⁴ o laicos⁷⁵. Se acrecentaría, en su caso, la distancia social que algunos integrantes hermandinos ya ostentaban en razón de su estamento o condición socioprofesional, siendo en todos los supuestos un estímulo para el ingreso en el entramado hermandino.

Tanto es así que la desestimación en la admisión de ciertos pretendientes, particularmente cuando un convecino o conocido de igual o inferior calidad la hubiese logrado, pudo ser interpretada como un agravio comparativo que parece dañar su crédito. Paradigma de este sentimiento es la actitud manifestada por el aspirante don Alonso Miguel Arias quien, indignado al no prosperar su pretensión, intenta alcanzar el favor del escribano hermandino Mateo Ruiz alegando descender de limpio linaje, teniendo "instrumentos por donde hazer parentesco", pues a pesar de decir poseer "tanto aprecio de la caballeria como usted lo hara de un polbo de tabaco", consideraba afrentoso no alcanzar lo logrado por otros, asegurando que "aunque yo no me siento titulo de Castilla tampoco me siento menos que Don Geronimo de Bargas"⁷⁶.

La dignidad hermandina, pues, se tradujo en la práctica en una más de las expresiones de la compartimentalización social característica del Antiguo Régimen, que además comportaba la no obligación a alojar soldados⁷⁷, entrar en quintas ni estar obligado a aceptar empleos concejiles o de ningún otro tipo considerados onerosos como alcaldías, receptorías, etc, aunque tal exención no atañese a otros oficios mejor considerados, influyentes o lucrativos, como veremos más adelante. Estos preceptos tenían originariamente la finalidad de exonerarlos de obligaciones que les pudiesen distraer de sus deberes de servicio a la Hermandad o menoscabasen su status, aunque la desnaturalización de muchos de los nombramientos provocarían quejas dentro y fuera de la institución.

El incumplimiento de estos derechos provocaría ineludiblemente la protesta airada de los ministros hermandinos afectados. Normalmente los damnificados no podían encauzar su malestar más allá de las autoridades locales o del propio Santo Tribunal del que dependen. Cuando esto acontece, siempre y cuando no se resignasen a admitir el exceso, lo más efectivo era coordinar su postura junto al resto de los ministros comarcanos. En términos generales el espíritu corporativo se mantiene allí donde hay una mayor concentración numérica de miembros de la misma entidad, como pueden ser La Mancha, Andalucía y determinadas poblaciones extremeñas o castellano-viejas; pero en los lugares donde hay una mayor dispersión de los efectivos o mal avenidos los existentes, el ministro agraviado queda a merced de los arbitrios locales, como no podía ser menos debido al descentralizado ejercicio del poder en la época.

Las milicias provinciales no suelen suscitar demasiados problemas, dado el carácter estable de sus efectivos y la relativa proximidad a

sus acuartelamientos en los desplazamientos ocasionales, a lo que se sumaría el hecho de que la mayor parte de sus componentes, milicianos y oficiales, eran vecinos de los mismos lugares donde estaba radicado su acuartelamiento o de localidades cercanas⁷⁸. Diferente condición tuvieron las tropas regulares, integradas mayoritariamente por mercenarios extranjeros, aventureros, penados y vagabundos reclutados en levass forzosas, representando una continua fuente de conflictividad⁷⁹. Su alojamiento improvisado era frecuente causa de malestar, sobre todo en poblaciones fronterizas o lugares de tránsito obligado de militares⁸⁰, siendo a menudo motivo de quejas de los vecinos, cuando no de alborotos y disturbios con los paisanos o de reyertas con comisarios hermandinos⁸¹ u otros representantes de la justicia.

En este marco, la asignación arbitraria de hospedajes a miembros del Santo Instituto puede interpretarse eventualmente como una sutil represalia por interferir, activa o potencialmente, en los asuntos de la jurisdicción local⁸². Las reclamaciones de los incomodados por el mantenimiento a su costa de los soldados suelen tramitarse ante la propia Hermandad, desde donde se despachaba requisitoria a los alcaldes mayores, corregidores o regimientos correspondientes para que depusiesen su actitud, aunque debido a la distancia tales diligencias se dilatan, a lo que se suma la escasa voluntad de las partes para ceder en sus posiciones y que casi siempre se denuncia un hecho consumado, lo que hace que la protesta no pase, en la mayor parte de las ocasiones, de ser testimonial.

La sujeción de los miembros del estado llano a quintas y levass era una penosa obligación a la cual muchos pretender sustraerse por los

más variados medios. Mientras que las levass era un sistema irregular de reclutamiento, en virtud del cual un oficial alistaba a su banderín de enganche, por su cuenta y riesgo, a cuantos voluntarios podía -aunque algunos de ellos serán jóvenes huidos o alistados por su propia familia, vagabundos engañados, forasteros incautos, criados descontentos de su servidumbre, etc.-; las quintas exigían a cada pueblo la aportación de un cupo determinado de varones para el servicio militar atendiendo al vecindario estimado en los correspondientes padrones, sorteándose entre los mozos hábiles el cumplimiento de tan arduo deber⁸³.

Esporádicamente tenemos referencias del quebrantamiento de esta dispensa de quintas en la que se ven involucrados comisarios de la entidad de Ciudad Real durante el Setecientos, que la segunda mitad de la centuria pretendió ser infructuosamente extendida a las milicias provinciales⁸⁴. Buena muestra de ello fue el suceso que tuvo lugar en la villa de Agreda -Soria- a principios del siglo XVIII. Esta localidad, distante de la sede manchega y enclavada estratégicamente en la proximidad de los Reinos de Navarra y de Aragón, por motivos que se nos escapan cuenta con una notable concentración de dependientes del tribunal ciudarrealeno. Durante la coyuntura política expansionista de Felipe V en Italia, se fijó que dicho lugar debía aportar tres soldados y medio en la quinta de 1718, pero el 26 de septiembre de dicho año el procurador síndico general dejó patente ante el pleno capitular que uno de los quintos "se pretende eximir de la actual Real servicio suponiendolo exercer otro, que solo es para colorido" y en exclusivo beneficio del titular, teniendo en cuenta que había otros diez representantes hermandinos en la villa, "solo con el fin de poder hazer sus biaxes, para los negocios de sus tratos llevando armas vedadas y para eximirse de otros cargos y cargas que le

corresponde en estas villa". Agrega que suelen desatender las obligaciones de su ministerio "porque ni observan lo que deven ni recorren caminos ni mantienen caballo ni hazen acto que mire a dicho cargo"; siendo sus titulares los más acaudalados mercaderes y sujetos mejor dispuestos para ejercer los oficios municipales, considerando maliciosa la actitud de Manuel Mateo, joven de diecinueve años aún bajo tutela paterna, para lograr el nombramiento "mirando solo a la esenzion de quintas y levas con la prezision de antizipar poco antes su titulo".

El padre del interfecto, Gabriel Mateo, también dependiente de la Hermandad de Ciudad Real, presenta un prolijo pliego de descargos, descalificando, una por una, todas las acusaciones vertidas por el representante del común: recientemente se había retirado título al comisario Francisco Vallejo; en la villa sólo estaban acreditados seis jueces comisarios y un ministro superior, siempre dispuestos a ejercer su instituto; en todo momento se mostraron solícitos a aceptar alojamientos y desempeñar empleos municipales; junto a algunos ministros hacendados hay otros sin apenas recursos; escasa indicencia que supondrían siete exentos en una villa de más de ochocientos vecinos; sus salidas, pagando a colaboradores de su peculio, tras forajidos habían erradicado los delitos en despoblado desde 1710 en la comarca; que el nombramiento de su hijo se hizo el 3 de junio de 1718, antes de presumirse quinta alguna; desmontando, en definitiva los cargos presentados en contra de su hijo⁸⁵.

El 30 de septiembre de 1718, se emplaza a todos los ministros hermandinos en las cuatro horas siguientes para que se solidarizasen con el joven Miguel Mateo ante el corregidor. Acuden todos a la llamada, exponiendo sus méritos hasta la fecha, asegurando haber

pacificado la zona aunque su última actuación databa de hacía ocho años. El peso de tales argumentos parecen convencer al corregidor, quien refrendará la exención del cuestionado cuadrillero⁸⁶.

Por último, hermanos y comisarios podían negarse a aceptar oficios concejiles, reales, o eclesiásticos que se considerasen gravosos o que fuesen susceptibles de comprometer de alguna forma su libertad personal o menoscabar sus haciendas, dotándoles de autonomía respecto a los poderes públicos. Pero algunos de los ministros hermandinos que habían cumplido, desempeñaban, o estaban dispuestos a ejercer determinadas dignidades capitulares honoríficas en sus lugares de verindad⁸⁷; se mostraban en cambio reacios a ocupar las plazas de alcaldes⁸⁸, alguaciles mayores, receptores de bienes⁸⁹, arqueros de pósitos⁹⁰, receptores o administradores de impuestos reales⁹¹, cobradores de la Santa Bula⁹², etc. Y cuando son impelidos a desempeñarlos se hallan con demasiada frecuencia en precario, saliendo a duras penas de tales agravios, aunque siempre viéndose dañadas su estima y hacienda⁹³. El desempeño de estas funciones, a menudo onerosas, suponía en la práctica a renunciar al fuero hermandino, supeditándose al concejo y a su justicia, lo que no era un riesgo fácilmente asumible por algunos de los involuntariamente involucrados. Sin embargo, es más corriente que se utilicen dichos empleos para solicitar su acceso al Santo Instituto, gracias a su connivencia con las autoridades locales.

Cuando la Real Provisión de 30 de junio de 1740 derogase la mayor parte de las exenciones

"...que en lo antiguo disfrutaban extensivas a se libres de toda contribucion de guerra de no poder ser quintados para ella ni incluidos en los gravosos ofizios de Republica zeso la solizitud que havia a semejantes titulos en los hombres que por la calidad

y combeniencias solizitavan de la caracter de ministros de sus Santas Hermandades Viejas quedando desde entonzes reduzidas la pretension unicamente a aquellos que por precision de trajinar a sus comercios por el reino para llevar el resguardo con las armas cortas y largas para el ejerzizio de la jurisdizion."⁹⁴

Es previsible que, en los tiempos remotos, los cuadrilleros adoptasen, pareja a su progresiva institucionalización, una vestimenta verde en los actos protocolarios y tal vez en algunas misiones coercitivas como distintivo de su calidad de justicias⁹⁵, pero normalmente los ballesteros cumplirían sus diligencias con la ropa y armamento que solían portar cotidianamente. Con el fuerte carácter honorífico que adquirieron las Hermandades Viejas, sobre todo desde mediados del Setecientos, era cuestión de tiempo que se dotase a hermanos y dependientes de uniformes distintivos de su calidad y jerarquía, a imagen de lo que disfrutaban otros colectivos privilegiados como los caballeros de las Reales Maestranzas. La Hermandad hubo de refugiarse en los valores tradicionales y en manifestaciones externas públicas de su fuero particular tras la desaparición de sus prerrogativas fiscales que les habían estimulado durante centurias.

La Hermandad de Toledo fue la primera que obtuvo del Consejo de Castilla el trato de favor de contar con uniforme propio de color verde, denotando las distintas insignias y calidades del tejido el dispar status socioprofesional de sus componentes⁹⁶. Este auto de la Corte fue mal acogido por los capitulares municipales toledanos, quiénes trataron de impedir por todos los medios la asistencia de los hermanos uniformados a los ayuntamientos, aún décadas después de su concesión⁹⁷.

La distinción indumentaria de los dependientes toledanos desvió la atención de algunos solicitantes a esta entidad, lo que suscita cierta polémica al sur del Tajo, pues la mayor proximidad de Ciudad Real era interpretada por éstos últimos como una competencia desleal al instituto manchego. En 1785, el corregidor de Cartagena -Murcia- exponía al Supremo Consejo respecto a la pretendida auxiliatoria a un ministro de la Hermandad Vieja toledana

"...que no podía de dejar presente que la facilidad de semejantes títulos abría la puerta a que muchos los solicitaban por mera ostentación de presentarse con uniforme y armas prohibidas en sitios y paseos públicos."⁹⁸

Habría que esperar a 1798 para que por real orden se concediese el uso de uniforme de gala de la Hermandad de Talavera, y el 12 de enero de 1799, a petición de su cabildo, Carlos IV otorgó la merced de que se usase un atuendo similar en las funciones públicas del concejo del tribunal de la Inquisición u otras instancias de las que formaban parte, reservando el anteriormente concedido para los actos solemnes corporativos como cabildos y besamanos⁹⁹.

No hay referencias fidedignas sobre la utilización de uniforme por parte de los miembros de la fraternidad ciudarrealense hasta las postrimerías del Setecientos; en junio de 1793 varios de los testigos aportados por don Fermín María Martínez, comerciante granadino, aseguran conocer a otros dos miembros de la organización manchega, "que lo pueden deponer el testigo por averle visto usar de uniforme", aunque bien podían tratarse de dependientes toledanos¹⁰⁰. Ya en la siguiente centuria en algunas de las solicitudes se consignaba que entre las formalidades que debía de contener el título despachado por dicha entidad se incluiría una "copia de las ordenanzas que acompañara

haciendo merito para ello como tambien razon circunstanciada de el
uniforme que a de gastar"¹⁰¹.

3.2.3. JURÍDICO-PROCESALES.

El fuero hermandino no es más que uno de la multitud de derechos privilegiados que conviven en el Antiguo Régimen, muchos de ellos heredados de la Edad Media. Durante el periodo de la Habsburgo fueron celosamente respetados, aunque supeditados a la justicia real de los altos tribunales de justicia, y durante el periodo borbónico hubo la intención de suprimirlos, aunque quedaron indemnes gran parte de ellos durante décadas. Hace constar LÓPEZ DE AZCUTIA, que tal compartimentalización jurisdiccional redujo... a la mínima expresión "la jurisdicción Real ordinaria, que con ser la primera,...casi se podía tener y considerar como la última de todas."¹⁰²

Los dependientes de la Santa Hermandad gozaban de mero y mixto Imperio, considerándose una instancia real especial, sostenida en razón de unos privilegios personales, históricos, profesionales, territoriales y económicos que contribuían a enmarañar aún más el intrincado ordenamiento jurídico de la época. LÓPEZ REY halla dos denominadores comunes a este tipo de privilegios forales: lo desdibujado de sus atribuciones, que redundaría en frecuentes excepciones dilatorias, con el consiguiente retraso en el despacho de los asuntos de justicia; y la asunción de un procedimiento judicial semejante al ordinario, pero abreviándose trámites, obviándose requisitos y acortándose plazos¹⁰³.

Concretamente, por lo que concierne al Santo Tribunal ciudarrealeno, mantuvo la competencia privativa en la instrucción de la primera instancia civil y criminal de todos los supuestos en los

que estuviesen implicados sus dependientes. Asimismo está capacitado para entender en todo lo referente a irregularidades en la percepción de sus rentas pecuarias e inmobiliarias, y en los excesos en el desempeño de sus empleos y ministerios. En la práctica, estas prerrogativas más amplias, quedaban reducidas consideráblemente: la jurisdicción de la Santa Hermandad sobre el despoblado pasa a considerarse acumulativa, quedando el arbitrio de la justicia ordinaria la intervención en los casos de su competencia siempre y cuando los creyese desatendidos, enviando luego informes al Consejo de Castilla para que en dicha instancia se dirimiese a la que correspondía el pleito. Los litigios civiles acostumbran a pender del corregidor o el gobernador del partido correspondiente, soliendo arrogarse chancillerías y audiencias el grado de recurso y apelación¹⁰⁴.

Por último, los delitos y actuaciones anómalas de los comisarios con relativa frecuencia serán reclamados por la instancias superiores de justicia real, despojando de la primera instancia penal a la corporación apícola ciudarrealeña¹⁰⁵. Un memorial de su homónima talaverana sintetiza bien las competencias judiciales del Triple Instituto, asegurándose que "tiene jurisdicción preventiva con todas las justicias Ordinarias del Reyno, y privativas en todos sus negocios casos y cosas"¹⁰⁶.

Cuando estas franquicias forales afectaron a instituciones o personas ajenas a la entidad privilegiada, serán fuente de constantes conflictos, viéndose con desagrado el que los alcaldes actuasen como juez y parte, protegiendo a menudo a sus dependientes de penas más severas y limitándose en la mayor parte de las ocasiones a

apercibirlos en privado o recoger el título de su representante indiciado.

Los Austrias Menores confirmarían esta jurisdicción privativa, lo que suponía que "ningún juez ni alcalde pueda conocer ni conosca en sus causas civiles y criminales"¹⁰⁷, lo que si bien no se acostumbraba a respetar escrupulosamente sí sería reclamado excepcionalmente por algún ministro como es el caso de Antonio Zotes, ministro de Linares, al estar encartado por la venta de tierra vinculada, debiendo guardar como cárcel dicha villa y sus arrabales al abrirle la justicia local expediente civil, sintiéndose burlado en su fuero¹⁰⁸.

Las ordenanzas de 1792 preceptuaban el conocimiento hermandino de los delitos y casos expresados para con los familiares del Santo Oficio de la Inquisición en sus números 5 y 6 de la ley 18, título 1, de la Recopilación; quedando reservados los juicios civiles, ejecutivos y ordinarios a la justicia real ordinaria en cada pueblo en razón de su inmediatez sin poder acogerse a su fuero¹⁰⁹.

Como ministros de la justicia real, los cuadrilleros y oficiales hermandinos podían portar vara distintiva de su condición, así como todo tipo armas ofensivas y defensivas. Por merced de Juana I, en 1504, se dió licencia a los miembros de la corporación colmenera de Ciudad Real para poder llevar varas altas de justicia por todos los rincones de la Monarquía cuando fuesen en misiones propias de su ministerio¹¹⁰; este precepto fue extendido poco después a Toledo, pero Talavera, como villa adscrita al señorío eclesiástico del arzobispado toledano, hubo de rescatar este privilegio en 1652¹¹¹. Para excusarse de los problemas suscitados por el uso de la vara distintiva de la

asunción de mero y mixto Imperio, se dejó al arbitrio de los cuadrilleros el portar vara alta o bastón corto¹¹².

Desde los tiempos fundacionales siempre se había intentado asegurar el que colmeneros y cuadrilleros estuviesen en todo momento prestos al servicio de las diligencias corporativas, disponiendo del armamento preciso para ello. En una sociedad violenta, como la existente en la Castilla medieval, no era extraño disponer de armas para cazar o batallar y este mismo armamento bélico y cinegético, integrado incluso por los instrumentos de labranza de uso cotidiano, sería el indistintamente empleado en la defensa de sus vidas y propiedades.

Paulatinamente las armas blancas, principalmente espadas y puñales, fueron perdiendo su carácter práctico y habitual, para pasar a ser un distintivo restringido a la nobleza y a determinados individuos que por su profesión, calidad estamental, o por formar parte de un determinado colectivo privilegiado gozaban de la prerrogativa de su uso¹¹³. Por su parte, el arco había quedado obsoleto con la introducción de la ballesta, arma ofensiva utilizada por guerreros y cazadores técnicamente superior al contar con un radio de acción más amplio y efectivo de sus saetas; su uso se extendió en los siglos XV y XVI, aunque progresivamente, a su vez, dejó paso a las armas de fuego de un funcionamiento más complejo y de coste comparativamente más elevado¹¹⁴. Austrias y Borbones expidieron una nutrida legislación prohibiendo el uso de determinadas armas cortas, blancas y de fuego, para evitar los frecuentes pendencias que acaecían en toda la Monarquía, debido a su fácil ocultación, porte y lo cotidiano de su uso por parte de un amplio espectro poblacional¹¹⁵.

Hasta bien entrada la Edad Moderna no hubo una restricción alguna para que los miembros del Triple Instituto utilizasen todo tipo de armamento personal a su alcance en el desempeño de sus diligencias policiales, siendo su carácter preventivo buen pretexto justificativo para su porte en todo momento. Las comisiones y ejecutivas que reciben los asociados conceden discrecionalidad a dichos ministros en tal sentido, y así la carta orden del Supremo Consejo en 1644 impelía a toledanos y ciudarrealeños a erradicar la delincuencia en despoblado, procediendo para ello "con las armas necesarias por los terminos de ese ciudad o de las demas de estos nuestros Reinos y señorios"¹¹⁶; decretándose poco despues que bajo ninguna razón les embargasen sus armas, antes si se hallaban sin ellas pudiesen tomarlas prestadas a otras personas, devolviéndoselas luego "si no las hubiere perdido en las refriegas que suele acontecer en las prisiones de los tales ladrones"¹¹⁷.

Durante el Setecientos reales provisiones otorgan el libre uso de armas, ya fuesen legales o prohibidas, a los ministros de las Hermandades Viejas, en 1706 y 1713, prescribiéndose para su ingreso la disposición de caballo y armas para servir sus empleos, aunque sin consignarse expresamente la obligación de su tenencia en propiedad, lo que propiciaría algunas irregularidades, extendiéndose la costumbre de que dichos privilegios encabezasen unos títulos de los no se separarian dichos individuos. Durante los reinados de Fernando VI y Carlos III se invirtió esta permisividad, cristalizando en el auto acordado de 24 de junio de 1762 por el cual se prohíbe el uso por parte de los dependientes de dichos tribunales de las armas cortas¹¹⁸.

Aunque tardíamente, las ordenanzas ciudarrealeñas de 1792 zanjaban definitivamente esta cuestión, al insertar en las mismas un dictamen de Carlos I en virtud del cual no estaban capacitados para

"...usar de mas Armas que la espada de a caballo, carabina, o escopeta larga, con bayoneta de cuchillo abenida a ella, y pistolas de arzon de la regular marca: con escopeta corta o encaro...prohibiendoles el uso de toda arma blanca y pistoletas."¹¹⁹

Varas altas de justicia y armas vedadas serán causa frecuente para entrarse en colisión, con demasiada reiteración, con las autoridades locales. Estos símbolos de jurisdicción provocaron tantos conflictos de competencias o simples malentendidos, intencionados o no, que cabe colegir que subyace en muchos de ellos el deseo de obstaculizar el libre ejercicio de sus comisiones o despachos en jurisdicciones ajenas. Los enfrentamientos directos entre representantes del Tribunal manchego y las justicias locales ya no acostumbraban a revestir la virulencia que tuvieron en épocas pasadas¹²⁰, aunque hasta fechas relativamente recientes se conservan noticias de incidentes por dicho motivo. He aquí dos ejemplos dispares, en cuanto a la causa final que desemboca en sendos choques jurisdiccionales.

En Ciudad Real, el 12 de abril de 1749, se recibe una misiva del ministro superior de Alía -Sevilla-, Antonio Morales Magán, en la que tras exponerse sus méritos acumulados tras varios años en posesión de su empleo pasa a relatar el incidente habido cuando

"...sentado en uno de los vancos de dicha Yglesia -parroquial- llevo a mi uno de los alcaldes actuales de dicha villa, y sin mas motivo que el verme con la referida vara me ultrajo de palabra en presencia de numeroso concurso que asistia a la festividad de la Purificacion que dicho día se celebraba y ademas de ello me puso preso en la carcel real, cargandome de grillos y metiendome en el zepo, en donde me tubo hasta la Semana Santa sin haver permitido conzederme soltura ni

exonerarme de los grillos, sin embargo de haberlo solizitado con motivo de ser constante mi ignorancia como tambien el que padezco el accidente de perlesia, cuja enfermedad acreditada por certificacion de cirujano, pudo mover a dicho señor Alcalde a concederme el expresado alibio del cepo..."

Se ofrece a pagar costas y salarios para salir de su confinamiento bajo fianza, pero sus intentos serán desatendidos. Desde la sede hermandina se expide requisitoria para que fuese excarcelado su dependiente, llegándose a personar en la villa Vicente García Prieto, escribano ciudarrealeño y juez superior hermandino, quien el día 26 de mayo recibía testimonios que acreditan la antigua enemistad personal de los implicados¹²¹.

Por su parte, en 1773, el sevillano don Martín Baneche y los jiennenses don Juan Ortiz y don Nicolás Serrano Gamir, comisarios del Santo Instituto manchego, permanecieron meses en la cárcel pública de Jaén por cuestionarse si la insignia de justicia apropiada era vara alta o bastón "cuio frivolo pretexto se acoxen para ympedir el uso de la jurisdiccion de esta Santa Hermandad", debiendo acreditar sus privilegios ante la Real Chancillería granadina¹²² para ser puestos en libertad sin cargos.

Mucho más reiterados serán los enfrentamientos derivados de la posesión de armas prohibidas por parte de dichos delegados, ya que quiénes no logran huir apresuradamente de las justicias o acogerse a asilo, fácilmente suelen dar con sus huesos en los calabozos durante semanas o meses, hasta que alguna requisitoria de Ciudad Real o de Granada restablecían el derecho lesionado. Se dilatan de esta forma, a veces irreversiblemente, la resolución de algunos asuntos de la Hermandad, estimulándose la descoordinación jurisdiccionales y, en

suma, creándose un clima de discordia que desacreditaba a estos órganos coercitivos ante sus coetáneos.

Antagonismos engendrados por esta cuestión están distribuidos por toda la geografía peninsular, siendo particularmente corrientes en el primer tercio del Setecientos en La Mancha y Andalucía. Están documentados dichas fricciones en Córdoba, 1715; Beas de Segura, 1718; La Torre, 1723; Bailén, 1724; Andújar y Ciudad Real, 1725; Sevilla, - tres casos- en 1726; Villanueva de los Infantes, Úbeda y Mancha Real, en 1727; Villarrubia de los Ojos y Torre de Juan Abad, 1728; Jerez de la Frontera, 1780, etc¹²³. Se alcanzaron tales cotas de tensión entre los ministros hermandinos y las justicias locales, que algunos pretendientes al ingreso como comisarios reclaman la inserción en sus nombramientos de los privilegios sobre el uso de armas, adjuntando un dibujo de las que podían usarse para evitar males mayores¹²⁴.

3.3. FACULTADES Y JERARQUIZACIÓN DEL PERSONAL HERMANDINO.

Al compás de su desarrollo institucional o producto de su expansión territorial y jurisdiccional, la organización manchega se iría dotando de una serie de oficiales y dependientes más o menos estables según los casos pero en todo caso teóricamente servidores de los designios capitulares. Totalmente fraguada en las postrimerías del Quinientos, la Hermandad de Ciudad Real dispondría de fieles empleados en su propia estructura orgánica y de valiosos colaboradores con una vinculación inorgánica pero igualmente efectiva. Entre los primeros, y por este orden jerárquico se encuentran en la sede hermandina los alcaldes -o sus tenientes-, los asesores letrados, los regidores, y los titulares o delegados de cargos especializados -verdugo, pregonero, alcaide y sotalcaide, alguacil, cuadrillero mayor o sus tenientes, contador, mayordomo, notarios, llavero mayor, procurador general, personal sanitario, portero, capellán, cuadrilleros-, a los habría que añadir los abogados y procuradores, eventualmente al servicio de dicho tribunal para substanciar las causas criminales.

A estos individuos, generalmente hermanos de la misma fraternidad, se suman, al menos desde el Seiscientos, los miembros estables de la estructura periférica de la organización manchega, es decir los comisarios que con rango de juez inferior, ministro superior o ministro receptor ejercen labores coercitivo-judiciales en los ámbitos alejados de la capital hermandina, así como el heterogéneo conglomerado de paisanos, militares y justicias que esporádicamente son requeridos para colaborar en determinadas diligencias puntuales. Por último hay que citar a los apoderados, procuradores letrados,

agentes judiciales y un variopinto grupo de valedores de la Santa Hermandad ante aquellas instancias judicial, administrativa o territorialmente superiores donde se dilucidan los destinos de la entidad o se substancian causas y recursos criminales.

3.3.1. OFICIOS DE ELECCION PERIÓDICA.

Regularmente se renovaba en cabildo general la mayor parte de los oficios hermandinos, todos en los que participaban activamente los hermanos, seleccionándose mediante el nombramiento directo o el sorteo a los individuos adecuados para desarrollar las tareas rectores, siendo el refrendo colegiado del cabildo requisito indispensable para dotarles de legitimidad en dichos cargos.

El ordenamiento de 1435 regulaba la provisión de empleos en la corporación manchega, disponiendo que se convocase cabildo en el monasterio de San Francisco al domingo siguiente de la llega anual. El peso específico de los alcaldes salientes era ostensible, al poder nombrar a quienes desempeñasen los oficios, aunque su designación debía ser refrendada posteriormente por los cabildantes. En dichos estatutos se fija la periodicidad de la renovación de los puestos a un año, y se establece que sólo fuesen admitidos aquellos hermanos que no hubiesen sido agraciados con anterioridad.

A pesar de las reiteradas disensiones habidas en el Cuatrocientos a causa de la renovación de los oficios, en 1475 los Reyes Católicos expresaron el deseo de que se procediese en la misma forma que hasta entonces. En vista de que no se corregían las arbitrariedades en su seno, una década después se reorganizó el procedimiento electoral, distribuyéndose a los hermanados en cuadrillas entre las que se nombraría rotatoriamente, mediante encantaramiento, a los agraciados, respetándose la mitad de oficios entre hidalgos y pecheros. Se intentaba, de esta forma, atemperar los conflictos internos mediante

la reordenación de su procedimiento electoral, introduciendo la suerte para acallar el permanente descontento existente en la organización.

Estimulados por los cambios auspiciados desde la Corona, los hermanos del estado llano reclamaron una de las alcaldías, llegándose a un acuerdo interno hacia 1488, en virtud del cual el patriciado urbano conservaba su monopolio de los empleos adscritos a su calidad, haciéndose respetar en este punto lo dispuesto por Francisco Maldonado. Ya en este reinado, alcaldes y alguacil mayor nombraban a sus sustitutos interinos cuando se ausentaban por alguna razón justificada de la ciudad, apadrinándolos ante el cabildo para jurar sus ocupaciones temporales¹²⁵.

Durante los siglos XVI y XVII, se continuaron los cauces establecidos en los Capítulos de Maldonado, incorporándose ciertas modificaciones¹²⁶. En este periodo se acostumbró a seguir escrupulosamente el siguiente procedimiento: en el cabildo celebrado el primer domingo de septiembre por la tarde, los alcaldes designaban a cuatro diputados para supervisar dicha elección, dos por cada uno de los estamentos representados, debiéndose ser refrendados en dicha delegación por los convocados; una vez solventado este trámite los escogidos, presentes o no en el acto, debían aceptar en el menor tiempo posible dicha dignidad, jurando ante la concurrencia solemnemente por Dios y de la forma acostumbrada usar rectamente dicha delegación según los buenos usos de la Santa Hermandad. Generalmente los dos diputados hidalgos suelen ser quienes desempeñaron las varas el periodo inmediatamente anterior a los alcaldes salientes, mientras que por parte de los pecheros suelen ser igualmente individuos experimentados y con suficiente antigüedad en la entidad.

La mañana del segundo domingo de septiembre, previo aviso la tarde anterior mediante el tahir de la campana, concurren a la sala capitular todos los hermanos bajo la presidencia de los alcaldes salientes y la supervisión de los cuatro delegados. Se forma el cabildo por un número variable de hermanos, aunque raramente se sobrepasará de veinticinco individuos con voz y voto, predominando sistemáticamente los caballeros sobre los pecheros. Se asiste devotamente al sermón ofrecido en la capilla del Espíritu Santo por el capellán, consagrado a "iluminar" a los presentes en el acto siguiente. Previamente a la renovación de oficios se habían tratado otros asuntos internos, con la recepción de hermanos, informes sobre el estado de las rentas, situación de los propios, etc.

Finalizadas estas cuestiones protocolarias secundarias se procede a llevar a cabo el acto hermandino más esperado por sus miembros. Los diputados dirigen las formalidades previas: ordenan abrir el arca y sacar el portacartas, de donde extraen las cédulas de pergamino en donde figuran los oficios a proveer¹²⁷. La cuadrilla correspondiente aporta siete de los cargos a cubrir; siendo los oficios nobiliarios los primeros en ser sorteados, apareciendo por este orden los elegidos para ocupar ambas alcaldías, el alguacilazgo mayor, la procuraduría general, una regiduría y la contaduría¹²⁸.

En el estrado, ante los hermanos, y eventualmente otras autoridades religiosas o civiles invitadas, se habían dispuesto dos cántaros, uno mediado de agua y el otro vacío previamente vuelto boca abajo para acreditar que no contenía nada. Alcaldes y diputados hacen saber el número de la cuadrilla que por rotación había de proporcionar la mayoría de los empleos¹²⁹ y el estamento de los sorteados. Se sacan del portacartas las pellas de cera, y de allí se echan a una bandeja

de plata llena de agua para demostrar que no contienen papel alguno, pasándose luego las cédulas que contienen los nombres de los elegibles se introducen en el primero para demostrar que no existe posibilidad de amañar la elección, mientras que en el que se hallaba vacío se ponen las pellas de empleos, realizando el escrutinio sacando primero los cargos a proveer y extrayendo al hermano agraciado que la suerte les había deparado. A continuación el portero hace pasar a un niño para efectuar su extracción¹³⁰.

Por el orden ya expresado, se abren las cédulas selladas con cera, leyendo los alcaldes en voz alta su contenido, ante la mirada atenta de los diputados y el registro pertinente del escrutinio por parte del notario. Las pellas con los nombres de los hermanos sobrantes pasan a poder de los diputados, quienes velan por la pureza del procedimiento. Se continua con el acto, esta vez entrando en suerte los pecheros para los empleos de mayordomo, cuadrillero mayor, regidor y portero, siendo sacados y leídos uno por uno. A continuación se echan las pellas del resto de las cuadrillas para cubrir el total de los regimientos, entre hidalgos y ciudadanos, alternativamente.

El portero, a instancia del cabildo, hace comparecer uno por uno a los agraciados, quienes según eran nombrados durante el escrutinio habían pasado a la antesala, para que aceptasen el oficio, so pena de expulsión de la corporación. Acatado éste designio juran ante la concurrencia servir bien y fielmente al Santo Instituto y a la Inmaculada Concepción, patrona protectora de la entidad. Los primeros en jurar son los alcaldes entrantes, cediéndoles los saliente sus varas, y ante quienes jurarán el resto de los elegidos.

Dicho procedimiento estuvo vigente hasta bien entrado el Setecientos, aunque paulatinamente fue agilizado el sistema, igualándose en número empleos y sujetos elegibles para evitar desaires. Usualmente, ante los oficiales entrantes el mayordomo dará cuenta del estado de los caudales hermandinos, para que todos tuviesen constancia de las arcas dejadas por sus predecesores. Las ordenanzas de 1792 especifican que los ciudarrealeños efectuasen dicha elección el tercer domingo de septiembre, pero durante el primer domingo de dicho mes se efectuaría el nombramiento del mayordomo para que diese constancia de las rentas hermandinas a los oficiales entrantes y se pusiese en arriendo el derecho de asadura mayor y menor. Ya no se menciona el acuadrillamiento de los hermanos y el sorteo da paso a la votación secreta por mayoría simple, pero se respeta el tradicional reparto de cargos según estamentos; terminado el escrutinio, en el que los alcaldes tendrían voto de calidad, los nuevos alcaldes nombran a dos hermanos para que acompañasen a los elegidos ante el cabildo y, permaneciendo todos en pie, les fuera tomado juramento por parte del primer alcalde a tenor del cual se comprometían ante Dios defender el misterio de la Purísima Concepción, ser rectos en su ministerio, cumplir las ordenanzas y aceptar los acuerdos capitulares. Se les hacía entrega de la insignia de la real jurisdicción y se les designaban los escaños que debían ocupar para simbolizar la toma en posesión de sus empleos. En caso de encontrarse ausentes los agraciados se demorará su juramento hasta que comparezcan personalmente, quedando su puesto interinamente en manos de su predecesor. De esta forma la Hermandad Vieja manchega invertía la tendencia seguida por los talaveranos, que de unas posiciones de democracia interna en la provisión de sus cargos, evolucionaron a la introducción del sorteo para preservar la puridad del acto¹³¹.

Invariablemente, una vez concluido este acto solemne, tiene lugar un ágape en la misma sala capitular, consistente en la distribución de pasteles y bizcochos proporcionados por pasteleros locales o de las villas cercanas, a los que acompaña una cantidad variable de vino o refrescos¹³². Este dispendio, que hasta el primer tercio del Setecientos parece estar restringido a alcaldes y oficiales, a partir de entonces se hace extensivo a todos los concurrentes al cabildo general¹³³.

Ocasionalmente, aparece consignada en las cuentas de la corporación una partida de gastos en la que se menciona que los reos hermandinos se beneficiaron de esta colación; y si en 1761 eran gratificados únicamente con vino, décadas antes, en 1738, habían sido beneficiados con el reparto de media arroba de vino de una bodega local y de dos libras de bizcochos¹³⁴. Los diputados recibieron como propina dos ducados, e idéntica cantidad que la destinada a ambos escribanos por levantar acts del cabildo celebrado. Igualmente el mayordomo había adelantado el dinero preciso para costear el almuerzo de dichos delegados. Desaparecida la elección de diputados, probablemente a mediados del siglo XVIII, desde entonces se acostumbró a dar una dieta en metálico a los asistentes, cuyo importe osciló según la liquidez de la entidad.

3.3.1.a. ALCALDES.

La figura del alcalde del Triple Instituto nace formalmente en 1302, cuando Fernando IV otorga el respaldo a las entidades federadas, prescribiendo que nombrasen a dos hombres buenos que ostentaran el mando, seguramente consagrandó alguna iniciativa anterior en tal sentido. Tales dirigentes hermandinos asumen una triple responsabilidad rectora: judicial, al ser los magistrados de su tribunal; ejecutiva, comandando cuadrillas u ordenando salidas siempre que fuese preciso; y orgánica, al velar por el adecuado cumplimiento de las resoluciones capitulares.

Paulatinamente dichos cargos tuvieron mayores competencias, procurándose que en la medida de lo posible dichos oficios recayesen en personas experimentadas y con cierta antigüedad en la corporación. Con la adscripción hidalga de ambas alcaldías se pretendía que el prestigio estamental imprimiese una mayor autoridad a sus titulares, asegurándose de paso unas supuestas dotes de mando y de rectitud que se presumía inherentes a los miembros de ese estado, así como una mayor ocupación en sus asuntos, pues se temía que si se trataba de individuos sin recursos se centrarían en lograr su propio sustento. Si bien en un principio habría resistencia a ocupar puestos de tanta responsabilidad y compromiso, pronto esta dignidad adquirió unas connotaciones honoríficas destacadas, ambicionando la mayoría unos puestos que a la asunción de tareas gubernativas y judiciales preeminentes se sumaba un parejo incremento de su prestigio y poder¹³⁵.

La alcaldía colegiada, cuyas atribuciones judiciales analizaremos más adelante, cuentan entre sus funciones la presidencia de cuantas reuniones solemnes, públicas o privadas, celebrasen los hermanados; la custodia de dos de las llaves del archivo; la recepción del estado de la hacienda por parte del arquero; la toma de juramento de los nuevos hermanos y el refrendo de los títulos de comisarios; la defensa a ultranza de las franquezas y libertades del Santo Instituto y de sus dependientes; el buen orden entre sus miembros; el nombramiento de cuadrilleros y colaboradores no adscritos al tribunal; el control de la vida orgánica hermandina mediante la supervisión directa o delegada de la mayor parte de sus resortes internos de gobierno, la administración patrimonial, etc.

Este cúmulo de competencias, en la práctica, les hacía disponer a su discreción todos los recursos financieros y humanos de la corporación, lo que derivaría en manejos arbitrarios de unos y otros en razón de sus propios intereses. La codificación ciudarrealena de 1485 menciona la prohibición de tomar dinero del arca sin la anuencia expresa del cabildo o de los regidores salvo para satisfacer los derechos legítimamente devengados; y un cuestionario de fines de dicha centuria exponía algunas de las irregularidades que les eran achacadas¹³⁶, como nombramientos parciales de deudos para desempeñar los empleos más ventajosos, manipular las asambleas para estafar dinero a la entidad, percibir emolumentos desarreglados a su labor, y gravar con exacciones ilegales a los demandantes.

A pesar de haberse introducido el procedimiento electoral del encantamiento en la corporación manchega, durante el siglo XVI siguieron cometiéndose muchos de los abusos endémicos en épocas pasadas. Aunque sin duda tales manejos no serían erradicados hasta su

disolución en 1835, las fuentes de los siglos XVII y XVIII silencian toda información al respecto, debido a la indiscutible preponderancia interna que habían adquirido los alcaldes¹³⁷. Esporádica y tímidamente osan los contadores o los jueces de residencia consignar irregularidades en el manejo de los fondos institucionales sin consulta previa o que habían percibido honorarios superiores a los debidos.

Monopolizadas ambas alcaldías por miembros preeminentes del patriciado urbano, se extrapolaba a esta corporación el ordenamiento estamental vigente, atendándose más al linaje del sujeto y a su influencia socioeconómica que a su valía personal para el cargo.

Asimismo se estimaba imprescindible tener siembre cubiertas estas plazas, articulándose tradicionalmente los mecanismos que lo hiciesen posible; si algún alcalde hacía dejación del cargo, por ausencia justificada de la ciudad o por enfermedad, un sustituto desempeñaba el cargo interinamente hasta su vuelta o restablecimiento. En el supuesto de ausencia prolongada, el alcalde presentaba una terna de sustitutos entre los hermanos de su misma calidad, acordando el cabildo mediante votación secreta el nombre de su teniente¹³⁸. Las ordenanzas de 1792, en cambio, preveían que este cargo era el único de los renovados que podía recaer varios años consecutivos en el mismo titular¹³⁹, estableciendo el orden en el que recaería temporalmente dicho empleo, siempre en un hermano caballero, y sucesivamente en el aguacil mayor o en el regidor con mayor antigüedad. La muerte imprevista de alguno de los alcaldes, antes de cumplir integralmente su cargo, requería la convocatoria de un cabildo general extraordinario que cubriese la plaza vacante.

Económicamente estos puestos rectores comportaban ciertos beneficios directos, aunque en todo caso son inferiores sus nóminas en el Seiscientos a las de los profesionales adscritos al tribunal como letrados o escribanos, siendo relativamente elevados sus incentivos en caso de abandonar la ciudad por cuenta del Santo Instituto, y por pascua de Navidad reciben asimismo un aguinaldo sustancioso en especie. Más difíciles de cuantificar, pero presumiblemente más lucrativas, serían las ventajas financieras indirectas derivadas de su empleo, al disponer de información privilegiada sobre los negocios corporativos: podrían lucrarse de algunos tratos pecuarios; tener preferencia en la concesión de préstamos sin interés; capitalizar en favor propio, el de sus parientes o amigos, determinadas diligencias dirigidas al adecentamiento patrimonial, el servicio de correos, procuradurías u otras igualmente ventajosas.

A pesar de las notables atribuciones jurídicas de dichos puestos, solamente sabemos de un alcalde con preparación letrada, se trata del licenciado Juan de Torres, quien desempeña dicho oficio entre 1603 y 1614, con experiencia en asuntos criminales al haber permanecido como asesor hermandino años antes. El resto de sus predecesores y sucesores hubieron de contar con el consejo de un procurador general para entender en todos los asuntos legales corporativos y judiciales.

3.3.1.b. REGIDORES.

El Santo Instituto manchego, desde el reordenamiento del reinado de los Reyes Católicos, cuenta con ocho regidores, cuatro por cada estamento, creados a imagen de sus homónimos concejiles.

En Talavera, ya en el siglo XV había dos regidores, uno afincado en la villa y otro en sus arrabales, aunque en las postrimerías de la centuria se desvirtuarían dichas dignidades; su estatuto de 1747 establecía que se propusiesen seis candidatos, uno por parte de cada uno de los alcaldes y dos por cada regidor, sus nombres serían escritos en unas cédulas y metidos en una urna, mientras que en otra se haría lo propio con cuatro papeles en blanco y dos con el cargo a proveer, siendo el portero el encargado de realizar su extracción ante los notarios hermandinos, quienes procederían a su cómputo; el Consejo de Castilla a fines del Setecientos suspendería una de dichas plazas¹⁴⁰. En la Hermandad Vieja de Toledo dicho puesto será considerado secundario, a tenor de las gratificaciones asignadas a principios del siglo XVIII¹⁴¹, desapareciendo todo rastro de ellos posteriormente a tenor de las fuentes consultadas.

En su polifuncionalidad en el seno de la entidad ciudarrealena, cuentan con voz y voto en todas sus asambleas, ocupando un lugar preferente en cuantos actos concurren, se encargan de supervisar el correcto desarrollo de los mecanismos institucionales, participando activamente en cuantas deliberaciones y decisiones afectan a la corporación apícola. Junto con los alcaldes, legitiman con su rúbrica las libranzas de fondos del arca, figuran en la toma de cuentas a los

mayordomos, etc. Los pagos de sus derechos y salarios, cuando los tienen, serían verificados por los alcaldes y por uno de los escribanos hermandinos.

3.3.1.c. ALGUACIL MAYOR.

Este cargo no aparece fehaciéentemente hasta el Cuatrocientos entre los colmeneros de Villa Real, aunque su origen seguramente fuese anterior, tal vez a semejanza de sus homónimos municipales. En el reglamento de 1435 se menciona la existencia de un único alguacil, siendo básicamente su cometido el encabezar las labores preventivas y coercitivas de la entidad. Posteriormente su labor estará más desdibujada, teniendo un contenido más honorífico que efectivo, no obstante de lo preceptuado en los Capítulos de Maldonado al considerarse candillo de sus subalternos de inferior rango.

Sustituto interino de los alcaldes, según el código de 1792, este puesto siempre recaerá en algún caballero; era el encargado de recibir a los condenados a la pena capital para su ajusticiamiento, y por entonces se le atribuye la custodia de una de las llaves del archivo. Como retribución por tales ocupaciones recibirá un situado anual, cuyo monto y cobro depende en gran parte de la liquidez de los caudales institucionales, recibiendo ciertos derechos en razón de sus salidas de la ciudad para desempeñar algunas de dichas diligencias¹⁴².

Durante el siglo XVIII esta plaza está prácticamente desprovista de su carga operativa, al haberse potenciado la figura del cuadrillero mayor ~~desde~~ fines del Quinientos y concedérsele capacidad para designar teniente, quien asume dichas labores en su nombre, pero a cargo de su propio peculio. En la primera mitad del Siglo de las Luces esta tenencia será acaparada por Juan de Rodas, quien desempeñará ininterrumpidamente el citado empleo entre 1717 y 1742.

3.3.1.d. CUADRILLERO MAYOR.

Este oficio, probablemente, fue creado y desarrollado primero en el tribunal toledano desde donde se extendería luego a la corporación manchega con la reordenación llevada a cabo por Francisco de Maldonado, estableciéndose por entonces con una duración de diez años en dicha entidad¹⁴³.

Contrafigura del alguacil mayor, creada para equilibrar la distribución de oficios entre hidalgos y pecheros, desde su misma aparición será un miembro del estado llano el que va inseparablemente unido este cargo, adquiriendo unas connotaciones operativas superiores a las del alguacil mayor. Es el responsable de coordinar las diferentes cuadrillas de la ciudad, revisa el armamento de los colmeneros y se asegura de que estén debidamente pobladas las posadas, hasta mediados del quinientos. Desde entonces se limitará a encabezar algunas partidas por el yermo, a portar el estandarte real durante las ejecuciones en Peralvillo y en las salidas que contaban con el concurso de alguno de los alcaldes, el alguacil mayor, regidores hidalgos, asesor y contador, comandando el resto de las cuadrillas, presidiendo las aplicaciones de las sentencias afflictivas -llevando entonces el estandarte el regidor por el estado general más antiguo o quien designase el juez de la causa-. Como el alguacil mayor, puede nombrar a un teniente de su agrado que asuma dichas funciones.

En la Hermandad Vieja de Talavera, el cuadrillero mayor tiene unas atribuciones mas amplias, quedando a su cuidado cárcel y reos, nombrando al alcaide, supervisando todas las obras inmobiliarias y

renovando tanto los pertrechos de la prisión como los de la capilla de Rocamador. Un carácter menos exclusivista tiene este empleo en la Ciudad Imperial, donde el primer lunes de Cuaresma su cabildo nombra a los cuadrilleros mayores de las localidades de los Montes de Toledo, dando testimonio de las prisiones en su poder y satisfaciéndoselos sus salarios anuales; de esta manera la entidad mantiene un entramado de seguridad estable en las villas y lugares de Los Yébenes, Marjaliza, el Molinillo, Hontanarejo, Navalpino, Horcajo, Retuerta, Navas de Estena, Navalucillos, Navalmoral, Navahermosa, Ventas de Peña Aguilera, Arroba, Hornillos, San Pablo de los Montes y Pulgar; pudiéndose ser considerados, en cierta forma, como precedentes de la estructura orgánica descentralizada de comisarios de las últimas centurias de la Edad Moderna e interpretarse como una superposición parcial sobre territorio asociado tradicionalmente a la Hermandad de las Dos Sislas. Como plaza de gracia, es decir, sin contenido jurisdiccional alguno, los colmeneros toledanos despacharán títulos de tenientes de cuadrillero mayor.

3.3.1.e. MAYORDOMO.

El arquero, o depositario, como eventualmente será denominado a fines del setecientos¹⁴⁴, es el administrador de las rentas y propios de la entidad, encargado de la custodia de los fondos así como de la gestión del derecho de asadura mayor y menor, aunque carece de poder decisorio para la consumición e inversión de los caudales corporativos.

Este empleo anual tan importante está adscrito a un hermano del estado llano por dos motivos: para equilibrar el peso estamental de hidalgos y pecheros en la corporación, y para aliviar a los caballeros de una carga que consumía tiempo y caudales, aparte el hecho de que en un principio existían perjuicios éticos contra quienes trataban con dinero, como resultado de una rígida interpretación de la moral cristiana omnipresente. Por otra parte, se consideraba improbable que un miembro de la propia Hermandad defraudase a sus correligionarios.

Durante los siglos XVI y XVII su renovación tendrá una cadencia anual, mientras que durante el XVIII será consagrada la fórmula de su nombramiento directo y renovación en el cargo mientras el titular aceptase el empleo y si el arquero ya existente hubiese actuado a satisfacción de los hermanos. La gestión económica había adquirido una importancia tan capital durante el Siglo de las Luces que este puesto no podía ser dejado al albur de la suerte, sino confiado a un sujeto de total garantía y confianza del Santo Tribunal. Igualmente, si durante los siglos XVI y XVII su muerte era solventada por sus herederos nombrándole un sustituto hasta finalizar el año de su

empleo¹⁴⁵; una centuria más tarde, esta u otras eventualidades, serían zanjadas directamente por el cabildo, designando dicha instancia colegiada quien cubriese la plaza vacante.

Generalmente, el mayordomo suele ser un personaje que cuenta con un cierto bagaje teórico y práctico en la administración de su hacienda familiar o de bienes institucionales ajenos, debiendo gozar preferiblemente de una situación económica personal saneada, para hacer frente de su propio peculio, si ello fuese preciso, ante desembolsos inesperados y dar una fuerte fianza patrimonial con la que responder de su correcta labor al frente de los caudales hermandinos.

En definitiva, su oficio consiste en cuidar, percibir y recaudar bienes, productos, rentas, propios y caudales pertenecientes al Santo Instituto, teniéndolos en depósito para responder de cuantas eventualidades surgiesen a lo largo de su mayordomía, verificando cualquier pago previa libranza de mandato legítimo, rubricado por un alcalde y los regidores, no debiendo obstaculizar nunca la satisfacción de los derechos previstos a cuantos sirven a la Hermandad en concepto de asignado o de gratificación. A este individuo se le entregan formalmente los bienes incautados a los reos, salvo las armas, que pasan a manos del escribano instructor de la causa. Su presencia es inexcusable en todos los cabildos, aguardando en la antesala del lugar de reunión por si se tratase algún asunto de su incumbencia, siendo reclamado en tal caso por el portero ante los capitulares.

Estos sujetos deben adquirir todos los bastimentos precisos para el cabildo, adecentar los inmuebles vinculados a la organización, precediendo notificación a tal respecto por parte de sus rectores, y

estar vigilantes de mejorar la seguridad y el mantenimiento de los presos. Con demasiada frecuencia los mayordomos deben de adelantar de su propio peculio dinero para garantizar la fluidez del engranaje institucional hermandino, que si bien les son reembolsados íntegramente, suele tardarse meses e incluso años en ello, teniendo lugar casi siempre después de haber cumplido su empleo y siempre de acuerdo con la liquidez de la corporación.¹⁴⁶, viéndose ocasionalmente envueltos en vicisitudes económicamente más gravosas que ventajosas¹⁴⁷.

En nombre del Santo Tribunal y del suyo propio, o en su defecto sus herederos, pueden legalmente impeler a los morosos a cubrir las deudas e impagos pendientes¹⁴⁸. De la misma forma, el arriendo de la asadura y de las rentas inmobiliarias quedan bajo su directo control, pudiendo exigir responsabilidades civiles y criminales a los incumplidores de los contratos de los que es acreedora la entidad; eventualmente, puede llegar a asumir directamente la gestión de la percepción pecuaria hermandina, coordinando a los cobradores nombrados a su satisfacción y siendo el responsable último de la rectitud de sus colaboradores, arrentándole su salario anual en razón a su trabajo extraordinario al servicio de su empleo.

El margen de discrecionalidad de los fondos institucionales por parte del arquero es relativo, pues aunque en el Setecientos se acordó que si las rentas eran abundantes se custodiase su producto en las propias dependencias de la Santa Hermandad, no teniendo el mayordomo llave del arca, y desde épocas remotas debía dejar constancia escrita de las entradas y salidas de caudales, lo cierto es que mientras tales fondos permanecían en su poder poco control efectivo podía suponerse a

los hermanados, aunque estaba sujeto a rendir cuentas siempre que fuese formalmente requerido para ello.

El mayordomo, como oficial hermandino, gozaba del privilegio de portar armas para defensa de su vida y hacienda, llegando con relativa frecuencia a participar en las salidas preventivas o coercitivas, haciendo determinadas diligencias judiciales por comisión del tribunal, auxiliado por escribano y cuadrilleros o en solitario.

Con cierta reiteración coincide la mayordomía en miembros destacados socioeconómicamente de la oligarquía ciudarrealena, como mercaderes, negociantes, o administradores¹⁴⁹; oficiales de cargos municipales propios de su estamento¹⁵⁰; y desempeñando otras ocupaciones lucrativas y honoríficas locales.

3.3.1.f. CONTADOR.

Los estatutos ciudarrealeños de 1435 establecían que, a partir de entonces "sean elegidos dos omes buenos e sabios de cuentas para que tomen cada un año la cuenta de cada uno de los mayordomos que es o fuere", asignándoles por su ocupación una retribución cincuenta mil maravedís a cada uno¹⁵¹. Este hermano hidalgo aparece, pues, en el siglo XV para controlar las ascendentes rentas del organismo y sus movimientos contables, haciéndose aconsejable la existencia de personas cualificadas que supervisasen la puridad en la gestión del mayordomo.

En los Capítulos de Maldonado se recuerda la obligación de tener un solo contador, para excusarse mayores gastos, siendo renovado con una cadencia bianual¹⁵². A principios del Seiscientos el oficio de contador había quedado desvirtuado ante el estado de postración de las rentas del Santo Instituto y el férreo control que ejercían sobre ellas los alcaldes, equiparándose su situado anual con el de los regadores y cuadrilleros, y habiéndose optado por homogeneizar la duración de su empleo con los del resto de los cargos corporativos.

El contador une a la jurisdicción preventiva, inherente a todos los oficiales hermandinos, la misión concreta de fiscalizar el estado de las cuentas presentadas por el mayordomo, estructuradas en cargo y data -ingreso y gasto-, detectando las posibles irregularidades de dichas partidas y haciéndolas patentes mediante informe al cabildo.

En realidad su labor se reduce a un mero trámite, a la luz de la documentación consultada, debido probablemente en la connivencia con el gestor o el secreto que rodea su trabajo. Excepcionalmente han quedado vestigios dispersos de su quehacer; así, en 1763 el contador don Pedro Treviño pone de manifiesto algunas libranzas desarregladas, como la rebaja injustificada de un deuda de la es acreedora la entidad manchega, la no sujeción a lo preceptuado en la retribución de una aplicación de tortura judicial y la constatación de que se tomaron algunos caudales del arca sin preceder testimonio al respecto¹⁵³.

En la primera mitad del Setecientos suele coincidir en una misma persona las funciones de contador y del asesor letrado hermandino, para, a partir de entonces, volverse a desdiblar en dos individuos diferentes. Por ejemplo, el licenciado Joseph Sánchez de Torres ejerció ambos cargos desde 1706 hasta 1715, para luego volver a recaer en alguno de los alcaldes salientes.

2.3.1.g. PROCURADOR GENERAL.

Empleo creado durante el proceso de codificación normativa de la Hermandad de Ciudad Real en las postrimerías del Setecientos; las ordenanzas de 1792 conciben dicho oficio adscrito a un hermano hidalgo, a semejanza de los procuradores síndicos municipales.

Seguramente su ocupación fuese asumida anteriormente por el asesor letrado, vinculado consiliariamente a los alcaldes, aunque dicho personaje fuese ajeno orgánicamente a la calidad de hermano ahora prescrita. Asimismo durante el siglo XV la Hermandad había previsto que el cabildo, o alguno de sus miembros más cualificados, pudiesen recibir la asesoría de cualquier hermano letrado, quien debía colaborar en todo momento a tales labores como una más de las obligaciones de su adscripción.

Obligado a asistir a todos los cabildos del Santo Tribunal, con voz pero sin voto en los particulares y con plenas atribuciones en los generales, ordinarios o extraordinarios. Su tarea consiste en representar, por escrito u oralmente, todo aquello que considere pertinente para el correcto funcionamiento orgánico y la defensa de la jurisdicción hermandina.

La Hermandad Vieja, anquilosada tras más de cinco siglos de ininterrumpido funcionamiento, a la altura de 1792 multiplicaba los empleos honoríficos, dotándoles de contenidos formales desdibujados, para satisfacer las apetencias en tal sentido de unos hermanos

hidalgos, cuantitativa y cualitativamente cada vez más numerosos en su seno.

3.3.1.h. LLAVERO MAYOR.

Este oficial hermandino tiene unas atribuciones tan concretas como reducidas, siendo un empleo menor documentalmente difuso por las escasas referencias que poseemos de su labor.

Mientras en el cabildo toledano, en el Seiscientos, ya aparece perfectamente configurado este cargo, asignándolo a una persona de plena confianza del Tribunal la custodia de una de las llaves del archivo, dotándole de un sueldo anual comparativamente elevado; en Talavera esta labor es arrogada por el fiscal, personaje prepotente en dicha fraternidad.

En Ciudad Real las cuatro llaves del archivo, donde se guarda el arca de tres cerraduras, están en poder una en cada uno de los alcaldes, la tercera en poder del llavero mayor hidalgo, y la última en manos del escribano más antiguo de la entidad, es decir ninguna queda a cargo de los hermanos por el estado llano, buena muestra de su grado de oligarquización.

A principios del siglo XVII ya aparece un caballero adscrito a la Santa Hermandad intitulado llavero mayor, aunque al carecer de retribución anual raramente aparece en las fuentes. De esta época solo conocemos al llavero mayor don Luis Correa de Loaysa, gratificado por comparecer a las honras fúnebres celebradas en la iglesia de San Pedro en memoria de la difunta esposa de Felipe III, doña Margarita de Austria¹⁵⁴. Mayor información disponemos de una fuente coetánea, los

informes para la concesión de un hábito de las Ordenas Militares a pretendientes ciudarrealeños vinculados a la Hermandad Vieja¹⁵⁵.

En los estatutos de 1792, el alguacil mayor adquirirá la custodia de la llave antes en poder del llavero mayor, desapareciendo este cargo y desvinculando la cuarta llave antes asignada al escribano con mayor antigüedad en el tribunal en beneficio del notario nombrado por el cabildo directamente, es decir, por una persona de su confianza.

3.3.2. CARGOS DE DESIGNACIÓN DIRECTA.

Existen una serie de oficios en el seno de la Santa Hermandad que son de libre designación por los titulares de ciertos altos cargos, como sustitutos interinos, propuestos por sus titulares y elegidos por el órgano colegiado o bien directamente provistos por el cabildo.

Dejando a un lado los tenientes de alcaidías, alguacilazgo mayor y cuadrillería mayor, que deben recaer en miembros del propio Santo Instituto y sobre los cuales nos hemos referido sucintamente con anterioridad, los empleos por designación directa serán desempeñados por individuos ajenos a la corporación, cumpliendo misiones muy concretas para las que se requiere una determinada cualificación profesional. El cabildo les asignará unos emolumentos fijos anuales, a los que suelen sumarse los derechos legítimos devengados por su trabajo, asistencia a reuniones capitulares, ejecuciones, etc, así como ocasionales gratificaciones extraordinarias por vía de socorro, o ayuda de costa.

Deben ocuparse preferentemente de los asuntos hermandinos, o, en caso contrario pueden prescindir de los mismos, e incluso ser sancionados. Aunque, en principio, la duración de estos cargos se ciñen a la cadencia anual que rige al resto del personal de la institución, generalmente son prorrogados indefinidamente a satisfacción de las partes, siendo interpretada una dejación unilateral del empleo como una afrenta a la corporación.

Bajo contrato, son retribuidos y sirven su empleo, los letrados del tribunal, el alcaide de la cárcel, el portero del cabildo, el verdugo, el personal sanitario y el capellán. Un caso aparte lo conforman los cuadrilleros, hermanos pecheros o sujetos de confianza de la organización empleados como subalternos en diversas misiones preventivas, coercitivas y judiciales, teniendo por ello un salario anual engrosado según su actividad por cuenta de la corporación.

3.3.2.a. LETRADOS.

En 1435 se preceptuaba que no hubiese letrado asalariado en la entidad manchega, sino que los hermanos versados en leyes debían de estar sujetos a prestaciones consiliares a alcaldes u oficiales siempre que fuesen requeridos para ello. Sin embargo, en Toledo y Talavera, mediada dicha centuria, uno de sus hermanos con preparación letrada realizaban en el cabildo funciones de asesoría jurídica, en razón del cual recibe un salario anual; no era elegido conforme el procedimiento electoral ordinario, ni su adscripción al cometido era regular, quedando al arbitrio del cabildo su nombramiento y relevo, pero gozando de la condición de oficial¹⁵⁶.

Los Capítulos de Maldonado seguían prescribiendo la existencia de un procurador hermandino representado por un miembro de la cuadrilla que rigiese en ese momento, cumpliendo su empleo bianual en el seno de la asociación criminalera manchega. Las partes litigantes podían acudir ante los alcaldes mediante apoderado, debidamente acreditado, consistiendo su labor en presentar cuantos testimonios y escritos considerase oportunos; este personaje aparece en los procesos criminales del Santo Tribunal ciudarrealeño en los albores del quinientos, actuando de forma similar a lo que acontecía en la Real Chancillería.

Con anterioridad a esta fecha la tarea encomendada a los abogados al servicio de la fraternidad no incluían funciones regulares en su corte de justicia, tramitadas por los alcaldes con absoluta discrecionalidad, sino que su labor es puramente asesora en negocios

legales de la organización, como percepción de rentas inmobiliarias, cuestiones judiciales en las que estuviese envuelto el Santo Instituto, procesos enmarañados, competencias jurisdiccionales, etc; y se sigue recurriendo a juristas expertos ajenos a la entidad cuando la gravedad del asunto lo requiriese.

Los alcaldes, jueces por lo general legos, no eran una excepción en la administración de justicia castellana de la época¹⁵⁷. Pero la tendencia tecnificadora del proceso penal, apuntada desde el reinado de los Reyes Católicos, haría imprescindible la asistencia de personal especializado que asumiese la representación o defensa judicial de las partes y de un magistrado letrado que acompañase dichos jueces.

Durante el siglo XVI, el tribunal ciudarrealeno fue permeable al procedimiento real ordinario en determinados asuntos, aunque se respete escrupulosamente algunas peculiaridades hermandinas, como el carácter deliberativo y decisorio de sus alcaldes durante el juicio, la brevedad en la substanciación de delitos menores, el característico modo de ejecución de la pena capital mediante asietamiento, etc.

Ya fuese de motu propio, a remolque de los acontecimientos, o a instancia de la Corona, el tribunal hermandino engrosó el personal a su servicio con la entrada en su aparato de justicia de un asesor¹⁵⁸ que acompañase en sus deliberaciones y sentencias a los alcaldes; un procurador fiscal de la entidad, que asumiese la acusación pública; y el eufemísticamente denominado procurador de reos, especializado en la defensa de oficio de los presos sin recursos para costeársela. Estos letrados, cuya actuación durante el proceso analizaremos más adelante, a la altura del Seiscientos ya se encuentran totalmente perfilados en la corte de justicia de la Santa Hermandad.

El asesor, durante la Edad Moderna, es la figura clave en el despacho de todos los asuntos judiciales por parte de la asociación colmenera, al establecerse desde el reinado de los Reyes Católicos que los jueces iletrados estaban sujetos ineludiblemente a verse secundados en sus decisiones por alguna persona versada en leyes a la hora de tomar sus decisiones jurídicas.

Ya en el Quinientos, cuando aparece completamente conformado el procedimiento sumarial en el Santo Tribunal, dicho empleo sería designado a satisfacción de los alcaldes entre los juriconsultos más solventes de la ciudad que aceptase este honor¹⁵⁹, teniendo encomendada aconsejar y determinar junto a los jueces de la causa la sentencia definitiva, acompañándoles en las visitas a los presos y compareciendo en los cabildos. En el Seiscientos, sobre todo, no es difícil encontrarlo junto a los cuadrilleros en las salidas preventivas por caminos y campos. Encargado de informar al cabildo y al resto de los oficiales sobre cuestiones jurídicas de la más diversa índole; este magistrado estudiaba a instancia de sus superiores cuantos problemas legales surgiesen, siendo obligatoria su presencia y rubrica en las sentencias y otras diligencias procesales llevadas a cabo por el tribunal. Preferentemente debía dedicarse al servicio del Santo Instituto, y no actuando de acuerdo a esta máxima debía ser sustituido por otro letrado¹⁶⁰.

El cargo se provee por designación directa de los alcaldes, aunque formalmente precisase de la aquiescencia del cabildo. Suele acceder al empleo poco después de tomar las varas los alcaldes, aunque a menudo se nombre más de un asesor durante un mandato, lo que se convierte en práctica habitual entre 1720-1740¹⁶¹, con el objeto de agilizar los

trámites burocráticos procedimentales. Es probable que las ordenanzas de 1756 redujeran su número a uno solo, pudiendo ser sustituido a lo largo del mandato anual o ser renovado en su cargo. En el siglo XVII había un único asesor general, esporádicamente relevado con carácter interino en caso de ser recusado el titular, pero la mayor actividad judicial del Setecientos dispararía su número en Ciudad Real.

Puesto que la elección directa del asesor por parte de los alcaldes implicaba su cese automático con el final anual de su mandato, es frecuente que aquel magistrado que gozase de la credibilidad general, el favor de la institución y estuviese familiarizado con el funcionamiento del Santo Tribunal prorrogase su labor durante años¹⁶², salvo que sus ocupaciones personales o profesionales no garantizaran la dedicación prácticamente exclusiva que se pretendía¹⁶³. Cuando Joseph Sánchez de Torres, asesor hermandino casi sin interrupción entre 1700 y 1745, en 1714 presentase su dimisión, alegando sus múltiples menesteres y una supuesta enfermedad, el cabildo desestimará su requesta al considerarlo capaz de continuar su labor¹⁶⁴.

La evolución del situado, nómina anual de este letrado registra un paulatino ascenso, aunque desfasado debido a la inflación del vellón durante el Seiscientos y el aumento real del coste de la vida de la siguiente centuria: doce ducados, en 1600; veinte entre 1611-1639; treinta en 1684; poco más de cuarenta y cinco en 1740; fluctuando entre cincuenta y setenta ducados hasta finalizar el Setecientos. Tales cantidades, retribuidas a menudo en plazos de acuerdo con la liquidez corporativa, no resultan comparativamente unas rentas demasiado jugosas teniendo en cuenta su capacitación profesional, por lo que son favorecidos con el pago de determinadas comisiones de acuerdo a su volumen de trabajo¹⁶⁵. En 1792 eran elevados sus

emolumentos anuales a ochenta ducados, pero se introdujo la cláusula de que no percibiese derechos por su asistencia al tribunal.

Siempre que un asesor abandonase la ciudad a instancias de sus superiores, cobraban unos derechos de acuerdo a la importancia de la diligencia encomendada, del tiempo empleado y de la distancia a cubrir para ejecutar los designios del cabildo.

El procurador de reos, era elegido por el cabildo para defender de oficio a los encartados por la Santa Hermandad que no contaban con el dinero suficiente para costear a otro letrado defensor¹⁶⁶. Generalmente los presos juzgados en esta instancia deben acudir a sus servicios, demostrando ser pobres de solemnidad y no teniendo bienes en los que ejecutar las costas procesales ni condenaciones pecuniarias algunas, haciéndose responsable entonces de cubrir esta carencia la hacienda hermandina, consumiéndose sus caudales.

El número en el seno de esta corte de justicia ciudarreal leña variará entre uno a dos titulares, a tenor de su actividad judicial, siendo más frecuente el desdoblamiento de este oficio en la primera mitad del Siglo de las Luces. Tras el punto de inflexión de 1756, su percepción anual se fijó en ochenta reales, a los que suman setenta reales para la compra de papel sellado y sin sellar donde escribir sus representaciones. En 1792, se elevó su sueldo a ciento cincuenta reales de vellón, proporcionándole el tribunal cuanto papel precisase, aunque renunciando explícitamente a llevar derechos por las causas en las que interviniese.

Los procuradores de los encartados menores de edad son denominados curadores, actuando de acuerdo a la minoridad de sus defendidos y de

forma similar a la de los letrados que abogan por personas maduras; recibiendo por ello idénticos emolumentos.

El promotor fiscal, cargo de libre designación del cabildo, es el magistrado obligado en razón de su oficio a llevar la acusación pública contra los reos de hermandad. Su nombramiento anual, susceptible de ser prorrogado regularmente, le consagra a la defensa de la vindicta pública, aceptando su cargo ante escribano y jurando servirlo bien y fielmente.

La elección suele recaer en un "abogado de los de buen concepto" de Ciudad Real¹⁶⁷, debiendo informar a la corporación de todas sus actuaciones, asiste junto al resto del personal hermandino a las visitas periódicas a la cárcel y a los cabildos generales o particulares, aunque sin capacidad decisoria.

Su número oscila entre uno a tres letrados anuales, siendo un cargo excecido por los magistrados locales no por sus pocas rentas, sino porque a diferencia del resto de quienes intervienen en el pleito no puede ser recusado por ninguna de las parte, ni castigado por calumniador sin probarse dicha acusaciór, pues al actuar siempre de oficio se presume se imparcialidad, aunque en puridad tampoco pueda exigir derechos a los litigantes¹⁶⁸.

3.3.2.b. PORTEPO.

La figura del portero está documentada por primera vez en las ordenanzas manchegas de 1435, aunque es casi segura su existencia previa, al prescribirse que cuando se procediese a la renovación de los oficios los hermanos fuesen convocados por este sujeto "segund que es uso e costumbre"¹⁶⁹. En la reordenación llevada a cabo por Maldonado a fines del Cuatrocientos, se establece su mandato en diez años, debiendo proveerse entre los hermanos acuadrillados, recibiendo por su trabajo en los cabildos determinados emolumentos y dádivas¹⁷⁰.

Sus funciones son poco concretas, pues aunque su principal cometido era informar a los hermanos de las convocatorias a cabildos y llegas, será ocasionalmente utilizado como correo, adquiere por orden del mayordomo bastimentos para la sede del tribunal, etc.

En Cúrdal Real en las postrimerías del Cuatrocientos el cargo de pregonero será desempeñado por otro sujeto, pues al recaer el oficio de portero en un hermano de su fraternidad su calidad era incompatible con la minusvaloración social que recaía en voceros o pregoneros, ocupaciones marginales propias de peones concejiles e individuos de baja extracción socioeconómica, lo que parece que no fue un obstáculo en la fraternidad vieja de Talavera¹⁷¹.

A lo largo del siglo XVI, y ya decididamente en la siguiente centuria, se fue desvirtuando la antigua preceptiva adscripción hermandina del portero, asumiendo el alcalde dicha labor. A principios del Seiscientos aún no estaba nítidamente fijada la forma de proveer

el cargo, pues mientras en las cuentas correspondientes a los años 1600 al 1618 se asienta que el carcelero Mateo de Piedrabuena percibía los trescientos maravedís asignados al empleo de portero¹⁷², poco después se elevó su monto a quinientos maravedís anuales, volviendo a conferírseles a un hermano del estado llano¹⁷³.

Tras 1630 el alcaide hermandino se arrogará ambos empleos, probablemente debido a que la consumición de las rentas institucionales aconsejaban una reducción del personal, siendo el responsable de su cárcel el sujeto ideal para asumir dicha labor, al permanecer durante la mayoría del tiempo en la sede del tribunal. Hasta la desaparición del Santo Instituto se mantuvieron indivisos ambos empleos en un mismo titular.

3.3.2.c. ALTAIDE Y SOTALCAIDE.

* Durante el periodo fundacional de la Hermandad Vieja, su proceder expeditivo y su falta de consolidación orgánica excusaba al Santo Tribunal el contar con un individuo específicamente consagrado a la labor de custodia de los detenidos, encargándose de ello cualquier cuadrillero o persona designada para tal fin. Cimentada la asociación a lo largo del Trecentos y consolidado su desarrollo en la siguiente centuria, los cabildos pasan a celebrarse en el monasterio de San Francisco, permaneciendo los delinquentes confinados en cualquier casa de campo o inmueble de la propia ciudad, e incluso en la propia cárcel real. hasta la resolución del proceso, no pudiéndose descartar que la Hermandad poseyese algún edificio habilitado como calabozo en fechas tan tempranas¹⁷⁴.

Construida la definitiva prisión hermandina durante el reinado de Los Reyes Católicos, desde entonces cortó el Santo Tribunal con un oficial ocupado en tareas de custodia y manutención de los presos preventivos confinados. Tal vez se proyectase adjudicar a algún hermano pechero este cargo, pero pronto se desestimaría al ser un empleo que irrogaba infamia, precisaba de una dedicación exclusiva y sería previsiblemente más una carga que un honor, en suma inapropiado de servirlo un miembro con pleno derecho de la corporación.

Se prefirió, pues, emplear a sujetos experimentados en similares cometidos, como ex-soldados, ex-alcaides de galeras públicas, etc, asistiéndose en este oficio tan azaroso a un proceso de especialización de determinados sujetos, y a menudo de sus familias,

llegándose a patrimonializar en cierto modo tales puestos¹⁷⁵. La manera de proveer este empleo era sencillo: anualmente, los oficiales entrantes solían renovar a su titular, si lo había desempeñado a su satisfacción y admitía su continuidad¹⁷⁶, haciendo inventario de los bienes existentes en todas las dependencias de la sede hermandina, de cuya integridad debería responder al final de su mandato ofreciendo para ello fianzas. Era un procedimiento usual el reemplazar al alcaide que había sufrido alguna evasión de los presos a su cargo, siendo destituido fulminantemente por los alcaldes y nombrado un sustituto interino, que a menudo suele continuar en su cargo por acuerdo de ambas partes, siempre y cuando no fuese rehabilitado profesionalmente su titular hecho nada infrecuente¹⁷⁷.

Elegido por votación secreta al tiempo de proveer al resto de los oficiales en el cabildo general de septiembre, debía aceptar solemnemente su cargo y se le hacía entrega del inventario de prisioneros y presos, pertrechos del cabildo y ornatos de la capilla, aboliéndose su actuación con sus propios bienes y los de sus valedores.

El alcaide conserva el libro registro de las entradas y salidas de los reos, cumplimentado por uno de los escribanos hermandinos, donde se anotaba la fecha de los ingresos en prisión y de las excarcelaciones, los nombres y apellidos de los confinados, los delitos que le se imputaban, su ministro captor y el destino de su salida; en hojas separadas se consignaban los presos preventivos pertenecientes a otras jurisdicciones y custodiados en sus calabozos como prisión segura¹⁷⁸.

Se ocupaba de la decencia y limpieza del oratorio, salas y mazmorras; de la vigilancia y decente mantenimiento de los arrestados,

evitando las visitas sospechosas, tratando a los encarcelados "con el amor y caridad que es debida, sin retraerles sus sueldos, asistiéndolos en sus enfermedades". Como portero debe celar la entrada a la casa-cárcel durante las asambleas, avisando a los hermanos de la celebración de reuniones con el tañido de la campana o repartiendo cédulas de convocatoria, según los casos.

Excepcionalmente coincidió en una misma persona los puestos de alcaide con el de teniente de alguacil mayor, confluyendo en el mismo sujeto toda la responsabilidad directa sobre la seguridad de los confinados¹⁷⁹. Esto no presentaba unas mayores obligaciones, pues era frecuente que los alcaides persiguiesen por su cuenta y riesgo, a menudo ayudado por sus deudos, a los evadidos de los calabozos¹⁸⁰.

A cambio de tan difícil como denostada labor, el tribunal le proporcionaba una casa para que se alojase su familia, en caso de no disponer de vivienda en la ciudad. Como el alcaide debía de dormir permanentemente en la galera, les fue habilitado un aposento en el piso superior encima de las mazmorras¹⁸¹, trasigiéndose en que los carceleros interinos viviesen en su propia casa, para facilitar la pronta provisión de la plaza vacante¹⁸². La corporación, asimismo, costeará su asistencia médica y espiritual, asignándoseles unos honorarios anuales fijos¹⁸³, aumentándoseles eventualmente su sueldo o sufragándose de las arcas hermandinas los honorarios de un ayudante cuando la carestía de los tiempos o el incremento de su trabajo así lo aconsejase¹⁸⁴. Ocasionalmente, puede compartir el estipendio con un auxiliar, casi siempre un amigo o algún miembro de su familia¹⁸⁵.

Carcelero y sotcalcaide suelen beneficiarse de los aguinaldos navideños, y los dispensados durante las fiestas locales e

institucionales¹⁸⁶, aunque el monto total de dichas gratificaciones son ciertamente insignificantes comparándolas con la responsabilidad subsidiaria y la peligrosidad asumida. Sus cometidos sobrepasan con mucho a las encomendadas a un carcelero, y así, a mediados del Seiscientos, el alcaide Juan Sánchez Ventas tan pronto portaba el estandarte real en la ejecución de una pena como ratificaba los testigos de un proceso en una villa lejana a la sede del Santo Tribunal¹⁸⁷, pudiendo participar en diversas salidas masivas a cargo de la entidad, etc.

Los riesgos que entrañan este peligroso oficio, unido a las magras rentas derivadas de su desempeño, era campo abonado para todo tipo de irregularidades y abusos; sus titulares se verán acusados, con más o menos fundamento, de complicidad o negligencia ante determinados intentos de fuga; de connivencia con los detenidos o de extorsiones a los reos. Llegándose a sancionar a algunos de dichos oficiales con prisión temporal, embargo patrimonial y multa, de las que pretenderán exonerarse refugiándose en el mismo sagrado donde se asilaban los huídos causantes de su pesadumbre¹⁸⁸.

Durante el siglo XVII no serán demasiado reiteradas dichas irregularidades, o al menos no son tratadas con la misma severidad que la centuria siguiente, siendo la tónica habitual que el alcaide acabe su mandato anual sin graves contratiempos¹⁸⁹. Con la reactivación del tribunal tras el cambio de siglo, es perceptible una precariedad en el empleo, debido a defunciones de sus titulares y evasiones de los reos. Desde mediados del siglo XVIII decae la conflictividad inherente a este oficio, al mejorarse la estructura del edificio que alberga la cárcel reforzándose sus medidas de seguridad e incorporándose a la nómina de forma más permanente la figura del

sotalcaide, ya esbozada décadas antes¹⁹⁰. A pesar de todo no faltarían los incidentes tampoco por entonces¹⁹¹.

Se han conservado noticias sobre litigios en los se hallan envueltos alcaides hermandinos en otras instancias, como la querella presentada ante los alcaides ordinarios ciudarrealeños por Juan Martel, carcelero entre 1727 y 1735, contra Bernardo García Mancha, acusado de desflorar a su hija Brígida Martel, aunque luego desistiría de ser considerado parte al elevarse el caso ante el corregidor¹⁹².

3.3.2.d. EJECUTOR.

La Santa Hermandad, caracterizada desde su periodo fundacional por la reiterada recurrencia a la pena capital con la que erradicar el bandolerismo endémico de la zona, durante la Edad Moderna moderó en gran medida su proceder, aunque hubo de dotarse de un verdugo a su servicio que aplicase las condenas aflictivas corporales dictadas en su corte de justicia.

Durante la mayor parte de la Baja Edad Media la institución carecía de dicho oficial, pues eran los propios cuadrilleros quienes ejecutaban las sentencias dictadas por los alcaldes, ejecutándose con relativa frecuencia la pena capital por parte de sus propios captores, lográndose el doble objetivo de aplicar una justicia rápida y severa para ascarmiento de malhechores y ejemplo popular, así como el de servir de práctica a los ballesteros, sirviendo como acto de confraternización entre hermanados y personas afines a la corporación, contribuyéndose como si fuese un acto iniciático para los participantes.

Hasta bien entrado el Seiscientos no cuenta la Hermandad Vieja de Ciudad Real con un verdugo permanente que aplicase torturas, penas aflictivas y diese la muerte mediante garrote prescrita en las Cortes de Segovia de 1532 para los casos de hermandad más graves¹⁹³, quedando el tradicional asaetamiento al cadáver como un vestigio de la antigua usanza de los ballesteros apícolas. Si bien la permanencia estable de un verdugo adscrito como oficial hermandino manchego no se consolidaría hasta bien entrado el siglo XVII, con anterioridad se da la circunstancia de que se debe acudir a ejecutores forasteros¹⁹⁴,

mientras que posteriormente se invertirán los papeles, y serán los tribunales de otras villas manchegas quiénes reclamarán la presencia de este sujeto, ejerciendo ocasionalmente su profesión por cuenta de otras jurisdicciones, aunque siempre con la aquiescencia formal de los alcaldes y estipulándose pormenorizadamente su cometido y derechos¹⁹⁵.

A partir de 1602, fecha en la que por primera vez en el Seiscientos aparece consignada la presencia de un verdugo fijo en la nómina hermandina¹⁹⁶, hasta mediada la centuria, cuando ya de forma constante se mantiene a un ciudarrealeno en esta plaza, solían desempeñar estas labores uno o dos individuos durante un mismo mandato¹⁹⁷. Durante los últimos siglos de la Edad Moderna, es normal que corregimiento y Hermandad Vieja de Ciudad Real, contratándose sus servicios por un tiempo fijo a cambio de una nómina anual regular¹⁹⁸; a los que se suman los incentivos estipulados por su labores de justicia¹⁹⁹; los socorros o gratificaciones del tribunal cuando las estimase necesarias²⁰⁰; las comisiones procedentes de las almonedas de los bienes incautados y enajenados de los encartados²⁰¹, los "derechos de cuerda", las ropas de los ejecutados, etc. En el último tercio del Setecientos se modificó parcialmente el sistema remuneratorio, al sustituirse el asignado anual por el pago de dos o tres reales diarios, y la comida, mientras desempeñase su oficio, regulándose al alza los derechos derivados de la aplicación de las penas corporales²⁰².

El verdugo suele comprometerse a ejercer su quehacer a cargo del Santo tribunal durante varias años consecutivos, garantizándose de esta manera unos ingresos regulares, y cubriendo la corporación un puesto vital muy problemático de proveer por las connotaciones peyorativas de todo tipo inherentes a dicho empleo²⁰³, aparte del

riesgo personal que llevaba aparejado. Como sueldos y gratificaciones montan cifras modestas, suelen recurrir al puriempleo en ocupaciones como carnicero, arriero, jornalero, carpintero, herrero, peón público o pregonero²⁰⁴. Su baja extracción socioeconómica, junto a una cualificación profesional marginal, determinan esta tendencia a desempeñar oficios no gremiales que les permiten engrosar sus exiguas rentas.

Los verdugos coinciden con los alcaldes en dos particularidades: la primera, es que suelen sucederse en el cargo miembros de una misma familia, a falta de otra alternativa de vida asequible a sus posibilidades y condición; la segunda, es que acostumbran a alojarse en una de las viviendas proporcionadas por la entidad a la que sirven²⁰⁵, ejerciendo la Santa Hermandad una labor de patrocinio mayor que la mantenida con el resto del personal adscrito no perteneciente como herrero a dicha asociación. A semejanza de todos los oficiales de la corporación apícola, no puede renunciar unilateralmente a su empleo sin causa justificada ni consentimiento del tribunal, respondiendo judicialmente de lo que podría ser interpretado como un incumplimiento doloso o una dejación de obligaciones.

Un caso paradigmático lo constituye la familia Sastre. La primera noticia que disponemos sobre la vinculación de alguno de sus miembros con la Hermandad Vieja de Ciudad Real data de 1693, cuando aún ejercía el cargo como verdugo hermandino Juan Asensio, siendo comisionado al hermano del teniente de alguacil mayor de la entidad para hacerse con los servicios de un verdugo en la Ciudad Imperial²⁰⁶. Tan satisfechos quedaron con el trabajo ejecutado por Juan Sastre que dicho sujeto desfiló al titular de la plaza, habiendo llevado su predecesor una década en dicho puesto, ofreciéndosele cien reales de vellón anuales y

cuarenta y cuatro reales más por la pena aflictiva aplicada sobre el reo Juan Amador²⁰⁷.

En marzo de 1698 Juan Sastre ajustaba con los alcaldes hermandinos la adscripción al Santo Tribunal durante seis años, sin poder ausentarse de Ciudad Real sin autorización de sus superiores, por una nómina anual de cuarenta ducados²⁰⁸. En diciembre de ese mismo año partía a Membrilla -Ciudad Real-, escoltado con dos guardas para ajusticiar a un peligroso convicto condenado a muerte por la justicia local²⁰⁹. Por esas fechas contraía matrimonio con una tal Jerónima. A principios del Setecientos las relaciones del verdugo con las autoridades públicas estaban enrarecidas. En febrero de 1706 decide abandonar la ciudad "por causa de estar cada día padeciendo molestias y vejaciones", por parte de los alguaciles del corregidor y de los máximos responsables hermandinos. Lo cierto es que los primeros le habían amenazado por secuestrar unos cerdos a sus convecinos que daban un predio que tenía arrendado, regulando el corregidor que por cada uno de los seis puercos se le indemnizara con un real, sus alguaciles le despojan de las cabezas de cerda, dándole únicamente dos reales a su mujer no sin dejar de manifestar "que diere gracias a Dios que los davan". Frustrados sus intentos de que el corregidor le concediese audiencia, es objeto de "palabras afrentosas" y menosprecio por parte del representante real; dice contar unos cuarenta y dos años y no saber firmar en la declaración que presentó ante los alcaldes hermandinos, alarmados por su pretendida marcha de la ciudad. El mismo día 24 de febrero cesan las diligencias judiciales contra el interfecto, siendo excarcelado de la galera del Santo Instituto sin cargo alguno pero continuando en su puesto²¹⁰. Los ánimos debieron atemperarse, pues Juan Sastre permanece en su puesto al menos hasta

1716²¹¹, estando alojado junto a su familia en la casa vinculada a la fraternidad colindante al mesón de Caballeros.

En 1719 moría este verdugo oriundo de Toledo, ocupando su lugar Mateo Sastre, quien como profesional menos experimentado recibe un salario anual inferior al de su predecesor²¹², permaneciendo en la mencionada vivienda de la calle Caballeros, hasta que se traslade a Ciudad Imperial y de allí a la Corte²¹³, atraído por las mayores oportunidades que le brindaban por entonces aquellos núcleos de población en expansión²¹⁴.

Durante la década de 1730 ocupa la ejecutoría hermandina Juan Sastre, el menor, quien despedido del oficio de peón público por incompetente, solicita en 1739 continuar como verdugo del corregimiento y de la ocupación de la fue expulsado años atrás, recibiendo por ello veinte reales anuales como peón del apuntamiento²¹⁵, y cuarenta ducados de su plaza en la Hermandad Vieja. Mediada la década de 1740 aparece Isidro Sastre realizando las labores de verdugo hermandino, ascendiendo su sueldo anual a cuarenta ducados²¹⁶. En 1749 el gobernador de Almodóvar del Campo -Ciudad Real- recurre al verdugo residente en Ciudad Real, Antonio Sastre, para ejecutar al asesino Joseph Cortés²¹⁷.

A partir de entonces el cargo de ejecutor del tribunal manchego cambia de manos definitivamente para pasar a otros sujetos que siguen en el puesto durante años, pero sin reproducir la patrimonialización profesional llevada a cabo de facto por la familia Sastre durante más de medio siglo. En todo caso hemos podido rastrear las líneas maestras de dicho linaje de verdugos hasta las postrimerías del siglo XVIII.

En 1780, Isidro Sastre, verdugo de la justicia ordinaria toledana, se queja, primero ante al ayuntamiento y luego ante el Consejo de Castilla, asegurando haber sido despojado del arbitrio que tenía de buscar las caballerías menores para la conducción de los reos conducidos a vergüenza pública²¹⁸. Un año después, el 5 de julio de 1783, su hijo de igual nombre oficiaba de pregonero público, pretendiendo que el veedor y maestro de obra prima le vendiese material para confeccionar zapatos y remendar los viejos, lo que pese a no estar esta última labor sujeta a examen gremial es denegado por el veedor. Ante este fracaso eleva su petición al procurador personero del común, quiénes acompañados por un alguacil obligan al veedor Francisco Garcia a plegarse a sus exigencias, proporcionándole el personero cuero a Isidro Sastre de forma gratuita²¹⁹. El 16 de junio de dicho año, los maestros de obra prima toledanos se pronuncian contra lo que consideran un atropello, alegando que

"...siempre ha sido es y sera menospreciable, ordinario, y infame el oficio de verdugo (a pesar de su nezesidad) por la presuncion de mal corazon, que muestra y dedicarse a matar a sangre fria por oficio..."²²⁰

En septiembre de 1783 el informe del Fiscal del Supremo Consejo confirmaba la descalificación que irrogaban los empleos de pregonero y ejecutor, considerando ilegítima la pretensión de Isidro Sastre de dedicarse a la zapatería de nuevo sin examen previo. El 1 de octubre del citado año los consejeros refrendarán dicha postura²²¹.

En 1783 muere Isidro Sastre, el mayor, habiéndole reemplazado en su oficio su hijo Manuel Sastre, pero su defunción planteará el dilema de que quedaban sus dos hermanos, Isidro y Antón, como posibles competidores para la misma plaza vacante; tal cuestión quedaría diluida salomonicamente, al solicitar ambos al cabildo toledano que

"para que uno de los dos no nos quedemos desamparados, ejercer promiscuamente el oficio ayudándonos como buenos hermanos", significando que aún compartiendo el salario podrían pagar la pensión diaria de real y medio que se habían comprometido a pagar a su madrastra, Isabel Pita²²². No debieron de ir demasiado bien las cosas cuando Antonio Sastre -tal vez el Antón antes mencionado-, aquejado probablemente de un cáncer de garganta se viese impedido de ejercer el oficio de pregonero heredado de su padre, suplicando esta vez al cabildo de regidores que

"...siendo practico y costumbre en todas las ciudades del reino que el encargo de barrendero de sus plazas este a cargo de los escriptores de la Real Justicia, esto puede ser al del suplicante como su hijo, pues no puede por su defecto esforzar la voz, y es el unico medio de buscar su vida..."²²³

A partir de entonces desconocemos cual sería la trayectoria vital de esta peculiar familia de verdugos, probablemente fuese tan azarosa como las que a diario se corrían.

3.3.2.e. PERSONAL SANITARIO.

La Hermandad Vieja garantiza la asistencia médica y los necesarios cuidados sanitarios de sus dependientes más directos, reos u oficiales inferiores, requiriéndose siempre que se estimaba oportuno los servicios de un médico o cirujano de acreditada experiencia de la ciudad y haciéndose cargo íntegro, si ello fuese posible, de cuantos gastos de botica se ocasionasen²²⁴.

Durante casi todo el Seiscientos y el primer tercio del Dieciocho, el tribunal a través de su alcaide, mayordomo, algún hermano, los alcaldes o el capellán, acuden a los buenos oficios de algún cirujano local para atender los eventuales percances acaecidos o reos²²⁵, enfermedades crónicas de algunos detenidos²²⁶ al carcelero y a su familia²²⁷, paliar o asistir a los atormentados²²⁸, etc.

Los cirujanos, barberos con cierta experiencia en sangrías y tratamiento de traumatismos, amputaciones, y heridas de todo tipo, con más voluntad que ciencia, suelen socorrer a cuantos dependientes de la corporación precisan de estos profesionales cualificados²²⁹. Su labor es particularmente solicitada para reponer la quebrantada salud de algunos reos destinados a trabajos forzados en los presidios del Reino²³⁰.

Desde principios del Setecientos empieza a hacerse uso de la asistencia médica titulada para curar al personal adscrito a la Hermandad, debiéndose tan tardía presencia en la documentación hermandina a sus elevados honorarios en relación con los de los

cirujanos. Habrá que esperar a la década de 1730 para que se garantice la permanencia estable de ambos profesionales sanitarios, siendo elegidos por mayoría simple por el cabildo y dándoles la calidad de oficiales con una nómina anual acorde a su responsabilidad, cometidos²³¹ y cualificación.²³² Unos y otros desempeñan sus respectivos oficios al margen del tribunal, siendo la escasez de sus emolumentos buena muestra de que no llevaban pareja una exclusividad ocupacional que la escasez de profesionales sanitarios y el carácter esporádico de sus servicios a la organización apícola hacían de todo punto innecesaria.

Excepcionalmente se recurrió a la colaboración de una persona que recorriese puntualmente a los reos enfermos día y noche, soliendo emplearse a viudas o madres de familias numerosas que precisaban de ingresos suplementarios para su propio mantenimiento y el de su prole²³³.

A los gastos devengados por la asistencia del personal sanitario, al servicio eventual o estable del santo Tribunal, hay que añadir los desembolsos en botica que, con una mayor frecuencia, hay que afrontar para curar o paliar las enfermedades de algunos presos²³⁴, recurriéndose a los boticarios más acreditados de la ciudad, a menudo su monto es más elevado que el de las nóminas anuales de médicos y cirujanos, a pesar de ser considerados empleados mecánicos y estar supeditados a aquellos.

Sin embargo, para evitar suspicacias, cuando fue precisa la presencia de algún cirujano o médico que peritase en determinados incidentes judiciales, invariablemente se acudió a algún profesional desvinculado del Santo Instituto, garantizando así la pureza de las

apreciaciones periciales²³⁵. Aunque aparentemente en su elección prima la estimación pública sobre otras consideraciones, no podemos descartar la posibilidad de que algunos de ellos mantuviesen previamente ciertos lazos familiares, de amistad o económicos, como fue el caso de don Juan Bautista Bisado, médico hermandino entre 1764-1765, coarrendatario general de la asadura mayor y menor durante el periodo 1760-1761²³⁶.

3.3.2.f. CAPELLÁN.

Una organización blasonada con el apelativo de Santa por bula pontificia no podía faltar a los preceptos religiosos y piadosos inherente a este tipo de asociaciones y que imbuían todo la vida institucional y personal en las Españas del Antiguo Régimen. Al menos durante el siglo XV, y presumiblemente antes, algunos clérigos concurrían en las delegaciones de cada una de las entidades apícolas que conformaban el Triple Instituto y que se reunían con motivo de la llega anual, para hacerse cargo de lo oficios divinos acostumbrados en tan solemnes actos²³⁷. Los Capítulos de Maldonado estipulaban la necesidad de contar con un capellán para celebrar misa los días feriados a la que deberían asistir los presos.

Pero no sólo eran reos y oficiales hermandinos los beneficiarios de esta apoyación religiosa; en 1499, la entidad manchega pagaba a un religioso itinerante para que confesase a los guardas de las posadas, y a principios del Quinientos aparecen religiosos en las visitas guiadas por alcaldes y cuadrilleros a montes y colmenares, aunque dichas costumbres decaerán conforme avance la centuria²³⁸.

Tanto el capellán titular de la Santa Hermandad, como el religioso que en su defecto lo sustituyese circunstancialmente²³⁹, serán designados mediante consenso por el pleno capitular de entre los presbíteros ciudarrealeños²⁴⁰, con la calidad de vitalicios si así se estimase conveniente o, cuanto menos, renovable. Está obligado el religioso a oficiar misa rezada todos los días festivos del año, en el oratorio de la cárcel, siendo preceptiva la asistencia de todos los

reos, el alcaide y su familia. Considerados su oficios como "pasto espiritual de los presos", la asistencia de los mismos es ineludible por el doble motivo de que a la vez que reconfortaba almas presumiblemente laceradas por el pecado se aprovechaba el momento para proceder a un registro minucioso de los calabozos.

Asimismo debe visitar periódicamente a los confinados y a los oficiales hermandinos enfermos, informando a quien estimase conveniente de las carencias materiales y espirituales que observase en ellos. Asistirá a los condenados a la pena capital en la capilla, preparándolos para bien morir; confesará al menos una vez al año a los encarcelados y acompañará hasta el patíbulo a los sentenciados a la última pena. El día de las elecciones, el capellán celebrará misa a la que deben asistir todos los hermanos convocados a la asamblea plenaria, para pedir por que el Espíritu Santo encauzase el acto subsiguiente de manera adecuada -de ahí el nombre que tomó dicho oratorio hermandino-.

El presbítero goza por sus desvelos hacia la entidad, de un sueldo anual, pagado de los caudales hermandinos²⁴¹, que ocasionalmente vería engrosado por diversas sumas de dinero en concepto de limosna o de ayuda para sufragar oficios divinos y gastos litúrgicos, y cuyo monto dependerá de la disponibilidad financiera corporativa²⁴². Cuando se precisase la presencia de un sustituto del titular, serán retraídos los derechos de sus sermones de los honorarios fijos del presbítero hermandino²⁴³.

La dignidad de capellán institucional tiene su paralelo en las Hermandades Viejas de Toledo²⁴⁴ y de Talavera²⁴⁵, estando acreditada

su comparecencia en todo tipo de organizaciones semejantes de la época²⁴⁶.

Tras el Concilio de Trento (1545-1563) se vió comprometida la continuidad de la celebración de culto en el oratorio del Espíritu Santo, al ser revocadas todas las licencias concedidas hasta la fecha para officiar liturgias en capillas privadas, salvo expresa concesión de la Santa Sede. Su cumplimiento puntual distó mucho de ser estricto, pues el propio don Antonio Caetano, arzobispo de Capua y colector general apostólico de España, reconocía que

"...con todo se sabe que muchos prelados torziend[olo] en otro sentido las palabras del Concilio ordinariamente sin ningun defecto dan muchas licencias con lo qual...se toman la Autoridad Pontificia y disminuyen la frecuencia y dignidad de las Yglesias."

En Ciudad Real se ordena al vicario de su partido hacer cumplir dicha doctrina a principios del Seiscientos, siendo expresamente levantada esta prohibición en 1610²⁴⁷.

En los sermones y misas cantadas ofrecidos con motivo de las festividades religiosas de la Hermandad, concurre con toda pompa y solemnidad el cabildo en pleno, recurriéndose a la comparecencia de otros religiosos, probablemente asistiendo el capellán de la entidad en calidad de invitado²⁴⁸.

3.3.2.g. AMO DEL HOSPITAL.

Las fuentes denominan Amo del hospital al individuo encargado de la asistencia a los pobres recogidos en el centro asistencial erigido a fines del Cuatrocientos en la calle de la Mejora con caudales de la corporación manchega.

Esta persona era elegida por el cabildo entre los hermanos caracterizados por su honradez y misericordia para con los desamparados. Conocemos muy poco de este personaje, salvo algunos de sus nombres y que disponían de un salario, que se mantuvo inalterable durante 1587-1619, en dos ducados anuales²⁴⁸.

En 1619 ó 1618 una pendencia en la que se envuelto el hospitalero Pedro García, termina con la prisión de Francisco de Copia y del resto de los implicados²⁴⁹.

Al encargado del hospital, y a su ayudante -probablemente su propia mujer, madre o hermana²⁵¹-, se les encargaba la asistencia puntual a enfermos y pobres albergados; encargándose de lavarles su ropa, barrer los cuartos donde pernoctaban, henchir sus jergones, comprar esteras, proporcionarles cobijas, darles el sustento diario que se cocinaba en la cocina del hospital, ocuparse del mantenimiento del inmueble, garantizar la moralidad de los acogidos y estimular su asistencia a los actos litúrgicos públicos oficiados en la ciudad.

La víspera de Navidad solía darse al hospitalero cuatro ducados, dos para aguinaldo y el resto para comprar leña con la que calentarse

los acogidos y preparar los alimentos con los que se malnutrían, probablemente complementados con el producto de su limosneo, girando la vida en torno a la cocina, única pieza caliente del edificio.

Sin rentas específicas con las que dotar la conservación del hospital ni el mantenimiento de mendigos y enfermos, salvo parte de las percepciones pecuniarias impuestas por el Santo Tribunal, y asignando honorarios tan insuficientes al administrador, dicha fundación languidecería a lo largo del Quinientos, quedando prácticamente reducida en esos primeros años del Seiscientos a su simbólico mantenimiento, dejando paulatinamente de tener la utilidad para el que fue concebido.

A partir de la década de 1620 desaparece toda referencia documental sobre su aplicación caritativa, debido a que la ruina del edificio y su desnaturalización previa como albergue de caridad desembocaría en su abandono. Hacia la década de 1660 se registra una coyuntural rehabilitación del hospital para su uso fundacional, quedando aparentemente clausurado desde entonces.

3.3.2.H. ALGUACILES Y CUADRILLEROS.

Los cuadrilleros, brazo armado por excelencia del Santo Instituto, fueron en principio los jefes del grupo armado compuesto por los guardas de las posadas y otros colaboradores ocasionales, actuando en misiones de vigilancia de montes y caminos, persiguiendo a delincuentes por mandato del cabildo o en virtud de su ministerio.

En el siglo XIV, la cuadrilla, entendida ya como partida de personas encargadas de la seguridad de un distrito concreto, donde se ubicaban colmenares u otras propiedades de los hermanos, estaba configurada como la base ejecutiva de la red de seguridad hermandina en despoblado. Nombrados por el cabildo, se ocupaban durante el tiempo de su mandato de tales misiones, disponer de la carta de cuadrillería que acreditaba su condición.

La lleya anual de 1385 les conceden incluso atribuciones judiciales, en caso de inasistencia de los alcaldes; y en 1459 se les faculta para actuar en los términos de las otras organizaciones federadas, llevando los detenidos al tribunal al que estaban adscritos. Reciben denuncias, efectúan averiguaciones de todo tipo, persiguen forajidos, escoltan reos capturados o sentenciados, protegen convoyes, actúan como correos, efectúan rondas, perciben censos inmobiliarios y rentas pecuarias en ausencia de los cobradores designados por el arrendador de la asadura, ayudan a montar el túmulo en la iglesia de San Pedro, etc.

En plena Edad Moderna es perceptible una doble tendencia: por un lado se extiende dicho nombre a todos los dependientes inferiores de la organización en los primeros tiempos; mientras que durante el Seiscientos se restringirá paulatina y formalmente a los ministros ejecutivos ciudarrealeños, ante la aparición del comisario. Nombrados ahora directamente por el cabildo o por sus delegados²⁵², se trataba de cargos temporales, que debían ser periódicamente renovados por el cabildos para dotarles de continuidad, una vez terminadas las misiones encomendadas.

Ya entonces se habían ido despojando los cuadrilleros de la connotación de jefe de partida, siendo asumido este cargo por los alguaciles nombrados a tal efecto entre los hermanos. Con la aparición del término comisario se intenta diferenciar a aquellos dependientes del tribunal que no gozan de la calidad de hermanos, pero sí de una mayor autonomía efectiva, en razón de su lejanía de los órganos rectores, reservándose el nombre de cuadrillero a los vecinos de Ciudad y de sus aldeas. Tal disparidad de términos es meramente institucional, ya que se mantuvo popularmente el tradicional nombre de cuadrillero a todo individuo adscrito a la Santa Hermandad en calidad de subalterno, como es ostensible incluso en los altos tribunales de justicia regios y la propia administración polisinodial del Setecientos.

Durante siglos, el número de los cuadrilleros estables en el seno de la entidad manchega no parece estar sujeto a ningún cupo, impuesto ni consensuado, siendo los propios recursos corporativos los que lo moderarían, al equipararse su salario anual al de los regidores. Estos funcionarios permanentes se aseguraban del cumplimiento inmediato de cometidos menores y labores auxiliares. Si en 1598 se mantiene un

número relativamente elevado de cuadrilleros²⁵³, a principios del Seiscientos las cuentas rendidas por el mayordomo consignaban la existencia de cuatro "cuadrilleros ordinarios"²⁵⁴, aunque dicho número variará según las necesidades o al arbitrio de los alcaldes, en años posteriores²⁵⁵.

En 1792, a semejanza de lo anteriormente regulado para los toledanos y talaveranos²⁵⁶, el Consejo de Castilla aconseja que el cabildo manchego nombrase anualmente a doce hermanos con calidad de cuadrilleros para efectuar las salidas precisas, ejecutar las rondas, asistir a las ejecuciones de justicia, auxiliar a otras autoridades jurisdiccionales y realizar las diligencias procesales pertinentes. Supernumerariamente se contempla, en estas últimas ordenanzas manchegas, la posibilidad de nombrar cuadrilleros honorarios vitalicios, a semejanza de los tenientes de cuadrillero mayor toledanos, aunque igualmente que los anteriores debían contar con el ineludible refrendo de la Corte.

En cuanto a la condición socioeconómica de los cuadrilleros durante la Edad Moderna, sus efectivos suelen proceder del pequeño artesanado urbano: zapateros, sastres, carpinteros, confiteros, barberos, tejedores²⁵⁷,...- o vinculado a oficios menestrales en las inmediaciones de la ciudad, como la ribera del Guadiana, tal es el caso de bataneros y molineros²⁵⁸; abundan también los dependientes de rentas reales o concejiles, pequeños comerciantes, arrieros, mayorales y pastores²⁵⁹, campesinos con yunta propia, labradores con tierras arrendadas o en propiedad, etc. Se trata, pues, de pecheros generalmente poco sujetos por su trabajo habitual a una ocupación que limitase substancialmente su libertad de movimientos o bien individuos que desempeñan gran parte de su vida activa en el medio rural.

Siempre que el cabildo tenga constancia de excesos e irregularidades de sus cuadrilleros está capacitado para disponer judicialmente de sus personas, bienes y cargo de acuerdo a un código interno de supeditación de sus subordinados a los designios de la superioridad. En mayo de 1610 los alcaldes don Gabriel de Guzmán y don Agustín Ruiz de Fuentencalada ordenan al cuadrillero Francisco Brabo, quien oficiaba como tal al menos desde 1603, que aprontase su título; ese mismo día hace entrega formal del mismo en la sala capitular y el escribano Antonio Velasco de Arriaza lo rompe ante la concurrencia, saliendo bajo fianza a continuación el expedientado del confinamiento en la cárcel hermandina en la que estaba recluso desde hacía días²⁶⁰.

3.3.3. EMPLEOS ENAJENADOS. LOS ESCRIBANOS HERMANDINOS.

Las ordenanzas ciudarrealeñas de 1435 prescribían que la organización debía contar con un escribano que fuese hermano de la propia entidad, percibiendo un salario anual por sus servicios. Como miembro de pleno derecho gozaba de las mismas libertades personales y fiscales que el resto de los hermanados. A fines del siglo XV seguía habiendo un único escribano, elegido bianualmente mediante encanteramiento entre los hermanos con cierta cualificación profesional, recayendo casi siempre en un pechero²⁶¹, aunque el cabildo podía reclamar la presencia de cualquier otro notario siempre que lo considerase pertinente.

La sustitución paulatina del principio de oralidad de parte del proceso y la notable documentación institucional conservada, hacen de estas oficiales piezas indispensables del Santo Tribunal. Todo el cúmulo de privilegios, ejecutorias y cartas reales de la que se iba dotando la Hermandad hacía precisa la colaboración regular de personal que se encargase de copiar fielmente una documentación que por su antigüedad y las condiciones poco idóneas de conservación debían ser transcritas y trasladadas una y otra vez para garantizar su utilización puntual cuando fuese preciso. Si la carta de privilegio y confirmación de 1418 daba validez a todo testimonio hecho por "qualquier escrivano publico o notario, sancristan (sic), cura, theniente, o otra persona que sepa leer y escribir pasando de catorze años de edad"²⁶²; ya en los albores del Renacimiento era condición indispensable de todo escribano el haber pasado un examen que probase su idoneidad para tal oficio. Igual plaza de escribano disponía por

entonces la Hermandad Vieja de Toledo, mientras que en Talavera a mediados del Quattrocientos ya aparecen dos oficiales desempeñando dicha función.

Durante el Quinientos, en el marco del proceso de venalidad de oficios públicos al que hubo de recurrir la Corona para sufragar su política exterior expansionista, tiene lugar el desdoblamiento de la notaría en Toledo y Ciudad Real, poniéndose dichos cargos a disposición de todo aquel que pudiese enajenarlos, fuese o no miembro de dichos tribunales¹⁶³. Aparentemente, esta decisión de duplicar los servidores del cargo era aconsejable para agilizar los trámites procedimentales e institucionales, pudiendo cubrir uno el vacío temporal dejado por su compañero por motivo de enfermedad, ocupación en asuntos personales o en sus frecuentes desplazamientos por cuenta de la entidad. Pero, a medio plazo, ello suponía, potencialmente, dejar asuntos vitales de la corporación en manos de personas en principio desligadas de su estructura orgánica como hermanos.

Las labores llevadas por los escribanos son heterogéneas: asisten en todo momento a los alcaldes y demás oficiales hermandinos; levantan acta de los cabildos; hacen matrícula de los hermanos, presos o bienes secuestrados; acompañan a los cuadrilleros en sus salidas; ante ellos pasa la mayoría de la correspondencia de la entidad con sus dependientes y el resto de las instancias jurídico-administrativas del Reino; escrituran toda clase de documentos, desde poderes notariales a traslados de privilegios, pasando por copias de ordenanzas, autos judiciales, cartas y mandamientos en nombre de los alcaldes; están presentes en la toma regular de cuentas a los mayordomos y son a menudo enviados como representantes hermandinos a cuantas comisiones se demandasen. Estos oficiales guardan los sellos reales, sacan las

impresiones de los títulos despachados, expidiéndolos y refrendándolos.

La calidad del cargo es enajenable por juro perpetuo de heredad²⁶⁴, conllevando la posibilidad para cederlos voluntariamente, a tenientes de su agrado, cuando ellos mismos no lo puedan ejercer por su falta de cualificación profesional, sus múltiples ocupaciones o tratarse de mujeres. Se trata de un empleo renunciable en otro sujeto, previa aquiescencia del cabildo²⁶⁵. La venalidad de dichos oficios, junto con los notables emolumentos derivados del despacho de títulos, suscitaron su auténtico mercadeo por parte de unos titulares que los utilizan como fuente de lucro personal, especulando al alza con los mismos²⁶⁶, dejando su desempeño directo a individuos de cuestionable cualificación profesional²⁶⁷, interesados más en amortizar pronto su inversión que en atender con rectitud los asuntos corporativos²⁶⁸.

En el Seiscientos, durante décadas, su salario anual se mantuvo estable en seis ducados, pero el grueso de sus ingresos provenía de los derechos legítimamente devengados en la escrituración de infinidad de documentos, la asistencia a la toma de cuentas, los derivados de sus diligencias judiciales a cargo del tribunal; y en la centuria siguiente, sobre todo, en el despacho de títulos de comisarios. Mayoritariamente ejercen como escribanos hermandinos los notarios numerarios del ayuntamiento ciudarrealeño²⁶⁹, escribanos de la audiencia eclesiástica²⁷⁰, reales²⁷¹ o de la milicia provincial²⁷². Vestigios de su labor a cargo de dichas plazas, así como de su intensa actividad socioeconómica se conservan en los archivos locales²⁷³.

En pleno siglo XVIII se aumentó en una las dos plazas ya existentes, al albur de los substanciosos ingresos derivados de la

masiva expedición de títulos y comisiones, complicando aún más las siempre candentes relaciones con los hermanos y despertando el descontento de los ya establecidos. A fines del Setecientos se llegó a la fórmula transaccional de consumir el Santo Tribunal uno de dichos oficios y, de los dos a los que se volvían a reducir estas plazas, enajenar una escribanía para cubrir su puesto con un notario de la confianza y designación directa del cabildo, al que se le conceden mayores atribuciones; ambos escribanos debían repartirse equitativamente el trabajo en el despacho de los negocios institucionales, pueden sustituirse indistintamente cuando alguno no se hiciese cargo de los trámites principiados por su colega y tomar rotatoriamente las cuentas al arquero; se regula su salario anual en dieciséis ducados, sus honorarios diarios cuando abandonasen la ciudad por cuenta del tribunal en veintiún reales y se repartirían por igual los derechos por impresión y expedición de títulos tramitados por ambos²⁷⁴.

Habría que esperar a que se consumase la decadencia de la Santa Hermandad para ver a los escribanos relegados a labores meramente burocráticas, que con anterioridad habían extralimitado con creces al exceder su peso específico en la vida institucional lo pretendido por alcaldes y cabildos. Ya a principios del siglo XIX se redujeron a una las escribanías hermandinas manchegas, ahora provista por nombramiento del propio cabildo.

Tampoco en la Hermandad de Toledo se vería nunca con agrado el carácter enajenable de dichos puestos, como lo evidencia el que en 1661 se proyectase reasumir su control directo por parte del cabildo, debido a que al no resultar rentables para sus propietarios, por la inflación del vellón, quedaban los oficios desiertos al hacer dejación

sus titulares de los mismos, estimándose por entonces su precio en treinta y tres mil reales de vellón. Este proyecto no se acometería un año más tarde por estimarse que los mil quinientos ducados del monto de su compra no podían ser asumidos por las maltrechas finanzas hermandinas²⁷⁵.

Al menos desde el Quinientos, parte del trabajo más mecánico y ocasionalmente voluminoso de las escribanías, será descargado en un número variable de oficiales de pluma, escribientes contratados por el tribunal para copiar privilegios, sobrepintas, ordenanzas, mercedes, cuestionarios, cuentas, libramientos, etc, para que aliviase la acumulación de ocupaciones por parte de los notarios hermandinos. Esta labor, ya desde el Seiscientos, sería aminorada con la paulatina introducción de impresiones de algunas de las ejecutorias y privilegios de mayor importancia²⁷⁶; y en el Setecientos se hizo lo propio con muchos de los interrogatorios y los títulos de condemnas²⁷⁷, así como con otros documentos fundamentales de la organización²⁷⁸.

Dada la multiplicación de las diligencias judiciales a las que había de hacer frente los ministros de Hermandad, desde tiempos remotos se impuso la práctica de recurrir a los servicios de cualquier otro escribano que fuese requerido a ello, siéndole obligado estar disponible. Como era inevitable, fue más frecuente su concurso a medida que nos alejamos de la cabeza de la Santa Hermandad, asumiendo su tribunal la remuneración íntegra de su trabajo, previa acreditación de una relación de gastos sobre el mismo ante el mayordomo.

3.3.4. PERSONAL DELEGADO: COMISARIOS Y MINISTROS RECEPTORES.

El término comisario, aplicado a los representantes hermandinos dependientes de la corporación manchega, sería probablemente adoptado en las postrimerías del Quinientos, siendo utilizado indistintamente dicho vocablo junto al de cuadrillero hasta bien avanzada la siguiente centuria.

Los primeros comisarios, caracterizados con este nombre a principios del Seiscientos, eran individuos que habían sido objeto de algún atropello o sus apoderados²⁷⁹; personas de confianza de los hermanos afincados cerca de donde se producían los desmanes²⁸⁰; sujetos que por sus ocupaciones estacionales o permanentes precisan de tales nombramientos para su propia seguridad y la de sus haciendas²⁸¹; hombres económicamente vinculados a la corporación²⁸²; en definitiva, quienes estuviesen interesados por cualquier motivo a estar amparados por el fuero hermandino y contasen con la aprobación de su ingreso por parte del cabildo, siendo su proliferación producto de la paulatina expansión territorial de sus miembros.

Solían ser miembros del estado llano, curtidos por la vida en el campo, a menudo iletrados y casi siempre hombres maduros con cierta experiencia²⁸³ y arrestos para desempeñar diligencias judiciales ejecutivas, no faltando los guardas de campo y los escribanos locales²⁸⁴.

Su condición, acreditada mediante una cédula manuscrita signada por alcalde y escribano, tendría una condición temporal, finalizando su

validez automáticamente con la ejecución de la misión encomendada. Pero, probablemente ante el recurso continuado a los mismos individuos²⁶⁵, se pensaría en dotarles de un carácter más duradero. Pronto surgirían los primeros problemas, al recaer algunos nombramientos en personas de dudosa reputación y por proceder²⁶⁶, debiendo de intervenir el cabildo para poner coto al inmoderado despacho de credenciales, al prescribirse ambiguamente que

"...los alcaldes que salieren desta Santa Hermandad antes de entregarles las barras de justicia como juran de guardar justicia juran asimismo de no dar comisiones desta Santa Hermandad a ninguna persona vecino ni forastero si no fuere en las causas pendientes o causas que fueren subreptiendo..."²⁶⁷.

En 1611 ya se utilizaba por la entidad manchega el apelativo de juez o comisario²⁶⁸ originariamente para diferenciar al delegado hermandino investido de determinadas atribuciones jurisdiccionales corporativas de manera más o menos permanente, del mero comisionado por cumplimiento eventual servicios operativos, y luego en el último tercio del Siglo XVIII para designar a los dependientes residentes en la población que albergaba al Santo Tribunal.

El respaldo institucional a la figura del comisario procede de la Real Chancillería de Granada -escenario donde frecuentemente se diraman los conflictos en los que se hallan involucrados ministros hermandinos o la propia corporación apícola-, cuando el 27 de abril de 1701 expidió real provisión en la que se reconocía a la Santa Hermandad Vieja manchega la capacidad para delegar su instituto jurisdiccional y fuero privativo en los individuos de su satisfacción, exortándose al resto de las justicias a que respetasen y amparasen a sus ministros²⁶⁹.

Por: saberes de los requisitos a cumplimentar por estos sujetos, aunque presumiblemente se les exigiría la presentación de un memorial donde se especificasen sus datos personales y familiares, atestiguando ante el cabildo su buena predisposición a servir al Santo Instituto²⁹⁰. A partir de ese momento, dicha organización ampararía todas las diligencias inherentes a su ministerio, haciéndole partícipe de las franquicias honorífico-profesionales de las que gozaban los hermanos. Ante la pasividad, cuando no connivencia, de la Corona, la expansión del radio de acción territorial de la Hermandad Vieja era un hecho consumado a principios del siglo XVIII dotándose al Tribunal manchego de poder nominal para extender sus tentáculos a todos los rincones de la Monarquía Católica. El vacío creado por la inoperante Hermandad General y por los atomizados caballos de la sierra, compensó indudablemente la captación de personal residente en aquellas lugares donde se pretendía establecer el instituto manchego: era una zona de donde procedían las solicitudes de ingreso, atraídas tanto por los notables privilegios que comportaban dicho status como por el supuesto espíritu de servicio al bien público que nominalmente poseían animar a la mayoría.

De esta forma, se logra el concurso de un nutrido número de pretendientes que, teniendo la estimación y confianza de sus paisanos, concedores de la zona, y permanentemente a disposición de los mandatos emanados desde Ciudad Real, aportasen una mayor eficacia e inmediatez a las diligencias hermandinas. Estas ventajas, ciertamente apreciables, no estaban exentas de inconvenientes: su proliferación podía indisponerles tanto con las autoridades locales como con sus convecinos; su autonomía, pese de las reiteradas disposiciones recordando la debida subordinación a sus superiores inmediatos propiciaba abusos e irregularidades, y los celos despertados en

aquellos lugares donde nunca había sido conculcada la jurisdicción ordinaria eran inevitables al alterar, potencialmente o de facto, el delicado equilibrio de fuerzas existente, celosamente salvaguardado por los poderes lugareños.

Estos dependientes de la Hermandad Vieja de Ciudad Real, serían denominados en el Setecientos, a tenor de su calidad estamental o profesional, como jueces comisarios, jueces comisarios y ministros superiores²⁹¹, o ministros receptores. El nombre de cuadrillero, reservado por entonces a los hermanos destinados a labores ejecutivas, cumplen por encargo del Santo Instituto similares misiones en las armediaciones de la capital manchega que las encargadas a estos representantes hermandinos, pero la mayor tradición del término cuadrillero acabará imponiéndose para designar a unos y otros en fechas posteriores²⁹².

El juez comisario goza de las prerrogativas inherentes al fuero delegado del que disfruta, estando facultado para prender, embargar, vender y escoltar a los reos de hermandad ante sus superiores jerárquicos; uniendo a estas labores ejecutivas la de instruir, a instancia del tribunal o por razón de su oficio, cuantas acciones judiciales y extrajudiciales estimase convenientes para cumplir con las misiones que se les encomendaba, incoando causas criminales, ratificando testigos, recogiendo informes sumariales, etc. El ministro superior suma a estas competencias la de poder, a instancias de los alcaldes, substanciar el proceso hasta el grado de remitirlo a Ciudad Real para su determinación y sentencia; coordinar la labor de los jueces comisarios de su comarca; defender y prestigiar la jurisdicción del Santo Instituto; etc. Los ministros receptores suelen ser notarios públicos titulados que se incorporan a la estructura

periférica de la corporación apícola para lucrarse en el desempeño de las funciones propias de su cualificación profesional.

Dichos comisionados están capacitados para usar armas, ofensivas o defensivas, mientras oficien por cuenta del tribunal; aunque, de hecho, pretextando la defensa de su persona y su carácter preventivo solían portarlas en la mayoría de las ocasiones, este privilegio sería restringido o ampliado a tenor de las circunstancias generales de la Monarquía. Los ministros superiores pueden llevar vara alta o bastón de justicia, como miembros de una de las jurisdicciones reales especiales; estando unos y otros sujetos a la preceptiva colaboración con el resto de las justicias y las autoridades públicas del Reino.

Sus actuaciones deben arreglarse a las comisiones despachadas desde la sede del tribunal. Para evitar malentendidos era preceptivo acreditar su título y privilegios ante la justicia de su distrito, repitiendo esta formalidad cuando entrasen en jurisdicción ajena, aunque sin estar obligados a presentar autos ni despachos secretos. Se excusaba de este trámite si se presumía el fracaso de su diligencia, por la fuga del perseguido, cohecho de las autoridades locales o en caso de delito flagrante, en cuyos supuestos primero ejecutaría las acciones pertinentes para cumplir su labor y luego efectuaría la debida presentación de respetos a la justicia de la localidad, informando de inmediato a los alcaldes de lo acontecido, so pena de privación de oficio y privilegios, y de la sanción arbitrada según la gravedad del caso. Cuando llevasen ante sus superiores reos e incautaciones, deberían justificar los desembolsos ocasionados para que les fuesen reintegrados sus gastos, asignándoseles honorarios acordes al servicio prestado.

Las formalidades de ingreso como comisarios eran los siguientes en el Setecientos: el pretendiente, personalmente, mediante procurador o a través de un memorial escrito, presenta al cabildo su solicitud de la concesión de un determinado título generalmente los de juez comisario o de ministro superior²⁹³, para lo cual desde 1715 había de responder al vigente cuestionario estipulado por la Santa Hermandad, al cual habría de ceñir la información de sus calidades y cualidades.

Rematada copia de dicho formulario, autenticada con la rúbrica del escribano hermandino más antiguo y sellado con el sello real, el aspirante primero y sus testigos después, harán presentación y aval de los méritos familiares y personales del pretendiente ante las autoridades locales -bien algún alcalde ordinario o mayor, corregidor, tribunales superiores e incluso ante algún miembro de la corporación manchega-. El escribano público consigna los datos personales del aspirante, incluyéndose el auto de aprobación de la justicia del lugar informando sobre el interesado y sobre la autenticidad de los testimonios prestados por personas fidedignas; tras 1740, todos los informes incluyen una reseña del procurador síndico general asistente al acto, citando y ratificando a los testigos, dando su opinión sobre la necesidad de la concesión del título requerido al candidato, igualmente desde entonces se hace obligatoria la inserción de fe bautismal, debidamente autenticada de su bautismo, o de su hidalguía si pretende la plaza de ministro superior, según lo dispuesto en julio de 1754.

Una breve nota, normalmente en el margen superior izquierda del informe original en el folio que lo encabeza, señala la fecha en que se libró el título correspondiente, precedida a veces de un escueto "despachose". "se despacho" o "sentado". Esta acotación suele aparecer

ocasionalmente en el reverso del último folio del memorial, incluyendo el nombre del titular y del escribano que tramitó su recepción; tales anotaciones marginales sirven de referencia para su localización en el lugar de su custodia, al quedar visible en su parte superior cuanto el expediente es doblado por su mitad para su archivación²⁹⁴.

La casuística que rodea todo lo concerniente a la tramitación de dichas solicitudes de acceso a un título hermandino es casi tan prolija como el número de expedientes conservados, pero mediante una expurgación de la documentación conservada pueden establecerse las líneas generales por que transcurrió.

Aunque excepcionalmente dos solicitantes pueden presentar información conjunta, generalmente al tratarse de hermanos²⁹⁵, la inmensa mayoría de los expedientes de los que tenemos noticia corresponden a memoriales de méritos individuales. El solicitante raramente se persona ante el tribunal ciudarrealeno para hacer valer su pretensión, salvo si se trata de un transeunte que aprovecha su breve estancia en la ciudad para acelerar su tramitación. En este supuesto suelen ser mercaderes, arrieros, o mayoresales que obtienen título del Santo Instituto para amparar sus intereses personales, obviándose a menudo algunas de las formalidades preliminares requeridas, al presentar informe ante el escribano y los alcaldes de la propia entidad que los expide, acreditando su partida de nacimiento, señas personales y el aval de parientes, criados, paisanos e incluso del personal de la corporación manchega al cual estarían vinculados económicamente²⁹⁶.

Sin embargo, habitualmente, el candidato, ausente de su lugar de vecindad, por ser menor de edad o por confiar sus intereses en

personas más versadas en estas cuestiones, delega en un apoderado para cumplimentar los requisitos expresados en el formulario obtenido. Con poder notarial que validase sus acciones, dichos procuradores suelen ser familiares²⁹⁷, o personas de su confianza con una cierta preparación letrada o con un superior bagaje cultural²⁹⁸.

Más cómodo y asequible es remitir a Ciudad Real, por correo ordinario o mediante algún propio²⁹⁹, un escueto memorial solicitando el envío del interrogatorio reglado por parte del escribano de turno. Este sistema tiene el inconveniente de dilatar ligeramente el tiempo del trámite, aunque el grado de admisión de solicitudes es substancialmente semejante en la mayoría de los casos³⁰⁰.

Los suplicatorios elevados a la corporación muestran el supuesto interés de los otorgantes en contribuir activamente al mantenimiento del orden público, diciendo estar prontos para consagrarse a dejar expeditos caminos y montes de todo tipo de forajidos³⁰¹, aunque no faltan quienes basan su pretensión en la necesidad de salvaguardar sus propios intereses³⁰², algunos de ellos ambicionando expresas muy por encima de sus fuerzas³⁰³. Tales documentos pueden interpretarse, en conjunto, más como un medio de estimular la admisión de su solicitud que otra cosa, siendo la razón última de las mismas el disponer de título que les proporcionase amplias ventajas honoríficas, fiscales y jurisdiccionales.

Tras 1715, en vista del cúmulo de irregularidades suscitadas por la discrecionalidad en el despacho de títulos, incluso a personas indignas de esta merced³⁰⁴, se consensuó un cuestionario articulado en seis puntos en el que se consignaban las calidades y cualidades exigidas, formulario que sería cumplimentado particularizada o

globalmente, pero frecuentemente consignándose respuestas confusas o, cuanto menos, ambiguas. Estas informaciones desarregladas son más frecuentes en los primeros años de vigencia del nuevo sistema y en los lugares de reducida población³⁰⁵. Casi siempre, a la vista de un expediente de este tipo, suele devolverse copia del mismo a su otorgante, insertando un ejemplar del cuestionario al cual debería estar sujeta la contestación, para la cual el aspirante acostumbra a nombrar nuevos testigos por suponer recusados los anteriormente acreditados. Con cierta frecuencia estas declaraciones son sospechosas de ocultar información sobre el linaje o profesión del pretendiente, aunque su tenacidad suele estar culminada con la concesión del nombramiento requerido³⁰⁶.

Normalmente, las respuestas al cuestionario están estereotipadas, limitándose a reiterar solicitante y testigos casi textualmente lo expuesto en el enunciado del formulario, sin olvidar mencionar su valía y méritos.

En cuanto al linaje de los candidatos las contestaciones son prolijas, pretendiendo dejar algunos constancia que

"...dichos sus padres y demas ascendientes y descendientes por una y otra linea son y fueron christianos viejos limpios de toda mala raza de moros, moriscos, indios, berberiscos, negros, mulatos ni de los nuevamente convertidos a nuestra Santa Fe Catholica castigados ni petinenziados por el Santo Oficio de la Inquisición ni por tribunal alguno, y que antes bien an sido y havidos, texido y comunmente reputados por tales christianos viejos..."³⁰⁷

Suele hacerse una breve reseña del estado civil del aspirante, sacando a la palestra a antepasados blasonados con empleos capitulares³⁰⁸; la posesión de algún hábito militar, su adscripción a la Inquisición³⁰⁹; su pertenencia al estamento privilegiado³¹⁰; la ostentación de la

calidad de maestrantes de las Reales andaluzas³¹¹; su vinculación familiar a eclesiásticos³¹²; su condición de colegial³¹³; o la estima alta socioeconómica de sus ascendientes directos³¹⁴. Aquellos que no pueden acreditar títulos ni honores no les queda otro recurso que apelar al origen labrador de su alcurnia; su adhesión inquebrantable al catolicismo³¹⁵; o su valía personal, por su perfecto conocimiento de la comarca³¹⁶, su robusta salud³¹⁷, su instrucción en la lectura y la escritura³¹⁸, su experiencia en realizar capturas de malhechores³¹⁹, su valentía³²⁰, o habilidad con las armas³²¹.

En ocasiones, el deseo de acrecentar las naturales virtudes y calidades del aspirante lleva a algunos testigos a emitir respuestas grotescas desde la óptica actual; así, del madrileño Juan Bonifacio de Santos Fernández se certifica que, aparte de que "trae peluca"³²²,

"...sus padres abuelos parientes y demas de sus antepasados an sido y son criptianos viejos limpios de toda mala raza de judios erejes moros mulatos etiofes y berberiscos y que no son ni an sido de los baptizados dos vezes ni rezien convertidos...y que no an incurrido en mancha que pueda oscurecer ni perjudicar la estirpe y clara genealogia referida y save que el citado Juan Bonifacio es un mozo muy onrado de buenos y criptianos procederes, muy frecuentador del templo divino, y perzeptor de los santos sacramentos mui quieto y sosegado y estraydo de malas compañias, quimeras ni alborotos."

Aunque no con tanta asiduidad como cabría colegirse, hay ejemplos de familiares cercanos de dependientes hermandinos que se incorporan asimismo a la entidad manchega en calidad de comisarios³²³.

La aportación obligatoria de la partida bautismal o de una fe de la misma, refrendada por notario apostólico y un cura párroco, no siempre es acatada con la puntualidad y exactitud requerida³²⁴, adelantándose ante quien escritura el informe edades estimativas por parte de

candidatos, procuradores, testigos y escribanos, aún en el caso de preceder presentación de su partida de nacimiento³²⁵. Aunque en los cuestionarios no se expresa taxativamente que los aspirantes hayan de ser mayores de edad para obtener su pretensión, lo usual es que el otorgante cuente con más de veinticinco años, lo que excusaba de enfrentamientos con las autoridades locales por motivo del reclutamiento militar y porque desde el punto de vista legal sus actuaciones se hallaban muy limitadas³²⁶.

A la segunda pregunta, sobre su limpieza de antecedentes penales, civiles e inquisitoriales, todos niegan rotundamente el haber sido procesados o penitenciados por ninguna corte de justicia civil o eclesiástica del reino, lo que a la postre no siempre resultará cierto³²⁷.

La tercera cuestión hacía referencia a la limpieza de oficios mecánicos, que irrogaban infamia³²⁸, siendo su respuesta una de las principales fuentes de información sobre la extracción profesional y los recursos patrimoniales de los futuros comisarios. La tipología resultante es muy heterogénea: abarcando nobles titulados³²⁹; hacendados rentistas, tenentes de mayorazgos u otros bienes vinculados³³⁰, poseedores de propiedades enajenables³³¹, arrendatarios de explotaciones agropecuarias³³², o acaparadores de censos y juro³³³; sujetos de calidad ilustre³³⁴, individuos que ocupan o han desempeñado oficios concejiles³³⁵ y empleos honoríficos en el municipio³³⁶; trabajadores por cuenta propia, como labradores con tierras y yunta³³⁷, ganaderos³³⁸, labradores que complementan sus magras rentas con el trato de pequeños rebaños³³⁹, arrieros y trajinantes³⁴⁰; mercaderes con tienda estable³⁴¹, o itinerante³⁴², mancebos de tienda³⁴³, participantes en la Carrera de Indias y

traficantes de productos coloniales³⁴⁴, fabricantes de géneros textiles que comercializan dichos productos³⁴⁵, y proveedores³⁴⁶; empleados por cuenta ajena, como mayoresales³⁴⁷, sirvientes³⁴⁸, braceros³⁴⁹; contadores³⁵⁰, administradores³⁵¹, o recaudadores³⁵²; guardas de campo y ministros de las rentas reales, señoriales o eclesiásticas³⁵³; escribanos de diversa condición³⁵⁴; miembros de la administración de justicia local, territorial o central³⁵⁵, alcaides de fortalezas³⁵⁶, oficiales del Honrado Concejo de la Mesta e individuos relacionados de alguna forma con dicha organización ganadera³⁵⁷; sujetos sin ocupación laboral concreta³⁵⁸; combatientes desmovilizados³⁵⁹, milicianos y militares en activo³⁶⁰, un largo etcétera que incluye profesiones tan variopintas como maestros de obras, arquitectos³⁶¹, maestros albañiles³⁶², carpinteros³⁶³, canteros³⁶⁴, carreteros³⁶⁵, médicos³⁶⁶, impresores³⁶⁷, armeros³⁶⁸, maestros de primeras letras³⁶⁹, tejedores³⁷⁰, personas relacionadas con la marina mercantes³⁷¹, abogados³⁷², escribientes³⁷³, artistas³⁷⁴, boticarios³⁷⁵, capataces de galeras y arsenales³⁷⁶, veterinarios³⁷⁷, muchos de los cuales resultan en principio sorprendentes para solicitar título tan potencialmente peligroso, lo que confirma el uso meramente honorífico y de promoción social que para la mayoría de ellos tiene dicho nombramiento³⁷⁸.

A pesar de mantenerse prácticamente durante todo el siglo XVIII la descalificación para cuantos solicitantes fuesen cortadores, venteros, mesoneros y otros de los denominados mecánicos, y por lo tanto legalmente viles, el rechazo por parte de la entidad manchega a tales aspirantes nunca llegó a ser tan taxativa como presuponían sus formularios reglados, ya que la complicidad de testigos y escribanos locales o el silencio, tal vez interesado, de las autoridades de su vecindad encubrían muchas de estas situaciones, no siendo extraño que

obtuviesen el título pretendido³⁷⁹. Tales abusos motivaban las quejas de sus paisanos y de los representantes del común, agraviados por verse eximidos de los impuestos individuos descalificados socialmente, pues al regir el sistema de encabezamientos y derramas se distribuía la misma carga en menos contribuyentes³⁸⁰; preocupaban al Consejo de Castilla, caja de resonancia de los descontentos por la proliferación de exentos³⁸¹; y suscitaba el profundo malestar de los miembros más eminentes de la Hermandad, al verse equiparados en dignidad y honor a personas indignas de tales privilegios³⁸², a pesar de lo cual sólo en situaciones extremas incomoda a la corporación ciudarrealena, sumida en la indolencia al respecto cuando no directamente responsable de tales irregularidades.

Excesos tan manifiestos son habituales en la primera mitad del siglo XVIII, aunque en fechas posteriores tampoco serán completamente erradicados. Era sumamente difícil comprobar plenamente la veracidad de los informes contenidos en todos los expedientes recibidos, confiándose tal labor a las autoridades locales; una supervisión directa de los mismos hubiese requerido la aplicación a tales controles de la mayoría del personal hermandino³⁸³, así como la total colaboración de cuantos participaban en las informaciones.

El cuarto punto del formulario no consignaba que se especificase el origen de sus ingresos económicos, sino que asegurasen tener suficiente caudal para mantener caballo y armas. Las respuestas suelen ser ambiguas dentro de su contestación afirmativa; todos aseguran contar con el estipendio suficiente para ello, pero la mayoría no admiten tenerlas en posesión, mientras que otros se extienden en enaltecer su hacienda y méritos³⁸⁴, pudiendo eventualmente expresarse ambas al asegurarse de su casa que "nunca se alla sin humo"³⁸⁵.

Con el auto acordado de 1740, se estableció que los candidatos debían acreditar su lugar de nacimiento, la vecindad de la que se compone y si hay otros ministros de la Triple Hermandad. El primer requisito ya venía siendo observado escrupulosamente, aunque era irrelevante si lo que se pretendía era controlar la racional distribución geográfica de los comisarios por todo el Reino; pero en cuanto a la estimación de su vecindad, los errores de bulto se suceden al ser malinterpretada la pregunta, dándose indistintamente las de su lugar de origen, la de la villa de su residencia -lo que hubiese sido más lógico-, ambas o ninguna³⁸⁶, testimoniándose a menudo cifras aproximadas casi siempre al alza para evidenciar la necesidad de su concesión³⁸⁷.

De particular interés para nuestra investigación serían las referencias sobre la distribución espacial de los dependientes de las Hermandades Viejas derivadas de estos testimonios³⁸⁸, pero a menudo las respuestas son decepcionantes por su oscuridad, tal vez voluntaria. Sólo así pueden explicarse algunos expedientes que omitan el dato, o el que incluso en localidades pequeñas se aseguren no saberse si había o no otros individuos con la calidad ambicionada, en parte justificada por la dispersión en casa de campo de algunos de ellos, aunque si permiten hacernos una idea aproximada de la presencia hermandina en áreas geográficas distantes de los tribunales apícolas. Al no estar nítidamente claro a qué Santa Hermandad, si Vieja o General, debían ceñirse los informes, algunas autoridades lo interpretan consignando el sistema de proveer los empleos de justicia del concejo³⁸⁹.

Levantada la prohibición a los toledanos que les impedían tener dependientes al sur del Tajo y en la capital del Reino despachada en 1762 y confirmada en 1774, el 27 de septiembre de 1786, el Consejo de Castilla procede a la tramitación de auxiliorias a sus dependientes ya nombrados³⁹⁰, sin respetarse circunscripciones algunas

"...en las ciudades villas y lugares de su distrito como tambien en esta Corte y en los pueblos de los montes propios de Toledo del Tajo alla con tal que no puedan expedir titulos algunos para aquellos pueblos donde hay ministros de alguna de las otras dos Hermandades de Talavera y Ciudad Real..."³⁹¹

Las solicitudes presentadas ante el Tribunal manchego demuestran la existencia de dependientes de la corporación de Toledo en el ámbito actual municipal ciudarrealeño, aunque en su mayoría se trata de tenientes de cuadrilleros mayor, desprovistos de cualquier tipo de atribuciones jurisdiccionales³⁹²

Hay una cierta confusión, no sobre el origen o naturaleza de los solicitantes, sino en el momento de especificar su lugar de vecindad, aludiéndose eventualmente a su condición de residente o de estante. Asturianos y gallegos aluden a feligresías; castellanos, andaluces y extremeños a pueblos y villas; levantinos a universidades, y unos y otros a ciudades. La unidad administrativa superior suele ser el partido, como circunscripción civil, y el obispado, en el ámbito eclesiástico.

Parece haber una voluntad, por parte de algunos candidatos, a realizar sus informes desde otras villas distintas a la de su vecindad, seguramente para evitar que enemistades y envidias de sus paisanos, eludir cualquier referencia a la existencia de otros comisarios en la población de origen o bien ocultar la escasa calidad

de sus antecedentes familiares u ocupacionales que esturbiasen dichas diligencias³⁹³.

El espectro geográfico de los aspirantes es amplísimo, caracterizándose por la enorme movilidad de sus efectivos. Se trata mayoritariamente de gallegos, asturianos, leoneses y montañeses afincados en la Corte o en las grandes ciudades y puertos vinculados a la Carrera de Indias; o bien andaluces, manchegos, castellanos y extremeños avecinados en las mismas localidades que los vieron nacer o el lugares próximos. En la primera mitad del Setecientos son relativamente frecuentes los pretendientes castellanos, normalmente habitantes de los grandes núcleos poblacionales de la meseta norte. Los aspirantes de fuera de la Corona de Castilla son muchos menos numerosos, la mayoría en las primeras décadas de la centuria, tratándose por regla general de comerciantes o artesanos cualificados obligados a realizar desplazamientos periódicos, así como labradores baseñados o ganaderos que suelen habitar en casas de campo; este pequeño contingente se concentra alrededor de las grandes ciudades como Pamplona, Alicante y Valencia, siendo sumamente raros los pretendientes catalanes. Igualmente, en menor medida, se contabilizan aspirantes franceses³⁹⁴, piamonteses³⁹⁵, portugueses³⁹⁶ y florentinos³⁹⁷, naturalizados castellanos, que suelen ser militares desmovilizados o artistas itinerantes, circunscribiéndose sus movimientos a los grandes polos comerciales andaluces y castellanos. No consta que se despachase título alguno a sujetos establecidos en las posesiones insulares de la Monarquía; de Indias solo tenemos noticia de la admisión como comisario, en 1709, al gallego Francisco de Ante, natural de San Salvador -aldea del arzobispado de Santiago de Compostela-, residente en Santiago de Cuba, en el virreinato de Nueva España³⁹⁸.

En principio, era el solicitante quien daba sus señas físicas y datos personales para su inserción en el título pretendido, aunque tampoco era infrecuente que algunos testigos hiciesen lo propio. El cuestionario de 1754 prescribía que se encargase de cumplimentar este trámite el notario público ante el cual se hacía la información, aunque no por ello los declarantes dejarán de hacerlo. La descripción física suele ser minuciosa, centrándose en los detalles peculiares del candidato³⁹⁹, lo que nos proporcionan interesantes datos antropométricos⁴⁰⁰, y nos muestran a gran parte de ellos con determinadas secuelas de enfermedades pasadas o taras físicas que incluso podrían haberles privado de su pretensión⁴⁰¹.

Al no estar fijado el número de testigos que debían presentarse, y a los cuales el escribano ha de leerles el formulario, lo normal es que concurren de tres a cinco declarantes varones, mayores de edad, a menudo convecinos, amigos o conocidos, casi nunca parientes y a ser posible de contrastada preeminencia social, como capitulares, escribanos, letrados, clérigos, hombres de armas, etc. Quienes no podían recurrir a éstos no dudan en presentar el aval de sus colegas gremiales e individuos de la más variada condición. Dichos informantes dan testimonio jurado de la veracidad de sus respuestas, encabezando su declaración con el nombre y vecindad y mencionando al final su edad, complementando esporádicamente estos datos comunes las referencias a la collación o parroquia donde habitan. Dentro de esta tipología, dichos expedientes están conformados por los testimonios de uno a más de una docena de declarantes⁴⁰², a veces familias enteras, cuyas edades oscilan entre los menores de edad a los más ancianos⁴⁰³, y cabe reseñar la existencia de una mujer entre los declarantes en un único caso⁴⁰⁴.

En cuanto al resto de las formalidades de la solicitud, lo usual es que corregidores, alcaldes mayores u ordinarios refrenden la información. Los aspirantes granadinos la realizan ante la Sala del Crimen de la Real Chancillería, los sevillanos ante la Real Audiencia y los madrileños en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. En las poblaciones pequeñas, no es extraño que se cumplimentasen por parte de las autoridades locales; la incomparecencia o inexistencia de procurador síndico general suele ser solventada con la asistencia de algún regidor, alcalde ordinario, el escribano del lugar, e incluso de su alcalde pedáneo⁴⁰⁵, que abonase la solvencia de los testigos y corroborasen su veracidad, dando informe secreto sobre los pretendientes, bien desde su localidad de vecindad o en su cabeza de partido si se trata de una aldea. En ocasiones muy concretas este trámite inexcusable corre a cargo de sujetos de reconocido ascendiente socio-profesional⁴⁰⁶.

Aunque es práctica universal que el informe se remita por el propio solicitante, o su apoderado, hemos de citar el caso curioso de un informe ajustado presentado por los padres de un aspirante, Francisco Rubio López, guarda mayor del granadino Real Soto de Roma en Santa Fe, entre 1756-1757, que precede al de su verdadero destinatario⁴⁰⁷.

Antes de la implantación del sistema de cuestionario reglado, no es excepcional que se consigne el incumplimiento de las formalidades requeridas para la obtención del título, lo que no suele ser óbice para su concesión siempre que la calidad del candidato o lo imperioso de su concurso así lo aconsejasen⁴⁰⁸, y con relativa reiteración algunos trámites se dejan para mejor ocasión, como la concreción de las señas personales⁴⁰⁹ o, más raramente, sus apellidos⁴¹⁰.

Eventualmente los testimonios presentados incurren en una falta manifiesta de concordancia⁴¹¹, existiendo errores de pluma⁴¹², achacables tanto a su impericia como a la falta de profesionalidad de algunos de ellos.

En una minoría de los expedientes conservados se incluyen noticias sobre choques jurisdiccionales de otros comisarios de la zona, recomendaciones, advertencias u otros tipos de avisos que se consideran inexcusables el hacerlos llegar a la sede del Santo Tribunal⁴¹³, aprovechando el cauce de los memoriales remitidos por los aspirantes. El expediente era remitido a Ciudad Real mediante el correo ordinario o, más frecuentemente, utilizando los servicios de un amigo o conocido de confianza, como arrieros, tratantes o clérigos³¹⁴.

La tramitación de las solicitudes, desde que se expide el interrogatorio hasta la obtención de dicha merced o su denegación, suele tardar del orden de uno a tres meses, aunque algunos llegan a superar el medio año hasta que el cabildo se pronuncia, e incluso un tiempo superior en determinadas circunstancias⁴¹⁵. Hay casos probados en los que trata de estimular la agilización de dichas diligencias por medios más o menos lícitos⁴¹⁶. En todo caso, se recomendaba y prefería que no se dilatasen excesivamente la gestión de las solicitudes, para evitar que pudiera haberse modificado la actitud del pretendiente o cambiado su hacienda y el resto de las calidades acreditadas⁴¹⁷.

El nombramiento puede hacerse llegar al aspirante agraciado convocándose a la propia sede del Santo Instituto o bien enviándoselo a su localidad de residencia o a las poblaciones cercanas donde lo recogería de manos de alguna persona de toda solvencia designada por la corporación manchega⁴¹⁸. Salvo excepciones, debidamente anotadas,

se abonaría su importe contra reembolso o anticipándose su monto al escribano correspondiente en calidad de gastos de notaría e impresión de formulario, título, privilegios, ordenanzas y registro en el libro de comisarios. En circunstancias muy concretas, no se exigirán dichos derechos⁴¹⁹, o se pospondría su cobro⁴²⁰. En todo caso, su importe depende de variables tan aleatorias como la calidad del beneficiario, el tipo de título expedido -manuscrito o impreso-, los autos que lo acompañan, la dignidad concedida, la lejanía del aspirante y el tiempo empleado en su tramitación. A la arbitrariedad de esta exacción se suma el hecho de que la cantidad abonada puede ser ocasionalmente entregada a terceros para que recogiesen los despachos en su nombre⁴²¹, consignándose en cualquier caso en la primera mitad del Setecientos que tales importes eran "ajustables". Para corregir irregularidades y abusos en lo sucesivo, el cabildo manchego de 18 de diciembre de 1755 fijó en doce pesos el coste de la expedición de títulos de ministro superior, y ocho pesos el de juez comisario⁴²².

Atendiendo al soporte físico de dichos títulos, si hasta principios del quinientos se expedirían en pergamino las cartas de cuadrillería, desde esa fecha se iría introduciendo paulatinamente el papel. Desde 1636 ó 1637, aproximadamente, se utilizará normalmente papel sellado en tales diligencias, al introducirse esta gabela olivarista como recurso estatal para aliviar los crecidos gastos de la Monarquía Hispánica. Hasta principios del siglo XVIII los nombramientos serán todos manuscritos, para a partir de entonces introducirse progresivamente los títulos impresos, con las líneas donde debía cumplimentarse a mano el nombre y señas personales de los titulares en blanco⁴²³; de esta forma se facilitaba su lectura, les daba una apariencia más solemne y les dotaba de mayor credibilidad, dificultándose su falsificación. Desde el primer momento fue

demandado y preferido el título impreso, siendo concedido a instancias de los propios comisarios o como recompensa a alguna destacada labor por cuenta del Santo Tribunal⁴²⁴; esta reiterada actitud nos hace pensar en su mayor efectividad, generalizándose su uso a mediados de la centuria.

Es imposible cuantificar con toda exactitud la proporción entre los títulos de ministro superior, juez comisario y de ministro receptor pues no siempre se anota en el expediente original la calidad del nombramiento, aunque el número de los últimos fue en números absolutos exiguo, al caer pronto en desuso. Presumiblemente, el número de jueces superiores debería ser inferior al de los subordinados por razones meramente operativas, pero en determinados momentos esta tendencia podría haberse invertido; así en la portada del libro registro de comisarios de la década de 1730 se asienta la anotación marginal que dice: ~~"se archivaron ciento y veinte títulos, los sesenta de ministro superior y los otros de juez comisario."~~⁴²⁵ En determinadas circunstancias, el juez comisario puede escalar al nivel jerárquico, como recompensa por su celo demostrado en el desempeño de las labores confiadas, logrando del cabildo el título de ministro superior⁴²⁶.

Estos títulos han de ser llevados en todo momento por sus beneficiarios, debido a su ministerio preventivo, debiendo estar siempre prontos al servicio de su oficio y colaborar con el resto de las justicias. Para ello suelen llevarse recogidos y atados con un cordel, guardados en la faltriquera doblemente doblados, o bien protegidos en el interior de una caja o tubo de latón llevada a tal efecto⁴²⁷. A pesar de estas precauciones, de vez en cuando, deben librarse copias del título original por haberlos extraviado sus poseedores⁴²⁸, o al no serles devueltos por las justicias y

magistrados con los que tienen altercados⁴²⁹. En tales supuestos se cumplimentará el despacho de una copia de los mismos, siendo anotada esta eventualidad en el libro registro por el escribano de turno.

Que estos nombramientos llegaron a desprestigiarse, ante la espiral de indiscriminado despacho de los mismos y el descrédito de muchos de quienes los portaban, es buena muestra el alto índice de conflictividad generada por sus detentadores, que hacen exclamar al corregidor jerezano "que solo a hombres de pocas obligaciones se les daban este título"⁴³⁰. Aunque la sujeción de las informaciones a cuestionario reglado propiciaría el mayor control sobre sus destinatarios, lo cierto es que no se practicaba una supervisión minuciosa de las solicitudes, al depender la mayor de los ingresos de los escribanos hermandinos de su tramitación. Únicamente mediado el Setecientos se manifiesta una tendencia, cada vez más acentuada, a elevarse la calidad estamental de los aspirantes, expresión última del carácter honorífico pretendido y que los pecheros, al verse privados del usufructo de los privilegios fiscales, no se sentían interesados en su obtención.

Aunque no hay constancia documental al respecto, seguramente los nombramientos expedidos por la corporación apícola ciudarrealense tuviesen validez vitalicia durante el siglo XVIII, siempre que no fuesen suspendidos expresamente por el cabildo en atención a su irregular concesión o se verificasen acusaciones graves por excesos en su ministerio⁴³¹, lo que no es extensivo al resto de las entidades apícolas⁴³².

Desde el primer tercio del Setecientos no terminaban aquí las diligencias de los ya comisarios hermandinos para disfrutar de su

título. Su nombramiento, contando con la aquiescencia del escribano que lo instruye, aprobado por el cabildo hermandino, y a fines del Setecientos previamente refrendado por su asesor general, debía ser acreditado ante la justicia de su vecindad o ante la de su cabeza de partido⁴³³, para que se tomara constancia de su existencia a los efectos pertinentes.

Por último, ya entrado el siglo XVIII, era preceptiva su confirmación por el Consejo de Castilla. Elevada la petición de provisión auxiliatoria que confirmase el título original remitido a su instancia, el Fiscal recibía los informes de las autoridades de su partido para dirimir su conveniencia o no; tales formalismos podían ralentizar su disfrute en el plaza de meses e incluso años, no garantizándose que llegasen a buen puerto algunos de los nombramientos expedidos desde Ciudad Real, y, en el mejor de los casos, debiéndose de pagar una fuerte suma por ello que ronda los cien ducados.

3.3.5. COLABORADORES NO ADSCRITOS A LA CORPORACIÓN.

Dentro de este nutrido grupo de individuos, con quienes se mantiene una dependencia temporal inorgánica, caben destacar los agentes judiciales en las diversas altas cortes de justicia del Reino; letrados defensores de reos nombrados y sufragados de su propio peculio; apoderados y procuradores eventuales; correos o propios; oficiales de pluma y otros profesionales o paisanos que ejercen labores funcionales a cargo de la Santa Hermandad, y sin cuyo concurso difícilmente podría desarrollarse su vida institucional ni asumirse muchos de sus cometidos jurídico-policiales.

Por su importancia económica e institucional nos centraremos, en primer lugar, en los letrados y delegados hermandinos ante los órganos jurídicos territoriales superiores de Castilla: chancillerías, audiencias civiles o eclesiásticas y Supremo Consejo.

Con los términos de procuradores, solicitadores, y agentes judiciales, se mencionan a los individuos, generalmente letrados, con los que el cabildo guarda coyunturalmente una relación profesional, siendo éstos sus legítimos representantes ante las altas instancias jurídico-administrativas del Reino. La entidad se compromete, contractuálmente, a satisfacer un sueldo anual estipulado, el pago de los derechos devengados debidamente acreditados ante el mayordomo⁴³⁴, y una eventual gratificación por navidad, garantizándose el servicio de unos profesionales altamente cualificados para la consulta de las sentencias hermandinas, elevar memoriales a los Reales Consejos, defender sus franquezas, jurisdicción y libertades en la Corte, y de

cumplir, en definitiva, cuantos encargos se les comunicasen en defensa de los intereses corporativos que encarnan.

Hasta las primeras décadas del Seiscientos, era usual que los procuradores afincados en Granada, estuviesen vinculados de una forma estable a la entidad manchega, percibiendo sus nóminas anualmente por San Juan o con una cadencia superior, que variará entre los dos o tres años. Les serían remitidos a dicha ciudad sus emolumentos o designarían apoderados para cobrarlos en su nombre, remitiendo periódicamente a Ciudad Real constancia de sus derechos por cuenta del Santo Tribunal. Se trata, asimismo, de juriconsultos de la solvencia de Jerónimo Castillo de Bobadilla, abogado delegado de la Hermandad Vieja manchega en la Corte a principios del Seiscientos⁴³⁵; aunque ocasionalmente se utilizan los servicios del asesor hermandino, de algún miembro destacado del ayuntamiento ciudarrealeno, de alcaldes hermandinos e incluso de presbíteros para dirimir pleitos derivados de la percepción de las rentas pecuarias⁴³⁶.

Avanzado el siglo XVII decaerá notablemente la actividad del tribunal manchego, y con ella la presencia de sus representantes estables en estas altas instancias, obviándose incluso la prescrita consulta de la mayoría de sus sentencias penales ante la chancillería granadina.

Tras la guerra de Sucesión vuelve a estimularse la jurisdicción hermandina, y pareja a ella vuelven a destacarse, esta vez de manera esporádica, a representantes de la corporación en Granada y Madrid, para recabar ante la Sala del Crimen el debido refrendo de los veredictos afflictivos y ante la administración sinodial obtener el respaldo a sus privilegios. Desde entonces, y hasta 1780,

aproximadamente, vuelve a hacerse patente la presencia de procuradores institucionales y agentes judiciales ante los Reales Consejos, dada la dependencia de las decisiones centrales del Triple Instituto en asuntos tales como conflictos jurisdiccionales, tramitación de auxiliorias y aprobación de sus estatutos, entre otros.

Aunque el envío de gratificaciones a consejeros, oficiales de los tribunales superiores y a sus apoderados ya tiene precedentes documentados desde principios del Seiscientos, cuando en 1610 se destinaban cuarenta y seis reales de vellón al relator granadino doctor Herrera⁴³⁷; y en 1644 se envía una suma mayor al fiscal de la citada chancillería, licenciado Rodrigo de Mora⁴³⁸, será en la siguiente centuria cuando adquirirán un monto y una regularidad de las que hasta entonces habían carecido. A partir de 1715, los principales destinatarios de los aguinaldos navidenos serán sus delegados en Madrid, como el agente judicial que ese año recibe un cerdo, un botín de vino, o al diligenciero que en 1742 se remite un cebón y tres arrobas de vino añejo; más agraciado fue el agente fiscal ante el Supremo Consejo, quien en 1761, por su valimiento para revocar el interdicto de títulos, un arriero le hace llegar una arroba de chocolate, tres de aceite y otras tantas de vino, cuyo monto importó cuatrocientos cuarenta y seis reales⁴³⁹.

Como los encartados por la Santa Hermandad desconocían las leyes del Reino, era preciso que fuesen patrocinados por sujetos versados en la intrincada legislación vigente, por lo que siempre que la parte acusada podía costear a algún letrado que se hiciese cargo de su parte nombraba a uno o varios procuradores -curadores si se trataba de menores de edad-, y abogados defensores, a menudo más eficaces en el amparo de sus intereses que los asignados de oficio por el tribunal

previa aquiescencia de los reos, de los que se sospechaba su connivencia con el tribunal por el recíproco e implícito intercambio de favores. De esta forma la, casi siempre abreviada y frecuentemente sumarísima, administración de justicia hermandina de épocas pasadas, dejó paso a la asunción del ordenamiento procesal seguido por los tribunales inferiores reales, que intenta garantizar el derecho de las partes pleiteantes y reconocía la presencia de letrados que, aunque dilataban procesos y consumían las rentas de los encausados, ofrecían mayores seguridades.

Su presencia en la audiencia hermandina es extraordinaria, al carecer de recursos suficientes la inmensa mayoría de sus reos. Suelen tratarse de abogados de la ciudad, recomendados desde el mismo Santo Instituto por sus compañeros de infortunio, familiares y deudos, o de acreditada solvencia profesional. Aunque la mayoría de sus nombres han quedado para siempre en el olvido, al no mencionarse en las cuentas de la entidad por no corresponder a ella su acostamiento, sí aparecen en los expedientes criminales substanciados, por lo que sabemos que mayoritariamente se trata de los mismos profesionales que designarían si hubiesen sido sufragados de las rentas hermandinas, ya que recurrir a letrados forasteros encarecía notablemente su valimiento.

El Santo Tribunal era fuente de dispensas y ocupación de letrados, naturales o foráneos. La mayoría de los abogados ciudarrealeños estaban vinculados de una u otra forma a su servicio, extendiendo sus favores a los propios corregidores de Ciudad Real, beneficiándose de su experiencia y prestigio en asuntos de importancia. Así, el corregidor don Diego de Acevedo fue destacado por los colmeneros en 1601 a Calzada de Calatrava para que los vecinos del maestranzo pudiesen quejarse a los alcaldes de Hermandad, recibiendo por ello

cuatrocientos reales⁴⁴⁰; en 1632, fueron librados cien reales a su sucesor en el cargo, el licenciado Marco Antonio de Oviedo, por actuar como asesor en el proceso contra Alonso Herrador y su esposa⁴⁴¹; ocho años después, el ex-corregidor don Pedro Sevil de Oreja percibía doscientos cincuenta reales por su trabajo en el pleito contra unos bandidos "por estar recusado el licenciado Estevan de Torres asesor de dicha Santa Hermandad"⁴⁴²; otro representante regio reforzó una escolta de reos desde Santa Cruz de Mudela hasta Ciudad Real en 1691⁴⁴³; y en 1694 el corregidor don Pedro Fernando de Zurita se ocupaba de las diligencias encomendadas por dicho tribunal⁴⁴⁴.

Magistrados forasteros fueron reclamados esporádicamente por la fraternidad manchega, como un abogado de Torralba -Ciudad Real-, que asume la defensa de tres reos en 1691, comunicándosele su convocatoria por el teniente de alguacil mayor⁴⁴⁵; o como cuando, dos años después, se libran derechos al letrado don Francisco Antonio Abad "en consideración a ser forastero y aver benido a dar los tormentos y averse sentenciado ...y aser los descargos de los gitanos"⁴⁴⁶. Ya en el setecientos se satisfacen los salarios de abogado daimieleño don Agustín Ibáñez, presente en el interrogatorio de un reo⁴⁴⁷, por citar algunos ejemplos.

Las diligencias menores de la corporación, como entrega de despachos, recepción de autos, correspondencia, ratificación de testigos, subasta de bienes incautados, traslado de presos y un largo etcétera, precisaba de la colaboración puntual de una legión de correos, escribanos, oficiales de pluma, carreteros, arrieros, pregoneros, mesoneros, propios y diligencieros, fuesen o no residentes en la cabeza de las Hermandad, que habían de cumplir los encargos

confiados por el cabildo o sus oficiales, recibiendo en razón de su trabajo una compensación adecuada.

En determinadas circunstancias han de contratarse los servicios de un crecido número de profesionales, como los cuatro escribientes que en 1602 concurren al tribunal para sacar traslados de los privilegios y ejecutorias relativas a la percepción de la asadura, por entonces litigada con un miembro de Santo Oficio toledano⁴⁴⁸; o hacerse con la labor mediadora de la calidad del notario inquisitorial Pedro de Velasco, enviado a Toledo para que su Hermandad Vieja dejase cobrar sus derechos sobre el tránsito de ganados en Valdealgodó, hacia 1634⁴⁴⁹.

Igualmente, la entidad genera multitud de puestos de trabajo eventual directos e indirectos, ayudando a sostener económicamente a un nutrido cuerpo de profesionales integrado por empedradores; albañiles; maestros de obras; carpinteros; cerrajeros; tejeros; herreros; esparteros; forjadores; leñadores; pastores; carniceros; tenderos; mercaderes; confiteros; cazadores; cereros; etc, que proporcionan bastimentos para los actos hermandinos, seguridad para sus rebaños, y mano de obra para adecentar sus inmuebles. El correo mayor de la ciudad a menudo sería empleado por el cabildo; mientras que arquitectos, doradores, plateros y escultores harían esporádicos trabajos para la corporación colmenera.

En el primer tercio del Seiscientos, perfectamente caracterizados entre los beneficiados por este empleo generado, pueden reconocerse miembros de las activas comunidades morisca y portuguesa de Ciudad Real. Pertenecen a la primera los mercaderes Bartolomé Baena y Agustín Zafra, quienes en 1602 proporcionaban las cuarenta y tres

libras de pasteles para la colación posterior a la renovación de oficios hermandinos⁴⁵⁰; así como el maestro albañil Agustín de Baena, quien a la postre posee un censo contra la Santa Hermandad Vieja, y que efectuó trabajos de reparación de las cámaras pertenecientes a su cabildo y en los aposentos altos de las tiendas de la plaza pública⁴⁵¹. Tras 1611 desaparece cualquier referencia explícita sobre los mismos, pareciendo ocupar su puesto los judeoconversos y braceros lusitanos: en 1633 se entregaban ocho reales al pastor portugués Manuel Francisco Sánchez "Pierna Gorda" y al, probablemente, también compatriota Francisco García, "el Tieso", propio enviado a Granada para cumplimentar diligencias del Santo Tribunal⁴⁵²; por entonces sirve como cuadrillero el lusitano Juan Rodríguez en diversos asuntos de la corporación, y eran alquilados unos caballos a Francisco Rodríguez, Simón Fernández y Alonso de Monterrosso para conducir a la cárcel a un preso desde Granada y para cumplimentar ciertas diligencias judiciales⁴⁵³.

A la vista de la documentación consultada la desaparición de la unión dinástica de Portugal en el reinado de Felipe IV, truncaron las expectativas de lucro de esa activa colonia en la decadente Ciudad Real del Seiscientos, quedando vacantes oficios tan desconsiderados socialmente como útiles a la república, aunque en épocas posteriores nunca faltaron en la comarca braceros portugueses empleados en labores agropecuarias estacionales.

3.4. TENSIONES EN EL SENO DE LA ENTIDAD.

Una organización de vigencia tan dilatada como la Hermandad Vieja no escapó a los desacuerdos entre sus integrantes, motivados casi siempre por la distribución y modo de proveer los cargos corporativos, o a las inevitables fricciones económicas y personales entre convecinos, tan fáciles de suscitar como difíciles de solventar. Si bien únicamente las primeras pueden considerarse, en sentido estricto, propias de ser consideradas como tales, no hemos querido olvidar las que se escapan al marco institucional hermandino, pero que por sus repercusiones excedían con mucho el ámbito personal para llegar a afectar incluso al devenir cotidiano de la entidad en la que se desenvuelven gran parte de sus vidas.

3.5.1. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA "MITAD DE OFICIOS".

Durante la Edad Moderna, en la Corona de Castilla, estuvo imperante la fórmula transaccional conocida como "mitad de oficios", en virtud de la cual se regulaba una distribución numéricamente pareja de los empleos concejiles entre los estamentos hidalgo y pechero. Este precepto, aunque en esencia seguía dejando el gobierno municipal a la clase rectora por antonomasia, la nobleza urbana, engrosada ahora por los miembros más destacados de un emergente tercer estado, formalmente daba una apariencia más igualatoria a la administración local y actuaba como sistema de compensación social, al dejar paso a miembros de la burguesía emergente aún en ciernes. Este modelo, no prosperó en determinadas ciudades castellanas, donde la plutocracia inmovilista no admitió compartir las prebendas del servicio, como ocurrió en Toledo, Ávila, Ciudad Real, Sevilla, Valladolid, Córdoba, Madrid, por citar algunas de las más importantes poblaciones del Reino⁴⁵⁴.

Un paralelismo de este proceso cual puede trasplantarse a la Hermandad Vieja manchega. A pesar de que las ordenanzas de 1435 y la reordenación de 1485-1486 eran claras al respecto, optando sin titubeos por un reparto proporcional de los oficios rectores, tales directrices quedaron en letra muerta, al no aceptar la oligarquía verse desbancada por sus inferiores jerárquicos estamentales y profesionales.

En los albores del Quinientos era evidente que los cabildos apícolas no se ajustaban a lo dispuesto por Maldonado décadas antes ni a las cartas reales expedidas desde entonces⁴⁵⁵. La tensión entre los

hermanos del estado labrador estalla a comienzos de la década de 1540, cuando los pecheros reclaman más protagonismo en los órganos rectores, solicitando su acceso a una de las alcaldías y al alguacilazgo mayor; la sentencia de la Real Chancillería granadina, pronunciada en grado de apelación el 29 de noviembre de 1541 resulta tajante, señalando que

"...todos los alcaldes y el alguazil mayor de la Santa Hermandad Vieja ayan de ser hijosdalgo de sangre sin que ninguno del estado general pueda ser elegido para siempre jamas antes en caso de faltar persona del estado noble quede vacante y que estos alcaldes sean elegidos de las dos quadrillas que ay del estado noble y que, si por tiempo no huviere quadrilleros del dicho estado que hubiere pasado el qavo de diez años que es el que termina para la reeleccion de alcalde en tal caso puede ser reelegido..."⁴⁵⁶

Se condena al pago de dos ducados de pena de cámara a cada uno de los hermanos pecheros litigantes, pero declarándolos libres de costas⁴⁵⁷.

Una década más tarde, el 16 de abril de 1551, otra ejecutoria de la suprema corte de justicia andaluza se reafirma

"...en que no pudiesen tener los ciudadanos oficio de alcaldes alguacil mayor regidores procurador general ni contador...y en los demas como son regidores mayordomo y quadrillero mayor los avien de obtener los ciudadanos..."⁴⁵⁸.

A fines del Seiscientos vuelve a replantearse esta candente cuestión, al sentirse algunos hermanos agraviados por quedar sistemáticamente apartados de los empleos de responsabilidad orgánica por la hegemonía aristocrática de estos puestos honoríficos, creyendo que el previsible cambio dinástico trastocaría el orden consagrado por la tradición. De esta época se conserva una provisión de emplazamiento para que los alcaldes don Pedro de Cácer y don Luis Dábila, junto a los hermanos hidalgos Alonso Dábila Carrillo y Mateo Ruiz de Guevara, regidores perpetuos de Ciudad Real, se presentasen en Granada para

seguir la demanda interpuesta por los miembros discrepantes de la fraternidad⁴⁵⁹. Los hermanos del estado llano argumentaban que

"... de algunos años a esta parte el estado de cavalleros escuderos de ella contra derecho y en perjuicio de nuestro estado se an apropiado la bara de Alcaldes de la Santa Hermandad Bieja ..., sin observar la mitad de oficios y en la conformidad que se escusa en las Hermandades Viejas de la ciudad de Toledo y la de Talavera hermanas de la desta ciudad..."⁴⁶⁰.

Acusaban a los hidalgos, también, de controlar espuriamente las elecciones anuales, al no convocar a los regidores del estado general, pretextando por ello la nulidad del último acto. Sin duda sus alegaciones no carecían de fundamento, pero desde luego no era reciente la oligarquización de los cargos rectores hermandinos ni en el resto de los tribunales federados la situación era muy diferente a la de Ciudad Real. Pretextando encontrarse enfermo el asesor de la entidad, sería desatendida en primera instancia esta demanda, pero los querellantes no cejan en su empeño y solicitan el nombramiento interino de otro magistrado, como se procedía habitualmente, suspendiéndose mientras tanto las elecciones de ese año. Mateo Ruiz, escribano hermandino, el 7 de septiembre de 1706 certifica que "no consta averse hallado hermano del estado general en ningun cavildo". No hemos localizado el fallo de dicho pleito, con toda seguridad condenado al fracaso al no modificarse el monopolio aristocrático de la corporación en momentos tan delicados como sufría la Monarquía.

En la década de 1770, tal vez por última ocasión, se recrudece la secular lucha por la consecución de oficios y honores, pero desde un prisma substancialmente distinto, al cuestionarse no ya el exclusivismo hidalgo de las alcaldías, prueba positiva de nobleza, sino la patrimonialización de tales dignidades por algunos linajes locales. El fulminante del enrarecimiento de relaciones entre algunos

de los propios caballeros de la Hermandad Vieja tiene lugar hacia 1770, cuando don Álvaro Maldonado Treviño presenta memorial ante el Supremo Consejo informando de serias irregularidades en el seno de la organización manchega, siendo el motivo de fondo el verse despojado de una de las varas de alcalde, nombrando como apoderado al familiar del Santo Oficio Agustín de la Madrid⁴⁶¹.

El 29 de enero de 1773, Agustín de Madrid hace llegar al ayuntamiento capitalino, del cual es síndico del común, la denuncia de la perpetuación de las alcaldías en dos o tres familias, viéndose apartado el estado llano del principio de la "mitad de oficios", solicitando que con los propios de la ciudad se promoviera la causa ante las instancias competentes que dirimiesen el asunto. Deliberado el caso por el cabildo concejil del día siguiente, los capitulares -algunos de los cuales tenían la doble condición de hermanos y muchos de ellos deudos del patriciado urbano-, debaten el asunto manifestándose una clara voluntad de votos en el momento de proceder al escrutinio nominal⁴⁶².

De nuevo fracasan las diligencias, pero poco después Agustín Pérez de Madrid entra a formar parte de la Hermandad como ciudadano, ocupando el cargo de cuadrillero mayor entre 1793 y 1795, y el de regidor hermandino entre 1793 y 1796. Dada la calidad del contendiente, la Hermandad hubo de plegarse a sus exigencias, y el señor de Galiana ocuparía ininterrumpidamente la plaza de alcalde entre 1776 y 1779, tras haber comprado, a fines de 1772, una de las escribanías enajenables del Santo Instituto manchego⁴⁶³.

A estas alturas de la centuria la corporación manchega prefería integrar en su seno a las voces discordantes antes que hacer frente a

una polémica pública que llegase a oídos de un Consejo de Castilla, donde se estaba decidiendo su futuro. Esta actitud es producto de una posición conciliadora derivada de la debilidad institucional más que de la convicción profunda de que algunos miembros más significados, integrantes innatos de la clase dirigente, cuestionasen la viabilidad de la propia asociación. No se pretendía acabar con la entidad dispensadora de honores y privilegios, sino incorporarse a ella para gozar de sus preeminencias, una actitud social muy extendida.

3.5.2. LA CUESTIÓN DE LAS ESCRIBANÍAS ENAJENADAS.

Impuesta por la secular penuria de la Corona para afrontar empresas superiores a sus fuerzas, se recurrió a la enajenabilidad de determinados oficios institucionales bajo la fórmula de ser asumidos en primer lugar por el rey y luego vendidos por juro de heredad al mejor postor. la incorporación de ambas escribanías hermandinas ciudarrealeñas a esta calidad, que en el siglo XVIII se extendía a veinte en la capital manchega⁴⁶⁴, sentaba las bases para que se escapase del control directo de sus miembros rectores uno de los resortes de poder que se configurarían como esenciales en su seno.

La entidad homónima toledana, que a principios del Seiscientos disponía de otros dos escribanías enajenadas, proyectaba en 1606 reducirla a la plaza única tradicional, reasumiendo su jurisdicción sobre el cargo para que fuese cubierto directamente por su cabildo⁴⁶⁵; pero en 1681 aún estaba pendiente de ejecución esta pretensión que sólo la cuantía de su asunción demoraba.

No sabemos si el proceso es extrapolable a su homónima de la Ciudad Imperial y de Talavera de la Reina, pero lo cierto es que por lo que concierne a Ciudad Real la capacidad de maniobra de sus dos escribanías excedía con mucho a sus colegas de los tribunales federados; por ejemplo en Talavera probablemente nunca gozaron sus notarios de los derechos sobre el despacho de títulos que tanto lucraban a los escribanos ciudarrealeños.

Consecuencia de las severas recriminaciones vertidas por el Consejo de Castilla contra la organización manchega, en mayo de 1733 una representación de la mayoría de sus hermanos, realizada ante el escribano real y numerario del ayuntamiento Eugenio Peñuelas de Dueñas⁴⁶⁶, pone de manifiesto los notables desarreglos derivados de la indiscriminada expedición de nombramientos de comisarios, ignorando incluso los trámites previstos. Aludidos directamente, los escribanos hermandinos, Mateo Ruiz Carneros y Jacinto García Prieto, esperan a la conclusión del mandato de los descontentos y en vista que se mantenía el disenso, el 2 de octubre del citado año manifiestan ignorar las maquinaciones hechas a sus espaldas, estar agraviados por el despojo de sus atribuciones -al quedar custodiado el libro capitular en el archivo de la entidad y por no concederles audiencia en Ciudad Real ni en la Corte-, decidiendo nombrar procurador ante los Reales Consejos que defendiera sus legítimos intereses.

No se mostraría demasiado hábil dicho diligenciero, ya que el 5 de noviembre siguiente el Fiscal del Supremo Consejo recordaba que estaba sin resolver el antiguo expediente general sobre el arreglo del Triple Instituto, y aconseja que se desposeyese a los detentadores de las escribanías manchegas los sellos reales de la asociación apícola⁴⁶⁷. Una semana después por real decreto se prescribía que sus alcaldes recogiesen los citados sellos, así como todos los títulos de comisarios, impresos o manuscritos, pasando esta documentación al archivo hermandino, suspendiéndose temporalmente el despacho de nuevas acreditaciones y dando cuenta de ello a Consejos, Hermandades Viejas y Audiencias del Reino⁴⁶⁸. Un nuevo auto del Consejo de Castilla, tres días más tarde, confirmaba el anterior decreto, y ordenaba al cabildo ciudarrrealeno que debía reunirse mensualmente para examinar las

solicitudes regladas de ingresos como comisarios, y dar de ello debida cuenta a Madrid.

Los hermanos, mientras tanto, pretenden forzar la situación con una política de hechos consumados que acabase con esta supeditación corporativa a los intereses de sus escribanos. El domingo 14 de febrero de 1734, tras los recientemente instaurados oficios divinos en el monasterio de San Francisco, se juntan en la sala capitular del Santo Instituto pretendiendo hacer tanteo de las dos escribanías enajenadas. La respuesta de los titulares cuestionados no se demora, y de inmediato Jacinto García Prieto deslegitima este acto, alegando que dichos oficios no habían "en tiempo alguno residido en la Hermandad Vieja su cavildo ni juzgado la pertenencia de ellos", por haberse efectuado en día feriado y no cumplir las solemnidades requeridas, como su asentamiento en el libro de actas, protestando por haberse inmiscuido el notario concejil Lorenzo de Almansa en los asuntos internos de la Santa Hermandad⁴⁶⁹.

El 19 de febrero siguiente, una representación de la entidad achaca dos fugas recientes de los reos de la entidad a la impericia de los escribanos, quejándose de las dilaciones de las causas criminales, al abandonar la ciudad sus titulares para atender asuntos particulares, sin preceder licencia del tribunal, y auspiciar la concesión de títulos incluso a facinerosos⁴⁷⁰. En marzo, el Consejo de Castilla, a instancias de su Fiscal, manda respetar las atribuciones de los escribanos ciudarrealeños, considera ilegal quitarles sus oficios mediante tanteo, y ordena que sus alcaldes se limiten a recoger sellos y títulos⁴⁷¹.

No terminan aquí los conflictos derivados de la peculiar condición de estos empleos. El 20 de julio de 1735, Jacinto García Prieto presenta ante los Reales Consejos un memorial solicitando el aumento a tres las notarías de la corporación manchega, al estar la dos existentes desbordadas por la notable actividad coercitiva del tribunal, requiriendo la asistencia de escribanos ajenos a la entidad ante la ausencia de los tenentes por indisposición, proponiendo que este nuevo cargo tuviese la misma calidad que los ya existentes, e incluso estimando que el precio del mismo sería de unos tres mil reales, no llevando más derechos de los legítimamente devengados por su trabajo. El 27 de agosto siguiente⁴⁷² avalaban algunos hermanos esta propuesta, aunque elevando su precio en quinientos reales más, pues estaban obligados a recurrir a "escribanos extraños que siempre miran las dependencias como propias".

Renovados los oficios en septiembre, como era tradicional, el alcalde entrante don Pedro Treviño se pronunciará contra esta pretensión, argumentando que aunque quienes abonaron la misma eran hermanos de la entidad, no había sido un acto legitimado en cabildo, interviniendo un escribano ajeno a la corporación, mostrándose más dispuesto a reducir las plazas existentes que a aumentarlas.

Según un informe reservado, encargado por el Consejo a Marcos Joseph Parada, esta actitud encontrada "proviene de la desunion que ay entre los caballeros que componen la Hermandad"⁴⁷³, aunque se terminaría dando el fiat a esta nueva plaza.

Las cosas se complican al darse por incobrados los mil doscientos reales de vellón debidos por Antonio de Arenas San Martín, al no hallarse las escrituras de censo que de la notaría ejercida por este

titular poseía el Santo Tribunal⁴⁷⁴. Como la multiplicación de los oficiales redundaría en la disminución de sus honorarios, en 1737 los escribanos más antiguos, Joseph Cordobés Herrera y Antonio de Arenas San Martín, dan procura a don Felipe Muñoz y Prado, agente judicial en Madrid, para que la administración central retuviese la expedición del tercer título de escribano a su pretendiente, lo que parece lograrse temporalmente⁴⁷⁵.

El pleito sigue su curso en la Corte, y ese mismo otoño se procede a reconocer los estatutos y acuerdos capitulares de la entidad manchega, no sin problemas por su mala conservación y las dificultades de su lectura, recogiendo testimonios orales y escritos de los antiguos servidores de las notarías institucionales. En tanto que se dirimía el asunto, el alcalde don Francisco de Cárdenas Treviño se vale de los buenos oficios del notario cuestionado, arguyendo que

"...no teniendo sus títulos privilegio que impide esta merced, ni por número zerrado, ni por ello a este Tribunal ocasionarle aumento de salario por no pagarse a los escribanos mas derechos que los que debengan de sus escritos; aora subzede que el zitado Antonio de Arenas a pasado a bibir a la ciudad de Granada, y por ello no tener este tribunal mas que un escribano...ademas que regularmente se alla enfermo este.."476.

Un año después de haberse remitido dicho informe, se desbloqueará el título litigado y Jacinto García Prieto se verá recompensado con la tercera notaría por su connivencia con los hermanados⁴⁷⁷. Este titular llegará a adquirir una posición comparativamente ventajosa dentro de la organización apícola⁴⁷⁸, motivando alguna tardía represalia por parte de los perjudicados⁴⁷⁹.

En 1768 su viuda venderá el juro de heredad que había disfrutado su difunto marido por cuatro mil cuatrocientos reales a la propia

Hermandad, pagándoles el mayordomo Félix Eugenio de León de los caudales corporativos⁴⁸⁰, de esta forma las plazas se vuelven a reducir a las dos ya existentes desde el Quinientos. De forma tímida, la entidad ciudarreal leña seguía la estela de sus homónimas de Toledo y Talavera; la primera, en sus ordenanzas de 1740 contemplaba la existencia de dos escribanías, pero sólo designaba un notario encargado de lo negocios criminales, provisto mediante votación secreta y con un sueldo anual de quince mil reales; por su parte, en Talavera, sus estatutos de 1747 fijaban en otras tantas las notarías enajenables por juro de heredad existentes, pero dotando sólo de operatividad a una de ellas, y tras 1756 sus cincuenta ducados anuales de salario se suspenderán indefinidamente.

La última ocasión, todavía en el siglo de las Luces, en que manifestaba descontento interno por la corrupción de sus notarios, data de principios de 1779, cuando el procurador síndico general Agustín Pérez de Madrid acuse formalmente al alcalde hermandino don Miguel de Fuentes Veraet de complicidad con el escribano de la corporación, Joseph García Alarcón, para lucrarse con el despacho masivo de títulos y comisiones⁴⁸¹, teniendo aún más gravedad la denuncia vertida por cuanto inculpaba a un hombre de su confianza, o tal vez fuese motivada por eso mismo⁴⁸².

3.4.3. RENCILLAS PROFESIONALES, ECONÓMICAS Y PERSONALES.

Fricciones de todo tipo empañaron esporádicamente la preceptiva armonía entre los integrantes del Santo Instituto a lo largo de su dilatada existencia, la mayor parte de las ocasiones por razones ajenas al marco corporativo al que se hallan vinculados, y por lo tanto generalmente dirimidas ante el corregimiento, fuera de este círculo de solidaridades colectivas.

Las noticias fragmentarias que han llegado hasta nosotros son una buena muestra de los problemas suscitados entre los hermanos de este benemérita asociación apícola, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas rencillas se solventarían mediante acuerdo oral entre las partes involucradas, perdiéndose seguramente la mayor parte de los pleitos civiles y criminales instruidos, y la dificultad de su localización ante el cúmulo de documentación existente. Lo cierto, es que eventualmente es perceptible una cierta tensión entre los hermanados, no ya directamente causada por su adscripción a dicha fraternidad, sino por diferencias de índole económico, profesional o personal.

Sin duda serían los móviles económicos el principal germen de discordia. La primera noticia que tenemos al respecto data de 1667, cuando don Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda nombra procurador en la ciudad para cobrar la deuda contraída por el caballero del hábito de Santiago don Manuel Bermúdez, y reclamada a su yerno, don Juan Velarde y Céspedes, todos ellos hidalgos pertenecientes a la asociación colmenera desde hacía años⁴⁸³.

A mediados de 1726, don Íñigo Salcedo Treviño heredó un mayorazgo con vínculos en Alhama, Vélez-Málaga, Jaén, Martos y Soria, pero se incluía la cláusula consistente en que no podría enajenar ninguna heredad sin el consentimiento de sus actuales arrendatarios. Entre dichas posesiones se encontraba el quinto de Galiana, próximo a Ciudad Real y desde hacía nueve años bajo arriendo por don Álvaro Muñoz y Torres, a la sazón máximo representante regio en la capital manchega⁴⁸⁴. El nuevo heredero nombra a don Tomás de Aguilera su apoderado en la localidad, y a su instancia es conminado el arrendatario a abandonar la mitad del terrazgo, cuando ya había adelantado parte del dinero de su arrendamiento anual y en un momento crítico

"...pues eraazienda de mucha considerazion y no podia faltar del arrendamiento...-y- por no ser en tiempo como por hallarse la casa muy llena de grano y los pajares todos ocupados."

Interpreta el perjudicado dolosa la actitud del apoderado en términos severos, al considerar que "su depravado zelo manifiesta con sus cavilaciones montañas de rayos". En vista de la controversia generada por esta cuestión intenta mediar el ciudarrealeno afincado en Granada don Rodrigo de Salcedo, caballero del hábito de Santiago y otorgante del testamento, al ver comprometida la relación de su primogénito con tan preeminente personaje de la localidad. Desconocemos en qué quedó el asunto, pero el 23 de diciembre de 1726, el Fiscal del Consejo de Castilla, propugnaba la reconciliación de familias tan distinguidas, reteniendo los autos el nuevo corregidor don Francisco de Valenzuela y Albarracín, aunque la situación parecía irremediablemente deteriorada, temiéndose a principios de 1727 que siendo "personas tan poderosas y

de la primera estimazion, en esta tierra..., se puede tener si no se ataxa este daño pare en tragedia."⁴⁸⁵

Nuevamente estalló el conflicto en el seno del patriciado urbano ciudarrealeño en 1733, esta vez suscitado por problemas de pastos. En septiembre de dicho año los grandes ganaderos locales apelan al Supremo Consejo contra el pretendido espolio al común de la venta de las dehesas boyales de la ciudad⁴⁸⁶, privándoles por tanto del invernadero gratuito para sus reses. En este clima de crispación surge la pugna entre don Tomás de Aguilera de los Ríos, alcalde hermandino, y del resto de los grandes propietarios pecuarios contra don Juan Velarde Muñoz, señor de Santa María de Guadiana, por retener sus criados de labor las cabezas de ganado de los susodichos ganaderos cuando se dirigían a abreviar al manantial de esta finca como acostumbraban, viéndose conculcados sus derechos por tratarse de un lugar donde los pastos eran comunes⁴⁸⁷. Únicamente los buenos oficios del corregidor permitieron que se llegase a un acuerdo transaccional, no sin resistencia por ambas partes.

Mediado el siglo XVIII tendrán lugar nuevas disputas, en esta ocasión debido a la competencia entre los propios hermanos hidaigos por el arrendamiento de la percepción de la asadura mayor y menor de la Santa Hermandad Vieja. Desde 1744 hasta 1751 este arbitrio fue administrado directamente por la corporación apícola, y en septiembre de 1751 sus alcaldes deciden proclamar los plazos para recibir la licitación por su arriendo, concurriendo a la almoneda los ciudarrealeños Cristóbal Bernal y Pedro San Miguel, apoderado el primero de don Diego Muñoz y Vera y el segundo de don Luis Joseph Velarde, estableciéndose una dura escalada de mejoras hasta darse por

definitiva la puja de veinticuatro mil y cuatrocientos reales de vellón de éste último al finalizar el plazo legal estipulado.

Hasta entonces todo había transcurrido según lo acostumbrado, pero el debate surge dos días después, cuando don Diego Muñoz y Vera eleva lo licitado hasta treinta mil quinientos reales, alegando acogerse a la cláusula del cuarto real que regía las subastas de los derechos pertenecientes al fisco real. La reacción no se demora un instante, y Pedro de San Miguel presenta recurso de nulidad a los nuevos alcaldes, al considerarla ilícita por no concurrir en esta gabela la franqueza concedida estrictamente a las rentas reales, y al día siguiente el otorgante replica que dicha mejora era legal, al redundar en beneficio al Santo Tribunal y tener esta exacción al presente "un dezente valor".

El 8 de octubre de 1751 se acuerda que hasta dirimirse el caso en Madrid, el cabildo asumiese su recaudación pues sería perjudicial una demora en su cobro ya que

"...por la calidad del año inmediato pasado en la falta de pastos a decaído la cabaña y demas ganados con cujos trabesios esta impuesto referido derecho y por ello en el presente no puede producir lo que en los años -precedentes-..."

Reconoce que es inusual el procedimiento de introducir mejoras tras el remate, pero que no era menos cierto que nunca fue la puja tan alta, lo que sin duda beneficiaría en último extremo a la fraternidad.

El Consejo de Castilla resuelve, el 26 de octubre de 1751, admitir la puja de don Diego Muñoz; y el cuatro de diciembre siguiente que lo percibido hasta entonces por don Luis Velarde debía de pasar a los caudales hermandinos, lo que halla la fuerte oposición del cobrador.

Espoleado por esta decisión Pedro San Miguel, hombre de paja o mayordomo del hidalgo ciudarrealeño, pretexta que el precedente sentado también podía serle aplicada a su parte, y a principios de 1752 eleva el tanteo de acuerdo al cuarto real, pese a lo cual y tras más de dos años de contencioso ante los Reales Consejos será desestimado terminantemente⁴⁸⁸.

Otra cariz resultó adquirir el frustrado intento de homicidio, en agosto de 1720, de don Martín Picazo contra don Alvaro Muñoz y Torres⁴⁸⁹. Asimismo tenemos referencias de una quimera producida la tarde del Jueves Santo de 1724, el 13 de abril, en la plazuela del convento de religiosas franciscanas de Ciudad Real; tal vez aprovechándose don Juan Hornero y Herrera, vecino de Pozuelo de Calatrava, y los ciudarrealeños don Joseph Mayorga, don Clemente Sánchez de Torres y don Antonio del Valle -este último natural de dicha ciudad pero afincado en Puertollano-, del anonimato que le prestaban sus túnicas de la cofradía de la Santa Espina -puestas para asistir a la procesión que esa tarde partía desde la parroquia de Santiago-, fueron apaleados por Francisco y Miguel Ruiz Carneros, acudiendo a la pelea su hermano don Antonio, prorrumpiendo en amenazas sin haber mediado palabra entre ellos⁴⁹⁰. Es probable que dicha pendencia estuviese motivada por algunas desavenencias profesionales, al hallarse involucrada la familia Ruiz, vinculada a la magistratura hermandina desde hacía años y con la impunidad que presumiblemente garantizaba la condición letrada de alguno de ellos.

Más compleja y de mayor calado es la actuación del caballero hermandino don Luis Joseph Velarde y Viedma, regidor perpetuo de Ciudad Real, al proceder por orden del corregidor contra los hermanos Agustín, Isidoro y Francisco de Madrid y don Miguel Cortés por libelos

contra su familia hacia 1771. Desconocemos su contenido, pero dada la calidad de los encausados sin duda pondrían en grave aprieto la gobernabilidad del concejo⁴⁹¹. Posiblemente de esta desazón estarían imbuidos algunos de los duros memoriales de los encartados contra la patrimonialización de oficios en el seno de la organización apícola.

Por último, en primavera de 1786, aconteció una disputa de carácter estrictamente personal en la que, de nuevo, se hallan envueltos individuos de una u otra forma vinculados a la Hermandad Vieja. En la medianoche del siete de 7 del citado año, estando en la plaza pública ciudarrealeña don Diego Alarcón y don Juan Bernardo de Céspedes, sospechan de dos embozados que se les acercaban sin identificarse y que resultan ser Julián Jiménez Almansa y Antonio de Sabariegos, emprendiéndose una pelea en la que resulta herido de espada don Juan Bernardo; acuden de inmediato los carabineros y los alguaciles de la justicia ordinaria, arrestando a todos los implicados. Los autos criminales serían llevados ante el Supremo Consejo, por pretender el intendente entender del caso al ser el joven herido oficial de la renta real de loterías; una semana después parece aclararse que el móvil de la riña eran los amores por una misma mujer, intentando el Fiscal moderar los ánimos exaltados del corregidor e intendente, pero dejando al segundo su substanciación⁴⁹².

NOTAS AL CAPÍTULO 3

¹ Sobre la condición jurídica de la mujer durante la Edad Moderna, y su realidad concreta en Ciudad Real, remitimos al lector a los trabajos de M.S. YUSTRES, "Status jurídico y condición social de la mujer en el Ciudad Real del siglo XV", en *Villa Real, 1255*, nº 1 (1989), pp.49-73; y M. ASENSIO RUBIO, "Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres en Ciudad Real (siglos XVII y XVIII): aproximación a una realidad desconocida" en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 8., pp. 105-111.

² Este proceso de acaparación de dignidades hermandinas por parte de la oligarquía local no era exclusivo de Ciudad Real. Escribía A. SALVÁ, aludiendo a la Hermandad General de Burgos, que

"...los Procuradores Mayores..., en sesión de 22 de junio de 1622, día de elecciones, pidieron que los Alcaldes de Hermandad fueran nombrados entre gente de fuera del Ayuntamiento, como se había hecho hacía poco tiempo. Los regidores sin mas deliberación, negaron rotundamente lo pedido, ratificaron el acuerdo de 1617 -en virtud del cual se proveían dichas varas entre los hidalgos del concejo por votos secretos-, y procedieron muy serenamente a elegir los Alcaldes de entre los caballeros de la corporación sin que los Procuradores Mayores, aunque podían hacerlo, fuese más allá con sus pretensiones..."

Op. cit, p. 123.

³ El 20-IV-1623, el cabildo manchego recibía como hermano a Diego Mexía de Arciniega, a título de una majada en el término de Ciudad Real; poco después, el 25-V-1623 el ciudarrealeño Luis Alfonso de Pastrana solicitaba su ingreso, en virtud de su propiedad sobre una huerta en la aldea anexa de la Poblachuela; dicho año, Alfonso de Torres, médico de Malagón, pretendida petición de incorporarse a la

organización apícola mediante su apoderado Diego García de Cárdenas, teniente en uso y disfrute media posada de colmenas cerca del molino viejo de la villa (AHMCR. Caja 7, nº 202 , ff. 4vº, 6vº y 15 vº).

⁴ En mayo de 1623, el citado Diego García de Cárdenas, alcaide hermandino, actua de nuevo como valedor de Alonso Romero, vecino de Piedrabuena, acreditando testimonio escrito de su posesión del colmenar "Las Posadas", en su término (Ib., f. 6vº).

⁵ Las ordenanzas talaveranas, más explícitas al respecto, fijan una propina de cuatro ducados por cada de una de las copias expedidas incorporadas a su título; op. cit., pp. 9-10. QUEVEDO Y SIDRO señalan que en la organización toledana el hermano recientemente admitido contribuyese con 600 mrs. para las arcas comunes, elevándose a 12.000 mrs. si se trataba de una plaza de gracia, la mitad de los cuales serían distribuidos entre los capitulares asistentes, pudiendo ser condonada esta parte graciosamente.

⁶ El 23-VI-1623 se admite como hermano a don Francisco de Peñafiel, corregidor y justicia mayor de Ciudad Real, tras ser probada su propiedad de una posada en la sierra de la Zapatera, en el término de la villa extremeña de La Haba; el labrador Marcos Cargía, vecino de Espiel -Córdoba-, obtuvo idéntica calidad en razón de sus heredades, cortijos y corchos de la Hoya del Garabillo, enclavados en dicho distrito concejil (AHMCR. Caja 7, nº 202, ff. 15vº y 17vº).

⁷ Vid. Apéndice documental, texto nº 16. Más exclusivista es la asociación toledana, cuyo cabildo de 2-I-1682 consignaba que

"...esta Santa Hermandad Vieja de Toledo se compone de cinquenta y tres hermanos todos de la gente mas prinzipal de Toledo y condecorada; pues mucho dellos son caballeros de abito muchos

rexidores de Toledo, y todos bien hacendados y de calidad notoria, son estas plazas hereditarias en hijos y descendientes de los que poseen y si falta dellos sucesion se probeen por el cabildo -por unanimidad, y todos deben poseer colmenas en el distrito toledano- a fin Señor de que cuyde de todos cuydando de lo que es propio y sienta el daño que hicieran al vecino quando pueda si se descuida experimentar el mesmo daño en si."

(AHN. Div. Her., leg. 66, nº 2, s.f.).

⁸ Por Real Provisión de 28-VI-1640 se regulaba en Toledo para poder

"...entrar por hermanos que aya de ser por avas blancas y negras y con solo una negra se entienda estar contradicho y no entendiendose esto con los hijos de hermanos o nietos de los que avian sido hermanos de este cavildo..."

Dicha prerrogativa se extenderá, por acuerdo capitular de 17-XII-1681, a los yernos de los hermanos difuntos, faltando descendencia masculina por sanguinidad (Ib., leg. 66, nº 1, s.f.).

⁹ Son agasajadas con perdices el día de Santa María de la O un total de cincuenta y una mujeres, parientes directos de los integrantes del Santo Instituto, a todos los cuales se les proporcionan las velas para asistir a la procesión por el interior del templo ciudarrealeno de San Pedro tras acabar los oficios divinos de aniversario. Vid apéndice documental, texto nº 16.

¹⁰ Ib., Consejos, leg. 3163, nº 9, s.f.

¹¹ En el Catastro del marqués de la Ensenada, en 1751, se asientan nombres, estado, descendencia a su cargo, edad, servidumbre y ocupación de numerosos hermanos del Santo Tribunal, entre los que destacan los siguientes individuos:

*Regidores Perpetuos

.Don Joseph Alfonso Velarde y Muñoz, alguacil mayor, soltero, 28 años, 4 criados;

.Don Bernardino Muñoz de Loaysa, alcalde mayor de noche, 50 años, 26 criados;
.Don Ignacio Palacios, abogado, casado, 3 hijos, 2 criados;
.Don Luis Treviño Carbajal, soltero, 38 años;
.Don Diego Muñoz y Vera, casado, 3 hijos, 36 años, 26 criados;

***Hidalgos**

.Don Francisco Treviño Calderón de la Barca, casado, 65 años, 15 criados;
.Don Gaspar del Forcallo, casado, 71 años, 1 criada doméstica;
.Don Francisco Rodríguez de Ledesma, noble, soltero, 46 años, 4 criados;
.Don Pedro Treviño Baillo, noble, viudo, 60 años, 19 criados;
.Don Francisco de Cárdenas Treviño, casado, 78 años, 8 criados de labor;
.Don Joaquín de Cárdenas, casado, 25 años, 4 criados;
.Don Diego de Haro, casado, 52 años, 35 criados domésticos y de labor;
.Don Álvaro Muñoz y Torres, caballero de Calatrava, viudo, 60 años, 13 criados domésticos y 142 de labor y rebaños;
.Don Francisco Bustillo Cevallos, mercader y tesorero de rentas reales provinciales, viudo, 60 años, 11 criados;
.Don Agustín Barba, mayoral de los rebaños del convento de San Francisco, 50 años, casado;
.Don Francisco Barba, el menor, gañán de los rebaños anteriormente citados, 40 años, casado;

***Escribanos**

.Jacinto García Prieto, miembro del estado general, 61 años, 3 criados;
.Joseph Córdoba y Herrera, miembro del estado general, 40 años, casado;

***Labradores**

.Francisco de Torres, 60 años, viudo;
.Francisco Lechuga, 43 años, viudo, 3 criados de labor;
.Juan Isidro Granados, 60 años, 3 criados de labor;
.Joseph Bernardo de Céspedes, 37 años, tres criados de labor;
.Joseph Serrano, hortelano, casado, 31 años, 2 criados de labor;
.Joseph Muñoz de la Rica, hortelano, casado, 31 años, 3 criados;
.Felipe Ruiz Carneros, hortelano, casado, 38 años, 4 criados de labor;
.Francisco de Cárdenas, carretero y labrador, 60 años, 1 criado;
.Don Lorenzo del Valle, casado, 62 años, 2 criados.

(AHPCR. Catastro de la Ensenada, Cédulas declatorias del estado secular, leg. 402, memoriales nº 57, 195, 326, 333, 355, 358, 391, 402...); parcialmente publicado por I. PÉREZ VALERA, *Ciudad Real en el siglo XVIII*, Ciudad Real, 1962, pp. 29 y ss.

¹² "Pragmatica sobre provisión de oficios de los concejos y villas del Reino que se den por dinero", año de 1493 (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 85).

¹³ Madrid, 1791, Carta Primera, en A. PONZ, *Viaje de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella*, t. 16, p. 80; noticias sobre algunas de las estirpes más preeminentes de la capital manchega son proporcionadas R.J. MALDONADO COCAT, "La Casa de Treviño en Ciudad Real", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, nº 10 (1980), pp. 73-108; del mismo autor, *Almagro. Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava*, Madrid, 1978; y "El mayorazgo de Valdarachas. Familias de Treviño, Medrano y Henríquez de Luna", separata de *Hidalguía*, nº 9 (marzo-abril, 1955); A. y A. GARCÍA CARRAFFA, *Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos Españoles y Americanos*, t. 85, Madrid, 1952, p. 201; P. GRACIA DEI (comp.) *Genealogía Universal. Cuaderno antiguo de linages*, B.N., mss. 11.773, vv. ff., ff. 503r, 472r-vº, 274r y 258r-vº.

¹⁴ El 10-I-1687, don Francisco Triviño Bermúdez administra hasta la mayoría de edad de su hijo el mayorazgo de la familia Guarnizo (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 205, ff. 13r-14vº); el 20-II-1699, don Juan Francisco Velarde y Vermúdez señor de Santa María de Guadiana y alcalde hermandino, nombra apoderado para administrar sus propiedades en Pancorbo (Ib. leg. 231, ff. 9r-10vº); el 17-X-1704, el alcalde de la Hermandad Vieja don Manuel Xédler Lisón y Gámez dispone de sus heredades familiares en Almagro (Ib, leg. 228, ff. 165r-vº y 180r-181r); don Cristóbal Velarde y Céspedes, junto a sus hermanos, arrienda el heredamiento indiviso de una dehesa en Belvís de la Jara - Toledo-, el 1-X-1705, (Ib. leg. 228, ff. 287r-288r); tras un largo litigio, Joaquín Joseph de Cárdenas Treviño y Roble ve reconocidos sus

derechos sobre la herencia de un pariente lejano difunto ab intestato, el 31-I-1790 (Ib. leg. 543, ff. 20r-21r), haciéndose con un notable patrimonio urbano en Madrid, diversos bienes inmuebles en Alcalá de Henares, Bujes, Meco y Corpa, censos sobre la renta del tabaco en Segovia, heredades en León, etc (Ib., leg. 543, ff. 10r-11r, 20r-21vº, 31r-32vº, 35r-36r y 87r-88r).

¹⁵ En 1643, el cobrador maestroal sobre una parte del arriendo de pastos en Almodóvar del Campo -Ciudad Real-, menciona entre sus contribuyentes a don Gonzalo Muñoz de Loaysa, don Cristóbal Velarde y Gabriel de Valeros, hermanos todos del Santo Instituto (AMAC. caja 9, 1943, nº 4). El citado don Gonzalo Muñoz de Loaysa arrienda los millares del valle de Alcudia entre 1658-1668, a razón de 14.250.000 mrs. de amortización y 279.000 mrs. de principal (Ib., caja 16, 1959, nº 27); el mayoral de don Francisco Treviño y Castro arrendaba por 3.000 rs. la dehesa de Fuente el Villar -Andújar-, el 28-IX-1711 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 230, ff. 236r-vº).

¹⁶ El 7-II-1691, don Francisco de Aguilera Ureña, alcalde de la hermandad Vieja, compraba un olivar en las inmediaciones de Ciudad Real (Ib., leg. 231, ff. 2r-3r); el 19-X-1708, su homólogo don Gómez Treviño Dávila arrendaba tierras en el término de Membrilla -Ciudad Real- (Ib. leg. 233, s.f.).

¹⁷ La mayoría de los hermanos ciudarrealeños tienen intereses ganaderos, bien en rebaños estantes, riberiegos o travesíos. Determinados ganaderos como don Antonio Xédler Lisón y Gámez abastecen los telares comarcanos, llegando a proporcionar lana a villas de la provincia de Córdoba, 10-VII-1697, Ciudad Real (Ib., leg. 208, ff. 68r-vº); el marqués de Peñafuente, el 23-III-1729, adquiriría 600 machos

cabríos por un importe de 26.700 rs. (Ib., leg. 548, ff. 25r-26r); el 22-III-1733, elevaban queja los ganaderos manchegos don Francisco de Cárdenas Treviño, don Tomás de Aguilera, don Gaspar Sancho Barona, don Francisco Treviño y don Pedro Treviño, todos hermanos de la entidad hermandina, para lograr del Consejo de Castilla la prohibición de la enajenación de las dehesas comunales ciudarrealeñas (Ib., leg. 548 bis, ff. 87r-88r). En el Catastro de 1751, don Álvaro Muñoz y Torres dice tener 9 yuntas de mulas, 9 de bueyes, 12 pollinos de labor, y contar en el término de la ciudad 120 yeguas, 112 mulas y 112 machos, 250 vacas, 70 toros, 350 ovejas, 350 carneros, 340 borregos, 300 cabras y 30 cerdos; delando sus mayores fuera de dicho alfoz unas 6.950 ovejas trashumantes, 650 carneros y 9.000 borregos (AHPCR. Catastro de la Ensenada, leg. 195, s.f.). En 1767 don Diego Muñoz y Vera logra quedar exento de la contribución de 4 mrs. por cabeza que pretendía impomerle el Supremo Consejo sobre sus 15.000 merinas para costear el trasporte de grano desde San Clemente -Cuenca- al abastecimiento de la Corte (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 551, ff. 64r-65v^o). La familia Muñoz había comprado a Carlos II el privilegio para criar mulas disfrutando de él hasta la década de 1770, cuando debido al proyecto de extinción de su crianza hubo de ser defendido ante los Reales Consejos hacia el 6-III-1771 (Ib., leg. 591, ff. 29r-30r).

¹⁸ Apareceren consignados como hermanos mesteños durante el siglo XVIII, entre muchos otros, don Francisco Treviño Castro y Bermúdez, don Joseph Alfonso Velarde y Muñoz, don Joaquín de Cárdenas Treviño, don Tomás de Aguilera y de los Ríos, don Álvaro Muñoz y Teruel...

¹⁹ Desde el mismo periodo fundacional de Villa Real, los caballeros asumieron los puestos rectores locales. Los hermanos hidalgos del

Santo Instituto coparían invariablemente las más altas dignidades honoríficas como regimientos, juradurías y cuantos empleos enajenados o temporales considerasen convenientes.

El 30-VIII-1630 se despachó título de alguacil mayor vitalicio a don Luis Bermúdez Mesía de la Cerda, por contribuir a las guerras de Italia con 94.000 rs. (AMCR. Actas Capitulares, leg. 13, ff. 502-505); poco después, en 1641, don Gonzalo Muñoz de Loaysa pagaba la media annata de los oficios de fiscal del concejo y de las Hermandes Vieja y Nueva ciudarrealeñas (Ib., leg. 15, nº 3. f. 6r); el 17-IX-1700, don Lorenzo Muñoz hubo de pagar por este concepto 2.250 ducados, quejándose por haberse extendido su cobro a sus dependientes (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 227, ff. 305r-v9). Durante el siglo de las Luces sería prolijo enumerar los hermanos de la fraternidad apícola que acceden a oficios concejiles, pero en las postrimerías de la centuria se observa una tendencia descendente en este sentido.

²⁰ Don Manuel Xédler, caballero preeminente de la Santa Hermandad, nombra el 3-V-1630 apoderado para percibir sus juros sobre la renta de la seda granadina (Ib., leg. 100, ff. 468r-v9); el también hidalgo don Francisco Bermúdez de Ribera, hizo lo propio el 21-8-1680 para cobrar los réditos de su juro sobre las alcabalas de Jaén; el marqués de Villater, en septiembre de 1708, designaba al recaudador de juros sobre las alcabalas y almojarifazgos de Sevilla y Morón (Ib., leg. 299 bis, ff. 159r-160r), manteniéndose en su posesión al menos hasta 1734 (Ib., leg. 548 bis, ff. 161r-162r); en 1771 toma vecindad don Ventura Stuart Colón de Portugal, prior de la orden de San Juan en Inglaterra y futuro integrante del cabildo hermandino, para poder disfrutar su cabaña de los pastos comunes e ingresar en la Hermandad Vieja.

21 Los señores de Santa María de Guadiana y de Valparaíso, poseedores de notables intereses patrimoniales en la ciudad, se comprometieron el 28-IX-1759 a suministrar a las Reales Minas de azogue de Almadén 300 carros de madera del valle de Alcudia y a transportar 8.000 quintales de mercurio a Sevilla, solventándose de esta forma la negativa de hacerse cargo de esta labor según lo venían practicando los carreteros de Almodóvar del Pinar -Cuenca- (Ib., leg. 554, ff. 102r-103v9).

22 Los siguientes hermanos de la Hermandad Vieja disfrutaron hábitos militares en el periodo que nos ocupa:

MONTESA

.Don Luis Bermúdez y Alfaro, 1590 (AHN. 00.MM., Pruebas, exp. 38);

ALCANTARA

.Don Diego Muñoz y Molina, 1667 (Ib., exp. 1.038);

.Don Gonzalo Joseph Treviño y Carbajal, 1786;

SANTIAGO

.Don Francisco de Céspedes Maldonado, 1630 (Ib., exp. 1.922);

.Don Álvaro Muñoz Treviño de Loaysa y Torres Mesía, 1638;

.Don Juan Cristóbal Velarde Ceballos, 1649 (Ib., exp. 8.642);

.Don Antonio Velarde Ceballos, 1665 (Ib. exp. 8.641);

.Don Álvaro Muñoz de Figueroa, 1687;

.Don Lorenzo Treviño de Loaysa y Velarde, marqués de Vezmeliana, 1688 (Ib., exp. 5.630);

.Don Lorenzo Treviño de Loaysa, 1705;

CALATRAVA

.Don Juan Fernández Tribiño Velarde, 1609;

.Don Gonzalo Muñoz de Loaysa, 1655 (Ib., exp. 1.758);

.Don Juan Velarde y Céspedes, 1670 (Ib., exp. 2.740);

.Don Manuel Xedler Lisón y Gámez, 1673 (Ib., exp. 1.317)

.Don Cristóbal Muñoz Treviño de Loaysa, 1676 (Ib., exp. 1.759)

.Don Álvaro Muñoz y Torres, 1702 (Ib., exp. 1.757);

.Don Juan Treviño Velarde, 1765 (Ib., exp. 2.637);

23 En 1702 don Álvaro Muñoz de Figueroa arrendaba la encomienda de Alcolea, como apoderado del marqués de Villadarias, por un quinquenio, a razón de 8.000 rs. anuales (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 227,

ff. 120r-121r); don Gaspar Sancho Barona, alcalde hermandino, arrendará por otros cinco años el quinto del Jinete a la comendadora de Almodóvar del Campo, el 11-VII-1702 (Ib., leg. 227, ff. 237r-238r).

²⁴ El 6-XI-1626 logra don Gonzalo Muñoz de Loaysa título de familiar de la Inquisición (AMCR. Actas Capitulares, leg. 11, ff. 306vº-307r); en los primeros días de abril de 1680, don Cristóbal Treviño Bermúdez, aparece en la documentación como familiar del Santo Oficio toledano (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 214, ff. 139r-vº y 231r-vº); idéntica dignidad gozan don Álvaro Muñoz de Figueroa en enero de 1690 (Ib., leg. 224, ff. 6r-7r), don Juan de Aguilera Pretel en 1698 (Ib., leg. 233, ff. 54r-149r) y don Juan Treviño de Loaysa y Masa en 1711 (Ib., leg. 230, ff. 188r-190vº).

²⁵ Tradicional salida airoso de los secundones nobiliarios y de los hidalgos desposeídos, la carrera de las armas fue coyunturalmente seguida por algunos hermanos de la entidad ciudarrealeña. En 1598 se intitulaba capitán de caballería del trozo del Rosellón Diego Fernández Treviño, cuadrillero hermandino (AHN. Div. Her. leg. 37,3); hacia 1751 la marquesa de Villater declaraba entre su descedencia a

"...un hijo llamado Don Gaspar Varona Pacheco, de hedad de treynta y un año, theniente de Dragones del regimiento de la Reyna a el que le han dado su retiro por no poder continuar por lo maltratado que quedo en la vatalia de Campo Santo..."

quien desempeñaría luego diversos empleos en el Santo Tribunal (AHPCR. Catastro de la Ensenada, leg. 454, exp. 326); el 1-9-1708, el marqués de Villater era coronal del ejército; en la década de 1770, don Ventura Stuart se intitulaba capitán de caballería del regimiento de Borbón (Ib., Protocolos Notariales, leg. 343, ff. 32r-33r).

En 1766 se imprime el reglamento de las milicias provinciales, inserto en el depósito municipal (AMCR. Actas Capitulares, leg. 25, nº

3, ff. 105-118), nombrándose, un año después, don Luis Treviño Carbajal coronel de la de Ciudad Real (Ib., ff. 197-199).

²⁶ A fines del Seiscientos la nobleza de algunas ciudades andaluzas y valencianas fundaron maestranzas, asociaciones honoríficas que adquirieron gran arraigo en la zona. Dichas corporaciones tenían sus orígenes en las cofradías hidalgas medievales, pudiéndose ser consideradas, en cierta forma, institución complementaria o sustitutoria dieciochesca de los devaluados hábitos militares. En el último tercio del siglo XVIII aparecen consignados algunos caballeros de la entidad manchega entre los miembros de las Reales Maestranzas de Granada y Ronda; a esta última perteneció don Álvaro Mesía Maldonado y Treviño, mientras que a la asociación granadina estuvieron adscritos don Álvaro Muñoz y Teruel, don Diego Bartolomé Mirabal, don Diego Muñoz y Vera así como don Diego Muñoz y Pereiro.

²⁷ El 12-IV-1694, don Álvaro Muñoz de Figueroa funda un pósito y monte de piedad en Ciudad Real, dotándolo de un fondo inicial de mil fanegas de trigo, para distribuirlo en tiempo de sementera entre los campesinos con yunta de la ciudad y aldeas anejas; los morosos debían ser reconvenidos bajo sanciones religiosas, poniendo su administración bajo control eclesiástico; dicha disposición fue refrendada por el arzobispado, y en 1725 una sobrina del fundador añadía más grano a sus fondos, hasta casi doblarlo y ampliando el granero construido en su casco urbano (AHN. Consejos, leg. 1630, nº 36). Dicho pósito actúa paralelamente al municipal, creado por el concejo a fines del Quinientos, y que ya en el Ochocientos estuvo ubicado temporalmente en la cárcel hermandina.

²⁸ En marzo de 1653, don Juan Treviño Loaysa y don Martín Bermúdez de la Cerda, miembros del Santo Tribunal, aparecen como patronos de la obra pía fundada por don Dionisio de Masa Osorio, ex-administrador conventual en Almagro y Toledo (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 220 bis, ff. 39r-40v^o); hermanos de la fraternidad apícola, como don Francisco Bermúdez de Ribera, Juan Antonio Xédler o don Juan Treviño y Masa, el 5-VII-1672 confeccionan las ordenanzas de la Cofradía de la Caridad y Hospital del Refugio (AHN. Consejos, leg. 630, n^o 61). El 6-IV-1684 don Cristóbal Treviño Terán y Flores, alcalde de la Hermandad Vieja, era patrono de la obra pía de la Santa Cruz toledana (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 215, f. 56r). El también alcalde don Rodrigo Bermúdez Mesía de la cerda administró un tiempo la fundación hecha por don Antonio de Torres Treviño (Ib., leg. 208, ff. 61r-62r), nombrándose luego como su mayordomo a don Antonio de la Cueva, en noviembre de 1709, proporcionando por entonces unos beneficios anuales de 13.438 mrs. (Ib., leg. 233, ff. 249r-v^o). El 26-X-1731 don Álbaro Muñoz y Torres y don Francisco de Cárdenas Treviño copatrocinaron una obra pía de Santa María del Prado, con vínculos en Daimiel (Ib., leg. 548, ff. 188r-189r), nombrando como tal, capellán de la misma, el marqués de Villater, el 6-IX-1735 (Ib., leg. 548 bis, ff. 44r-v^o). El 27-X-1758, don Joaquín de Cárdenas Treviño, alcalde hermandino, cubre la vacante en la capellanía de la colegiata de San Justo -Alcalá de Henares- (Ib., leg. 554, ff. 123r-125r). El 30-V-1768 don Joseph Velarde y Muñoz funda otra capellanía en C. Real (Ib., leg. 551, f. 54 y ss.); por último, el 6-II-1778 don Joaquín Josef de Cárdenas Treviño, como patrón de la disposición de don Antonio Galiana, entra en litigio con el convento de carmelitas ciudarrealeño (Ib., leg. 573, ff. 32r-33v^o).

²⁹ El 24-V-1683, en el concurso de acreedores que tiene lugar por entonces en la ciudad se halla don Antonio Xédler Lisón y Gámez, alcalde del Santo Instituto (Ib., leg. 199, s.f.). El hermano por el estado hidalgo don Juan Velarde Céspedes y Cervantes prestó 500 rs., a principios del Setecientos, al ciudarrealeño Dionisio García para comprar una partida de vino (Ib., leg. 227, ff. 91r-vº).

³⁰ En 1699, don Francisco Treviño Castro y Bermudo, alcalde de la corporación apícola, estaba emparentado con el marqués de Bermudo (Ib. leg. 226, ff. 368r, 372r, y 220r-225vº). Nobles titulados que desempeñan las más elevadas dignidades en la Hermandad de Ciudad Real serán el conde de Piedrabuena, o los marqueses de Vezmeliana, de Peñafuente y de Villater. El 13-XI-1789 se crea el marquesado de Casa Treviño-Gotor, siendo su primer titular Francisco Antonio Treviño y Dábila, personaje vinculado al Santo Instituto.

³¹ Espoleada por la crisis hacendística que coyunturalmente afectó a Castilla, se recurrió a la venta de señoríos jurisdiccionales, enajenándolos a elevado precio a grandes propietarios con pretensiones nobiliarias. La venta de vasallos requería la aprobación de las Cortes, y consistía en transferir del realengo a la órbita señorial los lugares que el comprador elegía, a menudo heredades de su patrimonio. Señala M. ARTOLA que la venta se realizaba

"...con jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio, señorío y vasallaje, penas de cámara y sangre, calomnias, mostrencos y demas rentas jurisdiccionales, con las escribanías de tales villas y lugares si fueran anejas de dicha jurisdicción y no estuvieran enajenadas..."

Cit. *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982, p. 157.

Estuvieron vinculados como hermanos a la Hermandad Vieja manchega los siguientes titulados; don Joseph de Cárdenas y Torres, señor de las villas de Valparaíso y Fresno de Carballada (1728); don Joseph

Alfonso Velarde y Muñoz, señor de Santa María de Guadiana (1758); don Joaquín Joseph de Cárdenas y Treviño, "Dueño en lo spiritual y temporal de las villas de Valparaíso y Fresno de Carballada" (1792)...

³² En agosto de 1691 el licenciado don Pedro Fernández Treviño, antiguo hermano, desempeñaba el cargo de auditor general de Guerra en Sevilla (AHN. Div. Her., leg. 36, nº 1). Don Francisco Antonio Treviño y Dábila, ocuparía los empleos de oidor en la Audiencia de Barcelona, alcalde de Casa y Corte, y ministro togado del Real Consejo de Hacienda; en el pleito suscitado en Ciudad Real, en 1785, por cuestiones honoríficas era mencionado como "persona de la mayor distinción de este pueblo muy asistente a los oficios divinos" (AHN. Consejos, leg. 1.007, nº 9, ff. 116vº-120vº). Don Gonzalo Joseph Treviño y Carbajal, adscrito desde su infancia al Santo Tribunal, y probablemente a la sombra del anterior dignatario, logró acceder a diversos puestos en la administración polisinidial, concretamente como consejero de los reales de Castilla y de Órdenes.

³³ Sería prolijo hacer una minuciosa relación al respecto. Como ejemplo podemos citar que el 15-V-1688 el alcalde hermandino don Cristóbal Velarde y Céspedes, fue nombrado prioste de la cofradía de Nuestra Señora de La Soledad, sita en el convento de San Francisco ciudarrealeño (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 223, ff. 13r-vº).

³⁴ El 17-I-1647 los regidores alcoleanos pagaron la contribuciones al hermano del Santo Instituto don Cristóbal Treviño Velarde, administrador de la Renta de Millones (Ib., leg. 142, ff. 7r-vº); el 24-IX-1662 don Juan y don Cristóbal de Velarde Ceballos, este último alcalde de la Hermandad Vieja, reclamaban las deudas devengadas por su heredad de Sonseca -Toledo- (Ib., leg. 193, ff. 93r-vº); en 1726, el

difunto don Gaspar Dávila y Carrillo poseía un vínculo sobre las albalas del Campo de Calatrava, que se estimaba en 12.000 ducados de principal (Ib., leg. 553, ff. 59r-vº).

³⁵ El 13-IX-1640, los hermanos Juan y Diego Xédler y Gámez venden la tierra y la casa de Valdarachas a Juan de Aguilera Guevara, como ellos integrante de la Hermandad manchega (Ib., leg. 171, ff. 324r-325r); el 24-II-1652 don Antonio de Aguilera compraba un esclavo suntuario (Ib., leg. 175, ff. 23r-vº) y el 3-IX-1654 el citado hermano adquiría tierras en el término de la Poblachuela (Ib. leg. 209, ff. 169r-170vº); hacia 1683 don Gonzalo Muñoz Treviño enajenaba ganado mular (Ib., leg. 193, ff. 100r-vº y 164r-vº) y un año después hacía lo propio don Juan Lucas Forcallo (Ib., leg. 204, ff. 141r-vº); nps consta que en las navidades de 1724 a 1728 don Francisco de Cárdenas Treviño recibió una renta anual de 840 rs. como primogénito de su mayorazgo (Ib., leg. 548, ff. 23r-24r); don Pedro Treviño Baillo, ex-alcalde hermandino, adquiría tierras por valor de 11.000 ducados, vinculándolos a su patrimonio por concesión regia en 1755 (Ib., leg. 545, ff. 253r-257vº); en 1772 los patronos del Hospital de Ancianos ciudarrealeño lograban la dispensa de la Mitra Toledana para venderlo en 25.500 rs. a don Fernando Varona Pacheco con los que adquirir otra sede más adecuada, aunque "con cuia cantidad no pagaron ni aun las columnas del patio de la Casa Hospicio" sita en la calle de San Juan -parroquia de San Pedro- (AHN. Consejos, leg. 1.418, nº 13, s.f.).

³⁶ De 1663 data la carta de dote de don Luis Treviño Carrillo a sus hijas, buena muestra de la endogamia existente en la oligarquía local (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 194, ff. 141r-vº); se conservan las capitulaciones matrimoniales de don Gaspar Sancho Varona y Loaysa, en 1695 (Ib., leg. 226, s.f.), las del futuro marqués de Villater, en

1699 (Ib., leg. 226, ff. 37r-38r), o las de don Manuel Mesía de la Cerda, en 1798 (Ib., leg. 325, s.f.), entre otras.

³⁷ Entre las últimas voluntades destacan las firmadas por los caballeros del Santo Instituto don Gómez de Aguilera y Guevara, el 10-XI-1643 (Ib. leg. 171 bis, ff. 474r-vº); don Juan Lucas Forcallo, el 2-VIII-1685 (Ib., leg. 205, ff. 50r-52vº); don Juan Treviño de Loaysa y Masa (Ib., leg. 230, ff. 188r-190vº); don Francisco de Cárdenas Treviño y Bermúdez, el 5-XI-1728 (Ib., leg. 548, ff. 129r-132r); don Pedro Treviño Baillo, el 24-III-1744 (Ib., leg. 550, ff. 74r-84r) y don Álvaro Maldonado Treviño, el 10-IX-1775 (Ib. leg. 562, ff. 164r-165vº).

³⁸ En 1762 tomó vecindad en Ciudad Real don Álvaro Maldonado Treviño y Salcedo, hasta entonces afincado en Iznájar y poseedor del mayorazgo de Galiana (AMCR. Actas Capitulares, leg. 25, nº 2, ff. 381-382); el 28-VIII-1767 el ganadero don Ventura Stuart y Portugal, con casa en la capital manchega desde 1750, toma vecindad en la ciudad con el objeto de beneficiarse de sus dehesas comunales (Ib., leg. 25, nº 3, ff. 228-229)...

³⁹ La pertenencia a las cuadrillas primera y tercera de la Hermandad Vieja era considerada prueba positiva de nobleza, y quienes informaban sobre limpieza de sangre hacen referencia a este hecho. Una de ellas efectuará don Andrés Canuto Laso de la Vega, primogénito del mayorazgo, familiar del Santo Oficio y hermano hidalgo de la Santa Hermandad, el 26-I-1681 (Ib., leg. 221, ff. 40r-44vº); el 30-V-1698 se hacía informe genealógico de la familia Aguilera (Ib. leg. 233, ff. 54r-69vº); y el 9-VII-1747 presentaba fe de hidalguía don Diego Julián López de Haro (AMCR. Actas Capitulares, leg. 24, ff. 199-205).

⁴⁰ En 1599 se comisiona a Pedro Cisneros y Dávila, caballero del Santo Tribunal, para que "con vara alta o corta de justicia como mas convenga", y con el auxilio de dos cuadrilleros, persiguiese a Andrés de las Heras, por abigeato en la dehesa de la Vega, próxima a Ciudad Real y propiedad del también hermano Antonio Bermúdez (AHN. Div. Her., leg. 29, nº 2); el 24-VIII-1602 el hermaro Luis Mesía de Poblete, ex-propietario de un colmenar luego incendiado, es encargado por los alcaldes para hacer las averiguaciones pertinentes (Ib. leg. 29, 4).

⁴¹ El 27-IX-1654, ante los continuos robos en las Guadalerzas, partieron al alcalde don Antonio de Aguilera, el notario Pedro Zamorano, el regidor hidalgo don Juan Bermúdez y el cuadrillero mayor Alonso de Sevilla "con otros veinte hermanos asi del estado de caballeros como de ciudadanos" (Ib., leg. 34, nº 4, s.f.).

⁴² Bula pontificia de texto desconocido y fechada entre 1294 y 1295, se conocía su existencia al ser citada por J. DÍAZ JURADO, op. cit., f. 67 y en las Ordenanzas manchegas de 1792 (AHN. Códices 818B, ff. 16r-v9). Mencionada por la mayoría de los autores que han tratado la cuestión, su autenticidad fue cuestionada por algunos estudiosos, pero sabemos que hay referencias documentales fidedignas al respecto en AHN. Div. Her., legs. 57, nº 4 y 23, nº 43, así como en BN. mss. 13.030, ff. 54r-57r.

⁴³ AHN. Div. Her., leg. 23, nº 43, copia del siglo XVIII; cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, p. 155. Esta tesis doctoral es de referencia obligada para conocer las exenciones fiscales que gozaban los hermanos del Triple Instituto durante la Baja Edad Media, pp. 152-160.

⁴⁴ 29-VI-1370 (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 7).

⁴⁵ El 2-IV-1309 concedía el monarca que "fuesen libres las Hermandades de portazgo ni de otra cosa alguna de su crianza" (AHN. Códices 818B, f. 19vº).

⁴⁶ J. DÍAZ JURADO, op. cit., f. 93vº, cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., p. 156.

⁴⁷ 3-II-1499; AHN. Div. Her., leg. 6, nº 6; Cit. ib. , pp. 160-161. Tales irregularidades tal vez estuviesen favorecidas por el hecho del arriendo de su percepción a individuos que solo pretendían lucrarse con esta actividad. Vid. S. de MOXÓ, " Los orígenes de la percepción de alcabalas por particulares", en *Hispania*, separata nº 72 (1958).

⁴⁸ Vid. Apéndice documental, texto nº 1.

⁴⁹ Según un testigo de finales del Quinientos, la exención de su pago "es usada y guardada a los vecinos desta ciudad que son hermanos de ella que biben e moran en los otros lugares fuera desta ciudad"; Antonio Mesía de Mora, escribano hermandino en 1567, asegura que

"...a visto hazerse muchos juicios zerca de lo contenido...ante los alcaldes de la dicha Santa Hermandad que a la sazón eran y siempre a oydo decir que a sido usaca e guardada."

(Ib. leg. 23, nº 10, s.f.).

⁵⁰ 29-III/5-XII-1574 (Ib., legs. 26, nº 1 y 28, nº 10).

⁵¹ Arias Pardo de Saavedra, mariscal de Castilla, compró la villa a la Corona en 1549, hasta entonces adscrita al maestrazgo de Calatrava. El

señor designaba al alcalde mayor del lugar y de sus anejos, conformando su gobierno municipal dos regidores perpetuos, cuatro regidores, un alguacil mayor y dos menores, un escribano, dos alcaldes ordinarios y otros tantos de hermandad. Pub. L. VIÑAS y R. PAZ, op. cit., pp. 285 y 290.

52 Se inserta en dicho expediente un traslado de su ingreso, el 28-II-1598, asentada en el libro capitular de la entidad, así como el testimonio de la escritura de compra del colmenar (AHN. Div. Her. leg. 23, 10, s.f.).

53 En las cuentas rendidas en 1604 por el mayordomo Cristóbal Sánchez Aguado consignan el pago de 50 rs. al escribano cosporativo "por la ocupacion que a tenido en buscar los procesos causados contra dezmeros sobre cobrar el diezmo de moços de hermanos desta Santa Hermandad" (Ib. leg. 57, nº 4).

54 "...de los ganados de las Hermandades de Toledo, Talavera y Villa Real no se paguen el derecho de asadura una a otra, certificando los pastores ser de alguna de ellas."; S.d.; BN. mss. 13.030, f. 122vº.

55 Carta de confirmación, 21-X-1490 (AGS. RGS., f. 291).

56 8-XI-1646, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 146 bis, ff. 428r-vº), fue erroneamente interpretada por J. LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ como exención al pago de la asadura perteneciente a su propia asociación. Vid. "Una empresa agraria capitalista en la Castilla del XVII: La Hacienda de D. Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa", en *Hispania*, nº 148 (1981), pp. 386 y 393.

⁵⁷ Entre 1634-1635 el presbítero ciudarrealeño licenciado Francisco de Espinosa viaja a Madrid y Toledo por orden de los diputados hermandinos para defender el privilegio de los miembros del Santo Tribunal de no pagar servicio y montazgo de sus rebaños (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 5). El cabildo manchego de 7-3-1652 recoge que

"Asimismo se dio noticia por el señor Don Gonzalo Muñoz cavallero de la Orden de Calatrava y hermano de esta Santa Hermandad como por su diligencia y a sus expensas a ganado del Consejo de Hacienda esta tercera carta para que los hermanos desta Santa Hermandad no paguen servicio y montazgo y porque la parte contraria es tan poderosa como el Duque de Maqueda y otros tales interesados combiene queste cavildo coadyube y siga por si estas diligencias asta que dello se saque executoria."

(Ib. Div. Her., leg. 34, nº 2, f. 1vº).

⁵⁸ El 21-IV-1690, don Álvaro Muñoz y Figueroa, caballero de Santiago, se declara ante el alcalde de Mestas y Cañadas exento del servicio y montazgo de Calatrava, al ser vecino de dicho partido (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 201, ff. 43r-vº); el 10/19-III-1742 don Diego Muñoz y Torres, don Álvaro Muñoz, don Luis Joseph Velarde, don Lorenzo del Valle y don Juan Díaz de la Cruz, ganaderos ciudarrealeños en su mayoría adscritos a la Hermandad Vieja, se pronuncian contra las pretensiones del contador de la mesa maestra de Almagro de cobrarles determinados arbitrios pecuarios (Ib., leg. 557, ff. 29r-31r).

⁵⁹ Los miembros de la corporación apícola, el marqués de Villater y don Francisco Treviño Castro Bermúdez, junto a otros propietarios de cabezas ovinas, dicen gozar de la exención de servicio y montazgo desde que la Real Chancillería granadina falló contra el duque de Maqueda, pese a lo cual eran reclamados por el gobernador de Almagro; 3-VIII-1711, C. Real (Ib. leg. 230, ff. 177r-vº).

⁶⁰ El 27-X-1690 don Diego Muñoz y Molina, caballero del hábito de Calatrava, hermano de la Mesta y de la Hermandad Vieja manchega, se querella ante en alcalde de cuadrilla toledano del cobrador del montazgo de Malagón que gravaba su rebaño lanar, alegando ser vecino del Campo de Calatrava (Ib., leg. 201, ff. 43r-vº).

⁶¹ 26-II-1418, Valladolid (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, ff. 31r-vº). A estas prerrogativas de la fraternidad colmenera quisieron adherirse algunos ministros de la Hermandad General, así, el 21-IX-1640, Pedro Arciniega, alcalde pechero de la Hermandad concejil ciudarrealeña lleva ante Granada y al superintendente general militar de Toledo su pretensión de eximirse del repartimiento para costear las levass de dicho año (Ib., leg. 170, ff. 337r-vº y 338vº-339r).

⁶² Por Real Provisión de 12-VI-1708 se dirime el litigio entre el procurador hermandino don Cecilio de Zurita y el corregidor palentino haciendo valer las franquezas de un dependiente ciudarrealeño en Villamartín, prescribiéndose que

"...ni se le hechen, como vezinos donde residieren, cargas concejiles, tutelas, curadurias, papel sellado, alcaidias, aloxamientos de soldados, cobranças de libros, embargos de bagages, ni otras cargas ni oficios gravosos que les impidan el uso y exercicio de esta Real jurisdiccion."

(AHN. Div. Her., leg. 7, nº 36).

⁶³ Sería prolijo enumerar privilegios y privilegiados de la Edad Moderna en la Corona de Castilla, pero por citar algunos de los sujetos que disfrutaban de estas prerrogativas caben señalar a militares, nobles, clérigos, hermanos de la Mesta, caballeros de órdenes, profesionales agremiados protegidos desde la Corona, capitulares, familiares y oficiales del Santo Oficio, cofrades, dependientes de rentas reales, síndicos de órdenes religiosas,

miembros de la Santa Hermandad, ministros de la Santa Cruzada, etc. Un sólo dato, el censo de 1787 arrojaba la cifra de 77.884 aforados militares, es decir, el doble de los efectivos reales del ejército. Para una visión de conjunto del status privilegiado durante el periodo que nos ocupa nos remitimos a las siguientes obras:

G. ANES ÁLVAREZ, *El Antiguo Régimen. Los Borbones*, Madrid, 1979; R. del ARCO Y GARAY, *La sociedad española en las obras de Cervantes*, Madrid, 1951; M. BARRIO GOZALO, "Rentas de un grupo privilegiado del Antiguo Régimen. Los obispos de Castilla-La Mancha, 1600-1835", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 8, pp. 23-32; B. BENNASSAR, *La España del Siglo de Oro*, (1ª ed., París, 1982) Barcelona, 1983; A. BO Y M.C. CARLE, "Cuándo empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas", en *CHE.*, 4 (1946), pp. 114-124; A. CASTRO, "Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII", en *Revista de Filología Española*, t. 3, nº 4 (octubre-diciembre, 1916), pp. 1-50 y 357-386; J. CERDA RUIZ FUNES, "Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos en la Baja Edad Media", en *Actas I Simposio de Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp. 161-206; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Sociedad y estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1976; del mismo autor, *El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, 1979; R.J.W. EVANS, *La monarquía de los Habsburgos (1500-1700)*, Barcelona, 1989; A. de FIGUEROA Y MELGAR, "La orden de Caballería de Santiago", en *Hidalguía*, nº 15 (1976), pp. 785-808; M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, *La Sociedad española en el Siglo del Oro*, Madrid, 1983; P. GOUBERT, *El Antiguo Régimen: la Sociedad. Los Poderes*, 2 vv., 1779-1780; J. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, *Honor y honra en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1891; A.M. GUILLARTE, *El régimen señorial en el siglo XVI*, Madrid, 1962; CH. JAGO, "La "crisis de la Aristocracia" en la Castilla del siglo XVII", en *Poder y sociedad en*

la España de los Austrias, Barcelona, 1982, pp. 248-286; A. MORALES MOYA, *Poder político, economía e ideología en el siglo XVII español: la posición de la nobleza*, Madrid, 1983; del mismo autor "Política social" en J.M. JOVER ZAMORA (dir), *Estado y Cultura (1759-1808)*, t. 31, Historia de España, Madrid, 1987; J.A. MARAVALL, *Poder, Honor y élites en el siglo XVII*, Madrid, 1984; V. PALACIO ATARD, *Los españoles de la Ilustración*, Madrid, 1964; E. POSTIGO CASTELLANOS, "Hábitos de violencia de las nobleza castellano-manchega en el siglo XVII. Los caballeros de las órdenes Militares", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, t. 8, pp. 33-38; G. RUDE, *Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el desafío burgués*, Madrid, 1981; R. TREVOR DAVIES, *La decadencia española, 1621-1700*, (1ª ed. Londres, 1969), Barcelona, 1972, etc.

⁶⁴ Por citar solo dos casos dentro del ámbito de implantación de la entidad manchega, el 4-I-1724 el municipio de Úbeda eleva una representación a los Reales Consejos quejándose de que no contribuyesen al común todos los privilegiados de su vecindario (AHN. Consejos, leg. 5.943, nº 2) y poco después se pronunciaba en el mismo sentido Andújar (Ib., leg. 5.947, nº 16).

⁶⁵ "...no pudiendo los vecinos pobres sobrellevar solos tan pesadas cargas, se ven precisados a desamparar sus casas y lugares, metiendose a mendigos..."; 3 y 14-VI-1728, Madrid (AHN. Consejos, nº 28 y 30).

⁶⁶ Un traslado del título de dependiente del Santo Oficio despachado a favor del ciudarrealeño don Lorenzo del Valle, a la sazón hermano de la Santa Hermandad apícola, cifraba las franquicias de su fuero

"...en no poder ser quintado ni sacado para los exercitos rezivir en las casas de sus moradas alojamientos de soldados hombres de armas y gentes de guerra..., ni tener otro particular

hospedaje ni contribuir en vagages ni carruages ni en los repartimientos que por esta razon se hizieran ni en la contribuzion de milizias si la hibiase, ni poderseles gravar con empleo ni cargos de los concejiles en las republicas como son repartidores, cobradores y quadernos, tutores, curadores, depositarios, y otros que sean gravosos y personales: y que los ofizios de Alcaldes rexidores y demas honorificos los pueden obtener si quisiesen y fuesen de su voluntad y no en otra forma."

14-V-1737, Toledo (AMCR. Actas Capitulares, leg. 23, nº 11, ff. 324-325).

67 En cuanto al papel desempeñado en la administración concejil las figuras de los representantes populares, consultar, entre otros, los trabajos de A. GUERRERO MAYLLO, "La "representación popular" en los concejos castellanos: el Procurador del Común en la Mancha durante el siglo XVI", en *Actas I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, op. cit., t. 8, pp. 29-35; J. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, *Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. Un estudio sobre dos reformas administrativas de Carlos III*, Madrid, 1980; B. GONZÁLEZ ALONSO, "El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII", en *Cuadernos de Estudios de la Vida Local*, nº 190 (abril-junio de 1976), pp. 249-276; J. MARINA BARBA, *La reforma municipal de Carlos III en Ciudad Real*, Ciudad Real, 1985; M. PÉREZ BÚA, *Las reformas de Carlos III en el régimen local de España*, Madrid, 1919; J.L. VILLAR PALASÍ, "Problemática de la Historia de la administración", en *Actas I Congreso de Historia sobre la Administración*, op. cit., pp. 29-38.

68 11-V-1718, Gibraleón (AHN. Div. Her., leg. 5, nº 66, s.f.).

69 Felipe García Collado y González solicita remisión de formulario a la entidad manchega el 26-II-1744, lo que no se verifica hasta un mes más tarde; el 7 de agosto siguiente el procurador síndico general refrenda la veracidad de los testimonios aportados, pero señala que su

concesión los exoneraría de desempeñar los empleos municipales que su calidad permitía; el 5-V-1745, siguiendo los trámites habituales, se logra el visto bueno del corregidor palentino. Desconocemos si fue aceptada la solicitud de este aspirante (Ib., leg. 11, nº 2, f. 9vº).

⁷⁰ Pedro de Valdivia, procurador síndico general de Valdepeñas -Ciudad Real-, lamenta el crecido número de exentos en la villa, arguyendo que el solicitante del título de comisario Juan Gutierrez no intentaba sino "defraudar al resto del comun y vecinos contribuyentes"; a pesar de lo representado, en menos de tres meses obtuvo su nombramiento (13-III-1759, Ciudad Real (Ib., leg 12, 28, s.f.)). El 27-III-1760 el síndico procurador de Arahal desaconsejaba la tramitación del interrogatorio al tendero francés Diego Bergeron Prat, afincado desde hacía nueve años en la citada villa andaluza, porque su oficio estaba reñido con su pretendida consagración a la dignidad de juez comisario, dudar de su limpieza de sangre y reputación así como que derivaría en una mayor carga para el vecindario, máxime cuando ya había otro dependiente de la entidad manchega; poco después obtuvo la acreditación deseada; 22-I/28-VI-1760 (Ib., leg. 12, nº 17). Un escribano numerario del ayuntamiento vigués, alarmado ante el envío de interrogatorios al platero Juan Antonio González y al arriero Tomás Blanco, remite a Ciudad Real memoria contraria a estos trámites, al considerarlos potencialmente perjudiciales al común, muy menoscabado por los recientes ataques ingleses; en sus expedientes originales conservados no se consignaron la concesión o desetimación de las mercedes requeridas; 29-XI-1725, Vigo (Ib., leg.4, nº 43).

⁷¹ Ib., leg. 23, nº 64.

⁷² El 28-VI-1721 los comisarios Juan Jurado y Manuel Ruiz eran conminados a pagar, por vía de apremio, 30 y 14 rs. respectivamente, por lo cual solicitan al regimiento de Ibros -Jaén- ser borrados de los padrones (Ib., leg. 23, 72). El 3-IX-1729, los segovianos Manuel Nieto, Joseph Delgado, Juan de Porras, Juan Martín, Alonso Cavezas, Francisco Campesino, Simón Martín y Antonio González Brabo, dependientes de la entidad ciudarrealena, declaraban que a pesar de ser coaccionados por el corregidor local para efectuar rondas y otras diligencias preventivas propias de la justicia ordinaria, habían sido vejados con la imposición de repertimientos municipales (Ib., leg. 46, nº 2, s.f.). Por su parte Miguel Palomeque y Benito de los Reyes, comisarios de Cabra -Córdoba- se quejaban ante sus superiores que

"...el dicho concejo nos a repartido muy crecidas cantidades de los dichos repartimientos de paxa y utensilios molestandonos muy mucho en su cobranza y aciendonos prender contraviniendo en todo dichos privilexios y esenziones."

(Ib., leg. 4, nº 53).

⁷³ Los pricipios jurídicos medievales concebían la honorabilidad como una cualidad nobiliaria, pero posteriormente este exclusivismo estamental pasó a ser atribuido a otros miembros del tejido social, seguramente como recompensa a sus labores benéficas a la república; J. A. MARAVALL precisa que

"...honor es el premio de responder puntualmente, a lo que se está obligado por lo que socialmente se es, en la compleja ordenación estamental; será reconocido y necesariamente tendrá que ser reconocido entonces por sus iguales, en este alto nivel de estimación..."

Vid. Poder, honor..., op. cit., p. 33.

⁷⁴ Extrapolando lo acontecido con miembros de la justicia local, es probable que en algunas villas los representantes de la Hermandad Vieja ocupasen lugares próximos al predicador durante los oficios

divinos. En el caso concreto de la capital manchega, la concordia entre los cabildos civil y eclesiástico, efectuada el 15-I-1605, regulaba minuciosamente todo lo concerniente al respecto (AHN. Consejos, leg. 1.007, nº 9, ff. 50vº y ss.); en el caso de su fraternidad apícola, no fue preciso llegar a igual acuerdo porque amando ocupaban el banco de oficios municipales sus miembros, al tener esta doble calidad.

Este privilegio no fue exclusivo de los ministros del Triple Instituto, ya que el 12-XI-1613 la Chancillería de Granada estableció que se levantasen las censuras eclesiásticas a los alcaldes de la Hermandad General de Malagón -Ciudad Real-, por pretender mantener la tradición de ocupar escaños preeminentes en la capilla mayor de la iglesia local (ACG. cab. 503, leg. 575, nº 2); aconteciendo en Polán -Toledo-, en 1769, una acalorada disputa verbal entre un diputado y un alguacil con un alcalde de hermandad por cuestiones protocolarias en la parroquia de la villa (AHN. Libro matrícula del Consejo de Castilla, lib. 2.682, nº 1, f. 178r.).

⁷⁵ Tales privilegios eran igualmente reclamados por los alcaldes de la Hermandad del Reino en algunas poblaciones durante el Seiscientos. Conocemos el caso concreto de Burgos, donde el 25-VI-1643 dichos oficiales conejiles lograron del regimiento local el que durante las corridas de toros, comedias y demás festejos ocupasen un asiento entre los regidores, junto al alcalde mayor y los ordinarios (A. SALVÁ, op. cit., p. 124).

⁷⁶ 7-XI-1727, Alcaudete (AHN. Div. Her., leg. 8, nº 62, s.f.). don Jerónimo de Vargas, hidalgo afincado en Andújar, obtuvo su título de ministro superior el 6-VI-s.a. (Ib., leg. 4, nº 71).

⁷⁷ Excepcionalmente, de forma aparentemente voluntaria si bien forzada por los acontecimientos, la corporación manchega renunciaría a esta libertad. En el reparto militar concertado el 5-IX-1631 se estipuló que Ciudad Real y sus aldeas costeasen a ocho soldados, de lo cual quedó exenta su Hermandad Vieja (AMCR., leg. 13, ff. 696-704). Una década después, fracasada la Unión de Armas proyectada por Olivares, en las cuentas presentadas en 1643, se asignaban 80 rs. al ciudarrealeño Pedro de Céspedes, en concepto de "ayuda de costas que tuvo en dar de comer a los cavalleros que se adjudicaron a esta Santa hermandad" (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 5, s.f.); asimismo, en la relación de gastos de 1745 se consignaban 99 rs. impagados del arrendatario de una de las tiendas de la institución "por averlo desposehido de ella para quartel de los soldados que estuvieron en esta ciudad" (Ib., leg. 59, nº 7, s.f.).

⁷⁸ Algunos alcaldes hermandinos compatibilizaron ambos cargos, como don Antonio Fuentes Veraet, capitán de los granaderos provinciales en 1772. Ocasionalmente los milicianos se señalaron en tareas cívicas y de seguridad; el 2-I-1797 un sargento del regimiento de Ciudad Real denunciaba a un paisano de Picón como presunto autor de un pasquín indecoroso contra los alcaldes ordinarios salientes de esta villa del señorío manchego (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 345, ff. 14r-vº).

⁷⁹ Los prejuicios contra la soldadesca son una constante en la época. El juriscinsulto Francisco de Amaya, en 1681, la calificaba de "sentina de perdidos, facineros, crueles, lujuriosos, piratas, robadores, perjuros y blasfemos"; cit. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado...*, p. 77. En ocasiones extremas el tránsito de tropas degeneraba en auténticos saqueos de algunos pueblos, lo que sucedió en Socuéllamos -Ciudad Real- durante la revuelta comunera, cuando en 1519

"...viniendo ciertas compañías de soldados que entonces se llamaban suizos, los cuales tenían fama que hacían grandes robos y agravios por donde iban y queriendo entrar en esta villa, la gente della se puso en armas por defendella la entrada y en conclusion mataron los soldados doce hombres desta villa y hirieron y rompieron casi todos y saqueron lo que pudieron."

C. VIÑAS y R. PAZ, op. cit., p. 473.

Aunque en fechas posteriores no se darían tan sistemáticos excesos, algunos soldados serían encarcelados por la justicia concejil: en 1640 era prendido un soldado de Malagón, pese a las protestas de su capitán ante el corregimiento (AHPCR: Protocolos Notariales, leg. 170, ff. 198r y 342r-v2); en mayo de 1697 el teniente de corregidor destinaba al ejército de Cataluña al militar Esteban de Carrión, apresado por transgredir las pragmáticas contra las armas cortas; asimismo, en mayo de 1762 y marzo de 1764, se reproducen reyertas entre paisanos e infantes en la ciudad, saliendo malparados los primeros (Ib. leg. 568, ff. 30r-31r).

⁸⁰ El procurador síndico de Zafra -Badajoz-, remitió el 16-XII-1756 un informe a Ciudad Real, donde se precisa los perjuicios derivados a la villa por la presencia de tres comisarios hermandinos, pretendiéndose otro por don Francisco Mateos de Toro y Prado, ya que por su estratégico situación de paso obligado de tropas a Portugal proliferaban los exentos, arruinando a los pecheros; dicha representación parece surtir efecto, pues no se consigna que se tramitase la solicitud requerida (AHN. Div. her., leg 11, nº 42, s.f.). El memorial rubricado por el juez comisario y sastre Antonio González, datado en Mérida, el 19-VII-1718, expresa su malestar por verse gravado con alojamientos pese a no ser una persona acaudalada (Ib., leg. 45, nº 3).

81 Mateo Picazo, alcalde ordinario de Tarazona -Zaragoza- y juez superior de la entidad manchega, el 9-III-1710, al intentar ejecutar una comisión por cuenta del Santo Tribunal se halla con la novedad de verse obligado a alojar a un soldado de caballería y a su sirviente, siendo despojado de su vara (Ib. leg. 23, nº 61); en mayo de 1721, don Juan González Mesía, juez comisario de Baeza desde hacía siete años, hubo de acoger en su casa a dos capitanes de la compañía de caballería de Málaga, con sus criados y equipajes, forzándole a asumir cargas de las que consideraba exento; 18-6-1721, Ciudad Real (Ib. leg. 23, nº 71).

82 El 3-III-1728, los comisarios valdepeñeros Francisco Martín Gallego y Alfonso Guerra de la Vega remiten una misiva a la entidad manchega protestando por haberse forzado al primero a alojar a un capitán y a un subteniente; tres días después se envía una requitoria a dicha villa de señorío para que reconsiderase su actitud; el 27-VIII-1728 el concejo deniega la admisión del recurso interpuesto, arguyendo que la exención de alojamiento no se entendía para con los ministros de la fraternidad ciudarreal (Ib., leg. 23, nº 82, s.f.). El 11-XII-1728, los dependientes del Santo Tribunal en Alhama, Marcos Rodríguez de Higuera y Juan Romero Escacha, se ven agraviados con cargas concejiles y alojamientos tras una infructuosas diligencias policiales (Ib., leg. 46, nº 16).

83 Lamentaba W. COXE en su tendenciosa obra sobre los Borbones, que

"...es de notar que aquel sistema de quintas era esencialmente defectuoso, puesto que la posesion que exige en mas alto grado todas las cualidades peculiares de un buen ciudadano, se confiaba a la escoria de la sociedad, la corrupcion y el envilecimiento debian contagiar a los soldados, relajandolos hasta el extremo de asociarlos a los vagos y malhechores; pero era entonces opinion general de los estados de Europa el

considerar a los ejércitos como encargados de la disciplina y corrección de toda clase de gente mala."

Cit. *España bajo el reinado de la Casa de Borbón. desde 1700, en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788*, (1ª ed. Londres, 1813), t. 3, Madrid, 1846, p. 527. Vid. C. BORRREGUERO BELTRÁN, "Reclutamiento militar en el ejército borbónico del siglo XVIII", en *CIH.*, nº 12 (1989), pp. 91-101.

⁸⁴ Domingo Antonio Varela solicita la remisión a su domicilio y al del jerezano Alonso Lorenzo de Araujo, también representante hermandino, sendos autos en la que se expresaran concisamente su franqueza de servir en la milicia provincial, pues aunque aún no habían sido incorporados a ella, sí se hallaban bajo el comando gaditano de milicianos; 18-VIII-1726, Cádiz (AHN. Div. Her., leg. 8, nº 55, s.f.).

⁸⁵ s.d. (Ib. 23, nº 67, ff. 4r-6vº).

⁸⁶ 30-IX-1718 (Ib., s.f.).

⁸⁷ La pertenencia a la Hermandad Vieja manchega tradicionalmente se consideraba compatible con corregimientos, alcaldías de todo tipo, regimientos, regidurías y otros semejantes, no así en su homónima de Toledo, secularmente enfrentada con el cabildo de la Ciudad Imperial por la designación de alcaldías y regidurías entre sus dependientes afincados en las villas de su señorío urbano, durante el Seiscientos (AMT. Caja 2, leg. 1, nº 26 y 27; y AHN. Div. Her. leg. 67, nº 1).

En Almagro, se acostumbraba a nombrar en el momento de publicar la bula de la Santa Cruzada a cuatro vecinos cuarteleros que la recaudasen y llevasen a Toledo; nombrado un herrero para dicha labor se niega a ello porque habiendo sido alcalde de la Hermandad General, "uno de los de mas honor de la Republica", consideraba estar exento a

perpetuidad; el asunto se llevó al Consejo de Castilla y se designó un sustituto interino, lo que se interpreta podría conducir al caos en el gobierno municipal por contravenirse una conducta habitual; en septiembre de 1780 el Fical aconseja, y años después los consejeros aceptan, que se llevase el caso de Madrid a Granada para su resolución definitiva (AHN. Consejos, leg. 877, nº 5).

88 En 1714 el corregidor de Medellín embarazaba el uso de su jurisdicción al juez comisario manchego Francisco Gómez Pascual con el empleo de alcaide, pero es patente que dicho cargo fue anterior al título hermandino, con lo que resultaba innegable su interés en la obtención del mismo para exonerarse de la alcaidía publica (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 21). El 24-VI-1717 los alcaldes ciudarrealeños expedían auto defendiendo el fuero de su ministro superior Tomás Fernández Hidalgo, recientemente vejado con una alcaidía en Osuna -Sevilla-, ante la alternativa de su excarcelación o adelantar 4.000 ducados para pagar a quien lo sustituyese (Ib., leg. 23, nº 65).

89 Juan López Bravo, juez comisario en Membrilla -Ciudad Real- desde 1711, desempeñando el empleo de alguacil mayor de la villa fue encartado por la evasión de un preso hidalgo, autoexculpandose del incidente por "el grabamen que ay en esta villa y la mala forma que ay de carcel y alcayde"; enfermo en cama, este ministro nombraba apoderado ante la Santa Hermandad Vieja y el Consejo de Castilla, temiendo que por el oficio impuesto se consumiera su hacienda; 30-IV/5-V-1721 (Ib., leg. 23, nº 70). Año y medio después el citado comisario se niega a admitir ser depositario de los bienes litigados en el pleito pendiente en Manzanares entre Membrilla y las autoridades de órdenes por la construcción de una torre en la parroquia, solicitando se levantasen sus guardas por temor a que turbasen a su

esposa embarazada y no contar con el apoyo de el respaldo de la justicia ordinaria; 25-IX-1722, Membrilla (Ib., leg. 23, nº 74).

⁹⁰ Lorenzo Nerey de Astorga, vecino de Almazán -Soria-, suplica a la corporación manchega que se le remitiese copia de sus preeminencias como subordinado hermandino, al ser nombrado en la villa "por maiordomo del posito que es oficio penoso y carga concexil", no habiéndosele aceptado su reclamación por el alcalde mayor ni escuchado en su audiencia; 10-I-1725, Almazán (Ib., leg. 46, nº 2).

⁹¹ El 8-VIII-1719 don Luis de Noba permanece encarcelado en Villanueva -Ciudad Real-, al faltar de las arcas reales 800 rs. de vellón y no aceptar ninguno de sus convecinos ser sus fiadores, pese a ofrecerles altas sumas para "estimular" su solidaridad (Ib., leg. 43, nº 14).

⁹² El 15-I-1733, el ministro hermandino Juan Manuel Jaúregui exigía que se le respetasen sus libertades, ya que el regimiento y justicia de Membrilla -Ciudad Real- le presionaba para que percibiese la Santa Bula, reteniéndole los alcaldes ordinarios su título obtenido el 23-XII-1726, respondiéndose desde la Santa Hermandad con una requisitoria contra una justicia ordinaria que le amenazaba con prenderle y embargarle (Ib., leg. 23, nº 89).

⁹³ El 22-I-1705 llegaba a la capital manchega un juez receptor de la chancillería de Granada para cobrar la multa impuesta contra el alcaide de la cárcel real, Juan de Toledo, y al alguacil mayor, don Juan Francisco Velarde -integrante de la asociación apícola-, ascendiendo el monto de dicha exacción a 2.688 rs. por la fuga de Juan García de León, alias "Juan de la Daga", capturado en 1689 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 288, ff. 30r-31vº), peligroso delincuente

que ya en 1681 había sido objeto de atención por parte de la Hermandad Vieja toledana, a instancias de los alcaldes de Casa y Corte (AHN. Div. Her., leg. 66, nº 1, s.f.). El alguacil mayor, que cautoriamente guardaba como cárcel la ciudad y sus arrabales, hubo de pagar 600 ducados de su peculio, debiendo poner en arrendamiento su heredad de Santa María de Guadiana por tres años para tener liquidez (AHMCR. Caja 10, nº 327).

⁹⁴ AHN. Div. Her., leg. 71, nº 9, s.f.

⁹⁵ HERVÁS Y BUENDÍA, junto con PAZ Y MELÍA, sostienen que en 1303 el monarca castellano les concedió el uso de casaca verde con guarnición de plata y estandarte de damasco verde con flecha de hierro, borlas y cordones de seda. En el inventario de bienes de la cárcel de la Hermandad Vieja de Toledo, el 3-XII-1612, se consignan entre diversos efectos "doze ballestas y bestidos verdes de ballesteros" (Ib., leg. 63, s.f.); el aludido PAZ Y MELÍA, en el recuento de bienes de 1747, menciona cuatro sayos y gorros de paño verde con las armas de Castilla y León, cuatro ballestas de madera de encina con arcos de hierro, nueces de asta de ciervo, cuerdas de tensar y cuatro carcajs de pino para portar las saetas (op. cit., p. 104).

⁹⁶ Acordada su concesión por real decreto el 4-VI-1761, no entrará en vigor hasta su validación real en San Ildefonso, el 9-IX-1762 (un ejemplar impreso de la misma en AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 36r-37v²); y su descripción física en A. QUEVEDO Y J. SIDRO, op. cit., pp. 413-414, así como en J.A. ESCOBAR RAGGIO, op. cit., p. 208.

⁹⁷ En 1782, la corporación toledana suplica que le fuera permitido a sus integrantes usar el uniforme concedido años antes de forma pública

(AHN. Libro Matrícula del Consejo de Castilla, lib. 2.682, 1, f. 263r). Pocos años después volverán a dirigirse al Supremo Consejo en igual sentido porque los munícipes les impedían pasar a los ayuntamientos con dicho distintivo (Ib., lib. 2.683, 2, f. 403vº).

⁹⁸ 15-I-1785, Cartagena (AHN. Consejos, leg. 3163, nº 9, s.f.).

⁹⁹ A. QUEVEDO Y J. SIDRO, op. cit., p. 415.

¹⁰⁰ AHN. Div. Her., leg. 14, nº 15, s.f.

¹⁰¹ solicitud de ingreso de don Joseph Hernández de Santa Olaya, vecino de Málaga, 21-XI-1806, Ciudad Real (ADPCR, s.c.; s.f.).

¹⁰² M. LÓPEZ DE AZCUITIA, *La jurisdicción real en su actual relación con las demás jurisdicciones privativas*, Madrid, 1865, p. 9.

¹⁰³ M. LOPEZ REY, "La jurisdicción común castellana en el siglo XVI. Un intento de reconstrucción histórica", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. 4, nº 166 (1935), pp. 484-485.

¹⁰⁴ Una enumeración exhaustiva de todos los procesos en los se hallan envueltos los hermanos de la entidad menchea durante los siglo XVII y XVIII resultaría demasiado prolija y siempre incompleta, por lo cual los que señalamos a continuación una sólo muestra de su diversidad:

.Don Gómez de Aguilera y Guevara nombra a su hermano como procurador ante la audiencia eclesiástica ciudarrealena por ruptura de compromiso matrimonial y acusación de estupro; 9-VII-1634, C. Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 169, ff. 164r-vº);

.Don Gonzalo Muñoz Triviño de Loaysa nombra apoderados en Madrid para representarle en el pleito ante la Mesta por un conflicto de pastos en las montañas de León; 10-IX-1650, Ciudad Real (Ib., leg. 146, f. 225r-vº);

.El citado caballero ciudarrealeño nombra quienes hagan valer sus derechos sobre los pastos de Alcudia; 10-XII-1650, Ciudad Real (Ib., leg. 146, ff. 395r-vº);

.Don Álvaro Muñoz de Figueroa, hace patente su fuero de caballero del hábito de Santiago para declararse exento de la jurisdicción ordinaria; 14-VI-1656, Ciudad Real (Ib., leg. 176, ff. 101r-vº);

.María de Mena se aparta, mediante compensación económica, de la querella por la muerte de su marido contra don Gonzalo Muñoz Treviño y su criado Fernando Prieto; 14-VIII-1659, Ciudad Real (Ib., leg. 206, ff. 82r-83vº);

.Dictamen del Consejo ordenando pagar alcabalas a don Gonzalo Muñoz de Loaysa; 1662 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 17, nº 7, ff. 18r-vº);

.Esteban de Carrión, marcader ciudarrealeño, apela a Granada de la sentencia inculpatoria por un supuesto atentado contra don Juan de Aguilera Pretel, hermano del Santo Tribunal; 26-III-1676, Ciudad Real (Ib., leg. 213, ff. 163r-vº);

.El abogado Andrés Díaz de Porras no rembolsa en los plazos fijados a Cristóbal Muñoz Treviño 8.000 rs., llegando el caso ante el corregidor; 23-XI-1676, Ciudad Real (Ib., leg. 213, ff. 18r-19r).

.Corregidor ciudarrealeño embarga bienes a Juan de Rodas, el menor, cuadrillero y tesorero del pósito municipal, y a sus fiadores, por faltar en las cuentas presentadas en 1699 alrededor de 4.078 fanegas de trigo; 6-VII-1708, Ciudad Real (Ib., leg. 229 bis, ff. 129r y ss.);

.Don Martín Picazo es arrestado el 16-8-1720 por intentar asesinar a don Álvaro Muñoz y Torres, integrante de la fraternidad manchega; 6-X-1720, Ciudad Real (Ib., leg. 553, ff. 27r-28vº);

.Mateo Ruiz Carneros, notario hermandino, denuncia al corregimiento lo que considera la usurpación de sus derechos sobre un olivar; 24-VII-1725, Ciudad Real (Ib., leg. 232 bis, ff. 187r-vº);

.Juan Camborda, mercader manchego y hermano colmenero, se querella de Antonio Folgar Varela por retenerle la devolución de los réditos de un préstamo; 18-XII-1727, Ciudad Real (Ib., leg. 535, ff. 136-137r);

.El marqués de Peñafuente, alcalde hermandino, se querella del conde de Fernán Núñez al haber sido despojado por su mayordomo de unos pastos enajenados; 12-XII-1728, Ciudad Real (Ib., leg. 548, ff. 12r-121r);

.Don Gaspar Sancho Barona, marqués de Villater, da procura para defender sus derechos de usufructo sobre la dehesa del Jinete -término de Almodóvar del Campo- ante la Mesta, arguyendo que su familia la había gozado desde hacía más de 60 años; 8-II-1729, Ciudad Real (Ib., leg. 548, ff. 15r-16r);

.La Chancillería de Granada dirime el pleito relativo a la percepción del arrendamiento de un mayorazgo del conde de Castriponce, dándose veredicto definitivo contra don Agustín Bermúdez de la Torre, hermano de la entidad manchega; 2-V-1731/4-II-1732, Granada (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 22);

.Don Joaquín Josef Cárdenas Treviño, eleva a la chancillería de Valladolid el litigio por exigirle el guardián del covento de S. Francisco los réditos de una capellanía; 7-V-1768, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 551, ff. 40r-vº);

.Ganaderos manchegos, entre los que se encuentra don Diego Bartolomé Dábila Mirabel, alcalde hermandino y marqués de Casa Treviño-Gótor, presionan al corregidor para que el conde de Güemes no logre licencia para sembrar árboles en la isleta Galapagar, en el Guadiana; 13-X-1796, Ciudad Real (Ib., leg. 349, ff. 86r.vº);

.Los sucesores de don Pedro Treviño Baillo y Flores, patrón de la capellanía toledana de San Nicolás, deben asumir el descubiero de 54.000 mrs. heredado; 1-X-1797, Ciudad Real (Ib. leg. 335, ff. 66r-67vº).

.El ciudarrealeño Juan Donaire se querella del marqués de Casa Treviño-Gotor al sentirse estafado en la calidad y cantidad del aceite entregado por el molinero del noble; 31-I-1797, Ciudad Real (Ib., leg. 336, ff. 77r-78r);

.Antonio Sabariegos, hermano pechero, denuncia al corregimiento los supuestos daños de unos animales a su viñedo, pero el peritaje demuestra que se trat de una plaga; 10-V-1799, Ciudad Real (Ib., leg. 335 bis, ff. 50r-51vº).

105 A medida que la corporación apícola ciudarrealeña se consolida institucionalmente, ampliándose su radio actuacional y el número de sus dependientes, los hermanos rectores buscan el modo de establecer los criterios según los cuales ellos mismos podrían ser encausados, salvaguardando sus intereses al ser sus jueces sus iguales, aunque la Corona logrará imponer a sus tribunales supremos como instancias de primera instancia y apelación en tales casos.

106 13-VIII-1687, Talavera (AHN. Consejos, leg. 7.199, nº 25, s.f.).

107 21-II-1621, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, f. 10vº).

108 27-II-1777, Linares (Ib., f.73r-vº).

109 AHN. Códices 933B, ff. 61r-vº.

110 20-VIII-1505, Segovia (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 21).

111 Carta de pago de 500 ducados de la Hermandad Vieja de Talavera para recuperar la prerrogativa de portar sus ministros vara alta de justicia; 10-XI-1652, Madrid.

112 CERVANTES recoge fielmente los atributos que solían llevar estos ministros en sus diligencias. En el altercado de la posada escribe

"Alojaba acaso aquella noche en la venta un cuadrillero de los que llaman de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, el cual oyendo ansimesmo el extraño estruendo de la pelea, asió su media vara y de la caja de lata de sus títulos, y entró a escuras en el aposento diciendo:

- ¡Téngase a la justicia! ¡Téngase a la Santa Hermadad!"

Vid. M. de CERVANTES SAAVEDRA, *El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha*, Parte I (1ª ed. Madrid, 1605) Madrid, 1985, p. 86.

113 Durante el reinado de Carlos I se concedió a los pastores del Honrado Concejo de la Mesta la merced de portar armas, y en las Cortes de Toledo, el 15-VII-1525 el monarca aceptó el que los vecinos de Ciudad Real pudiesen llevar libremente espada y daga; cit. E. BERNABEU Y NOVALBOS, op. cit., p. 56.

114 En el incidente protagonizado por el Diablo Cojuelo con una compañía de comediantes ambulantes valencianos, en una venta del camino real a Andalucía, se resuelve la situación al acudir el ventero

"...con la Hermandad en busca de los dos que se fueron para prendellos, con escopetas, chuzos y ballestas..., los apaciguaron y prendieron a los dichos representantes para llevarlos a Ciudad Real..."

Vid. L. VÉLEZ DE GUEVARA, *El Diablo Cojuelo*, (1ª ed. Madrid, 1641) ed. intr. y not. A.R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ e I. ARELLANO, Madrid, 1988, pp. 150-151

- 115 Nov. R. leyes 1 a 21, tit. 19, lib. 12.
- 116 11/27-IV-1644, Madrid (AHN. Div. Her. leg. 2, nº 2 f. 4r y BN. mss. 13.030, ff. 52r-vº).
- 117 27-IV-1644, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, f. 12vº).
- 118 Nov. R., not. 4 a ley 27, tit. 35, lib. 12.
- 119 AHN. Códices, 933B, ff. 59vº-60r
- 120 Es representativo el incidente acaecido en Madridejos, villazgo del priorato de San Juan, en 1566, con unos ministros manchegos cuando
- "Alonso de Maiorga alcalde hordinario de la dicha villa y de otroalcalde su compañero abian convocado y llamado la mayor parte de los vecinos de dicha villa e concertado y acordado de yrles a quitar el dicho preso y estorvarles e ympedirles que no prendiesen a los otros delinquentes sus compañeros e poniendolo en efecto con grande escandalo y alboroto armados de espadas y rodela y otras armas ofensivas y defensivas abian ydo a la posada adonde posava el dicho alcalde -don Pedro de Torres- y tenia preso al dicho Juan de Arenas y sin el temor de Dios y en menosprecio de nuestra justicia, y en quebrantamiento de los dichos privilegios le habian quitado el dicho preso por fuerzas, y contra su voluntad y abian prencido al scrivano de la dicha Hermandad porque les abia querido leer los dichos privilegios y que avian echo otros muchos malos tratamientos a los dichos alcaldes e alguacil mayor y quadrilleros."
- (AHN. Div. Her., leg. 1, nº 23, s.f.).
- 121 Ib., leg. 50, nº 13.
- 122 25-VI-1773 (Ib., leg. 2, nº 2, ff. 89vº-98r).
- 123 AHN. Div. Her., legs. 23, nº 63, 69, 78, 75 y 76; 45, nº 16 y 18; 46, nº 6; AHN. Consejos, leg. 68, nº 4; AHN. Div. Her., legs. 23, nº

78; 9, nº 13; 23, nº 79; 4, nº 50; 46, nº 12; 23, nº 78 y ACG. Cab. 501, leg. 175, nº 3, respectivamente.

124 El comerciante alicantino Juan Ceilledo solicitaba, el 23-II-1730, remisión del nombramiento de juez comisario de la corporación manchega

"...para que con este nuevo título me pueda evadir de las contingencias y sobresaltos que suelen hazer de mi empleo..., y sobre todo que dicho despacho benga con el mayor título de autoridad que se pueda, pues en vista de este, diferentes amigos tambien negociantes me an hablado para que en respuesta y reconocimiento de este se les solizite otros por medio de v. md. Tambien estimare a v.md. que ademas de venir sellado dicho despacho con sello real, vengan dibuxadas dichas armas sobre la primera oja."

Inserto en proceso de "Fernandillo" (AHN. Div. Her., leg. 38, nº 5).

125 Durante el periodo bajomedieval las organizaciones de Toledo y Talavera desarrollaron un proceso electoral que, aunque similar, muestra el carácter autónomo y el paralelo desarrollo institucional de los integrantes del Triple Instituto. Un estudio sobre los mismos en J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., pp. 160-172.

126 Han quedado escasos testimonios documentales del proceso electoral en Ciudad Real del periodo de los Habsburgo, casi todos del Quinientos (AHN. Div. Her., leg. 3, nº 4 y 6 al 10). Del Seiscientos únicamente se conserva la renovación de oficios de 1623 (AHMCR. caja 7, nº 202). Noticias dispersas sobre dicho procedimiento electoral se consignan en algunos expedientes solicitando hábitos militares (particularmente interesantes son los conservados en AHN. OO.MM., Calatrava, exps. 2637 y 2740), así como los traspapelados entre los protocolos notariales ciudarrealeños, como es el traslado de la elección como alcalde de don Manuel Xédler Gámez, el 13-IX-1688 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 231, s.f.)

129 Tomando septiembre de 1600 como punto de partida, el turno para proporcionar la mayor de los empleos le correspondió ese año a la cuadrilla nº 3, en 1601 a la nº 4, en 1602 a la nº 1, al año siguiente la nº 2, y así sucesivamente. Si bien en principio dichas cuadrillas se correspondían con las parroquias donde vivían, la renovación biológica del personal desvirtuó esta distribución espacial articulada por Maldonado, y la cuadrillas 1 y 3 serían copadas por hidalgos.

127 Conocemos cuando adoptó la corporación toledana cédulas de pergamino para celebrar las habituales votaciones; en Toledo, en la junta de 1-VIII-1665 se acuerda que puesto

"...en este cabildo ay detencion por los votos secretos y que convendra el que se agan en pergamino segun que los tiene el ayuntamiento de esta ziudad y otras comunidades...".

(AHN. Div. Her., leg. 64, s.f.).

128 Esto tiene lugar, por ejemplo, en septiembre de 1623; sin embargo en el último tercio del Seiscientos lo acostumbrado era echar al cántaro tres o cuatro papeletas selladas con cera para proveer ambas alcaldías, variando su número a tenor de los hidalgos acuadrillados que aún no habían desempeñado oficio alguno propio de su status, en tanto que el resto de empleos se sortean entre dos candidatos.

130 No siempre se menciona la edad del niño y nunca su nombre, pero de los escasos casos consultados puede deducirse que su edad oscila entre los ocho y los doce años; así en la elección de 8-IX-1669 el chico tenía una edad aproximada de once años, mientras que el que asistió a la realizada en 1688 los diputados la estiman en doce años.

131 Durante el Seiscientos la elección en su homónima toledana se hacía de la siguiente forma: se introducían en una urna los nombres de todos los hermanos mayores de edad, y con en mínimo de 4 años de antigüedad en la entidad, y en otra diez cédulas con las alcaldías y el resto blancas hasta completar el número de los elegibles; los diez agraciados salían de la sala y el resto votan en secreto sus preferidos; los cuatro más votados entran de nuevo en suerte y se eligen dos por el procedimiento antes descrito. El resto de los cargos se proveen sin tantas formalidades, siempre mediante sorteo.

Por su parte, los estatutos talaveranos de 1747 establecen que en el cabildo general del 15 de agosto se procederían a sortear los cargos "para mas seguridad", remplazando a la elección secreta por mayoría simple; tales formalidades en sus Ordenanzas de 1747, op. cit., ff. 14-18.

132 Durante los siglos XVI y XVII la bebida usual en dichas colaciones fue vino de la tierra, aunque eventualmente consta que se hizo sangría añadiéndole manzana y azucar, como acontece en septiembre de 1597, o se confecciona "dulcitrón" -una suerte de refresco, a tenor de lo consignado en las elecciones de 1608-. En 1761 se consignan los ingredientes de la limonada, que estaba sazónada por 2 libras de azucar rosado, 6 libras de azucar blanca, 2 de almendras, 1 onza de canela, un celemín de sal, una carga de agua y 3 arrobas de nieve del pozo local. Su coste varió entre los 25 ó 30 rs. de fines del quinientos hasta los 200 rs. de las décadas centrales del Setecientos, con la excepción de 1738, cuando se trajo la nieve del pozo de Manzanares.

133 Por primera vez se consigna en 1738 que entre los hermanos asistentes se distribuyen 2 ducados, ascendiendo el desembolso, por

tal concepto, a 450 rs. El importe de dichas gratificaciones se estabiliza en la década siguiente en unos 420 rs., dándose entre 1749-1751 30 rs. a cada concurrente; para luego, entre 1761-1764 reducirse a 13 rs. La última referencia data de septiembre de 1775, cuando los asignados en el día de la elección montan poco más de 417 rs.

¹³⁴ AHN. Div. Her., legs. 60, nº 4 y 59 nº 3.

¹³⁵ A pesar de todo, este cargo no era particularmente apreciado en Toledo, debido al secular enfrentamiento con el corregimiento. Una real provisión del Consejo de Castilla, de 26-VII-1596, confirma el acuerdo capitular de que el primero de agosto se sorteasen las plazas entre los hermanos mayores de edad, los alcaldes se elegirían por votación entre cuatro aspirantes de los ocho presentados, permaneciendo en el cabildo; los más votados serían encantarados poniendo dos cédulas en blanco y dos con el nombramiento de alcalde entre los presentes. Como los hermanos más antiguos no solían asistir, excusándose de ser elegidos, se consigna que desde entonces no fuese requisito su presencia en tales reuniones, salvo su mayoría de edad y tener posada poblada en los Montes de Toledo (Ib. leg. 66, nº 1, s.f.).

¹³⁶ S.d.; cit. J.M: SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 180.

¹³⁷ Este proceso es extrapolable a la corporación de Toledo, pero no ocurre lo mismo con la de Talavera, de donde su alcalde mayor informaba el 19-VII-1775 de la lastimosa postración de su cabildo, controlado por don Antonio Ortiz, quien desde hacía más de 27 años ocupaba los cargos de fiscal, contador y tenedor del sello

"...siendo quien gobierna el Tribunal, sin que los alcaldes entiendan en cosa alguna mas que en percibir sus propinas o firmar lo que el fiscal les previene de manera de que si ai algo bueno a este se le debe atribuir y lo mismo al contrario..."

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

138 Los alcaldes don Francisco Treviño Calderón de la Barca y don Diego Zapata Carbajal y Rocha, obligados a litigar en la chancillería vallisoletana por las censuras eclesiásticas del visitador general de la Mitra toledana, propusieron el primero a don Gaspar Sancho Varona, don Tomás de Aguilera Henríquez de los Ríos y don Pedro Treviño; y el segundo a don Alfonso Muñoz, don Diego de Haro y don Francisco de Cárdenas, para que entre ellos el cabildo proveyese a sus sustitutos interinos (AHN. Div. Her., leg. 3, nº 14, ff. 14vº).

139 AHN. Códices, 933B, f. 14vº.

140 26-VIII-1799, Madrid (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.)

141 AHN. Div. Her., leg. 63, s.f.

142 El alguacil mayor don Luis Bermúdez, alguacil mayor en 1628, cuatro años después aún no había percibido los 800 mrs. de su salario anual (Ib., leg. 58, nº 4).

143 13-VI-1485, Córdoba (AGS. RGS. f. 51). Cit. J.M: SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 188.

144 Este cambio semántico comportaba una significación jurídico-profesional más profunda. Únicamente conocemos de dos gestores de la hacienda hermandina que tomasen tales denominaciones, Josef Muñoz de la Rica, regidor -1798/1799- y Francisco de Nabas -1799/1800-; en

ambos casos se trata de hermanos pecheros, el primero de ellos renuncia voluntariamente a su asignación anual, y al segundo no consta que se le retribuyese. Probablemente se tratase de un sistema novedoso y coyuntural en razón del cual algunos hermanos asumían, de fuerza o de grado, las funciones desempeñadas anteriormente por el mayordomo, en el seno de una entidad decadente. No tan solo no se le pagaron nóminas ni gratificaciones, sino que al primero terminan debiéndole 9.962 rs., y otros 3.142'17 rs. al segundo (ADPCR, s.c. y AHN. Div. Her., leg. 62, nº 5, s.f., respectivamente).

¹⁴⁵ Esta circunstancia tuvo lugar en 1515-1516 cuando Antonio de Carrión debe suceder al difunto mayordomo Román Sánchez; en 1519-1520 deben sucederse al frente de la hacienda hermandina, Francisco Velasco y Diego de Montilla; en 1608-1609 hicieron lo propio Francisco Serrano Arévalo y Simón Romero y en 1643 Jacinto Hernández presentó las cuentas en nombre de Magdalena de Rojas, viuda del ex-arquero Cristóbal Sánchez de los Carneros (Ib, legs. 56, nº 17, 18; 57, nº 5 y 58, nº 5).

¹⁴⁶ En 1679 Lucía Ruiz de Sarabia, viuda del ex-mayordomo Martín de Torres, solicita al cabildo que se le acabasen de abonar los 300 rs. que se le adeudaban desde la alcaldía de don Juan de Aguilera (Ib., leg. 58, nº 11).

¹⁴⁷ El 9-VI-1616 los regidores ciudarrealeños don Jerónimo Bermúdez y don Luis Fernández Treviño son designados por el concejo para adquirir trigo para el pósito municipal. Pedro Triviño de Hoces, don Gabriel de Guzmán y Francisco Serrano de Arévalo, alcaldes y mayordomo de la Hermandad Vieja se comprometen a adquirir 100 fanegas por un precio de 25 rs. -18 de la tasa y 7 del porte-. Al ajotarse los plazos previstos

y puesto que en noviembre de dicho año aún restaban por entregar 61 de la fanegas estipuladas, la justicia ordinaria encarcela al mayordomo hermandino y se embargan los bienes de los mancomunados, lo que se considera un agravio por el confinado, pues la deuda de pósito obliga por igual a hidalgos y ciudadanos, arguyendo que le

"...hicieron obligar -los aludidos exalcaldes- a la dicha cantidad prometiendo que cumplirían de suerte que yo fuese molestado y aunque rescivieron el dinero y la gastaron en las necesidades de la Hermandad, y en mi poder no hay maravedís algunos porque di cuenta del tiempo que fui mayordomo y alcances a la dicha Hermandad con once mil y tantos marabedis..."

El 27-I-1617 el arquero saliente seeguía en la prisión pública y aunque el corregidor Alonso Nieto ordenó preder a los hidalgos, don Pedro Triviño estaba bajo arresto domiciliario y a su compañero le dejan en libertad de movimientos por la galera real. El 18-VIII-1617, el alcalde don Juan de Aguilera se compromete a entregar el grano restante, debiendo pagar sus predecesores 58 rs. el primero y 125 rs. el segundo, del total "de los dos mil y quinientos reales porque se obligaron para esta Santa Hermandad" (Ib., leg. 58, nº 1, s.f.).

¹⁴⁸ Tras el óbito del mayordomo Juan Isidro Granados, el 13-VI-1732, sus herederos reclaman la asadura impagada por el notario Juan Manuel, arrendada en octubre de 1712, y de cuya deuda pretendía eximirse el marido de su viuda; 7-III-1733, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nº 9).

¹⁴⁹ Poseían juros y censos los mayordomos Gregorio de Córdoba -1632/1635- y Juan de Salcedo -1666/1667 y 1675/1676-; vinculados al negocio lanero, entre otros, caben ser citados Cristóbal Sanchez Aguado -1603/1604 y 1610/1611- y Cristóbal Sánchez de los Carneros -1636/1638 y 1641/1643-; el también tesorero hermandino Rodríguez de Soto -1635/1636-, está emparentado con una familia de plateros cuya cabeza visible era Cristóbal de Soto (AHPCR. Protocolos Notariales,

leg. 170, f. 269r). Ya en el Setecientos aparecen como mercaderes locales Juan de Camborda y Francisco Serrano, mayordomos apícolas durante el periodo contable de 1706-1707 ; Juan Isidro Granados, administrador hermandino prácticamente desde 1707 a 1732, actúa como apoderado de un hermano mesteño para arrendar los pastos de Alcudia en octubre de 1713 (Ib., leg. 230, ff. 127r-128r), y su primogénito, sucesor en tal empleo -1741/1760-, desde 1721 aparece como administrador del mayorazgo de un familiar lejano indiano; por último, Félix Eugenio de León, gestor del pósito fundado por don Álvaro Muñoz de Figueroa, entre 1753-1772, compatibilizaría este cargo con el de mayordomo hermandino durante la década de 1760 (AHN. Consejos, leg. 1.630, nº 36)

¹⁵⁰ Francisco Serrano de Arévalo llevó ante la Real Chancillería de Granada la impugnación de su nombramiento como alcalde de la Hermandad General de Ciudad Real por parte de su ayuntamiento el 11-II-1613 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 10, f. 111vº); siendo dicho sujeto arquero hermandino los periodos que abarcan 1602-1603, 1608-1609 y 1618-1619.

¹⁵¹ 19-IX-1435, Segovia (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 80); pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 333.

¹⁵² Ib., leg. 6, nº 73, f. 2r.

¹⁵³ AHN. Div. Her., leg. 60, nº 5, s.f.

¹⁵⁴ Ib., leg. 57, nº 8, s.f.

155 Los informantes designados por el Consejo de Órdenes, especialmente durante el Setecientos, describen con toda minuciosidad los trámites formales de su comisión. Así, el expediente instruido el 29-IV-1702 señala que las cuatro llaves hermandinas se encontraban en poder de los alcaldes, uno de los escribanos y el llavero mayor, don Francisco Treviño Guarnizo Bermúdez (AHN. OO. MM., Calatrava, exp. 1.757, f. 62r); en 1734 el marqués de Villater era mencionado como llavero mayor (Ib., San Juan, exp. 23.615); por último, el 17-X-1765, se apunta como titular de este empleo a don Luis Velarde y Viedma (Ib. Calatrava, exp. 2.637).

156 Un análisis de la figura de este personaje, durante el siglo XV, en J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, pp. 189-192.

157 La pragmática de 6-VI-1493 prescribía el requisito de preparación jurídica para ocupar cargos judiciales, se eleva la edad mínima exigida y se precisa la obligación de acreditar diez años de preparación. Aunque la segunda ley de Toro sujetaba a examen de derecho regio a los letrados, su cumplimiento no fue riguroso. Alonso de HEREDIA aconsejaba

"...a los que houvieren de elegir Iuezes que los busquen y procuren letrados, aunque a ello de rigor no sean obligados...las letras...no embotan la lança, antes escusan de un asesor, y evitan el rodeo que resulta de tener Iuez sin letras... Y siendolo todo uno, se despachan muchos mas negocios, y las audiencias y Republica andan mejor servidas y concertadas: y hay mejor lugar para suplir el Iuez los deffectos de los abogados..."

Vid. *Dechado de Iueces en el qual se hallara la muestra de qual deve ser un buen iuez*, Valencia, 1566, ff. 66v^s-67r.

158 L. GUARDIOLA Y SAEZ previene, en este sentido, que

"...siendo el Juez lego o no letrado (como lo son por lo general todos los corregidores de capa y espada, Alcaldes Ordinarios y de Hermandad) debe nombrar un Aboqado de ciencia y conciencia para las providencias de Justicia, o que puedan perjudicar."

Vid. *El corregidor perfecto y juez perfectamente dotado de cualidades necesarias y convenientes para el buen gobierno económico y político de los pueblos, y la más recta administración de justicia en ellos*, Madrid, 1785, pp. 47-48.

159 No sería fácil la aceptación de letrados para este cargo, aunque sin duda en Ciudad Real no ocurriría lo que en Toledo, desde donde el 17-V-1717 se informaba a Madrid que los alcaldes de la Hermandad Vieja siempre actuaban junto a asesor, aunque era

"...una de las dificultades maiores entrontrar asesor quien lo sea, porque todos -los pleitos- se siguen de oficio y son los reos tan pobres que solo se les paga del caudal de la Hermandad las asesorias..."

(AHN. Div. Her., leg. 70, nº 1, s.f.).

160 En el nombramiento de asesor a favor de don Joseph Sánchez de Torres, los alcaldes entrantes designan a este letrado y regidor perpetuo de la ciudad "por su notoria literatura", añadiendo la protocolaria coletilla de que se realizaba conforme a derecho pues "no concurre ni ha concurrido fraude ni dolo alguno", siendo aceptado al día siguiente; 18/19-IX-1732, C. Real (Ib., leg. 3, nº 14, ff. 6r-vº). Dicho sujeto, el 7-VI-1730 se había hecho con el título de contador de millones, aunque debió litigar con su antiguo titular, dirimiéndose el asunto en la Audiencia de Sevilla, el 11-XI-1731, en favor de un tercero (Ib. leg. 4, nº 55).

161 Un caso extremo se da entre 1741-1742, cuando la entidad se hace cargo de los salarios y derechos como asesores de don Ignacio de

Palacios, don Joseph Sánchez de Torres, don Francisco Coronel y don Nicolás Portillo (Ib., leg. 59, nº 4).

¹⁶² El licenciado Joaquín Bastante, actuó como asesor en solitario o compartiendo el empleo, entre 1603-1615; el licenciado Rojas hace lo propio entre 1609-1611; el magistrado Juan de Casas entre 1631-1637; Esteban de Torres entre 1639-1667, prácticamente de forma ininterrumpida, etc.

¹⁶³ En 1632-1633 los alcaldes hermandinos toman como asesor al licenciado Marco Antonio de Oviedo, corregidor ciudarrealeño (Ib., leg. 58, nº 4, s.f.); igualmente ocupó interinamente dicha plaza don Pedro Sevil de Oreja, ex-delegado regio en la capital manchega, entre 1639-1640 (Ib., leg. 58, nº 5).

¹⁶⁴ 5-s.m.-1714, Ciudad Real (Ib., leg 4, nº 20). A pesar de esta negativa por parte de la corporación apícola, dicho profesional estuvo temporalmente alejado del cargo entre 1717-1719 por motivos que ignoramos.

¹⁶⁵ Don Manuel Ruiz Brabo percibió del periodo 1781-82 un total de 1.345 rs. de vellón (Ib., leg. 62, nº 1).

¹⁶⁶ Se diferencia la entidad talaverana, que en sus ordenanzas de 1747 establecían que fuesen nombrados por los alcaldes y el cuadrillero mayor, asignándoles una nómina de 88 rs. anuales. Op. cit., p. 26.

¹⁶⁷ Estatutos de la Hermandad Vieja manchega, 1792, op. cit., f. 64r.

¹⁶⁸ Cortes de Toledo de 1480, ley 54; OO. RR., II, 12, 1; N. R., II, 13, 11 y Nov. R., V, 17, 12. Cit. M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, op. cit., p. 156.

¹⁶⁹ Pub. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., p. 328.

¹⁷⁰ En las limosnas institucionales de Navidades de 1501 se consignan socorros al portero Alonso Lopes y a su esposa, por valor de 4 rs., y a la viuda del ex-portero Diego de Escobar, otros 2 rs. (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 8, s.f.); pub. L.R. VILLEGAS DÍAZ, "Pobreza y beneficencia en Ciudad Real a fines del reinado de los Reyes Católicos: las limosnas de la Hermandad Vieja en 1501", en *Almud*, nº 4 (1981), p. 130.

¹⁷¹ Vid. J. M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit., l. 194; en 1501 se otorgan 3 rs. a Constanza de Torres, mujer del vocero, cit. L.R. VILLEGAS DÍAZ "Pobreza y beneficencia...", op. cit., p. 130.

¹⁷² AHN. Div. Her., leg. 57, nº 2 al 9 y ADPCR. , s.c.

¹⁷³ Entre 1616-1617 desempeñó dicho empleo, por sorteo, Pedro de Padilla; en 1617-1618 Agustín de Burgos; y en 1623-1624 Gaspar de Villanueva (Ib., leg. 58, nº 1 y 2; y AHMCR, caja 7, nº 202, f. 13r.).

¹⁷⁴ El presbítero L. DELGADO MERCHAN afirmó que desde mediados del siglo XIV contaba con cárcel de hermandad Villa Real. Aunque verosímil, desconocemos la fuente en la que basó su aserto dicho erudito local. Op. cit., p. 314.

175 Los hermanos Fernando y Francisco de Tapia se alternan en la alcaidía hermandina entre 1684 y 1687, fecha en la que muere el primero y queda el segundo en dicho empleo hasta 1698. Francisco de Oreja ejerció como carcelero del Santo Instituto entre 1665-1667; su hijo, Gabriel de Oreja, era sotalcaide de la galera real en 1792 y años antes había ayudado a custodiar reos de hermandad, cuando hacia 1705 toma posesión de los calabozos de la fraternidad apícola; a su muerte en 1710 quedó su hijo, de igual nombre, en su puesto, y a este sustuyó Juan de Oreja entre 1711-1715, reapareciendo de forma circunstancial en 1730 este último, para volver definitivamente entre 1736-1745, siendo a su vez sustituido interinamente por Manuel de Oreja en 1743, sucediéndolo esporádicamente en su empleo su sobrino Vicente de Oreja , entre 1749 y 1752.

176 Mateo de Piedrabuena ejerció como carcelero del Santo tribunal entre 1593-1612, al menos; Juan Sánchez de Ventas entre 1637-1646; Juan Martel entra en el cargo el 4-VI-1726, dejándolo nueve años después...

177 En este supuesto, la asignación anual se reparte proporcionalmente entre cuantos hubiesen desempeñado el oficio. Tal eventualidad fue relativamente frecuente, aunque era extraordinario el nombramiento de tres titulares durante un único mandato, lo que ocurrió en 1715: el 6 de abril era relevado Juan de Oreja por Cristóbal de Soto, hasta que el 6 de junio fue remplazado por Antonio Sánchez, quien a su vez dejó paso al designado en el nuevo cabildo de septiembre.

178 Una copia del libro de entradas y salidas del alcaide Diego de Toledo, de 1797, el único del que tenemos noticia que se conserva en AHN. Div. Her., leg. 53, nº 4, s.f.

179 Gaspar Dorado ostentó ambos cargos voluntariamente, presentando como aval de su pretensión la hipoteca de su casa y pagos con 3.000 vides, mancomunándose con su esposa al haberse retirado como fiador su hermano Antonio Dorado; 22-4-1751, Ciudad Real (Ib, leg. 4, nº 65 y 66). Coincidiendo con el Catastro de dicho año, su expediente precisa que contaba 42 años, casado con una mujer de 34 años, con tres hijos, disfrutaba del arriendo de un tercio de una casa y poseía en propiedad una pollina (AHPCR. Catastro de la Ensenada, leg. 454, exp. 391).

180 El ex-alcaide Juan Martel, acompañado de sus hijos, arrestan al reo fugado Bartolomé Tocados, causante de sus cuitas, cuando ejercía su oficio de cordelero asilado en la ermita de Nuestra Señora de Gracia, devolviéndolo a la mazmorra de la que había huido ocho meses antes (AHN. Div. Her., leg. 47, nº 7).

181 El carcelero hermandino acostumbra a ser una persona madura, de unos 30 a 50 años, casado, con hijos a su cargo y a menudo conviven con él sus padres o suegros ancianos. El tener bajo el mismo techo a su familia en la sede del Santo Tribunal se facilitaba su permanencia en la misma constantemente y una ayuda eventual a determinadas labores, aunque era potencialmente peligrosa para sus miembros. En el primer tercio del Dieciocho la fuga de Alonso Mateos, Juan González Bazán y Sebastián Rodríguez termina con el estrangulamiento con una toca de la madre del alcaide, Inés de Céspedes, para sustrerle las llaves de la cárcel; la noche del 26-XI-1793 acontece una huida masiva de nueve reos con la complicidad de la hija soltera del carcelero, fechoría que le supone cuatro años de reclusión en el hospicio de San Fernando (Ib., leg. 45, nº 14; 62, nº 3 y ADPCR, s.c.).

182 Juan García Hortelano, maestro de albéitar ciudarrealeño, accede interinamente a esta plaza el 16-V-1758, al fugarse cuatro reos y ser encartado Gaspar Dorado. Un nuevo quebrantamiento de cárcel, la madrugada del primero de agosto de dicho año, nos muestra que dormía en su propia casa, en vez de en los aposentos altos de la sede hermandina (AHN. Div. Her., leg. 51, nº 14).

183 La nómina anual del alcaide era de las más elevadas entre las asignaciones de la Hermandad Vieja de Ciudad Real:

<u>1600-1601</u>	<u>1640-1641</u>	<u>1641-1642</u>	<u>1642-1643</u>	<u>1666-1667</u>
264'21 rs.	100 rs.	441'17 rs.	220 rs.	484 rs.
 <u>1683-1684</u>	 <u>1711-1712</u>	 <u>1736-1737</u>	 <u>1799-1800</u>	
440 rs.	440 rs.	900 rs.	300 rs.	

184 El alcaide Juan de Oreja, entre 1712-1713, percibió 43 rs. como acostamiento por el trabajo que tuvo cuando las tropas del Archiduque entraron en la ciudad; al mismo carcelero las gratificaciones del periodo 1736-1737 engrosan en 256 rs. su situado anual; hacia 1750 se abonan a Vicente de Oreja 162 rs. "en atenzion a su mucha pobreza y diligenzias que hizo pertenezientes a dicha Hermandad".

185 El ciudarrealeño Cristóbal de Guzmán asitía a labores de vigilancia en la galera como cuñado del alcaide Francisco de Oreja, durmiendo con su familia en la cocina alta de la cárcel, mientras el titular yacía en su casa con su esposa; 24-2-1669, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nº 4). El gallego Francisco Verdial, amigo de un alcaide moribundo, ayuda al hijo de éste en la custodia de los arrestados, cuando en 1726 se fugan de la prisión dos peligrosos bandoleros (Ib., leg. 46, nº 1).

¹⁸⁶ El aguinaldo al alcaide y al sotalcaide en 1775 montó 260 rs., elevándose a 280 entre 1777-1780; el 12-I-1782 se gratificó graciosamente a Josef Bernal con 100 rs., doblándose el asignado diario de guardián y presos con motivo de las festividades de Viernes Santo, de la Virgen del Prado y la de Navidad (Ib., legs., 61, nº 3; 4, nº 5 y 62, nº 1).

¹⁸⁷ Ib., legs. 58, nº 5 y 19; 59, nº 2; y 60, nº 1.

¹⁸⁸ Normalmente el alcaide está obligado a responder con su persona y bienes de la integridad y seguridad de los reos confiados. Para escapar a esta onerosa obligación, algunos de estos oficiales se asilan a sagrado, que si bien no evitan interrogatorios y embargos a medio plazo, sí le exoneran de la aplicación tormentos para extraerle la confesión. En el peor de los casos la acción legal emprendida se dilataba durante meses, quedando lo incautado bajo tutela del Tribunal, pero siendo excarcelado con prontitud. Aunque la separación temporal o perpetua del cargo le privaba de su fuente de ingresos no se descargaba todo el peso de la ley sobre ellos, por temor a que disuadiera a posibles sustitutos. Por ejemplo, Gaspar Dorado, alcaide de 64 años, se retiró al monasterio de San Francisco antes de notificarse la fuga acaecida recientemente; requisados sus míseros enseres el 1-XI-1768, al verano siguiente aún permanecía en sagrado, y en 1771 el fiscal que llevaba el caso se quejaba que hacía dos años que no se seguían las diligencias pertinentes contra los indiciados, pese a lo dispuesto por la chancillería granadina (ADPCR, s.c.).

¹⁸⁹ El 14-IV-1680 el alcaide ciudarrealeño Juan de Mena hería a un reo hermandino, concretamente al gitano Francisco Rodríguez, siendo

encarcelado en la galera real por orden de los alcaldes de la Hermandad Vieja (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 221, ff. 108r-vº).

¹⁹⁰ En las postrimerías del Seiscientos, el cuadrillero Gaspar Chico actúa eventualmente como sotalcaide en las cárceles de Ciudad Real, siempre custodiando reos del Santo Instituto, entre 1692-94 (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12). Entre 1775-1781 Joseph Bernal ejercía de alcaide, auxiliándole como sotalcaide su hijo Alfonso (Ib, leg. 61, nº 3 al 5). Las ordenanzas manchegas de 1792 señalan la costumbre de nombrar a un ayudante al carcelero con el rango de oficial adjunto a su superior (AHN. Códices 933B, f. 73vº). En abril de 1797, es abortada una evasión masiva de la cárcel hermandina al percatarse el sotalcaide y tañer la campana del inmueble, acudiendo un destacamento de caballería acantonado en la plaza pública, alarmado por contarse entre los custodiados un desertor (AHN. Div. Her., leg. 53, nº 4).

¹⁹¹ La noche del 30-IX-1768 huyen tres reos de la galera del Santo Tribunal, gracias a la colaboración exterior, probablemente la del hijo del alcaide, Vicente Luis Dorado, joven de 16 años de edad y aprendiz de herrero, sospechoso de aliviar las prisiones de los escapados a cambio de dinero y luego sobornado por un mesonero con 70 rs. para facilitar el quebrantamiento de cárcel (ADPCR, s.c., ff. 20r y 53r).

¹⁹² Aunque es posible que anteriormente hubiese acudido a los jueces hermandinos, separado del empleo poco antes con motivo de una fuga, en 1736 opta por recurrir a la justicia ordinaria para que entendiese de la causa (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 546, ff. 151r-152r).

193 La petición 76, a la sazón atendida, estaba redactada en los siguientes términos:

"Suplicamos a Vuestra Magestad, que porque los que se condenan por hermandad a pena de saeta, los asaeteen bivos, sin que primero los ahoguen, y parece cosa inhumana, y aun es causa de que algunos no mueran bien, que Vuestra Magestad mande que no se puedan tirar saetas a ninguno sin que primero los ahoguen, pues esto se hace con los hereges."

Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla, t. 4, p. 561.

194 El carácter esporádico de los servicios del verdugo, junto a la falta de fondos del Santo Tribunal haría poco atractiva esta ocupación en lugares donde su presencia no era requerida asiduamente.

Entre 1597-1598 Alonso Martínez, residente en Almodóvar del Campo, atormenta a los reos Francisco Martínez Y Gonzalo Hernández, percibiendo por casi un mes de trabajo en la ciudad 5 ducados; poco después es de nuevo reclamado, cobrando 100 rs. por aplicar una tortura, azotes y garrote. Alonso Lozano, vecino de Almagro, acude al servicio de la Hermandad Vieja entre 1603-1604 y 1618-1619; varias veces viene de Almagro, entre 1606-1611, el ejecutor Alonso Sánchez, quien entre 1617-1618 aparece como el primer verdugo estable de la corporación durante el Seiscientos, con un situado anual de 2.000 rs. (AHN. Div. Her., legs. 56, nº 23; 57, nº 4 y 7; 58, nº 3, y ADPCR. s.c.). Por última vez acuden ejecutores ajenos al Santo Instituto el 2-11-1639, cuando Pedro Nieto, vecino de Belmonte, emplea nueve días en ejecutar a tres delincuentes en Peralvillo, a razón de 4 ducados diarios y 6 el día del ajusticiamiento; Francisco Sánchez Cortés, hermano colmenero que lo escolta en sus desplazamientos, recibe 5.520 mrs. en concepto de dietas (Ib., leg. 58, nº 5). A finales de la centuria sería reclamado a Toledo un verdugo, quien a la postre se quedaría comotitular de la plaza.

¹⁹⁵ El 3-III-1662 desde Santisteban se reclama a Andrés de Alcalá, verdugo ciudarrealeno, para ejecutar un ahorcamiento a razón de 4 ducados diarios y 10 ducados el día de la aplicación de justicia (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 193, ff. 24r-25r); el 3-7-1676, Sebastián Díaz Quirós, alcalde por la Hermandad General de Quintanar de la Orden, acompaña al citado ejecutor para aplicar las penas corporales a un parricida múltiple (ib., leg. 197, ff. 97r-vº); el 23-3-1681, dicho verdugo fue a Manzanares a dar garrote al convicto Juan Camacho (ib., leg. 204, f. 8r.vº); el 5-3-1684 el alcalde mayor de Alcaraz reclama al verdugo Juan Asensio ante el corregidor y los alcaldes de la asociación apícola para ejecutar a un ladrón y a un violador (Ib., leg. 204, ff. 16r-17r); un vecino de Membrilla, a instancias de la justicia local, el 13-12-1691 solicitada a los alcaldes hermandinos que Juan Sastre fuese a dicha villa, con la debida escolta, para aplicar una pena capital (ib., leg. 208, ff. 99r-100r); por último, cuando el 1-8-1748 el gobernador de Almodóvar del Campo dictamina el ahorcamiento del asesino Joseph Cortés, recurrirá a Antonio Sastre, residente en Ciudad Real (Ib., leg. 555, ff. 45r-46r).

¹⁹⁶ Se trata de Marcos Morón, quien por medio año fue retribuido con 2.500 mrs., de los que su viuda en 1603 todavía reclamaba 2.000 mrs.; dicho sujeto aparece en las cuentas de 1597-1598 como pregonero, y por asistir a una sentencia afflictiva recibía 4 rs. de gratificación; como hospitalero solo percibió 1 ducado, el salario de medio año, "porque hizo gracia de lo demas que avia servido" (AHN. Div. Her., legs. 57, nº 2 y 56, nº 23).

¹⁹⁷ En el periodo 1631-1632 desempeñaron este puesto los hermanos Blas y Juan de Ramo Gil; mientras entre 1635-1636 se libraron diversos

emolumentos al primero de ellos y a Francisco Martínez (Ib., leg. 58, nº 4 y 5).

198 Juan Isidro Merino, oriundo de Ciudad Real pero afincado en Valencia, se compromete a servir como ejecutor hermandino por 6 años, desempeñando paralelamente la labor de peón público del ayuntamiento manchego, el 9-IX-1775 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 26, nº 4, f. 96).

La evolución de las nóminas anuales de los verdugos fue la siguiente:

<u>1602-1603</u>	<u>1683-1684</u>	<u>1706-1707</u>	<u>1722-1723</u>
147 rs.	330 rs.	440 rs.	330 rs.
<u>1777-1778</u>	<u>1780-1781</u>	<u>1798-1800</u>	
1100 rs.	3 rs. diarios	2 rs. diarios	

A fines del Seiscientos se recurrió a condonar o aplicar rentas inmobiliarias hermandinas a sus verdugos: así a Juan Asensio, entre 1688-1689 se obra en su vivienda por cuenta del Santo Instituto, y en las cuentas de 1691 se asienta del mismo "quedo pagado con los trescientos reales en que tenia alquilada la casa y corredores y tienda" (Ib., leg. 58 nº 12).

199 El 7-III-1667, el ciudarrealeño Andrés de Alcalá era gratificado por dos tormentos, "y poner los palos en Feralvillo", con 192 rs. (Ib., leg. 58, nº 8), siendo por entonces la tarifa habitual por una tortura 4 ducados.

200 F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, a fines del siglo XVIII ya señalaba que "el verdugo tiene por sus derechos los vestidos que los reos lleven a la horca, excepto la camisa interior, o anillos que lleven en el dedo" Vid. *Práctica universal forense de los Tribunales de España y de las Indias*, Madrid, 1788. p. 317. No resulta extraño que dichos oficiales

se queden con parte de los bienes incautados sacados a almoneda pública por el Santo Tribunal: en 1684 se remata en 100 rs. una pollina en Juan Asensio, y en 1693 un cuchillo grande y unas camisas embargadas serán adjudicadas a dicho ejecutor (Ib., leg. 58, nº 12).

202 Las ordenanzas de 1792 establecen los honorarios correspondientes a cada ejecución de justicia, la tarifa es la que sigue:

ejecución de horca o tortura..30 pesos	azotes.....20 ducados
descuartizamiento.....60 pesos	vergüenza pública..10 ducados
amputación de mano o cabeza...40 pesos	argolla.....10 ducados

203 Un viajero francés, en sus reflexiones sobre la figura del ejecutor y su familia en la España de la Ilustración, escribía

"En todas partes el verdugo, su mujer y sus hijos forman una clase aparte; pero como la infamia es en todas partes una infamia real, como es injusto aislar, castigar a un hombre, que muy a menudo piensa mejor, vale más que la mayor parte de las gentes que le siguen, le desprecian y se avergüenzan de hablar con él, la función del verdugo debía ser desempeñada por un criminal, al que perdonaría la vida, y bien alojado, bien mantenido y condenado a prisión perpetua, saldría únicamente para las ejecuciones."

Vid. J.M.J. FLEURIOT, Viaje de "Fígaro" a España", 1784, en J. GARCÍA MERCADAL (recop., trad., prol. y not.), *Viajes de extranjeros por España y Portugal*, op. cit., t. 3, p. 1338.

204 Pregoneros concejiles y de la corporación apícola, divulgando edictos, anunciando subastas, publicando cargos y penas de reos, fueron Alonso Sánchez -1617/1618-, Juan Asensio -1688/1689- y seguramente todos los verdugos hermandinos del Setecientos, llevados a ello por sus magros sueldos y esporádicos derechos devengados de las ejecuciones, así como por los sueldos derivados de tales ocupaciones. En el periodo 1798-1799, el pregonero Antonio Pérez recibe de la Hermandad 750 rs. de vellón por sus múltiples ocupaciones (ADPCR.

s.c.); años antes, el 9-IX-1775 Juan Isidro Moreno ajustaba con el ayuntamiento de Ciudad Real sus servicios como peón público, obligándose acuidar la plaza "barriendola y cuidando que este despejada de caballerias, encerrando estas donde se acostumbra para que no causen perjuicio" (AMCR. Actas Capitulares, leg. 26, nº 4, f. 96).

205 G. FERNÁNDEZ DE HERRERA, escribano de Casa y Corte, recomendaba:

"Al executor se le trate bien, assi por el Juez, como por los Ministros, el qual ordinariamente le tienen en su casa, porque de ponerle en otra, suele resultar riesgo, o porque se desmanda, o porque el odio que causa se irritan contra el. Tambien tiene otro inconveniente de no hazerse asi, y es que en la verdad el mayor, porque por -el-las se suelen intentar con el algunas negociaciones, a que no esbien se de lugar, porque suelen oponerse a la buena administracion de justicia..."

Vid. *Práctica Criminal*, Madrid, 1672, p. 303.

206 Por entonces se libraban 200 rs. a Juan Moreno para buscar un segundo executor, que acompañase al titular, para ajusticiar al reo Manuel Felipe de Morales, recibiendo por ello 1.540 rs. el verdugo contratado (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12).

207 Cuentas pertenecientes al periodo 1693-1694 (Ib.).

208 El 29-III-1698 se alcanza dicho compromiso, entrando en vigor el segundo domingo de septiembre siguiente. Vid. Apéndice documental, texto nº 4.

209 Las condiciones estipuladas fueron que por cada día de viaje, de ida o vuelta, recibiría 4 ducados, y otro tanto una vez diese cordeles, la ejecución de la pana capital supondría otros 32 pesos; al guarda a caballo que lo escoltase se gratificaría con 22 rs. diarios y

15 rs. al peón, la cabalgadura del verdugo sería alquilada. De acuerdo a tal contrato a dichas cláusulas, al día siguiente partió el verdugo Juan Sastre (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 208, ff. 99r-100r).

210 AHN. Div. Her., leg. 4. nº 13.

211 Dicho oficial percibió de las arcas hermandinas los siguientes honorarios:

1705-06....440 rs.+ derechos de 13 aplicaciones de sentencias;
1706-07....40 rs.+ 220 rs. de diversas aplicaciones de justicias;
1710-11....219 rs. condonados de los réditos censales de una casa;
1711-12....440 rs.;
1712-13....440 rs.+ 60 rs. de derechos;
1715-16....440 rs.

212 Entre 1719-1723 su nómina anual es de 300 rs. (Ib., leg. 58, nº 21 al 23).

213 El 12-X-1744 Mateo Sastre, verdugo de la justicia de la Ciudad Imperial, estaba en Ciudad Real junto a otros herederos para reclamar su parte testamental tras la muerte de su padre, correspondiéndole 800 rs. de vellón (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 550, ff. 135r-136r).

214 Antonio Sastre, verdugo de la jurisdicción real toledana, se traslada a Madrid en noviembre de 1745 para ocupar la plaza vacante dejada por su hermano Mateo. El 26-XI-1745 eleva ante el Supremo Consejo una representación de Angela de la Borda, esposa del primero, quejándose de que, al abandonar el hogar su marido, hacía diez días que estaban desolados sus cinco hijos "sin tener mas amparo que el de Dios", por lo que suplica le fuese asignada una pensión por el cabildo. A dicho ayuntamiento, el 1-XII-1745, desde la Corte se

recomienda que se nombrase como su verdugo titular al citado Antonio Sastre (AMT. Sala IX, estantería 10).

215 17-IX-1739, Ciudad Real (AMCR. Actas Capitulares, leg. 23, f. 555).

216 Cuentas del periodo 1744-1745 (AHN. Div. Her., leg 59, nº 7).

217 1-VIII-1748, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 555, ff. 45r-46r).

218 Referencia a dicha consulta al Consejo de Castilla se halla en AHN. Consejos, lib. 2.683, 1, aunque no se conserva el original. Sin embargo conocemos el texto de su representación al ayuntamiento:

"...siempre que a sacado a un reo a publica verguenza se le han satisfecho por ello quatro ducados de sus vienes y quando no los a tenido de pena de camara lo que se a observado ynconcusamente hasta que ultimamamente a sacado a tres reos de una causa, que llamavan los Calamvucos, otro que puse en la argolla y otro que saque a verguenza por haber robado a Don Manuel Roperio, y por ninguno de estos cinco no se me a pagado cosa alguna..."

Desestimada su solicitud, puesto que la ciudad ya le pagaba su salario anual, se le responde que curse su petición a la instancia que creyese conveniente; 24-VII-1782, Toledo (AMT. Sala IX, estantería 10).

219 Real Cédula recalificando los oficios mecánicos de curtidor, herrero, sastre, zapatero y carpintero; 18-III-1783, El Pardo.

220 AHN. Consejos, leg. 843, nº 23, f. 3vº.

221 Ib., s.f.

222 13-X-1788, Toledo; vid. nota 218

223 Ib.; vid. not 220.

224 Desembolsos de la corporación machega (en reales de vellón):

<u>PERIODO</u>	<u>MÉDICO</u>	<u>HONORARIO</u>	<u>CIRUJANO</u>	<u>HONORARIO</u>	<u>BOTICARIO</u>	<u>RECETAS</u>
1636-37	-	-	-	-	Lope Guzmán	44
1637-38	-	-	Juan López	160	-	-
1682-83	-	-	Juan Donayre	50	Alfonso Jiménez	76
1683-84	-	-	Cristóbal Muñoz	8	-	-
1684-85	-	-	Juan Donayre	12	-	-
1689-90	-	-	-	-	-	50
1690-91	-	-	Bartolomé Vicario	12	-	-
1692-93	-	-	Joseph Martínez	20	-	29
1711-12	Miguel	36	Sebastián Bautista	22	-	9
1712-13	-	-	-	-	-	6
1715-16	-	68	-	-	-	54
1722-23	-	-	-	118	-	107
1725-26	-	-	-	108	-	-
1727-28	-	-	-	-	-	117
1735-36	Matías Ibarra	100	Juan Arenas Perea	60	Luis F ^{CO} Olmo	462
1736-37	idem	100	Miguel Arenas Perea	60	idem	100
1738-39	idem	120	Joseph Arenas	60	idem	201
1741-42	idem	100	idem	60	-	-
			Sebastián Bautista	10		
1742-43	idem	100	Francisco León	60	idem	60
1743-44	idem	100	Sebastián Bautista	30	idem	30
1744-45	idem	100	idem	30	idem	50
1749-50	idem	100	-	-	-	-
1750-51	idem	100	-	-	-	-
1754-55	Joseph Vidal	100	Juan Curiel	316	-	-
1762-63	idem	100	idem y F ^{CO} León	302	idem	18
1764-65	Juan Bisedo	100	-	-	idem	75
1773-74	Mateo Moreno	100	Rafael del Yerro	500	Faustino Ximenez	170
			Juan Morales	30	Gabriel Pérez	140
1775-76	idem	100	Francisco Morales	70	-	70
1777-78	idem	100	idem	70	Luis F ^{CO} Olmo	200
1780-81	Joseph Vidal	100	idem	70	Casimiro Morales	200
					Faustino Ximénez	210
1793-94	A. Matamoros	100	Francisco Castro	100	J. A. Morales	156
1794-95	A. Matamoros	100	-	-	-	-
1795-96	-	-	-	-	J. A. Morales	377
1798-99	Joseph Heras	100	Francisco Castro	100	-	-
	C. Murillo	75	Bernabé García	22	-	-
1799-00	-	-	-	-	-	355

225 El ciudarrealeño Juan López, eleva un suplicatorio al cabildo hermandino solicitando que fuesen satisfechos sus derechos por haber

invertido más de veinte días en la curación de los fugados asilados, empleando en ella "mucho cuidado y solicitud"; 11-V-1638 (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 4, s.f.)

226 Juan Antonio Gallego, reo afectado de tumores en la garganta, es intervenido en 1762 por el cirujano Juan Curiel, permaneciendo en cama más de dos meses, pero precisando de asistencia sanitaria durante casi un año (Ib., leg. 60, nº 4 y 5).

227 Los cirujanos Rafael del Yerro y Juan de Morales se ocupan del restablecimiento del alcaide, su esposa y de su sustituto interino, Juan de Mora, ante los sucesivos intentos de fuga frustrados por parte de unos reos condenados a muerte, en 1774 (Ib., leg. 61, nº 2).

228 En 1723 se libran 107 rs. para atender al reo Felipe Fernández, debilitado por el tormento al que se vió sometido, estando convaleciente entre el 30 de agosto al 12 de septiembre. Se precisó de la asistencia del cirujano, gastos de botica, el reforzamiento de su dieta con huevos y vino, así como el alquiler de la cama de una posada por un monto total de 225 rs. (Ib., leg. 58, nº 23).

229 Ocasionalmente es puesta en entredicho la profesionalidad de dichos individuos. Tal fue el caso del barbero-cirujano Francisco León y Peña, durante el Setecientos adscrito temporalmente a la Hermandad Vieja manchega, y en la década de 1780 cirujano titular del regimiento de milicias provincial, con barbería en la plaza pública; por entonces fue requerido por la justicia ordinaria para atender las heridas por arma de fuego de "Los Chuscos", al haberse evadido de la galera real, negándose a ello y excusándose de asistir a algunos convecinos, rebasando lo permisible cuando se inhibe de comparecer al examen de

otro cirujano local, tal vez para evitar tener más competencia en la ciudad, por lo que es expedientado por el Consejo de Castilla (AHN. Consejos, leg. 1.118, nº 7. ff. 16r-vº).

230 En 1683 se libran 23 rs. para restablecer al convaleciente reo Marcos García Bermejo, quien "condenado a minas de Almaden no fue con sus compañeros por estar muy malo", a los que hay que añadir más de 60 rs. para adquirir brebajes y aceites destinados a sus cómplices (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12).

231 Entre 1735-1736 el cabildo concedió al médico Matías Ibarra 30 rs. de ayuda de costa en atención a sus asistencia a cuatro reos enfermos: Juan Serrano Montero, Felipe Villar, Juan Serrano Rivera y Juan Serrano. Dicha cantidad engrosó en casi un tercio su nómina anual (Ib., leg. 59, nº 1).

232 Hasta que así se prescribió en las Ordenanzas manchegas de 1792, no se equipararon los asignados del médico y del cirujano, lo que significaba un cambio cualitativo importante; se asumía que pese a la distinta capacitación profesional de uno y otro, el cirujano era quien llevaba el peso asistencial en la prisión. Op. cit. , f. 38vº.

233 Alcaides o mayordomos buscaban a alguna mujer piadosa, o muy necesitada, para asistir a los reos enfermos, normalmente moribundos y casi siempre con la salud minada por el severo confinamiento. Así, en 1727, una mujer cuidó del preso don Juan de Padilla durante unos días (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 26).

234 Las cuentas rendidas por los arqueros hermandinos a fines del siglo XVIII insertan, a veces, las recetas despachadas, como las del

periodo 1775-1776 (Ib. , leg. 61, nº 3). En 1793-1794 el boticario don Josef Antonio Morales Montes expidió diversas cataplasmas y los siguientes compuestos de su farmacopea: "spirit salis amoniae", "balsam hipesici", "athes violarum et mucilagum" y "balsam arcel" (ADPCR. s.c.).

²³⁵ Entre 1738-1739 se libran 15 rs. al cirujano Sabastián Bautista por su peritaje de la hernia del reo Juan Muñiz, el mayor, en razón de la cual se sustrajo a su condena a galeras (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 3); y entre 1741-1742 se libraban otros 10 rs. al citado profesional por su reconocimiento del alcaide, quebrantado por los golpes de unos gitanos encarcelados (Ib., leg. 59, nº 4).

²³⁶ Ib., leg. 60, nº 4. Sin embargo, nos parece significativo que no se recurriese a los servicios de Juan Maldonado, cirujano que habita entre 1737-1738 en la casa de Quiteria del Valle, sobre la que tenía un censo perpetuo la Hermandad Vieja (Ib., leg. 58, nº 5).

²³⁷ En la junta de Molinillo, en 1496, se acordó que los integrantes Triple Instituto llevase a tal efecto a sus capellanes, y oratorios portátiles para officiar las diez misas reglamentadas desde tiempo inmemorial. Cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad...*, p. 193.

²³⁸ En la visita girada a las posadas el verano de 1538, los alcaldes ciudarrealeños don Juan de Haro y don Juan Carrillo, solo sabemos de iban acompañados por los cuadrilleros Miguel Sanchez, de la Vera toledana, y Antón de Santisteban, sin el concurso de ninguna otra persona (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 23). La última ocasión en que tenemos constancia de que el prebítero asistió a los cuadrilleros en

una salida fue en la efectuada por Sierra Morena en primavera de 1611 (Ib., leg. 2, nº 4).

239 Las partidas de gastos registran los 3 ó 4 rs. dispensados por cada sermón a religiosos ajenos a la entidad. En 1692-1693 se dan 9 rs. de limosna al prior del monasterio de Santo Domingo por su labor oficiando misa y confesando a reos; entre 1738-1739 son 135 los reales librados al convento de mercedarios descalzos, al concurrir uno de sus profesos a la capilla hermandina.

240 Solo se conserva un documento íntegro de la designación de un capellán por parte de la corporación ciudarreal, el realizado a favor del presbítero don Francisco de Casasola el 23-VII-1722 por defunción de su predecesor, don Francisco Sancho de Almodóvar, habiendo consignado el marqués de Villater, su alcalde, que en dicho nombramiento "no ha intervenido ni interviene la simonia y otra espezie de ella ni la lizitazion ni corruptela reprobada en derecho", ante los tres testigos preceptivos y un notario (Ib., leg. 3, nº 14, f. 8r). Nos consta que dicho clérigo habitó una casa vinculada a la fraternidad apícola pagando el censo de 33 rs. perteneciente a Cristóbal de la Cruz entre 1719-1728 (Ib., leg. leg. 58, nº 22, 23 y 26).

241 Relación de capellanes hermaninos y sus derechos:

<u>PERIODO</u>	<u>CAPELLAN TITULAR</u>	<u>LIBRANZAS ANUALES</u>
1597-1610	Pedro Sánchez Bravo	100 rs.
1610-1611	Pedro Sánchez Bravo/Juan Bautista Palacio	100 rs.
1611-1619	Juan Bautista Palacio	100 rs.
1645-1646	Juan de Poblete	100 rs.
1666-1667	licenciado Leñador	330 rs.
1669-1670	idem	175 rs.
1683-1684	Rafael de Almansa	154 rs.
1684-1685	Luis de Torres	50 rs.

1686-1687	idem	160 rs.
1687-1688	idem	170 rs.
1688-1689	Cristóbal Lechuga	169 rs.
1689-1690	Rafael de Almansa	160 rs.
1690-1691	Crisbóbal Lechuga	161 rs.
1691-1693	idem	160 rs.
1693-1694	idem	86 rs.
1706-1707	Joseph Delgado	160 rs.
1710-1713	Juan Francisco de Herrada	160 rs.
1715-1720	Alfonso de Poblete	160 rs.
1720-1722	Francisco Sancho de Almodóvar	-
1722-1726	Francisco de Casasola	160 rs.
1727-1728	idem	200 rs.
1738-1739	Luis de Sotomayor	386 rs.
1741-1742	Juan de Losa	300 rs.
1749-1752	Joseph Antonio de Ochoa y Verna	330 rs.
1754-1755	idem	1000 rs.
1761-1784	Enrique Esparraguera Espinosa	500 rs.
1793-1794	Francisco de Sotomayor	332 rs.
1794-1796	Rafael de Palacios Calderón	650 rs.
1799-1800	Francisco de Sotomayor	650 rs.

242 Durante el Seiscientos y parte de la siguiente centuria, junto con los mayordomos eran los encargados de adquirir los objetos litúrgicos del oratorio, como cirios, vino para misa, velas de sebo para tomar confesiones nocturnas y de cera blanca para los oficios divinos. En el último tercio del siglo XVIII, el capellán asumirá tales compras; así, en 1773-1774 se dieron al presbítero hermandino 73 rs. y 25 mrs. para renovar las ropas talaras -corporales, hábitos- y algunos de los objetos de culto -purificadores y "encajes de la capilla"- (Ib., leg. 61, nº 2)

243 Entre 1744-1745 se gratificaron con 240 rs. al receptor de San Pedro, por 80 misas en el oratorio del Espíritu Santo ante la inasistencia del capellán titular (Ib., leg. 59, nº 6).

244 En la asamblea toledana de 14-10-1604 se procedió a nombrar al capellán de la sede hermandina, recibiendo dos reales por cada misa en

su oratorio; asimismo se nombró a un segundo religioso para el depósito de presos de los Montes de Toledo al darse cuenta de que

"...como en la carcel de las Bentas -con Peña Aguilera- en la capilla ay descuido y no se dizen las misas que solian dezirse, el cabildo abiendo entendido lo susodicho mando que en la carcel de la Bentas se diga misa cada fiesta abiendo presos y no abiendolos se diga misa de quinze a quinze dias en domingo o en fiestas..."

(Ib., leg. 63, f. 60r).

En el Setecientos esta prisión cayó en desuso, siendo arrendado el inmueble. El 1-VIII-1718 se libraba limosna en Toledo al capellán, por decir la misa previa a las elecciones, sin concederle propina alguna aunque, en compensación, se libró una pequeña ayuda de costa para la limpieza de los objetos litúrgicos (Ib., leg. 70, nº 2, s.f.).

245 En Talavera, al menos desde 1461, puede rastrearse su presencia documental, fecha en la que se consignaba un salario por pronunciar su sermón en determinadas fechas y asistir a todos los entierros de hermanos y sus esposas. En 1747 se recoge el precepto de disponerse de un capellán elegido por mayoría de votos el día de la Asunción, retribuyéndose sus desvelos con 650 rs. pagaderos cuatrimestralmente; Op. cit., p. 6. Pese al ostensible empobrecimiento del cabildo tras 1759, los emolumentos del religioso, junto con la compra de aceite y de cera para la lámpara del altar de la Virgen serán de los pocos formalmente garantizados por sus parcas rentas (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

246 El 26-VI-1557 el capitán Cristóbal de mena, vecino y regidor perpetuo ciudarrealeño, fundó la capellanía de la cárcel real manchega, asignándole una renta fija con que dotar ornatos y religioso (AHN. Div. Concejos y Ciudades, leg 44, nº 7). Esta piadosa disposición fue erróneamente atribuida a la galera hermandina por I.

HERVÁS Y BUENDÍA, *Diccionario Histórico-geográfico-biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real*, 3ª ed., Ciudad Real, 1914, pp. 415-416.

247 El 2-I-1616 una declaración del nuncio pontificio concedía a Baltasar de Mena y a Juan Bautista de Palacios, capellanes de la cárcel pública y la de la Hermandad Vieja, respectivamente, la capacidad para oficiar misas en sus oratorios en los siguientes términos

"...declaramus capellas carcerum, et societatis veteris dicti oppidi sub limoi revocatione comprehensas non esse et in illis, ut aute publicationem revocationis solitum erat misas celebrari posse contrariis non obstantibus qui."

(AHN. Div. Her., leg 58, nº 3, s.f.).

248 La corporación ciudarrealeña libró diversas cantidades en concepto de limosna a los religiosos que concurren a los aniversarios, el día de Nuestra Señora de la O, en la parroquia de San Pedro, consignándose en 1602 la entrega de cuatro capones al predicador, o entregándose al receptor de dicha iglesia los derechos de clerecía correspondientes. No ocurría así en Toledo, donde el capellán corporativo costeaba de su peculio los gastos devengados en tal concepto, asistiendo en calidad de invitado junto al pleno capitular a la misa del primer domingo de Cuaresma celebrada en la iglesia de Santa Justa (Ib., leg. 70, nº 2, s.f.).

249 Marcos Morón, hospitalero y pregonero de la Hermandad Vieja cobra aún menos en 1598, al recibir solo un ducado "porque hizo gracia de lo demas que avia servido" (ib., leg. 56, nº 23, s.f.). La relación de los administradores del hospital de la Mejora en el periodo que nos ocupa es la siguiente:

<u>PERIODO</u>	<u>AMO DEL HOSPITAL</u>
1597-98	Marcos Morón
1600-01	Francisco Hernández
1602-03	María Hernández
1603-04	Pedro García
1606-10	Alonso Sánchez
1610-12	Pedro García
1612-13	Fontiberos
1617-19	Juan López

250 AHN. Div. Her., leg. 57, nº 6.

251 En el periodo 1602-1603 María Hernández lleva a cabo su labor al frente del hospital; tal vez fuese pariente de Francisco Hernández, el anterior Amo de la fundación, y una persona de igual nonbre recibía 4 rs. en las Navidades de 1602. Entre 1603-1604 se menciona a una encargada del hospital, siendo titular de esta plaza Pedro García (Ib., leg. 57, nº 2 al 4). C. PÉREZ DE HERRERA recomendaba que dichos administradores fuesen sacerdotes o, en todo caso, hombres casado cuyas esposas se encargasen de cuidar a las recogidas y en las labores domésticas propias de su condición; *Amparo de pobres*, (1ª ed. Madrid, 1595), ed. intr. y not. M. CAVILLAC, Madrid, 1975, p. 55.

252 Francisco de Nureña, escribano hermandino, se querelló contra su criado Hernando de Montalvo ante el Santo Tribunal acusándolo del robo de su casa 200 ducados, huyendo a la Corte. El mismo día se comisiona al agraviado como alguacil de la hermandad para que con ayuda de los cuadrilleros que nombrase -designando para ello a su propio esclavo, el mulato Andrés de Prado- le prendiese; 4-VII-1594, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 27, nº 9, s.f.).

253 Aparecen como tales, por entonces, Antonio Fernández de Torres, el mozo; Juan Rodríguez; Gabriel Carretero; Diego y Antón Salazar; Alonso

García; Domingo Hernández, Juan López; Francisco de Ayllón; Francisco de Llanos; Pedro Sánchez, Alonso Balmaseda, Cristóbal Pedrosa y Antonio Ortega, entre otros.

354 En 1613 dicho cupo de cuadrilleros "ordinarios" era cubierto por Juan Moreno, Bastián Gómez, Domingo Hernández y Gabriel González (Ib., leg. 57, nº 9).

255 Dos años más tarde, el asesor hermandino, el alguacil mayor y uno de los escribanos concurrían junto a los cuadrilleros Juan de la Serna, Juan de las Heras, Pedro González, Juan Blázquez y Bastián Ruiz, gratificándoles con 4 rs. diarios por realizar las averiguaciones para esclarecer judicialmente los incendios ocurridos en los términos de Malagón, Fernáncaballero, Porzuna y dehesa de las Calabazas -Calzada de Calatrava-.

256 En la Ciudad Imperial, los alcaldes apícolas nombran a doce cuadrilleros anuales, siendo sus cargos renovables con la aprobación expresa del cabildo entrante, según los estatutos de 1740. En Talavera, a partir de 1747, en el cabildo general del 25 de agosto se proveerían por designación directa a ocho hermanos para ejecutar salidas y comisiones bajo la dirección del cuadrillero mayor, que escoge entre ellos a sus colaboradores, previo acuerdo de los alcaldes y tratando de alternar a los cuadrilleros para distribuir el trabajo.

257 El espartero Juan Díaz, cuadrillero entre 1609-1610 es el encargado de confeccionar las 20 esteras requeridas por el hospitalero de la Mejora entre 1612-1613 (ib., leg. 57, nº 9); Juan López, cuadrillero entre 1632-1635, hizo una obra de carpintería en la sede hermandina (ib., leg. 58, nº 4). En el Setecientos, los también

cuadrilleros Gabriel Calvillo y su hijastro Agustín de Madrid, personaje sobre el que nos ocuparemos en próximos trabajos, tenían la profesión de maestro y oficial de sastre, respectivamente; el citado Agustín de Madrid poseía tienda en los soportales de la plaza pública

"...consistiendo su comercio de jeneros de lana y seda zintas y listoneria, tachuelas, clavos, erraduras, cordoban, suelas -especias, pescado- y otros efectos de buhoneria, bendiendo los primeros a varas, ejecutandolos por si y por un hermano suio."

Su padre natural, Juan de Madrid, también adscrito a la Santa Hermandad, era maestro de confitero; 1-III-1760, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 267, nº 3, f. 7vº). Alfonso Poblete, que por entonces también en labores ejecutivas hermandinas, era maestro de barbero.

258 En 1609, el cuadrillero y molinero Bayón prendió a su compañero de trabajo Juan Díaz.

259 En el memorial del cabildo de la Hermandad de Toledo comenta que procuraban "tener titulo de cuadrilleros los mayores baquerizos y otros que trajinan esta tierra"; 2-I-1682, Toledo (AHN. Div. Her., leg 66, nº 2, s.f.).

260 Ib., leg. 31, nº 4.

261 Op. cit, f. 3r.

262 26-II-1418, Valladolid (Ib., leg. 2, nº 2, f. 33r).

263 De principios de la década de 1580 se conservan dos curiosas consultas al Consejo de Castilla que muestran el valor de dichas escribanías en Talavera. A principios de 1580, Bernardino de Ávila pretendía acceder a la recientemente creada nueva notaría hermandina,

haciendo indagaciones el Supremo Consejo sobre la necesidad de desdoblar las ya existentes; Rodrigo Hervás contradice esta pretensión, alegando que compró al Consejo de Hacienda una de las escribanías por 600 ducados, cediéndola luego a Juan López con la cláusula verbal de que si se acrecentaba la plaza le devolvería un tercio de lo pagado. En junio de 1581 Rodrigo de Hervás logra de la Chancillería vallisoletana la remisión del traslado de una real provisión fechada en Madrid, el 28-VI-1572 en la que se precisa que "los escribanos de la Hermandad Vieja que habian sido en la villa de Talavera se habian nombrado hasta entonces por la justicia della". Dada la firme oposición hallada, Bernardino de Ávila opta por solicitar un regimiento en Manzanete -Badajoz-, aunque en 1583 aún instaba al Consejo de Castilla para que se le concediesen 300 ducados

"...para hazer un ingenio para matar la langosta...y que se le de privilegio para que el o quien su poder ubiere...pueda usar en estos Reynos del dicho ingenio por tiempo de diez años..."

así como su perpetuidad en la notaría hermandina y un situado sobre las alcabalas locales. Que el referido artilugio resultaba ser una quimera, se evidencia de inmediato pues "oviendole dicho que muestre el modelo ha respondido que no tiene con que hazerlo", desestimándose dichas mercedes (AHN. Consejos, leg, 4.409, nº 19 y 65).

²⁶⁴ El carácter hereditario de tal oficio conllevó no pocos problemas. El 1-II-1747, Joseph López de Arcos informa a la Cámara de Castilla que por disposición de su abuelo Juan de Arenas Romero se testó a favor de su sucesor Juan de Arenas San Martín la notaría hermandina y un viñedo, con la condición de que si tomaba hábito clerical sería traspasado a su hermana; muerto el otorgante, dicha plaza recayó en Joseph López de Arcos, litigando por ello sus dos herederos directos, Juan y Mariana de Arenas, ante el corregimiento en 1743, llegando el

pleito a Madrid en apelación (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 550, ff. 9r-10r).

Este intrusismo profesional no era demasiado infrecuente; decenios antes, el 19-IV-1651, se elevaba una protesta formal ante el Consejo de Órdenes contra un individuo que ejercía como escribano en Puertollano -Campo de Calatrava- sin contar con la cualificación profesional correspondiente (Ib., leg. 220, ff. 101r-vº).

265 Joseph de Arcos Parera, escribano de la entidad manchega, con título despachado en Buen Retiro el 28-VI-1707, arguyendo falta de salud para desempeñarlo, enajena la plaza a favor de Juan de Arenas San Martín el 14-II-1711 (Ib., leg. 230, ff. 41r-vº). Vid. nota 264.

266 El 10-XII-1761, Magdalena Gil Almansa, viuda de Joseph de Arcos, vende una escribanía de la Santa Hermandad a Lorenzo Gil de Almansa por 6.600 rs., imponiéndole un censo anual sobre 2.200 rs. de su capital con un rédito del 3% (Ib., leg. 558, ff. 67r-68vº). El 9-I-1772, Eugenio Peñuela cede su notariá por juro de heredad al ciudarrealeño don Agustín Pérez de Madrid, quien a su vez nombrará como su teniente al año siguiente a Joseph García Alarcón, escribano numerario del ayuntamiento (Ib., leg. 561, ff. 161r-162vº). En doña Rosa Cabello y Baquero, viuda del anterior escribano, recae en septiembre de 1802 la citada plaza, pero al no poder servir en ella por su sexo nombra en su lugar a Fernando Camborda Espinosa el 25-I-1803, siendo refrendado por la Cámara de Castilla meses después, y pretendiendo luego enajenarla al usufructuario por 12.000 rs. "en moneda metálica", y no en los devaluados vales reales (Ib. leg. 347, leg. 347, s.f.).

267 En el cabildo ordinario de 22-III-1748 se trata el caso de don Jacinto García Prieto, contador real y titular de una de las notarías enajenadas, designa como teniente a su pariente Vicente García Prieto, pero aunque "nunca se le ha prezisado al propietario a que le ejerza por la ocupazion de su contaduria" tampoco puede hacerlo su sustituto por no estar aprobado como tal por el protonotariato. El 29-VI-1748 alega el cuestionado a su favor el que tenía a su cargo una familia, ser de edad avanzada, padecer "perlesia" y no tener ninguna otra fuente de ingresos (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 62 y 63). Los servicios de este teniente se remontan, al menos, a 1735, permaneciendo en ellos hasta 1755 (ib., leg. 60. nº 3).

268 Acusados, no sin razón, de medrar a costa de un servicio tan loable como el del Santo Instituto, las diatribas durante el siglo XVIII menudean. A este respecto, el 5-V-1733, varios hermanos manifestaban que

"...como los escribanos tenian afianzados sus intereses en el despacho de muchos titulos, y corria de su cuenta la impresion y sellos introducian, de quando en quando a firmar de los alcaldes diferentes titulos, con lo qual se aumentaba el numero de quadrilleros sin noticia de la Hermandad..."

(AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 61vº).

Agustín Pérez de Madrid, en su incendiario memorial de 2-II-1779, acusaba al alcalde don Miguel de Fuentes Veraet de complicidad con el notario Joseph García de Alarcón para enriquecerse con el indiscriminado despacho de comisiones y títulos a pretendientes (Ib., leg. 804, nº 25). Vid. Apéndice documental, texto nº 9.

269 Coinciden dichos empleos, entre otros, en Melchor Toral de Contreras (15-XII-1628 Ciudad Real); Juan Bautista Vázquez (24-XII-1651, Madrid); entre 1685-96 ejercen como tales Juan de Arenas Romero y Rafael de Macaya. Ya en el Setecientos figuran con ambas ocupaciones

Rafael de Macaya, el menor; Francisco Velarde (20-VII-1711, Madrid); Mateo Ruiz Carneros, Bernardo Cordobés, Juan de Arenas San Martín, Jacinto García Prieto; Josef García de Alarcón, etc.

270 Vicente García Prieto, teniente de escribano hermandino, acredita su título de notario eclesiástico ante el ayuntamiento ciudarrealeno en 1737 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 23. ff. 361 y ss.).

271 Juan de Arenas Romero, notario hermandino, el 27-V-1672, presenta solicitud a la Corte para examinarse de escribano real (AHPCR., Protocolos Notariales, leg. 191, ff. 153r).

272 Sabemos que Eugenio Peñuela, el 15-VII-1785, ejercía como escribano de la Hermandad Vieja y de las milicias provinciales de Ciudad Real.

273 El 6-VI-1634 el notario hermandino Alonso de Velasco Arriaza y el ciudarrealeno Pedro del Amo Guzmán tomaban del pósito concejil 12 fanegas de trigo (Ib., leg. 169, ff. 129r-vº); el 19-IX-1640 el citado oficial pagaba un censo a don Luis Treviño Carrillo de 23.000 mrs. de principal (Ib., leg. 170, ff. 372r-vº); el 17-IV-1641 Alonso de Velasco Uceda, entre otros, arrienda la percepcpción maestral del medio diezmo de los ganados que hollan el Campo de Calatrava (Ib., leg. 170, ff. 191r-193vº); el 23-X-1684 Rafael de Macaya designaba a dos caballeros del hábito de Calatrava para cobrar del escribano sevillano Alonso del Alamo 150 rs. (Ib., leg. 215, s.f.); el 28-VI-1798 Josef García Alarcón toma la hipoteca de una era y labor en las cercanías de la capital manchega (Ib., leg. 356, ff. 63r-66vº)...

²⁷⁴ Ordenanzas manchegas de 1792, op. cit , cap. XXVII, pp. 25-26. Sus honorarios son de los más saneados de la corporación; por ejemplo Joseph García de Alarcón tenía un asignado anual de 30 ducados, pero cobró de los arcas hermandinas un total de 2.480 rs. "por asistencia de cavildos, reconocimiento de carcel, reos y demas en que se llevan derechos" (AHN. Div. Her. , leg. 62, nº 2, s.f.).

²⁷⁵ Ib., leg. 66, nº 1 y 2, s.f.

²⁷⁶ En 1610 se entregaban 5.100 mrs. a Lope Guzmán de la Serna por ir a la Corte a imprimir el bajomedieval privilegio de Fuensalida (AHN. Div. Her., leg. 57, nº 7, s.f.).

²⁷⁷ En principio todos los títulos despachados eran manuscritos, rubricados por uno de los alcaldes y un notario hermandinos, pero a principios del siglo XVIII empiezan a conceder de forma esporádica títulos impresos, con una parte en blanco para cumplimentar a mano los datos personales del titular. De esta forma se facilitaba su lectura, le otorgaban fiabilidad y dificultan su falsificación. El nombramiento impreso más antiguo del que tenemos referencia data del 4-XI-1707, expedido a favor de Joseph Soriano, vecino de Linares (Ib., leg. 3, nº 15, f. 15vº); cf. M.C. PESCADOR DEL HOYO, "Madrid...", op. cit., p. 326. A partir de 1740 los formularios y títulos son sistemáticamente expedidos de molde, elevándose años antes, entre 1735-1736, los gastos de imprenta por tal motivo a 213 rs. (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 1).

²⁷⁸ Infra.

²⁷⁹ Asaltados en el lugar del Horcajo -Sierra Morena- unos arrieros, mercaderes y plateros cordobeses, con el resultado de un herido, un

muerto y 600 rs. extraviados; unos años después el Santo Instituto comisionaba a don Andrés Bustillo, oficial mayor del conde de Oñate, para ratificar a los testigos del robo cometido presumiblemente por la partida de bandoleros antes citada a un correo de dicho noble; 1651-1654 (AMAC., Caja 13, 1651, nº 2 y AHN. D.v. Her., leg, 43, nº 4).

280 Título de ministro superior a Jerónimo de Vargas, vecino de Andújar, para recorrer Sierra Morena, particularmente durante la romería de la Virgen de la Cabeza; s.d. (Ib. leg. 4, nº 71). Vid apéndice documental, texto nº 7. Bartolomé González, vecino de Los Yébenes, es comisario hermandino el 29-IV-1611, siendo dicha localidad paso obligado de los Montes de Toledo (Ib., leg. 32, nº 3). Por la reiteración en que son condenados reos de hermandad a galeras comienzan a aparecer comisarios en las inmediaciones de tales destinos; así en 1652 nos consta la existencia de un comisario en Yecla, localidad próxima a Cartagena (Ib., leg. 34, nº 2). En este sentido, las remisiones de presidiarios podrían explicar la vinculación a Ciudad Real del malagueño don Agustín de Fuentes a fines de 1666.

281 García Martínez, vecino de Castellar de Santisteban tiene una apreciable cabaña ovina hacia 1628, fecha en la que aparece adscrito a la corporación apícola manchega (Ib., leg. 34, nº 1).

282 Martín Pretel, natural de Baeza, pero afincado en Ciudad Real, hermano de su Santa Hermandad Vieja, familiar del Santo Oficio y cofrade de Santiago, moría en Toledo mientras ejercía como tesorero del Santo Oficio a mediados del Seiscientos. Esta rama de la familia Pretel puede relacionarse con la prontitud en que aparecen comisarios manchegos en dicha villa andaluza, donde había tres, a principios de

la década de 1620: Pedro Fernández, Juan de Palacios y Juan Fernández (Ib., leg. 33, nº 1 y 2).

283 Miguel Ramírez, vecino de Torre de Juan Abad -Ciudad Real-, comisario manchego del siglo XVII declaraba tener 43 años y no saber firmar (Ib., leg. 31, 4 y 5). Como bien apunta R. CHARTIER, la firma en el Antiguo Régimen denota, a menudo, el umbral de alfabetización de los individuos; Vid. "Las prácticas de los escrito", en P. ARIES y G. DUBY (dirs), *Historia de la vida privada*, (1ª ed., París, 1985), t. 5, Madrid, 1991, p. 114.

284 El 21-VI-1652 era nombrado comisario don Antonio Ruiz Trenado, notario apostólico (AHN. Div. Her., leg. 34, nº 3).

285 Francisco Serrano de Arévalo efectúa diligencias como comisario hermandino entre 1602-1611 por La Mancha, Sierra Morena y la Alta Andalucía (Ib., legs. 29, nº 5; 31, nº 3, 4 y 5; 32, nº 5).

286 Luis Maestro, arrienda a un alguacil de Baeza la venta de Palacios -Sierra Morena-, estando asistido por Andrés Garrido, comisario de la Santa Hermandad manchega, siendo acusados de incumplir sus comisiones

"...sabiendo que Geronimo de Quellar es famoso ladron...lo a receptado y encubierto y andado con el y tenido seguro con una mujer de mal vivir que a tenido en dicha venta..."

Enterado que eran reclamados por sus superiores, no dudan en cerrar la venta, quedando en precario su fiador y abandonando a sus familias (Ib. leg. 31, nº 4 y 5). Es sobradamente conocido el prejuicio que nuestros literatos del Siglo de Oro profesaban a venteros y mesoneros, haciéndose eco de la opinión general; la fina sátira de QUEVEDO es explícita al respecto:

"Ventero murio mi padre

Satanás se lo llevó
porque no pensase el infierno
que hubo sólo un mal ladrón."

Vid. "Entremés famoso. La Venta" (1ª ed., Zaragoza, 1640), en F. JANER (comp. y correc), *Obras de D. Francisco Quevedo y Villegas. Poesías*, t. 3, Madrid, 1953, p. 284. La figura peycrativa del ventero vinculado a la Santa Hermandad es un personaje relativamente frecuente en la literatura de la época; vid. A. VALBUENA PRAT, op. cit., p. 197, y M. ALEMÁN, op. cit., t. 1, p. 260.

287 3-IX-1623, Ciudad Real (AHMCR, Caja 7, nº 202, ff. 11r-vº).

288 El notario del cabildo hermandino certifica que había sido expedido título de juez comisario a Joseph González Azero y Valladadres, asturiano residente en Madrid, con fecha 23-III-1620; 4-XI-1620, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 6).

289 Ib., leg. 2, nº 9.

290 Un excepcional testimonio lo constituye una breve cédula de la organización manchega que transcribimos a continuación:

"Nos el cabildo y alcaldes de la Santa Hermandad bieja de la ciudad de Ciudad Real por S. Mag. en todos los Reynos y señorios por el estado de los caballeros hijosdalgo= hazemos saver que Bartolome Hidalgo, vecino de la villa de Cogolludo presento ante nos ynformacion competente de bita e mortibus y de lo demaas -sic-que se requiere conforme a nuebo decreto de este tribunal para ejercer el oficio de ministro juez comisario y haviendolo visto el cabildo y dado por bastante lo mandamos despachar y en su ejecucion y cumplimiento nombramos a el dicho Bartolome Hidalgo que dize ser de la villa de Cogolludo y de edad de beynte y ocho años alto de estatura de buen cuerpo delgado blanco de rostro barbi -sic- y cabello negro a el cual nombramos por nuestro juez comisario para que con bara= en 7 de febrero de 1678"

(Inserto en Ib., leg. 35, nº 1, s.f.).

291 Por razones metodológicas emplearemos, a partir de ahora, los términos "ministro superior" o "juez superior" al referirnos al juez comisario y ministro superior que mencionan las fuentes; reservando el de "juez comisario" al subordinado de inferior rango jerárquico.

292 El cupo impuesto en las Ordenanzas ciudarrealeñas de 1792 pondera un tope anual de 12 cuadrilleros y jueces comisarios para la sede del tribunal, requiriéndose las mismas cualidades y formalidades que precisaban el resto de sus ministros (Op. cit., ff. 27-28).

293 En la primera mitad del siglo XVIII también fue requerido, si bien esporádicamente, el título de ministro receptor, generalmente por parte de notarios, cuyo cometido aparece difuso en las fuentes, aunque con toda probabilidad consistiría en acompañar a las partidas en calidad de escribano, asumiendo todas las diligencias escritas y custodiar los bienes incautados. Presentaron con éxito tales solicitudes, entre otros, Joseph Jiménez Suárez, notario numerario de Marchena (Ib., leg. 2, nº 1), y Juan Mateo Caro, escribiente de Baños (Ib., leg. 8, nº 15).

294 Tras 1754 dichas anotaciones desaparecen paulatinamente. En las postrimerías del siglo XVIII, en el último folio de los expedientes suelen consignarse estos datos y notas suplementarias como la fecha del fiat del asesor hermandino, el del Fiscal del Supremo Consejo, la de la admisión capitular y la del despacho del título, e incluso la remisión de un ejemplar de las nuevas ordenanzas; buen ejemplo de ello en Ib., leg. 14, nº 14.

295 El porcentaje del total de memoriales conjuntos conservados ronda el 1% , admitiéndose a trámite los informes pertenecientes a:

.Francisco de Munar y Juan Antonio del Monte, residentes en Ciudad Real y oriundos del valle de Meruelo -Tresmiera, Burgos-; 13-IX-1718 (ADPCR, s.c.);

.Francisco Eugenio Martínez Leganés, vecinos de Quintanar de la Orden -Toledo-; 19-IX-1720 (AHN. Div. Her, leg. 6, nº 29);

.Francisco y Alfonso Rodríguez Luna, vecinos de Villamayor de Calatrava -Ciudad Real-; 14-I-1727 (Ib., leg. 6, nº 65);

.Miguel y Francisco de Plaza y Plaza, vecinos de Villamayor de Chozas -Cuenca-; 14-I-1727 (Ib., leg. 8, nº 69);

.Francisco y Alejandro Díaz, vecinos de Losa -Segovia-; 16-IV-1727 (Ib., leg. 9, nº 16);

.Juan Antonio y Rodrigo Vicente Lázaro y Ramírez, vecinos de Soto de Camero Viejo -La Rioja-; 19-I-1756 (Ib., leg. 11, nº 27).

²⁹⁶ Es el caso de Francisco Tormo, valenciano estante en Almodóvar del Campo, quien junto a otros ganaderos se dirigían a la feria de la Bienvenida -Valle de Alcudia-, a comprar potros, avalando su informe su propio hermano y otros dos tratantes de caballerías, obteniendo el título en cuatro días; 21/25-III-1727 (Ib., leg. 9, nº 11). El mercader Tomás de Asensio, vecino del Puerto de Sta Mª de paso por Ciudad Real, aportas tres testigos a su candidatura, y el mismo día goza de la calidad requerida; 25-IV-1719 (Ib., leg. 6, nº 6). El comerciante de lonja Manuel Sánchez Zurbanos, segoviano con tratos en Bilbao, La Coruña y Granada, horas después de comparecer ante los alcaldes manchegos disponía de su nombramiento; 21-VIII-1717 (Ib., leg. 5, nº 48).

²⁹⁷ El viñero Pedro García Cofreile, vecino de Istán -Málaga- era representado por su padre por contar solo con veinte años de edad (Ib., leg. 7, nº 50); en 1795 su progenitor apodera a don Joseph María

López Rincón, granadino acaudalado (Ib., leg. 15, nº 14). don Alfonso Ruiz de Párraga, avecindado en Cuevas -Cádiz-, y con vínculos en Mula y Viero, delegaba sus poderes en su tío presbítero (Ib., leg. 10, nº 37); lo que también hizo Manuel Álvarez Vasallo, vecino de Tomelloso (Ib., leg. 14, nº 8). En otras ocasiones el parentesco es más lejano, como en 1715 el del castellano Juan Gil de Lopeña, al dar procura a Francisco de la Llave, familiar en cuarto grado (Ib., leg. 5, nº 12).

298 Suele tratarse de personas iletradas o individuos de cierta fortuna. Don Félix Cano Caballero, vecino de Alcalá la Real, es apoderado por el procurador numerario de la villa (Ib., leg. 15, nº 6); don Martín de Guzmán y Cárdenas, corregidor de Alcaudate -Jaén-, utiliza los oficios de su representante ante la Chancillería de Granada (Ib., leg. 6, 13); el mercader leonés J. Antonio Ramos Cienfuegos nombra a un letrado para cumplimentar su solicitud (Ib., leg. 12, nº 19); el maestro dorador don Antonio Gutierrez, vecino de Tarifa -Cádiz- recurre a un maestro de primeras letras (ADPCR., s.c.). Otros ejemplos en AHN. Div. Her., legs. 5, nº 15, 28 y 29; 6, nº 26; 7, nº 16, 22, 52, 53; 8, nº 1, 23, 29, 40, 63, 70; 9, nº 29 y 40; 10, nº 61; 11, nº 2, 3, 4, 12, 25, 29; 13, nº 14 y 22; 15, nº 2 y 21.

299 Joseph Antonio Bazán Cuesta, vecino de Colmenar de Oreja, se sirve de un amigo para hacer llegar su información reglada a la capital manchega; 15-VI-1724 (Ib., leg. 7, nº 36).

300 Francisco Manuel Tambora Redondo, labrador de Pinto -Madrid-, se hace representar por el procurador madrileño Juan Martínez Amor; de poco sirvieron sus diligencias cuando poco tiempo después el cabildo rechaza la información recibida al no estar reglada, enviándole el

formulario vigente. Meses después , afines de 1724, logrará su pretensión (Ib, leg. 7, nº 52).

301 Don Francisco Rodríguez Botón, gobernador de Puebla del Maestre -Badajoz- solicita empleo de ministro superior al estar dicha villa próxima a Sierra Morena y ser recomendable extender su jurisdicción al yermo circundante; 28-VI-1717 (Ib., leg. 5, nº 47). El labrador Juan de Requena suplica el envío de interrogatorio "a causa de los numerosos delitos que cada día subceden y expecialmente en los terminos de Aljama y sus cercanias"; 24-II-1720 (Ib., leg. 6, 17). Luis Camacho de León, afincado en Argamasilla de Alba -Ciudad Real-, considera que su candidatura

"...es sin duda muy util y conveniente para que pueda evitar y contener las muchas raterias que de ordinario se ejecutan en dichos montes, ganados y casas de campo expecialmente componiendose este pueblo como de dozientos vecinos retiradas unas de otras las casas por las muchas ruinas de edificios..."

14-X-1754 (Ib., leg. 11, nº 19).

302 Juan de Fúnez y Campos, residente del cortijo de Alhama de Granada, declara que en las cercanías proliferaban los ladrones y lugares peligrosos; 7-I-1737 (Ib., leg. 10, nº 54). El navarro Juan Bautista de Irigoyen solicita su título "por hazer diferentes salidas andando caminos" (Ib., leg. 11, nº 38); y en similares términos se expresa el madrileño don Cayetano Galaz Vargas (Ib., leg. 11, nº 40). Juan de Lagos, gallego residente en Cádiz pide nombramiento de juez comisario acreditando ser "capataz de la gente que corre con el trafico de recuas de ganado" (Ib., leg. 5, nº 21), y Antonio Vidal era "comerciante de jenero, frecuente en la Mancha" (Ib., leg. 4, nº 60).

303 Un testigo aportado por Lorenzo González de Porras dice de éste que era necesario su nombramiento para acabar con los excesos, pues

"...reside con su familia en la aldea o cortixo que llaman Cilches que esta ynmediato a la mar en la jurisdiccion de Malaga donde los moros de Berberia frecuentan mucho los asaltos en tierra al pillaje de cautiva jente."

17-VII-1720 (Ib., leg. 6, nº 23); en efecto, las incursiones de los piratas argelinos a las costas meridionales peninsulares se recrudecieron en la década de 1720, como lo atestigua un memorial remitido en 1726 a Madrid desde Cartagena (AHN. Consejos, leg. 35). Tampoco son menores las empresas que decían dispuesto a acometer don Luis del Rosario Ximénez Morales, vecino de Villar del Río, quien

"...hallandose esta villa situada en la carrera de la Corte y puertos donde continuamente transitan y pernoctan todo genero de gentes, sera muy util haya ministro de dicha Santa Hermandad."

26-VII-1761 (Ib., leg. 13, nº 31); o la que se proponía Diego Burguillos Granados, vecino de Burguillos -Badajoz-, al ponderar

"...que por los numerosos vecindarios de estos pueblos, fragoso del terreno, y confinante mediacion al reino de Portugal -sería útil- persiguiendo las raras y extravagantes xentes que solo se emplean en ymbasiones de un reyno a otro..."

24-II-1724 (Ib., leg. 14, nº 5).

304 El 3-VI-1712 se da constancia que Manuel Maldonado, vecino de Manzanares, ejercía como carnicero en Valcepeñas, habiendo obtenido el título de juez comisario el 1-IV-1707 (Ib., leg. 4, nº 19); y el 14-IX-1714 se despachó nombramiento a Francisco Martínez, vecino de Baeza, reconociéndosele poco después "por tener oficio de cortador" (Ib., leg. 15, nº 15, f. 64r).

305 Domingo Fernández Ceballos hubo de remitir en 1720 dos memoriales diferentes, ya que en su primera solicitud habia palpables defectos formales (Ib., leg. 6, nº 32). El burgalés Miguel de Bustamante ve desetimada en primera instancia su candidatura por igual motivo (Ib., leg. 7, nº 37). Diego Romero Urraco, vecino de Campillos, tarda dos

años en obtener su título al no haber remitido información reglada (Ib., leg. 10, nº 13).

306 Pablo Rodríguez Munera Laguna, vecino de El Viso del Marqués -Ciudad Real-, solicitaba el formulario el 27-IV-1723, presentando en agosto siguiente información irregular; la Santa Hermandad no tramita dicha petición, pero el pretendiente insiste en su empeño, presentando idénticos testigos, señalando de pasada uno de ellos que

"...aunque asista en la venta de Miranda que la tiene en arrendamiento esta muy acomodado y la sirbe por mozos y en esta villa no a escaezido su estimazion ni a sido reparable antes bien para lo que pretende asistiendo como asiste en Sierra Morena donde los malhechores y ladrones suelen emboscarse para hazer maldades."

El 3-IX-1723 logró el título requerido (Ib., leg. 7, nº 19, f. 16vº).

307 Expediente de Juan Manuel Cayoso de Celis, montañés con casa en Cádiz; 31-VII-1723 (Ib., leg. 7, nº 18). Entre los méritos aducidos por el riojano Pedro San Miguel de Tejada, manifiesta que su linaje esta "sin raza de judios mahometanos calbanistas (sic) ni de otra mala seta reprobada por el Santo Oficio" (Ib., leg. 6, nº 22, f. 4vº). Es frecuente que los candidatos levantinos expresen la pureza de ambas lineas familiares respecto de moriscos; mientras que a partir de 1792 comienzan a aparecer pretendientes que mencionan la inexistencia de antecedentes franceses, auspiciados por la coyuntural psicosis antirrevolucionaria de la época (Ib., leg. 14, 24).

308 Es elevado el número de candidatos que señalan esta calidad, ya sea en parientes cercanos o en ellos mismos, contabilizándose alrededor de un centenar de pretendientes vinculados a corregimientos, alcaldías ordinarias, de Hermandad, regimientos, juradurías, etc.

309 Al ser muy similares las prerrogativas de dichas distinciones, y ser dichas franquizas el principal motivo de las solicitudes, así como la ostensible decadencia de ambas en el Setecientos, será infrecuente esta coincidencia de status, aunque no faltan ejemplos, como el comerciante cordobés Francisco López Soto, en 1720 (Ib., leg. 6, nº 21); el valenciano Alejo Andrés Mercader, en 1724 (Ib., leg. 7, nº 34). El madrileño don Antonio Benavides accede al hábito de Calatrava en 1744, cuando desde 1739 gozaba del título de ministro superior manchego (AHN. OO.MM., Calatrava, exp. 278 bis) y el navarro Juan Bautista de Irigoyen, quien desde 1755 estaba en posesión del hábito de Santiago (Ib. Santiago, exp. 4.129), en 1756 se adscribe como juez superior hermandino (AHN. Div. Her., leg. 11, nº 38).

310 Imprescindible para cubrir las plazas jerarquicamente superiores desde mediados del siglo XVIII. Con anterioridad presentaron informe de limpieza de sangre el francés Juan Pérez de Cáceres, ex-militar afincado en Málaga (Ib., leg. 6, nº 41); fés de hidalguía se hayan insertas en Ib., legs. 9, nº 24 y 48; 10, nº 47; 11, nº 16 y 31. Su condición varía entre quienes se declaran, como el conquense don Gabriel Fernando de Haro, vecino de Tarancón en 1749, "hidalgo de quatro costados" (Ib., leg. 13, nº 2), hasta quienes se intitulan tales sin estar legalmente reconocidos, como el mercader Joseph de Codes Domínguez en 1757 (Ib., leg. 12, nº 1), pasando los que, como el granadino Torcuato Gómez Peral en 1757, justifican su falta de actividades lucrativas "por ser hijo de familia" (Ib., leg. 12, nº 3).

311 Mediado el siglo XVIII aumenta progresivamente la presencia de candidatos miembros de las reales maestranzas andaluzas. Si el 5-IV-1711 se expide título a Joseph Morales, comendador de la maestranza de Sevilla (Ib., leg. 3, nº 15, f. 46vº), a dicha asociación y familiar

del Santo Oficio estaba adscrito don Joseph Joaquín Domínguez Pareja en 1789 (AHN. Consejos, leg. 1.135, nº 7); a su homónima de Jerez de la Frontera perteneció el gaditano Manuel Roiz de la Torre, candidato hermandino en 1762 (AHN. Div. Her., leg. 14, nº 12); a la de Ronda, don Francisco de Paula Hidalgo en 1793 (Ib., leg. 14, 19), Francisco Joseph Domínguez y Vargas en 1793 (Ib., leg. 14, nº 23) y, dicho año, don Jerónimo Moreno y Villalba (Ib., leg. 14, nº 25).

312 Familiares eclesiásticos presentan, entre otros, el marbellí Salvador Gil Río Ruiz, en 1715 (Ib., leg. 5, nº 9); hermanos sacerdotes acreditan en 1728 los andaluces Pedro de Luque Solano y Mateos Orozco (Ib., leg. 9, nº 35 y 38). Prototipo de ello es don Francisco de Porras Maldonado, vecino de Loja, en 1761 atestiguaba que

"...a sido su parentera de Santos, y de la mayor distincion colocados en empleos honorificos y otros Arzobispos...el señor Perea tio carnal veinti y quatro naestrantes de la ciudad de Granada y otros titulos de Castilla."

(ADPCR. s.c.). Hábito clerical vistió Juan Abad Carrasco Laso de la Vega, estudiante de gramática, aspirante en 1716 (Ib., leg. 5, nº 24), y don Alonso Joseph Ruiz de Palma, en 1756 declara haber sido ordenado de menores órdenes hasta su matrimonio, en 1725 (Ib., leg. 11, nº 34). El candidato Francisco Álvarez Alarcón asistía en Toledo a la familia del arzobispo hacia 1719 (Ib., leg. 6, nº 11), y el daimieleño Roque Fernández Marciel dice servir "en casa y hacienda de don Balthasar Andres de Franchi, clerigo de menores ordenes" (Ib., leg. 8, nº 36).

313 El 2-IX-1714 se expedía carta de juez superior al conquense don Joseph Baltanas "colexial del colegio de Santa Catalina de Alcala" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 66vº).

314 El madrileño don Pedro Domingo Boyano Palavezino precisa que su padre fue oficial de la tesorería general de Sevilla (Ib., leg. 7, nº 17); el sevillano don Francisco Caballero de Zuloeta afirma que su progenitor había desempeñado durante años el empleo de fiscal de Consejo de Indias (Ib., leg. 12, nº 2); don Jorge María de Reina, marqués de Cerberales afincado en Osuna, aduce que su padre creó una partida de escopeteros, a cuyo frente prendió unos 35 ladrones, citando a varios ladrones famosos puestos a disposición judicial (AHN. Consejos, leg. 1.652, nº 12).

315 Eventualmente se consigna la adscripción de los pretendientes a cofradías. En 1706 Juan Mayordomo González, vecino de Villamejía -Cáceres- ejercía como mayordomo del Santo Sacramento (AHN.Div. Her., leg. 5, nº 2); Pedro Sánchez Ballesteros, vecino de Villanueva de los Infantes - Ciudad Real-, en 1717 declara ser "cofrade de Santa Vera Cruz y Nuestra Señora de la Soledad" (Ib., leg. 5, nº 45); Pedro Rodríguez Borrego, vecino de Villamayor de Campos -León-, era cofrade de la Santa Vera Cruz en 1718 (Ib., leg. 5, nº 67); el onubense Alonso Gómez Ruiz, al tiempo de su presentar su candidatura, era mayordomo del Santo Cristo de la Ortiguera (Ib., leg. 7, nº 27); Joseph Muñoz Durán, avecindado en Puebla del Maestre -Badajoz-, en 1725 se ocupaba de la mayordomía de la congregación de la Santa Cruz (Ib., leg. 8, nº 6); Francisco Murillo Cansino, vecino de Carmona -Sevilla-, en 1726 era hermano mayor del Santísimo Sacramento, sita en la iglesia de San Pedro (Ib., leg. 9, nº 6); el murciano don Alfonso de Párraga era hermano de la Hermandad de la Sangre en 1731 (Ib., leg. 10, nº 37); hacia 1747, de Pedro Calleja y Cuenca se acredita que

"...se empleo muchos años, saliendo de las procesiones que se celebran anualmente, la Semanas Santa en la villa de Cabra, haziendo demostracion de tirar de la sogá que lleva al cuello la Soberana Imagen de Nuestro Gran Padre Jesus el Nazareno, cuyo

empleo solo se confiere a las personas de limpia sangre y jenerazion"

(Ib., leg. 11, nº 12), no ocurría igual en Sevilla, donde por entonces se dejaban tan ímprobos esfuerzos a los estibadores del puerto; don Manuel Ramos Gómez, vecino de Buitrago -Madrid-, en 1756 era cofrade; el palentino Joseph Chico, en 1757, ejercía de prioste del Santísimo (Ib., leg. 12, nº 6); el granadino Pedro de Cuevas, en 1755, era hermano mayor del Santo Sacramento (Ib., leg. 12, nº 35); Juan Berrocal García era cofrade de dicha congregación, pero en Salamanca (Ib., leg. 13, nº 6); hacia 1794 el almeriense Ginés Antonio Cañabate se declara "mayordomo del Santisimo Sacramento de Nuestra Señora del Rosario y haber fundado una cofradia de Animas" (ADPCR. s.c.); Mateo Yáñez Blanco en 1795 aparece como cofrade del Santísimo Sacramento, de la Vera Cruz y la de la Misericordia (AHN. Div. Her., leg. 15, nº 15). Por último, en 1793, don Juan Tomas Morcillo, residente en Villarrobledo -Albacete-, dice ser patrón con capilla y contar con asiento preeminente en el convento local de religiosas franciscanas de Santa Clara (Ib., leg. 14, nº 22).

316 León Nogales, vecino de Aracena -Huelva-, en 1794 representa que "por su robustez, agilidad y celo, comprehension y practica en caminos y trochas lo advierte capaz de desempeñar la comision que suplica" (AHN. Consejos, leg. 1.507, nº 9, s.f.).

317 AHN. Div. Her., legs. 5, nº 42; 11, nº 24; y 12, nº 5.

318 León Ruiz, en 1718, afirmaba saber "leer y escribir" (Ib., leg. 5, nº 73); el gallego Francisco de Losada Carrera por entoces evidencia carecer de rudimentos tan básicos, al tener que firmar su solicitud un testigo (Ib., leg. 5, nº 61). Con una tasa de analfabetismo elevadísima, era frecuente que quien supiese leer no tuviese unos

mínimos conocimientos de escritura, o fuese su firma el último grado de conocimiento, siendo mayor la incultura, por este orden, entre los estamentos inferiores, el medio rural y las mujeres.

319 Menciona tal cualidad el alcazareño Alonso Jiménez Avendaño, en 1718 (Ib., leg. 5, nº 64); el ecijano Juan Antonio Blanco Martínez y Juan José Gamero Vadillo, en 1719 (Ib., leg. 6, nº 8 y 9); se dice de don Nicolás Hidalgo Moztezuma en 1757 que "a sido mui aserrimo enemigo de ladrones" (Ib., leg. 12, nº 9); y otro tanto de Luis Pedrajas Carrillo, vecino de Priego, en 1760 (Ib., leg. 13, nº 26), o el aspirante Francisco Martínez Bautista, en 1794 (Ib., leg. 15, nº 4).

320 Del campesino gallego Pedro de Hedroso, aseguran sus testigos que "tiene valor bastante" (Ib., leg. 8, nº 45).

321 Antonio Vivar Gómez, vecino de Baena, se caracteriza por ser gran tirador de escopeta (Ib., leg. leg. 6, nº 20).

322 22-VIII-1730, Madrid (Ib., leg. 10, nº 12). No es el único pretendiente del que se consigna que llevaba peluca, anotándose dicha peculiaridad en los siguientes expedientes: Ib., leg. 5, nº 74; 7, nº 48; 9, nº 22, 34, 42; y 10, nº 12.

323 El 18-VII-1714 se expedía título de ministro superior a los murcianos don Alejandro Fontes Pérez y don Joseph Prieto Carrasco, asentándose que "corrieron por D. Juan de Loaysa y son sus parientes" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 66r); en 1727 ingresa en la corporación Juan García Pérez, vecino de Mancha Real -Jaén-, poseedor de viñas y olivos, y cuyo padre habia sido juez comisario hasta su muerte (Ib., leg. 9, nº 26); el sevillano Francisco Bernardino Ocampo solicita su

nombramiento alegando como mérito la calidad de ministro superior de la entidad manchega de su progenitor (Ib., leg. 10, nº 60).

324 El comerciante francés Diego Bergerón Prat, afincado desde 1751 en la comarca de Sevilla, encuentra la oposición del síndico general local a presentar petición de ingreso con el pretexto de no poderse garantizar la fiabilidad de su limpieza de sangre y de la partida bautismal acreditadas en latín y con su compulsa en francés, aunque late en esta postura un claro contenido fiscal. A instancias del candidato, un mercader gaditano las traducirá al castellano, librándose el título requerido el 28-VI-1760 (Ib., leg. 13, 17). El exmilitar galo Juan Pérez Cáceres tardó siete mese en obtener igual status en 1722, pues

"...tiene mucha dificultad -en- corroborar esta informacion con las fees de bautismo y casamiento, atento a la distanzia que ay como porque aquel Reyno padece de mal contagioso..."

(Ib., leg. 6, nº 41). La ambigüedad con que se requiere la acreditación de dicha documentación permite que algunos la presenten en el momento de cumplimentar el informe, pero que no la incluyan en el expediente remitido a la sede hermandina (Ib., leg. 6, nº 25).

325 En la inmensa mayoría de los memoriales se tiende a redondear, a la baja o al alza según conviniese, la edad de los pretendientes, anotándose junto a las estimaciones anotaciones que denotan su valor aproximativo y predominando los años pares.

326 Son infrecuentes los aspirantes que no alcanzan la mayoría de edad -fijada en 25 años- en su mayoría nobles o cabezas de familia. Excepcionales son los casos del soriano don Fernando de Castañeda dice ser "de los doce linages de cavallero hixosdalgo" y hermano del ya juez superior manchego Juan Francisco Salcedo, obteniendo su título el

18-VII-1732, cuando contaba 16 años de edad (Ib., leg. 10, nº 47); don Pedro Juan de Quadros, señor de Aldeanueva de Figueroa, logra idéntica dignidad el 31-XII-1728, aún no tenía los 19 años, aunque ya casado y con hacienda propia. Cuando el alicantino don Antonio Ferrándiz Planelles pretende alcanzar dicho status, el corregidor desestimar su tramitación hasta su mayoría por temor a que abusase de su autoridad, pese a lo cual fue admitido en la Hermandad en 1755 (Ib., leg. 11, nº 25). Más injustificable si cabe fue la admisión, a principios de 1726, del campesino de Padornelo Pedro de Hedroso, cuando solo contaba poco más de 15 años, logrando su pretensión de acceder a una comisaría (Ib., legs. 4, nº 45 y 8, nº 45).

327 El labrador valdepeñero Manuel Díaz Torrero había sido arrestado en dos ocasiones, una de ellas por parte de la propia entidad manchega, aunque excarcelado por falta de pruebas por entonces, y en la otra fue indultado estando en la prisión de corte madrileña con motivo de la jura del Príncipe de Asturias; aunque logró interrogatorio no consta que se accediese a su ingreso; 23-IV-1725 (Ib., leg. 8, nº 9). Un año después, desde Llerena se acusaba al juez comisario Joseph Sánchez Ramírez de estar casado con la hija de un judío penitenciado por la Inquisición, aunque a estas alturas de la centuria no puede confirmarse si había sido estigmatizada su familia con el sambenito (ADPCR., s.c.).

328 Don Bernardo Peralta Bocanegra, párroco de Priego, certificaba mediante el preceptivo juramento "in verbo sacerdotis", en 1760, que

"...asi el dicho Luis Pedraxas como los referidos sus padres no an exercido nunca ofizio que les puede enbilezer como son de cortador, mesonero, ventero, verdulero ni otro alguno semejante porque siempre an tenido medios dufizientes para su dezente manutenzion..."

(Ib., leg. 13, nº 26, s.f.); el subrayado es nuestro.

329 Invariablymente todos obtienen el empleo solicitado. Nobles solariegos, señores de vasallos o sus sucesores se adhieren a la corporación manchega a lo largo del Dieciocho, entre los cuales caben mencionarse en 1714 al marqués de la Rambla, (Ib., leg. 3, nº 15); en 1724 a don Antonio Vaillo de la Beldad, conde de Cabazuelas afincado en Campo de Criptana -Ciudad Real-, (Ib., leg. 7, nº 23), y don Joseph Antonio Tavira Osorio, marqués del Cerro de la Cabeza, veinticuatro de Jaén (Ib., leg. 7, nº 35); en 1725 el burgalés Bernardo de los Ríos Enríquez, señor de los lugares de Abiñante, Pino, Ribaduerna y Villaverde de la Peña (Ib., leg. 7, nº 57), así como el malacitano don Bernardo Casamayor y Rey, hermano de la marquesa de la Florida (Ib., leg. 8, nº 13) ; en 1726, el gaditano don Ignacio Teodomiro de Mora y Figueroa, marqués de Tamarón (Ib., leg. 8, nº 41), y don Vicente Ladrón de Guevara, conde de la Roca, del Santo Imperio y marqués del Cerro de la Cabeza (Ib., leg. 46, nº 4); hacia 1728, el gaditano don Bartolomé de Zaldívar, hijo del conde de Saucedilla (ADPCR., s.c.), y don Pedro Juan de Quadros Acuña, señor de Aldeanueva de Figueroa (AHN. Div. Her., leg. 9, nº 54); en 1756, el lucenés don Joaquín Ramírez de Pulgot, nieto por línea materna del conde de Infantes (Ib., leg. 11, nº 37); y en 1797 el marqués de Cerberales (Ib., leg. 15, nº 11 y AHN. Consejos, leg. 1652, nº 12).

330 Del hidalgo don Antonio Polo de Lara, en 1754, se afirma que

"Don Antonio posee en esta ciudad -Lucena-, su termino y jurisdiccion y lugares de sus zercanias muchos vienes raizes sueltos y vinculados que se componen de casas, viñas, guertas y tierras, de suerte que llegan a mas de ochenta mill ducados."

(AHN. Div. Her., leg. 11, nº 16, s.f.). La renta anual de los mayorazgos pertenecientes a don Francisco Solano Gamir, vecino de Priego -Córdoba- se estiman en 1756 en unos 8.000 ducados, cuando aún

no había alcanzado su mayoría de edad (Ib., leg. 11, nº 46). Del hidalgo riojano Pedro San Miguel Tejada se le menciona un molino harinero y muchas "tierras de pan llevar" (Ib., leg. 6, nº 22),

331 Estos individuos, con fuertes intereses rurales, y víctimas propiciatorias de las rapiñas de bandidos o vagabundos, se muestran atraídos por el disfrute de un status que les hacían acceder a franquezas propias de los señores jurisdiccionales en sus propios dominios sin necesidad de adquirir tan costosos títulos jurisdiccionales.

332 El informe de Esperit Bellot, vecino de Orihuela -Alicante-, aunque incompleto, nos muestra a un hacendado campesino "buen cristiano romano", que posee cierta cantidad de tierras arrendadas, con una yunta de mulas y sembrador de cebada, garbanzos lino, etc. (Ib., leg. 7, nº 6); en 1732, Gabriel Pintado Moral era considerado en Ciempozuelos -Madrid-, "de las primeras familias de ella persona muy acomodada y hazendada con muchas tierras, viñas, olibas, criados y ganados de labor", algunas de las cuales eran arrendadas (Ib., leg. 10, nº 44).

333 Los testigos del burgalés don Tadeo Francisco Cortés, aseguran en 1760

"...que puede mantenerse en toda forma y segun sus circunstancias en esta villa con el mayoradgo que goza y posee, y tambien en la villa y Corte de Madrid donde asimismo es vezino y natural, si quiere ir a vivir y residir a ella, con las rentas de dicho su mayoradgo, y creditos que tiene contra la Real Hacienda."

(Ib., leg. 13, nº 27).

334 En 1725, don Francisco Romero Espinosa desde hacía cinco años era mayordomo del colegio mayor de Cuenca en la universidad de Salamanca (Ib., 8, nº 39); en 1734, el madrileño don Diego Hurtado de Contreras, ex-oficial mayor de la contaduría de los tribunales de México, con 23 años era alcalde mayor y administrador del señorío de Torrejón de la Rivera -Madrid- (Ib., leg. 4, nº 57); en 1741 solicitaba título hermandino don Isidro Miró y Aznar, rector de estudiantes de la universidad sevillana, con mayorazgos en Coria (Ib., leg. .10, nº 82); en 1744, tramitaba su ingreso el doctor Francisco Luis Serrano Gómez, socio honorífico de la Sociedad de Amigos del País de Sevilla, académico decano y presidente "de la Academia Principal de Jaen" (Ib., leg. 13, nº 19).

335 Por citar dos ejemplos opuestos, en 1723 obtuvo título de comisario hermandino Andrés Romero Fuentes, medidor público de granos de Arcos de la Frontera (Ib., leg. 6, nº 67); mientras que en 1732 se nombró juez superior a Juan Antonio Palacios Montero, arrendatario de la real renta de caballerías y alcaide de la galera real de Jaén (Ib., leg. 19, nº 48)

336 Abundan los pretendientes con experiencia en cargos concejiles considerados honoríficos, como alcaldías, regimientos, regidurías, etc. En 1755 el letrado don Juan Felipe Perea Robles afirmaba haber desempeñado repetidamente la alcaldía hidalga de la Hermandad General, durante una década fue regidor de Caravaca -Murcia-, y excomisario de milicias (Ib., leg. 11, nº 24); tres años después don Juan Navarro Padilla, vecino de Jimena de la Frontera, decía haber sido sucesivamente alcalde, regidor y teniente de corregidor de la villa (Ib., leg. 12, nº 24).

337 Es difícil de cuantificar los aspirantes que cultivan por sí mismos las tierras, ajenas o propias, o tienen sirvientes de labor, pues solo se precisan estos términos esporádicamente. Así sabemos que en 1720 Juan de Requena, residente en Aljama, habitaba en su cortijo, contaba dos pares de mulas para su explotación (Ib., leg. 6, nº 17); y en 1724 Agustín Fernández Narciso, avecindado en Villarrobledo, tenía con varias yuntas de mulas, galera y un criado de labor que le ayudaba en la explotación de sus considerables siembras (Ib., leg. 7, nº 47).

338 Los pretendientes suelen tener ganado ovino o/y cabalgaduras, dos de los más proclives para realizar desplazamientos por caminos y trochas. En 1720 Miguel Navarro y Arjonilla se declaraba tratante de caballos (Ib., leg. 6, nº 18); y hacia 1756 el burgalés don Joseph de la Cuesta Olalla era representado por su hermano por hallarse invernando con sus ganado merino tra shumante en los extremos de Villagarcía y Talarrubia -Baja Extremadura-, hasta su vuelta en verano (Ib., leg. 11, nº 29).

339 El andaluz Bartolomé Solís Gavira acredita poseer olivares, "tierras calmas", viñedos y ganado (Ib., leg. 13, nº 7).

340 El continuo trajinar por los peligrosas redes viarias de la época motivan no pocas solicitudes de adhesión a la Hermandad Vieja; así, en 1718 el sevillano Gregorio Martín Moya presenta informe en el que se califica de reputado campesino y honrado arriero (Ib., leg. 5, nº 63).

341 Predominan, con diferencia, los comerciantes de tejidos, como el cordobés Francisco López de Soto, con almacenes de ropas, paños y lienzos (Ib., leg. 6, nº 21); aunque los hay de todos los tipos: el valenciano Fernando Juan Pérez, corredor de lonja en 1729 (Ib., leg.

6, nº 64); hacia 1716 negociaba en telas y joyas el navarro afincado en Salamanca Claudio Nisit Chavarría (Ib., leg. 5, nº 32); hacia 1728 se expedía título al granadino don Juan Ruiz del Río y Sedano, mercader de cueros (Ib., leg. 9, nº 51); mientras que en 1796 el comisario almagreño Cándido Ortiz López comerciaba en salitre en la cercana villa de Membrilla (Ib., leg. 15, nº 17).

³⁴² El vecino de Ayamonte Pedro López mantenía en 1725 un lucrativo intercambio con la vecina Portugal (Ib., 8, nº 38), aunque parecen ser particularmente activos en estos tratos los gallegos afincados en Andalucía como el pontevedrés Domingo de Baños Mourinho, quien posee

"...en su lugar de origen con casa, viñas y tierras calmas, tiene en Coronil intereses en el tráfico de zedas -sic- y de sembrar trigo zebadas habas y demas semillas, para cuyo trafico mantiene y a mantenido un cavallo y un mozo que le asiste "

(Ib., leg. 13, nº 15). Especial atención merece la colonia extremeña en La Mancha, que permanecía sin avecindarse para eludir las cargas municipales, informandose desde el corregimiento ciudarrealeno en 1786

"...de inmemorial ha havido en esta ciudad, Almodovar del Campo, Miguelturra y otros pueblos de esta provincia establecidos lenceros extremeños tanto de Cabezuela como de Tornabacas y otras villas, los quales comerciantes jamas han traido sus mujeres: antes si han perseberado estar en los pueblos de su vecindad, yendo a el los maridos y permaneciedo en su casa y con su mujer y familia medio año para lo qual regularmente estan dos en cada tienda alternando la estancia en dicha provincia"

(AHN. Consejos, leg. 1.188, nº 2). Esta condición seguramente tuvo Francisco de Molina, vecino de Alconchel -Badajoz-, quien, en 1717, aseguraba contar con un caudal superior a los 6.000 ducados (Ib., leg. 5, nº 50).

³⁴³ El cordobés Plácido San Martín "anda comerciando" con la tienda del comerciante don Juan Jimenez (Ib., leg. 10, nº 57), o Gregorio

Omato Álvarez, leonés que en 1762 estaba como cajero mayor de un próspero mercader sevillano (Ib., leg. 11, nº 10).

³⁴⁴ En 1729 el gaditano Diego de la Corte y Andrade regentaba un próspero negocio armando naos a Indias (Ib., leg. 9, nº 57); y en 1731 el alcazareño Juan Pérez de Morales informaba en su solicitud ser "comerciante de azucar, cacao y otros generos" (Ib., leg. 10, nº 38).

³⁴⁵ Son cuantitativamente significativos los plateros y negociantes de los tejidos fabricados en sus propios telares o en viviendas particulares. Entre los primeros destacan el malagueño Tomás de Nájera, en 1721 (Ib., leg. 6, nº 31); y los cordobeses don Anastasio de Luna, en 1724 (Ib., leg. 7, nº 42), don Gregorio de la Cuesta, en 1727 (Ib., leg. 9, nº 23), etc. El nutrido gremio platero cordobés es venero de candidatos, siendo extrapolables las opiniones vertidas en el memorial del corregidor andaluz sobre el hidalgo don Juan Escobar Cáceres, pretendiente a una auxiliatoria de la fraternidad talaverana,

"...de ejercicio platero de corto caudal, y que allí llaman feriantes, porque continuamente sale a las ferias que se celebran en las provincias del Reyno para vender la plata que labra, y la mayor parte de comision, como otros muchos de su ejercicio, por ser grande el comercio que de ese ramo se hace en esta ciudad."

(AHN. Consejos, leg. 1.758, nº 17, s.f.). Controlan la confección y la venta de ropa y paños Lorenzo Guzmán y Guiada, quien en 1725 era vecino de Sonseca -Toledo- (AHN. Div. Her., leg. 8, nº 35), y del antequerano don Francisco Fernando Carneros Ortiz, hacia 1757, se consignaba que "trafica en la fabrica de paños y vayetas y tiene sirvientes que la manipulan" (Ib., leg. 12, nº 12, s.f.).

³⁴⁶ Por citar ocupaciones dispares mencionaré a Félix de Menonal, encargado del abasto de nieve de Alcalá de Henares, en 1718 (Ib., leg.

5, nº 55); al gallego Toribio de Nogueira, proveedor del monasterio de mercedario calzados de Madrid, en 1727 (Ib., leg. 8, nº 53); al vasco Juan Francisco Escudero, mercader de lonja que en 1721 suministraba bastimentos a la casa del duque de Alba en la Corte (Ib., leg. 6, nº 38); en 1728 se nombraba comisario al gallego Ignacio da Ferraría, encargado en Madrid de "la proveeduría de la Reyna" (Ib., leg. 9, nº 48); y don Cristóbal de Navedas, factor general, que en Córdoba proporcionaba víveres a los militares en 1729 (Ib., leg. 9, nº 63).

³⁴⁷ En 1709 se caracterizaba a Juan Real como "mayoral de los ganados de Don Sebastian Vicente Borja" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 33vº); y un año después se hacía lo propio con Juan Vaquero "mayoral de los ganados lanares de cavaña de Doña M^a Cathalina de Torres", hacendada ciudarrealeña (Ib.)

³⁴⁸ No se trata de meros criados domésticos o de labor, sino sujetos vinculados a personajes eminentes. El 10-VI-1707 se expide título al asturiano Juan de Caunedo, sirviente del marqués de Altamira residente en la Corte (Ib., f.13r); Antonio Rodríguez del Castillo Cano y Francisco Laje, criados del duque de Arcos, en 1727 (Ib., leg. 9, nº 14) y en 1729 (Ib., leg. 9, nº 59); o Alfonso García Sacristán, mayordomo del marqués de Tejares en 1760 (ADPCR., s.c.).

³⁴⁹ Pocos se aventuraban a reflejar en sus solicitudes su condición de jornaleros, pese a ser mayoritaria en la mitad sur peninsular, prefiriendo mencionar una ambigua adscripción al estado labrador. Desde Cuevas -Murcia-, el informe de un convecino al cabildo, en diciembre de 1731, exponía el caso del comisario Pedro Sánchez, titular desde el verano anterior, y del que se exponía que era

"...un pobre jornalero espadador de linos, y que algunos años a

ejercido el oficio de almanero y oy que se ofrezca si lograre la fortuna de entrar en qualquiera almanera lo tendra a mucha dicha= su padre fue molinero, con que con este caracter, y el de ser pobre de solemnidad yncapaz de nantener caballo y armas..."

(AHN. Div. Her., leg. 10, nº 37). En febrero de 1761 el regimiento de Igualaja -Málaga-, respondía a la reciente concesión del nombramiento a Juan Joseph Gil Duarte informando que sólo era un pobre bracero sin más hacienda que la fuerza de sus manos (Ib., leg. 4, nº 19).

350 El 10-XII-1712 se concedía la calidad de ministro superior al madrileño don Antolín Nieto "contador de resultas de S. Magd." (Ib., leg. 5, nº 13, f. 55r); y en 1726 se cita como candidato a don Cristóbal de Navedas, contador de la renta de salinas de Córdoba (Ib., leg 9, nº 63).

351 En 1718 el granadino Joseph de Rivera Sánchez ejerce como administrador del voto de Santiago en los Montes de Toledo, Jara talaverana y Campo de Calatrava (Ib., leg. 5, nº 56); en 1720 el gallego Benito Morales gestionaba las rentas de cientos y millones de Lebrija (Ib., leg. 6, nº 27); en 1731 Miguel Guerrero Yepes administraba el estanco del Tabaco (Ib., leg. 19, nº 22), y don Álvarez fñiguez la renta de salinas en Gibraleón (Ib., leg. 8, nº 2); en 1756 don Juan Mateo Sánchez de Cazorla era visitador de la real aduana y controlaba la renta "de cuatro maravedis en libra" del jabón en Lucena (Ib., leg. 11, nº 30); por último, en 1794 don Francisco Gómez Gamarra supervisaba la renta del aguardiente en Cabra -Córdoba- (AHN. Consejos, leg. 1.614, nº 18).

352 Receptores de rentas nobiliarias son , en 1715, Salvador Gil del Río de la renta de millones (AHN. Div. Her., leg. 5, nº 9); en 1717 Pedro Pedraza era teniente de alguacil mayor de dicha renta en Baza y Guadix (Ib., leg. 5, nº 49); en 1724, don Francisco Padilla Navarro,

alcalde de rentas y cobrador del duque de Medinasidonia en Gaucín, (Ib., leg. 7, nº 30), y don Pedro García Rubio sirvió como almecenero y alcaide de la real aduana (Ib., leg. 19, nº 31); en 1762 don Antón Pedro Mur era empleado de la renta de tabacos de Marchena (Ib., leg. 14, nº 11); en 1794 Ginés Antonio Cañabate, vecino de Armuña -Almería-, ejerce "los empleos de juez comisionado de morales y moreras, colector de iglesias y del Excelentísimo Señor Marqués de este estado" (ADPCR. s.c.).

353 Son relativamente frecuentes los expedientes de guardas de campo, en activo o relevados de su empleo, tanto ministros ordinario o cabos de las partidas de rentas reales como los estancos del tabaco, la sal, aguardiente o naipes, fortaleciendo su jurisdicción al extenderla al despoblado, donde pueden actuar ocasionalmente. Vid. AHN. Div. Her., legs. 5, nº 49; 8, nº 49; 9, nº 24 y 58; 10, nº 22; y 12, nº 7.

354 Desempeña una notaría eclesiástica, en 1730, Diego López Cabello en Obejo -Córdoba- (Ib., leg. 10, nº 10). Hacia 1719 Antonio Pérez de Calatrava, ejercía como notario de órdenes en Torralba -Ciudad Real- (Ib., leg. 6, nº 71). Escribanos numerarios son don Pedro Felva de Molina, en Puerto de Santa María -Cádiz-, hacia 1705 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 1r); el alcazaraño Alonso Jiménez Avendaño, en 1718 (Ib., leg. 5, nº 64); en 1725, Juan Jiménez Suárez, en Marchena Ib., leg. 8, nº 1), y Juan Mateo Caro, afincado en Baños (Ib., leg. 8, nº 15); don Jerónimo Velasco García en la Antequera de 1729 (Ib., leg. 9, nº 58).

355 En 1719 era corregidor de Alcaudete Martín de Guzmán (Ib., leg. 6, nº 13). Alcaldías mayores ocuparon don Cristóbal del Moral en Aranda de Ebro (Ib., leg 4, nº 30); Alonso Magro en Sanlúcar de Barrameda, en 1726 (Ib., leg. 8, nº 43); don Juan Navarro Padilla era teniente del

alcalde mayor de Jimena de la Frontera en 1758 (Ib., leg. 12, nº 24); y don Joseph Marín ,en 1800, lo era de Alosno -Huelva- (AHN. Consejos, leg 1.829, nº 6). Gobernadores declaran ser, en 1717, Francisco Rodríguez Botón, de Puebla del Maestre -Badajoz- (AHN.Div. Her., leg. 5, nº 47); y, en 1723, Francisco Martínez Carrasco, de Caravaca -Murcia- (Ib., leg. 7, nº 11). Los alcaldes ordinarios son numerosos: en 1706, don Juan de Prado Velasco lo era de Alcolea -Ciudad Real- (Ib., leg. 3, nº 15, f. 7r); o don Francisco Sánchez del Olmo, en Caravaca, hacia 1723 (Ib., leg. 12, nº 26). En 1707 se dice del palentino Manuel de Villa que era justicia (Ib., leg. 3, nº 15, f. 10vº); y, en 1708, el cordobés Jinés Martínez "adelantado de Toledo" (Ib., f. 25vº). Receptores de la Chancillería de Granada fueron don Francisco Torres Celedón, en 1707 (Ib., f. 13) y don diego Pérez Muñoz, en 1742 (Ib., f. 6vº), alcalde mayor del crimen se declara don Juan Francisco de Venero, en 1728 (Ib., leg. 9, nº 37); receptor de los Reales Consejos el madrileño Joseph Merino del Castillo, en 1714 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 61r); en 1794, del abogado de la audiencia sevillana, don Jorge Mª de la Reina, se acredita que

"...no obstante a las crecidas rentas que tiene, y en su casa hay, se aplico a la carrera literaria en que a completado los cursos que son necesarios para obtener los grados de leyes, y sagrados canones, habiendose merecido le nombrasen catedrático regente en ambas facultades en distintas ocasiones."

(Ib, leg. 15, nº 11).

³⁵⁶ Los almagraños Gregorio Serrano y Alonso Maldonado fueron alcaides del Real Bosque de Calabazas -Calzada de Calatrava, Ciudad Real- en 1716 (Ib., leg. 5, nº 26) y en 1726 (ADPCR., s.c.); Juan Jiménez Montoro gobernaba la fortaleza de Villafranca -Badajoz-, por cuenta del duque de Medinaceli, en 1756 (AHN. Div. Her., leg. 11, nº 48).

357 El madrileño don Manuel de Larache Salazar, comisario hermandino desde 1735, era "relator del Honrado Conzejo de la Mesta" (Ib., leg 6, nº 16, f. 3r).

358 Algunos pretendientes declaran como ocupación habitual "el tener un caballo viviendo de lo que salga", o declarando oficios tan peregrinos como el de Felipe Madera Rodríguez, vecino de Coín, empleado en llevar "bestias a la herrería", hacia 1741 (Ib., leg. 10, nº 61).

359 Durante la contienda sucesoria abundan los militares en activo, como el pamplonica Joseph Mendie Velasco, en 1705 (Ib., leg 3, nº 15, f. 4r); un año después, el alférez granadino don Julio Lanuza (Ib., f. 6r); en 1708, Juan de la Cruz "sargento del regimiento de Don Luis Solis de la caballería" (Ib., f. 20vº), el alférez sevillano don Jaime de Altemanes (ib., f. 23r); y en 1714, Pedro Rivera, don Juan Joseph Robledo y don Manuel de Paula, integrantes del regimiento de caballería de Málaga (ib., ff. 70r-vº). Oficiales de las milicias provinciales eran los malagueños don Francisco Padilla Navarra, capitán en 1724 (Ib., leg. 7, nº 30) y el alférez Joseph Mateos Orozco, en 1728 (Ib., leg. 9, nº 38); así como Francisco Justo Candelera Durán "propuesto al batallón de milicia local de Campillos", en 1759 (ADPCR., s.c.)

360 Tras 1715 hay un fuerte contingente castrense desmovilizado, algunos de lo cuales entran al servicio de la entidad manchega, como fue Juan Joseph Méndez Rodríguez, quien en 1716 asegura haber sido guía de acémilas de carga en las campañas de Aragón y Cataluña (AHN. Div. Her., leg. 5, nº 37); una década después ingresan el antequerano don Alonso Trujillo Vera, ex-teniente de infantería (Ib., leg. 6, nº

60), y don Martín de Contreras López, ex-cadete de la compañía coronela del regimiento de infantería española de Baena (Ib., leg. 6, nº 66).

361 El segoviano Francisco Cabezas, en 1724, era aparejador de las obras emprendidas en la catedral de Toledo (Ib., leg. 7, nº 44); el montañés afincado en la Corte, don Pedro Vicente Fol de Villanueva, hacia 1757 ejercía de maestro arquitecto de cantería (Ib., leg. 12, nº 8); también maestro de obras era, en 1725, el sevillano Joseph Tirado (Ib., leg. 7, nº 5).

362 Maestros albañiles fueron los sevillanos Ambrosio de Figueroa, en 1727 (Ib., leg. 9, nº 21) y Joseph Ramos, en 1724 (Ib., leg. 7, nº 58).

363 Por ejemplo, era maestro carpintero, el valenciano Alejo Andrés Mercader, hacia 1724 (Ib., leg. 7, nº 34).

364 A este empleo se consagran Santiago Pérez, en 1724 (Ib., leg. 7, nº 33), Alfonso Cabezas Fernández, en 1725 (Ib., leg. 8, nº 23), o don Juan Antonio Morrón Collado, un año después (Ib., leg. 8, nº 29).

365 La solicitud del vallecano Jacinto Morera del Olmo, juez comisario desde el 8-I-1725, exponía, curándose en salud, que era "maestro de hacer carros oficio decente en qualquier republica como tan necesario para hazer instrumentos de labranza" (Ib., leg. 7, nº 2).

366 El pretendiente hidalgo don Alejandro Alonso de Torres, era cirujano oculista hacia 1724 (Ib., leg. 7, nº 35); cuando, en 1795, el también oculista don Pedro Laguna Caballero, vecino de Baena -Córdoba-, obtiene título de la Santa Hermandad, el corregidor juzga que

"...dicha profesion no es la mas propia ni parece compatible la caritativa asistencia a los enfermos con las continuas salidas en persecucion de malhechores; ni la mano fuerte que estos necesitan para su captura, con la delicadeza y sosiego de la del cirujano."

Contrariado el aspirante con estas apreciaciones, alega a su favor que

"...soi cirujano en este pueblo perc sin renta ni dotacion de el ni de sus caudales publicos, y por consiguiente sin obligacion de una asistencia perpetua, ni continua, exercitandome la maior parte del año en salidas y operaciones a los pueblos, tanto en casos de cirujia, como para otras operaciones de ojos, en estos quatro Reynos de Andalucia..."

No se evacuaría auxiliatoria por el Supremo Consejo hasta más de un año y medio después de su concesión (AHN. Consejos, leg. 1.685, nº 5).

367 Francisco Martínez Abad Iglesias, impresor de libros, con taller en la calle Atocha esquina Aduana -Madrid-, fue quien "imprimio los titulos ultimos de jueces comisarios y otros instrumentos" de la entidad ciudarrealena. Seguramente familiarizado con los privilegios derivados del citado status, el 25-IX-1725, logra nombramiento de comisario por parte de dicho cabildo, descontándose su precio del costo de tales impresiones (AHN Div. Her., leg. 8, nº 21).

368 Tal es el caso de don Juan del Castillo, burgalés residente en Sevilla, en 1728 (Ib., leg. 9, nº 53).

369 El granadino Juan Ortega "maestro de colegio", obtiene título el 22-VIII-1709 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 27), e igual empleo tenía, en 1731, Francisco Martínez Peláez, vecino de Villahermosa -Ciudad Real- (Ib., leg. 10, nº 39).

370 Hacia 1716, Joseph de Haro Cortinas, avecindado en Tordesillas pero estante en Valladolid, tiene por "oficio pasxamanero -sic- texedor de colonias y otras cosas" (Ib., leg 5, nº 57).

371 El gaditano don Diego Sánchez de Toro, teniente de intantería durante seis campañas, en 1727 representa haber sido maestro, subordinado del capitán de asuntos financieros de la Real Armada, y actual gestor del aprovisionamiento de bastimentos para los barcos que recalaban en dicho puerto (Ib., leg. 9, nº 25)

372 Ejercen como abogados, entre otros, don Juan Manuel García Hidalgo, residente en Chillón -Ciudad Real-, en 1714 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 67r); en 1731 el murciano Fernando Vicente Cano era letrado de dicho ayuntamiento y del Santo Oficio de la Inquisición (Ib., 10, nº 36).

373 Son amanuenses los madrileños don Diego Ruiz, en 1706 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 7r) y don Alfonso García Barba, en 1714 (Ib. f. 61vº).

374 Atraídos por la posibilidad de portar armas cortas, entre estos individuos acostumbrados a manipular objetos valiosos o que están sujetos a frecuentes desplazamientos solicitantes de una comisaría de la Hermandad Vieja se encuentran los maestros doradores Juan Bautista Vallado, valenciano estante en Almagro en 1714 (Ib., f. 71vº) y don Diego Gutiérrez, vecino de Tarifa en 1725 (ADPCR. s.c.). Pintores, doradores y estofadores declaran ser Juan Antonio Fernández Garrido, en 1761 (AHN. Div. Her., leg 13, nº 29) y el murciano Juan Antonio del Barco Ramírez, en 1755 (Ib., leg. 11, nº 21.)

375 Boticario es el madrileño don Francisco Pérez, ministro superior de la Hermandad Vieja manchega desde 8-VI-1727 (Ib., leg. 9, nº 19).

376 Sabedores de las franquías de los comisarios al oficiar en algunos de los destinos de sus reos, presentaron candidatura don Pedro García Rubio, vecino de Bullás, ex-soldado de galeras entre 1716-1722 (Ib., leg. 10, nº 31), y el gallego Benito Nogueira Vázquez, capataz del arsenal de la Carraca -Cádiz-, en 1759 (Ib., leg. 12, nº 18).

377 Mencionan tres maestros de albeitería el ciudarrealeño Pedro Sánchez Gallego, en 1716 (Ib., leg. 5, nº 26); el yebenoso Francisco Sánchez de la Torre, en 1723 (Ib., leg. 7, nº 26) y Francisco de Vera Espinosa, afincado en Osuna hacia 1725 (Ib., leg. 8, nº 3)...

378 El vigués Pascual de Matos Freire, estante en Granada, consignaba en 1712 ser "abil capaz y suficiente para usar y exercer comisaria de la Santa Hermandad y otros qualesquiera puestos honorificos" (Ib., leg 5, nº 7, f. 2r). El corregidor de Córdoba aprovechaba para exponer que

"...en el dia estos empleos, como los de alcaldes ordinarios de Hermandad de uno y otro estado, que anualmente nombran los ayuntamientos son meramente honorarios, sin fruto alguno...por lo mismo inutiles...mas util y necesario seria se estableciese 3ª Cia. de Escopeteros de a pie, que, como las otras dos, estubiese a las ordenes del vuestro Presidente de Granada: una establecida alli para la Andalucia Alta: otra en Sevilla para la Vaja y parte de Extremadura: y la 3ª en Cordoba para la Sierra Morena, y parte de la campiña desde Ecixa hasta Lucena y Anduxar...reformando tantos guardas a caballo que estan sobrantes, en las capitales... pues aunque pueden servir para un alcance, esta es una cosa muy rara y lo ordinario es, que avisan desde mui lexos, no estando acostumbrados a apostarse, y menos a reconocer las biñas y sendas extraviadas...lo que solo pueden executar los escopeteros, mandados por buenos oficiales y cavos..."

4-IX-1794, Córdoba (AHN. Consejos, leg. 1.630, nº 32, s.f.).

379 Conocemos algunas solicitudes, más o menos solapadas, de venteros y mesoneros. En 1717, Juan Moreno Escacía, residente de Alhama de Granada regentaba una posada en propiedad, pretendiendo arrendarla, obteniendo la comisaría pretendida un año después (AHN. Div. Her.,

leg. 5, nº 51); en 1722, Alonso Herranz, vecino de Torrejón de Ardoz -Madrid-, poseedor de diversos bienes raíces y mesonero, antes de cinco meses logró la tramitación de su candidatura (Ib., leg. 5, nº 51); Pablo Rodríguez Munera, en 1723, debe reiterar su solicitud pues

"...aunque asiste en la benta de Miranda que la tiene en arrendamiento esta muy acomodado y la sirbe por mozos y en esta villa no a escaezido su estimazion ni a sido reparable antes bien para lo que pretende asistiendo como asiste en Sierra Morena donde los malhechores y ladrones suelen enboscarse para hazar maldades por ser sitio dicha venta de todo el paso y camino de Andalucia y Castilla y muy util y conbeniente aya en dixo paraxe hombre como dicho Pablo Rodriguez ministro de la Santa Hermandad para asegurar dicho camino obiendo la ynbasion de ladrones y maldades que puedan suzeder y el pretendiente en la sierra por su propio interes conbenienzia y utilidad correr la tierra con sus cazadores gente y criados..."

Se le despachó título el 3-XI-1723 (Ib., leg. 7, nº 18, f. 6r), y una copia en 1725, por haber extraviado en que tenía; El baenés Juan Rodríguez, "obligado de las tabernas de la Porcuna", juez comisario desde fines de 1714, remitió su nombramiento a Madrid para su validación en 1729 (Ib., leg. 9, nº 63); el malagueño Juan Berguillios poseía título de hermandad en 1731, pese a ser reputado ventero (Ib., leg. 4, nº 54); por último, en 1762, el condobés Diego García Romero

"...de oficio labrador aunque tiene la tercera parte de la venta de Cardaña que esta en el termino de Montoro, en cuias cercanias tiene siembras, corre al cuidado de sus mozos y criados..."

pese a lo cual, no resultó óbice para su admisión (Ib., leg 14, nº 6).

380 Los testimonios son , no obstante, menos frecuentes de lo que cabría esperar. El corregidor de Gibraleón, el 11-VI-1718, informa de un candidato que "lleva la intencion de exonerarse de las contribuciones reales, pechos y cargas conzejiles a que deve contribuir como una de los vecinos labradores y de caudal desta villa" (Ib., leg. 5, nº 66). El concejo a Arroyomolinos -Badajoz- insiste en que Felipe Collado no era merecedor de esa dignidad (vid. Apéndice documental, texto nº 6), pese a que es avalado por el síndico general,

pariente cercano de su esposa, y por otros 16 testigos no consta que fuese admitida su pretensión (Ib., leg. 11, nº 2 y 5); otro tanto ocurre en Zafra en 1756 (Ib., leg. 11, nº 42) y en Arahál en 1760 (Ib., leg. 13, nº 17). No ocurre lo mismo en todas las ocasiones, así, en 1795, desde La Roda -Albacete-, a la concesión de auxilioria a Juan Alfonso Serrano se asegura no ser gravoso para el común, por haber suficientes sujetos prevenidos para los empleos municipales, pese a no contar más que con 82 vecinos (AHN. Consejos, leg. 1.656, nº 23).

381 La actitud del Consejo de Castilla, relativamente permisiva hasta entonces, en 1740 despoja a los comisarios del Triple Instituto de la mayor parte de sus franquizas fiscales y personales. En los albores del siglo XIX, el alcalde ordinario de Alosno, quien desde 1798 tramitaba su adhesión a la Hermandad manchega, logra auxilioria en 1802, pero "con calidad de que por ello no goce el D. Josef Marin privilegio ni exencion alguna de las cargas y obligaciones concejiles y vecinales" (Ib., leg. 1.829, nº 6).

382 En 1718 don Francisco Gutiérrez de Cevallos, juez comisario de Alcaudete, se queja por verse equiparado en dignidad a un carnicero de Martos -Jaén- (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 27); el murciano Lorenzo de Liria, estimaba en 1731 que había más de 1.000 vecinos "y muchas familias de distinzion todas zircunstanziyas prezisas para reszibirles de sonrojo si hubieran admitir por juez comisario a dicho Pedro Sanchez", bracero del campo (Ib., leg. 10, nº 37).

383 En un último intento por atajar las irregulares informaciones a la entidad ciudarreleña, una consulta al Supremo Consejo el 20-VIII-1728 pretendía dotar a sus dependientes más inmediatos de los aspirantes de la capacidad para supervisar su cumplimentación

"...por ser muchos los comisarios cuadrilleros y de distintas provincias y que para despacharles sus títulos, por informes verbales sin que precediese judicial conocimiento de sus personas, oficios, y modos de vivir, se experimentaba que algunos abjuraban de sus títulos y faltaban al cumplimiento de su obligación..."

(Ib., leg. 46, nº 2, s.f.). No sabemos si tuvo eco tal propuesta, pero antes y después de cursarse aparecen ministros hermandinos aplicados en tales labores (Ib., legs. 7, nº 13, 20, 49 y 58; 8, nº 8; 9, nº 28, 36 y 38; así como en ADPCR., s.c.).

384 En 1732 representaba un testigo de los aportados por el aspirante

"...que el dicho Andres Vibanco quien de presente tiene bastante caudal para obtener el empleo que pretende para mantener caballo y armas como asta aqui los a mantenido y que oy tiene ocho yeguas de vientre y otros animales asnales y segun su porte y vestidos y puntualidad tiene dinero para ello porque en muchas ocasiones y siendo tal alcalde y rexidor a prestado dinero..."

(Ib., leg. 10, nº 42); y en 1758 de un veinticuatro de Jaen dice que

"...no solo puede mantener armas y cavallo, como lo mantiene en crecido numero, sino ws que pudiera mantener coche como hasta aqui lo a ejecutado y a el presente no por aberse mudado a las casas principales que vinculadas con otros bienes le dexo la zitada su madre la que estan en callejuela donde no se puede arrimar coche a la puerta..."

(Ib., leg. 12, nº 27); Diego García Cofreile, como apoderado de su hijo, manifiesta ser "de mui buena vida y costumbres aplicado siempre a su labor y exercicio del campo que no es tablajero pendenciero ni amancebado"; 5-XII-1724, Ystán -Málaga- (Ib., leg 7, nº 50).

385 Expediente de Juan Antonio Serrano Martínez, fechado en 1794, La Rada -Cuenca- (Ib., leg. 15, nº 12).

386 Excepcionalmente concisas fueron las declaraciones hechas de Tomelloso -Ciudad Real-, en 1758, pues aunque los testigos aseguren que contaba con unos 650 vecinos, un notario local advierte que su

"...vecindario por un libro padron que se a exhibido por el señor juez de estos autos executado en este presente año para el repartimiento del salario del medico resulta ser de quinientos sesenta y seys vecinos incluidos en ellos bentiseys con la nota de pobres y ausentes..."

(Ib., leg. 12, nº 16). La escasa fiabilidad de la inmensa mayoría de los datos adelantados se pone más en evidencia en las pequeñas poblaciones, sistemáticamente estimadas al alza para auspiciar la concesión del título requerido; es el caso de los diversos testimonios recibidos en 1761 de Puebla de Almuradiel -Toledo-, se observa una diferencia de 100 vecinos en las declaraciones de los informantes (Ib., leg. 13, nº 29). En los lugares populosos, como la Villa y Corte o las grandes poblaciones andaluzas, ni tan siquiera se molestan en estimar su vecindario, diciéndose del de Madrid, mediada la centuria, que "es mui numeroso como se deja discurrir" (Ib., leg. 12, nº 8).

387 Es paradigmático el caso de Antequera -Málaga-, cuyas estimaciones poblacionales sufren notables oscilaciones al tenor de los expedientes consultados. En la postrimerías de 1755 se consideraba alrededor de los 8.000 vecinos (Ib., leg. 11, nº 26), mientras en 1758 se elevaba a 10.000 (Ib., leg. 12, nº 22), reduciéndose entre 1793-1794 a no más de unos 6.000 vecinos (Ib., legs. 14, nº 25; 15, nº 1 y 7).

388 En 1762 un pretendiente de Santa María de Villamayor aseguraba que

"...que ni en el ni en sus cercanias mas de nueve leguas en contorno no hay ningun alcalde de la Santa Hermandad, ni menos conoze el testigo en el Reyno de Galicia mas que solamente tres mui distantes en aquella provinzia de Lugo."

(Ib., leg. 14, nº 7).

389 Hasta mediados del Setecientos los nombramientos al sur del Tajo eran relativamente reiterados por la Hermandad de Toledo, como fueron:

<u>TITULAR</u>	<u>VECINDAD</u>	<u>CALIDAD</u>	<u>AUXILIATORIA</u>
----------------	-----------------	----------------	---------------------

Don Joseph Rosales	Almodóvar del Campo	TCM	15-12-1732
Alfonso del Valle	Alcázar de San Juan	C	14-4-1741
Félix de Salazar	Ajofrín	C	14-6-1741
Joseph Blazquez de Olmedo	Lucillos	C	11-6-1741
Don Pedro Lorenzo Abril	Caravaca	C	11-12-1741
Don Nicolás Maie	Cádiz	TCM	11-8-1742
Francisco Gómez	Camas	TCM	6-12-1744
Don Pedro Sindtz Teraldino	Cádiz	TCM	6-5-1746
Don Ricardo Dumpli	Sevilla	TCM	6-5-1746
Don Manuel Cañaberal	Granada	TCM	20-2-1747
Don Melchor Herrera Fonseca	Granada	TCM	20-12-1747
Don Francisco Cabezas	Córdoba	C	20-12-1747
Don Miguel Cañaberal	Granada	TCM	11-12-1748
Don Francisco Ferro, genovés	Cartagena	C	1748

TCM= Teniente de cuadrillero mayor C= Comisario cuadrillero

Fuente: AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, vv. ff.

390 Desde La Roda -Sevilla-, se manifiesta en 1756 que "en dicho lugar siempre se ponen dos alcaldes, dos regidores, un alguazil mayor, alcaldes de campo aunque pedáneos y una escribania publica" (AHN. Div. Her., leg. 11, nº 45). En Valdepeñas -Ciudad Real- se señala, hacia 1758, que

"...-a fin de año el concejo- haze elezion i nombra dos alcaldes de la Santa Hermandad el uno por el estado noble, y el otro por el estado general, y como tales alcaldes sirven con la la jurisdiccion que les compete el año de su nombramiento..."

(Ib., leg. 12, nº 28).

Reactivada la concesión de las plazas de gracia y la tramitación de provisiones auxilatorias, en la últimas décadas del Setecientos, a los ministros toledanos al sur del Tajo, destacan los siguientes:

<u>TITULAR</u>	<u>VECINDAD</u>	<u>AUXILIATORIA</u>
Don Antonio Espín	Cartagena (Murcia)	27-9-1781
Don Joseph Suárez Negrón	Estepa (Sevilla)	29-8-1783
Don Vicente Malla	Cartagena (Murcia)	7-7-1783
Don Pedro Angulo y Ramos	Morón de la Frontera (Cádiz)	1783
Don Zoilo de Arjona	Osuna (Sevilla)	1789
Don Josef Mariano de Montes	Córdoba	1792
Don Francisco Martín Valentín	Trujillo (Cáceres)	1793
Don Luis Prieto de Andrés	Cartagena (Murcia)	1794
Don Eusebio Ladrón de Guevara	Sevilla	1794
Don Diego Fermín de Rijas	Andújar (Jaén)	1795
Tomás Martínez, comerciante	Lorca (Murcia)	1795

Francisco Arévalo	Pozoblanco (Córdoba)	1796
Don Diego Manuel López	Bailén (Jaén)	1797
Francisco Castilla	Fuencaliente (Ciudad Real)	1797
Don Pedro Gilberto	Murcia	1797
Don Francisco María Mínguez	Sevilla	1798

Fuentes: AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9 y Libros Matrícula, 2683, 2 al 2683, 3, vv.ff.

391 AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

392 Córdoba, 1758 (AHN. Div. Her., leg. 12, nº 20); Priego -Córdoba-, 1760 (Ib., leg. 13, nº 26); Estepa -Sevilla-, 1793 (Ib., legs. 14, nº 19 y 15, nº 5); Granada, 1793 (Ib., leg. 14, nº 15); Andújar -Jaén-, 1794 (AHN. Consejos, leg. 1.506, nº 47); Osuna -Sevilla-, 1794 (AHN. Div. Her., leg 15, nº 11); y Úbeda -Jaén-, 1802 (Ib., leg 15, nº 4).

393 Un caso ostensible es el de Antonic de las Heras, afincado en Alcohujate -Cuenca-, de 50 vecinos, donde estaba representada la entidad talaverana con Joseph del Pozo y Adriano de Talavera, por lo que en 1718 se temía por sus capitulares que un nuevo título

"...poner en continuas ocasiones de perderse a los vezinos y atropellarlos; de cuio ejercicio tienen por zierito repetidas inquietudes del pueblo y su ruina, aviendo empezado con amenazas publicamente aun antes de tener el dicho; todo lo qual se haze patente con averse hecho en la ciudad de Huete la ynformazion que precedio para para conseguir dicho titulo; por tener por zierito no lo abia de conseguir en esta villa donde debiera hazerse..."

(Ib., leg. 4, nº 28, s.f.)

394 Bearnese son Francisco de Salas, vecino de Málaga, en 1714 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 61vº); Pedro de la Guita y Cantía, en 1715 (Ib., f. 73vº); ese mismo año Agustín de Vinota, estante en Salamanca (Ib.); en 1716 Juan Joseph Casamayor y Altabas, vecino de Zaragoza (Ib., leg. 5, nº 38) y Diego Bergerón Prat, comerciante de Arahal -Sevilla-, en 1760

((Ib., leg. 13, nº 17). Era vasco-francés Juan de Agadía, natural de Bayona y residente en Zamora en 1715 (Ib., leg. 3, nº 15, f. 73vº); y franco-catalán don Antón Pedro de Mur, afincado en Marchena -Sevilla-, en 1762 (Ib., leg 14, 11). De otros puntos de Francia, principalmente de su Macizo Central procedían, en 1716 Antonio Laparina Pérez, natural de Orillar -obispado de Saint Lô-, mercader avecindado en Zamora (Ib., leg. 5, nº 16); en 1718 Pedro Cambrón Riverol, mercader de lienzo en Zamora y ex-militar, decía ser oriundo de Urzel, próximo a la frontera franco-flamenca (Ib., leg 5, nº 29); en 1721 presenta su candidatura Juan Pérez de Cáceres, estante en Salamanca y ex-oficial de los ejércitos borbónicos (Ib., leg. 6, nº 41); en 1723 residía en Sevilla Blas Francisco de Vega y Timbori, natural de Verdún (Ib., leg. 7, nº 7); el mercader Francisco Roslán, natural de Saint André -Amboise-, en 1731 remite información desde San Felipe -La Coruña- (Ib., leg. 10, nº 19); asimismo es galo Juan Nestrana, mercader avecindado en Manzanares -Ciudad Real-, aspirante a una dignidad hermandina en 1744 (Ib., leg. 11, nº 6).

³⁹⁵ Entre ellos cabe destacar Francisco Rey Boubier, turinés residente en Zaragoza hacia 1716 (Ib., leg. 5, nº 39); don Joseph Antonio Pezio Bonafila, genovés afincado en Grazalema hacia 1761, que ejercía como pintor-dorador en Italia y España, siendo su tío el cónsul de Génova en Málaga (Ib., leg. 13, nº 30).

³⁹⁶ En las poblaciones extremeñas y andaluzas cercanas a Portugal hay pretendientes del país vecino establecidos en suelo español, como, en 1718, Antonio González Márquez, emeritense de adopción y nacido en Afaia. De raigambre lusitana pero plenamente naturalizados castellanos eran don Manuel González Torres, cuyo tío bisabuelo ostentó el hábito de Cristo (Ib., leg. 15, nº 19), o don Tadeo Felipe Cortés del Valle,

de quien se dice que sus abuelos maternos procedían de la isla de Santa María, en la Terceira -Azores-.

397 A principios del Setecientos se despachó título, el 22-X-1711 a don Pablo Argedorn "de nacion flamenco", residente en Málaga (Ib., leg. 3, nº 15, f. 43r); y el 14-19-1712 al comerciante gaditano de idéntica ascendencia don Juan Lorenzo Vanesrique, abonado por el anterior (Ib., f. 15vº).

398 7-X-1709, Ciudad Real (Ib., f. 28r).

399 Extremadamente minuciosa es la descripción realizada en 1727 por un notario madrileño del gallego Andrés Romero de Campos, expresándose

"...es un moço de treinta y dos años no muy cerrado de barba; pelo propio castaño oscuro zexas grandes pobladas, ojos grandes de color pardos, caraguileño, boca pequeña, labios delgados, color trigueño, agil, delgado y bien hecho de cuerpo; con una nube aunque pequeña junto a la niña (y a la margen de ella) en el ojo derecho y con un lunar como morado del tamaño de una lenteja poco mas o menos poblado de pelo de color castaño en el brazo izquierdo al primer tercio en el morrillo de la parte de afuera cerca del promedio del braço, y de estatura natural de dos varas mas o menos de cuerpo..."

(Ib., leg. 6, nº 2, s.f.).

400 La altura, expresada en varas castellanas y en pulgadas, o en palmos en la Corona de Aragón, permiten establecen un promedio de 1.55 a 1.60 ms. de altura; predominan los individuos que no llevan barba, los morenos de ojos castaños y los comprendidos entre los 24-50 años de edad.

401 La mayoría de ellos tienen cicatrices visibles, y abundan los picados de viruelas. Los defectos físicos consignados más a menudo son

los que afectan a cojos (Ib., leg. 5, nº 3 y 65; 7, nº 8; 10, 19), tuertos (Ib., leg. 6, nº 37; 7, nº 39); corcobados (Ib., leg. 5, nº 60); obesos o inútiles de alguno de sus brazos...; de difícil catalogación son los sujetos cuyos ojos dicen estar "pintados". En el extremo opuesto se halla el pretendiente salmantino don Juan Berrocal García, que "es doble y alto de altura" (Ib., leg. 13, nº 6).

402 En 1727, Francisco Pérez Losada, vecino de Pedrera -Sevilla- presenta como único testigo a su paisano Francisco de Ardila, sujeto conocido del la entidad manchega, tramitándose en cinco meses su título (Ib., leg 9, nº 31); en el polo opuesto se encuentra don Francisco Muñoz Toscano, vecino de Espejo -Córdoba-, que en 1706 aportaba doce declarantes (Ib., leg. 5, nº 4).

403 La mayor parte de los solicitantes prefieren la comparencia de individuos de edad avanzada para que avalasen sus méritos personales y familiares, siendo destacable la longevidad del testigo antequerano de 92 años, don Lorenzo Saavedra, en 1757 (Ib., leg 12, nº 12).

404 En 1758, Calixto Domínguez García era avalado por tres convecinos y la viuda Catalina López, siendo aceptado a trámite su memorial (Ib., leg 12, nº 21).

405 Ib., leg. 13, nº 23.

406 En 1759 un capataz del arsenal gaditano de La Carraca cumplimenta el informe ante el contador interino de los Reales Aresanales de la Marina (Ib., leg 12, nº 18).

407 Francisco Rubio González, junto a su esposa María López Sánchez, vecinos de la Solana -Ciudad Real-, el 19-X-1756 logran cuestionario reglado con el manifestar la pretensión de un a comisaría por parte de su hijo Francisco, por entonces en Granada. El 13 de diciembre siguiente, el gobernador local notifica la convocatoria de testigos que les avalasen; un día después se cumplimentaba este requisito y luego el escribano describe las señas personales de dichos progenitores. El 1-I-1757 tres sujetos abonan la calidad del aspirante ante el alcalde de hidalgos de la Chancillería granadina, y el 16-VII-1757 se expide nombramiento a su favor (Ib., leg. 11, nº 41).

408 Tales circunstancias concurren, entre otros, en 1724, en don Bernardo de los Ríos Enríquez, vecino de Villacastín y señor de vasallos (Ib., leg. 7, nº 57); en 1725, en Francisco Julián Resorer (Ib., leg. 4, nº 40), y don Pedro Teodoro López de Quadros, afincado en Ibros -Jaén- (Ib., leg. 8, nº 24); en 1730, Nicolás Angulo, vecino de Montalbán (Ib., leg. 10, nº 6); en 1731, en el puertollanense Juan de Mora Villaxos (Ib., leg. 4, nº 52), y en el solanero don Manuel Antonio Muñoz (Ib., leg. 10, nº 29); y en 1760 en Juan Ortal Lozano, vecino de Fuencaliente -Ciudad Real- (Ib., leg 13, nº 18).

409 Ib., leg. 4, nº 29, 34, 37, 45, 49, 76, 77, 79; 5, nº 4, etc.

410 En el libro registro de principios del Setecientos se asienta el despacho de título, el 1-II-1706, a favor de Pedro, gallego residente en la Corte, de quien el escribano hermandino consigna "su apellido me lo quedo" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 4vº).

411 En 1728, el mercader leonés Joseph Antonio Ramos Cienfuegos presentaba traslado apostólico de la fe bautismal de un tal Andrés

Morán (Ib., leg. 9, nº 40); hacia 1762, no coincidía el patronímico de un hidalgo leonés estante en Sevilla, quien en la información aparece indistintamente con los nombres de don Gregorio Omato Álvarez y de don Gregorio Álvarez Sánchez, constando que fue bautizado con el de Santiago (Ib., leg. 14, nº 10).

⁴¹² Dada la elevada tasa de analfabetismo existente en la época y el carácter oficial de las solicitudes, éstas se confiaban para su cumplimentación a los escribanos locales, cuya profesionalidad con cierta frecuencia aparece en entredicho. A la falta de cálculo para concretar la edad de los aspirantes, aún con la partida bautismal en sus manos, se une a menudo otros fallos atribuibles a errores de pluma, o como el que presenta el memorial acreditado en 1762 por Manuel Roiz, de quien dice estar "prompto siempre y quando se ofrezca alguna empresa propia del instituto de la Santa Hermandad Vieja de la ciudad de Ciudad Rodrigo, digo Real" (Ib., leg., 14, nº 12).

⁴¹³ El 8-X-1712 se daba noticia de choques jurisdiccionales en Rus (Ib., leg. 3, nº 15, f. 51r), o en 1727 en Mancha Real, ambas en Jaén (Ib., leg. 9, nº 13); hacia 1794 se dice del comisario don Bartolomé Rodríguez Ponce que "en la actualidad se halla gravemente accidentado y aun sin esperanzas de vida" (ib., leg 15, nº 10), y otro tanto se asegura de don Alejandro González en 1798 (Ib., leg. 15, nº 23); tal vez tales asertos se emitían maliciosamente para dar viabilidad a determinadas solicitudes en lugares saturados de ministros del Triple Instituto.

⁴¹⁴ Juan Antonio Bazán de la Cuesta, vecino de Colmenar de Oreja -Madrid-, utiliza los servicios de su amigo Manuel Sánchez para llevar su información a Ciudad Real, en 1744 (Ib., leg. 7, nº 36).

415 Es excepcional el caso de Francisco Álvarez ñíguez, adscrito a la renta de salinas, quien habiendo remitido sendos memoriales desde Gibralfuente el 22-III-1725 y el 1-II-1730 no logra título hasta el 3-VII-1730.

416 El 15-III-1723, desde Ronda -Málaga-, el marqués de Casa Tabares adjuntaba con el memorial de Andrés García Valle, vecino de Grazalema, una carta de recomendación dirigida al escribano hermandino Mateo Ruiz (Ib., leg. 4, nº 3). El comisario sevillano Juan Cano pretendía estimular la tramitación del título de un acaudalado pretendiente que marchaba a Indias enviando a dicho notario ciudarrealeño, el 7-IV-1728, "un cajoncito que incluye media docena de pozillos y platillos de China, seis abanicos, y una caxeta para tabaco", y cinco días después remite un cajón de vino fino gaditano al referido Mateo Ruiz (Ib., leg. 9, nº 41).

417 El 16-II-1800 se notifica a la justicia de Cartagena -Málaga- que hiciese información secreta sobre Salvador Mengíbar Carmona, pero al tardarse en más de tres años en su despacho, el fiscal hermanino alega

"...ha pasado mucho tiempo y pueden haver variado las circunstancias del pretendiente tanto en su caudal y facultades para mantener caballo quanto por haber mudado de domicilio o incurrido en escesos que le impidan obtener tal empleo."

En mayo de 1803 se devolvía el memorial original a Ronda, desde donde su corregidor señala que, antes de sufrir menoscabo, la hacienda del aspirante aumentó con nuevas tierras (Ib., leg. 16, nº 1)

418 Se remitieron cédulas de nombramiento a sujetos tan dispares como don Francisco Pablo Jiménez, notario de Cámara de la Chancillería de Granada, a fines de 1708, para hacérselo llegar al granadino Francisco

Álvarez Calderón (Ib., leg. 3, nº 15, f. 25vº); el del palentino Juan Velasco "corrio por Frai Joseph Garcia prior de su combento y ospital" (Ib., f. 44r); el del sevillano Gregorio de Parra se envió al padre prior de Santo Domingo en 1711 (Ib., f. 44r); los de dos sorianos, en 1711, pasan por manos del padre Mena (Ib., f. 45r); cuatro títulos de candidatos palentinos son hechos llegarafray Antonio de Figueredo, entre 1711 y 1712 (Ib., ff. 52r-54r). Antonio Cisneros, vecino de Montealegre -Albacete-, obtiene título por mediación de fray Manuel Gutiérrez, prior del convento de San Juan de Dios (Ib., f. 45vº); y en 1712 los nombramientos de varios andaluces sen recogidos en Sevilla del prior Juan de Güerto (Ib., ff. 46r-vº y 49 vº); en diciembre de 1712 el despaño de un pretendiente de Medinasidonia se remite al prior del Puerto de Santa María (Ib., f. 59r), todos a principios del Setecientos.

419 Sabemos que no se cobraron derechos algunos a los siguientes individuos: el almagreño Juan García de Aljofrín, comisario desde el 16-IV-1707; así como el ciudarrealeño Joseph Jacinto Savariegos, delegado hermandino desde el 14-XII-1712 (Ib., ff. 11r y 54 vº); seguramente esta deferencia sea una recompensa a sus servicios realizados por cuenta de la Hermandad, al ser el primero apoderado de la entidad en la cabeza del Campo de calatrava y el segundo ejercer de correo mayor de Almodóvar del Campo.

420 Con la nota de "no se a pagado" se asienta la expedición de título al asturiano Pedro de las LLeras (Ib., f. 13r); en 1711 don Pedro de Torre, Juan Martínez de la O, Isidro López de Olmeda, Gregorio de Parra y Joseph de Escobar adeudaban montos que oscilan entre 60 rs. y 15 pesos (Ib., ff. 40vº, 44r y 45r); en 1712, deben, total o parcialmente sus derechos por tal concepto, Miguel Pingarrón, vecino

de Arganda -Madrid-, Bernabé Pérez Romero, vecino de Guadix -Granada, Juan Joseph Martínez Carrión, vecino de Pedro Muñoz -Ciudad Real-, Andrés Martínez Rubio, vecino de Castellar de San Esteban -Jaén-, el jiennense Juan Roque, el universitario alcalaíno don Juan Estanislao y el grandino Juan Peraleda (Ib., ff. 49r, 51vº, 52r, 52vº y 54vº); en 1715 el también granadino Francisco Hernández de Valbuena (Ib., f. 72r); y en 1731 el abogado murciano Fernando Vicente Cano (Ib., leg 10, nº 36), entre otros.

421 M. C. PESCADOR DEL HOYO demostró en su día el carácter arbitrario de dichos derechos al analizar los pagos efectuados por los pretendientes madrileños a la corporación machega; cf. "Madrid...", op. cit., pp. 327-328. La disparidad de los desembolsos totales consignados, a lo que hay que añadir diversidad monetaria de la época, contribuye a darnos una idea aproximada de lo aleatorio de tales exacciones en las primeras décadas del Dieciocho.

<u>AÑO</u>	<u>TÍTULO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>REFERENCIA DOCUMENTAL</u>
1706	-	Espejo	400 rs.	AHN. Div. Her., leg. 5, nº 4
1711	-	Cabra	60 rs.	Ib., leg. 3, nº 15, f. 40vº
1711	-	Campillo Altobuey	225 rs.	Ib., f. 44vº
1711	-	Iznatoraf	180 rs.	Ib.
1711	-	Ágreda	180 rs.	Ib.
1711	-	Fernan Núñez	180 rs.	Ib., f. 52vº
1711	-	Castellar S. Esteban	60 rs.	Ib., f. 52vº
1712	-	Jaén	210 rs.	Ib., f. 51r
1712	-	Guadix	60 rs.	Ib.
1712	-	Alosno	11 rs.	Ib., leg. 24, nº 10
1716	JC	Hinojosa del Duque	11 rs.	Ib.
1716	JC	Algainarejo	300 rs.	Ib., leg. 5, nº 73
1718	-	Sevilla	240 rs.	Ib., leg. 5, nº 73
1718	JC	-	150 rs.	Ib., leg. 45, nº 1
1720	-	Iruela	120 rs.	Ib., leg. 7, nº 15
1723	-	Brunete	33 rs.	Ib., leg. 7, nº 32
1724	MS	Sanlúcar Barrameda	300 ps.	Ib., leg. 8, nº 43
1726	-	Cabezas de S. Juan	36 rs.	Ib., leg. 7, nº 49
1727	-	Iznatoraf	99 rs.	Ib., leg. 9, nº 13
1727	MS	Almohacid	240 rs.	Ib., leg. 9, nº 30
1728	-	Pedrerá	142 rs.	Ib., leg. 9, nº 31
1728	MS	Rota	312 rs.	Ib., leg. 9, nº 34
1728	-	Aina	33 rs.	Ib., leg. 9, nº 47

1729	MS	Antequera	480 rs.	Ib., leg. 9, nº 58
1729	-	Madrid	120 rs.	Ib., leg. 9, nº 59
1729	-	Écija	200 rs.	Ib., leg. 9, nº 61
1731	-	Madrid	240 rs.	Ib., leg. 10, nº 21
1731	MS	Marchena	255 rs.	Ib., leg. 10, nº 23
1731	-	Villarrobledo	18 rs.	Ib., leg. 10, nº 26
1731	MS	Cuevas	150 rs.	Ib., leg. 10, nº 37
1731	-	Madrid	13 rs.	Ib., leg. 10, nº 39
1732	MS	Cuevas	180 rs.	Ib., leg. 10, nº 45

422 Ib., leg. 4, nº 67.

423 Títulos manuscritos con espacios en blanco para incluir nombre, origen, estamento y descripción física en leg. nº 4, nº 9 al 15 y 74. La primera noticia que tenemos del despacho de un nombramiento impreso data el 15-7-1707, al asentarse que al sevillano Juan del Aguila fue "refrendado su titulo de los de molde" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 14r).

424 El 22-IV-1708 se expide a Gonzalo de Herrera "que antes hera ministro con titulo de manuscrito despachado en 21 de henero de -1-702" (Ib., f. 18r); el 28-VIII-1718 se hizo lo propio con el juez superior sevillano don Juan Joseoh Nieto "en atenzion a tenerlo de manoescrito en el dia 8 de octubre del año de 1705" (Ib., f. 22r); y , el 14-X-1708, al Juan Sabuquillo, "diosese nuevo titulo...de los Ympresos en atencion a la prision que hizo a Antonio Ruiz, alias Carabinas" (Ib., f. 22vº). Otras referencias en Ib., ff. 35r, 39vº, 48r, 49vº y 52r.

425 Ib., leg. 3, nº 16, f. 1r.

426 A don Joseph Casado del Río, vecino de Carrascosa y juez comisario desde 1709, "se refrendo y dio nuevo titulo de ministro superior oy 29 de octubre de 1722" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 30r).

427 Ib., leg. 39, nº 4.

428 Al malagueño don Agustín del Castillo, comisario desde 1712, "por averse perdido se le dio otro en 10 de abril de 1714" (Ib., leg 3, nº 15, f. 46vº); a Gabril Gutiérrez Jiménez, vecino de Cabeza del Buey, ministro desde 1713, "en 27 de diciembre de 1730 se le da nuevo título por perdida" (Ib., f. 60r); Félix Betis perdió su nombramiento cerca de El Pardo, por lo que solicita copia del mismo en 1725 (Ib., leg. 8, nº 20); su homólogo, Domingo Fernández, adscrito a la Santa Hermandad desde 1712, solicita lo propio en 1731 (Ib., leg. 10, nº 18); y hacía poco más de un año que disponía de título Pedro Mesía del Valle cuando lo perdió, a finales de 1761 (Ib., leg. 13, nº 21).

429 Al palentino Joseph Nieto consta se le despachó nueva acreditación, el 27-XII-1708, "por tener el título que se le dio en 22 de marzo de este año presente en la Real Chancillería de Valladolid" (Ib., leg. 3, 15, f. 25vº).

430 25-IV-1715, Ronda -Málaga- (Ib., lrg. 42, nº 3).

431 Una anotación marginal al registro como comisario del daimieleño Antonio Rodríguez de la Rubia informa que "es muerto" (Ib., leg. 3, nº 15, f. 31r).

432 Un memorial de la corporación apícola toledana, el 17-V-1717, consignaba que su cabildo depachaba títulos con un año de validez, debiéndose de refrendarse colegiadamente para renovar su validez (Ib., leg. 70, nº 1, s.f.). Esta aseveración era un verdad a medias, pues consignándose que en la junta de 29-I-1707 que se había expedido

título de cuadrillero a don Domingo Antonio de Castro, vecino de Bornos -Cádiz-, la de 20-IV-1707 acuerda que

"...respecto de la distanzia tan grande que ay a dicha villa suplico al cavildo que se sirva de mandar se le despache titulo sin limitazion de tiempo y visto por el cavildo acordo que sin que sirva de exemplar se despache el titulo que pide..."

(Ib., leg. 71, nº 1, s.f.). En 1710 dicho cabildo cobraba de 400 a 500 mrs. por cada nombramiento de cuadrillero mayor, confiriéndoles validez por el plazo de cuatro años (Ib., leg. 71, nº 9)

433 En el libro capitular del concejo de Ciudad Real se asienta la acreditación de títulos de Atanasio Bernardo y Céspedes, vecino de Cañada del Moral -Ciudad Real-, el 24-IX-1794 (AMCR, Actas Capitulares, leg. 28, nº 8, ff. 145-152); del ciudarrealeño Ramón García, comisario desde el 21-XII-1794 (Ib., leg 28, nº 10, ff. 7-15); de don Magín Martínez Moreno, vecino de Urda -Toledo-, con título desde el 27-V-1797 (Ib., leg. 28, nº 11, ff. 86-90); y don Jerónimo González de Miranda, vecino de Carrión de Calatrava -Ciudad Real-, ministro hermandino desde el verano de 1797 (Ib., leg. 29, nº 1, ff. 33-40).

434 Apoderados de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (1595-1800):

<u>PERIODO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>NOMBRE Y CARGO</u>	<u>EMOLUMENTOS</u>
1595-98	Granada	Diego Rivera, abogado	220'18 rs.
1597-98	-	Gonzalo Ruiz, solicitador	100 rs.
1597-98	Madrid	Diego del Cárcamo, solicitador	1.700 rs.
1600-01	Madrid	Juan de Torres Treviño, procurador	590 rs.
1600-01	Madrid	ldo. Pardo	200 rs.
1600-01	Granada	Gonzalo Ruiz de Aguado	300 rs.
1600-01	Granada	dr. Fonseca	50 rs.
1600-03	Corte	J. Castillo de Bobadilla, abogado	605'28 rs.
1602-03	Granada	Pedro Hernández	440 rs.
1602-03	Corte	Juan Bermúdez Figueroa	1.650 rs.
1602-03	Toledo	Vicente de Cantos	100 rs.
1602-03	Granada	Gerómino Hurtado, procurador	298'18 rs.
1602-03	Granada	dr. Fonseca	117'22 rs.
1602-03	Granada	Herederos de Gonzalo Ruiz, procurador	-

1602-03	Corte	Juan Pardo, letrado	-
1603-04	Granada	Gerónimo Hurtado	295 rs.
1603-04	Corte	Diego del Cárcamo	1.500 rs.
1603-04	Madrid	Juan González Ochoa, solicitador	500 rs.
1603-04	Granada	Lope de Guzmán y de la Serna	1.453'18 rs.
1603-04	Madrid	Antonio Fernández Torres, solicitador	560 rs.
1606-07	Granada	Gerónimo Hurtado	100 rs.
1606-07	Granada	ldo. Oliveros, abogado (difunto)	4.000 rs.
1606-07	Corte	Juan Pardo, procurador	529'25 rs.
1606-09	Granada	Francisco de Sarabia, abogado	264'29 rs.
1608-09	Granada	Gerónimo Hurtado, procurador	288'23 rs.
1608-09	Granada	ldo. Alarcón	-
1609-10	Granada	Gerónimo Hurtado, procurador	350 rs.
1609-10	Madrid	Cristóbal Palomeque de Estrada	1176'22 rs.
1609-10	Granada	dr. Herrera, relator	46 rs.
1609-13	Granada	Francisco Rodríguez Alarcón, abogado	265 rs.
1611-12	Granada	Gerónimo Hurtado, procurador	550 rs.
1612-13	Granada	Gerónimo Hurtado, procurador	200 rs.
1616-17	Granada	Gerónimo Hurtado, procurador	50 rs.
1616-18	Granada	Diego Bermúdez de Castro, abogado	176'15 rs.
1618-19	Granada	Pedro de Haro, procurador	-
1630-33	Granada	ldo. Morales de Ballesteros, abogado	265 rs.
1630-33	Granada	Manuel Ruiz de Aguado, abogado	265 rs.
1631-32	Granada	Gerónimo de la Torre, procurador	40 rs.
1632-33	Granada	Gerónimo de la Torre, procurador	600 rs.
1632-35	Granada	Diego Bermúdez de Castro, abogado	265 rs.
1634-35	Granada	Juan del Campo, procurador	40 rs.
1634-35	Granada	Gerónimo de la Torre, procurador	1.095 rs.
1634-35	Madrid/Toledo	Francisco de Espinosa, presbítero	440 rs.
1634-35	Madrid	Domingo de Valdepeñas, presbítero	50 rs.
1634-35	Madrid	Rodrigo de Valdepeñas, presbítero	66 rs.
1635-36	Granada	Gerónimo de la Torre Espalza, procurador	40 rs.
1637-40	Granada	Gerónimo de la Torre Espalza, procurador	-
1641-42	Granada	Esteban Gil, abogado	-
1642-44	Granada	Antonio Palomino de León, abogado	8.000 rs.
1644-46	Granada	Antonio Palomino de León, abogado	535 rs.
1644-45	Granada	Rodrigo de Mora, fiscal	100 rs.
1662	Madrid	Diego Rodríguez, Merlo de Baldera, F. Solís	-
1662-63	Granada	Idem y Juan Cano de Aguilar	52 rs.
1684-85	Granada	Bonifacio Leonardo Zorrilla	158 rs.
1690-91	Madrid	Pedro Gª de los Galgos, diligencier	70 rs.
1712-13	Madrid	Diego Torretagle, apoderado	703 rs.
1715-16	Madrid	Gabriel de la Comarca, agente	1.203 rs.
1718-19	Madrid/Granada	Juan Antonio de Agüero, agente	796 rs.
1719-20	Madrid/Granada	-	1.156 rs.
1723-24	Granada	Joseph Fernández Dirán, agente	-
1725-26	Granada	Asesor fiscal	180 rs.
1727-28	Granada	Agente judicial	192 rs.
1727-28	Valladolid	Francisco Treviño de Cárdenas	698 rs.
1727-28	Toledo	Joseph Landeras, procurador	100 rs.
1727-28	Madrid	Gregorio de Castroverde, agente	1.130 rs.
1735-36	Madrid	Diego Floresto, agente	808 rs.
1735-36	Madrid	Felipe Muñiz	100 rs.
1735-36	Granada	Joseph Figueras, procurador	845 rs.

1736-37	Madrid	Diego Floresto, agente	938 rs.
1736-37	Madrid	Felipe Zambrano, abogado	1.000 rs.
1738-39	Madrid	Joseph Albarca, agente	1.448 rs.
1738-39	Madrid	Felipe Muñiz, agente	109 rs.
1741-42	Madrid	Nicolás Portillo, abogado	9.500 rs.
1741-42	Madrid	Agente judicial	400 rs.
1742-43	Madrid	Agente judicial	867 rs.
1742-43	Granada	Joseph Higuera, procurador	1.430 rs.
1744-45	Madrid	Luis Treviño, procurador	6.566 rs.
1761-62	Madrid	Agente fiscal del Consejo de Castilla	446 rs.
1761-62	Madrid	Joaquín Correa, agente	1.807 rs.
1762-63	Granada	Joseph Fernández de Ureña, agente	718 rs.
1762-63	Granada	Diego Alvarez Cortés, notario Cámara	650 rs.
1762-63	Madrid	Joaquín Correa Jimenez, agente fiscal	3300 rs.
1764-65	Madrid	Joaquín Correa Jimenez, agente fiscal	231 rs.
1773-74	Granada	Pedro de Vera López, procurador	1.508 rs.
1773-74	Madrid	Francisco Joseph del Campo, procurador	300 rs.
1773-74	Madrid	Rafael Jimenez de Velas, agente	120 rs.
1775-76	Granada	-	976 rs.
1775-76	Madrid	Agente judicial	220 rs.
1775-76	Granada	Simón Zabala, procurador	600 rs.
1777-78	Madrid	Pedro de Vera López, procurador	1.600 rs.
1780-81	Madrid	Simón Zabala, agente judicial	700 rs.
1780-81	Madrid	Simón Zabala, agente judicial	2.500 rs.

435 AHN. Div. Her., leg. 57, nº 3.

436 Ib., leg. 58, nº 5.

437 Ib., leg. 57, nº 6.

438 Ib., leg. 58, nº 5.

439 Ib., leg. 60, nº 4.

440 Ib., leg. 57, nº 2.

441 Ib., leg. 58, nº 4.

442 Ib., leg. 58, nº 5.

443 Ib., leg. 58, nº 12.

444 Ib.

445 Ib.

446 Ib.

447 12-I-1782, Ciudad Real; Ib., leg. 62, nº 1.

448 Se trata de los amanuenses Miguel Rodríguez de Montemayor, Alonso López, Miguel Ruiz y Felipe González; Ib., leg. 57, nº 3.

449 Ib., leg. 58, nº 4.

450 Ib., leg. 57, nº 3.

451 Su nómina ascendió a 5.134 mrs., en 1609; Ib., leg. 57. nº 5.

452 Ib., leg. 58, nº 4.

453 En las cuentas rendidas en 1634 se anota la libranza de 40 rs. al primero, para llevar desde Granada a Ciudad Real al reo Pedro de Oviedo; el alquiler de la segunda de las cabalgaduras por 6 rs., el 20-I-1634, sería efectuada para hacer unas diligencias judiciales por los montes de Malagón -Ciudad Real-; entregándose otros tantos reales para alquilar una tercera caballería, con el fin de subastar unos bienes incautados a los reos hermandinos (Ib.).

454 No era una coincidencia que, en 1668, el alcalde de la Hermandad Vieja manchega don Diego Muñoz y Molina, fuese regidor perpetuo de las ciudades de Toledo, Soria y Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 203, ff. 155r-vº).

455 Real Provisión, 22-11-1502, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 14, ff. 23r-24r).

456 Informe de don Juan Velarde Céspedes, 1670 (AHN. OO.MM., Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 2.740).

457 AHN. Div. Her., leg. 4, nº 14, ff. 24vº y 25r. De una parte litigaban los hermanos ciudadanos Luis Franco; Melchor de Higuera, Juan de Herrera, pelaire; Lope de Moya; Juan Gómez, herrero; Francisco Serrano, cantero; Sánchez de Plata; Pero Martínez, el viejo y el joven, madereros; Alejo de Moya; Rodrigo Alonso, albañil; Fernando Sánchez, jurado; Diego Martínez, pedrero y Cristóbal Sánchez. Por el estado de caballeros, don Alonso de Mora; don Juan Gámez; don Gonzalo Mejía; don Rodrigo de Galiana; don Diego de Coca; don Francisco Sánchez; don Juan de Isasi; don Gonzalo Sánchez; don Fernando Treviño; el capitán don Diego de la Serna; don Antonio de Martibáñez; y don Fernando de Esquivel.

La causa pasó, en primera instancia, ante el corregidor local don Fernando de Villafañe, pronunciando sentencia su teniente don Gonzalo de Ávalos, accediendo a que una de las varas de alcalde recayese en un pechero "honrado, habil y suficiente por el dicho oficio", sentencia que fue revocada en grado de vista por los oidores de la Real Chancillería de Granada el 1-X-1538 (Ib, ff. 15r-16vº).

458 Informe de don Cristóbal Muñoz Treviño de Loaysa, 1676 (AHN. 00.MM. Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 1759, f. 48).

459 S.d. (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 73).

460 S.d. (Ib., leg. 4, nº 14, ff. 1r-2r). Por entonces la parte demandante estaba integrada por los pecheros Joseph Ruiz de Villanueva; don Juan Mayorga Villaquirán y Juan de Cabrera, regidores ciudarrealeños; Juan de Prado, procurador síndico; Juan de Castilla, jurado perpetuo; Juan Bernardo de Céspedes, el licenciado Joseph de Poblete; Francisco Manuel Delgado; y Felipe Muñoz Delgado y Salcedo, contador real. Como hidalgos aparecen don Martín de Mena y Toledo, conde de Piedrabuena; don Manuel Geldre Iisón y Gámez, caballero del hábito de Calatrava; don Juan Muñoz de Loaysa; y don Luis Francés, entre otros (Ib., s.f.)

461 4-III-1770 (AHPCR, Protocolos Notariales, leg. 561, ff. 41r-42r). El citado caballero carecía, en puridad de razón alguna, pues aunque su familia era de las más insignes de la ciudad, con incontables caballeros de hábito y capitulares, atestiguándose su hidalguía en la audiencia granadina el 3-XII-1518 (AHN. 00.MM., Santiago, Pruebas Caballeros, exp. 1.922), el procedimiento electoral garantizaba sobre el papel el reparto de prebendas entre los miembros de la oligarquía local. Más conflictivo aún que sacar a la luz pública disensiones internas, era la designación como procurador a un personaje de la talla de Agustín de Madrid, sujeto cuya trayectoria vital ascendente concitaba sentimientos encontrados en el vecindario, y sobre el cual nos ocuparemos en una próxima publicación.

462 29/30-I-1773, Ciudad Real (AMCR, Actas Capitulares, leg. 26, nº 2, ff. 40-47).

463 18-XII-1772, Ciudad Real (AHPCR., Protocolos Notariales, leg. 561, ff. 161r-162vº)

464 Por real decreto de 18-III-1796 el gobernador del Consejo de Hacienda impelía a satisfacer las rentas devengadas pendientes de los oficios enajenados por la Corona, intentando el contador real de rentas provinciales aplicárselo a los ciudarrealeños en diciembre de dicho año del periodo 1706-1794, ambos inclusive. Ante el corregidor se presentaron cédulas de 1732 y 1757 declarándolos exentos, siendo tal franquía reconocida el 10-II-1797, por el Consejo de Hacienda, para suspender los apremios efectuados y emplazándolos a la Corte (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 349, ff. 53r-54vº).

465 En una mala coyuntura de los caudales hermandinos llegaba esta determinación, reconociéndose que "el cabildo tiene treynta mill maravedis de tributos perpetuos o bendidos que se podra rebajar en ellos el prezio" (AHN. Div. Her., leg. 63, ff. 128r.vº).

466 El memorial remitido al Supremo Consejo estaba consignado por los los siguientes hermanos: el marqués de Villater; don Francisco Treviño Calderón de la Barca, marqués de Peñafuente; don Francisco Rodríguez Ledesma; don Luis Antonio Treviño Carbajal; don Narciso de la Cueva y Forcallo; don Cristóbal Mesía de la Cerdá y Torres; don Agustín Bermúdez de la Torre; don Pedro Triviño y Baillo; don Diego de la Cueva Bermúdez; y don Bernabé Ruiz Francés; 5-V-1733, C. Real (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 61r-vº).

467 Asimismo se preceptúa que "no procedan las Hermandades especialmente la de Ciudad Real, que se reconoce que en los muchos que expide la gran facilidad y poco cuidado que tiene en ello" (Ib., f. 66r).

468 11-XI-1733, Madrid (Ib., s.f.).

469 Ib., ff. 69r-74r.

470 Ib., ff. 78r-79vº.

471 4 y 22-III-1734, Madrid (Ib., s.f.).

472 AHN. Consejos, leg. 4.870, f. 19 vº. El informe favorable está rubricado por don Narciso de la Cueva y Forcallo, don Luis Joseph Velarde y Viedma, don Francisco de Cárdenas Treviño, don Álvaro Muñoz y Torres, don Juan Tomás Velarde y Muñoz, don Diego de la Cueva y Bermúdez, don Sebastián Ochoa y Berna, don Dionisio Palacios Calderón, don Lorenzo Muñoz y Vera, y por el notario público Francisco Valverde.

473 27-IV-1736, Ciudad Real (Ib., s.f.).

474 17-IX-1736, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 1, s.f.).

475 15-II-1737, Ciudad Real y 22-II-1737, Madrid (AHN. Consejos, leg. 4.870).

476 7-VI-1737, Ciudad Real (Ib., leg. 38r).

477 2-V/17-VI-1738, Madrid (Ib., s.f.).

478 El volumen de expedientes tramitados en 1739 nos dan una imagen aproximada de la posición corporativa de cada uno de sus escribanos; así, mientras Joseph Córdoba Herrera, el notario más antiguo, diligenció 27 informes, y su colega Juan Bernardo Granados sólo tramitó 4 expedientes -curiosamente a tres gallegos y a un alicantino o ¿es que hay un reparto implícito de las tramitaciones de los aspirantes según su origen?-, el citado Jacinto García Prieto llegó a cumplimentar 25 solicitudes, cifra significativa si tenemos en cuenta las vicisitudes para su acceso a la corporación manchega (Ib., s.f.).

479 vid. nota 267.

480 11-V-1768, Ciudad Real (AHPCR., Protocolos Notariales, leg. 566, ff. 85r-86vº).

481 11-V-1768, Ciudad Real (Ib., leg. 566, ff. 85r-86vº)

482 Eugenio Peñuela vendió una de las notarías hermandinas por juro de heredad al ciudarrealeño don Agustín Pérez de Madrid, el 9-I-1772, cediéndola éste el 18-XII-1772 al escribano Joseph Pérez de Alarcón (Ib., leg. 561, ff. 161r-162vº).

483 31-III-1667, Ciudad Real (Ib., leg. 203, ff. 69r-vº).

484 El 23-IV-1726 don Alvaro Muñoz y Torres, caballero del hábito de Calatrava, figura como corregidor de Ciudad Real y superintendente de rentas reales y provinciales de La Mancha (Ib., leg. 553, s.f.).

485 24-X-1726 y 10-I-1727, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 37, nº 5).

486 Rubrican dicha representación don Francisco de Cárdenas Treviño; don Juan de Aguilera de los Ríos, marqués de Peñafuente; don Gaspar Sancho Barona, marqués de Villater; don Francisco Treviño Calderón; y don Pedro Treviño; 22-9-1733, Ciudad Real (AHPCR., Protocolos Notariales, leg. 548 bis, ff. 87r-88r).

487 31-X/22-XII-1733, Ciudad Real (Ib., ff. 103r-104vº y 136r-137r).

488 12-IX-1751, Ciudad Real y 8-X-1754, Madrid (AHN. Consejos, leg. 205, nº 2).

489 La noche del 16-VIII-1720 se atentó contra su vida, nombrando el acusado procuradores en Ciudad Real y en Granada para su defensa el 6-X-1720 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 553, ff. 27r-28r).

490 20-VI-1724, Ciudad Real (Ib., leg. 538, ff. 26r-27r).

491 24-VIII-1771, Ciudad Real (Ib., leg. 343, ff. 34r-35r). No era la única ocasión en que se cuestionaba la rectitud de las actuaciones judiciales de primera instancia o se desacreditaba anónimamente a un individuo o familia mediante pasquines en La Mancha; el 9-III-1675 el zapatero ciudarrealeño Francisco de Ribilla era encartado por el corregidor por publicar libelos al respecto, en 1781 estuvo a punto de estallar una algarada urbana en Fernáncaballero por la prepotencia con que actuaba la justicia señorial al hacerse público una virulenta campaña escrita denunciado los hechos, y en 1797 un sargento de milicias de Picón acusaba a un paisano de ser el autor de un libelo indecoroso contra los alcaldes ordinarios salientes (Ib., legs. 197, ff. 59r-vº; 559, ff. 39r-vº y 345, ff. 14r-vº, respectivamente).

492 7/14-VI-1786, Ciudad Real y Madrid (AHN. Consejos, leg. 1.118, nº 9).

MIGUEL FERNANDO GÓMEZ VOZMEDIANO

LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL EN
LA EDAD MODERNA. SIGLOS XVII-XVIII.

Tesis Doctoral dirigida por :

Dr. D. Enrique Martínez Ruiz
Catedrático del Departamento de
Historia Moderna. Universidad Com
plutense de Madrid.

4. FINANZAS DE LA HERMANDAD.

4.1. LA CONTABILIDAD.

Una institución de la envergadura de la Santa Hermandad Vieja, cuyo funcionamiento era autofinanciado a través de unos cauces consolidados desde hacía siglos, dando cuenta de sus rentas a su cabildo, y al Consejo de Castilla durante la Edad Moderna, necesariamente había de articular un sistema de eficiente fiscalización regular de sus ingresos y de los gastos generados.

La costumbre, cristalizada en el precepto, establece que al tiempo de la elección de oficios fuesen elegidos dos hombres buenos, versados en asuntos contables, para tomar periódicamente cuentas al arquero saliente. Dichos sujetos juraban cumplir bien y fielmente tales diligencias, informando de su labor al cabildo, y percibiendo por su trabajo cincuenta maravedís anuales cada uno, siendo elegidos para ello hermanos para proteger la confidencialidad del acto¹.

Va en plena Edad Moderna, se modificó parcialmente el procedimiento previsto. Con una periodicidad anual, habitualmente poco después de las elecciones, los alcaldes entrantes, en nombre del cabildo, notifican su intención de tomar cuentas al mayordomo saliente para conocer el estado económico de la institución, y éste con la mayor celeridad posible ponía en marcha el mecanismo fijado para cumplimentar dicho mandato.

De este modo, día antes de comparecer el mayordomo ante ambos alcaldes o sus tenientes², un contador nombrado a tal efecto entre los hermanos hidalgos, a veces alguno de los anteriores alcaldes, auxiliado el arquero por un notario hermandino y de los amanuenses que se creyesen convenientes, realizan el informe contable de los caudales institucionales³. Todos los libramientos, celosamente guardados por los mayordomos, son cosidos encabezando el balance presentado y a veces numerados para facilitar su confrontación; por primera vez se usa papel sellado para dichas diligencias en 1637 -concretamente de cuarta clase-, al tiempo de la introducción de este procedimiento recaudatorio estatal.

El informe financiero cumplimentado debía ser supervisado por cuatro instancias: un contable, los alcaldes, el cabildo, y ya durante el Setecientos, por el Supremo Consejo, a través de la contaduría de Hacienda. Regularmente se pasan dichos trámites sin mayores problemas, pero si se detecta alguna irregularidad se suscitara la actuación automática de alguna de dichas instancias fiscalizadoras. Así, el contador y ex-alcalde hermandino, don Pedro Treviño Baillo halla ciertas anomalías en las libranzas presentadas por el arquero Félix Eugenio de León, en 1763, como eran la rebaja injustificada de la deuda impagada por un miembro de la corporación, una cantidad "oscurecida" en la aplicación de tormento, y la falta de control de ciertos fondos hermandinos, concluyendo que la cuenta no se arreglaba a precepto⁴. Por lo que respecta al resto de los resortes internos de inspección, su papel no deja de ser meramente formal.

Las fechas entre las cuales se desarrolla la gestión anual de la mayordomía comprende de septiembre a septiembre, aunque su titular pudiese permanecer en dicha plaza varios años seguidos o alternos,

particularmente en el siglo XVIII. La rendición de balances ante alcaldes y cabildo suele oscilar entre el 1 y el 29 de septiembre, aunque ocasionalmente se lleguen a tomar cuentas en octubre⁵, noviembre⁶, diciembre⁷, e incluso en enero⁸ siguiente. El ejercicio contable, como el periodo de vigencia de los oficios, no coincide pues con el año natural, sino que se amolda al calendario agropecuario, adaptándose la supervisión de rentas y la renovación orgánica a la percepción del derecho de asadura y al ciclo rural en la que se haya inmersa la sociedad y la economía durante el Antiguo Régimen.

La contabilidad se estructura en torno a dos grandes remesas que toman el nombre de cargo -ingreso-, y descargo o data -gasto-, resultando de la eventual diferencia entre ambas una cantidad denominada alcance -saldo-, de cuya restitución se hace responsable la parte beneficiada. Normalmente es el arquero quien se ve obligado a reintegrar al depósito hermandino los excedentes devengados por su administración, al ingresar más de lo desembolsado, aunque tampoco es extraño que su déficit hubiese sido enjugado por los propios gestores. Cuando la propia entidad es la deudora, suele devolver su parte a los mayordomos al año siguiente, mientras que cuando resulta acreedora resulta más problemático el reembolso de superávits, siendo habitual la demora de años tras haber desempeñado el empleo, dejándose de percibir un dinero que supone un lucro cesante al no exigirse interés alguno y que a veces solo se recupera parcialmente, quedando parte de la misma impagada. Debido a ésto es fácil de creer que en años de bonanza económica muchos hermanos pecheros desearan ostentar tan lucrativo cargo⁹.

El arquero presenta el balance de su gestión financiera consignando en primer término los ingresos habidos, señalando, por este orden, la

partida resultante del saldo anterior, la percepción pecuaria, el producto del arrendamiento de tiendas y corredores de la plaza pública, los réditos censales y, por último, los entradas de caudal procedentes de las almonedas de bienes incautados, reintegro de costas procesales, multas, etc. A continuación registra los gastos, aportando las libranzas originales y los recibos guardados, añadiendo los desembolsos causados por la toma de cuentas. Durante el Seiscientos serían particularizadas, a veces, las deudas e impagos pendientes, ya fuesen positivos o negativos, expresadas unas y otras partidas hasta la década de 1660 en maravedís, y a partir de esa fecha en reales de vellón.

Tres hechos contribuyen a distorsionar la utilización exclusiva de las cuentas como fuente de información financiera de la Santa Hermandad: la inexistencia de una serie ininterrumpida ni íntegra de las mismas; la omisión de las diligencias no sufragadas en última instancia por la entidad; y el registro indiscriminado de la deudas pendientes de saldo en ambas remesas, engrosándose artificialmente las partidas. Tales prácticas "contaminan" los balances contables sin despertar el menor interés clarificador de los resortes fiscalizadores internos de la institución.

Asimismo existen algunos balances que bien podríamos calificar de sospechosos junto a otros en los que ponen de manifiesto flagrantes errores contables; entre los primeros caben citarse los de los periodos 1684-85, 1687-89 y 1993-94, cuando formalmente aparecen equilibrados unos ingresos y gastos que resultan en la realidad dispares; error de pluma puede considerarse el alcance de 596 reales a favor de la Hermandad y que en las cuentas del siguiente año se ven reducidos a 566 reales. Pero los casos de manipulación contable más

evidentes tal vez tengan lugar en la década de 1640, en pleno colapso de la Monarquía Hispánica; en efecto, en 1642-43 se reconoce un cargo de 229.002 maravedís y un descargo de 217.608 maravedís, estimándose el alcance contra el mayordomo de 12.292 maravedís, en tanto que el balance real, en buena lid, debería haber sido únicamente de 11.394 maravedís, ello sin tener en cuenta otros 6.800 que permanecieron incobrados; e igualmente inexplicable nos parecen los datos financieros expresados del periodo 1644-45, cuando, si bien el monto de lo ingresado coincide con las partidas acreditadas en el cargo - 178.129 maravedís-, no ocurre otro tanto con los gastos pues, aunque a pesar de que a la hora de cuadrarlos con los ingresos se sitúan a su altura, se reconocen unos desembolsos institucionales que se elevan a 377.728 maravedís, quedando sin especificar una partida de 171.545 maravedís entre las rentas consumidas.

El mayordomo no puede excusarse de rendir balance de su gestión, pudiendo ser impelido en tal caso por vía de apremio por parte de los alcaldes, y en el supuesto de no cumplimentar dichos requerimientos se procedería contra su persona, fiadores y bienes.

Los montos totales de ingresos y gastos, así como el desglose de los mismos son muy variables¹⁰, siendo relativamente frecuente en los siglos XVI y XVII que solo se acrediten las cuentas de los segundos, por ser público el monto de sus percepciones pecuarias e inmobiliarias. Aunque únicamente se han conservado alrededor de un tercio del total de las cuentas rendidas a lo largo de las citadas centurias, tenemos noticias de un buen número de saldos de la corporación apícola, pudiéndose trazar una panorámica general de su evolución financiera¹¹.

A grandes rasgos es perceptible un paulatino y sostenido incremento de las partidas durante el Seiscientos, aunque con altibajos, llegando los ingresos a su cénit en las décadas centrales del siglo XVIII, permitiendo a la Hermandad sanear unos déficits acumulados años atrás y emprender notables inversiones patrimoniales, dejando paso luego a un nuevo periodo de depresión, pese a coyunturales recuperaciones. En cuanto a los gastos podrán ser autosostenidos durante decenios a lo largo del Seiscientos, para duplicarse, ya en la década de 1720, condicionando la actividad corporativa en los años siguientes, cuando solo se registra un único superávit, pasando a situarse tras los ingresos a posteriori, hacia 1779 puede fijarse el punto de inflexión, tras el cual se deteriora la entrada de caudales, haciendo insostenible el mantenimiento de unos gastos que se habían disparado y que nunca se enjugarán, pese a la ralentización de la actividad hermandina. Durante el Ochocientos la renta de la asadura se desvió al Tesoro Nacional, quedando la organización sin su principal pilar de autofinanciación y limitándose sus gastos, en gran medida, a los puramente estructurales.

4.2. INGRESOS.

Trataremos a continuación de abordar la tipología y realizar una aproximación a la cuantificación de los caudales que por diverso concepto engrosan los fondos hermandinos. Una rápida aproximación a las partidas que integran este concepto nos permite realizar, por motivos metodológicos, una primera estructuración en rentas ordinarias y extraordinarias: entre las primeras se engloba el derecho de asadura y los rendimientos patrimoniales, mientras que conforman la siguiente partida el resto de percepciones irregulares o atípicas del tribunal, como son el reembolso de superávits, la subasta de secuestros judiciales, la percepción de penas pecuniarias y otros conceptos menores.

4.2.1. RENTAS ORDINARIAS.

4.2.1.a. DERECHO DE ASADURA.

A/ Periodo bajomedieval. Siglos XIII-XV.

La práctica de la trashumancia en Castilla propició desde época temprana la aparición, y ulterior desarrollo de ciertas imposiciones que gravaban este tipo de propiedad semoviente. KLEIN remonta hasta el siglo X el nacimiento de este arbitrio pecuario, que iría en detrimento en primera instancia de los intereses ganaderos e, indirectamente, del propio tesoro real, en favor de intereses particulares locales de diverso cariz, fundamentalmente concejos y señores laicos o eclesiásticos, trocando lo que en un principio eran exacciones punitivas por los daños ocasionados a la labranza por el tránsito ganadero en tarifas variables de carácter permanente.

Los ingresos derivados de dicho concepto se mostraron fundamentales para consolidar institucionalmente y dotar de continuidad operativa a la Hermandad Vieja desde que en 1303 Fernando IV la otorgó al Triple Instituto. Tal vez, en este caso concreto, dicha gabela derivase de la voluntaria y esporádica entrega, por parte de los pastores, de reses o parte de ellas a los ballesteros que se consagraban al loable ministerio de mantener expeditas cañadas y veredas, como gratificación en especie para su mantenimiento en el despoblado.

Su cobro pasó luego a regularizarse y efectuarse en determinados puertos reales, por donde reglamentariamente debía circular la cabaña transhumante en sus desplazamientos estacionales por las vías pecuarias previstas a tal efecto. De los rebaños ovino y caprino, en 1327, se extendió a los ganados vacunos y porcino. La cuantía del arbitrio, los puntos de percepción y sus exactores, serían sistemáticamente tipificados por la Corona a instancias de la Mesta, para tratar de evitar los acostumbrados excesos e irregularidades que llegaban a perjudicar incluso al Estado embrionario que empezaba a lucrarse de un comercio lanero aún en ciernes.

Como quiera que el Honrado Concejo tomó conciencia de que el caos existente no era atajado por los nominales mandatos regios, dicha organización todo la determinación de negociar bilateralmente con particulares e instituciones implicadas, suscribiéndose acuerdos contractuales entre ambas instancias, adecuando los métodos de recaudación a una tarifa estable, con el objetivo último de congelar su monto en el canon consensuado.

La asadura mayor y menor, aludiendo al tipo de ganado que se hallaba sujeto a su contribución, había sido trasferida por los monarcas al Triple Instituto, pues entonces "todas las hermandades eran una". Pero en 1335 se acordó en la junta anual de Navas de Estena la exacción particularizada por cada una de las entidades federadas de las recuas que pasasen por sus respectivos territorios por una sólo vez; así la Hermandad de Toledo ejercería el cobro de sobre los ganados de la cabaña toledana y soriana, la de Talavera de la cabaña segoviana y la de Villa Real de la conguense¹².

Durante los siglos XIV y XV la corporación apícola manchega exigiría su pago en los puertos de Siruela, Torre de Juan Abad, Villarta y la Perdiguera¹³, sitios estratégicamente en las rutas pecuarias del ganado trashumante que desde los agostaderos serranos se dirigían a invernar a la meseta sur, principalmente la Baja Extremadura, el valle de Alcudia y la Alta Andalucía. Un ejecutoria de 1474 abolía los arbitrios pecuarios impuestos a partir de la fecha, cediendo a la presión mesteña

"... de aqui adelante non se pidan nin lleben los dicho derechos e portazgos, ni pasajes, ni pontajes, ni rodas, ni castilleras, ni borras, ni asaduras, ni otras imposiciones algunas de las que fueren puestas e introduzidas desde mediados del mes de septiembre de dicho año."

Tradicionalmente el sistema utilizado para su cobro fue el de arrendamiento a terceros, quedando la administración directa por parte del tribunal como una medida excepcional. Los estatutos manchegos de 1435 preceptúan que se asignase en pública subasta al mayor postor, en el plazo de ocho días, reintegrándose su monto al mayordomo en tres pagas anuales, y por el momento adelantando al cabildo cuatro mil maravedís para hacer frente a los gastos más perentorios, debiendo dar fianzas al arquero ante alcaldes y capitulares. Parece que aunque podían licitar en almoneda cualquier persona de acreditada solvencia, lo usual sería el que los hermanos más acaudalados se beneficiasen de la misma, debiendo ordenar los Reyes Católicos en Alcalá de Henares, en 1485, que para evitar fraudes en su arrendamiento se hiciese en la forma acostumbrada, rematándose en el mejor postor fuese o no miembro de la entidad. No quedaban aquí las anomalías en su percepción, cuando décadas antes se mencionaba que no debía exigirse su cobro por otros que no fuesen sus legítimos

perceptores, debidamente acreditados. siendo en caso contrario los infractores ejecutados por la Hermandad Vieja de Talavera.

En el Cuatrocientos la contribución se extendía a los ganados ovinos, caprinos, vacunos y porcinos. cabañiles, travesíos y merchaniegos; la antigua costumbre de exigir únicamente una res de cada hato dio paso a la aplicación de unas tasas carentes de uniformidad, en la práctica dejadas al arbitrio de los exactores dentro de unos cauces prefijados. Dichas exacciones, aunque paulatinamente perderían parte de su valor económico real para convertirse en un gravamen simbólico, no dejaron nunca de conciliar la abierta oposición de pastores y merchanes, mesteños y autoridades o vecinos del maestrazgo de Calatrava, en cuyos límites se cobraba, siendo solventados los impedimentos presentados tras no pocas dificultades.

B/ Edad Moderna. Siglos XVI-XVIII.

B.1. Estaciones de cobro y sujetos contributivos.

En plena Edad moderna el derecho de asadura hermandino seguía siendo, con diferencia, la principal fuente de ingresos de la asociación apícola, extendiéndose por entonces su cobranza a los pasos de Malagón, Carnerera¹⁴, Alcudia, Perdiguera, Villarta, Cabezarados, Saceruela, Socuéllamos, Villanueva de la Fuente, Chillón, dehesas de Guadalerza, Viso del Marqués, Villarrubia de los Ojos, Manzanares, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva, Castellar de Santiago, Almadén, Veredas, Puebla de Don Rodrigo, Daimiel, Calzada de Calatrava, Torre de Juan Abad, Sierra de Segura, y eventualmente en Urda, Valdálgodor, Mestanza, Puertollano y Los Yébenes, por citar los puntos de reiterada mención en las fuentes. En el Setecientos la pretensión de la organización manchega de aumentar el número de enclaves donde hacer efectivo dicho arbitrio chocaría con la negativa del Consejo de Castilla¹⁵. Llegando a suspenderse cautelarmente a fines de la centuria en la encomienda de Castilserás -Chillón-, Almadén, puerto de Socuéllamos, paso del Viso del Marqués y estaciones del priorato de Santiago¹⁶.

Aunque, en principio, los únicos que estaban eximidos del pago de la asadura eran los ganados de los hermanos en términos del resto de los tribunales coaligados¹⁷, cobrándose asadura incluso de sus propios integrantes en sus respectivas circunscripciones¹⁸, clérigos y laicos fuesen o no privilegiados estamental o profesionalmente, a la entrada

o a la salida del Campo de Calatrava, luego extendida al resto de los territorios de órdenes colindantes. Paulatinamente sería introducidas algunas modificaciones; así desde mediado el siglo XVIII y principios del XIX se concedió a los rebaños del abasto de la Villa y Corte la exoneración total de arbitrios pecuarios, suspendiéndose el cobro de la asadura hermandina a sus mayores¹⁹, aunque contabilizándose el tránsito de ganado acogido al interdicto²⁰.

El tipo de rebaños sobre los que siguen exigiendo este arbitrio son los ya mencionados cabañil, travesío y merchaniego, de carneros, ovejas, borregos, cabras y machos, bueyes, vacas, terneros y puercos que penetraban en los extremos ajenos a la vecindad de sus propietarios. El tránsito de caballerías nunca fue objeto impositivo, al ser considerado vital, habida cuenta de su aplicación a faenas agrícolas, acarrec y, sobre todo, de su utilidad militar.

La organización ciudarrealena cobra asadura, preferentemente, a los vasallos de los límites maestrazgos de Santiago y San Juan que introdujesen sus ganados a las hierbas o montaneras del Campo de Calatrava así como a los ganados de la Meseta Norte que se dirigen a su ámbito territorial para invernar en los extremos de las dehesas manchegas, extremeñas o andaluzas. Aunque, salvo excepciones, no ha trascendido los nombres de sus propietarios o apoderados, ni tampoco el número de reses asaduras²¹, cuando dicha renta era gestionada por el mayordomo ocasionalmente se asienta en las cuentas rendidas anualmente una información preciosa sobre los mismos. Entre sus dueños destacan clérigos, nobles, médicos, notarios, grandes propietarios mestefios, medianos y pequeños propietarios manchegos y mayores conquenses o sorianos.

La contribución suele realizarse bien en especie -mayoritariamente en reses y excepcionalmente en azafrán²²-, bien en dinero o de ambas maneras. Siempre que el derecho devengado no pueda ser satisfecho en especie o ante la imposibilidad de hacerlo al no alcanzar el mínimo exigido, se recurrirá a la percepción en metálico, lo que durante los siglos XVI y XVII comportaba su precariedad ante los procesos inflacionistas existentes. Se preferiría por entonces la recaudación en especie, eludiéndose así el anquilosamiento de dichas rentas ante la inflación de precios del Quinientos y la depreciación del vellón del Seiscientos, agravados por la pauperización de la cabaña trashumante²³; mientras que en el siglo XVIII es perceptible una cierta inversión en la tendencia, incrementándose los reembolsos en dinero por un triple motivo: los tímidos avances en la monetarización de la economía y la relativa estabilidad monetaria, la comodidad de tales percepciones y, sobre todo, las ventajas evidentes al excusarse de los crecientes gastos ocasionados por el mantenimiento de las reses recaudadas, el arriendo de pastos, o los salarios de guardas y gañanes hasta su salida al mercado. En todo caso, durante la Edad Moderna, predominó la percepción de dicho arbitrio en especie, ya que era el gravamen tradicional y se podía especular con su cria y engorde hasta el momento de su venta, lucrándose arrendadores o hermanos, a menudo identificados personal y económicamente.

Ganaderos mesteños y particulares, a duras penas resignados a esta contribución pecuaria, preferirían que la tasa se hubiese establecido en metálico, no tanto porque a largo plazo se garantizaba el desfase real de tales desembolsos, como para evitar los abusos y arbitrariedades al extenderse la picaresca a la elección de la res recaudada entre las mejores de cada hato, con el consiguiente perjuicio añadido. Los cobradores, sujetos impuestos por los

arrendadores o por el propio administrador hermandino, atendiendo a las directrices de sus superiores o actuando por afán de enriquecimiento personal, obligaban con demasiada frecuencia a los mayores a la entrega de las reses escogidas a tal efecto, contraviniendo las cartas reales²⁴, e incluso a la sujeción de rebujos²⁵, y albalás²⁶, unilateralmente y contra derecho reclamados por los exactores, siendo consagradas por su reiterada demanda cuando no solicitadas en concepto de gratificaciones atípicas por su trabajo²⁷. Los infractores de tales gravámenes debían responder ineludiblemente ante su mentor, y éste ante el Santo tribunal, audiencia privativa de sus propias rentas y únicamente despojada de su fuero por alguna de las cortes supremas de justicia.

Aunque a lo largo de la dilatada existencia de la organización manchega hubo modificaciones en la tarifa aplicable en concepto de asadura²⁸, nunca será cuestionada la concordia de 1352 donde se establecía que dicho arbitrio solo se hiciese efectivo en el primer puerto por donde transitasen los rebaños, quedando libres de satisfacerse en el resto de las estaciones del Triple Instituto, al permanecer invariable el principio de que "las hermandades, aunque tres en el nombre eran una en el mismo cuerpo lo qual -redundaba en que- no se podia pagar a tres lo que se avia concedido a una"²⁹.

Su cobro se cumplimentaba desde el día de San Miguel -el 29 de septiembre-, hasta el verano siguiente, registrándose minuciosamente en un libro a tal efecto en cada uno de los puertos la fecha en que transitó un determinado rebaño, el nombre de su dueño, el del mayoral que efectuaba la contribución, el número de cabezas asaduras y el importe de la exacción, consignándose a continuación los gastos devengados por dicha labor, la custodia y mantenimiento de las reses,

así como los jornales de perceptores, a los se sumaban un cuarto de los ingresos netos asignados al administrador del puerto y sus anejos en el caso de ser administrada directamente por la Santa Hermandad³⁰. Dicho libro registro era acreditado ante el arrendador particular o general de la asadura, o en caso de ser gestionada por el arquero ante el propio cabildo, haciéndose llegar a éste mediante los servicios de una persona de confianza o utilizando los servicios de cuadrilleros y escribanos hermandinos.

En el último cuarto del Setecientos se concedió a las Hermandades Viejas la capacidad para poder utilizar al ejército en estas labores perceptoras, lo que sería aprovechado por la corporación manchega para recurrir a los servicios esporádicos de un sargento en tales labores, siendo retribuido por ello de las arcas de la entidad.

B.2. Procedimientos recaudatorios.

A lo largo del periodo estudiado serian utilizadas tres fórmulas para recaudar el derecho pecuario hermandino: el arrendamiento de la asadura mayor y menor a uno o varios arrendadores mayores mancomunados, pudiendo éstos subarrendarlos a terceros a su satisfacción; la administración íntegra del arbitrio por parte del cabildo, confiando su gestión al mayordomo; y un sistema mixto, por el cual se deja la exacción determinados puertos en manos de arrendadores, quedando el resto de los puntos de cobro bajo control directo hermandino.

Tradicionalmente se prefirió el procedimiento del arriendo, pues garantizaba unos determinados ingresos fijos, siendo susceptibles de ser cobrados total o parcialmente por adelantado y dejaba al arquero de la corporación las manos libres para dedicarse al despacho de sus múltiples ocupaciones. Cuando ésto no era posible se recurrió al arriendo parcial de la renta, generalmente delegándose su cobro en las estaciones más lucrativas: y en situaciones extremas asumir su completa administración en el seno de la organización.

B.2.1. Arrendamiento general.

Cuantitativamente fue el procedimiento más empleado por el Triple Instituto, datando del siglo XIV el primer arrendador conocido, en este caso del arbitrio perteneciente a la fraternidad de Toledo³¹. En la Edad Moderna, generalmente con una cadencia anual, por el mes de septiembre³², coincidiendo con la renovación de los oficios hermandinos, se abría el periodo de admisión de pujas de su subasta pública durante el plazo de nueve días naturales, partiendo del valor de referencia que anteriormente había alcanzado, admitiéndose las mejoras que se formalizasen por los licitantes, e informando el portero a los interesados de la evolución de la almoneda. Poco antes de finalizarse su vencimiento, se vuelven a pregonar por el vocero público las mejoras interpuestas y los puertos en arriendo, hasta que tras la puesta de sol se cierra la moratoria prevista. Poco después, a fines de septiembre o primeros días de octubre, ante el cabildo reunido de mañana, se formaliza el contrato en el mejor posterior³³.

Quienes se hacen con estos sustanciosos contratos suelen ser hermanos de la propia asociación, directamente o mediante testaferros, o sus convecinos³⁴, consensuándose los plazos en los se comprometen a hacer efectivo el reembolso del remate³⁵, presentando como aval la hipoteca de sus bienes y la de sus fiadores mancomunados³⁶, con la cláusula de no poder enajenarlos hasta el final del contrato.

El arrendador debía asumir los riesgos derivados de cualquier eventualidad que obstaculizase su correcta recaudación, como la suspensión de su cobro en determinados puertos, el descenso del

volumen de tránsito ganadero, los abusos de los exactores nombrados a tal efecto, etc. Si algún perjuicio se derivase de la percepción de dicho arbitrio, por la negativa de los ganaderos a contribuir o los excesos de los cobradores, debería acudir al tribunal, en primera instancia, para que conociese privativamente del asunto, a costa de la parte encartada o, en último extremo, por cuenta del arrendador³⁷.

Por último, se proporcionaba al arrendador un traslado de los reales privilegios y ejecutorias ganadas por el Santo Tribunal que le legitimaban, y se le concedía carta de cuadrillero cobrador, documentos éstos que amparaban su cometido ante cualquier instancia de justicia. Escriturada contractualmente esta relación a satisfacción de las partes, no se podía rescindir unilateralmente el compromiso estipulado. Concluido el acto, el cabildo dispensa un ágape a la concurrencia, consistente en limonada y productos de repostería, como mantecados o bizcochos³⁸.

Durante gran parte del Seiscientos, para estimular la presentación de licitaciones, el cabildo se comprometía a gratificarlos con unas cantidades que oscilan entre tres mil quinientos a diez mil maravedís, denominadas "prometidos"; cuando no había más que un único postor se decidía, según la liquidez del tribunal, si esta cantidad pasaba a manos del arrendatario o si permanecía en poder del arquero hermandino, considerándose ingreso o gasto según la ocasión³⁹. Igualmente en los siglos XVI y XVII serían los propios arrendatarios quiénes costearían de su peculio los derechos de escribanía del contrato y de los pregones pronunciados, en concepto de "adahalas", lo que suponían un monto total de diecinueve mil doscientos maravedís y dos puercos o doce ducados. A partir del Siglo de las Luces "prometido" y "adahalas" dejarán de mencionarse, desapareciendo el

primero debido a la bonanza económica general y asumidas la segundas, seguramente, por la propia Hermandad.

Normalmente el arriendo anual obligaba a que quien ostentase un tiempo el arriendo dejase paso a un mejor postor al año siguiente, aunque no es usual que se renueve el contrato en la misma persona. En el último cuarto del Setecientos, y hasta la abolición de esta gabela, se acostumbra a realizar contratos de una duración que oscila entre los dos a los cinco años, llegándose a prescribir en las ordenanzas de 1732 que si arriendo fuese anual se diese cuenta de ello al cabildo, siendo en todo caso dicho procedimiento "mas legitimo que si se administrase"⁴⁰. Por entonces, el arrendatario tenía atribuciones para enajenar el derecho contratado, total o parcialmente, por subarriendo o cesión. En 1718, dos días después de rematarse la asadura en Joseph García Poderoso, éste dice desistir de su administración con el fútil argumento de no poderse hacer cargo personalmente de su cobranza con motivo de sus múltiples ocupaciones, cediéndolo a favor del menor Francisco Velarde, destacado miembro de la oligarquía de la ciudad y vinculado familiarmente a la corporación hermandina, presentando carta de obligación de sus fiadores ante alcaldes y mayordomo⁴¹.

El arrendatario general, ya fuese por afán de lucro o ante la imposibilidad material de hacer frente a la percepción de la asadura en todos los pasos donde se exigía, podía recurrir al subarriendo de algún puerto y de sus anejos. En Ciudad Real, dicha práctica se remonta a 1683, cuando el recaudador mayor don Alonso Guerrero Peláyz arrienda los puertos de Villarta y Segura de la Sierra a unos vecinos de dichos términos, en cuatro mil y en cuatrocientos cincuenta reales de vellón, respectivamente⁴², recayendo en la misma persona tres años más tarde la recaudación de la última de las estaciones. Entre 1718-

1723 los sucesivos perceptores generales arrendarán anualmente los pasos de El Viso del Marqués y los del priorato de Santiago, los más alejados y saneados de los adscritos a la corporación manchega.

En las postrimerías del siglo XVIII los licitadores optaron por contratos de mayor duración a la anual, introduciendo cláusulas en sus pujas que precisaban la presión a la que veía sometido el cabildo para la cesión de este derecho⁴³. En este marco, los arrendatarios mayores prefieren rentabilizar sus inversiones asegurándose a su vez una percepciones fijas contratando con terceros la subrogación de parte de los puertos. Los ejemplos se suceden, particularmente en el Ochocientos: en el 1800 don Juan Laguna Ventas, apoderado de unos vecinos de Santa Cruz de Mudela, se persona en Ciudad Real para tratar con los ostentadores de la asadura, don Ramón Antonio Rico y don Josef Aguirre, contratando para sus representados el cobro de este arbitrio bianual en los pasos de Santa Cruz y del Viso del Marqués, por cuatro mil cuatrocientos reales anuales, pagaderos en cuatro plazos iguales los días 1 de diciembre de 1800, 31 de mayo, y 1 de diciembre de 1801, y finales de mayo de 1802, "en dinero metálico no en vales"⁴⁴; el contrato firmado en 1802 entre el ya citado don Josef Aguirre, y Juan Sánchez de Molina, supone la cesión del puerto de Veredas al segundo por siete mil trescientos cincuenta reales anuales, a satisfacer en tres cuotas iguales, comprometiéndose el subarrendatario a atenerse a su cobro según el canon, a no inmiscuirse en la exacción pecuaria de otros puertos, asumir el coste de los litigios suscitados por su labor y respetar la exención contributiva de los ganados destinados al abasto de Madrid y Sitios Reales "por ahora", otorgando fianzas refrendadas por notario de su persona y bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros⁴⁵.

Secularmente, la influencia de los individuos que controlaban la principal fuente de ingresos de la entidad, tuvieron un papel de primer orden en su vida institucional. La práctica de arrendar el derecho entre sus hermanos, a la par que dejaba en manos de miembros de la corporación el doble control financiero y rector de la misma, se aseguraba de la distribución de prebendas entre el resto de los integrantes, en forma de favores, facilitándose el adelanto de dinero en determinadas circunstancias. La importancia de los recaudadores mayores era tal que, en las primeras décadas del Seiscientos, los encontramos satisfaciendo directamente las nóminas anuales o sufragando salarios de colaboradores, pagando a procuradores o costeando salidas.

Los cargos de arrendador y cobradores conllevan ciertos riesgos personales y económicos, pudiendo ingresar con tanta facilidad en las cárceles públicas como verse menoscabados sus legítimos derechos ante la reiteración de pleitos, que a menudo se demoran durante años. En 1607 ambos notarios hermandinos, junto a un cuadrillero, deben ir a Almedóvar del Campo para requerir la excarcelación de los exactores Juan García Corchete y Tomás Pinedo, arrestados por exigir asadura a una pieza del almagreño Blas de Villarreal⁴⁶; en 1608 el gobernador de Segura de la Sierra impedía violentamente el cobro de dicho arbitrio en dicho puerto⁴⁷; un año después el gobernador de Villarrubia de los Ojos apresa al cobrador de la asadura, mientras que las autoridades de Alcázar de San Juan y Villarta embargaban las rentas percibidas por el citado concepto, etc⁴⁸.

La puntualidad con que los arrendatarios generales cumplen los plazos estipulados deja que desear: en 1607 el ciudarrealeño Antonio Xuárez debía aún dos mil quinientos cincuenta maravedís a la

Hermanidad⁴⁹; en septiembre de 1642 los derechos incobrados alcanzaban mayores cotas, adeudándose incluso las adahalas de los escribanos por parte de los ex-recaudadores Diego de Poblete y Juan de Salazar⁵⁰; en enero de 1707 los arrendatarios Francisco de Plaza y Joseph Velasco no habían cumplimentado el primer pago estipulado en el contrato⁵¹; en 1755, don Luis Velarde tenía una deuda pendiente de más de once mil doscientos reales de vellón⁵²; Pedro Chacón, usufructuario de la asadura mayor y menor hasta 1793, se negó en redondo durante no menos de siete años a reintegrar dos mil setecientos reales al Santo Tribunal, por considerar que el contrato rubricado contenía importantes defectos formales, acabando el caso ante el Supremo Consejo⁵³.

B.2.2. Administración directa.

De manera excepcional, la organización manchega asumió la gestión de la percepción del arbitrio pecuario que le pertenecía. Los motivos que propiciaron este hecho atípico posiblemente haya que buscarlo no tanto en un deseo de mayor control sobre una renta tan vital para la entidad como en el retraimiento de los posibles interesados ante una coyuntura económica particularmente desfavorable o porque los conflictos en los que se encontraba envuelta la corporación colmenera no garantizasen la integridad de la recaudación lícitada, amenazando con colapsar su operatividad.

La Hermandad Vieja ciudarrealeña se vio obligada a hacerse cargo de la percepción íntegra de la asadura, hasta donde nosotros sabemos, en los periodos que abarcan los periodos contables de 1631-33 y 1684-85. El precedente más lejano data de 1496, cuando el cabildo manchego designó a Juan de la Serna para cobrar la asadura de la estación de Torre de Juan Abad, remunerándose según las jornadas empleadas en ello, aunque solo se trata de un único punto de cobro.

Determinado el cabildo a administrar dicha renta, el procedimiento es simple: congregados los hermanos en la sala capitular, se delega en el mayordomo hermandino la labor de su recaudación y administración, dotándole de una amplia autonomía para manejar los caudales, nombrando a cobradores de su confianza, de cuya integridad debe responder. Su primer paso era proveer a sus delegados en los distintos pasos pecuarios, por lo general a una sola persona, auxiliada por un pastor en aquellos lugares donde era más fluido el tránsito de ganado, o

donde estaba más virulentamente contradicha su exacción, por lo que era más aconsejable extremar sus precauciones. Tales delegados tenían el status de cuadrilleros cobradores; viéndose amparados por la cobertura jurisdiccional que les brindaba su carta de cuadrillería antiguos conocidos de los miembros rectores del tribunal, parientes del arquero, mayores de hermanos de la organización apícola, venteros y antiguos dependientes avecindados en las proximidades de los lugares de cobro, conforman el núcleo operacional del entramado fiscal hermandino.

Ateniéndose al canon vigente, y sujetos a las mismas obligaciones y franquizas que tenían los recaudadores nombrados por los arrendatarios, dichos cobradores perciben el arbitrio siguiendo las pautas ya especificadas, aunque relajándose algunos de los resortes de control inexcusables en circunstancias normales, aunque cumplimentando el libro registro en cada uno de los puertos⁵⁴.

Enviados correos por los puertos para supervisar la marcha de tales diligencias⁵⁵, bien sea por cuestiones de seguridad personal o por estimular el celo de los exactores, lo cierto es que se remitían al mayordomo paulatinamente acreditación reglada de las sumas percibidas, consignándose cantidades, dueño o mayoral del rebaño gravado y, a veces, la fecha de dichos cobros. Con los concejos de Chillón y Villarrubia de los Ojos se conciertan las sumas que pagarían en compensación por no hacerse efectivo el derecho sobre los ganados que se dirigían a sus cuerdas locales, el primero en razón del acuerdo preferencial por tratarse de una villa de señorío antiguamente vinculada a la Hermandad Vieja, y la segunda por la pujanza de su feria de San Andrés, celebrada en su término durante su festividad⁵⁶.

Cuadrilleros y escribanos hermandinos portan el dinero recaudado a Ciudad Real y las cabezas de ganado a la aldea aneja de Poblete⁵⁷, siempre que no fuesen vendidas en los mismos puertos donde se exigían o en las ferias próximas, cuando no llevadas a pastar al valle de Alcudia⁵⁸. Los principales de la subasta pública de dichas reses en la plaza pública de Ciudad Real suelen ser los propios hermanos u oficiales de la entidad⁵⁹, conociéndose algunos casos donde puede presumirse dolo, como el protagonizado en 1633 por el caballero don Cristóbal Treviño Velarde, al no contentarse con dejar pendiente de pago de numerosas cabezas ovinas, sino constarse que se le habían entregado cuatro ovejas que decía no haber recibido en sus corrales⁶⁰.

En 1695 tiene lugar el desglose más detallado al respecto, por lo que conocemos el importe y destinatario de las ventas efectuadas de las cabezas de ganado, lana y pieles de los corderos, pudiendo establecerse una serie de precios pecuarios de dicha temporada, aunque sospechamos que los importes alcanzados en dichas almonedas son ligeramente inferiores a los vigentes en el mercado local⁶¹.

En cuanto a los desembolsos ocasionados por su administración, no se reducen a la cuarta parte ~~del~~ total asignada a los cobradores, ni al mantenimiento en los rediles de las reses durante el invierno, sino que también incluyen las derivadas de la custodia, traslado y compra de redes para las ovejas llevadas a herbajar a los pastos en el valle de Alcudia, los gastos de comida y aposento de pastores, dispendios en marcar, esquila, pesar y matar a algunas de las cabezas⁶².

B.2.3. Fórmula mixta.

Como procedimiento alternativo, cuando quedaba desierta la licitación al arrendamiento general de la asadura, el cabildo admitía la posibilidad de proceder a ceder en arrendamiento dicho arbitrio en aquellos puertos que encuentran quienes se hiciesen cargo de ellos, quedando el resto bajo control directo del mayordomo. Este sistema se hizo efectivo en los periodos 1635-1637; 1686-1687; 1741-1758 y 1773-1776.

En la corporación de la Ciudad Imperial, durante siglos administraba el puerto real de dicha ciudad, subastando el resto de los pasos de su circunscripción, o asumiéndolos en el supuesto de no hubiese quien pujase por ellos. Las razones eran económicas, ya que representaba su fuente de ingresos más cercana y saneada, y de prestigio, pues se consideraba que su cesión a manos ajenas redundaría en un descrédito del tribunal, al hacer dejación de sus derechos⁶³.

Este régimen mixto arrendamiento/recaudación directa será el que mejores resultados económicos aporte, al asegurarse un control sobre parte de los puertos y tener asegurados caudales fijos sin tener que depender de coyunturas más o menos favorables en el mercado pecuario.

Obviamente los puertos arrendados suelen ser aquellos que reúnen unas condiciones idóneas de rentabilización, es decir, aquellas estaciones más transitadas, donde por sus condiciones naturales estaban emplazadas en lugares de fácil recaudación o cuyo cobro era lo menos controvertido posible.

Desde principios del Quinientos se atestigua la práctica de arrendar por separado los pasos de Torre de Juan Abad⁶⁴, extendiéndose luego a los de Sierra de Segura, Almedina, Almodóvar del Campo, Veredas, Villarta de San Juan, Viso del Marqués y anejos, Villanueva de la Fuente o Socuéllamos, dependiendo de los precios de su arriendo, los lugares subrogados, de las variables crono-estacionales, las alteraciones en la circulación ganadera, etc.

Cuatro estaciones parecen conciliar el interés de los licitantes: los del Viso del Marqués y anejos, Torre de Juan abad, Villarta y Socuéllamos, casi siempre rematados en vecinos de dichos lugares o comarcanos. En estos dos últimos ya durante el Quinientos, y aún antes, se recaudaba la mayor parte del monto total de la asadura, al tratarse de los puertos más septentrionales con los que contaba la Hermandad de Ciudad Real, y por lo tanto los puntos de entrada avanzados de los rebaños pertenecientes a las cabañas soriana oriental y conguense⁶⁵; en 1636 todavía el puerto de Villarta se significa como el más productivo de la entidad⁶⁶, y esta tendencia puede extrapolarse hasta bien entrado el siglo XVIII.

La estación de Torre de Juan Abad, con sus anejas de Almedina, Torrenueva, Castellar de Santiago y Segura de la Sierra eran, por su distancia geográfica de la sede apícola tanto como por ser punto obligado de paso de ganado desde la Meseta castellana al Alto Guadalquivir, punto de mira permanente de algunos sujetos con deseos de lucro, siendo incorporados al Viso del Marqués durante el Setecientos⁶⁷.

Este cambio cualitativo que significaba modificar las cabeceras fiscales hermandinas propició algunas fricciones. A fines de 1718 Antón Lázaro Ibáñez, asadurero del Viso del Marqués litigaba contra Domingo Bermúdez, vecino de Torrenueva y arrendador del citado arbitrio del Campo de Santiago, por intrusismo, al pretender éste último recaudarla fuera de su término; interviene el alcalde mayor del señorío de Santa Cruz requisando el producto de la asadura local, desistiendo Domingo Bermúdez de obtener por su fuerza sus derechos y recurriendo al arbitrio de los alcaldes de Hermandad ciudarrealenos⁶⁸. Ocho años antes Juan Mejía, vecino del Viso, había sido encartado por recaudar asadura sin contar con la oportuna licencia, constando por tres cartas de pago que había defraudado a diversos ganaderos, reclamándose a los recaudadores del travesío maestres que presentasen ante los magistrados hermandinos los libros registros de los cobros efectuados⁶⁹.

La puntualidad con que dichos arrendatarios hacen frente a sus obligaciones no siempre fue tan regular como el Santo Instituto hubiese deseado. Paradigma de ello es el caso protagonizado por Joaquín del Campo; dicho sujeto ostentó la asadura del Viso del Marqués, localidad de su vecindad, de forma casi ininterrumpida entre 1744-1762. Desde 1751-1752, por razones que desconocemos, empieza a demorarse en los pagos previstos en su contrato, siendo despojado de su ocupación en 1752 en favor de su paisano Pedro Fernández Silletero. Cuando en 1755 se le reclama la deuda pendiente con la entidad manchega se declara insolvente, logrando de nuevo la administración del puerto en 1758 por tres mil ciento veinticuatro reales anuales, y en 1761 licitaba en otros mil ciento cincuenta, pese a lo cual en agosto siguiente aún debía más de dos mil reales. Se designa a Joaquín Tirado juez para dirimir sobre los impagos acumulados por el moroso,

con un salario diario de cuatrocientos maravedís; con el auxilio de los alcaldes ordinarios, el 20 de agosto de 1762 se le emplaza a que en tres días satisficiera sus deudas y las costas judiciales devengadas, si pena de prisión e incautación de bienes; como el encausado pagó parte de lo debido el caso se sobreseyó⁷⁰. Poco tiempo estuvo libre de la acción de la justicia, pues en 1763 el contador Pedro Treviño manifiesta el agravio comparativo que supone la rebaja injustificada de la mitad de la deuda por liquidar; se reabre el proceso, pero, dos años después quedaban sin saldar casi novecientos reales⁷¹. Probablemente nunca se terminaría de reembolsarse en su integridad la deuda, pero Joaquín del Campo nunca volvería a beneficiarse de ningún negocio corporativo.

Por lo que respecta a los puertos administrados por el mayordomo, dicho oficial hermandino solía nombrar a los recaudadores pertinentes, a menudo miembros de su familias⁷², ex-arrendatarios⁷³, encargados del abastecimiento de las carnicerías locales⁷⁴, cuadrilleros⁷⁵, o serranos vinculados profesionalmente a los grandes ganaderos que integran los cuadros rectores de la Hermandad Vieja.

El mayordomo saca a pública subasta el cuero⁷⁶, la lana⁷⁷, y las reses asaduradas⁷⁸; recaudaba el dinero del rebujo; pagaba los salarios del personal encargado de su cobro, custodia y esquile⁷⁹; sufraga de las arcas hermandinas los derechos de pastos⁸⁰; pagándose en especie los salarios de determinados oficiales⁸¹; o destinando sus despojos a los reos de la galera hermandina⁸²; encargándose de realizar compras menores para el ganado encomendado⁸³; y distribuyéndose, eventualmente, de la cabaña institucional los carneros con motivo del aguinaldo navideño.

B.3. Defensa de su recaudación.

Una gabela pecuaria que desde la Faja Edad Media gravaba el tránsito ganadero estaba destinada a ser motivo de fricción constante entre perceptores y contribuyentes, aún dentro del contexto de multiplicidad de arbitrios locales sobre la propiedad semoviente que constituían una auténtica rémora para el desarrollo de este sector pujante de la economía medieval castellana⁸⁴. Los pastores, con la desaparición de los golfines, se creían exonerados de comparecer en la labores de apoyo ejecutivo que habían desempeñado con anterioridad, y no sin resistencia contribuían con este simbólico óbolo al mantenimiento financiero del Santo Instituto.

Ya en la Edad Moderna, tres fueron los principales escollos que hubo de salvar la Hermandad Vieja para continuar en posesión del privilegio sobre el que se fundamentaba su propia supervivencia: el Honrado Concejo de la Mesta; las autoridades de los señoríos manchegos, laicos y eclesiásticos; y los ganaderos particulares. A los citados habría que añadir un cuarto elemento desestabilizador: las pretensiones expansionistas de la fraternidad de la Ciudad Imperial.

La Mesta, organización ganadera por excelencia de la Castilla del Antiguo Régimen, es sin duda la que de manera más continuidad y eficaz defendió los intereses de sus miembros ante los excesos de los exactores de este tipo de imposiciones. Aunque desprovistos paulatinamente de la influencia que antaño gozaron, a mediados del Setecientos elevaba al monarca un esclarecedor memorial contra este tipo de arbitrios sobre el tránsito cabañil, en el que se resumía el

proceso de transformación en permanentes de tarifas a menudo abusivas, y casi siempre arbitrarias, considerando que son legitimadas cuando

"...la alegan con general abuso por el titulo mas relevante, (y por eso de probar mas dificil) haviendo muchas veces empezado insulto, continuado toleranzia, pasado a posesion, luego a manutencion, despues a inmemorial, y en fin a Executorias y prosiguiendo a sombra de ella en la exaccion de este derecho, exceden cada dia el lugar, o el tiempo, en la quota, o en la especie, o en todo ello, y el mal ejemplo de unos se produce en otros, con oposicion a que ya la sigan muchas Justicias, Quadrilleros y Guardas..."⁸⁵

En 1503, tras una ardua negociación, se consensuó que de los rebaños que pasasen por Socuéllamos, solo pagasen asadura los que se dirigiesen al Campo de Calatrava, quedando exentos los que se fuesen al Campo de Montiel⁸⁶. Poco después, hubo de dirimirse en la Chancillería de Granada el respaldo legal a la exigencia hermandina en las estaciones de Socuéllamos, Villarta, Torre de Juan Abad y la Perdiguera "e en todos los otros lugares del Campo de Calatrava, priorazgo de San Juan e maestradgo de Santiago"⁸⁷. Hacia 1509, la concordia alcanzada entre la Mesta y las Hermandades Viejas de Toledo y Talavera, denuncia la corrupción y la arbitrariedad de los manchegos al extender su circunscripción pecuaria fiscal a los territorios limítrofes de las Órdenes de Santiago y de San Juan⁸⁸.

No terminaron aquí las controversias y en 1543, con motivo del cobro a un hermano mesteño de un carnero de su hato de cien ovejas merchaniegas, llega su reclamación ante la audiencia granadina, que en primera instancia legitima a los colmeneros ciudarrealeños para exigir asadura a todos los ganados cabañiles travesíos y merchaniegos que circularsen por los maestrazgos militares en su ámbito actuacional, no así para pedir rebujos ni albalás⁸⁹. Apelada por el alcalde entregador de Mestas y Cañadas, el procurador hermandino, arguye que las

atribuciones de dicho oficial se reducían a entender en los agravios a hermanos mesteños y a visitar cañadas, no a cuestionar derechos inmemoriales; en 1565 los oidores de la Real Chancillería andaluza, en grado de revista, conceden la razón al Santo Tribunal⁹⁰.

En 1604, se abre un nuevo pulso entre la organización pecuaria y la corporación de Ciudad Real, esta vez promovido por el doctor Negrel, alcalde mayor de Mestas y Cañadas del partido de Cuenca, estante en Corral de Calatrava, ante la denuncia a un subalterno del ganadero don Luis de Guzmán, considerado agraviado al asadurarse sus reses. El juez mesteño marcha a la sede hermandina y requiere a sus alcaldes la acreditación de cuantos privilegios y ejecutorias respaldasen su posesión de dicho derecho, intentando incluso de prenderlos, con el consiguiente escándalo público. Como quiera que el doctor Negrel había sido suspendido en su empleo en abril anterior por recurrir a ministros inadecuados y probarse otros excesos en su circunscripción, se comisionó al gobernador de Almagro para que esclareciese el asunto, confirmándose el hecho de que mantenía al cobrador de la asadura Antonio Juárez durante más de dos meses cargado de cadenas⁹¹. El juez entregador, lejos de acatar las cartas reales que le impelían a dar cuenta de sus actos, se querella de los arrendadores del arbitrio hermandino desde hacía una década, acusándolos de tomar reses escogidas.

Ante arbitrariedad tan manifiesta, las cañas se tornan lanzas y presenta reclamación formal por lo antedicho el licenciado don Diego Fernández de Alarcón, presidente del Honrado Concejo, prebeyendo auto el Consejo de Castilla condenando pecuniariamente a la entidad ciudarrealena en quinientos ducados y cincuenta mil maravedís de costas procesales⁹², rebajadas luego a veinte mil maravedís, pero

haciendo patente la práctica perniciosa de escoger las cabezas de ganado asaduradas, y restringiendo esta exacción exclusivamente al Campo de Calatrava⁹³.

La tensión entre ambos colectivos privilegiados alcanza su punto álgido, probablemente, poco después, aún antes de restañarse la enemistad derivada del anterior litigio. En 1611 el alguacil mesteño, licenciado Arredondo Zaguero, embargaba algunos carneros de los recaudados por Antón Recuenco en Alcubillas y bajo la protección del mayordomo hermandino Cristóbal Sánchez. El oficial del Honrado Concejo traslada las reses incautadas a Carrión de Calatrava, bajo fuerte custodia; a medianoche asaltan los corrales uno individuos armados con escopetas y espadas, toman por sorpresa a los guardianes y encerrándolos bajo cerrojo en el cortijo, amenazando e injuriando a todos, robando a unos e hiriendo a otros, gritando que apalearían a todos los representantes de la Mesta y llevándose cuanto ganado quisieron.

En 1616, ante la pretensión del juez entregador licenciado Barrero Ternel de enjuiciar a algunos de los miembros de la entidad manchega implicados en tales sucesos⁹⁴, desde Ciudad Real se solicita llevar el caso ante la corte de justicia de Granada. El 22 de mayo de 1618 para el proceso ante los oidores de la Sala del Crimen, pudiéndose extraer de dicho pleito algunas noticias interesantes sobre este gravamen: a estas alturas de la centuria, las rentas derivadas de su cobro eran inferiores al medio millón de maravedís que se asegura recaudar en tiempos pretéritos debido, según el procurador hermandino, a las continuas vejaciones a los que se ven sometidos los arrendadores; los cogedores acostumbraban a percibir esta exacción a la entrada o a la salida del pasc, como también en las dehesas cercanas para perseguir a

los defraudadores⁹⁵. La Real Chancillería, para evitar males mayores, confirmaría la sentencia dada en 1604 en grado de vista y revista⁹⁶.

En 1635 se reabre el conflicto de intereses, al inmiscuirse al alcalde mayor entregador don Pedro Márquez en la percepción de la asadura por parte de su legítimo arrendatario⁹⁷, con resultado incierto.

Alcanzada la concordia entre el Triple Instituto y el Honrado Concejo en 1715, se regulaba el canon exigible, cobrándose solamente en el primer paso por donde transitaba un determinado rebaño, y quedando libres de dicha contribución en el resto de los territorios controlados por las Hermandades Viejas⁹⁸. Pronto aparecerían fisuras en un acuerdo tan trabajosamente alcanzado, pues la entidad manchega impugnó unilateralmente el que los hermanos de Talavera estuviesen exentos de la asadura en los términos de influencia ciudarrealena, y sobre todo que se constriñese su percepción únicamente a "los ganados que ollaren el Campo de Calatrava"⁹⁹.

Estaba en plena efervescencia la dialéctica entre las fraternidades coaligadas cuando surgió el litigio planteado por la demanda de don Pedro de Robles Gorvalán, caballero del hábito de Santiago, hermano mestero y regidor toledano, hacia 1716. Este ganadero, de quién nos consta que había cumplido escrupulosamente con la preceptiva contribución hermandina exigida por la entidad ciudarrealena¹⁰⁰, dicho año reclamaba mediante procurador propio y el aportado por la Mesta, don Juan González, al considerarse agraviado por satisfacer en 1715 asadura a la entidad manchega tras haberlo hecho a la de Toledo, protestando por haberse conculcado la concordia recientemente rubricada¹⁰¹.

El 24 de mayo de 1716, el Consejo de Castilla otorga la razón al demandante, pero tres años después se apelaba dicho fallo, alegando la Hermandad toledana el tiempo inmemorial que gozaba del privilegio de recaudar asadura y exponer el procurador de don Pedro de Robles que tales arbitrariedades debían moderarse ya que "el comercio de lanas ...-se- allava totalmente perdido y destruido por este y otros semejantes exzesos"; replica el letrado de los ciudarrealeños que si era cuestionado dicho arbitrio el fin de la organización representada estaba próximo, y que los defectos formales habidos en el pago de la asadura por parte del demandante no eximía a su parte de hacer lo propio¹⁰². En vista de lo irreductible de unas y otras posiciones, en 1717 transige el cabildo de Toledo en conceder al ganadero salvoconducto que le eximiese del pago de dicho arbitrio a dicho instituto durante un año "sin perjuicio del derecho de esta Santa Hermandad"¹⁰³; no pareció satisfacerle plenamente esta condescendencia y el pleito siguió su curso consumiendo caudales de todas las partes involucradas¹⁰⁴. En 1725 llega el recurso a la Sala de las Mil Quinientas, donde se tardaría aún un tiempo en emitir su fallo inapelable, legitimando la cobranza del eral de la manada del demandante por parte de la entidad manchega¹⁰⁵.

Mientras tanto, se habían abierto otros frentes en el marco de este secular enfrentamiento; el mesteño don Juan González Estrecho ganó el pleito que deslegitimaba el cobro de rebujo de un importante rebaño ovino, así como el traslado de lo asadurado a Malagón, en lugar del sitio acostumbrado de Consuegra, más alejado de la sede hermandina, quejándose los mayoresales ante tamaños abusos, mayormente cuando se lamentaban de la inoperancia de los cuadrilleros ciudarrealeños

"...por no recorrer la dicha Hermandad la cañada y terminos, asi a la vajada de los ganados como a las suvidas pues con esta obligacion se le havia concedido -lo- que percivia de los ganados"¹⁰⁶

En el segundo cuarto del Setecientos tuvo lugar otro importante pleito que enzarzaba a dichas instituciones, que aunque se saldó a la postre a favor del tribunal ciudarrealeno, supuso la suspensión cautelar de la recaudación pecuaria hermandina en el puerto de Villarta de San Juan del travesío que lo transitaba¹⁰⁷.

Si el ámbito fiscal de la Hermandad Vieja de Talavera, en líneas generales, se circunscribía al alfoz de la villa y al territorio perteneciente al señorío eclesiástico de la Mitra toledana¹⁰⁸; y el de Toledo a la jurisdicción de la Ciudad Imperial y la del estado de Balalcázar, que en siglo XVIII ostentaba el marqués de Gibralfuente¹⁰⁹; mientras que los colmeneros manchegos exigían este arbitrio en los maestrazgos militares y en algunas posesiones nobiliarias, como el señor de Chillón, el marquesado de Santa Cruz y el condado de Santisteban.

Bien a lo largo del Quinientos, bien a principios de la siguiente centuria, el cabildo de Ciudad Real concertó con el concejo de Chillón el pago de una cantidad fija anual, que hacia 1630 montaba veintidós mil maravedís, con la que el Santo Tribunal se daba por satisfecho de los derechos devengados por sus vecinos en las dehesas de su término.

En 1739, esta posesión nobiliaria empieza a gestionar la exoneración de sus ganaderos en las dehesas anejas de Guadalmez y Castilserás, pretextando no cotizarse asadura en estas encomiendas desde hacía más de ciento cincuenta años, siendo público que no podía reclamarse servicio y montazgo seis meses después de finalizarse un arrendamiento, y por lo tanto el duque de la Conquista poder acogerse

a esta prescripción. El asunto va a la Chancillería de Granada, estando representa Chillón por García Matías, y la Hermandad manchega por don Felipe Zambrano de la Fuente; alegaba éste último que la asadura exigida en el Campo de Calatrava era extensiva a dicha villa y sus anejos, adjuntando carta de cobro de los años 1568 y 1585. En 1739 la audiencia andaluza pronuncia sentencia favorable al Santo Instituto, eximiendo al duque de las costas procesales devengadas¹¹⁰. En 1743 es llevado el pleito ante el Consejo de Castilla, confirmándose la sentencia anterior, por lo que la Hermandad de Ciudad Real pudo percibir de Cristóbal Bernabé, último arrendatario de Castilserás, la asadura de sus ganados de las cuatro temporadas anteriores, a la que se sumaría una elevada cantidad en concepto de gastos judiciales¹¹¹. Al siguiente año el cogedor hermandino, Jerónimo Benito, se encarga de percibir la asadura de la citada encomienda, lo que hará sin problemas, e igualmente hicieron sus sucesores en el empleo¹¹², hasta que en 1755 hubo de ir a Almadén el notario hermandino Jacinto García Prieto con dos cuadrilleros para solicitar ~~del~~ alcaide de Castilserás que fuese permitido tomar asadura de los ganados ~~de~~ sus dehesas¹¹³.

Las autoridades de las posesiones de órdenes, quiénes antaño habían llevado la mayor parte del peso de la oposición a este arbitrio pecuario, con su incorporación a la Corona de las mesas maestras llevada a cabo durante el reinado de los Reyes Católicos y de Carlos I, remitieron en parte de su frontal oposición a los cogedores hermandinos, aunque siguieron reproduciéndose tensiones locales.

En 1589 y 1595 sendos veredictos confirmaron el derecho de la asociación apícola manchega a percibir asadura en sus estaciones del Campo de Calatrava, contradicho por el Común de dicho maestrazgo¹¹⁴.

Igual cariz adquirieron los litigios suscitados por idéntico motivo en Almagro, en 1604¹¹⁵; y luego en el priorato de San Juan¹¹⁶. Entre 1606-1607, un cuadrillero acompañado de dos escribanos hubieron de desplazarse a Almodóvar del Campo para que su justicia excarcelase a dos asadureros que habían llevado dos puercos al almagreño Blas de Villarreal en la estación de la Carnerera¹¹⁷; en 1608 el gobernador de Segura de la Sierra obstaculizaba el cobro de dicho arbitrio en el Alto Guadálquivir¹¹⁸; entre 1609-1610 las autoridades de Villarrubia de los Ojos, Alcázar y Villarta de San Juan, así como las de Puertollano y Almodóvar del Campo retenían asaduras y prendían a sus extractores¹¹⁹. En Fuencaliente, hacia 1612, la justicia ordinaria se entrometía en la cobranza de la asadura manchega, y por entonces el gobernador de Villarrubia despojaba al cobrador Diego Sánchez del cerdo tomado de la piara de la viuda Catalina del Pinar¹²⁰.

En 1614, cuando pretendía percibir asadura de los ganados que concurrían a la feria de Daimiel, Esteban Sánchez Cordobés es arrestado el catorce de noviembre por uno de sus alcaldes ordinarios, e incautado el producto de su labor, condenándose desde Granada años después tan violento proceder¹²¹. Hacia 1619 sus homólogos de Socuéllamos impedían la recogida de esta gabela¹²².

Alrededor de 1633 el cuadrillero Juanes de Gugurmandia percibía dieciséis reales de dos vacas de una viuda daimieleña, debiéndose de recurrir a la mediación del capellán de Nuestra Señora del Prado, Bartolomé de León, para solventar la competencia provocada¹²³; en tanto que dicho año el gobernador del partido de Almodóvar del Campo embarazaba las diligencias para su cobro en su término¹²⁴. Entre 1638-1639, desde Almagro se intentaba entorpecer la cobranza de este gravamen sobre la cabañas de sus convecinos doctor Gaspar de Quartos y

don Lorenzo Francisco de Velasco¹²⁵, querellándose ante los magistrados hermandinos el arrendatario don Cristóbal de Salazar, al embargarse lo cogido en la Viñuela por su delegado del ganado de Sebastián Rodríguez, regidor de Almodóvar del Campo que se declaraba exento de ella¹²⁶.

A fines de 1680 y de 1681, el justicia mayor de la villa de Almagro era conminado por los rectores de la Hermandad ciudarreal para que no se entrometiese en la cuestionada contribución de unas pjaras pertenecientes a unos vecinos de Villanueva de los Infantes que, procedentes del priorato de Santiago, se dirigían a la montanera de los maestrazgos calatraveños¹²⁷.

Habrà que esperar casi un siglo para se reproduzcan más litigios por este motivo. En 1775 ó 1776, el alcalde mayor de Almadén hubo de responder ante Alfonso Jaime, sargento de la milicia provincial de Ciudad Real, delegado hermandino, para que respetase la carta real que consignaba el auxilio a los dependientes apícolas en cuestiones que atañesen a su fiscalidad¹²⁸. A partir de entonces, y hasta el 1800, no conocemos más fricciones entre autoridades de órdenes y arrendatarios de la asadura; tras ese fecha, el destino de su importe al Tesoro Nacional solventaría con toda seguridad la mayor parte de estas confrontaciones.

Por lo que respecta a los ganaderos libres que hicieron frente a los cuadrilleros cobradores, alegando exención personal o estamental, ora defraudando dicho gravamen sin mayores subterfugios, transitando por trochas vedadas ora pretextando haberlo satisfecho con anterioridad, tuvieron un resultado dispar, aunque predominan las sentencias favorables al Santo Tribunal manchego.

En 1603, el receptor del Santo Oficio Alonso Pantoja pretendía estar exonerado por su oficio del arbitrio hermandino, solicitando la devolución de lo pagado por su mayoral al exactor, no constando dicho privilegio en ninguna de las cartas reales; el recaudador Antonio Juárez presentó sus alegatos ante la Inquisición de Toledo y en Granada, negándose en redondo el demandante a hacer lo propio ante los alcaldes ciudarrealeños¹²⁹. También a principios del Seiscientos se despachó ejecutoria a don Antonio Moglas, personero de la Hermandad Vieja de Toledo, por querer estar libre de pago Juan Ibáñez, llevándose el caso de nuevo a la Real Chancillería granadina¹³⁰.

Hacia 1610 el clérigo daimieleño Juan Ruiz de Avilés elevaba sus quejas, ante quien quería oírle, por sentirse agraviado al verse sus rebaños sujetos a este impuesto¹³¹, y otro tanto esgrimía el presbítero Juan Sánchez Conejero, vecino de Villarrubia de los Ojos, pretendiendo extender su fuero a una piara en la que tenían cabezas de ganado su madre y hermano¹³².

En 1706 el murciano don Diego Belmonte, quien había dejado sus rebaños en el agostadero de Segura de la Sierra -priorato de Santiago-, decía gozar de privilegio especial de la Real Chancillería para estar libre de esta contribución pecuaria, ordenándose desde Ciudad Real que fuesen retenidas tales reses y se llevase traslado de la supuesta provisión para dirimir en su vista lo conveniente¹³³.

Mediada la década de 1730, Juan Martínez Parreño y Chaves, ganadero y regidor de Puebla de Don Fadrique, transita con un hato superior a las mil cien ovejas por Argamasilla de Alba sin cumplimentar el pago del derecho de paso al subarrendador Luis Camacho. Denunciado el

fraude al ministro superior Juan de la Paz Amarillo por uno de sus subalternos comarcanos, el 23 de abril de 1735 le eran embargadas cuarenta y cinco ovejas y quince corderos, en las proximidades de Manzanares¹³⁴; tras consumirse un tiempo y un dinero precioso en sustanciarse la causa ante los Reales Consejos¹³⁵, se falla a favor del ganadero, en detrimento de la credibilidad hermandina, lo que parece sacudir sus cimientos¹³⁶, dilatándose la sentencia definitiva del caso hasta el 5 de junio de 1756¹³⁷.

Este último año se procedió por el Santo Instituto contra el gallego Joseph Pérez de Losa, afincado en Piedrabuena, quien habiendo comprado en diciembre de 1755 numerosas cabezas de cerda en Andalucía, vendiéndolas en la Corte y las localidades toledanas de Los Yébenes, Orgaz y Sonseca, entre otras varias. En febrero de 1756 se persona el notario hermandino Vicente García Prieto en Los Yébenes para informarse del cobrador local de la corporación toledana, confirmando el arrendador Antonio González, pero recabando del ventero de San Juan de Dios noticias sobre ciertas infracciones del investigado; ante la inconsistencia de los indicios inculpatorios el caso es sobreseído¹³⁸.

Años antes había tenido lugar un pleito cuya envergadura excedía el mero proceso contra unos contraventores a la asadura manchega. En 1736 los cobradores designados por el arrendatario mayor exigían el pago de unas vacadas propiedad de unos vecinos de Alcázar de San Juan¹³⁹, que tenían la intención de ir a agostar al valle de Alcudia. Molestos por considerar abusivo el gravamen impuesto, imponiéndose en 1742 por el Consejo de Castilla una multa de cien ducados al recaudador Antonio Guerrero, de los que al menos la mitad serán suplidos de los caudales de la Hermandad Vieja¹⁴⁰, lo que a la postre derivaría en demoras en

el reintegro de los pasos arrendados¹⁴¹. En 1745 don Luis Treviño, ex-alcalde del Santo Instituto, marcha como procurador institucional a Madrid ante la proximidad del fallo del Supremo Consejo¹⁴²; el 1 de abril de dicho año es absuelta la asociación colmenera, sujetando a los alcazareños al pago de más de trescientos cuarenta y seis reales de vellón. En agosto siguiente se recibe la ejecutoria en Ciudad Real¹⁴³, comisionándose a los escribanos Jacinto y Vicente García Prieto para ir a la mencionada villa para cobrar tales derechos¹⁴⁴, embargando tres vacas a doña Ángela Valenzuela, y una añoja al resto de los pleiteantes, de sus manadas estantes en las inmediaciones de la localidad. Abatidos los querellantes de que tras tres años de pleitear no hallaron eco sus peticiones, recurren la sentencia, y en 1752 Vicente García Prieto les debía emplazar con una nueva provisión de la Corte para acallar sus pretensiones. En 1756 la Sala de las Mil Quinientas se pronuncia a favor de la Hermandad¹⁴⁵, aunque faltarán varios años más para que se cumpliesen con la puntualidad debida todas las cláusulas de dicha sentencia inapelable¹⁴⁶.

Años antes de esta resolución, en 1737, el valdepeñero Francisco Barrera de la Fuente se había negado a pagar asadura de la piara que conducía hacia el valle de los Pedroches, por decir haberla satisfecho en los términos de Puertollano o la aldea de Brazatortas; como no se contrastase dicha declaración, y con la ayuda de la justicia local, el escribano hermandino Joseph Cordobés logra de este ganadero que pagase asaduras y costas judiciales¹⁴⁷.

Por último, un factor desestabilizador habría de unirse al continuo litigar de la fraternidad manchega en defensa del pilar de su hacienda: la actitud expansionista de su homónima de la Ciudad Imperial.

En efecto, el cabildo de la Hermandad de Toledo, que desde época inmemorial se había arrogado un papel preeminente dentro de la liga apícola, defendiendo dicha posición en todos los foros posibles, cuando vió en peligro el nivel de sus rentas trató de compensarlo en detrimento del resto de los integrantes del Triple Instituto, siendo la más perjudicada la entidad de Talavera de la Reina¹⁴⁸.

Durante el Quinientos, el tribunal toledano se mantuvo a la defensiva, pugnando con la corporación ciudarreal de Toledo por el control del puerto de San Andrés -en el término de Los Yébenes-, adscrito desde el periodo bajomedieval a los colmeneros de Toledo; por motivos que desconocemos a fines de dicha centuria la organización manchega parece anexionarse esta estación o al menos contribuir a su mantenimiento por parte de los toledanos, enviando a sus representantes en reiteradas ocasiones ante su ayuntamiento y a la capital de su partido, Consuegra, entre 1597 y 1598. Ante la negativa de vecinos y concejo a pagar la asadura el caso hubo de ser llevado ante Grouada¹⁴⁹.

Desde bien entrado el Seiscientos la entidad con sede en Toledo pasa a hacer suyo un talante beligerante, motivado no tanto por su propio fortaleciendo corporativo, como por el reconocimiento del agotamiento instituciones de las asociaciones federadas, en el marco de la crisis general de la Monarquía Católica. En 1633, los colmeneros de Ciudad Real comisionaron al notario inquisitorial Pedro de Velasco para ir a Toledo para apercibir a los toledanos de que dejasen percibir la asadura pendiente de pago del paso de Valdálgodor a los delegados designados por arrendatario Diego Díaz de Mora¹⁵⁰.

La tendencia antes señalada toma un carácter más radical con la contienda Sucesoria; quebrantadas sus finanzas por la guerra en curso, pretendería, infructuosamente extender transitoriamente su radio de acción fiscal a las manadas que pasaban tanto por su territorio como por el del resto de los tribunales coaligados¹⁵¹, aunque de tales aspiraciones se desmarcase el tribunal marchego en 1715.

Entre 1781-1783, la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial cobró la asadura, en su integridad, del paso de Santa Cruz del Retamar, litigada por entonces con los talaveranos¹⁵², aprovechándose de la debilidad estructural que desde hacía décadas aquejaba a dicha entidad. De finales del Setecientos, concretamente de 1795, data la última ocasión en que estalla el enfrentamiento entre ciudarrealeños y toledanos, aunque no tengamos más que vagas referencias documentales al respecto¹⁵³.

4.2.1.b. RENDIMIENTOS INMOBILIARIOS.

En el siglo XVII nos encontramos con que la Hermandad Vieja de Ciudad Real tiene en propiedad directa o eminente un determinado número de inmuebles urbanos en su sede, cuyo origen se remonta en algunos casos a la Edad Media, por ejemplo en 1467 se adquirió una tienda en la plaza mayor¹⁵⁴; el origen dispar, su desigual valor y su individualización en las partidas contables, aconseja y permite un estudio pormenorizado de los mismos¹⁵⁵.

Su patrimonio, en 1492, alcanzaba las veintiséis propiedades entre casas, tiendas y bodegas, alquiladas o cedidas mediante censo perpetuo a diferentes individuos; en años siguientes su volumen permanecería estable, aunque no la manera de rentabilizar dichos inmuebles. La coyuntura finisecular del siglo XV, marcada por la decadencia económica y demográfica de la ciudad, dio paso, a partir del 1494, a un cierto incremento de los alquileres auspiciado por la implantación de la Real Audiencia, al albur de un parajo aumento de la demanda de una población flotante integrada por letrados y pleiteantes. Con el traslado de este polo de atracción de población y las endémicas inundaciones e la ciudad por, las rentas censales cayeron ostensiblemente y el Santo Instituto se vio privado temporalmente los arriendos urbanos. En el primer cuarto del Quinientos se advierte un predominio neto de los primeros sobre los segundos, atemperándose parcialmente las coyunturales oscilaciones de precios y demanda de la época¹⁵⁶.

El fechas posteriores, es probable que se hundiesen los precios reales del patrimonio urbano ante la galopante subida de los precios de la Monarquía y la imparable decadencia en que se hayaba sumida la ciudad.

A. Réditos censales sobre viviendas.

Procedentes de compras, embargos o trueques, el cabildo hermandino se fue haciendo con una serie de casas dentro del casco urbano de Ciudad Real, sobre las que mantendrá una vinculación censal, y cuyos ingresos suponen un aporte complementario a su hacienda.

En los siglos XVII y XVIII, los inmuebles sobre los que penden cargas censales, cobrados todos los años por San Juan, son un pequeño solar en la calle Ciruela, junto al pozo de agua dulce¹⁵⁷, donde a partir de 1760 se levanta una casa de reducidas dimensiones; la vivienda colindante con el mesón de Caballeros, en la calle de igual nombre¹⁵⁸; la ubicada en la "callejuela que baja al hospital del señor San Juan de Dios y la puerta de la calle sale a la de -la- estacion que ba al convento del señor San Francisco"¹⁵⁹; otra en la calle que sube de la plaza del Pilar al convento de San Francisco; y una quinta, cuya falta de datos concretos nos impide situarla en el plano urbano ciudarrealeño, pero de la que nos consta que mediado el Setecientos se desvincula definitivamente de la Santa Hermandad¹⁶⁰.

Su cabildo asume el coste de sus reparaciones estructurales o de determinados adecentamientos, llegando a fórmulas transaccionales para salvaguardar sus intereses y el de sus inquilinos. A fines de 1623, ante el cabildo hermandino comparecen sus diputados, Rodrigo de Fúnez y Antonio de la Cueva, quienes habían inspeccionado la casa que había poseído por censo perpetuo el carpintero Fernando de Herrera, negándose su sucesor a realizar las debidas mejoras sin que se rebajasen los réditos cargados sobre la propiedad; aceptada ésta por

la corporación apícola al hacerse cargo de la situación, fueron convocados Juan Fajardo y su esposa para hacer escritura de censo, hipotecando para ello su actual casa de morada en la calle de la Higuera, lindera con la de Juan de Cuéllar¹⁶¹.

Las cantidades percibidas por este concepto son puramente simbólicas, anquilosándose su monto real por ser cargas perpetuas, inalterables y a menudo simplemente incobrables por la desaparición de las escrituras censales o la insolvencia de sus inquilinos. Dada la notable antigüedad de algunas de sus cargas, y los avatares calamitosos de la ciudad hacían inevitable el deterioro de estas cargas patrimoniales, ignorándose el tipo de imposición en cada caso, con las consiguientes implicaciones legales derivadas de ello¹⁶², y la negativa de algunos de sus poseedores de satisfacer los réditos exigidos desde tiempo inmemorial¹⁶³.

Quiénes asumen estos censos suelen ser vecinos de la capital manchega, normalmente menestrales, labradores, sus viudas y sucesores, aunque también aparecen consignados dependientes del Santo Tribunal, como forma de retribuir unos derechos de otra manera difícilmente asumibles, como puede ser la casa que disfruta el abogado manchego Gabriel Toral entre 1688-1692, contigua al mesón de Caballeros y que a su muerte sus herederos cedieron a instancias de la Hermandad al ejecutor hermandino Juan Sastre a principios del Setecientos, y que luego disfrutaron sus legítimos sucesores¹⁶⁴.

Las dificultades en el cobro puntual de estas cargas el día de San Juan -el 24 de junio-, para lo que a principios del Seiscientos se utilizaban los servicios de un cuadrillero¹⁶⁵, son crecientes conforme avanza el tiempo, aunque por motivos muy diferentes.

A principios del siglo XVII, la expulsión de la comunidad morisca que aún permanecía en la ciudad, provoca el aumento inmoderado de la oferta inmobiliaria, lo que unido a la decadencia de Ciudad Real, repercutiría sin duda en el menoscabo de las rentas patrimoniales locales; a este proceso no estuvo ajeno el Santo Instituto, ya que el cinco de marzo de 1611 se hacía entrega al escribano Juan de Chabes, comisionado del licenciado Cuevas para controlar las haciendas de los desterrados, los testimonios certificados de los censos pertenecientes a los moriscos Ambrosio de Castilla y Agustín de Baena¹⁶⁶.

En el ejercicio contable de 1637-1638 dejan de percibirse los réditos devengados por las casas habitadas por Juan Maldonado y los herederos del maestro albañil Cristóbal López, al quedar muy dañadas por las continuas inundaciones de la ciudad. Tres años después permanecían impagados los intereses censales de tres casas, algunos de ellos desde tiempo atrás¹⁶⁷. En 1642, la situación se agrava aún más, tal vez a morir sus poseedores víctima de alguna epidemia "y no saber a quien cobrarlos"¹⁶⁸. En 1684 las cargas incobradas ascendían a cerca de ciento treinta y siete reales.

Las inundaciones de 1709-1711 motivaron no tan solo el impago de todos los censos, sino incluso la contestación de algunos inquilinos a seguir sujetos a tales hipotecas. El presbítero Martín de Casasola, que hasta entonces había satisfecho regularmente los réditos debidos por Cristóbal de la Cruz, a partir de entonces ve rebajado a treinta y tres reales los cincuenta y cinco que pagaba antes, llegando a exigir en 1712 que se le mostrase la escritura del censo para saber si se trataba de los reservativos¹⁶⁹. Desde 1709 hasta 1728 permanecen sin satisfacerse a la Hermandad todas las cargas impuestas sobre las

casas, ya que la falta de escrituras impedía legalmente su cobro. Una pragmática regularía desde entonces su percepción y tipología, fijándose como reservativo el censo en cuestión¹⁷⁰.

A partir de esa fecha empieza a consignarse el pago de unos nímios réditos sobre un pequeño solar en la calle Pozo Dulce, que en la década de 1760 acogerá la casa de una altura y de una sola habitación, con corral. Desde 1780, y hasta fin de siglo, don Joseph Antonio Díaz paga quince reales por el solar hermandino incorporado a su casa.

B. Alquileres de casas-tienda.

Los bienes raíces de la Hermandad Vieja, que algunos autores han relacionado con la confiscación de bienes a judíos por el tribunal del Santo Oficio a fines del Cuatrocientos¹⁷¹, bien sea por los avatares coyunturales de la ciudad o de la propia asociación apícola durante la Alta Edad Moderna, lo cierto es que sufrió una merma considerable, de la que apenas ha quedado constancia documental alguna.

Aunque concluida la revuelta Comunera puede percibirse un cierto aumento de las rentas institucionales, lo que tal vez espolease una cierta recuperación patrimonial, de la que solo se conserva el contrato de adquisición de parte de un masón sobre el que la corporación ya cobraba réditos censales¹⁷². A partir de entonces la tendencia sería claramente enajenadora, tal vez en un intento último de compensar la caída de sus rentas y el mantenimiento de determinados niveles de operatividad¹⁷³.

En el periodo que nos ocupa, el Santo Tribunal mantenía aún en propiedad cinco casas-tienda en la plaza pública porticada. Se trata de unos edificios en pleno centro de la ciudad de dos alturas cuya planta baja se dedica al comercio, despachándose en el habitáculo que de al exterior, quedando la trastienda como almacén o bodega, y utilizándose la planta superior como vivienda del arrendatario o de sus mancebos. Los negocios que albergan estos inmuebles están vinculados a la profesión de sus inquilinos, según los casos, calderería, herrería, despacho de productos hortofrutícolas,

cerrajería y quincallería; en algunas de ellas, a partir de la década de 1770, se estableció la aduana local.

En calidad de arriendo, debían satisfacerse sus montos por San Juan o por Navidades¹⁷⁴, cediéndose en usufructo la finca urbana a comerciantes, dependientes y hermanos de la organización. En las décadas de 1650 y 1670, el cabildo recurrió a ceder en almoneda pública el arrendamiento general de todas estas tiendas, generalmente a una persona vinculada a la Hermandad, quien a su vez las podía subarrendar a terceros; este sistema puede interpretarse como una manera atípica de recompensar a un determinado individuo o como un intento por asegurarse unas mínimas rentas ante las fluctuaciones monetarias generales o demográficas locales. En fechas posteriores, los verdugos Juan Asensio y la familia Sastre, así como los alcaldes Juan y Vicente de Oreja, Gaspar Dorado y su viuda, mantuvieron durante años en usufructo algunos de dichos edificios, bien como forma de pago de sus honorarios o con la intención de acomodar en viviendas institucionales a un personal cuyo empleo aconsejaba esta medida.

En caso de impago de dichos alquileres, hecho nada inusual, raras veces se pasó de la vía de apremio para conminarles a reconsiderar su actitud, impelidos por el mayordomo o sus herederos, siendo excepcional el desalojo de sus inquilinos, prefiriéndose llegar a acuerdos transaccionales antes que agotar todas las medidas coercitivas en manos del Santo Tribunal, lo que desalentaría a futuros arrendatarios. En 1642 quedaban dos inquilinos sin satisfacer sus arriendos, siendo Pedro Martínez "Rabudo" reincidente, al estarlo adeudando desde 1638; y en 1676 se cargaban ochocientos setenta y tres reales de atrasos a Alfonso Velasco.

En septiembre de 1749 los alcaldes entrantes, sabedores que desde hacía dos meses el arquero inquiría inútilmente a los arrendatarios morosos, Joseph Díaz y Francisco García, para que pagasen sus derechos impagados desde hacía dos años, amenazándolos con confinamiento domiciliario en caso contrario. Como a principios de octubre seguían sin ser satisfechos, se dicta autos de prisión y embargo, recurriéndose a la justicia ordinaria ciudarreal para ejecutarlos, optándose porque fuesen llevados a la galera pública

"...diciendo lo que de ser su prision en las casas deste Santo Tribunal pudiera decaer el pundonor de los expresados, sus hijos y parientes y evitar la boz baja del vulgo, por lo denigrativo de los motivos porque los presos que en ella se hallan..."¹⁷⁵.

Aunque no pudieron cobrarse los atrasos por no tener bienes sobre los que proceder¹⁷⁶, dichos sujetos ni sus familias fueron vetados para acceder a otros tipos de prebendas de la corporación.

El importe de los arriendos siguieron una moderada tendencia alcista a lo largo de las Edad Moderna, particularmente perceptibles tras las reformas periódicas a las que debieron someterse. En todo caso, el monto de los rendimientos patrimoniales se depreciaron paulatinamente en valores absolutos, pese a su mesurado incremento. Ocasionalmente algunas de las tiendas quedaron sin ser alquiladas o vieron depreciarse su arriendo, con toda probabilidad por el deterioro de los inmuebles¹⁷⁷, e incluso ser destinadas eventualmente a actividades no lucrativas, a remolque de los acontecimientos¹⁷⁸.

Aunque en 1772 fueron eximidas las fincas y casa de la Santa Hermandad de la contribución real de utensilios, tal exención llegó tardíamente si lo que se pretendía era paliar el alto coste de su adecentamiento, pues desde el momento mismo de su adscripción a la fraternidad, la cesión en arriendo contemplaba contractualmente que la

entidad manchega debía asumir el costo de las mejoras y de todo tipo de reparaciones estructurales. Las composturas sufragadas por el cabildo serían tan continuas como costosas, debido a las frecuentes inundaciones que afectaban a la ciudad y a la mala calidad de los elementos constructivos empleados, por lo general madera y tierra prensada o adobe revocado con cal y arena.

La simple enumeración de los remozamientos acometidos resultaría prolija, por lo cual señalaremos a continuación únicamente los más significativos: en 1604 se adquieren tres tozas, piezas grandes de madera labrada a esquina viva para los corredores, precisándose de ocho peones para apuntalarlos, y gratificándoles con sus jornales, meriendas y vino, así como varias cargas de cal y piedra, doscientos adobes y mil tejas para recomponer el tejado¹⁷⁹; en 1612 se practican dos ventanas en una de las tiendas¹⁸⁰; en 1619 se construye en una cámara alta una chimenea en su cocina y horno¹⁸¹; vuelven a apuntalarse y repararse algunos inmuebles entre 1631-1632¹⁸²; y hacia 1637 son contratados varios peones para ayudar a desalojar el agua que había penetrado en sus aposentos bajos¹⁸³.

En 1633 se emprende un arreglo en profundidad de los propios, recomponiéndose la esquina de las tiendas de la plaza, se reponen tres pilares de piedra labrada, apuntalándose el soportal para reforzar el conjunto arquitectónico, se destejan las tiendas y se demuelen desde los cimientos, se compran postigos para la cámaras, tabicándose algunos aposentos y fortaleciendo otros, se reemplazan las puertas de sus escaleras y el umbral de madera de una de ellas que estaba quebrado, a dichas labores se aplicaron carpinteros, albañiles y herreros locales o de pueblos comarcanos, así como los portugueses Juan Francisco y Domingo Franco, elevándose el precio de los

materiales empleados y los jornales consumidos a un monto estimable, habida cuenta de la debilidad hacendística corporativa¹⁸⁴.

En 1641 ó 1642 se invirtieron mil seiscientos treinta y un maravedís en renovar techumbre y tejas de las cámaras altas¹⁸⁵. En 1643 se empiedra la tienda alquilada por Pedro de Céspedes, y poco después el albañil Alonso Franco remozará algunos de dichos habitáculos y sus escaleras de acceso¹⁸⁶. Si en 1670 eran reparados los balcones de la plaza, y en 1686 los canteros labraron una columna de piedra para el soportal de las tiendas¹⁸⁷, desde 1691 hasta 1693 se comprarán cal para los tejados, acometiéndose otras obras menores.

Seríanmente deteriorados estos inmuebles al anegarse la ciudad en 1706 las necesarias remodelaciones se demorarán durante casi una década limitándose a apuntalar sus estructuras. Por fin, en 1718, serán demolidas todas las tiendas que amenazaban ruina, levantándose de nuevo "nueva coger las aguas"¹⁸⁸. No se consignarán en las cuentas hermandadinas nuevas composuras hasta que en 1736 se encarga a Francisco de Castro el aderezo de una de las tiendas de la plaza¹⁸⁹, acometiéndose entre 1742-1743 varios arreglos en los que se invirtieron seis días¹⁹⁰, y en 1752 se practicarán diversos reparos "en los Arcos de Abajo"¹⁹¹.

A principios de 1799 se habilita como tienda parte del edificio del antiguo hospital de la Mejora, reconstruido décadas antes y que en vista de su falta de utilidad se intenta rentabilizar por el cabildo manchego¹⁹².

Los pleitos fueron mantenidos en defensa de la propiedad de dichas tiendas por parte de la Santa Hermandad, ambos dirimidos en favor de

sus intereses por parte del corregimiento de Ciudad Real durante el Seiscientos. En efecto, en las cuentas rendidas en 1638 se asientan unos reales desembolsados para el pago de lo derechos devengados por la labor del corregidor, escribano y peritaje de alarifes sobre los daños ocasionados a las cámaras hermandinas por parte del pastelero Antonio Ricardo, quien tenía su negocio colindante con los inmuebles del Santo Instituto¹⁹³; dos años después, se suscita un nuevo litigio, esta vez siendo parte interesada la cofradía de San Blas, que por mediación de su prioste esgrimía la supuesta propiedad de dicha congregación sobre parte de la tienda arrendada por Eugenio Casasola, desestimada tal por el corregidor. fueron embargadas sus rentas inmobiliarias entre 1640-1641¹⁹⁴.

C. Arrendamiento de los balcones de la plaza.

Debido a la estratégica ubicación de los inmuebles hermandinos en el centro del casco histórico de Ciudad Real, el cabildo recurrió siempre que fue posible al arriendo de un máximo de tres balcones que daban a la plaza pública, escenario de todos los acontecimientos y festejos de la ciudad. Dos de ellos se hallaban en la primera planta contigua a los corredores nuevos de la plaza y un tercer corredor en los denominados Arcos Viejos, el cual contaba con tres varas cuadradas de superficie. Invariablemente, todos serían utilizados a guisa de gallo desde donde disfrutar de las celebraciones públicas que ofrecía el ayuntamiento en señaladas efemérides. Dichos balcones fueron adornados y conservados con esmero pintándose con frescos de motivos geométricos o florales sus muros y renovándose su enrejado y trabajo de forja de los corredores.

Esta renta está estrechamente ligada al espectáculo taurino, siendo durante décadas nulos tales ingresos por los prejuicios imperantes entre los eruditos y los gobernantes de la época a dichos festejos¹⁹⁵. Durante el Seiscientos es perceptible un cierto aperturismo al respecto, legalizándose una tradición popular con profundo arraigo pero escrupulosamente regulado mediante pragmáticas y disposiciones municipales¹⁹⁶.

La primera ocasión en que tenemos constancia fehaciente del alquiler de los corredores hermandinos data de 1685, aunque veinte años antes sus derechos ya eran asignados al alcaide Francisco de Oreja. A partir de entonces, regularmente aparecen consignadas las cantidades

derogadas por su arriente temporal, generalmente uno o dos días, excepcionalmente tres como ocurre en 1707, o en ocasiones omitiéndose en el cargo al no celebrarse tales funciones lúdicas¹⁹⁷.

Persuadidas las autoridades locales de que, en vista de la inutilidad de sus ilegalidad, era preferible rentabilizarlas para engrosar las maltrechas arcas concejiles, a mediados del Setecientos prácticamente desaparece este concepto de los ingresos hermandinos, pues al encargarse de promover corridas y encierros, el ayuntamiento despoja de dichas rentas a sus antiguos poseedores, ya fuesen instituciones o particulares. Este hecho, no consignado en los documentos de la Hermandad, sí está reflejado en los de la ciudad que la alberga¹⁹⁸.

De cuagüiar rarrera, las rentas derivadas de este concepto, aunque comparativamente elevadas, nunca excedían los cien reales, con la única excepción de 1689, cuando se alcanzan los ciento setenta, cantidades que con cierta frecuencia han de ser invertidas en sus correspondientes.

Tenemos noticia de la existencia de otros balcones destinados a idéntico fin en Ciudad Real, a mediados del Setecientos, como el perteneciente a la disposición de Francisco Gómez, el "Buro", también en los Arcos Viejos de la plaza pública.

4.2.2. RENTAS EXTRAORDINARIAS.

4.2.2.a. LIQUIDACIÓN DE SUPERÁVITS.

Incluimos en esta partida los ingresos no gastados en ejercicios anteriores, los excedentes financieros de la organización. Si en el siglo XV los fieles o arqueros talaveranos debían de reintegrar de inmediato al tribunal, no ocurría así en Ciudad Real donde la devolución del saldo se dilataba incomprensiblemente durante años; este hecho hizo pensar a VILLEGAS DÍAZ en la posibilidad de que el mayordomo adquiriese perfiles financieros, al administrar capital ajeno y devolverlo sin interés, hipótesis tan verosímil como documentalmente indemostrable¹⁹⁹.

La adscripción de este cargo al tercer estado tenía una múltiple vertiente, ya que por un lado se garantizaba la correcta gestión de los fondos por ser persona interesada, se dejaba en manos acreditadas las finanzas hermandinas y se asignaba a un hermano pechero porque sobre este tipo de oficios recaían ciertos prejuicios morales católicos, aunque por otra parte se relaja parte del control, sobre los mismos, al dejarse en la práctica dichos caudales bajo custodia del arquero, del que solo se pide que presenta informe anual de los mismos y que esté pronto a costear las diligencias hermandinas que se ofreciesen.

Aunque, generalmente, los mayordomos devolverán al término de su gestión los excedentes financieros a la corporación a la que sirven,

resulta corriente que se demore en su reembolso durante meses e incluso años. Los ejemplos se suceden: en 1613 aún debía el ex-arquero Diego Martínez de Huertas más de veintinueve mil maravedís de los treinta y dos mil en que fue alcanzado durante su administración²⁰⁰; en 1667 se seguían adeudando trescientos reales del ejercicio contable cerrado cuatro años atrás²⁰¹, etc. En todo caso lo habitual es que se satisfagan los impagos a lo largo de la siguiente mayordomía, mediante un único pago.

Los montos de tales saldos se sitúan, a menudo, por su importancia cuantitativa inmediatamente detrás de las rentas pecuarias, siendo particularmente favorables los saldos en las décadas centrales del siglo XVIII.

En principio, y hasta que así se dictamine en las ordenanzas de 1792, normalmente los mayordomos no entregaban los caudales hermandinos en el arca del Tribunal, sino que los suelen custodiar en sus propias casas, asentándose esporádicamente la entrega de parte de los ingresos para ser depositados en la sede de la asociación, aunque lo más corriente es que se consigne, como en 1711, que en el millar largo de reales de saldo tras la rendición de cuentas que "por ahora quedan en poder de dicho Juan Isidro Granados -el mayordomo-, para que los señores alcaldes que entraren en este tribunal lo tengan por mas aumento de caudal."²⁰²

Tal vez se traten de superávits algunas de las partidas consignadas entre los ingresos hermandinos y de las que no se especifica su procedencia; sabemos con certeza que en 1763 en el cargo se contabilizar cinco mil reales que "quedaban en el arca", producto de anteriores saldos²⁰³.

4.2.2.5. ALMONEDA DE BIENES INCAUTADOS.

La Santa Hermandad manchega, como cualquier otro tribunal de la época, tiene plena capacidad para subastar en almoneda pública los bienes aprehendidos a sus reos y morosos para sufragar con su producto los gastos de la administración de justicia y mantenimiento de los encarcelados, o cubrir con ellos los impagos de sus inquilinos.

El mayordomo, a instancia de los alcaldes y con la aquiescencia de los regidores, ordena al pregonero público, a menudo el propio verdugo hermandino, que anuncie de viva voz un bando en los lugares más concurridos de la ciudad - la plaza pública, la puerta del Santo Tribunal, el ayuntamiento, el mercado...-, convocando a los interesados a participar en la puja en el día y hora prefijada. En el momento señalado se admiten las mejoras pertinentes y se remata el bien subastado en el mejor postor, costeándose de su importe los derechos devengados por el pregonero y los gastos de escribanía, quedando el resto para engrosar las rentas institucionales²⁰⁴.

Los beneficiarios de estas almonedas suelen ser vecinos de Ciudad Real, algunos de cuyos nombres han llegado hasta nosotros; abundan los hermanos y dependientes del Santo Tribunal que, bien sea por tener preferencia o por disponer de información privilegiada sobre el objeto licitado y su verdadero valor al haber sido previamente tasados por un perito en la materia, se hacen con ellos sin mayores problemas²⁰⁵. De esta forma, el Santo Instituto dispone de una fuente complementaria de ingresos prácticamente constante pero cuantitativamente irregular, con la que hacer frente a gastos puntuales de su funcionamiento.

Los bienes rematados son muebles e inmuebles, predominando ostensiblemente los primeros sobre los segundos. tratándose normalmente de caballerías²⁰⁶, ganados de todo tipo²⁰⁷, granos²⁰⁸, ropas²⁰⁹, joyas²¹⁰, quincallas²¹¹, aparejos²¹², y, en definitiva, todo objeto de valor susceptible de ser enajenado con garantías de beneficios para la corporación colmenera²¹³. En caso de tratarse de bienes perecederos, de cuyo depósito o con cuyo traslado se pudiese menoscabar su valor, como son cosechas sin recolectar o granos almacenados, suele arbitrarse la depositaria en una persona abonada y de confianza del tribunal, a la que se recompensaría sus desvelos en especie o en dinero; si se trata de animales, se acostumbra a dejarlos bajo custodia temporal de venteros o mesoneros; en ambos supuestos la almoneda puede tener lugar en el mismo lugar o en las proximidades donde fue confiscado, siendo su producto llevado ante el mayordomo, con libranzas de su justiprecio, valor alcanzado y gastos ocasionados en el remate.

Cuando en determinadas ocasiones, los ministros de Hermandad incautaban siembras o cosechas sin segar, el representante de la fraternidad nombraría persona abonada que se encargase de su cuidado y recogida en el momento adecuada, tras garantizar con su persona y bienes la integridad de lo encomendado. Si se trata de heredades cercanas a Ciudad Real, el propio alcalde que lleva la causa arbitra su cesión temporal; en 1634 se dieron cien reales a Santiago Delgado, depositario del secuestro para que con sus peones segase una siembra de cebada requisada a Francisco González, librándose otros ciento ochenta reales al presbítero Jerónimo de Soto por el alquiler de una yunta de mulas para trillarla²¹⁴; y casi un siglo después fueron

secuestradas once fanegas de trigo y otras tantas de cebada, siendo rematadas para el sustento de los reos pobres²¹⁵.

De manera excepcional, el Santo tribunal confiscó casas, no reiterándose con mayor asiduidad este comportamiento no tanto por respeto a unas propiedades que hubiesen desahuciado a familias enteras, como por el propio ministerio hermandino, consagrado a la represión de vagabundos, personas sin domicilio fijo o que al ser capturados en despoblado no puede averiguarse si poseen tales inmuebles. Existen, sin embargo, algunas muestras de ello: en 1685 Francisca Sánchez adquiere dos casas en Porzuna de unos reos condenados a minas²¹⁶, y durante el Seiscientos se embargó y enajenó una casa en la ciudarrealeña calle de la Higuera propiedad de un arrendatario de la asadura que deja un importante descubierto.

La Hermandad Vieja, poseedora de jurisdicción real y administradora de su justicia, siempre reclamó como propia la exención del pago de alcabala de dichas ventas a los recaudadores de dicha renta. Esta prerrogativa fiscal, contestada a principios del siglo XVII²¹⁷, no volvió a ser conculcada hasta bien entrado el Siglo de las Luces. En 1725. Pedro Fernández Laurencio, ministro superior de Berlanga-Badajoz-, solicitaba al escribano hermandino información al respecto, pues el alcabalero del viento, encargado de percibir el impuesto indirecto sobre el consumo de géneros vendidos por forasteros, se la había exigido de una cabalgadura embargada y enajenada a un rec; de inmediato se le responde desde Ciudad Real que las alhajas aprehendidas por los ministros hermandinos se consideran bienes confiscados por Su Magestad por especial privilegio recientemente refrendado²¹⁸. El problema se vuelve a suscitar en septiembre de 1760, al exigir el administrador de rentas reales de la capital manchega que

se satisficiera el catorce por ciento preceptivo del monto total de unas caballerías enajenadas a unos gitanos²¹⁹. La última referencia que poseemos al respecto data del 21 de octubre de 1787, cuando se asienta entre los gastos de dicho año el pago de alcabala de los bienes vendidos a unos presos confinados en la galera de la entidad²²⁰.

Asimismo, de los bienes aprehendidos a los reos se debe hacer frente al pago de deudas y derechos contraídos por el encartado que se encuentra bajo confinamiento. En 1695 el Santo Tribunal liquida la deuda pendiente de Juan Beas "Vellón", quedándole libres únicamente ciento cuarenta reales de las nueve fanegas de trigo incautadas de su siembra en Píoñ -Ciudad Real-; aunque se recogieron once fanegas y diez celemines debieron satisfacerse dos fanegas al pósito municipal, una fanega y cuatro celemines al diezmo eclesiástico, siete celemines y medio de pringia a la Iglesia, media fanega al cobrador de la asadura de Secuéllamos y el resto con que se gratificó al depositario don Alfonso Belmar²²¹.

Ocasionalmente, los embargos pueden ser retenidos por los ministros hermandinos, a la espera de ser reclamados por sus legítimos dueños. En 1684 permanecieron en depósito una sortija de oro con piedras preciosas en manos del abogado Gabriel del Toral, y una cruz de cristal de roca guarnecida con perlas y pendientes a juego, propiedad de los herederos de don Diego Muñoz, embargados al ladrón Juan Beas, quedan bajo custodia de don Eugenio de Almansa; en 1685 aún permanecían sin venderse quince de las veintiuna colmenas inventariadas, las que probablemente se perderían al ser un bien susceptible de extraviarse si permanecía en el yermo y por ser fácilmente transportables²²².

Aunque legalmente no podían secuestrarse, ni mucho menos enajenarse, bienes pertenecientes a reos asilados a sagrado sobre los que perdiesen pleito de inmunidad local, la práctica usual será conculcar sistemáticamente dicha disposición, procediéndose a vender sus pertenencias antes de que se interpusiese dicho recurso, para costear las diligencias judiciales y policiales llevadas a cabo²²³.

Las armas decomisadas pasan a poder del notario hermandino ante el cual pasa la causa, constituyendo prueba pericial en el pleito incoado. Al terminarse de substanciar el proceso tales armas serán inutilizadas si se trata de las tipificadas como prohibidas, para evitar que caesen en manos de individuos no cualificados para su porte, mientras que si son armas permitidas serán vendidas por el tribunal²²⁴.

La Santa Hermandad se hace cargo de reembolsar a los compradores su dinero en caso de que su adquisición fuese reclamada por su legítimo dueño o por el claro deterioro de lo enajenado²²⁵.

861: se han conservado algunos de los ingresos por este concepto, pues en el cargo del balance contable anual solo se anotaban los importes de las almonedas efectuadas en Ciudad Real y parcialmente de las practicadas en otras localidades, y siempre que su monto sobrepasase los gastos devengados en la causa criminal, quedando en el resto de los casos consignado únicamente en el expediente criminal incoado, perdiéndose la mayor parte de los justificantes acreditativos de tales enajenaciones.

4.2.2.c. PERCEPCIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS.

Las exacciones impuestas por el Santo Tribunal en forma de multas en metálico serían impuestas tempranamente, aplicadas en principio como resorte de sanción interna de la asociación, pudiendo considerarse una fórmula disciplinaria para mantener el orden y buenas relaciones entre sus integrantes.

Ya durante el Quinientos, las imposiciones monetarias exigidas, no ya a sus propios dependientes, sino a los encartados por su tribunal, no pasará de ser simbólicas, al sujetarles al pago de unas monedas con destino al aceite de la lámpara del oratorio del Espíritu Santo y otros fines piadosos²²⁶ manteniéndose parcialmente hasta las primeras décadas del Seiscientos²²⁷, desapareciendo luego cualquier referencia documentada a tales condenaciones pías.

Por lo que respecta a las multas arbitradas a sus miembros, aunque presuntamente mantenidas a lo largo de los siglos, no encontramos pruebas contables fidedignas, al ser muy esporádico su reflejo contable. En 1634 sabemos que era multado con cien maravedís el ciudarraleño Pedro Toral, por la queja de su convecino Juan Martínez, inquilino de una de las viviendas adscritas a la corporación apícola; y en 1737 sería condenado al pago de treinta ducados el juez comisario Miguel Caramillas, vecino de Saceruela -Ciudad Real-, por una infracción que desconocemos²²⁸.

Carácter muy distinto tienen las penas de Cámara exigidas por los magistrados hermandinos, condenaciones accesorias destinadas por regla general al fisco real. Durante el Quinientos hubo una encendida

controversia en las Cortes de Castilla sobre dichas penas, solicitándose en 1532 que, para evitar los abusos de los alcaldes se suprimiesen los incentivos que se les pagaban por entonces "porque por muy livianas causas llevan mil maravedis de premio y muchas vezes a personas muy pobres", aunque dicha pretensión no halló eco ante el Emperador²²⁹.

Hasta bien entrado el siglo XVI las penas de Cámara no serían adjudicadas a la entidad ciudarrealeña en aras del mantenimiento de su hospital, pues en 1598 aún se libraban dos reales a Miguel Rodríguez Montemayor por un traslado de dicha provisión²³⁰. Sin duda esta concesión propiciaba la imposición de este tipo de condenaciones; así, en 1575 se condenaba a destierro a Pedro Redondo y en mil maravedís de pena de Cámara "en su nombre para gastos del hospital conforme a la costumbre inmemorial y prohibición que para ello ai"²³¹. A partir de entonces no se especificará el destino de dichas condenaciones, tal vez al desvirtuarse la labor asistencial del hospital, oscilando desde ahora entre quinientos a treinta mil maravedís²³².

Para evitar los desarreglos que pudieran derivarse de la aplicación indiscriminada de dichas sanciones, desde los Reales Consejos se nombraban tesoreros de alcabalas, tercias y rentas reales con el encargo de receptor, entre otras labores, las penas de Cámara arbitradas por las justicias reales, ya fuesen ordinarias o especiales; desde 1574 ostenta dicho cargo en Ciudad Real Juan de Vilches Cabeza de Vaca, asignándole en salario anual acorde al cargo y con calidad de enajenable²³³, en 1592 recayó en Luis Rodríguez de la Zarza, sucediéndole en el empleo Diego García de Salazar, y a este Juan Valero en 1621, con idénticas atribuciones²³⁴.

De este periodo datan dos condenaciones de Cámara peculiares por su destino, al ser aplicadas a la reparación de los propios hermandinos. En las cuentas rendidas en 1639 se consigna la entrega de tres mil maravedís por parte de los ciudarrealeños Juan y Pedro González, padre e hijo, al verificarse la querella presentada ante el Santo Tribunal por su paisano Francisco Martínez de Luna, al comprobarse que se había quemado el chozo donde se guarneecía para cuidar su rebaño caprino con el pretexto de hacerse con los materiales para el adecentamiento de propios hermandinos²³⁵; y en 1638 Antón Martín hubo de depositar mil maravedís para reparar la tienda de la plaza adscrita a la Santa Hermandad y arrendada a Juan Martínez²³⁶.

Poco tiempo debió de gozar la corporación machega de la administración íntegra de las condenaciones de Cámara, ya que coincidiendo la decadencia de la labor asistencial del tribunal de la Megra con los graves problemas que acuciaban a la Monarquía durante el reinado de Felipe IV, el Supremo Consejo reasumió esta fuente de ingresos, y así sabemos que en 1641 se reclamaba esta regalía a la Hermandad Vieja a través del recientemente nombrado corregidor ciudarrealeño don Antonio Bermúdez Torreluengo²³⁷. A partir de entonces, estas penas dejarían de tener la incidencia disuasoria que había tenido por decisión del Santo Tribunal en épocas pasadas²³⁸, apareciendo luego de forma esporádica y únicamente consignadas en los expedientes criminales instruidos, como los doscientos cincuenta reales exigidos a dos pastores de Consuegra -Toledo-, aplicados al fisco regio por el estupro de una doncella²³⁹.

Mayor incidencia cuantitativa tuvieron la satisfacción de gastos y costas judiciales por parte de los encartados, a los que invariablemente estarían sujetos, fuesen o no culpables, siempre que

el tribunal creyese factible su cobro, siendo los falsos denunciadores o perjuros quienes se harían cargo de ellos. El auto de embargo que indefectiblemente acompaña al mandamiento de prisión, intenta garantizar el reintegro de los bienes a sus legítimos dueños, a la vez que sufragar las costas provocadas por el encarcelamiento y por el resto de las instrucciones sumariales. Como la Hermandad corría con todos los dispendios ocasionados por los reos pobres, serían éstas sistemáticamente cargados sobre los encausados siempre que era factible, aunque las cantidades ingresadas por este concepto sean notablemente inferiores a los gastos policiales y judiciales asumidos por la entidad manchega.

A fines del quinientos, era costumbre condenar a los culpables al pago de los salarios devengados por sus captores y escribanos que concurrían a su aprehensión, estimándose su monto por jornales, pero luego aumentaron las cantidades exigidas como respuesta a la mayor duración de los procesos y a la complicación del procedimiento penal al que se hallan sujetos²⁴⁰. Cuando se creyó conveniente, los registrados hermandinos dieron facilidades a los infractores para la satisfacción de las costas, como cuando se consensúa con Francisco Lorenzo, afincado en San Esteban del Puerto, el pago en dos plazos de los doscientos reales que adeudaba por tal concepto en 1642²⁴¹.

4.2.2.d. INGRESOS MENORES Y PARTIDAS SIN ESPECIFICAR.

En este apartado incluimos percepciones atípicas de diversa condición, y algunas de ellas de difícil tipificación.

Eventualmente se registran entre los ingresos salarios que, voluntariamente o forzados por las circunstancias, algunos oficiales hermandinos renuncian temporal o definitivamente a parte o al total de su nómina anual en favor del Santo Instituto²⁴². En 1641, el alcaide queda sin percibir ciento ochenta reales de vellón²⁴³; en 1676 quedaba ver satisfechos sus asignados anuales como dependientes hermandinos, entre cuadrilleros y oficiales²⁴⁴; en 1687 los situados renunciados alcanzaban los cuatrocientos diez reales²⁴⁵, no volviéndose a registrar a partir de entonces tales actitudes, hasta que en 1700 el salario de un oficial se queda sin retribuir.

De manera ocasional la Santa Hermandad es acreedora de rentas no inmobiliarias, como cuando en 1644 percibe más de trescientos reales del censo sobre un pósito²⁴⁶. En la década de 1730, el tribunal dejará de percibir los mil doscientos reales impuestos a censo sobre una de sus notarías, incobrable por la pérdida de sus escrituras.

Otros ingresos menores proceden de diligencias judiciales y preventivas realizadas por cuenta ajena, como la remisión de un reo a la cárcel de Casa y Corte en 1690²⁴⁷, la ejecución de torturas sobre un encausado por la justicia de Puertollano en 1761, o el acostamiento de una salida para controlar la delincuencia en despoblado un año después²⁴⁸.

Adecuada la sede de la organización manchega en repetidas ocasiones, parte de lo renovado es sufragado vendiendo los antiguos elementos constructivos remozados, como cuando en 1764 se adquiere por un particular la puerta principal de la casa-cárcel²⁴⁹. En 1692 una ventana nueva para el citado inmueble fue aportado graciosamente por don Luis Pérez Boracho²⁵⁰.

No faltan las partidas en el cargo en las cuales no se especifica su origen ni ningún otro dato explicativo que lo esclareciese, por lo que nos inclinamos a conjeturar que pudiesen tratarse de cantidades extraídas y luego devueltas a los caudales hermandinos, percepciones de las cuales se habían extraviado sus libranzas correspondientes e incluso errores contables. Sabemos que setenta reales fueron asentados en 1670 sin constar su origen ni destino, otros dieciocho se acreditan en 1691, entre 1761-1762 alcanzan excepcionalmente los trece mil trescientos sesenta y seis reales, para reducirse a dos mil setecientos veinticinco en 1774²⁵¹.

4.2. LOS GASTOS.

4.3.1. NÓMINAS.

La remuneración anual de los alcaides, oficiales y demás miembros del Santo Tribunal se denomina "situado", representando una partida fija de gastos, generalmente pagados con puntualidad por la entidad. Los caudales corporativos sufragaban los emolumentos del capellán, alcaide, sotalcaide, ejecutor, letrados, mayordomo, escribanos, personal sanitario, portero, etc. Alcaldes, regidores y llavero mayor, que hasta bien entrado el Seiscientos habían percibido haberes con la misma cadencia que el resto de los oficiales manchegos, carecerán de estos derechos fijos en fechas posteriores por alguna razón que se nos escapa, pero que tal vez pudiese relacionarse con la política económicamente restrictiva a la que debe atenerse tras el descenso de sus rentas a mediados de la centuria.

En el siglo XVIII, este sistema de remuneración será engrosado con una tarifa de derechos arbitrarios asignados al tiempo de abandonar la ciudad para realizar las diligencias en nombre del Santo Instituto. Su monto oscilaría según la calidad profesional del oficial; así en 1792 se consignaban las siguientes cantidades diarias: a alcaldes y oficiales por el estado hidalgo treinta reales para su manutención y coste de criados y caballerías, al cuadrillero mayor y notario veintidós reales, y a los cuadrilleros doce reales. Tales emolumentos, aunque modestos, podían ser interpretados como un agravio por los subalternos no adscritos a la Hermandad, que recibían quince reales

por su concurrencia junto a ellos, aunque sabemos que dicha tarifa no siempre se respetaría²⁵².

Las rentas hermandinas son suficientes para sufragar estos gastos estructurales²⁵³, siendo incrementadas eventualmente so pretexto de gratificaciones, ayudas de costa u otros subterfugios, o bien rebajados e incluso retrasados en determinadas circunstancias. Los pagos pueden hacerse al tiempo de finalizar su empleo, semestral o cuatrimestralmente. Curiosamente, algunos oficiales renunciaron a parte o al total de su nómina, aparentemente de motu proprio pero tal vez impelidos por las dificultades materiales para su percepción; este es el caso del fiscal don Antonio de Porras, quien en 1795 desiste de cobrar lo adeudado por su labor del año precedente, once ducados, cuyo monto "le cedió de su voluntad a veneficio del tribunal"²⁵⁴.

El importe de esta partida seguirá una tendencia ascendente, salvo durante la segunda mitad del Seiscientos, en todo caso alcanzando unos niveles inferiores a los del resto de las entidades apícolas y que por sí sola no representará una carga particularmente onerosa para el funcionamiento de la organización ciudarraleña.

4.3.2. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DILIGENCIAS POLICIALES.

Los desembolsos ocasionados por la asunción de tales comisiones constituyen, sin duda, el dispendio más elevado que ha de afrontar la Santa Hermandad. Las partidas englobadas dentro de este grupo son heterogéneas: honorarios y derechos de comisarios, cuadrilleros y oficiales del cabildo, pagos al personal no adscrito orgánicamente y que prestan eventuales auxilios a la entidad²⁵⁵; paisanos o militares que por cuenta del Santo Instituto realizan salidas preventivas²⁵⁶, rondas²⁵⁷, custodia y escolta de reos²⁵⁸, reconocimiento de ferias y romerías²⁵⁹; detención de malhechores y averiguación de sus excesos; derechos judiciales, como salarios de letrados, propios que ratifican testigos, reciben o remiten autos y otras diligencias sumariales; quienes llevan las sentencias a consulta a las instancias superiores de justicia regia y defienden ante chancillerías o consejos el fuero privativo hermandino; gastos de escribanías y correos²⁶⁰; satisfacción de multas impuestas a sus representantes desde las cortes superiores²⁶¹; mantenimiento de las necesidades materiales de los reos, conducción por tránsito a los destinos donde purgarían sus penas²⁶², aplicación de tormentos y ejecuciones aflictivas, etc.

Como no podía ser menos, dichas sumas oscilaban dependiendo estrechamente de dos variables: la actividad desplegada por el Santo Tribunal, notablemente acelerada tras la guerra de Sucesión -con unos mínimos en la coyuntura finisecular de los siglos XVII y XVIII y unos máximos en las décadas centrales del Setecientos-; y el grado de conflictividad de sus actuaciones, íntimamente ligada a la anterior.

4.3.3. MANTENIMIENTO Y ADECENTAMIENTO DE PROPIOS.

El patrimonio inmobiliario urbano de la organización manchega, integrado por las tiendas de la plaza pública, el hospital de la Mejora y la propia sede hermandina, hubo de ser periódicamente reparado para mantener unos mínimos de decencia, y aún acometerse su reconstrucción total o parcial en diversas ocasiones, debiendo asimismo hacerse cargo del ornato de la sala capitular y de la capilla del Espíritu Santo, los aposentos principales donde se desenvuelve su vida corporativa.

Si bien la compostura puntual de determinados elementos estructurales de dichos edificios hubo de ser prácticamente constante, ante el rápido deterioro a los que se ven sometidos, tres fueron las principales causas de su menoscabo: dos ellas derivadas del propio funcionamiento del tribunal, a saber, lo mermado de sus rentas a lo largo de casi todo el siglo XVII y principios del XVIII, y su propio ministerio, que requería el mantenimiento de una cárcel que debe cumplir unos mínimos de seguridad, así como el acondicionamiento del lugar de ejecución en Peralvillo, a lo que se sumaba la conservación del edificio del hospital hermandino, no ya para su rehabilitación asistencial sino llanamente para que no se hundiese, con los consiguientes perjuicios a terceros; el tercer elemento eran las frecuentes inundaciones que sufrirá la ciudad, siendo particularmente perniciosas para el conjunto arquitectónico las acaecidas a principios de los siglos XVI y XVIII.

En líneas generales, puede decirse que durante la mayor parte del Seiscientos y albores del Setecientos, las edificaciones pertenecientes a la corporación manchega permanecerán en un estado lamentable: las crecidas de las lagunas que rodean la ciudad provocan reiteradas anegaciones en su parte baja, viéndose notablemente afectadas el primer nivel de las tiendas; el hospital de la Mejora, con poco más de un siglo a sus espaldas, en la década de 1620 estaba semiderruido, permaneciendo en este estado durante decenios; mientras que el descenso apreciable de las penas capitales hace que esté muy descuidado el tradicional lugar de ejecuciones de la Hermandad Vieja de Ciudad Real.

Condicionado en todo instante por su liquidez, el cabildo ciudarrrealense siempre que pudo intentó subsanar las carencias estructurales de sus pertenencias, ya que de ello se derivaba su mayor rentabilización económica e incidiría en el concepto que sus vecinos tuviesen de la antano poderosa asociación de colmeneros. Siempre que las reparaciones y compras se considerasen perentorias serían sufragadas de los caudales institucionales la compostura o renovación de puertas, cerraduras, prisiones de los calabozos, etc, recurriéndose al servicio de herreros y carpinteros para apuntalar los ajados corredores donde se ubican las tiendas o reforzar la seguridad de macorras y viviendas.

Durante el Setecientos, principalmente, el desahogo financiero permitió la renovación de algunos inmuebles y la asunción de unos adecentamiento que no por imperiosos habían sido desatendidos con anterioridad. Si en 1695-1686 se procedió a obrar en profundidad en el hospital de la Mejora, y en 1692 se compró una ventana de forja para el balcón de los Arcos Viejos, colocando su reja y unas bolas para su

ornato y pintura de su fachada por un pintor local por casi mil trescientos reales de vellón; habría que esperarse al periodo 1718-1720 para que se levantasen desde sus cimientos las casas-tienda de la plaza pública, y hasta 1742-1744 no se remodeló el hospital, haciéndose luego lo propio con la sede hermandina.

4.3.4. LIQUIDACION DE DEFICITS.

Generalmente corresponde a los arqueros adelantar de su peculio el dinero que las rentas hermandinas eran insuficientes de cubrir, viéndose satisfechos en su devolución durante el siguiente balance contable, bien abonandosele del primer plazo del arrendamiento de la asadura o reembolsandosele de la hacienda personal de los alcaldes o de los mayordomos entrantes.

De manera ocasional, debido a la coyuntural falta de liquidez de la organización manchega, tales pagos se demorarian más tiempo del acostumbrado, acumulándose determinados débitos a ex-administradores hermandinos: en 1635-1636 se libraban de los fondos institucionales cuatrocientos reales a un antiguo mayordomo, y otros veinticinco mil maravedís a Gregorio de Córdoba²⁶³; y hasta 1667 no se devuelven al arquero que desempeñó su oficio 1662-1663 los trescientos reales que se le adelantaban.

A fines del siglo XVIII, dada la magnitud de algunos déficits, la Hermandad solo responderá de algunos saldos negativos sufragándolos parcialmente, como ocurrió en 1799, cuando sólo consta que se suplieron cuatro mil reales de los más de siete mil ciento cuarenta y dos del balance anterior.

4.3.5. CARGAS CENSALES.

Durante la Edad Moderna consta documentalmente la imposición de ciertas cargas hipotecarias sobre la hacienda de la Hermandad Vieja, probablemente de los denominados "al quitar" o redimibles. En razón de los cuales, la corporación se comprometía a pagar anualmente a los titulares del censo unos réditos determinados en función del capital invertido.

En la década de 1620 tenemos noticias de tales imposiciones censales cuando el soldado miguelaturreño Francisco García de Roque "Cordobés", enriquecido en Indias, funde por entonces una disposición de este tipo con un capital de doscientos ducados de principal, que devengaban diez ducados anuales. En 1628 se hacía cargo de su cobro Diego de Cárcamo, para luego adquirir una cadencia bianual y ser sus patronos los ciudarrealeños Juan Martínez y Damián García. En 1670 Tomás de Huertos era el patrono de esta obra pía²⁶⁴.

Hacia 1675 ó 1676 la Hermandad manchega reconocía contraer un censo de dos mil doscientos doce reales de capital contra sus rentas, comprometiéndose a pagar todos los años mil ochocientos reales a los también ciudarrealeños Alfonso Martín Valdecabra y otros ochocientos a Juan Lechuga²⁶⁵.

Durante décadas desaparece cualquier referencia al respecto, hasta que en septiembre de 1728 se hallan algunas de estas escrituras, en concreto la que rentaba ochocientos reales anuales, por entonces en posesión de Diego García de Huertos, siendo redimido íntegramente ante

el notario eclesiástico de la audiencia eclesiástica de Ciudad Real y del Campo de Calatrava²⁶⁶.

En 1750 se consigna la libranza de tres mil reales dados a censo por los alcaldes hermandinos al hermano por el estado de los caballeros don Francisco Rodríguez Ledesma. Ya en el último tercio del Setecientos, el día de Santiago cumplirían los dos censos bianuales impuestos a favor de la iglesia de Nuestra Señora del Prado contra las notarías enajenadas del Santo Tribunal, servidas por entonces por Eugenio Peñuela y Joseph Cordobés; sus principales eran de mil setecientos y cuatrocientos reales, respectivamente, devegándose cada dos años ciento veintiséis reales de créditos cargados contra los propios de la organización manchega²⁶⁷.

4.3.6. CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y GASTOS DE CULTO.

El Santo Tribunal asumirá desde su periodo fundacional, prácticamente todos los desembolsos motivados por las funciones religiosas celebrados primero en el monasterio de San Francisco y durante las llegas periódicas, ya en la Edad Moderna en su propia sede capitular y en la inmediata iglesia de San Pedro, a la que se volvería a sumar unas funciones en el citado monasterio en pleno siglo XVIII.

Desde el Quinientos, el cabildo general en pleno asiste anualmente los días 17 y 18 de diciembre en la parroquia de San Pedro a un responso con vísperas y misa cantada con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la C, patrona del Santo Instituto, las almas de lo Reyes Católicos y la de sus ministros muertos en defensa de su jurisdicción. Los dispendios ocasionados por entonces incluía la confección de un túmulo funerario, costeándose sus materiales y mano de obra empleada; gratificándose a cantores y organista; pagándose derechos de sacristanes y capellanes; otorgándose honorarios a los músicos; dándose limosnas por los sermones del predicador; distribuyéndose las velas para efectuar la procesión dentro del templo; pagándose el vino consagrado y la cera; obsequiándose con propinas a los ganapanes que transportaban los escaños donde se acomodarían los hermanos, etc.

Particularmente onerosas fueron las honras fúnebres celebradas con motivo de la muerte de la reina madre doña Margarita de Austria, en 1611, cuya solemnidad se hizo coincidir en Ciudad Real con dicha

función tradicional de la Hermandad Vieja y cuyo monto total se elevó a tres mil seiscientos ochenta y ocho reales de vellón²⁶⁸.

Vinculado desde el siglo XIV el monasterio de San Francisco a la asociación apícola manchega, por ser el lugar acostumbrado de juntas de la organización antes de construirse la definitiva sede hermandina, dicha fundación se desvincula por entonces de los colmeneros ciudarreleños, entrando en un periodo de decadencia parejo al que afectaba a la ciudad²⁶⁹. Avanzado del Setecientos comienza a institucionalizarse anualmente el día de la Inmaculada Concepción la celebración de risa cantada y responso en su claustro, con asistencia de todos los hermanos y de la comunidad religiosa del cenobio - en el mes de noviembre-, aplicado a los mismos fines piadosos antes mencionados²⁷⁰.

De los mismos caudales corporativos se sufragará, asimismo, el vino litúrgico, la cera labrada o blanca, según la solemnidad, de los días los divinos consagrados por los capellanes u otros religiosos en el oratorio del Espíritu Santo todos los días feriados y fiestas de guardar a los reos, concurriendo los carceleros y sus familias. También se oficia risa rezada el día de las elecciones anuales, previo a la renovación de los oficios, costeándose la adquisición de objetos litúrgicos, el lavado periódico de las ropas y limpieza de dichos objetos de culto, adecentamiento y ornato de la capilla, asistencia de los condenados a la pena capital, confesiones de los presos, las misas de aniversario y el entierro de los reos hermandinos muertos en sus cárceles, así como el de las víctimas mortales no identificadas y sobre las cuales incoa procedimiento criminal.

4.3.7. LIBRANZAS A VERGONZANTES Y SOCORROS A DEPENDIENTES 271.

Las vísperas de Navidad, días antes de las solemnidades con motivo del día de Nuestra Señora de la O, la entidad manchega distribuye dinero entre instituciones religiosas, fundaciones pías y residentes en la ciudad necesitados de asistencia material ante su manifiesta penuria económica. Dicha prodigalidad era cuidadosamente elegida en sus fechas y beneficiarios; en 1616, por ejemplo, tuvo lugar días antes de la festividad de la ciudad, Santa María del Prado.

El mayordomo, auxiliado de personal adscrito a la Hermandad, y tal vez previa relación de los pobres existentes proporcionada por los referidos, entregará en su propio domicilio o centros de acogida dichos socorros en metálico a los pobres vergonzantes, no faltando las repartidas entre mendigos callejeros.

En el resto de los años, estas pequeñas aportaciones, que suelen oscilar de uno a ocho reales por socorrido, tienen como principales beneficiarios a los vergonzantes, mayoritariamente mujeres -doncellas, monjas, beatas, viudas, huérfanas-, ancianos, discapacitados físicos o mentales, familiares a su cargo, ermitaños, sacristanes, recogidos en hospitales, hidalgos empobrecidos, criados, dependientes desfavorecidos del Santo Tribunal o sus viudas, pobres de solemnidad, menestrales marginados, etc. Hasta la década de 1690 aparecen regularmente consignados tales libranzas en las cuentas rendidas anualmente, alcanzando sus momentos más bajos entre 1620-1625 y 1680-1689, precisamente cuando la ciudad sufre sus peores momentos, tras la expulsión de los moriscos y por las epidemias de tercianas que

la amban; en 1638 se llegan a repartir novecientos reales, mientras que en el 1600 se distribuían ciento treinta y dos, y en 1691 no superaban los sesenta y cinco.

A partir del siglo XVIII estos dispendios tomaron un cariz diferente, al destinarse la mayor parte de ellos a sus propios oficiales en activo, destinándose probablemente los despojos de los carneros con que se gratifica por Navidad a los hermanos del tribunal a pobres y viudas.

Partidas menores, atípicas, serían destinadas a las ans de cría de huérfanos, con toda seguridad pertenecientes a personas de algún modo vinculadas al Santo Instituto; obsequiándose con algunos reales a ciertos cuadrilleros, alcaides, verdugos, porteros o pregoneros, en definitiva a los ministros más desfavorecidos de entre sus dependientes. No se olvidaron del debido auxilio de los presos pobres en sus familias, en prestatio por el confinamiento del cabeza de familia, desembolsándose cantidades que en ningún momento pasan de ser tataras: o, en el mejor de los casos paliativas²⁷².

4.3.1. DISPENSOS DURANTE LAS ELECCIONES.

Cuatro conceptos conforman esta partida: los gastos en los elementos imprescindibles en el acto, las propinas con las que se pretende estimular la concurrencia al cabildo o compensar posibles molestias, los derechos de escribanía legítimamente devengados y la colación de suela hacerse tras el cabildo.

En efecto, anualmente en el segundo domingo de septiembre suele tener lugar la acostumbrada renovación de los cargos hermandinos, el reverendo es encargado de proveer a los reunidos en la sala capitular los cántaros necesarios²⁷³, el papel sellado para cumplimentar las cédulas de nombramientos, e incluso la compra de velas o de carbón cuando lo aconsejaba la desfavorable climatología, cuyo monto nunca supera los veinte reales de vellón.

Las gratificaciones con que tradicionalmente eran recompensados por su celo los diputados electos que supervisaban el sorteo, a principios del Seiscientos, eran de dos ducados. Durante gran parte de la centuria dejan de asentarse tales dispendios, tal vez con motivo de la precariedad financiera del tribunal²⁷⁴; ya durante el Setecientos las propinas se extienden de los diputados al resto de los oficiales hermandinos salientes, en una cuantía que suponen treinta reales por persona.

Los derechos de escribanía por el trabajo de los amanuenses, cumplimentando nombres y empleos en las cédulas, así como el de los notarios que registran en el libro de elecciones las incidencias de su

celebración, percibieron entre dos y tres ducados durante los siglos que nos ocupan.

Era tradicional que tras los actos realizados se celebrase un ágape consistente en limonada y pasteles a los oficiales, o un almuerzo a los diputados al que en ocasiones asistían los alcaldes, y cuyo coste variaba entre ciento veinticinco a doscientos reales en los primeros años del Seiscientos, reduciéndose en 1515-1726 entre treinta y poco más de cincuenta reales, para triplicarse tras esa fecha hasta que desde 1776 parece que se deja de realizar o al menos de reflejar en las cuentas, ante el reforzamiento de su fiscalización por parte del Supremo Consejo. Anecdóticamente, en 1739 y 1762 se consigna la compra de media arroba de vino para los presos en dicho día, probablemente de inferior calidad que el del convite efectuado en la sala capitular.

4.3.9. GASTOS DERIVADOS DE LA PERCEPCIÓN DE LA ASADURA.

Tres elementos componen esta partida de gastos: los desembolsos ocasionados por el arrendamiento de este arbitrio pecuario; la remuneración del personal encargado de su recaudación y custodia en el supuesto de ser administrado; y el coste del continuo pleitear en su defensa, ante su contestación por parte de las instituciones e individuos sujetos a su contribución.

Los derechos devengados por el pregonero y el escribano que asisten a los sucesivos pregones son insignificantes, al establecerse en dos ducados durante decenios. Rubricado el contrato entre las partes, era práctica usual ofrecer un refresco a la concurrencia presente, hermanos y licitantes, aunque los caudales librados por este acontecimiento serán inferiores a los dispensados durante las elecciones, alcanzado su cénit en 1742, cuando su monto llega de forma excepcional a los cuatrocientos ochenta reales de vellón, al regalarsse una libra de dulces a cada hermano²⁷⁵.

Asumida total o parcialmente la administración de su renta por el mayordomo hermandino, era preceptivo asignar un cuarto de lo recaudado a los cobradores como honorarios por su labor, pagándose jornales a pastores por la conducción de las reses asaduradas al valle de Alcudia o a la aldea de la Poblachuela en depósito hasta su venta en Ciudad real, lo que a la postre puede reducir a la mitad los ingresos brutos por tal concepto.

Mayer importancia y continuidad adquirieron los costosos pleitos suscitados por su controvertida percepción, y aunque a menudo se falla a favor de los intereses hermandinos, el pago de los letrados ante la Corte, chancillerías u otras instancias del Reino adquiere a menudo magnitudes difíciles de asumir por las fluctuantes rentas de la entidad, como los novecientos ducados en que se concierta la concordia con las autoridades del Campo de Calatrava en 1604, constituyendo en todo caso una gravosa carga para las apuradas rentas de la Hermandad Vieja de Ciudad Real.

4.3.10. AGUINALDOS NAVIDEÑOS.

Era tradicional que el Santo Tribunal, con motivo de la fiesta pascual de las Navidades, obsequiara a sus miembros y a las viudas de los hermanos difuntos con un regalo en especie de variable cuantía, de acuerdo a la liquidez circunstancial de la corporación, pero que reproducía el ordenamiento jerárquico orgánico.

Esta costumbre, que tiene su correspondencia en las entidades homónimas de Toledo y Talavera²⁷⁶, en Ciudad Real se concretaba en los albores del Siglo XVIII en el reparto de perdices a todos los hermanos, eventualmente incorporando obsequios en metálico²⁷⁷, hogazas de pan, conejos, etc. Reconvenida esta práctica por el corregimiento local, al establecerse en los Capítulos de Maldonado que allí se repartiesen carneros por tal concepto, desde comienzos del siglo XVIII al menos, comienza a conculcarse este mandato, para luego restringirse los beneficiados a los alcaldes y demás oficiales hermandinos en activo, distribuyéndose de nueve a quince carneros, con el consiguiente aumento de los dispendios, pues mientras la cara menor repartida no suponía más que un monto que oscila entre ciento cincuenta y ocho a cuatrocientos cincuenta y cinco reales, la adquisición de carneros situaba los gastos entre ciento veintiséis a seiscientos setenta y cuatro reales, ya avanzada la centuria.

Entre 1700 y 1777 parece estabilizarse en catorce carneros los repartidos, incorporándose ahora algunos hermanos y dándose los despojos a los necesitados de la ciudad, oscilado su importe al albur de los precios pecuarios vigentes, y persistiendo la costumbre de

realizar obsequios suplementarios como perdices, panes y tortas de trigo candéal. Se llegaron a distribuir dieciocho carneros, rebasándose entre 1764-1777 ampliamente los mil reales consumidos a tal efecto²⁷⁸.

Desde entonces no hay referencia alguna a dichos dispendios, desaparecidos tal vez desde la década de 1780 al confluir el reforzamiento de los resortes de control de la administración central sobre la entidad, con la caída de los superávits y un cambio forzado de actitud de algunos hermanos hacia estos excesos financieros.

En efecto, la desnaturalización de los aguinaldos mediado el Setecientos, multiplicándose gastos injustificados motivó el descontento de determinados sectores de la corporación. Paradigma de esta tendencia a compensar la pérdida de las nóminas anuales mediante el desproporcionado aumento de estas percepciones atípicas sería la Hermandad de Talavera, que ya antes de verse despojada de la mayor parte de sus rentas por el Consejo de Castilla había apostado decididamente por este subterfugio²⁷⁹, a fines del Siglo de las Luces dentro de su seno se elevaba la voz autorizada de alguno de sus miembros más clarividentes contra la indolencia de unos oficiales que solo esperaban recibir las gratificaciones establecidas, dilapidando sus escasas rentas; en 1790 el ex-alcalde talaverano, abogado de la chancillería vallisoletana y rector de la Sociedad Económica de Amigos del País local, elevaba un memorial a los Reales Consejos donde manifestaba claramente su postura contraria a estos obsequios, alegando ser esta práctica "repugnante a las leyes y honor de la Santa Hermandad Vieja de Talavera el de sus celosos miembros y opuesto a lo que practican las de Toledo y Ciudad Real."²⁸⁰, de lo que se induciría

dicha desaparición en la entidad manchega a estas alturas del siglo XVIII.

4.3.11. DESEMPEÑOS MENORES.

Dentro de este heterogéneo conjunto de gastos institucionales caben citarse las siguientes partidas: gratificaciones a cazadores de osos, a semejanza de lo que se hacía con los alimañeros por parte de los concejos, -entre las cuales cabe destacar la recompensa de treinta reales al piedrabuenero Juan Cabello por la captura de dos osos en los montes de la Parrilla, del citado término municipal²⁸¹-; dinero con el que se agasajaba a los jueces de residencia de corregidores y oficios concejiles de Ciudad Real; derechos de cuentas; indemnizaciones como los cuarenta reales entregados al presbítero local Juan de Corcha por haber dañado las reses asaduradas un olivar de su propiedad en las huertas de la ciudad²⁸², o los cincuenta y dos destinados a reparar el tejado de la casa de la viuda de Juan Bernardo Céspedes, dañado por la fuga del res Juan Serrano Montero hacia 1736²⁸³; pérdidas ocasionadas por la inflación del vellón y las traumáticas medidas monetarias arbitradas desde la Corona para procurar atajarlas, como los noventa reales "que se perdió en el trueco de la plata" en 1640, llevándose por un peón mil quinientos reales de las arcas hermandinas a Toledo para resellarlos "cuando cesó el cociente de la moneda de cuartos de a tres"²⁸⁴.

Igualmente hay que constatar en este apartado los gastos de imprenta, notaría y librería, del tipo de los ocho reales que costó encuadernar el libro capitular en 1707²⁸⁵; la censuras eclesiásticas impuestas por la Mitra toledana por haber perdido el tribunal hermandino privilegios, cédulas reales y ejecutorias, lo que acontece al menos en 1604 y 1741²⁸⁶, debiéndose encargarse de su copia un

amante²⁸⁷, o los tres oficiales de pluma que copiaron las ordenanzas hermandinas, encargándose don Víctor Martínez de Ormaza de ello en 1754, percibiendo un salario de ochenta y dos reales y medio²⁸⁸.

Difícil catalogación tienen ciertas libranzas efectuadas, de elevada cuantía, y de destino o naturaleza indeterminada. Algunas de éstas pueden tal vez tratarse de comisiones secretas del Consejo de Castilla o del propio tribunal, mencionadas como "espías", o quizás gastos cuyo certificado se había traspapelado en las desarregladas gestiones corporativas, no pudiéndose descartar que se tratase de fondos reservados a los que se impone su anonimato o de extracciones de caudales sin la debida licencia. Así, en 1636 las cuentas presentadas asientan en su data mil doscientos cincuenta reales sin justificar²⁸⁹; en 1640 otros mil setecientos setenta reales²⁹⁰, hallándose otras cantidades de ambigua adscripción en las cuentas rendidas en 1641, 1644, 1647, 1670, 1693 y 1694²⁹¹.

Finalizada desde la Corte la hacienda hermandina más estrechamente, se harán cada vez más excepcionales estos agujeros contables que no van acompañados de justificante acreditativo, aunque siguen encontrándose cifras que van desde los casi ciento sesenta y cinco reales en 1745²⁹², a los nueve mil novecientos cincuenta y dos reales de 1799²⁹³. En todos estos casos no parece que mayordomos, contadores ni cabildos diesen mayor importancia al hecho de dejar sin justificar por escrito desembolsos de tan variables cuantía, probablemente al estar habituados a dobles contabilidades o por estar todos en el secreto de tales dispendios.

Por último, hay que citar las escasas sanciones con que fueron penados los oficiales hermandinos durante las residencias a las que se vieron sometidos, como en 1667, cuando se termina de satisfacer una de estas condenaciones impuesta al alcalde don Juan Velarde Cevallos en 1663, siendo por entonces mayordomo el ciudarrealeño Martín de Torres Cano, y a cuya viuda aún se le adeudaban dos mil ochocientos catorce reales desde esa fecha²⁹⁴.

4.4. DEUDAS E IMPAGOS.

Una entidad de vida tan dilatada y azarosa como la Hermandad Vieja de Ciudad Real iría acumulando a lo largo de su existencia gran número de débitos, algunos de ellos nunca satisfechos. Su triple condición de organización dispensadora de caridad, tribunal de justicia y poseedora de unos canales estables de autofinanciación, determinan que con cierta frecuencia deba asumir gastos que, en puridad, no le correspondían, y renunciar a la puntual e íntegra percepción de todas sus deudas de las que es acreedora o las que está obligada a satisfacer.

Como consecuencia de marcado espíritu gremial, la corporación manchega no podía olvidar sus obligaciones asistenciales respecto a sus dependientes y allegados, lo que eventualmente le puede conducir a la renuncia implícita de determinados ingresos; de la misma manera que alguna vez se ve impelida por la falta de recursos de determinados inquilinos de sus inmuebles a demorar e incluso desistir del cobro de sus rentas, aunque la Santa Hermandad pondrá todo su empeño para resarcirse de dichas deudas siempre y cuando lo creyese factible. Un ejemplo: cuando en septiembre de 1718, tras diversas vicisitudes, el arrendamiento de la asadura en el menor Francisco Valverde, al siguiente año y tras ser ostensible el dolo en el impago del último plazo estipulado en el contrato, serán embargados sus fiadores -su madre y varios de sus convecinos-, subastándose los bienes incautados, y, no hallándose postores para los mismos, el teniente de alguacil mayor hermandino irá al molino de Jeldres, sito en la ribera de un

arroyo del término de Corral de Calatrava, en donde aunque no se logrará su arresto si se procederá contra sus bienes semovientes²⁹⁵.

Si esta conducta severa y legalista será norma para con quienes se habían lucrado a su costa, no ocurrirá otro tanto al verse hermanos o deudos de la institución envueltos en demoras de otros reembolsos. Particularmente problemática sería el procedimiento a seguir contra sus propios integrantes, confiándose la mayor parte de las ocasiones a la buena voluntad de la parte deudora y renunciando a hacer valer todo su peso sobre quienes dilataban sus pagos. Gran parte del ganado asadurado durante el ejercicio contable 1682-1683 sería adquirido por el hermano don Cristóbal Treviño Velarde, regidor del ayuntamiento, por el monto de tres mil noventa y seis reales, de los cuales quinientos doce dejan de ser percibidos con la puntualidad debida²⁹⁶; por ello, a pesar de que excepcionalmente se conserva la serie documental íntegra de las cuentas rendidas durante dicha década, no consta que fuese saldada esta deuda.

La conjuntura finisecular del Seiscientos, particularmente negativa para Ciudad Real, deviene en la insolvencia de algunos individuos que mantenían negocios con el Santo Instituto, acumulando la Hermandad un importante lucro cesante durante años. En 1684, entre los más de cinco mil maravedís incobrados de réditos censales y pecuarios, tres mil ochocientos ochenta y ocho corresponden al hermano don Francisco Treviño de Hoces, al comprar las rejas de la sala de vista de la sede hermandina, no empezando a reembolsar la citada cantidad hasta 1693, amortizando por entonces solo doscientos cuarenta reales, a los que sumarían otros cuatrocientos ocho el siguiente año²⁹⁷; durante más de una década quedaron congelados los pagos, consignándose el 1726 el mismo importe que tenía el siglo anterior, pese a no haberse

condenado, como lo demuestra su regular aparición entre las deudas positivas de la entidad durante todo el primer cuarto del Setecientos²⁹⁸.

Aún en el periodo de máxima expansión financiera de la asociación manchega, la propia corporación apícola se demoraría asimismo en satisfacer algunos de sus débitos y obligaciones económicas para con determinados dependientes; buena muestra de ello serían los cien reales adeudados al letrado Juan de Salcedo en 1745, por pretextar dicho abogado que "se le deve -por- el Tribunal mayor cantidad"²⁹⁹.

Sin duda, el mayor volumen de deudas favorables al Santo Instituto data del periodo 1749-1755, cuando los pagos favorables a los colmenarios sevillanos aproximadamente entre veinte mil a veintiocho mil reales de vellón³⁰⁰, aunque la liquidez corporativa quedaba asegurada por el sostenido incremento de sus ingresos pecuarios.

De los que sería un destacado miembro de la Santa Hermandad, don Ventura Simón, Colón y Portugal, importante ganadero afincado en Ciudad Real desde 1750 y con vecindad en dicha localidad desde 1767³⁰¹, y quien a principio de la década de 1770 aparece intitulado como prior de la Orden de San Juan en Inglaterra y capitán de regimiento de caballería Borbón³⁰², no parece que respondiese financieramente como podría suponerse de su condición preeminente, ya que a su muerte deja sin satisfacer el importe de las caballerías adquiridas a la entidad manchega en almoneda pública mediante pagarés, no satisfaciendo nunca los mil doscientos veinticinco reales de su importe; en su testamento no se reflejó este impago, asumiendo sus sucesores de tan mala gana el débito que a la altura del 1800 aún no

se había saldado ni había visos de que se hiciese por parte de sus legítimos herederos³⁰³.

4.5. PRÉSTAMOS.

Muy condicionada por la fluidez de la percepción del derecho de asadura, la fraternidad ciudarrealena se comportó, de manera ocasional y alternativa, como entidad acreedora o deudora, al albur de los acontecimientos. Cuando el superávit de su contabilidad deja libres caudales, parte de ellos sería susceptibles de ser invertidos temporalmente en la concesión de empréstitos lucrativos a instituciones o particulares; mientras que cuando se hace insostenible el colapso de sus percepciones perdería su papel financiero local que seguramente tuvo durante su periodo de esplendor, llegándose durante parte de los siglos XVII y XVIII a ser suplida su solvencia por el regular de sus miembros. Cuando en plena Edad Moderna se reactivan parcialmente sus relaciones económicas con un ayuntamiento local cedido de bienes del Santo Instituto, el monto de los adelantos librados de uno u otro signo, nunca dejarán de tener un carácter extraordinario por lo inusual de su recurso y las cantidades manejadas.

Por regla general, el nivel de endeudamiento del cabildo manchego respecto a terceros nunca sería preocupante, siendo práctica mas usual del mismo el recabar la colaboración financiera de sus miembros más acaudalados o sobre los individuos que asumía la recaudación de la asadura que depender de la inyección económica de otro tipo de origen. Si en 1599 el asadurero Fernando Xuárez hubo de satisfacer personalmente parte de lo honorarios anuales y gastos de administración de justicia del Santo Tribunal por entonces³⁰⁴; igual actitud hubo de adoptar su Diego Sánchez Pinedo, al pagar a fines de

abril de 1618 la nómina de los oficiales en activo³⁰⁵. En las postrimerías del Seiscientos, los alcaldes suplieron de su propio peculio parte de los desembolsos ocasionados por la ejecución de una pena capital en Peralville³⁰⁶, y en 1711 se le adeudaban doscientos cuarenta y seis reales al marqués de Villater, caballero hermano de la organización apícola que se vio forzado a adelantarlos probablemente hacia 1709³⁰⁷, por citar algunos de los casos más representativos.

Los caudales adelantados al cabildo en estas condiciones no pueden ser considerados empréstitos en el sentido actual del término, sino más bien una de las obligaciones, si se quiere atípica, de solidaridad de los hermanos privilegiados respecto al común de la colectividad apícola representada por la Hermandad. Son abonados normalmente a cargo de los ingresos inmediatos de la entidad, con una demora que suele oscilar de unas semanas a un año, siempre careciendo del carácter libratorio de dichas relaciones contractuales al no contemplarse la aplicación de interés como compensación económica del capital facilitado y el lucro cesante devengado. En todo momento parecen primar la adscripción corporativa a otras consideraciones, aunque no cabe descartarse otras ventajas, profesionales o personales, derivadas de la acción llevada a cabo, como consolidación del prestigio social, trato de favor en determinados negocios hermandinos u otros aspectos difíciles de ser cuantificados desde la perspectiva actual.

Ocasionalmente, sobre todo cuando más relajado era el control suprainstitucional sobre sus rentas, alcaldes y arqueros seguramente manejarían a su arbitrio, y en propio interés, los caudales hermandinos, abrogándose una discrecionalidad explícitamente vedada en sus sucesivos estatutos. No se trata tampoco de empréstitos con

interés, sino de retraer numerario temporalmente para acometer seguramente negocios personales, aunque su finalidad no aparecerá documentalmente contrastada³⁰⁸.

Más infrecuente aún, es que el cabildo autorice conceder empréstitos "con el interes acostumbrado" a particulares. este es el caso de los nueve mil seiscientos sesenta reales otorgados al hidalgo don Francisco Bustillo Cevallos para comprar trigo para el abasto municipal, siendo dicha cantidad librada de la asadura recaudada en los puertos de Alcudia, Carnerera, Verredas, Chillón y anejos, en 1750³⁰⁹; e los tres mil reales dados a censo por los alcaldes a don Francisco Rodríguez Ledesma por entonces³¹⁰.

La íntima vinculación personal entre las corporaciones concejil y hermandina, y consecuencia lógica del continuado declinar de ambas entidades durante gran parte de la Edad Moderna, vendría a determinar que cuando alguna de las dos se recuperase la otra recurriese a la más favorecida para que colaborase en su recuperación. Los niveles de intercambios financieros interinstitucionales se mantuvieron en unas coordenadas ciertamente bajas, no tanto por un supuesto prejuicio a apelar a solidaridades locales para solventar situaciones puntuales, sino porque ninguna de las dos tuvo durante decenios la suficiente solvencia para asumir este papel.

Dentro de este menguado grado de interdependencia económica, se observa una evolución de dichas relaciones: mientras que durante el siglo XVII determinó la falta casi total de empréstitos mutuos, y cuando se acudieron a ellos los resultados sería traumáticos, ya en el siglo XVIII el periodo de expansión financiera hermandina permite la subvención de determinados eventos de la ciudad, como la celebración

de festividades por efemérides regias, o la compra de grano para el pósito ante el anquilosamiento de los propios municipales; pasada esta coyuntura favorable para el Santo Instituto, sería un ayuntamiento beneficiado por la enajenación de bienes comunales y por la tímida desamortización de la época la que haría frente a la financiación ocasional de determinadas diligencias judiciales asumidas por la Santa Hermandad, pero de las que todo el común se beneficiaría.

Durante el Seiscientos, únicamente tenemos constancia de la existencia de un único empréstito en el que se ven envueltos diputados concejiles y la corporación de la fraternidad colmenera. El 9 de junio de 1616, un ayuntamiento acuciado por la falta de trigo para el panadero hasta la siguiente cosecha, comisiona a los regidores don Jerónimo Bermúdez y don Luis Fernández Tribiño para su adquisición; los también hidalgos y alcaldes hermandinos don Pedro Treviño de Hoces y don Gabriel de Guzmán, junto con el negociante y arquero Francisco Serrano de Arévalo se obligan a la compra de cien fanegas de trigo para el pósito por un precio no superior a veinticinco reales la fanega -dieciocho reales de la tasa y otros siete para su porte-. Como el 23 de noviembre de dicho año aún no habían entregado sesenta y una fanegas al pósito municipal, procedieron contra ellos los alguaciles ordinarios, embargándoles sus bienes pero encarcelando sólo al pechero Francisco Serrano por vía de apremio, lo que provoca su protesta, exculpándose de responsabilidades al alegar que

"...siendo yo en aquella ocasion mayordomo de dicha hermandad me hicieron obligar a la dicha cantidad prometiendo que cumplirían de suerte que yo no fuese molestado y aunque rescivieron el dinero y le gastaron en las necesidades de la Hermandad, y en mi poder no hay maravedis algunos porque di cuenta del tiempo que fui mayordomo alcances a la dicha hermandad con once mil e tantos maravedis..."

Añade que, supuesto que la deuda del pósito comporta iguales obligaciones a ciudadanos e hidalgos, el alguacil mayor debía de proceder con todo el peso de la ley contra todos los mancomunados, no solo contra él³¹¹. El 27 de enero de 1617 el ex-arquero permanecía en la cárcel real, resultando ilusorios los autos de prisión contra los caballeros involucrados, pues aunque se arrestó a don Pedro Tribiño en sala capitular hermandina, no tardó más que unas horas en regularizarse su situación, al arbitrarse prisión domiciliar, y dos días después don Gabriel de Guzmán era exonerado de sus prisiones, logrando libertad de movimientos en el interior de dicha galera. El 18 de agosto del citado año, el también alcalde don Juan de Aguilera asume el saldo de la deuda contraída por sus predecesores, entrega al pósito el resto de las fanegas pendientes y se zanja definitivamente la cuestión al adelantar dos mil quinientos reales.

Mediante el setecientos, las boyantes finanzas del Santo Instituto suplirían mediante préstamos las carencias económicas del ayuntamiento manchego, llegando a facilitar en cierta ocasión cincuenta mil reales para asegurar el abastecimiento local de grano, y anticipando una cantidad imprecisa para los gastos de la proclamación de Fernando VI, en 1741³¹². Con ocasión de la jura de Carlos III, por real pragmática se preceptuó que todas las ciudades del Reino celebrasen solemnemente el acontecimiento con cuantos actos públicos, religiosos y festivos, estimasen convenientes, costeándose de sus propios o de otros medios a su alcance; el ayuntamiento no tuvo otra alternativa que recurrir a endeudarse con la Hermandad Vieja para cubrir tan crecidos gastos³¹³. De igual forma, esta vez con motivo del feliz alumbramiento de la Princesa de Asturias, en 1773, se entregaron por prescripción regia veinticuatro mil reales para dotar a cuatro doncellas pobres,

recurriéndose de nuevo al solvente capital hermandino para ello, siendo reembolsados meses después a la entidad acreedora³¹⁴.

Diversos procedimientos serían arbitrados para sanear la hacienda hermandina y procurar su necesaria solvencia. En 1722, el mayordomo saliente, Sebastián Gómez Comino, quien reconocía una deuda al tribunal de algo más de veintitrés mil doscientos trece reales, logra del asadurero general Blas de Alba que su fiador, don Manuel Calero, le anticipase veinte mil reales en su nombre contra dicho contrato anual³¹⁵.

Diferente al sistema antes mencionado, y al que el cabildo hermandino parece recurrir con cierta reiteración para eludir costes añadidos, es el de acudir directamente al ayuntamiento para obtener fondos de una manera rápida cuando no es posible hacer frente a determinados gastos parentéricos. En abril de 1778, el alcalde don Álvaro Maldonado Treviño, recordando los diversos servicios prestados por la Santa Hermandad a la ciudad desde hacía décadas, solicita que de sus propios se arbitrasen mil ducados para sufragar la persecución de una partida de bandoleros que actuaba en los Campos de San Juan y de Mudeña; los capitulares aceptan mediante votación nominal la propuesta y en el plazo de dos días fue financiada la salida, estableciéndose su reembolso para las siguientes Navidades, según una de sus cláusulas contractuales³¹⁶.

NOTAS AL CAPÍTULO 4.

¹ Ordenanzas ciudarrealeñas de 1435, op. cit., p. 333.

² En 1635 ejerce como tal don Pedro del Saz Treviño, por enfermedad del alcalde don Juan Correa de Loaysa (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 4); en septiembre de 1693 el alcalde don Cristóbal Treviño Guarnizo se encontraba ausente de la ciudad, tramitándose por sus sustituto la toma de cuentas (Ib., leg. 58, nº 12); en 1713, el rector hermandino don Francisco Treviño de Castro y Bermúdez se hallaba en la Corte (Ib., leg. 58, nº 19); en 1716 don Juan Muñoz de Loaisa actúa como delegado del titular don Agustín Bermúdez de la Torre (Ib., leg. 58, nº 20); en 1728 el marqués de Villater ocupa el lugar del alcalde don Álvaro Muñoz y Torres (Ib., leg. 58, nº 26); en 1743 era teniente de alcalde don Diego Julián López de Haro (Ib., leg. 59, nº 5); hacia 1794 comparecía el balance ante don Gaspar Morroy Carrillo, por la partida de don Álvaro Muñoz Teruel (ADPCR. s.c.). Excepcionalmente, en 1670, el alcalde don Juan de Aguilera y Guevara cumplimentó en solitario la rendición de cuentas al arquerio (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 9).

³ La duración de estas diligencias dependía del trabajo acumulado y del personal utilizado. Durante buena parte del Seiscientos, se recurrió a un único escribano, que tardaría trece días en 1603, diez jornadas en 1611 y 1612, y otras ocho en 1613; a partir del primer tercio de la centuria dos notarios se distribuirían el trabajo, y así en 1636 uno de ellos emplearía doce días en esta labor, mientras que a su compañero se pagaron solo ocho jornales. Desde inicios del siglo

XVIII suele asistir un amanuense al escribano que asumía por rotación la toma de cuentas (Ib., legs. 57, nº 3, 7 al 9; y 58, nº 5).

Respecto a sus emolumentos, durante el siglo XVII suelen recompensarse a los notarios con unos cincuenta reales de vellón y una cabeza de cerda, percibiendo los oficiales de pluma unos honorarios inferiores en dinero, no constando que fuesen gratificados en especie.

⁴ Ib., leg. 60, nº 5.

⁵ El 15-XI-1750 el gestor hermandino Juan Isidro Granados presentó las cuentas de 1748-1750 (Ib., leg. 60, nº 1) y dicho día y mes de 1781 hace lo propio su homólogo Sebastián Comino del balance contable inmediatamente anterior (Ib., leg. 61, nº 5).

⁶ El 12-XII-1640, los alcaldes don Cristóbal Treviño Carrillo y don Luis Bermúdez de la Cerda, junto al escribano Arriaza, tomaron cuentas al arquero Juan del Prado del periodo 1639-1640, debiéndose de ir el propio Juan de Estrada a Benavente para reclamar la presencia del mayordomo (Ib., leg. 58, nº 5),

⁷ Las cuentas del periodo 1794-1895 no se cumplimentarán hasta el 20-I-1795 (Ib., leg. 62, nº 3).

⁸ El mayordomo Juan Isidro Granados dilata la acreditación de su gestión del periodo 1751-1752 hasta el 276-I-1756, debido al litigio por la percepción de la asadura mediante arriendo (Ib., leg. 60, nº 3). Retenidos los justificantes de las libranzas y caudales por el corregimiento manchego de 1773-1774, hasta el 22-I-1776 (Ib., leg. 61, nº 2), dicha irregularidad incide en la demora del trámite

correspondiente a los balances contables de 1775-1776 y 1777-1778 en cinco meses más tarde de lo usual (Ib., leg. 61, nº 3 y 4).

⁹ Sobre la figura del mayordomo y la significación financiera de su oficio cf. L.R. VILLEGAS DÍAZ, "Sobre la financiación...", op. cit., p. 915. Una relación de los arqueros hermandinos durante los siglos XVII-XVIII en apéndice documental nº 7.

¹⁰ Vid. apéndice nº 5.

¹¹ Vid. apéndice nº 6.

¹² 6-IX-1335 (AHN. Códices, 818B, ff. 32vº-37vº). El 7-VI-1335, una ejecutoria de la Real Chancillería de Valladolid mandó que cada una de las entidades apícolas pagase un tercio de las costas devengadas por el pleito entre la Hermandad de Villa Real y el maestre de Calatrava por la percepción de la asadura, refrendando su legitimidad sobre los arbitrios pecuarios impuestos sobre la cabaña conquense, atestiguándose que ya se practicaba esta distribución fiscal por los citados cabildos.

¹³ El 20-III-1480, en Toledo, se acuerda que la Hermandad de Talavera asadurase solo en los lugares donde se reanudaba servicio y montazgo, es decir, en Yllarta, Montalbán, Torre de Esteban Ambrán, venta del Cojo, Puente del Arzobispo, Ramacastañas, Abadía, Barcas de Albalá -puerto de Miguelete-, Malpartida, Pedrosía, Alarza y Berrocalejo.

¹⁴ Dicha venta, sita en el lugar de San Bartolomé -a poniente del término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)-, hacia mediados del Setecientos era propiedad de frey don Francisco Jijón y

Pacheco, caballero del hábito de Calatrava, siendo parada de rigor en el camino a Almadén. Este punto de cobro será mencionado en las cuentas presentadas en 1745 (Ib., leg 59, nº 7), y la posada será citada en el mapa de Tomás LOPEZ; cf. F. ROJAS GIL, "Geografía del alojamiento en la Mancha en el siglo XVIII", en *Cuaderno de Estudios Manchegos*, nº 8 (1978), p. 113.

¹⁵ El agente judicial hermandino en Madrid, don Juan Crisóstomo de la Pradilla, informaba el 1-XII-1705 a los alcaldes ciudarrealeños que el Supremo Consejo había desestimado el que "se la consignase dos o tres maravedis por cada persona y cabeza de ganado que pasase por el puente de Doña Olaya", enclavado en las inmediaciones de Miguelturra -Ciudad Real- (AHN. Div. Her., leg. 40, nº 2, s.f.).

¹⁶ Escritura de arrendamiento de la asadura mayor y menor de la fraternidad manchega a favor de don Josef de Aguirre y don Ramón Antonio Picó; 26-IX-1798, Ciudad Real (AHPCR., Protocolos Notariales, leg. 356, f. 85r).

¹⁷ Un antiguo acuerdo de la junta general de Navas de Estena, en el siglo XIV, prescribía que "de los ganados de las Hermandades de Toledo Talavera y Villa Real no se paguen el derecho de asadura una a la otra, certificando los pastores ser de alguna de ellas" (BN. mss. 13.030, f. 122vº). El 8-XI-1646 don Gómez de Aguilera y Guevara pleitaba con la Hermandad Vieja toledana por considerarse exento, al ser hermano de su homónima ciudarrealeño (AHPCR. Protocolos Notariales, leg 146 bis, f. 428r-vº). En 1715 el cabildo apícola manchego impugnaba unilateralmente la concordia alcanzada el 18 de marzo de dicho año con la Mesta en la que se eximía a los vecinos de

Talavera de pagar asadura en las circunscripciones fiscales de sus homónimas de Toledo y Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg 23, nº 5).

¹⁸ El cabildo de la Hermandad Vieja toledana de 22-2-1669 recogía que:

"Abiendose conferido y tratado zarca de que los becinos y ganaderos de esta ziudad se escusan de pagar el derecho que en virtud de los Reales Privilegios esta concedido a el cabildo desta Santa Hermandad por razon de decir no se a pagado y que pagan en esta Ziudad Real= se acordo se cobre de todos los ganaderos desta dicha ziudad tomándose los ganados aunque sean hermanos deste cabildo sin reserbar a ninguno y señores alcaldes y administrador lo ejecutaran."

(Ib., leg. 64, nº 11, s.f.).

¹⁹ Si el 21-V-1749, el Consejo de Castilla fallaba a favor de la entidad manchega en el litigio mantenido por la pretendida exención de la asadura de los abastecedores de carne de la Junta de Abastos de Madrid (Ib., leg. 23, nº 24), trato de favor que por entonces no obtuvo el arrendador maestral del puerto de Carnereros (AMAC. caja 101, 1749, nº 24). Una década después, el 24-XI-1759, el gobernador del Real Sitio de Aranjuez despachaba cédula a Cristóbal Redondo para pasar su piara del valle de los Pedroches al abasto de la Corte, quedando eximidos del pago de arbitrio de tránsito los más de quinientos cerdos que adquiriría durante las siguientes Navidades (Ib., leg. 23, nº 33)

²⁰ 6-IX-1800; (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 345, ff. 102r-103r).

²¹ Se ha conservado en el archivo corporativo un único cuaderno de dichas cobranzas, perteneciente al puerto de Malagón del periodo 1774-1775 bajo el epígrafe "Razon del ganado que se ha cobrado en este puerto por la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real", compuesto de tres partidas: la primera en la que se consigna el día de paso, dueño y

mayoral de las reses, así como el dinero asadurado; la segunda donde se registran las cabezas ovinas y caprinas tomadas; y la tercera en la que asientan las cabezas de vacuno, ofreciéndose al final del mismo un extracto del resto líquido que percibiría la Hermandad; 2-XII-1775 (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 36).

²² En 1685, se registra el cobro de 25 rs. por la venta de media libra de azafrán, producto del rebujo de una piara (Ib., leg 58, nº 12).

²³ Algunas cifras estimativas al respecto pueden darnos una idea aproximada del proceso, evidenciando que en el Setecientos era más nutrida la cabaña trashumante que en el Quinientos, tradicionalmente considera la etapa de esplendor ganadero castellano.

PERIODO CABAÑA TRASHUMANTE

1616-19	1.819.000 reses	Fuente: A. GARCIA SANZ, "Negocio y vida pastoril", en J. VALDEÓN BARUQUE (dir), La Mesta, en <i>Historia 16</i> , nº 7, p. 24.
1620-29	1.764.000 "	
1630-33	1.642.000 "	
1708	2.100.000 "	
1746	3.294.000 "	
1765	3.500.000 "	
1780	5.000.000 "	
1818	2.750.000 "	

²⁴ Desde que fue otorgada a principios del siglo XIV, se ordenaba el cobro de una res por cada hato anualmente, no atendiéndose sino a la tipología de las cabezas que componían el grueso del rebaño , así se tomarían de "ovejas, ovejas, de machos, machos, de carneros, carneros..."

²⁵ Se entendía por rebujo el porcentaje en dinero que, por no poderse percibir en especie al no llegar a la tasa requerida, se percibía de un número determinado de reses, habitualmente de cincuenta o de un múltiplo de dicha cifra.

²⁶ Se denominaba albalá al despacho de licencia, o carta de pago, donde constaba a los efectos correspondientes el pago de un arbitrio pecuario, acreditándose por los recaudadores el número de reses gravadas y el propietario de las mismas. La cumplimentación de tales diligencias en el libro de la estación y la libranza de justificante era lo que se pretendía costear con la exigencia de estos derechos de dudosa legitimidad.

²⁷ 22-XI-1565, Granada (AHN. Div, Her., leg. 22, nº 10).

²⁸ Tarifas aplicadas por la Hermandad Vieja de Ciudad Real como derecho de asadura:

<u>AÑO</u>	<u>GANADO OVINO/CAPRINO</u>	<u>GANADO VACUNO</u>	<u>GANADO DE CERDA</u>
1385	+100 cabezas..1 res -100 cabezas..2 dineros por res	+100 cabezas..1 res +50 cabezas..1/2 res -50 cabezas..1 mrs. por res	+50 cabezas..1 res +25 cabezas..1/2 res -25 cabezas..2 mrs. por res
1543	merchaniego: +50 cabezas..1 res -50 cabezas..1 mr. (rebujo)	+100 cabezas..1 res +50 cabezas..4 mrs. por res -50 cabezas..4 mrs. por res	+50 cabezas..1 res +25 cabezas..1/2 res -25 cabezas..4 mrs. por res
	cabañil/travesío: +1500 cabezas..2 reses +1000 cabezas..4 mrs. por cada centenar de cabezas que excedan del millar. +500 cabezas..1 res -500 cabezas..4 mrs. de cada ciento (rebujo)		
1561	+100 cabezas..1 res -100 cabezas..2 dineros cada res	+50 cabezas..1 res -50 cabezas..1/2 res	+100 cabezas..1 res +50 cabezas...1 mr. por res +25 cabezas..1/2 res -25 cabezas..2 cornados por res

1604 cabañil:	cabañil:	+50 cabezas..1 res
+500 cabezas..1 res	+100 cabezas..1 res	escogida
escogida	escogida	+25 cabezas..1/2res
-500 cabezas..1 mr. por	-100 cabezas..4 mrs.	-25 cabezas..4 mrs.
cada centenar (rebujo)	por res (rebujo)	por res
travesío/merchaniego:	travesío/merchaniego:	
+100 cabezas..1 res con	+50 cabezas..1 res	
su cria escogida	escogida	
-100 cabezas..3 blancas	+25 cabezas..1/2 res	
por res	-25 cabezas..4 mrs.	
	por res (rebujo)	
1690 cabañil:	cabañil:	+100 cabezas..2
+500 cabezas..1 res	+100 cabezas..1 res	reses
-500 cabezas..rebujo	+50 cabezas..1/2 res	+50 cabezas..1 res
travesio/merchaniego:	+25 cabezas..1/4 res	+25 cabezas..1/2 res
+100 cabezas..1 res	-25 cabezas..rebujo	+12 cabezas..1/4 res
+50 cabezas..1/2 res	travesío/merchaniego:-12 cabezas..rebujo	
+25 cabezas..1/4 res	+100 cabezas..2 reses	
-25 cabezas..rebujo	+50 cabezas..1 res	
	+25 cabezas..1/2 res	
	+12 cabezas..1/4 res	
	-12 cabezas..rebujo	
1715 +1000 cabezas..4 mrs.	+50 cabezas..1 res	+100 cabezas..1 res
por centenar	-50 cabezas..1 mr.	
+500 cabezas..1 res	por res	

29 Ib., leg. 23, nº 5, nº 12r.

30 En 1775, la recaudación del puerto de Malagón es buena muestra del coste de su recaudación. se consigna en el libro registro de la estación que se habían percibido 249.053 rs.; a los se habría que sumar otros 1.788 rs. procedentes de las venta de borregos, a razón de 32 ó 34 rs. por cabeza; los carneros a 44 rs; las ovejas costaban entre 40 a 44 rs.; los machos cabríos se enajenan por unas cantidades que oscilan entre 45 a 75 rs.; y 11.278 rs. por el ganado vacuno, a un precio medio de 39 rs. por res. Los gastos ocasionados serían los siguientes: 8 rs. por derechos de pósito; 40 rs. por la custodia de las ovejas durante 40 días; el salario de 12 rs. diarios durante 63 jornadas; descontándose los derechos y manutención del personal,

quedan libres para la Hermandad 100.482 rs., es decir, algo más de un tercio del total recaudado.

³¹ J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., p. 207.

³² El año 1623 es peculiar, pues debido a la postración financiera de la entidad manchega, se acreditaron dos remates de la asadura; el primero en mayo-junio para el periodo 1623-24, adelantándose el monto de la siguiente temporada meses después, arguyendo el cabildo que puesto que "no tiene maravedis algunos esta Santa Hermandad de sus rentas y no ay otra cosa mas comoda que arrendar el derecho de asadura ordenaron se arriende" (AHMCR, caja 7, nº 202).

³³ En septiembre de 1718, la progresión de las pujas, partiendo de 8.500 rs. alcanzan la cota máxima de 11.300 rs., rematándose en ésta al licitarla Joseph García Poderoso, tras una enconada subasta con los también ciudarrealeños Juan Pérez Hermosilla, Pedro Bravo y Juan Pérez Rucho (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 7).

³⁴ Licitadores y administradores de la asadura de la Hermandad manchega

<u>PERIODO ADMINISTRADOR/PUERTO</u>	<u>RECAUDADOR</u>	<u>GUARDAS</u>
1597-98 Fernando Juarez*, jurado de Ciudad Real	-	-
1601-02 Fco Treviño de Hoces*	-	-
1602-04 Antonio Xuárez	-	-
1605-06 Antonio Xuárez	-	-
1606-07 Tomás Pinedo	-	-
1610-11 Fernando Pinedo, jurado de Ciudad Real	Diego Sánchez Pinedo ¹	-
1614-15 -	Esteban Sánchez Cordobés ²	-

1616-17	-	Antonio Recuenco ⁶	-
1617-18	Diego Sánchez Pinedo*, escribano Ciudad Real.	-	-
1622-23	Juan Valero, ciudarrealeño	-	-
1623-24	Diego Sánchez Pinedo*	-	-
1631-32	Hermandad Vieja	Bartolomé Serrano ³ Andrés Martín ³ Sebastián Díaz ⁴ Juan Portillo ⁴ Juan Fernández ⁵ Alonso de Paz ⁶ Juan López de Amo ⁷ Jacinto Mayorga ⁸ Bartolomé Rodríguez ⁹ Juan de Torres ¹⁰ Pedro Ruiz Esteban ¹¹ Cristóbal Recuenco ¹²	Juan Ortega Juan Arciniega Juan Abad Cristóbal Recuenco Martín Sánchez Esteban Vázquez Fco Sánchez
1632-33	Hermandad Vieja	Jusepe de Rueda ⁸ Juanes Gugurmandia ⁸ Alfonso Hernández ¹³ Lorente Martínez ¹⁴	Fco Sánchez Martín Sánchez Esteban Vázquez Juan Márquez Julián Jimeno C. Recuenco
1633-34	Diego Díaz de Mora, v. Ciudad Real	-	-
1634-35	Juan Sarmiento, v. Ciudad Real	Juan de Alcudia ¹⁵	-
1635-36	Mixta Gabriel Martínez Prieto ³ Alonso Hernández del Olmo ¹² Cristóbal Recuenco ¹²	Diego Sánchez Pinedo ¹ Jacinto Martín Mayorga ⁸ Domingo Peral ¹³ Juan Fernández Gugurmandia ¹⁶ Martín García ¹⁶	-
1636-37	Mixta Gabriel Martínez ³ Jacinto Mayorga ⁸ Cristóbal Recuenco ¹⁶ Alonso Hernández Olmo ¹⁶	Francisco García ⁸ Juan Martínez Loaysa ¹⁷ S. Díaz Madroñero ⁴ Juan Fernández ⁵ Fco López Carpio ¹³ Domingo Peral ^{14/1} Luis Hernández ¹⁴ Francisco Gª Santaella ¹	Miguel Sánchez Juan Díaz Juan Sarmiento Juan Díaz Amarillo
1637-38	Juan Valeros, ciudarrealeño.	-	-
1638-39	Cristóbal de Salazar "	Sebastián Rodríguez ¹⁸ Fernando Pinedo	-

1639-40	Gaspar de Oviedo	"	-	-
1640-41	Pedro de Velasco	"	-	-
1641-42	Pedro de Velasco	"	Juan de Salazar	-
1642-47	Gaspar de Oviedo	"	-	-
1666-67	Cristóbal de Soto		-	-
1669-70	Alfonso Velasco		-	-
1675-76	Cristóbal de Sotomayor v. Ciudad Real.		-	-
1680-81	-		Cristóbal Ruiz ¹⁹	-
1683-84	Alonso Guerrero Peláyz Agustín Sánchez ¹⁶ Gabriel García Maroto ⁸		-	-
1684-85	Hermandad Vieja		Juan del Río ²⁰ Alfonso Romo ¹³ Juan de Arenas ⁸ Blas García ⁸ Agustín Sánchez ¹⁶ Francisco Gallego ¹⁶ Juan Fernández ^{17/17/14}	Alfonso Romo
1685-86	Juan de Rodas, jurado de Ciudad Real		-	-
1686-87	Mixto Agustín Sánchez ¹⁶		Juan Palomeque ^{1/18}	-
1687-88	Gabriel García Morato, alcazareño		-	-
1688-89	Cristóbal Ureña, ciudarrealeño		-	-
1689-90	Fco Plaza y Juan de Rodas		-	-
1690-91	Juan de Rodas, ciudarrealeño		-	-
1691-94	Francisco de Plaza, v. Ciudad Real		-	-
1706-07	Fco Plaza y Joseph Velasco, vs. Ciudad Real		-	-
1709-10	Fco Plaza y Joseph Velasco	Fco	López Romo ⁸	-
1710-11	Joseph de Carbonell y Joseph		-	-

Sobrino Barba, vs. Carrión

1712-13	Juan Manuel Escribano, Juan de Prado, Joseph Escobar, vs. Ciudad Real	-	-
1718-19	Antón Lozano Ibáñez ⁵ Domingo Bermúdez ¹²	Juan Pérez Rucho Miguel Mateo	-
1721-22	Juan de Prado	Eugenio Sánchez Tarazaga ⁵	-
1722-23	Juan de Prado, regidor de Ciudad Real	Felipe del Campo ⁵ Fco Sánchez Egido ⁵	-
1728-29	Miguel Mateos, ciudarrealeño	-	-
1729-30	Miguel Mateos, ciudarrealeño	Juan Jiménez	-
1735-36	Cristóbal Bernal	-	-
1737-38	Jerónimo Benito, ciudarrealeño	-	-
1741-42	Jerónimo Benito, ciudarrealeño	-	-
1742-43	Agustín Guerrero, ciudarrealeño	-	-
1743-44	Mixto Pablo Rodríguez, v. Viso ⁵ Alonso Palacín, v. V ^{va} Fuente ²³	Cristóbal Bernal ^{10/21} Pedro Poblete ^{8/24} Jerónimo Benito ^{13/20/1/25}	-
1744-45	Mixto Joaquín del Campo, v. Viso ⁵	Cristóbal Bernal Maroto	-
1749-50	Mixta	Vicente Guerrero Cevallos Juan Calleja y Pedro Robles	-
1751-52	Don Diego Muñoz y Vera*	Joaquín del Campo ⁵ Francisco Muñoz ⁸	-
1752-53	Mixto Pedro Fernández Silleteiro ⁵	-	-
1754-55	Mixto Cristóbal de Mata ^{5/1/2}	Cristóbal Bernal ¹⁰ Francisco Muñoz ¹⁶ Felipe Ruiz ⁸ Cristóbal Bernal ^{21/3} Joaquín Carbonero ^{21/3}	-
1757-58	Mixto Pedro Martín del Campo ⁵ Joaquín del Campo ⁵	-	-
1760-61	Don Juan Visedo y Joseph Muñoz de la Rica*, vs. Ciudad Real	-	-

1761-62	Juan Sánchez de Molina, v. Brazatortas	-	-
1764-65	Sebastián Gómez Comino, v. Ciudad Real*	-	-
1773-74	Mixta Joseph Martín Altozano, v. Viso ⁵ Joseph G ^a Calero, v. Socuéllamos ¹⁶	Manuel F ^{co} Ochoa ¹⁰ Manuel Gómez Comino ⁸ Joaquín Ruiz Carbonero ³ Antonio Ochoa Sastre ²² Clemente Guerrero Ceballos ²⁵ Sebastián Comino ¹⁵ Narciso Bolaños ²⁶ Antonio Gutierrez ¹ Joseph Mayorga ⁸ Espinosa ²⁷	-
1775-76	Mixto	-	-
1777-78	Jerónimo Soriano, ciudarrealeño	-	-
1780-81	Jerónimo Soriano, ciudarrealeño	-	-
1782-84	Blas de Alba, ciudarrealeño	-	-
1792-94	Don Pedro Chacón	-	-
1794-95	Juan y Diego de Cruz Catalán	-	-
1795-98	Pablo Rodríguez Tembleque, v. Herencia	-	-
1798-99	Don Josef Aguirre, Don Ramón Antonio Rico	-	-
1799-03	Don Gerónimo Soriano* Don Josef Aguirre y Don Ramón Antonio Rico	Fco Sánchez Cenicero y Vicente Sánchez de Madrid ⁵ Juan Sánchez Molina ³ Juan de Fuentes, Antonio Sevilla y Vicente Sáchez de Madrid ¹³	-
1803-05	Josef M ^a Aguirre	Josef de Fuentes, Joseph Tuy y Antonio Navarro de Marcos ¹³	
1...	Villarrubia de los Ojos	15..	Guadalerza
2...	Daimiel	16..	Segura de la Sierra
3...	Almodóvar	17..	Miguelturna
4...	Saceruela	18..	Viñuela
5...	Viso del Marqués	19..	Almagro
6...	Piedrabuena	20..	Villamayor y Alcudia
7...	Alcolea	21..	Ventas de Carnerero y Zarzosa
8...	Villarta de San Juan	22..	Cabezarados
9...	Puertollano	23..	Villanueva de la Fuente

10..Malagón	24..Dehesa de Zumajo y Urda
11..Siruela	25..Almadén
12..Torre de Juan Abad	26..Puebla de Don Rodrigo
13..Socuéllamos	27..Porzuna
14..Perdiguera	*Miembro de la Hermandad Vieja de Ciudad Real.

³⁵ Normalmente pagadera en tres plazos, el día de la festividad de Nuestra Señora de la O -18 de diciembre-; el 1 de mayo; y durante los meses de agosto o septiembre. A veces, el arriendo anual puede ser satisfecho mediante dos únicos pagos, el primero por San Juan -24 de junio-, y el segundo en la primera quincena de agosto. Con relativa frecuencia debieron adelantar cierta cantidad en metálico a cuenta de la renta que se pretendía recaudar; así, en septiembre de 1639, se cobraron por adelantado 242.000 mrs. pertenecientes a la renta pecuaria del periodo 1639-1640, y en 1656 la mitad de lo licitado -concretamente 1.700 rs.- será satisfecha al día siguiente de su remate (Ib., leg. 21, nº 37).

³⁶ En 1667, es enviado el notario hermandino Rafael Macaya para recorrer los puertos donde era recaudada la asadura, ya que no había presentado fianzas seguras el arrendatario Cristóbal de Soto (Ib., leg. 58, nº 8); y el 20-VI-1729 el arquero Juan Isidro Granados apremiaba al asadurero Miguel Mateos para que en el plazo de dos días presentase fianza abonada ante la corporación (Ib., leg 23, nº 6).

³⁷ Los cobradores suelen ser familiares, amigos o conocidos de los administradores de dicha renta. Se da la circunstancia de que Miguel Mateo, Juan Pérez Rucho y el propio arrendatario Francisco Valverde recaudasen la asadura cuando los dos primeros habían pujado por ella en 1718; tal vez este hecho pueda interpretarse como un arreglo para recompensar su retirada de la subasta en un momento determinado (Ib., leg. 43, nº 7 y AHN. Mesta, leg. 64, nº 12).

³⁸ En 1735, el monto de este agasajo, a los hermanos y personas concurrentes a dicho acto ascendió a 337 rs. el refresco, desembolsándose otros 330 a los confiteros Juan Pérez de Madrid y Andrés Díaz de Porras por los dulces y el agua de limón del día de San Miguel (AHN. Div. Her., leg. 59, 1); el año siguiente fue moderado ostensiblemente el convite, al librar de las arcas tan solo 94 rs. para dulces y casi 27 rs. para la limonada (Ib., leg. 59, nº 2).

³⁹ Relación de individuos gratificados con el prometido hermandino:

<u>PERIODO</u>	<u>BENEFICIADO</u>	<u>MONTO DEL PROMETIDO</u>
1603-04	Fernando Pinedo, hermano S ^{to} Instituto	10.000 mrs.
1606-07	Gabriel de Guzmán	5.000 mrs.
1624-25	-	10.000 mrs.
1637-38	Pedro Velasco, notario del S ^{to} Oficio	10.000 mrs.
1638-39	Cristóbal Sánchez de los Carneros, regidor y ex-mayordomo de la Santa Hermandad	10.000 mrs.
1639-40	Hermandad Vieja de Ciudad Real	6.800 mrs.
1640-41	Pedro de Velasco, arrendatario general	-
1641-42	Pedro de Velasco, arrendatario general	1.200 mrs.
1642-43	Gaspar de Oviedo, v. Ciudad Real	6.800 mrs.
1645-46	Gaspar de Oviedo, v. Ciudad Real	3.400 mrs.

⁴⁰ AHN. Códices, 933B, f. 18r.

⁴¹ 23-IX-1718, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 7).

⁴² Ib., leg 58, nº 12.

⁴³ Juan Cruz Catalán ofrecía 26.700 rs. si el arriendo era anual y 27.000 rs. si era rematado por un trienio, adelantando parte de ello a la entidad. El cabildo aceptó sus condiciones, plegándose a unas condiciones que le aseguraban unas rentas vitales por una cantidad no demasiado elevada por entonces; 26-IX-1798 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg 356, ff. 84r-87r).

⁴⁴ 6 y 14-IX-1800 (Ib., leg. 345, ff. 102r-103r).

⁴⁵ 23-IX-1802 (AHN. Div. Her. leg. 23, nº 38).

⁴⁶ ADPCR, s.c.

⁴⁷ AHN. Div. Her., leg. 57, nº 6.

⁴⁸ Litigios suscitados por la asadura hermandina, siglos XVII y XVIII:

<u>AÑO</u>	<u>PARTE CONTRINCANTE</u>	<u>MOTIVO DEL PROCESO</u>	<u>SENTENCIA*</u>
1598	Hermanidad de Toledo(?)	Asadurar en Yébenes	-
1599	Justicias de Alcázar de San Juan y Consuegra	Despojo asadura en priorato de San Juan	+
1600-01	Luis de Guzmán, v. Pozuelo, hábito C ^{va} .	Pretender exención	+
1602-03	Alonso F ^{dez} Pantoja, receptor Inquisición	Pretender exención	+
1603-04	Priorato de San Juan	Asadurar en Villarta	+
1604	Mesta y Juan Ibáñez, v. Chillón	Pretener exención	+
1604-20	Mesta	Excesos en el arancel	-
1606-07	Justicia Almodóvar del Campo	Prender cobradores	+
1608-09	Gobernador Segura Sierra	Impedir recaudación	+

1609-10	Gobernador Villarrubia	Prender cobrador	+
1609-10	Justicias Alcazar de San Juan y de Villarta	Despojar de asaduras	+
1609-10	Autoridades de Almodóvar del Campo y Puertollano	Impedir recaudación	+
1610-11	Juez entregador Mesta	Despojar asadura de Alcubillas	+
1610-11	Juan Ruiz de Avilés, presbítero Daimiel	Pretender exención	+
1611-12	Juan Sánchez Conejero presbítero Villarrubia	Pretender exención	+
1611-12	Vecino de Fernáncaballero	Recaudar sin licencia	+
1611-12	Alcaldes Fuencaliente	Impedir cobranza	+
1611-12	Gobernador Villarria	Despojar asadura	+
1616	Alcaldes de Daimiel	Impedir recaudación	+
1616-17	Justicia Alcubillas	Prender cobrador	+
1618-19	Gobernador Socuélamos	Impedir recaudación	+
1623	Alcaldes de Daimiel	Impedir recaudación	?
1631-36	Concejo Chillón	Pretender eximirse	+
1632-33	Alonso Carrillo, v. Daimiel	Defraudar arbitrio	+
1633-34	Hermanidad de Toledo	Asadurar en Valdagodor	+
1633-34	Gobernador Almodóvar del Campo	Impedir recaudación	+
1634-35	Justicias de Daimiel	Impedir recaudación	+
1634-35	Alguacil Mestas Cañadas	Despojar asadura Guadalerza	+
1635	Alcalde de Mestas	Impedir recaudación	?
1638	Dr. Gaspar de Quartos y don Lorenzo F ^{CO} Velasco, vs. Almagro	Impedir recaudación	+
1638-40	Teniente gobernador de Almodóvar del Campo	Pretender exención	+
1666-67	Cristóbal de Sotomayor, arrendatario general	No presentar fianzas	+

1680	Gobernador de Almagro y vecinos de Infantes	Defraudar arbitrio	+
1706-07	Francisco de Plaza, arrendatario mayor	Incumplir plazos estipulados	+
1710	Juan Mejía, v. Viso	Arancel abusivo	-
1715-43	Don Pedro de Robles, regidor toledano	Excesos en la cobranza	-/+
1718-19	Francisco Velarde, arrendatario mayor	Incumplir plazos estipulados	+
1718-19	Mesta	Abusos arancelarios	-
1718-19	Domingo Bermúdez, arrendatario Juan Abad	Intromisión al asadurar en Viso	+
1723	Fiadores de Juan Prado, arrendatario general	Incumplir plazos estipulados	+
1726	Don Juan Diego Belmonte, v. Líctor (Murcia)	Pretender exención	?
1729	Miguel Mateos, arrendatario general	No ofrecer fianzas seguras	+
1732	Fiadores de José Escobar y Juan de Prado	Incumplir plazos arrendamiento	+
1735-56	Martín Parreño, v. Puebla de Don Fadrique	Defraudar asadura	-
1735-38	P ^{CO} Barrera de la Fuente v. Valdepeñas	Defraudar asadura	+
1736-56	Vecinos de Alcázar	Defraudar asadura	+
1738-43	Concejo Chillón	Pretender exención Castilserás	+
1742-45	Don Carlos del Valle, v. Pobeda de la Sierra	Pretender exención personal	?
1742-?	Concejo Villarta	Pretender exención villa	+
1744-45	Joaquín del Campo, arrendatario de El Viso	Impago derechos devengados	+
1744-45	Alcaide Guadalerza	Impedir recaudación	+
1745	Juan Caballero, v. La Calzada	Pretender exención personal	+

1749	Junta Abastos Madrid	Pretender exoneracion ganados	+
1750	Juan Calleja, cobrador	Impago derechos devengados	-
1751-52	Francisco Muñoz, cobrador de Saceruela	Impago derechos devengados	?
1751-54	Licitadores asadura	Formalidades en el arriendo	+
1754-55	Concejo Almadén	Excusar contribución Castilserás	+
1755-56	José Pérez Losa, v. Piedrabuena	Defraudar asadura	-
1758-62	Joaquín del Campo, arrendatario de El Viso	Impago derechos devengados	+
1765	Don Diego Barchino, v. Alcázar de San Juan	Defraudar asadura	+
1775-76	Gobernador Almadén	Pretender exención vecindario	+
1777-78	Pastores Común C ^{va}	Defraudar asadura	+
1793-99	Pedro Chacón, arrendador	No presentación de libros	+
1805	Subarrendadores puerto de Socuéllamos	Impago derechos devengados	?

⁴⁹ ADPCR, s.c.

⁵⁰ En las cuentas presentadas el arquero de ese ejercicio contable, Juan de Prado, el total de lo adeudado por tales conceptos se elevaba a 13.220 mrs. (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 5).

⁵¹ El alcance de su débito montaba 529 rs. y medio, de los 4.000 rs. en que se remató la asadura del periodo 1706-07 (Ib., leg 58, nº 15).

⁵² Ib., leg. 60, nº 3.

⁵³ Ib., leg. 62, nº 3 al 5 y ADPCR. s.c.

54 En el cargo de las cuentas rendidas el 10-IX-1633 se consignan 110.859 mrs. del producto de la asadura "segun libro de Gregorio de Cordoba", gestor hermandino (AHN. Div. Hem., leg 58, nº 58, nº 4).

55 Ib., leg 56, nº 5 (cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad...*, op. cit., p. 214); en 1632 se pagaban 1.00 rs. al notario Alonso de Velasco por "dar vuelta a los puertos", acompañándose del cuadrillero Juan de Toro, a quien se le retribuye con un tercio de dicha cantidad; y en 1633 el propio Miguel García invirtió treinta días en recorrer los puertos donde se asaduraba, librándosele por dicho trabajo 108 rs. de las arcas institucionales el 21 de agosto (Ib., leg. 58, nº 4).

56 En 1632 se enviaba a un cuadrillero a cada una de estas poblaciones, cobrándose de la feria de Villarrubia de los Ojos los 250 rs. estipulados, más otros 222 rs. de la venta de dos cebones, siendo el monto total de la pagado por Chillón 647 rs.; al siguiente año, un cuadrillero tarda cinco días en ir a Chillón y percibir de su concejo la cantidad ajustada, mientras que el notario hermandino Alonso Velasco recibió 50 rs. para ir a la feria de Villarrubia, vendiendose en su mercado local el producto del travesío (Ib., leg. 58, nº 4).

57 Juan Ortega, Juan de Arciniega y Juan Sánchez guardan en los puertos las reses asaduradas, percibiendo por ello 4 rs. diarios; mientras que el el rastro de Ciudad Real serían custodiadas por los pastores Martín Sánchez, Esteban Vázquez y Francisco Sánchez "Pierna Gorda", hacia 1633; de ese año tenemos noticia de una de las picarescas más corrientes de las efectuadas por dichos sirvientes, cual era el descuento de 50 rs. al asadurero de Torre de Juan Abad, Cristóbal Recuenco, "por guardas inciertas" del ható recaudado (Ib., leg. 58, nº 4, s.f.).

⁵⁸ En efecto, en 1685 se asienta la pérdida de ocho cabezas, puede que víctimas de las alimañas, en las dehesas de Alcudia "y otras que se murieron de esta ciudad cuyos despojos se dieron a los presos de la carcel" (Ib., leg 58, nº 12).

⁵⁹ En 1632 se rematan en más de 940 rs. los 57 carneros vendidos a Gaspar de los Reyes; en dos plazos, Bartolomé de Oreja reembolsaba a los caudales hermandinos 126.854 mrs. que montaban 258 ovejas, 36 borregas y unas cabezas de ganado caprino; Juan Sarmiento se hizo con un puerco por 91 rs. , y 176 rs. costaron los cuatro cerdos adquiridos por Cristóbal de León.

⁶⁰ Ib., leg 58, nº 4. A pesar de ser patente su ánimo insolidario para con la corporación, el Santo Tribunal no parece darse por enterado de ello, al consignarse al siguiente año la adquisición por dicho sujeto de 258 ovejas, a 12 rs. la res del producto de la asadura (Ib., s.f.).

⁶¹ Las cabezas de cerda oscilan entre 112 a 117 rs.; los carneros entre 33 a 40 rs.; la arroba de lana blanca 26 rs. En cuanto a las cabezas enajenadas su número hubo de ser notable, al abastecerse a las carnicerías ciudarrealeñas ese año con 140 ovejas, 23 carneros y 92 corderos.

⁶² He aquí un desglose pormenorizado de tales honorarios:

Custodia del ganado en Ciudad Real, durante 25 días.....	20 rs.
Traslado a Alcudia de las ovejas.....	30 rs.
Compra de una red, para improvisar cercas durante el itinerario.....	30 rs.
Trigo para el panadeo de los pastores y comida del mayoral.....	20 rs.
Herbaje en las dehesas de Alcudia.....	218 rs.
Custodia de las ovejas durante siete meses en Alcudia.....	<u>499 rs.</u>
total.....	817 rs.

A los que habría que añadir, en el ajuste de los emolumentos del mayoral Alfonso Romo, unos zapatos, un par de albarcas, 7 fanegas y 13 celemines de trigo; a cada zagal se le proporcionarían dos fanegas de trigo y diez hogazas de pan. Gastos menores suponen esquilas 23 carneros, 140 ovejas y 92 corderos, pagándose a los esquiladores sus jornales y una arroba de vino, la adquisición de pez para marcarlas, el porte y lavado de 30 arrobas de lana, el sacrificio de las ovejas y asistir a su pesaje en la romana local (Ib., leg, 58, nº 12).

⁶³ En 1718, en el puerto real de Toledo se recaudaban 8.339'18 rs., de los cuales se descontaron 234 rs. por gastos de cobranza quedando un monto líquido de 8.105'18 rs.; dicho año, y tras salir en almoneda pública el arriendo de su percepción en los pasos de Montalbán, Marchés, Ventas de Peñaguilera, Manzanque, Jerindote, Agostaderos, feria de Casarrubios y Osa de la Vega, quedó desierto el concurso a los cuatro primeros, adjudicándose el resto, por lo que el cabildo hubo de responsabilizarse directamente de su gestión en éstos primeros ((Ib., leg. 70, nº 2, s.f.).

⁶⁴ El monto de tales arriendos, entre 1506-1524, en L.R. VILLEGAS DÍAZ, "Sobre la financiación...", op. cit., p. 920.

⁶⁵ El 4-XI-1758, un atinado memorial mesleño contra los arbitrios que gravaban el tránsito pecuario, consignaban dichas gabelas y su localización, Así en el pontazgo de Villarta se pagaba "un maravedi por cabeza y dos reales por rebaño a guardas del Duque de Bejar de subida y de bajada en cada potro de sobre-año veinticuatro maravedis cuando pasan y un real de cada mamon", satisfaciéndose además "tres ovejas a la Hermandad Vieja de Ciudad Real", aunque sin constar privilegio "se pagaron nueve ovejas por el derecho de San Juan y

cuatro reales por Alba (AHN. Consejos, leg. 1.481, nº 60, ff. 380vº, 384r y 389r). Consignándose asimismo que

"En Socuéllamos, se pagaba a la Hermandad Vieja de Ciudad Real por los ganados que huellan en el passo de Calatraba de mill cavezas unas, y llegando a quinientas una, u no buelben rebujos, y de cada baca un real, y algunos años de cada baca quatro maravedis: y al boto de Santiago dos cabezas al millar y de doscientas y cinquenta se llevan una, y de quinientas lo mismo: de setecientos y cinquenta hasta dos mil; y no buelben rebujos, y ellos cobran seis maravedis por caveza y mas de cada vez que le toca, cinco reales de Florines; de cada baca llevan ocho maravedis por el mismo derecho; y de potro o yegua cerril, que va sin cargar, lo propio y tambien dos reales de rebaños de Cantetas -sic- y Puentes..."

(Ib., ff. 389r.vº).

⁶⁶ Mientras que los pasos de Almodóvar y Carnereros dicho año fueron arrendados por 600 rs.; y en 400 rs. los de Almedina y Torre de Juan Abad; alcanzando 644 rs. el puerto de Saceruela; 100 rs. el de Almadén; y en 700 rs. se remataba el de Villarta en Jacinto Mayorga, avecindado en dicha población del priorato de San Juan (Ib., leg 58, nº 5).

⁶⁷ Estaciones de la Orden de Santiago y anejas (s. XVII-XVIII):

<u>PERIODO</u>	<u>MONTO PRODUCTO</u>	<u>PERIODO</u>	<u>MONTO PRODUCTO</u>
1633-34	420 rs.	1749-50	1.000 rs.
1635-36	400 rs.	1751-52	600 rs.
1636-37	360 rs.	1752-53	1.200 rs.
1683-84	450 rs.	1757-58	1.875 rs.
1686-87	400 rs.	1758-59	3.125 rs.
1722-23	482 ⁷ rs.	1759-60	1.800 rs.
1743-44	1.400 rs.	1773-74	2.200 rs.
1744-45	1.350 rs.	1775-76	5.000 rs.

⁶⁸ 24-XI/24-XII-1718, Viso del Marqués (Ib., leg. 23, nº 1).

⁶⁹ 11-I-1710, Ciudad Real (Ib., leg. 22, nº 27).

⁷⁰ Ib., leg. 23, nº 35.

⁷¹ Ib., leg. 60, nº 5 y 6.

⁷² En el ejercicio 1773-74, siendo mayordomo Sebastián Gómez Comino, dicho oficial se encargó directamente de la percepción de la asadura de Guadalerza, delegando en su hermano Manuel la recaudación de los pasos de Veredas -valle de Alcudia- y de Villarta de San Juan, a la sazón los más lucrativos de la citada campaña (Ib., leg. 61, nº 2).

⁷³ En 1750 Vicente Guerrero, ex-arquero y coordinador de la recaudación de los puertos de Alcudia y de la villa de Chillón, recibió un salario de 3.765 rs. por el cuarto del total bruto de su cobranza con que se suelen recompensar tales servicios, entregándoles otros 600 rs. de acostamiento y 101 rs. para sufragar gastos de percepción (Ib., leg. 60, nº 1).

⁷⁴ La asadura del puerto de Malagón, era asignada durante 1636-1637 a don Juan Martínez de Loaysa, vecino de Miguelturra y obligado de las carnicerías de Malagón (Ib., leg. 58, nº 6).

⁷⁵ En 1637, los cuadrilleros Juan Sánchez y Francisco López, tomarán la asadura en los puertos de Saceruela y Socuéllamos, respectivamente (Ib.).

⁷⁶ En 1636 se venden por 60 rs, 9 vellones y 24 "pellejos blancos de ovejas", y por entonces 6 arrobas y media de cueros eran rematadas en el sombrerero ciudarrealeno Alonso de Sevilla (Ib., leg 58, nº 5); en 1637, la venta de 14 pellejos de carneros importó 30 rs. (Ib., leg 58, nº 6).

⁷⁷ En primavera de 1636 se enajenaban no menos de 82 arrobas de lana al mercader Juan Cordobés; mientras que en 1687 la venta de 19 arrobas de lana suponían unos ingresos netos de 395 rs.

⁷⁸ En 1636 el número aproximado de ovejas vendidas era de unas 294 ovejas, 197 corderos y 4 carneros. Dos ciudarrealeños, Bernabé de Valderas y Juan de Herrera, compraron en 1637 la mayor parte de lo asadurado por 3.374 rs (Ib., leg. 58, nº 6). En 1687 eran puestas en el mercado 123 ovejas, 45 corderos y 32 corderos (Ib., leg.58, nº 12).

⁷⁹ En las cuentas rendidas en septiembre de 1687 se asegura haber moderado el salario del pastor en Alcudia, durante los meses de diciembre a marzo, en 120 rs., importando otro tanto las 6 fanegas de trigo otorgadas para su panadeo durante su empleo (Ib.).

⁸⁰ Durante 1686-1687, el invernadero de las ovejas y los carneros asadurados costaba 360 rs (Ib.), y 150 rs. montaba el adeudo de la rastrojera de cinco cerdos en 1744 (Ib., leg. 59, nº 6).

⁸¹ Hacia 1686-1687 el alcaide Francisco de Tapia y el letrado Vicente de Soto eran remunerados con una cabeza de cerda cuyo precio estimado era de 100 rs. por res (Ib., leg. 58, nº 12).

⁸² En 1687, durante la mayordomía de Juan de Rodas, se consignaba que 8 carneros habían sido "dados de limosna a los pobres de la carcel" (Ib.).

⁸³ En 1636 se adquirieron, a cargo de los caudales hermandinos y un importe de 134 rs., un rucio, un perro de ganado y una manta "para el ganado de lana que tuvo esta Santa Hermandad" (Ib., leg. 58, nº 5).

⁸⁴ Ver mapa localización estaciones pecuarias, apéndice nº 3.

⁸⁵ AHN. Consejos, lib. 1.481, nº 60, ff. 372vº-373r.

⁸⁶ 17-III-1503 (AHN. Div. Her., leg 22, nº 4).

⁸⁷ 15-VII-1505 (Ib., leg. 1, nº 5; 20 y 23).

⁸⁸ Ib., leg. 23, nº 5, f. 37r.

⁸⁹ 30-IV/10-V-1543, Villarta y Granada (AHN. Mesta, leg. 64, nº 7).

⁹⁰ 22-X-1565 (AHN. Div. Her., leg 22, nº 10).

⁹¹ 24-V/5-VI-1604, Granada (Ib., leg 22, nº 18).

⁹² Ib., leg 57, nº 4.

⁹³ La Hermandad manchega no podría cotrar asadura a los ganaderos adscritos al Honrado Concejo que hollasen y pastasen en los prioratos de San Juan y Santiago, preceptuándose en dicha sentencia que

"...de aqui adelante la dicha Hermandad covre el dicho derecho a la entrada que hiciere el ganado en el Campo de Calatrava y sus puertos y no la cobrando estonzes la covre a la salida dellos respecto de que las reses que avia de covrar balian a el tiempo de la entrada."

(AHN. Mesta, leg. 54, nº 11, s.f.).

⁹⁴ AHN. Div. Her., leg 58, nº 1.

⁹⁵ AHN. Mesta, leg 64, nº 11, ff. 130vº y 135r.

⁹⁶ 11-II/11-IX-1620, Granada (Ib.).

⁹⁷ 22-II-1635, Granada (AHN. Div. Her., leg 22, nº 22).

⁹⁸ 18-III-1715 (Ib., leg. 23, nº 5).

⁹⁹ ADPCR, s.c., s.f.

¹⁰⁰ En las cuentas rendidas el 9-IX-1687 se asienta el pago de 90 rs. devengados por una manada de dicho ganadero toledano (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12).

¹⁰¹ El 26-XI-1715 se libra traslado del acuerdo entre la Mesta y la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial. Debido a la contienda sucesoria en curso, los rebaños habían evitado transitar por el puerto real de Toledo, por lo que la entidad local deja de percibir dicho derecho al negarse los ganaderos a contribuir a su salida, por decir haberla satisfecho a los cobradores de Talavera y Ciudad Real, proponiendo que solo se pagase la mitad de lo tasado cuando se pudiese acreditar su anterior pago. El cabildo acordó, asimismo, enviar al procurador mesteño un buen regalo (Ib., leg. 69, nº 7).

¹⁰² Argumenta don Alonso Camego que

"...por lo respectivo a la pretension de D. Pedro hera enteramente desestimable pues aun en esta misma concordia que en contrario se avia presentado se prevenia que los vecinos que fuesen de Toledo no pudiesen pagar el derecho de asadura a aquella Hermandad, ni los de Talavera y Ziudad Real asadura si

no es que hubiese de ser aquella por donde pasasen sus ganados ejecutandose esto sin duda para ebictar (sic) fraudes que de contrario se seguian con que siendo Don Pedro de Robles vecino de la ciudad de Toledo no havia debido pagar el referido derecho a la dicha Santa Hermandad, y si la avia pagado no por eso le livertaba de la obligacion de pagar a su parte y por lo que decian concordia aunque no fuese en esta conformidad no podia perjudicar a su parte por no aver concurrido en ello ni a su zelebridad, y porque los testimonios que nuevamente se havian presentado de la concordia que llanaban de Malagon -año de 1509- estaban sacados sin zitazion de su parte por lo que los negava."

(Ib., leg. 23, nº 5, s.f.).

103 29-X-1717, Toledo (Ib., leg 70, nº 1, s.f.).

104 El cabildo toledano de 19-VIII-1722 resolvía que, aunque el mayor peso económico del proceso era asumido por el momento por la parte demandante, éste "se siga a la menos costa que se pueda" (Ib., leg, 70, nº 6, s.f.).

105 10-XI-1725; 14-I-1726 y 27-IX-1727, Madrid (Ib., leg. 23, nº 5).

106 19-XI-1718, Madrid y 18-IV-1719, Ciudad Real (AHN. Mesta, leg. 64, nº 12).

107 12-V-1726/19-VI-1745, Madrid (ADPCR, s.c., s.f.).

108 Los herederos de Antonio García, mediante la Mesta, desde 1672 mantenían una dura pugna legal con el cabildo talaverano; por real decreto de 31-VII-1687 se constreñía la asadura de dicha corporación a lo otorgado por el rey Alfonso XI en 1338, es decir al alfoz de la villa, motivando la presentación de un expediente impreso de la Hermandad Vieja local ante la Sala de las Mil Quinientas, se arguye:

"...que el termino desta nuestra Santa Hermandad, Señor, es muy distinto al de la dicha villa, y que todo el mas ganado que passa por su tierra, y termino dexa pagado este derecho a la

Santa Hermandad de Toledo; con lo qual, si se considera, como algunos contribuyentes quieren entender dicha sentencia, quedara esta Santa Hermandad sin renta alguna."

Representación de 13-VIII-1687, Madrid (AHN. Consejos, leg. 7.199, nº 25, s.f.).

¹⁰⁹ Memorial de la Hermandad Vieja de Toledo, 1772 (Ib., leg 3.163, nº 9).

¹¹⁰ 8-X-1739 (AHN. Div. Her., leg 23, nº 15 y 37).

¹¹¹ Ib., leg 23, nº 20. En el balance contable acreditado el 17-IX-1743 se registra en la data el pago de 4 rs. al librero don Pedro por la encuadernación de la ejecutoria contra el municipio de Chillón (Ib., leg. 59, nº 6).

¹¹² Ib., leg 59, 7 y 60, nº 1, 2.

¹¹³ Ib., leg 60, nº 3.

¹¹⁴ Ib., leg 22, nº 13 y 15.

¹¹⁵ Miguel García, procurador del maeztrazgo de Calatrava, junto a Alvaro Garabita, procurador de la villa de Almagro, representaban en 1604 ante la Real Chancillería de Granada que

"...pocos dias a esta parte despues de aver cobrado un derecho de la asadura del bendedor por fuerça haziendo muchas molestias dexaciones y amenazas a los compradores an cobrado dello otro derecho de un mismo ganado, no devriendose mas de uno como derecho y lo peor es que...van con vara de justicia de mas de dos pies y por no propia abtoridad haziendo las dichas molestias y vexaciones cobran dos vezes dicho derecho como esta usando...y los ganados itinerantes y otras personas que tratan de ganados por escusarles molestias que las usen lo dichos oficiales y cobradores y porque no les prendan sobre ello tienen por mejor pagar lo que les piden no debiendoselo..."

(ACG, leg. 2.486, cab. 513, nº 5, f. 3r).

116 El licenciado Munio, gobernador de Consuegra, impedía el cobro de asadura en el paso de Villarta, debiendo de acudirse a dirimir dicho abuso ante el Consejo de Castilla y la corte de justicia territorial granadina (AHN. Div. Her., leg 57, nº 4).

117 ADPCR, s.c.

118 AHN. Div. Her., leg 57, nº 5.

119 Ib., leg. 57, nº 6.

120 Ib., leg. 57, nº 8.

121 27-IV-1616 (Ib., leg 22, nº 20 y 21.

122 Ib., leg. 58, nº 3.

123 Ib., leg. 58, nº 4.

124 Ib., leg. 54, nº 5.

125 Ib.

126 El arrendatario ciudarrealeño informa que, habiendo asadurado dos piaras que procedentes de Llerena pasaron por La Viñuela el 23-XII-1638, el gobernador de Almodóvar del Campo prendió al cuadrillero cobrador, quitándole sus despachos y comisiones, pretendiendo devolver

al regidor los cerdos tomados al transitar hacia el priorato de S. Juan, aunque

"...el susodicho adeudo el dicho derecho de asadura porque para ello no se considera que uno sea vecino o no vecino de Calatraba sino que traiga el ganado de otra diferente parte y entre ollando con el en dicho Campo de Calatraba o que salga del dicho Campo de Calatraba a ollar otra sierra...y solamente no se adeuda el dicho derecho quando un becino o no becino de Calatraba trae portando alguna manada de ganado por el dicho Campo de Calatraba sin traerlo de fuera de el ni sacarlo fuera de el..."

(Ib., leg. 22, nº 23).

¹²⁷ Ib., leg. 22, nº 24.

¹²⁸ Ib., leg 61, nº 3. El Consejo de Castilla, el 1-IV-1775, proveyó a instancias del Triple Instituto que la justicia ordinaria auxiliase en la recaudación de su arbitrio pecuario, extendiéndose esta directriz al ejército y a la milicia provincial, ya implicado el primero desde hacía tiempo en diligencias preventivas y policiales.

¹²⁹ Ib., leg. 57, nº 3.

¹³⁰ Ib., leg. 57, nº 4.

¹³¹ Ib., leg. 57, nº 7.

¹³² 6-IV-1611/25-II-1612, Villarrubia de los Ojos (Ib., leg.32, nº 2).

¹³³ 29-XI-1729, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nº 4).

¹³⁴ 1-II/23-IV-1735, Ciudad Real (Ib., leg 23, 10 y 12).

¹³⁵ En septiembre de 1737 eran adelantados más de 1.505 rs. por don Alvaro Muñoz y Torres, caballero del hábito de Calatrava y alcalde hermandino, para sufragar los gastos ocasionados por don Bernardo Cortón, receptor de los Reales Consejos al permanecer en la ciudad comprobando los privilegios durante dicho pleito, debiéndose a Juan Amarillo unos 1.300 rs. al habérselos embargado, y desembolsándose otros 520 rs. devengado por dicho oficial de la administración central y su ayudante, a los que cabría sumar, por último, otros 20 rs. por su labor (Ib., leg 59, nº 2).

¹³⁶ 13-III-1739, Argamasilla de Alba (Ib., leg 23, nº 10). Vid Apéndice documental, texto nº 11.

¹³⁷ Ib., leg 23, nº 30.

¹³⁸ 1-XII-1755/16-II-1756 (Ib., leg. 23, nº 31).

¹³⁹ Dichos propietarios de ganado eran el licenciado Francisco de Quintanar, clérigo de menores órdenes, don Diego Joseph Guerrero y doña Ángela Valenzuela (Ib., leg 23, nº 21).

¹⁴⁰ Ib., leg 59, nº 4 y 5.

¹⁴¹ En 1744, el ex-arrendatario mayor Agustín Guerrero debía 1.469 rs. de su contrato por lo asadurado en el periodo 1742-43, y en 1750 aún permanecían impagados 933'24 rs (Ib., leg. 60, nº 1).

¹⁴² Don Luis Treviño, alcalde hermandino entre 1743-1744, recibía por sus desvelos en el pleito ante la Mesta 6.366 rs. (Ib., leg. 59, nº 7).

¹⁴³ 21-VIII-1745 (Ib., leg 23, nº 22).

¹⁴⁴ Que el litigio en curso se estaba convirtiendo más en una cuestión de principios que en un mero proceso contra unos defraudadores lo demuestra el hecho de que lo invertido en gastos judiciales sobrepasaba con creces lo supuestamente adeudado; únicamente los derechos devengados por la salida de los citados notarios supusieron no menos de 459 rs. de vellón (Ib., leg. 59, nº 7).

¹⁴⁵ 18-VII-1756, Madrid (Ib., leg 23, nº 29).

¹⁴⁶ En 1764 se subastaron 24 vacas, alcanzando un monto total de 5.760 rs., pertenecientes al hato de don Francisco Quintanar, y se estimaba en unos 1.600 rs. lo adeudado aún por don Diego Joseph Guerrero "Barchino", por la asadura de una década dejada de coger de sus manadas (Ib., leg 60, nº 6).

¹⁴⁷ 18-IV-1738, Valdepeñas (Ib., leg 23, nº 13).

¹⁴⁸ En 1682, cuando el conde de la Puebla de Montalbán pretendía exonerarse de la contribución de la asadura y que se le pagase alcabala de lo recaudado por el citado concepto, el cabildo del primero de agosto dejaba constancia que la Hermandad de Talavera cobraba de forma indebida lo pertenciente a la corporación homónima de Toledo (Ib., leg 66, nº 2). En el acuerdo bipartito alcanzado dos años antes consensuó que ambas cobraran y se repartieran por igual lo percibido de los rebaños vendidos en la ferias de sus respectivas jurisdicciones fiscales, lo que al parecer se excusaban de hacer los talaveranos en 1699 (Ib., leg 67, nº 10, s.f.).

149 Ib., leg. 56, nº 23.

150 Ib., leg. 58. nº 4. Probablemente como recompensa a sus buenos oficios, en 1638 este sujeto adscrito al Santo Oficio ganó los 10.000 rs. del prometido anual (Ib., leg 58, nº 5). Dicho oficial inquisitorial gozó de la recaudación de esta gabela pecuaria en años posteriores, tal vez al haberse familiarizado previamente con dicha gabela hermandina. Vid. nota 34).

151 El cabildo de la organización toledana de 11-5-1711 acordaba que

"...para la observacia de la legitima correspondencia que deve aver entre las tres Hermandades convendria que respecto a los ganados que de esta tierra pasan a erbajear al Campo de Calatrava que es el distrito que perteneze a esta Santa Hermandad de Ziudad Real cobre dicho derecho que adeudaren de los ganados dicha Santa Hermandad y los que vinieren a esta tierra de dicho Campo de Calatrava cobre el derecho esta Santa Hermandad que es lo que se observa con los ganados de la cavaña real y que lo mismo se devera entender con los ganados que de esta tierra pasan a la del distrito de la Santa Hermandad de Talavera asi a erbajear como a vellota...en las dos ferias que en cada un año se celebran en la dicha villa de Talavera los ganados de la Extremadura vienen a venderse a ellas quando llegan de dicha villa ya traen pagado a dicha Santa Hermandad el derecho que adeudan y pasando dichos ganados a otros y viniendo con ellos a esta tierra a de pagar el derecho que adeudaren a esta Santa Hermandad por no causarle asta salir de aquel territorio donde compraron..."

(Ib., leg. 69, nº 3, s.f.).

152 AHN. Consejos, leg 3.163, nº 9, s.f.

153 En las cuentas del periodo contables 1794-1795 se asienta una libranza de 174 rs. pagados al letrado Rafael Hidalgo, entre otros conceptos por presentar recibos de cobro de dicho arbitrio, dando respuesta al litigio interpuesto por los colmeneros de la Ciudad Imperial (AHN. Div. Her. leg 62, nº 3).

154 El 7-VII-1467 el Santo Instituto adquiría a Juan López de la Torre

"...una tienda con su camara e corredor que nos havemos e tenemos en esta dicha ciudad, en la plaza de ella, que linda con una parte con tienda de la dicha hermandad, e de la otra parte, tienda de Lorenzo Gomez de la Figuera..."

Se pagaron 14.000 mrs, "horros e foros de alcavala", satisfechos por partes iguales por el arquero saliente Nuño Fernández Ferrador y el entrante Antón Martínez (Ib., leg 21, nº 39; copia del siglo XVIII).

155 Relación de inquilinos y rendimientos inmobiliarios anuales de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (ss. XVII-XVIII).

<u>PERIODO</u>	<u>INQUILINO/PROFESIÓN</u>	<u>INMUEBLE</u>	<u>TIPO DE CARGA</u>	<u>RENDIMIENTO</u>
1620(?)	Fernando de Herrera, carpintero	Casa	Censo perpetuo	39 rs.
1623-24	Juan Fajardo	Casa	Censo perpetuo	39 rs.
1631-32	Bernabé de Céspedes	Casa-tienda	Arriendo	-
1637-41	Eugenio de Casasola	Casa-tienda	Arriendo	50 rs.
1637-31	Pedro Martínez "Rabudo"	Casa-tienda	Arriendo	12 rs.
1637-38	Juan Martínez	Casa-tienda	Arriendo	-
1637-38	Juan Maldonado, teniente de Quiteria del Valle	Casa	Censo perpetuo	1.550 mrs.
1637-38	Herederos de Cristóbal López, albañil	Casa	Censo perpetuo	-
1638-41	Herederos de Antón Sánchez, tintorero	Casa	Censo perpetuo	150 mrs.
1640-41	Herederos de Don Antonio Galiana	Casa	Censo perpetuo	1.550 mrs.
1640-41	Don Diego de Villalobos	Casa	Censo Perpetuo	901 mrs.
1640-41	Pedro Ruiz Villanueva	Casa	Censo perpetuo	260 mrs.
1640-41	Cristóbal López, teniente de Diego Sánchez	Casa	Censo perpetuo	12 rs.

1640-41	Pedro del Arroyo, tenen te de Juan Martínez y de Fabián Ruiz	Casa	Censo perpetuo	6'17 rs.
1641-42	Don Diego de Villalobos	Casa	Censo perpetuo	85 rs.
1641-42	Frutos Rodríguez, difunto	Casa	Censo perpetuo	340 mrs.
1641-42	Alejo Sánchez	Casa	Censo perpetuo	4 rs.
1641-42	Francisco Martínez y Fabiana Bustos, difuntos	Casa	Censo perpetuo	6 rs.
1641-42	Pedro López, pobre	Casa	Censo perpetuo	1.550 mrs.
1641-42	Eugenio de Salcedo, pobre	Casa-tienda	Arriendo	22 rs.
1641-42	Pedro Martínez "Rabudo", pobre	Casa-tienda	Arriendo	12 rs.
1642-43	Pedro de Céspedes	Casa-tienda	Arriendo	-
1666-67	F ^{CO} de Oreja, alcaide de Hermandad Vieja	Casas-tienda y balcones	Arriendo general	300 rs.
1669-70	Juan de Rodas, hermano	Idem	Arriendo general	150 rs.
1675-76	Alfonso Velasco	Idem	Arriendo general	873 rs.
1684-85	Domingo Macho	Casa	Censo	55 rs.
1684-85	Juan Vaquero	Casa	Censo	14 rs.
1684-85	Juan de Herrera	Casa	Censo	4 rs.
1684-85	-	Balcón plaza	Alquiler	40 rs.
1686-87	-	Balcón plaza	Alquiler	66 rs.
1686-87	Juan Asensio, verdugo de Hermandad Vieja	Casa-tienda	Arriendo	49'17 rs.
1687-88	Bartolomé Vicario	Casa-tienda	Arriendo	40 rs.
1688-89	Juan Asensio, verdugo	Corredores	Alquiler general	170 rs.
1688-89	Juan Ruiz	Casa	Censo	55 rs.
1688-89	Menores de Juan Vaquero	Casa	Censo	14'20 rs.
1688-89	Juan de Herrera	Casa	Censo	4'8 rs.
1688-92	ldo. Gabriel Toral,	Casa	Censo	45 rs.

abogado hermandino

1688-89	Bernardo de la Cabeza	Casa	Censo	12 rs.
1689-90	-	Balcón plaza	Alquiler	70 rs.
1689-92	Juan de Herrera	Casa	Censo	4 rs.
1689-92	Juan Vaquero	Casa	Censo	14 rs.
1689-90	Juan Ruiz	Casa	Censo	55 rs.
1689-92	Bernardo de Talavera	Casa	Censo	12 rs.
1689-90	Bartolomé Vicario	Casa	Censo	40 rs.
1689-90	Manuel Hierro de Alba	Casa	Censo	15 rs.
1690-92	Juana Ruiz	Casa	Censo	55 rs.
1690-91	Diego Laso	Casa	Censo redimible	11 rs.
1691-92	Juan Asensio, verdugo	Casas-tienda	Arriendo general	220 rs.
1692-94	Juan Asensio, verdugo	Casas-tienda	Arriendo general	100 rs.
1706-07	-	Balcón plaza	Alquiler	74 rs.
1706-42	Juan de Herrera	Casa	Censo	4 rs.
1706-09	ldo. Martín Casasola, presbítero, tenente de Cristóbal de la Cruz	Casa	Censo	55 rs.
1706-28	Juan Vaquero	Casa	Censo	4 rs.
1706-36	Silvestre Martín, tenente de Bernardo de Talavera	Casa	Censo	12 rs.
1706-16	Juan Sastre, verdugo, tenente de hijas de Toral	Casa	Censo	45 rs.
1710-11	-	Balcón plaza	Alquiler	30 rs.
1710-16	ldo. Martín Casasola, presbítero, tenente de Cristóbal de la Cruz	Casa	Censo reservativo	33 rs.
1711-16	-	2 tiendas	Arriendo	132 rs.
1711-16	-	2 tiendas	Arriendo	132 rs.
1711-16	-	Balcón plaza	Alquiler	30 rs.

1718-23	-	Balcón plaza	Alquiler	30 rs.
1718-28	Ldo. Martín Casasola	Casa	Censo reservativo	33 rs.
1727-42	Simón de Mena/Mª Burgos	Solar	Censo redimible	6 rs.
1735-36	-	Casas-tienda	Arriendo	330 rs.
1735-36	-	Balcón plaza	Alquiler	40 rs.
1735-36	Jacinto Milla	Casa-tienda	Arriendo	184 rs.
1736-42	Juan Sastre, peón público	Casa	Censo reservativo	33 rs.
1736-42	Juana Gordillo, viuda de Juan de Herrera	Casa	Censo	14 rs.
1736-42	-	Casas-tienda	Arriendo	330 rs.
1738-39	-	Balcón plaza	Alquiler	33 rs.
1741-42	-	Balcón plaza	Alquiler	60 rs.
1742-43	Juan de Oreja, alcaide de la Hermandad Vieja	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1744-45	Francisco León	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1744-50	Juan Moreno	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1744-45	Antonio García	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1744-45	-	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1744-45	Juan de Oreja, alcaide	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1744-45	-	Balcón plaza	Alquiler	50 rs.
1744-45	Juan Sastre, verdugo de la Hermandad Vieja	2 Casas	Censo	33+14 rs.
1744-45	Mª de la Encina	Solar	Censo	6 rs.
1749-50	Vicente de Oreja, alcaide hermandino	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1749-50	Francisco Gª Hortelano, veterinario	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1749-50	Joseph Díaz de Miguel, calderero	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1749-50	-	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.

1751-52	-	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1751-52	-	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1751-52	-	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1751-52	-	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1751-52	-	Balcón plaza	Alquiler	30 rs.
1751-52	Herederos de Juan Sastre	Casa	Censo	33 rs.
1751-52	Juan Vaquero	Casa	Censo	14 rs.
1751-52	Mª de la Encina	Solar	Censo	6 rs.
1760-62	Juan García, herrero	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1760-63	Fco. Sánchez, barbero	Casa-tienda	Arriendo	66 rs.
1760-63	Teresa Sánchez Cachete	2 tiendas	Arriendo	132 rs.
1760-00	Mª de Burgos	Casa	Censo	6 rs.
1762-63	Juan Gª, herrero	Casa-tienda	Arriendo	66 rs.
1762-63	Joseph Serrano Patón y Antonio Fúnez	Casa	Censo	14 rs.
1762-63	Ignacio Morales	Casa	Censo	33 rs.
1773-74	Gaspar Dorado, alcaide hermandino	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1773-74	Aduana	2 tiendas	Arriendo	132 rs.
1773-74	Antonio Sánchez	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1773-74	-	Casa	Censo	14 rs.
1773-81	Ignacio Morales	Casa	Censo	27 rs.
1775-84	Viuda de Gaspar Dorado	Casa-tienda	Arriendo	99 rs.
1775-84	Antonio Sánchez	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1775-78	Teresa Catalán	2 tiendas	Arriendo	132 rs.
1775-00	Aduana	Casa-tienda	Arriendo	44 rs.
1775-84	Antonio Plaza, tenente de Vicente Gómez Comino	Casa	Censo	14 rs.
1780-84	Luis de León y Juan de	2 tiendas	Arriendo	132 rs.

Arias, hortelano

1780-00	Don Joseph Antonio Díaz Solar	Censo	15 rs.
1783-00	Herederos de Ignacio Morales	Casa Censo	27 rs.
1793-95	Luis de León	Casa-tienda Arriendo	88 rs.
1793-95	Juan Antonio G ^a Mariscal	Casa-tienda Arriendo	121 rs.
1793-00	Vicente Sánchez,barbero	Casa-tienda Arriendo	44 rs.
1793-00	Donato Sánchez	Casa-tienda Arriendo	44 rs.
1793-00	Vicente Gómez Comino, hermano de ex-mayordomo	Casa Censo	14 rs.
1798-00	Antonio León	Casa-tienda Arriendo	121 rs.
1798-00	Manuel de Cárdenas	2 tiendas Arriendo	132 rs.
1798-00	Francisco Antonio Ortega, cerrajero	Tienda nueva Arriendo (hospital)	66 rs.

¹⁵⁶ vid. L.R. VILLEGAS DÍAZ, "Sobre la financiación de la Hermandad de Ciudad Real. Sus ingresos (1491-1525)", en *La Ciudad Hispánica...*, op. cit., pp. 916-919.

¹⁵⁷ Las cuentas rendidas en septiembre de 1728 que refieren a los

"...recditos -sic- de censo que pago a esta Santa Hermandad Simon de Mena y Maria de Burgos su mujer por el solar de los señores Don Francisco Triviño y Don Diego Zapata alcaldes que fueron de esta Santa Hermandad en el año seiscientos y veinte y seis -en realidad de trata de 1726- dieron a censo redimible por escritura ante el presente escribano en el dia diez y seis de Abril de dicho año cuyos recditos cumplieron el dia diez y seis de Abril de este año."

(AHN. Div. Her., leg. 58, nº 26).

¹⁵⁸ El Catastro de la Ensenada, a mediados del Setecientos, recoge información sobre el

"Meson que llaman de cavalleros propio del convento de religiosas franciscanas, de esta ciudad, en la collazion de San Pedro calle

de las Pilas: linda con -vivienda- de Matheo Sastre y con casas de dicho convento..."

Cf. F. ROJAS GIL, op. cit., pp. 108-109. Mateo Sastre, ejecutor del Santo Instituto, gozaba de dicha residencia por deseo expreso de la corporación hermandina local.

¹⁵⁹ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 25.

¹⁶⁰ Subarrendada durante años por el capellán de los colmeneros, el presbítero Martín de Casasola, a un convecino desde principios del siglo XVIII, se reduciría a cerca de la mitad su carga censal por carecerse de escritura del mismo, perdiéndose cualquier rastro documental de él en fechas posteriores a 1745, al ser dado por perdido o por haberse redimido.

¹⁶¹ 23-XII-1623, Ciudad Real (AHMCR., caja 7, nº 202, f. 19r).

¹⁶² El censo es una figura jurídica según la cual el propietario de un inmueble recibía de alguien una cantidad de dinero estipulada por su usufructo. En épocas de fluctuaciones monetarias o de precios el préstamo hipotecario era un valor seguro al estar garantizado en tierras u otro tipo de bienes raíces. Había cuatro tipo de censos: los redimibles -susceptibles de revertir su compra en quien asumiese el resto de la carga impuesta-, los perpetuos -enajenables previa notificación al dueño del censo-, los reservativos -contratos de cesión con pleno derecho, traslación de dominio directo y usufructo-, y vitalicios -vigentes únicamente durante la vida de alguna de las partes contrayentes-. Nos inclinamos a pensar a que, en un principio, la mayoría de ellos serían censos perpetuos, en los concurría la doble condición de redimibles por ley 7, tit. 17, lib. 5, R., a los que se añadiría algún caso concreto de censo reservativo.

163 En 1767 la Hermandad de Toledo cobraba réditos censales sobre cinco casas de la ciudad, un huerto y unas posadas de colmenas en los Montes de Toledo, siendo su producto poco relevante en su partida de ingresos (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.). Su cabildo de 15-III-1734 consignaba que

"...muchos de los tributos que se allan en los montes de esta ciudad, y pertenezcan al cabildo muy maltratadas las posadas sobre las que estan cargados, por cuya regla se allan muy deteriorados, y por esta razon incobrables."

(AHN. Div. Her., leg 71, nº 4, s.f.). En la relación de cuentas de su homónima talaverana, presentada el 2-XI-1774 ante el Supremo Consejo, se asientan entre sus ingresos dos censos perpetuos de 11'1 rs. y 8'28 rs., advirtiéndose que "aunque se han cargado y se cargan y no se abonan por parecer estar corrientes y los restantes se abonan, pues aunque se cargan es solo por conserbar la memoria de dichos censos" (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

164 Consta que esta situación se mantuvo entre 1706-16, para luego traspasarse a sus herederos durante 1718-28. Desde 1735-45 estuvo adscrita al peón y verdugo público Juan Sastre, quien por esta fecha extrema tenía en usufructo una casa de la entidad colmenera. En 1751-52 sus sucesores tenían la potestad sobre ambos inmuebles, uno de los cuales en la década de 1760 Mateo Sastre subarrendará a María Rodríguez Asensio.

165 En 1601 se entregaron 12 rs. al cuadrillero Diego Salazar por su trabajo en el cobro de estos censos (AHN. Div. Her., leg. 57, nº 2).

166 Ib., leg 57, nº 7.

167 Los herederos legítimos del tintorero Antón Sánchez debieron asumir la deuda de los réditos trianuales impagados por su titular, y que por entonces montaban 450 mrs. (Ib., leg. 57, nº 2).

168 En esa fecha se consignaba la defunción de Frutos Rodríguez, Francisco Sánchez y Fabiana Bustos, enconándose aún más el deterioro de las rentas patrimoniales hermandinas al quedar empobrecidos muchos arrendatarios y no poderse cobrar en sus bienes los impagos al no tenerlos de valor (Ib., leg. 58, nº 7).

169 Ib., leg 58, nº 18.

170 Ib., leg 58, nº 26.

171 L. R. VILLEGAS DÍAZ, "Sobre la financiación...", op. cit., p. 916. La hipótesis esbozada por este eminente medievalista local es verosímil, pues al hallarse casi todas en pleno centro comercial ciudarrealeño bien podían tratarse de inmuebles pertenecientes a judíos o conversos perseguidos por el Santo Oficio.

172 El manchego Fernando de Valencia, en su propio nombre y el de su hermano Diego, afincado en Málaga, vende a la corporación hermandina un juro de heredad compartido sobre un mesón que ascendía a 10.000 mrs., del que solo tenemos noticia que se realizó un primer pago de 6.418 mrs., ofreciéndonos el contrato una sucinta descripción:

"...tiene dos puertas. la una sale a la plaza de esta ciudad, la otra a la calle de las Bestias y alinda de la una parte con casa meson de Juan Quiroga, y la de la otra parte con casa de Christobal de Mena, -y- con casa de Christobal de Valenzia..."

10-VIII-1528, Ciudad Real (AHN. Div. Her, leg. 21, nº 42, s.f.).

¹⁷³ El 7-III-1673, en la carta de enajenación de unas tiendas de la plaza pública de ciudarrealeña, situadas en la esquina con la calle Cuchillerías, aún se menciona avanzado el siglo XVII que lindaban con unas casas-tienda que habían pertenecido a la Hermandad Vieja (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 196, ff. 65r-vº).

¹⁷⁴ Desahuciada, en octubre de 1729, por morosa la viuda de Luis Martínez de Melgar de su vivienda y corrales de su tenería, se replica este procedimiento judicial argumentando su elevada edad, la pérdida irreparable de su negocio de curtido de pieles con el traslado, además de las graves molestias que padecía derivadas de que

"...por no aber allado casa donde vivir por no ser el presente tiempo regular en que en dicha ciudad se alquilan por ser costumbre que abia en ella el que los arrendamientos se hiciesen por San Juan y Navidad de cada un año..."

(Ib., leg. 2, nº 19).

¹⁷⁵ 29-IX/6-X-1749 (Ib., leg 23, nº 92).

¹⁷⁶ Ib., leg. 60, nº 1.

¹⁷⁷ Entre 1689-90 únicamente serían alquiladas dos de las casas-tienda, quedando el resto deshabitadas (Ib., leg 58, nº 12); en las cuentas rendidas en 1711 se consigna que el moto del arriendo es igual que el del periodo anterior debido a los daños causados por las inundaciones (Ib., leg 58, nº 17), mientras que en 1742 se anota en el cargo que se percibió un ducado menos de lo acostumbrado en el producto del arrendamiento de una tienda.

¹⁷⁸ Puede tratarse de cesiones a dependientes de la institución o, como se consigna en 1745, al dejarse de cobrar el alquiler de una

tienda debido por Antonio García "por averlo desposeido de ella por quartel de los soldados que estuvieron en esta ciudad" (Ib., leg. 59, nº 7, s.f.).

179 Ib., leg. 57, nº 4.

180 Ib., leg. 57, nº 9.

181 Ib., leg. 58, nº 1.

182 Ib., leg. 58, nº 4.

183 Ib., leg. 58, nº 6.

184 Su monto total importó 39.663 mrs., sufragándose una mínima parte del mismo mediante la sanción de 1.000 mrs. de pena de Cámara en que fue sentenciado Antón Martín del Pulgar el 14-VI-1638 (Ib., leg 23, nº 57 y 58, nº 5).

185 Ib., leg. 58, nº 7.

186 Ib., leg. 58, nº 5.

187 Se invirtieron 230 rs. en picarlas y labrarlas, y otros 65 rs. en su colocación (Ib., leg 58, nº 12).

188 20-XI-1718; el monto total de la obra ascendió a 5.945 rs. de vellón (Ib., leg 58, nº 21).

189 Ib. leg. 59, nº 1.

¹⁹⁰ Ib. leg. 59, nº 5.

¹⁹¹ Ib., leg 60, nº 4.

¹⁹² Algo similar ocurre con la entidad de Toledo. Dicha corporación, en 1681, cobraba censos sobre seis viviendas de la calle Tejedores y Peso del Carbón, y una séptima del arrabal; así como de 50 aranzadas de viñas; alquilando una casa en la esquina de la callejuela de su cárcel y la platería de la calle Ancha (Ib., leg 66, nº 1). Casi un siglo después, en 1767, declaraba mantener cargas censales sobre cinco casas del casco urbano, un huerto y posadas de colmenas en los Montes de Toledo, arrendando una vivienda y la antigua prisión de Ventas (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

¹⁹³ Ib., leg. 58, nº 5.

¹⁹⁴ Ib.

¹⁹⁵ El jesuita Pedro de GUZMÁN ejemplifica bien estos prejuicios antitaurinos. Amén de las muerte innecesarias reses bravas, lidiadores y caballerías, el religioso apunta la existencia de accidentes por rotura de los entramados desde los que se contemplaba el festejo, los atropellados por los caballos, las riñas suscitadas entre el público, los gastos inútiles provocados por espectadores y concejos, y la fuente de supersticiones que representaban para el vulgo; Cf. *Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad*, Madrid, 1614, discurso V, pp. 231-263.

196 En el Setecientos aún llegaba ante la Real Chancillería granadina lo acontecido en Villanueva de la Fuente -Ciudad Real-, al tener lugar dos corridas públicas de novillos sin la pertinente licencia (ACG. cab. 321, legs. 4.360, nº 10 y 4.369, nº 46).

197 En las cuentas presentadas en 1737, se anota la siguiente observación: "no se haze cargo a dicho mayordomo de cantidad alguna por el balcon de los Arcos propio de este tribunal por no averlo arrendado po no aber abido este año fiestas de toros" (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 2).

198 Lo inapropiado del asentamiento de Ciudad Real en una zona pantanosa propició, a lo largo de la Edad Moderna, la existencia de diversos proyectos para desecar las lagunas circundantes que "corrompian el aire". En mayo de 1786 el síndico personero proponía al Supremo Consejo financiarlo tomando dinero del pósito municipal, aceptar la aportación ofrecida por la Mitra toladana, agregar a la ciudad los propios de Luciana, suspender el pago de los réditos censales contra sus propios, incorporar el producto del panadeo y desvincularse de la mancomunidad de pastos del área; al desestimarse tales pretensiones, el corregimiento, optó, consciente de que

"...mediante no hallarse los vecinos a disposición de sufrir un repartimiento el de tener quatro fiestas de toros en cada un año por espacio de quatro años...con la calidad de que quedase todo su producto a favor de la ciudad para emplearlo en la obra incluso el de los alzados y ventanas, no obstante qualquier privilegio... quedando a carga de la misma reparar a costa del fondo, los edificios donde estuvieren las ventanas de qualquiera menoscabo que padecieren por su uso en las fiestas."

El producto de estos dieciséis festejos taurinos serían adelantados por quienes los tomasen en asiento (AHN. Consejos, leg. 1.007, nº 3, s.f.); idéntico arbitrio sería propuesto, infructuosamente hacia 1793 ó 1794 (Ib., leg. 1-759, nº 25).

199 Vid. " Sobre la financiación...", op. cit., p. 915.

200 Ib., leg. 57, nº 8 y 9.

201 Ib., leg. 58, nº 8.

202 Ib., leg. 58, nº 17.

203 Ib., leg. 60, nº 5.

204 En 1722 eran incautados los bienes de dos sospechosos precipitadamente asilados a sagrado, probablemente gitanos de la comarca de Puertollano. El mayordomo sacó a subasta una mula embargada, dejando bajo custodia sus armas para las diligencias judiciales pertinentes arbitradas por el asesor. La fórmula acostumbrada de pregón por parte del Santo tribunal manchego era:

"Si alguna persona quisiere hacer postura en -bien subastado- que se vende por orden y mandato del señor -nombre del alcalde que sigue la causa- desta ziudad parezca ante s.md. y se le admitira la postura que hiciere siendo xusta. Doy fee.
-rúbrica del notario hermandino-"

Prosiquen los tres pregones preceptivos a lo largo del día, y al caer el sol se remataba en el mayor postor. pasando su importe a los caudales institucionales (Ib., leg 45, nº 5, s.f.).

205 Con relativa frecuencia los bienes subastados pasan a manos de dependientes hermandinos, como hermanos u oficiales, si se efectúan en la propia Ciudad Real y no en otras localidades. Hacia 1684 se remataba en 100 rs. la pollina de un reo de Porzuna en el ejecutor de la entidad, Juan Asensio; y en 1693 se remataba en el hermano Isidro Granados una cajita de madera con aplicaciones de plata y otros

pañuelos, un cuchillo grande -seguramente una faca o chafarote-, y unas camisas pasarían a manos del citado verdugo hermandino (Ib., leg 58, nº 12).

206 En 1778 se alcanza la cifra más alta jamás alcanzada por una almoneda de la corporación durante el periodo que nos ocupa, al venderse unas 68 cabalgaduras mayores y menores por 24.649 rs., de los hubieron de descontarse 139 rs. para retribuir a los herreros Blas Tejedor y Salvador Sánchez Delgado por su tasación, más de 600 rs. en su alimentación hasta su enajenación y 54 rs. por la curación de un macho enfermo (Ib., leg. 61, nº 4).

207 Generalmente se trata de cerdos, ovejas o animales de labor, difícilmente rastreables documentalmente los primeros al pasar a engrosar con frecuencia los hatos de lo asadurado. Cuantitativamente su número es poco importante, ya que la mayoría de los abigeatos de ganados llamados menores "menores" -ovejas, cabras, puercos- e incluso vacas o terneros, suelen terminar sacrificadas por desaprensivos. Así en 1782 se indemniza desde la Hermandad con más de 283 rs. al dueño de dos vacas muertas por los reos Mateo Labrador (Ib., leg 62, nº 1).

208 En 1635 se vendían en almoneda pública 47 fanegas y media de cebada pertenecientes a un ladrón fugado de la justicia (Ib., leg 58, nº 4)

209 Las cuentas del periodo contable 1635-36 reflejan la salida a subasta de unas camisas, ropas, ferrieruelo, zapatos y mastas secuestrados (Ib., leg. 58, nº 5); hacia 1684 se hacia lo propio con un manto de seda y dos sabanas, adjudicadas a los licitadores de Ciudad Real, Joseph Rodríguez y María Teresa, respectivamente, también

rematándose una capa y otros objetos en diferentes postores (Ib., leg 58, nº 12).

²¹⁰ En 1685 se obtenían 226 rs. de la venta de 19 onzas de plata incautadas a Luis de Gilveña y de cuatro cucharas de plata empeñadas por el reo Juan de Beas "Vellón" (Ib.).

²¹¹ Hacia 1799 se entregaron a la tendera Anastasia Vaquero, con local en la plaza pública, la quincalla aprehendida a Alfonsa Francisco y a María Rodríguez, de raza gitana, cuyo importe se estimaba en casi 265 rs. y de la que un año después aún no había conseguido vender en su integridad (ADPCR., s.c. y AHN. Div. Her., leg 62, nº 5).

²¹² Se trata normalmente de sillas de montar, correaes, matas, alforjas, albardas, etc, rematadas de forma individualizada, conjuntamente en un lote, o con las propias caballerías a las que pertenecen.

²¹³ En 1685 son sacadas a pública almoneda por la Hermandad 6 colmenas de las 21 secuestradas en las inmediaciones de Porzuna, siendo vendidas en dicha villa del Campo de Calatrava (Ib., leg. 58, nº 12); y en 1764 se ingresaban 50 rs. por la subasta de una hebilla de plata (Ib., leg. 60, nº 6).

²¹⁴ Ib., leg 58, nº 4.

²¹⁵ Pertenecientes a la heredad de Juan de la Orden, administrada por Juan Salcedo Oliver, serían enajenadas a razón de 16 rs. la fanega de trigo y 6 rs. la de cebada, en 1735 (Ib., leg. 59, nº 1).

216 Ib., leg. 58, nº 12.

217 En septiembre de 1619 una libranza registraba el pago

"A Gabriel de Padilla y Agustín Perez y Francisco Diaz
alcabaleros quince reales de alcabala de las almonedas de Diego
Maldonado y Francisco Vazquez y de Pedro Ortiz delinquentes"

(Ib., leg 58, nº 3).

218 8-VI-1725, Berlanga -Babajoz- (Ib., leg. 45, nº 17) y 16-8-1725,
Ciudad Real (Ib, leg. 45, nº 21).

219 24-X-1760, Ciudad Real (Ib., leg 21, nº 45); cf. M. F. GÓMEZ
VOZMEDIANO, *Conflictos jurisdiccionales...*, op. cit, transcripción en
apéndice nº 15, pp. 341-343.

220 AHN. Div. Her., leg. 62, nº 2.

221 Ib., leg 58, nº 12.

222 Ib.

223 Hacia 1689 producía 716 rs. la subasta de lo incautado a unos
gitanos sobre los que penderá una controversia judicial sobre su
supuesta inmunidad local (Ib.); y ejemplos similares menudearán en la
documentacion del Santo Tribunal manchego.

224 Una escopeta sería vendida en 30 rs. en 1691, extraviándose por
entonces una pistola tasada en idéntico precio (Ib.).

225 En 1643 hubo de devolverse a un vecino de Arroba -Ciudad Real-, el
importe de dos caballos por haberse vendidos en dos ocasiones, y más

de 100 rs. a Martín Díaz por adquirir un caballo a la Hermandad que resultó ser de la propiedad legal de los bandoleros a los que le fue prendido (Ib., leg. 58, nº 5); hacia 1688 ó 1689 se procedió a la devolución de una mula a su dueño, y en 1694 se indemnizó con 40 rs. la muerte de un pollino recientemente vendido a una viuda (Ib., leg. 58, nº 12).

226 Vestigio de sus fundacionales connotaciones gremiales, cuando las sanciones en metálico o en cera eran unos de sus ingresos más saneados, el 7-XII-1574, la condena contra el almagreño Juan Díaz Bueno por agredir a un paisano incluía la cláusula de satisfacer

"...en myll maravedis de pena para los presos desta Santa Hermandad y ospital della conforme a la antigua costumbre y en un real para azeyte a la lampara que reside delante del crucifijo que esta en la sala de la dicha Santa Hermandad, y en otros dos reales para las mysas que se dizen en la dicha sala a los presos los dias de fiesta..."

(Ib., leg. 26, nº 4).

227 En dos reales para el aceite de la lámpara del oratorio hermandino sería condenado, subsidiariamente, Gabriel García en 1606 (Ib., leg. 31, nº 1); un real pagó por similar concepto el pregonero Juan Ibáñez dicho año (Ib., leg. 31, nº 2); y otros dos reales hubo de desembolsar el ventero Pedro Jiménez en 1607 (Ib., leg. 31, nº 3).

228 Ib., leg. 59, nº 2.

229 *Actas de las antiguas Cortes de León y Castilla*, op. cit, t. IV. pet. 73, p. 560.

230 AHN. Div. Her., leg. 56, nº 23.

231 31-III-1575, Ciudad Real (Ib., leg. 27, nº 1).

232 ADPCR., s.c. y AHN. Div. Her., legs. 30, nº 3; 31, nº 6 y 2; 32, nº 4, 5, 12...

233 Real Provisión de 17-II-1574, Aranjuez (AMCR. Actas Capitulares, leg. 9, ff. 567-569).

234 24-IV-1621, Madrid (Ib.).

235 Ib., leg. 58, nº 5.

236 Ib., leg 23, nº 57.

237 Puede leerse en los acuerdos del ayuntamiento manchego el mandato del Consejo de Castilla en virtud del cual

"...las penas que el dicho -corregidor- Don Marquelain y sus oficiales y los dichos alcaldes de la Hermandad an condenado a qualesquier concejo y persona particulares a Nuestra Camara y Fisco proveed que se cobren dellos y se entreguen al nuestro receptor general dellos o a quien suyo poder hubiere y tomad las cuentas de las penas o las personas que los han tenido de las recibir, cobrar y pagar al nuestro receptor general della..."

(AMCR. Actas Capitulares, leg 15, nº 4, f. 7vº).

238 Únicamente han llegado hasta nosotros testimonios documentales incompletos sobre los libros de penas de cámara y gastos de justicia donde se registraban dichas condenaciones. El primero comprende desde el 1-I/14-VI-1638, del que solo se conserva la portada y una sola anotación; el segundo, y último, abarca desde el 2-I/9-IX-1641, asentándose en él poco más que su finalidad y los nombres de los alcaldes en el cargo (Ib., leg. 23, nº 57 y 58).

²³⁹ 7-IX-1728, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nº 26).

²⁴⁰ Contrastan los 1.721 rs. exigidos a unos pirómanos de Abenójar en 1603, con los 12 rs. requeridos a un porzuniego por agredir a un convecino en yermo ese mismo año (Ib., legs. 29, nº 5 y 30, nº 3).

²⁴¹ Ib., leg. 58, nº 7.

²⁴² Hemos de tener presente que este último intento de reequilibrar la maltrecha hacienda hermandina sería empleado reiteradamente por la corporación talaverana, que tras la incautación en 1758 de la mayor parte del producto de sus rentas pecuarias dejará sin sueldo al procurador de pobres, escribano, mayordomo, ejecutor y asesor fiscal (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.)

²⁴³ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 5.

²⁴⁴ Se trata del hermano Cristóbal de Ureña, así como del teniente de alguacil mayor, el alcaide, el notario y el verdugo de la entidad, haciéndose cargo la organización manchega de un total de 1.172 rs de vellón.

²⁴⁵ Ib., leg. 58, nº 12.

²⁴⁶ Ib., leg. 58, nº 5.

²⁴⁷ Ib., leg. 58, nº 12.

²⁴⁸ Ib., leg. 60, nº 4.

249 Por entonces era vendida en 18 rs. la antigua portería de la entrada principal del edificio sede hermandino, un precio exiguo a tenor del costo deloahora adquirido (Ib., leg. 60, nº 6).

250 Ib., leg, 58, nº 12.

251 Ib., leg. 58, 9 y 12; 60, nº 4 y 61, nº 2, respectivamente.

252 Evolución de las nóminas anuales del personal hermandino:

*HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL

<u>OFICIAL</u>	<u>1598</u>	<u>1713</u>	<u>1750</u>	<u>1761</u>	<u>1780</u>
Alcalde.....	1.000 mrs.	-	-	-	-
Regidor.....	500 mrs.	-	-	-	-
Alguacil mayor.....	800 mrs.	-	-	-	-
Cuadrillero mayor..	500 mrs.	-	-	-	-
Mayordomo.....	1.000 mrs.	-	1.200 rs.	1.200 rs.	1.200 rs.
Contador.....	500 mrs.	-	-	-	-
Escribano.....	1.900 mrs.	66 rs.	66 rs.	330 rs.	330 rs.
Asesor.....	4.500 mrs.	330 rs.	480 rs.	550 rs.	600 rs.
Fiscal.....	-	50 rs.	300 rs.	-	200 rs.
Procurador pobres..	-	20 rs.	-	80 rs.	440 rs.
Procurador general.	500 mrs.	-	-	-	-
Portero.....	300 mrs.	-	-	-	-
Alcaide.....	9.000 mrs.	440 rs.	1.100 rs.	1.300 rs.	-
Sotalcaide.....	-	-	-	-	-
Ejecutor.....	-	440 rs.	440 rs.	500 rs.	300 rs.
Capellán.....	3.400 mrs.	160 rs.	330 rs.	500 rs.	500 rs.
Procurador Granada.	3.000 mrs.	-	800 rs.	440 rs.	-
Procurador Madrid..	1.500 mrs.	1000 rs.	-	540 rs.	-
Medico.....	-	-	100 rs.	100 rs.	100 rs.
Cirujano.....	-	-	60 rs.	60 rs.	60 rs.
Amo hospital.....	748 mrs.	-	-	-	-
Cuadrillero.....	500 mrs.	-	-	-	-

mrs= maravedís rs= reales

*HERMANDAD VIEJA DE TOLEDO

(en maravedís de vellón)

<u>OFICIAL</u>	<u>1612</u>	<u>1740</u>
Alcalde.....	200	2.700
Cuadrillero Mayor.	1.000	700

*HERMANDAD VIEJA DE TALAVERA

(en reales de vellón)

<u>OFICIAL</u>	<u>1747</u>	<u>1774</u>
Mayordomo.....	330	338
Fiscal/contador..	500	500

Cuadrillero.....	1.000	-	tenedor sello/		
Letrado.....	2.344	-	archivero mayor		
Contador.....	1.000	-	Procurador reos..	88	88
Procurador pobres..	374	700	Alcaide/Portero..	365	1.460
Tenedor del sello..	120	260	Asesor.....	330	330
Alcaide Toledo....	3.000	18.290	Regidor.....	800	-
Alcaide Ventas....	1.500	-	Cuadrillero mayor	700	-
Letrado en Corte..	4.000	-	Capellán.....	-	650
Mayordomo.....	12.000	8.500			
Procurador general	1.000	-			
Procurador fiscal..	748	-			
Abogado defensor..	748	-			
LLavero mayor.....	3.000	5.200			
Archivero menor...	-	1.400			
Solicitador Corte..	7.480	-			
Cirujano.....	-	2.000			
Capellán.....	-	10.408			
Escribano.....	-	15.000			
Verdugo.....	-	6.600			

253 El alguacil mayor ciudarrealeño don Luis Bermúdez no cobró los 800 rs. de su salario anual del periodo 1627-1628 hasta mediado 1632 (Ib., leg. 58, nº 4); en 1694 se satisfarán los 350 rs. bianuales devengados por el escribano Juan de Arenas San Martín durante su anterior tiempo de estancia en la Hermandad (Ib., leg 53, nº 12); y en 1784 fueron pagados los 200 rs., una parte de lo adeudado del monto de tres años al abogado don Juan Jiménez Coronado (Ib., leg. 62, nº 2). Por otra parte, en 1645 se registra la libranza de 65 rs. al comisario de Mancha Real -Jaén- Jacinto Cerón por conducir a tres ladrones a la cárcel manchega "y sin embargo que montava mas el dicho mayordomo no le pago mas" (Ib., leg. 58, nº 5); y asimismo, en 1692, de los emolumentos abonados al letrado Antonio de Rojas se anota que "aunque montava mas lo modero dicho señor alcalde" (Ib., leg. 58, nº 12).

254 20-XI-1795, Ciudad Real (Ib., leg. 62, nº 3, libranza 7, s.f.).

255 Correspondientes a los años 1692-1694, fueron librados al alcaide y sotalcaide de la galera real, Juan de Toledo y Gabriel de Oreja, un

total de 339 rs., por contribuir a la vigilancia y mantenimiento en dicha cárcel de varios reos hermandinos (Ib., leg. 58, nº 12).

²⁵⁶ He aquí los importes de dos salidas cronológicamente dilatadas: en 1597, el reconocimiento por parte del Santo Tribunal de la Alta Andalucía y Sierra Morena supuso unos estipendios de 55.964 mrs.; mientras que en 1778, la partida hermandina encabezada por el cuadrillero mayor don Tomás de Céspedes, en pos de unos gitanos que amedrentaban La Mancha, supuso un desembolso total aproximado de unos 12.345 rs. (Ib., legs. 56, nº 23 y 61, nº 4).

²⁵⁷ En las cuentas acreditadas del periodo 1773-1774 se consigna el descargo de 100 rs. destinados a gratificar a individuos que ejecutaron rondas por las cercanías de la capital manchega (Ib., leg. 61, nº 2).

²⁵⁸ En 1638, una fuga masiva de reos hallan el refugio temporal de la torre de la inmediata iglesia de San Pedro. Durante tres días y cuatro noches se procede a su cerco para lograr su entrega por inanición. Se encargaron de estrecharlo a los hermanos don Francisco Treviño y don Magín de Salazar, a quienes se dieron 100 rs.; don Nicolás de Melo y Damián Velázquez cobraron 6 rs. diarios por velar la torre y el cementerio, recurriéndose a los servicios de Juan García Prieto, Juan Arévalo, Francisco García, Bartolomé Ruiz, Juan Bravo, Juan de Toledo, Basilio López, Juan Portillo, Juan García de Marcos, Juan de Palma, Juan García y Alonso López como guardas de las calles circundantes (Ib., leg. 58, nº 5).

²⁵⁹ La asociación ciudarrealena se encargará durante gran parte de la Edad Moderna de velar por el mantenimiento del orden y la seguridad de

romerías tan importantes como la del Cristo de Urda, la de Baeza, o la de la Virgen de la Cabeza -Andújar-; asimismo garantizaría la vida y bienes de trajinantes que concurrían a las ferias y cuerdas de Consuegra, Villarrubia de los Ojos, Daimiel, Almagro, Villarta de San Juan, valle de Alcudia, y ya, durante el Setecientos, de numerosos mercados y ferias andaluzas y extremeñas.

260 Un papel suelto, datable en los últimos años del Quinientos o del primer tercio del Seiscientos, contiene información relativa a los gastos de caudal hermanino en Ciudad Real por dicho concepto:

Correo de Madrid.....	669'18 rs.	
Correo de Andalucía....	203'32 rs.	(Ib., leg. 56, nº 1, s.f)
Correo de Almagro.....	72'32 rs.	
Correo con Roma.....	20 rs.	
Paquetes.....	78 rs.	
Certificaciones.....	<u>287</u> rs.	
total...	1.331'14 rs	

261 Del periodo 1762-63 el cabildo asumió de sus arcas más de 730 rs. a receptor de las penas de Cámara de la Chancillería granadina, don Felipe Gámiz, por tomar la multa impuesta al notario hermandino Jacinto García Prieto por los excesos cometidos con el reo Cosme Damián y que la entidad manchega considera arreglada a sus usos (Ib., leg. 60, nº 5).

262 En 1687, este fue el desglose del gasto ocasionado por la conducción de cinco gitanos de la galera hermandina a la Caja de Toledo:

Alquiler de un carro para trasportar los reos.....	120 rs.
Alquiler de las mulas que tirasen del carro.....	42 rs.
Gratificaciones a los paisanos que la escoltaron....	360 rs.
Derechos del alguacil que comandó traslado.....	200 rs.
Acostamiento del escribano hermandino que concurrió.	90 rs.
Dinero entregado al alcaide de la Caja de Toledo....	38 rs.
Alimentos consumidos por los reos.....	<u>35</u> rs.
total...	885 rs.

(Ib., leg. 58, nº 12)

²⁶³ Ib., leg. 58, nº 5.

²⁶⁴ Ib. leg. 58, n 210.

²⁶⁵ Ib., leg. 58, nº 5 y 9.

²⁶⁶ Ib., leg. 58, nº 26.

²⁶⁷ Ib., leg. 62, nº 2.

²⁶⁸ Ib., leg. 57, nº 8.

²⁶⁹ El 1-V-1583 se elevaba memorial al Consejo de Castilla por parte de la congregación del monasterio de San Francisco solicitando ayuda económica, concretamente el producto de un regimiento concejil, para reconstruir su iglesia, pues no disponían de espacio habilitado para tal fin ante el profundo deterioro que sufría dicha fundación real (AHN. Consejos, leg. 4.409. nº 30).

²⁷⁰ En concepto de limosna fueron librados 60 rs. al padre guardián de dicho monasterio y otros 65 rs. por el tédeum en su capilla con la asistencia del coro y ayuda para cera del acto. Dichas sumas permanecerán invariables desde 1760 a 1800.

²⁷¹ A este respecto vid. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, "Caridad y asistencia social...", op. cit, pp. 52-58.

²⁷² Mayor importancia financiera tuvieron las ayudas concedidas por el cabildo de la Hermandad Vieja toledana a sus integrantes. El 8-IX-1664 Francisca Pérez, esposa del alcaide, suplicaba a la corporación el que, tras padecer más de quince años carbunclo, hacía pocos días había contagiado a uno de sus hijos, logrando 2.000 mrs. como ayuda de costa (Ib., leg 64, nº 8, s.f.); del mismo modo, el cabildo de 21-II-1692 aprobó librar 17.000 mrs. para dotar a una de las hijas de su carcelero, recientemente fallecido (Ib., leg. 67, nº 4, ff. 3vº-4r).

²⁷³ El número de estos cántaros nuevos, que posiblemente fuesen reciclados para el uso personal del alcaide o bien pasados a los calabozos para abastecerlos de agua y como aliviaderos nocturnos, varió anualmente entre los cuatro adquiridos en 1609 a los dos normalmente utilizados en dicho acto. La Hermandad apícola de Toledo, más ciudadosa del protocolo, el 1-VIII-1663 decidió comprar dos urnas de plata en las que practicar el sorteo (Ib., leg. 64, nº 5, s.f.).

²⁷⁴ Tal vez último vestigio de la gratificación pecuniaria con que la organización premiaba a los hermanos por concurrir a sus juntas y llegas, particulares o generales, en 1606 se consignaba en la entidad toledana que era práctica de su fraternidad conceder un real a cada uno de los concurrentes (Ib., leg, 63, f. 129r), y por el día de la Inmaculada Concepción, cuando iba el cabildo en pleno a la iglesia de San Juan de los Reyes, se entregaban también 4 rs. a cada uno de los personados (Ib., leg. 64, nº 4, s.f.).

²⁷⁵ 8-IX-1742, Ciudad Real (Ib., leg. 59, nº 4).

²⁷⁶ A principios del Seiscientos, el cabildo toledano distribuía cada año dos tipos de "raciones", según la calidad socio-profesional del

obsequiado. Se entregaban "raciones grandes" a alcaldes, mayordomo, escribano y "tenedor de libro de fundaciones" -o archivero mayor-; "raciones chicas" eran entregadas a regidores, cortador, procurador y abogado de pobres, cuadrillero mayor, tenedor del sello, solicitador del cabildo, procurador fiscal, alcaide, capellán, oficiales y "escribano del secreto"; a los hermanos con más antigüedad en la entidad les pertenecían cuatro de estas últimas "raciones" (Ib., leg. 63, s.f.). En los estatutos talaveranos de 1747 se establecía el siguiente agasajo anual a sus integrantes: a ambos alcaldes 8 pares de perdices, un carnero y un cordero; a cada uno sus regidores, cuadrillero mayor y notario 6 pares de perdices, medio carnero y un cordero; y , por último, 3 pares de perdices y un cordero al capellán y al mayordomo, dándose "la pluma" por Pascua de Navidad y las reses en el domingo de Resurrección (Ordenanzas, op. cit., p. 34).

²⁷⁷ Por ejemplo, en 1609 se gastaron 531 "asi en pluma como los dos reales a cada uno -de los hermanos-"; y en 1611 el importe total de dicha partida alcanzaba los 653 rs. (Ib., leg. 57, nº 6 y 8).

²⁷⁸ Evolución del monto de los aguinaldos navideños del Santo Tribunal manchego (siglos XVII y XVIII):

<u>AÑO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>TIPO DE REGALO</u>	<u>BENEFICIARIOS</u>
1602	406 rs.	Perdices	Hermanos y sus viudas
1603	3.000 mrs.	Perdices	Hermanos y sus viudas
1608	158 rs.	Perdices y conejos	Hermanos y sus viudas
1609	531 rs.	Perdices y dinero	Hermanos
1610	344 rs.	Perdices y conejos	Hermanos y sus viudas
1611	653 rs.	Perdices y dinero	Hermanos
1612	455 rs.	Perdices	Hermanos y sus viudas
1616	126 rs.	21 cuartos de carnero	-
1618	427 rs.	Perdices	Hermanos
	300 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1631	640 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1632	360 rs.	9 carneros	Oficiales hermandinos
1633	-	Carneros	-
1634	330 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos

1635	417 rs.	17 carneros	Oficiales hermandinos
1636	15.480 mrs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1637	619 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1639	700 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1642	684 rs.	18 carneros	Oficiales hermandinos
1643	674 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1644	468 rs.	13 carneros	Oficiales hermandinos
1645	432 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1684	486 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1685	638 rs.	Carneros	Oficiales hermandinos
1686	480 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1687	480 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1688	444 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1689	442 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1691	303 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1693	432 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1706	456 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1710	528 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1711	660 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1712	504 rs.	12 carneros	Oficiales hermandinos
1715	600 rs.	12 carneros	Hermanos
1718	686 rs.	14 carneros	Hermanos
1719	686 rs.	14 carneros	Hermanos
1722	616 rs.	14 carneros	Hermanos
1725	616 rs.	14 carneros	Hermanos
1727	840 rs.	14 carneros	Hermanos
1735	770 rs.	14 carneros	Hermanos
1736	770 rs.	14 carneros	Hermanos y viudas pobres
1738	785 rs.	14 carneros	Hermanos
1741	900 rs.	14 carneros	Hermanos
1742	700 rs.	14 carneros	Hermanos y viudas pobres
1744	560 rs.	14 carneros	-
1749	770 rs.	14 carneros	-
1751	980 rs.	14 carneros	-
1754	980 rs.	14 carneros	-
1761	737 rs.	14 carneros	-
1762	440 rs.	14 carneros/pan candeal	Hermanos
1764	640 rs.	14 carneros	Hermanos
	373 rs.	Perdices	Hermanos
1773	1.292 rs.	14 carneros y perdices	Hermanos
1775	1.272 rs.	14 carneros y perdices	Hermanos
1777	1.610 rs.	18 carneros y perdices	Hermanos

279 vid. nota 274.

280 AHN Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

281 27-II-1607, Ciudad Real (ADPCR., s.c.). Excepcional, por ser la última ocasión en que mencionará esta eventualidad, como la información

que nos aporta sobre la localización de la pieza cobrada, el depredador natural por excelencia de los enjambres. J. M. SÁNCHEZ BENITO recogió diversas noticias al respecto desde fines del Quinientos, en base a cuyas investigaciones sabemos que era costumbre llevar la cabeza y zarpas a la sede hermandina, ante cuyas puertas quedaban expuestas como muestra de la efectividad de la entidad en la defensa de sus intereses gremiales; *Santa Hermandad...*, op. cit., pp. 307-308. Sin duda, el paulatino exterminio de estos grandes plantígrados, acosados por los alimañeros y la degradación de su hábitat natural, determina su desaparición en fechas algo más tardías.

282 Cuentas rendidas el 12-IX-1637, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg 58, nº 6).

283 Ib., leg. 59, nº 1.

284 Ib., leg. 58, nº 5.

285 Ib., leg. 58, nº 15.

286 Tales cartas de excomunión en 1604 importaban 4 rs., llegando en 1741 a los 43 rs. (Ib., legs. 57, nº 4 y 59, nº 3, respectivamente).

287 Lo que en 1741 supone el pago añadido de otros 50 rs. de vellón por su trabajo (Ib., leg 59, nº 3).

288 17-X-1745, Ciudad Real (Ib., leg 60, nº 3, f. 13r).

289 13-IX-1636, Ciudad Real (Ib., leg 58, nº 5).

²⁹⁰ 12-XII-1640, Ciudad Real (Ib.).

²⁹¹ En 1641, 29.400 mrs; en 1644, 683 rs.; en 1645, 171.545 mrs (Ib., leg. 58, nº 5); en 1670, 250 rs. (Ib., leg. 58, nº 9), en 1686, 66 rs; y en 1694, 572 rs (Ib., leg. 58, nº 12).

²⁹² Ib., leg. 59, nº 7.

²⁹³ ADPCR. s.c., s.f.

²⁹⁴ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 8.

²⁹⁵ 11-IX-1718/22-XI-1719 (Ib., leg. 43, nº 7).

²⁹⁶ 10-IX-1633, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nº 4).

²⁹⁷ Ib., leg. 58, nº 12.

²⁹⁸ Cuentas rendidas desde 1711 a 1726 (Ib., leg. 58, nº 17 al 25).

²⁹⁹ Ib., leg 59, nº 7, s.f.

³⁰⁰ Ib., leg 59, nº 7 y 60, nº 1 al 3.

³⁰¹ 28-VIII-1767 (AMCR. Actas Capitulares, leg 25, nº 3, ff. 228-229).

³⁰² AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 343, ff. 32r-33r.

³⁰³ AHN. Div. Her., legs. 61, nº 5 y 62, nº 1 al 5; y ADPCR., s.c.

304 Ib., leg. 56, nº 23.

305 Ib., leg. 58, nº 2.

306 La aplicación de la condena impuesta al reo Manuel Felipe ocasionó, en 1694, unos desembolsos aproximados de 760 rs., de los cuales unos 93 rs. serían adelantados por los rectores del Santo Tribunal (Ib., leg. 58, nº 12).

307 12-IX-1711, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nº 17).

308 En el cargo presentado en 1750 se da cuenta de 5.805'20 rs. tomados del arca por el mayordomo Jacinto Isidro Granados, siendo reintegradas con prontitud (Ib., leg. 60, nº 1).

309 Ib.

310 Ib.

311 Ib., leg. 58, nº 58, nº 1.

312 Vid. apéndice documental, texto nº 12.

313 En las cuentas rendidas en septiembre de 1762 por el arquero Félix Eugenio de León se citan 4.687'17 rs. ingresadas al reembolsarse por Manuel Maluembre, arrendador del derecho de correduría ciudarrealena, por cuenta del capital adeudado. Este arrendatario, que controlaba un derecho que le hace intervenir en todas las almonedas públicas y compraventas de la localidad, también ostentaba por entonces de la percepción de la asadura hermandina (Ib., leg. 60, nº 4).

314 Rendición de cuentas del mayordomo Sebastián Gómez Comino del periodo contable 1773-1774 (Ib., leg. 61, nº 2). Conjugando actitudes poblacionistas y asistenciales, particulares, ayuntamientos y entidades benéficas de todo signo se encargaban de sufragar las dotes de determinadas docellas sin medios económicos cuya pobreza dificultaba un matrimonio ventajoso, relegándolas al ingreso a la Iglesia o a actitudes marginales, en todo caso comprometedoras de su futuro. En el caso de Ciudad Real tenemos noticia de que, a fines del siglo XVI, el indiano Gonzalo López de Higuera fundó una obra pía por la que donaba una substancial cantidad anual para la boda de tres mujeres pobres de Almodóvar del Campo, Ciudad Real y Puertollano; patronato que a principios del siglo XIX aún pervivía, aunque con serias dificultades y desarreglos (AHN. Consejos, leg 1.694, nº 40). En el momento de la fundación del hospital ciudarrealeno de la Concepción, también en el Quinientos, se contemplaba el costear siete dotes anuales a seis docellas y una monja, aunque a fines del Setecientos dicho instituto se había desvirtuado (Ib., leg 1.418, nº 13); siendo práctica usual de acaudalados y concejos hacer frente esporádicamente a esta auténtica labor caritativa.

315 AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 571, ff. 226r-228r.

316 Vid. nota 312.

5. RECURSOS MATERIALES DE LA ENTIDAD.

5.1. LA SEDE DEL SANTO TRIBUNAL CUIDARREALENO.

5.1.1. DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE.

La institución de La Hermandad manchega contó desde las postrimerías del siglo XV con un edificio de su propiedad que albergó todas las dependencias precisas para el desarrollo polifuncional de la entidad. Levantado en pleno centro urbano de Ciudad Real, inmediato a la plaza pública, contiguo a la prisión real y al hospital de San Juan de Dios, frontero con la puerta principal de la iglesia de San Pedro; ocupaba un solar que daba a la calles Cuchillería y Pílas, y cuyas proporciones eran de treinta varas de fachada y veintiocho de fondo, siendo su construcción de cal y piedra¹.

Desconocemos con exactitud el plano del inmueble, pero a través de algunos datos dispersos podemos hacernos una idea aproximada de la distribución de sus estancias y las reformas acometidas en su interior y su exterior.

La fachada de este edificio de dos alturas estaba organizada por cuatro almenas, una a cada extremo de su frontispicio y otras dos flanqueando la portada principal, sobre la que se construyó un arco para dotar de mayor majestuosidad al conjunto. A ambos lados de la entrada, dispuestas simétricamente en las dos plantas, se practicaron

para dotar de mayor majestuosidad al conjunto. A ambos lados de la entrada, dispuestas simétricamente en las dos plantas, se practicaron ventanas, reforzadas con verjas de forja y contraventanas de madera, así como un pequeño ventano, perteneciente al calabozo que daba a la calle, enrejado y con un cerco de afiladas púas a semejanza de los que poseían los conventos de clausura. La puerta principal, seguramente de doble hoja, era de madera con clavazón de hierro, cerradura metálica y asegurada desde dentro por un grueso postigo de madera.

En 1761-1762 se remozó la fachada, remodelándose su portada con piedra traída desde Calatrava la Vieja, bien de alguna cantera cercana a la propia fortaleza-convento calatraveño; se adquirieron una nueva portería para la entrada, siendo su madera trabajada por un afamado carpintero local, dándole mayor consistencia y decorándola con clavazón comprada en Toledo y Madrid, y adjudicándose al cerrajero valdepeñero Juan Trujillo el encastrado de una imponente cerradura. Sobre la portada el escultor local Joseph Vicente Quirós dirige la obra del labrado y colocación del escudo de la Hermandad Vieja y dos balaustradas de piedra a ambos costados².

La parte noble del inmueble se hallaba en la planta baja, lugar en el que se ubicaba probablemente su sala capitular, su antesala o sala de visita, la capilla del Espíritu Santo y el archivo.

La sala de juntas era el aposento más amplio del edificio; destinado a la celebración de asambleas en las que concurrían hermanos y oficiales, y en la que se tomaba confesión a los reos, alfombrándose suelo y paredes con esteras de enea durante el invierno para aliviar su humedad y la frialdad de la estancia³, eventualmente paliadas por un brasero alimentado con carbón vegetal. A principios del

Seiscientos, fue amueblado con un bufete de nogal, con las bisagras sobredoradas con pan de oro y de doble cerradura, para cubrir la función de escritorio⁴; los convocados se sentaban en unos escaños de madera, que por su prolongado uso hubieron de ser reparados en 1612 y 1711, hasta que en 1762 se adquirieron en Madrid dieciocho sillas torneadas por un monto total de mil doscientos diez reales de vellón⁵. La iluminación del aposento estaba garantizada, durante las horas de sol, por los ventanales cubiertos de vidrieras de colores y transparentes, puntualmente reparadas⁶, y por la noche mediante candeleros en ocasiones señaladas y cotidianamente con lámparas de aceite, ventilándose el recinto a través de las ventanas que daban a la calle y a uno de los patios interiores. Enlucidas las paredes con cal y arena; entre 1666-1667 el escultor Musepe López fue encargado de su ornato: haciendo en yeso un escudo real y un retablo con motivos religiosos en él aparecían un Fantócrator rodeado de serafines, acompañado por los santos Pedro y Pablo, fijando asimismo un cuadro de la Inmaculada Concepción, el pintor Diego Ruiz enfoscó los moldes de yeso, coloreando el escudo con las armas reales y policromando las figuras antes citadas⁷. En 1744-1745 se acometió su parcial remodelación, enluciendo su maltrecha decoración mural, pintando Joseph Marlo dos escudos en el aposento y recubriendo de pintura verde -el color de la Santa Hermandad- los maderos de la puerta que daba acceso a este lugar de reunión colegiado de la corporación apícola⁸.

Antesala de la estancia descrita se encontraba la sala de visita, habitáculo separado del pasillo de entrada por una sólida verja de hierro, bellamente adornada con motivos geométricos y vegetales. La finalidad de este pieza era la de antecámara donde aguardaban los arrestados por el Santo Tribunal o los subalternos de la entidad durante los cabildos para comparecer ante su presencia, siendo

pintados sus muros a fines del Setecientos por el buen hacer del pintor Joseph Muñoz de Merlo⁹.

El oratorio era una pequeña dependencia destinada al culto los días festivos, ofreciéndose misa rezada por el capellán hermandino a la que debían asistir reos y carceleros, disponiéndose unos bancos ante el pequeño altar, que tras 1760 debieron ser transportados al monasterio de San Francisco para situar en ellos a los hermanos durante las celebraciones religiosas. La capilla del Espíritu Santo será utilizada, ocasionalmente para tomarse confesión a los presos, de día o de noche¹⁰, y en ella permanecerían los condenados a muerte en acto de contrición tres días antes de su ejecución, reconfortados por religiosos. Iluminada a través de una claraboya vidriada, esterado suelo y altar hacia mediado el siglo XVIII -tras su incendio en 1758 del que resultó seriamente afectada su techumbre-, el pintor Juan Manuel Barón hizo un cuadro piadoso; y en 1774 paredes y techos fueron ornados con frescos del ya mencionado Joseph Muñoz de Merlo. A principios del presente siglo HERVÁS Y BUENDÍA describía esta capilla, remodelada en fechas posteriores, como uno de los lugares monumentales singulares de la ciudad, destacando el frontal del altar "obra de cerámica de los reputados alfares de Talavera, con el escudo de la Santa Hermandad en el centro y dos cuadrilleros a los lados"¹¹. Por la noche estaba permanentemente iluminada la capilla con velas o cirios de cera blanca, utilizándose cera labrada durante los oficios divinos previos a los cabildos plenarios y en días señalados.

El archivo, sito durante el Setecientos frente a la entrada principal, a los pies de oratorio, era un pequeño cuarto de obra encastrada en la recia pared; sus puertas de dos hojas pequeñas estaban forradas de "chapa de Vizcaya" y disponían de cuatro cerrajos

con sus correspondientes llaves. Dentro de él se disponían unos estantes de madera que albergaban la colección diplomática institucional y en la parte inferior se hallaba la antigua arca de tres llaves -donde se había guardado, en la sala capitular, toda esta documentación durante siglos, antes de que lo custodiado desbordase su capacidad y se arbitrara esta solución¹²-. Dicho arcón estuvo casi siempre en los aposentos bajos de la sede hermandina, salvo cortos periodos de tiempo en los que se arbitró su traslado a otras piezas del edificio¹³, pero sin salir nunca de él bajo ningún concepto.

Igualmente en la parte baja, pero totalmente independientes de los habitáculos antedichos, tras cruzar un patio interior o pasillo, se hallaban los tres calabozos originarios de la galera. Alineados a lo largo de un estrecho callejón, recibían nombres alusivos a sus características específicas: la celda que daba a la calle, más amplia y ventilada, era conocida por la de "la Gloria"; su redaña por "el Pumpatorio"; y su aneja, tenida por la más insalubre y húmeda, como "el Infierno" o "Valdínfierno"¹⁴. Esta última mazmorra sería también conocida como "Candonga", en recuerdo a un famoso salteador de caminos ejecutado por la Hermandad, destinada a los reos más peligrosos, quedándose a veces vacía por su excesiva incomodidad¹⁵, o inseguridad. Únicamente el calabozo de "la Gloria" daba mediante un ventanuco a la calle, quedando el resto escasamente ventilados por claraboyas altas enrejadas que daban a un patio interior o corral.

Cada mazmorra, habilitada para custodiar varios presos, dispone en su interior de unos poyos corridos, o bancos de albañilería arrimados a las paredes, sobre los que se colocaban las esteras de esparto para acomodarse los reclusos; en un rincón quedaba un espacio reservado para que hiciesen fuego los presos con el que calentarse o cocinar. Los

reos más contumaces eran asegurados a techos y paredes mediante cadenas y grillos anclados a la obra de los mismos. Excepcionalmente se utilizaría un cepo de madera para asegurar a los potencialmente más peligrosos¹⁶. El suelo de la celdas estaba empedrado con piedra viva y cantos rodados gruesos amalgamados con cal y yeso, como el resto de los aposentos, patios y corredores de la planta inferior, periódicamente aderezados; sus puertas eran dobles, contando con una primera portería de madera reforzada con hierro, una cerradura de llave y se abría hacia dentro, y otra de hierro con tres rejas de espiga dispuestas longitudinal y transversalmente, asegurada con un cerrojo y pasadores metálicos con candados. Las frecuentes fugas e intentos infructuosos determinan el continuo gasto de carpintería, cerrajería, forja y albañilería¹⁷ para recomponer los daños causados, debiéndose prácticamente todos los años de comprar, renovar o reparar, llaves, cerrojos, candados, grillos y puertas¹⁸. Se volvieron a empedrar, total o parcialmente los calabozos en los años 1603-1604, 1637-1638, 1675-1676, 1716-1717, 1725-1726, 1777-1778 y 1799.

En la planta superior se halla el cuarto usado para atormentar a los reos, en el que solía permanecer el potro y diversos instrumentos de tortura, como las argollas de hierro y las tres sortijas que se mencionan a principios del siglo XIX. Sobre los calabozos se encontraba la habitación donde dormía el alcaide y su cocina. La puerta de la cocina, de madera, estaba cerrada con una aldabilla, no disponiendo la ventana del aposento del carcelero de una reja de hierro adecuada a su seguridad hasta bien entrado el Setecientos, tras de algunos incidentes que hicieron temer por la integridad de dichos oficiales. Durante dicha centuria y al quedar desvirtuada la sala de torturas por lo inusual de su aplicación para ese fin, se colocaría en ella una cama de pino con jergón de arpillera y cáñamo, aderezada con

dos sábanas y una almohada para asistir a los reos enfermos¹⁹ o utilizada como cuarto donde incomunicar a los detenidos, a menudo mujeres²⁰. Todos los cuartos altos y bajos estaban enlucidos de cal.

Una escalera estrecha conducía a la campana cuyo tañido convocaba a hermanos y capitulares, avisando de las evasiones realizadas o abortadas. Dicha campana, prescrita desde los Capítulos de Maldonado, hubo de ser objeto de periódicas reparaciones²¹.

Gracias a la práctica de empedrar pasillos, patios, portal y corrales durante los siglos XVII y XVIII²², conocemos la extensión exacta de la partes no construidas del edificio²³. Se debió sacar tierra del corral de la cárcel, al menos, en 1676 y 1798-1799. En el corral principal, situado a espaldas de la parte edificada del edificio, se abría el pozo de agua dulce que garantizaba el abastecimiento de este precioso líquido a sus moradores²⁴. En 1736 se repararon las sogas nuevas al pozo, y hacia 1781 un carpintero proporcionaba un cubo de madera. A partir de 1794 con una periodicidad anual se refié reparadas estas sogas y acondicionado su brocal.

En uno de los corrales próximos a los calabozos se practicó un "lugar común", o pozo negro donde los reos satisfacían sus necesidades fisiológicas, siendo cubiertos y renovados a menudo para evitar contagios u otras incomodidades añadidas a su ya penosa reclusión.

Diversas mejoras estructurales serían acometidas siempre que las arcas hermandinas tuviesen el suficiente remanente para solventar la necesidades más imperiosas: en 1642 se fortificó un poste maestro de una de las esquinas de la casa-cárcel, importando la obra trescientos reales; poco después se levantaba la chimenea de la cocina de la

cárcel que se había caído en 1643; en 1669 se acondicionaban mazmorras, el tejado a dos aguas cubierto con tejas árabes y la chimenea antes citada; hacia 1685 ó 1686 se consolidan las tapias medianeras con el hospital de San Juan de Dios; en 1745 Francisco Martínez Almagro se encargó de reedificar las divisorias de la traspuerta de la galera y la prisión real²⁵.

En 1762, dentro del más profundo adacentamiento realizado en la sede hermandina desde su edificación, se construyeron tres celdas nuevas, previsiblemente sobre las ya existentes, levantándose una escalera para su acceso y derribar la antigua que conducía a los aposentos del alcalde; fueron colocadas doce argollas de hierro en otras tantas troneras de los nuevos calabozos, reforzándose con chapas metálicas las puertas de todos ellos²⁶, habilitándose otro aposento - tal vez sobre la sala capitular-, para trasladar al carcelero desde su ubicación originaria.

De esta forma, la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real dispone del mejor establecimiento penitenciario de la localidad y de toda su provincia, siendo utilizado eventualmente para custodiar reos de otras jurisdicciones, desde el propio corregimiento ciudarrealeno hasta las justicias de los territorios de órdenes, pasando por los arrestados por los dependientes de las rentas reales, levos, sediciosos, y un largo etcétera.

5.1.2. CONDICIONES DE VIDA DE LOS RECLUSOS.

La vida cotidiana en la galera hermandina de los reos preventivos y de sus guardianes, aunque distaba mucho de ser cómoda, ~~era~~ por regla general tampoco tenía la severidad que se presuponía a este tipo de establecimientos penitenciarios en el Antiguo Régimen.

A pesar de que juriconsultos, personas piadosas y viajeros clamaban ante las infrahumanas condiciones en que eran hacinados los reclusos²⁷, tales situaciones no se daban en igual medida en las pequeñas cárceles locales -donde los presos podían pulular por las calles, aunque cargados de cadenas y limosneando su sustento- que en las prisiones de los grandes núcleos urbanos de la época²⁸, dependiendo su dureza, asimismo, de variables estamentales, económicas, personales y penales.

De entrada, el mero hecho de ser encarcelado suponía una ineludible merma del honor, la deshonra legal²⁹, el menoscabo de la hacienda, la pérdida de la libertad de movimientos y el posible quebranto de la salud del desgraciado que caía en las redes de la justicia. En efecto, desde el mismo instante del arresto empezaba una serie de sucesos concatenados que parecían buscar más la purgación de una supuesta culpa no probada que el esclarecimiento puntual de los hechos que la suscitaron. El ingreso en prisión comportaba una infamia que inhabilitaba al reo para el desempeño de determinados oficios públicos, aparte el hecho del descrédito social derivado de esta acción legal, sumado a que en las pequeñas cárceles era prácticamente inevitable verse merclado en la mazmorra o en el resto de sus

dependencias con la chusma. Tanto es así, que mientras las justicias ordinarias intentan exonerar a los encartados estamentalmente más relevantes mediante subterfugios tales como reclusión domiciliaria o darles la villa como cárcel, la Hermandad manchega recurriría a transferir los detenidos por infracciones contra su hacienda a la inmediata cárcel real; incluso reos de otras de otras jurisdicciones se verían agraviados al ser custodiados junto a gitanos y bandoleros³⁰.

Puesto que el sustento material del detenido corría de su cuenta, siempre que ello se creyese factible, y tanto el proceso penal como los favores de sus carceleros consumían grandes sumas de dinero, la hacienda familiar del incoado peligraba desde el momento en que se dictaba auto de prisión y embargo. A esto se añadía que era imprevisible la duración de su confinamiento, por lo que algunos reos que disponían de un cierto desahogo patrimonial recurrieron a la venta de parte del mismo o a la liquidación urgente de negocios e inversiones para aliviar en lo posible los perjuicios causados a sus personas y familias³¹. Por otra parte, el encarcelamiento, a menudo, del cabeza de familia o de quien asumía el peso económico familiar dejaba a las personas a su cargo en precario, siendo abandonados a su suerte errando por el yermo por temor a correr su misma suerte, dirigiéndose a Ciudad Real para vivir de la mendicidad mientras estaban cerca del arrestado, o bien marchaban a sus lugares de origen donde la solidaridad familiar y vecinal les prestase las atenciones debidas.

Quienes no tenían caudales algunos debían confiar en la atención legal gratuita y en el asignado diario, o prest, que de oficio se aportaba desinteresadamente por el trikunal³². Tanto una como otro

distaron de ser suficientes, la primera porque, los letrados costeados por la Hermandad, aunque formalmente nombrados por los reos, no pondrían el mismo interés en defender a unos detenidos que por el mero hecho de serlo y que por su frecuente condición de marginado social tenían poco a su favor, a lo que se añadiría el que su defensa a ultranza podía apartarlos del servicio de uno de los escasos polos de trabajo para su cualificada profesión o indisponerlos con la oligarquía urbana que controlaba su magistratura; lo segundo era la evidente carencia del prest diario distribuido por el alcaide a instancias del mayordomo para garantizarles un mínimo sustento³³, a pesar de que era costumbre que en caso de enfermedad fuese doblado, corriendo por cuenta del Santo Instituto la atención sanitaria y espiritual, garantizando mejoras dietéticas como la inclusión de carne de gallina, vino, carnero o bizcochos. En todo caso, que los socorros arbitrados eran insuficientes lo demuestra el que los más pobres debían recurrir a la mendicidad, personalmente o a través de determinados miembros de su familia, para hacer frente a su puntual manutención.

La privación de libertad no era tan grave por sí misma como porque comportaba el contagio físico y moral derivado de la promiscuidad, los castigos adicionales, la dureza de los carceleros indispuestos contra quiénes no les gratificaban, las corruptelas existentes, la continencia sexual, las humillaciones personales de sus guardianes o compañeros de infortunio y la tediosa inactividad, a las que habría que añadir la incertidumbre por la marcha de la diligencias sumariales secretas y la duración de un arresto que, aunque preventivo, se haría interminable para quien lo padecía, aparte el hecho de que la distinción entre presos y detenidos fue un logro postrero de la

ideología ilustrada que calaría poco entre las instancias inferiores de justicia coetáneas³⁴.

Es cierto es que, aunque la mayoría de los doctrinarios jurídicos de la Edad Moderna insistían en el carácter puramente temporal y preventivo del confinamiento, así como en su función cautelar³⁵, implícitamente se reconocía su vertiente punitiva y aflictivo-purgativa de la reclusión, dejando las connotaciones correccionales sólo a los casos relativos a vagabundos y mujeres delincuentes.

La vida cotidiana en la prisión de la Santa Hermandad ciudarrealense era, sin duda, severa, pero no revestía el tono apocalíptico que la tradición o que la literatura de la época ha hecho tener entre nosotros una idea preconcebida de la misma.

Generalmente, las penalidades de los reos hermandinos comenzaban desde el momento mismo en que, de oficio o a instancia de parte, los alcaldes acompañados por asesor letrado emitían autos de prendimiento de las personas y bienes de los involucrados en un determinado acto delictivo. Comisarios, cuadrilleros o alguaciles de la entidad, o bien la propia justicia local, ejecutaba dicha orden, comenzando su periplo por diversas prisiones municipales, custodiado por una partida de paisanos proporcionados por los pueblos por donde transitaba bajo el responsable último de su traslado, al ministro captor u otro representante del Santo Tribunal. Se iniciaba así un agotador viaje hasta llegar a Ciudad Real, casi siempre a lomos de un rucio³⁶, atenazados sus miembros con grillos o manillas -esposas-, y cargados de cadenas, sirviéndose de los caminos más transitados para evitar sorpresas desagradables, o esquivándolos y dando rodeos que alargaban interminablemente el penoso tránsito por igual motivo, en todo momento

evitando el paso por lugares sagrados para dificultar las huidas a asilo; no es difícil de imaginar que las inclemencias del camino serían agravadas por la intransigencia de unos guardianes no profesionales que ejercían su labor contra su voluntad, y la incomprensible actitud de algunas autoridades para conceder las necesarias prisiones donde pernoctar a buen recaudo, alargándose las marchas para hallar un lugar adecuado donde pasar la noche, preferiblemente en poblado.

Terminada la conducción ante el alcaide del detenido y ante el mayordomo de lo incautado o su producto, con relativa frecuencias tras incidentes de todo tipo como intentos de fuga, frustrados intentos de liberación a la comitiva por parte de sus deudos o cómplices e incluso tentativas de soborno. En realidad, sus penalidades no habrían hecho sino comenzar; el carcelero tomaba constancia de su nombre completo, origen y vecindad, delitos imputados, la fecha de ingreso como recluso y el nombre de quien lo entregaba. En ese instante se le proporcionaba ropa con la que cubrirse si venía sin ella, dándosele una estera sobre la que descansar en el piso de la mazmorra para evitar su frialdad y posibles enfermedades reumáticas y virales, curándose sus heridas si las tuviese³⁷.

Casi siempre separado de su familia y deudos, el arrestado se halla a la merced de los acontecimientos: presionado por alcaldes y notarios para que confesasen sus culpas; apremiados por el alcaide para conciliar su favor mediante dádivas; despojado por sus compañeros de lo poco que había podido ocultar a sus captores; y con unos letrados que pretendían ganarse su confianza para engrosar su propio peculio, su destino parecería sellado en caso de no disponer del caudal

suficiente para franquear las trabas que le abocaban inexorablemente a la desesperación o a la resignación ante una sentencia casi siempre desfavorable.

La rutina diaria en la galera era monótona y repetitiva. Levantados a las ocho o las nueve de la mañana, se procedía a un registro cotidiano de los calabozos por parte del alcaide y de su ayudante. Poco después tomaban un ligero desayuno y, cuando la climatología lo permitía, eran sacados al patio para que paseasen, tomaran el sol o charlasen entre ellos; a la una o las dos del mediodía almorzaban un guiso aguanado de despojos de reses o legumbres, pan, queso o frutas del tiempo -uvas en otoño, melón o duraznos en verano; castañas, nueces, higos secos o bellotas en invierno- que previamente habían encargado comprar en la plaza, no faltando vino adquirido en las tabernas y bodega próximas cuya calidad dependía de las posibilidades de sus compradores. La tarde se la pasaban fumando tabaco, jugando a naipes y conversando entre ellos, o con sus guardianes y las visitas permitidas por los alcaides y alcaldes. El anochecer era el momento de ingerir alguna cañalilla de sopas hechas con agua, pan de cebada o centeno, algún pimiento seco y ajo, acompañado de frutos secos o de un pedazo de cecina. Atendiendo a la estación, entre las siete o las nueve de la noche se recogían en sus celdas correspondientes, el alcaide aseguraba con grillos a algunos, constatando que puertas y prisiones quedaran perfectamente cerradas. En el lugar destinado a encender fuego, en el interior de la mazmorra común, había un haz de leña y carbón, un cántaro que sirve como excusado y otra vasija o botijo para el suministro nocturno de agua potable. Peor suerte corrían los reos contumaces, sujetos a los muros mediante grillos y cadenas, lo que no tan solo les impedía abandonar el calabozo sino también limitaba en gran medida sus movimientos, entumeciendo sus miembros.

Periódicamente se quemaba la basura acumulada en celdas y corrales y se procedía igualmente a cubrir con tierra el pozo ciego que se practicaba a tal efecto. Cuando las inmundicias resultaban a todas luces insalubres, o con motivo de alguna epidemia en la cárcel o en la ciudad, se contrataba los servicios de varios peones para limpiarlos, lo que se efectuará, al menos, entre 1735-1736 y 1738-1739³⁸.

No tenemos constancia que, según se acostumbraba a realizar en otras ciudades e instituciones, ningún particular ni congregación piadosa atendiese las necesidades materiales de los reos de hermandad en Ciudad Real, lo que acontecía incluso en la contigua cárcel real local y en la propia galera de su homónima toledana³⁹. Ello pudo deberse a la confluencia de varios factores, a saber, la decadencia económica de la capital manchega durante decenios, lo que sin duda inhibiría la caridad privada; el carácter particularmente peyorativo de sus reclusos y el que estos fuesen, en su mayor parte, forasteros.

Siempre que lo creyese oportuno, o prevenido por el capellán y los alcaides, es decir quiénes esporádica o habitualmente estaban en contacto más o menos directo con los reclusos, el alcaide debía velar porque estuviesen cubiertas sus necesidades sanitarias, efectos de botica, la concurrencia de barbero -haciéndose necesario su rapado no tanto por cuestiones de aseo personal o estéticas como para tratar de paliar las molestias provocadas por los piojos que invadían sus cabellos-, u otros cualesquier cuidados de los confinados.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo los estipulado en los estatutos y recomendado por la jurisprudencia, permitiendo la documentación existente entrever los notables desarreglos cometidos y

las arbitrariedades existentes: relajación de las medidas de seguridad mediante el soborno; reos que abandonan las mazmorras durante la mayor parte del día y que por la noche duermen en la cocina alta -aposento más confortable por la privacidad que comporta su separación del resto de los detenidos y el ser el lugar más acogedor, por estar caldeado durante gran parte del día-, e incluso que abandonan temporalmente el inmueble para comprar, asistir a tabernas o hacer todo tipo de diligencias personales; alcaides que retraen el prest diario a los reos o se quedan con parte de él⁴⁰; parientes pobres que limosnean en la ciudad para su propio mantenimiento y el del encarcelado⁴¹; cohechos a carceleros para lograr el alivio de sus grilletes; dependientes hermandinos implicados en evasiones, por complicidad o negligencia; muertes y enfermedades de algunos reclusos⁴²; suicidio de otros⁴³; heridas producidas por los carceleros a los custodiados en tránsito nunca debidamente aclarados⁴⁴; alcaides que intentan satisfacer sus más bajas pasiones a costa de los detenidos⁴⁵; exigencias de carcelajes a los sentenciados, obstaculizando su puesta en libertad; etc.

A pesar del empeño repetidamente manifestado por legisladores, doctrinarios y los propios rectores hermandinos, tales excesos nunca serían totalmente erradicados. Así, en una fecha tan postrera para nuestra investigación como 1803, se habría expediente disciplinario al carcelero por exigir dinero a unos levos custodiados en el inmueble⁴⁶.

A fines del Setecientos, el alcaide, aparte de contar con la ayuda de un ayudante con rango de suboficial, el sotalcaide, verá facilitada su labor con la presencia en la galera de un perro amaestrado que le advertiría de posibles fugas y defendería su vida en último extremo⁴⁷.

5.1.3. FUGAS DE LA GALERA HERMANDINA.

Entre las lacras que secularmente aquejan al sistema penitenciario una de las principales de la época era la inseguridad de los recintos destinados a este finalidad, normalmente ubicados en pleno casco urbano que casi siempre se tratan de edificios antiguos o habilitados para ello, cuya misma solidez estructural se ve paulatinamente deteriorada por el paso del tiempo y los daños causados ante las reiteradas evasiones. Clave fundamental de muchas de estas fugas, algunas de ellas masivas, era la presumible colaboración de elementos exteriores, dándose incluso la eventualidad de verse envueltos, por complicidad o pasividad, sus mismos carceleros.

A continuación nos detendremos en el estudio de algunas de las huidas o de los intentos de fuga más significativas de la cárcel perteneciente a la Hermandad manchega, bien sea por la complejidad de su procedimiento o por la calidad de los evadidos, no pretendiendo ser más que una muestra significativa de la treintena larga de fugas fallidas o coronadas con el éxito llevadas a cabo en este recinto.

La primera noticia que tenemos de quebrantamiento de la cárcel hermandina, aunque con toda seguridad no sería la primera efectuada, data de fines del Quinientos. En efecto, arrestado el almagreño Blas de Prado en mayo de 1594, por haber herido en despoblado a un convecino, a mediados de julio siguiente había escapado, con la ayuda de un esclavo también encarcelado, barrenando la puerta de madera y la reja exterior del calabozo de enmedio, desde donde salieron al patio y de allí se descolgaron por una de las almenas que daban a la calle

hogueras y portando antorchas, siendo gratificados con un ducado y proporcionándoles vino para soportar la vigilia. Rendidos los huidos por inanición, se entregarían a sus guardíanes, debiendo ser asistidos con "pan, vino y pasteles porque salieron debilitados de hambre", doblándoles el prest a los tres primeros por ser afligidos con azotes, convalenciendo dos día hasta su recuperación⁴⁹.

Habrá que esperar a 1669 para hallar un nuevo caso espectacular de fuga. Indiciados del hurto de unos colmenares unos pastores toledanos en los últimos días del mes de febrero no había pasado una semana cuando ya se habían escapado. Los alcaldes, enterados del suceso la misma mañana, recogen el testimonio a inculpados o sospechosos y pronto comienzan a salir a la luz irregularidades. Cristóbal de Guzmán, cuñado del alcaide titular, era quien dormía con su mujer e hijos en el aposento junto a la cocina alta, donde se recogían durante la noche los huidos, mientras el carcelero titular Juan de Oreja yacía en la cama con su mujer. Se ordena inspeccionar la almena de la que pendían unas correas, y dos peritos confirman que subieron por la chimenea de la cocina y caminando por el tejado alcanzaron dicha almena, desde donde se descolgaron a la calle. Uno de los presos menciona que el mediodía anterior se permitió la visita privada de dos sujetos a los reclusos, uno de los cuales era el dueño del rebaño que custodiaban. Tal vez desistiendo de su captura por tratarse de un delito menor, el teniente de alguacil mayor intenta embargar unos carneros al mayoral fugado, pero su labor será obstaculizada por el citado ganadero Cristóbal Rey, pues "por ser hombre poderoso en dicha villa -Mora- no avia ministro que quisiera hacer diligencias contra el"⁵⁰. Ante la inhibición del comisionado hermandino, él mismo hubo de pagar el importe de las reses dejadas en depósito y nunca recuperadas.

El alcaide, apesadumbrado por los acontecimientos, sería sustituido interinamente por Jerónimo de Yébenes, ex-arguero del Santo Instituto.

Otro suceso notorio fue el protagonizado en 1715 por los comisarios don Gabriel de Rico Valle y don Bartolomé de Baena Laso de la Vega, vecinos de Huelma. Cuestionado el nombramiento del primero por el cabildo de dicha localidad⁵¹, interceptaron y vejaron a los diputados de dicho concejo jiennense en Santa Cruz de Mudela -Ciudad Real-, cuando se dirigían a presentar sus quejas ante el tribunal manchego, ingresando por tales desafueros en prisión en octubre de dicho año.

A las siete de la mañana del 24 de mayo de 1715, aprovechándose que el alcaide Cristóbal de Soto repartía el estipendio semanal a los reos, se permite la salida de Gabriel Rico a la plaza para adquirir su sustento, y media hora después lo secundó su compañero. Transcurridas las horas, parte el carcelero en su búsqueda, y tras invertir todo el día, no informan de la fuga hasta la madrugada siguiente. El alcaide, desposeído de su empleo y aprehendido de inmediato, se excusa de su reprochable actitud diciendo que a menudo eran visitados por don Tomás de Aguilera, hermano caballero, quien como miembro eminente de la corporación había recomendado su libertad de movimientos por la ciudad, licencia que no sería refrendada desde las alcaldías. Tomados por unos cuatreros perseguidos por la justicia, cuarenta y ocho horas después son arrestados por los alcaldes ordinarios de La Guardia -Toledo-. Conducidos a la galera de Ciudad Real, Bartolomé Baena logrará deshacerse de sus guardianes, asilándose en una ermita de Tembleque -Toledo-, aunque su compañero no corrió la misma suerte, ingresando en prisión de nuevo el 8 de junio de 1716, aunque trece días después, aprovechándose de la relajación de su confinamiento, logrará evadirse definitivamente⁵².

Una década más tarde, Andrés Díaz Palacios y Pedro Andrés Pérez, quienes tenían a sus espaldas un amplio historial delictivo que incluía estafas, robos, asesinatos y múltiples fugas desde hacía un lustro⁵³, en el verano de 1725 eran llevados ante el Santo Tribunal por varios comisarios andaluces reforzados con efectivos militares. Llevaban unos siete meses encarcelados en Ciudad Real, dilatándose la resolución de su pleito al alegarse un enésimo recurso de fuerza y tras una atrevida operación infructuosa de liberación protagonizada por una partida de gitanos a caballo y fuertemente armados que con su cabecilla portando bastón de justicia los reclamó ante la puerta misma del Santo Tribunal, cuando comenzaron a discurrir el modo de fugarse del presidio en que se hallaban. La tarde del 5 de febrero de 1726, alertados los alcaldes de su intento de fuga de la celda de "la Gloria" por el tañido de la campana; acompañados de letrado y de escribanos recorrieron la mazmorra, constatando que habían sido serrados los tránculos de los grillos.

Parece que al mediodía, tras emborrachar (?) a sus compañeros de infortunio, y pertrechados con sendas navajas y otros utensilios proporcionados por la madre de los huidos, y de dos barrenas -ocultas en dicha celda y la de "Valdínfierno", bajo la lumbre- comenzaron a horadar la puerta de madera de la mazmorra, con la seguridad que otro gitano retraído en el convento de San Francisco les facilitaría armas de fuego. Comentan los otros reos que se había diferido la huida para que no se les imputase el óbito de un alcaide moribundo. Revisadas a conciencia las celdas se halla una navaja de barbero sin cachas, la vaina de un cuchillo, dos navajas de regular tamaño, y una ganzúa hecha con la punta de una hoz; el calabozo de la calle estaba agujereada en su parte alta y baja, simulándose el color de la madera

con pan masticado y tierra. Probadas sus intenciones, serán asegurados en "el Purgatorio" ambos gitanos con dos pares de grillos y sus respectivas cadenas, prendiéndose a su madre, Leonor, como cómplice de la frustrada fuga.

El 1 de abril de 1726 era confinada "en un encierro en quarto separado"⁵⁴, garantizándose su incomunicación; un mes después se le toma declaración diciendo llamarse Leonor de Malla, natural de Calasparra y vecina de Puebla de Alcocer, admitiendo sólo que durante el invierno llevó carbón para calentar el calabozo de sus hijos, entregándoselo a través de una reja y siempre en presencia de la esposa del alcaide, y únicamente de vez en cuando les hacía llegar el pan que limosneaba; dos días más tarde se ratificaba en lo antes expuesto, librándose autos de culpa, cargo y prueba, quedando arrestada en el recinto hermandino. Temiendo por su salud, y al ser mayor de sesenta años, pocos días después sería condenada a destierro de la ciudad y sus arrabales, siendo conducida para su ejecución a la puerta de Granada⁵⁵.

Mientras tanto, los reos hubieron de ser descargados de sus cadenas porque los grillos habían llagado y tumorado sus piernas. Asume el caso el vicario visitador de Ciudad Real y su partido, declarando los gitanos bajo protección eclesiástica y excomulgando a los alcaldes por ignorar los autos instruidos en su audiencia. La Real Chancillería de Granada tercia declarando que los encartados fueron prendidos en profano, inhibiendo al vicario y ordenando la absolución eclesiástica de los alcaldes en doce días de plazo, pues aunque hubiesen sido extraídos violentamente de sagrado por hula pontificia se estipulaba la prescripción de indulto por tal motivo transcurridos dos años⁵⁶.

Pronunciada la audiencia granadina, en el verano de 1726 los referidos gitanos habían logrado huir, informándose al cabildo que merodeaban en las proximidades de Puebla de Alcocer, atemorizando cortijos y aldeas, amedrentando a pastores, maltratando y robando a los arrieros, pese a ser perseguidos por una partida comandada por el comisario manchego Antonio Martín Hinojosa. La última noticia que tenemos al respecto data de 1728, cuando , unidos a una cuadrilla de bandidos, cometían innumerables abigeatos en la vega de Hornos del Segura, tras rastreadse su presencia por los reinos de Granada y Murcia. No falta el memorial del ministro Francisco Tomás de Guerdo desde un pueblo granadino, comunicando que, habiendo preguntado por su paradero a la justicia local, un chico avisó a los gitanos para que huyesen del sagrado donde se hallaban, reteniéndose su acción y al pedir a quince o veinte hombres para su captura lo único que consiguió fue amenazas de que si no moderaba sus exigencias sería llevado a prisión.⁵⁷.

Entre las evasiones realizadas en la década de 1725-35, dos llaman poderosamente nuestra atención: la primera es la llevada a cabo en 1729 por Bartolomé Tocados y otros delincuentes, y la segunda es la acontecida en 1734 por unos reos de lesa magestad, vecinos de la villa Puertollano.

Atrapado, en enero de 1730, el emeritense Bartolomé Tocados por el alcaide y sus deudos fuera de una ermita cercana a Corral de Calatrava, donde estaba acogido desde hacía meses, manteniéndose de su trabajo como cordelero, este reo de hermandad -desde que el 1710 protagonizó un robo con violencia en la ermita de la Candelaria- confiesa el modo en que había gestado su fuga de la galera hermandina. Las Navidades de 1728, recluido en la celda "Valdinfierno", logró de

su carcelero el alivio de sus grillos al ofrecerle un puñado de reales, cambiándoselos por otra cadena más ligera y acomodándolo en el calabozo de enmedio; allí, uno de los reclusos repara en la cadena que portaba Tocados y se cerciora que era la que había usado el gitano Francisco Pérez, que siendo serrada había sido recompuesta. No encuentra el lugar exacto de su antigua fractura hasta el 2 de mayo de 1729, acordando su portador junto a Juan de la Horden y Antonio Hernández aprovecharse de la ocasión que se les brindaba: las puertas de las celdas permanecían abiertas y los registros se demoraban hasta hacerse semanales -coincidiendo con las misas en la capilla del Espíritu Santo-, siendo público el que la llave de la puerta de la calle se guardaba bajo una piedra del patio. Desde el día de la Cruz de mayo comienzan los preparativos para su fuga, horadando el muro con un clavo grande y lodando el agujero practicado durante la semana los sábados y vísperas de fiesta con tierra y barro amalgamado con sus propios excrementos. Terminado el agujero el 14 de junio, Juan de la Horden apalanca el eslabón reparado con un palo hasta que cede, abandonando la cárcel la madrugada del 15 de junio, y asilándose en el convento de carmelitas descalzos de la ciudad⁵⁸.

Próxima a mediar la década de 1730 aconteció la segunda de estas fugas, que en esta ocasión tuvo como actores a Miguel de Mora Villajos y a Juan Adán López "el Vayo", cabezas visibles de la algarada de Puertollano de la primavera precedente, conducidos junto a otros cinco reos a la galera hermandina como cárcel segura⁵⁹. El 23 de agosto de 1734, tras comprobarse que los interfectos habían pasado la noche en la sala capitular junto al resto de los encartados por el reciente motín del pan sofocado por las tropas, son echados de menos en el recuento matinal efectuado por el alcaide Juan Martel. Cumplimentado el subsiguiente reconocimiento por parte de los alcaldes, acompañados

de un nutrido grupo de letrados, notarios y oficiales de la entidad, se pone de manifiesto el procedimiento seguido al hallar junto a una pared del patio de la galera el cepo de encina que había sacado de una de las mazmorras para su arreglo. Desde el Santo Tribunal pretenden exculparse del caso, manifestando la falta de recursos arbitrados por la justicia real para su manutención, justificándose la huida argumentando que

"...si la hizieron fue viendose aflixidos por la nezesidad que pasavan en dicha prision pues no tenian quien los socorriese y en tres dias consta, no comieron, como tambien el que por no haber calabozos en dicha carzel y estar estos ocupados con los reos del tribunal, todos los referudos reos andavan sueltos por dicha carzel..."⁶⁰

Informado el juez pesquisador de la causa, en septiembre de 1734 se declaraba en rebeldía a los fugados, al no entregarse en la cárcel pública de Puertollano, y dejando a los alcaldes hermandinos la potestad de determinar la culpa del carcelero Juan Martel, a quien ni tan siquiera embargaron sus bienes por no hallar nada de valor en que procederse. Meses después, se echó tierra sobre el asunto y la causa contra dicho carcelero será sobreseída⁶¹.

Al menos otras seis fugas se registrarán entre 1735-1760, teniendo como denominador común la aparente simplicidad en su realización y la violencia de su ejecución, llegándose a herir o maltratar físicamente, en repetidas ocasiones, al alcaide o a su familia⁶². En el plazo de dos meses, durante el 1774, un condenado a la pena capital intentó fugarse por dos veces de la prisión de hermandad⁶³; y en 1797 seis reclusos, uno de ellos un desertor de caballería, estuvieron a punto de lograrlo, y solo la pronta intervención de un destacamento militar acantonado en la plaza pública pudo impedirlo, alertados desde la penitenciaría⁶⁴.

En la segunda mitad del siglo XVIII, al menos en dos oportunidades, pueden constatarse indicios racionales de que se hallaban implicados en dichas tentativas sus carceleros o personas allegadas a este oficial.

La madrugada del 1 de octubre de 1768 se puso en conocimiento de los magistrados hermandinos la fuga del calabozo de la calle de los reos Cristóbal Corchero "Cuenca", Antonio Segura y Diego Callejas, este último perteneciente a la jurisdicción ordinaria. El sistema utilizado fue sencillo: descorrido con sigilo el cerrojo de la puerta de madera -habiéndose untado la cerradura con aceite para evitar ruidos- fue limada una de las espigas de hierro de la segunda puerta; descalzados, se subieron a la almenilla que adornaba la muralla y de allí se descolgaron por la reja de la sala capitular a la calle. Interrogados reos y carceleros, se descubren nuevos datos: el alcaide había efectuado un registro rutinario a las tres del mediodía, y eran conocidos que todas las noches entregaba las llaves a su cuñada para evitar sorpresas; sin embargo varios hechos llamaron la atención a los alcaldes: el aceite y la pavesa que recubría el cerrojo para facilitar su apertura silenciosa, la huida a sagrado del alcaide sin dar cuenta de lo acontecido y la noticia de que hacía unas semanas un dominico tomó confesión a Callejas en el oratorio, advirtiéndolo los custodiados que se les encerraba a las siete de la tarde "sin embargo de la costumbre que ay de no zerrarlos hasta la diez y otras veces mas tarde"⁶⁵. Todos los indicios apuntaban al hijo menor del carcelero, Vicente Ruiz Dorado -joven de dieciséis años, aprendiz de herrero-. Su padre, Gaspar Dorado -de sesenta y cuatro años-, dice haber abandonado la cárcel únicamente de mañana para adquirir bastimentos para los reclusos, no habiendo tocado la campana cuando tuvo constancia de la

huida por estar turbado ante la noticia y ser la madrugada mala hora para tales alarmas, aunque sin duda lo que pretendía era ganar tiempo para acogerse al sagrado del convento de S. Francisco. Su imprudencia determina que se cercase el edificio pío, incautándosele sus pobres pertenencias⁶⁶, nombrándose interinamente como sustituto Juan Serrano "Pariente". Las pesquisas de los alcaldes culminan con el auto de prisión y secuestro patrimonial contra Juan García Hortelano por complicidad con los prófugos, pespachándose aún en 1770 cartas-guía para que los justicias manchegos recorriesen mesones, sagrados, tabernas y plazas de sus pueblos y los comarcanos en su búsqueda. Detenido al fin Diego Calleja el 15 de octubre de 1770 por los alguaciles de Villanueva de los Infantes, delatará a todos los involucrados: el hijo del alcaide fue sobornado, el mesonero de la posada de la Fruta que adquirió armas cortas para la fuga y medió ante Vicente Ruiz, un contrabandista llamado Salvador le entregó una navaja al ahora arrestado, contándose incluso con la connivencia del alcaide de la prisión real, Juan Pacheco; con tales colaboradores les fue fácil disimular los grillos aserrados con cera negra, fugándose por San Miguel, cuando se corrían toros desde el santuario de la Poblachuela; de la cárcel pasaron al pórtico de la iglesia de San Pedro y de allí unos se dirigieron a Sierra Morena y otros hacia Portugal. Como quiera que el alcaide aún permanecía en sagrado, los alcaldes apresaron a su hijo, quejándose en 1771 el fiscal de la causa que desde mediados de 1769 no se habían seguido los pasos apropiados para dilucidar las responsabilidades del alcaide ni de su vástago, pese la orden al respecto emanada desde la Chancillería de Granada.

La noche del 26 de noviembre de 1793 tiene lugar la fuga masiva más espectacular de la sede hermandina de la que tenemos noticia, al quebrantar su reclusión nueve reos llevándose consigo a la hija

soltera del alcaide, Antonia Toledo. Aunque, en principio, se especuló con la teoría de un secuestro, pronto se hará patente su colaboración activa en la huida, probablemente seducida por algunos de los prófugos. El cuadrillero mayor don Agustín Pérez de Madrid, en compañía de varios cuadrilleros y de un destacamento de guardas montados de la ronda de tabacos, parten de Ciudad Real en su búsqueda, prácticamente a su costa⁶⁷, designándose como alcaide interino Alfonso Campayo. Capturados en 1794 algunos de ellos, el cuadrillero mayor Diego Alarcón, auxiliado de otro cuadrillero y previa consulta al Consejo de Castilla⁶⁸, conducen a Antonio Toledo al Real Hospicio de San Fernando, refrendándose en Granada su condena de cuatro años de internamiento.

No sería la última ocasión en que tenemos noticia que acontecieron hechos similares, ya que el 5 de mayo de 1800 tres reos escaparon de la vigilancia a que se veían sometidos por parte de los oficiales hermandinos, siendo inútiles las diligencias a posteriori para que volvieran a su confinamiento⁶⁹.

De este sucinto muestrero de algunas de las fugas que mejor encarnan la realidad penitenciaria de la galera manchega pueden extraerse las siguientes conclusiones: los intentos de huida bien pudieron ser espoleados por las penalidades añadidas a una prisión cautoria de duración imprevisible; el reiterado quebranto de la cárcel es solo explicable por la falta de solidez del edificio y de sus prisiones⁷⁰, la relajación, a veces interesado, de las medidas de seguridad y la ocasional implicación de terceras personas -sus propios carceleros o sus deudos-; los alcaides, ante tan reiterados intentos, responden informando puntualmente a sus superiores o acogiéndose al sagrado de San Pedro, a veces secundando a los mismo prófugos, para evitar

mayores rigores en su declaración -al exponerse de ser atormentados-; invariablemente, los perjuicios derivados a los carceleros no suelen exceder la prisión temporal, el secuestro de sus pocos bienes y la separación de su empleo y sueldo. o, a menudo, pagar la sanción impuesta desde Granada⁷¹, renunciando implícitamente el Santo Tribunal a agotar las medidas punitivas dispuestas por ley para tales casos⁷², guardando su severidad para el castigo de los contumaces y sus cómplices, aplicándoles la pena de azotes prescrita por sus estatutos⁷³; hay un alto porcentaje de fugas culminadas por el éxito, aunque no es extraño que vuelvan a caer en las redes de la justicia, aumentando sus condenas, torándose su actitud como prueba manifiesta de culpabilidad.

En definitiva, el sistema carcelario existente, del que la prisión de la Hermandad Vieja ciudarrealeña no es sino buena muestra de él, estaba aquejado de multitud de defectos y carencias, parcialmente atenuadas en este caso concreto porque junto a la relativa adecuación del inmueble a dicho fin, respondiendo sus proporciones durante siglos a su grado de utilización, era algo más elevado el control sobre las actuaciones de los encargados de su custodia, aunque reproduciendo en último extremo las características comunes de estos lugares de reclusión de la mayor parte de la Europa preindustrial⁷⁴.

5.2. PERALVILLO.

En las inmediaciones de Ciudad Real, al norte del Guadiana, se encontraba esta aldea de la villa de Miguelturra, adscrita a la orden de Calatrava desde principios del siglo XIV⁷⁵. Especuló DELGADO MERCHÁN con que, mediada dicha centuria, este lugar ya estaba ligado a los colmeneros de la capital manchega como lugar de ejecución acostumbrado de sus reos⁷⁶, aunque antes del Cuatrocientos no tendremos constancia documental de este hecho⁷⁷.

Lo cierto es que este paraje, situado en unas colinas bien visibles desde el camino real de la ciudad a Toledo y Madrid, tuvo desde época inmemorial el Santo Instituto jurisdicción sobre el cerro situado al lado izquierdo de esta vía de tránsito según como se cruzaba el puente de Santa Olaya y el molino del Emperador.

Aunque en un principio las ejecuciones tenían lugar donde se habían perpetrado las fechorías de los delinquentes, paulatinamente iría arraigando la costumbre de ajusticiarlos en Peralvillo, dada su cercanía a la sede hermandina, lo que solventaría gastos innecesarios y aumentaría su prestigio ante sus vecinos en un momento en que centralizó su aparato de administración de justicia⁷⁸. Frente al altozano estaba ubicada el arca que hacía las veces de osario de los malhechores asaeteados, quedando sus cadáveres expuestos a merced de los carroñeros y de la intemperie durante semanas; dicha construcción, confeccionada con sillería de piedra, estaba gravada con una leyenda pictórica, rematada con una gran cruz de hierro donde una Cristo Crucificado de bronce miraba hacia poniente. Frontero al arca estaba

el lugar de ejecución, desde donde personas piadosas arrojaban los huesos de los desgraciados a dicha fosa, ganando por ello las indulgencias previstas por bula pontificia⁷⁹.

Durante el Quinientos su utilización aparece ya plenamente contrastada por numerosos testimonios de todo tipo⁸⁰, siendo citado este topónimo con relativa frecuencia por nuestros literatos del Siglo de Oro⁸¹. A partir del Seiscientos, el paulatino abandono del recurso a la pena capital por parte del Santo Instituto redundó en su deterioro, debiéndose de acometer la renovación periódica del poste donde tienen lugar las ejecuciones e incluso diversas obras de carpintería⁸².

El 17 de agosto de 1685 se renueva la cruz que coronaba el arca⁸³; durante la guerra de Sucesión sufrió serios daños infligidos por las tropas del Archiduque⁸⁴, procediéndose al arreglo de su Cristo crucificado entre 1764-1765 y confiando a un imaginero local la impresión de unos brazos nuevos y las claves de sus manos⁸⁵; dos años después, antes de ser reconstruida el arca, reforzándose con un caiz de cal su mampostería.

Durante el periodo que nos ocupa, la última ocasión en que fue empleado este emplazamiento para su finalidad secular fue el 23 de mayo de 1776, cuando tiene lugar el doble ajusticiamiento de Juan de Mora Garcia "Candonga" y Juan Rodríguez Fuano "Conejo", colocándose el cuerpo descuartizado del primero en los caminos de Ciudad Real y las manos derechas de ambos en Montoro y Villacarrillo, respectivamente, lugares donde cometieron sus mayores fechorías⁸⁶. Ya a principios del siglo XIX el homicida Fernando Piña, vecino de Zafra, sería ahorcado en dicho montículo⁸⁷.

NOTAS AL CAPÍTULO 5.

¹ AHPCR. Catastro Ensenada, leg 652, s.f.

² Labrar el escudo hermandino llevó desde el 19-VI-1761 hasta 26-VII-1762; el desembolso ocasionado por la reedificación de la pared maestra de la fachada fue importante, como lo demuestra su desglose: las puertas principales importaron 2.677 17 rs. -contrastando con los 18 rs. en que se vendió su antigua portería en 1764 (AHN. Div. Her., leg 60, nº 6)-; el escudo que las corona y la portada de piedra remodelada alcanzan entre mano de obra y materiales 20.684 rs., no siendo éstas sino una parte de las mejoras acometidas en el patrimonio urbano de la Santa Hermandad manchega (Ib., leg. 60, nº 4).

³ En 1741-1742 se libraron 4 ducados al espartero Manuel Clavel por el esterado de la capilla y de la sala capitular (Ib., leg. 59, nº 4).

⁴ El carpintero Cristóbal Espinosa, que con anterioridad había desempeñado trabajos puntuales en los propios de la entidad, sería el encargado por el Santo Tribunal en 1610 para su construcción, montando la obra 169 rs. (Ib., leg. 57, nº 7).

⁵ Ib., leg. 60, nº 4.

⁶ Se efectuarían composturas de dichas vidrieras en 1638, 1762 y 1775-1776 (Ib., leg. 58, nº 5; 60, nº 4 y 61, nº 3).

⁷ Revocar y enlucir la sala de juntas costó 13.192 mrs., siendo concertada la labor del escultor en 300 rs, y en 230 la del pintor, incluyendo éste su alojamiento en la ciudad al estar "de posada en posada" (Ib., leg. 58, nº 6).

⁸ Vid. capítulo IV, nota. 295

⁹ Dicho pintor tal vez se trate del mismo que había trabajado mediada la centuria en Ciudad Real para el propio tribunal, o bien un pariente próximo, cobrando, en 1773-1774, 700 rs. por decorar el oratorio y el citado aposento.

¹⁰ Mucho más infrecuentes que las diurnas eran las confesiones nocturnas, aunque su existencia está contrastada ocasionalmente. En las cuentas rendidas en 1638 se da testimonio de la adquisición de "dos libras de belas de sebo para tomar confesiones de noche dos reales y medio" (Ib., leg. 58, nº 5).

¹¹ *Diccionario histórico, geográfico biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real*, (3ª ed.), Ciudad Real, 1914, p. 416.

¹² Algunos expedientes de caballeros para la concesión de hábitos militares durante el Setecientos son elocuentes sobre archivos locales ciudarrealeños. Particularmente prolijo es el realizado en 1765 por los informantes de Juan Teresa Trebiño y Dávila, donde se especifica la ubicación y descripción de algunos de ellos. Así sabemos que el de la iglesia de Santa María del Prado estaba situado bajo un arco a la izquierda de la entrada a la sacristía, en un armario de unos 5 cuartas de ancho, con 3 cajones sobre un arca con molduras doradas, denotándose que en el cajón central, bajo llave, había una cubierta de

ripiá para proteger los libros parroquiales; en la de Santiago, la documentación se hallaba en la sacristía, en una alacena de la pared, tras la puerta de una hoja de una vara de alta y 3 cuartas de ancho, con una cerradura y llave, aunque con señales de haber contado con una segunda, dispuestos los libros en varios estantes. El depósito municipal ciudarrealeño, pos su parte, estaba

"...en el ultimo tramo y descanso en la escalera a la mano siniestra como se sube con una puerta dada de blanco y azul con tres cerraduras y llaves (de las que una tiene el escribano que nos asiste) y abierta que fue esta en el tercero de dicho archivo se encontro con una alazena con dos puertas y una zerradura."

(AHN. OO. MM., Calatrava, Pruebas de Caballeros, exp. 2.637).

¹³ En al rendición de cuentas por el arquero Félix Eugenio de León, del periodo contable 1761-1762, se consigna el pago de 100 rs. al ciudarrealeño Francisco de Oviedo por custodiar el arca, trasladada a la sala alta de la cárcel durante las obras y reparos de albañilería acometidos en la planta inferior (AHN. Div. Her., leg. 60, nº 4).

¹⁴ Era costumbre de la época que los calabozos tomasen nombres sonoros que denotasen irónicamente su condición de espacios destinados a la purgación de los delitos perpetrados por los reos, pecados ante Dios antes que otra consideración legal los calificase; solían denominarse según su habitabilidad; en la misma galera real local una de las celdas también era conocida como "la Gloria". Tal vez dichos nombres serían tomados por afinidad con las de las mazmorras de la Real Cárcel de las Minas de Almadén, denominadas por entonces como "el Limbo", "La Gloria", "el Purgatorio y "el Infierno"; vid. R. SALILLAS PANZANO, *La Cárcel de esclavos y forzados de las minas de Azogue del Almadén y las características legales de la penalidad utilitaria*, Madrid, 1913, p. 24.

¹⁵ El 1-VIII-1758 la fuga múltiple de unos gitanos, despojados de su inmunidad eclesiástica, se produjo al agujerear la pared medianera del calabozo de enmedio con el de "Valdinfierno", cuyas puertas estaban abiertas al permanecer desocupado por su pésimas condiciones de habitabilidad (AHN. Div. Her., leg. 51, nº 14).

¹⁶ Durante el Seiscientos sería utilizado un único cepo de madera de encina, instrumento de tortura y preventivo de posibles fugas. Hecho con dos maderos gruesos con los que asegurar garganta, brazos o piernas, su candado fue recompuesto por un cerrajero local en 1693 (Ib., leg. 58, nº 12), comprándose en 1718 ó 1719 un cepo nuevo por 65 rs. de vellón (Ib., leg. 58, nº 21).

¹⁷ A principios del siglo XVII se invirtieron 1.260 rs en 11 carretas de yeso, cal, arena y ladrillos, los salarios del maestro albañil, su oficial y 4 peones durante quince días, incluidas quince meriendas y vino a discrección (Ib., leg. 57, nº 4); hacia 1638 un maestro alarife y 13 peones empedraron un calabozo, consumiéndose 12 carros de piedra y cal (Ib., leg. 58, nº 5); en 1676 se dicen haber invertido 1.160 rs. en diversos arreglos de la galera (Ib., leg. 58, nº 10); en 1726, el monto por empedrar las tres celdas se elevó a 387 rs. (Ib., leg 58, nº 25); en 1778 el monto de las obras acometidas llegaban hasta casi los 1.000 rs. (Ib., leg. 61, nº 4); y a fines del Setecientos fue empedrada de nuevo la mazmorra y callejón de "el Infierno" (Ib., leg 62, nº 5)...

¹⁸ En 1631-1632 se encargó un cerrojo para el calozo de enmedio (Ib., leg. 58, nº 4); siete años después se adquirió una llave para la reja de la ventana del calabozo que da al patio (Ib., leg. 58, nº 5); en

1638 se refuerzan sus puertas con clavos y el herrero proporciona tres pares de grillos (Ib.); en 1642-1643 se compró una llave para el postigo de la portería principal (Ib.); en 1711 se adquiere un postigo grande para el calabozo de "la Gloria" (Ib., leg. 58, nº 17); un año después se tapaban con madero y yeso los daños ocasionados a una puerta de las celdas (Ib., leg. 58, nº 19); en 1716 se reparan los calabozos tras los deterioros ocasionados por varias evasiones consecutivas, invirtiéndose 818 rs. (Ib., leg. 58, nº 21); una década después costaron 94 rs, reforzar con una lámina de hierro clavada a la puerta de "Valdínfierno" (Ib., leg 58, nº 25); el cerrajero Miguel Ruiz, entre 1736-1737, proporciona 3 pares de grillos, repara otros 2, compone algunas cerraduras y vende igual número al cabildo (Ib., leg 59, nº 2); en 1739 Juan Peñasco llevaba a la sede hermandina una bigornia para remachar los grillos (Ib., leg 59, nº 3); en 1765 costó reparar la celda de la calle 53'17 rs. (Ib., leg 60, nº 6); en 1794 el cerrajero Josef Muñoz cobraba 668 rs. por componer algunas prisiones (ADPCR., s.c.); en 1799 se libraron 1.067 rs. al alarife Joseph García, y otros 234 rs. a los cerrajeros Juan Alfonso Villegas y Juan Camacho para "aderezar fajas de hierro" con que reforzar dichas puertas (Ib.).

¹⁹ Cuentas rendidas por Félix Eugenio de León del periodo contable 1761-1762 (AHN. Div. Her., leg. 60, nº 4).

²⁰ Ib., leg. 45, nº 19.

²¹ La campana de la sede hermandina fue arreglada en 1631-1632; una sogá para ella fue comprada el 18-XII-1688 por 3 reales; en 1736 se renueva dicho cordel; en 1741-1742 se vuelve a aderezar la campana; y

en 1773-74 se procede a reparar la estrecha escalerilla que permitía subir al pequeño campanario hermandino.

²² En 1609 se empedró el patio de la cárcel (Ib., leg. 57, nº 5); en 1640 se emplearon 3 cargas de yeso, para idéntico fin, y el callejón de la galera (Ib., leg. 58, nº 5); en 1712-1713 se libraron 21 rs. para ensolar la parte correspondiente de la calle y el patio de la sede (Ib., leg 58, nº 19); en 1726 costaron 140 rs. en hacer lo propio con los portales, pasillo al corral y callejón de los calabozos (ib., leg 58, nº 25); en 1736-1737 Juan García Calero empedraba la entrada y el soportal de una de las tiendas de la entidad (Ib., leg. 59, nº 2), colaborando asimismo en los arreglos acometidos en 1762.

²³ En las cuentas rendidas en 1763 se consignan las varas cuadradas castellanas de lo empedrado en el inmueble y "su jurisdicción de la calle", siendo estimadas por entonces las siguientes superficies:

patio.....	106	
portal de entrada.....	50	
pasillo del corral hasta escalerilla..	17	(Ib., leg. 60, nº 5)
corralejo.....	76	
corral del pozo.....	159	
hueco de la portada.....	3	
jurisdicción de la calle.....	213	

²⁴ La inexistencia de pozo de agua potable en la cárcel de la Hermandad Vieja de Toledo provocaba, en cambio, numerosas incomodidades y crecidos gastos. El algibe practicado en el roquedo sobre la que fue construida obligaba a ser colmado con el agua acarreada por peones y aguadores, cuando se agotaba las reservas de agua de lluvia, al temerse incluso por la vida de los custodiados. El cabildo de 1-VIII-1665, como acontecía todos los veranos, estudió la petición de sus reos para que se echase agua al algibe, pues estaban

al borde de la muerte por deshidratación, los capitulares se hacen eco del suplicatorio y se acuerda contratar los servicios de un aguador (Ib., leg. 64, nº 7).

²⁵ Ib., legs. 58, nº 5 y 12; 59, nº 6.

²⁶ Ib., leg. 60, nº 4 y 5.

²⁷ J. BERNÌ Y CATALÀ, *Práctica criminal*, op. cit., pp. 57-59. El francés J. F. PEYRON escribía durante la Ilustración que

"La policia de prisiones en España es inconcebible, ordinariamente las ventanas estan dotadas de largas cuerdas y cestas, por medio de las cuales reciben de sus amigos todo lo que quieren armas, noticias, dinero..."

"Nuevo viaje en España. Hecho en 1772 y 1773", en J. GARCÍA MERCADALL, op. cit., t.3, p. 915. Remitimos al lector para dicho asunto a B. SANDOVAL, *Tractado del cuydado que se deve tener de los presos pobres*, Toledo, 1564; C. BECCARIA BONESANA, *De los delitos y de las penas*, (1ª ed. 1764) por F. TOMÁS Y VALIENTE (int., not. y trad.), Madrid 1982, p. 82; J. ÁLVAREZ Y POSADILLA, *Práctica criminal*, op. cit., t. 3, Valladolid, 1802, pp. 475-476.

²⁸ La cárcel real de Toledo es descrita del siguiente modo hacia 1617:

"...los corredores, patio y aposentos de presos es todo franco a qualesquiera delinquentes, excepto que para los incorregibles y facinerosos ay otros calabozos fuertes y temerosos: y por el contrario otros aposentos de por si mas desenfadados, para la gente de mas calidad, y menores delictos. Pero mas la chusma de tantos presos, tan asquerosos, y desarrapados, y algunos en vivas carnes, su hedor, confusion y vozerio, no parece sino un retrato del infierno..."

F. de PISA, *Descripción de la Imperial Ciudad de Toledo. Historia de sus antigüedades, i grandeza, i cosas memorables*, Toledo, 1617, lib. I, cap, 23, f. 38r. Una visión de la caótica situación existente en

las grandes penitenciarias durante el Quinientos en C. CHAVES, *Relación de la cárcel de Sevilla*, (reed.) Madrid, 1983 y P. HERRERA PUGA, *Sociedad y Delincuencia en el Siglo de Oro. Aspectos de la vida sevillana en los siglos XVI y XVII*, Granada, 1971. Información suplementaria puede consultarse, entre otras obras, en J. A. ESCUDERO (dir) "Cinco siglos de cárceles", en *Historia 16*, extra VII (octubre, 1978), pp. 6-99; P. FRAILE, *Un espacio para castigar. La cárcel, y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII y XIX)*, Barcelona, 1987; M. FOUCAULT, *Vigilar y castigar*, (1ª ed. París, 1975) Madrid, 1986.

²⁹ "La infamia es la absoluta privación del buen nombre y fama que corresponde a todo ciudadano y esta inhabilita para los honores y empleos a que todo ciudadano tiene derecho: la privación de honor puede ser solo del particular que aquel sujeto penado tenía, sin pasar a infamia dexándole con la fama y honor común de ciudadano."

L. ÁLVAREZ Y POSADILLA, op. cit. t. 3, p. 25.

³⁰ Es significativo que el hermano y apoderado del contrabandista de tabaco Francisco Fontecha "Cepillo", vecino de Quintanar de la Orden, conducido por la ronda de tabacos alcazareña a la prisión hermandina, argumenta su pretensión de excarcelación bajo fianza al detenido pues

"...su hombría de bien, honrrados y justos procedimientos, y que su delito no puede ser tal que merezca tenerle en dicha cárcel de la Santa Hermandad, en donde solo se enzierran reos de latrocinios, jitanos, y otros delitos feos, como porque actualmente se halla enfermo..."

31-VIII-1771, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 561, ff. 82r-vº).

³¹ El 15-VIII-1643, el toledano Juan Pantoja mandaba cobrar las deudas de las que era acreedor para sufragar el pleito incoado por la Hermandad manchega y apelado a Granada (Ib., leg. 171 bis, ff. 309r-vº); el reo moraleño Cristóbal Fernández Camacho, nombraba el 42-VII-

1698, cobrador que percibiese los réditos censales impuestos sobre una obra pía (Ib., leg 208, ff. 60r-61r); los cordobeses Antonio de Morales Monje y su hijo, el 19-IV-1749, solicitaban al Santo Tribunal que de sus bienes secuestrados se alimentasen a sus tres hijas doncellas en tanto que se emitía sentencia definitiva por la Real Chancillería (Ib., leg 554, ff. 54r-56vº).

³² Tales socorros llegaron a beneficiar incluso a quienes se hallaban desvalidas por el confinamiento de algún pariente cercano. En 1684 el cabildo entrega 12 rs. a Angela Fernández, mujer de Marcos García Bermejo, a la sazón condenado como forzado a las minas de Almadén, para su sustento y el de su marido; y en 1690 se libraron, por idéntico motivo, 32 rs. a Ana Yuste, madre del reo Agustín de Robles (Ib., leg. 58, nº 12).

³³ El prest diario distribuido por el Santo Tribunal manchego osciló desde el medio real de fines del Quinientos, al real de principios de la siguiente centuria, en las postrimerías del Seiscientos se repartían entre 24 mrs. y un real, a tenor de la liquidez de la organización. Durante el Setecientos este asignado se incrementó paulatinamente del real concedido en los primeros años al real y medio de las décadas centrales; las ordenanzas de 1792 prescriben la entrega de real y cuarto, pudiendo aumentarse de acuerdo a la carestía de víveres, alcanzándose los dos reales hacia el 1800.

³⁴ A fines del siglo XVIII J. ÁLVAREZ Y POSADILLA intenta establecer las diferencias entre ambos:

"El Auto ordinario de prision es anexo al de embargo de bienes: a este no; al preso se le ponen grillos, al detenido no; el que legitimamente este preso tiene que justificar sus excepciones: este detenido no: pues si no se llega a justificar plenamente el indicio hay que soltarle: el preso si sale antes de la sentencia

es debaxo de fianzas, el detenido sin ellas, y antes del plenario: el preso como sospechoso de reo se le toma confesion con cargos: al detenido no se le puede tomar declaracion alguna sino en calidad de testigo: el Auto de prision no se hace saber al reo, sino que se le prende, y esotro visto en parte que que se pueda fugar se le hacen saber para que no se apesadumbre: y a su familia despues para que tengan algun consuelo: de modo que de este Auto se le siguen muy cortos perjuicios, y del de prision muy grandes."

Op. cit., t. 1, Valladolid, 1794, diálogo IX.

³⁵ En opinión del gran pensador y jurisconsulto italiano C. BECCARIA, con una gran repercusión entre los ilustrados europeos,

"La cárcel es, pues, la simple custodia de un ciudadano hasta que sea juzgado culpable; y siendo una custodia esencialmente penosa, debe durar el menor tiempo posible y ser lo menos dura posible..."

Op. cit., p. 29.

³⁶ Excepcionalmente serían llevados los detenidos a Ciudad Real, en carros u otros medios de transporte, generalmente cuando se trataba de conducciones de varios detenidos. En 1692 un alcalde hermandino, el corregidor ciudarrealeno y veinte jinetes, con el auxilio de ocho guardas de Santa Cruz de Mudela, escoltaron a la prisión manchega a dos bandidos y tres reas llevadas en una calesa tirada por un par de mulas, importando tales diligencias 1.441 rs. (Ib., leg. 58, nº 12).

³⁷ Aprehendidos, no sin dificultades, en 1664, dos desertores por los mercaderes que habían sido perjudicados por su asalto a un arriero, los alcaldes instan al carcelero para que trajese de un mesón de la ciudad un colchón, jerga, dos sabanas y una almohada para la convalecencia del soldado de caballería Agustín Escudero, malherido en la refriega por un balazo en su brazo izquierdo, siendo custodiado en el calabozo de enmedio, aunque dichas atenciones no se aplicaron a su

compañero, con una breza en la ceja. Cuatro meses más tarde ambos serían ejecutados en Peralvillo (Ib., leg. 36, nº 3).

³⁸ Ib., leg 59, nº 1 y 3. La corporación homónima toledana, el 13-VI-1663, ordenaba sacar la basura de la cárcel, pues se había extendido el contagio a varios presos aún antes de empezar el verano, la estación más peligrosa para unos reclusos hacinados en pésimas condiciones de salubridad (Ib., leg. 64, nº 5).

³⁹ Eugenio Herrera compareció al cabildo de la Hermandad Vieja de Toledo celebrado el 7-III-1661, exponiendo que como persona piadosa que visitaba con frecuencia los reos del tribunal especial y los de la galera pública reclamaba socorro urgente de la fraternidad por hallarse algunos de ellos en extrema necesidad, y de no acudirles ni con al sustento ni con las medicinas precisas, era inevitable su muerte. Ese día se asignaron a tales urgencias 408 rs. (Ib., leg. 64, nº 4, s.f.).

⁴⁰ Los arrestados fugados el 15-VI-1729 llevaron consigo la espada, la montera y la capa del alcaide, arguyendo luego que dicho oficial se quedaba con sus socorros semanales (Ib., leg. 47, nº 7).

⁴¹ Antonio Manzano, preso desde el 8-VI-1727 como cómplice de algunos robos, el 1 de mayo del año siguiente permanecía encartado, ciego, usando dos muletas y obligado a llevar lazarillo para limosnear su sustento en la ciudad, solicitandose su libertad; en febrero de 1729 es cuidado día y noche por un cirujano local, enriqueciéndose su dieta con el aporte de carnero y huevos, trasladándose a la celda de "la Gloria", pero al solicitarse su traslado a un hospital los alcaldes la deniegan, ofreciéndose la ciudarrealeña María Salcedo a velarlo "por

caridad"; la mañana del 2-V-1729 muere el desgraciado, siendo enterrado en la iglesia de San Pedro, oficiándose misa de difuntos y costeando la Hermandad su sepultura, su asistenta, los gastos de botica y al maestro albañil. Este reo, calificado en los autos como "viejo", muere a la edad de 36 años de tisis pulmonar -tuberculosis- (Ib., leg. 46, nº 9). Hacia 1727, el esclavo mulato Martín Gómez hubo de mantenerse de la caridad pública por ser pobre y no poder costear los gastos derivados de su prisión (Ib., leg. 58, nº 12).

⁴² Por ejemplo, en 1690 se libraron 92'24 rs. para costear el entierro y las medicinas consumidas por el reo gitano Gabriel Antonio Fernández, vecino de Membrilla -Ciudad Real-(Ib.). Los gastos de botica solían consistir en bebedizos, aceites, aguardiente -utilizado como edulcorante o excipiente de otros productos, y como analgésico- o vinagre para realzar compresas, practicándose sangrías por los cirujanos-barberos, aunque se confiaba la mayor parte de la recuperación a una mejora dietética y al reposo del covaliente en un catre en el aposento mejor ventilado. Nos remitimos, para una visión de las notables carencias de la medicina de la época a las obras de R. SÁNCHEZ GRANJEL, *La medicina española en el siglo XVII*, Salamanca, 1978; y *La medicina española en el siglo XVIII*, Salamanca, 1979.

⁴³ Un caso lacerante fue el del gitano Cristóbal de Reyes, desestimado en Almadén para trabajar como forzado en sus minas por tener úlceras y vuelto a la galera hermandina, suplicó repetidamente el alcaide que no se exigiese carcelaje por ser pobre, prometiéndole enterrarle gratis si muriese antes que él, pues ésa era su profesión. Después de una frugal cena, proporcionada por su hija, se ahorca en su celda con los cordones de sus albarcas el 10-II-1708; su viuda pretende enterrarlo en sagrado, dejando constancia los alcaldes hermandinos que era un

buen cristiano, aunque por su enfermedad no era consciente de sus actos. El párroco de San Pedro despachó licencia para su sepultura eclesiástica años después, siendo su cadáver exhumado enterrado en dicha iglesia a las 16 horas del 13-II-1711 (Ib., leg. 40, nº 6).

⁴⁴ El 14-IV-1680 se dirime que, puesto que el alcaide hirió en prisión al recluso gitano Francisco Rodríguez en oscuras circunstancias, dicho oficial pudiese salir bajo fianza de la cárcel, aunque no pudiendo salir de la ciudad hasta ser aclarado el asunto (AHPCR. Protocolos Notariales, leg 221, ff. 180r-vº).

⁴⁵ Ver apéndice documental, texto nº 14.

⁴⁶ Repartidos en los seis calabozos con que ahora contaba la galera manchega los 60 ó 70 levos, en pleno verano dormían en la celda más pequeña nueve personas , padeciendo "la incomodidad de mucho calor, chinches y otros animales asquerosos que produce la estrechez y la desdicha"; el alcaide Diego Romero dispensó, por 10 rs, a algunos de ellos para que pernoctasen en la sala capitular y en el oratorio. Quedando luego tres hombres exentos de la leva por estar casados, hubieron de dar 30 rs. cada uno en concepto de carcelaje. El Consejo de Castilla, informado por el intendente provincial, amonesta a los alcaldes hermaninos, abriéndole éstos expediente disciplinario a su subordinado, quien, temiendo el motín de los custodiados, dice

"...sufrir un improbo trabajo de asistir a tan crecido numero de presos a quien solo se suministra de cuenta de la Real Hacienda racion de pan sin otro auxilio de los nezesarios para que vivan, empleando un criado que incesantemente le conduzca azeite, carbon, legumbres, tavaco y quanto piden..."

1-VII/24-VIII-1803 (AHN. Div. Her., leg 54. nº 5, s.f.).

⁴⁷ En las cuentas rendidas en 1795 se incluye una partida de 37 rs. por el importe de medio gozne de hierro por la cadena del sabueso de la cárcel (Ib., leg. 62, nº 3).

⁴⁸ Ib., leg. 27, nº 8.

⁴⁹ Ib., leg. 58, nº 5.

⁵⁰ Ib., leg 35, nº 5, f. 40r.

⁵¹ El 15-IX-1715, un mes después de tal designación se hacía patente desde Huelma la mala inclinación del referido comisario, calificado de

"...hombre zismatico, reboltoso, y que trae esta republica inquieta engañando a algunos vecinos , y estafandolos para que pongan pleitos a los capitulares y cabildos de los años antecedentes, siendo silizitador de ellos por cuia causa esta desterrado por setenzia publica y indicado sobre estupro de doncella ante juez eclesiastico: con fuerzas a otras: ynzendiario de que tiene causa en la Chancilleria de Granada; notandole quitar mieses y ganados, en que se ha reprendido muchas vezes, diziendo publicamente sus deseos de verganza contra los que reprehendiesen su mal prozeder; por el qual y la esperienzia de un año que fue rexidor, aunque con grandes ynstanzias y engaños a procurado entrar en la bara de alcalde ordinario, ni los capitulares lo an propuesto ni el duque de Alburquerque nuestro señor cuya es esta villa le a querido elegir, para cuio fin y por no aver conseguido nada en los tribunales superiores (antes a salido castigado) a solizitado este titulo, y para que le sirva de capa a su mala bida, y diziendo publicamente no a de quedar ninguno a quien no traiga inquieto justo o injusto refiriendose a quien a de prender que son algunos de los alcaldes y capitulares de la administracion de justizia con muchas raterias y compañías de otros que ejerzitan lo mismo..."

(Ib., leg. 42, nº 7, f. 24). A tenor de dicho informe tampoco se considera a Bartolomé Baena digno del citado nombramiento por no tener "mas ocupacion que andar su camino" (Ib., f. 58 vº).

⁵² Sin duda había propiciado esta segunda huida su incorrecto encarcelamiento: tras pasar unos días en el calabozo "Valdínfierno" con un par de grillos y cadena bajo candado, fue despojado de ellos para colocárselos a otro reo peligroso, Juan de Espadas; llevado el susudicho a la sala capitular a dormir con la excusa de que les molestaban los chinches mientras permanecía incomunicado en la celda. Aprovechando esta coyuntura quebró con una cuña de hierro la puerta de la calle de madrugada y se asiló en el convento franciscano donde se liberó de sus prisiones y huyó de la ciudad. Relevado el negligente alcaide, Juan de Rodas sale en su persecución por el Campo de Calatrava, dando cuenta del caso a las justicias locales; una semana después vuelve dicha partida, elevándose informe al Consejo de Castilla; 24-VII-1715/22-VIII-1716 (Ib., s.f.).

⁵³ Sus antecedentes criminales incluyen diversos asaltos en Andalucía, La Mancha y Extremadura, correrías por caseríos y cortijos, abigeatos, asesinatos de un matrimonio en el lugar del Molino, en Garcimuñoz, y multitud de delitos aún por aclarar. En una carta remitida por un juez superior desde Gibraleón, el 30-VI-1725, se da cuenta de algunas de sus fechorías: el bandolero Andrés Díaz Palacios, preso en la cárcel de la Real Audiencia de Sevilla, se había beneficiado de un artículo de inmunidad local, siendo de nuevo arrestado en el camino de Santa Olalla cuando intentaba robar a un clérigo; puesto tras las rejas en Sevilla, sobornó a un sargento del ejército para que dijese ser suyas dos pistolas que se le hallaron; llevado al presidio gaditano se acoge en sagrado en la misma capilla penitenciaria, logrando escapar de la acción de la justicia (Ib., leg. 45, nº 19, s.f.).

⁵⁴ Ib., leg. 45, nº 19, f. 115r.

⁵⁵ Ib., leg. 46, nº 1.

⁵⁶ 23-III-1726, Granada (Ib., leg. 45, nº 19, s.f.).

⁵⁷ 3-IX-1728 (Ib., leg. 46, nº 1, s.f.).

⁵⁸ Ib., leg. 47, nº 7. No termina aquí la azarosa vida de este personaje; el 20-VII-1731, al ser conducido por tránsitos Bartolomé Tocados a galeras, delata un complot para la fuga de la galera. Vuelto a la sede hermandina, el alcalde indaga sobre el particular, hallándose un estilete de Antonio Quirós, introducido en el palo de una escoba, que había pasado en su capa el gitano Gabriel Gil meses antes; en virtud de este infructuoso plan, Quirós, desprovisto de grillos por estar enfermo, amenazaría al alcaide con el cuchillo, inmovilizando sus compañeros al carcelero y el delator iría a la puerta de la escalera para evitar que fuese tañida la campana.

⁵⁹ Este típico levantamiento popular frumentario fue estudiado en su día por J. DÍAZ PINTADO "El motín de 1734 en Puertollano", en *Semana de Historia de Puertollano*, Ciudad Real, 1989, caracterizándose a Miguel Mora, mozo de 22 años de edad, como sujeto "sin ejercicio y mal trabajador" (AHN. Consejos, leg. 60, s.f.). Coincide que un tal Juan de Mora Villajos, avecindado en Puertollano y a buen seguro su padre o al menos un pariente cercano, obtuvo título de juez comisario el 28-XII-1730, sin presentar el preceptivo informe "por ser conocido", lamentándose luego de que se "hacia burla de su persona", por tener dificultades económicas al ser su ocupación "rodar sobre un caballo" (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 52).

⁶⁰ AHN. Consejos, leg. 60, nº 12, s.f.

⁶¹ 6-IX-1734, Puertollano (Ib., s.f.)

⁶² AHN. Div. Her., legs. 51 nº 1 y 14; 59, nº 1.

⁶³ Se trata del peligroso salteador de caminos Juan "Candongu", los días 2-IV y 8-VI-1774 (Ib., leg. 61, nº 2 y 3).

⁶⁴ 16-IV-1797 (Ib., leg. 53, nº 4).

⁶⁵ ADPCR, s.c., f. 21vº.

⁶⁶ Difícilmente puede considerarse resarcida la Hermandad con los bienes incautados, a saber: cuatro mesas, una cama de pino con su jergón y colchón, una jaula y un banco de pino muy deteriorado; 1-X-1768, Ciudad Real (Ib.).

⁶⁷ Debido a la carestía de víveres y a los gastos ocasionados en la aprobación e impresión de sus nuevas ordenanzas, solo se le entregaría el dinero preciso para costear la asistencia de paisanos y el alimento para sus caballerías. Tras su captura se estipuló reintegrarles dos tercios de la asignación prescrita, quedando el tercio restante para sufragar parte de lo gastado, elevándose a un total de 8.874'15 rs. el total de lo consumido (ADPCR. s.c.).

⁶⁸ El 27-VII-1777, el teniente de corregidor ciudarrealeño, don Joaquín de Cárdenas Treviño, regidor decado del concejo y hermano de la fraternidad apícola, presentaba memorial ante el Supremo Consejo, con tintes apocalípticos, sobre la supuesta corrupción moral que afectaba a muchos de sus convecinos en los siguientes términos:

"...estan gran parte de sus habitantes sumergidos en el proceloso mar del libernitaje propagando el pernicioso vicio de la lujuria ...-por- haver cada dia mas mujeres publicas...no disminuyendose antes si aumentandose el numero de meretrices y otras mujeres escandalosas, siendo espezialmente de esta segunda clase las viudas que...como no estan hechas a travajo alguno, toman a partido el procurar con sus cuerpos el alimento, dando el peor ejemplo a sus familias, sacando otros tantos reprobos como hijos tienen..."

Lamentándose que su destierro a otros puntos del Reino no había solucionado sino transferido el problema, siendo mejor arbitrio el aprovecharlas en labores productivas y crear un hospicio en la ciudad para las contumaces, llevándose entre tanto algunas prostitutas al citado hospicio; dicho memorial fue aprobado por el Fiscal del Consejo de Castilla el 3-X-1777, siendo evacuado para su definitivo refrendo en 1779 (AHN. Consejos, leg. 824, nº 1 y AMCR. Actas Capitulares, leg. 27 , nº 2, f. 11.).

⁶⁹ AHN. Div. Her., leg. 62, nº 5.

⁷⁰ Era práctica común de las penitenciarías de la época el asegurar a los reos con grillos, supliendo de esta tosca manera las notables carencias preventivas de estos inmuebles; ÁLVAREZ POSADILLA arguye que

"...si fuese la carcel o sitio en donde el preso este tan seguro que no haya necesidad de prisiones no se las debieran poner. la ley 6 de la Partida 7, tit. 29 dice que si los guardores se temieren que se iria que bien pueden meterlos en fierros aunque sean hombres honrrados..."

Op. cit., t. 3, diálogo 32, p. 476.

⁷¹ La evasión, el 11-VII-1736, de Juan Serrano "Montero" y sus cómplices, provoca a la corporación apícola 1.068 rs. de gastos por la multa impuesta al alcaide y salarios devengados por el juez don Antonio Fuenllana Gutiérrez y el receptor don Joseph Serrano Martínez,

comisionados por el juez privativo de galeotes granadino (AHN. Div. Her., leg. 59, nº 1).

⁷² La doctrina se muestra severa con los carceleros corruptos o negligentes: ELIZONDO Y ÁLVAREZ considera que se debiera aplicar al alcaide lo misma pena que correspondía al fugado, aunque ésta fuese la capital; vid. *Práctica universal forense de los Tribunales de España, y de las Indias*, 6ª impr., Madrid, 1788, p. 313; coincidiendo con él BERNÍ Y CATALÁ, aunque contemplando ciertos atenuantes, según los casos, proponiendo por regla general el encarcelamiento del guardián durante un año, según la ley. 12, tit. 23, lib. 4, R.; cit. *Práctica Criminal*, op. cit., cap. 25, p. 59).

⁷³ Según BERNÍ Y CATALÁ se consideran quebrantadores de prisión quienes rompiesen su reclusión, según ley. 13, tit. 29, Partida 7, o proporcionasen ayuda, introduciendo armas, cuerdas o instrumentos que la facilitasen, mereciendo hacedores y consentidores igual castigo. La ley 7, tit. 26, lib. 8, R. impone 600 mrs. de pena de Cámara al fugitivo, mientras que la ley 13, tit. 26, Partida 7 previene que el huido sea tenido por confeso el delito que se le imputaba y se le aplicarían otras penas al arbitrio judicial, siendo lo usual 200 azotes o vergüenza pública (op. cit. p. 60), concordando con lo expuesto por ÁLVAREZ Y POSADILLA; op. cit. t. 2, diálogo 28, p. 205.

⁷⁴ Por ceñirnos, cronológica y espacialmente, a lo que acontece en cárceles similares a la de la Hermandad manchega, en su homóloga toledana hay constancia de diversas fugas, como la protagonizada el 15-I-1609 por Juan Albarrán, agresor de un gitano en los Montes de Toledo, quien logró descerrajar la puerta del calabozo y refugiarse en el convento de las Dueñas, de donde sería luego extraído (AHN. Div.

Her., leg. 63, s.f.); reproduciéndose repetidas fugas de la prisión pública de Ciudad Real a lo largo del Setecientos (AMCR. Actas Capitulares, legs. 24, ff. 1333-1334; 25, nº 4, f. 248-255; 26, nº 4, ff. 96-97; 27, nº 2, p. 49, y nº 3, pp. 203-204; 29, nº 3, ff. 9-11...).

⁷⁵ M. CORCHADO SORIANO, "Toponimia medieval de la región manchega", en *Actas VII Centenario de don Fernando de la Cerda, 1275-1775*, op. cit., pp. 79, 104 y 105.

⁷⁶ Op. cit., p. 98.

⁷⁷ Se trata de la concordia entre la Santa Hermandad y la Orden de Calatrava de 23-VIII-1428, Almodóvar del Campo, mediante la cual se regulaban las circunscripciones jurisdiccionales de ambas justicias, mencionándose en "Fernan Caballero, que haya por limites sus viñas, e labranzas continuas y fasta el mojon de Peralvillo" (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 68, ff. 26vº-27r).

⁷⁸ En Toledo, durante gran parte de la Edad Media y del Quinientos, el lugar de ejecución pública de su justicia real fue la plaza de Zocodover, pero a fines de dicha centuria se trasladó extramuros de la puerta de Bisagra "para evitar el horror que causaba dentro de la ciudad" (Vid. F. de PISA, op. cit., f. 38vº). En Ciudad Real la justicia local hacía lo propio en la plaza pública, desmembrándose eventualmente a los ajusticiados y colocándose sus restos extramuros, en las inmediaciones de las puertas de la ciudad. Para conocer el proceso en virtud del cual, en Castilla, las horcas y postes de ejecución derivaron en rollos jurisdiccionales véase C. BERNALDO DE QUIRÓS, *La picota. Crímenes y Castigos en el país castellano en los*

tiempos medios, Madrid, 1907; y, del mismo autor, *Figuras delincuentes con ocho reproducciones de antiguos rollos jurisdiccionales*, Madrid, 1908 (?).

En contraposición con la justicia urbana, la Hermandad Vieja ejecutaba a sus reos en el yermo: los colmeneros toledanos acostumbraron a hacerlo en el puerto de Márchez, próximo a San Pablo de los Montes, donde también disponían de un arca para depositar sus restos; cit. R. ARCO Y GARAY, *La sociedad española en las obras de Cervantes*, Madrid, 1951, p. 408. Para, ya en el siglo XVIII, realizar tales actos en la explanada existente tras la ermita de San Antonio Abad, inmediata a la Ciudad Imperial y sita junto al camino a la Corte (AHN. Div. Her., leg. 69, nº 1).

⁷⁹ Aludida por el presbítero L. DELGADO MERCHÁN, op. cit., p. 328, es verosímil su existencia. A este respecto recogió C. BERNALDO DE QUIRÓS

"...desde fecha desconocida hasta bien entrado el siglo XVIII celebraba la Hermandad Sevillana de la Santa Caridad de Nuestro Señor Jesucristo, primero recogiendo los cadáveres de los ahogados en el Guadalquivir y los restos de los asaetados por las Hermandades y expuestos en escarpas y jaulas por los caminos públicos, donde habían delinquido, según era costumbre, dándoles después sepultura y celebrando, finalmente sus funerales."

La picota..., op. cit., pp. 71.72.

⁸⁰ Mediado el Quinientos, el viajero P. de MEDINA nos ofrece una dantesca descripción del citado emplazamiento:

"Saliendo yo desta ciudad -Ciudad Real- para Toledo y vi junto al camino en ciertas partes hombres asaetados en mucha cantidad mayormente en el lugar que se dize Peralbillo, y mas adelante en un cerro alto donde esta el arca que es un edificio en el que se echan los huesos destos asaetados después de caer de los palos..."

Op. cit., f.83vº.

⁸¹ Sería prolijo mencionar las novelas, poemas y obras teatrales en la que se cita dicho topónimo, afamado lugar de ejecución de la época. Entre los escritos de QUEVEDO Y VILLEGAS, destaca en tal sentido el titulado "Entremés del niño o Peralvillo en Madrid", en el cual, para disuadir a un joven de que se marche a la Corte, se hace una asimilación de ambos lugares en los siguientes términos:

"El triste Peralvillo de la Corte
no hacen aquí cuartos al ajusticiado
que es deshacelle los cuartos,
al mozo de mas linda cara y talle
eso es ajusticialle.
Y de ese Peralvillo que ahora lloras
los cuadrilleros son estas señoras
que con dacas Guidos
y tomas penetrantes
si no los asaetean
los ajoyan, ya piden, ya tiendean."

Obras de Francisco de Quevedo y Villegas. Poesías. BAE. t. 69, p. 275. Asimismo, vid. L. VÉLEZ DE GUEVARA, *El diablo cojuelo*, (1ª ed. Madrid, 1641) A.R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ e I. ARELLANO (ed., intr. y not.), Madrid, 1986, p-146 y not. 49, etc.

⁸² En 1598 un carpintero compuso las picotas que estaban caídas (AHN. Div. Her., leg 56, nº 23); el 1-IX-1607, con motivo de los preparativos para la ejecución del asesino Gregorio Martín se procedió a enviar un peón que fijase con cal el palo de Peralvillo (ADPCR, s.c.); en 1631-32 se invirtieron 42 rs. en levantar el padrón de dicho lugar, cantidad que en 1636-1637 se elevó a 200 rs. por idéntico concepto (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 4 y 6).

⁸³ Se encomendó a Juan Rosales poner la cruz, retribuyéndose con 43 rs., más otros 37 rs. que importaron las obras de cantería (Ib., leg. 58, nº 12).

⁸⁴ Entre 1712-13 los soldados del proclamado Carlos III derriban las horcas de la Hermandad, invirtiendo el Santo Tribunal 15 rs. en recolocar las piedras donde encajaban los postes, y entre 1715-16 se entregarían 41 rs. a un albañil por recomponer lo dañado durante la contienda (Ib., leg. 58, nº 19 y 20).

⁸⁵ Importó dicho adecentamiento 158'17 rs. (Ib., leg. 60, nº 6).

⁸⁶ Ib., leg. 60, nº 3.

⁸⁷ Se conserva su edicto de ejecución en Ib., leg 54, nº 13, s.f.

6. ASPECTOS RELIGIOSOS Y DE BENEFICENCIA.

6.1. FUNCIONES RELIGIOSAS DEL CABILDO.

Una entidad como la Hermandad Vieja, que desde finales del siglo XIII goza del apelativo de santa por expresa bula pontificia, no podía faltar a los preceptos piadosos inherentes a este tipo de fraternidades gremiales durante la Edad Media y Moderna.

Centrándonos en las celebraciones religiosas solemnes del Triple Instituto, ya desde fines del Cuatrocientos tenemos noticia de que cada tribunal sufragaba anualmente oficios divinos en capillas y templos de sus sedes respectivas. Ya durante los siglos XVII y XVIII, los colmeneros de Toledo, el primer lunes de Cuaresma asistían a unas honras en memoria de los Reyes Católicos, la víspera y el día del sermón, en la parroquia mozárabe de Santa Justa, volviendo a reunirse por igual motivo la festividad de la Inmaculada Concepción -patrona de la Santa Hermandad- en la iglesia del Real Convento de San Juan de los Reyes, perteneciente a la orden franciscana, recibiendo cada uno de los concurrentes cuatro reales de gratificación¹; tras los cabildos generales posteriores se reunían en la sala capitular hermandina todos sus miembros, agasajándose con un ágape, transportando peones los bancos a los templos que albergaban dichas funciones religiosas para poderse acomodar en ellos en un lugar preferente, repartiéndose hasta fines del Seiscientos velas entre los convocados². Por ordenanza estaba reglada la celebración de similares oficios divinos en memoria de los Reyes Católicos en la ermita talaverana de Rocamador, vinculada

desde tiempos de los Trastámara a la organización apícola local y cedida a ésta solemnemente por el Cardenal Cisneros.

En Ciudad Real, los colmeneros desde las postrimerías del siglo XV empezaron a costear cada año un responso con víspera, vigilia y misa con motivo de la efeméride de Nuestra Señora de la O -días 17 y 18 de diciembre- en la iglesia de San Pedro, frontera con la sede hermandina, consagradas a las almas de los Reyes Católicos, sus refundadores y protectores por excelencia, y por las memoria de cuantos murieron en defensa de su instituto. En los siglos que nos ocupan, este acontecimiento congregaba a todos los hermanos, dependientes y la mayor parte de los poderes fácticos de la ciudad³.

Durante los siglos XVI y XVII, como tal aniversario tenía connotaciones funerarias, se encargó a una persona de confianza⁴ la construcción de un catafalco y el ornato de la iglesia. La presentación de los justificantes de dichos gastos durante el Seiscientos nos permiten recrear el ambiente de este acontecimiento sociorreligioso en Ciudad Real. Los días precedentes a la fecha comenzaban a practicarse los preparativos adecuados: mientras se concertaba con su cabildo eclesiástico los derechos de sacristía y clerecía, se ponía en conocimiento de algún destacado predicador local la intención de encomendarle el sermón, buscándose a los músicos que tocasen el órgano o la chirimía⁵.

Ganapanes contratados ex profeso, en algunas ocasiones los propios hermanos pecheros, llevaban los carros con la madera -tablones y tirantes- recogida de sus convecinos para fabricar el túmulo, adquiriéndose clavos, tachuelas, sogas y alfileres para fijar los paños negros del catafalco, alumbrado según mandaba la tradición con

veinticuatro velas labradas, seis velitas y una antorcha. Los paños negros eran recabados de ciertos mercaderes locales, pero debido a los problemas suscitados en alguna ocasión, se hizo aconsejable su petición a las cofradías locales para excusarse problemas y gastos, alquilándose candeleros para dotar de mayor magestuosidad al conjunto funerario⁶, haciéndose uso de incienso. En 1645 sabemos que las pinturas piadosas decoraron el catafalco⁷, trasportándose los escaños para acomodar a los asistentes de la iglesia de Santiago o del convento de Santo Domingo durante los siglos XVI y XVII, mientras que ya en el XVIII sería llevados los bancos existentes en la capilla de la entidad.

La tarde de la víspera del día de Nuestra Señora de la O, empezaban los oficios divinos, convocándose los hermanos a toque de campana a la sede hermandina desde donde se dirigían a las honras, orando en la nave central hasta el anochecer, y permaneciendo gran parte de noche en la vigilia; la mañana siguiente un predicador impartía el sermón⁸, concelebrándose misa cantada. Como era acostumbrado en las funciones religiosas denominadas "de cuarenta horas", culminaban los actos litúrgicos con una procesión por el interior de la iglesia⁹, encabezada por los cabildos eclesiástico y hermandino, seguidos por estricto orden jerárquico por hermanos y acompañantes, portando todos velas de cera, proporcionadas durante el Seiscientos de los caudales corporativos¹⁰.

En 1611, se hicieron coincidir las tradicionales honras en San Pedro con los actos solemnes por la muerte durante el parto de la reina doña Margarita de Austria. En esta ocasión excepcional los gastos se dispararon ante la magnitud del acontecimiento, invirtiéndose en la confección del túmulo quinientos cuarenta reales,

elevándose los derechos de clerecía de los catorce capellanes que asistieron a la función a trescientos cuarenta y tres reales, por mencionar los desembolsos más significativos, a los habrían de sumarse los mil sesenta y nueve reales por las cerca de doscientas treinta libras de cera y gratificaciones menores¹¹.

Con motivo de estas celebraciones era costumbre repartir caza menor o carneros entre los miembros del Santo Tribunal, distribuyéndose dinero o carne entre los pobres vergonzantes y pobres de solemnidad. Terminados los actos, los ganapanes devolvían maderas y paños a sus dueños, pagándose al guardián de San Pedro los derechos devengados más las limosnas tradicionalmente estipuladas. A mediados del Seiscientos los gastos generados en estos eventos eran comparativamente elevados, consumiendo parte de los escasos caudales institucionales: un memorial elevado el 14 de mayo de 1655 al Supremo Consejo estimaban tales dispendios en unos ciento setenta mil maravedís anuales¹²; a partir de entonces tales gastos siguieron una curva descendente, desapareciendo la costumbre de levantar un túmulo fúnebre, limitándose el cabildo a sufragar el responso de la víspera y una misa cantada durante la efeméride, invirtiéndose cada año entre ochenta y ocho y ciento catorce reales por los oficios divinos y la compra de determinados objetos litúrgicos, como cera blanca y vino consagrado.

Bien entrado el Setecientos, hacia comienzos de la década de 1760¹³, parece instituirse en Ciudad Real la costumbre de asistir anualmente en pleno la asociación apícola a una misa y sermón el día de la Inmaculada Concepción en el oratorio del convento de San Francisco, extramuros de la ciudad y antiguo lugar de juntas de la Hermandad, aplicado al mismo fin que la celebración antes expuesta.

6.2. ORATORIO DEL ESPÍRITU SANTO.

Desde el instante mismo en que se levantó el edificio que albergaba la sede de la Hermandad Vieja manchega, se contempló la necesidad de dotarse de una capilla para celebrarse oficios divinos, asistiéndose por un sacerdote que garantizase la existencia de misa rezada en ella todos los días festivos y los domingos. Presos y carceleros concurrían a ella de forma inexcusable, lográndose en 1616 del colector general apostólico en España la licencia para continuar su labor tras la revocación tridentina de los permisos para oficiar en oratorios privados¹⁴.

El presbítero titular no era el único en poder impartir misa en dicho recinto, sino que diversos religiosos regulares y seculares acudirían a él, convocados por el cabildo para ello, generalmente por ausencia o enfermedad del capellán; así en 1692-1693 se libraron nueve reales al padre superior del monasterio de Santo Domingo por oficiar misa y confesar a unos reos¹⁵, en 1738-1739 un mercedario descalzo celebra la mayor parte de las misas encomendadas al presbítero Luis de Sotomayor¹⁶, en 1742 se libraron seis reales al clérigo Luis Cerdán como limosna por dos misas¹⁷, y tres años más tarde se pagaban doscientos cuarenta reales por celebrar ochenta misas en el oratorio del Espíritu Santo al receptor de la parroquia de San Pedro¹⁸.

Los sucesivos inventarios de la capilla de fines del Seiscientos dan buena cuenta de los objetos litúrgicos existentes: un cáliz de plata sobredorado, una patena de plata, una pequeña cruz de plata, un purificador, un tafetán encarnado, una bolsa para los corporales

nuevos, un paño para limpiar el cáliz, un alba de Ruán con encajes y cíngulo blanco, una estola y manipulo con pasamanos de plata verde, unos manteles de tela blanca con puntillas, un misal nuevo, un atril de nogal, una campanilla metálica, dos candeleros de azofar, un cajón junto al altar, unas vinajeras de vidrio con incrustaciones de plata, una lámpara de azofar, un frontal de damasco verde con guarnición plateada, una casulla y una estola a juego de color verde¹⁹.

La dotación material de la capilla corría por cuenta del Santo Instituto: hacia 1632 se compró un candelero, dos hábitos, dos purificadores, dos paños para el lavatorio ritual y un mantelete para el altar, encargándose al platero Cristóbal Rodríguez el ornato del cáliz²⁰; en 1638 se arreglaba la lámpara que estaba descompuesta²¹; en la década de 1680 se colocó una estera ante el altar²²; librándose en 1693 veinte reales para el adecentamiento del oratorio²³. Durante el Setecientos, en 1716 se hizo entrega al mayordomo de un lienzo bordado de tafetán verde y una caja de latón para contener las sagradas formas²⁴; mientras que en 1719 se adquirió una casulla de damasco verde para el capellán²⁵. Cera y vino componen unas partidas fijas anuales cuyo importe oscila entre los cuarenta a los más de ochenta reales, en 1794-1795 y 1751-1752 respectivamente. Sin duda los mayores desembolsos fueron ocasionados en 1725-1726, cuando todo lo adquirido asciende a doscientos cuarenta reales, monto elevado si tenemos en cuenta que medio siglo más tarde se invirtieron setenta y cinco reales en la compra de corporales, hábitos, purificadores y "encajes para el oratorio"²⁶. En doce reales anuales se concertó la limosna devengada por las sagradas formas proporcionadas desde la iglesia de San Pedro.

6.3. ASISTENCIA RELIGIOSA A REOS Y DEPENDIENTES.

Los orígenes gremiales fundacionales de la Hermandad Vieja comportaban una serie de obligaciones piadosas para con sus miembros que, paulatinamente, se extenderían a sus presos y a las víctimas desasistidas, en virtud de su vertiente como audiencia dispensadora de justicia real especializada. En efecto, tanto sus oficiales como los custodiados en sus calabozos, e incluso los individuos objeto de violencias fatales, eran tratados con la preceptiva clemencia.

Asegurada desde antiguo la dispensa de oficios divinos en la capilla del Espíritu Santo todos los días feriados, era costumbre que su capellán atendiese las solicitudes de confesión por parte de unos sujetos que se les consideraba en pecado debido a la transgresión religiosa que aparejaba todo delito, por todo ello el cabildo gratificaba al clérigo con unos reales, estimulando de esta manera su asistencia espiritual a unos individuos estigmatizados social, legal y moralmente por su presunción de culpabilidad²⁷.

Particulares cuidados se concedían a los reos condenados a la pena capital. Estaba establecido que en el instante de notificarles la sentencia, tres días antes de la ejecución, permaneciesen retirados en el oratorio en compañía de religiosos que le ayudasen a bien morir -no olvidándose de redoblar su custodia-. Algunos clérigos le acompañaban durante el trayecto hasta Peralvillo hasta el cadalso para reconfortarle. En 1598, al ajusticiamiento de Gonzalo Hernández concurrieron tres frailes y el mayordomo de la congregación de la Santa Caridad²⁸; en 1606 ó 1607 asistieron al asietamiento de Gregorio

Martín, fray Jerónimo Verdugo y fray Gonzalo de Ávila, predicadores dominicos, siendo gratificados por el cabildo con una limosna de veinticuatro reales²⁹; avanzado el Seiscientos, se dieron cuatro ducados al prior del monasterio dominico ciudarrealeño por asistir en Peralvillo al reo Joseph de Torres³⁰.

El papel desempeñado por estos clérigos era fundamental, por ser indispensable la reconciliación espiritual para procurarse la salvación de su alma, llegando a su máxima expresión la finalidad purgativa de la pena con la resignación del reo a su destino, expiando públicamente sus culpas terrenales en este acto último de contrición. Siendo el objetivo prioritario del encausamiento criminal la autoinculpación del penado, no complacía más a la concurrencia que el espectáculo de catársis colectiva que se convertía la ejecución de un delincuente que se resignaba y aún pedía su muerte, teniendo en ello una parte esencial la persuasiva labor de los religiosos que le acompañaban en sus últimas horas³¹.

Excepcionalmente, el reo autodeclarado inocente durante el proceso asumirá su culpa en tan severo trance. En 1669, en la sala de visita hermandina comparece el convicto Juan Cueto dando cuenta de sus fechorías tras confesarse con el padre fray Juan Marín, del hábito de Santo Domingo, declarando ser perjuro y haber dado falso testimonio durante su encartamiento, para descargo de su conciencia³².

Cuando ésto no es posible se suscitará un conflicto interno entre los magistrados hermandinos: por un lado estaba la imperiosa necesidad de dispensar justicia inexorablemente contra los culpables, mientras que por el otro no podía permitirse ninguna ejecución, ni aún de los reos condenados por los delitos más atroces, sin garantizar su

salvación eterna. Esta contradicción tuvo lugar en 1660, cuando al conducirse a Juan Jiménez a Peralvillo para su ajusticiamiento, el cura de la iglesia de Santiago al declarar que el convicto "no iba dispuesto a morir como buen xptiano", conmutándose posteriormente su pena de muerte por la de diez años de forzado en las galeras reales³³.

Obligación del Santo Tribunal era proporcionar digna sepultura a los reos que morían mientras permanecían bajo su amparo y custodia, generalmente enterrados en el monasterio de San Francisco o en la iglesia de San Pedro, siendo amortajados bien con un sudario blanco o con el popular hábito de San Francisco³⁴, costeándose íntegramente por la entidad los sufragios por las almas de los difuntos³⁵.

Si tales cuidados se dispensaban a los delincuentes, sus propios oficiales no tendrían un trato peor, especialmente el alcaide y su familia, a cuyos miembros se extendía la asistencia religiosa por parte del capellán corporativo. En su hora final el cabildo de forma ocasional cubrió los funerales de algunos de sus oficiales más desfavorecidos como carceleros, pregoneros y cuadrilleros; por ejemplo, en 1687 se libraron treinta reales para el sepelio del alcaide Fernando de Tapia³⁶.

Era práctica usual cubrir la debida asistencia espiritual de las víctimas moribundas por parte de las justicias³⁷. Esporádicamente, el Santo Tribunal asumió el entierro y las misas por aquellos individuos que fallecían en despoblado y cuyos cadáveres no eran reclamados; de esta forma, entre 1692-1693 se costearon las ciento noventa y nueve sufragios por el alma del hidalgo don Antonio de Sosa, asesinado en Sierra Morena, y poco antes se habían dicho nueve responsos por la

salvación de dos hombres hallados ahogados en un pozo de Santa Cruz de Mudela³⁸.

6.4. LIMOSNAS A VERGONZANTES.

Pasado el tiempo en que la mayor parte de la caridad hermandina se encauzaba a través de instituciones religiosas y fundaciones pías -como parroquias, conventos, ermitas o beaterios³⁹-, en las postrimerías del quinientos la dispensa de socorros el día de Nuestra Señora de la O se efectuaba mediante una comida a la asistían los pobres de solemnidad y era llevada a las casas de los pobres vergonzantes, consistente probablemente en un guiso de carne, tal vez con legumbres, acompañada de vino y pan, siendo uno de los escasos días en que la parca dieta de los beneficiados era enriquecida por el aporte de carne, seguramente carnero, fuera de las piezas que pudiesen cazar furtivamente⁴⁰.

Entre la escasa documentación conservada al respecto se hallan ocho relaciones de beneficiarios de estas dádivas entre 1597 y 1618, lo que nos permite dilucidar el destino y el sistema utilizado en su reparto. El mismo día o las vísperas de la festividad de Nuestra Señora de la O -excepcionalmente a principios de agosto, como acontece en 1616⁴¹-, el mayordomo, auxiliado de escribano e incluso a veces del alcaide o cuadrilleros, o ante la presencia de los alcaldes, entregaban unos reales a los vergonzantes en sus propias casas o centros de acogida asistencial, no faltando los dispensados a mendicantes en los arrabales o en las mismas calles de la ciudad, prefiriéndose, por este orden, las mujeres a los hombres, los tullidos a los sanos y los naturales de la localidad a los forasteros.

El sistema utilizado parece sugerirnos que previamente a su distribución se confeccionase una lista de necesitados, probablemente a instancia de los párrocos o en base al padrón vecinal, asignándoles una determinada cantidad, pues junto a sus nombres suele aparecer una señal distintiva de su concesión o con distinta ortografía se asientan los socorros de última hora. La cantidad destinada se había estipulado con anterioridad, pues se tiende a redondear su monto total.

Las aportaciones dispensadas, nominal o a cada unidad familiar, oscilan entre uno y ocho reales por socorrido, mayoritariamente vergonzantes -mujeres por lo general, como monjas, beatas, ancianas, viudas, y doncellas, pero también ancianos, huérfanos, hidalgos empobrecidos-; enfermos físicos -impedidos, ciegos, mancos, desnarigados, cojos, desorejados, sifilíticos, etc-, o psicosomáticos -como enajenados mentales o sordomudos-; familiares de sus hermanos que vivían en la indigencia -hijos e hijas de viudas, madres y suegras sin recursos-; dependientes del Santo Tribunal -porteros, pregoneros, cuadrilleros, alcaides y sus viudas, recogidos en el hospital de la Mejora-; pobres de solemnidad, ermitaños, sacristanes, sirvientes domésticos o de labor, esclavos de color, trabajadores marginales -alimañeros, cazadores, cuchilleros, barberos, lavanderas, cabreros, pastores, carboneros, empedradores, herreros, carniceros, esparteros-; etc⁴².

El número de los socorridos varia alrededor del centenar de beneficiarios en los momentos más boyantes de fines del Quinientos y principios Seiscientos, nada comparable con los trescientos indigentes, entre naturales y forasteros, que se asegura atender por el cabildo en 1569⁴³. Probablemente a partir de 1690 se desnaturalizasen las acostumbradas limosnas navideñas, pasando su

importe a engrosar los aguinaldos de sus oficiales y dependientes orgánicos, limitándose a partir de entonces a destinar eventualmente solo una pequeña parte a dádivas entre los necesitados, por lo general a viudas sin recursos.

6.5. RELACIÓN CON CONGREGACIONES PIADOSAS: LA COFRADÍA DE LA SANTA CARIDAD.

Los hermanos del Santo Instituto manchego, entre quiénes se cuentan muchos de los miembros más destacados del patriciado urbano local, suelen estar integrados en las diversas cofradías ciudarrealeñas, entre las cuales destaca por su vinculación, en cierto modo, institucional a la Hermandad Vieja la cofradía de la Santa Caridad⁴⁴.

Según una tradición apócrifa recogida por el presbítero Luis DELGADO MERCHÁN, luego retomada por I. HERVÁS Y BUENDÍA, un tal Sancho de Valdivieso, coetáneo del don Gil mencionado en los supuestos documentos fundacionales de la organización apícola, reconfortaba piadosamente a los reos de hermandad de su severa justicia, exhortándoles a su arrepentimiento y a buen morir, sepultando luego sus cadáveres.

Igualmente gracias a estos eruditos locales conocemos la existencia del denominado "Cristo de los Tarugos", así llamado por la cruz en la que se hallaba, portado tanto por la dicha cofradía como por el Santo Tribunal durante sus actos solemnes; ubicada una réplica en el oratorio hermandino, el original durante el Setecientos permanecía en la casa del prioste de dicha congregación, dándole nombre por entonces a la misma, al ser conocida por entonces como Hermandad del Santo Cristo de la Caridad. Muestra aventajada de la imaginería popular, el cabildo eclesiástico prescribió en 1515 que durante las procesiones y otras celebraciones religiosas desfilase tras la cruz de la parroquia de San Pedro, iglesia en la que tenía su sede dicha asociación pía⁴⁵.

Durante gran parte de la Edad Moderna, el mayordomo de la cofradía de la Caridad marcharía encabezando la comitiva que conducía a los ajusticiados a Peralvillo, portando su estandarte y cruz⁴⁶, siendo acompañado a veces por el hermano mayor o por algunos de sus integrantes, como aconteció en 1597⁴⁷. El acompañamiento de miembros de congregaciones religiosas durante las ejecuciones no era exclusiva, como lo demuestra la asistencia de eclesiásticos a las mismas, mencionándose ocasionalmente entre los gratificados por su asistencia a las ejecuciones a los mayordomos de la congregación de Nuestra Señora de la Cabeza, como ocurrió a principios del Seiscientos con motivo del ajusticiamiento del reo Antonio Martín⁴⁸.

A título particular, miembros de la corporación apícola figuran como hermanos, priostes e incluso como fundadores de muchas de las cofradías y entidades pías que proliferaron en Ciudad Real entre los siglos XVI al XVIII, como en tantas otras ciudades del Reino.

La adscripción a la cofradía de Santiago, sita en la iglesia homónima y exclusiva del estado hidalgo, era considerada secularmente como prueba positiva de nobleza, coincidiendo en ella la mayor parte de los miembros rectores de la Santa Hermandad⁴⁹. Por poner un ejemplo evidente de esta doble pertenencia, su junta plenaria de 26 de julio de 1745, reunida para proveer rotatoriamente la dignidad de mayordomo de la próxima efeméride, consigna entre sus integrantes a los siguientes hermanos que su vez lo eran del Santo Tribunal: don Francisco Treviño Calderón -alcalde de los colmeneros-, don Gaspar del Forcallo y Heredia, don Álvaro Muñoz y Torres, don Julián López de Haro y Osma, don Juan Tomás Velarde Muñoz, don Joseph Velarde Muñoz, don Luis Treviño Carvajal, don Francisco Rodríguez Ledesma, don Bernardino Muñoz de Loaysa, don Luis Bernabé Ruiz Francés, don Diego

Muñoz y Vera y don Francisco Treviño Baíllo, es decir, el noventa por ciento de sus cofrades⁵⁰.

Del mismo modo, aunque en menor medida, muchos de los hermanos del Santo Tribunal forman parte de otras sociedades religiosas afines, como la de Santa María del Prado, igualmente reservada a los hidalgos notorios, o a la de los Caballeros del Rosario, donde en el Setecientos se decía que profesaban las doce casas principales de la ciudad, y en el resto de las catorce hermandades ciudarrealeñas que se contabilizaban por entonces⁵¹.

En 1672, entre los doce congregantes fundadores de la cofradía de Caridad del Hospital del Refugio, consagrada a la curación y recogida de mujeres necesitadas y asistencia a los presos pobres de la cárcel pública, hay tres miembros de la Santa Hermandad Vieja, a saber: don Francisco Bermúdez de Rivera, Juan Antonio Jédler Gámez y don Juan Treviño y Masa⁵².

En La Mancha existían otras cofradías con ciertas similitudes formales con el Santo Instituto de Ciudad Real, como la daimieleña del Santísimo Cristo de la Colmena, de evidentes resonancias apícolas, sita en la ermita de la Veracruz e integrada por setenta cofrades que salían en procesión todos los Jueves Santos, y que a fines de 1770 aún no estaban confirmados sus estatutos por el Real Consejo de Órdenes⁵³. De esas fechas tenemos noticia de una cofradía en Valdepeñas que tomó carácter de alarde en su organización y manifestaciones públicas⁵⁴.

6.6. EL HOSPITAL DE LA MEJORA.

La Hermandad Vieja de Ciudad Real, desde fines del Cuatrocientos, contaba con un pequeño hospital de nueva construcción, sito en la calle de la Mejora⁵⁵, en donde se albergaban pobres y enfermos para su curación o su asilo temporal. Este edificio es uno más de las hospederías, hospitales, y albergues erigidos entre los siglos XIV al XVI por cabildos, cofradías y hacendados, siendo dotados con unas rentas anuales para su mantenimiento.

Reorganizado el Santo Tribunal manchego durante el reinado de los Reyes Católicos, los monarcas impulsaron decisivamente este proyecto, arbitrando desde su corte itinerante en Córdoba, en 1485, que se destinasen los superávits acumulados de la entidad a la fundación de una disposición benéfica, encauzando hacia un fin piadoso unas rentas susceptibles de ser malversadas⁵⁶. A fines de 1487 aún se recordaba desde la Corona la obligación de atender dicho mandato, dándose carta de poder al bachiller Gonzalo Martínez de Loaysa para pedir a Antón Sánchez Caballero cuentas del dinero ordenado recoger de la Hermandad para tal finalidad⁵⁷. Habrá que esperar hasta 1486 para que fuesen adquiridas, por ochenta y cinco mil maravedís, unas casas sobre cuyos solares levantar el citado inmueble, demorándose unos años más en acometer su edificación⁵⁸.

En la década de 1490 ya estaría plenamente en funcionamiento el hospital hermandino, librándose algunas de las limosnas otorgadas por Navidad a los allí albergados⁵⁹, costumbre que con otros matices se mantendrán por tiempo superior a una centuria⁶⁰.

La administración de las parcas rentas destinadas a la financiación del hospital es asumida por su Amo u hospitalero, viéndose engrosadas principalmente por las condenaciones pecuniaras impuestas por el Santo Tribunal⁶¹ y una gratificación fija en pleno invierno de dos ducados para adquirir leña y otros tantos para agasajar a su encargado. Este individuo será designado directamente por el cabildo entre alguno de sus deudos caracterizados por su probada honradez y arreglada vida cristiana.

Las labores diarias en el albergue serán llevadas a cabo por el Amo, probablemente ayudado por una mujer -seguramente su propia esposa, hermana o madre-, encargada de lavar la ropa, asistir a las enfermas y ancianas, barrer los cuartos, henchir los jergones y cocinar su sustento y el de los acogidos⁶².

Al menos durante el otoño y el invierno, la vida gravitaba en torno a la cocina, el único aposento caldeado del inmueble, el que reunía unas mejores condiciones de habitabilidad y en donde se repartían los socorros en forma de comidas. Presumiblemente, los albergados que pudieran limosneaban durante el día en calles, puertas de iglesias y conventos, o en las casas de los vecinos acaudalados, volviendo al edificio para almorzar y para pernoctar tras el cobijo de sus muros. A veces la Hermandad no solo proporcionaría alojamiento, comida y ropa a los acogidos, sino que les llegaría a facilitar su traslado a sus localidades de origen⁶³, y les ofreció asistencia religiosa en sus últimas horas⁶⁴.

A principios del Seiscientos se emprendieron algunas obras de mantenimiento de la fundación de la Mejora, consignadas entre los

gastos de los balances contables pertenecientes a 1603-1604 y 1608-1609⁶⁵; en 1609-1610 se invirtieron cuatrocientos veinticinco reales⁶⁶; en 1612-1613, cuando probablemente más hacinados estaban sus acogidos⁶⁷, fueron llamados un maestro albañil y seis peones para realizar determinados reparos estructurales; hacia 1617 se ahondó su pozo, pues al estar medio cegado peligraba el abastecimiento de agua, gastándose más de doscientos reales en otras mejoras añadidas⁶⁸.

A partir de 1620, la paulatina postración del Santo Tribunal determinó su abandono, dejándose de nombrar hospitalero y llegando a sufrir un deterioro tan importante el edificio que a mediados de 1622 el cabildo era consciente de la ruina en la que se hallaban buena parte de sus dependencias⁶⁹. Reunido el cabildo el 1 de marzo de 1623 es informado por los alarifes que la pieza situada a su umbría, y que servía de bodega, esta prácticamente hundida, su reja y madera de la ventana corroídas, la cocina donde hacían vida los pobres y su habitáculo anejos estaban caídos, manifestándose por su inmediata reparación para evitar su total ruina⁷⁰.

La penuria económica de la organización manchega, a cuyos destinos estaría insolublemente ligada dicha fundación, durante lustros no pudo más que subsanar sus perceptibles carencias estructurales, apuntalando muros y reforzando su cerramiento exterior para evitar la entrada de desaprensivos, vagabundos o mendigos. En 1634 se encargó a Francisco del Castillo, maestro albañil de Caracuel, que realizase los reparos más perentorios, importando lo obrado un total de cuatrocientos setenta y cuatro reales de vellón⁷¹.

No tenemos constancia que se volviese a utilizar el hospital para su fin primigenio hasta que hacia 1669-1670 se mencionan entre los

desembolsos institucionales la adquisición de una estera para dicho inmueble⁷². En 1686 se destinan dos mil reales para su rehabilitación y adecentamiento inmobiliario⁷³, en un último intento por salvarlo de la ruina. A partir de entonces los arreglos acometidos serán mínimos, concretándose en el apuntalamiento de sus muros, la reparación del quicio de su puerta principal y de su techumbre, o la adquisición de candados para evitar su ocupación por parte de vagabundos al permanecer deshabitado.

Próximo a mediar el Setecientos, en otoño de 1742, las boyantes finanzas pecuarias permitieron al marqués de Peñafuente, alcalde de la corporación apícola, arbitrar su reconstrucción, ordenando sacar su obra a concurso público tras ser peritado el coste aproximado de la proyectada edificación, estimada en unos ocho mil reales. Tras unas semanas de demora, será adjudicada a Juan García Maleta, en mil seiscientos cincuenta reales, a los habría que añadir los gastos de herrería y carpintería⁷⁴.

Las obras, que duraron todo 1743, supusieron un monto total de nueve mil doscientos setenta y cuatro reales, aderezándose en invierno de dicho año su miral, la pintura del cuadro de Nuestra Señora de la Mejora ubicado sobre la puerta principal y el blanqueo de su nicho, el revocado y encalado de sus paredes, la limpieza del pozo y la mudanza de su brocal, así como la compra de aldabillas y pasadores para puertas y ventanas⁷⁵. A partir de entonces el cabildo únicamente mandaría recorrer su tejado, para renovar las tejas deterioradas y evitar las goteras que lo volviesen a deteriorar.

Ignoramos el destino de la nueva edificación, que presumiblemente perdería su antigua condición de institución benéfica⁷⁶. Desde

Navidades de 1798 hasta el 1800, al menos, será arrendada la tienda nueva formada en las dependencias del antiguo hospital hermandino al maestro cerrajero Francisco Ortega, a razón de seis ducados anuales⁷⁷.

NOTAS AL CAPÍTULO 6.

¹ AHN. Div. Her., leg. 64, nº 6 y 7, nº 8. s.f.

² El cabildo toledano de 11-V-1711, ante la pregunta de uno de sus miembros por la causa que motivó el cese de la distribución de cera entre los hermanos en la función de Santa Justa, dispone que el archivero busque la respuesta entre la documentación existente (Ib., leg. 69, nº 3).

³ Ver apéndice documental, texto nº 16.

⁴ En 1600, dos cuadrilleros y el propio alcaide Mateo de Piedrabuena invirtieron ocho días en confeccionar el túmulo. Sólo conocemos el nombre de uno de estos artesanos de lo efímero, se trata de Gabriel de Espinar, encargado entre 1612 a 1619 de levantar al catafalco, con ayuda de peones, sacristanes e incluso cuadrilleros, cobrando tres ducados en cada ocasión (Ib., legs. 57, nº 9 y 58, nº 1 al 3).

⁵ En una época en que la misa era en latín y el predicador se hallaba de espaldas a los creyentes, era frecuente en algunas comarcas, o en determinados eventos especiales, que algún músico participase de la ceremonia, amenizando la liturgia y señalando los momentos álgidos de los oficios divinos. En 1597 participaron en las honras cantores y un organista; mientras que, a partir del 1600, el maestro de chirimía Melchor Rodríguez concurrirá todos los años a dicho acto, percibiendo hasta 1620, entre 16 y 48 rs., según la ocasión. Pedro de Poblete, ordenado de menores, es el organista que en 1616 recibe 16 rs. por sus

asistencia, y sabemos que en 1644 y 1645 hubo música, coro y órgano. Aunque en fechas posteriores parece desaparecer dicha costumbre en Ciudad Real, no ocurre otro tanto en Toledo, donde su Hermandad Vieja durante el Setecientos aún pagaba quinientos maravedís "a los clarineros que asistieron a la festividad de la Concepcion"; 12-III-1726 (Ib., leg. 70, nº 9, s.f.).

⁶ *Ib.*, leg. 57, no 8.

⁷ *Ib.*, leg. 58, no 5.

⁸ Durante el Seiscientos se recurrió a algunos clérigos ajenos a la corporación colmenera: en 1597 se pagaba un doblón de limosna al predicador; en 1602 se hacían llegar al religioso encargado del sermón en San Pedro; en 1608 serían entregados cuatro ducados al dominico fray Juan de Morales; en 1616 se gratificaba con 24 rs. al prior del monasterio de Santo Domingo ciudadrealeno; en 1617 se daban 26 rs. al prior del de Nuestra Señora del Carmen; dos clérigos asistieron al preste que celebró misa cantada durante las exéquias de 1645.

En Toledo, el capellán hermandino concurría junto al cabildo a actos similares, pagando de su asignado al predicador que concurría a la ceremonia.

⁹ Un incidente protocolario protagonizado por un corregidor de Ciudad Real en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Prado nos permite conocer que en dicho templo era costumbre realizar procesiones de este tipo anualmente los "domingos de Minerva", el Jueves y Viernes Santo, los días de jubileo y con motivo de las "funciones de cuarenta horas"; 29-VI/1-VII-1785 (AHN. Consejos, leg. 1.007, nº 9).

¹⁰ En determinadas ocasiones el gasto ocasionado estaba por encima de las posibilidades reales del Santo Tribunal. Así se pueden valorar los más de 906 rs. que importaron las 201 libras de cera consumidas en 1610, ó los 1254 rs. desembolsados por idéntica causa en 1612 (Ib., leg. 57, nº 7 y 9).

¹¹ A principios del Seiscientos hubieron de pagarse 15 rs. a Antón López, mayordomo de la cofradía de las Ánimas de la iglesia de Santa María del Prado, como compensación por el deterioro sufrido por el paño negro prestado para el túmulo (Ib., leg. 57, nº 8).

En efecto, era costumbre de las fraternidades tener como emblemas tales elementos presidiendo sus actos más solemnes; así en la fundación de la Hermandad del Hospital del Refugio de Ciudad Real, entre sus estatutos fundacionales se dice

"...que aya de tener y tenga un paño negro y en él una cruz roja en señal de la sangre de Jesucristo Nuestro Redemptor...para que en los entierros cubra el ataúd o feretro en que se llevasen a enterrar los cuerpos de los difuntos pobres y también sirva en los entierros de los señores Congregantes..."

15-VII-1672, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 360, nº 6, s.f.).

¹² Vid. apéndice documental, texto nº 2.

¹³ La primera referencia documental que disponemos al respecto data de 13-III-1761, cuando en un informe del corregimiento al Consejo de Castilla se menciona el gasto en dicha ocasión 105 rs., cuando por entonces las honras de San Pedro importaban 88 rs. (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9). Desde 1762 a 1800, por la asistencia al acto de su comunidad religiosa, se desembolsarían 125 rs. cada año.

¹⁴ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 3.

¹⁵ Ib., leg. 58, nº 12.

¹⁶ Mientras el capellán hermandino percibía por su asignado anual 368 rs., al citado monasterio ciudarrealeño se pagó en concepto de limosna 153 rs. (Ib., leg. 59, nº 3).

¹⁷ Ib., leg. 59, nº 4.

¹⁸ Ib., leg. 59, nº 7.

¹⁹ Visita a la cárcel de los alcaldes tras la toma de sus varas, el 10-IX-1691 (Ib., leg. 58, nº 12). Coinciden, en lo substancial, con este inventario los realizados entre 1693 al 1697 (Ib., leg. 58, nº 12 y 14).

²⁰ El monto de lo adquirido se elevó a 300 rs., devengándose otros 20 rs. por el trabajo de un menestral (Ib., leg. 58, nº 4).

²¹ Ib., leg. 58, nº 5.

²² Al menos entre 1685 al 1688 se compraría, por 4 rs., una estera de esparto para el altar, siendo costumbre poner arpillera bajo el lienzo que cubría el altar (Ib., leg. 58, nº 12).

²³ Ib.

²⁴ 21-VI-1716 (Ib., leg. 42, nº 7).

²⁵ La primera de las partidas asciende a 34'17 rs. (Ib., leg. 58, nº 20) y, la segunda de ellas, 28'17 rs. (Ib., leg. 58, nº 21).

²⁶ Ib., leg. 58, nº 25 y 61, nº 2.

²⁷ En 1693-1694 se libraron 14 rs. al presbítero que tomó confesión a unos gitanos daimieleños (Ib., leg. 58, nº 12).

²⁸ Ib., leg. 56, nº 23.

²⁹ ADPCR, s.c.

³⁰ Rendición de las cuentas relativas al periodo 1666-1667 (Ib., leg. 58, nº 8)

³¹ Ib., leg. 36, nº 3. Vid. apéndice documental, texto nº 18.

³² 30-IX-1669, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 202, ff. 73r-vº).

³³ 29-IV-1660/23-XII-1661, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 35, nº 3).

³⁴ El 26-II-1663 fue sepultado en San Pedro, amortajado con el hábito de San Francisco, el reo Juan de Torres (Ib., leg. 36, nº 2). Entre 1686-1687 se libraron 7'17 rs. "para mortaja de Phelipe Enzinas que murio en la carcel" (Ib., leg. 58, nº 12, s.f.). En 1729 el alcaide comunica al cura de la citada parroquia la defunción de Antonio Manzano para que tañesen las campanas a difunto, celebrándose el sepelio con asistencia del semanero y del sacristán (Ib., leg. 46, nº 9). Asimismo, en 1782 en dicho templo recibieron sepultura los reos Vicente Cerro, Mateo Gómez y María Solís (Ib., leg. 62, nº 1).

³⁵ En 1744 se encargaron 21 misas de difuntos por el aniversario del óbito del reo de hermandad Cosme Damián (Ib., leg. 59, nº 6),

³⁶ Ib., leg. 58, nº 12, s.f.

³⁷ El 14-IX-1724, alertados por la noche el justicia mayor de La Solana y el juez superior hermandino Francisco de Tobar de la comisión de un delito en despablado, de inmediato parte ambos, acompañados de un cirujano y de un clérigo, siendo lo primero que hicieron al ver a un guarda de campo malherido el proporcionarles la extrema unción. A las pocas horas, y pese a haber sido trasladado a su domicilio, se producirá la muerte del agredido (Ib., leg 45, nº 12).

³⁸ En el convento de San Francisco, el 25-IX-1692, se encargaron nueve misas a razón de dos reales por los ahogados de Santa Cruz de Mudela; el 17-IX-1692 se habían concertado 50 misas de difuntos por el alma del citado caballero, pagándose el importe de otras 49 el 30-I-1693, y 100 el 24 de dicho mes y año; en total de pagarían 413 rs. por tales conceptos durante dicho periodo contable (Ib., leg. 58, nº 12).

³⁹ Vid. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, "Caridad y asistencia...", op. cit., pp. 52-54.

⁴⁰ La modificación, durante el Quinientos, de la acostumbrada limosna monetaria en comida tenía una triple finalidad: se garantizaba la ayuda alimenticia a los necesitados en vísperas de Navidad; era un procedimiento para evitar que la galopante inflación desvirtuase el valor adquisitivo del puñado de monedas normalmente distribuido; y abarataba su coste real pues, al tratarse de carne de carnero, se

podía comprar a bajo precio a algún hermano de la corporación o incluso se podía excusarse su adquisición al tomarlo de lo asadurado.

⁴¹ El socorro impartido por el Santo Instituto dicho año se efectuó los días 7 y 11 de agosto, días ante de la fiestas patronales locales de Nuestra Señora del Prado, el 15 de dicho mes (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 1).

⁴² Una muestra de los beneficiarios durante dicha festividad en apéndice documental, texto nº 15.

⁴³ 24-V-1569, Ciudad Real (Ib., leg. 1, nº 36, s.f.).

⁴⁴ Dependiente de la Hermandad de Talavera corría la suerte de la cofradía de Santa María de Rocamador, integrada desde el siglo XV eminentemente por los colmeneros hermandos, aunque mantenía una independencia financiera e institucional durante la centuria, estrecharía tales relaciones en centurias posteriores.

⁴⁵ I. HERVÁS Y BUENDÍA, op. cit., p. 416.

⁴⁶ En dichas ocasiones comparecían en Talavera de la Reina la fraternidad de Rocamador; y en Toledo la de la Santa Caridad o la de la Misericordia, durante los siglos XVI al XVIII.

⁴⁷ AHN. Div. Her., leg. 56, nº 23.

⁴⁸ 1-IX-1607, Ciudad Real (ADPCR. s.c.).

49 La relación de cofrades pertenecientes al Santo Tribunal sería demasiado prolija, por lo que únicamente mencionaremos a algunos de sus priostes:

<u>NOMBRE DEL PRIOSTE ANUAL</u>	<u>AÑO ELECCION. 26 JULIO</u>
Don Álvaro de Céspedes Maldonado	1609
Don Fernando Muñoz Treviño	1631
Don Gómez Ramírez de Aguilera y Guevara	1633
Don Juan de Aguilera y Guevara	1638
Don Diego Muñoz y Molina	1654-1655
Don Antonio de Aguilera y Guevara	1656
Don Cristóbal de Prado y Armenta	1679
Don Cristóbal Treviño Guarnizo	1684
Don Juan Velarde y Céspedes	1688
Don Álvaro Muñoz y Torres	1701
Don Luis Treviño Carbajal	1722
Don Juan Treviño Dávila	1745
Don Juan Tomás Velarde y Muñoz	1746

50 AHN. OO.MM., Calatrava, Pruebas de caballeros, exp. 2.637, f. 63vº.

51 Cf. M.P. RAMÍREZ RODRIGO, *Cultura y religiosidad popular en el siglo XVIII: Censo de Hermandades, gremios y cofradías del Censo del Conde de Aranda en la provincia de Ciudad Real*, Ciudad Real, 1989, pp. 138-143.

52 Estatutos de 15-VII-1672, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg 630, nº 6, ff. 1r-vº).

53 Cf. M.P. RAMÍREZ RODRIGO, op. cit., p. 149.

54 En el viaje girado al marquesado de Santa Cruz por un acompañante del señor durante la Ilustración, describe su estancia en Valdepeñas:

"Hay aquí una compañía llamada de Jesús, que debería llamarse Santa Hermandad por ser cofradía de Jesús Nazareno, y gobernarse en estilo de guerra. Tiene su capitán, su alférez y sus cabos de escuadra. Publicose hay la fiesta para el 29 del corriente -septiembre- y habiendo salido los hermanos soldados con sus

oficiales, banderas, tambores y escapulario al cuello, marchando a cuatro por fila, vinieron a sacar a SS. EE. y los llevaron delante entre dos alabarderos, como dos sayones con las armas a la funerala"

Pub. C. FERNÁNDEZ DURO, "Viaje a la Mancha en 1774", en *Boletín de la Sociedad Geográfica*, nº 21 (2º semestre de 1886), p. 125.

⁵⁵ I. HERVÁS Y BUENDÍA confundió dicho inmueble con el de San Juan de Dios, colindante al de la sede hermandina, pero totalmente autónomo de la Hermandad apícola. Dicho autor especuló con que dicho hospital, consagrado al albergue y curación de hombres sin recursos, hospedaría a los familiares de los reos hermandinos, acogiendo ocasionalmente a sus procuradores y letrados. Op. cit., p. 415.

⁵⁶ 13-VII-1485; traslado de 6-IX-1512, Ciudad Real (AGS. CC. Pueblos, leg. 6, nº 73, f. 2r).

⁵⁷ 12-XII-1487, Zaragoza (AGS. RGS. f. 156); Cf. A. PRIETO y C. ÁLVAREZ, *Archivo General de Simancas. Registro General del Sello, Catálogo*, t. 4, p. 261.

⁵⁸ 17-III-1489, Medina del Campo (AGS. RGS. f. 113); Cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, op. cit, p. 227.

⁵⁹ Entre los beneficiarios en 1501 se hallan Ana Martínez y una anciana acogida, distribuyéndose a cada una de ellas un real.

⁶⁰ En 1618 se entregaron 100 rs. al hospital y a los reos pobres encarcelados por el Santo Tribunal (AHN. Div. Her., leg 58, nº 3).

⁶¹ La sentencia pronunciada el 7-XII-1574 en Ciudad Real contra el almagreño Juan Díaz Bueno por heridas en el yermo a su convecino, además de la pena de destierro, le imponía la sanción de

"...myll maravedis de pena para los presos desta Santa Hermandad y ospital della conforme a la antigua costumbre y en un real para azeyte de la lampara que reside delante del crucifijo que esta en la sala de la dicha Hermandad y en otros dos reales para las mysas que se dizen en la dicha sala a los presos los dias de fiesta ..."

(Ib., leg. 26, nº 4). Similares condenaciones se dictaminaron en tal sentido entre 1574-1576, dándose algún caso en que se aplicaron bienes confiscados al hospital de la Mejora, como los pertenecientes a los ciudarrealeños Francisco Delgado y Juana Díaz; 28-III-1576, Ciudad Real (ADPCR. s.c., s.f.).

⁶² En 1603 se consignan entre las partidas de descargo:

"Y otrosí pagad a Maria Hernandez ama del hospital desta Santa Hermandad doce reales por el adobo de la caldera y un cubo y adereçar la ropa y colchones del y los labar."

(Ib., leg. 57, nº 3).

⁶³ En 1600 se gratificó con un real a una mujer pobre llevada del hospital de la Mejora a la villa manchega de Fernáncaballero (Ib., leg. 57, nº 2).

⁶⁴ Ignoramos la evolución del nivel de utilización del inmueble, por lo que desconocemos si la labor paliativa de esta fundación se correspondía con las necesidades reales de la población, aunque seguramente la respuesta sería negativa. A este respecto nos parece significativo que entre 1597-1598 se adquiriesen diez mortajas para lo pobres albergados, dándose 1.836 mrs. al tendero Andrés Muñoz, a razón de 4 rs. cada sudario, pagaderos en varios plazos (Ib., leg. 56, nº 23).

⁶⁵ Ib., leg. 57, nº 4 y 5.

⁶⁶ Ib., leg. 57, nº 6.

⁶⁷ Don Juan Díaz, espartero, cobró 15 rs. por confeccionar 20 esteras "para que se abriguen los pobres del hospital desta Santa Hermandad este presente invierno" (Ib., leg. 57, nº 9).

⁶⁸ Ib., leg. 58, nº 2 .

⁶⁹ 3-X-1622, Ciudad Real (AHMCR. caja 7, nº 202, f. 1r).

⁷⁰ Ib., f. 3vº.

⁷¹ Ib., leg. 58, nº 5.

⁷² Ib., leg. 58, nº 9.

⁷³ Ib., leg. 58, nº 12.

⁷⁴ Ib., leg. 58, nº 5.

⁷⁵ Elevando dicho monto total en 149¹/₁₇ rs. (Ib., leg. 59, nº 5).

⁷⁶ Entre 1783-1784 se libraron 36 rs. para el desmantelamiento de la cocina de la, por entonces, ya denominada "Casa de la Mejora propia de la Santa Hermandad" (Ib., leg. 62, nº 2).

⁷⁷ ADPCR, s.c., y AHN, Div. Her., leg. 57, nº 2.

7. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

7.1. FACULTADES JURÍDICO-TERRITORIALES.

La Santa Hermandad Vieja tiene jurisdicción real especial en primera instancia¹, dispensadora de mero y mixto imperio, es decir, con potestad para dirimir en las causas civiles y criminales de su competencia. Esta entidad, a lo largo de los siglos, se configurará como una asociación privativamente consagrada al mantenimiento del orden y de la seguridad en el despoblado, articulando para ello una red de seguridad operativa que se extenderá, en el caso del Santo Instituto manchego, en buena medida por la circunscripción territorial de la Real Chancillería de Granada, aunque sobre todo durante la primera mitad del Setecientos la rebasaría ampliamente.

La dispersión geográfica de los efectivos hermandinos no cesará de aumentar durante su larga vigencia, alcanzando su cénit en las primeras décadas del Siglo de las Luces, cuando nominalmente extendía sus tentáculos a todos los rincones peninsulares de la Monarquía Católica. Mencionan sus títulos y su comisiones para ejercer su labor

"...con vara alta o corta de justicia, o sin ella, en publico o en secreto, como le conviniere pueda correr y corra las ciudades de Sevilla, Granada, Cordova, Jaen, puertos del mar, Andalucía alta y baxa, Sierra Morena, Mancha, Extremadura, tierra de Madrid, y Toledo, Aragón, Navarra, Reyno de Galizia, principado de Asturias, Leon, Castilla la vieja y nueva, caminos reales y excusados, montes, sendas, veredas, y todas las demas partes, ciudades, villas, y lugares, de estos Reynos y señorios..."²

Posteriormente, aunque su ámbito actuacional no sería realmente recortado, sí se constriñó el nombramiento de sus dependientes a unos parámetros racionales. La instrucción del Supremo Consejo de 1740 advertía sobre la prohibición de contar con representantes en la Corona de Aragón, anulando los títulos ya expedidos en los reinos de Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, si los hubiese, pero consignando que si fuesen por aquellos territorios por motivos jurisdiccionales debían de ser amparados por las justicias y autoridades locales, como ministros delegados reales que eran³. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV tampoco se refrendarían títulos de la Hermandad de Ciudad Real en los términos de las Nuevas Poblaciones⁴, espacios recientemente colonizados de los que se obtendrían unos resultados mediocres.

La voluntad inquebrantable de la Corona, y de su administración central, de amparar una institución tan loable y potencialmente tan útil al bien público, propició la extensión de la presencia hermandina tanto o más como el vacío dejado por la Hermandad General del Reino, muy limitada por su alcance meramente local y con unas estructuras que a estas alturas sólo respondían a un carácter honorífico antes que operacional -al menos en la mayor parte de las localidades-, estando sumidas en su inmensa mayoría en una atonía de la que nunca se recuperarían⁵.

El Triple Instituto se regirá, virtualmente hasta su abolición, por el acuerdo tomado en la llega general de Navas de Estena de 1459, en virtud de la cual se autorizaba a sus ministros a penetrar en las circunscripciones del resto de las coaligadas para ejercer su labor jurisdiccional, pasando reos y embargos al tribunal que instruía el

proceso, y en caso de duda ante el primero donde se hubiese interpuesto la demanda⁶.

Las ulteriores limitaciones al mantenimiento de dependientes en lugares alejados de sus respectivas capitales, arbitradas desde la administración sinodial ilustrada, en realidad únicamente señalaron la línea del Tajo como confín del radio de acción preferente de la corporación colmenera ciudarrealeña con respecto a sus homónimas toledanas, aunque dichos mandatos serían desestimados por inaplicables.

De cualquier modo, por cuestiones de estricta racionalidad operativa, siempre estuvo latente una cierta voluntad de distribución espacial concertada entre las entidades integrantes del Triple Instituto. Mientras que el radio natural de expansión manchega abarcaba prácticamente toda la mitad sur peninsular, con la salvedad parcial de los lugares del antiguo Reino de Toledo situados al norte del Tajo, teniendo cierta implantación en la Corte y en algunas grandes ciudades castellana; los talaveranos se hallaban fuertemente implantados en los pueblos de señorío de la Mitra toledana, Alta Extremadura, Sierra de Gredos y localidades meridionales del Reino de León; en tanto que la preeminente entidad de la Ciudad Imperial superponía su estructura a la Hermandad de las Dos Sislas, extendiéndose por gran parte de Castilla la Vieja y Madrid, sin renunciar tolanos y talaveranos a nombrar dependientes en las prósperas poblaciones andaluzas del siglo XVIII.

Así pues, La Hermandad Vieja posee competencias jurídicas criminales y civiles preventivas con el resto de las justicias ordinarias del Reino, y "privativa en todos sus negocios, casos y

cosas"⁷. Tales facultades penales de primera instancia le conferían jurisdicción para entender sobre los delitos, en grado de tentativa y los propiamente perpetrados, de muertes y heridas; hurtos y robos; asaltos y escalos de ventas, cortijos, caseríos e iglesias; fuerzas a doncellas y a mujeres que no fuesen públicas; quebrantamiento de cárceles; y, en general, en cuantas infracciones graves fuese cometidas en despoblado⁸, salvo los suscitados por "palabras livianas". También entendían en la comisión de dichos delitos si los sospechosos huían al yermo. Tan extensas prerrogativas criminales, bien por omisión o por acumulación con la jurisdicción ordinaria, les hace asumir el encausamiento y enjuiciamiento de robos de mieses, esquilmo de viñas u olivos, injurias en despoblado, amancebamiento, hechicería, etc. Por su adscripción a la jurisdicción regia se les facultaba para evitar insultos a la hacienda real o a sus recaudadores, impidiendo las evasiones de reos, auxiliando al resto de las justicias -regias o privilegiadas-. arrestando a desertores, contrabandistas, falsificadores de moneda y un largo etcétera de infractores.

Rasgo distintivo de las Hermandades Viejas, era su específica defensa de las actividades apícolas, su motor fundacional, en razón del cual hay que entender su jurisdicción sobre cuantos perpetrasen daños a dichas explotaciones y a sus guardas, en delitos tales como extracción de miel y cera, hurto de corchos, cortas y calas de montes, incendios, etc; así como en cuestiones sobre su ordenación, del tipo de delimitación de los términos de las posadas, pleitos sobre su propiedad y otros semejantes.

En principio, también conocerán los alcaldes hermandinos de todos los pleitos concernientes a su hacienda, como percepción de sus

rentas, así como de los atentados a las franquezas de sus ministros, al correcto desempeño de sus empleos por parte de sus oficiales y dependientes, etc, en cuestiones procedimentales civiles y criminales.

Durante los siglos XVII y XVIII las sentencias más severas de los tribunales hermandinos tuvieron el carácter de interlocutorias, es decir que las sentencias en primera instancia que comportaban infamia o irrogaban penas aflictivas, emitidas por sus magistrados con asistencia de letrado, habían de ser refrendadas ante el tribunal superior correspondiente. Habitualmente, los ciudarrealeños elevaban sus causas a la chancillería granadina, mientras que las entidades toledanas dependieron de la de Valladolid unos y otros dirimiendo las competencias jurisdiccionales ante el Supremo Consejo, al cual están subordinadas orgánicamente; durante el Seiscientos y primeras décadas del Setecientos, el Triple Instituto también pudo acudir a la Sala de Casa y Corte, siempre que el delito se hubiese cometido dentro de un radio de acción de cinco leguas en torno a los Reales Sitios⁹. De esta forma, las causas de Hermandad -General o Vieja-, como las de tantos otros tribunales de la época, solían pasar por un doble control, aún antes de ser apeladas en las mencionadas altas cortes de justicia castellanas¹⁰, y seguramente por ello solo podían ser apeladas hasta el grado de vista.

Con el fortalecimiento del aparato de administración jurídico-gubernativo estatal durante el periodo Moderno, la jurisdicción real ordinaria se impondría paulatinamente sobre la tendencia centrífuga foral heredada del Medievo, y así, conforme avanzaba el quinientos las facultades de encartamiento civil de la Hermandad Vieja pasarán a ser asumidas por las máximas autoridades locales en su detrimento. Igualmente sufrirán una merma, ostensible aunque tardíamente, sus

competencias para enjuiciar a sus propios representantes; los estatutos manchegos de 1792 establecían que quedaban excluidos de su jurisdicción

"...los delitos, y casos expresados para con los familiares del Santo oficio en los numeros cinco y seis de la ley diez y ocho, titulo primero, libro quarto de la Recopilacion; quedando reservados los juicios civiles, executivos y ordinarios, para que conozcan de ellos la jurisdiccion Real ordinaria de cada pueblo a fin de que como mas inmediatamente se administre justicia..., sin acudir a valerse del fuero de este Tribunal..."¹¹

Esta corporación urbana, pero de decidida orientación rural, se aplicaría eminentemente a la prevención y esclarecimiento de cuantos delitos de cometiesen el despoblado; la prisión, custodia y encausamiento criminal de los infractores; la eventual restitución de los robado a sus legítimos dueños y la ejecución puntual de las sentencias impuestas. Debido a sus atribuciones policiales preventivas estaba obligada a ejecutar salidas periódicas por caminos, veredas y yermos, generalmente realizadas a instancia de otros tribunales locales, territoriales o centrales; procurar asegurar vida y bienes de mercaderes, pasajeros, trajinantes y ganaderos; visitar ferias y mercados; recorrer el campo en busca de vagabundos y bandoleros; controlar la asistencia de malentretenidos a romerías, fiestas, ermitas o ventas; efectuar controles regulares de los colmenares propiedad de los hermanos; realizar rondas diurnas o nocturnas alrededor de sus poblaciones como medida disuasoria; escoltar cadenas de presidiarios y galeotes; reforzar las coducciones de metales preciosos, etc.

Superado el periodo bajomedieval, cuando la Hermandad no tenía bien delimitada su jurisdicción, extendiéndola al interior de los pueblos, con notable agravio de las autoridades locales¹², se adoptó la

disposición de que cuando alguno de sus ministros entrase como ministro de justicia en demarcaciones ajenas, debía de presentar sus respetos y credenciales ante los alcaldes del lugar para que tuviese constancia de su presencia a todos los efectos. Sin embargo, pese a la obligatoriedad de presentar títulos y privilegios, se les dispensaba explícitamente de expresar sus comisiones secretas -bien por considerarse innecesario, como muestra de autoridad, e incluso por temerse la frustración de sus diligencias- suscitándose por ello numerosos choques de competencias.

Sentadas las líneas maestras del marco territorial y legal a los que se hallaba sujeta la Hermandad de Ciudad Real queda por conocer lo más complicado, es decir, los parámetros reales de su operatividad, sus limitaciones y logros; la realidad, en suma, de una organización jurídico-policial en apariencia formidable pero en la práctica constreñida a las "reglas de juego" imperantes en la época, a su devenir corporativo y a las miserias o grandezas de sus integrantes.

7.2. CASUÍSTICA JURISDICCIONAL: LABORES PREVENTIVAS Y POLICIALES.

La Santa Hermandad Vieja se nos muestra, aún en la Edad Moderna, como una sólida y flexible estructura consagrada al mantenimiento del orden público en el yermo, es decir, en el medio natural por excelencia donde solía desenvolverse la vida cotidiana en las comunidades rurales durante el Antiguo Régimen. Aunque su operatividad y consecuciones sufrirán los altibajos propios de un periodo caracterizado por unos comportamientos violentos imperantes en amplios sectores poblacionales, así como las profundas contradicciones económicas, culturales, políticas y sociales de la época, es necesario ponderar su labor y logros sin perder de vista los parámetros cronohistóricos en los que se desenvolvió su instituto.

Tras la Baja Edad Media -durante la que su enemigo por excelencia, el golfín, había sido paulatinamente erradicado-, culminada la Reconquista con la rendición del reino nazarí de Granada por los Reyes Católicos¹³; apaciguada Castilla después de las guerras fratricidas de los Tratámara y del levantamiento comunero, no tenemos constancia de que los recursos hermandinos, económicos ni humanos, fuesen movilizadas en campañas militares algunas por parte de los Austrias Mayores. Durante el Quinientos, el Triple Instituto canalizará sus esfuerzos a la prevención y coerción de los denominados delitos menores, contra el bandolerismo imperante en la mitad meridional peninsular y en labores de control sobre la marginal comunidad gitana.

Ya durante los siglos XVII y XVIII, su orientación actuacional está perfectamente perfilada, dentro del amplio espectro operacional que le

caracterizaba desde épocas anteriores, pudiendo ser sintetizado en tres puntos: represión de la delincuencia rural; aplicación a labores auxiliares respecto al resto de las justicias del Reino, reales y exentas; y, por último, a la regulación y amparo de las actividades apícolas. Puesto que las relaciones interjurisdiccionales serán motivo de un apartado especial, nos centraremos por ahora en el resto de sus aspectos operacionales.

7.2.1. PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LA DELINCUENCIA RURAL.

El Santo Instituto parte de su ministerio específico sobre los denominados "casos de hermandad", establecidos desde los albores de la Edad Moderna como muestra de la compartimentalización jurídico-penal auspiciada por la Corona. Únicamente puede entenderse este proceso en el marco de la atomización de organismos encargados del mantenimiento del orden en su doble vertiente judicial y policiaca. Pero de estas posiciones perfectamente normalizadas se derivaría, inevitablemente, a la asunción de competencias en principio formalmente impropias del mismo en sentido estricto, pero que iban implícitamente reconocidas y aparejadas en sus actuaciones habituales.

Las labores llevadas a cabo para preservar la integridad de personas y propiedades en el despoblado adoptaron diversas formas atendiendo tanto a las necesidades del momento como a los recursos disponibles, tratándose casi siempre de cubrir objetivos concretos, como el control sobre los colmenares, la asistencia a romerías y mercados rurales, o la escolta de reos o convoyes, aunque no resultaban infrecuentes los objetivos más amplios del tipo de asegurar el tránsito pecuario, de personas y mercancías por las principales redes viarias de su circunscripción, o la ejecución rondas alrededor de las poblaciones.

Si durante buena parte del Seiscientos, los integrantes de las cuadrillas armadas financiadas por el Santo Tribunal contaban con la participación de los alcaldes y de sus oficiales, durante la segunda mitad de la centuria es perceptible una cierta tendencia a que tales

labores ejecutivas fuesen dejadas en manos de subalternos, quedando los rectores de la entidad atendiendo a sus ocupaciones honoríficas, administrativas o personales; de esta forma se sometían las partidas al mando de un alguacil designado expresamente por los alcaldes -por regla general un cuadrillero o un hermano sin cargo alguno- a falta de otro superior jerárquico, confiándose el dinero para sufragar los gastos de dicha misión a un depositario que hacía las veces de mayordomo durante la salida.

En otoño de 1608, una providencia del Consejo de Castilla despachada a instancia de don Francisco Álvarez de Jover -caballero adscrito a la Hermandad manchega-, impelía a dicha corporación a patrullar por Sierra Morena y celar por el libre tránsito de los caminos reales a Sevilla y Granada, en donde recientemente se habían perpetrado diversos asaltos, menudeando los

"...delitos de salteamientos, robos de dineros, y bestias, heridas y fuerzas de mugeres y otros delitos graves...-siendo- algunos de los delincuentes criados y allegados de cavalleros y otras personas ricas, y otros sus miembros de las otras justicias."¹⁴

Seguramente no se cumpliría con la debida puntualidad dicho mandamiento, al no haber reflejo contable del mismo en las cuentas pertenecientes a ese periodo¹⁵. En todo caso, en 1611 hubo de expedirse sobrecarta mediante la cual se reiteraba la antecedente instrucción, en esta oportunidad con mejores resultados, al constar que una nutrida partida hermandina empleó dieciséis días en recorrer los citados lugares¹⁶.

En la traumática década de 1640, con una Monarquía en plena efervescencia por los acontecimientos político-sociales de diversa

índole que la acuciaban, la desfavorable coyuntura existente tuvo su reflejo en el deterioro del orden público general, al que no pudo sustraerse La Mancha. A comienzos de la misma sabemos que una partida de bandoleros acaudillada por el valenciano Pedro o Per Andrés, "Arrobas", había cometido multitud de desmanes contra un médico conquense, imputándole numerosos robos y tropelías, por lo que el Consejo de Castilla en 1643 encomendó a las Hermandades Viejas y Nuevas de Ciudad Real y Toledo que coordinasen sus esfuerzos con sus respectivos corregimientos para terminar con tales atropellos¹⁷. El Pedro Andrés mencionado en las fuentes manchegas tenía a sus órdenes no menos de treinta y seis secuaces con los que no sólo atemorizaba a serranos y viajeros, sino que llegaban a recalar en pueblos de corta vecindad y aldeas para exigir a sus moradores todo cuando requirían.

Se decidió proceder al reconocimiento del teatro de operaciones de sus excesos, partiendo desde Ciudad Real los alcaldes apícolas acompañados por unos setenta y seis hombres para su búsqueda y captura. Tras diez días de intensa persecución solo se lograron embargar unas cabalgaduras, presumiblemente pertenecientes a los acosados, aunque no puede descartarse que se tratase de incautaciones a otros individuos y con las cuales se pretendían resarcirse de los crecidos gastos ocasionados¹⁸. Como en la primavera de 1644 llegase su temeridad a acercarse a unas cinco leguas de Madrid¹⁹, la Corte se alarmó ante la noticia, reiterando en severos términos el mandato a las justicias manchegas de manera fulminante²⁰. Acatada por parte los ciudarrealeños, días después partió una comitiva fuertemente armada a las órdenes del alcalde don Agustín Bermúdez²¹.

Mediada la centuria tenemos noticia de que la mala situación financiera de la entidad manchega sería agravada al verse consumidas

sus parcas rentas por una salida masiva de sus miembros que estuvieron durante semanas reconociendo Sierra Morena, Guadalerza y Extremadura, llegando los participantes a renunciar a sus legítimos salarios²². En 1667, durante cinco días, cuarenta y siete dependientes hermandinos anduvieron tras los pasos de unos bandidos que habían asaltado a unos arrieros en las dehesas de Guadalerza²³.

Desde el último cuarto del Seiscientos se multiplican las diligencias dirigidas contra la minoría gitana, que dadas sus peculiaridades y costumbres gregarias, reacias a todo intento de asimilación cultural, sería a partir de entonces objetivo preferente de la represión por parte de todas las justicias de la Monarquía Católica, no siendo una excepción, antes al contrario, las Hermandades Viejas. Únicamente del 1675 tenemos noticias de tres oportunidades en que se dispuso por el Presidente del Supremo Consejo la salida de los efectivos de la organización manchega por Andalucía, Sierra Morena, Montes de Toledo y Extremadura en pos de determinados grupos de gitanos, considerados fuera de la ley al quebrantar las sucesivas pragmáticas que reglaban su conducta²⁴.

En la década de 1690, hay numerosas referencias documentales de que en toda la Corona hubo una reactivación del bandidaje, particularmente ostensible en la mitad sur peninsular²⁵, delincuencia cuya represión se esforzarán en erradicar no menos de tres salidas protagonizadas por la Hermandad de Ciudad Real entre 1690-1693, que con una cadencia anual "peinaron" los montes manchegos y extremeños, aunque con resultado dispar. Con motivo del notable esfuerzo económico que hubo de afrontar la corporación en un periodo recesivo de su hacienda, en 1695, y coincidiendo con la ofensiva orquestada desde la Corte contra los eufemísticamente denominados castellanos nuevos²⁶, se recordó

desde Madrid a los rectores hermandinos su obligación de reforzar la coerción contra los mismos, so pena de verse privados de las libertades que gozaban²⁷, amenaza que sin duda motivaría tanto su descontento como su incertidumbre sobre su precaria posición.

Igualmente del Seiscientos tenemos constancia de su aplicación a labores atípicas. Hacia 1618 ó 1619 dos partidas integradas la primera por un alguacil, un escribano y un cuadrillero, y la segunda por el otro notario y dos cuadrilleros recorrieron durante tres días los viñedos y olivares de los términos de Fernán Caballero, Malagón, Porzuna, Piedrabuena, Alcolea y Picón²⁸, afectadas por frecuentes hurtos de uvas y aceitunas. En 1691, cinco reos de dudosa adscripción jurisdiccional fueron trasladados en comitiva desde Santa Cruz de Mudela a Ciudad Real con la asistencia del corregidor y de veinte cuadrilleros armados, a pie y a caballo, así como de ocho guardas proporcionados por la justicia del punto de partida²⁹. Ya a principios del Setecientos, un despacho comisión expedido a don Jerónimo de Vargas, vecino de Andújar, le encomienda velar por la celebración de la romería de la Virgen de la Cabeza, desde hacía tiempo controlada por la organización manchega³⁰. No podemos descartar que por entonces los ministros ciudarrealeños se consagrasen a labores similares a las asumidas eventualmente por el resto de las entidades coaligadas³¹.

Durante el Siglo de las Luces, las competencias jurisdiccionales llevadas a cabo por el Triple Instituto ante que restringirse se incrementan, haciéndose cada vez más usuales y asumiéndose nuevos retos y obligaciones. El comienzo de la centuria marcado por una contienda dinástica mediatizó la actividad de las asociaciones apícolas, al incidir en un aumento de la delincuencia rural por toda la Monarquía Hispánica.

Si en 1705 un real decreto impelía a todas las justicias a continuar reprimiendo la actitud insumisa de muchos gitanos a guardar la pragmática de 14 de junio de 1695³², esta instrucción ha de interpretarse como una relajación de la persecución iniciada años antes, dado lo irreductible de su oposición a su aculturación. Aunque por dicho decreto Felipe V permitía la aplicación de la justicia sobre dicha minoría sin necesidad de pronunciarse las chancillerías, lo cierto es que poco después sabemos que la Hermandad Vieja de Toledo consultaban sus sentencias a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte³³.

De la indefensión de las aldeas y casas de labor durante la Guerra de Sucesión se aprovecharán payos y gitanos para perpetrar sus fechorías con total impunidad. En 1707 la fraternidad ciudarrealeña costeaba dos salidas, una por la Mancha Alta y el priorato de San Juan en persecución de unos cuatreros, y otra integrada por unos treinta jinetes bajo la jefatura de un alcalde hermandino que reconocieron la Baja Extremadura, los Pedroches y Sierra Morena a petición del presidente del Consejo de Castilla, tras cuantos desertores y delincuentes comunes pudiesen topar³⁴. En el verano de 1712 el cabildo apícola de Ciudad Real recibió otra carta-orden desde los Reales Consejos por la que se conminaba a todas las autoridades de La Mancha, mencionándose expresamente al Santo Instituto, para que procediesen con todo su rigor contra los excesos cometidos en la zona donde merodeaban

"...quadrillas considerables de xitanos y xitanas con nombres de soldados, e ynsignias, y cavos militares y papeles supuestos pidiendo aloxamientos, trocando caballerias, y aziendo otras distintas extorsiones..."³⁵

Dos días después su homónima toledana acuerda financiar una partida armada que recorrerá Turleque, Los Yébenes y Villarrobledo, saldándose con la captura de diez gitanos³⁶. Por entonces también partieron sendas cuadrillas de Ciudad Real hacia el valle de Alcudia, ventas de Guadalerza, y Lapiche -Puerto Lápice-, así como a las villas comarcanas con motivo del robo al mayordomo del duque de Béjar³⁷.

De nuevo en 1714 intruye el Supremo Consejo a las entidades de Toledo, Talavera y Ciudad Real para que coordinasen de inmediato sus acciones tras un grupo de veinte gitanos fuertemente armados que cometían sus desafueros por los términos de Tembleque y de Fuente el Fresno³⁸. Cuarenta y ocho horas más tarde partían de la capital manchega el alcalde don Álvaro Muñoz comendando veinticuatro hombres a caballo, tras haber aprehendido las personas y bienes de los gitanos afincados en la ciudad por la sospecha de connivencia con los perseguidos; de allí pasa la partida a Almagro y luego a Daimiel, en donde su gobernador se lamenta del peligro que se corría en la villa por estar allí avecindados varios facinerosos; posteriormente se dirigieron a Villarta, Turleque y Tembleque, sospechándose del gitano daimieleño Pedro, "el estudiante de Oreja", ex-reo de la Hermandad de Toledo y que actuaba impunemente en la zona por ser sobrino del alcalde ordinario de Turleque³⁹. Desconocemos el resultado final de tales diligencias, que tal vez lo único que cosechasen fuese excusar gastos a la corporación toledana pues, advertida de la partida de su homónima ciudarrealeña, acordó suspender acción alguna hasta nueva orden de la Corte⁴⁰.

De las primeras décadas del Setecientos datan las tres únicas conducciones de presidiarios y galeotes en las que concurren ministros de la Hermandad Vieja manchega. En efecto, a fines de 1707 parten

veinticinco dependientes de Ciudad Real y de Santa Cruz de Mudela para escoltar la cadena por camino real en el tramo que iba desde dicha villa hasta Linares, reconociendo a su vuelta el yermo de Sierra Morena⁴¹.

El 5 de agosto de 1711 se comunica al cabildo manchego la providencia del Supremo Consejo para que el Triple Instituto custodiase una importante comitiva de reos, que desde la Caja de Toledo se dirigía a Cartagena, mientras transitase por su área de influencia; una semana después se informaba a la entidad de Talavera, y el 25 se recibe la misiva en Toledo, impeliendo a corregimiento y Hermandad a que coordinasen su labor en esta causa. El cabildo de los colmeneros toledanos considera inexcusable su asistencia a la misma, temiéndose un asalto a la cadena por parte de cuadrillas de castellanos nuevos, para lo cual no duda en empeñar la plata de la organización al "allarse el cabildo sumamente estrecho y empeñado con los muchos gastos que an concurrido de dos años a esta parte y allarse al presente con doze reos en su carcel"⁴². Horas después de colegiarse esta determinación llegaba a la Ciudad Imperial la partida procedente de Talavera, encabezada por el alcalde don Joseph Antonio de Castro al mando de veinticuatro jinetes, siendo agasajado en la sede hermandina. Al alba del día siguiente partía la cadena de Toledo, reforzada la nutrida representación talaverana con el cuadrillero mayor y ocho cuadrilleros toledanos bajo el mando del propio corregidor local. Se prescribió que las justicia de tres leguas en torno a los lugares por donde transitasen debían garantizarles bastimentos a los precios acostumbrados, aportando su auxilio personal si ello fuese requerido y las prisiones necesarias⁴³. A partir de Villarta de San Juan la comitiva es engrosada por los contingentes aportados desde Ciudad Real. El 5 de septiembre de 1711 el gobernador de Membrilla, don

Benito Rivero, informa a los magistrados hermandinos manchegos que no contaba con los suficientes recursos para auxiliar al Triple Instituto hasta llegar a Linares, por lo que el mismo día los alcaldes ciudarrealeños hubieron de tomar un empréstito del pósito de mil reales, remitiendo carta de dicha incidencia a Toledo⁴⁴. Cumplida la tarea encomendada, cada una de las cuadrillas vuelve a su punto de partida, invirtiendo los toledanos veintiocho jornadas para ello.

Escarmentada por el suceso anterior, cuando en 1717 se encargara a la entidad manchega de una nueva conducción de reos, antes se aseguró que sería financiada por los pueblos que se hallaban en su tránsito, aceptando el Fiscal del Supremo Consejo esta medida extraordinaria, con el argumento que "el fin principal del instituto de la Santa Hermandad no es el ir guardando los reos que se conducen a los presidios y galeras"⁴⁵. La madrugada del sábado 20 de marzo de dicho año retornaron a Ciudad Real los veinte cuadrilleros manchegos movilizados para llevar a los forzados a las Reales Minas de Almadén.

Mediado el siglo XVIII fueron perceptibles tres tendencias en la evolución actuacional hermandina: el mantenimiento de los resortes coercitivos sobre la comunidad gitana; el relanzamiento de estas entidades como garantes de la seguridad de las principales ferias y mercados rurales en su amplia circunscripción; y su eventual empleo en la erradicación del bandolerismo endémico de La Mancha, Andalucía y Extremadura. A estas variables se sumaría el hecho de que la proliferación del número de sus representantes por extensas áreas peninsulares propiciaba el incremento de su operatividad tanto como la autonomía de sus integrantes, con todo lo que ello implicaba. Estas circunstancias se verifican singularmente en la entidad manchega,

aunque no por ello deba colegirse una total inacción de sus homónimas toledanas⁴⁶.

En efecto, los castellanos nuevos continuarán siendo víctimas propiciatorias del rigor del Santo Tribunal. A principios de 1755 una carta-orden del obispo de Cartagena dirigida a las fraternidades apícolas le encomienda la represión y exterminio de una peligrosa partida integrada por unos ocho gitanos que asolaba la Mancha Alta lindante con Cuenca⁴⁷. Desconocemos la respuesta del resto de las entidades federadas, pero en Ciudad Real sabemos de las diligencias infructuosas llevadas a cabo por el alguacil y alférez mayor don Agustín Bermúdez por la Mancha oriental⁴⁸.

Desde 1740, periódicamente se destacarán efectivos ciudarrealeños en las ferias de Almodóvar del Campo, Almagro, Villarrubia de los Ojos, la Bienvenida y Daimiel, llegando a celar caminos y yermos durante las celebradas en Consuegra, Alcalá de Henares o la misma Guadalupe, coyunturalmente bajo su jurisdicción⁴⁹. También desde dicha sede manchega, partirán grupos armados en persecución de ladrones famosos, como la seguida en 1743 contra la partida del "Manco de Aréballo"⁵⁰, o la protagonizada por el Santo Tribunal hacia 1760 contra Juan de Montoya "Juanaco" por la Sierra de Alcaraz⁵¹.

Aunque la mayor parte de las salidas son capitalizadas por oficiales y hermanos de la entidad, la dispersión de sus comisarios posibilitaba intervenciones en áreas muy alejadas de sus sede. Paradigma de tales empresas resultaron las diligencias emprendidas en las Baja Andalucía hacia 1728. A fines de agosto del citado año recibía don Francisco Padilla Navarro, teniente de corregidor de Jimena de la Frontera, exmilitar y ministro superior hermandino, una

orden del Supremo Consejo insertada en un despacho secreto remitido desde Ciudad Real, encargándosele de organizar una partida contra los gitanos contraventores de las reales pragmáticas y cuantos maleantes topasen⁵². Siguiendo el procedimiento acostumbrado, envía circulares a los comisarios comarcanos convocándoles en dicha villa el día 17 de septiembre en tanto que recibía informes de las justicias de la zona expresando la comisión de delitos en sus respectivos términos. Demorada dos jornadas la salida para coincidir con la celebración de la feria de Villamartín, comparecieron ocho ministros a caballo, debidamente pertrechados y con la asistencia de un notario local⁵³. Después del almuerzo parten los hermanados hacia el lugar del Parralejo, llegando luego a la vecina Ubrique, ante cuyas justicias tomaron cumplimiento de sus títulos y reciben noticias de diversos asaltos a trajinantes; aquí se les incorporará el también comisario don Juan de Rus. Pasan por el puerto del Timón y la Boca del Madroñal, rondando durante tres días por los campos y cortijos de sus proximidades, no hallando nada sospechoso. El 24 de septiembre se alojan en la venta Asnal, en la jurisdicción de Arcos de la Frontera, tomando declaración al posadero y otro tanto harán las jornadas siguientes en la venta del Mimbral y la ermita cercana, presentando sus respetos al alcalde mayor de Alcalá de los Gazules. No hicieron más que retornar a sus hogares cuando el comandante de la partida comunica a sus superiores manchegos que en su ausencia se les habían impuesto alojamientos y otras cargas municipales, conculcando sus fueros y libertades⁵⁴.

Los resortes que suscitan la intervención de los ministros adscritos a la Santa Hermandad no pasan únicamente por los despachos expedidos por sus rectores directos, sino que no faltan los casos en que son manejados al arbitrio de otras autoridades locales o

territoriales. En 1718 el comisario Jerónimo Velarde, vecino de Tobar, capitaneaba una partida de paisanos a instancias del procurador general de la Mesta contra unos cuatreros de la zona, apresándose a don Ildefonso Cervantes, "el Cojo", oriundo de Santa Cruz de la Zarza -Toledo- e indiciado de diversos abigeatos y asaltos a caminantes⁵⁵.

Por motivos personales también sabemos de persecuciones tras delincuentes, tratándose de ocasionales cazarrecompensas movidos por intereses cuanto menos ambiguos. Este es el caso del comisario Cristóbal Rodríguez de las Rivas, informado por un clérigo del robo de unos mulos de su propiedad a su criado, cerca de la venta de Majalimán, cuando portaba vino a Carmona, tras ser maniatado el arriero en la espesura del monte y expoliado de cuanto llevaba. El presbítero hizo las gestiones tendentes a recuperar dichos efectos con tan mala fortuna que es asesinado uno de sus correos mientras se alojaba en un mesón de Medina de las Torres, suspendiéndose las diligencias principiadas por temor a nuevas represalias; cuando el caso llega a los oídos de juez comisario y se le da cuenta de la gratificación ofrecida por el agraviado, a costa del religioso partirá a Badajoz. Tras realizar algunas indagaciones reconoce estar indiciados una banda de dieciocho asaltadores que asolaban la comarca, paralizando su tráfico viario, por lo que, tras informar del caso, solicita a Ciudad Real que se le expidiese comisión al respecto para excusarse de las inevitables suspicacias de las justicias locales⁵⁶.

En aquellos lugares donde el ministerio de las justicias foráneas fuese discutido, particularmente en villas lejanas a la sede hermandina, los cuadrilleros se hallarán en precario, siendo a veces objeto de chantajes y presiones para que se pusiesen bajo mandato de autoridades ajenas a la de sus superiores orgánicos. Es el caso de lo

acontecido en Segovia durante 1729, los dependientes manchegos en la ciudad lamentan su supeditación al corregimiento al ser conminados por su titular a salir al campo para realizar inspecciones regulares del descampado, amenazándoles si se resistían a retirarles sus títulos; a pesar de permitir esta situación durante meses y cuando aseguran haber limpiado los caminos de forajidos y malhechores, no se eran respetados sus privilegios y exenciones⁵⁷.

7.2.2. REGULACIÓN Y AMPARO DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA.

La apicultura constituía desde la Edad Media una de las fuentes de riqueza por excelencia en aquellas áreas marginales donde era problemática la explotación agropecuaria debido a sus peculiares condiciones medioambientales. A pesar de que esta actividad paulatinamente pasará a tener un carácter secundario, desplazada por un aprovechamiento económico más intenso del territorio al compás del poblamiento del antiguo Reino de Toledo, nunca dejará de tener un lugar complementario en la vida económica del agro durante la Edad Moderna.

Desde el periodo fundacional, las hermandades de Toledo, Talavera y Ciudad Real se erigen como la principal instancia reguladora y defensora de este sector extractivo rural en sus respectivas zonas de influencia. Pese a las fluctuaciones socioeconómicas comarcanas y a las vicisitudes políticas del Reino, dichas entidades mantendrían formalmente unas competencias coercitivo-reguladoras durante siglos.

Las denominadas posadas de colmenas eran la unidad de explotación económica del territorio; estando integradas, generalmente, por unos enjambres, la casa del guarda, un pequeño huerto que lo autoabastecía, así como un corral donde se albergaban unas pocas cabezas de ganado que engrosaban una dieta cuyo principal aporte protéico procedía de las presas cazadas en los losados. Para garantizar la viabilidad de dicha labor extractiva una antigua ordenanza emanada de una de las lleyas generales fijaba en cuatrocientas sogas, de cuatro brazos cada una, la distancia mínima entre posadas⁵⁸; distancia que a principios

del Quinientos, conforme decaía su importancia financiera, sería reducida a la mitad⁵⁹, cuidando que se respetara el derecho adquirido por las posadas antiguas respecto a las nuevas. Precisamente de principios del siglo XVI datan algunos de los pleitos conservados en virtud de los cuales los alcaldes comisionan a sus cuadrilleros para que midiesen los marcos y acreditar así las querellas presentadas en su corte de justicia.

Eran preceptos bajomedievales que nadie podía excusarse de contribuir a apagar los incendios del monte, tratándose de evitar los mismos prohibiendo a los pastores portar durante el estío eslabón, yesca ni pedernal fuera de sus ranchos, y previniendo a los campesinos que no realizasen rozas ni extendiesen sus barbechos mediante el fuego durante dicha estación -concretamente entre el día de San Juan y las nueve de la mañana del 1 de septiembre-⁶⁰. En las posadas quemadas sin expreso consentimiento de su dueño se restringía la entrada de rebaños durante las tres siguientes temporadas, preveyendo diversas penas para sus infractores según un minucioso ordenamiento de circunstancias atenuantes y agravantes⁶¹. La defensa a ultranza frente a los incumplidores de tales disposiciones hallan una firme protección y el eco adecuado en el seno del Triple Instituto, lo que en el caso concreto de la asociación manchega sería encauzado tanto contra particulares como contra las instituciones que la conculcasen⁶².

Aunque se mantuvo durante toda la Edad Moderna su jurisdicción criminal sobre las quemas, hurtos y quebrantamiento de colmenares, progresivamente se restringieron las labores subsidiarias a la misma, como regulación de las explotaciones apícolas entre hermanos o los procesos civiles donde se vieran envueltos sujetos ajenos a la

organización, datando éstos últimos de 1504, y las visitas a colmenas de 1538 en el caso de la entidad ciudarrealena⁶³.

En Toledo, su Hermandad Vieja se resiste con mayor determinación a perder sus privilegios jurisdiccionales sobre la conservación del medio donde se desarrollaban dichas actividades, a pesar de lo cual la concordia con el cabildo municipal de 1539 a la par que declaraba exentos de contribuir a la asadura a los vecinos de la Ciudad Imperial, concedía la propiedad de los enjambres silvestres a quien los encontrase, y no al dueño de terreno donde se hallaban⁶⁴. La justicia ordinaria toledana, celosa sobre las prerrogativas en los montes de su señorío urbano, en 1583 arrestaba a los cuadrilleros que confiscaban las licencias para cortar leña, siendo excarcelados únicamente tras su devolución⁶⁵. En este clima de controversia jurisdiccional, a principios del Seiscientos el cabildo apícola designaba cuadrilleros y concedía a uno de sus alcaldes tres mil maravedís para que

"...fuesen a los Montes de Toledo a remediar las grandes talas y cortas que en termino de Navas de Estena se an fecho y sacan mucha corteça, ansi de termino de posadas como de dichas partes."⁶⁶

En 1624, ante la proyectada visita al yermo por parte de los hermanados, se opuso a ello el cabildo de jurados toledanos y el fiel del juzgado capitalino⁶⁷, no dirimiendo definitivamente el asunto hasta 1638⁶⁸. Por último, en 1665, teniendo conocimiento los colmeneros que en Navalucillos un vecino había ganado provisiones para desacotar posadas en el monte para su aprovechamiento como pastos comunes, este órgano colegiado hermandino valora tales providencias como perniciosas para "los hermanos de este cavildo que todos tienen posadas en los montes"⁶⁹. En una fecha tan tardía como 1747, el

Consejo de Castilla anulaba la jurisdicción penal del tribunal apícola talaverano sobre los ganados que penetrasen en tales posadas que esgrimían los colmeneros talaveranos en su circunscripción⁷⁰.

Por lo que atañe a la labor de la entidad ciudarrealeña durante los siglos XVII y XVIII, ésta se redujo a esporádicas salidas al campo, actuando judicial y expeditivamente contra pirómanos; ladrones de miel, cera o corchos; en suma contra cuantos degradaban o atentaban contra tales propiedades y su medio natural, fuesen o no pertenecientes a la corporación colmenera.

7.3. FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL.

7.3.1. LA CORTE DE JUSTICIA HERMANDINA.

Pasado el periodo fundacional de esta asociación apícola, creada con el fin de amparar intereses particulares frente a unas necesidades concretas, durante el reinado de Fernando IV se concedió a esta justicia popular el calificativo de regia, impulsando decididamente su consolidación jurídico-institucional. Progresivamente se había transformado la primigenia organización, prioritariamente consagrada a la protección de los patrimonios y las vidas de sus dependientes, en una entidad orientada al orden público y a la seguridad en el yermo.

Durante el siglo XIII las Hermandades actuaron de forma expeditiva, ejecutando sin más a los golfines y forajidos capturados in fraganti, presumiéndose la culpabilidad de quienes vagabundeaban por el campo. Partiendo de este contexto violento y de un procedimiento penal sumarísimo, al menos desde los albores de la siguiente centuria ya se dotarían a estas asociaciones de unos rectores -los alcaldes-, cuya autoridad orgánica sería prontamente refrendada desde la Corona. Estos altos dignatarios hermandinos asumían unas atribuciones ejecutivas y judiciales que no resultaban extrañas en el proceder de la época, formulándose en torno a su figura un peculiar ordenamiento actuacional en materia civil y criminal. Paralelamente, e inscrita en la corriente que intentaba imprimir a los encausados ciertos derechos inalienables, se fueron incorporando algunos elementos formales legales que atemperaron su tradicional brevedad en su administración de justicia.

Recogiendo preceptos de la fórmula canónica "Saepe contingit" de 1306, en las Cortes de Alcalá de 1348 se retoma su espíritu al esbozarse un procedimiento judicial sumario⁷¹. En 1385, un acuerdo del Triple Instituto contemplaba la posibilidad de que si los alcaldes no pudiesen o no quisiesen conocer de una causa al lugar donde fue capturado un sospechoso, los cuadrilleros estaban capacitados para enjuiciarlo, incautar sus bienes, devolver lo robado a sus dueños, y ejecutar en ellos los castigos pertinentes si lo consideraban oportuno⁷².

Debido a las peculiaridades de su ministerio y siendo su principal objetivo el mantenimiento del orden público en el despoblado, donde las pruebas testificales y materiales eran difíciles cuando no imposibles de obtener, estas asociaciones apícolas manchegas conformaron un procedimiento judicial sumario singular que ya en el siglo XIV aparece perfectamente configurado, y que los Reyes Católicos utilizarán para dotarlo a su magna obra de la Hermandad Nueva⁷³.

Creado desde la Baja Edad Media un organismo especializado en la lucha contra la delincuencia endémica, dotado progresivamente de un amplio prestigio social en su ámbito actuacional y cimentado en sus aspectos orgánicos, la Hermandad Vieja dispone de una amplia flexibilidad y discrecionalidad penal, lo que unido a su accesibilidad por parte de los pobladores de sus respectivas zonas de implantación, la indefinición normativa legal y el carácter presumiblemente oral de al menos parte de la tramitación judicial, permiten el arraigo y desarrollo de este tipo procedimental en épocas posteriores⁷⁴.

Superado cronológicamente el periodo durante el cual los alcaldes, conjunta o separadamente, y asesorados en ocasiones por un letrado de su confianza, administraban bajo su responsabilidad la justicia hermandina, siendo apelables sus sentencias ante su propio cabildo o la llega anual del Triple Instituto, a partir del reinado de los Reyes Católicos se asumirían determinados preceptos normativos que junto a la adopción de elementos personales como letrados, notarios y procuradores, y la desaparición del principio de oralidad dilata los procesos en aras de una mayor imparcialidad y ecuanimidad de los fallos. De esta forma concurren a la tramitación de los pleitos hermandinos aquellos que asumen la representación y defensa procesal de las partes, indispensables debido a la tecnificación del enjuiciamiento, quienes documenten y notifiquen los autos testificales, los órganos jurídico-ejecutores que substancien y lleven a término los pleitos, así como el promotor fiscal o acusador de oficio.

7.3.1.a. CONSERVACIÓN DE LA PRIMERA INSTANCIA CRIMINAL.

En plena Edad Moderna la práctica jurisdiccional hermandina mantenía su vigencia por lo que se refiere a sus competencias criminales, desapareciendo todo vestigio de sus atribuciones en materia civil a principios del Quinientos, salvo su papel mediador extrajudicial entre sus integrantes, en favor de las máximas autoridades locales.

Esta tribunal, en cuyo seno se dirimen los denominados casos de hermandad y los delitos subsidiarios a ellos, mantuvo hasta su desaparición ciertas peculiaridades⁷⁵ en un panorama sociojurídico donde la multiplicidad procedimental, discriminatoria y compartimentalizada, era consustancial al orden estamental y foral imperante. En este contexto, dos elementos personales eran claves en los Santo Tribunales apícolas por sus facultades judiciales: los alcaldes y los asesores letrados.

A. Los Alcaldes.

Durante la Edad Moderna es perceptible un continuismo de ciertas estructuras, manteniéndose intacto el carácter inseparable de determinadas instituciones de justicia presididas por jueces legos no profesionales, investidos de un prestigio estamental anterior a su designación que imprimiese autoridad a sus decisiones, y por letrados elegidos en función a sus cualidades técnicas que mantienen con los primeros una relación formalmente consiliar.

Los alcaldes de Hermandad son jueces competentes en los actos tocantes a su instituto, teniendo la obligación de atender puntualmente las demandas, querellas o casos de oficios presentados ante su audiencia o que se hallasen pendientes de resolución, dictando sentencia de acuerdo con su asesor letrado si ellos mismos no tuviesen la preparación jurídica legalmente prescrita⁷⁶. Estos caballeros rectores del Santo Instituto, colegiados o separadamente para agilizar los trámites procesales y evitar las gravosas dilaciones en el dictamen de las sentencias, entederán de forma ineludible de cuantos incidentes de su competencia aconteciesen en su circunscripción, siendo en caso contrario reconvenidos por las altas instancias jurídico-gubernativas territoriales y centrales castellanas⁷⁷.

Para propiciar la fluidez en la substanciación y resolución de los pleitos se contemplaba la posibilidad de ser renovados en sus cargos⁷⁸; reelección que los estatutos de 1792 constriñeron a uno solo de ellos y por un plazo máximo de tres años consecutivos. Por igual motivo se acostumbraba a dotar de plenos poderes al alcalde interino o

su teniente en caso de ausencia o enfermedad del titular, que contaba con la anuencia del alcalde y del propio cabildo en un individuo de cualidades personales, estamentales y jerárquicas indiscutibles.

Los litigantes, bien individual o conjuntamente, personalmente o mediante procuradores debidamente acreditados, pueden recusar a los jueces que instruían el caso al cuestionarse la ecuanimidad de los magistrados, siendo considerada por la doctrina como una más de los motivos que dilataban de manera interminable la conclusión de los procesos. Este recurso legal que afectaba a los jueces reales inferiores, entre los cuales se hallan los citados alcaldes especiales, podía justificarse por el parentesco del titular con algunas de las partes implicadas o aduciendo sospechas racionales de parcialidad en su proceder.

Si bien infrecuentemente, durante los siglos XVI al XVIII este resorte legal embarazó determinados procesos. Particularmente comprometido fue el litigio suscitado en 1611 contra un pastor de Valdemoro -Madrid-, encausado por vender ilegalmente reses pertenecientes a su amo y a otros propietarios; a los veinte días de su detención los alcaldes don Agustín Ruiz de Fuentencalada y don Fernando Valdés Mendo, junto al asesor licenciado don Antonio Fernández Treviño dictan un severo veredicto condenatorio al considerar probados sus frecuentes excesos⁷⁹; como quiera que su curador recusase a don Agustín Ruiz y éste se acompañase de su compañero antes de dicha sentencia, vieron con desagrado que fuese tenido por sospechoso también a don Fernando Valdés tras serle comunicado el fallo, solicitando que el primero de ellos se auxiliase de "persona cristiana" que determinase la causa; los jueces hermandinos rechazan esta doble recusación alegando que ya estaba

pronunciada la sentencia definitiva, aunque no debían estar plenamente convencidos que la validez del mismo cuando ese mismo día aseguran estar dispuestos a que comparezca como tercer compromisario para administrar justicia Fernando Pinedo, hermano del Santo Instituto y jurado ciudarrealeno⁸⁰.

Para eludir semejantes arbitrariedades, las ordenanzas manchegas de 1792, aunque seguían admitiendo esta figura legal, articulaban un procedimiento en virtud del cual siempre que fuese cuestionado el alcalde que seguía el proceso se prescribía que se acompañase de su compañero, y siendo repudiado éste se reclamaría la presencia del regidor por el estado noble más antiguo en la entidad, quien no podía ser recusado por estimarse dolosa la actitud del letrado defensor en tal supuesto. Legalmente debía continuar la tramitación del proceso incoado, y en la práctica la misma amplitud en la aceptación de las recusaciones restaba la eficacia que habría tenido de otra forma, limitándose los tribunales superiores a ratificar los abusos judiciales practicados⁸¹.

Como en su día demostró M.R. WEISSER, tomando como modelo el caso toledano, los litigantes suelen elegir el tribunal adecuado a sus intereses ante el cual presentar sus reclamaciones y substanciar sus pleitos ante la justicia concejil, la Santa Hermandad, el Santo Oficio, la justicia eclesiástica, etc⁸². Era evidente que ante esta hipertrofia de la organización judicial, atomizada en una multiplicidad jurisdiccional cuya deficiente articulación jerárquica y confusa delimitación competencial, podía dificultar enormemente las resoluciones judiciales. En todo caso en el medio rural, donde era más agudizado el control poblacional sobre la comunidad campesina por parte de los poderes locales, la justicia hermandina actúa como espita

canalizadora de las denuncias de los querellantes cuando lo que se pretendía era hacer caer todo el peso de la ley sobre la parte contraria o al dudarse de la imparcialidad de la justicia más próxima -con demasiada frecuencia detentada por jueces legos manipulados por letrados e incluso escribanos, y supeditados a los intereses de los hacendados lugareños-.

Buena muestra de que el tribunal hermandino, reputado por su dureza penal, constituía una alternativa a la que recurrían los agraviados por la pasividad o connivencia de la justicia ordinaria es el caso substanciado en los albores del Seiscientos por denuncia de un guarda de viñas de Villanueva de los Infantes -Ciudad Real-. Tras superarse los recelos hermandinos para entender en un caso de agresión en descampado al liberar unos porqueros al zagal prendido por Alonso Rodríguez por robar unos racimos⁸³, y enterado el amo de éstos de que podía llegar el caso ante la Hermandad Vieja manchega, se asegura que

"...le dixo que porque se queria yr a pedirla -la justicia- alla que aqui se la harian y el -el querellante- dixo que era pobre y que en esta tierra a los pobres no se les hacia justicia y este testigo le dixo que si queria que tratase de medio con Diego Ramirez y sus criados que lo haria el qual respondio que no que el se queria yr adonde Dios le ayudase."

Arrestado por los cuadrilleros el jornalero Rodrigo Sevillano, involucrado en los hechos, tras cumplir dos meses de arresto preventivo en Ciudad Real, el apresado ofrece ciento veinte ducados -seguramente adelantados por el amo de los porqueros- para comprar el apartamiento de guarda de viñas de su acción particular⁸⁴; poco después de dictarse veredicto condenatorio su procurador apeló a la Chancillería granadina.

Ignoramos si alguna vez se administró justicia por parte del Santo Tribunal ciudarreal de en determinados días semanales establecidos, lo que sí tuvo lugar en su homónimo de Toledo⁸⁵, pero durante los siglos XVII y XVIII, conjeturamos que no hay un procedimiento fijo a tal respecto, sino que la usanza era que a medida que se intruía un caso en la corte de justicia manchega se le dedica el tiempo preciso para su resolución atendiendo a los plazos procedimentales pertinentes, a la calidad específica del pleito y a las ocupaciones particulares de unos jueces no profesionales.

B. Los asesores.

Aunque durante el periodo bajomedieval no era preceptiva la preparación letrada de los magistrados, nos consta que la inmensa mayoría de los alcaldes hermandinos carecían de otros conocimientos legales o penales más allá de los adquiridos por su propia experiencia durante su servicio al Santo Tribunal, al concejo local y a sus ocupaciones personales, recurriéndose ocasionalmente a la asesoría de juriconsultos, fuesen o no pertenecientes a la organización apícola, siempre que el proceso ofrecía alguna dificultad añadida, como podía ser en el supuesto de determinada inmunidad local o de algún conflicto jurisdiccional, así como cuando la calidad del caso lo aconsejaba.

Ya en la Edad Moderna, dentro de la tendencia imperante de tecnificación del proceso judicial y en el marco de la profunda reordenación de la administración de justicia acontecida desde el reinado de los Reyes Católicos, se preceptuó como norma inexcusable que cuando un juez no tuviese una mínima formación universitaria en derecho real, se dotase de algún letrado de su libre elección con el que colegiadamente resolviesen todas las cuestiones legales de su competencia.

A partir de entonces, el letrado es nombrado a satisfacción de los alcaldes -o en su defecto de sus tenientes interinos- quienes siguen siendo en su inmensa mayoría indoctos en la materia⁸⁶; esta elección se realiza entre los abogados de mayor capacitación, experiencia y solvencia profesional, incorporándoles a la institución para aconsejar

y determinar junto a estas autoridades las causas y expedientes del Santo Instituto. En su condición de letrado, el asesor titular puede actuar ocasionalmente como procurador fiscal o defensor en dicha instancia de justicia, en cuyo supuesto el juez de la causa debía designar circunstancialmente a otro sujeto versado en leyes para que le acompañase y asesorase en la toma de decisiones. Tal práctica, nítidamente estipulada en las ordenanzas internas hermandinas, garantizaba al asesor unos mínimos salariales con los que enjugar las parcas rentas asignadas de oficio por el cabildo.

Encargado de informar al cabildo y a sus alcaldes de cuantas cuestiones jurídicas de la más diversa índole se planteasen, se trata de un oficial cualificado, adscrito o no como hermano a la entidad, imprescindible para acometer cualquier problema legal, siendo obligatoria su presencia, anuencia y rúbrica en todos los trámites judiciales y extrajudiciales emprendidos por la organización manchega. El asesor debía consagrarse preferentemente a diligenciar los asuntos pertenecientes al Santo Instituto, siendo en caso contrario relevado de su puesto por un nuevo letrado nombrado ex profeso por los alcaldes de forma desinteresada, conteniendo su nombramiento oficial la usual fórmula de salvaguarda en que se señala que en ella "no ha concurrido fraude ni dolo alguno"⁸⁷.

Si bien durante el siglo XVII y primeras décadas del XVIII se recurre a estos expertos en leyes de forma circunstancial, acompañando a los alcaldes en la resolución de los pleitos y al cabildo en asuntos legales, posteriormente su designación se realizará al tiempo de tomar las varas dichos dignatarios hermandinos o poco después. Normalmente este sujeto gozará de la credibilidad general y suele estar familiarizado con el funcionamiento de la organización a la que sirve,

manteniéndose en su puesto durante años al limitarse los alcaldes entrantes en renovarlos en el cargo.

Cuando el asesor debe ausentarse de la ciudad que alberga la sede del Santo Instituto en cumplimiento de alguna comisión por cuenta de sus superiores jerárquicos, será retribuido de acuerdo a la calidad del asunto a tratar y el tiempo empleado para ello. En caso de que tales ausencias respondiesen a motivos personales o profesionales ajenos a la entidad, únicamente podrán efectuarlos previa expresa licencia de los rectores hermandinos por cuya virtud se hallan en el empleo. De la documentación manejada parece colegirse que aunque pudieran ser recusados indistintamente alcaldes y asesores, mientras que en el primer caso no llevaban parejas mayores repercusiones legales ni patrimoniales, si se trata del asesor letrado se concertaba con el procurador de la parte recusante una cantidad que asegurase los derechos devengados por su sustituto⁸⁸.

El papel desempeñado por estos asesores se nos antoja fundamental en la vida institucional y procedimental hermandina. Sin duda su protagonismo dependerá estrechamente de la experiencia, preparación, o predisposición a desempeñar con todo celo su oficio como profesional del derecho, aunque no es difícil de suponer que los alcaldes, leguleyos de acreditada impericia legal y a menudo centrados en sus propios negocios, dejasen en manos de estos expertos de su confianza el dictamen de las sentencias y la tramitación de las diligencias procesales pues dado el intrincado ordenamiento legal de la época se precisaba de una sólida preparación al respecto⁸⁹. Tanto es así que, al menos en determinados momentos, la labor decisoria de los alcaldes quedaría en un segundo plano, o viceversa según las circunstancias y

la predisposición de los alcaldes a ejercer en toda su plenitud sus potestades jurisdiccionales.

A principios del Seiscientos, cuando eran encartados unos cabreros indiciados como pirómanos con el balance del incendio de varias posadas de colmenas, su procurador defensor recusó al alcalde don Cristóbal de Prado y Armenta "por sospechoso", solicitando que en los siguientes autos contase con el concurso de asesor y que un cuadrillero hiciese las probanzas pertinentes en el lugar de los hechos, por temer que fuesen sobornados las justicias ordinarias⁹⁰. Como quiera que el 2 de enero de 1603 el citado alcalde no acatase este auto, el procurador reclamó la nulidad del proceso incoado, pese al cual serían condenados todos los encausados. Pedro Hernández Nuño cuestiona la legalidad del veredicto pronunciado por no haberse acompañado del preceptivo asesor⁹¹; y dos días después elevaba nuevos escritos ante el Santo Tribunal, arguyendo que había sido despojada su parte de los debidos derechos por la irregular conducta del juez

"Pues v. md. no es letrado ni avia de hacer mas que pronunciar la sentencia que el asesor ordenase y el nombrar acompañado y que jurase y pronunciase juntamente con v. md. la sentencia era cosa de ninguna utilidad ni substancia y solamente formulas y circuitos e que por derecho no se pueda atender...mas ahora para pronunciar la sentencia no era de momento ni consideracion mayormente aviendose enviado a sentenciar a letrado tan conocido, y de tanto nombre de xptiandad como es el de Antonio Sanchez de Molina correjidor de la villa de Malagon y su partido..."⁹²

El día 15 de marzo de 1603 se reiteraba la primera sentencia, esta vez con el concurso del licenciado Luis Sánchez de Plata como asesor del alcalde instructor del caso, aunque el procurador volverá a considerarla nula por graves defectos formales⁹³.

A pesar de las diferentes interpretaciones de los roles por parte de los titulares de unos y otros empleos en la magistratura hermandina, en la corporación de Ciudad Real nunca llegaron a plantearse los mismos problemas que en la Ciudad Imperial por aquellas fechas. En efecto, en Navidades de 1611, estando los alcaldes de la Hermandad Vieja de Toledo procediendo criminalmente contra unos sospechosos de graves delitos, los encartados recusaron a los jueces de la causa y desde el ayuntamiento local se pretende imponer a un asesor letrado, injerencia intolerable que suscita la inmediata reacción del cabildo apícola, resistiéndose a admitirla por no tratarse de una regalía de los munícipes toledanos⁹⁴, pudiéndose insertar este episodio en el pulso institucional sostenido entre ambos capítulos durante la Edad Moderna.

7.3.1.b. SUBROGACIÓN DE LA SENTENCIA A LOS TRIBUNALES SUPERIORES.

Durante el periodo fundacional, la incipiente, pero expeditiva, justicia hermandina prescindía de la mayor parte de las complejas formalidades de las que se iban dotando los tribunales regios, obviando algunos de los mecanismos legales previstos desde las Partidas de Alfonso X para garantizar la correcta administración de justicia. Desde el siglo XIV, y presumiblemente desde décadas antes, con la institucionalización de la figura de los alcaldes, se hicieron inapelables sus sentencias colegiadas, por considerar que los supremos dignatarios hermandinos eran depositarios de la jurisdicción perteneciente a la entidad que regentan. Poco tiempo hubo de pasar para que competencias tan absolutas fuesen moderadas, erigiéndose los cabildos como órgano jurídico-administrativo por excelencia como ostentadores de la segunda instancia. Probablemente la práctica hizo aconsejable este arbitrio, a semejanza de la segunda instancia local existente en los lugares de cierta entidad del realego y del señorío. Asimismo, al integrarse las Hermandades manchegas en la supraorganización que suponía el Triple Instituto, las entidades que lo conformaban creyeron conveniente que la máxima audiencia de apelación debería residir en el cabildo formado durante la llega anual celebrada con los coaligados.

Durante casi dos centurias esta asamblea de toledanos, talaveranos y hermanos de Villa Real fue el indiscutible foro en donde se trataban en apelación las causas civiles y criminales tocantes a su ministerio, pero mediado el Cuatrocientos progresivamente se iría desvirtuando su idoneidad como órgano judicial supremo donde revisar

las causas pendientes, a la par que se hacían cada vez más irregulares sus reuniones y las disensiones internas menoscababan la potestad y representatividad que antaño disfrutaron. En este contexto de tendencia a la autonomía institucional fundacional, pocos serían los asuntos judiciales llevados ante una corte cuya credibilidad como mediadora se encontraba en entredicho y cuyas deliberaciones con dificultad trascenderían a la práctica.

En este momento de titubeo institucional y procedimental, el triunfo de los planteamientos renovadores y continuistas de los logros de sus predecesores hicieron del reinado de los Reyes Católicos un momento clave para el ulterior desarrollo de las a partir de ahora denominadas Hermandades Viejas. El fortalecimiento del Estado Moderno durante el reinado de los Austrias Mayores, y en las postrimerías del Quinientos ya estaba estipulado que la chancillería correspondiente, como alto tribunal territorial de justicia real que era, debía asumir, entre un amplio abanico competencial, la segunda instancia penal en detrimento de las particularidades forales hermandinas.

Asentada desde principios del siglo XVI la Real Chancillería en la ciudad de Granada para entender de los asuntos jurídico-administrativos de la Corona de Castilla al sur de la línea del Tajo, área de actuación preferente de la Hermandad de Ciudad Real, a la Sala del Crimen de esta corte de justicia le correspondía dirimir en la inmensa mayoría de los asuntos elevados desde la citada organización manchega. Aunque en su principio fue patente la resistencia a someterse a dichos designios, completamente ajenos a los que habían regido su proceder durante siglos, tras la revuelta de las Comunidades frente a la tendencia intervencionista de la Corona era imposible la

resistencia a los propósitos de los círculos cortesanos por parte de unos tribunales que habían perdido parte de su antigua pujanza.

En una centuria en la que se evidenciaba un fuerte incremento del volumen de demandas que rebasaban el ámbito local para engrosar la larga lista de pleitos pendientes de resolución en audiencias y chancillerías -por otra parte cada vez más accesibles debido al abaratamiento de sus trámites, el enriquecimiento de ciertas capas sociales así como la normativa que concedían gratuidad a los demandantes y reos sin recursos-, impulsaba su descompensado desarrollo burocrático a la par que sentaba las bases para el colapso de la fluidez de su actividad al abusarse del recurso a dichas instancias. En efecto, entre 1560 y 1640 se registran unos niveles inusitados de recurso a las chancillerías castellanas, aceptándose a trámite causas de escasa entidad. Así, desde la asociación apícola ciudarrealeña se envían para su refrendo sentencias que comportan penas aflictivas corporales y autos de tormento. Normalmente los reos son quiénes llevan la peor parte en la resolución de sus pleitos de hermandad, aunque también el procurador fiscal está capacitado para ello, como representante de oficio y garante del cumplimiento de la vindicta pública⁹⁵.

A partir de esa fecha y hasta fines del Seiscientos, tal vez a causa de la quiebra de la confianza en las instituciones supralocales, en el marco de la esclerotización de los órganos rectores de al Monarquía Católica, las irregularidades que conculcan la normativa vigente se muestra en toda su magnitud. La modificación de esta tendencia coyuntural y estructural fue paulatina, y de mediada la citada centuria se conservan algunos compromisos entre las partes litigantes para resolver de forma extrajudicial lo que siguiendo los

cauces legales hubiera supuesto una demora indeterminada en la resolución de sus procesos⁹⁶.

Conforme avanza la segunda mitad del siglo XVII cobra mayor notoriedad la compartimentalización de la administración de justicia que desde la Corte se intenta agilizar particularmente en su vertiente criminal y en los casos más graves o cualificados. Los ejemplos se suceden: hacia 1656, un reo de hermandad prófugo de cárcel real y minas de azogue de Almadén -Ciudad Real- será ejecutado en Peralvillo, denegándosele la posibilidad de ser restituido como forzado a dicho presidio utilitario ni de apelar de dicho veredicto a la Real Chancillería⁹⁷; en 1664 unos desertores autores de multitud de fechorías serían ajusticiados sin tomar en consideración las maniobras dilatorias de su curador al intentar demorar su cumplimiento reclamando su jurisdicción castrense ni su intención de apelar a Granada⁹⁸; y en 1667 a un homicida convicto y confeso de diversos robos ante el potro le sería dado garrote pese a la intención de su procurador de recurrir la pena capital⁹⁹.

Desde 1670 hasta 1700 el volumen de pleitos criminales substanciados por el Santo Tribunal manchego y elevados ante dicha audiencia andaluza alcanza sus cotas más bajas al confluir varios factores endógenos, a saber: la disminución de su capacidad coercitiva y la polarización de la misma en la minoría gitana cuyo encausamiento estaba exento de consultas a los altos tribunales regios, aunque por sí mismas no pueden explicar la pérdida de la fluidez en la relación entre ambas cortes de justicia¹⁰⁰. Las claves últimas de este hecho, tal vez, halla que buscarlas en circunstancias exógenas, como la paralización y ralentización de los trámites judiciales en las saturadas Salas del Crimen granadinas en un momento de decadencia de

las rentas pecuarias hermandinas sobre las que se cimentaba la liquidez financiera de esta Hermandad Vieja, que a su vez coinciden con la proliferación de normativas que limitaban los casos susceptibles de ser apelados.

No se trataría pues de que el celo de sus privilegios inmemoriales propiciase la autonomía del tribunal manchego ni que se pretendiera desde Ciudad Real arrogarse unas facultades jurisdiccionales ya dadas por perdidas, sino que la inoperancia del siguiente escalón jerárquico en la administración judicial castellana hacía impracticable su recurso en asuntos cuya inmediatez en su resolución era precepto básico por motivos económicos y penales. Testimonio en tal sentido abundan en la documentación manejada y en este sentido cabe interpretar la concesión a la Hermandad apícola de Toledo en 1693 -luego confirmada en 1708- de que como tribunal implantado en el radio de acción de doce leguas de Madrid pudiese remitir sus pleitos en segunda instancia ante la Sala de Alcades de Casa y Corte con la intención de desbloquear la insostenible situación creada en la Chancillería de Valladolid, así como evitar gastos innecesarios de tiempo y dinero en la substanciación de consultas y apelaciones.

Por lo que concierne a la corporación apícola manchega, ante la congestión de audiencias y chancillerías, el Consejo de Castilla actuaba tamizando los casos que habían de remitirse a Granada, a la Casa y Corte o sobre los que asume directamente su resolución entre 1693-1712¹⁰¹, aunque el cambio dinástico poco contribuiría a restablecer los cauces consultivos impuestos desde la administración polisinodial central¹⁰². En el forcejeo institucional entre los altos tribunales territoriales y el cada vez más preponderante Supremo Consejo se acusa la falta de coordinación actuacional del que la jurisdicción más

mermada no podía ser otra que las ajenas a la Corte, asumiéndose desde Madrid competencias jurídico-administrativas que excedían sus primigenias labores de mediación y resolución de conflictos competenciales entre las diversas instancias regias y exentas del Reino¹⁰³.

La obligación de consultar las penas graves que irrogaban infamia y "corporis afflictivas" ante las altas instancias de justicia de la Corte tampoco excusaban muchas de las moratorias y gastos al Triple Instituto, lo que dejaba pendientes de resolución dos cuestiones de distinto cariz: por un lado una vertiente jurídico-penal y por el otro un cada vez más acuciante problema financiero. En virtud de la primera de ellas, aparte del control sobre gran parte de la actividad judicial hermandina que convertían en interlocutorias sentencia antaño definitivas, era relevante que la vindicta pública quedaba en precario con la dilatación del condigno castigo a los culpables, consiguiéndose

"...la mayor costa y el escandalo que causo el delito que se purga en parte en la prision, se convierte en compasion y da tiempo a los empeños para que zeda el rigor y se frustre el scarmiento (sic)..."¹⁰⁴

Mientras que por la segunda la facultad de consultar a la Casa y Corte quedaba en entredicho por la fácil admisión de las causas de inmunidad local por parte de las audiencias eclesiásticas, dejando en suspenso los procesos, y encauzándose las sumarias originales a la chancillería correspondiente, consumiéndose unos caudales que hubieran sido destinados a la preservación de la seguridad pública.

Durante todo el Setecientos la real audiencia de Granada se convierte en el foro donde se consultan y dirimen la mayor parte de las sentencias interlocutorias y se revisan los pleitos en grado de

apelación del Santo Tribunal ciudarrealeno, a pesar de los reiterados enfrentamientos jurisdiccionales con una instancia siempre dispuesta hacer valer sus atribuciones para substanciar los delitos de cierta relevancia perpetrados en su circunscripción territorial, especialmente los cometidos en las inmediaciones de su sede.

Por su parte, las autoridades manchegas en determinadas circunstancias consultarán la orientación de sus condenas con la sala primera de gobierno del Supremo Consejo¹⁰⁵, y no faltarán las quejas elevadas a dicha instancia central por la paralización de la tramitación de las causas criminales en la Real Chancillería granadina¹⁰⁶. En todo caso, con esta reordenación, los a menudo fallidos intentos racionalizadores, y el pretendido centralismo auspiciado desde la administración ilustrada, se consiguió que fuese respetado durante el siglo XVIII por el Santo Tribunal manchego el precepto de consultar sus veredictos interlocutorios hasta el grado de vista siempre que ello fue factible, atención que no siempre acataron otras instancias jurisdiccionales sujetas a idéntica disposición¹⁰⁷.

7.3.2. EL PROCESO CRIMINAL.

El marco legal en que se desenvuelve los cauces de la administración de justicia de la Santa Hermandad Vieja evolucionó desde su época fundacional hasta su abolición mediante decreto en pleno siglo XIX. En todo caso lo que el sistema procedimental hermandino conservará será el talante de expeditividad y dureza penal que adquirió en épocas pasadas, talante que antes de ser desacreditado por dicha corte de justicia será estimulado por la misma en la creencia que la base de su poder coercitivo se sustentaba en la reputación popular de su pretendida severidad actuacional¹⁰⁸.

Pero el modo de impartir justicia en dicha audiencia regia especial no permanecerá impermeable, a lo largo de tan dilatada existencia, a la evolución y desarrollo del derecho positivo, reconduciéndose a tenor de la normativa procesal vigente, así como a las novedades derivadas de la práctica judicial, divulgada en la prolija labor doctrinal de los jurisconsultos de la época. Aceptado el principio que contemplaba el proceso como garante del orden estamental socioeconómico establecido, paulatinamente se asumiría el principio consistente en que el objetivo

"...en el proceso penal es el bien público antes que el interés de la parte ofendida el que se intenta salvaguardar y su finalidad es ante todo la ejecución de justicia desde el punto de vista de la comunidad lesionada y por la comisión del acto delictivo."

Hacer justicia se había convertido, con el paso del tiempo, en una función pública encomendada a las instancias autorizadas por la Corona

para hacerlo, y una de ellas era la encarnada por la Hermandad Vieja de Ciudad Real, cuya entidad hará suyo en la Edad Moderna este ideal, dando muestras en todo momento de estar prestos al servicio de Dios y del Rey en su loable actuación en beneficio del bien común.

Durante los siglos XVII y XVIII su devenir procedimental ordinario quedaría reservado para los casos de cierta entidad, siendo resueltos los casos menores mediante un proceder abreviado sumarial. En el primero de los supuestos, se ajusta a grandes rasgos a lo instruido por los tribunales de justicia regia en cuanto a tramitación de pleitos criminales y límites actuacionales de los mismos en la Corona de Castilla. Como no podía ser de otra manera, su proceder estuvo mediatizado por las mismas lacras que afectaban al resto de las instancia judiciales coetáneas: parcialidad y discrecionalidad de la magistratura; supeditación a las directrices de los letrados por parte de los alcaldes legos; la inferioridad procesal del reo ante el principio de presunción de culpabilidad de los encausados; la desigualdad legal ante la justicia, consagrada por la compartimentalización de su administración por la proliferación de órganos judiciales y la multiplicidad de instancias con atribuciones legislativas; la eventual práctica de la tortura procesal como medio legal de obtener pruebas concluyentes; la conculcación del espíritu de restablecimiento del orden público que animaba al legislador ante otras consideraciones subsidiarias, a menudo inconfesables; la lentitud en la substanciación de los procesos por razones estructurales, legales, institucionales o particulares; en suma, la frecuencia de las irregularidades en la práctica judicial, agravada por la decidida orientación a la consecución de unos objetivos purgativos, represivos y ocasionalmente correccionales antes que rehabilitadores, cuanto menos asistemáticos.

7.3.2.a. LA SUMARIA.

Se trata de la fase preliminar del procedimiento judicial, en principio meramente introductoria e informativa, sobre la que descansa gran parte del enjuiciamiento penal de la época. Sus actuaciones están encaminadas al esclarecimiento del delito, la dilucidación de las circunstancias que lo rodean y la determinación de los términos en que se plantearía formalmente el litigio.

La causa puede abrirse a instancia de parte o de oficio por la propia Hermandad. En el primero de los supuestos se puede proceder mediante querella de la parte agraviada o por acusación¹⁰⁹; si se actúa por querella, ésta suele presentarse verbalmente ante alguno de los ministros u oficiales del Santo Instituto, dejando luego constancia escrita de la misma ante el notario requerido para ello; en caso de acusación debía formalizarse ante la audiencia hermandina o alguno de los ministros cualificados mediante escrito de letrado. En ambas circunstancias sus términos se ponen en conocimiento de los alcaldes mediante el correo ordinario o por los servicios de un propio, siendo evacuada al asesor letrado para su determinación judicial. De oficio se procede cuando los alcaldes, conjunta o separadamente pero siempre acompañados de asesor, teniendo conocimiento de algún caso de su competencia a través de alguno de sus dependientes o de cualquier otra instancia ajena a la corporación, ordenan al escribano hermandino abrir cabeza de proceso para restablecer la vindicta pública, determinando el delito cometido y el condigno castigo al infractor si así se creyese conveniente.

La denuncia se diferenciaba de la acusación en que el denunciante se limita a poner en conocimiento del tribunal la comisión de un determinado delito, sin involucrarse en el proceso como parte, no estando obligado a solicitar mediante procurador pena alguna para el supuesto infractor ni estando por ello obligado a probar la veracidad de su acción legal. El denunciante no siempre actúa desinteresadamente, sino que legalmente puede reclamar un tercio de la sanción pecuniaria impuesta en determinadas circunstancias, como en daños causados contra enjambres o colmenares.

Aunque se actúa indistintamente en uno u otro caso, lo cierto es que se prefirió incoar expediente criminal a instancia de parte porque excusaba algunas trabas formales, allanaba ciertas diligencias que en caso contrario eran susceptibles de ser interpretadas como una injerencia en jurisdicción ajena. A efectos económicos, si se actuaba de oficio o se prueba la racionalidad de la denuncia, las costas y gastos procesales podrían ser asumidos por los caudales corporativos, mientras que si se procedía por querella y ésta no era probada la responsabilidad personal y patrimonial recaería sobre quien interpuso la demanda, siendo lo usual que al presentarla hubiese dado la correspondiente fianza para principiar las averiguaciones pertinentes¹¹⁰; de su omisión se haría responsable quien la admitió a trámite.

Ocasionalmente, la enemistad personal o de cualquier otro orden suscitaba denuncias falsas con el único fin de desacreditar y afligir al acusado y a su familia con un pleito que irrogaba infamia y comprometía su patrimonio con un proceso costoso y de incierto resultado¹¹¹. La falsa delación, si era probada, constituía delito,

por lo que llevaba aparejada una pena acorde con la gravedad de la acusación realizada¹¹².

La denuncia puede realizarse ante cualquier representante hermandino para que instruya la actuación policial pertinente, siendo el método más usual la notificación a algún comisario comarcano, quien a su vez lo ponía en conocimiento mediante misiva a sus superiores en Ciudad Real. Puede tratarse de la mera alusión a la noticia del delito o la descripción física de los sospechosos, e incluso sus nombres, para facilitar los trámites iniciales. En cambio, la querella puede presentarse por toda persona directa e indirectamente perjudicada por la comisión de un delito y que pretende resarcirse de él exigiendo las responsabilidades debidas al autor o autores de la infracción¹¹³. Aunque normalmente la querella se suscita por parte del propio agraviado, independientemente de su sexo¹¹⁴, o por su curador si se trata de menores de edad; pero también están legalmente capacitados para ello los damnificados subsidiarios, como pueden ser familiares cercanos -en este sentido es frecuente que en caso de homicidio asuma dicha responsabilidad su cónyuge, e incluso puede suceder que mientras uno de ellos se apartó de la querella el otro la haga efectiva¹¹⁵- o el responsable de determinados bienes dejados a su cargo. Generalmente quien poseía en última instancia el derecho conculcado era quien hace valer sus atribuciones legales y, a menudo, su propia calidad personal, para estimular el celo de los jueces¹¹⁶, bien personándose ante dicha corte de justicia o bien a través de procurador nominado mediante procura a tal efecto¹¹⁷, teniendo capacidad el amo para esgrimir las acciones pertinentes por el daño causado a sus deudos que actúan bajo su mandato¹¹⁸.

En otras ocasiones, la denuncia es presentada ante el representante hermándino más próximo, al presuponerse la indolencia, el cohecho o la lenidad de la justicia local¹¹⁹ o , mas habitualmente, para evitar el trámite oneroso de acreditar ante una lejana Ciudad Real unos hechos cuya reparación se pretendía inmediata. En efecto, alcaldes, cuadrilleros y comisarios están autorizados para actuar siempre de oficio o a instancia de parte, ya que como delegados de la justicia real les competía el restablecimiento del orden público¹²⁰. Algunas de sus acciones penales se derivan de su ministerio preventivo por caminos, montes, ferias, romerías, ventas y mercados¹²¹, pudiendo proceder por simples sospechas¹²².

En la práctica se produce una doble acusación: una primera por la que se limita a comunicarse al ministro, oralmente o por escrito, la intención de ejercitar la acusación para que comenzasen las diligencias correspondientes; y una segunda acción, tras la información sumarial, formalizando los cargos concretos contra los involucrados. En caso de apartamiento, el denunciante se retracta como parte actora del litigio, aunque si se considera preciso el pleito continuará de oficio por el promotor fiscal del Santo Tribunal. Tampoco resultan inusuales las denuncias anónimas, por temor a posibles represalias de los malhechores, amenudeando tales precauciones cuando la comisión del delito comunicado afecta a personas o intereses ajenos¹²³.

Siempre que se estimase preciso y ello era factible, cualquier ministro del Santo Instituto, de la justicia real o privilegiada, e incluso paisanos o militares podían arrestar a un delincuente si era sorprendido en delito flagrante o se temiese su fuga, por lo cual se acostumbraba a asegurar su persona en algún lugar que reuniese unas

mínimas garantías de seguridad para luego cumplimentar los trámites legales normativamente previstos.

Paulatinamente los casos llevados estrictamente de oficio serán más infrecuentes, pues aunque durante el Setecientos gran número de causas fueran seguidas bajo este calificativo ello se debe a que alcaldes y comisarios emprenden las sumarias al tenerse conocimiento de la infracción mediante informes secretos.

Excepcionalmente se llevaron a situaciones insólitas. Hacia 1707 un contrabandista de Calasparra que había adquirido ilícitamente una partida de ciento dos libras de tabaco a un barco en la costa malagueña con la intención de venderla en la comarca de Alicante, ante la presión de los guardas del estanco decide dirigirse a La Mancha para enajenarla, pero al transitar por Sierra Morena es asaltado y despojado de todas sus pertenencias y carga; notificado el hecho a un comisario de Linares, éste se lanza en persecución de los bandidos y logra darles alcance en Aldea del Rey -Ciudad Real-; en octubre de dicho año se abre la sumaria contra los inculcados en el asalto por parte de los alcaldes hermandinos, permaneciendo el contrabandista asilado en un recinto eclesiástico de la capital manchega desde donde testifica contra los detenidos¹²⁴.

Las contadas ocasiones en que el agraviado renuncia expresamente a su derecho de exigir responsabilidades por los daños que cree haber recibido por parte de terceros, mayoritariamente se trata de delitos menores del tipo de injurias o agresiones con el resultado de heridas leves¹²⁵. A menudo este desistir de interponer la acción legal pertinente suele obedecer a razones tan diversas como la compra de su dejación de derechos; el olvido voluntario de una determinada

infracción para evitar verse envueltos en un litigio que crease o avivase enemistades entre convecinos, que podían complicar la existencia a denunciadores y denunciados; cuando las circunstancias que rodean el delito dejase entrever la posibilidad de parcialidad de los jueces o que por ello mismo la tramitación del proceso transcurriría por idéntico cauce, etc.

A veces hay problemas incluso para incoar cabeza de proceso por la falta de colaboración de los notarios públicos, llegándose a recurrir a la asistencia de escribanos apostólicos¹²⁶, obviándose de manera excepcional esta obligación que invalidaba la acción legal emprendida¹²⁷, llegándose a desistir de emprender diligencia alguna ante la incomparecencia inexcusable de estos profesionales¹²⁸. Los motivos de esta actitud son múltiples, siendo los más frecuentes el que los escribanos, particularmente los de las pequeñas localidades, se resisten a su preceptiva asistencia a unos ministros de justicia habitualmente ajenos a la jurisdicción a la que sirven y las consecuencias derivadas de indisponerse con las autoridades locales de orden económico, personal o profesional; por connivencia con el sospechoso; menosprecio a una jurisdicción lejana o por asociarla a la inoperante Hermandad General del Reino; el temor a represalias al no tratarse de justicias lugareñas que garantizaran su seguridad personal ni su continuidad profesional¹²⁹; en definitiva, su supeditación a los poderes fácticos más cercanos, cuando no a sus propios intereses.

Entre las primeras medidas cautelares dictadas por alcalde y asesor para asegurarse que se respondería del supuesto daño infringido son los autos de prisión y embargo en persona abonada de su persona y bienes, con lo que se pretendía garantizar a todos los efectos que el

sospechoso asistiría al juicio y resarciría con su patrimonio la previsible sanción económica impuesta y gastos derivados del proceso.

Pero la detención puede realizarse aún antes de instruirse pleito alguno, siempre que se tuviese la sospecha racional o la certidumbre de que se hubiese trasgredido la ley, en el instante mismo de la comisión de un crimen o una vez abierta la sumaria, a la luz de los testimonios aportados por los informantes. Los indicios que conducen a estas prisiones preventivas son heterogéneos y, a menudo, arbitrarios. Suelen pasar a las cárceles sin demasiadas contemplaciones gitanos, vagabundos, extranjeros o forasteros de baja extracción socioeconómica, individuos ostensiblemente armados, jornaleros itinerantes, pobres, titiriteros, buhoneros, loberos, cazadores, peregrinos, romeros, soldados errantes y un largo etcétera compuesto por individuos aislados adscritos a ocupaciones marginales o a las partidas de personas de las que se presume su dudosa filiación¹³⁰. En la práctica este arresto se trata de una pena anticipada hacia unos individuos que a menudo se hallan en los ambiguos límites de la legalidad y que se hallan sometidos a un procedimiento criminal inquisitivo orientado más a su inculpación por cuantas infracciones hubiesen cometido a lo largo de su vida que al esclarecimiento de unos hechos pretendidamente delictivos concretos.

La captura de los delincuentes in fraganti es poco corriente, si excluimos de esta consideración a los gitanos o vagabundos quebrantadores de las reales pragmáticas y desertores del ejército¹³¹. Mucho más reiterados son los casos en que las detenciones se practican iniciada la sumaria y no faltan las diligencias infructuosas para hallar a los responsables penales de cuantos actos delictivos se hubiesen perpetrado.

Para excusarse molestias, agravios o demoras innecesarias, que a veces propician la impunidad del delito, las diligencias emprendidas desde Ciudad Real siempre cuentan con la comparecencia de un notario hermandino, y ya en el Siglo de las Luces se procedió a la captación de escribanos para el ingreso en la corporación colmenera manchega bajo la calidad circunstancial de ministro receptor.

Asegurado el reo en prisión y la incautación de sus propiedades, a menudo tras múltiples vicisitudes y superados obstáculos de todo tipo, el siguiente paso era la comprobación del cuerpo del delito cuando ello fuese factible, pues sin su constatación resultaban inoperantes el resto de las diligencias posteriores si las pruebas testificales y periciales resultaban inconsistentes¹³², en todo momento bajo el principio inquebrantable de secreto sumarial.

Era aconsejable, si su cercanía así lo permitía, que se trasladase un oficial o ministro de la propia entidad acompañado de algún notario para la inspección ocular del lugar de los hechos¹³³, haciéndose llegar a la sede del tribunal cuantas pruebas periciales pudiesen arrojar luz sobre los hechos investigados como pueden ser cabalgaduras, alhajas, armas, ropas, aparejos, monedas, corchos, documentos, u objetos personales. En Ciudad Real se recabará la comparecencia de expertos en la materia como herreros, armeros colmeneros, impresores, maestros de albéitar, etc, según la naturaleza de la prueba aportada para que con su dictamen calificase el cuerpo del delito¹³⁴. Cuando es imposible llevarlas a la sede del Santo Instituto es alguno de sus dependientes quien acompañado de escribano y de algún experto cualificado determinase sobre el particular, así si trata de cadáveres algún cirujano o médico local testimoniará sobre el

mismo¹³⁵. Aunque legalmente estaba establecido que al menos fuesen dos los peritos, e incluso tres en caso de dictamen discordante, lo más frecuente es que el alcalde o su representante confíe la declaración jurada a un solo experto en la materia, bien por ser patente la rectitud de su informe, bien para evitar mayores gastos.

De igual manera se recababan las pruebas testificales precisas para esclarecer el delito o delitos investigados, siguiéndose escrupulosamente el procedimiento de que los ministros captore, asistidos de escribano, tomasen constancia de cuantas declaraciones estimasen convenientes, realizando a los sospechosos detenidos las preguntas generales de la ley sobre sus calidades y cualidades; dichos interrogatorios serán repetidos de manera más extensa y sistemática durante la fase plenaria, a fin de evitar las prisiones suscitadas por testigos inhábiles¹³⁶, aunque en la práctica se seguían las diligencias sumariales pese a la debilidad de los primeros indicios inculpatórios¹³⁷.

Coincidimos con la mayoría de los investigadores en valorar parcial la conducta de los jueces, quienes, predispuestos contra el reo por el mero hecho de verse envuelto en un pleito criminal como sospechoso, sopesan discriminadamente los datos exculpatórios respecto a los que confirman su culpabilidad¹³⁸. Aunque las diligencias durante esta fase procesal son teóricamente recopilativas e informativas, debiendo ser preceptivamente ratificadas, el juicio plenario cuenta con unos plazos tan escuetos que el fiscal a menudo únicamente tienen que refrendar lo cumplimentado en la fase anterior, en la que el reo carece de los recursos legales precisos para solicitar la comisión de acciones que probasen su inocencia.

Detenido el sospechoso, asegurados sus bienes en una persona abonada que contase con la confianza del ministro captor, y comisionado algún dependiente hermandino para substanciar la sumaria, si el reo no había sido llevado directamente a la galera ciudarrealeña, el siguiente paso era trasladarlo desde su lugar de arresto, dirimiéndose eventualmente que permaneciese donde se hallaba hasta la resolución del caso para evitar gastos superfluos o por hacinamiento en las mazmorras de la sede central¹³⁹.

Normalmente el procedimiento seguido para el traslado de los reos, individual o colectivamente, era que el ministro captor, auxiliado por otros comisarios, por paisanos armados aportados por los concejos de paso, por las propias justicias locales mediante tránsitos, e incluso por militares, a pie y/o a caballo conduciéndolo a lomos de una cabalgadura menor, fuertemente encadenados y atados a la montura. Pernoctan en prisiones facilitadas por corregidores o alcaldes mayores, estando obligados mesoneros, venteros armeros y vecinos a proporcionarle los bastimentos requeridos a precios moderados, costeando en principio salarios y cuantos gastos se ocasionasen de su propio peculio o bien del producto de la almoneda de los bienes requisados; de todo ello entregará justificante al mayordomo para que se le reembolsasen los gastos adelantados personalmente.

Sin embargo, la casuística que rodea a estos traslados de presos preventivos deja al descubierto las graves anomalías que aquejaban a la administración de justicia en la Corona de Castilla durante el Antiguo Régimen, así como el menosprecio que propios y extraños albergaban hacia el Santo Instituto. Con demasiada frecuencia suele concurrir en estas empresas numerosas particularidades, algunas de ellas llegando a frustrarlas: comisarios que pretenden eludir de tales

labores, debido a los crecidos desembolsos ocasionados y no siempre satisfechos, como por los trastornos de toda índole que ocasionaba el paso de dichos ministros por jurisdicciones ajenas, alegando enfermedades¹⁴⁰, lesiones circunstanciales¹⁴¹, su edad avanzada¹⁴², la ignorancia de la orden¹⁴³, la negativa a salir bajo el mando de un sujeto jerárquicamente parejo¹⁴⁴, problemas con la justicia del lugar¹⁴⁵ o, simplemente, desobedeciendo los designios de sus superiores, renunciando públicamente a su título¹⁴⁶; jueces comisarios que se precipitan a conducir personalmente y sin apenas escolta armada ni medios a los reos hasta Ciudad Real sin esperar el mandato de los alcaldes¹⁴⁷; en otras ocasiones son los poderes locales quienes entorpecen los traslados, negándoles prisiones¹⁴⁸, limitando su estancia en los calabozos concejiles¹⁴⁹, reclamando para sí la competencia del caso¹⁵⁰, desatendiendo su debido apoyo logístico pese a los reiterados requerimientos en tal sentido¹⁵¹, liberando a los detenidos por convicciones personales¹⁵², cohecho¹⁵³, la complicidad en sus actividades ilícitas¹⁵⁴; cuando no son los reos quienes logran fugarse debido a las notables carencias de los edificios habilitados como prisión¹⁵⁵, al involucrarse sus cómplices¹⁵⁶; refugiándose en sagrado o huyendo al monte durante sus traslados por el yermo ante la pasividad o colaboración de los venteros¹⁵⁷, comisarios¹⁵⁸, los guardas asalariados que los custodian¹⁵⁹, u otros individuos que se interponen en la ejecución de su conducción¹⁶⁰; muerte por enfermedad o heridas de los reos en cárceles ajenas a su jurisdicción¹⁶¹; posaderos y venteros que se aprovechan de la urgencia de los bastimentos requeridos para subir sus precios, o llanamente negarse a colaborar¹⁶². Aún en el supuesto de realizarse el puntual traslado de los encartados a Ciudad Real no siempre se ve coronado con su debida recompensa, ya que ocasionalmente dejan sin ser satisfechos totalmente

sus honorarios¹⁶³, o se procede contra sus ministros por sus excesos o falta de celo en la custodia del reo encomendado¹⁶⁴.

Si esto ocurre con la persona del sospechoso, otro tanto acontece con sus bienes embargados. Aunque hay casos en que no se presentan mayores problemas en proceder cautelarmente contra sus bienes muebles e inmuebles¹⁶⁵, las anomalías son norma: sujetos que ocultan sus pertenencias con la colaboración de parientes, vecinos o cómplices¹⁶⁶; acreedores particulares que exigen ser satisfechas las deudas contraídas con el producto de lo inacautado¹⁶⁷; supeditación de lo secuestrado a cumplimentar los tributos reales, señoriales, concejiles o eclesiásticos pendientes¹⁶⁸; reclamación de los cónyuges de sus bienes dotales¹⁶⁹; inexistencia de individuos abonados dispuestos a administrar tales propiedades¹⁷⁰; retrasos en la presentación de fianzas¹⁷¹; malversadores de fondos cejados bajo su custodia, enajenándolos en su propio provecho¹⁷²; imposibilidad de su venta por parte de comisarios y cuadrilleros ante la resistencia por parte de las justicias locales¹⁷³, temor de los posibles licitantes a represalias¹⁷⁴; e incluso el incumplimiento efectivo del auto de secuestro patrimonial¹⁷⁵, llegándose a sacrificar cabalgaduras por las escasas expectativas de lucro y los gastos ocasionados por su mantenimiento¹⁷⁶. Tampoco faltan las irregularidades cometidas por los propios comisarios, como realizar embargos sin las debidas garantías¹⁷⁷, proceder contra bienes que resultaban pertenecer a otros dueños y no a los encausados¹⁷⁸, etc.

Podrían citarse numerosos casos en los que concurren algunas de tales circunstancias, siendo particularmente representativo el protagonizado a principios del Setecientos por un comisario malacitano. Haciendo detener a una pareja que se dirigía a Lucena a

pie que considera sospechosos, es inquirida por dicho ministro sobre su procedencia y destino, contestando con evasivas e incurriendo en algunas contradicciones que les conducen al arresto. Ya en la cárcel pública de Lucena el ministro captor y un escribano numerario afirman llamarse Pedro Romero y Ana López de Bélmar, reconociendo ésta tener una causa pendiente en Daimiel -Ciudad Real- al haber abandonado su acompañante a su esposa para huir con ella, viajando por ello bajo nombre falso. El alcalde mayor de Lucena ordena su inmediato traslado en vista que debido a la pobreza de los aprehendidos y a la inhibición de su captor no eran satisfechos ni intención había de asumir los gastos devengados en la galera local, sustentándose gracias a los socorros prestados por la congregación del Espíritu Santo. El juez comisario don Bartolomé Benítez Ballesteros decide, por su cuenta y riesgo, conducirlos a Ciudad Real; durante su viaje solo nos consta que obtuviese la custodia de unos guardas proporcionados por las autoridades de Marmolejo, acompañándolos hasta la venta de Cardeña. El dependiente hermandino decide aprovisionarle en la citada venta antes de cruzar Sierra Morena, reclamando los bagajes precisos al ventero Diego Romero -tal vez pariente del reo-, quien no tan solo los deniega pese a ofrecérsele su compra a precios superiores a lo establecido, sino que cambia por su cuenta los grillos que portaba el reo por unas esposas. Tras pernoctar en la posada, Pedro Romero logra zafarse violentamente de su guardián, logrando evadirse. Consternado por la fuga y por las contusiones recibidas en la refriega, el comisario retorna con la amante del huido a Lucena, desde donde informa de los hechos a sus superiores. Un mes después recibe la contestación de los alcaldes haciéndole partícipe de sus culpas: no secuestró bienes algunos; condujo los reos temerariamente, sin el preceptivo mandato de los rectores hermandinos ni la protección de los paisanos; así como que no había impelido a los guardas a acompañarle hasta poblado como

estaba reglamentado y dictaba la experiencia. No obstante, no debieron ser estos cargos tan importantes ni insoslayables cuando poco después se le encomendó investigar sobre la reprochable actitud del ventero y substanciar la sumaria contra Ana López¹⁷⁹.

Aunque excepcionales, sabemos de casos en que las evasiones durante dichos traslados terminan en la muerte accidental de los reos. Así, en 1774, tras atrapar tres ministros hermandinos a dos cuatrerros en la Sierra de Cazorla, y en el curso de su conducción a Ciudad Real, en las proximidades de Castellar de Santiago -Ciudad Real- uno de los comisarios dispara fatalmente a Juan de Argibes cuando pretendía fugarse de la comitiva que lo llevaba detenido¹⁸⁰.

Cuando llegan los reos custodiados a la galera hermandina son entregados al carcelero, quien con ayuda del escribano les inscribe en el libro registro de entradas, asentándose sus datos personales y circunstancias de su detención. Tras estas formalidades el alcaide, o su ayudante, le asigna un calabozo y las prisiones que portaría según la calidad del detenido y de las culpas que se le imputaban¹⁸¹; son curadas sus heridas o convalecen de sus enfermedades, viendo atendidas sus necesidades perentorias de vestido y comida, proporcionándoles esterillas sobre las que dormir. Siempre que es factible serán los propios reos quienes se costeen su mantenimiento, pero en caso contrario tampoco serán abandonados a su suerte, pues el Santo Tribunal se hará cargo de proporcionarles un prest diario mínimo con el que sobrevivir mientras permanecían en reclusión¹⁸².

Los reos recién ingresados en prisión eran el blanco de abogados y procuradores que se apresuran a captarles como clientes y de la codicia de carceleros o por parte de sus mismos compañeros de

infortunio. Oficiales y capellanes están sujetos a visitas periódicas a la cárcel, que no suelen ir más allá de un rutinario registro del estado de la causas de los reos y la pregunta directa sobre si precisan algo, quedando desvirtuada de esta forma una medida profiláctica que evitase abusos sangrantes e incluso las evasiones de los más descontentos con la penuria de su situación. Serán los propios alcaides y sus colaboradores quienes, al permanecer en un constante y cotidiano contacto con los detenidos, actúan con un margen de autonomía realmente notables, tan amplios como pasiva resulte la actitud de sus superiores jerárquicos.

La autoinculpación del reo es el objetivo por excelencia del enjuiciamiento criminal, y en torno al cual gravita todo el mecanismo procesal por entenderse que ésta era la prueba irrefutable que dilucidaría su culpabilidad. Generalmente, el procedimiento seguido es la toma de una primera confesión inmediatamente después de su arresto por parte del ministro captor ante escribano y letrado, concurriendo eventualmente algún representante de la justicia ordinaria en cuya jurisdicción fue prendido, en lo que se denominaba indagatoria, es decir no propiamente una confesión sino el preceptivo interrogatorio al reo como si se tratase de otro testigo cualquiera, realizando preguntas ambiguas sobre su identidad y delito investigado, sin dejar traslucir acusación alguna. Lo que se pretendía era que la información suministrada por el inculcado fuese lo más inmediata posible a su captura para lograr la mayor espontaneidad en su declaración.

Ya en la sede hermandina, normalmente en su sala capitular, ante el alcalde que instruía el caso, su asesor y uno de sus escribanos para anotar las incidencias e informaciones aportadas, era obligado de nuevo a relatar todas las circunstancias que creyese pertinentes para

dilucidar los actos delictivos investigados. En caso de permanecer retraído en asilo eclesiástico el sospechoso, un comisario acompañado de notario solicitaba licencia eclesiástica para tomarle declaración, aunque en todo momento el indiciado puede negarse a responder a las preguntas formuladas, invocando iglesia.

Estas confesiones juradas se hallan bajo secreto sumarial y son realizadas sin la presencia de la parte acusadora. Lo más usual es que el acusado se declare inocente y adujese para ello todo tipo de testimonios exculpatorios y coartadas, tratando de acreditar su buena conducta personal, religiosa, moral e incluso fiscal, negando conocer de la comisión del delito imputado poco más de lo que era público o notorio, y a veces ni tan siquiera eso. La práctica usual era iniciar la toma de confesión por la mañana, para que en el supuesto de alargarse el acto hasta mediodía, éste pudiese continuarse durante la tarde; en determinadas circunstancias se continuase en varias sesiones consecutivas o se demorase por algún imponderable justificado.

Eventualmente los magistrados dispusieron el careo de varios reos o de uno de ellos con alguno de los testigos sumariales estantes en la ciudad y que lo hubiesen comprometido en su declaración¹⁸³. Presionados desde todas las instancias y siempre amenazados con la aplicación del tormento¹⁸⁴, cuando la voluntad de exculpación de los acusados vacilase, cuando se estrechaba el cerco sobre su persona, solía admitir pequeñas faltas o antecedentes penales que por su levedad o haber sido purgados aliviase la coacción a la que se veían sometidos. Aún cuando el reo admitía su culpa se acostumbraba a abrir un periodo transitorio durante el cual se recababa toda la información necesaria para determinar la existencia de otros delitos que sumar a los reconocidos testificalmente.

De manera simultánea al curso de la información sumarial, alcalde y asesor requerían a la parte ofendida si deseaba integrarse en el proceso como parte actora o acusadora. Su silencio o respuesta negativa no suponía la suspensión de los trámites penales, sino que se seguían con el proceso de oficio por parte del procurador fiscal del Santo Instituto hasta ver satisfecha la vindicta pública.

Concluida esta fase, y siempre si los indicios solo arrojaban faltas leves y habida cuenta de la calidad personal del encartado, podía relajarse la severidad de su internamiento. Durante los siglos XVI y XVII la fórmula mas reiterada por el detenido era obligar su patrimonio o el de sus deudos si era exonerado de estar confinado en los calabozos, tomando como cárcel el cuerpo de la galera¹⁸⁵. Paulatinamente esta práctica, que si bien restringida a unos pocos casos había permitido a algunos de ellos zafarse de la custodia a la que habían sido sometidos, desapareció al desvirtuarse parte del antiguo rigor empleado por el Santo Tribunal y hacerse habitual el que los reos menos peligrosos permaneciesen sueltos aunque en todo momento dentro de las dependencias penitenciarias.

A caballo entre la sumaria y el juicio plenario, entre las últimas diligencias procedimentales de la primera y puesto que la mayor parte de los reos se encontraban en situación preventiva, estaba contemplada la posibilidad de abandonar circunstancialmente la prisión en tanto que no fuese requerida su presencia por parte de la corte de justicia hermandina. La práctica forense restringía esta garantía judicial a los encausados por faltas leves y cuya pena fuese exclusivamente pecuniaria, algo infrecuente habida cuenta del agravante inherente a muchos de los denominados delitos de hermandad. Para garantizar que el

supuesto crimen no quedase impune la doctrina establecía la figura de la fianza como medio más adecuado para ello¹⁸⁶; a pesar de estas seguridades, los alcaldes suelen resistirse a poner en libertad condicional a los enjuiciados, aún en los casos legalmente previstos, utilizando el confinamiento como método de minar la esperanza de los detenidos en una rápida resolución del pleito y estimular su confesión inculpatoria. No contribuía demasiado a esta medida de gracia la alta tasa de fugas durante la excarcelación bajo fianza, escapando a la justicia no solo los propios reos sino incluso sus fiadores, para eximirse de las responsabilidades civiles o criminales subsidiarias de las que se habían hecho acreedores¹⁸⁷.

Tienen posibilidad de salir bajo fianza, si se hallan en galeras ajenas a la ciudarrealeña, quiénes demuestran tener una coartada verosímil que alejase de ellos las sospechas¹⁸⁸, los reos enfermos¹⁸⁹, o los prófugos vueltos voluntariamente a prisión¹⁹⁰, entre otros. De esta actitud puede colegirse que medida tan excepcional únicamente parece tomarse en circunstancias especiales y más orientadas a solventar con este medida los gastos provocados por reos hermandinos en cárceles públicas que el conceder el beneficio de la duda a presos preventivos sobre los que aún no estaba probada su culpa; generalmente suele tratarse de individuos respetables en su comunidad o sospechosos de haber cometido delitos menores, como allanamiento de morada, daños a posadas y montes, injurias, u otros semejantes.

7.3.2.b. EL JUICIO PLENARIO.

Concluida la sumaria, que había servido para hacer acopio de los cargos inculpatorios contra el detenido, el alcalde de acuerdo con sus asesores, disponían su traslado a la parte actora o al promotor fiscal para que presentase acusación formal informada de las diligencias previas. Considerando que durante la fase antecedente la orientación de las investigaciones habían sido de tipo inquisitivo-inculpatorias, la acusación tenía pocos problemas en fijar los cargos que imputar al reo, para lo que otorga un breve plazo que oscila entre tres y veinte días para presentar ante el tribunal auto de culpa y cargo¹⁹¹. La magistratura dirigía un escrito comunicando las culpas resultantes al reo para que su procurador dirigiese su defensa; en el supuesto de dilatarse los términos fijados al encartado no quedaba más remedio que apelar a la celeridad de la parte acusadora ante la propia Hermandad, y en caso de desatención a sus súplicas podría recurrir al tribunal supremo correspondiente¹⁹².

Si el proceso se sigue por querrela la respuesta del reo era entregada a la acusación para su réplica, y de ésta se da traslado al encartado para su contrarréplica, reiterando una vez más los trámites. En ambos escritos de cargo y descargo, adelantando unas conclusiones que darán paso al término probatorio. Cuando el pleito se sigue de oficio el procedimiento se abrevia y solo se admite una sola ronda de acusaciones y contestaciones.

En su descargo el reo, a través de su procurador, alega las excepciones convenientes a su parte, por regla general dilatorias como

ilegitimar la jurisdicción hermandina, la incapacidad del acusado, la recusación de algunas de las partes personales del proceso, etc. Como sistemáticamente eran desatendidas tentativas de revocar el fuero hermandino, invocando la adscripción de su supuesta culpa a la jurisdicción ordinaria, eclesiástica o militar, durante los siglos XVI y XVII fue práctica relativamente frecuente la recusación de las personas que instruían el caso, ya que la presumible connivencia de alcaldes y asesores desvirtuaba las ventajas supuestamente inherentes a la magistratura colegiada.

Hacia 1582 era recusado el licenciado Juan de Torres "por sospechoso"¹⁹³, y en 1603 dicho juez era desestimado por un reo basándose en que había participado en su traslado a Ciudad Real e intervenido en la recepción de pruebas sumariales presumiblemente inculatorias¹⁹⁴. En 1652 el letrado de un cuatrero, al recibir la causa a prueba, pone de manifiesto su intención de repudiar como jueces al alcalde hermandino don Cristóbal Rodríguez y Torres, así como a su asesor y corregidor manchego don Diego de Palacios Escobar¹⁹⁵; achacándose a los alcaldes hermandinos el retraso en la substanciación del proceso, desde Granada se recusa en 1655 a ambos alcaldes y propone el procurador defensor "con letrado de ciencia y conciencia y no procediesedes sin el dicho acompañado"¹⁹⁶.

Aunque en puridad el único que no podía ser recusado era el procurador fiscal, pues al actuar de oficio se consideraba imparcial, conocemos un caso en el cual el curador encargado de la defensa de un reo logra desplazar de la causa criminal al asesor licenciado Esteban de Torres y al fiscal don Andrés Díaz de Porras¹⁹⁷. Durante el Setecientos, aunque sigue contemplándose la posibilidad de acceder a este resorte legal, decaerá ostensiblemente su recurso bien por

estimar que cuestionar la equidad de los jueces predisponían en su contra a quienes tenían en su manos su destino, bien porque al tratarse por lo general de letrados afectos al tribunal éstos procuraban no indisponerse con personajes tan influyentes, prefiriendo renunciar al fuero hermandino antes que poner en precario su relación personal, económica y profesional con estos miembros eminentes de la vida local, aparte del hecho de que los gastos del acompañamiento debían ser asumidos por la parte recusante.

Solventados estos trámites, u otros similares, se iniciaba el auto judicial en virtud del cual se abría el periodo probatorio, susceptible de ser prorrogado, estableciendo el plazo en el cual las partes litigantes debían cumplimentar las diligencias adecuadas a sus intereses contrapuestos. En la audiencia hermandina este emplazamiento vencía entre los veinte y los ochenta días comunes atendiendo a cada caso, pudiendo extenderse por un máximo de otros cuarenta días si así era estimado por las partes y aprobado por los magistrados, aunque casi nunca se agotan los seis meses previstos por ley para los supuestos más extremos.

Excepcionalmente, el reo podía renunciar mediante escrito expreso al término de la prueba, resultando esta negativa una maniobra para alcanzar un compromiso con el tribunal aceptándose los cargos menores para asegurarse un veredicto indulgente¹⁹³; en cambio, en modo alguno podían negarse los reos a su defensa letrada, pues aunque manifestasen la dejación de sus derechos debería nombrárseles abogado y procurador defensores de oficio que se hiciesen cargo de su debido patrocinio¹⁹⁹.

Durante esta fase procesal comenzaban a recibirse en Ciudad Real los autos solicitados a las justicias de los lugares de origen y

vecindad de los encartados para conocer la estimación pública y si disponían de antecedentes penales, en cuyo caso el fiscal remite formularios para concretar las nuevas culpas que se derivasen de ellos.

Al mismo tiempo, ambas partes presentaban las pruebas testificales, documentales y periciales pertinentes²⁰⁰. Ocasionalmente resultó problemática la recepción de pruebas desde lugares distantes, a pesar de la general buena disposición a colaborar por parte de las justicias locales y territoriales o la labor encomendada a ministros y escribanos hermandinos, al concurrir demasiadas instancias y con cierta frecuencia con intereses contrapuestos. Las causas que suscitaron esta postura de obstaculización al esclarecimiento de los hechos investigados eran heterogéneas: temor a venganzas de los deudos del encartado contra las personas y bienes de los declarantes²⁰¹; intencionalidad de perjudicar a lagunas de las partes litigantes de acuerdo a intereses particulares²⁰²; injerencia de las autoridades con el propósito de mediar o de interferir en el proceso incoado²⁰³; etc.

Siempre que era factible, se presentaban los testigos aportados por las partes en persona ante el propio tribunal para tomarles declaración jurada individual, sobre cuyos términos deberían de guardar secreto. Antes de examinar nuevos testigos se acostumbraba a ratificar a los informantes sumariales para que su testimonio tuviese fuerza probatoria; cuando la ratificación de los testigos no fuese posible, al desconocerse su paradero o debido a su defunción, está previsto que un delegado hermandino "abonase" sus declaraciones pasadas mediante testigos fidedignos²⁰⁴.

El reo puede descalificar a algunos de los testigos aportados por el ministerio fiscal declarándolos enemigos capitales²⁰⁵, desestimándose, conforme a derecho, los argumentos que éstos pueden acreditar a lo largo del proceso, aunque lo habitual es que el peso de sus testimonios inculpatorios resulten ser a la postre decisivos.

Sin duda no contribuía a abreviar el procedimiento el hecho de que la comisión en decampado de la inmensa mayoría de los delitos de hermandad impidiese la consecución de pruebas concluyentes de la implicación o no de los detenidos, debido a lo cual los indicios inculpatorios suelen ser sobrestimados en el proceso. Un acreencia bastante extendida entre los magistrados de la corte de justicia hermandina era la expresada por un fiscal en 1624 consistente en que por un crimen perpetrado en el yermo "qualquier informacion se tiene por plena y qualquier testigo por idoneo"²⁰⁶, aunque afortunadamente para el curso de los acontecimientos dicho principio tan expeditivo sería tamizado por la ulterior práctica forense en dicha instancia judicial manchega²⁰⁷.

Como la prueba perfecta, la autoinculpación del reo, raras veces acontecía y las pruebas testificales estaban desprestigiadas, debían ser valoradas por los jueces todas las informaciones que pudiesen conducir al esclarecimiento del caso instruido. Entre las pruebas documentales presentadas solían tener un peso decisivo autos notariales y escrituras privadas que arrojasen luz sobre la causa seguida; de este modo se aceptan como pruebas inculpatorias u agravantes desde títulos falsificados de cuadrilleros o comisarios²⁰⁸, a cartas dotalas fingidas²⁰⁹, pasando por autos judiciales manipulados²¹⁰, etc; mientras que resultan de cierta utilidad para la defensa la presentación de salvoconductos nominales de gitanos²¹¹,

recibos de limosnas piadosas de sufragios para difuntos²¹², traslados del puntual pago de las cargas fiscales de las que eran acreedores, licencias de tránsito, etc.

Las pruebas periciales más frecuentes suelen ser las armas; reses o cabalgaduras; corchos de colmenas; pertenencias personales como ropas, joyas, relojes, mantas, etc. Todas ellas son debidamente examinadas por armeros, ganaderos, herreros, apicultores, bataneros, comerciantes, dueños, sus parientes o sus convecinos, declarando bajo juramento sobre cualquier objeto en cuestión como evidencia de la causa. Siempre se prefirió tomar la opinión a varios peritos que informasen sobre los mismos, aunque la mayoría de las veces sólo compareció un único experto. Esporádicamente, durante algunos años del Setecientos, para solventar pérdidas o cambios interesados, los escribanos instructores dibujaron al margen de los folios del expediente incoado determinadas pruebas periciales, casi siempre armas blancas²¹³.

La prueba testifical, sin duda alguna la principal y la mayoría de las ocasiones la única base sobre la cual enjuiciar a un determinado sospechoso, consistía en la declaración jurada ante notario y un representante de la justicia, fuese o no hermandina, de testigos presenciales e informantes considerados hábiles, es decir fidedignos en razón de su edad, condición y estado mental, examinados por separados. La práctica judicial se muestra poco severa sobre la aceptación indiscriminada de testimonios, y así en circunstancias extraordinarias eran tenidas en cuenta todo tipo de noticias aportadas por cualquier declarante que, aunque por sí solas no son tenidas por concluyentes, sí suelen engrosar los indicios condenatorios²¹⁴.

Simple sospechas o conjeturas no bastan para condenar a los reos. En 1618 se suspende el encausamiento abierto por querrela de un vecino de Moral de Calatrava -Ciudad Real- ante la inexistencia de pruebas fehacientes de la supuesta infracción que la había suscitado²¹⁵. Cuando en 1722 se dicta auto de prisión y embargo contra un gitano afincado en Villar del Río los testimonios en su contra resultaban insuficientes para sostener el proceso: un vecino aseguraba haber oído en cierta ocasión que había quebrantado las reales pragmáticas, mientras que una paisana sospecha de él debido a la mala fama de los de su raza; como quiera que su procurador presentase tres testigos acreditando su calidad de castellano viejo y diese pruebas de su conducta arreglada, los alcaldes se limitaron a subastar los pollinos incautados para asegurarse el pago de las costas procesales²¹⁶.

Los descargos presentados por los encartados suelen reducirse a su negativa a ultranza de los cargos presentados por la acusación, aduciendo un sinfín de eximentes y coartadas para alejar de ellos cualquier sombra de culpa. En caso de que los detenidos fuesen gitanos o individuos de color, su procurador defensor hará lo imposible por argüir la buena reputación que goza su parte en sus lugares de vecindad, el hallarse bautizados y al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, no admitiendo en ningún momento su condición de gitanos, esclavos o moriscos para evitar la aplicación de las pragmáticas que regulan su comportamiento así como la indisposición de los jueces hacia estas minorías étnicas, auténticos chivos expiatorios del ordenamiento establecido monopolizado por los autodenominados castellanos viejos.

Algunos de los subterfugios empleados para excusarse de tal pesadumbre son realmente ingeniosas: el mulato Juan Ledesma, bracero

menor de edad, se declara "hijo de padre y madre morenos y la dicha su madre hera libre y su padre esclavo de Pedro de Sant Martin vecino de Ubeda", admitiendo como único cargo el haber sido apresado en dicha villa por un pendencia de juego motivada por no querer responder el perdedor con la ropa jugada a la taba²¹⁷; el joven gitano Diego de Soto, herrero sevillano, dice ser hijo de gitana y payo para evitar su sujeción a la pragmática sobre gitanos que hubiese pesado sobre él por haber ejecutado un trueque de cabalgadura;²¹⁸ Juan Sebastián de Mora, curador de tres gitanos prendidos en Membrija, imputa a la ignorancia de los campesinos el atribuirse como lengua jerigonza el valenciano hablado por uno de sus defendidos²¹⁹; una línea argumental más coherente siguió el letrado de otros miembros de la minoría gitana que fundamenta su defensa invocando el decreto que equiparaba legalmente a cristianos viejos y nuevos²²⁰; e incluso hay quienes sostienen numantivamente su calidad de cristianos antiguos pese a no constar empadronados como tales en sus respectivos pueblos.

Los atenuantes aducidos tampoco carecen de imaginación, dando algunos buena muestra de los razones que ponen fuera de la ley a amplias capas de los estratos estamentales inferiores frente a las arbitrariedades de los poderosos locales: criados que hurtan lo confiado por sus amos al excusarse éstos de retribuir sus servicios, infringiéndoles malos tratos²²¹; cazadores, carboneros, alimañeros y pastores que huyen de la justicia al presumirse su implicación en cuantos incendios y talas de montes acaecen²²²; forasteros enrolados en las levatas forzosa y que huyen de la milicia²²³; sujetos extorsionados por hacendados y autoridades locales, etc. La práctica demuestra que los únicos eximentes que parecen prosperar son los derivados de la minoridad de los encartados, y su enajenación mental,

permanente o transitoria -es decir por locura, enfermedad mental o embriaguez-.

Aunque lo acostumbrado es que los menores de quince años son eximidos de toda responsabilidad penal, siendo la práctica usual el que aunque fuesen arrestados junto al resto de sus acompañantes fuesen puestos en libertad, no llegando a declarar ni tan siquiera en la mayoría de las ocasiones, al ser considerados testigos inhábiles. Así, en 1705 se plantea la duda si debía procederse contra un gitano de trece años -acreditada por su fe bautismal-, dictaminándose en el Supremo Consejo su excarcelación sin cargos²²⁴.

Si bien es relativamente frecuente que la defensa exculpase a su parte alegando su privación de juicio por los efectos del alcohol, no es menos reiterada la recusación de tan vano pretexto por la parte actora²²⁵; desde luego no contribuía a dar credibilidad a tales argumentos declaraciones como la del esclavo mulato prófugo Martín Gómez, quien asegura haber perpetrado varios hurtos de ropa y caballerías en el transcurso de una borrachera que le duró durante días, aduciendo que cuando recobró el sentido pretendió infructuosamente devolver a sus dueños lo robado²²⁶. Otro carácter tuvo el proceso suscitado en 1606 contra un hidalgo toledano convicto y confeso de falsificar licencias de compra-venta de caballerías robadas; don Gaspar Román, vecino de Ocaña logra escapar de una pena aflictiva por la presentación de cinco testigos que refrendan su escaso entendimiento, siendo únicamente condenado a destierro de la citada villa y al pago de una elevada sanción pecuaria²²⁷.

Por lo que respecta a los agravantes más reiterados en la casuística de este tribunal manchego suelen tratarse de reincidencia,

el dolo, la nocturnidad, la alevosía, los daños a personas o bienes aforados, la condición marginal del encartado, los medios empleados, los móviles perseguidos, la mala fama pública del sospechoso, etc. Cuando en 1594 el paje Hernando de Montalvo hurtó al escribano hermandino Francisco de Nureña doscientos ducados de un arca de su casa, éste su amo esgrime que, al gozar el infractor de su confianza y ser tratado como un ahijado, merecía mayor pena de la ordinaria, y sin duda su condena a galeras demuestra el eco de su petición²²⁸. Más lacerante, sin duda, resulta ser la noticia de que un tal Francisco Bonilla, en 1724, había asesinado a un sujeto para robarle, a sabiendas de que no llevaba más que tres reales en ese instante, y que por plantearse competencia con el alcalde mayor de Uguíjar -Alpujarras- quedase impune el delito²²⁹.

En comparación con tales casos nos parece controvertido el que fuese aceptado como agravantes la mala fama o descrédito público del encausado, pero tales consideraciones subjetivas parecen pesar ostensiblemente en aquellos casos donde los indicios aportados eran insuficientes para inclinar la balanza de la justicia en uno u otro sentido, prejuzgándose desfavorablemente a jugadores, sujetos frequentadores de malas compañías o cuyas ocupaciones un tanto ambiguas no justificasen su tren de vida, algunas de cuyas circunstancias, en mayor o menor medida, coinciden en determinados casos²³⁰.

Antonio Ruiz, "Carabinas", avecindado en Tobarra, individuo que la justicia local ya se consideraba en 1702 potencialmente peligroso pues

"...no tiene asistencia fixa en lugar ni parte alguna, y que por no tener hazienda ni querer servir ni aplicarse a oficio alguno anda ocioso bagando y que su modo de vivir y sustentarse es sospechoso por sus malas inclinaciones y no querer trabajar por

cuia causa es tenido comunmente por ombre bagamundo y de malvivir y en especial tiene por costumbre el andar con su cavallo de ato en ato de pastores estafandolos la comida y en otras cosas asi en la jurisdiccion desta villa como fuera de ella causando mucha nota y escandalo a los vecinos y forasteros."²³¹

Un mes después de redactar este informe se fugó junto a otro reo de la cárcel pública, perforando la pared de su mazmorra. Proscrito, convierte la Sierra de Alcaraz como centro de sus correrías; a principios de 1704 participa en una evasión masiva de la galera real de Murcia, huyendo al sagrado de la catedral junto a buen número de reos gitanos y berberiscos; una semana más tarde protagonizaba nuevos robos a pastores en las proximidades de Chinchilla. Entre 1704-1708 perdemos la pista de sus andanzas, aunque por las declaraciones vertidas en su contra sabemos que atemorizaba con sus tropelías todo el reino de Murcia, hasta ser capturado por un dependiente de la entidad manchega en Alcaudete, pagando dos años después sus excesos con el trabajo como forzado en los Reales Bajeles de Su Magestad²³².

Entre los últimos recursos de los que disponía el tribunal para obtener la precisa información para dirimir sobre un caso determinado se halla la rueda de presos. Convocados los testigos presenciales de un caso en Ciudad Real o en la cárcel prevista a tal efecto, costado su traslado por los caudales corporativos²³³, se sometían los sospechosos a un minucioso reconocimiento para su posible identificación como culpables. Tales ruedas de inculpados no suelen tener demasiada efectividad, al tener lugar tiempo después de producirse los hechos bien sea porque la suscitan los convocados aseguran no acordarse nítidamente de los implicados en la comisión del delito²³⁴, o por que, más frecuentemente, se sentían amedrentados ante la vista de los presuntos malhechores; en todo caso que de este acto no se derivaba ninguna prueba plena lo demuestra que por sí solo no

bastaba para inculpar al reo²³⁵, acumulándose entre los indicios acusatorios o exculpatorios según su resultado²³⁶.

Durante el Seiscientos, en el margen izquierdo de algunos pliegos de cargo y descargo, suelen consignarse notas por parte de los letrados, normalmente referencias textuales a disposiciones normativas legales, obras doctrinales de acreditados juriconsultos y todo un cúmulo de fundamentos legales y teóricos sobre los cuales se cimentaban sus escritos²³⁷.

En el supuesto de que se tengan indicios racionales de la implicación en un delito de sangre de un determinado reo y no se contase con las pruebas concluyentes para su castigo, como medida extrema se recurrió al tormento para arrancar la autoinculpación del sujeto sometido a tortura judicial o la confesión de sus cómplices. La escasa legislación relativa a la tortura era parcialmente solventada por la reiteración con que la doctrina se ocupó del tema, que en última instancia dejaba al arbitrio del juez la aplicación o no de tan severo procedimiento a tenor de los indicios a su disposición.

El trámite seguido por el Santo Instituto manchego para someter a un reo o testigo a tortura se halla perfectamente perfilado en su casuística forense. Alcalde y asesor, valorando los indicios constitutivos de una pretendida culpabilidad no plenamente comprobada como susceptibles de ser aclarados mediante el sometimiento a tormento, notifican al procurador defensor su intención de llevarla a cabo contra su parte. Normalmente dicho letrado, a petición del reo, expone ante la magistratura los descargos que creyese convenientes para exonerarse del auto de tortura, invocando que al haber sido sometidos con anterioridad a dicha resorte aflictivo ya habían purgado

sus supuestas faltas²³⁸, la inconsistencia de los indicios inculpatorios aportados por la acusación²³⁹, o la levedad de los delitos investigados²⁴⁰.

Si sus alegatos no hallaban el eco debido ante sus jueces, el único recurso legal que podía conjurar esta amenaza era hacer llegar ante las Real Chancillería de Granada al apelación formalizada de tal auto de tormento en el plazo de cinco días fijado legalmente²⁴¹. Dentro de la amplia discrecionalidad del Santo Tribunal es perceptible en el último tercio del siglo XVII tenemos noticias dispersas sobre irregularidades cometidas por los jueces hermandinos al someter a torturas a sus reos sin respetar los cauces legales establecidos, obviando el recurso de apelación o consulta de dicho auto a la corte de justicia superior correspondiente²⁴².

Refrendado el auto de tormento en Granada, la defensa solo le quedaría la recusación del asesor de la causa para intentar que con el nombramiento de un nuevo letrado que acompañase al alcalde instructor se quebrase el preceptivo entendimiento en la magistratura colegiada y se revocase el auto despachado²⁴³, o bien hacer lo propio con el escribano hermandino que llevaba el proceso para tratar de demorar este suplicio²⁴⁴.

Agotados los cauces legales, el reo debía resignarse a su suerte o intentar la fuga. Sus jueces fijaban el día, hora y lugar de la ejecución del auto a la vez que se redobla la vigilancia sobre el desgraciado²⁴⁵. Llegada la ocasión alcalde y asesor, auxiliados de notario, convocan al portero para que condujese a la sala alta al reo, permaneciendo cirujano, verdugo y capellán en un aposento contiguo por si fuese precisa su concurrencia. En el lugar donde se desarrolla el

acto, generalmente la sala capitular y siempre sin la presencia intimidatoria del potro ni del ejecutor, se notifica al sospechoso el auto de tormento y se le conmina a que confiese cuanto supiese al respecto de la causa criminal instruida; si éste se mostraba remiso, el escribano procedía a leer en voz alta el contenido del auto en unos términos poco tranquilizadores para el reo, recordando que "si padeciere alguna lesion de miembros o muerte sera de su cuenta, y no de la del juez que solo trata de averiguar la verdad"²⁴⁶. En caso de no surtir efecto esta impresionante puesta en escena, se le apercibía tres veces consecutivas, dando nueva lectura del auto. Si permanecía reacio a colaborar el reo, reafirmandose en sus testimonios anteriores, el portero le hacía pasar a la sala de torturas, donde se hallaba prevenido el verdugo junto al potro, disponiéndose a su derecha sobre un estrado una mesa cubierta de un paño de damasco verde sobre la que estaba colocado un crucifijo flanqueado por dos velas encendidas y el reloj que regularía la duración de la tortura.

Resultando infructuosas todas las conminaciones realizadas por los jueces solo cabría encomendarse a Dios y confiar en sus propias fuerzas. Lo que venía a continuación es de todos conocido: desnudado el reo de cintura arriba por el verdugo, entraban médico o cirujano para reconocer bajo declaración jurada que el infortunado podría soportar el suplicio, y dada su anuencia es asegurado con sogas al potro, siendo sometido a diferentes grados de tormento según la cadencia estipulada por la doctrina y confirmada por la práctica a tenor de la gravedad del caso investigado así como del aguante del atormentado, no excediéndose en ningún caso las tres veces consecutivas por sesión²⁴⁷. El reo debía ratificar su confesión veinticuatro horas después, sin ser sometido a ningún tipo de presión, por lo que no debía ser a la vista del potro ni ante sus verdugos para

considerarse válida su confesión; excepcionalmente se arbitraba un aplazamiento de dicho término par cumplimentar la necesaria ratificación, como aconteció a principios del Setecientos con el reo Miguel de Calatrava²⁴⁸.

Eventualmente puede surgir algún imponderable que demorase este acto procedimental. El verdugo Andrés de Alcalá durante la década de 1660 hubo de vérselas con un par de incidentes que ejemplifican bien a las claras la convicción de los reos en que su confesión inculpatória arrancada bajo tormento sellaría definitivamente su destino así como la cualificación profesional de este peculiar oficial hermandino. En abril de 1660, desestimado en Granada el recurso al auto de tortura dictado contra Juan Jiménez, acusado de homicidio y conducido el reo a la casa del hermano don Cristóbal Treviño Bermúdez, hubo de suspenderse su aplicación en uno de sus aposentos al entender el ejecutor que

"...el susodicho a tomado papel de estraza, opio, arfion (sic) que son preparativos para no sentir el tormento y que no teniendo olor preguntado en que lo conoce el dicho Andres de Alcala dijo en que -no- siente las ligaduras y esta sudando..."²⁴⁹

Al día siguiente se reitera el procedimiento antes descrito y esta vez, a la primera vuela de mancuerna, tras haber transcurrido cuarto de hora de tortura, había confesado crímenes y cómplices²⁵⁰. Siguiendo su estela, su compañero Cristóbal Muñoz testimonia sus culpas en el mismo lugar que el anterior, mientras que en la galera hermandina, simultáneamente, Enrique Fernández no tardaba más que unos ocho minutos en confesar de plano y aceptar cuantos cargos se le imputaron. Al día siguiente fueron ratificados los dos primeros en la casa de don Álvaro Muñoz y Figueroa -caballero del hábito de Santiago-, en un

sitio diferente en donde se aplicó la tortura, y el afligido en la cárcel hace lo propio en la sala de visita del Santo Instituto.

A comienzos de 1667 era sometido al suplicio del potro Joseph de Torres, hacendado encartado por la Hermandad Vieja que había depositado ante el mayordomo mil reales para hacer frente a su defensa y manutención, dinero que le libró de auto de tortura pero sí parece proporcionarle algún inhibitorio para combatir el dolor, prontamente detectado por el verdugo por otra parte²⁵¹, y que a la postre no impidió su autoinculpación ala primera ocasión. Catorce días después se ordenaba buscar al mesón donde se albergaba el asesor para ratificar su declaración, pero como el licenciado don Francisco Manuel de Griñones se había vuelto a Almodóvar del Campo, fue nombrado un sustituto entre los abogados de la capital manchega. Veinticuatro horas más tarde el reo, asistido de su curador, niega la validez de los cargos imputados, y al día siguiente se halla de nuevo ante el verdugo, confesando sus fechorías y ratificando lo obtenido durante su primer tormento; lograda la pena plena sería ejecutado sin aguardar consulta ni apelación alguna a otra instancia²⁵².

Por si fuese poco, la resistencia al suplicio de poco servía al reo si los magistrados estaban convencidos de su culpabilidad, como reiteradamente se puso de manifiesto²⁵³.

La salud quebrantada de los atormentados era confiada para su restablecimiento a los cuidados de un cirujano, pero sobre todo ejercía un papel de primer orden la mejora dietética y su reposo en un lugar más adecuado que los poyos de los lóbregos calabozos²⁵⁴. Raramente un reo sometido a tortura perecería ante el castigo infligido²⁵⁵.

Sólo sabemos de una mujer que fuese sometida a suplicio por los autoridades hermandinas durante los siglos XVII y XVIII, se trata de María Cerona, encubridora de las actividades delictivas de su esposo y de sus cómplices afincados en Santa Cruz de Mudela -Ciudad Real-, indiciados por el homicidio de un adolescente, arrojándolo a un pozo de Torrenueva, y a quienes se les achacan luego de diversas muertes perpetradas entre 1693-1694, sufriendo tormento el 3 de abril de 1693²⁵⁶.

El recurso a este resorte aflictivo decae en la práctica cotidiana de la Hermandad manchega con el cambio de centuria, y a partir de la década de 1720 no hallamos ningún caso concreto, solo referencias²⁵⁷, hasta que hacia 1762 un verdugo de la corporación manchega diese tortura a un presunto homicida entregado por la justicia ordinaria de Puertollano²⁵⁸.

7.3.2.c. LA SENTENCIA.

Cerrado el periodo probatorio, a la vista del desarrollo de las diligencias judiciales, el tribunal hermandino colegiadamente emitía su fallo sobre el pleito, pronunciándose sobre la absolución o condena del encartado.

El alcalde, o alcaldes, con el preceptivo acompañamiento de asesor letrado se hace leer por dicho juez o por algún escribano corporativo un breve relación del proceso, facilitado por la costumbre de poner anotaciones marginales y subrayar los párrafos más aclaratorios de los autos procesales, eludiendo la pesada labor de releer todas las diligencias instruidas.

Las sentencias suelen ser escuetas, conteniendo tres apartados formales: el encabezamiento, en el cual se exponía los términos del pleito pendiente ante la audiencia hermandina; la palabra "visto", que alude a la ponderación de lo representado por las partes litigantes; y el fallo conteniendo el veredicto. Normalmente se adjuntaba la denominada "cláusula de quebrantamiento" en la que se contenía un apena más severa en el supuesto de incumplimiento y no actuación de la sentencia por parte del reo. La justicia se administraba en nombre de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real, Toledo y Talavera, como recuerdo de la tradicional liga de las organizaciones apícolas manchegas.

La amplitud del margen decisorio de los jueces era ostensible, sentenciando con frecuencia en penas arbitrarias, por lo general

inferiores a lo dispuesto por la confusa normativa legal vigente. En todo caso el cuerpo del reo y su patrimonio son objeto de la dureza punitiva del Santo Instituto por el valor ejemplificador de la condena para el resto del cuerpo social, aunque a partir del Setecientos la pena adquirirá progresivamente un marcado sesgo correccionalista.

La doctrina estaba de acuerdo en considerar más útil a todos los efectos la brevedad en la substanciación de los procesos criminales, al no permitir los largos pleitos más que afligir a los reos, desesperar a los querellantes, y beneficiar a letrados y notarios, siendo proporcionalmente tanto más aleccionadora la sentencia cuanto con mayor prontitud y rectitud se administrase la justicia. Por ello los estatutos de la fraternidad ciudarrealena recomiendan en todo momento la inmediatez de los trámites judiciales, guardándose las debidas precauciones en los delitos más graves. El plazo empleado desde que se incoa la sumaria hasta que se dicta veredicto oscila notablemente según los casos, dependiendo no tanto del cumplimiento de los plazos legales previstos como la obstaculización o no de las diligencias procesales y de la complejidad intrínseca de determinados causas, a la que se solía añadir el problema estructural de las distancias entre la sede hermandina y el lugar o parajes donde se cometieron los maleficios por parte del justiciable. El tiempo medio empleado para substanciar delitos menores fluctúa entre la una a las seis semanas, mientras que en delitos de robo calificado o de delitos de sangre que comportasen penas más duras los trámites pueden dilatarse entre los tres y los seis meses, llegando excepcionalmente a demorarse alrededor de un año e incluso más.

Casi siempre, salvo las causas seguidas en rebeldía, los reos había permanecido en prisión preventiva en unas condiciones que no por ello

carecía de cierta voluntad aflictiva, lo que junto a la deshonra social y legal así como el menoscabo patrimonial de las incautaciones o de la defensa letrada dejaban en precario a individuos y familias que solían depender de su propio trabajo para el sustento propio y el de sus deudos. A pesar de lo expuesto, el confinamiento y la restricción de la libertad de movimientos no eran tenidos como una pena en sí misma por los hombres del Antiguo Régimen, sino como el medio más adecuado para garantizar que concurriría a juicio el sospechoso y que asumirían las obligaciones personales y pecuniarias subsidiarias²⁵⁹.

El tribunal de Hermandad tenía fama de implacable, y en efecto lo era comparativamente con el resto de las justicias de primera instancia del Reino, particularmente en la coerción de las pequeñas infracciones; esto puede deberse tal vez porque en los delitos de su competencia concurría el agravante de su comisión en despoblado o al actuar preferentemente contra las minorías étnicosociales y marginales sobre las que se extremaba la represión del sistema penal imperante. Un estudio pormenorizado de su práctica forense demuestra que en la inmensa mayoría de las causas los encartados raramente son absueltos sin cargos, aún sin llegar a probarse plenamente la certeza de sus culpas, soliendo en el mejor de los casos quedar sujetos al pago de las costas procesales devengadas, al considerarse las meras sospechas como indicios de culpa racional y por lo tanto constitutivas de un pecado o de una falta que habrían de ser purgadas.

La tipificación penal de la época distinguía entre las condenas privativas de derechos, las corporales y las económicas, coincidiendo a menudo estos supuestos coercitivos en los veredictos dictados por la magistratura especial manchega.

Entre las primeras destaca la del destierro o deportación impuesta a los reos por las autoridades hermandinas, generalmente en razón de delitos menores, abarcan un radio que oscila entre diez a treinta leguas de los lugares en donde habían perpetrado sus crímenes, su vecindad y de las sedes de los tribunales que habían intervenido en al substanciación de la causa, atendiendo a la gravedad del delito y la calidad del condenado²⁶⁰, por un periodo de tiempo que suele variar entre los dos a los veinte años, casi nunca de forma perpetua²⁶¹ y eventualmente dejando al arbitrio formal del delincuente su duración máxima²⁶². Esta pena, comparativamente moderada atendiendo a la casuística forense consultada, en realidad comportaba en el supuesto de su cumplimiento puntual un contratiempo evidente cuando involucraba al cabeza de familia de cuyo trabajo dependía la explotación agrícola de sus heredades, alcanzando cotas de auténtico dramatismo si el sujeto de dicho castigo era una persona anciana o enferma, inhábiles para trabajar y que condenada al ostracismo la lanzaba indirectamente a la mendicidad, al alejarlo de sus deudos y parientes²⁶³.

La comunidad gitana, sujeta por la legislación castellana a un sistema de licencias que pretendía limitar y controlar su libertad de movimientos por el Reino con la intención de despojarlo de su connotación itinerante así como para vigilar unas actividades tradicionales que eran consideradas ilícitas, asocian a los ministros hermandinos con el elemento represor por excelencia que los supeditaban a las disposiciones emanadas de al Corte para regular cuando no reprimir su conducta habitual. En efecto, no hay veredicto dictado por la Santa Hermandad de Ciudad Real que, dirigido a castellanos nuevos, no incluya un apercibimiento formal para que dejen de practicar sus comportamientos atávicos, como errar acuartillados,

efectuar trueques y tratos con cabalgaduras, mantener sus tradiciones culturales o étnico-lingüísticas, etc, impeliéndoles a arreglarse a lo dispuesto por las reales pragmáticas²⁶⁴.

Dejando a un lado el enjuiciamiento de sus propios dependientes -que solía saldarse con la recogida de sus títulos, la separación perpetua de sus oficio y de una sanción pecuniaria por las irregularidades llevadas a cabo amparadas por su nombramiento-, la inhabilitación profesional es un procedimiento penal raramente empleado por los jueces manchegos. Las razones que podrían explicar esta actitud hay que buscarlas no tanto en el escaso número de profesionales de servicio enjuiciados por el Santo Instituto como por el prácticamente nulo margen actuacional que la magistratura hermandina posee para apartar del cargo a empleados concejiles²⁶⁵ u otros dependientes de instituciones públicas; así, en la eventualidad de que los alcaides incumpliesen su cometido o los alcaldes ordinarios agravasen a sus ministros, debían dejar el caso en manos de los superiores magistrados locales, cuando no ponerlo en conocimiento de la Real Chancillería correspondiente o del Supremo Consejo de Castilla. Un grupo particularmente afectado por las diligencias hermandinas fueron los guardas de campo particulares o concejiles²⁶⁶, quiénes, aunque no serán formalmente apartados del cargo, serán encausados con todas las consecuencias penales por parte de la entidad ciudarrealena²⁶⁷, quedando a menudo este medio de vida vedado a sus antiguos titulares indiciados al cuestionarse su honorabilidad e integridad profesional.

Cinco fueron los destinos previstos por el utilitarismo penal de la época, quedando los convictos sujetos al trabajo forzado o al servicio

al Rey: las galeras, las Reales Minas de azogue de Almadén, los presidios africanos, los arsenales de la Marina y el ejército.

El trabajo forzado como remero en las galeras reales²⁶⁸ era, sin duda, unas de las condenas más severas a las podía someterse un reo en la España del Antiguo Régimen. La legislación preveía que solo ingresasen en galeras por cuestiones penales homicidas, desertores, prófugos, gitanos, ladrones peligrosos o sacrílegos, etc, aunque en la práctica únicamente los pirómanos parecen quedar excluidos por el peligro que acarrearía su conducta punible²⁶⁹, con la sola condición de ser varones aptos para soportar tales penalidades²⁷⁰. En las galeras solían purgar su supuesta falta los castellanos nuevos, por el mero hecho de su marginación socioeconómica, enjuiciados por el Santo Tribunal manchego partiendo de la convicción generalizada de que "a este jenero de jente nunca les falta delitos, ademas de ser jitanos que les basta para echarlos a galeras en donde tiene el Rey falta de galeotes"²⁷¹. Dichas condenas oscilaban entre los cuatro a los diez años, al estimarse en unos tres años el periodo aproximado en el que un galeote maximizaba sus rendimientos como remero y ser la década el periodo máximo en que podían permanecer en calidad de penado en dicho destino -aunque en la práctica se solía demorar su puesta en libertad ante la acumulación de nuevos cargos, los intentos de evasión, los motines contra las arbitrariedades de comitres y guardianes, o las necesidades imperiosas de la Monarquía-.

Las condiciones de vida de los galeotes eran severísimas, particularmente cuando se hallaban en alta mar, sujetos mediante cadenas por parejas al remo para bogar cuando se estimase preciso, sin abandonar el banco durante la mayor parte del día y hacinados en el interior de la nave en grupos de unos doscientos remeros, conviviendo

penados, esclavos y reos redimidos obligados a continuar con tan aflictivo como improbo trabajo aunque aumentada su dieta, retribuidos con un magro sueldo y mejorado su trato, cooperando eventualmente en las labores de reparación de los bajeles u otros trabajos urgentes en arsenales que forzaban el amarre de esta flota mediterránea en cosntante alerta por las frecuentes incursiones de los piratas argelinos o turcos en las costas españolas y la obstaculización las comunicaciones con las posesiones norteafricanas e italianas.

Las condenas a galeras mantienen un ritmo constante entre 1590-1725, decayendo notablemente a partir de entonces a tenor de las directrices de la Corte, condicionadas por su política exterior y los imperativos de la Hacienda Real. Extinguidas las galeras entre 1748-1784, estos navíos de la flota mediterránea, esporádicamente empleados en misiones de escolta de cabotaje a los navíos de Indias, desaparecerá definitivamente en 1803, aunque a estas alturas de la Edad Moderna el tribunal ciudarrealeno hacía años que no recurría a dicha pena para con sus reos²⁷².

Debido a su proximidad geográfica y la constante demanda de forzados para las labores interiores de las minas de mercurio de mercurio de Almadén, sus obras extractivas serán llevadas a cabo mayoritariamente por esclavos y delincuentes comunes, algunos de los cuales procedieron del Santo Tribunal manchego²⁷³. A pesar de las consideraciones sesgadas de algunos autores coetáneos²⁷⁴, resultaba patente que la extrema dureza en que desarrollaban su faena determinaba el que los naturales de la comarca evitasen ser empleadas en ellas, particularmente en los trabajos en las galerías, gozando el escaso personal asalariado existente de amplios privilegios jurídico-

fiscales para estimular su permanencia en dicha explotación minera²⁷⁵, vital para la Monarquía Católica.

Puesto que la condena al servicio forzado a minas era posterior a la definición de la pena de galeras, a la que estaba legalmente equiparada, se produjo un fenómeno de generalización formal del veredicto condenatorio bajo la fórmula inculpatoria de galeras a cumplir por un tiempo determinado en las Reales minas de Azogue de Almadén al remo y sin sueldo²⁷⁶.

En la admisión para los trabajos en el yacimiento de mercurio era trámite ineludible el reconocimiento facultativo por parte del cirujano adscrito a la superintendencia de minas, dependiendo su destino último en las obras exteriores o en el interior de la mina de sus condiciones físicas²⁷⁷ y de la perentoriedad impuesta por las necesidades de la Corona. En la práctica, el impedimento total o parcial de los reos se traducían en una anulación o suspensión implícita de la condena, siendo devuelto a la jurisdicción que dictó la sentencia²⁷⁸; para evitar este supuesto de la incapacidad física del rematado a minas, acreditada por cirujanos locales, ocasionalmente se atrasaba la conducción del penado hasta su recuperación²⁷⁹ y tras su convalecencia era remitido por tránsitos, demora que ponía terminar con su excarcelación ante la conmiseración de sus carceleros o con la conmutación de la pena ordinaria por otra menor -por lo común la de destierro-²⁸⁰.

Los presidios, plazas fuertes castellanas en la costa norteafricana que conformaban el dispositivo estratégico avanzado de seguridad frente a las incursiones piráticas, fueron lugares de confinamiento de determinados reos hermandinos sobre todo a partir de las primeras

décadas del Siglo de las Luces²⁸¹. Los jueces manchegos suelen determinar con toda precisión la duración de la condena, dejando al arbitrio de los tribunales territoriales superiores el lugar en donde purgarían sus crímenes, generalmente en Orán, Ceuta, Melilla, Tetuán o Larache, empleándose como gastadores en las permanentes obras de fortificación de estos enclaves militares. Como en el caso de los rematados a galeras o minas, los magistrados hermandinos podían diferir su envío a dicho destinos hasta su completo restablecimiento físico para evitar el perjuicio ocasionado por su devolución, dilación que ocasionalmente derivó en su puesta en libertad, aunque sin el conocimiento previo de las autoridades ciudarrealeñas²⁸². Irregularmente, propiciada por la reiterada aceptación de las causas de inmunidad local por parte de los jueces eclesiásticos, las cortes de justicia supremas de Castilla respondieron con arbitrios tan peregrinos como el traslado de los asilados a las capillas u hospitales de dichos presidios²⁸³.

Dentro de esta tendencia penalista ilustrada que pretendía maximalizar el rendimiento de los trabajos forzados se imbrica el fuerte aumento de los reos de Hermandad que terminan purgando sus culpas en las más duras faenas de los arsenales. La vida en los presidios utilitarios y dársenas de La Graña -Ferrol-, La Carraca -Cádiz- o el de galeras de Cartagena de los penados se caracterizaba por la extrema dureza de las ocupaciones dejadas a los delincuentes como el manejo de las bombas de achique para desalojar el agua acumulada en los diques -por el paso de los navíos de guerra, las inundaciones o las filtraciones del terreno- y el acostumbrado desguace de los barcos tras las campañas navales. A ella habría que añadir la rigurosa vigilancia a la que se ven sometidos; el hacinamiento de asalariados, esclavos y penados; la falta total de

higiene y otros aspectos que agravan las incomodidades de todo tipo que hacían insoportable el confinamiento. El número de los abocados a estas labores aumenta ostensiblemente a partir de mediados del siglo XVIII por la extinción temporal de las galeras, pese a la ralentización del ambicioso proyecto de rearme naval previsto, motivando un claro desajuste, por exceso, de los reos rematados a arsenales con las necesidades reales de la Monarquía, por lo que incluso los intendentes hubieron de abogar por su desvío a otros destinos, temiendo la aparición de motines y conscientes de su excesivo número.

Por último, el legislador había previsto que fuesen destinados al servicio militar los reos por delitos menores que reuniesen unas mínimas aptitudes físicas, particularmente desde que la sangría demográfica castellana hizo disminuir peligrosamente la afluencia de voluntarios y mercenarios a las filas de los famosos tercios²⁸⁴. Si bien los tribunales ordinarios inferiores se muestran receptivos a esta imperiosa necesidad de la Monarquía, no ocurre otro tanto con los magistrados del Santo Tribunal manchego, sumamente reacios a obligar al ingreso en la milicia a delincuentes, gitanos y vagabundos a menudo indiciados por crímenes de lesa magestad o cuya extracción étnica les hacía inhábiles para dicho destino²⁸⁵. Hasta bien entrado el Setecientos no hallamos ningún testimonio de reos de la Hermandad Vieja de Ciudad Real rematados al ejército, y siempre que se arbitró esta medida disciplinaria parece subyacer una voluntad de apartar de tan loable servicio a convictos por delitos graves o que no reuniesen las cualidades requeridas²⁸⁶, enviándose únicamente a filas a ladronzuelos, vagabundos, o quebrantadores de posadas con unas edades comprendidas entre los veinte a los treinta años, aproximadamente²⁸⁷.

Aunque la condición femenina legalmente no era considerada un eximente procesal, ni se creyese que la responsabilidad de las mujeres fuese inferior a la de los varones -antes al contrario la mayoría, a efectos penales, se establecía en una edad más temprana que la de los hombres-, en la práctica, y ante la imposibilidad de destinarlas a trabajos forzados o al servicio militar, la inmensa mayoría de las mujeres que llegaron a ser procesadas por los alcaldes hermadinos -generalmente por encubrir las faltas de sus cónyuges o parientes, participar de sus delitos o por amancebamiento-, serán en su mayoría absueltas o condenadas a destierro, apercibiéndoles a que no reincidiesen en las infracciones por las cuales eran encartadas²⁸⁸, o enviándolas a una reclusión temporal, siempre fuera de Ciudad Real²⁸⁹. Por no contar la localidad con galera donde recoger a las malentretenidas y debido a lo oneroso de dicha política penitenciaria, quedando el castigo desprovisto de la ejemplaridad popular que solía ser inherente a tales condenas.

Habiéndose superado los tiempos en que se contemplaba en las leyes de hermandad una tasación que evaluaba la mutilación de miembros de acuerdo a los crímenes perpetrados, durante los siglos XVII y XVIII tales prácticas se consideraban trasnochadas por la doctrina²⁹⁰, y en desuso por parte de los tribunales castellanos de la época. En la casuística forense de la corte de justicia manchega únicamente conocemos el caso de una cláusula de quebrantamiento que preveía la eventualidad de aplicar dicho correctivo, concretamente la amputación del dedo pulgar de la mano derecha a un hidalgo toledano involucrado en un delito de falsificación documental, y sujeto al pago de una fuerte sanción pecuniaria a principios del Seiscientos²⁹¹.

Otro carácter, aunque igualmente impregnada de la voluntad purgativa penal coetánea, tuvieron las penas de azotes y vergüenza pública. Se trataba de sanciones aflictivas corporales o morales que poseían la doble vertiente de aleccionar a los reos contumaces y dar ejemplo al público concurrente.

La vergüenza pública consistía en que el convicto, a veces con algún objeto al cuello que recordase su culpa -generalmente una sogá o armas blancas-, era paseado a lomos de un asno por las calles principales de la ciudad, custodiado por algunos ministros hermandinos y con el pregonero publicando las culpas imputadas al reo y la sentencia dictada por parte del Triple Instituto apícola en los trechos fijados por la tradición donde mayor afluencia de público solía haber.

Por lo que respecta a la pena de azotes, aplicada reiteradamente como pena subsidiaria o por protagonizar algún intento de fuga, se rodeaba de un aparato más solemne y elaborado. Aprobada la pena corporal aflictiva por parte de la Real Chancillería granadina, los jueces instructores señalaban el día y hora en que se procedería a su ejecución, notificándose al corregidor por si fuese preciso su auxilio o el de sus dependientes. El cuadrillero mayor, portando vara alta o bastón como insignia de justicia²⁹², acompañado por los cuadrilleros que estimase convenientes y por los notarios hermandinos marchaban a caballo en la comitiva encabezada por el regidor ciudadano, o quien se dictaminase en su defecto -a veces el propio alcaide o el mayordomo- como portaestandarte²⁹³. El verdugo conducía al reo escoltado por dos filas de cuadrilleros armados y semidesnudo de medio cuerpo arriba. A la puerta de la cárcel y en la plaza pública eran pregonadas sus culpas y la condena emitida por el Santo Tribunal, proporcionándose al

reo los cien o doscientos azotes de manera cadenciosa a lo largo de todo el trayecto, salvo a su paso por la puerta principal de la iglesia de San Pedro o puerta del Perdón. Vuelto a la cárcel, era marcado con un hierro al rojo vivo en la parte superior de la espalda, estigma indeleble de su vileza²⁹⁴.

Este suplicio parece particularmente temido por los reos debido a su inmediatez, expeditividad y lo imborrable de la afrenta correctiva que a la sazón comportaba infamia perpetua²⁹⁵, e inhabilitación para ejercer determinados empleos públicos, por lo que algunos condenados negociarían con el tribunal la suspensión de su intención de recurrir la pena principal si era revocada la ejecución de esta condena accesoria²⁹⁶.

Únicamente la condena de argolla, reprensión pública del reo al tenerlo inmovilizado bajo custodia en el lugar acostumbrado para escarnio de sus paisanos, carece de esta connotación corporal aflictiva. Atendiendo a su escasa carga coercitiva, las molestias y gastos devengados por su traslado a los lugares de su vecindad o donde hubiesen perpetrado sus culpas para que adquiriese todo su poder aleccionador y que el lugar de ejecuciones ciudarrealeño de la Hermandad, al hallarse en las afueras del casco urbano, ocasionaría mayores trastornos que repercusión popular su consumación, probablemente determinaría el que raramente se prescribiese esta condena por parte de la audiencia apícola manchega.

Sin duda el momento álgido en el que adquiriría toda su extensión punitiva la justicia era con motivo de la ejecución de la pena capital. Precediendo el debido refrendo por parte de la Real Chancillería de Granada, con la debida antelación los alcaldes

convocaban cabildo para notificar el próximo ajusticiamiento en Peralvillo. Tres días antes del cumplimiento de la sentencia al alcalde y escribano instructor en la sala capitular comunicaban el veredicto inapelable al reo, aguardando unos religiosos y personas pías en la antesala para, luego en la capilla, proporcionarle auxilio espiritual al desgraciado y reconfortar su alma. Simultáneamente el alcalde a la vez que recomienda al alcaide que sea caritativo con el condenado le advierte sobre la conveniencia de que refuerce su vigilancia y prisiones para evitar eventualidades que trucasen su destino -suicidio o fugas-. Asimismo, con tiempo suficiente, eran informados el corregidor y al gobernador de Miguelturra, el primero para que celase por la integridad de la comitiva a su paso por la ciudad y su término, y al segundo para que concurriese al acto por si ofreciese algún contratiempo durante el mismo; por similar motivo son informados los mayordomos de las cofradías, principalmente el de la congregación de la Caridad para que sus hermanos más destacados asistiesen con la insignia del Cristo Crucificado y pidiesen a Dios por el alma del reo.

Llegado el momento fijado, siempre que era posible pospuesto para la mañana de un día señalado²⁹⁷, y con la concurrencia de abundante público por lo inusual del acontecimiento, parte la comitiva de la prisión encabezada por el mayordomo o hermano mayor de la cofradía asistente, el cuadrillero mayor a la jineta portando el estandarte real, ocho lanceros a caballo con el uniforme verde hermandino y otros cuatro ballesteros a pie de tal guisa²⁹⁸, escoltando al reo montado en una caballería de albarda, atado de pies y manos y cubierto con una gorra o capuz verde, conducido por el verdugo uniformado para la ocasión, y flanqueado por los religiosos que le conminaba a bien morir; a continuación iba el alguacil mayor junto con el escribano que

llevaba la causa, cerrando el cortejo dos cuadrilleros a caballo. Partiendo de la cárcel, se pregonan las culpas del malhechor y su sentencia en nombre del Rey y del Triple Instituto apícola; dicho acompañamiento marchaba por la calle Calatrava hasta la puerta del mismo nombre para dirigirse a Peralvillo.

Poco antes, igualmente en dos filas, habían partido a caballo ambos alcaldes, escribano y algunos cuadrilleros, pasando por la plaza pública y la calle Toledo hasta el lugar de ejecución. De madrugada se había levantado un cadalso en el altozano; compuesto por un palo recto, donde hasta el Seiscientos sería dado garrote al reo y luego asaeteado por los siete dardos acostumbrados, para a partir de las últimas décadas de dicho siglo ser ahorcados²⁹⁹. En el montículo frontero se montaba la tienda ante la cual se ubicaba el estrado que ocupaban los alcaldes, con sus varas altas, y el asesor. Inmediatos a ellos se colocaba una mesa cubierta por un paño verde sobre el cual se encontraba un crucifijo y la escribanía³⁰⁰.

Confluyendo hermanos, justicias y paisanos o militares, es leído el fallo ante la concurrencia, y finalizado el último pregón, el verdugo procede a la ejecución del convicto a instancia de los jueces. Fenecido el acto, alguacil y cuadrillero mayor, acompañados de escribano, dan cuenta solemne a sus superiores del cumplimiento de la sentencia. A continuación se pronuncia el bando prohibiendo la retirada del cadáver hasta su consumición, sin licencia expresa del Santo Tribunal, so pena de muerte y de confiscación de sus bienes; un ejemplar de dicho edicto se fija al palo que sirve de picota. Los alcaldes agradecen a la presencia a los asistentes; gratifican a las autoridades y soldados concurrentes; pagan sus jornales a aguadores y peones; y repartes limosnas entre los pobres de solemnidad que habían

ido como espectadores³⁰¹. Por último vuelven a la ciudad por el mismo orden que habían ido y se informaba al alto tribunal que había refrendado la causa del cumplimiento de la pena capital.

Excepcionalmente, atendiendo a la gravedad de los delitos y a la calidad estamental de los convictos, se contemplaba la eventualidad de que fuese descuartizado. En tal caso el verdugo procedía a ello a primera hora de la tarde; si no se expresaba el lugar de su exposición pública, el ejecutor los situaría preceptivamente a unos doscientos pasos de la muralla Ciudad Real, en los caminos de Toledo, Madrid, Sevilla y Granada, para terror de forajidos y ejemplo al vecindario y caminantes, aunque lo acostumbrado es que sus manos derechas se expusiesen en el lugar donde hubiesen perpetrados sus maleficios más atroces. Este proceder tienen su reflejo en la literatura de la época, donde se alude a la usanza de exponer los cuerpos de los ajusticiados o sus miembros por parte de los colmeneros manchegos³⁰², siendo una práctica extendida por todos los tribunales de justicia laicos del Reino.

La pena de muerte, condena usual en el periodo bajomedieval y que paulatinamente decaería a lo largo de la Edad Moderna en la corte de justicia hermandina, se hace patente en tanto que en el Seiscientos aún se acude a ella con cierta asiduidad para castigar a los más peligrosos homicidas y bandoleros³⁰³, mientras que durante la siguiente centuria son raros tales actos sumarísimos. En efecto, a lo largo de todo el Setecientos hay escasísimas noticias entre la documentación consultada³⁰⁴; por parte de la fraternidad Vieja de Ciudad Real solamente tenemos constancia de la doble ejecución de los malhechores Juan de Mora García, "Conejo" y Juan Rodríguez Ruano "Conejo", quienes tras frustrados intentos de fuga de la galera

hermandina, son ajusticiados en Peralvillo y sus manos derechas expuestas en las villas de Montoro y Villacarrillo -donde habían perpetrado sus crímenes más graves, colocando sus restos desmembrados extramuros de Ciudad Real³⁰⁵.

A pesar de la espectacularidad de estas penas, la magistratura hermandina impuso mayoritariamente sanciones pecuniarias a sus encartados, ya fuese la confiscación de bienes aplicados al Santo Tribunal y al fisco real³⁰⁶, las penas de Cámara arbitradas³⁰⁷, la imposición de multas³⁰⁸, las exacciones con destinos caritativos o piadosos³⁰⁹, así como la satisfacción de los gastos judiciales y costas procesales³¹⁰ serán reclamados por la magistratura manchega durante la Edad Moderna con la doble finalidad punitiva y fiscalizadora que caracterizada a la justicia coetánea y que hacen exclamar a algunos juriconsultos que en Castilla los delitos se castigaban antes sobre el patrimonio de los infractores que sobre sus cuerpos y conciencias.

Confiscaciones de bienes y penas de Cámara tendrán un mayor peso durante el Quinientos y primeras décadas del Seiscientos, pero tras el desvío de estas condenaciones al fisco real a partir de 1642 -coincidiendo con la perentoria necesidad de dinero por parte de la Corona-, se invertirá esta tendencia y serán las sanciones a sus dependientes junto a la reclamación de las costas judiciales las que adquirirán un mayor protagonismo. Por su parte, las penas destinadas a fines benéfico-religiosos ya durante el siglo XVIII quedarán como un recuerdo³¹¹. Durante toda su vigencia, la Hermandad Vieja restituirá a sus legítimos dueños los bienes receptados o su valor aproximado estimado mediante un peritaje de los daños ocasionados³¹².

Prácticamente siempre que ello era posible, y habiendo caudales o hacienda con la que resarcirse de los desembolsos ocasionados por la substanciación de la causa, los jueces exigirán que se reembolsase a la Hermandad el monto total de los gastos judiciales y salarios devengados durante el pleito tasados en dicha instancia de justicia. A menudo dicha intención se veía obstaculizado por que muchos de los enjuiciados no disponían de recursos o cuya responsabilidad pecuniaria recaía solidariamente en terceros -como son los casos de los esclavos cuyos gastos procesales debían ser asumidos por sus amos³¹³ o los concejos que debían hacer frente a las multas impuestas a sus capitulares u oficiales³¹⁴-. Tal es el celo empleado en resarcirse de las costas por parte de alcaldes y cuadrilleros que no dudarán en secuestrar el patrimonio de los sospechosos sin tener constancia del supuesto acto delictivo³¹⁵, pidiendo satisfacción económica incluso a los absueltos sin cargos, e incluso condenándolas a ellas aún sin substanciarse el proceso por no hallarse pruebas ni indicios consistentes susceptibles de ser punidos³¹⁶.

En todo caso desde la Corte se dictaminó ya en el Quinientos que quienes no pudiesen satisfacer las costas procesales no fuesen retenidos en prisión ni el alcaide se demorase en su excarcelación, al no tener ni el dinero ni el deber de ser agraviados por carcelajes ni otros gravámenes ilegales³¹⁷, disposición que pese a puntuales quebrantamientos parece que sería respetada por el Santo Instituto³¹⁸.

El veredicto pronunciado en primera instancia por los jueces inferiores, como eran los de la Santa Hermandad, rubricados de escribano y por los tres testigos prescritos por ley, siempre que comportase penas que irrogasen infamia o "corporis afflictiva", tenían carácter interlocutorio, es decir, habían de ser consultadas ante el

tribunal superior correspondiente. En el caso de la Hermandad de Ciudad Real esta audiencia suprema resultó ser la Sala del Crimen de la Real Chancillería de Granada, aunque ocasionalmente fuesen elevados los autos originales a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, e incluso a la Primera Sala de Gobierno del Consejo de Castilla³¹⁹.

Normalmente se remitía por correo ordinario el expediente original lacrado con los autos instruidos por el Santo Tribunal y los acumulados por el resto de las justicias, aunque en determinadas circunstancias se confíe a un propio para que personalmente hiciese llegar la causa ante la citada audiencia andaluza. Estos trámites, aunque suponían no menos de un mes de demora en la conclusión de la causa, era un garantía para corregir posibles irregularidades y arbitrariedades por parte de los jueces locales, a menudo legos.

Por lo general confirmaban punto por punto los veredictos emitidos desde Ciudad Real, aunque a menudo, y sobre todo a partir del Setecientos, moderaban e incluso revocaban las penas infamantes y aflictivas en favor de una penalidad utilitaria que parece imperar dadas las inexcusables necesidades de una potencia política en retroceso. La precisión del trabajo forzado permitió que algunos reos sentenciados en primera instancia con la pena capital escaparan a su suerte purgando sus culpas en galeras o minas, y muchos suplicios públicos serían incumplidos ya que a nadie que no fuesen los propios magistrados instructores -únicamente por su contenido aleccionador- interesaba la proliferación de reos con secuelas físicas que les inhabilitasen, temporal o totalmente, para su destino a las obras públicas y supusiesen una carga para la república. Siempre que la defensa declarase renunciar a la apelación, o que no se recurriese a

ningún resorte legal para eludirlo, el pronunciamiento definitivo era ejecutado a instancia de los jueces.

En el supuesto de deber de trasladarse los condenados a otros lugares para cumplir la pena principal, estaba establecido el sistema adecuado para ello. Algún oficial hermandino, acompañado de cuantos cuadrilleros o paisanos armados se estimase conveniente para custodiar a los reos, llevaban al desgraciado destinado a minas por tránsitos ante la justicia de Corral de Calatrava, quien a su vez los trasladaba hasta el lugar de la Zarzuela y de allí a Almadén; en cada parada se daba testimonio notarial de la entrega del condenado hasta su entrega a la Cárcel Real de Forzados, desde donde se remitía a Ciudad Real fe de recepción del reo, y de la capital manchega se informaba a Granada.

En estos traslados se extreman las precauciones para que el reo no huyese a sagrado, conduciéndose cargado de prisiones a lomos de un pollino mientras sus guardas montan caballos. Aunque en un principio se tuvo la precaución de no conducirse más que un único forzado en cada ocasión, pronto la imperativa necesidad de escatimar gastos y el ocasional hacinamiento de presos en la cárcel hermandina, motivarían la remisión conjunta de varios reos, con el consiguiente peligro de motines e inseguridad personal de sus guardianes.

Por lo que respecta a las conducciones por otros presidios durante el Seiscientos el procedimiento más empleado era remitir por tránsitos al rematado a Pozuelo de Calatrava, para desde allí marchar hasta la Caja de Toledo -centro penal receptor de su antiguo Reino y masivo distribuidor de galeotes o presidiarios mediante cadenas de presos-. Mediada la centuria el conde de Casarrubios, juez de galeotes, informó al corregidor de Ciudad Real que coordinase su acción con la de los

alcaldes de la Hermandad Vieja, remitiendo sus reos conjuntamente a Toledo para evitar mayores dispendios³²⁰. Tras la contienda sucesoria decayó paulatinamente esta práctica³²¹, y la Caja de Toledo sería suprimida, manteniéndose sin embargo las de Málaga y Cartagena como centros de acogida de sentenciados para servir en presidios norteafricanos y en arsenales de marina: en ambos casos el primer punto de tránsito era Corral de Calatrava, luego Almadén y de allí, por el procedimiento antes descrito, hasta su destino.

He aquí unos ejemplos. Cuando en 1716 se recibe notificación del Consejo de Castilla ordenando enviar al bandido Juan González Bazán a galeras, el teniente de alguacil mayor Juan de Rodas lo conducirá hasta Corral auxiliado por tres cuadrilleros a caballo y uno a pie para llegar el asno sobre el que montaba el galeote, asegurado con un par de grillos y sujeto a dicha cabalgadura menor mediante una soga alrededor de la cintura afianzada bajo la cincha del asno³²². Durante la década de 1720, ocasionalmente se arbitró el traslado de reos hermandinos por parte de sus dependientes, auspiciado por la multiplicación de sus comisarios por gran parte de la Monarquía Católica. Un abogado y ministro superior hermandino sevillano requirió a sus colegas comarcanos para que fuese auxiliado por dos ministros en la custodia de dos galeotes y un presidiario conducido a la Caja de Málaga, dudando si trasladarlos en una barcaza fluvial por el Guadalquivir o si hacerlo por tierra con al ayuda de los militares; para evitar recurrir al ejército, se optará por la primera opción, pero cual sería su sorpresa cuando al llegar a Cádiz su alcalde mayor obstaculizará la conducción hasta la capital malagueña; los comisarios notifican el incidente al gobernador militar gaditano, pero hace caso omiso de la petición de cárcel, pretextando lo inusual de su traslado en barco; ante tal cúmulo de dificultades deciden volver a Sevilla³²³,

lamentándose de la insolidaridad de las justicias hacia la jurisdicción hermandina³²⁴.

7.3.2.d. EL PROCEDIMIENTO EN REBELDÍA.

La prisión cautoria del encausado por cualquier instancia judicial castellana no era imprescindible para la substanciación del proceso criminal. Si el presunto delincuente no podía ser capturado o se había dado a la fuga antes o después de dictarse auto de prisión, la justicia iniciaba una serie de trámites perfectamente fijados encaminados a la entrega voluntaria del encartado, desarrollándose en caso contrario el proceso en rebeldía.

La práctica forense del Santo Tribunal en tales supuestos consistía en pregonar públicamente los tres edictos preceptivos con una cadencia aproximada de nueve días; leídos ante la concurrencia a las puertas de la sede de la entidad apícola y en la plaza pública, fijándose cada uno de ellos en sus puertas principales para impeler al enjuiciado para que se entregase y respondiese de los cargo imputados. Asimismo se remitía mediante misiva a algún comisario próximo al lugar de vecindad del acusado para que comunicase a sus parientes o convecinos del emplazado el inicio de los trámites para su requerimiento. Finalizando cada plazo el escribano institucional se dirigía al calabozo y pregunta al alcaide si el ausente se había entregado voluntariamente, y en caso contrario se publicaba el siguiente pregón hasta agotarse el término establecido.

Paulatinamente la pena aumenta según transcurren los edictos: la incomparecencia al primer emplazamiento supone el secuestro patrimonial de sus bienes; del segundo se derivaba la pena ordinaria máxima prevista por ley para el supuesto delictivo del que era acusado

-casi nunca la pena capital pues entonces sería improbable su comparecencia-; y al tercero se le reclamaban las costas procesales legítimamente devengadas. Cumplido este último término se dejaba un tiempo prudente de entre diez a treinta días para que los jueces instructores pronunciasen formalmente el auto de rebeldía, que a la postre sería pregonado en la plaza pública de Ciudad Real y en la de la localidad de donde era oriundo el encausado, unos días después³²⁵.

Si el reclamado era apresado antes de la sentencia definitiva³²⁶, o si se entregaba voluntariamente antes de la misma³²⁷, habían de ser oídas las alegaciones exculpatorias presentadas por la defensa, siendo válidas las diligencias judiciales practicadas en su ausencia hasta la fecha, siempre que no hubiese transcurrido un año; en caso contrario la sentencia se convertía en ejecutiva en cuanto a sus responsabilidades pecuniarias. Ante el incremento del bandidaje, las pragmáticas de 15 de junio y 6 de julio de 1663, redujeron los plazos a tres días entre los pregones y les despojaba de la cláusula de seguridad que garantizaba audiencia siempre que fuesen aprehendidos después de dictarse el fallo definitivo, aplicándoles automáticamente las penas dispuestas en su ausencia.

A pesar de tales gestiones, lo habitual es que el acusado nunca compadezca ante la justicia, empleando a partir de entonces nombre falso y mudando de vecindad por temor a unas represalias casi seguras³²⁸, procediéndose contra su fiador si se había evadido al ser excarcelado bajo fianza³²⁹, en cuyo supuesto tampoco podía retornar a su lugar de vecindad debido a los odios suscitados entre sus paisanos, considerándose a todos los efectos un proscrito, viviendo a partir de entonces al margen de una ley que había despreciado y conculcado.

7.3.2.e. LOS MEDIOS LEGALES DE SUSTRAERSE A LA CONDENA ORDINARIA.

A. Retirada de Querella.

El ordenamiento procesal castellano contemplaba la figura de este recurso legal en razón del cual el querellante se retiraba como parte de la acusación, siguiéndose por regla general la causa de oficio. La doctrina, preocupada por consignar la casuística forense, fijaba que

"...si el delito principalmente es cometido respecto a la cosa, y no de la persona, como lo es de hurto, o quando el delito contra las personas tienen calidad que lo agrava o como el asesino o el homicidio hecho alevosamente o con veneno, o saeta, o tiro de polvora, o fuerza o violencia, o rapto de muger o otros semejantes delitos enormes, y calificados, que se debe imponer pena corporal, y la ordinaria del delito, para satisfacer a la Republica, aunque haya apartamiento de parte, concordia o transaccion."³³⁰

Por las peculiaridades que suelen concurrir en estos supuestos judiciales, se hace aconsejable su estudio particularizado para profundizar en sus motivaciones e influencia en el desarrollo procedimental subsiguiente.

Únicamente conocemos un pleito criminal en el que fracasase la composición económica del apartamiento; se trata del protagonizado por un bracero quien -seguramente actuando como intermediario de su patrón- ofrece la importante suma de ciento veinte ducados para un guarda de viñas de Villanueva de los Infantes renunciase a seguir con la querella interpuesta ante la Santa Hermandad; de poco sirvió esta maniobra pues casi un mes después se condenó a dos años de destierro y

al pago de una indemnización de treinta mil maravedís al agredido, así como a las costas y gastos de justicia a satisfacer en el término de quince días tras serle notificada la sentencia³³¹.

La retirada de la querella solía ser concertada mediante el pago de una indemnización del acusado al supuesto agraviado. En mayo de 1595 se presenta ante el Santo Tribunal un cortijero del valle de Alcudia quejándose de que su esposa desde hacía más de un año tenía trato carnal con un cazador andaluz, amenazándole su cónyuge de que le mataría su amante si denunciaba su deshonor. Detenidos los acusados, negarían los cargos que les eran imputados y de inmediato el amante se compromete a pagar doscientos reales al marido el día de Santiago; el engañado es persuadido para que se apartase del caso, manifestando no ser su intención castigar a su esposa adúltera "sino traer aquí al dicho Pasqual García y desterrallo que no quería parase en la tierra donde ellos estaban"³³².

En otras ocasiones se recurre al apartamiento al estar involucrados individuos cuya calidad hacía preveer la parcialidad de la justicia. En 1725 dos dependientes del Santo Tribunal manchego permanecían reclusos en la cárcel de Valdepeñas al ser acusados por la viuda del asesinado Pedro Megía de Alicia. Esta, María González, se retira del proceso bajo la condición de que recibiría cincuenta doblones de los implicados y que se mantendrían alejados voluntariamente a diez leguas de la villa manchega. La Real Chancillería de Granada notifica a la viuda que comunicase directamente a la Sala del Crimen este auto en el plazo de cuatro días, so pena de apercibimiento y de una elevada condenación para la Cámara de Su Magestad³³³.

Generalizando, puede colegirse de la práctica forense hermandina que la satisfacción del daño causado³³⁴, la devolución de lo hurtado³³⁵, o la aparente reconciliación de las partes litigantes, si se trata de agresiones o injurias³³⁶, terminan con la absolución del enjuiciado o con la imposición de una pena inferior a la legalmente prevista.

Excepcionalmente los damnificados se retirarán voluntariamente como parte quellerante del pleito instruido sin ver cumplidas, al menos parcialmente, sus pretensiones iniciales. Un labrador de Fontanarejo, indiciado del asesinato de un paisano por los magistrados toledanos, quedaría únicamente sujeto al pago de unos dos mil reales de costas; como quiera que su viuda se querellase del antes procesado por sospechar de que la desaparición de unas colmenas respondía al intento de su éste de resarcirse de su quebranto económico, hasta cuatro meses después de incoarse la sumaria María de Zafra no se aparta de la acusación "por averselo pedido mucha gente honrada", condenándose poco después al reo con una benigna sentencia de destierro y a satisfacer sus responsabilidades pecuniarias pertinentes³³⁷.

B. Recurso de nulidad.

Uno de los medios para impugnar la sentencia era recurrirla alegando nulidad del veredicto atendiendo a defectos de forma en la tramitación del proceso o/y del veredicto. Esta acción legal permitía al interesado reclamar de las resoluciones tomadas por la magistratura hermandina, bien ante dicha instancia de justicia o pretextando su nulidad al tiempo de apelar ante el tribunal superior correspondiente. Tanto la parte acusada como la acusadora podían plantear, insdistintamente, este recurso.

Como dictada condena por ambos alcaldes y asesor contra un pastor convicto de diversos abigeatos, su curador recusase al alcalde que había llevado la causa de oficio, éste se hace acompañar de don Fernando Valdés, quien a su vez es "tenido por sospechoso", solicitando la defensa que se acudiese a "persona cristiana" que determinase la causa; desestimada formalmente este recurso por parte de los alcaldes, alegando que al estar pronunciada la sentencia no se pretendía sino obstaculizar su labor, parecen ceder ante dicha nulidad al constar que ese mismo día se acompañaron del jurado ciudarrealeño Fernando Pinedo, hermano hidalgo del Santo Instituto; al cabo de unas semanas el reo sería conducido a galeras³³³.

Igualmente a principios del Seiscientos el curador de Pedro Hernández Nuño, considerando dolosa la quema durante el estío de 1602 de una posada integrada por más de cien corchos en el término de Abenójar -Ciudad Real-, manifiesta su desacuerdo con el transcurso del proceso seguido contra unos pastores inciciados al sospechar de la

protección brindada por las autoridades locales y de que se habían desestimado repetidamente las diversas ocasiones en que había recusado al alcalde instructor. La semana siguiente a la emisión de la primera sentencia se vuelve a dictar nuevo veredicto por el citado juez, esta vez acompañado de otro asesor, aunque limitándose a confirmar el fallo anterior, suscitando por ello el enésimo recurso de nulidad, que al dilatar la conclusión del pleito propicia la excarcelación bajo fianza del querellante y la asunción definitiva de la causa por parte de la Real Chancillería granadina³³⁹.

Si se consideraba que el recurso de nulidad ante la misma corte de justicia que había emitido la sentencia tenía escasas posibilidades de prosperar, por estar persuadidos de su inflexibilidad o sospecharse su parcialidad, la parte supuestamente perjudicada tenía la posibilidad de recurrir a Granada para que dirimiese dicho auto de nulidad. Las razones aducidas para este proceder solían sustentarse en el incumplimiento reiterado de los plazos legales establecidos; la prolongación interesada del proceso para afligir a su parte detenida, etc. Semanas después de ser condenados a la última pena unos bandidos, su procurador recusa a los alcaldes que la emitieron conminándoles a que fuesen "con letrado de ciencia y conciencia y no procediesedes sin el dicho acompañado", siendo revisado el caso en Granada³⁴⁰.

En fechas posteriores a las décadas centrales del Seiscientos, a la luz de nuestras investigaciones, no tenemos constancia de que fuese utilizado este resorte judicial como medio de reparar a la parte pretendidamente lesionada por el irregular proceder de la magistratura hermandina.

C. Apelación.

La posibilidad de apelar se fundamenta en el supuesto de la posibilidad de error judicial, lo que justificaría la revisión del litigio por una instancia distinta a la que proveyó justicia en la instancia precedente. Asimismo es una muestra del procedimiento seguido y de la jerarquización escalonada de unos órganos de la justicia regia supremos a los se hallan supeditados el resto de los tribunales inferiores, ya fuesen reales o privilegiados.

Teóricamente solo se admitía la apelación de las sentencias de los casos de Hermandad, interlocutorias o definitivas, cuando de su ejecución se derivase un perjuicio irreparable a alguna de las partes litigantes. El Derecho Positivo preveía que no fuesen admitidas a trámite las apelaciones promovidas por parte de los reos convictos y confesos, siempre que se tuviesen pruebas racionales irrefutables de su implicación en delitos de corte -es decir falsificación de moneda, raptó de doncella o mujer honesta, robo calificado, ladrón famoso u homicidio alevoso-; la doctrina en cambio ampliaba la negativa al recurso de apelación en los supuestos de delitos atroces, infracciones particularmente frecuentes, delitos notorios, vagancia y siempre que se desistiese explícitamente de ella³⁴¹, aunque en la práctica muchas de estas apelaciones serían admitidas a trámite por los alcaldes de la Hermandad manchega y los del Crimen granadinos.

Si se demostraba que el juez había conculcado el derecho de apelación legalmente arbitrada o hizo ejecutar la sentencia sin acatar su dictamen, estaría sujeto al pago de una sanción pecuniaria

proporcionada a su culpa. Así, en 1735, el receptor de la Chancillería granadina, Jacinto de Armas, cobró en Ciudad Real la multa de cien ducados impuesta al Santo Instituto por haberse procedido irregularmente contra unos gitanos prendidos en Murcia y Orihuela que habían manifestado su ánimo de llevar la causa ante dicha audiencia andaluza³⁴².

La instancia a la que normalmente recurren los reos de la corporación manchega es la Sala del Crimen de la suprema corte de justicia territorial granadina, estableciéndose en sus estatutos dicho precepto "a menos que la causa no dimanase por comisión o estuviese radicada en otra superioridad, en cuyo supuesto se ha de admitir para donde toque"³⁴³. Sólo se admite una apelación en los casos de hermandad, dirimiéndose la causa en Granada únicamente en grado de vista, aunque de hecho la obligación de consultar las sentencias hermandinas más severas suplía este recorte judicial, actuando como un resorte de control que reemplaza dicha carencia formal.

El término para apelar se fijó en cinco días en las Cortes de Toledo de 1480, a contar desde la notificación formal de la sentencia a cada una de las partes, aunque se suele admitir a trámite los recursos de los apelantes que se personan mediante procurador ante el juez de apelación aún cumplida la moratoria establecida, que por otra parte podría prorrogarse quince días atendiendo a la notable distancia entre Ciudad Real y Granada³⁴⁴.

Notificado al tribunal superior correspondiente el auto de apelación por cualquiera de las partes litigantes, se expedía provisión compulsatoria para que se entregase al apelante traslado de los autos, a su costa; simultáneamente se citaba a la parte contraria

para que concurriese a la defensa de sus intereses. Aunque no presentase la parte beneficiada por el primer fallo, el recurso seguía su curso; desde Granada solía establecerse un mes de plazo para que los alcaldes instructores remitiesen el proceso criminal sustanciado mediante correo ordinario.

La parte que se considerase lesionada, al mismo tiempo de que le era notificada la sentencia, podía manifestar oralmente su desacuerdo y la intención de recurrir la sentencia, formalizándola por escrito a posteriori, nombrando, en un corto periodo de tiempo, procurador ante el tribunal superior correspondiente³⁴⁵.

Admitida a trámite, la audiencia regia emitía auto compulsatorio y citatorio, el letrado del apelante presenta un escrito de agravios en el que se aludía a todos los derechos supuestamente lesionados de su parte. Este pliego era trasladado a la otra parte para su réplica; el relator hacía llegar relación de la causa a la Sala del Crimen, y a su vista se determinaba el plazo para probar el recurso.

A pesar que las Cortes de Alcalá de 1348 habían dispuesto que la apelación debía resolverse en el término máximo de un año, so pena de prescribir dicho recurso y dar por firme la sentencia anteriormente pronunciada, la realidad es que cuando el apelante no tenía recursos el proceso podía ralentizarse durante meses, permaneciendo encarcelado el reo, generalmente en la galera del Santo Tribunal o trasladado a la de la alta audiencia andaluza. En el primero de los supuestos suelen denegarse las peticiones de libertad bajo fianza, pero en la penitenciaría granadina, frecuentemente saturada de reos en situación preventiva, era relativamente fácil su excarcelación condicional, pese a que por tratarse de forasteros era prácticamente imposible que

contasen con el debido respaldo de personas abonadas que respondiesen de ellos³⁴⁶.

Concluidos todos los trámites precisos, la Sala del Crimen granadina emitía la sentencia pertinente, confirmando o refutando total o parcialmente el veredicto pronunciado por la magistratura manchega. Aunque a menudo se confirma la pena principal o su equivalente, no es extraño que sean revocadas las cláusulas aflictivas subsidiarias, siendo a menudo las penas capitales conmutadas por el trabajo forzado en minas o galeras³⁴⁷. La ejecución del fallo definitivo, en cualquier caso, era encomendado y llevado a cabo por los ministros de la Santa Hermandad Vieja, preferiblemente en la misma ciudad o en las cercanías de la sede que albergaba su tribunal.

D. Procedimientos extraordinarios: perdones, conmutaciones de penas e indultos.

Agotada la vía ordinaria de recursos legales, los reos que reunían unas determinadas condiciones podían esperar en la exoneración, total o parcial, de una sentencia lesiva. En la documentación consultada perteneciente a la práctica forense del Santo Instituto ciudarrealeno hallamos noticias dispersas sobre la concesión o denegación de tales revisiones extraordinarias de las condenas definitivas arbitradas por los jueces instructores y los de apelación.

Una interpretación flexible, cuando no arbitraria, de los preceptos jurídicos por parte de los alcaldes hermandinos, con la aquiescencia más o menos implícita o explícita de sus asesores letrados, propiciaba la mitigación de las condición de reclusión de algunos reos, viéndose aliviados temporal o permanentemente de grillos, cadenas o mazmorras; permitía el dictamen de veredictos benignos, en todo caso inferiores a lo dispuesto por ley; auspiciaba la activación de los trámites judiciales para lograr la excarcelación de ciertos convictos sometidos a un largo confinamiento; e incluso toleraba la puesta en libertad de algunos reos atendiendo a su lastimosa situación.

Tan amplias y discrecionales atribuciones eran comúnmente aceptadas por la sociedad, contaban con la condescendencia de los tribunales superiores y eran estimuladas desde la doctrina judicial, recomendando dichas las instancias tener clemencia con los reclusos pues aunque

"...a la Republica conviene que los delitos no queden sin castigo ..., tenga excepcion pues no menos provechosa es al bien comun algunas veces la misericordia que la justicia, y aprovecha mas en algunos la correccion, que la coercion."³⁴⁸

Sin embargo, los perdones individuales por parte de los agraviados solían tener poca o nula fuerza legal, ya fuese porque tras esta suprema muestra del principio cristiano de perdón hacia sus ofensores recordado reiteradamente desde los púlpitos fuese interpretada como temor a posibles represalias o porque circunstancias agravantes hacían aconsejable la reparación de oficio de la vindicta pública³⁴⁹. En mayo de 1623 testificaba ante el tribunal hermandino ciudarrealeño Domingo "Napolitano", jornalero oriundo de Italia y que reconoce haber perpetrado homicidio involuntario en defensa propia durante una reyerta, al defender sus escasas propiedades y lavar su honor por las injurias vertidas por un vecino de Baeza³⁵⁰; inútilmente su procurador alegó ser la primera falta de su parte y que al ser testigos de cargo algunos cuadrilleros se trataba de partes interesada, y por lo tanto testigos inhábiles; la pena capital, confirmada en Granada³⁵¹, sería ejecutada poco después pese a que la viuda del asesinado, tras la sentencia interlocutoria, declara perdonar al infortunado bracero italiano³⁵².

Atendiendo más a las necesidades de al Monarquía que a una supuesta benignidad del Santo Tribunal, hacia 1640 se consultó personalmente por parte del alcalde hermandino don Cristóbal Treviño Carrillo al marqués de Jódar -comisionado real para conmutar sentencias de muerte por penas de galeras-, estante en Toledo, participándole de la causa seguida contra Francisco Romero "Vigornia"³⁵³, que a la postre sería ejecutado en Peralvillo.

Un comportamiento similar, aunque por distinto motivo, siguieron los magistrados hermandinos en 1660. Desestimada la apelación de la sentencia de asietamiento contra Juan Jiménez, reo que confiesa ante el potro sus múltiples y graves fechorías, y que en el propio cadalso se libró de una muerte segura por la mediación de los religiosos concurrentes al acto; el 19 de mayo siguiente su procurador solicita que le fuese conmutada su pena por la de diez años de galeras, respondiendo los alcaldes que no estaban capacitados para ello. Encauzando dicha súplica al Supremo Consejo; en junio le era notificada al Superintendente General de causas de forzados. A fines de septiembre de 1661 el reo suplicaba "salir desta dura y larga prision", pero habría que esperar al 1 de noviembre siguiente para que se dictaminase en Madrid al respecto, partiendo poco después a galeras³⁵⁴.

El soberano, fuente de mercedes y dispensador de justicia según la tradición medieval, entre sus regalías tenía potestad absoluta para dirimir en los asuntos criminales de sus vasallos, pudiendo inmiscuirse en ellos concediendo indultos y perdones individuales o generales³⁵⁵. Excepcionalmente los encartados por la Hermandad apícola manchega se beneficiarán de los perdones generales concedidos por la Corona con motivo de efemérides reales, como el nacimiento de príncipes, juras regias, ascensiones al trono, etc, siendo denegadas en otras ocasiones las solicitudes cursadas en tal sentido³⁵⁶. Nos parece significativo que los escasos casos contratados de concesión o petición de indultos pertenecen a la segunda mitad del Setecientos, en su inmensa mayoría tienen como beneficiarios a castellanos nuevos y poseen un carácter parcial.

Condenado en 1754 el buhonero murciano Juan Ginés Sánchez, "el Arcediano", a diez años de trabajo en arsenales según estipulaba la real pragmática de 1749³⁵⁷; detenido a fines de 1759 por prófugo, ya en febrero de 1760 protagonizaba un frustrado intento de evasión en la galera hermandina. Llevado el caso a la Real Chancillería de Granada, el oidor y juez privativo de fugas y solturas de forzados ordena la remisión del reo por tránsitos a Cartagena para terminar de cumplir su condena, eximiéndole de la pena aflictiva subsidiaria en atención al indulto concedido con motivo de la subida al trono de Carlos III³⁵⁸.

La jura del citado Monarca Ilustrado y del príncipe don Carlos Antonio propiciaron la mitigación de la pena prevista para una cuadrilla de gitanos de Mancha Real -Jaén- condenados por incumplir las pragmáticas que regulaban su conducta, confirmando la Sala del Crimen granadina su perdón, aunque sujetándolos a satisfacer las costas procesales devengadas³⁵⁹, y un año después se acogieron al mismo dos gitanos vagabundos bajo idéntica cláusula³⁶⁰.

En 1777 consta que un notario hermandino dió testimonio que el gitano Félix Antonio Bermúdez se había beneficiado del indulto general dictaminado por el feliz alumbramiento de la Princesa de Asturias³⁶¹, siendo excarcelado de la galera manchega en la que permanecía desde hacía semanas "por insultar a los labradores de Daimiel"³⁶². Asimismo en 1795 don Pedro Ibáñez redactó un escrito suplicando el indulto para Juan Romero, vecino de Campillos -Málaga-³⁶³, intentando aprovecharse del indulto general arbitrado por entonces con motivo del doble matrimonio de las infantas doña Amalia y doña Luisa.

Curiosamente no solo los delincuentes comunes pretenderán acogerse a estas medidas extraordinarias de gracia, como lo demuestra el que en

1771 la esposa de don Juan Sánchez de Torres -regidor perpetuo de Ciudad Real y miembro eminente del Santo Instituto local- solicita, mediante valedores ante los Reales Consejos, que su marido fuese relevado del cumplimiento de la condena a la que se hizo merecedor tiempo atrás, por el feliz nacimiento en el seno de la familia Real del infante don Carlos Clemente. Dicho capitular de la capital manchega, junto al escribano Eugenio Pañuela, habían supuestamente maltratado de palabra u obra a representantes de la justicia ordinaria de Villar del Pozo cuando iban en misión de justicia -probablemente por cuenta de la corporación apícola-, siendo condenado a servir durante diez años como gastador en un presidio norteafricano, alegando en su favor, aparte de una honradez por todos reconocida, el ser evidente

"...la notoria pobreza de la otorgante y de su marido y ha que se alla con siete hijos varones que el mayor no excede de doze años y que su mantenimiento no pende de otra cosa que de la yndustria del citado...su padre."³⁶⁴

NOTAS AL CAPÍTULO 7.

¹ La administración de justicia durante los siglos XVI al XVIII era considerada una regalía irrenunciable de la Corona, impartida simultáneamente en tres ámbitos estrechamente interrelacionados: el de la jurisdicción ordinaria común; el de las jurisdicciones delegadas o privilegiadas y el de las especiales. Sistemáticamente las causas privativas de éstas últimas -a la que pertenecía la Santa Hermandad-, eran substanciadas en última instancia por los altos tribunales regios castellanos. La unidad jurisdiccional y procedimental era inexistente e impensable en una sociedad estamental regida por unos principios de convivencia basados en el privilegio jerárquico, en virtud del cual cada grupo socio-profesional tenía su correspondencia en el ámbito judicial. Esta justicia, esencialmente discriminatoria, era fiel reflejo de la compartimentalización social de la época, no sufriendo cambios substanciales su ordenamiento hasta pleno siglo XIX, pese a los tímidos intentos reformadores ilustrados.

Entre otras, citamos las siguientes obras para la comprensión del intrincado entramado jurídico penal castellano durante el Antiguo Régimen: N. ALCALÁ-ZAMORA y R. LEVENE, *El derecho procesal penal*, Buenos Aires, 1945; F. de ALFARO, *Tractatus de officio Fiscalis, deque Fiscalibus privilegiis*, Valladolid, 1606; J. ALONSO PACHECO, "El pensamiento penológico de Lardizábal (Breve comentario al "Discurso sobre las Penas)", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 107 (febrero, 1954), pp. 64-71; M.P. ALONSO FOMERO, *El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Salamanca, 1982; de la misma autora y A.M. HESPANHA, "La Peine. Peninsule Iberique", en *Actas Coloquio Societé Jean Budin pour l'histoire comparative des institutions*,

(traducc. "Sobre la Pena", Barcelona, mayc 1987); A. ÁLVAREZ GUERRERO, *Liber Aureus per utilis ac necessarius. De administratione et executione Justicia*, Valencia, 1536; J.M. ANTEQUERA, *La legislación española desde los tiempos más remotos hasta la época presente*, Madrid, 1894; J. ÁLVAREZ Y POSADILLA, *Práctica criminal por principios, o modo y forma de instruir los procesos criminales en sumaria de las causas de oficio de justicia contra los abusos cometidos*, 3 vv., Valladolid Y Madrid, 1794-1802; A. ONECA, "El derecho penal de la Ilustración y D. Manuel de Ladizábal", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 174 (1966), pp. 597-626; del mismo autor "Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 166 (julio-septiembre, 1964), pp. 597-626; C. BECCARIA BONESANA, *De los delitos y las penas* (1ª ed. París, 1764) intr., not. y traducc. F. TOMAS Y VALIENTE, Madrid, 1982; J. BERNI Y CATALÀ; *Práctica criminal, con notas de sus delitos, sus penas, presunciones, o circunstancias, que los agravan, y disminuyen: y ritual para juzgar, acriminar y defender en los Tribunales Reales de España, y en los particulares de Residencia*, 2ª ed., Valencia, 1765; J. CABRERA BOSCH, "El poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808)", en *La Economía española al final del Antiguo Régimen*, t. 4; J.R. CASADO RUIZ, "Los orígenes de la codificación penal en España: el plan de Código Criminal de 1787" en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, nº 22 (mayo-agosto, 1969), pp. 313-342; J. CASTILLO DE BOVADILLA, *Política para corregidores y señores de vasallos, en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos, y seglares, y de sacas y aduanas, y de residencias, y sus oficiales, y para regidores, y abogados y del valor de los Corregimientos, y gobiernos realengos, y de las órdenes*, (1ª ed. Madrid, 1597) ed. facs. Amberes, 1704, 2 vols, est. prel. B. GONZÁLEZ ALONSO, Madrid, 1978; J. CAMPILLO Y COSSÍO, *Lo que hay de*

más y de menos en España para lo que debe ser y no lo es, (19 ed. Madrid, 1741) ed. y est. prel. A: ELORZA REAL, Madrid, 1969; A. CANTERA, *Questiones criminales tangentes iudicem, accusatorem, reum, probationem, punito nique delictorum*, Salamanca, 1589; J. L. DE LAS HERAS SANTOS, *La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla*, Salamanca, 1991; G. DESDEVISES DU DEZERT, *L'Espagne de l'Ancien Régime*, t. 1, París, 1899 (traducc., Madrid, 1989); J.M: DOMÍNGUEZ VICENTE, *Ilustración y continuación a la Curia Philipica y correccion de las citas que en ella se hallan erradas*, Madrid, 1736-1739; A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, *Práctica universal forense de los tribunales de España y de las Indias*, 69 ed., Madrid, 1786-1788; V. FORONDA, *Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la Economía-Política, y sobre las leyes criminales*, 2 vv., Madrid, 1799-1794; J. FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLARROEL, *Práctica Criminal*, Madrid, 1672; M. FOUCAULT, *Vigilar y Castigar*, Madrid, 1986 (1ª ed. París, 1975); B. GONZÁLEZ ALONSO, "La Justicia", en *Enciclopedia de Historia de España*, t. 2, Madrid, 1988; J. GOLDSCHMIDTS, *Problemas jurídicos y políticos del proceso penal*, Barcelona, 1835; A. GALLEGO ANABITARTE, *Administración y jueces: gubernativo y contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el estado constitucional y sus fundamentos de derecho administrativo español*, Cuadernos de Historia de la Administración, t. 1, Madrid, 1971; P. GONZÁLEZ DE SALCEDO, *Tratado jurídico-político del contrabando*, 39 ed corr., Madrid, 1779; L. GUARDIOLA y SAEZ, *El corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las cualidades necesarias y convenientes para el buen Gobierno Económico y político de los Pueblos, y la más recta administración de justicia en ellos*, Madrid, 1785; J. GUTIÉRREZ, *Praxis criminalis civilis et canonica. in librum octavum Novae Recopilationis regiae*, Salamanca, 1634; A. HEREDIA, *Dechado de jueces, en el que hallara la muestra de qual deve ser un buen juez*, Valencia, 1566; J. HEVIA

BOLAÑOS, *Curia Philipica*, Madrid, 1717; J. HEREDIA Y COLÓN, *Instrucción de Escribanos en orden a lo judicial*, 10ª impr., Madrid, 1787; J. LALINDE ABADÍA, *Iniciación histórica al Derecho Español*, Barcelona, 1970; M. LARDIZABÁL Y URIBE, *Discurso sobre las penas contrahído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma*, Madrid, 1782; J. LUYANDO, "Instrucción Criminal", en M. FERNÁNDEZ DE AYALA AULESTIA, *Práctica y formularios de la Chancillería de Valladolid*, Zaragoza, 1733; M. de MACANAZ, *Auxilios para bien gobernar una Monarquía Católica, o documentos que dicta la experiencia y aprueba la razón, para que el Monarca merezca justamente el nombre de Grande*, Madrid, 1789; J. MALDONADO, "Líneas de influencia canónica en la historia del proceso español", en *CHE.*, nº 23 (1953), pp. 467-493; de dicho autor "Los recursos de fuerza en España", en *AHDE.*, nº 24 (1954), pp. 281-381; A. MARONGIU, "Un momento típico de la monarquía medieval: el rey juez", en *AHDE.*, nº 23 (1953), pp. 677-711; L. MATHEU Y SANZ, *Tratatus de Re criminali*, Venecia, 1750; L. de MIRANDA, *Ordinis Traditioni. et de modo procedendi in causis criminalibus tam in foro ecclesiastico. quam in seculari agitantis*, Salamanca, 1601; G. MONTERROSSO Y ALVARADO, *Práctica civil y criminal e ilustración de Escribanos*, Alcalá de Henares, 1571; F. MARTÍNEZ MARINA, *Ensayo histórico crítico sobre la antigua legislación y principales cuerpos legales de los reynos de León y Castilla*, Madrid, 1808; S de MONCADA, *Restauración Política de España*, (1ª ed. Madrid, 1619) ed. crítica J. VILAR, Madrid, 1974; P.J. ORDÓÑEZ, *Monumento triunfal de la Piedad Católica*, Zaragoza, 1672; G. QUINTERO OLIVARES, *Introducción al Derecho Penal*, Barcelona, 1981; A. QUEVEDO Y HOYOS, *Recopilación de las leyes destos Reynos, hecho por mandado de la Magestad Católica Rey Don Phelipe V*, Madrid, 1723; V. PALACIO ATARD, *Los españoles de la Ilustración*, Madrid, 1964; A.X. PÉREZ Y LÓPEZ, *Teatro de la legislación universal en España e Indias*, 28 vv., Madrid, 1791-1798;

A. PÉREZ MARTÍN y J.M. SCHOLZ, *Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, Valencia, 1978; M. PESET, *Derecho romano y Derecho Real en las Universidades del siglo XVIII*, Madrid, 1979; F. PRADILLA BARNUEVO, *Suma de todas las leyes penales, canónicas, civiles y destos Reynos*, Madrid, 1621; F. PUY MUÑOZ, *Las ideas jurídicas en la España del siglo XVIII (1700-1760)*, Granada, 1968; R. RIAZA, "El derecho romano y el derecho penal de Castilla durante el siglo XVIII", en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, nº 12 (1929), pp. 104-124; G. RODRÍGUEZ MOURULLO, "La distinción hurto robo en el derecho histórico español", en *AHDE.*, nº 32 (1962), pp. 25-111; A. RUMEU DE ARMAS, *Testamento político de Floridablanca*, ed. crítica, Madrid, 1962; J.A. SAINZ CANTERO, *La ciencia del derecho penal y su evolución*, Barcelona, 1970; A. SALGADO Y CORREA, *Libro nombrado regimiento de Juezes...En el qual se contienen algunos acuerdos y avisos de cosas que los buenos corregidores y juezes deben considerar y hazer y evitar para administrar bien sus oficios y dar buena cuenta de si y dellos*, Sevilla, 1556; S. SÁNCHEZ, *Extracto Puntual de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados y otras providencias publicadas en el reinado de...Carlos III*, 2 vv., Madrid, 1794; del mismo autor, *Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados, havidos y otras providencias publicadas en el actual reinado del señor D. Carlos IV, con varias noticias instructivas y curiosas*, 4 vv., Madrid, 1794; L. de SANTAYANA BUSTILLO, *Gobierno político de los pueblos de España y el Corregidor, Alcalde y Juez en ellos*, (1ª ed. Zaragoza, 1742), ed. crítica F. TOMÁS Y VALIENTE, Madrid, 1979; F. TOMÁS Y VALIENTE, "Derecho y proceso penal a fines del siglo XVIII: la crítica de Beccaria", en *La tortura en España. Estudios Históricos*, Barcelona, 1973; del citado autor *Manual de historia del Derecho Español*, Madrid, 1979; y *El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII)*, Madrid, 1969;

A. SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, "Sociología y política criminal", en *Revista de Estudios Políticos*, nº 73 (1954), pp. 145-155; A. VILLADIEGO Y VASCUÑANA Y MONTOYA, *Instrucción política y práctica judicial conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno, utilissima para los Gobernadores, y Corregidores, y otros Jueces Ordinarios, y de comisión y para los Abogados, Escrivanos, Procuradores, y Litigantes*, Madrid, 1766; P. VIZCAÍNO PÉREZ, *Código y Práctica criminal arreglado a las leyes de España*, 3 vv., Madrid, 1797.

² Despacho-comisión a don Antonio Guzmán , vecino de Palma del Río -Córdoba-, para proceder contra el gitano Sebastián Tirado (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 70, f. 1vº).

³ Auto Acordado de 23-V-1740 y Real Cédula de 18-VI-170, en Nov. R. ley. 17, tit. 35, lib. 12, op. cit., p. 470, y AHN. Consejos, lib. 1.510, nº 38.

⁴ La repoblación de parte de Sierra Morena y algunos despoblados andaluces adquirió el cariz de una empresa utópica ilustrada. Para sustraerse a la inercia institucional que aquejaba al gobierno municipal castellano tradicional, se evitó reproducir en lo posible el régimen local vigente. La Real Cédula del Consejo de Castilla de 5-VII-1777, prevenía que en las Nuevas Poblaciones su jurisdicción dependiese directamente de un alcalde mayor con sede en La Carolina -capital de las Nuevas Poblaciones-, supeditado a la Sala Primera de Gobierno del Supremo Consejo en materia gubernativo-contenciosa, y en cuestiones económicas a la Superintendencia General de Hacienda.

Concedidos títulos de comisarios por parte del la corporación ciudarrealena a don Andrés Toledo y don Juan Gómez Gabilán, afincados

en La Carolina, el 30-XII-1794, su alcalde mayor manifiesta su falta de necesidad e ilegalidad, alegando contar con suficientes ministros de justicia y con una partida de escopeteros de Andalucía, siendo desestimada la solicitud de auxilioria primero por el Fiscal y luego por los consejeros del Real de Castilla; 24-III/27-XI-1795, Madrid (AHN. Consejos, leg. 1.614, nº 38).

Mejor suerte correrá dos años después don Diego Antonio Sarabia, también vecino de La Carolina y juez comisario de la antidad toledana desde el 31-III-1797, distinción concedida gracias a su calidad personal -mercader de paños y tejidos- y, sobre todo, porque en 1793 costeó de su peculio el envío y bastimento de 36 soldados para la campaña contra la Francia Revolucionaria; 6-X-1797, Madrid (AHN. Consejos, leg. 1.758, nº 13, s.f.).

⁵ J. A. BONILLA Y MIR y F. VELÁZQUEZ GÁZTELU, "Alcaldes de la Santa Hermandad por el estado noble en Jaén (1780-1835)", en *Boletín de Estudios Jiennenses*, año 22, nº 67 (enero-marzo, 1976), pp. 31-70.

⁶ 3-IX-1459; cf. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., p. 247. En términos generales, esta concordia sería puntualmente respetada por todas las partes interesadas, a tal extremo que el cabildo apícola toledano de 27-IX-1687 expresaba su agradecimiento porque estando uno de sus cuadrilleros tras una partida de bandidos prendió a cuatro de ellos en la propia villa de Talavera, conduciéndolos luego a la Ciudad Imperial bajo escolta (AHN. Div. Her., leg. 66, nº 7).

⁷ 13-VIII-1687, Madrid (AHN. Consejos, leg. 7.199, nº 25, s.f.).

⁸ A efecto de los casos de hermandad, establecidos en el Ordenamiento de Madrigal de 1476, se consideraba despoblado todo aquel lugar "descercado" cuya población fuese inferior a los treinta vecinos; ley 2, tit. 35, lib. 12, Nov. R., op. cit., p. 460.

⁹ ley 44, tit. 13, lib. 8, R.; pet. 3, Cortes de Toledo de 1539; ley 29, tit. 35, lib. 35, lib. 12, Nov. R., op. cit., p. 467; Real Provisión 29-VIII-1742, Madrid y AHN. Consejos, lib. 1.478, nº 58.

A este respecto, son esclarecedoras las obras de E. MARTÍNEZ RUIZ, "Apuntes sobre la policía de Madrid en el reinado de Carlos IV", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 7 (1986), pp. 65-84; del mismo autor "Orden público, poder y conflictividad social en el Madrid de la Modernidad", en *Visión histórica de Madrid (siglos XVI al XX)*, Madrid, 1991, pp. 87-120 y "Sociedad y seguridad en el Madrid de Carlos III", en *Carlos III y la Ilustración*, Madrid, 1988, pp. 213-239; R.I. SÁNCHEZ GÓMEZ, *Estudio institucional de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte durante el reinado de Carlos II*, Madrid, 1989.

¹⁰ Carece, pues, de sentido la definición recogida en el *Diccionario de Autoridades* al aseverar que "La Santa Hermandad. Es un genero de Tribunal, que tiene jurisdiccion plena para castigar los delitos cometidos en el campo, sin apelacion a otro Tribunal"; (1ª ed. Madrid, 1737), ed. facs., Madrid, 1984, t.5, pp. 143-144.

¹¹ AHN. Códices, 933B, ff. 61r-vº.

¹² En lo albores del Quinientos la situación creada era absurda, ya que se osciló desde la pretensión de relegar el ministerio hermandino a los campos del realengo, excluyendo su jurisdicción de los caminos -con lo que la red viaria comportaría derecho de asilo para los

malhechores-, a la tendencia contraria, postulándose que, puesto de los caminos podían considerarse despoblado en sentido estricto, los cuadrilleros estarían capacitados para entrar en las villas. Solamente una concordia pudo delimitar el marco de actuación de la Santa Hermandad, excluyéndola del casco urbano y un término que variaba entre un cuarto y una legua entera, según los casos.

¹³ Las labores castrenses ejercidas por los ballesteros del Triple Instituto durante la Reconquista, así como la acción continuada contra la delincuencia fronteriza caló hondo en la conciencia histórica de dichas entidades. De ello es buena muestra la concordia con la Mesta de 1715, en la que las organizaciones apícolas fundamentan la legitimidad de su arbitrio pecuario por haberse consagrado en tiempos pasados en "sujetar y contener los moriscos facinerosos" (AHN. Div. Her., Leg. 23, nº 5, f. 8r).

¹⁴ Real Orden de 30-X-1608, Madrid (Ib., leg. 2, nº 3, copia del siglo XVIII; original en Ib., leg. 2. nº 1, doc. 1, s.f.).

¹⁵ Ib., leg. 57, nº 5.

¹⁶ Ib., leg. 57, nº 6; y 17-II-1611, Madrid (Ib., leg. 2, nº 4, ff. 1r-vº).

¹⁷ Carta-Orden de 15-VI-1643, Madrid (Ib., leg. 2, nº 2, ff. 1r-7r).

¹⁸ Los desembolsos ocasionados por tan numerosa salida superan los 3.500 rs., parcialmente enjugados por la almoneda de las caballerías incautadas, que montaron un total de 54.000 mrs. (Ib., leg. 58, nº 5).

¹⁹ "Cartas de algunos PP. de la Compañía de Jesús, sobre los sucesos de la monarquía entre los años de 1634 y 1648", t. 1, en *Memorial Histórico Español*, nº 13 (1861), pp. 118-119, cit. J. CARO BAROJA, *Ensayo sobre la literatura de cordel*, Madrid, 1969, p. 359.

²⁰ 11-IV-1644 (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, ff. 1r-7r). Una instrucción en términos semejantes fue remitida a Toledo el 27-IV-1644 desde Madrid (BN. mss. 13.030, ff. 42r-vº).

²¹ Los gastos devengados por tales diligencias en La Mancha y Sierra Morena importaron unos 776 rs. (AHN. Div. Her., leg. 58. nº 5). Sabemos por un memorial elevado durante el reinado de Carlos II ante el Supremo Consejo que, en 1667, fueron capturados cerca de Portugal el citado Per Andrés, caudillo de una partida de bandoleros que por entonces operaban en Extremadura bajo el nombre de "Los Gitanos"; cit. H. KAMEN, *La España de Carlos II*, op. cit., p. 313.

²² 14-V-1655 (Ib., leg. 21, nº 37).

²³ Este grupo armado recorrió infructuosamente las ventas de la Zarzuela y el Molinillo, la Mancha Alta y los Montes de Toledo, invirtiendo la fraternidad en ello 1.050 rs. de vellón; 15-III-1667, Ciudad Real (Ib., leg. 58, nº 8).

²⁴ Las más sobresalientes datan de 1675, cuando se designa al ciudarrealeño Pedro del Cárcamo como mayordomo de una partida en la cual concurrían más de una veintena de jinetes tras los pasos de unos cuatreros gitanos amparados en Sierra Morena, entregándoles para costear dichas diligencias 5.412 rs.; en otoño del citado año Juan Carrión, teniente de alguacil mayor hermandino, percibe 198 rs. de

salario al comandar una partida durante nueve días por la Alta Andalucía; cerca de 800 rs. fueron librados a los ministros que salieron tras unos castellanos nuevos por los Montes de Toledo la víspera de Navidad (Ib., leg. 58, nº 10). Y también menudearon aún antes de promulgarse la severa pragmática sobre los gitanos de 1695 (un ejemplar impreso de la misma en AMAC. caja 42, 1695, nº 1).

²⁵ H. KAMEN recogió diversos testomios al respecto en su obra sobre el controvertido reinado del último de los Habsburgo españoles. Op. cit., pp. 313-323.

²⁶ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12.

²⁷ 25-VI-1695, Madrid (Ib., leg. 2. nº 10).

²⁸ Ib., 53, nº 3. Esta salida es atípica por dos motivos: al estar motivada por un supuesto criminal en principio ajeno al ministerio hermandino; y al encauzarse las indagaciones policiales mediante dos grupos coordinados. Esta infracción normalmente habría sido asumida por las autoridades locales, máxime cuando en la capital manchega décadas después los alcaldes de la Hermandad General entendían en un asunto de recogida ilegal de aceituna, condenándose al ciudarrealeño Antón Serrano Quintero a 2.000 rs. de pena de Cámara y un año de destierro de la ciudad, apelándose de ella a Granada; 9-V-1642, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 171, f. 165r).

²⁹ AHN. Div. Her., leg 58, nº 12.

³⁰ Ib. 4, nº 71; vid. apéndice documental, texto nº 7. Asimismo los miembros de la Hermandad Talaverana harían lo propio con la feria y

romería de Guadalupe; cf. T. ENGENIOS MARTÍN, op. cit., p. 41; y los toledanos con la de San Mateo de Consuegra (AHN: Div. Her., leg. 69, nº 4).

³¹ El cabildo de la Hermandad toledana de 27-II-1662 consigna la salida de sus efectivos, encabezados por don Francisco Lajara y don Andrés Suárez de Sacedo, para asegurar la ruta viaria de Toledo a Ciudad real con motivo del transporte de la plata de Indias traída por los galeones en 1661, y que era conducida desde La Coruña a la Casa de Contratación sevillana; en dicha asamblea se informa a los presentes que habían sido gratificados con 2.428 mrs., tal vez como recompensa a los desvelos de sus caballeros en la mencionada labor pública

"...a los que trujeron un regalo de los señores alcaldes de la Hermandad bieja de Ciudad Real al dicho Señor Antonio -de Sotomayor y Pantoja- y Señor Don Gutierre Baca de Guzman, alcaldes -de la Hermandad Vieja de Toledo-."

(Ib., leg. 64, nº 4, s.f.). Entre 1678-1680 los talaveranos intervinieron en un espinoso asunto en el que estaban involucrados falsificadores de moneda (cit. T. ENGENIOS MARTÍN, op. cit., p. 40), delito de lesa magestad (vid. J. LLUIS Y NAVAS, "Las características y tendencias generales de la política penal monetaria en la Corona de castilla durante la Edad Moderna", en *Numisma*, separata, año 9, nº 36 (enero-febrero, 1959), pp. 6-25).

³² Impreso, 18-VIII-1705, Madrid (AHN. Div. Her., leg, 2, nº 12).

³³ La facultad para consultar a la Sala del Crimen de la Casa y Corte, en lugar de en Valladolid fué obtenida por el Santo Tribunal toledano en 1693, al ser una audiencia de justicia ubicada en el término de doce leguas de Madrid, lo que permitiría un ahorro de tiempo y dinero

en el seguimiento de sus causas, siendo confirmada tal merced en 1708 (Ib., leg. 69, nº 3, s.f.).

³⁴ En la primera de ellos se libraron unos 720 rs., inspeccionando las ventas de la Zarzuela, Garazután y Guadalerza; destinándose para la segunda 2.750 rs., coincidiendo con la escolta de tres gitanos rematados a Almadén por el tribunal manchego (Ib., leg. 58, nº 15).

³⁵ 19-VII-1712, Ciudad Real (Ib., leg. 69, nº 4, s.f.).

³⁶ Ib., s.f.

³⁷ Ib., leg. 58, nº 18. El monto total de dicha actuación policial supuso un gasto de 1.450 rs. para la asociación apícola ciudarrealeña.

³⁸ 20-III-1714, Madrid (Ib., leg. 41, nº 17).

³⁹ 5-IV-1714, Ciudad Real (Ib.).

⁴⁰ Ib., leg. 69, nº 6.

⁴¹ Lo desembolsado por dicha tal diligencia ascendió a 1.379 rs., íntegramente costeados por la entidad manchega (Ib., leg. 58, nº 15).

⁴² 28-VIII-1711, Toledo (Ib., leg. 69, nº 3, s.f.).

⁴³ A pesar que tales requerimientos, era relativamente frecuente el que puntualmente fuese recordada la debida ayuda material y asistencial a dichas comitivas. Buena muestra de la aversión de los vecinos a prestar carcelajes son los acontecimientos reproducidos el

1725 en los pueblos del partido judicial de Almodóvar del Campo cuando, al acometerse la necesaria reparación de la cárcel local se arbitra el que sus aldeas proporcionasen semanalmente dos personas para custodiar a los reos, negándose en redondo los Alcaldes de Tirteafuera y mostrando grandes recelos los de Brazatortas y Retamar (AMAC., caja 76, 1725, nº 28).

⁴⁴ En agosto de 1711 las rentas líquidas de la entidad manchega se estimaban en 1.200 rs., asignando el cabildo para dicha salida 7 rs. diarios a cada cuadrillero a caballo -3 rs. facilitados al amanecer y el resto donde pernoctasen-. Ante la necesidad de pedir un empréstito se desequilibra coyunturalmente la hacienda instutucional, por razón del cual el Fiscal del Supremo Consejo propugnando la extensión a la entidad ciudarrealeña de la facultad antes conferida a los talaveranos, consistente en la captación de dinero en los lugares por donde transitase la cadena para sufragar los gastos ocasionados, aconsejando que se buscara alguna manera de cubrir la deuda pendiente contraída; 7-IX-1711, Madrid (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

⁴⁵ 5-III-1717, Ciudad Real y 13-III-1717 Madrid (Ib.). Un documento incompleto del siglo XVIII descargaba de esta obligación a la Hermandad Vieja de Ciudad Real, haciéndola extensiva a sus encartados

"...y sin perjuicio de gravar a la Real jurisdiccion ordinaria de esta ciudad con este gravamen que lo es grande por los muchos reos que suelen ordinariamente salir sentenciados por dicho tribunal."

(ADPCR, s.c.).

⁴⁶ Viendo menoscabados sus ingresos desde la Guerra de Sucesión, la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial acordó el 30-IX-1719 que sus cuadrilleros no persiguiesen de su propio peculio a los gitanos que

solían concurrir a ferias u otros lugares (AHN. Div. Her., leg. 70, nº 3). En 1751, los colmeneros talaveranos protagonizaron dos salidas: una tras unos prófugos de las Minas de Almadén, reconociendo una partida encabezada por el cuadrillero mayor la Baja Extremadura y las estribaciones de Sierra Morena; y la segunda en seguimiento de unos bandidos que "infestaban La Mancha", concurriendo a ella un destacamento del regimiento de caballería Algarve (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.)- ; a partir de entonces decaerá notablemente su actividad, y cuando a fines del Dieciocho se reúne su cabildo para dirimir el auxilio a prestar, al serle requerida por alcalde mayor, se consensúa el aporte del cuadrillero mayor, seis hermanos, un notario real y tres paisanos , negándose desde la supremo autoridad local el que la partida se supeditase al oficial hermandino ni que éste se acompañase de escribano institucional; 23-III-1791, Talavera (Ib.).

⁴⁷ 7-I-1755, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 51, nº 9).

⁴⁸ El 21 de enero llegaban los acuadrillados a Tomelloso, al día siguiente pasaron a Villarrobledo, y de allí a Villaminaya, Villalgordo, Requena, Villanueva de la Jara, Olmedillo y Barchín del Hoyo, retornado luego a Olmedilla y volviendo por sus pasos hasta Sieteaguas, Alcería y San Felipe, donde el 7-II-1755 se les notificaba que siete jinetes, payos y gitanos, habían escapado del cerco al que fueron sometidos por parte de un nutrido destacamento del regimiento de Santiago, a las órdenes del regidor y alguacil mayor del Santo Oficio de Murcia (Ib., s.f.)

⁴⁹ Ib. legs. 50, nº 22; 51, nº 3; 59, nº 4; 62, nº 4 y 5 ; ADPCR. s.c.; y AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

⁵⁰ El desembolso ocasionado por tal motivo alcanza los 1.430 rs. de vellón, en un momento financieramente expansivo del Santo Tribunal (AHN. Div. Her., leg 59, nº 5).

⁵¹ AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

⁵² La Carta-Orden del Consejo de Castilla está datada el 20-VII-1728, Madrid, fechándose la comisión secreta hermandina de 12 de agosto, pero no siendo recibida por el referido ministro gaditano hasta el 30 de dicho mes y año (AHN. Div. Her., leg. 46, nº 10).

⁵³ Los comisarios que concurrieron fueron don Francisco Guillén, vecino de Puebla de Manilba; Juan Sánchez Romero, vecino de Castellón; Pedro de Luque Solano y don Joseph Mateos, afincados en Gaucín; Luis Martín de Palma, vecino de Algotocín; don Diego Merino, Francisco de Peña y don Cristóbal Vicente Terrón, oriundos de Jimena de la Frontera. La mañana del día fijado, un galeno local certificaba las enfermedades que imposibilitaban la incorporación de don Jerónimo de Maniera, vecino de Basarraba, así como de Francisco Rondes y don Luis de Padilla Córdoba, vecinos de Jimena de la Frontera, incorporándose luego éste último a la comitiva (Ib., s.f.).

⁵⁴ 2-X-1728, Jimena de la Frontera. Sin duda puede interpretarse como una manera sutil de coaccionar a los dependientes hermandinos, vistos con recelo por una justicia local decidida a no dejarse intimidar ni ver menoscabado su protagonismo en su propia jurisdicción. El que no fue un caso único lo demuestra que por entonces, y a raíz del referido mandato, los jueces comisarios Marcos Rodríguez Higuera y Juan Romero Escarcha -vecinos de Aljama-, al solicitar a su alguacil mayor que un escribano les asistiese en su próxima salida no tan solo

consigue demorar la salida durante meses, si no que son vejados con cargas concejiles y alojamientos; 9-X/11-XII-1728, Aljama (Ib., s.f.).

⁵⁵ Su título de juez comisario le fue expedido en Ciudad Real el 17-VI-1715 (Ib., leg. 43, nº 10).

⁵⁶ 29-V-1723, Sevilla (Ib., leg. 45, nº 26).

⁵⁷ Memoria remitida por los comisarios Manuel Nieto, Joseph Delgado, Juan de Porras, Alonso Cavezas, Francisco Campesino, Antonio González Bravo, Juan y Simón Martín; 3-IX-1729, Segovia (ib., leg. 46, nº 2).

⁵⁸ 2-II-1352; cit. J.M. SÁNCHEZ BENITO, *Santa Hermandad Vieja...*, op. cit., p. 290.

⁵⁹ 6-IX-1505 (Ib.). Esta demarcación fue refrendada por las ordenanzas talaveranas de 1523. Los estatutos dieciochescos de las entidades apícolas consignan el mantenimiento de un marco de 400 sogas -"de a nueve varas menos quarta cada una"- entre los colmenares, prohibiendo que en dicho perímetro penetrase el ganado para ramonear o comerse los brotes. Por la organización talaverana, en 1747, se establecía además otras 200 varas de perímetro en donde no podían realizarse faenas agrícolas, rozas, ni nuevas poblaciones de colmenas, salvo expreso deseo de su dueño o si no habían sido contrariados por ello en el plazo de un quinquenio.

⁶⁰ 4-IX-1306, Aliseda de Estena (BN. mss. 13.030, f. 119vº).

⁶¹ En los estatutos de la fraternidad de Talavera de la Reina se contempla la imposición de la sanción pecuniaria de 400 mrs. en el

supuesto de que se introdujesen rebaños a percibir por parte del guarda, colmenero o cuadrillero designado; mientras que el reglamento ciudarrealeno de 1792 prescribe el pago por parte del dueño de las reses de los daños y perjuicios estimados, más 1.000 mrs. de multa -dos tercios para el Santo tribunal y el tercio restante para el acusador-, incrementándose dicha cantidad en caso de reincidencia. Por otro lado era práctica usual el que las reses quedasen como prenda en poder del agraviado hasta que fuese resarcido de sus pérdidas.

⁶² El 23-VIII-1554 Antonio Treviño, apoderado de la Hermandad Vieja manchega, elevaba queja ante el regimiento de Luciana y al teniente de alcalde mayor de Almodóvar del Campo, cabeza de partido de la comarca, al estar persuadida y alarmada la asociación colmenera de que

"...querian talar los dichos montes y poner fuego a ellos por virtud de cierta costumbre o carta executoria que dizen tener para ello...por necesidad que entonces habia de arrasas tierras de labor e pastos lo qual no tiene agora a el dicho consejo porque tiene arrasado mucha cantidad de su termino para labor e muchas dehesas en que tienen para sus ganados y lavores sobre tanta cantidad que venden a forasteros en mil ducados y mas cada año."

El delegado hermandino alegaba que los fuegos dañaban corchos, marcos y losados, solicitando que fuese revocase dicha ejecutoria, si es que existía, replicando la justicia que había necesidad de extender los cultivos y poner en fuego los montes para ahuyentar a las alimañas (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 26, s.f.).

⁶³ Vid. M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, "Caridad y asistencia social...", pp. 57-58 y 64-65.

⁶⁴ AMT. caja 2, leg. 1, nº 13.

⁶⁵ 25-VI-1583 (BN. mss. 13.030, f. 78vº).

⁶⁶ 17-XII-1604, Toledo (AHN. Div. Her., leg. 63, f. 61r).

⁶⁷ 35-IX-1624 (AMT. caja 2, leg. 1, nº 21).

⁶⁸ El 27-XII-1638 los fieles del juzgado toledano prohíben que en los montes de su jurisdicción urbana hubiese cuadrilleros ni escribanos hermandinos de forma permanente sin el preceptivo consentimiento municipal (Ib., leg. 1, nº 24).

⁶⁹ 1-VIII-1665 (AHN. Div. Her., leg. 64, nº 7, s.f.).

⁷⁰ Se suprimía de esta manera todo el capítulo 45 de sus estatutos en el que, a grandes rasgos, se fijaba que en la jurisdicción de 400 sogas alrededor de los enjambres no pudiese pastar ninguna res, so pena de la pérdida de un quinto del rebaño embargado o su equivalente en metálico si el hato que estaba en el egido era inferior a cinco cabezas, y su duplo en caso de reincidencia; igualmente prohibía que solo pudiese permanecer el ganado del dueño del colmenar un día en las cercanías de la posada, únicamente cuando fuese de paso, so pena de diez cabezas de ganado ovino o caprino, una cabeza de cada piara o cuatro reales por cada res de la vacada. Op. cit., pp. 45-46.

⁷¹ Considera B. GONZÁLEZ ALONSO que los juicios plenarios rápidos aunaban la cognición completa de los asuntos criminales y la prontitud en la substanciación de la causa, siguiendo la estela de la

"...cláusula canónica "simpliciter et de plano ac sine strepitu et figura iudicii", que con posterioridad a su fijación en la clemantina Saepe Contingit de 1306 inspira procesos sumarios civiles y penales, como por el de la jurisdicción mercantil y el de la Santa Hermandad."

Vid. "La Justicia", *Historia de España*, t. 2, Madrid, 1988, p. 398.

⁷² 4-IX-1385 (BN. mss. 13.030, f. 123r).

⁷³ Paralelamente a esta evolución procedimental, se planteaba en Castilla la necesidad de abreviar los juicios ordinarios extensos propios de las instancias de justicia regios. Juan I en 1387, y los Reyes Católicos en 1476 prohibieron los debates de letrados, limitando el número de sus escritos de conclusiones a dos por cada parte; posteriormente se dictaron otras normas con idéntica orientación: reducción del contenido de las demandas, posibilidad de que las alegaciones fuesen orales, etc. ante la diversidad jurisdiccional del Antiguo Régimen, los juicios plenarios, en lugar de dar paso a un tipo unificado de carácter abreviado, derivaron en un conjunto procedimental heterogéneo; vid. V. FAIRÉN GUILLÉN, *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la recepción del derecho procesal común; sus causas y consecuencias en doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953.

⁷⁴ Estas características, propias del mundo jurícido-político extraoficial, fueron apuntadas en su día, entre otros, por A.M. HESPANHA, *Vísperas de Leviathán. Instituciones y poder político (Portugal. Siglo XVII)*, (1ª ed. Lisboa, 1986), Madrid, 1989.

⁷⁵ Pervivencias de este sistema de admitrar justicia pervivieron tras la Edad Media; sin duda el más conocido de ello es el Tribunal de las Aguas de Valencia, en donde representantes de las acequias comarcanas dirimen colegiadamente los pleitos suscitados por el uso y distribución de los regadíos. Mucho menos conocido, pero más próximo a la figura de los alcaldes hermandinos y como ellos hace siglos desaparecido, era el juez albarráneo de Huesca, provisto por el

concejo hoscense para proceder en casos extraordinarios contra los malhechores y cuya sentencia era inapelable; dicho dignatario judicial fue confirmado el 22-IX-1607 por el virrey de Aragón, siendo su procedimiento sumarísimo muy abreviado, datando de entonces el dicho popular "Guárdete de la albarrana de Huesca"; cit. R. ARCO Y GARAY, "La justicia criminal en Huesca durante el siglo XVIII", en *Revue Hispanique*, separata al t. 42, 1911.

75 Paulatinamente se impuso el requisito de preparación jurídica para ocupar cargos en la magistratura, así la real pragmática de 6-VII-1493, en la que eleva ligeramente la edad mínima exigible y se establece en diez años el tiempo de preparación universitaria requerida; asimismo, la Segunda ley de Toro les obligaba a acreditar su debido conocimiento del derecho real. A pesar de tales mandatos, lo cierto es que su cumplimiento distó mucho de ser riguroso, pues junto a los corregidores letrados había homónimos "de capa y espada", siendo frecuente que alcaldes mayores y gobernadores careciesen de tales cualificaciones profesionales, quedando sujetos a actuar con asesor en cuantas diligencias judiciales practicasen.

76 Siéndonos al periodo que nos ocupa, sólo conocemos un único caso en que los alcaldes pretendiesen excusarse de esta obligación, aunque probablemente las fuentes silencien interesadamente este aspecto procedimental hermandino. En octubre de 1599 Alonso Rodríguez, guarda de viñas de Belmonte, se querelló ante la justicia ordinaria de Villamanrique de unos porqueros que le agredieron en el yermo, pero cuando la Hermandad General local intenta capturarlos pronto hubo de desistir de ello ante la resistencia de los inculpados; el 24-XII-1599 una ejecutoria del Supremo Consejo ordena a los alcaldes hermandinos ciudarrealeños entender en dicho pleito ante la pasividad de las

autoridades locales y la negativa de la Hermandad Vieja de ejercer su ministerio pretextando sus múltiples ocupaciones; impelidos desde la Corte, el Santo Tribunal manchego haría todas las diligencias acostumbradas para intentar esclarecer los hechos denunciados ante su audiencia (AHN. Div. Her., leg. 28, nº 9).

⁷⁸ Entre 1633-1635 ejercieron ininterrumpidamente como alcaldes don Juan Correa Loaysa y don Gonzalo Muñoz de Loaysa; el primero reemplazó a don Gabriel Muñoz de Prado a fines de 1633, posiblemente debido a su defunción o a su prolongada ausencia de la ciudad; y éste a su vez en septiembre de 1635 abandonó su cargo interinamente a don Pedro del Saz Treviño Correa; el segundo llegaría a permanecer tres periodos anuales consecutivamente en el empleo, siendo relevado en la elección de 1636. Don Agustín Bermúdez Mesia de la Cerda ejerce como tal entre 1637-1639. Las ocasiones en que fueron reelegidos ambos alcaldes para un segundo mandato serían escasísimas, aconteciendo dicho supuesto durante el periodo 1638-1640. Vid. apéndice documental nº 7.

⁷⁹ Era condenado Cristóbal Esteban a ser sacado en una bestia de albarda con una soga al cuello, siendo azotado doscientas veces por las calles de Ciudad Real, a dos años de remero sin sueldo en las galeras y en 4.000 mrs -pormediados para gastos de justicia y como pena de Cámara-, en las costas procesales tasadas por la entidad y la devolución de los borregos hurtados a sus legítimos dueños; 22-VII/22-VIII-1611 (Ib., leg. 32, nº 4).

⁸⁰ 10-IX-1611, Ciudad Real. Terminado el periodo fijado para ostentar las varas, los alcaldes entrantes don Pedro Treviño de Hoces y don Jerónimo Velarde ordenaron que fuese conducido el reo a la Caja de

Toledo el 7-X-1611, constando que llegó a la Ciudad Imperial tres días después (Ib.).

⁸¹ M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, op. cit., pp. 217-220.

⁸² Cit. R.C. KAGAN, *Lawsuits and litigants in Castile, 1500-1700*, Chape Hill. 1981, p. 35.

⁸³ Vid. nota 77.

⁸⁴ Sin duda una cantidad tan elevada para un simple campesino o jornalero solo podía ser adelantada por su patrón, un acaudalado labrador hacendado de Villanueva de los Infantes; 17-III/17-V-1600 (Ib., leg. 28, nº 9).

⁸⁵ Los reglamentos toledanos de 1740 argumentaban la reducción del cupo de los hermanos "mediante que ya no ay stilo de asistir un hermano para las Audiencias de cada semana como antes se practico" (Ib., leg. 71, nº 3, s.f.).

⁸⁶ En el polo opuesto se encontraban don Francisco Antonio Tribiño y Dávila, alcalde hermandino a caballo entre 1745-1746, colegial mayor arzobispal de la Universidad salmantina, futuro fiscal de la Real Audiencia de Cataluña y consejero del Real de Hacienda, quien a su muerte dejó una relativamente notable biblioteca, no sólo por el centenar largo de títulos, sino por la calidad de las obras entre las que abundan las de temática legal, historicista, literario, militar, humanístico y de práctica económica. Curiosamente este individuo, a la sazón primer marques de Casa Treviño-Gótor, parece imbuido de las ideas enciclopedistas si nos atenemos al título de algunos volúmenes,

contándose entre ellos una edición francesa de La Enciclopedia en una época en que el estallido revolucionario del país vecino comenzaba a agitar las conciencias de medio Mundo; 13-VII-1792, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 543, ff. 32r-57r).

⁸⁷ Nominación de asesor a favor de don Joseph Sánchez de Torres; 18-IX-1732, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 3, nº 14, ff. 6r-7r).

⁸⁸ En un complicado pleito substanciado por el Santo Tribunal manchego, suscitado por la disputa de una alquería, llegando a allanarse moradas y a conculcar derechos inalienables, los alcaldes enviaron a las villas de Alhambra y de Membrilla -Ciudad Real- al asesor licenciado Juan de Torres Treviño con vara alta de justicia, acompañado de un escribano y dos cuadrilleros, hiciesen las diligencias pertinentes para esclecer los hechos. Encausado el labrador y mesonero Diego de Prado, su procurados cuestiona la imparcialidad del letrado, suplicando que pues

"V. md. manda depositar seis ducados para asesoria por aver recusado al asesor y en esta ciudad quedan letrados y el pleito es facil y no guarde y basten dos ducados de asesoria los quales estoy presto a depositar. A v. md. pido y suplico mande admitir el deposito con proposicion que hago que si el letrado que la sentencie tasare mas asesoria la dare y pagare."

4-IV-1603, Ciudad Real (Ib., leg. 30, nº 1).

⁸⁹ La doctrina es diáfana al respecto, tanto como parte interesada como intentar para corregir los frecuentes abusos perpetrados por los legos, coincidiendo en que era preferible que el juez contase con la oportuna formación letrada y recomendando que recayesen en quienes la tuviesen las magistraturas del Reino. A fines del Quinientos Alonso de Heredia ya consignaba que

"...a los que huvieren de elegir Iuezes que los busquen y procuren letrados, aunque a ello de rigor no sean obligados pues...hay tanta abundancia de ellos, y con las partes y qualidades que los otros que no lo son, y mas las letras; las quales no embota la lança, antes escusan de un acesor (sic) y evitan el rodeo que resulta de tener Iuez sin letras..., y siendolo todo uno, se despachan muchos mas negocios, y las audiencias y Republica andan mejos servidos y concertadas: y hay mejor lugar para suplir el Iuez los defectos de los abogados."

Vid. *Dechado de iueces en el qual se hallara la muestra de qual deve ser un buen iuez*, Valencia, 1566, ff. 66v2-67r.

⁹⁰ 16-XII-1602, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg 29, nº 5). Tales sospechas no eran tan infundadas como cabría suponer, pues el padraastro del principal indiciado en la causa era el teniente de gobernador de Abenójar, oficial que junto a su equivalente del relengo -el alcalde mayor o el teniente de corregidor- era en quien se solía delegar la substanciación de las labores judiciales en último término por parte de las máximas autoridades concejiles, persuadido de que ser esa causa la que motivaba que

"...nadie se atreve a decir su dicho en esta causa contra el dicho reo y que a todos los testigos que se entendia abie de presentar mi parte los llevaban primero a la casa del gobernador de la dicha villa a quel los hablase para que no dijesen y que por mi parte con grande secreto trujo del campo uno o dos testigos a decir sin que los dijese ni hablase primero el dicho gobernador le quiso prender a mi parte y le trato muy mal de palabra y le fue forçado retraerse..."

Y el 21-II-1603 solicita que el detenido, Juan Hernández, que tenía por prisión la capital manchega, siguiese recluso en la galera hermandina.

⁹¹ 8-III-1603, Ciudad Real (Ib., s.f.).

⁹² 10-III-1603, Ciudad Real (Ib., s.f.).

⁹³ Al mismo tiempo, el procurador de Francisco Fernández Paniagua, alcalde ordinario y ya citado oficial de justicia de Abenójar exculpaba a su parte al ser el único testimonio inculpatorio el de su enemigo capital, despedido por haberle desplazado recientemente de la notaría pública de esta villa manchega, alegando que

"...no puede ser acusado ni molestado sobre ello durante sus oficios de alcalde mayor y alcalde ordinario con qualesquiera de los quales tiene mero y mixto imperio y los tales jueces durante sus oficios no pueden ser acusados de delito alguno, no solamente ante otros -alcaldes- ordinarios ni ante jueces pesquisidores...no trayendo spezial comision contra ellos."

(Ib.)

⁹⁴ 22-XII-1611, Toledo (AMT., caja 2, lag 1, nº 19).

⁹⁵ El el siglo XVI, con la subida al trono de los Habsburgo, la incontestable primacía del Consejo Real -embrión de su sucesor institucional, el de Castilla, como instrumento gubernativo y contencioso central por excelencia del Reino-, se permitía a las Chancillerías salir de la esfera cortesana en la que se habían desenvuelto hasta los epígonos Trastámara -al considerarse la justicia emanación de la figura regia-, para situarse en el plano de la administración de justicia territorial. A lo largo del Setecientos cristaliza una tendencia, si bien apuntada en los siglos precedentes: la merma de competencias territoriales de las chancillerías en favor en favor de las audiencias y, sobre todo, de atribuciones judiciales en beneficio de un Supremo Consejo que por su proximidad a la Corte siempre mantuvo un papel jurídico y de arbitraje jurisdiccional, coordinando todas las instituciones de la Corona, si antes preponderante ahora incrementado -aunque en detrimento de sus labores gubernativas y económicas, ahora asumidas por las juntas borbónicas-.

⁹⁶ Entregados voluntariamente al Santo Tribunal unos pastores sospechosos de haber incendiado el colmenar de Mirabuenos -en el término de Malagón y antigua propiedad del hermano ciudarrealeño Luis Mesía de Poblete- y obtenida la retirada de la querella al comprometerse a pagar daños y perjuicios a los damnificados, la condena de la magistratura hermandura se reduce a la pena de destierro y al pago las costas procesales devengadas; por ello el fiscal manifestó tres días después su voluntad de apelar a Granada en los quince días legalmente previstos; 21-VIII/20-XII-1602 (AHN. Div. Her., leg. 29, nº 4). En 1652 un auto judicial provisto sin asesor invalida las diligencias efectuadas desde entonces contra Juan Jiménez, evadido de la galera hermandina vestido de mujer y con un amplio historial delectivo de pequeños robos; afincado en la Corte durante 1652-1655, permaneció un tiempo asilado en un monasterio jerónimo de Talavera de la Reina, colaborando en sus labores agrícolas y ejerciendo luego como arriero, llevando a Madrid el azafrán cosechado en el priorato de San Juan; vuelto a detener hacia 1665, un año después era condenado a los doscientos azotes derivados de su fuga, a ocho años de galeras por reincidente y en las costas judiciales tasadas por el Santo Instituto; como quiera que su defensa letrada apelase a Granada el 11-VII-1666, este recurso resulta ser una estratagema para presionar a los jueces, ya que de inmediato se alcanzó el comprometiso de que renunciaría a la apelación si se perdonaba la pena aflictiva de azotes, permitiendo que unos días después se llevase a la Caja de Toledo (Ib., leg. 34, nº 3).

⁹⁷ 10-III/18-IX-1656, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nº 1).

⁹⁸ 15/17-XI-1664 (Ib., leg. 36, nº 3).

⁹⁹ 4/8-III-1667 (Ib., leg. 35, nº 4),

100 Un papel suelto dirigido al escribano numerario ciudarrealeño don Joseph García Alarcón informaba de ciertas irregularidades procedimentales de la Fraternidad Vieja local al expresar que

"Causas de garrote y saeta, sentenciadas por esta hermandad y ejecutadas sin consultar por los años de 1660, y siguientes de que hay muchas.

No se donde esta la Real Orden para consultar las sentencias."

(Ib., leg. 35, nº 6, s.f.)

101 Memorial, 7-II-1716 (AHN. Consejos, 3.163, nº 9, ff. 36r y ss.).

102 A caballo entre los siglos XVII y XVIII, Francisco Martín Ortiz, "Fernandillo", jefe de una partida de bandidos que asolaba Extremadura, era sometido por la Santa Hermandad de Ciudad Real a tormento sin resultados palpables. Remitido el proceso criminal a Madrid, el Consejo de Castilla atempera parcialmente su condena a la par que ordena

"...que los dichos alcaldes le saquen treinta ducados al dicho Don Valthasar Gonzalez Ibañez su asesor con cuyo parecer dieron la sentenzia de tormento por no averla consultado con Tribunal Superior y que se remitan a poder de Don Juan Manglano tesorero de la Sala para que los reparta en los pobres de la carcel...de su Casa y Corte..."

(Ib., leg. f. 44r).

103 En 1701 se sancionó a la Hermandad Vieja de Toledo con 300 ducados por ejecutar sentencias de azotes y galeras sin la preceptiva consulta a instancias superiores de justicia; y como el 23-VIII-2703 la Sala del Crimen de la Real Chancillería vallisoletana multaba a la magistratura hermandina de la Ciudad Imperial a 100.000 mrs., su cabildo suplica al Consejo de Castilla que dictaminase sobre las formalidades a seguir en tales dependencias, entendiendo que por

"...respecto de allarse cada dia el cavildo con semejantes sinsavores; pues se alla de no consultar y siempre los cavalleros alcaldes se acompañan con abogado aun para las mas leves determinaciones..."

La contestación de dicha instancia central prescribía que se llevase ante su audiencia la causa pendiente desde 1701, revocando la pena impuesta dos años después al considerar que puesto el defecto de forma

"...era solo no haver consultado sus partes y hallarse en posesion de no haver executado tal cosa nunca si se le ubiese de precisar a esto se seguirian gravisimos perjuicios el primero hera el corto caudal que el cavildo thenia dedicado solo a fin tan cristiano como el de seguir los reos, el segundo que si se permitiese estar liga de consultar, el aumento de los gastos no se podia dudar, y demas de esto el que se exponia por la dilazion el peligro de morirse los reos o hazer fuga..."

5-IX-1703, Madrid (Ib., leg. 68, nº 3, s.f.).

104 Memorial de 17-V-1717, Toledo (Ib., leg. 70, nº 1, s.f.).

105 El marqués de Villater y alcalde hermandino don Gaspar Sancho Barona consultaba al presidente del Supremo Consejo sobre la pena a imponer a Marcos del Castillo, habida cuenta de los cortos medios del Santo Tribunal manchego y que por su costa talla sería desestimado al servicio militar, ordenándose su envio al presidio de Ceuta para que trabajase en su fortificación; 29-VI-1739, Ciudad Real (Ib., leg. 49, nº 3).

106 Un ladrón de cera en la actual provincia de Albacete es detenido por un ministro superior dependiente de Ciudad Real y llevado a la sede del Santo Tribunal en 1731. Como quiera que la galera estaba repleta, temiéndose por la seguridad de los reclusos y carceleros, y la causa era ralentizada en Granada, suplica el cabildo apícola manchego que sus causas criminales fuesen dirimidas ante los Reales Consejos o por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, pues en la Sala

del Crimen andaluza era tal el trabajo acumulado que la conclusión de los procesos se dilataba indefinidamente (Ib., leg. 46, nº 2, s.f.).

¹⁰⁷ Una Real Provisión recordaba a los jueces inferiores que debían consultar las penas graves impuestas ante el tribunal superior correspondiente, ya que los alcaldes de la Hermandad General de Vallecas -Madrid- habían hecho cumplir sin consulta previa la sentencia de cuatro años de presidio dictada contra uno de sus reos; 29-VIII-1742, Madrid (AHN. Consejos, lib. 1,478, nº 58).

¹⁰⁸ En el proceso seguido contra el cuatrero Francisco Antonio Blanco, vecino de Santa Eufemia, en 1708, dicho encausado intenta sobornar al comisario captor que lo conducía a Ciudad Real en el convencimiento de que por sus culpas la justicia ordinaria lo hubiese condenado sólo a destierro, en tanto que "este tribunal -de la Santa Hermandad Vieja- apuraba mas las cosas y era mas dificil la salida". No se equivocaba el reo, ya que aparte de dilatarse la sentencia definitiva quince meses, pese a desistir de apelar a Granada, fue enviado a la Caja de Toledo para desde allí marchar a Melilla como gastador durante seis años (AHN. Div. Her., leg. 40, nº 6).

¹⁰⁹ M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, p. 100.

¹¹⁰ Por regla general la parte afrentada recurre a otra instancia, ajena altribunal que lo había encausado en primer término para evitar parcialidades que lo perjudicasen. Este proceder se fundamentaba en una interpretación restrictiva de las leyes de Hermandad, que dejaba dicho supuesto legal en manos de la justicia ordinaria; J. HEVIA BOLAÑOS, siguiendo la respetada autoridad del jurisconsulto AZEVEDO, aseveraba "que no pueden castigar al castigo que ante ellos perjuraré;

porque no se puede estender su jurisdiccion a mas de los casos expresos", entre los cuales la perjuria no esta contemplada; Vid. *Curia Philipica*, (1ª ed. 1612), Madrid, 1717, p. 133.

111 Un grupo profesional especialmente expuesto a esta eventualidad lo constituye el integrado por los guardas de campo, particulares o concejiles, encargados de celar por la integridad de las explotaciones rurales. Su labor será motivo de recelos de algunos de sus convecinos, en tanto que solían velar por los derechos de los hacendados frente a otros intereses privados o comunales. Así, en octubre de 1675 se procedía contra Matías Fernández guarda de viñas acusado de hurtar ropa de una quintería perteneciente al hidalgo ciudarrealeno don Cristóbal Muñoz Treviño, quimera en donde parece subyacer la animadversión de los sirvientes portugueses de dicho potentado local contra el sospechoso (AHN. Div. Her., leg. 38, nº 1). Casos semejantes en Ib., legs. 34, nº 1; 39, nº 3, etc.

112 En 1702, unos comisarios hermandinos embargaban los bienes de Juan Cano, indiciado por unos robos a los hermanos Merino, retrayéndose el acusado en un templo de Lucena. Comprobado el dolo que suscitó tal acción legal y hallarse los querellantes envueltos en un caso de rapto y amancebamiento, los indignados ministros manchegos viéndose burlados les exigieron mil reales por las molestias causadas, debiendo intervenir la Real Chancillería granadina para dilucidar las responsabilidades de cada parte (Ib., leg. 40, nº 1).

113 A. VILLADIEGO DE VASCUÑANA identifica querella y denuncia, manifestando que

"El pleito de oficio de justicia por via de denunciacion, se hace, o en razon de algun delito publico del qual puede denunciar o acusar cualquier del pueblo, o en razon de oficio

particular, quando el fiel o guarda de alguna causa le toca a su oficio...y pareciendo ante el Juez y Escribano pone su acusacion y denunciacion por via de auto, diciendo que estando prohibido por leyes de estos Reynos, y cometido tal delito, que le acusa y pide, se a condenado en las penas -que- ha incurrido. y hubiere lugar de derecho."

Op. cit., pp. 75-76.

114 Los ejemplos se suceden. El 18-XI-1627, María Fernández, en su nombre y en el de hijastra María del Prado sujeta a patria potestad, se querellaba contra unos cabreros de Caracuel implicados en el robo de unos machos cabríos de su rebaño (AHN. Div. Her., leg. 33, nº 4); y el 10-I-1735 comparecía ante los alcaldes de la Hermandad Vieja un vecino de Almodóvar del Campo manifestando que tras haberle extraído unos cerdos de una zahurda de su propiedad en Retamar, un mayoral del marqués de Peñafuente había intentado venderlos en la capital manchega (Ib., leg. 49, nº 9).

115 El 24-VI-1701 Luis de Noba, apoderado de un miembro preeminente del Santo Instituto es encargado de conducir los rebaños del caballero manchego a invernar a Extremadura, entregándole para cubrir los gastos 9.000 doblas y 111 doblones. En la villa de Agudo se echa a faltar el dinero, siendo culpado Miguel García, bracero del Campo de Montiel contratado cono guía, actuándose contra él hasta su excarcelación por falta de pruebas (Ib., leg. 39, nº 1). En 1724 el batanero Juan de Cañizares Espinosa es objeto del hurto, en las orillas del Guadiana

"...de mucha porcion de ropa teñida de dicho batan y empezado a dar aguas de greda para batanarla a diferentes dueños que la abian entregado en la villa de Almagro y en otras partes..."

Sospechando de una familia, que a la postre resultó estar implicada al hallarse pruebas irrefutables de su culpa (Ib., leg. 45, nº 10).

116 Don Manuel Xédler, miembro destacado de la oligarquía machega, expuso ante el Santo Tribunal el robo con asesinato perpetrado por unos bandidos contra sus sirvientes que volvían de vender unas caballerías de la feria de Nogalejo; 15-IX-1624 (Ib., leg. 33, nº 2).

117 El 20-II-1601 el procurador del ciudarrealeño Antonio Bermúdez presentó querella ante uno de los alcaldes hermandinos ante el reiterado expolio que sufrían sus rebaños de cerda y mulares (Ib., leg. 29, nº 2; otros ejemplos en Ib., legs. 29, nº 5; 30, nº 2 y 31, nº 6).

118 El almagreño Gabriel de Estrada presenta querella mediante apoderado contra unos vecinos de Carrión de Calatrava que apedrearón a sus criados cuando se dirigían a retirar unas gavillas de sarmientos en un pago de su propiedad (Ib., leg. 32, nº 1).

119 Francisco Cano se quejaba, en marzo de 1727, que su denuncia ante al teniente de corregidor de Huelva no tenía el curso debido, siendo demoradas las diligencias para restituirle un potro que pastaba en las marismas de Almonte por resultar indiciado un guarda de campo concejil (Ib., leg. 47. nº 3).

120 Eran raras las infracciones en yermo que escapaban efectivamente a la jurisdicción hermandina, viéndose inhabilitados también los jueces ordinarios para actuar de oficio en los supuestos delictivos de injurias -palabras livianas- y adulterio, únicamente susceptibles de ser substanciados judicialmente por querella o acusación de los agraviados. La corte de justicia ciudarrealeña enjuiciará esporádicamente a difamadores y amancebadas, casi siempre considerando tales supuestos agravantes del delito de hermandad por el que son

encartados o esgrimidos como muestra de la vida licenciosa del indiciado.

121 Un comisario de Ocaña -Toledo-, yendo como lo hacía habitualmente al mercado local en busca de delincuentes, inquiere a un vendedor que manifestase el origen y procedencia de las cabalgaduras que de las que pretendía deshacerse; al no considerar convincentes sus explicaciones, procederá a su arresto y a incautar sus bienes; 6-VII-1606 (Ib., leg. 31, nº 2).

122 El 30-IX-1614 es aprehendido Joseph Sánchez, vecino de Ballesteros de Calatrava, pues, siendo público y notorio que era pobre, siempre disponía en su casa de miel y cera (Ib., leg. 32, nº 6).

123 Avanzado el verano de 1624, los alcaldes manchegos entendían del caso participado por un ventero a uno de sus dependientes del asalto con asesinato al arriero Andrés Delgado Borralló, vecino de Baños, en el camino del Viso del Marqués (Ib., leg. 33, nº 3). Son reiteradas las noticias sobre partidas de gitanos que atemorizaban cortijos, caminantes y aldeanos, amenazando la vida de los propios cuadrilleros (Vid., entre otros, Ib., legs. 4, nº 57 y 34, nº 1).

124 Ib., leg. 40, nº 5.

125 El arriero de Torralba de Calatrava Félix Núñez, trajinante de vino, se vió envuelto en una reyerta en la que poco o nada tenía que ver. Encargado por un carretero de Puebla de Don Rodrigo a que recogiese unas armas que estaban reparando en Pozuelo de Calatrava; cumpliendo la voluntad de su amigo retornaba con los efectos requeridos, entre los cuales se hallaba un cuchillo descompuesto. Tal

vez por ello dejase de pagar total o parcialmente lo debido al armero, pero lo cierto es que el camino de vuelta es sorprendido por dicho menestral y sus deudos y es vejado de palabra y obra, siendo apedreado y despojado del cuchillo en cuestión. Apresados los involucrados días después en la dehesa de Herrera, y conducidos luego a Ciudad Real, el 11-IV-1720 le era notificado al agraviado la apertura de expediente criminal, éste declara ante el escribano hermandino y los tres testigos preceptivos "que por lo que a el le toca nada tiene que pedir en esta causa". Al tratarse de un caso menor se excarcela a los detenidos, restituyéndose el cuchillo que motivó la disputa a su dueño al día siguiente (Ib., leg. 44, nº 1).

¹²⁶ Unos vecinos de Lucena, acusados de diversos hurtos de aceituna, se benefician de que el juez comisario local no podía actuar contra ellos al inhibirse los notarios públicos de cumplimentar las formalidades requeridas, debiendo recurrirse a escribano eclesiástico el 16-I-1738. El 4-II-1738 desde Ciudad Real se le notifica que debía hacer la sumaria con notario público o real, remitiéndola luego a su audiencia, y suspender la enajenación de lo secuestrado en tanto se consultaba el caso al Consejo de Castilla (Ib., leg. 49, nº 11).

¹²⁷ Son numerosos los abusos perpetrados por los representantes de la fraternidad apícola manchega, por lo general cuando estaban implicados miembros de la comunidad gitana, perseguidos con especial saña entre 1695-1750, y con la anuencia del Supremo Consejo, la connivencia de sus superiores jerárquicos y la complicidad de la mayor parte de las autoridades locales del Reino. Buenos ejemplos de ello en Ib., legs 37, nº 2; 41, nº 16...

128 El comisario Juan García Bermejo procedió contra Blasco Barba, sospechoso del hurto de mieses en Capilla -Badajoz-. Apresado el indulpado en la cárcel de Peñalsordo, el escribano local se ausenta, motivando el aplazamiento de la sumaria al no contar el reo con los bienes precisos para recurrir a los servicios de un notario real. El ministro captor desconfía de la seguridad de la cárcel tanto como de la actitud obstruccionista del teniente de corregidor de la villa, solicitando a Ciudad Real ayuda de otros dependientes comarcanos; 17-X-1723, Peñalsordo (Ib., leg. 45, nº 26).

129 La doctrina judicial coetánea clamaba contra las maniobras de unos notarios que manejaban a su antojo a las justicia locales iletrados, anteponiendo su voluntad de lucro al debido servicio público derivado de su profesión. Particularmente sensible al respecto se manifiesta J. ÁLVAREZ Y POSADILLA, cuando asegura que

"... en España los mas de los Tribunales estan presididos por Jueces legos, quienes en lo regular se dexan gobernar por los escribanos, y como estos carecen de la correspondiente instruccion para poder ser Directores de jueces, las ignorancias, equivocaciones, y aun malicias, hoy de uno y en una cosa, mañana en otra cosa de otro, tomados los unos de los otros, y aumentando los suyos, han ido creciendo, y aumentando los abusos."

Op. cit., t. 1, dial. 1, pp. 4-5.

130 El 16-XI-1673 don Pedro de Tovar y Arteaga, juez comisario de la entidad manchega, capturaba en Mejorada del Campo a tres sujetos porque al echarles el alto "y aciendo reparo en ellos bio que se abian mudado de color", tratando infructuosamente de huir son arrestados cuando, bajo amenazas, pretendían que un barquero les cruzase un río. Tras asegurarlos en dos casas particulares y en la cárcel local, al ser cacheados se les encuentran unas armas blancas, una dulzaina y una vara enroscada de justicia. Interrogados, resultan tratarse de un

soldado reenganchado, un dulzainero valenciano, y un aprendiz de sastre que tocaba el tamboril para ganarse la vida que acompañaban al segundo cuando se dirigía a Toledo a recoger su nombramiento de cuadrillero de la Hermandad Vieja de Toledo (Ib., leg. 37, nº ; otros casos semejantes en Ib., legs. 39; nº 2; 42, nº 4 y 10; 47, nº 12; 50, nº 3 y 51, nº 5).

¹³¹ A fines del Setecientos se hace entrega al alcaide hermandino de cuatro bandoleros que merodeaban en Sierra Morena, integrantes de una partida mayor, arrestados por un juez superior y un ex-sargento de caballería que conducían el dinero del duque de Medinaceli a la Corte cuando pretendían asaltarles; 7/9-IV-1798 (Ib., leg. 53, nº 3). Dicho incidente fue sucintamente citado y su sentencia transcrita publicada, por F. TOMÁS Y VALIENTE, *El derecho penal...*, op. cit., p. 270 y 438-439.

¹³² Desaparecido hacia 1722 el arriero Francisco de Velasco, mientras llevaba una partida de trigo al molino del Emperador, fue buscado durante días sin resultado. Apresados por tal motivo un valenciano y otros sospechosos, saldrán bajo fianza al demostrar tener coartada. A principios de 1723 un ministro superior sevillano recibía el testimonio de un puertollanense que dice haber reconocido el mulo del trajinante en la recua de unos comerciantes pañeros itinerantes de Yecla que vendían encajes. En vista de tal indicio se toma declaración en una cárcel de Sevilla al mercader Juan Palao, quien declara haber comprado la bestia en la feria de San Andrés valenciana, y puesto que en una rueda de presos -ya en Ciudad Real- dicho comerciante niega conocer al vendedor de la caballería, no constando tampoco el cadaver del ausente, se sobresee el caso, devolviéndose lo incautado al murciano; 4-XI-1722/26-V-1723, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nº 12).

133 Cuando en febrero de 1751 se querellan varios hermanos del Santo Instituto de los daños provocados a sus colmenares en el término de Miguelturna, los alcaldes enviarán al tenente de escribano y ministro superior de la entidad Vicente García Prieto. Tras manifestar su comisión ante el alcalde ordinario de la villa, pasa a reconocer el estado de las posadas del lugar de Navalaencina, notificando la muerte de los enjambres mediante la curiosa fórmula de informar a sus superiores de que "por dicho colmenar -hay- mucho ganado muerto de las colmenas que destrozaron" (Ib., leg. 50, nº 15, s.f.).

134 Aunque suelen tratarse de bienes semovientes u objetos personales de pequeño tamaño, fácilmente trasportables, el volumen de algunas pruebas periciales no parece ser óbice para su traslado ante los jueces instructores en determinadas circunstancias: si a fines del Quinientos un arca conteniendo diversas evidencias judiciales recorre media Andalucía, escoltada por ministros manchegos hasta la sede del Santo Tribunal (Ib., leg. 56, nº 23); en 1749 una reja de forja quebrantada de la ermita de Nuestra Señora de Finisterre -ubicada en las proximidades de Los Yébenes- es reconocida por unos hereros de Consuegra -Toledo- y por otros tantos peritos en la misma Ciudad Real (Ib., leg. 50, nº 12).

135 El proceso criminal incoado en la aldea del Almendro-condado de Niebla-, por el homicidio de un joven presumiblemente por su madrastra y su padre legítimo concita la asistencia como perito de un cirujano local, emitiendo la información jurada de que el cadaver se encontraba

"...todo acardenado de que se infiere fueron golpes de piedra que con mano le dieron y otras señales en la garganta de que se ynfiere fueron hechos con motivo de ahogarlo cuia muerte con dichas señales fue violenta y no natural..."

29-XII-1718 (Ib., leg. 43, nº 3, f. 3vº).

¹³⁶ Cortes de Madrid, 1551, pet. 77; en *Cortes de los antiguos reinos...*, op. cit., t. 4, p. 534; cf. M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, op. cit., p. 191, not. 43.

¹³⁷ En el proceso seguido contra tres guardas de campo de Bujalance acusados de robar una mula a un labrador de Montoro, coinciden en declarar contra los reos dos comisarios convecinos del delator sabedores de "otras picardias llevandose en ocasiones algunos objetos...-a quienes- se les an dado mas de fuerza que de grado por escusarse de alguna pesadumbre"; 22-VII-1701 (Ib., leg. 39, nº 3, f. 8r). Como quiera que entre los testigos de cargo también hubiese un porquero de once años que asegura haberles visto conduciendo la caballería en cuestión a medianoche, así como habida cuenta de las particulares circunstancias que podían inhabilitar a los citados testigos y que uno de los testigos inculpatorios se desdice de su declaración sumarial por haber sido presionado para efectuarla, los reos lograrán su libertad el 23-XI-1701, dos meses después de pasar a disposición judicial.

¹³⁸ M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, op. cit., pp. 192-193.

¹³⁹ Generalmente se trata de delitos menores realizados en lugares lejanos de la capital manchega, cuando los reos se consideraban lo suficientemente seguros para no suponerse su fuga o la injerencia de las autoridades locales, y cuya resolución se prevee próxima. Medida excepcional durante el Seiscientos, sería relativamente frecuente durante la siguiente centuria, pero sin perder su carácter ocasional y motivada por la saturación de las celdas hermandinas o en momentos

financieros delicados cuando los bienes incautados no podían enjugar su traslado. He aquí un ejemplo: un mes después de haberse denunciado el robo de un rucio, el cuerpo del delito era localizado en poder de un mesonero de Zalamea, quien inculpa a un esclavo mulato. El indiciado permanece tres meses en la prisión pública de Castuera, manteniéndose de la caridad privada, siendo evidente que no podría satisfacer las costas devengadas; condenado el 28-IV-1727 a destierro de dicha villa, el 20-X-1727 llegaban ante la magistratura hermandina los autos originales y los justificantes de sus gastos, reembolsándoselos a los comisarios extremeños que los habían adelantado (Ib., leg. 46, nº 7).

¹⁴⁰ Ib., legs. 4, nº 22; 46, nº 10; 48, nº 11 y 12.

¹⁴¹ Ib., leg. 43, nº 13.

¹⁴² Ib., leg. 43, nº 6.

¹⁴³ Ib., leg. 43, nº 11.

¹⁴⁴ El juez comisario gaditano don Francisco Pérez de Santos se queja que en dicha ciudad andaluza había diversos dependientes de la Hermandad ciudarrealeña pero ninguno con la calidad de juez superior por lo que, siendo preciso trasladar unos reos a Granada bajo el mando de un superior jerárquico, terminará siendo ascendido en el escalafón; 31-X-1718, Cádiz/8-XI-1718 Ciudad Real (Ib., leg 43, nº 14).

¹⁴⁵ Perseguido un lacayo fugado con los bienes confiados por su amo por un sobrino de éste hasta que en un mesón de Santa Cruz de Mudela sea arrestado por el ministro superior Pedro Laguna Caballero; el

dependiente hermandino alega la imposibilidad de ausentarse de la villa ya que estaba siendo procesado por su alcalde mayor, debiendo entregar al preso para su traslado a un ministro de la cercana Torrenueva; 11/30-XI-1717 (Ib., leg 45, nº 15).

¹⁴⁶ Tales contratiempos formales no serían raros durante el siglo XVIII. Cuando un ministro superior requirió a su homónimo don Francisco Pedro, éste se niega al actuar bajo sus órdenes en la próxima salida, siendo aún mas grave la actitud del juez comisario Ambrosio Pérez

"...el qual esibio su titulo y reconocido se contenia todo todo el de un pliego de papel de manoescrito con el sello rompido, y de mas de treinta y cuatro años, y dijo no aver usado de el en todo este tiempo, ni se hallava en disposicion de su uso."

21-III-1731, Marchena (Ib., leg. 46, nº 2).

¹⁴⁷ Ib., legs. 39, nº 6; 41, nº 19; 43, nº 6...

¹⁴⁸ Capturado un cuatrero de Huelva, a su paso por Cazalla de la Sierra -Sevilla- su alguacil mayor requiere al ministro que lo conducía con una real provisión del Consejo de Castilla que le obligaba a trasladarlo de la galera local en el plazo de doce días a contar desde el ingreso en su celda, en tanto que los alcaldes ordinarios le deniegan el oportuno auxilio de guardas. Por todo el comisario hermandino debió costear de su patrimonio su traslado precipitado a Guadalcanal (Ib., leg. 23, nº 81).

¹⁴⁹ Ib., legs. 23, nº 79; 42, nº 16; 45, nº 7; 46, nº 7; 47, nº 2...

¹⁵⁰ Ib., legs. 2, nº 23; 6, nº 63; y 41, nº 6, entre otros.

151 Ib., legs 42, nº 12 y 50, nº 18.

152 Fueron relativamente reiteradas las acusaciones cruzadas de cohecho entre las justicias locales y los dependientes hermandinos. En 1662 se recibía en la capital manchega una misiva de los alcaldes ordinarios de Villahermosa -Ciudad Real- dando cuenta de la captura de seis gitanos reclamados por ladrones desde Molina de Aragón -Guadalajara- ofreciendo a la Santa Hermandad Vieja el conocimiento del asunto. Dos días después llegaban a dicha villa el teniente de alguacil mayor del Santo Tribunal, un notario y un cuadrillero para hacerse cargo de los reos, bienes y autos incoados, pero al día siguiente les era notificado que eran reclamados los castellanos nuevos por el juez eclesiástico de Villanueva de los Infantes, pese a valorar como inexistente su asilo por los testimonios de sus captores y la escasa fiabilidad de los testimonios que lo sustentaban -los de unos soldados "de poca seguridad, falsos y jente vil-; poco después manifestaba un transeunte que era notorio que entregaron 300 rs. presumiblemente al "alcalde más alto de los dos -pues- era tan codicioso que si les daría algo o prometido los dichos gitanos no los entregaría", declarando el notario Rafael de Macaya que

"...oyo decir publicamente y en especial a don Alonso de Morales, abogado de dicha villa que los alcaldes de dicha villa y Andres de Moya ante quien pasava la causa estaban sobornados...y el prinzipal que tenia la culpa era el dicho Andres de Moya escrivano que era que lo disponia todo..."

Dicho oficial hermandino dice poder demostrar que las cabalgaduras y ropas incautadas a los gitanos habían sido llevadas ante los alcaldes ordinarios, quienes la distribuyeron entre el vecindario para su ocultación de los ministros ciudarrealeños. tras improbas diligencias les serán entregados reos, secuestros y autos, aunque los detenidos luego fueran conducidas a un sagrado de Alcubillas, procediéndose contra uno de los encubridores de las pertenencias de los inculpados;

17-IX-1662/27-VII-1663 (Ib., leg. 36, nº 2; otros casos en Ib., leg. 41, nº 1 y 44, nº 9).

153 Son continuas las imputaciones por parte de los cuadrilleros de que las autoridades locales apadrinaban gitanos, como las vertidas contra las justicias de Baeza, en 1705 (Ib., leg. 40, nº 3); las de Baza, en 1706 (Ib., leg. 40, nº 4), los ordinarios de Linares, en 1708 (Ib., leg. 39, nº 10), los capitulares de Carmona, en 1728, etc. Menos ambiguas, por probadas, fueron las recriminaciones dirigidas por un madrileño asaltado en Coca hacia 1723, quien a través de un ministro superior de Aguazul notificaba al Supremo Consejo que había presenciado que uno de dichos ladrones había vendido mercancía robada con la anuencia del alcalde mayor de Villalba de Adaja, lo que suscitó el despacho de una ejecutoria desde la Corte pidiendo explicaciones al justicia mayor en cuestión, amenazándole con recurrir a la audiencia correspondiente y nombrar pesquisidor que determinase el posible dolo de su conducta; 17-III-1725, Madrid (Ib., leg. 45, nº 26).

154 Los lugares habilitados para albergar a los reos son de lo más variopintos, abarcando su tipología desde las pequeñas cárceles públicas de diminutas aldeas como la de Castellar de Santisteban en 1628 (Ib., leg. 34, nº 1); a lo sucedido en Mejorada del Campo, donde en 1673 dos reos eran repartidos en sendas viviendas de particulares bajo guarda y un tercero más peligroso encerrado en la prisión local (Ib., leg. 37, nº 1); pasando por lo acontecido en 1715 cuando cuatro arretados serán custodiados en las casas consistoriales de Albelda (Ib., leg. 42, nº 4). Como consecuencia de la inexistencia de una estructura penitenciaria descentralizada adecuada a las necesidades, sobre todo en las pequeñas poblaciones, posibilita por ejemplo que en 1716 un portugués agujerease la techumbre de la pública galera de

Alosno (Ib., leg. 42, nº 10); que en 1731 el alcaide y portero de Alía negase tener responsabilidad alguna sobre dos reos capturados por ministros de Hermandad "a causa de ser una casa carzel abierta y pocas prisiones y tener que asistir personalmente a los señores del ayuntamiento desta villa" (Ib., leg. 47, nº 11, s.f.); o que en 1796 diez gitanos, y sus respectivas esposas, fuesen separados en Tomelloso, recluyéndose los varones en la galera pública y en el edificio del cabildo, pasando las mujeres a los aposentos de las casas particulares consideradas más seguras (Ib., leg. 53, nº 4).

¹⁵⁵ En Puerto Real, el 4-VIII-1741 se abortó un intento masivo de evasión protagonizado por los reos de una de sus celdas. Al cumplirse dos meses de dicha huida frustrada, tres reos hermandinos logran huir a través de un tunel practicado en el cimientto del calabozo mediante su propio orín (!), no tardando más que media hora en limar sus grillos. La madrugada siguiente se arresta al alcaide y comienzan las diligencias para volver a prender a los prófugos, quienes con toda seguridad contaron con ayuda exterior (Ib., leg. 50, nº 2).

¹⁵⁶ En 1611, el arrendador de la venta de Palacios no tan solo encubre las acciones de un apartida de forajidos que asolaban Sierra Morena, sino que llega al punto de que sus criados liberan violentamente a dichos malhechores, capturados por un comisario de Los Yébenes. El dependiente manchego, atemorizado, libera a los reos, pero logra arrestar a quienes le amenazaron. Este abuso tan flagrante por parte del ventero se explica por su parentesco con el jefe de los bandidos, de quien era cuñado (Ib., leg. 32, nº 3).

¹⁵⁷ En octubre de 1720, dos gitanos se libran de mayores pesadumbres alser comprada su libertad por un cirujano de toledano (Ib., leg. 44,

nº 5); y entre 1736-1737 los comisarios Angel Infante y su hijo son expedientados por dejar en libertad a unos castellanos nuevos de Morón de la Frontera que conducían al Santo Tribunal (Ib., leg. 4, nº 56 y 48, nº 12).

¹⁵⁸ Detenida cautelarmente parte de la familia gitana de los Pérez, integrada al menos por cuatro varones, en el molino de un presbítero de Villamyor, resultando herido un jóven y requisadas 16 caballerías mayores y menores, pero poniéndose en conocimiento de sus captores que merodeaban por las cercanías dos gitanos armados que se hacían pasar por soldados. Alarmados ante la posibilidad de ser atacados por sus cómplices, sus guardas dejan marchar parte de los apresados a la parroquia de San Martín en Lillo -Toledo-. Iniciadas las oportunas indagaciones, resulta que el alcaide local había huido y los tres guardas responsables de su custodia estaban ilocalizables, siendo embargados sus bienes por presumirse su culpabilidad en los hechos; 20/30-VIII-1720, Lillo -Toledo- (Ib., leg. 44, nº 3).

¹⁵⁹ Un caso clamoroso acaeció el 12-III-1732, cerca de Carrión de Calatrava: cuando era conducido el cuatrero Miguel Sabuquillo González por tránsitos desde Tomelloso a la capital manchega, a medianoche salen de un olivar seis soldados emboscados fuertemente armados que con el pretexto de arrestar al reo por desertor le liberan de los ministros hermandinos. Amonestado el responsable de la comitiva por negligente, el ministro superior parte en su búsqueda a su costa; tras ocho meses de infructuosas diligencias por La Mancha y Andalucía, retorna el juez superior ante los alcaldes, eludiendo la reclusión bajo fianza. Nueve años después de tal percance, su viuda aún reclamaba los derechos impagados al finado por parte del Santo

Instituto en razón de dichas actuaciones contra los malhechores (Ib., leg. 48, nº 1).

160 El jornalero madrileño Gabriel Antonio, gitano vagabundo, era detenido por un alcalde hermandino el 1-II-1690 en las afueras de Membrilla -Ciudad Real-. Aquejado de diversas molestias, es reconocido por un médico a instancias del alcalde captor, diagnosticándosele viruelas, y seguramente para librar de un foco de contagio se le considera apto para su traslado a la galera central de la Hermandad Vieja. Trece días después se notificaba desde dicha villa al juez instructor su fallecimiento, siendo aconsejable su sepultura por la estrechez de la cárcel y el peligro de contagio al que estaban expuestos los otros reos (Ib., leg. 38, nº 3). Los padecimientos que aquejan a los reclusos no tienen que ser necesariamente funestos pero en 1726, en la cárcel de Campanario, antes de acontecer la fuga de dos parejas de gitanos, tuvo lugar el aborto espontáneo de la detenida Josefa Sánchez, sin duda motivado por su accidentado arresto y las incomodidades de su reclusión (Ib., leg. 46, nº 5).

161 En mayo de 1720 el ministro Diego Gracia Barrera solicita a un mesonero de Puerto Real que le alquilase un caballo para perseguir aun delincuente, a lo que éste se niega, pese a lo qual le arrebató la cabalgadura invocando requisa regia, recordándole sus repetidos desacatos a uno de los alcaldes ordinarios. El juez comisario arresta al posadero e incauta sus pertenencias, pese a la oposición de la justicia local, y en junio siguiente desde Granada se inhibía a las autoridades concejiles del caso, atendándose en cambio la petición de justicia del mesonero ante la Real Chancillería (Ib., leg. 45, nº 2).

162 En las cuentas rendidas en 1645, y en virtud de la atribución de los arqueros de verificar los justificantes debidamente acreditados ante la corporación, se asienta la entrega de 65 rs. de honorarios a Jacinto Cerón, comisario de Mancha Real -Jaén-, por conducir a Ciudad Real a tres ladrones, consignándose que "sin embargo que montava mas el dicho mayordomo no se le pago mas" (Ib., leg. 58, nº 5, s.f.).

163 Ib., leg. 44, nº 5.

164 Siempre que así se estimase por ser imposible o muy costoso, así como en el supuesto de que el traslado pudiese menoscabar el valor de lo embargado -en el caso de animales de granja o de granos-, el comisario estaba facultado para enajenar total o parcialmente lo incautado, quedando como opción su conducción íntegra a la sede hermandina o su depósito en algún vecino honrado debidamente abonado -lo que se hizo por ejemplo con las 180 fanegas de trigo depositadas en el mesón de San Blas, sito en la madrileña calle de Atocha, en 1666 (Ib., leg 35, nº 4)-. Preceptivamente el bien almonedado debía ser previamente tasado por peritos, para luego salir a pública subasta y ramatado en el mejor postor; he aquí dos ejemplos: en la feria de San Bartolomé de Medellín de 1726 eran requisadas quince caballerías, que pese a tasarse en 713 rs. sólo alcanzaron los 638 rs, mediante la fórmula acostumbrada

"... diziendo a la una a las dos a la tercera que es la buena y verdadera pues no ay quien puxe ni de mas que buene que buena que buena, apro le haga a quien las tiene puestas ..."

En el Setecientos, en Ciudad Real, lo rematado por el pregonero público y hermandino se halla esterotipado según la siguiente pauta, algo más solemne:

"Si alguna persona quiere hacer postura en -bien subastado- que se vende por orden del señor -alcalde instructor- desta ziuudad

parezca ante s. md. y se le admitira la postura que hiciere siendo xusta."

Se pronunciabn varios pregones a lo largo de la jornada, y al caer el sol se daba por concluida la almoneda, adjudicándose en la postura más elevada de las licitadas (Ib., leg. 45, nº 5).

¹⁶⁵ Estando la comunidad gitana en permanente acoso no era extraño que se vieran obligados a actuar en connivencia con sus paisanos payos para ocultar sus escasas pertenencias de la rapiña de soldados y justicias. La picaresca llegó al extremo de que algún desaprensivo se aprovechase de esta circunstancia en provecho propio, apropiándose algunos de ellos, o amparándose en dicha práctica para cometer fraudes, estafas o valerse de la confianza de sus convecidos para robar caballerías.

Difícil de determinar fue la causa seguida en la capital manchega contra unos receptores de cabalgaduras robadas; el 9-V-1723 se denuncian varios hurtos en una yeguada de dos miembros de su patriciado urbano, tomándose testimonio a un vecino que asegura que hacía un mes llevó a su cuadra una yegua preñada su paisano Cristóbal Rivero "el Mariano", pretendiendo que se trataba de una propiedad de los gitanos entregada por temor a una redada de los militares; confiando en las palabras de su convecino, deja durante unos días el animal en su cuadra, hasta su devolución días más tarde, enterándose luego de la precedencia ilícita de la yegua de cría. Aunque sus hijos confirman dicha declaración, su hermana y su esposa la contradicen, negando conocer nada al respecto, quedando suspensa la causa ante tales contradicciones (Ib., leg. 45, nº 8).

¹⁶⁶ Cuando se incautaban las propiedades de los encartados era trámite previsto por el auto de embargo que se asumiesen las deudas contraídas por el reo del mismo modo que se incluían las que era acreedor. En

virtud del primer supuesto se convocaba concurso civil de acreedores, emplazamiento durante el cual se manifestaban las deudas pendientes de pago por parte del reo, quedando algunas veces reducida a la mínima expresión el valor de lo requisado.

El 7-XII-1744, al abrirse concurso de acreedores del patrimonio familiar secuestrado a un reo encausado por robo sacrílego, resulta deber un total de 14.964 rs. y más de 200 fanegas de trigo a diversas personas y entidades -como el pósito de Hinojosa de Córdoba, el fisco real y el eclesiástico- (Ib., leg. 50, nº 5). Que no se medía con el mismo rasero a unos y otros lo muestra la desestimación ocasional de que se presentasen a tales concursos ciertos recs de hermandad que resultaban ser acreedores de deudas pendientes (Ib., leg. 38, nº 2).

¹⁶⁷ El 13-XI-1680, al ser encartados dos gitanos vecinos de Consuegra -Toledo- indiciados de algunos asaltos en despoblado, un notario concejil de la citada villa reclamaba a uno de ellos 94 rs. "de los repartimientos de medico, servicio, soladados, cabeça de alcabalas y cientos sisas y millones del presente año", constatandose que el dezmero maestro de Puebla de Don Fadrique había secuestrado unas 33 fanegas de cebada cosechadas de uno de los reos (Ib., leg. 37, nº 5, ff. 64vº y 76r).

¹⁶⁸ Las capitulaciones matrimoniales entre María Perea y su futuro esposo Antonio Morales contenía la cláusula consistente en que se eximía al cónyuge de toda responsabilidad pecuniaria subsidiaria de sus bienes gananciales si alguno de ellos -mencionándose expresamente al marido- contrajera determinados pleitos civiles o criminales, en los siguientes términos: "me obligo a tener los dichos bienes mejor y mas vien parados que los mios y a no obligarlos a mis deudas, crímenes y excesos"; 28-XI-1721, Hinojosa de Córdoba (Ib., leg. 50, nº 5).

169 ACG., cab. 501, leg. 175, nº 3, s.f.

170 AHN. Div. Her., leg. 39, nº 4 y 10.

171 Ib., leg. 39, nº 6.

172 Ib., legs. 35, nº 5 y 58, nº 5.

173 Ib., leg. 41, nº 14.

174 Entre otros, vid. Ib., legs. 41, nº 2; 45, nº 17 y 46, nº 11.

175 Perseguidos infructuosamente dos gitanos en Torrecampo, al menos se pretendía enjugar los gastos de la salida con el producto de las cabalgaduras menores requisadas, no pudiéndose conseguir tal pues

"...no a parezido persona alguna que haga postura a ninguno de los tres jumentos que no se han vendido, y en atenzion a que el uno de ellos es de edad zerrado ziego y con otros impedimentos de vastante entidad para poderlo transitar ademas de ningun valor mandan ss. mm. se matare atento a evitar sus costas y gastos."

5-III-1758 (ADPCR., s.c.; un caso semejante en AHN. Div. Her., leg 41, nº 14).

176 Ib., legs. 4, nº 23 y 46, nº 5.

177 Ib., leg. 58, nº 4 y 12.

178 Vid. nota 147.

179 Ib., leg. 41, nº 19.

180 Manillas -o esposas-, cadenas y grillos, e incluso cepos fueron utilizados por los carceleros de la época para prevenir agresiones o evasiones de los reclusos más peligrosos, así como para afligir a los más irreductibles o auspiciar la entrega de dinero para ganar su favor. J. ÁLVAREZ Y POSADILLA contemplaba esta medida en su vertiente cautatoria, escribiendo que

"Si fuese la carcel o sitio en donde el preso este tan seguro que no haya necesidad de prisiones no se las deberan poner. La ley 6 de la Partida 7, tit. 29 dice, que si los guardadores se temieran que se iria que bien puede meterlos en fierros aunque sean hombres honrados"

Op. cit., t. 3, dial. 22, Valladolid, 1802, p. 476.

181 El 23-VII-1612 el mulato Juan de Ledesma, vecino de Úbeda, es absuelto pero queda sujeto al pago de las costas procesales devengadas. Un día después su curador aduce ante los magistrados hermandinos la imposibilidad de su defendido de satisfacer los casi 3.000 rs. en que fueron tasados, por tratarse de un simple jornalero. El mismo alcaide institucional y el cuadrillero captor refrendan la indigencia del reo,

"...quien es pobre y tanto que no tiene camisa que se vertir ni bienes algunos rayces y muebles de modo que el tiempo que a estado preso en esta carcel se le a dado de comer de la limosna de esta Santa Hermandad."

(AHN. Div. Her., leg. 31, nº 5, s.f.).

182 Ib., leg. 46, nº 9.

183 La aplicación de la tortura procesal estaba perfectamante reglada, no pudiendo ser en ningún caso ejecutada indiscriminadamente, pero dada la ignorancia de los reos, la arbitrariedad de los jueces, la condescendencia de los letrados defensores y la multiplicidad de

disposiciones al respecto no era extraordinario que muchas voluntades se quebrasen únicamente ante su amenaza o el temor de su inminencia. Algo más versado en cuestiones legales resultó ser el reo Francisco Antonio Blanco, quien en su acalorado traslado a la sede de la Hermandad Vieja manchega asevera

"...que a el no se le puede dar tormento todas las veces que no hubiese tres hurtos justificados y que su pena es pequeña y que si sale desta prision con brevedad a de yr a buscar al declarante."

8-II-1708, Ciudad Real (Ib., leg. 40, nº 6).

184 El 3-III-1603 dos vecinos de Membrilla -Ciudad Real. se presentan como fiadores de su paisano Diego de Prado, encartado por el allanamiento de un cortijo disputado con los querellantes (Ib., leg. 30, nº 1). Tres años más tarde el auto en el que se expresaba dicho acto por parte de los fiadores de un reo toledano, indiciado de abigeato, reza así:

"En la ciudad de Ciudad Real en nueve dias del mes de Agosto de mil y seiscientos y seis años ante mi el presente escribano y testigos parecio Gabriel de Romana preso en la carcel de la dicha Santa Hermandad y dixo que se obligaba y obliga a tener el patio de ella por carzel y se ausentara della so su conciencia y mandado de los señores desta Santa Hermandad so pena que se fuere o ausentare pagara cinquenta mil maravedis para la camara de S. M. en que desde luego se da por condenado lo contrario aciendo con mas todas las costas daños y menoscabos que sobre ello se requieren // testigos Gaspar Romana e Juana de Bado y Alonso Fernandez Clavero estantes en esta ciudad y el entregante lo firmo. (r) Gaspar Romano de Velacanes"

(Ib., leg. 31, nº 1).

185 La doctrina distinguía entre tres tipos de fianzas: la denominada del haz, por la que el fiador se obligaba a devolver al reo a prisión previa solicitud judicial, obligando para ello sus bienes sobre los que proceder en caso de incumplimiento; la fianza de cárcel segura, que añadía al precepto anterior la posibilidad de los jueces de

imponer una exacción arbitraria atenor de las circunstancias concurrentes; y la fianza de estar y derecho por reo, que aparejaba las responsabilidades penales derivadas del veredicto emitido, sin precisar la devolución del reo a su prisión. Vid. M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal...*, op. cit., p. 203.

¹⁸⁶ 17-V-1735, Garlitos -Badajoz- (AHN. Div. Her., leg. 49, nº 10).

¹⁸⁷ 29-XII-1722, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nº 12).

¹⁸⁸ En la Sierra de Cazorla estando procediendo un dependiente hermandino contra los causantes de destrozos en unos corchos, el percance infortunado de uno de los sospechosos arrestados induce al ministro captor a decidir por su cuenta su excarcelación bajo fianza para que se aliviase su dolencia; 16-III-1755, Beas de Segura -Jaén- (Ib., leg. 50, nº 21).

¹⁸⁹ Se benefició de esta medida de gracia Diego González, alias "Chicharrón"; evadido de la cárcel pública de Puerto Real en 1741 junto con otros reclusos, días después y acompañado de un vecino retorna voluntariamente ante el alcaide de la citada villa sin pasar por sagrado, argüyendo haber sido emborrachado para obligarle a participar en la fuga. Fuese o no cierta dicha afirmación, lo cierto es que por su insólita actitud, estar achacoso para su destino a trabajos forzados y en atención a la dilatada prisión preventiva que había soportado, quedó en libertad bajo fianza, sobreseyéndose su caso (Ib., leg. 50, nº 2).

¹⁹⁰ Paulatinamente, a lo largo del Quinientos, se prorrogan los plazos en las causas más graves, equiparándolos a los de los juicios

ordinarios rápidos. El amplio arbitrio otorgado a los jueces, en último extremo, determinó la flexibilidad de los plazos previstos: si en 1666 se concedieron 20 días para fijar la litis contra un arriero indiciado de asesinato (Ib., leg. 35, nº 4); en tanto que hacia 1720 el promotor fiscal para hacer su pliego de cargos contra unos gitanos acusados por hurtos solo tuvo tres días (Ib., leg. 44, nº 2).

¹⁹¹ En 1654, dada la complicación suscitada durante la sumaria al procederse contra una partida de bandoleros, se demoró durante meses la substanciación de la causa, acudiendo los reos a la Real Chancillería porque a pesar de haber prescrito los quince días marcados para que se hiciese la acusación formal dicho emplazamiento no se había respetado; 19-X-1654, Granada (Ib., leg. 34, nº 4).

¹⁹² ADPCF, s.c.

¹⁹³ 4-IV-1603. Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 30, nº 1).

¹⁹⁴ 5-VII-1652. Ciudad Real (Ib., leg. 34, nº 3).

¹⁹⁵ 30-X-1655. Granada (Ib., leg. 34, nº 4).

¹⁹⁶ Ib., leg. 35, nº 4, f. 69r.

¹⁹⁷ Cuatro días después de abrirse cabeza de proceso, ingresa en el la galera manchega un hacendado local de Dos Barrios -Toledo-, acusado del hurto de tres pollinos; un mes más tarde el reo renunciaba al término probatorio, y de inmediato la magistratura hermandina dicta sentencia absolutoria, sujetándolo únicamente al pago de las costas procesales devengadas, la satisfacción de los salarios de sus captores

y a una simbólica pena piadosa; 25-VII/6-IX-1606, Ciudad Real (Ib., leg. 31, nº 1).

198 Producto de la resignación o de la indignación, al ver conculcados sus derechos, algunos detenidos denuncian su indefensión legal ante las maniobras de los jueces o ministros captores. Capturados unos gitanos en el término de la villa castellana de San Asensio, por el motivo de tomarlos por vagabundos al portar "una caja de tambor cuio arte y disposizion induze ser jitanos y jente sospechosa de mal vivir"; encarcelados y subastados sus bienes para costear el encarcelaje, tras innumerables vicisitudes llegan los encartados a Ciudad Real casi al año de su arresto, manifestando desde el primer momento su negativa a nombrar defensa letrada; 30-IX-1714/6-VII-1715 (Ib., leg. 42, nº 4).

199 Sería prolijo ocuparnos aquí de los aspectos legales que tipificaban cada una de las pruebas judiciales y que le concedían una determinada tasación preestablecida de acuerdo a su importancia y racionalidad. El sistema de valoración jurídica de pruebas e indicios puede interpretarse como el intento de fijar ciertas garantías para el enjuiciado frente a las arbitrariedades judiciales y un sistema de contrarrestar la inferioridad procesal del reo; a pesar de estas supuestas salvaguardías, tal vez por su propio carácter asistemático, lo cierto es que se desvirtuó el espíritu que las animaba hasta el punto de llegar a constituirse en una auténtica rémora para la administración de justicia durante el Antiguo Régimen.

200 A veces son los propios encartados quienes amenazan a sus víctimas con matarlos si denuncian el agravio perpetrado contra ellos ante los tribunales, demorándose la presentación de querella por temor a

represalias. En 1759 Joseph Ortega, testigo presencial del robo de miel y cera en sus posadas de Ballesteros -Ciudad Real-, oculta durante meses la fechoría al haber sido amenazado por el ladrón con una escopeta cuando lo sorprendió in fraganti (Ib., leg 52, nº 4). En otras ocasiones los testigos callan ante la indefensión en la que se hallaban; así en 1720 un informante declara temer por su vida y bienes de las represalias de los gitanos, los cuales "como los pueblos eran pequeños se apoderaban de ellos y los vecinos no tenían fuerzas ni las justicias para echarlos de ellos y andaban cargados de armas" (Ib., leg. 44, nº 2), constatándose muestras de esta irregular situación en el Campo de Montiel hacia el 1711 (Ib., leg. 41, nº 14).

201 Con cierta frecuencia los comisarios estaban implicados como testigos de cargo, siendo por ejemplo evidente de mala predisposición del ministro hermandino Pedro Pérez, quien al conocer el auto de embargo contra el tendero de Úbeda Juan Gallego no duda el manifestar públicamente que "todo se lo ha de comer la justicia"; 20-X-1766, Úbeda (ACG, cab. 501, leg. 175, nº 3). En el polo opuesto se hallan unos serranos a quienes unos gitanos habían robado bajo amenazas sus caballerías, pese a lo cual al intentar un juez comisario, a la sazón guarda mayor de montes del conde de Benavente, de Javalquinto -Jaén-, recabar su colaboración informa a los alcaldes ciudarrealeños que "no había quien declarase por los dueños de esas bestias temporeros y aberse disgustado con el mayoral, lo que al ser considerado pasividad por parte de sus superiores terminará con la retirada de su título; 30-III-1719, Javalquinto (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 13).

202 Aunque, eventualmente, las autoridades locales se limitan a hacer caso omiso a la petición de remisión de causas criminales acumuladas en su instancia, no faltan las muestras de patente obstaculización del

curso de las investigaciones. En marzo de 1659, presentados los cuadrilleros ante el alcaide de la fortaleza de Guadalerza, y ante sus maquinaciones dilatorias, al presumirse dolo se le preuntó si

"...no quiere que se averigue quienes son los culpados...el dicho -alcaide- Joseph Diaco respondió seamos amigos mire v. md. que se quedara aca aunque tengamos que dalle de comer porque en esta tierra no ay bodegones ni donde comprallo dando a entender le prendera preso en el castillo...".

(Ib., leg. 32, nº 2, f. 21r).

²⁰³ Ib., leg. 41, nº 11.

²⁰⁴ Ib., leg. 34, nº 1 y 3.

²⁰⁵ Ib., leg. 33, nº 2, f. 209r.

²⁰⁶ No faltan los casos en que la ostensible falta de indicios de peso permiten la absolución total o parcial de los encausados. Algunos ejemplos en Ib., legs. 32, nº 10; 39, nº 4 y 12; 45, nº 6; 47, nº 6; 53, nº 6, etc.

²⁰⁷ El 10-IV-1708 el escribano hermandino niega que constase haberse despachado título a favor de Bernabé García, vecino de Níjar -Granada- (Ib., leg. 4, nº 17); y el 24-IX-1751 se recibía en Ciudad Real misiva del conde de Ytre, capitán general de Galicia, informando de la causa criminal incoada por un alto oficial de la Tesorería de Marina de La Graña -Ferrol- contra Juan Bermúdez Mestanza, por usar del oficio de juez comisario ciudarrealeño con título enmendado y perpetrar diversas estafas (Ib., leg. 51, nº 16).

²⁰⁸ A principios del Seiscientos se procede contra un hidalgo de Ocaña, convicto de la falsificación de unas las capitulaciones

matrimoniales así como de la carta dotal de una pareja valenciana encartada por engaños y de reiterados robos de cabalgaduras, evidenciándose sus embustes al hallarse "escrita en lengua y letra castellana", según el pliego de cargos del fiscal; 7-VIII-1606, Ciudad Real (Ib., leg. 31, nº 2, s.f.).

209 Una real ejecutoria granadina de 1723 notificaba a los alcaldes de la Hermandad Vieja manchega su competencia para proceder judicialmente contra el escribano migueltureño Miguel de Coca, acusado de enmendar firmar y falsificar despachos judiciales en el pleito instruido contra el teniente de escribano hermandino Vicente García Prieto (Ib., leg. 45, nº 26).

210 Ib., leg. 39, nº 9.

211 Ib., leg. 41, nº 16.

212 Ib., leg. 52, nº 1, s.f.

213 En el pleito seguido contra varios cuatreros, a quienes se les imputaban varios delitos como encubridores y asesinos, las pruebas resultaron ser poco consistentes, al contradecirse algunos testigos de cargo y pertenecer las dos únicas declaraciones inculpatorias una a un primo suyo ahorcado en Belmonte por abigeo pronunciada "in articulo mortis" y la otra provenir del galeote Alonso López; 24-IV-1603, Ciudad Real (Ib., leg. 30, nº 2).

214 Para tener una idea aproximada de los indicios existentes, el testimonio más inculpatorio pronunciado durante la sumaria era el de un barbero del Viso del Marqués -Ciudad Real-, quien declaró se

murmuraba que el encartado había hurtado una mula en su villa de vecindad; 12-VI-1618, Viso del Marqués (Ib., leg. 32, nº 11).

215 Ib., leg. 45, nº 6.

216 10-III-1612 (Ib., leg. 31, nº 5).

217 8-V-1721 (Ib., leg. 44, nº 7).

218 La defensa aducía, en el pliego de descargos, que los detenidos eran romeros que se dirigían en peregrinación a venerar la sagrada imagen del Cristo del Valle, asegurando ser manifiesto el que

"...ni usan lengua egipziana ni de la gerigonza que es -sic- muy diferentes a la gitana y porque si alguno de los testigos a oydo algun lenguaxe inusitado en esta tierra es a el dicho Diego Ximenez que habla valenciano como es natural de aquel Reyno y los que la oyen como ignorantes de dicha lengua la reputan de gitano."

A pesar de sus argumentadas diligencias exculpatorias, los arrestados serán rematados al servicio como forzado en las Reales Minas de Azogue de Almadén en 1690 (Ib., leg. 38, nº 3).

219 Real Pragmática de 18-V-1783. Con anterioridad, la distinción legal entre payos y gitanos había quedado formalmente abolida de un plumazo por las pragmáticas de Carlos II y de Felipe V, induciendo a error asimismo el que en los títulos hermandinos se explicitase que se persiguiesen a quienes decían llamarse gitanos, no siendolos ni por su origen ni por su naturaleza. Bastante representativa es la consulta al respecto dirigida a la Santa Hermandad manchega por el veinticuatro de Jaén don Juan Francisco del Río, el 3-X-1759 (Ib., leg. 23., nº 94).

220 Ib., legs. 37, nº 6; 39, nº 6; 41, nº 15 y 42, nº 10.

221 Ib., leg. 29, nº 5 y 42, nº 6.

222 Francisco Delgado, jornalero extremeño, confiesa en 1711 que abandonó su pueblo de origen para trabajar como temporero en Andalucía, y estando segando trigo en las afueras de Córdoba fue prendido para la leva de S. M., logrando desertar poco después de tan gravoso como incierto destino (Ib., leg. 41, nº 12).

223 Aunque infrecuentemente, algunos menores de edad terminan purgando sus crímenes en galeras, presidios o minas. Legalmente la mayoría de edad estaba establecido en 25 años, aunque a efectos penales la edad normalmente solía oscilar entre 16 a 20 años, considerándose en la Corona de Castilla que

"...la hembra menor de nueve años y medio y el varón de diez y medio, no pueden delinquir, ni ser castigados con pena alguna ..., pero siendo de diez años y medio, pueden ser acusados y castigados con pena arbitraria ha de tener diez y siete cumplidos."

Vid. F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, op. cit., p. 305; el caso castellano es muy similar al francés, vid. Y. BONGERT, "Delinquance juvénile et responsabilité pénale du mineur au XVIII-siècle", en AA. VV. *Crimes et criminalité en France sùr l'Ancien Régime, 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 49-90.

224 18-XI-1705, Ciudad Real/1-XII-1705, Madrid (Ib., leg. 40, nº 2).

225 3-XI-1746, Ciudad Real (Ib., leg. 51, 3).

226 26-II-1727, Castuera (Ib., leg. 46, nº 7).

227 19/21-X-1606. Ciudad Real. El pliego de descargos de su procurador. Lorenzo Caballeros, aporta algunas consideraciones que nos parece adecuado consignar para ilustrar el caso: al ser delito cometido en poblado el caso en derecho había de corresponder a la justicia ordinaria, en atención a ser su representado

"...un hombre ignorante y facil de creerse y que no tiene por sano juicio ni entendimiento y ha estado mucho tiempo encerrado por sus deudos porque andava haciendo locuras y asi se echa de ver pues, siendo hombre principal noble y de principales parientes se va por diversas tierras hecho juglar tañendo con una guitarrilla y diciendo disparates y semejante hombre no es capaz de dolo ni de pena y pena seria afrentar todo su linaje y castigar a un hombre falto de juicio..."

(Ib., leg. 31, nº 2, f. 233r).

228 4-VII-1594/14-III-1595 (Ib., leg. 27, nº 9).

229 6-IX-1724 (Ib., leg. 23, nº 78 y AHN. Consejos, leg. 115, nº 2, s.f.).

230 En 1613 se querellaban los bataneros del Guadiana de un sospechoso, al que se creee partícipe de ciertos delitos menores y comunmente reputado "por hombre de malas manos" (Ib., 32, nº 5). Entre los cargos alegados por el ministerio fiscal contra unos presuntos asesinos en 1624 se dice que uno de los indiciados es "gran taur i fullero i persona que siendo como es pobre jugaba muchos reales de a ocho y ansimismo es persona que hizo un hurto a Rodrigo Garcia tejedor", no dudando en calificar a sus cómplices de "personas de mala fama y opinion y que en son de guardas y no lo siendo el dicho Juan Garavi estafarian i les quitarian el dinero y los ganados a los ganaderos" (Ib., leg. 32, nº 2, ff. 203vº y 204r).

231 9-IX-1702, Tobarra (Ib., leg 41, nº 11).

232 9-X-1710, Ciudad Real (Ib.).

233 En ocasiones, lo desembolsado en tales diligencias alcanza sumas relativamente elevadas, como los 300 rs. entregados a don Andrés del Carpio y don Juan de Osuna Lana para que concurriesen a una rueda de presos a la sede hermandina, avanzado el s. XVIII (Ib., leg. 61, nº 2).

234 Ib., leg 31, nº 5.

235 El 2-VI-1737, en una rueda de presos realizada en la cárcel de Campo de Criptana -Ciudad Real- por mandato de los alcaldes ciudarrealeños era reconocido Juan López "Barajas", tratante de géneros de paños acusado de abigeato, pese a lo cual y a falta de otras pruebas concluyentes únicamente sería sujeto a satisfacer las costas procesales devengadas (Ib., leg 49, nº 1); asimismo en 1762 a pesar de haber sido igualmente identificado un salteador de caminos en la prisión de Linares se ordenará desde Grandada su excarcelación bajo fianza (Ib., leg 53, nº 6).

236 A la rueda de presos llevada a cabo en la capital manchega, el 28-V-1723, comparecieron 12 hombres entre reos y vecinos de la ciudad retribuidos por ello, aunque a la postre tales diligencias resultaron infructuosas (Ib., leg. 44, nº 12); y en mismo cariz tendría la dispuesta en 1742 para identificar a unos supuestos ladrones (Ib., leg. 50, nº 3).

237 Ib., leg. 31, nº 6.

238 En 1603 Juan López Rubio, condenado en Almagro por robar a un tesorero local de las alcabalas reales, unos días más tarde ingresaba en la galera hermandina manchega para hacer frente a las acusaciones vertidas ante los alcaldes ciudarrealeños, no pudiéndose demostrar la veracidad de la querella, se libró del tormento por considerarse suficiente el anteriormente aplicado hacía un mes por el pesquisidor granadino; 24-IV-1603, Ciudad Real (Ib., leg. 30, nº 2).

239 Las Partidas aludían que la mala reputación pública o la existencia de un testimonio fidedigno eran indicios racionales válidos para proceder afflictivamente contra un reo. En 1652, el ministerio fiscal invoca el citado antiguo texto alfonsino para solicitar la aplicación de la tortura contra el ciudarrealeño Pedro Portillo por abigeo, pues "la sola fama de publica y mala opinion de ser el preso delincuente por si sola es suficiente para tormento" (Ib., leg. 34, nº 3, f. 73r).

240 La doctrina admitía que era un contrasentido someter a tan expeditivo suplicio a sospechosos de delitos cuya supuesta pena ordinaria, aún en caso de ser probada, fuese inferior al castigo infringido durante la tortura. Así Domingo Sánchez, sospechoso del hurto de caballerías, al ver desestimada en primera instancia su pretensión de eximirse de este trance, se decide a nombrar procuradores que le defendiesen del auto de tormento ante la Real Chancillería de Granada; 30-X-1656, Ciudad Real (Ib., leg 31, nº 37).

241 Con desigual resultado, generalmente invocando un supuesto caso de inmunidad local ultrajado -lo que les eximía del tormento- o su minoridad, entre otros eximentes, presentar recusación de dichos autos en Granada los reos hermaninos Domingo Fernández en 1656 (Ib., leg.

35, nº 6); Juan Jiménez, el menor, en 1659 (Ib., leg 21, nº 37); Juan de la Cueva, el menor, en 1660 (Ib., leg 21, nº 37) y Felipe Fernández, en 1716 (Ib., leg. 45, nº 14).

²⁴² Si el 11-XI-1662 los reos Juan Sánchez de Villafañe, Melchor Castellanos y Cristóbal Ramírez nombran procurador en Granada para defenderles de la acusación de ladrones y homicidas que propiciaban el auto de tormento emitido sin ser probadas sus supuestas culpas (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 191, ff. 303r-vº); en 1698 era sometido al potro el famoso bandolero "Fernandillo" sin preceder consulta ante la audiencia superior correspondiente, ordenándose por el Supremo Consejo con carácter retroactivo que se sancionase a su asesor con 30 ducados por dicho desacato (AHN. Consejos, leg 3.163, nº 9, f. 44r). Numerosos juriconsultos clamaron contra tales abusos, justificada por otros como QUEVEDO Y HOYOS, y denunciados por los procuradores a Cortes en 1598; vid. *Actas de las Cortes de Castilla*, pet. 34, p. 646; cf. F. TOMÁS Y VALIENTE, "La última etapa y abolición de la Tortura judicial en España", en *La Tortura en España. Estudios Históricos*, Barcelona, 1973, pp. 127-128.

²⁴³ Los dos únicos cargos que conocemos al respecto datan de la década de 1690: el 28-XI-1690 un procurador defensor entrega 100 rs. para costear la nueva asesoría letrada al alcalde instructor, a pesar de constarnos la inoperancia de dicha argucia, pues tras ser sometido a suplicio su parte, el cirujano Bartolomé Vicario practicó una sangría y una cura al atormentado; otro tanto sucedió con unos gitanos de Santa Cruz de Mudela -Ciudad Real-, quienes hacia 1693 pasaron por el potro ante el abogado forastero don Francisco Antonio Abad, ascendiendo sus honorarios 130 rs. de vellón (Ib., leg. 58, nº 12).

244 En 1643 se anota entre la data que en el pleito sostenido contra Juan de Resa asistió a su tormento un escribano público al estar recusado el de notario hermandino Melchor Toral (Ib., leg. 58, nº 5).

245 En 1693 se encargan de custodiar a los reos de Santa Cruz de Mudela -Ciudad Real-, rematados a tormento, los cuadrilleros Luis Moreno y Garpar Chico, cobrando 12 y 34 rs. respectivamente, gratificándose al alcaide Francisco Tapia con otros 40 rs. en concepto de acostamiento por extremar las medidas de seguridad (Ib., leg. 58, nº 12, s.f.).

246 Ordenanzas manchegas de 1792, op. cit., f. 92r.

247 El tormento más usual empleado en la audiencia hermandina era el denominado de cordeles. El 19-V-1656 era sometido a suplicio Juan Díaz, prófugo de las minas de Almadén donde había sido condenado por el Santo Instituto; ante las circunstancias agravantes que concurrían en el caso, el verdugo Andrés de Alcalá es encargado de afligirle las cinco vueltas de mancuera, comprimiendo con una trampa sus miembros inferiores, proporcionándole en el potro dos garrotes en las espinillas y otras tantas en los muslos; el reo, igual que hiciese dos años antes, soportó estoicamente la dura prueba, no confesando sus culpas tras más de hora y cuarto de tormento; de poco sirvió que su procurador argüyese que

"...si algun indicio ocurre a favor del oficio de justicia no esta probado en lo necesario para que de el se viniese a el tormento y mi parte estuvo negativo, con que dexo purgados todos quantos indicios pueden ocurrir en la causa."

Los magistrados manchegos, le denegarán el traslado como forzado a las minas e incluso el derecho a apelar la sentencia interlocutoria,

ejecutándolo en Peralvillo el 18-IX-1659 (Ib., leg. 35, nº 1, ff. 104r y ss.)

²⁴⁸ s.d. (Ib., leg. 46, nº 2).

²⁴⁹ 19-IV-1660, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nº 3, f. 62r).

²⁵⁰ 20-IV-1660, Ciudad Real (Ib., ff. 62r-66vº).

²⁵¹ El ejecutor, tras haberlo desnudado de al cintura arriba y amarrado al aparato de tormento, puso en conocimiento de los jueces presentes "que parece que huele a ajos u otro olor"; 12-II-1667, Ciudad Real (Ib., leg 35, nº4, f. 179vº).

²⁵² 28-II/8-V-1667, Ciudad Real (Ib.).

²⁵³ Ib., legs. 35, nº 4, s.f.; 38, nº 5, ff. 216r-223vº; 45, nº 14.

²⁵⁴ Cosme Denia, sometido a dos sesiones de tormento en la cárcel ciudarrealena fue curado en 1684 con ungüentos de botica; y el 12-XII-1688 se la proporcionaba una gallina para su sustento (Ib., leg 58, nº 12, s.f.). Vino y bizcochos integraron unos días la dieta del reo Blas Camacho por idéntico motivo en 1685 (Ib.). Atormentados varios reos en 1693, aparte de un colchón y un jergón alquilados a la mesonera Quiteria de la Concepción, mas los gastos de botica pertinentes conforman la libranza cuyo desglose es el siguiente:

"...siete reales al barbero que quito el cabello y barva a los presos desta ciudad para el tormento= seis reales para velas de sevo de tres noches que uvo de ocupacion en dicha carcel= quatro reales para bizcochos para los presos despues del tormento= nueve reales de arroba de vino para los guardas que asistieron tres noches en los tormentos= quatro reales de dicha livra de vizcochos para dichos atormentados para la segunda noche= y

cuatro reales para la tercera noche para vizcochos= seis reales que se gastaron en carnero y otras cosas para dichos atormentados= seis reales que se dieron a Francisco de Tapia para que cuidase de los presos de comida veinte y un real a Gabriel de Oreja para que cuidase de la comida de Manuel Morales preso atormentado= y pan que comiese Luis Moreno que estava en su compañía que nadie ablaba con el= diez y seis reales y medio que se acudieron mas de lo que estava mandado se diese a Miguel Morales para su alimento= tres reales de una arrova de vino para curar los atormentados dos reales de media libra de velas de sebo la noche que se dio tormento a Maria Ceron= otros dos reales de media libra de bizcochos para la susodicha..."

(Ib., s.f.).

255 A fines del Seiscientos, la viuda del magistrado Tomas de Güertos nombraba procurador en Granada para recurrir la condena a la que fue sometido el difunto letrado por su Sala del Crimen, al morir ahogado durante el tormento el reo almeriense Miguel de León, negándose hacerse cargo solidariamente de la sanción impuesta en su día de 200 ducados e inhabilitación profesional durante 4 años; 22-XI-1692, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 243, ff. 170r-171r).

256 La doctrina tipificó los supuestos en que estaban excluidos los reos de tan severa prueba aflictiva; vid. F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, op. cit., pp. 278-279.

257 Ello no quiere decir que se contemplase la ilegitimidad de este recurso judicial extraordinario del proceso inquisitivo, como lo demuestra que en un informe remitido a la Corte el 7-VI-1773 se consignase que desde hacía dos años se habían se habían enjuiciado a "algo mas de veinte personas, con execucion de sus respectivas sentencias de azotes, torturas, y otras" (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, f. 89vº) y que en las ordenanzas ciudarrealeñas de 1792 se dedicase todo el capítulo 48 para su regulación formal (op. cit., pp. 47-48).

258 11-IX-1762, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 60, nº 4).

259 Para la cuestión arriba citada y el importante cambio acontecido en el siglo XIX remitimos al lector a las siguientes obras: M.L. CHICHIZIOLA, "La pena de prision", en *Revista de Instituto de Investigación y Docencia Criminológica*, nº 8 (1964), pp. 87-115; P. DEYON, *Les temps des prisons. Essai sûr l'histoire de la delinquance et les origes du sistéme pénintenciaire*, París, 1975; M. FOUCAULT, *Vigilar...*, op. cit., pp. 102 y ss.; F. TOMAS Y VALIENTE, "Las cárceles y el sistema penitenciario bajo los Borbones", en *Historia* 16, extra 7 (octubre, 1976), pp. 70-88.

260 Aparte de que reiteradamente tales condenas de destierro eran incumplidas, la situación creada era absurda, pues al mismo tiempo que se intentaba paliar la delincuencia en unas comarcas se trasladaba el problema a otros puntos de la Corona. Excepcionalmente los desterrados son deportados fuera del Reino: el 3-VII-1717 eran expulsadas a Portugal dos gitanas prendidas en Villacañas -Toledo- cuando decían volver de cumplir una promesa en Villanueva de los Infantes -Ciudad Real-; un día después un notario, el teniente de alguacil mayor y tres testigos pasaron a su celda, acompañándolas hasta la puerta de Granada, donde el escribano hermandino procede a leerles la sentencia bajo apercibimiento en caso de quebrantamiento (Ib., leg. 43, nº 1).

261 En el proceso substanciado contra el matrimonio integrado por los ciudarrealeños Juan del Río y Manuela Moreno, encubridores de los bienes pertenecientes a unos gitanos encartados, don Francisco Treviño Calderón de la Barca, hermano del Santo Instituto y teniente de corregidor de Ciudad Real, ordena que en el plazo de una hora salisen de la ciudad y de su jurisdicción en el término de seis leguas,

portando cuantos bienes pudiesen y no retornasen a ella jamás; 16-IX-1734, Ciudad Real (Ib., leg. 49. nº 8).

262 Relativamente frecuentes durante los siglos XVI y XVII para castigar pequeñas infracciones, como injurias en despoblado y hurtos de escasa entidad; en el siglo XVIII se evitará, en lo posible, emitir tales sentencias por considerarlas poco ejemplarizantes. Un proceso-tipo de esta condena la constituye el pleito instruido de oficio contra un vecino de Ballesteros indiciado del hurto de miel y cera; tras quedar sin probar su supuesta culpa, y atendiendo a su falta de antecedentes criminales, se falló su destierro de Ciudad Real, Ballesteros, Cañada y Corral de Calatrava en diez leguas a la redonda de sus términos por tiempo de seis años, la mitad obligatorios, con la condición de no quebrantarlo "sin licencia de los alcaldes desta Santa Hermandad"; 17-XI-1614, Ciudad Real (Ib., leg. 32, nº 6).

263 Francisco Pérez Cañameres, vecino de Montilla, acusado junto a su cómplice de la muerte de un hidalgo, serían condenados al destierro seis leguas en torno a dicha villa; invocando el citado reo su senectud nombra procurador ante el Consejo de Castilla para que fuese revocada su pena; 5-IX-1694, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 208, ff. 60r-61r).

264 En 1678 se prendieron cuatro gitanos en Villar del Pozo, resultando ser tres esquiladores y un espartero del Campo de Calatrava sosopechosos del homicidio acontecido en la villa de Villarta de San Juan. En menos de un mes, debido a la falta de pruebas racionales inculpatorias, su procurador defensor alega que pagaban puntualmente alcabalas y servicios, estando avecindados en sus localidades de origen. Días después el veredicto absolutorio incluía costas

procesales y una cláusula de apercibimiento para que no vagasen, tuviesen un oficio estable y la obligación de llevar ante su corte de justicia en el plazo de 60 días testimonio notarial donde se expresase su conducta acomodada a lo prescrito por las Reales Pragmáticas; 10-VII/4-VIII-1678, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 37, nº 2).

265 Juan Ibáñez, pregonero de Yepes -Toledo-, encubridor y receptor de objetos robados en su propia casa, y cómplice de un criado de la posadera local para hurtarle dinero y pan a su ama, entre otras penas sería condenado a la suspensión de su oficio concejil durante tres meses y a un año de destierro voluntario de dicha localidad, a cumplir cuando fuese requerido para ello por los alcaldes apícolas manchegos; 26-VIII-1606, Ciudad Real (Ib., leg. 31, nº 2, f. 237r).

266 Blas Marquero, guarda de campo oriundo de Alcaraz, indiciado por el robo y asesinato de unos trajinantes, declaraba ante el alcalde hermandino que

"...su oficio es comision que tiene s. md. del corregidor desta ciudad para que con vara alta de justicia pueda yr a bisitar los encinares baxos e altos e prender y denunciar averiguar y reprender y pedir fabor y ayuda a qualesquier justicias de esta jurisdiccion ..."

4-X-1624, Baeza (Ib., leg. 33, nº 2).

267 Ib., legs. 33, nº 2; 39, nº 3; 46, nº 12, etc.

268 Mientras el *Tesoro de la Lengua* de Covarrubias insistía en su carácter disciplinario (op. cit., p. 621), el *Diccionario de Autoridades*, más descriptivo, define este ravío militar como:

"Embarcacion de baxo fondo, que va a remo y vela, donde tiene el Rey los esclavos y forzados. suele tener veinte y cinco o treinta remos por borda, y a cada uno corresponde un banco con

cuatro o cinco remeros. Monta un cañon grande que llamamos de cruxia, dos de media magnitud y otros dos pequeños."

Op. cit. p. 8.

269 La real pragmática de 12-III-1771 establecía que fuesen destinados a galeras aquellos convictos

"...cuyos delitos, ya fuese por la esencia de los mismos, ya por el mal habito de su repeticion, exclusivo de probables esperanza de enmienda en tales vicios consuetudinarios de daño efectivo a la sociedad."

Nov. R., ley 7, tit. 60, lib. 12; op. cit., t. 5, p. 496. Vid. J.A. LARDIZÁBAL y URIBE, *Discurso sobre las penas contrahído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma*, Madrid, 1782; J.A. SAINZ CANTERO, *La ciencia del derecho penal y su evolución*, Barcelona, 1970; R.M. PÉREZ ESTÉVEZ, "Delincuencia en la España del siglo XVIII. Los presidiarios de Marina", en *CHE.*, nº 3 (1979), pp. 259-273; R. PIKE, "Crime and Punishment in Sixteenth Century Spain", en *The Journal of European Economic History*, nº 5 (1976); del mismo autor *Penal Servitude in Early Modern Spain*, Wisconsin, 1983.

270 Hacia 1684 los cirujanos ciudarrealeños Cristóbal Muñoz y Juan Donayre declaraban que el reo gitano Baltasar González padecía una hernia que le eximía de cumplir su destino en las galeras reales (AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12, s.f.).

271 1-VII-1708, Galiana -Ciudad Real- (Ib., leg. 40, nº 7).

272 La última sentencia en tal sentido fue emitida contra Jerónimo Palacios por la magistratura de la Hermandad Vieja manchega el 30-III-1795, condenándolo, si bien ambiguamente, "en seis años de servicio de S.M. en los batallones de Marina Reales Bajeles o al Arsenal de la Carraca" (Ib., leg. 62, nº 3).

273 Sobre las severas condiciones reales de vida de dichos forzados, consultar, entre otros, los trabajos de R. DOBADO GONZÁLEZ, "Salarios y condiciones de trabajo en las Minas de Almadén, 1758-1839" en P. TEDDE, *La economía española al final del Antiguo Régimen*, t. 2, Madrid, 1982; A.M. TASCÓN, *Historia de las Minas de Almadén*, 2 vv., Madrid, 1958-1987; *Ordenanzas de S.M. de treinta de enero de mil setezientos y treinta y cinco para el gobierno de las fábricas y minas de Azogue de Almadén*, Madrid, 1735 (?); R. PIKE, "Penal Labor in Sixteenth Century Spain: the mines of Almadén" en *Socitas-A. Review of Social History*, nº 3 (1973); R. SALILLAS Y PANZANO, *La cárcel de esclavos de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad utilitaria*, Madrid, 1913.

274 El naturalista G. BOWLES, a fines del Dieciocho, consideraba que

"Los forzados que allí -Almadén- se envían no padecen nada en la mina, ni hacen mas que acarrear tierra en los carretoncillos; pero muchos de ellos son tan bribones que se fingen paralíticos para mover a piedad y estafar algo a los que van a ver aquello. Cada forzado de estos cuesta al Rei ocho reales al día; se regalan y comen mejor que ningún labrador; venden la mitad de su ración, y gozan de robustísima salud. Por una infundada compasión no se les hace trabajar mas que ligeramente tres horas al día; y, no obstante esto, el mundo cree que su pena es intolerable, y poco menos terrible que la muerte. Los mismos jueces lo deben creer así de buena fe según la especie de delinquentes atroces que envían allá; pero en verdad que se engañan, y pueden estar seguros de que cualquiera vecino de Almadén trabaja voluntariamente mas del doble para ganar menos de la mitad de lo que cuesta un forzado"

Vid. *Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España*, (1ª ed. Madrid, 1775), fasc. Madrid, 1982, pp. 8-9.

275 El 7-V-1654 se presentaba ante el corregimiento ciudarrealeño la petición para que no se procediese judicialmente contra Juan López,

atendiendo a su condición de trabajador de las minas de Almadén (AMCR. Actas Capitulares, leg 16, nº 7, f. 33r).

276 Condenados a pena aflictiva y minas los gitanos Diego García y Francisco Antonio Aranda, el mismo día se publicaba su sentencia:

"Esta es la justicia que manda hacer nuestro señor y en su real nombre los señores alcaldes de la Santa Hermandad Bieja desta Ziudad Real, Toledo y Talavera en su nombre que a estos hombres por jitanos que andan de unos lugares en otros haziendo trueques y canvios de cabalgaduras ablando lengua jerigonza contrabiniendo a las Reales Pragmaticas de S. M. y leyes destos reinos se les den ducientos azotes y condenados a seis años de galeras que an de cumplir en las Reales Minas de Almaden al remo y sin sueldo quien tal ace que tal pague."

Ante una numerosa concurrencia se lee el pregón y, tras aplicarles la pena de azotes correspondientes, son devueltos a sus celdas. Al día siguiente serían conducidos por tránsitos hasta Corral de Calatrava; 15/16-XII-1708, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 39, nº 9).

277 El 8-II-1709 se aceptan como forzados los castellanos nuevos Sebastián Cortés y Simón Donayre "Banqueta", condenados a 6 y 4 años de trabajo en las Reales Minas, a pesar de ser mayores de 50 años de edad (Ib., leg 39, nº 10); sin embargo poco después era rechazado el sexagenario Cristóbal Arroyo, sentenciado a trabajar en las obras exteriores, quien padecía úlceras incurables en manos y muñecas, tal vez provocadas y seguramente agravadas por los grillos que atenazaban sus miembros; 13-II-1709, Almadén -Ciudad Real- (Ib., leg 39, nº 10).

278 Este último penado retornó a la sece del Santo Instituto por tránsitos el 27-II-1709. Vid. nota 277.

279 En 1684 se consigna una libranza por la asistencia alimenticia al reo Marcos García Bermejo, quien "condenado a minas de Almaden no fue

con sus compañeros por estar muy malo y a Pedro Roldan tambien preso enfermo en dicha carcel" (Ib., leg. 58, nº 12, s.f.).

280 En el fallo dictado contra un cuatrero valenciano, se señala que

"...atendiendo a la dilatada prision que ha padecido, y que esta manco, y por ello inutil para el servicio de las labores de S. M. le debo condenar y condeno a diez años de pena de destierro prexiso de esta ziudad, la de Valencia, lugar de Burgasot y la villa de Torrenueva..."

4-IV-1722, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nº 6). Igual suerte corrió el colmenero Juan Fuentes, convicto del robo de unos corchos, el 7-VII-1723 (Ib., leg 44, nº 8), así como el abigeo Juan Moreno y el ladrón Tomás Fernández Siles -sordo este último- (AHN. Consejos, leg 3.163, nº 9, s.f.).

281 Vid. R. PIKE, "Penal Servitude in the Spanisch Empire: Presidio Labor in the Eighteenth Century", en *Hispanic American Historical Review*, nº 48 (1978).

282 Francisco Serrano y Francisco García Pozuelo, custodiados en la prisión de Montoro, fueron condenados a servir como gastadores en Melilla, el 4-II-1710. cinco meses después no se había efectuado su traslado al puerto de Málaga, al aguardarse la curación de la piern a llagada del segundo. El 8-IX-1710 se informaba a los alcaldes manchegos que se había excarcelado al enfermo bajo fianza, y a su cómplice sin tan siquiera mediar esta formalidad cautoria, multándose al comisario captor con 500 ducados e investigándose el posible coecho. el 12-II-1712 el ministro que los había aprehendido dos años antes hizo entrega de los ladronzuelos en La Caja de Málaga (Ib., leg. 41, nº 6).

383 La sentencia inculpatória contra Pedro Bernal de vergüenza pública y 4 años de presidio, consultada ante la Real Chancillería de Granada, contenía la cláusula de su cumplimiento "en uno de los hospitales de ellos"; 3-III-1752, Granada (ADPCR. s.c., s.f.).

384 Durante la Edad Moderna hubo dos sistemas simultáneos para ingresar en la milicia: voluntariamente, presentándose ante el banderín de enganche de algún oficial reclutador capacitado para ello; o forzosamente, al destinarse al servicio de las armas determinados sujetos mediante sorteo o quintas, así como la leva de vagabundos y delincuentes comunes. W. COXE ya manifestaba a principios del XIX que

"...aquel sistema de quintas era esencialmente defectuoso, puesto que la profesión que exige en mas alto grado todas las cualidades peculiares en un buen ciudadano, se confiaba à la escoria de la sociedad; la corrupcion y el envilecimiento debian contagiar a los soldados, rebajandolos hasta el extremo de asociarlos a los vagos y malhechores, pero era entonces opinion general de los estados de Europa el considerar a los ejércitos, como engargados de la disciplina y correccion de toda clase de gente mala..."

Op. cit., t. 3, p. 459. Al respecto consultar B. J. FEIJÓO Y MONTENEGRO, "La ociosidad desterrada y la milicia socorrida", en *Teatro Crítico y Universal*, Madrid, 1726; C. BORREGUERO BELTRÁN, "Reclutamiento militar en el ejército borbónico del siglo XVIII", en *CIH.*, nº 52 (1989), pp. 91-101; y, de dicha autora, *El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII*, Valladolid, 1989.

285 Por la documentación consultada sabemos de tentativas encaminadas a poner bajo la disciplina castrense a castellanos nuevos durante la Guerra de Sucesión, encuadrándolos en unidades tácticas cuya soldadesca estaba íntegramente compuesta por gitanos bajo el mando de cristianos viejos, para defender el flanco con Portugal de posibles incursiones. Este intento estaría condenado de antemano al fracaso,

dadas las peculiaridades étnico-culturales de esta comunidad (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 1).

²⁸⁶ Si en 1738 se denegó la solicitud de la defensa letrada del ladrón Juan Núñez, vecino de Don Benito -Badajoz- para enrolarse en el regimiento de Saboya, siendo dos años después conducido a un presidio africano; en 1739 era desestimado para el servicio militar Marcos del Castillo por no tener la estatura mínima requerida -1'50 ms.- (Ib., leg. 49, nº 2 y 3).

²⁸⁷ En 1739 Francisco Sánchez de Pablo era destinado como soldado a la plaza de Badajoz por robar colmenas en Navalucillos y fugarse de su cárcel (AHN. Div. Her., leg. 49, nº 5 y 59, nº 3); un año después el ladrón de dinero Juan Gómez indemnizó al dueño de lo hurtado y obligado a cumplir seis años de servicio militar (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

²⁸⁸ AHN. Div. Her., legs. 34, nº 1; 39, nº 3 y 45, nº 19.

²⁸⁹ Desde hacía siglos se venía aprovechado la infrautilizada estructura hospitalaria para recluir a los vagos, prostitutas y amancebadas. En La Mancha únicamente tenemos constancia documental del empleo, hacia 1786, en la villa de Herencia para dicho fin de "solo un hospital, sumamente pobre, donde se recogen los transeuntes holgazanes y bribones", cit. GRUPO AL-BALITITHA, op. cit., p. 164. Remitimos al lector para ampliar referencias sobre la específica problemática de la penalidad femenina a las siguientes obras: G. LASALA NAVARRO, *La mujer delincuente en España y su tratamiento correccional*, Buenos Aires, 1948; F. SEVILLA SOLANAS, *Historia penitenciaria de España. La Galera. Apuntes de Archivo*, Segovia, 1917; A. SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, "Sociología y

política criminal", en *Revista de Estudios Políticos*, nº 73 (1954), pp. 145-175; A. FIESTAS LOZA, "Las cárceles de mujeres", en J.A. ESCUDERO (dir), "Cinco Siglos de Cárceles", *Historia 16*, extra nº 7 (octubre, 1976), pp. 91-99; P. FRAILE, *Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII-XIX)*, Barcelona, 1987.

290 J. ÁLVAREZ POSADILLA, escribía en los albores del siglo XIX que esta práctica era demasiado expeditiva, e incluso

"...perjudicial para la Republica cuyo bien es el principal fin de las penas, porque los delinquentes son despues de mutilados una carga para la Repblica, imposibilitados para trabajar y viciosos por consiguiente"

Op. cit., t. 3, dial. 3, pp. 47-48.

291 21-X-1606. Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 31, nº 2, s.f.).

292 Si los alcaldes de la Santa Hermandad Vieja manchega en los momentos solemnes portaban normalmente vara alta de justicia, dicha insignia sólo ocasionalmente fue llevada por sus subordinados -con toda seguridad para evitar conflictos jurisdiccionales-, usando éstos los bastones o varas cortas cuando no obviaban su porte para evitar los frecuentes roces suscitados por dicha cuestión. En 1719 sabemos que un tal Juan de Alañón por orden de las autoridades hermandinas proporcionó a la entidad un bastón por el precio de 34 rs. de vellón (Ib., leg. 58, nº 21, s.f.).

293 El mayordomo del Santo Tribunal adquirió en 1603 un carcax para el estandarte (Ib., leg. 57, nº 3); componiéndose en 1712 el dardo de la citada bandera verde con las armas reales bordadas y ornado con borlas de hilo dorado (Ib., leg. 58, nº 18).

294 A pesar de que los estatutos ciudarrealeños de 1792 expresaban que dicha señal infamante se aplicase sobre la parte derecha de la espalda por sus ejecutores, ya fuese por olvido o ignorancia de esta costumbre algunos ejecutores no tuvieron demasiado cuidado en cumplir este mandato. En 1733 era marcado al fuego con la "X" de "xitano" Antonio de Quirós, "El Sordo", en el costado derecho (Ib., leg. 47, nº 9); en 1732 había sido estigmatizado con la "L" de "ladrón" Gabriel Gil Moreno "en el lomo izquierdo" (Ib., leg. 47, nº 11), y otro tanto se hizo con Marcos Heredia por entonces (Ib., leg. 49, nº 6).

295 Consignaba J. ÁLVAREZ POSADILLA que

"La pena de azotes ademas de ser afflictiva causa infamia, es usada y mandada por nuestras leyes: es una pena muy temida por lo vergonzosa que es, y por lo mismo de mucho escarmiento para los que la ven executar; los que la padecen no suelen escarmentar, porque son gente por lo regular sin verguenza; y a solas estas gentes es conveniente imponerla..."

Op. cit., t. 3, dial. 3, p. 34. Con mejor criterio, C. BECCARIA abogaba por la aplicación discriminada de las penas infamantes para evitar que su frecuencia desvirtuase el deshonor que irrogaba; op. cit., p. 128.

296 Encartado el cuatrero Juan Jiménez, prófugo de diversas cárceles y abigeo reincidente, los magistrados hermandinos le condenan a 200 azotes y 8 años a galeras; informado el defensor del veredicto, éste manifiesta su intención de apelar a Granada; meses después propone el letrado apartarse del recurso si al reo sólo se aplicaba la condena principal, lo que de inmediato será aceptado por los jueces instructores y el ministerio fiscal; 19-II/11-VII-1666 (AHN, Div. Her., leg. 34, nº 3).

297 Dicha providencia se tomaba para propiciar la asistencia masiva de vecinos y hermandos a tan singular como ejemplarizante acto. Así por ejemplo, en 1689 fue ahorcado el reo Cosme Denia el Miercoles de Ceniza (Ib., leg. 58, nº 12).

298 Hacia 1619 se adquirieron 16 saetas y una nuez de ballesta; en 1630 se enderezarán algunos dardos, deteriorados al ser reutilizados; por último, en el recuento de bienes de 1691 se asienta la existencia de 4 ballestas de hierro montadas sobre una estructura de nogal (Ib., leg. 58, nº 12).

299 La práctica punitiva del Santo Instituto ciudarealeño no contemplaba otros procedimientos de ejecutar las penas capitales que las arriba citadas. Ocurre otro tanto en la Ciudad Imperial, donde si en 1567 su procurador fiscal protestaba ante el Supremo Consejo al haberse degollado al hidalgo homicida don Fernando de Guzmán pese a haber sido recusados los alcaldes hermandinos instructores, fue seguramente debido a su calidad estamental (BN. mss. 13.030, f. 136r).

300 A caballo entre el Quinientos y el Seiscientos, era acostumbrado que dos carros trasladasen la tienda y la mayor parte de sus efectos a Peralvillo; repartiéndose vino, barquillos, duraznos, confituras, vino o queso entre peones y concurrentes. Aunque desconocemos la descripción física de tales elementos pertenecientes a la corporación ciudarrealena que conformaban este aparato escénico si contamos con una relación de los existentes en su homónima de Toledo, que no sería demasiado diferente, consistente

"...todo el aderezo de la tienda rodela chapa cordeles arbol y estaquillas y cruz y bandereta con las armas reales la tienda y tres clavixas o yerros...sobremesa guadamecil con las armas reales y frontal de damasco verde"

3-XII-1612, Toledo (Ib., leg. 63, s.f.).

301 La ejecución de los reos Diego Maldonado y Francisco Vázquez el 20-VII-1619 preveía la entrega de 2 ducados a cada alcalde; 12 rs. a los regidores; 500 mrs. al mayordomo, escribano, alcaide y cuadrillero mayor; así como otros honorarios a los 8 hacheros y los dos mozos que conducen las caballerías a los condenados. El desglose de la partida de los gastos ocasionados por tal motivo incluyen además

"Pan vino y queso que se di a los pobres que acudieron dos fanegas de pan cocido de dos fanegas y medio que se gastaron en la charidad que se da a la gente pobre que fue a ver dicha execucion de justicia.

De un pernil de tocino quatrocientos y setenta y seis maravedis.

Dos cantarillos y jarros ciento y cinquente y tres maravedis.

De seis aguadores que anduvieron llebando agua para que bebiese la gente que acudio a la dicha execucion de justicia dieciocho reales.

De la comida que se dio a quatro frayles dominicos y mulas que se les dieron para yr a ayudar a bien morir a los pacientes veinte y quatro reales."

(Ib., leg. 58, nº 3).

302 V. MARTÍNEZ ESPINEL, *Relaciones de la vida del escudero Marcos de Obregón*, (1ª ed. Madrid, 1612), por S. GILI GAYA (rd., prol. y not.), Madrid, 1969, t. 1, p. 188.

303 Vid. apéndice documental, texto nº 18.

304 El 18-III-1709 son ajusticiados dos bandidos en Toledo por la Hermandad apícola local, recorriendo su comitiva la plaza pública, "las cuatro calles", Zocodover, la calle de las Armas y la puerta de Bisagra, pregonándose las sentencias frente a la sede hermandina y en la vega toledana, prescribiéndose que

"...sean arrastrados y que se les de garrote hasta que naturalmente mueran y asaetados y que sus cuerpos echos quartos

se pongan en los caminos y sus cabezas y manos derechas en el sitio y lugar donde cometieron el delito"

Cabildo de 15-VI-1709, Toledo (Ib., leg. 69, nº 1, s.f.)

³⁰⁵ 23-V-1776 (Ib., leg. 58, nº 10).

³⁰⁶ Generalmente los fallos preveen el reparto por igual del importe de la pena de cámara, la mitad para el fisco real y el resto para sufragar los gastos procesales ocasionados. Oscilan dichas sanciones pecuniarias entre 500 a 10.000 mrs., siendo las más frecuentes las que montan 1.000 mrs.

³⁰⁷ Juan Bernabé García, reo hermandino que había ocasionado más de 10.000 rs. de gastos en su procesamiento, es setenciado a varios años de destierro de Montilla pese a habérsele probado un doble asesinato. Al incautársele bienes por un valor muy superior a dicha cantidad, las autoridades locales obstaculizan su enajenación, debiendo entregarse "los dichos bienes a personas adineradas"; 8-VI-1695, Montilla (Ib., leg. 38, nº 4, f. 82vº).

³⁰⁸ Dichas multas fueron impuestas a concejos, como el de Agudo -Ciudad Real-, que a principios del siglo XVIII hubo de pagar 7.000 rs. de sus propios por mandato de la Real Chancillería al haberse inmiscuido contra fuero en un asunto de hermandad; 26-VII-1700, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 227, ff. 238r-vº); aunque serán más frecuentes las exigidas a los comisarios de la entidad dados a excesos (AHN. Div. Her., leg. 39, nº 8; 41, nº 2 y 12; 42, nº 9; etc).

309 Desde el último cuarto del Quinientos es evidente un incremento de dichas condenaciones. El 7-XII-1574 se condenaba al destierro a Juan Díaz Bueno por herir en el yermo a un paisano, así como a

"...en myll maravedis de pena para los presos desta Santa Hermandad y ospital della conforme a la antigua costumbre y en un real para azeyte a la lampara que reside delante del crucifijo que esta en la sala de la dicha Hermandad y en otros dos reales para las mysas que se dizen en la dicha sala a los presos los dias de fiesta."

(Ib., leg. 26, nº 4, s.f.).

En 1576 eran condenados a muerte dos cuatreros, siendo sus haciendas secuestradas para el hospital de la Mejora (ADPCR, s.c.); y el 17-VII-1613 un alcalde ordenaba entregar al dominico fray García de Carbajal 48 rs. por aliviar la conciencia de un ladrón y los "derechos de sangre" de dos causas destinadas a obras pías.

310 Vid. J. LALINDE ABADÍA, "Los gastos del proceso en el derecho histórico español", en *AHDE.*, nº 34 (1964), pp. 249-416.

311 Indirectamente sería el propio Santo Tribunal el que, a instancia de las audiencias superiores, destinase el importe de determinadas multas institucionales a fines piadosos. El 13-III-1752, la Real Chancillería de Granada impuso a la corporación apícola la exigencia de que entregase los 108 rs., procedentes de la sanción por ejecutar vergüenza pública en el reo Cristóbal Bernal sin consultar la sentencia, a la madre abadesa de un convento franciscano ciudarrealeño (Ib., leg. 60, nº 2).

312 En 1689 se indemniza con 250 rs. al dueño de una mula incautada a unos cuatreros y luego enajenada por el Santo Instituto (Ib., leg. 58, nº 12); en 1725 unos pollinos son recuperados por sus propietarios en Ciudad Real (Ib., leg. 45, nº 24); y en 1762 se compensó con 1.084 rs,

a un escribano de Bélmez robado en su casa por Manuel Río y Francisco Fernández, arrestados por los ministros manchegos el 7-I-1757 (Ib., leg. 60, nº 5).

³¹³ 29-X-1764 (Ib., legs. 60, nº 6; 43, nº 4 y 5).

³¹⁴ Involucrado Andrés López Doctor, regidor de Carrión de Calatrava -Ciudad Real-, en la irregular excarcelación de unos gitanos aprehendidos por un cuadrillero murciano, los alcaldes ordinarios serán retenidos en la prisión local, habiendo de pagar una multa de 400 rs. al mayordomo hermandino. El 7-IX-1652 el resto de los regidores de Carrión dicen no estar sujetos a responder subsidiariamente de su homólogo encartado, al haberse impugnado la validez de su elección en su cabeza de partido (Ib., leg. 34, nº 4, s.f.).

³¹⁵ Ib., legs. 39, nº 4; 41, nº 2; 45, nº 17; 46, nº 11.

³¹⁶ Detenida la familia de Antonio Tirado, gitanos de Almagro -Ciudad Real- por un comisario de Daimiel en unos aposentos pertenecientes a un presbítero de dicha villa. A pesar de no hallarse cargos inculpatorios, el representante hermandino vende una pollina y su cría que había embargado y que importaron más de 350 rs., con la pretensión de sufragar los gastos ocasionados. Un ministro superior al ser informado de semejante exceso, actúa contra su subordinado pues al no haber pleito era ilegal exigir costas y de haberlas se reducirían a los gastos de mantenimiento del reo en la cárcel pública daimieleña, estimada en unos 80 rs.; 12-XII-1725 Daimiel/13-II-1726, Ciudad Real (Ib., leg. 45, nº 25).

317 Dicho precepto, constantemente reiterado por el legislador, tiene su correspondencia en el Santo Tribunal. Así en el fallo condenatorio contra un paje que roba a su señor se contiene la cláusula que la sanción a costas procesales "se entiende de que pagarlas, porque sino no a de ser detenido por ellas en la dicha prisión"; 14-3-1595 (Ib., leg. 27, nº 9).

318 Arrestados tres castellanos nuevos en Medinaceli, serían despojados de sus bienes, quedando sujetos al pago de unas elevadas costas y gastos judiciales, por lo cual su procurador suplicaba por dichos reos

"...respecto que mis partes son pobres de solemnidad y sin mas bienes aqui ni en sus vecindades, que los embargados, en cuios terminos no puede tener efecto la sentencia y se eternizaran en la prision con lo que concurre que habran de perecer en ella por su necesidad, lo que dicta la misma experiencia, pues en cada tiempo de cinco dias que no se han dado los socorros que por ese tribunal se les adminstraba, han tenido sus pobres mujeres y hermanas que pedir limosna para llevarles un bocado a fin de que no perezcan, por cuios justos motivos y implorando el ausilio y venignidad de tan piadoso tribunal y cediendo como desde luego zeden mis partes los demas vienes que les embargaron, en los que no pueden pagar lo justo de las condenaciones a vuestras mercedes pido y suplico que aga remitirles y perdonarles lo que falto de costas y gastos y alimentos (que pagaran cada que pueden) y mandar se les livere de la penosa prision que padecen dandoles guia y pasaportes con que libremente puedan restitirse a su vecindario con sus familias."

Trasladado el escrito del letrado ante los jueces de la causa, éstos junto el fiscal de la causa aceptan el suplicatorio, librándose de inmediato los detenidos, aunque quedando en el poder del Santo Instituto todo lo requisado; 25/31-X-1720 (Ib., leg. 44, nº 2).

319 Memorial de 7-II-1716 (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 36r y ss.).

320 8-VII-1666, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 34, nº 3).

321 M. FOUCAULT inserta este paulatino abandono de las ejemplarizantes conducciones masivas de reos durante los siglos XVIII y XIX dentro de la tendencia a privatizar el espectáculo punitivo, transformándose el traslado de presidiarios en un sistema imprescindible realizado tan de incógnito como ello fuese posible; Op. cit., p. 23.

322 7-IX-1716, Ciudad Real (Ib., leg. 42, nº 11).

323 24/26-V-1722, Sevilla (Ib., leg. 45, nº 7).

324 Ib., s.f.

325 3/6-IX-1683 Ciudad Real y Piedrabuena (Ib., leg. 38, nº 2).

326 18-IX-1753 (Ib., leg 51, nº 7).

327 Ib., leg. 50, nº 2.

328 Ib., legs. 29, nº 2 y 3; 46, nº 9 y 51, nº 8.

329 Ib., leg. 49, nº 10.

330 A. VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTONA, op. cit., p. 80.

331 17-V/15-VI-1600 (Ib., leg. 28, nº 9).

332 24/25-V-1595 (Ib., leg. 28, nº 6).

333 15-I/29-V-1725 (Ib., leg. 45, nº 13 y 15).

- 334 12-IX-1602, Ciudad Real (Ib., leg. 29, nº 4).
- 335 Ib., legs. 48, nº 4; 49, nº 1. Vid. apéndice documental, texto nº 19.
- 336 10-IX-1726 (Ib., leg. 46, nº 3).
- 337 5-III/23-VI-1610 (Ib., leg. 31, nº 6).
- 338 10-IX/7-XI-1711 (Ib., leg. 32, nº 4).
- 339 7-III/15-IV-1603 (Ib., leg. 29, nº 5).
- 340 19-X-1654/30-X-1655, Granada (Ib., leg. 34, nº 4).
- 341 Ib., legs. 40, nº 6; 41, nº 11; 44, nº 8; 47, nº 13; 49, nº 2.
- 342 Ib., leg. 59, nº 1.
- 343 Ordenanzas de 1792, op. cit., f. 86r.
- 344 Ib., leg. 30, nº 1.
- 345 30-VII-1660, Granada (Ib., leg. 35, nº 6); 20-XI-1662, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nº 6); 20-VII-1643 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 171 bis, f. 271r); 25-II-1663 (Ib., leg. 151, ff. 157r-158vº); 6-I-1757 (Ib., leg. 545, ff. 1r-2r); 24-XI-1765 (Ib., leg. 551, ff. 61r-vº); 7-X-1656 (AHN. Div. Her., leg. 21, nº 37).

³⁴⁶ Excepcionalmente las garantías exigidas serían nímias, en razón de la debilidad de los indicios inculpatorios o la levedad de los cargos imputados. El 20-I-1655 salían bajo fianza Bernardo González, cazador de Urda -Toledo- y Sebastián Criado, ventero de Darazután, supuestos encubridores de una partida de bandoleros; y tres días después abandonaban la galera bajo palabra varios testigos de cargo y los alguaciles del castillo de Guadalerza, al no haber quien les avalase (Ib., leg. 34, nº 4); el 30-V-1762 un jornalero indiciado del hurto en unas colmenas era excarcelado en Granada dejando en prenda sus ropas y bajo caución juratoria (Ib., leg. 52, nº 4).

³⁴⁷ Ib., leg. 43, nº 14 y AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

³⁴⁸ J. CASTILLO DE BOVADILLA, op. cit., lib. 2, cap. 13, p. 387. Durante el Setecientos, algunos librepensadores impregados de las nuevas corrientes penalista ilustradas de la época clamaban contra esta práctica: FEIJÓO consideraba la virtud de la clemencia condenable en los magistrados, pues la inmunidad de los crímenes alentaría su proliferación; LARDIZÁBAL insistía en que el castigo inexorable era la única garantía para que no prosperase la esperanza en la inmunidad en toda comisión delictiva; BECCARIA por su parte, propugnaba la adecuación entre delitos y penas, prefiriendo las leyes realizadas por legisladores indulgentes que los perdones arbitrarios judiciales; vid. C. BECCARIA BONESANA, op. cit., pp. 132-133 y F. TOMÁS Y VALIENTE, "El perdón de la parte ofendida en el derecho penal castellano (siglos XVI-XVII-XVIII)", en *AHDE.*, nº 31 (1961), pp. 55-114.

³⁴⁹ El principio jurídico de "comunidad lesionada" que era preciso restablecer con la purgación de la culpa dejaba tales providencias en actitudes puramente testimoniales. A este respecto BECCARIA valoraba:

"El derecho a hacer castigar no pertenece a uno solo, sino a todos los ciudadanos o al soberano. La parte ofendida no puede más que renunciar a su parte de derecho pero no a anular a los otros."

Op. cit., p. 132.

350 Parece que este reo, arrestado el 30-IV-1623, había intentado impedir violentamente el incendio de la choza en la que vivía, y en el forcejeo subsiguiente acabó con la vida del agresor, todo ello durante la romería de la Virgen de la Cabeza delante de una nutrida concurrencia. El extranjero, lejos de negar su culpa o retractarse de sus acaloradas declaraciones, asegura públicamente

"...que no le pesava aver nuerto al dicho Pasqual Delgado sino que quisiera aver muerto a todos los que estavan con el y quisiera haçer ceçina al quadrillero que le prendio..."

(Ib., leg. 33, on 1, f. 42vº).

351 14-VII-1623, Ciudad Real y 2-VIII-1623, Granada (Ib., ff. 128r-156r).

352 28-VII-1623, Baeza (Ib., ff. 153vº-155vº).

353 El esfuerzo económico y las diligencias emprendidas por el Santo Tribunal fueron notables; invirtiendo en dicha consulta ambos alcaldes más de mes y medio de su tiempo y no menos de 987 rs. de vellón.

354 La carta-orden de 1-XI-1661, Madrid, expedida a consulta de la Santa Hermandad ciudarrealeña de 28-X-1660, disponía que fuese conducido

"...a las galeras de Hespaña para que sirva en ellas diez años al remo y sin sueldo y para wste efecto con las guardias necesarias le embien luego a la villa de Membrilla o a otra mas cercana por donde pasare el comisario Don Prudencio de Gamiz con la collera que lleba de Toledo al Puerto de Santa Maria..."

Conducido a la villa manchega de Membrilla, permanece en su cárcel desde el 8 al 20 de noviembre; el 23 de diciembre de dicho año ya estaba asentado como galeote en Cartagena, llegando fe de su recepción como forzado, el 30 de diciembre, ante los jueces instructores ciudarrealeños (Ib., leg. 35, 2n 3; ff. 92r y ss.).

355 En cuanto a la tipología y características de tales indultos vid. M.I. RODRÍGUEZ FLORES, *Posibles clasificaciones del perdón*, Salamanca, 1971.

356 El 14-XII-1714 los magistrados hermandinos emitían sentencia condenatoria contra dos andaluces por abigeato, destinándolos cuatro años a un presidio norteafricano. En Granada, el 23-IV-1715 no sólo confirmaba el anterior fallo interlocutorio, sino que expresamente considera que podían beneficiarse del reciente indulto general con motivo del enlace matrimonial de Felipe V con Isabel de Farnesio (Ib., leg. 48, nº 18).

357 La Real Pragmática de 30-VII-1749 preveía que todos los gitanos -fuesen hombres, mujeres o niños-, fuesen apresados y destinados a trabajos forzados. según Campomanes se procedería contra unos 9.000 castellanos nuevos, aunque pronto se evidenciará la imposibilidad material de mantenerlos reclusos a la par que se multiplican los memoriales elevados contra esta indiscriminada represión; poco después se producían las primeras excarcelaciones, aunque hasta 1763 no se liberarían los últimos gitanos; cf. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, *Los gitanos españoles. El periodo borbónico*, Madrid, 1977, pp. 223-231.

358 19-IX-1660, Granada (AHN. Div. Her., leg. 53, nº 1). Pragmática de 11-VII-1760; Actas de las Cortes de Castilla, t. 18, pp. 346-350.

359 11-II-1761, Granada (Ib., leg. 52, nº 2).

360 Ib., leg. 53, nº 6; vid. apéndice documental, texto nº 21.

361 11-X-1777, Ciudad Real (Ib., leg. 61, nº 5); 5-III-1781, AGS. C.C. leg. 875; cf. M.I. RODRÍGUEZ FLORES, op. cit. p. 16.

362 Ib., leg. 61, nº 4.

363 Ib., leg. 62, nº 4.

364 5-XII-1771, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 342, ff. 72r-73r).

8. RELACIONES INTERJURISDICCIONALES DE LA HERMANDAD DE CIUDAD REAL.

El panorama jurídico e institucional durante el Antiguo Régimen en la Corona de Castilla puede calificarse, cuanto menos, de complejo y, desde la óptica actual, de confuso sino de caótico. La diversidad de instancias jurisdiccionales y las variedades procesales vigentes no eran producto del defectuoso funcionamiento de la justicia sino que eran consubstanciales a un ordenamiento social estamental en cuyo marco se consagraba la diversidad y compartimentalización penal, a lo que había que añadir la pervivencia de gran parte del aparato jurídico bajomedieval en sus elementos esenciales.

Aunque el estado moderno, lejos de propiciar una unidad jurídico-procedimental, admitió tal heterogeneidad, paulatinamente es perceptible una tendencia sostenida de pretendida imposición de la justicia real ordinaria sobre el resto de las existentes¹. Esta orientación, impulsada desde la Monarquía, de recuperar parte de su esfera de competencias perdidas al serles arrebatadas por parte de los fueros privativos, hicieron exclamar a un jurisconsulto decimonónico que se había reducido a la mínima expresión "la jurisdicción Real Ordinaria, que con ser la primera, casi se podía tener y considerar como la última de todas"².

Esta hipertrofia de la organización administradora de justicia, como no podía ser de otra forma, auspició la sobreabundancia de jueces y tribunales; la irregular distribución de dichas cortes; su deficiente articulación jerárquica y la confusa delimitación de sus competencias. Por último, la fortaleza de la jurisdicción delegada, la

eclesiástica, obstaculizaba el normal desarrollo procesal penal al hacer valer su derecho medieval de amparo para dificultar las diligencias policiales, preventivas y sumariales, completando el enmarañado ámbito en el que se desenvolvía la justicia durante los siglos XVI al XVIII.

En este contexto, una aproximación a las relaciones de la Santa Hermandad manchega con el resto de las instancias jurídico-administrativas de la época podría llegar a limitarse a la prolija mención de los choques competenciales, quedando en demasiadas ocasiones la coerción de una determinada infracción criminal en un segundo plano ante las reiteradas fricciones entre unos organismos, a menudo inoperantes, que trataban de defender a ultranza sus respectivas prerrogativas.

Como no podía ser menos, fue constante la voluntad regia, las peticiones de los procuradores a Cortes y el espíritu que animaba a los legisladores a lo largo de la Edad Moderna -pero particularmente espoleada por los regalistas ilustrados-, para corregir, coordinar y conciliar los intereses y las actuaciones de todo este intrincado abanico jurisdiccional en favor del bien común encarnado en el poder coercitivo público: la justicia real. Decretos y circulares en tal sentido, tan repetidos como sistemáticamente incumplidos, tenían como respuesta la multiplicidad de litigios y recursos seguidos ante los altos tribunales regios. Entre los siglos XVII y XVIII esta dialéctica sigue siendo fuente inagotable de disputas y un pesado lastre para una coherente y racional administración judicial que aún tardaría tiempo en alcanzarse.

A pesar de la situación esbozada, sería inexacto colegir que cualquier comisión preventiva o penal emprendida por el Santo Instituto ciudarrealeno comportaría ineludiblemente un choque competencial; no es inusual que la relación interjurisdiccional de las justicias, el ejército y las autoridades concertasen sus fuerzas en detenciones de malhechores o evacuación de diligencias judiciales, aunque a menudo incluso tan sencillas labores suscitan recelos motivados por una supuesta o real injerencia en jurisdicciones ajenas, propiciando incidentes que, en el mejor de los casos, dilataban las actuaciones de oficio.

Los pleitos derivados de tales malentendidos eran substanciados ante la Sala del Crimen de las Reales Chancillerías, en caso de recursos de inmunidad local o de antagonismos susceptibles de ser interpretados como constitutivos de delito; en tanto que los conflictos jurisdiccionales serán tramitados invariablemente por el Supremo Consejo de Castilla -máxima instancia jurídico gubernativa de la Corona-, o por la juntas creadas para tal fin.

8.1. HERMANDADES VIEJAS DE TOLEDO Y TALAVERA.

Reducida eminentemente la colaboración institucional entre las entidades apícolas integrantes del Triple Instituto a la puntual defensa de sus derechos y regalías económico-fiscales ante los tribunales superiores regios, y excluyendo las esporádicas coordinaciones operativas auspiciadas desde la administración polisinodial central que trataremos en su momento, tenemos pocos datos sobre cualquier otro tipo de conexiones entre las Fraternidades coaligadas con el cabildo apícola manchego. El paulatino alejamiento de dichas corporaciones gremiales, al quedar desvirtuadas las directrices rectoras colegiadas emanadas de sus largas periódicas bajomedievales, no propiciaba la mayor fluidez entre dichas entidades que tanto habían compartido desde antaño. Al seguir una evolución cronológicamente paralela en el que se inserta un desarrollo institucional sejemante, aunque con ciertas peculiaridades que al menos desde el reinado de los Reyes Católicos se ahondarían paulatinamente, dejando en todo caso de ser tan convergente como lo había sido hasta entonces³.

La imprescindible y preceptuada ayuda entre las justicias del Reino conciliaría la debida colaboración de sus ministros, aunque en la práctica es patente una notable inhibición al respecto, mayor aún si tenemos en cuenta su relativa proximidad actuacional, llegando a coincidir en terminados momentos la superposición de circunscripciones territoriales⁴, e incluso la pertenencia de algunos de sus dependientes a dos de dichos institutos apícolas⁵. Cifrándonos exclusivamente al ámbito coercitivo y preventivo espontáneo contamos con esporádicas y

deshilvanadas referencias documentales sobre la colaboración institucional entre los tribunales toledanos y ciudarrealeño, así como la eventual contribución de ministros dependientes de distintos cabildos apícolas en la resolución de comisiones de justicia propias de una de las citadas audiencias especiales.

En 1654, estando procediendo los ministros manchegos contra una partida de bandoleros que actuaban por el puerto de la Matanza y toda la vertiente norte de Sierra Morena, asaltando a correos, arrieros y mercaderes⁶, conociéndose que uno de los involucrados -concretamente Jerónimo Cervantes, "el Cerrajero"- se hallaba preso en la galera del antiguo tribunal toledano, se despacha requisitoria para se remitiesen a Ciudad Real los autos acumulados por dicha organización colmenera y la persona del propio reo⁷. Tras no pocas fricciones suscitadas por las justicias ordinarias de Piedrabuena y Consuegra para capturar a sus cómplices, llega desde la Ciudad Imperial la noticia de que el día anterior a recibir la notificación se había excarcelado al recluso preventivo al no probárseles cargos de culpa, siendo infructuosas las ulteriores diligencias encomendadas a su alcaide para volverlo a arrestar⁸.

Igual de desalentadora resulta la siguiente referencia sobre colaboración entre ambas cortes de justicia. Se trata de un poder notarial otorgado por el ciudarrealeño Diego Orantes, preso en las mazmorras hermandinas, al abogado local licenciado Luis Martínez de Lucas, al entender había sido procesado por interpretarse como negligencia o supuesta complicidad suya por la fuga de un reo de la Hermandad de Toledo conducido a la capital manchega, alegando ser

"...incierta la culpa que se le ymputa por no averle el dicho preso ni traerlo por su quenta y quando e dize hizo la fuga

haber sido en una posada donde el otorgante trataba de cuidar sus mulas y de descansar por no estar a su cargo el cuidar de dicho preso."⁹

En 1676, habiéndose capturado por parte de los ministros ciudarrealeños a siete salteadores de caminos en las cercanías de Guadalupe, su gobernador reclamó para sí la causa, reteniéndolos en su poder e instruyendo sumaria, negándose a entregarlos tanto a representantes de la Hermandad Vieja de Ciudad Real como a los de su homónima de Toledo que personalmente los reclamaron mediante requisitoria¹⁰.

En el proceso penal instruido por el tribunal toledano a fines de 1712 hay referencias esporádicas relativas a comisarios manchegos que concurren a las diligencias llevadas a cabo por parte de sus cuadrilleros. En efecto, con motivo de la feria de San Mateo, en Consuegra -Toledo-, son encargados dos cuadrilleros de controlar la asistencia a dicho lugar de encuentro de malentretidos y castellanos nuevos, quienes a su vez se hicieron acompañar de dos paisanos armados. De sus actuaciones resulta el arresto por sospechas de cuatro individuos que eran montañeses alojeros¹¹, que tras demostrar su patria y honradez son dejados marchar, echándose en falta veintitrés doblones de los incautados en un primer momento. Los cuadrilleros indiciados niegan ser culpables del hecho, desviando las sospechas hacia un chico que se halló en el momento de realizarse la citada captura, asegurando a sus superiores que la única salida de dinero efectuada fue la gratificación de unos veintidós reales a un vecino de Alcázar de San Juan, dependiente del Santo Tribunal manchego¹².

Tales colaboraciones preventivas de ministros de hermandad en ferias u otro tipo de concentraciones públicas no resultaba

extraordinaria, si hemos que aceptar las informaciones proporcionadas por sus propios cabildos dieciochescos, consignando los ciudarrealeños supervisar los eventos festivos en puntos tan alejados como Ronda, Baza, Baeza, valle de Alcudia, Almagro, Almodóvar del Campo, Villarrubia de los Ojos, Consuegra, la Virgen de la Cabeza -Andújar- o Guadalupe, por citar algunos de los más importantes; en tanto que los toledanos dicen destacar efectivos en Guadalupe, Almodóvar del Campo, Consuegra y Alcázar de San Juan; teniéndose constancia de que los talaveranos hacían lo propio en la romería de Guadalupe durante centurias¹³.

En enero de 1717 dos comisarios ciudarrealeños se ven acompañados por un juez comisario de la asociación apícola talaverana -Antonio Ponce de León-, en la persecución de un ladrón con escalo, natural de dicha villa y que tenía su teatro de operaciones entre Fuenteovejuna y Azuaga. A pesar de haberse visto reforzados con otros tantos ministros manchegos, y debido a que portaban armas prohibidas, serán encarcelados por la justicia ordinaria de la citada villa cordobesa, solventándose el equívoco ante la Real Chancillería de Granada¹⁴.

En marzo de 1719 un juez comisario de la Hermandad de Ciudad Real, auxiliado por el también comisario Pedro Solda -vecino de Sanlúcar de Barrameda y dependiente de Talavera-, junto a varios paisanos concurre a la accidentada captura de una pareja gitana que vivía amancebada y era sospechosa de haber perpetrado un homicidio¹⁵.

Si entre 1722-1723 eran ratificados a costa de los caudales ciudarrealeños los testigos de una causa seguida por la Hermandad Vieja de la Ciudad Imperial¹⁶; años después al comisario talaverano Marcos de la Cruz -avecindado en Trujillo-, junto a otros convecinos,

exculpaban a dos gitanas arrestadas en una redada masiva contra castellanos nuevos efectuada en la feria de San Bartolomé -Medellín- por el ministro superior manchego don Vicente de Vera Ladrón de Guevara, conde de la Roca y del Santo Imperio. Arguyendo su virtuoso proceder, al haber peregrinado a dicha ermita para cumplir una promesa, logran recuperar sus caballerías, siendo excarceladas tras satisfacer las costas devengadas en razón de su estancia y manutención en la prisión durante los días en los que estuvieron confinadas¹⁷.

Así como pasa prácticamente desapercibido la interrelación en materia penal entre los cabildos apícolas federados, tampoco pueden imputárseles diferencias insoslayables en su devenir procedimental. En todo caso tampoco escasean las excepciones; un ejemplo, en 1705, el cuadrillero toledano Jerónimo de Torrecilla pretende arrestar al juez comisario dependiente de la capital manchega Sebastián Franco Carrillo, vecino de Lorca -Murcia-, so pretexto de no haberse acreditado la legitimidad de su título hermandino, suscitándose el fulminante auto de prisión y embargo por parte de la magistratura ciudarrealeña contra el infractor¹⁸.

Ocasionalmente los representantes de la entidad manchega acusados de abusos y cohechos serán objeto del celo de sus homólogos toledanos, debido a la animadversión general contra la proliferación de títulos protagonizada principalmente por la citada corporación. En 1720 dos cuadrilleros toledanos arrestaron a cuatro paisanos armados que conducían a unas gitanas detenidas en Villamiel -Toledo-. Transcurridos unos días, la Hermandad de Toledo informa a la de Ciudad Real que una partida acaudillada por un tal Toribio Grijuela -quien afirmaba ser juez comisario manchego- cometían al amparo de su supuesto título innumerables excesos y extorsiones contra gitanos,

"haviendo todos puesto presente mas la utilidad que el beneficio de la causa publica pues dicen andan por este medio buscando su mantenimiento"¹⁹. En base a tales presunciones racionales de culpa, los alcaldes toledanos solicitan proceder contra los detenidos, especialmente contra quienes secundaban al ministro de justicia, ya que sin despacho ni comisión alguna vagaban por el despoblado cargados de armas. Traslados a la sede del Santo Instituto toledano gitanas y captores, declaran ante sus rectores, siendo conducido el juez comisario arrestado ante sus superiores ciudarreleños por un cuadrillero mayor para responder de las culpas imputadas²⁰.

En fechas posteriores, particularmente entre 1740 y 1820, debido a los problemas suscitados por la delimitación de sus respectivas circunscripciones, las relaciones interinstitucionales entre los Tribunales apícolas en materia criminal se enfriarán en buena parte, compartimentalizándose más si cabe su devenir jurisdiccional, aunque no debe descartarse la existencia de un esporádico intercambio de información y cooperación en determinadas diligencias, casi siempre auspiciadas desde el Consejo de Castilla, como órgano rector por excelencia del Triple Instituto.

8.2. JUSTICIAS LOCALES.

La casuística que rodea el inevitable trato entre los ministros hermandinos y las justicias locales -alcaldes ordinarios y mayores, corregidores o sus alguaciles, los de la Hermandad General, Caballeros de la Sierra, etc- resultaría tan prolija como inútil, por incompleta, de citar particularizadamente, por lo cual nos limitaremos a trazar las líneas maestras que fueron seguidas y a mencionar los casos más notables o representativos que nos permitan conocer con más detalle la forma de actuar de unos y otros durante el periodo que nos ocupa.

Durante los siglos XVII y XVIII la figura del caballero de la Sierra como oficial concejil encargado de garantizar el respeto a las propiedades rurales privadas o comunales -explotaciones agropecuarias, cinegéticas, apícolas y de los montes- aparece ya en al práctica totalidad de los casos consultados como un resorte preventivo y ejecutivo esencialmente desnaturalizado e ineficaz, pese a los pretendidos y muy localizados intentos para revitalizarlo²¹, ocupándose de su ministerio y asumiendo prácticamente sus atribuciones los guardas de campo nombrados anualmente por los cabildos o por los particulares para salvaguardar sus intereses, demostrando repetidamente tales sujetos ser tan necesarios como inoperantes e irresolutivos²². Estos paisanos encargados de velar por la integridad de viñedos, olivares, plantíos y montes lejos de suponer una ayuda o una rémora para las actuaciones de los representantes de La Hermandad Vieja constituyen más bien un grupo profesional tan expuesto a sufrir como a ejercer agravios en el ejercicio de su cometido, y por lo tanto

apareciendo indistintamente entre los querellantes o entre los acusados que bien recurren, bien quedan bajo la justicia hermandina.

La Hermandad General del Reino, ostentadora esencialmente de la misma jurisdicción especial real que sus homólogas de Ciudad Real, Toledo Y Talavera, se hallaba sumida en un grado de esclerotización tal que sus ministros eran víctima del desprestigio que se habían granjeado, aunque su evolución fue tan dispar que mientras eran menospreciados a menudo por sus convecinos en las pequeñas localidades, en algunas grandes ciudades se convirtieron en reducto del patriciado urbano hidalgo, siendo considerados por unos y otros como un añejo vestigio institucional con un pasado glorioso, un presente sin contenido y un futuro incierto. Siendo tal el parámetro en el que puede insertarse la realidad de estos oficiales concejiles durante el Seiscientos, y sobre todo durante el Setecientos, no es menos cierto que la atomización de la antaño coordinada Hermandad General propiciaba un desarrollo individualizado, paralelo y no siempre convergente en los distintos espacios donde pervivió, siguiendo una evolución tan dispar que eventualmente podrían mantenerse unos determinados niveles de operatividad, aunque en todo caso siempre circunscrita a un ámbito meramente local.

Entre los pocos casos que sabemos de la existencia unos ciertos niveles de autonomía corporativa de sus ministros, normalmente supeditados a los intereses municipales para no despertar el recelo, -justificado o no- de los capitulares²³, así como de una palpable eficacia actuacional, caben citarse los siguientes ejemplos, a nuestro entender representativos de la realidad existente.

A fines de 1715 don Antonio Balcárcel y Alfaro, alcalde de Hermandad de Tobarra -Albacete-, protagoniza un incidente que participa de inmediato a Ciudad Real, consistente en que al pretender capturar a un grupo de gitanos errantes, presumiblemente amparados por el teniente de corregidor de Chinchilla, había sido despojado del papel sellado -imprescindible para cursar la sumaria- en Hellín, donde se personó para obstaculizar sus diligencias dicho oficial real, afligiéndole con multa y prisión. Un traslado del notario público de su localidad de origen certifica que el oficio que ostentaba el agraviado era un cargo concejil honorífico, sin atribuciones ejecutivas específicas ni concretas y provisto por los munícipes. El alcalde de Hermandad recurre, aconsejado por los rectores hermandinos manchegos, a un letrado de Murcia para asesorarse sobre sus derechos, quien parece desaconsejarle que emprendiese acción legal alguna; en julio de 1716, cuando cumplía su empleo, aún quedaba pendiente la resolución de dicha quimera²⁴.

Son escasísimas las noticias consignadas, entre la documentación consultada perteneciente a la corporación ciudarrealeña, relativa al resto de las Hermandades locales dentro de su ámbito territorial. En las postrimerías del Quinientos se querellaba Alonso Rodríguez, natural de Belmonte -Cuenca-, ante el alcalde ordinario de Villamanrique, de que cuatro porqueros forasteros le habían agredido mientras guardaba unos pagos en las afueras de Villanueva de los Infantes -Ciudad Real-, logrando liberar a un zagal que había prendido mientras hurtaba uvas, siendo vanas las diligencias para aprehender a los huidos por los alcaldes de hermandad de Villamanrique, arredrados por la resistencia violenta de los involucrados cuando se pretendía su arresto, llegando el caso ante el Santo Tribunal por la pasividad de las autoridades concejiles locales²⁵.

En abril de 1623, procediendo los cuadrilleros manchegos contra los ladrones que habían despojado de sus pertenencias al ventero de la posada de la Reina, y conocedores que la Hermandad de Almagro había apresado a uno de los sospechosos por se naturales de dicha villa, requiere mediante uno de sus escribanos al gobernador del concejo la entrega del reo, autos instruidos y bienes incautados. Cuatro meses después era palpable que la reclamación había sido inútil, al negarse a la entrega solicitada con el fútil pretexto de que sin el mandato expreso de los Fúcares -arrendadores de la escribanía local- no se podían incoar autos en dicha gobernación por parte del notario hermandino, conculcándose las sucesivas concordias con el Común y Orden de Calatrava. En septiembre del citado año se notificaba desde Granada a los alcaldes ciudarrealeños que se había ganado real provisión compulsoria en la Real Chancillería en la que se expresaba la ilegitimidad de los obstáculos aducidos en Almagro²⁶.

Ya durante el Setecientos, un alcalde de la Hermandad General de Jerena ganó auto de la Real Audiencia de Sevilla para que se le restituyese una pareja de gitanos arrestados por un dependiente de Ciudad Real en el cortijo de la Pisana, dentro del término municipal de dicha villa. El alcalde mayor de su jurisdicción será el encargado de ejecutar el citado mandato, despojando de reos y embargos al juez comisario captor²⁷. En 1746 un alcalde de la Hermandad Nueva de Malagón auxilió a los ordinarios de dicha población manchega a prender a un colmenero sospechoso del robo de un jamón en una quintería del presbítero y comisario inquisitorial don Antonio Sánchez de Torres, utilizando el expeditivo sistema de prender como rehén al hijo del indiciado para obligarle a abandonar la casa del santero en la que se había refugiado; debido a la escasa entidad de la supuesta infracción

cometida y a ciertas reticencias de la justicia local, el reo será liberado sin cargos tras ser amonestado²⁸.

Pero no todas sus actuaciones serían indefectiblemente perniciosas para los intereses del Santo Tribunal. En 1745, don Alonso Tortolero y Monzón, alcalde hidalgo de la Santa Hermandad de Écija, fue comisionado por la magistratura ciudarreal para substanciar la sumaria contra Juan Miralles y Juan Ignacio Rincón -inculpados del robo a un arriero gallego en las cercanías de Almodóvar del Campo-; surge la polémica cuando dos mujeres que estaban custodiadas como testigos de cargo en la cárcel pública ecijana se quejan que el notario numerario instructor de la causa les exigía excesivas garantías para salir bajo fianza así como del proceder del alcalde mayor andaluz, quien aduciendo que al asilarse Juan Miralles en la parroquia de Santiago molestaba los oficios divinos regulares, extraído con la aquiescencia del vicario eclesiástico, sería conducido a la galera pública por no haberla apostólica en la villa²⁹.

Una problemática muy distinta presentan las casi siempre tensas relaciones con los alcaldes ordinarios y mayores -éstos últimos también llamados gobernadores en las poblaciones de órdenes y corregidores en el realengo-. Los primeros solían ser cargos renovables mediante sorteo o insaculación, mientras que los segundos eran elegidos directamente por el poseedor de la jurisdicción local -bien fuesen sus señores laicos o religiosos, y el Consejo de Castilla si correspondía su provisión a la Corona-, por un tiempo máximo de tres años consecutivos³⁰. Estas altas justicias habían obtenido en las Cortes de Guadalajara de 1390 la potestad para dirimir en segunda instancia los pleitos substanciados por las ordinarias concejiles, quienes mayoritariamente entenderán en primer término sobre cuantos

pleitos civiles y criminales aconteciesen en su distrito, aunque siempre de forma acumulativa, no privativa.

La administración de justicia municipal se haya aquejada y era campo abonado para la aparición de las mismas lacras que imposibilitaban el equitativo e imparcial proceder del resto de los jueces: corregidores o sus homólogos exentos que despojan a sus inferiores jerárquicos de las causas que les correspondían en primera instancia³¹; la venalidad de unos magistrados infradotados salarial y técnicamente³²; alcaldes o subordinados que anteponen su afán de lucro a la consecución del bien común³³; control espurio y manejo arbitrario de los señores jurisdiccionales o de los poderes fácticos locales sobre los resortes judiciales del vecindario³⁴; e impericia de determinados jueces legos, sobre todo en las pequeñas localidades³⁵.

Ocasionalmente justicias locales de diverso signo u oficiales concejiles solicitan el ingreso, como hermanos hasta el Seiscientos o como comisarios en fechas posteriores, obteniendo dicha merced sin mayores inconvenientes y casi siempre con la calidad derivada de su calidad personal socio-profesional, solventándose de este modo y de un plumazo las posibles pugnas de competencias al estar investidos los mismos sujetos de una doble y, a menudo, complementaria jurisdicción que les permitiría actuar indistintamente en poblado o en el yermo³⁶.

Ya durante el reinado de los Reyes Católicos se hizo un notable esfuerzo para conciliar la jurisdicción hermandina con la de los magistrados locales, mediante al regulación pormenorizada de las competencias de unos y otros, de manera que correspondería a los alcaldes ordinarios el conocimiento preventivo de los casos de hermandad en el supuestos de permanecer omisos los especiales;

prescribiendo el auxilio recíproco entre los ministros de ambas jurisdicciones previo requerimiento formal; dejando a los alcaldes de Hermandad el encartamiento y castigo de sus dependientes por razón de las culpas perpetradas durante el desempeño de su ministerio, designando como jueces competentes en su defecto a los ordinarios; remitiendo a los jueces concejiles a los casos indebidamente incoados por la Santa Hermandad; ordenando la entrega de malhechores a los alcaldes correspondientes por parte del resto de las justicias o sus oficiales³⁷. Tales preceptos serían recordados en el siglo XVIII³⁸, con una cadencia y reiteración que patentiza de la forma sistemática con que serían conculcadas por las partes compromisarias.

Para evitar agravios y molestias entre justicias era práctica usual que el cuadrillero se presentase voluntariamente ante la justicia de la circunscripción en la que se encontraba para informar de su presencia en jurisdicción ajena, requiriendo eventualmente el debido auxilio como representante de un tribunal regio acreditado mediante su título³⁹, aunque no es menos cierto que a menudo dicho trámite se cumplimentase tras ejecutar la comisión pertinente. El motivo de esta demora con frecuencia era justificada por la perentoriedad de la orden de captura; al estar ilocalizables los magistrados concejiles; o, generalmente, al ser conscientes por experiencia de que su no sujeción a manifestar a jueces ajenos el contenido de sus despachos secretos -bien por presumirse patrocinio de los sospechosos o por afirmar su jurisdicción, lo que a menudo sería considerado como prepotencia por las autoridades municipales- derivaba ineludiblemente el riesgo de que se viesen obstaculizados en sus diligencias, siempre que no se considerasen con las suficientes fuerzas para afrontar por sí solos la ejecución de las misiones encomendadas⁴⁰. Aunque no es extraño que alcaldes, corchetes y alguaciles, contribuyesen a la búsqueda y

captura de reos de hermandad cuando se encontraban o refugiaban en los pueblos⁴¹, no lo es menos que con demasiada reiteración no eran respetadas las cartas de seguro que solían portar comisarios y cuadrilleros cuando actuaban mediante comisión o de oficio.

Casi siempre que se planteaba alguna colisión competencial entre justicias el procedimiento seguido era teóricamente sencillo: la parte que se consideraba lesionada ponía en conocimiento del tribunal manchego el asunto si se trataba de sus dependientes, acudiéndose en el resto de los supuestos directamente al Consejo de Castilla. Cada una de las partes intentaba por todos los medios a su alcance hacer valer su primacía en la causa instruida, acudiéndose unas veces a la mediación de clérigos, otras a la presión los poderes locales, apelándose al parentesco o a las vinculaciones económicas existentes. Como dichos recursos extrajudiciales muchas veces resultaban fructíferos, emprendían las acciones legales pertinentes: cada una de las partes implicadas se declaraban competentes y se intercambiaban escritos notariales donde se expresaba su intención de continuar con al sumaria, exhortando a la instancia litigante mediante despacho para persuadirla que se retirase de la causa por vía de entendimiento, es decir, voluntariamente⁴².

Poco contribuía a la resolución del conflicto competencial la fórmula acumulativa del conocimiento judicial de los casos de hermandad, que perderían su carácter privativo al entenderse que corresponderían sus substanciación indistintamente a los alcaldes hermandinos o a los ordinarios -por inhibición, falta de atribuciones jurisdiccionales operativas o inexistencia de los primeros-. Esta pauta, inducía a la confusión por poderse interpretar arbitrariamente, o por cuestionarse la validez de extender la citada norma a los

cuadrilleros o comisarios de las Hermandades Viejas, lo que a la postre suscitará innumerables antagonismos. Contribuyen igualmente a tales fricciones tanto el que invariablemente los ministros de justicia intenten evidenciar ante sus convecinos su autoridad inalienable como el que los comisarios se arrogasen atribuciones nunca concedidas expresamente, procediendo contra fuero en delitos tales como hurto de mieses⁴³; quebrantamiento de pajares, provocando la pérdida de grano⁴⁴; reyertas en el campo motivadas por palabras injuriosas⁴⁵; pendencias por traspasar mojones y cuestiones de lindes⁴⁶; incidentes al entrar ganado en sembrados ajenos⁴⁷; hurtos de gavillas de sarmientos en los pagos⁴⁸; amancebamientos⁴⁹; hechicerías⁵⁰, etc, si bien a menudo se trata de delitos menores, accesorios en comparación con los que determinan su enjuiciamiento por parte de la Hermandad, soliendo considerarse penalmente agravantes.

En raras ocasiones cede el Santo Instituto en este forcejeo institucional previo, aunque tampoco faltan tales casos: en 1600 los alcaldes ciudarrealeños hubieron de inhibirse del proceso criminal incoado contra el hijo del ventero del Viso del Marqués condenado por la justicia del marquesado por el robo a una mulata que se había alojado en su dicha posada⁵¹; en 1634 los alguaciles de Campo de Criptana recogieron en la galera hermandina al reo Juan López Zamorano por pender causa contra él ante la jurisdicción ordinaria⁵²; en 1764 eran conducidos Ignacio y Miguel Morcillo ante la justicia de Villanueva del Arzobispo al ser acusados del hurto de grano en el pósito de un noble comarcano y considerarse ésta falta en poblado⁵³.

Como lo más usual era que ninguna de las partes desistiese de su empeño, el pleito era elevado a la instancia judicial superior competente, tratando mientras los litigantes de mantener en su poder

reos, embargos y autos en tanto que se dilucidase la competencia. Aunque a menudo se otorga la razón a los representantes manchegos, siendo cuantitativamente los veredictos desfavorables netamente inferiores a los positivos a la luz de las fuentes consultadas⁵⁴, tal vez hubiera de replantearse estas primeras conclusiones con todos los datos en la mano⁵⁵.

La confusión legislativa, normativa procedimental y jurisdiccional existente propicia el que las autoridades locales hiciesen suyas las causas ajenas al estar en juego tanto su prestigio profesional y personal como el hecho de que se aceptase que los magistrados instructores participasen de las gabelas derivadas de sus diligencias al frente de la administración concejil de la justicia, resistiéndose casi siempre numantivamente a renunciar a tales percepciones⁵⁶. Éste también parece ser el motivo de que alguaciles y alcaldes ordinarios colaboraban en la captura de sospechosos para, poco después, intentar apropiarse del caso⁵⁷.

Ocasionalmente la instancia que asume un pleito que en puridad no le corresponde acelera los trámites para evitar ser a su vez desposeída. A principios del siglo XVIII unos comisarios aprehendieron a un criado que había sustraído varios efectos personales al alguacil mayor de Jaén; al pasar por Manzanares se dirigieron captores y detenido a la posada donde se alojaba el gobernador, quien no duda el arrogarse el pleito; días después los alcaldes ciudarrealeños remiten por correo ordinario auto exhortatorio a la justicia de la villa para que le devolviese lo incautado, so pena de quinientos ducados de sanción pero, mientras tanto, el gobernador ya había dictado sentencia, condenando al reo a servir en el regimiento de infantería de Extremadura y entregándolo para ello a un capitán reclutador,

aceptándose por concluida la resolución de la causa; como quiera que el robado reclamase sus pertenencias, desde Ciudad Real se le notifica que el caballo secuestrado había sido vendido para satisfacer sus costas⁵⁸.

La mala predisposición de algunos magistrados concejiles contra los ministros hermandinos da lugar a una heterogénea casuística que delata el secular antagonismo entre dichas jurisdicciones. Si en ocasiones se limitan a negarles expresamente su auxilio para desempeñar determinadas diligencias⁵⁹; otras veces utilizan artimañas más sutiles y emplean estrategias dilatorias⁶⁰; no faltando los supuestos en que se desprecia abiertamente la autoridad de la que se haya investida un determinado comisario⁶¹; ni en los que los magistrados concejiles apresan al cuadrillero con el único objeto de impedir el cumplimiento de su comisión⁶², enjuiciándolo por tenencia ilícita de armas⁶³, recriminando a los notarios que les asistían⁶⁴, escribanos que manejan a su antojo a los jueces legos⁶⁵, etc.

Eventualmente las supuestas ingerencias a las actuaciones hermandinas están plenamente justificadas. En mayo de 1797 un eminente miembro del Santo Tribunal, don Francisco Hidalgo Vasco y Moztezuma, maestrante de la Real de Ronda y afincado en Estepa -Sevilla-⁶⁶, enterado que unos bandidos habían asaltado a un oidor de la Audiencia de Sevilla, solicita al alcalde mayor del marquesado que le asigne veinte paisanos para partir bajo su mando en su persecución, lo que será aceptado, sin admitir las excusas de los requeridos⁶⁷, aunque manifestando el juez superior su malestar por la impericia de sus colaboradores en el manejo de las armas de fuego, tratando por todo los medios de que los propios concejiles sufragasen la salida. Esta actitud crítica del comisario despierta la ira del alcalde mayor y las

quejas de todo el vecindario, acusándole el primero de que "solo quiere armar ruido y aparentar mucho celo por el Real Servicio", negándose a gratificar de los caudales públicos a los vecinos que le habrían de acompañar por haberle participado su "animo de gastar en vino, y aguardiente con la gente quatro o cinco duros", inculpándole de demorar la partida voluntariamente para publicar sus méritos ante sus superiores⁶⁸.

Puesto entre la espada y la pared, don Francisco decido fijar la fecha de salida para acallar estos rumores, pero lejos de llevar el caso cautelosamente se pone al frente de los convocados con gran pompa y aparato, haciendo congregarse en la plaza pública unos treinta hombres, entre infantes y jinetes de la villa de Estepa y comarcas, atrayendo la atención de mujeres y niños en lo que unos de los asistentes califica de "ir a pillar liebres con tambores, que aquellos asuntos no se hacian tan publicos y que eso era nada mas que ir a asombrar el Mundo, y assi que no iba el testigo", quejándose de la demora con que se emprendía y exponiendo que amparaba tales abusos la amistad personal que unía al comisario con el marqués de Écija, evitando trabajar con tal oficio.

En junio de 1797 el alcalde mayor solicita que fuese desposeído de su título el interfecto, al ser notorio que pretendía rentabilizar el robo al oidor para hacerse famoso ante audiencias y tribunales, considerando una locura acometer a una nutrida partida de facinerosos con una cuadrilla de paisanos arrancados de sus hogares sin el estímulo de un salario proporcionado a su peligrosa misión. Meses después el caso era sobreseído por el Supremo Consejo, apercibiéndose a las justicias enfrentadas para que se ciñesen a sus respectivos ministerios⁶⁹.

Este cúmulo de irregularidades y excesos de unos u otros habría de traducirse en un constante intercambio de requisitorias y exhortos entre las autoridades litigantes, que si bien a medio plazo había de sujetarse a lo prescrito a las providencias emanadas del Consejo de Castilla o de las Chancillerías, en la práctica resultan inoperantes a corto plazo al frustrar algunas actuaciones, y a largo plazo no hacían si no exacerbar la falta de solidaridad institucional de que adolece todo el entramado judicial durante el Antiguo Régimen, del mismo modo que acrecienta la enemistad personal entre los pleiteantes. En todo caso es perceptible un paulatino progreso en la efectividad de las directrices arbitradas desde los tribunales supremos de justicia regia que si a la altura del Setecientos eran ejecutados taxativamente, la centuria anterior no pasaban a veces de decretos inaplicables por la fuerza de los hechos consumados y el poco respeto que les merecían unas justicias locales a menudo prepotentes en sus respectivos feudos.

Los ejemplos se suceden: en 1608 los alcaldes manchegos reclaman a la Real Cárcel de Almadén la remisión del reo Alonso Bodoque "el Gato" para responder de sus crímenes ante el Santo Tribunal con tan mala fortuna que desde Granada hubieron de promulgarse tres ejecutorias sucesivas a favor de dicha reclamación en vista de su incumplimiento reiterado; ante la inoperancia de tales arbitrios, se encaminaron a Almadén Juan Bautista Cárdenas -receptor de la Real Chancillería-, Francisco Daga -alguacil de corte- y dos cuadrilleros con órdenes de conducir al reo a la capital manchega o apresar al alcaide de Minas y proceder contra su depositario. Días después se personaban en la villa dicha comitiva, pero pese a recabar la mediación de los Fúcares sus diligencias resultan infructuosas al haberse fugado el requerido y negarse el superintendente doctor Luis Francisco de la Madriz a

responder del prófugo⁷⁰. Cerca de tres años tardó en imponerse la multa al gobernador y alcaide de Almadén⁷¹, sanción que a la postre se demoraría otros seis meses en hacerse efectiva⁷².

Casi cincuenta años tardó la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en devolver el golpe a las autoridades de Almadén. Cuando en 1656 era vuelto a capturar un prófugo sentenciado a minas por los jueces ciudarrealeños⁷³, al ser reclamado por el superintendente general de Almadén para que terminase de purgar su pena, llegando a ofrecer el acostamiento de los guardas que lo devolviesen al trabajo forzado, pero los alcaldes hermandinos denegaron su remisión al considerar insuficiente el celo empleado en su custodia y, tras ser atormentado, el reo será ejecutado en Peralvillo⁷⁴.

Las relaciones entre la Fraternidad manchega y la autoridades de la ciudad que la alberga merece particular atención por tratarse de una pieza clave del complicado rompecabezas para entender la correlación de fuerzas en la capital manchega durante los siglos XVII y XVIII. Asegurada la neutralidad de los oficios concejiles por tratarse de los deudos o los propios hermanos del Santo Tribunal -aparte el hecho de que la Hermandad General local está desprovista de toda jurisdicción-, debemos de centrarnos en el comportamiento del corregimiento y, en su momento, de la intendencia radicada en Ciudad Real. En líneas generales se observó una escrupulosa conducta recíproca de no ingerencia en los asuntos internos de cada una de las entidades coexistentes, salvo los periódicos intentos del corregidor de residenciar a los oficiales hermandinos, suscitándose ocasionales competencias en los asuntos de la jurisdicción criminal.

De principios de 1599 data el primer choque del que tenemos noticia, cuando los alcaldes hermandinos se enfrentan a la pretensión del alcalde mayor ciudarrealeño de enjuiciar al ex-arquero del Santo Instituto Manuel Rodríguez del Río, conculcando las atribuciones de la audiencia especializada apícola en materia "cibil y criminal y mixto ymperio para en todas las causas a ella tocante y a sus aciendas y rentas y a el beneficio dellas", no considerando de recibo el que un juez encartase a otro investido de idéntica potestad, terminando por remitir el corregimiento la causa a la Chancillería de Granada⁷⁵. En 1613 se debieron de hacer las pertinentes gestiones en Madrid y Granada hasta inhibir al corregidor Alonso Nieto, al no observar la ejecutoria de la Real Chancillería que concedía la causa del reo Juan de Villadiego a la Santa Hermandad, llegando a desacatar e insultar a sus rectores corporativos⁷⁶; en 1616, tenemos la noticia de que dos cuadrilleros fueron desde Orgaz a la Corte para percibir la multa impuesta a dicho ex-corregidor ciudarrealeño, de lo que se induce el fallo favorable a las aspiraciones de los colmeneros⁷⁷.

En la década de 1630 también se plantean ciertas fricciones entre ambas jurisdicciones, solventadas sin grandes problemas, lo que no acontece en 1665, cuando el receptor granadino don Alonso Espinosa de los Monteros, el alcalde hermandino Antonio López de Brianda, el escribano de millones Antonio Baçán y el alguacil de corte Bartolomé Donoso nombran procurador ante Granada al proceder el corregidor local contra los tres últimos, encarcelándolos e injuriándolos⁷⁸. Y hacia 1678 renace la enemistad entre los titulares de dichas jurisdicciones al querer entender ambos tribunales en la causa contra nueve gitanos⁷⁹.

A partir de esa fecha no tenemos constancia de que se quebrantara unilateralmente la concordia trabajosamente alcanzada durante el reinado de Felipe II, pese a que esporádicamente la conducta del representante regio distó mucho de ser ejemplar⁸⁰. Tal vez el motivo de esta distensión haya que buscarlo en que, tras un periodo de relajación de los resortes del control de la labor hermandina, a fines de la centuria se cambió el sistema de fiscalización, asumida ahora directamente por los Reales Consejos. La coincidencia de hermanos preeminentes del Santo Instituto en los empleos de tenientes de corregidor demuestra que este cargo de justicia, designado libremente por los titulares y remunerado a su costa, nos parece prueba fehaciente de la coincidencia durante el Setecientos de intereses de la oligarquía local -encarnada en las personas de los dirigentes hermandinos- con el delegado regio.

Precisamente será a finales del Siglo de las Luces cuando los escasos roces jurisdiccionales de los que tenemos noticia serán engendrados por la intendencia manchega⁸¹. Desde principios de 1780 ya se venían arrastrando algunos conflictos larvados de intereses entre los poderes locales aliados al corregimiento y unos, a su entender, prepotentes intendentes provinciales⁸²; así en 1785 el cabildo de regidores remite a Madrid un incendiario memorial denunciando los supuestos abusos del intendente y de sus dependientes⁸³. El soterrado enfrentamiento entre unos y otros se reprodujo once años más tarde, al ser inhibido el intendente de Ciudad Real cuando pretendía proceder contra tres reos capturados por la ronda de tabacos pero entregados al Santo Tribunal por su presunta complicidad con un reo de hermandad⁸⁴.

Utilizada la galera hermandina durante centurias como lugar de confinamiento de reos de diversas jurisdicciones, al tratarse del

establecimiento penitenciario más seguro de la antigua provincia de La Mancha, ocasionalmente con funestas consecuencias para sus alcaides⁸⁵, la justicias municipales se aprovecharían de la disponibilidad de sus calabozos para custodiar a sus reos. La necesidad de este recurso a la infraestructura aportada por la entidad apícola fue prácticamente constante: si hacia 1622 el carcelero de la prisión pública suplicaba al ayuntamiento que reforzase el edificio por hallarse en un estado lamentable⁸⁶, habría que esperar hasta Navidades de 1627 para que esta advertencia fuese tenida en cuenta, al constatarse por el corregidor que al estar varias de las dependencias hundidas era imperativo su remodelación, siendo puestos los reos a resguardo en la inmediata sede de la organización colmenera⁸⁷. Durante casi todo 1693 el alcaide y el sotalcaide públicos custodiaron, previsiblemente en dicha prisión, a unos reos peligrosos que hubieron de ser incomunicados mediante su distribución en sus calabozos⁸⁸. En la segunda mitad del Setecientos, particularmente desde 1770, el deterioro en el que se encontraban sumidas las dependencias del edificio concejil suscita ininterrumpidas remodelaciones, particularmente importantes en 1756, 1780-1781 y 1800-89, recurriéndose sistemáticamente a la remozada galera hermandina para albergar temporalmente a sus reclusos.

8.3. JURISDICCIONES ESPECIALES.

Como sucede con las justicias locales, muchos receptores de tributos, percibidos por funcionarios reales o por a menudo arrendatarios, se sienten atraídos por los títulos de hermandad para beneficiarse de sus atribuciones jurídico-policiales y de sus privilegios fiscales, sin duda estimables para el desempeño de sus empleos y salvaguarda de sus haciendas. Asimismo no resulta sorprendente que miembros de dichas jurisdicciones se prestasen auxilio mutuo en diligencias preventivas, ejecutivas o cautorias -bien fuese acompañando rondas o salidas, participando en seguimiento de delincuentes comunes o contrabandistas-, bien abriéndose las cárceles hermandinas a los reos de jurisdicciones ajenas.

Tenemos la certeza que esporádicamente hubo una fluida cooperación entre efectivos del ejército o de la milicia provincial -de la que por otra parte algunos hermanos serán oficiales-, con el Santo Tribunal. La soldadesca será fuente permanente de problemas para el mantenimiento del orden público, estando muy extendida la opinión de que "donde ai tropas, es mas dificil la observancia de qualquiera excepcion"⁹⁰. Las tropelías protagonizadas por desertores y grupos de soldados desmovilizados errantes, que merodean por el campo viviendo de la rapiña y la estafa, serán una constante durante el Antiguo Régimen.

Durante el Seiscientos la mayor parte de los obstáculos puestos al normal desarrollo de las diligencias judiciales proceden de militares en tránsito por los pueblos, y a quienes sistemáticamente se les

imputan cuantos hurtos, violaciones, reyertas y desmanes se producen en el lugar, no faltando, como aconteció en Villahermosa -Ciudad Real-, que testifiquen favorablemente sobre la inmunidad local de unos gitanos por unas pocas monedas, siendo tenidos por ello generalmente como sujetos "de poca seguridad, falsos y jente vil"⁹¹. Arrestados en 1679 unos soldados sospechosos de haber cometido diversos robos por un juez comisario de Manzanares en La Mancha Alta, resultan pertenecer al trozo del Rosellón y asegurar estar persiguiendo a un desertor de Requena -Valencia- negando las acusaciones de las que eran acreedores; reclamados de inmediato por el Consejo de Guerra al hallarlos culpables de varios asaltos en despoblado, es enviado un alférez desde Madrid para tomar bajo su custodia a los detenidos y conducirlos hasta su acuartelamiento⁹².

Durante la guerra de Sucesión, y en los años inmediatamente posteriores, el Santo Instituto actuó expeditivamente contra las partidas de soldados que merodeaban por campos y aldeas sin reconocer mando castrense alguno, viviendo de las extorsiones a cortijeros y trajinantes. En las cuentas rendidas por el mayordomo hermandino en 1713 se asienta el acostamiento al alcaide institucional por su trabajo en mantener a los migueletes -soldados catalanes afectos al Archiduque- en la galera⁹³; probablemente se tratase o fuesen compañeros de los mismos que por entonces se fugaron de la prisión de Almodóvar del Campo tras asesinar a la esposa del sotalcaide y asilados luego en el convento carmelita de dicha localidad manchega⁹⁴.

Ocasionalmente las tropas serían empleadas como fuerza auxiliar para el mantenimiento de la seguridad del yermo por parte de los dependientes hermandinos, concurriendo a las capturas de peligrosos criminales⁹⁵; en los traslados de reos de hermandad a su cárcel o

destino⁹⁶, etc. La Santa Hermandad se encarga de gratificar a éstos y a los asisten a los ajusticiamientos en Peralvillo, tratando de corresponder a la valiosa ayuda prestada por dichos efectivos con la entrega de desertores a la jurisdicción militar⁹⁷, y custodiando en sus mazmorras a levos y desertores⁹⁸.

Pero también militares actuaron contra los intereses de la entidad apícola, como ocurrió en 1731, cuando poco después de arrestar por sorpresa un juez comisario con la ayuda de ministros de la justicia ordinaria al gitano Antonio Quirós "el Sordo" mientras estaba acostado en el pórtico de la ermita de los Mártires -en el término de La Haba (Badajoz)-, esta partida armada hubo de hacer frente a un soldado de caballería que pretendía liberarlo de manos de sus captores⁹⁹.

Aún años después de haberse erradicado con la delincuencia residual propiciada por la contienda sucesoria, individuos con fuero militar seguían cometiendo las mismas fechorías que les caracterizaron en épocas anteriores, aunque ahora los veamos engrosando y, a menudo, capitaneando las partidas de bandoleros que asolan comarcas enteras. En 1723 el comisario Antonio Díaz expresaba su indignación al tribunal porque las autoridades de la Baja Andalucía le impedían perseguir a Joseph de Aguilar "Guitarrón", prófugo de varias cárceles y contumaz desertor de la compañía de caballería del Rosellón, que junto a su padre y hermano tenían su teatro de operaciones en la Sierra de Ronda¹⁰⁰; unos mandatos de búsqueda y captura despachados por la Santa Hermandad en 1725 nos dan cuenta del pacense Juan González, quien con otros soldados de infantería del regimiento de Nápoles expoliaban a comerciantes y serranos por La Mancha y Extremadura, contándose entre sus últimas fechorías el asalto a un comerciante de Almodóvar del Campo en las proximidades de Abenójar y su posterior huida pese a ser

acorralados por efectivos de la Hermandad Vieja amparándose en la noche¹⁰¹.

A caballo entre los siglos XVIII y XIX hubo dos fricciones importantes con la jurisdicción castrense: en 1796 el gobernador militar de Málaga reclamaba a los reos aprehendidos en la ciudad por un ministro superior ciudarrealeño al estar pendiente en su audiencia la resolución del homicidio de un alguacil de la ronda por parte de los arrestados, el caso sería llevado ante el fiscal del consejo de Guerra y de allí a la Sala del Crimen de la Real Chancillería, desde donde se reclaman autos y reos para su encartamiento por los oidores¹⁰²; igualmente sabemos que en 1802 hay un litigio competencial entre la magistratura civil y militar de Jerez de la Frontera y la entidad manchega por pretender todos substanciar la causa contra el comisario Juan Durán al herir involuntariamente a un soldado en el curso de las diligencias tendentes a la captura de unos ladrones¹⁰³.

En cuanto al resto de jurisdicciones especiales el grado de colaboración no sería, ni mucho menos, comparable al mantenido con las autoridades militares, aunque esporádicamente hubo un intercambio de servicios en el marco de la preceptiva colaboración auspiciada desde la Corona. En 1640 el escribano numerario ciudarrealeño Andrés Fernández ingresaba en la cárcel de hermandad a petición del juez de millones local para presionarle a aceptar su nombramiento como tesorero de dicha renta real, al que se oponía por considerarlo gravoso¹⁰⁴; a fines de 1793 Pedro Caballero ingresaba en los calabozos de la corporación apícola al ser sorprendido con una partida de tabaco que aseguraba haber sido obligado a tomar de unos contrabandistas en la dehesa de Zacatena, quienes asegura que le habían robado dos mil setecientos reales, debido a lo cual nombraba procurador judicial ante

la Intendencia provincial¹⁰⁵; para volver a atrapar a nueve prófugos de la galera hermandina en 1794 -entre los que se encontraba el ya citado Pedro Caballero, reo de la ronda de tabacos-, la partida perseguidora se ve engrosada por seis guardas montados del Real Estanco¹⁰⁶.

Poco sabemos de la relación entre el Santo Instituto de Ciudad Real y las compañías de carabineros creadas en la provincia de La Mancha hacia 1770, particularmente con las acuarteladas en Daimiel, Manzanares y Almagro¹⁰⁷; y aún menos con las unidades irregulares de rondines que empiezan a proliferar en los municipios comarcanos a fines del Setecientos¹⁰⁸, a no ser la noticia de que en 1798 el cuadrillero mayor comandaba una salida al valle de Alcudia con motivo de la feria de San Andrés a la que concurrieron aparte de varios hermanos y comisarios tres escopeteros de ambigua adscripción¹⁰⁹, aunque es verosímil que ministros de estos autofinanciados grupos armados concejiles se mostrasen recelosos de participar en misiones ejecutivas con los miembros de los añejos cuerpos que celaban por la seguridad del yermo.

8.4. TRIBUNALES SUPERIORES DEL REINO.

Con anterioridad hemos esbozado los parámetros en los que cabría situar la supeditación jerárquica debida a las altas cortes de justicia en la Corona de Castilla: Casa y Corte, Audiencias y Chancillerías, pero ahora trataremos de trazar los términos concretos de dicha interrelación durante los siglos XVII y XVIII.

La relativa proximidad geográfica entre Ciudad Real y Madrid, con todo lo que ello implica, así como la naturaleza o vecindad de algunos dependientes hermandinos de la capital del Reino, contribuyeron a mantener un cierto nivel de relaciones entre las jurisdicciones hermandina manchega y las autoridades de la Corte que no dudamos en calificar de correctas, aunque salpicada de abusos por una u otra parte que a la luz de los notables desarreglos existentes se pueden motejar de inevitables.

La Corte era permanente foco de atracción demográfica durante toda la Edad Moderna, siendo también polo donde concurrían numerosos delincuentes comunes u ocasionales típicamente urbanos, sirviendo de refugio de todo tipo de malhechores y vagos que se amparan en el anonimato que les ofrece la bulliciosa metrópoli durante el periodo que nos ocupa¹¹⁰.

A fines del Quinientos, el sirviente de un escribano hermandino que huye con lo robado a su amo sería perseguido por las ciudades de Toledo y Madrid. En la capital castellana los cuadrilleros le reclamaron en la cárcel de Casa y Corte, certificando su alcaide que

no se hallaba bajo su custodia, lo que no fue óbice para que posteriormente sus alguaciles le aprehendieran, asegurando uno de los porteros de la galera madrileña que el citado reo era reincidente al haber sido condenado en otra ocasión condenado por ladrón ante la Sala de Alcaldes¹¹¹. Tres reos de hermandad arrestados en las afueras de Mejorada del Campo en 1673 por vagabundear, resultan ser unos músicos ambulantes que malviven de tañer la dulzaina y el tamboril por pueblos y ciudades y que se dirigían a Toledo, serían conducidos a la cárcel de Corte, donde permanecerán durante casi cuatro meses¹¹², hasta que un notario ciudarrealeño marche a Madrid a por reclusos y autos, sufragándose por cuanta del Santo Tribunal los trescientos reales que había suplido el ministro captor durante su captura y encarcelamiento¹¹³.

En 1719 una carta de los Alcaldes de Casa y Corte remitida al cabildo manchego daba las señas personales del jerezano Joseph Felipe de Prado, preso en las cárceles madrileñas por habersele aprehendido una vara enroscada de justicia, títulos y comisiones pertenecientes a la entidad apícola de Ciudad Real, solicitando que se confirmase o desmintiese su supuesta adscripción a dicha jurisdicción, debiendo certificarse su supuesta pertenencia desde el 24 de noviembre de 1714, y tomarse asimismo testimonio al maestro de albéitar ciudarrealeño Joseph Valencia -con quien aseguraba haber concurrido al arresto de un desertor hacia 1714/1713¹¹⁴-, resultando a la postre habérselo hurtado a dicho comisario¹¹⁵. En diciembre de 1742 se incoaba expediente criminal a unos bandoleros murcianos que eran avistados en la manchega villa de Herencia, sospechándose que eran los mismos que operaban en Sierra de Segura, lográndose la captura de uno de ellos en Alcázar de San Juan; como quiera que el cinco de marzo de 1743 desde la Casa y

Corte se reclamasen los autos acumulados, veinte días más tarde el alcalde interino manchego consignaba la salida del reo para Madrid¹¹⁶.

En el último tercio del Setecientos es perceptible una colaboración más intensa entre ambos tribunales: en 1778 un juez comisario prendía a los gitanos Manuel y Joseph Navarro a instancias de los alcaldes madrileños¹¹⁷; en 1781, un propio llevaba a la Corte los bienes incautados a Joseph Riba y su cómplice indiciados de reiterados latrocinios¹¹⁸; en 1782 Diego García Alarcón empleo más de cuarenta días en realizar las diligencias ordenadas por la Casa y Corte contra Juan Velasco en Villafranca de los Caballeros; y entre 1794-1796 consta que se condujeron a sus cárceles, desde Ciudad Real, trece reos de hermandad por pender sobre ellos otras tantas causas criminales instruidas por la Sala de Alcaldes¹¹⁹.

La Audiencia de Sevilla había sido creada a fines del reinado de Carlos V, retomando como modelo el antiguo tribunal municipal, siendo famosa durante el Seiscientos por su supuesta corrupción, administrando justicia en una ciudad y la comarca de Carmona, demográficamente saturada por el monopolio del tráfico con Indias y cuajada de jurisdicciones especiales, siendo una circunscripción desgajada judicialmente de la Real Chancillería granadina.

La relación entre este alto tribunal sevillano y los jueces manchegos fueron tan ocasionales como tumultuosas, agudizándose los malentendidos en el siglo XVIII. Si hacia 1684 ya se entablaba una colisión entre ambas por haber hecho encarcelar uno de sus alcaides a los reos de hermandad Pedro Jiménez y Pedro Roldán junto al ministro captor¹²⁰, sería en la década de 1720 cuando amenudearán con mayor asiduidad los incidentes jurisdiccionales.

En efecto, en 1721 estallaba el conflicto cuando al proceder un dependiente ciudarreal de Sevilla contra una pareja gitana amancebada por ser sospechosos del infanticidio, tanto la Audiencia como Santa Hermandad Vieja hicieron valer sus respectivas razones para encausarla. Dos años antes, los corchetes de la ronda de Sevilla habían embargado al comisario ahora también enjuiciado al remitir sumaria a sus superiores jerárquicos directos, por lo que hubo de asilarse en sagrado. En julio los alcaldes hermandinos expedían despacho exhortatorio al regente de Sevilla exculpando a su subordinado de cualquier culpa por proceder bajo sus órdenes, habiéndose manifestando meses antes otro comisario sevillano la indefensión en la que se encontraban por ser notorio que

"...el Regente lleva mui mal que ningun ministro de este tribunal haga diligencias no entregando la causa y presos sometiendo a su jurisdiccion, como lo haze, y lo ha echo siempre Juan del Pino, juez comisario superior..."¹²¹.

En agosto de 1726 se había comisionado a un ministro de hermandad de El Carpio -Sevilla- para prender a una cuadrilla de castellanos nuevos¹²². Mientras iba tras sus pasos en Sevilla dicho comisario fue arrestado por la ronda en la concurrida puerta del Arenal so pretexto de llevar un rejón y guardar en la posada donde se albergaba diversas armas de fuego cortas -todas ellas prohibidas-; el agraviado sostiene que el alguacil que lo capturó le introdujo el arma blanca en su faltriquera. Llevado el caso ante la Real Audiencia, nada bueno auguraba el representante de la corporación manchega, desconsolado al ser consciente de que

"...por armas cortas es publico en esta ciudad se an atropellado y atropellan muchos ministros diciendo no poder usar de estas armas de fuego cortas; pues en esta carcel se hallan tres compañeros presos por el motibo de aber salido a prender a unos

ladrones y aber supuesto unos gitanos que por composicion les habian tomado tres pesos..."¹²³.

El comisario Bartolomé Molina sería condenado a diez años de destierro de la ciudad, viendo requisadas armas y títulos. En febrero de 1727 el ultrajado informaba al Santo Tribunal del menosprecio a su jurisdicción, y un mes después el Supremo Consejo solicitaba a la Real Audiencia que remitiese un extracto de la causa instruida, no constando la resolución tomada en Madrid si es que ésta se produjo¹²⁴.

El 11 de julio de 1726 partía de Morón una cuadrilla hermandina integrada por dos jueces comisarios, un guía y varios jinetes armados comandados por un ministro superior tras unos gitanos que asolaban la comarca sevillana. Al caer la tarde ya habían procedido contra ocho jornaleros gitanos asalariados del marqués de Vallehermoso a los que se les hallaron varios cuchillos, estiletes e incluso "un hierro de tres vocas" para quebrantar cerraduras, quedando libres bajo palabra del cortijero aludiendo a la necesidad imperiosa de terminar la siega. Informándose luego por unos hortelanos que vagaban varios grupos de gitanos por la zona, logran el auxilio de unos peones para reforzar la cuadrilla. Noticiosas de que otros castellanos nuevos habían malherido a un vecino de El Coronil, se dirigen a dicha villa a interrogar al agredido, quien resulta ser un dependiente del mismo Santo Tribunal manchego encontrándolo "sin esperanzas de vida"¹²⁵. La comitiva parte tras sus pasos, multiplicándose las manifestaciones de apoyo por los habitantes de cortijos y quinterías de labor, reclamándose su continuada presencia en aquellos parajes y mostrándose alarmados al saber que no eran mandados por los hacendados para protegerlos permanentemente. Tres días después de su partida retornaban a por los gitanos arrestados en primera instancia, avisándoles unos trajinantes que andaban tras ellos unos veinte jinetes. Cuando marchaban los

ministros hermandinos hacia Villafranca para solicitar ayuda son sorprendidos por sus perseguidores, quienes tras alcanzar al ministro superior a las afueras de dicha villa es despojado de armas y su vara alta de justicia. Los captores resultan ser las justicias de Utrera que partían tras ellos por tener noticia de que unos desconocidos suplantaban sus cargos autodesignándose ministros de la justicia de la citada localidad sevillana. Interrogados en el consistorio de Villafranca, los arrestados muestran sus títulos, pero se niegan a manifestar sus comisiones al decir no estar obligados a ello. Llevados a Utrera, son reclusos en sus mazmorras, enajenándoles sus caballerías sin tomarles ni tan siquiera declaración, clamando contra estas arbitrariedades sus "parientes sacaron la cara dando petición ante los señores desta Real Audiencia -de Sevilla- quejándose de los injustos procedimientos". Desde la capital andaluza se ordena la remisión de reos y autos para proceder a dirimir las presuntas culpas imputadas, exponiéndose que no habían notificado su presencia a los magistrados locales, desmienten los de Utrera que hubiesen tomado varas altas de justicia al no llevarlas ninguno, alegando los encausados que nunca habían tomado pesos a gitano alguno, asegurando estar "los comisarios tan acobardados con este quento que aunque ay robos por los caminos de Andalucia no se determinan a salir". Terminando 1726, por mediación de los alcaldes manchegos, el altercado pasa a ser revisado por los Reales Consejos, y en enero de 1727 el Consejo de Castilla ordena a la Real Audiencia que enviase la causa a su Sala De Gobierno. El informe judicial enviado a Madrid pone en su conocimiento la excarcelación de los detenidos¹²⁶, tras imponerles una pequeña multa con destino a los presos pobres, pero reteniéndoles sus credenciales argumentando ser

"...muy frecuentes las experiencias con que se halla la Sala de ser mas perjudiciales que combenientes a la causa publica estos

ministros es correspondiente su cuidado en contener a las disensiones favoreciendo al mismo tiempo los pocos que cumplen con su obligación..."¹²⁷.

En otra ocasión el teniente de asistente exige a un ministro superior de Carmona la entrega de un reo de hermandad que conducía por tránsitos a Ciudad Real, alegando tener pendiente causa criminal contra el sospechoso, atropellando la jurisdicción hermandina¹²⁸; y en 1729 se elevaba un memorial por parte de la fraternidad Vieja manchega al Supremo Consejo en el que se detallaban los frecuentes abusos que sus representantes habían de soportar en Sevilla¹²⁹.

No fue ésta la única ocasión en la que se entraría en colisión por parte de los representantes del Santo Tribunal ciudarrealeño debido a sus azarosas vicisitudes en lugares distintos y distantes; un documento, muy deteriorado, nos proporciona la noticia de que por aquellas fechas uno de sus dependientes fue ultrajado por un alcalde entregador de Mestas y Cañadas y un notario en Asturias, instruyéndosele proceso criminal por los olores de la Audiencia de Oviedo¹³⁰.

Mucho más fluidas y regulares eran las relaciones entre la corporación apícola manchega y la Real Chancillería de Granada. Desde fines del Quinientos se prescribió que las condenas más severas emitidas desde Ciudad Real fuesen llevadas ante la chancillería correspondiente en grado de consulta o de apelación. A grandes rasgos, la actuación de la magistratura manchega y la labor de sus subordinados contarán con el respaldo institucional ofrecido por las ejecutorias de la suprema corte de justicia territorial andaluza, aunque esporádicamente desde esta intancia se exigirían responsabilidades de sus posibles excesos¹³¹. Sin duda el principal

motivo de colisión fue la eventual disposición de dicha alto tribunal a arrogarse la primera instancia sobre asuntos en principio privativos de la Santa Hermandad, competencia contemplada normativamente por el reglamento de la chancillería pero que invariablemente suscitaba las protestas y los recelos por parte de los tribunales inferiores de justicia¹³².

Menos problemas se derivarán cuando los alcaldes del crimen granadinos reclamasen reos para efectuar careos en sus dependencias¹³³ o realizar otro tipo de colaboraciones en los trámites procesales emprendidos por unos u otros. Otro cariz tomaron las reclamaciones de reos y autos instruidos por parte de la Real Chancillería o por el Santo Instituto -generalmente en casos de Corte o al verse envueltos sus comisarios-, creyendo los alcaldes que eran despojados de sus atribuciones jurisdiccionales. En tales supuestos de poco servían los recursos aportados por la magistratura ciudarrealena ante el Supremo Consejo o los despachos inhibitorios cruzados entre los tribunales litigantes, evidenciándose en todo momento la desventaja institucional entre audiencias jerárquicamente distintas a favor de la corte de justicia superior.

Durante el Seiscientos, aún cuando mediasen a favor de la Santa Hermandad otras instancias superiores jurídico-administrativas, su causa estaba perdida de antemano. Entre 1644-1645 mientras el Santo Tribunal procedía contra el aguardentero Cristóbal Sánchez, la Real Chancillería andaluza se arrogó su conocimiento en el pleito, y pese a que los manchegos ganaron sucesivamente tres reales provisiones a su favor en el Consejo de Castilla para que se le devolviese la causa substanciada en Granada "no lo quisieron dar los señores alcaldes del crimen ni lo quisieron remitir"¹³⁴. En 1702, tras indagarse la culpa

de un presunto ladrón por parte de unos comisarios malagueños, el falsamente inculcado se queja de que varios ministros pretendieron extorsionarle en su cortijo, exigiéndole la entrega de mil reales, a cuyos requerimientos hubo de ceder dándoles cuanto tenía; en vista del dolo de los dependientes hermandinos los oidores granadinos juzgaron el caso en primera instancia, arrestando a los supuestamente involucrados, excarcelando al denunciante y acusándose a los ahora detenidos por rapto y amancebamiento¹³⁵.

Alonso Montero, alcalde ordinario de Espejo y juez comisario manchego, es condenado en junio de 1719 a destierro de la villa de Montilla, privación de su título hermandino y con una sanción de cien ducados por haberse probado la acusación vertida por un paisano de hurtar aves de corral; dicho fallo será refrendado en Granada, sin ser admitido su recurso ni permitir su substanciación por parte de los alcaldes ciudarrealeños¹³⁶. En 1721, los alcaldes del crimen actuaban por comisión contra los alcaides de Porcuna y Marmolejo, acusados de negligencia profesional, cohecho y dolo al prender a unos representantes de la entidad apícola de Ciudad Real y liberar a unos cuatreros sobre los cuales estaba pendiente sumaria en la capital manchega¹³⁷. Hacia 1726, tras una accidentada persecución y captura, eran arrestados en el segoviano puente de Santa Cecilia unos sospechosos que huían desde Almazán -Soria-, requisándoseles alhajas de plata, oro y diamantes por un valor estimado en unos trescientos doblones; como el tribunal manchego condenase a los detenidos, al ser llevado el veredicto a Granada los alcaldes del Crimen reclamaron al reo Bartolomé Muñoz "Cabrero" y a su compañero en rebeldía para ser dirimida su culpa ante dicha audiencia¹³⁸, reponiendo los jueces de Hermandad que esta injerencia iba "en grave detrimento de ese Santo Tribunal pues contiene un despojo notorio de su jurisdicción respecto

a que no se a ejecutado la sentencia que confirmo", argüyéndose que los reos ausentes debían responder de sus culpas ante su corte de justicia para presentar las alegaciones pertinentes, pero lo cierto es que "el Cabrero" permaneció en la cárcel andaluza hasta que fue condenado en dicha instancia¹³⁹.

Sentenciados definitivamente unos asaltantes en enero de 1736, y después de haberse ejecutado la sentencia de azotes contra los reos el día de Nuestra Señora de la Paz, había serios obstáculos para remitir por tránsitos a Juan Manuel Serrano Chacón "Montero" a galeras -al fugarse de su celda el 26 de mayo de dicho año y ser extraído del sagrado de San Pedro el cuatro de junio-, lo que suscita la fulminante actuación del vicario general del Campo de Calatrava conminando a los alcaldes a que le restituyesen el reo a su asilo en el plazo de veinticuatro horas, libre, sin lesión y con los bienes secuestrados, exponiendo las causas de su irregular proceder y comprometiéndose a no trasladarlo so pena de excomunión mayor trina canónica¹⁴⁰. En mayo de 1737 el oidor instructor, superintendente general privativo de forzados, impone una multa de cien ducados a los rectores manchegos, quiénes remiten autos y reo a Granada pues su extracción se hizo por orden del Supremo Consejo, negándose en cambio los alcaldes a satisfacer la sanción pecuniaria con el pretexto de que perjudicaría la administración de justicia por su parte¹⁴¹. Atendiendo a dicho memorial cuando el reo llegó ante la Real Chancillería se devolverían los ducados exigidos dejados en depósito en un ciudarrealeño afincado en Andalucía¹⁴².

Hacia 1748, por proceder de manera abusiva contra los homicidas de un arriero asesinado en Madridejos, se multó con cuatrocientos ducados a los alcaldes manchegos, anulando la Real Chancillería granadina las

diligencias emprendidas por dichos magistrados¹⁴³. Por su parte, en 1753, cuando se trasladaron unos reos a Córdoba, acusados de asaltar a unos portugueses, para seguir los trámites sumariales, la Chancillería ordenó así mismo que de allí siguiesen ante su audiencia porque en el proceso seguido en su audiencia contra unos falsificadores de moneda, ladrones y prófugos de Almadén, se habían inculpado a Francisco Gutiérrez "Mal Pelo", Bartolomé Moral, Joseph Chacón y Joseph Moreno, siendo precisa su presencia para substanciar la causa pendiente en Granada e invocando los privilegios inherentes de su jurisdicción en su circunscripción¹⁴⁴.

8.5. IGLESIA Y SANTA HERMANDAD. EL DERECHO DE ASILO.

Durante la Edad Moderna la jurisdicción eclesiástica se convierte, prácticamente, en la única instancia que ofrece una decidida y eficaz resistencia a ser absorbida por la órbita de la jurisdicción real¹⁴⁵. Disposiciones legales y doctrinales coincidían en reconocer la existencia de esta potestad diferenciada, pero constantemente se recordaba desde la Corona y los círculos teóricos próximos a sus postulados regalistas que este principio debía de ser encauzado dentro de unos parámetros racionales.

Aunque aún dentro de la propia jurisdicción eclesiástica tampoco serían extrañas controversias de diversa índole, nos centraremos en los tres supuestos más frecuentes de colisión entre los tribunales apostólicos y hermandino: la protección brindada a sospechosos por ciertos sujetos investidos del fuero canónico; los religiosos involucrados en casos de Hermandad como encubridores o cómplices y cuyo enjuiciamiento pretende arrogarse la audiencia seglar; y, sobre todo, el derecho de refugio de Iglesia sobre muchos de los encausados por el Santo Instituto.

En la prolija práctica forense de la Hermandad Vieja manchega son relativamente abundantes las supuestas o reales injerencias de religiosos, regulares o seculares, en las diligencias emprendidas por sus cuadrilleros para esclarecer determinados asuntos delictivos. He aquí algunos de los más representativos: en 1609 el párroco de Ballesteros -Ciudad Real-, Juan de Luna, y el también presbítero Juan de Novalbos protagonizaron un auténtico escándalo al impedir a un

alcalde hermandino, secundado de varios oficiales, que realizasen sus indagaciones contra don Diego Francés y los demás implicados en el caso, embarazando su captura¹⁴⁶; como el hidalgo acusado contase luego con el apoyo de la justicia ordinaria local, la causa fue evacuada a Almagro por ser la cabeza de su partido. Hacia 1715 Juan Murillo -oficial de la renta de tabaco de Baza- denunciaba ante los alcaldes manchegos el amparo que prestaban algunos conventos y las autoridades municipales a las partidas de gitanos que vagabundeaban por la zona, acusando concretamente de tales abusos a Diego "el Fraile" y al alguacil Jerónimo de Santiago¹⁴⁷. En tales casos el procedimiento habitual era acudir a los vicarios y jueces apostólicos de su partido para que siguiesen los trámites adecuados para la corrección de tan graves irregularidades, pero normalmente las relaciones se deterioran si del amparo caritativo se pasa al encubrimiento más o menos abierto e incluso a la participación activa en los crímenes e infracciones legales por parte de los religiosos¹⁴⁸.

En 1711 los alcaldes ciudarrealeños nombraban procuradores ante la audiencia episcopal sevillana por haberse querellado el vicario de Morón de la Frontera al haberse extraído los autos criminales acumulados contra el presbítero de Calatrava don Diego de Vega y Torres¹⁴⁹. En Almagro, varios testigos aseguran al juez eclesiástico local que el clérigo almagreño don Alfonso de Espinosa había mediado por unos cuatreros que le solían proporcionar cabalgaduras robadas para su venta fraudulenta a forasteros¹⁵⁰. En agosto de 1745 se llevó a la Sala del Crimen granadina, a instancia de los alcaldes hermandinos, la causa consistente en que al incautarse unos bienes de un ministro superior acusado de diversos excesos su padre -el presbítero Francisco Hidalgo Calcerrada- reclama como suyo parte de lo embargado, librándose, atendiendo a ello, auto de desembargo el

vicario local e inhibiendo a la Santa Hermandad, pese a lo cual la Real Chancillería falló en última instancia a favor del tribunal laico¹⁵¹.

Sin duda fue el derecho de asilo en sagrado la principal causa de litigio entre la Iglesia con la totalidad de las justicias seculares a lo largo de todo el Antiguo Régimen. Ésta consistía en que, en el supuesto de refugiarse algún perseguido por la justicia en un espacio sagrado, automáticamente pasaba a la protección eclesiástica, intentando inhibir las justicias a la parte contraria al reclamar para sí el conocimiento de la causa¹⁵². El corpus legal y doctrinal de la época describía minuciosamente la casuística que rodeaba a esta práctica, tan usual como sistemáticamente conculcada¹⁵³, postulando la mayoría desde una óptica regalista el incuestionable derecho que asistía la inmunidad local, aunque estableciendo tantas excepciones y menguas que las justicias regias procederán primero extrayendo a los asilados cautelarmente hasta que se dirimiese el subsiguiente conflicto de inmunidad ante la chancillería correspondiente por vía de fuerza. Imbuidos del espíritu regalista, estos altos tribunales territoriales de la Corona de Castilla fallarán a menudo anulando las aspiraciones de los jueces eclesiásticos elevadas mediante recurso, remitiendo la causa al juez seglar, aunque las excepciones a esta regla serán relativamente frecuentes¹⁵⁴.

A pesar de que originalmente fue establecido el principio de inmunidad eclesiástica para salvaguardar los derechos de los encausados frente a las arbitrariedades de los magistrados, lo cierto es que paulatinamente se desnaturalizaría una garantía tan loable ante la proliferación de abusos auspiciados a su sombra, identificándose inmunidad con impunidad. Será práctica habitual el que los

delincuentes viviesen en las proximidades de iglesias y catedrales para facilitar su huida de las rondas y alguaciles, despertando una repulsa aún más unánime la conducta seguida por la comunidad gitana, de la que se suponía que procuraba el amparo de ermitas y santuarios para salir sin licencia de las poblaciones. Esta costumbre está plenamente justificada por la continua persecución a la que se ven sometidos, siendo creencia general -en ocasiones fundada- de que solían refugiarse en estos espacios sagrados, saliendo cuando lo estimaban seguro y conveniente para perpetrar todo tipo de actividades ilegales penadas por las reales pragmáticas. En 1709 se denunciaba a las autoridades hermandinas que una cuadrilla de castellanos nuevos merodeaban en el área delimitada por el triángulo cuyos vértices serían Guadalerza, Consuegra y Urda, coincidiendo en su declaración algunos vecinos de esta última villa al testificar que

"...a muchos dias que en este lugar ay gitanos en la yglesia parrochial desta villa y en la hermita del Santisimo Christo y que estan aciendo trueques y canvios arrimados a los sagrados donde estan con todas las personas asi naturales como forasteros expecialmente los jitanos de la hermita del Santisimo Christo, y todos los dias y a todas oras se ben jitanos y jitanas nuevas, y la ermita esta sui sucia y asquerosa y no se dice misa en ella siendo asi que antes que huviera jitanos en dicha hermita y en este lugar los dias de fiesta se decia misa en dicha hermita y de salida y recreo de todos los vezinos hera yr al Santisimo Cristo a reçar..."¹⁵⁵.

Siendo público que muchas noches pernoctaban dentro de ella, y otras veces bajo su pórtico, estando todos ellos persuadidos de que dentro tenían los bastimentos precisos para mantenerse, y siendo manifiesta la pasividad de la justicia ordinaria de los contornos.

Los supuestos en que será denegado el amparo eclesiástico a los refugiados por los propios religiosos en la práctica fueron excepcionales; a fines del Quinientos, concretamente en 1594, un

criado ladrón huido a Madrid para escapar de sus perseguidores se retrae armado con una daga en el monasterio de San Francisco, y al ser reclamado por los alcaldes de Casa y Corte "los dichos frailes viendo que era ladron dixeron que no admitiran ellos ladrones que lo llevasen muy en buena ora"¹⁵⁶. Si los cristianos viejos hallan algunas dificultades para asilarse en sagrado conforme avanzan los tiempos¹⁵⁷, no ocurre otro tanto con los cristianos nuevos, quienes casi siempre se ven beneficiados de este privilegio por la naturaleza de sus presuntas culpas, respetándose mayoritariamente su asilo y cuando son extraídos de él a menudo son devueltos al ser inhibidos los jueces seglares¹⁵⁸.

A menudo la primera diligencia realizada por cuadrilleros y comisarios para localizar a los delincuentes es recorrer templos y cenobios de una determinada villa y su comarca, soliendo los sospechosos o quienes temieran algo de la justicia haber tomado dicha medida como precaución de motu propio o aconsejados por alguien ante el acoso de las justicias locales o alertados de la presencia de ministros de hermandad¹⁵⁹, dándose el caso de gitanos que cuanto toman el asilo ya están mortalmente heridos, agonizando en el templo que acogía sus últimas horas de vida¹⁶⁰. Quienes se retiran a la protección de la Iglesia, ante la inminencia de su aprehensión, no tienen asegurada su total salvaguarda, sobre todo si eran graves los delitos que se le imputaban; así en 1711 dos ladrones sacrílegos eran arrestados en el portal de la capilla de la ermita consagrada de San Sebastián -Hinojosa de Córdoba-, por cuya irregularidad protestó el vicario de Bélmez ante el padre provisor de Córdoba, siendo restituidos los reos al ser presionados para ello sus captores¹⁶¹.

Al ser práctica corriente el que algunos perseguidos pretendiesen refugiarse en la morada de algún párroco¹⁶², en enero de 1717 se despachó carta orden por el Supremo Consejo prescribiendo que "las casas de los eclesiasticos no gozan de inmunidad eclesiastica", pudiendo los comisarios penetrar en ellas para proceder a su arresto, pero guardando en todo instante el respeto debido a las personas de los religiosos¹⁶³.

Mayoritariamente parece animar a los ministros de justicia hermandinos la intención de resarcir en los bienes de los sospechosos asilados los gastos ocasionados por sus diligencias antes que prender a sus dueños por una doble razón: la extracción del perseguido asilado en sagrado conllevaba unos trámites gravosos para el Santo Instituto, molestias y litigaciones de resultado incierto; en tanto que el secuestro de sus pertenencias garantizaba que se enjuagarían, al menos parcialmente, los desembolsos realizados por el ministro captor, siendo raramente reclamados por los damnificados para evitar mayores complicaciones¹⁶⁴.

Paradigma de que el derecho de inmunidad local esta desvirtuado es el caso protagonizado por el reo Bartolomé Tocados, encausado por el Santo Tribunal de diversos abigeatos, robo con escalo en la casa de su propio hermano, robos sacrílegos y homicidio sobre el santero que lo denunció. A la altura de 1706 ya había sido despojado del asilo en la iglesia pacense de Santa Catalina por unos militares; fugado de las cárceles ciudarrealeñas en 1718, logró zafarse del cerco al que fue sometido por los cuadrilleros disfrazándose de clérigo; en 1723 de nuevo era restituido al convento de carmelitas de Nuestra Señora del Carmen , extramuros de la capital manchega. De este cenobio sería trasladado a la ermita de San Sebastián, donde el vicario eclesiástico

de Ciudad Real y del Campo de Calatrava¹⁶⁵ tenía depositados los bienes del recogido. Sabemos que en las dependencias de dicho santuario instaló su tienda de albardonería, comerciando y tratando con vecinos y forasteros, e incluso paseando por la cercana ciudad "dando escandalo en los lugares de estas zercanias haciendo burla desta Santa Hermandad y sus ministros". Una noche, cuando volvía a su refugio de una taberna junto a un vecino -estando a unos cuarenta pasos de la ermita-, es capturado por el alcaide hermandino y sus deudos, pero logra escaparse en última instancia de sus captores con la ayuda de un tercero. En septiembre de 1724 había ingresado por enésima vez en las mazmorras de la Santa Hermandad, implicando con sus declaraciones a varios ciudarrealeños que le habían acompañado a pueblos próximos a por cargas de cáñamo para sus tratos, estando pendiente recurso de fuerza ante el Consejo de Castilla en 1725¹⁶⁶.

La práctica más usual para que los asilados no escapasen a su condigno castigo era poner guardas en las inmediaciones de su retiro para impedir su huida, aunque no estaba permitido poner guardas en el interior del sagrado, impedir su abastecimiento de comida o bebida o forzarle a salir de manera involuntaria, según regulaba una bula de Benedicto XIV. Ocasionalmente tales preceptos fueron avasallados sin ningún recato por magistrados y ministros de justicia o soldados: en 1721, cuando era conducido un gitano por tránsitos a Ciudad Real, al pasar cerca de una iglesia parroquial de Puebla de Guzmán logra escaparse, pese a ir cargado de cadenas, a la mañana siguiente sus guardas le conminan a salir amenazándole con proceder contra su esposa -tomada como rehén-, consignándose en los autos judiciales esta eventualidad con una escueta referencia a que el sospechoso se entregó voluntariamente¹⁶⁷.

Los pleitos de inmunidad local pueden demorarse durante años, llegándose relativamente a menudo a recurrirse por vía de fuerza al tribunal superior competente, generalmente al Consejo de Castilla, desde donde se suele desviar a la chancillería correspondiente. Si entre 1683-1686 era dirimido en Ciudad Real, Toledo y Madrid el litigio por extraer del sagrado al ladrón Francisco Segura¹⁶⁸; desde 1683 a 1688 se procedió por igual motivo a substanciar la causa contra don Antonio Pretel Miñán¹⁶⁹; y entre 1692-1695 los gastos ocasionados por el homicida Juan Bernabé García, vecino de Montilla, por idéntica razón se estimaban en unos diez mil reales de vellón¹⁷⁰. En 1727 y 1728 el alcalde don Francisco Treviño de Cárdenas sigue un caso de inmunidad ante la mismísima Chancillería de Valladolid al reiterar el vicario de la audiencia eclesiástica toledana su disposición a que fuesen reintegrados unos gitanos prófugos de las reales minas de Almadén a la ermita de Santa Ana -Campo de Criptana-¹⁷¹.

En todo caso, el proceso criminal incoado por los alcaldes de Hermandad seguía el trámite ordinario, ya que "la caucion del señor juez seglar no impide el conocimiento de la causa, aunque preserve la persona del reo en la execucion de pena y afliccion corporal"¹⁷². Lo que sí se aplazaba, a veces indefinidamente si se resolvía el recurso de inmunidad a favor del reo, era la sentencia condenatoria que podía quedar en suspenso en tal caso hasta que de nuevo se aprehendiese el asilado, en esta ocasión fuera del refugio eclesiástico. A lo largo del Setecientos, la política regalista borbónica permitió corregir a su favor los notables abusos cometidos al admitirse indiscriminadamente cuantas solicitudes de inmunidades locales se elevaban ante las audiencias eclesiásticas, ordenándose por real decreto en 1737 que

"...basta un solo insulto de caminos publico, o muerte, o mutilacion de miembro, para que no gocen los delinquentes de asilo alguno: Que inmunidades, o Iglesias que llaman frias, no valgan por ningun delito; Que tampoco sean asilos las Iglesias rurales; en que no aya sacramento, o que no se celebre misa con frecuencia."¹⁷³

Pese a los reiterados intentos para acabar con la inmunidad que el sagrado ofrecía a los malhechores, los excesos se multiplicaban: clérigos que se erigen en protectores tanto de sus feligreses como de cuantos castellanos nuevos se ponían bajo su amparo de las arbitrariedades de las justicias; convecinos o forasteros que testifican a favor de los retraídos voluntariamente, presionados e incluso bajo soborno¹⁷⁴; reos de hermandad que en la capilla de la propia sede del Santo Tribunal son estimulados por presbíteros para solicitar inmunidad local durante los sermones¹⁷⁵, o como cuando a fines del siglo XVIII se aferran al Copón en el momento de comulgar, pidiendo a gritos asilo ante la mirada atónita de sus carceleros, u otros semejantes.

En líneas generales, este principio de inmunidad local a quienes sintiesen lesionados sus legítimos derechos con los abusos perpetrados por unos y otros, no siendo los más leves los realizados por los magistrados seculares al legitimar el despojo de este derecho inalienable incluso a sospechosos de culpas leves, degeneró en una situación tal que cada litigio competencial se contemplaba como un pulso entre las jurisdicciones real y eclesiástica, con el consiguiente deterioro en la administración de justicia. Aunque el descrédito de la partes litigantes fuese inevitable ante la sociedad, al no converger como era razonable intereses considerados convergentes a priori, la suspensión total de este derecho no sería planteado en serio ni tan siquiera por los Ilustrados -reformadores antes que rupturistas-, partidarios más bien de recortar dichas atribuciones

pero no de abolir una garantía extrajudicial considerada inalienable por todos en una cultura tan imbuida del catolicismo tridentino como la Castilla de los siglos XVI y XVIII.

8.6. UN CASO PARADIGMÁTICO: EL COMISARIO DON JUAN BRUNO DE ARANDA Y PUERTAS.

Nada mejor para hacernos una idea aproximada de las dificultades y parámetros en los que se desarrolla el devenir procedimental de los dependientes del Santo Instituto manchego que centrarnos en el trabajo desarrollado por uno de sus más activos representantes en el servicio de su ministerio.

En Antequera, núcleo poblacional malagueño floreciente durante los siglos XV al XVIII y cabeza jurídico-económica de una industriosa comarca, a lo largo del Setecientos es perceptible una notable concentración de comisarios de la entidad ciudarrealeña que durante dicha centuria tal vez alcanzara la treintena de ministros. En este caldo de cultivo tan propicio, en mayo de 1716, conseguía título de juez comisario de la Hermandad de Ciudad Real don Juan Bruno de Aranda y Puertas, rubricado del notario hermandino Juan de Arenas San Martín.

Prácticamente desde el momento en que tomó posesión de su empleo, en virtud del cual se le adjuntó un traslado de los privilegios para usar armas cortas, el citado individuo se dispuso a hacer uso de sus prerrogativas forales. Comisionado por sus superiores jerárquicos para seguir los pasos de un grupo de gitanos acaudillado por Juan de Montoya, a quienes se les imputaban numerosos latrocinios, logra capturar en Estepa -Sevilla- a uno de los acuadrillados y a uno de sus informantes, poniéndolos a buen recaudo en la cárcel local.

Rondando el susodicho por la malagueña Sierra de Yeguas, prende e interroga a varios castellanos nuevos que erraban por los montes, reconociendo entre los reducidos a Gabriela -amante del capitán de los bandidos antes citados-, quien al ser cacheada se le halla en posesión de efectos de hechicería¹⁷⁶. Conduce a Juan y Luis de Montoya, junto a la hechicera, a la cárcel de Teba -Málaga-, instruyendo la causa con la asistencia de un escribano público y lo incautado sale a almoneda, suspendida al no pujarse por su justo valor; no terminan aquí sus problemas, ya que al pretender trasladar a los reos uno de los alcaldes ordinarios intercede por los arrestados, en particular a favor de la hechicera, despojándole de autos y reos, siendo detenido el mismo ministro captor pretextando su tenencia de armas prohibidas y consultando sobre el particular a Granada¹⁷⁷. El 3 de diciembre de 1716 se recibe en Ciudad Real una solicitud del juez comisario reclamando despacho inhibitorio para que la justicias comarcanas se ciñesen a lo recientemente dispuesto por el Supremo Consejo sobre colaboración de las autoridades con los dependientes hermandinos¹⁷⁸. Unos veinte días después requería a las justicias de Teba con dicho auto, devolviéndosele sus armas, los reos con sus pertenencias y la causa criminal incoada. Poco más tarde justifica la no remisión de los detenidos desde Antequera porque la subasta de lo embargado no sobrepasó los cien reales, muriendo dos de los cinco pollinos secuestrados, cantidad notoriamente inferior a la precisa para dicha diligencia. Como quiera que en una rueda de presos no fuese reconocido el jefe de los bandoleros entre los arrestados, en diciembre de 1716 los alcaldes manchegos consideraron prudente que no se trasladasen los reos a su audiencia, sino que se substanciara la causa en Ciudad Real y desde allí se le notificaría el fallo para su cumplimiento¹⁷⁹.

En febrero de 1717 encontramos a don Juan Bruno procediendo contra un castellano nuevo y dos gitanas de Antequera, sospechosos de "haber susbtraido de dicha ciudad una niña de pecho la que decian haverse comido estos"¹⁸⁰. Un mes después el comisario malacitano instruía sumaria contra otros gitanos sospechosos de haberse apropiado de unos yeguas junto a la venta de Teba y, dudando sobre la propiedad de las caballerías aprehendidas, considera oportuno hacer un careo, tras el cual y resultando indicios de culpa, remite los autos a la capital manchega. En junio de 1717 era condenado Bernardo Joseph a seis años de galeras y a las gitanas Jerónima de Frías, Catalina Josefa y Melchora Antonia a destierro del reino de Castilla¹⁸¹.

Simultáneamente, en mayo de 1717, hacía las diligencias oportunas para capturar a unos gitanos evadidos de la cárcel pública de Écija¹⁸². En Ronda, el citado juez hermandino solicita al alcalde mayor auxilio para proceder a ello, pero le es denegado aduciendo tener ocupaciones más perentorias, acusándole entonces el hermanado de tolerar trueques y cambios de caballerías a los gitanos que le habían sobornado; ante dicho desacato en jurisdicción ajena, don Juan Bruno es arrestado con el pretexto de portar armas ilegales sin ir en compañía de un superior, reteniendo títulos y comisiones hasta consultar al Supremo Consejo. Desde Madrid se nombra pesquisidor del caso a don Jerónimo Carbonell -"corregidor de las Cuatro Villas de la Hoya de Málaga"-, procediendo contra el dependiente manchego acusado injustamente de haber herido a un convecino, extraer del sagrado a un gitano por el mero hecho de portar tijeras de esquilar, confesando el comisario haber aceptado de un sospechoso diez reales y medio; todo lo cual hace que sea condenado por el pesquisidor a ocho años de presidio, apelando el agraviado a la Corte. En junio de 1718 se comprueba el Consejo de Castilla que los autos criminales remitidos

eran cuanto menos inexactos, al constar maliciosamente que el inculpado había disparado a un paisano, siendo este punto en todo falso; el 6 de agosto de 1720 una ejecutoria de la Real Chancillería sancionaba al alcalde mayor con cien ducados de multa, pero pasado un mes el comisario reclamaba la remisión de su título por la Sala del Crimen y que se permitiese su excarcelación de la galera de Ronda en la que aún permanecía retenido¹⁸³. En 1722 se requería desde Ciudad Real a su dependiente que enviase los autos fulminados contra los gitanos, lo que incumple pese a ser puesto finalmente en libertad bajo fianza¹⁸⁴.

Entre las Navidades de 1722 y el verano de 1723 su actividad es notable: a instancias del alcalde mayor de Alcalá la Real prende a Francisco Muñoz, acusado de agresiones con heridas en despoblado y de resistencia a la justicia; persigue a Pedro Martín, Francisco y Pedro Linares -vecinos de Campillos (Málaga)- indiciados de varias estafas y asesinatos; captura a los afamados bandidos Joseph y Francisco de Aguilera, hermanos de Alozaina, profugos de varias cárceles y desertores de un regimiento de caballería; persiguiendo denodadamente por Montefrío -Málaga-, Granada, Córdoba, Jaén y Priego a unos gitanos que habían robado en un cortijo.

En octubre de dicho año es comisionado por el Santo Instituto para que junto al ministro superior don Antonio Díaz González substanciase la falta cometida por el alcalde mayor de Torre del Alchime -Sevilla-, al haber estafado a un dependiente hermandino, exigiéndole para su excarcelación dieciséis pesos de costas y otros cuarenta en concepto "de regalia", notificando al mismo tiempo a los Alcaldes del Crimen granadinos que se le devolviese el caso para estimular el celo de sus representantes en Andalucía. Poco después, don Juan Bruno arrestaba en

Grazalema a Antonio Gómez por tenencia ilícita de armas, siendo apropiada y determinada la causa por la Chancillería de Granada¹⁸⁵.

El 16 de septiembre de 1724, tras cerca de una semana de búsqueda, captura al homicida Francisco Bonilla. El alcalde mayor de Uguíjar interfiere en el proceso, despojando al comisario del reo y poniéndolo en libertad a pesar de tenerse la certeza que cometió el asesinato sabiendo que el robado solo llevaba tres reales en ese momento¹⁸⁶.

El celo por la consecución de la justicia de Don Juan Bruno parece incombustible, desempeñando de 1723 a 1728 el empleo de guarda mayor de la renta de salinas de Granada, y desde noviembre de 1724 adjunta también los cargos de visitador de la renta del jabón y de guarda mayor del estanco del tabaco granadino.

En 1725, junto con otros comisarios de la Baja Andalucía, eleva un informe al Santo Instituto lamentándose del continuo maltrato que reciben de las autoridades de la zona, a pesar de sus continuados desvelos para erradicar una delincuencia que campea por sus respetos en yermos y poblados¹⁸⁷. Pese a tales dificultades, no cesa en su empeño: el 21 de julio de 1725 prendía en el granadino Soto de Roma a un gitano y a un payo que merodeaban en el camino; al día siguiente arresta a dos gitanas cómplices de los anteriores, a una tercera castellana nueva por amancebamiento y al ventero de Cazín que les informaba sobre el tránsito de caminantes y trajinantes, imputándoles el robo a un coche de pasajeros en el que viajaba un oidor de la Chancillería granadina y un religioso, no terminando aquí sus fechorías, pues la noche anterior asaltaron a un presbítero de Loja, por cuyas culpas la Sala del Crimen los castigará a azotes y a su conducción como forzados a galeras.

El día de Santiago, lejos de guardar la festividad, encontramos a nuestro juez comisario procediendo contra unos gitanos andaluces que habían sacado un caballo de las caballerizas en las que se hallaba. Mucho más jugoso, por sorprendente, resulta el siguiente proceso en el que se vió envuelto. El 2 de diciembre de 1725, junto a los también ministros ciudarrealeños don Juan García de Guzmán y don Juan de Salazar, auxilian al alcalde ordinario de Arahál a detener a los gitanos Felipe de Campos, su esposa María de Gálvez y la hermana de ésta Francisca Ximénez de Gálvez en las cuevas de Pinos del Valle -Málaga-, acusados de estafar a un labrador en su cortijo de Huelma; incautándole a ésta última diversos efectos de hechicería¹⁸⁸, lo primero que hicieron sus captores fue tratar de establecer si el caso pertenecía o no a la jurisdicción del Santo Oficio. Tras asegurarse que correspondía a su ministerio, se toma declaración a los detenidos, quienes testifican vivir "en el corral que era de los gitanos" de la calle Nueva de Granada, sustentándose de hacer canastas y de esquila bestias, no portando nunca licencias porque en las cuevas donde se refugiaban nadie se las habían exigido; preguntada Francisca Ximénez por el contenido y la procedencia de lo hallado en la talega responde

"...que dichos granos son de la peonia los que se allo en una calle de las de Granada liados en el mismo trapo en el que estan...que abra unos siete meses, mas que trae consigo dicha piedra yman que siendo entera la dividio en los pedazos que se halla y que la vendio un hombre anziano a quien no conozio en la ciudad de Granada en precio de dos quartos diciendo que era buena para el dolor de hixada..."¹⁸⁹.

Los otros reos niegan haber visto con anterioridad dicha talega. Los gitanos son escoltados hasta las cárceles granadinas, siendo los objetos de hechicería examinados por tres boticarios. Los dos de la calle de Elvira, colación de San Gil, coinciden en dictaminar

"...ser las dichas piedras imanes y estar medio bibas medio muertas y que pueden servir de diferentes medicamentos y que no se puede ejecutar con ellas cosas y remedios, y que no es para el efecto del dolor de ijada y sobre los quatro granos que son de la peonia, que estos son para este efecto aplicandole mayor cantidad; y el grano blanco al parecer ser de mijo que llaman de Sol que es diuretico para el mal de orina."¹⁹⁰

El procedimiento seguido para perpetrar sus estafas resulta curioso. Cuando en septiembre de 1725 el labrador hacendado Francisco Vázquez resulta accidentado, quedándose casi imposibilitado para andar, es acompañado por su sirviente para ser reconocido por un fraile capuchino de Granada reputado por sus conocimientos en medicina; ya en dicha ciudad se queda rezagado su sirviente en la calle San Juan de Dios hablando con dos gitanos que le prometen sanar a su amo. Llevado a las afueras de Granada, hasta las cercanías del hospital de San Lázaro, unas gitanas de unos veinte y treinta años respectivamente le piden dinero para los ingredientes del conjuro y otros doscientos reales para proceder a su curación; el crédulo labrador, llevado por su necesidad y "sin saver donde estaba ni que se hazia les dio quatro de plata". Vuelven el labrador y su criado al cortijo pero al día siguiente se presentan las gitanas solicitándole seis reales para adquirir los ingredientes precisos, así como dos sabanas, dos vestidos, una muda completa de ropa blanca y un paño de manos para sus sortilegios, sumiendo a los moradores de la casa de labor en un profundo sopor que les dejó

"...como insulsos y sin saber como estaban ni donde manteniendo toda la noche en esta forma sin saber lo que hasian dichas gitanas hasta que por la mañana que volvieron en si...siendo sin duda engaños diabolicos..."

En efecto, a la mañana siguiente echan en falta ropa y diversas alhajas de perlas y oro. Pese a que dijeron al criado que las

devolverían tras el hechizo, éste en enviado por su amo para reclamarlas, pero solo obtuvo de las gitanas la promesa de que les serían devueltas al día siguiente si se les pagaba su trabajo con seis pesos. El estafado manifiesta entonces su propósito de denunciar el hecho ante las autoridades, persuadido en un primer momento por un carnicero amigo suyo que si emprendía acción legal contra los gitanos seguramente tendría que asumir las costas judiciales, luego se decide a denunciar el caso, siendo arrestados y embargados los acusados aunque veinte días más tarde salen libres sin haberse presentado los cargos de culpa ni consultarse los autos elevados a la Sala del Crimen¹⁹¹. Como el comisario pidiera testimonio de su excarcelación, no pudo obtener este certificado al inhibirse receptores y escribanos. Los autos incoados por don Juan Bruno serán remitidos a Ciudad Real el 24 de enero de 1726 por correo ordinario y los alcaldes le devuelven la causa para que substanciase la sumaria y la remitiese luego a sus superiores para dictar el fallo correspondiente, lo que harían el 26 de julio siguiente.

El 17 de diciembre de 1725 investigó los crímenes de Juan de Torres -afincado en Villanueva de Mesía- reputado cuatrero y ladrón de grano que durante meses actuó con total impunidad al contar con la protección del gobernador de la villa, quien llegó a apresar al juez comisario y a liberar al reo con el pretexto de no haber sido informado de su despacho. La Real Chancillería falla contra el ministro captor, a pesar de haber sido amenazado de muerte por el detenido.

Cinco días después prende a un administrador por expoliar a su amo más de seiscientas cabezas de ganado caprino; durante su encartamiento salen a la luz numerosos abigeatos y es acusado de haber estuprado una

doncella en despoblado con quien mantenía trato ilícito. El juez eclesiástico prende durante unas jornadas a Francisco Moreno, pero sale de su reclusión al poco tiempo por no probarse su culpa en tales hechos. Tras estas vicisitudes muere por envenenamiento su esposa y todas las sospechas se vuelven contra él; vuelto a capturar y tras dos meses de prisión la Sala del Crimen ordena que se le hiciese llegar la sumaria, pero inconclusa al demasiado prolija será excarcelado por orden de los oidores, lamentándose don Juan Bruno a sus superiores de que un defecto de forma condujese a la libertad a tan peligroso individuo.

A lo largo del 1726 el citado comisario sigue desarrollando una labor encomiable, frenética podría decirse: hacia febrero instruye autos contra Antonio Oliva, oriundo del marquesado de Cenete y afamado bandido evadido de varias cárceles públicas; en octubre persigue a Pedro Villalón por haber herido en el Real Soto de Roma -soto en las orillas del Genil- a una viuda y a su hijo que moraban en un cortijo; informa sobre la tala de montes e incendios de dehesas en la villa de Poza; prende a los gitanos Francisco García, Juan Antonio, Joseph de Malla y Alfonso de Campos por robar en la casa de campo de un regidor de Guadix, siendo condenados a perder sus bienes, a una pena aflictiva y a galeras; y a fines de año arresta a dos hombres y a su manceba, inculpadlos del robo sacrílego con escalo en la ermita del hospital de San Juan de Dios, en la vega granadina.

A últimos de marzo de 1727 detiene en Carabuey al gitano Joseph de Rodas, fugado de la prisión de Priego, acusado de ladrón, adúltero y resistencia a la justicia. Conducido a la cárcel de Granada, se apropia la real audiencia del caso, obligando a don Juan Bruno a pagar las costas devengadas y sentenciando al reo a azotes y galeras.

Posteriormente pone a buen recaudo al castellano nuevo Francisco Cabrera "Flores", herrero que portaba armas cortas en el momento de su detención y a quien se le imputaba el asesinato de un antequerano; asimismo encausa al cuatrero Francisco Córdoba, vecino de Archidona, pero los autos remitidos a Granada serán retenidos en la chancillería, saliendo el reo bajo fianza por defectos procesales. En abril de 1727, indagando en Archidona sobre la desaparición de unas reses, aparece indiciado un hidalgo de Puebla de Riogordo que concita valiosos apoyos a su favor en la citada localidad malacitana. La relación de culpas, abusos y agravios de sus convecinos sería interminable: un alcalde ordinario que protegía a su yerno, acusado éste de intentar comprar con doscientos doblones la libertad de unos sospechosos¹⁹², actuando irregularmente el primero al tolerar gitanos y ser sobornado para facilitar la liberación de unos ladrones; un escribano local que se inhibe de prestar el preceptivo auxilio al ministro hermandino; un encubridor de la familia de un ladrón y secuestrador de una joven de Loja; tres abigeos, uno de ellos asilado en el convento de la Victoria; un ladrón que quebrantó su destierro y que solía hurtas cerdos de la piara de un vicario de la localidad; y unos hermanos carniceros que se lucran con ganado robado. Pese a tales irregularidades denunciadas la Sala Del Crimen granadina absuelve a la mayoría de los encartados, enajenándose definitivamente don Juan Bruno el favor de los poderes locales de la comarca.

Contrariado por los acontecimientos, el dependiente manchego eleva un duro memorial al Consejo de Castilla en el que manifestaba las continuas intromisiones de las que era objeto su labor por parte de los oficiales de la Real Chancillería de Granada, despotricando contra la administración de justicia en el reino y arreciando las críticas contra el corregidor de Archidona -arrestado por orden de la real

audiencia tras su juicio de residencia y vuelto a su empleo es objeto de las burlas de sus gobernados-¹⁹³. El fiscal del Supremo Consejo orden a la Sala del Crimen andaluza que informase detalladamente de todas las causas expresadas con anterioridad e instruidas por el juez comisario, mandato que cumplió el 5 de junio de 1728, aunque se demoraron algo los trámites al quejarse el expedientado de que llevaba detenido cautelarmente cerca de catorce meses en Granada¹⁹⁴. Semanas después la Real Chancillería ponderaba

"...que las operaciones de don Juan de Aranda y Puertas son generalmente sentidas de muchos de los correxidores del distrito por poco arreglado y que el emplearse en la formacion de tanto numero de causas no es con el celoso fin de castigar delitos y perseguir delincuentes sino el de buscar a costa deste bullicioso modo su utilidad en dispendio de nuestros vasallos pues en las mas causas no ay tasacion de salarios; vocea las sirve a sus expensas siendo un pobre hombre sin hacienda y quando con maior combeniencia guarda de salinas o tabaco de suerte que lo primero que en los procesos intenta justificar es tolerancia de las justicias..."¹⁹⁵.

En 1733, el Fiscal del Supremo Consejo recomienda que el representante hermandino se condujese con mayor cuidado en las causas seguidas contra castellanos nuevos, "y prevenga a los receptores procedan con reflexion en las visitas no abusando de su autoridad", habiendo de remitirse los pleitos criminales incoados al Santo Tribunal manchego del cual dependía el referido don Juan Bruno¹⁹⁶.

A partir de entonces perdemos el rastro de este curioso personaje, quien tal vez se diese por vencido ante el cúmulo de autos substanciados por cortes de justicia tan diversas contra su tan desordenada como intensa actividad, desarrollada en todo momento a la sombra de su título de comisario de la fraternidad Ciudad Real.

NOTAS AL CAPÍTULO 8.

¹ Los juristas coetáneos empleaban la expresión "jurisdicción ordinaria" en tres acepciones diferentes, contraponiéndola, según los casos, a jurisdicción suprema -audiencias y chancillerías-, a jurisdicción delegada -fuero eclesiástico-, y a jurisdicción privilegiada especial -señorial, fiscal, universidades, protomedicato militar, hermandad, mercantil, Mesta...-; Vid. B. GONZÁLEZ ALONSO, "La Justicia", op. cit., p. 391.

² M. LÓPEZ DE AZCUTIA, *La jurisdicción real en su actual relación con las demás jurisdicciones privativas*, Madrid, 1865, p. 9.

³ El expediente general acumulado desde 1717 hasta 1820 con memoriales pertenecientes a las Fraternidades Viejas de Ciudad Real, Toledo y Talavera inducía a error, como el Fiscal de Consejo de Castilla pone de manifiesto el 30-V-1788 y recuerda el 13-III-1779, al dejar constancia del particularizado tratamiento brindado a cada una de ellas por constatarse

"...que estas tres Hermandades son distintas entre si, sin que en el día tenga que ver la una con la otra no obstante que la causa final de su establecimiento fuese la misma en todas tres produce gran confusión el expediente por averse unido todo, debiendo ser tres Expedientes, por cada una el suyo, para que el uno no embaraze el curso del otro..."

(AHN. Consejos, leg. 3.169, nº 9, s.f.).

⁴ El 5-VIII-1717 un ministro onubense presenta cinco testigos y sus señas personales para solicitar tramitar el ingreso en la entidad de Ciudad Real encabezando su petición en los siguientes términos:

"Juan de Acosta vezino desta villa y ministro de la Santa Ermandad Bieja de Talavera La Real como mejor proseda y aia lugar en derecho paresco ante v. mds. y digo que respecto de tener mucha distancia ai referido mi tribunal y que no puedo conseguir las noticias y ordenes en la brevedad que apetiesco para cumplir mi empleo pretendo yncorporarme en el numero de ministros de la Santa Hermandad Bieja de Ciudad Real para cuio efecto presento con el juramento necesario ynterrogatorio despachado a mi nombre por los señores de dicho tribunal por tanto= A v. md. suplico me admita ynformacion al tenor de los expresados capitulos y dada en la parte que me baste se me entregue original ynterponiendo v. md. en ella su autorizacion y decreto judusial pido justicia.
(r) Francisco Jose de Acosta y Barrera"

(AHN. Div. Her., leg. 5, nº 70, f. 3r).

⁵ Un buen ejemplo es don Francisco de Infantes, vecino de Campo de Criptana -Ciudad Real-, ministro superior de la corporación apícola ciudarrealeña y teniente de alguacil mayor de su homónima toledana; 28-IV-1708 (Ib., leg. 40, nº 7).

⁶ Pleitos criminales fueron acumulados asimismo contra estos bandoleros en la gobernación de Almodóvar del Campo -Ciudad Real- (AMAC., caja 13, 1651, nº 2).

⁷ 17-VIII-1654, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 34, nº 4, ff. 114r-vº). Una expurgación minuciosa de los archivos criminales de los tribunales locales y territoriales sería esclarecedor sobre el panorama delictivo de la zona, proporcionándonos una idea aproximada de la carrera delictiva de algunos de los encartados.

⁸ 20-X-1654, Toledo (Ib., s.f.).

⁹ 12-IX-1658, Ciudad Real (Ib., leg. 21, nº 37).

¹⁰ Nombramiento de procurador ante los Reales Consejos a favor don Cristóbal Clavero, agente de negocios madrileño; 25-IX-1676, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 207, ff. 50r-51r).

¹¹ Se denominaba alojeros a los vendedores ambulantes de una bebida aderezada con miel, agua y especias, muy solicitada durante festejos, ferias y romerías de la época.

¹² Detenido el muchacho, al ser cacheado se le hallan los doblones, arrestándose al cuadrillero toledano Francisco Bayona por haber indicios racionales de culpabilidad en esta estratagema, con el consiguiente escándalo de la nutrida afluencia a la feria, y la repulsa de sus compañeros al considerarla abusiva; 26-XII-1712, Toledo (AHN. Div. Her., leg. 69, nº 4, s.f.).

¹³ AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.

¹⁴ 8-I/13-III-1717 (AHN. Div. Her., leg. 42, nº 13).

¹⁵ 1-III-1719, Jerena (Ib., leg. 43, nº 6).

¹⁶ Dicha diligencia procesal importó 15 rs., monto tan exiguo que indica que muy probablemente se recurriese a sujetos afincados en la misma sede del Santo Instituto o, tal vez, a sus propios oficiales y dependientes (Ib., leg. 58, nº 58, nº 23, s.f.).

¹⁷ 23/27-VIII-1726, Mérida (Ib., leg. 46, nº 4).

¹⁸ 5-XI-1705, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nº 7).

19 Dicha partida estaba integrada por el ya citado juez comisario Toribio Grijuela -natural de Garnazos (Santander) y residente en Navalcarnero (Madrid)-, carpintero soltero de unos veintiocho años de edad, con título despachado el 6-IX-1720; su criado, Manual García de la Dehesa, oriundo como el anterior de Garnazos; el valenciano Andrés de Carratala; y el burgalés Joseph de Soto (Ib., leg. 44, nº 5).

20 2-IX-1720, Rielves/20-XII-1720, Madrid (Ib., s.f.).

21 En el inventario del antiguo archivo de la villa calatraveña de Almodóvar del Campo -Ciudad Real-, probablemente realizado a fines del Seiscientos, se consignaba que en el legajo 11, nº 15 se conservaba el documento que permitía a los caballeros de la sierra locales prender a los infractores que dañasen las explotaciones agrícolas, forestales o los montes (AMAC. caja 4, s. XVI, nº 2, s.f.).

22 El teniente de gobernador de Almodóvar del Campo, el 14-VI-1722, conminaba a los caballeros de sierra y a los guardas de campo municipales de su extenso partido para que realizasen las rondas por cotos y cañadas para evitar que los vecinos introdujesen sus ganados en ellos, menoscabando pagos y siembras (Ib., caja 72, 1722, nº 8). Recomendando en 1737 que pusiesen más empeño en su cometido (Ib., caja 91, 1737, nº 92); y recordándoles severamente en 1739 que no tolerasen a las reses pasar a sembrados y viñedos (Ib., caja 94, 1742, nº 1).

23 Esta negativa a supeditarse a las directrices municipales no siempre está justificada. En octubre de 1752 los piconeros sevillanos mostraban al corregidor su pesar al estar sujetos a las exacciones arbitrarias de los oficiales de la Santa Hermandad concejil por trabajar en el monte. Dichos ministros usaban vara alta de justicia, y

detenían a quienes portaban armas vedadas en descampado; son Luis Salcedo y Castilla -alcalde por el estado noble-, se hacía acompañar en sus diligencias por soldados, un notario apostólico amigo, un alguacil mayor y por un corchete, procediendo contra ellos autónoma e indiscriminadamente. El modo de reconvenir a dicho oficial municipal fue expeditivo: la justicia ordinaria, con el auxilio de tropas militares, llegan a sus aposentos a mediodía

"...allanaron su casa, saltando por las tapias, descerrajando puertas y entrando en ella con tal vituperio que escandalizo la ciudad y embargaron todos quantos bienes suyos allaron..."

Enajenadas la mayor parte de sus pertenencias a un precio ínfimo, el resto quedaron en depósito de un vecino tan pobre que se temía seriamente por su integridad. El Consejo de Castilla, informado del caso, salomonicamente declara nulo el proceder del corregimiento y amonesta a los encausados por su irregular proceder; 14-IX-1752, Córdoba/10-VII-1753, Madrid (AHN. Consejos, leg. 203, nº 5).

²⁴ 19-XII-1715/2-VII-1716, Tobarra (AHN. Div. Her. Leg. 43, nº 8).

²⁵ 2-X-1599, Villamanrique (Ib., leg. 28, nº 9).

²⁶ 20-IV/30-VII/23-IX-1623 (AHMCR. caja 7, doc. 202).

²⁷ 28-II/2-V-1719 (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 6).

²⁸ 10-V/27-VII-1746 (Ib., leg. 50, nº 8).

²⁹ 3/16-VIII-1745 (Ib., leg. 51, nº 16).

³⁰ J. CAMPILLO Y COSSÍO manifestaba su opinión, en el Setecientos, que

"...la lastima es que estos jueces suelen durar poco tiempo en los pueblos, porque conspirando contra ellos, los ricos viendo que con sus rectitudes no tienen lugar sus maldades, les atribuyen aquello que no son capaces de cometer; y como estas quejas son tan injustas, precisamente son tambien injustos los medios con que procuran introducirlos. Donde por el soborno quedan desposeidos los pueblos de aquellos miembros tan rigidos como procuradores de justicia."

Vid. *Lo que hay de más y de menos en España para lo que debe ser y no lo es*, (1ª ed., 1741), red. A. ELORZA (ed. y est. prel.), Madrid, 1969, p. 92.

31 Los alcaldes ordinarios a menudo contaban con menor respaldo institucional para actuar en supuestos de ligios competenciales con otras justicias, procediendo frecuentemente como ministros ejecutores de las directrices marcadas por sus inmediatos superiores jerárquicos. En 1601, por haber arrestado una partida hermandina a tres guardas del valle de Alcudia, los alcaldes ordinarios de Torralba proceden contra reos y captores, pero de inmediato entregan autos y detenidos al gobernador de la villa para que en su audiencia se substanciasse el caso (AHN. Div. Her., leg. 57, nº 2).

32 El 20-IX-1714, un comisario gaditano con el auxilio de dos alcaldes ordinarios de paterna de la Rivera y de unos soldados de caballería, apresan a un herrero y a un bracero de raza gitana, secuestrándoles sus caballerías. Confiados los reos a la justicia ordinaria para su conducción a Alcalá de los Gazules, la negligencia de éstos permite su fuga, dejando constancia por tal motivo el ministro captor que "en dicho lugar me dijeron algunos vezinos desian dichos alcaldes avian compuesto esta dependencia". Por este motivo, inmediatamente después de cumplir sus oficios el citado delegado hermandino junto a los alcaldes entrantes prendieron y embargan a sus predecesores al estar investidos por su cargo de mero y mixto imperio, es decir, exentos de

ser procesados durante el tiempo de su oficio; 20-IX-1714/7-III-1715 (Ib., leg. 41, nº 1).

³³ Obstaculizándose la sumaria incoada a un gitano lusitano en Puebla de Guzmán, so pretexto de su alcalde de decir faltaba papel sellado de oficio para instruir el proceso, el juez comisario captor le conminaba a que lo solicitara a Sevilla si fuese menester para agilizar los trámites ahora suspendidos. Enterado el justicia local de dicho requerimiento, llevado por la soberbia al verse cuestionado en su propia jurisdicción, respondió "con voces mui alteradas y fuera de lo natural...Juro a Dios que yo tengo la culpa aviendo tenido ocasion de colgar alguno". Trasladado el reo a Gibráleón, no terminarám aquí las cuitas del comisario manchego, pues dejado por sus guardas que se asilase el sospechoso en sagrado, manifiesta a sus superiores que

"...todas las noches que estuvo preso en la carcel le dava dos reales de plata a el carcelero a fin de hacer la fuga con el pretexto que le aliviaria las prisiones y en efecto por medio de los dos reales de plata tenia y tuvo alivio...y que si era preso de cuidado...le abriria y aliviaria la puerta y prisiones."

14-XII-1721 (Ib., leg. 44, nº 9, s.f.).

³⁴ Una nutrida partida hermandina, comandada por sus alcaldes, sería cercada por arcabuceros en la posada donde se alojaban en la ciudarrealeña villa de Piedrabuena, reclamando violentamente su alcalde ordinario al reo capturado para enjuiciarlo en su jurisdicción. Ante tan expeditivo requerimiento hubieron de ceder los oficiales de la entidad apícola, yendo luego ante el señor de la villa para pedirle responsabilidades por el incidente, al creerlo el responsable último de este desacato a la justicia regia encarnada en su ministerio; 15-X-1654 (Ib., leg. 34, nº 4). Este proceder no era excepcional, como lo demuestra que en 1638 hubieran de hacer lo mismo por semejante causa, esta vez elevando sus quejas ante el señor de

Picón, al arrebatárles sus paniaguados a dos gitanos (Ib., leg. 58, nº 5).

³⁵ La crítica pluma de M. CERVANTES SAAVEDRA ya se burlaba de la ineptitud de los sujetos electos en las pequeñas villas y aldeas para desempeñar unos cargos de justicia que eran pieza clave del gobierno y orden público local en su conocido "Entremés de los Alcaldes de Daganzo", en M. HERRERO GARCÍA (ed., prol. y not.) *Entremeses*, Clásicos Castellanos, t. 125, Madrid, 1966, pp. 68-79.

³⁶ Asimismo dicha providencia pretendía solventar la agria polémica suscitada por la concurrencia de varias instancias que intentasen hacer valer sus derechos sobre una misma causa. Señalaba LÓPEZ REY que

"Un robo o un homicidio..., podía caer bajo distintas jurisdicciones, según la calidad o dignidad de la persona o por razón del lugar, y ello no de una manera precisa, que evitara dudas o conflictos, sino confusamente, de modo que siempre, más de una, se creían competentes para entender del hecho."

Vid. "La jurisdicción común castellana en el siglo XVI (un intento de reconstrucción histórica)", en *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, t. 4, nº 166 (1935), pp. 502.

³⁷ 7-VII-1496, Córdoba. Leyes 9 a 12, tit. 35, lib. 12. Nov. R., op. cit., pp. 462-464.

³⁸ 4-V-1715, Madrid. Ley 26, tit. 35, lib. 12, Ib., p. 468.

³⁹ En pleno siglo XVIII, consideraba J. ÁLVAREZ DE POSADILLA que

"En rigor de derecho no se debe prender en jurisdicción ajena, pero según las Ordenes que hay dadas para que se persigan ladrones, y la buena armonía que hay entre los Jueces, el que vaya siguiendo a un reo, sigale y prendale, dando inmediatamente cuenta al Juez de la jurisdicción a fin de que le detenga en su cárcel, interim que el Juez de la causa le remite requisitoria

por el, y si el Juez del territorio no quisiese detenerle, sin permitirle extraher, proteste los daños y perjuicios que de ello se sigan."

Op. cit., t. 3, dial. 22, p. 475.

⁴⁰ Retenido el comisario Pedro Martín Paniagua en la aldea de Cabezas Rubias -Huelva- cuando conducía a unos gitanos, con el fútil pretexto de no haber notificado su empleo ni despachos ante los jueces ni escribanos locales, el agraviado se queja a sus superiores del despojo de la jurisdicción de la que se hallaba investida en razón de su título, respondiéndose amargamente desde la capital manchega que

"...las prisiones las consigue mejor la singularidad que la tropa...los pueblos, por la maior parte estan preocupados de jitanos con la seguridad estos de la proteccion de las justicias, quienes toman a su cargo hazer permanecer los reos, y perseguir a los ministros que los buscan...se les disputan las carzeles, si se les condenan por el tribunal a galeras, los reos, el Governador de Cadiz no los quiere recibir i las justicias no los quieren transitar y asi esta la jurisdizcion tan ajada..."

17-I-1724, Gibraleón (AHN. Div. Her., leg. 4, nº 36, f.9r).

⁴¹ Ocasionalmente a dichas prisiones concurren varios oficiales concejiles, incluso de diversas villas. Así en 1635 tras los pasos de tres peligrosos criminales partieron diversos ministros hermandinos junto a los alcaldes ordinarios y a los alguaciles mayores de las villas manchegas de Abenójar y Cabazarados (Ib., leg. 35, nº 5).

⁴² A veces, la situación creada podía ser absurda. Habiendose herido mortalmente a un guarda de viñas en el término de Alhambra, pero habiéndose notificado el caso al justicia mayor de La Solana y a un ministro superior hermandino de la localidad, quienes atendieron al moribundo y le llevaron a su casa, actuando de oficio hasta que se querelló su vuida. Enterado del suceso el alcalde mayor de Almagro, en ese instante juez pesquisidor de Alhambra, reclamará éste la

substanciación del homicidio, intruyendo sumaria de esta forma la Hermandad Vieja, el gobernador de La Solana y el de Almagro. El juez superior hermandino presenta dos exhortos inhibitorios consecutivos al pesquisidor almagreño, quien por su parte reclama el cadáver del finado o los derechos devengados por su entierro, al haberse perjudicado el párroco de Alhambra, esgrimiendo la nulidad de las reclamaciones formuladas por el ministro solanero al considerar "que dicho juez se apellida ministro superior de la Hermandad quando es notorio que los que lo son tales residen en aquel tribunal". Desde Ciudad Real se conmina a su subordinado para que siga el caso privativamente, como le corresponde por su oficio, remitiendo cabeza de proceso para que fuese substanciada la causa (Ib., leg. 45, nº 12).

⁴³ 1556-1658, Puertollano (Ib., leg. 25, nº 3).

⁴⁴ 1723, Peñalsordo (Ib., leg. 45, 26); 1751, Sancho Rey (Ib., leg. 51, nº 6).

⁴⁵ 1595, Miguelturra (Ib., leg. 28, nº 6); 1599-1605 Villarrubia de los Ojos (Ib., leg. 28, nº 28, nº 8).

⁴⁶ 1603, Porzuna (Ib., leg. 30, n 93).

⁴⁷ 1602-1603 Argamasilla de Alba (Ib., leg. 29, nº 3); siglo XVIII, Miguelturra (ADPCR, s.c.).

⁴⁸ 1607, Carrión de Calatrava (AHN. Div. Her., leg. 32, nº 1).

⁴⁹ 1595, Mestanza (Ib., leg. 28, nº 7); 1719, Jerena (Ib., leg. 43, nº 6).

⁵⁰ 1716, Teba (Ib., leg. 42, nº 12); 1725, Pinos del Valle (AHN. Consejos, leg. 115, nº 2).

⁵¹ Ib., leg. 29, nº 1.

⁵² Ib., leg. 58, nº 4 y 5.

⁵³ Ib., leg. 60, nº 6.

⁵⁴ El 8-VI-1731 se consulta al Consejo de Castilla el caso de un comisario de Guadalcanal que, tras prender e intentar conducir a unos presuntos ladrones de paños a un feriante a Ciudad Real, se ve envuelto en un litigio con las autoridades locales. Desde Madrid se ordena a la justicia ordinaria que retomase la custodia de los sospechosos y pagase los gastos de mantenimiento, ya que el proceso correspondía a su jurisdicción, y no a la de la Santa Hermandad (Ib., leg. 46, nº 2). Vid. apéndice documental nº 9.

⁵⁵ Sin duda, la imposibilidad material de contar apenas con otros datos que no sean los proporcionados por el propio archivo de la corporación colmenera mediatiza y distorsiona el balance derivado de la valoración de las sentencias en casos de litigio jurisdiccional por varios motivos: algunos procesos se conservan incompletos; numerosos autos se enviaron originales a otras instancias, no siendo devueltos o perdiéndose su rastro definitivamente; y la falta de objetividad de las fuentes consultadas, lo que determina que haya que extremar las precauciones para no cometer errores de interpretación.

⁵⁶ En el proceso seguido contra un juez comisario de Villanueva de los Infantes por apropiación indebida de bienes incautados declara para desviar la atención de sus superiores que el gobernador de Manzanares había vejado a un compañero. En efecto, el 3-II-1709 requería el comisario a la justicia para que le devolviese la escopeta que le habían requisado, siendo su sorpresa mayúscula al ser apresado y oír decir públicamente el gobernador que ni él ni sus alcaldes habían de perder sus derechos en el desembargo; el citado ministro hermandino, para exonerarse de la prisión, hubo de vender su caballo por los 40 reales exigidos para su excarcelación, repartidos a la sazón a razón de 36 reales para el gobernador y 2 para cada uno de los alcaldes ordinarios locales (Ib., leg. 41, nº 2).

⁵⁷ 1637, Baeza (Ib., 58, nº 12); 1701, Montoro (Ib., leg. 39, nº 3); 1712, Villacarrillo (Ib., leg. 41, nº 15); 1720, Úbeda (Ib., leg. 45, nº 1); 1727, Cuesta (Ib., leg. 47, nº 2).

⁵⁸ 6-II/6-IX-1706 (Ib., leg. 39, nº 6).

⁵⁹ 1600, Calzada de Calatrava (Ib., leg. 57, nº 2); 1603-1604, Belmonte (Ib., leg. 57, nº 4); 1608, Alcolea (Ib., leg. 57, nº 5); 1610-1611, Almagro (Ib., leg. 57, nº 7); 1632, Huete (Ib., leg. 58, nº 4); 1634, El Toboso (Ib.); 1939, Puebla de Alcocer (Ib., 58, nº 5); 1688, Caravaca (Ib., leg. 58, nº 12); 1718-1719, Cieza (Ib., leg. 58, nº 12); 1726, Gibraleón (Ib., leg. 46, nº 2).

⁶⁰ En 1761, cuando un ministro superior procedía contra un cuatrero y su encubridor, la justicia de Bujalance le deniega su ayuda para embargar a los sospechosos, seguramente por ser uno de los alcaldes ordinarios primo de Juan Calleja "Canalejo" -presunto receptor de los

objetos robados-. Para intentar obstaculizar al seguimiento de los autos exige el cobro de algunos reales en concepto de gastos de escribanía, una irregularidad al tratarse de justicias, e imponiendo al delegado hermandino una multa de 10 ducados (ADPCR, s.c.).

⁶¹ En 1609 la justicia de Villafranca hegaba jurisdicción a los cuadrilleros que pretendían conocer de los azotes propinados por Alonso Manrique a una viudad en el yermo, siendo secundada dicha inhibición por el prior de la Orden de San Juan (AHN. Div. Her., leg, 57, nº 6). El juez comisario Pedro Gualda, yendo tras la pista de unos cuatreros, al manifiestar su comisión en la valenciana localidad de Chiva encuentra la oposición decidida del notario local, quien "le dixo que el referido despacho era una droga menospreciandola", y pese que un alcalde ordinario fue prevenido por un tratante de la dignidad que tales ministros tenían en Castilla, las justicias locales optan por inhibirse ante las promesas del escribano de que él les sacaría del lance; 2-I-1710, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 61).

⁶² 1603 y 1608-1609, Piedrabuena (Ib., leg. 57, nº 3 y 5); 1612, Membrilla (Ib., leg. 57. nº 8); 1728, Utrera (Ib., leg. 58, nº 26).

⁶³ Ib., legs. 4, nº 36 y 50; 9, nº 13; 23, nº 63,, 69, 70, 75, 76, 78, 79, 81, 83...

⁶⁴ Una representación conjunta de cuatro comisarios de Lucena, con fecha 26-VI-1722, manifiesta que las autoridades de la villa impedían substanciar los procesos, no habiendo notario que quisiese asistirlos, atestiguando uno de ellos que maliciosamente se había sustraído el manual de noticias a Pedro Ximénez Zamorano, el único que se atrevía a salir en su auxilio, sospechando que dicho hurto se realizó por orden

del alcalde mayor de Iznájar. La situación no debió de variar demasiado en los años siguientes, pues un pretendiente de cicha localidad, en 1728, manifestaba que

"...el día de oí lo a suspendido -sus trámites de ingreso- y no quiere pretender título a la vista del odio y la mala voluntad que tienen los señores jueces ordinarios a esta Santa Hermandad."

(Ib., leg. 23, nº 73).

⁶⁵ El 2-XII-1726 un juez comisario que actuó junto al gobernador de Cabrera en la captura de un ladrón sacrílego en un pajar de Quintanilla de Losada, al ser luego requerido el notario local para que le entregase los autos incoados, alega este oficial público que el título hermandino "era solo para perseguir gitanos...y que no le avia de entregar los autos haziendo gran menosprecio como mucha mofa y desatencion." Aunque el Fiscal del Supremo Consejo, el 18-I-1727, se pronunciaba a favor de la Hermandad Vieja manchega, los consejeros desatendieron este voto favorable, dictaminando un mes después que fuese llevado el caso por la justicia ordinaria de Castrofinojo (AHN. Consejos, leg. 37, nº 3).

⁶⁶ Hidalgo notorio que dispone de título de ministro superior de la entidad ciudarrealeña desde el 1-IX-1793 (Ib., leg. 14, nº 19).

⁶⁷ La actitud inflexible del justicia mayor es patente pese a las bien argumentadas quejas expresadas al respecto; he aquí una muestra del contenido de una de ellas:

"Y a eso de la una de la tarde, por Antonio Bejel del exercicio zapatero de esta vecindad y uno de los citados para el dicho auxilio, se presento peticion exponiendo haber sido dicha visitación por la pretension de que abia de llebar escopeta, balas, media libra de polbora, y para costearse tres dias a sus propias expensas, lo que era...injuridica notoriamente -al- ser

casado con hixos, el no tener manejo en las armas...suplicando se le relebase desde luego desta gravosa contribucion."

9-V-1797, Estepa -Sevilla- (AHN. Consejos, leg. 1.574, nº 23).

68 El alcalde del marquesado aduce sobre el ministro hermandino que

"...para el que no tenga conocimiento del genio y caracter inquieto y trabieso de don Francisco Hidalgo Vasco no deje de descubrirse con bastante claridad, que el intento suyo no es perseguir y prender malhechores como aparenta en sus oficios, sino armar mucha bulla para llamar la atencion de sus superiores que no le conocen, con escogidas y pomposas esprecciones -sic- y grandes palabras...descubriendo al mismo tiempo el falso celo y fines siniestros e interesados aunque barnizados de hermosos colores."

11-V-1797, Estepa (Ib., s.f.).

69 22-V/27-IX-1797 (Ib.).

70 16-V-1609 (AHN. Div. Her., leg. 57, nº 5).

71 Luis Francisco de la Madriz hubo de pagar los 30.000 mrs. de pena de cámara previstos por ley y otros 21.121 mrs. mancomunados con su alcaide en concepto de costas procesales; 5-V-1611, Granada (Ib., leg. 32, nº 12).

72 En 1612 se libraron 33 ducados a Francisco Mesía de Mora por ir a la villa de Almagro para cobrar la sanción impuesta al doctor de la Madriz (Ib., leg. 57, nº 9, s.f.).

73 Por lo ilustrativa de su declaración reproducimos parcialmente la misma en la que relata las vicisitudes de su evasión de la cárcel de forzados de las Reales Minas de Almadén, realizada el 5-III-1655:

"...despues de haver servido en la dicha mina por forzado en cumplimiento de su sentenzia nueve meses hizo fuga de ella desde dentro...sacando la dicha agua y dandole al torno en su compañía Francisco Moya que dezia era serrano de tierra de Moya y de

Phelipe que no sabe su nombre vecino de Argamasilla de Alva de los Prioratos de San Juan y otro natural de Mestanza...a media noche el dicho Phelipe les dixo...que entrasen delante, comenzaron a dar al torno que iba el tras nosotros y habiendole aguardado un rato y bisto que no bajaba al dicho torno...subieron a buscarle asta la puerta de dicha mina y allaron en ella un agujero hecho y cortados los cruzemos por ser de red por donde cavia un hombre..."

19-II-1656, Ciudad Real (Ib., leg. 35, nº 1).

⁷⁴ 10-III/16-IX-1656, Ciudad Real (Ib.).

⁷⁵ 15/19-II-1599, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nº 59). Los excesos imputados el corregimiento por entonces se acumulan y una provisión de la Real Chancillería de Granada del citado año provee que el cabildo nombrase a dos regidores para que acompañasen al delegado regio al ser recusado Jerónimo Hurtado -hermano del Santo Instituto-, pese a su resistencia a admitirla; 6-VII-1599/6-VII-1601 (AHMCR., nº 189, s.f.).

⁷⁶ Los dispendios ocasionados por tal motivo no fueron nímios, a saber: 80 reales de un correo a pie a la Corte; 142 de otro propio a la Chancillería granadina; 14.920 mrs. al receptor Juan Daça y a su escribano por permanecer once dias en la capital manchega y 21.845 mrs. devengados al procurador Francisco de Jove en la citada audiencia andaluza (AHN. Div. Her., leg. 57, nº 9).

⁷⁷ 17/23-V-1616, Ciudad Real (Ib., leg. 32, nº 9).

⁷⁸ 14-II-1665, Ciudad Real (AHPCR, Protocolos Notariales, leg. 191, ff. 1r-vº).

⁷⁹ 25-I/29-XI-1678, Ciudad Real (Ib., leg. 202, ff. 13r-14r, 110r-vº).

80 Tras la guerra de Sucesión, la pesquisa fulminada contra el corregidor manchego Domingo de Ocejo arrojaba graves acusaciones contra su actuación a la cabeza del gobierno municipal, aunque la residencia realizada meses antes le fue favorable. Sin embargo la Sala de las Mil Quinientas, en 1717, le suspende de empleo y sueldo, sancionándolo con 500 ducados y dictamina que devuelva lo usurpado; condena de inhabilitación profesional que luego aumenta a ocho años. En vista de la severidad de la condena, Ocejo eleva un memorial a los Reales Consejos, lamentándose de ser "agraviado y damnificado en su credito y haciendas", recordando su fidelidad a la causa borbónica mientras fue corregidor de Alicante al comienzo de la contienda sucesoria; 27-IV-1717/20-X-1719, Madrid (AHN. Consejos, leg. 5.938, nº 83).

81 Vid. H. KAMEN, "El establecimiento de los intendentes en la administración española", en *Hispania*, t. 24, nº 95 (1964), pp. 368-395.

82 Ya en la citada década, el corregidor ciudarrealeño se quejaba del intendente por seguir éste la causa criminal contra Manuel Segura Esteban, reo de la jurisdicción ordinaria (AHN. Consejos, Libros Matrícula, 2.683, nº 2, ff. 323vº-344r).

83 El severo informe remitido desde Ciudad Real el 14-III-1785, encabezado por la rúbrica del corregidor don Anastasio Francisco Aguayo y Ordóñez y del cabildo de regidores en pleno, no dejaba lugar a dudas:

"...a ellos no solo se les atribuyen los olocaustos, como unicos dispensadores de todas las gracias y en quien esta cifrado y vinculado el poder y autoridad...siguiendo el propio sistema de ser absoluto en todo el yntendente. Y de estar a toda hora dispuesto para bibrar la cuchilla de su implacable seña contra

la real jurisdiccion ayuntamiento y junta...-consiguiendo-desollar (asi puede llamarse sin temeridad) no solo a los amados vasallos de S. M. de esta Provincia, sino a los de los Pueblos que comprende la Capitania General de Castilla la Nueva contribuyentes al real serbicio de utensilios...si no han de mudarlo a otro Pueblo, se veran en la precision sensible de presentar ante los Reales Pies de V. M. sus dichos officios de rejidor y suplicar a su Soberana Piedad se sirva concedrles su real licencia para retirarse a sus casas y bibir libres de tanta opresion..."

Curándose en salud, el 18-V-1790 el Consejo de Castilla sobresee el caso (AHN. Consejos, leg. 1.290, nº 29, ff. 1r-27r).

84 Doña Teresa de Castilla, arrendadora de la percepción de la Real Renta de Tabaco, sufraga entre 22/31-V-1795 los doce cuartos diarios que costaba el mantenimiento en la galera hermandina de los reos Juan Fernández, Plácido Correa y Manuel Díaz, cómplices del ladrón Tomás Ribilla, encartado por el Santo Tribunal (Ib., leg. 62, nº 4).

85 En junio de 1708 el alcaide hermandino expone ante sus superiores que hacía tres meses que la justicia de Miguelturra le había entregado al reo Pedro García para que lo custodiase en sus mazmorras, al haberse inundado la villa, pero al pasar el tiempo y no serle proporcionados alimentos ni guardas a dicho recluso se consideraba perjudicado, suplicando a los alcaldes que le devolviesen a su jurisdicción por estar saturada la prisión ciudarrealeña. Un mes después aún no habían recogido los alcaldes de Miguelturra al detenido, por lo que los rectores hermandinos dan el plazo de dos dias para que retornase a dicha villa manchega o se desentenderían de él; 14-VI/10-VII- 1708, Ciudad Real (ADPCR, s.c.). Mal debía de estar Miguelturra, cuando su gobernador solicita la exención de tributos a Almagro al permanecer la mayoría de las viviendas anegadas; 11-VIII-1708 (AHN. Consejos, leg. 5.924, nº 26).

⁸⁶ AMCR, Actas Capitulares, leg. 9, f. 648.

⁸⁷ 23-XII-1627 (Ib., leg. 13, f. 48). Meses después el alarife tasaba el presupuesto para la reedificación del inmueble en 4.346 rs (Ib., f. 137).

⁸⁸ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 12.

⁸⁹ AMCR. leg. 24, ff. 1.333-1.334; 25, ff. 248-255; 27, nº 2, f. 49 y 3, ff. 203-204; 29, nº 3, ff. 9-11, respectivamente.

⁹⁰ 19-I-1719, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 14).

⁹¹ 23-IX-1662, Ciudad Real (Ib., leg. 36, nº 2).

⁹² 20/30-III-1679 (Ib., leg. 37, nº 3).

⁹³ Ib., leg 58, nº 19.

⁹⁴ cit. E. AGOSTINI BANÚS, op. cit., pp. 331-332.

⁹⁵ En 1715 se autorizaba a un ministro de Baza a proceder a la captura de unos gitanos protegidos por un fraile y por las autoridades locales, recomendando auxiliarse con las tropas más cercanas para realizar tales diligencias; 16-VII-1715, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 14). Años después la comisión impresa encargada al ministro Bartolomé Molina recomienda que en la persecución de una cuadrilla de castellanos nuevos, y "en caso de hallarse en parajes donde aia tropas militares con la misma venia suplicamos a los señores jenerales coroneles capitanes y demas oficiales les auxilien"; 30-

VIII-1726, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 68, nº 5). En junio de 1743 una carta-orden conminaba a colaborar con los representantes de la entidad apícola al teniente don Domingo Pérez, oficial del regimiento de caballería de Borbón, quien con dos de sus soldados partirán tras unos gitanos por la villa de Daimiel (Ib., leg. 50, nº 4). A fines de 1763 un comisario es acompañado por un cabo y dos soldados en la persecución de unos facinerosos andaluces, resultando muertos dos bandidos en un tiroteo (AHN. Consejos, 3.163, nº 9, s.f.)...

⁹⁶ En 1765 se libran 394 rs. y medio en la conducción de los reos Francisco Navarro y Francisco Segura desde las cárceles de Linares a las de Ciudad Real por parte del comisario Tomás Nuñez y de seis soldados a caballo (AHN. Div. Her., leg. 60, nº 6).

⁹⁷ Cándido Almagro, lebrijano afincado en Fuente el Fresno y trabajador del cáñamo, es condenado a presidio por el Santo Instituto en 1799, más la pena correspondiente a su desertión del regimiento de Jaén; consultada la sentencia interlocutoria en 1800, la Real Chancillería refrenda el fallo hermandino, pero mientras sus cómplices son trasladados de inmediato a su destino, el infortunado ex-soldado logra evadirse junto a otro recluso. Vuelto a capturar meses después, hasta marzo de 1802 no se notifica el envío a por el reo de un cabo y cuatro soldados, quienes tras abonar los derechos devengados lo conducen ante el coronel de su regimiento (Ib., leg. 53. n.º 95).

⁹⁸ S.d-IV-1797, Ciudad Real (Ib., leg. 53, nº 4).

⁹⁹ 5-I-1731, La Haba -Badajoz- (Ib., leg. 47, nº 9).

¹⁰⁰ 1-VIII-1723, Ciudad Real (Ib., leg. 23, nº 78).

¹⁰¹ 20-II-1725 (Ib., leg. 45, nº 14). El valle de Alcudia y las inmediatas estribaciones de Sierra Morena ofrecen parajes propicios tanto para perpetrar robos y asaltos como para amparar partidas de bandoleros, ya que junto a lugares de habitual tránsito de serranos y numerosos cortijos desperdigados por el valle, en las zonas altas abundan las cuevas y abrigos naturales. Precisamente unos despachos secretos pertenecientes a la gobernación de Almodóvar del Campo consignaban la presencia en las inmediaciones de

"Pedro Tirado soldado que ando de galeras estando forzado en ella su padre Juan Tirado eran mesoneros de Socuellamos y las señas deste tal Pedro son un mozo de 24 a 26 años barbilampíño blanco pelo negro corto, alto..."

3-XII-1742, Almodóvar del Campo -Ciudad Real- (AMAC., caja 95, 1742, nº 30).

¹⁰² 12-VIII-1796/26-IV-1797 (AHN. Consejos, leg. 1.757, nº 7).

¹⁰³ 25-XI/17-XII-1802, Jerez de la Frontera (AHN. Div. Her., leg. 54, nº 1).

¹⁰⁴ 10-V-1640, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 170, f, 189r).

¹⁰⁵ 11-XII-1793, Ciudad Real (Ib., leg. 565, ff. 105r-vº).

¹⁰⁶ ADPCR., s.c.

¹⁰⁷ Poco sabemos de dichos efectivos; un oficial inglés de paso por La Mancha escribía en julio de 1774

"Sabido que habia allí -Manzanares- acuarteladas tres compañías de la brigada de los carabineros, resolví detenerme al día siguiente por verlos; esa tropa esta compuesta de doce compañías de cincuenta hombres cada una; los capitanes tienen el título de coronel, los tenientes de capitán, y los abanderados de tenientes, los hombres son extraídos de la Caballería, y en otro tiempo tambien lo eran los caballos, pero hoy los sacan directamente de Andalucia. Noté allí pocas gentes jóvenes, los oficiales bajos tienen mal aspecto...Esta brigada no sale jamás de la provincia de La Mancha, más que en ocasiones particulares, y como hay en ella poca disciplina y subordinación, eso le da un poco el aspecto de milicia burguesa."

W. DALRYMPLE, "Viaje a España y a Portugal", en J. GARCÍA MERCADAL (recop., trad., prol. y not.) *Viajes de extranjeros por España y Portugal. Siglo XVIII*, t. 3, Madrid, 1962, pp. 658-659.

¹⁰⁸ En 1795 nos consta que actuaba en el Viso del Marqués un rondín contra maleantes y contrabandistas (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 564, ff. 122r-122r); en 1696 aparecen escopeteros concejiles en Miguelturra (Ib., leg. 569, ff. 119r-120v^o); y hacia 1797 rondaba por las afueras de Bolaños una escuadra local de dicha formación irregular de paisanos (Ib., leg. 563, ff. 22r-23r).

¹⁰⁹ 6-XII-1797, Ciudad Real (ADPCR, s.c.). No hay que olvidar que el 8-VII-1776 el Consejo de Castilla denegaba la pretensión del cabildo apícola toledano de que en las salidas de la entidad integradas por sus ministros y oficiales de la justicia ordinaria su cuadrillero mayor las capitanease (AHN. Consejos, leg. 3.163, n^o 9, f. 205r).

¹¹⁰ Vid. J. DELEITO Y PIÑUELA, *La mala vida en tiempos de Felipe IV*, (1^a ed., 1950), Madrid, 1787; del mismo autor *Solo Madrid es Corte*, Madrid, 1942; y E. MARTÍNEZ RUIZ, *La seguridad pública...*, op. cit.

¹¹¹ 7/12-VII-1594 (AHN. Div. Her., leg. 27, n^o 9).

112 En la cárcel madrileña los detenidos hubieron de acudir al auxilio arbitrado para los reclusos sin recursos, elevado la petición formal en los siguientes términos:

"M(uy) P(oderoso) S(eñor)
Jayme Zirera y Francisco Medina, presos en esta carzel de Corte por cierta causa criminal que se les ymputa= Dezimos que a muchos dias que estamos presos y somos pobres y pasamos mucha nezesidad por tanto= A V.A. suplicamos mande que se nos socorra con la limosna que por mandado de V.A. se manda dar a los demas probes (sic) presos en que recibiremos merced con justicia pedimos y para ello firma= (rúbricas ilegibles)"

6-XII-1673, Madrid (Ib., leg. 37, nº 1).

113 16-XI-1673/26-IV-1674 (Ib.).

114 2/9-III-1719 (Ib., leg. 43, nº 14). En el libro registro de comisarios ciudarrealeños consta haberse despachado título al referido Joseph de Valencia en la fecha arriba indicada (Ib., leg. 3, nº 15, f. 65vº).

115 Ib., leg. 58, nº 21.

116 7-XII-1742/29-III-1743 (Ib., leg. 50, nº 3).

117 Ib., leg. 61, nº 4.

118 Ib., leg. 61, nº 5.

119 Entre otros, se trata de los convictos Juan de Prado "el Zurdo", Miguel e Isidro Gutiérrez, Alfonso Díaz "Centeno", y Agustín Pardo (Ib., leg. 62, nº 3 y 4).

120 Ib., leg. 58, nº 12.

121 10-II-1721, Sevilla (Ib., leg. 43, nº 6).

122 Los cargos imputados a Andrés Palacios, Pedro Andrés, Gaspar Gonzalo y "La Rabona" eran los de ir

"...amenazando a los ganaderos de la Cavaña Real, que pastan en los pastos de La Serena, valle de Alcudia, y otras partes donde baxan a tener los extremos de invierno, y contra la voluntad de los ravadanes, y en sus atos, y cortos albergues, aposentandose, quitendoles la mejor res, el pan, la sal, y todo genero de mantenimientos..."

30-VIII-1726, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg, 68, nº 5).

123 26-XI-1726, Sevilla (Ib., leg. 46, nº 6).

124 9-XI-1726/30-VI-1727 (AHN. Consejos, leg. 68, nº 5).

125 El propio comisario del Coronil relata así el incidente al ser sorprendido y agredido por unos desconocidos mientras celaba su ganado, oyendo decir a sus espaldas :

"...darle a este perro alcalde de Ciudad Real que con eso agotaremos esta canalla y aviendoles respondido que por Maria Santissima no le acabasen de quitar la vida uno de ellos le tiro dos estocadas de las que cayo al suelo y considerando...que estaba muerto lo dejaron y se fueron llevandose dos pistolas, una escopeta de bara y unas mantas..."

(Ib., s.f.). El caso no es aislado, puespor entonces sabemos que otra cuadrilla de castellanos nuevos habían atacado al también comisario don Antonio Díaz en el camino de Cádiz, robándole más de 100 doblones y siendo rescatado por unos caminantes la justicia ordinaria optó por inhibirse de emprender acción legal o policial alguna al asilarse los gitanos en una ermita; 8-V-1725 (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 78).

126 La minuciosidad de su descripción permite hacernos una idea aproximada de su aspecto y armamento en el momento de su detención:

"...cargados con trabucos pistolas y un trabuco naranjero y otras armas cortas, y el naranjero lo traía un hombre grueso trigüeño claro con sombrero blanco y un capotillo blanquisto como de edad de cincuenta años poco mas o menos recién azeitado (sic)= otro pequeño de cuerpo delgado de buen color poca barba sombrero de a tres picos negro capotillo de paño como de edad de treinta años= otro carilargo blanco pelinegro recién afeitado como de sesenta años= otro picado de viruelas con chupa alistada blanquista como de treinta años en un caballo blanco dando a entender ser escribano..."

Su guía era Diego Pérez "el Tremendo", desterrado de Utrera y del que la justicia ordinaria tenía noticia que vagaba armado por las cercanías de la villa; portaban entre todos un auténtico arsenal entre armamento propio y prestado, llevando en el momento de su detención caballos de su propiedad, prestados y alquilados; 13/23-VII-1726, Utrera (AHN. Consejos, leg. 68, nº 4).

127 26-VI-1727, Sevilla (Ib.). El 11-IX-1727 el Consejo de Castilla dictamina que el teniente de corregidor de Utrera obraba en justicia. Otras referencias documentales relativas al caso en cuestión en AHN. Div. Her., legs. 45, nº 26 y 47, nº 3.

128 9-VII-1728, Ciudad Real (Ib., leg. 46, nº 2).

129 Una trascripción de dicho documento en M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO, *Casuística...*, op. cit., apéndice documental nº 26, pp. 356-358.

130 s.f -siglo XVIII- (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 93).

131 El 27-I-1781 se solicitaba por la Chancillería de Granada la remisión de sus franquizas y mercedes al constatar reiteradamente que

"...atribuyendose sus comisarios facultades que ni le conzedan sus titulos ni dieron a la Hermandad los privilegios de herección y confirmación, se han introducido en mucho pueblos del territorio a tomar conocimiento de causas que no les corresponden vejando los vasallos y usurpando las potestades lexitimas en terminos de provocarlas cada dia nuevas y empeñadas competencias en cuio curso se retarda la administracion de justizia y los reos ven prolongadas las angustias de sus prisiones..."

(Ib., leg. 2, nº 24). Su transcripción completa en M.F. GÓMEZ VOZMEDIANO, *Casuística...*, op. cit., apéndice documental nº 25, pp. 365-367.

¹³² El fundamento jurídico de este principio consistía en que el rey era corregidor y juez ordinario por ley de partida, así la justicia regia era única, a pesar de la compartimentalización y descentralización de los órganos judiciales. Los pleitos que implicaban a pobres, huérfanos, viudas, y menores; los casos de corte; los que suponían un perjuicio o agravio a las autoridades ordinarias; los que manifestaban la negligencia de los magistrados en la administración equitativa de la justicia; los supuestos en los que delinquían poderosos y los alcaldes locales no se atreviesen a enjuiciarlos; o a petición de las partes en conflicto se consideraban susceptibles de ser substanciados directamente por las chancillerías en primera instancia, inhibiendo a los magistrados inferiores locales.

¹³³ 1754-1755 (AHN. Div. Her., leg. 60, nº 3).

¹³⁴ Ib., leg. 58, nº 5.

¹³⁵ 15-III/11-V-1702 (Ib., leg. 40, nº 1).

¹³⁶ 20-XII-1720, Ciudad Real (Ib., leg. 43, nº 12).

137 27-V-1720/25-VI-1721 (Ib., leg. 45, nº 1)

138 27-V-1726/8-I-1727 (Ib., leg. 46, nº 2).

139 3-V-1726/8-I-1727 (Ib., leg. 46, nº 2).

140 Dicha excomunióm comportaba su publicidad, notificandose a los párrocos de la feligresía a la que pertenecían para que la expusiesen en las tablas de excomulgados, siendo leídas los domingos y días festivos, no permitiéndose su presencia en los oficios divinos hasta pronunciase caución juratoria o cualquier otro mandato eclesiástico que la invalidase; 17-VI-1736, Ciudad Real (Ib., leg. 48, nº 10).

141 Su postura no carece de argumentos sólidos, aduciéndose que

"...los alcaldes que nombra el cabildo es por nezesudad pues tienen a su cargo presos de mucho ciudado y de ninguna utilidad como reos de Hermandad y es preciso a el cabildo darle a el alcaide alimento diario como a los presos para lo que no alcanzan oy las cortas rentas, y se estan alimentando los presos y ministros por repartimientos entre los mismos ministros."

4-VI-1737, Ciudad Real (Ib., s.f.).

142 21/27-XII-1737, Granada (Ib., s.f.).

143 Ib., leg. 50, nº 19.

144 Hacían alusión los alcaldes del Crimen al auto acordado de 17-IX-1703 que les capacitaba para entender en primera instancia en todos los casos criminales cometidos en un radio de cinco leguas alrededor de Granada, y que en la práctica hicieron eventualmente extensible a toda su circuncscripción territorial al sur de la línea del Tajo; 26-III-1753, Granada (Ib., leg. 50, nº 19).

¹⁴⁵ Formalmente la jurisdicción eclesiástica era considerada por lo regalistas una deferencia como consecuencia del traspaso o la delegación de la potestad regia a la Iglesia para regir a sus dependientes aforados, en cuanto que conformaban una sociedad perfecta ajena a la potestad terrenal. El derecho canónico, por su parte, se autoproclamaba independiente del poder real, ejerciendo una jurisdicción intrínseca a su calidad intemporal en su territorio, sobre sus propios negocios y en razón de las personas acogidas a su fuero. Cf. E. POSTIGO CASTELLANOS, *Honor y privilegio en la Corona de Castilla. El Consejo de órdenes y los Caballeros de Hábito en el siglo XVII*, Valladolid, 1988, p. 217.

¹⁴⁶ Por ceñirnos al ámbito territorial manchego durante el periodo que nos ocupa, un buen ejemplo de esta descoordinación aún entre los representantes de la justicia eclesiástica se produjo tras la Guerra de Sucesión, cuando con la concordia de 20-III-1720 se solventó la competencia surgida entre los visitadores del Campo de Calatrava y el vicario de su distrito y Ciudad Real (*Órdenes Militares. Acuerdos, consultas y definiciones*, BN, mss. 2692, nº 66, ff. 261r-vº).

¹⁴⁷ AHN. Div. Her., leg. 57, nº 5, 6 y 7.

¹⁴⁸ 16-VI-1715, Baza (Ib., leg. 42, nº 5).

¹⁴⁹ La figura del clérigo bandolero no era una creación literaria, sino una realidad en la Castilla del Antiguo Régimen. He aquí tres ejemplos dieciochescos ocurridos en la comarca manchega: entre los bandoleros perseguidos en 1742 por las justicias de Almodóvar del Campo figura "el fraile de San Juan de Dios", clérigo regular que

cambió su profesión piadosa por una sangrienta carrera delictiva (AMAC. caja 95, 1742, nº 30); en 1782 el vicario ciudarreal de Puertollano, informaba sobre los crímenes perpetrados por un vecino de Puertollano, hacia 1748, secundado en sus fechorías por otro profeso oriundo de Almodóvar del Campo entre 1780-1781, ambas pertenecientes al monasterio sevillano del Espíritu Santo (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 571, ff. 202r-207vº); y unos años después el Arzobispo de Toledo elevaba un memorial al Supremo Consejo dando cuante de que en la villa de Tirteafuera el mercedario descalzo fray Vicente San José había depuesto su hábito y andaba impunemente cargado de armas por la localidad (AHN. Consejos, Libro Matrícula, 2.684, 3, f. 587r).

¹⁵⁰ 21-XI-1711, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 230, ff. 283r-284r).

¹⁵¹ 11-V-1723, Almagro (AHN. Div. Her., leg. 45, nº 9).

¹⁵² 3-VIII-1745, Granada (Ib., leg. 51, nº 16).

¹⁵³ Vid. J. MALDONADO, "Líneas de influencia canónica en la historia del proceso español", en *AHDE*, nº 23 (1953), pp. 467-493; del mismo autor, "Los recursos de fuerza en España", en *AHDE*, 24 (1954), pp. 281-381.

¹⁵⁴ Sobre este aspecto remitimos al lector, entre otras, a las siguientes obras: J. BERNI Y CATALÀ, op. cit., p. 65; J. CASTILLO DE BOVADILLA, op. cit., t. 2, p. 503-635; F. A. ELIZONDO Y ÁLVAREZ, op. cit., pp. 282-285; Nov. R., op. cit., pp. 22-30 y 205-221; A. SALGADO CORREA, op. cit., ff. 15vº-16r; L. SANTILLANA BUSTILLO, op. cit., pp. 151-152; A. VILLADIEGO VASCUÑANA Y MONTOLLA, op. cit., pp. 81-89.

¹⁵⁵ 28-XI-1709, Urda -Toledo- (AHN. Div. Her., leg. 41, nº 9),

¹⁵⁶ Ib., leg. 27, nº 9.

¹⁵⁷ Evadidos unos reclusos del penal de Puerto Real en octubre de 1741, al día siguiente se localizaba a Miguel Buitrago en el pórtico de la parroquia de San Sebastián, quien queda bajo la custodia de un centinela, mientras el ministro superior suplicaba al vicario local su entrega; el juez eclesiástico le remite a la audiencia episcopal gaditana, dictaminándose en última instancia que por haberse fugado de las Minas de Almadén, y ser por lo tanto un esclavo real prófugo, no debía de gozar de la inmunidad local (Ib., leg. 50, nº 2).

¹⁵⁸ 7-XI-1680, Ciudad Real (Ib., leg. 37, nº 4); 14-IX-1681, Carrión de Calatrava (Ib., leg. 37, nº 5); 22-I-1722, Calatrava la Nueva (Ib., leg. 45, nº 5); 5-VII-1752, Miguelturra (Ib., leg. 50, nº 17).

¹⁵⁹ 29-X-1705, Valdefuentes (Ib., leg. 40, nº 2); 30-XI-1705, Baeza (Ib., leg. 40, nº 3).

¹⁶⁰ 30-IX-1742, Herencia (Ib., leg. 51, nº 16).

¹⁶¹ 18/28-IV-1711 (Ib., leg. 41, nº 12). Un caso similar aconteció en Castuera -Babajoz- en 1732 (Ib., leg. 48, nº 3 y 5).

¹⁶² 29-XII-1718, El Almendro (Ib., leg. 43, nº 3); 3-VI-1717, Villacañas (Ib., leg. 43, nº 1); 22-VIII-1720, Villamayor (Ib., leg. 44, nº 3).

¹⁶³ 22-I-1717, Madrid (Ib., leg. 43, nº 1).

¹⁶⁴ Ib., legs. 40, nº 1; 41, nº 14; 45, nº 5; 47, nº 10...

¹⁶⁵ Carlos V solicitó a la Mitra toledana que nombrase en Ciudad Real a un vicario eclesiástico con la única condición de que no perteneciese a la Orden de Calatrava. Carlos II aumentó su autoridad, pese a las continuas colisiones habidas con el corregimiento local. Durante la Edad Moderna, este vicario fué el clérigo económicamente más poderoso de la ciudad y de su partido; L. DELGADO MERCHÁN, op. cit., pp. 330-331, cf. F. PILLET CAPDEPONS, *Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980)*, Madrid, 1984, p. 27.

¹⁶⁶ AHN. Div. Her., leg. 43, nº 9.

¹⁶⁷ 17/18-XI-1721 (Ib., leg. 44, nº 9).

¹⁶⁸ 25-X-1683/18-I-1686 (AHPCR. Protocolos Notariales, legs. 199, ff. 62r-vº y 205, ff. 9r-vº).

¹⁶⁹ 5-II-1684/6-II-1688 (Ib., legs. 204, ff. 125r-126r y 6r-7r; 205, ff. 125r-vº).

¹⁷⁰ Ib., legs. 205, ff. 63r-vº; 208, ff. 18r-vº, 59r-60r, 62r-vº, 72r-vº, 82r-83vº, 93r-vº y 101r-vº.

¹⁷¹ Ib., leg. 58, nº 26. En el Consejo de Castilla se había emitido sentencia en grado de vista que dictaminaba que los forzados eran levos y por lo tanto profana la causa pendiente, no debiéndose por lo tanto entrometer el juez eclesiástico en el proceso; con dicho

dictamen los alcaldes hermandinos apelaron a la audiencia toledana, llevándose el recurso a Granada, donde se ordenó el levantamiento de censuras y excomuniones impuestas a los magistrados legos en el plazo de 80 días; 13-VIII-1727, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 47, nº 13).

¹⁷² Ib., leg. 50, nº 2.

¹⁷³ 7-XII-1737, Buen Retiro (AHN. Consejos, lib. 1.437, nº 34 bis).

¹⁷⁴ vid apéndice documental, texto nº 26

¹⁷⁵ 29-IV-1708, Ciudad Real (Ib., leg. 39, nº 7).

¹⁷⁶ Los efectos aprehendidos consisten en una piedra imán, otra de toque, polvos de acero, granos de helecho, un cabo de vela, polvos de colores, habas, pedazos de calaveras y huesos; 1-IX-1716, Teba (AHN. Consejos, leg. 115, nº 2, f. 2 y AHN. Div. Her., leg. 42, nº 12, s.f.). Tal vez se trate de Francisca Gabriela de la Mata, hechicera granadina procesada sucesivamente por el Santo Oficio de Córdoba en 1745, cuando contaba 74 años de edad, y en 1747 por el de Granada; cf. AHN. Inquisición Córdoba, "Alegaciones Fiscales", leg. 3.729, nº 19, cit. M. H. SÁNCHEZ ORTEGA, *La Inquisición y los gitanos*, Madrid, 1988, pp. 289-290, 427 y 435.

¹⁷⁷ 18-XI-1716, Antequera (AHN. Div. Her., leg. 42, nº 12).

¹⁷⁸ Real Provisión, 5-V-1715, Aranjuez; ley 12, tit. 35, lib. 12, Nov. R., op. cit., p. 488.

¹⁷⁹ 29-XII-1716, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 42, nº 12).

- 180 17-II-1717, Antequera (AHN. Consejos, leg. 115, nº 2, s.f.).
- 181 6-IV/23-VI-1717, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 42, nº 14).
- 182 Dichos evadidos eran Jerónimo, Agustina y Pedro González, Pablo Joseph Chacón, Antonio Merino, Juan Antonio Rodríguez, Andrés Farfán, Juan Martín, etc; 20-V-1717, Antequera (Ib., leg. 42, nº 16).
- 183 19-X-1720, Ronda (Ib., leg. 42, nº 16).
- 184 17-VII/17-VIII-1722 (AHN: Consejos, leg. 115, nº 2).
- 185 18-X-1723, Grazalema (Ib.).
- 186 Ib., leg. 45, nº 26.
- 187 "...en los pueblos quitan las capas a los que van por las calles, escalan los templos y las casas y en la ciudad de Aljama haze ni siete días que escalaron un templo y rompieron el sagrario se llevaron el Copon con las formas consagradas haviendo cortado las manos a una imagen de Nuestra Señora para llevarse las sortijas que tenia en ellas sin que por ningun ministro deste tribunal nos atrevamos a salir a buscar a estos ladrones...y aunque se recurra a esta chancilleria -de Granada- no se provee el remedio conducente por quanto los dichos jueces ordinarios llevados del odio que tienen a los ministros de ese tribunal les sacaron causas a medida de sus deseos con poco temos a Dios y en vista de sus informaciones proveen los señores de esta chancilleria..."
- 8-V-1725, Antequera (AHN. Div. Her., leg. 23, nº 78, f. 3r).
- 188 "Una bolsa de vaieta encarnada como de terzia de largo y dentro unos pedazos de el enrrollados y aviendo registrado uno se hallo seis pedazos de piedra que llaman iman y dichos pedazos cubiertos y poblados de limaduras al parezer de azero y asimismo en dicho bolso se allo liado en un trapo de los referidos cuatro

granos como de semilla negros y uno blanco y dos cuentas coloradas -de coral-..."

(AHN. Consejos, leg. 115, nº 2, f. 1vº-2r).

189 El viajero anglicano G. BORROW escribía, mediado el siglo XIX:

"Si los gitanos sienten apego por alguna superstición, sin duda, por la que concierne a esta piedra -imán-, a la que atribuyen toda suerte de poderes milagrosos..., los contrabandistas gitanos ansían procurarse esa piedra y la llevan consigo en sus expediciones; dicen que en el caso de ser perseguidos por los... aduaneros se levantarán nubes de polvo que los esconderán de la vista de sus enemigos."

Cf. *Los zíncali. Los gitanos en España*, (4º ed. Londres, 1846), Madrid, 1979, p. 167, cit. M. H. SÁNCHEZ ORTEGA, *La Inquisición...*, op. cit., p. 261.

190 En similares términos se expresa el boticario de la calle de la Cárcel, colación del Sagrario, sosteniendo respecto a los imanes que:

"...algunos autores dicen aprovechan para el mal de madre y dolor de ijada y en quanto los granos que estan en el trapillo los quatro son asimismo de peonia que aprovechan para efectos epilepticos mal de corazon y un grano blanco es mijo de sol que su efecto es sudor frio y para calenturas diarias y yntermitentes= y los otros granos son de coral que aprovechan para cursar y a instringir influjos de sangre= y dichas piedras y granos son seguros para si aplicacion no prozediendo algun pacto o oraciones como por practica se save que jitanos y malas mujeres lo ejecutan lo que no es permitido que se de en mi botiquin a jente sospechosa por saber buscar los jeneros referidos para los embustes..."

En dicho peritaje dejaba, pues, la puerta abierta a interpretaciones maléficas de algunos de los objetos requisados (AHN. Consejos, leg. 115, nº 2, ff. 23vº-24r).

191 Las tropelías imputadas a dichas gitanas no terminan aquí, al manifestar que en octubre del citado año

"...junto con dos ybreos (sic) penitenciados en cierta cantidad de dinero sacarles de la yglesia y parrochia de la Milagrosa Ymagen de Nuestra Señora de las Angustias de dicha ciudad una

forma consagrada lo que en efecto puso en execucion por medio de una hija suia, quien haviendo llegado a la varandilla del sagrario de una iglesia recibio la forma en la boca de donde se la saco y encubrio en un cavo de la mantilla cuiá ocasion permitio Dios viese uno de los que se hallaban en dicha yglesia, que dio cuenta a los eclesiasticos de ella, los que en la puerta aprendieron a dicha jitana y la forma consagrada de los cabos de la mantilla y presa se justifico el sacrilegio."

(Ib., s.f.).

192 Declara Francisco Antonio Guerrero, vecino de Archidona, que:

"...en presencia de diferentes testigos a el que propone que con la tercera parte -de- dicha cantidad havia de conseguir su pretension en esta corte por lo que no se le debe dar credito alguno..."

(Ib., s.f.).

193 Asegura, en los autos procesales instruidos sobre el justicia, que

"...habiendo tomado la vara el sabado Santo de este presente año el Domingo de Pasqua siguiente en la plaza publica de dicha villa pusieron una estatua de un hombre cojo con un peluquin y ridiculamente vestido que imitaba en todo dicho corregidor porque quantos lo veian lo tuvieron y despues de haverse mofado le pegaron fuego a vista de el pueblo..."

1-XII-1727, Madrid (Ib., s.f.).

194 25-X-1728, Granada (Ib., s.f.).

195 16-XI-1728, Granada (Ib., s.f.).

196 23-V-1733, Madrid (Ib., s.f.).

9. APROXIMACIÓN A LA CRIMINALIDAD RURAL DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII.

9.1. ACTOS DELICTIVOS.

Lejos de la imagen tópica de un medio rural tranquilo, presidido por la apatía y la indolencia de sus moradores, en contraste con el medio urbano activo, dinámico e incluso agitado, la realidad cotidiana de las áreas alejadas de los grandes focos político-económicos de la época se caracteriza durante el Antiguo Régimen por una movilidad socioeconómica notable, en ocasiones convulsa, que eventualmente puede derivar en un aumento de los niveles de violencia, por otro lado siempre latentes. En efecto, abundan en pueblos y aldeas los antagonismos personales o familiares suscitados por motivos afectivos o económicos como amores frustrados, relaciones sexuales ilegítimas, hurtos de forraje o grano, problemas de pastos, litigios por lindes, robos de frutas u hortalizas, apropiación indebida de ganado perdido, arrendamientos controvertidos y una infinidad de desavenencias menores que tan pronto se dirimen mediante pleitos civiles, como en acuerdos extrajudiciales o terminan en reyertas y agresiones de todo tipo y dispar alcance.

Junto a esta soterrada conflictividad, la violencia simple -peleas, alborotos, injurias-, arranca de las mismas circunstancias en el medio rural que en la ciudad: pendencias suscitadas por el juego, borracheras en mesones y posadas, riñas por prostitutas y adúlteras, animadversión entre parroquias, blasfemias de camorristas, riñas entre rufianes, taberneros estafadores, entre otros. A los hábitos de

violencia endógenos, producto de la miseria, de la malicia, de la rigidez estamental o del culto al valor y a la hombría, caben añadir factores exógenos que alimentan desórdenes puntuales: soldados en tránsito que se dan a excesos, forasteros que concurren a ferias y mercados estafando al vecindario, mendigos itinerantes que cometen pequeños hurtos, cuadrillas de gitanos que amedrentan a los aldeanos, vecinos que abandonan su entorno social para exonerarse de quintas y levass, abusos por parte de recaudadores o señores locales, etc.

Por lo que respecta a la criminalidad específicamente combatida por la Santa Hermandad, por cuestiones meramente metodológicas hemos de diferenciar entre los delitos propiamente dichos y las conductas penadas por ley; distinguiendo entre los primeros las transgresiones contra las personas y contra las cosas. A esta delincuencia hay que sumar el apercibimiento, la multa y la retirada de sus títulos de cuadrillería a sus propios dependientes en razón de las irregularidades perpetradas durante el desempeño de su ministerio o producto de sus acciones en la vida cotidiana. Las violencias contra los individuos incluyen agresiones en descampado como asaltos en caminos o montes, muertes o heridas en el yermo, vejaciones sexuales, resistencias a justicias y raptos.

Una de las vulneraciones de la seguridad pública típicamente rural, y más llamativa tanto para los coetáneos como en épocas posteriores, fue el fenómeno del bandolerismo endémico que afectaba a amplias regiones peninsulares desde tiempos remotos hasta entrado el siglo XX. Durante los siglos XVII y XVIII prácticamente toda la mitad meridional española se ve aquejada por la proliferación de partidas armadas compuesta por paisanos de diversa extracción social, en las cuales aunque se hacen destacar la presencia de moriscos, gitanos o esclavos,

se hallan mayoritariamente integradas por cristianos viejos, que asolan comarcas enteras. Desde su época fundacional tales bandas fueron objeto de la activa represión legal y policial, siendo precisamente en esa esfera coercitiva ejecutiva donde entró en juego la Hermandad Vieja de Ciudad Real: en 1643 los alcaldes hermandinos, a la cabeza de setenta y ocho jinetes, persiguen durante diez días a una cuadrilla de treinta y seis bandidos¹; y en 1667 el Santo Instituto movilizaba a no menos de cuarenta y siete personas para lanzarse en persecución de unos salteadores de caminos por las dehesas de Guadalerza², en 1743 don Juan Velarde comandaba una nutrida salida tras los pasos de la banda del "Manco de Arévalo"³.

El terreno montuoso ofrecía una cobertura ideal para este tipo de delincuencia marginal de tipo económico y que se amparaba en la fragosidad del yermo para perpetrar sus desafueros contra mercaderes, arrieros, serranos y viandantes de todo tipo que transitaban por caminos y cañadas. En el área que nos ocupa, particularmente azotadas por el bandidaje fueron las serranías de Ronda, Madrona, Segura, Alcaraz, Sierra Morena, Montes de Toledo y el valle del Guadalquivir, así como los despoblados luego empezados a colonizar en el reinado de Carlos III.

Frente a esta inseguridad de los caminos, los viajeros y trajinantes se juntan en comitivas con el objetivo de persuadir a los asaltantes para que se alejasen de su paso⁴. Pero a menudo tales intentos resultan vanos; un día de primavera de 1708, a las ocho de la mañana, cuatro salteadores de caminos maniataban a diecisiete hombres que transitaban por el camino de Abenójar a Extremadura, en su mayoría arrieros, comerciantes o carreteros e incluso el juez comisario de Saceruela, sustrayéndoles cuanto llevaban, no pudiendo ser hallados

los asaltantes pese a los denodados esfuerzos arbitrados a posteriori por todo el Campo de Calatrava⁵.

Entre 1650 y 1655 actuaban en Sierra Madrona y el cercano valle de Alcudía una partida de bandoleros integrada, entre otros, por Francisco "el Fiero", Juan de Salcedo "el Alférez", Alonso Rodríguez "el Arcabucero", Domingo Hernández, Jerónimo Fernández "el Cerrajero", Jerónimo Cervantes y Diego Ruiz, protagonizando multitud de desmanes. En diciembre de 1650 atracan al correo de Andalucía, sustrayéndole más de tres mil reales; en 1651 en el paraje del Horcajo -Sierra Morena- asaltaron a plena luz del día a tres mercaderes y a un platero cordobés, llevándose un botín de más de seis mil reales e hiriendo mortalmente al feriante andaluz⁶, etc.; los delitos imputados a esta cuadrilla únicamente en 1654 fueron impresionantes: en mayo robaron a dos vecinos de Pozoblanco en el puerto de la Matanza, en julio y en el citado lugar sorprendieron a unos arrieros de Bujalance, a quienes

"...los sacaron del camino de noche y les ataron sus verguenzas y teniendoselas asidas sacaron un puñal y les dijeron teniendole alzado o darnos la bolsa o cayra el cuchillo para cortar las bolitas..."⁷

A principios de agosto despojan de sus pertenencias a unos trajinantes que conducían unos mulos a Sevilla; a fines del mismo mes interceptan el correo de la estafeta ente la Corte y Sevilla; y en septiembre acometen a un mercader ciudarrealeño llevándose más de cuatro mil reales en oro y plata. Cuando entre 1655 y 1669 sean capturados algunos de los implicados en tales crímenes, su destino sería la pena capital⁸.

No corre mejor suerte el caballerizo del duque de Béjar en 1711, al resultar malparado en el encuentro con unos bandidos en el puerto de

las Tres Ventas, en el valle de Alcudia⁹. La experiencia nos muestra que la calidad del damnificado suele avivar el celo de los tribunales para intentar resolver el caso y castigar a los culpables; en 1692 la corte de justicia hermandina procedía contra Felipe de Morales, su mujer María de León, Mateo Sánchez y Juan García Trujillo -vecinos de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)- por la muerte alevosa en plena Sierra Morena de don Antonio Sosa con una expeditividad encomiable¹⁰; también por entonces, al ser asesinado don Alonso de Aguayo y Aguilar -regidor de Montilla, juez de campo y familiar del Santo Oficio de Córdoba- concurren al esclarecimiento de los hechos los alcaldes hermandinos y el mismo corregidor manchego como juez pesquisidor designado por el Consejo de Castilla¹¹.

Los momentos álgidos en los que proliferan dichas cuadrillas armadas de forajidos abarcan cronológicamente desde 1640 a 1720, manteniéndose durante todo el Setecientos el bandolerismo endémico de buena parte de Andalucía, Murcia, Extremadura y La Mancha. Pero los homicidios no son únicamente cometidos por estos delincuentes comunes con ánimo de robar o de extorsionar, sino que también existen casos, algunos dramáticos, como el protagonizado por un padre y su reciente nueva esposa que presumiblemente mataron al hijo del primero, tal vez por no aceptar de buena gana las segundas nupcias de su progenitor, desviando la atención de las justicias a un cabrero portugués que se hallaba a su servicio y que permanecía en paradero desconocido; resultando indiciada tras las primeras indagaciones su propia madrastra, es apresada cuando intentaba refugiarse en la casa de un sacerdote¹².

A pesar de la existencia de casos semejantes, muertes y heridas en despoblado son mayoritariamente perpetradas con el ánimo de robar o de

vengarse de determinadas ofensas personales o patrimoniales, ofensas típicamente rurales motivadas por pastoreo ilegal, hurtos de leña o mieses, problemas de mojones, reclamaciones insatisfechas o derechos supuestamente alienados, malentendidos, etc. Estos delitos menores parecen caer dentro de la órbita hermandina particularmente durante los siglos XVI y XVII, centrándose durante el Setecientos en la erradicación del bandidaje y en el control o eventual represión de la minoría gitana.

Entre 1599 y 1605 se dilucidaba en el Santo tribunal el pleito suscitado por la querella interpuesta por unos vecinos de Malagón -Ciudad Real-, que yendo en un carro pernoctaron en un cortijo de las afueras de Herencia, y desoyendo el hijo del dueño a su padre de que tenían licencia para hacerlo, no duda en injuriarlos, llamándolos ladrones, amenazando con matar las mulas que llevaban uncidas al carro y llegando en el calor de la pendencia a herir a uno de los transeúntes¹³. En 1602, estando pastando dos mulas en el sembrado de un labrador de Argamasilla de Alba, el agraviado secuestra la yunta en su casa de campo hasta que el dueño de las bestias le pagase los daños ocasionados; de inmediato acude el criado para retirar los caballerías pretendiendo dejar en prenda un capotillo hasta que fuesen satisfechos los daños causados, pero ante la negativa del querellante a transigir en esta composición Francisco de la Orden acude a por sus pertenencias disparando su escopeta, apedreando la quintería y golpeando al captor de su yunta, denunciando luego el agraviado el caso ante los alcaldes de la Hermandad Vieja manchega¹⁴.

En 1603 se querella Alonso García de un convecino de Porzuna -Ciudad Real- porque el día anterior había traspasado los mojones de su huerta al arar junto a la cerca que separaba ambas propiedades,

estando escriturado que no podía roturarse en diez pasos alrededor de la linde; con motivo de esta irregularidad es maltratado por el acusado, hiriéndole con un palo en la cabeza y presumiendo que le hubiese matado de no ser por la intercesión en la pendencia de unos paisanos que se encontraban en las inmediaciones; este caso se substanció en el tiempo record de nueve días, condenándose al infractor a un año de destierro de la villa a cumplir en cuanto lo dispusiesen los alcaldes instructores, al pago de quinientos maravedís de pena de cámara y de un puñado de reales en concepto de gastos judiciales y obras pías¹⁵. En mayo de 1607 son encartados unos vecinos de Carrión por hurtar unas gavillas de sarmientos de un pago ajeno en el término de Torralba; su propietario, un hacendado agricultor almagreño, había enviado a sus criados de labor para recogerlas cuando los acusados los apedrearon, con el consiguiente malestar del dueño del viñedo¹⁶.

La resistencia a la justicia era más un agravante que suele concurrir en las prisiones de los reos perseguidos por los ministros hermandinos que un delito en sí mismo¹⁷, pudiendo degenerar por otra parte ocasionalmente en la muerte del sospechoso o de sus perseguidores. A mediados del Setecientos el ladrón Manuel Monleón, al resistirse a su prendimiento por parte de los comisarios del Santo Tribunal, resulta herido en un pie al escaparse un tiro, lo que a la postre motivaría la "corrupcion de guesos por lo que por su temeridad no permitiendo la formal curazion perdio la vida", probablemente victima de la cangrena¹⁸. Por ese fechas, los hermanos almagreños Joseph y Domingo Farras -salteadores de caminos que actuaban en el valle de Alcudia-, desacatan las advertencias de los comisarios que les acosaban, dándole una puñalada a uno de los ministros que les intentaban detener, huyendo luego al convento de carmelitas de la

capital manchega¹⁹. Arrestados Manuel y Simón de Pisa en Bolaños por hurtar paños de un batán del Guadiana, su remisión a Ciudad Real quedaría frustrada porque, estando retenidos en el aposento de una casa particular de dicha villa, se disparó accidentalmente el arma de uno de los paisanos que les custodiaban, matando a uno de los guardas, por lo que al volver los cuadrilleros a por los reos hallan la casa desierta al huir los colaboradores por miedo a las represalias derivadas del desgraciado infortunio²⁰.

Distinta consideración penal tenían los delitos sexuales, a saber: amancebamientos, estupro de doncellas, violación de mujeres honestas, y raptos de mujeres. En el mundo rural, donde eran aparentemente más rígidas las conductas interpersonales y más acusado el puritanismo sexual, siendo la honra una de las cualidades mejor guardadas por sus poseedores, no podían quedar impunes los abusos de tipo sexual, a pesar de que eventualmente algunos de ellos fuesen encubiertos por temor a la vergüenza pública, solventados mediante componendas económicas o compromisos matrimoniales. En la práctica forense ciudarrealeña es ciertamente bajo el volumen de este tipo de delitos en términos absolutos y aún más en términos relativos si lo comparamos con los substanciados ante los magistrados locales de primera y de segunda instancia -auténticos garantes del buen nombre y de la honorabilidad de sus convecinos-. Así, en 1632 Isabel González, madre de Águeda, se apartaba de la querella interpuesta por el estupro de su hijo supuestamente cometido por Pedro Díaz Romo, vecino de Madridejos -Toledo-, en el camino de Miguelturra²¹.

Por norma, los comisarios hermandinos se mostraban reacios a entender de tales casos no por considerarlos impropios de su ministerio, sino porque a menudo terminaban con apartamientos de la

parte querellante, considerándolos tan indemostrables como fáciles de solventar mediante una boda precipitada, si se trata de involucrar a jóvenes solteras o viudas. Hacia 1728 la justicia ordinaria de Gabaldón procedía contra Alonso Picazo por estupro y evasión de la cárcel local con la ayuda de dos amigos; requerido un juez comisario de la cercana población de Villagarcía para que saliese en su busca, el representante de la corporación manchega se niega a cumplir este mandato de los alcaldes ordinarios, siendo embargado y despojado de sus armas por los alguaciles concejiles, elevando sus quejas ante el Supremo Consejo al no ceder en sus posiciones ninguna de las partes²². En este sentido son igualmente remisos los dependientes hermandinos a intervenir en raptos de doncellas o casadas, sabedores que en tales actos desesperados solía subyacer la anuencia de la secuestrada con su captor, recurriendo a este subterfugio galanes y supuestas raptadas para huir de unos familiares que se oponían a una boda pretendidamente desventajosa o para escapar de los malos tratos de maridos celosos; en ambos casos la apariencia de rapto escondía la huida concertada de un ambiente opresivo por parte de unas mujeres legal y socialmente minusvaloradas, quedando íntegro el honor de la familia agraviada.

Algunos forajidos se hacen acompañar en sus correrías por sus amantes. En 1610 era prendida Ana Morente, quien convivía desde hacía años con el bandido Jerónimo de Cuéllar; encarcelada por orden del Santo Instituto y trasladada a su audiencia, es apercibida por los magistrados para que dicha viuda abandonase tan malas compañías y no vuelva a amancebarse so pena de veinte azotes, dándose por suficiente el mes que había permanecido privada de libertad, no siendo condenada a costas en atención a su notoria pobreza²³. Hacia 1708, en Arenas de San Juan -Ciudad Real-, denunciaba un mayoral la presencia en las cercanías de la villa de un grupo de soldados a caballo cometiendo

algunas fechorías sobre rebaños y gañanes; tras algunas vicisitudes se logra la captura de dos soldados, huyendo un tercero junto a una mujer a la casa de un trinitario descalzo que ejercía como párroco en la localidad; extraídos los asilados de la quintería propiedad de los jesuitas en las afueras de Arenas, declara la detenida que ante los reiterados malos tratos de su marido había se había fugado con uno de los militares aprehendidos, llevando vida marital con él desde hacía meses; en atención a que llevada consigo dos niñas de corta edad se permite que su retención se hiciese en la parroquia local por parte de los comisarios que los habían capturado²⁴.

Por lo que respecta a las fuerzas contra las cosas el abanico de causas seguidas por el santo Tribunal es amplísimo: hurto o robo²⁵ de bienes muebles, a menudo semovientes; daños a montes y colmenares; quebrantamiento de viviendas, iglesias, ermitas, casa de labor, batanes, molinos, etc. El móvil de conseguir por cualquier medio pertenencias ajenas es sin duda el motor de la inmensa mayoría de los desafueros investigados por los dependientes manchegos, aunque ocasionalmente la venganza sería el fulminante que desatase esporádicos brotes de violencia, no impulsados por el afán desmedido de lucro, sino por el odio personal o familiar. En 1675 es inculpado un guarda de viñas gallego de la desaparición de ropa de un cortijo del caballero ciudarrealeño don Cristóbal Muñoz Treviño -miembro preeminente del Santo Instituto local y del ayuntamiento manchego-; tres de sus sirvientes y un cuarto criado portugués al servicio de don Antonio Velarde Ceballos testifican en su contra, mientras que el acusado asegura haber encontrado la ropa envuelta en un atillo bajo una cepa, defendiéndose de las acusaciones veladas de los testigos de cargo alegando estar enemistad con ellos desde antiguo, al ser presionado infructuosamente para que dejase el servicio de su señor;

aunque los alcaldes hermandinos declaran nulos los cargos derivados de los testimonios de tales lacayos y del propio robado, la sentencia será condenatoria, desterrándose el reo de la ciudad por espacio de dos años a cumplir cuarenta y ocho horas después de emitirse y serle comunicado el fallo²⁶.

Efectivamente, los delitos contra la propiedad son, con diferencia, la mayor parte de las infracciones perseguidas por los cuadrilleros. En las áreas rurales donde suelen desarrollar su ministerio es relativamente frecuente, que no generalizado, el robo de mieses, de cargas de vino, aceite o grano; la desaparición de aperos de labranza, paños de los batanes, ropas, mantas, dinero, pequeñas joyas, efectos personales, armas de fuego, aparejos de caballerías, yuntas de bueyes; el extravío de cabalgaduras, de cabezas de ganado ovino, caprino, vacuno o porcino; el hurto de miel y cera, la desaparición de corchos y los daños a enjambres; menudeando los ladrones de uva, aceituna, fruta, hortalizas y las extracciones ilegales de leña durante los largos inviernos. La Santa Hermandad Vieja encausará tanto a quienes perpetran tales infracciones, como quiénes encubren u ocultan lo sustraído, amparan a los culpables, quienes receptan o venden objetos de procedencia dudosa, en suma, los que actúan contra las normas consuetudinarias o legales establecidas, conculcando derechos amparados por la ley natural y humana, contra los marginados y contra subvertidores el orden consagrado.

Merecen una particular atención, por su propia especificidad, el esclarecimiento y castigo contra los incendiarios y taladores de montes en tanto que agresores voluntarios o involuntarios de las explotaciones apícolas del área afectada por sus desmanes. Normalmente los sospechosos o autores materiales de fuegos y desmontes suelen ser

carboneros, piconeros, pastores, cazadores, pequeños labradores, sirvientes agrícolas, braceros, miembros del pequeño artesanado local, etc, siendo sus móviles más frecuentes las disensiones en el seno de la comunidad campesina -enemistades suscitadas por la posesión controvertida de una tierra, arriendos incobrados o testamentos incumplidos, conflictos con los miembros de la justicia ordinaria, defensa ante las alimañas que infestan los montes, extensión desarreglada de cultivos o pastos en detrimento de las tierras yermas, malentendidos entre los jornaleros o sus sirvientes con los hacendados lugareños, necesidad de disponer de leña para la construcción o de combustible vegetal para afrontar el invierno, etc-.

El recurso a la amenaza del incendio puede considerarse un medio de presión económica, e incluso una forma de chantaje; cuando los braceros o los zagales dejan de trabajar quedan a menudo sumidos en la indigencia tras los periodos estacionales en los que abundan las faenas agropecuaria, y ante la inexistencia de resortes internos que compensasen este estado carencial, algunos desocupados se valen este medio para exigir insolentemente pan o dinero, provocando ocasionalmente incendios en montes y barbechos²⁷. A pesar de constatarse este hecho, tampoco hay que perder de vista que la mayoría de los fuegos y mondas de árboles son hechos por sus propios propietarios al ver amenazados sus bienes de la rapiña de las alimañas, o que intentan extender sus propiedades útiles a costa de los espacios improductivos. Los nuevos dueños territoriales quieren disfrutar plenamente de sus posesiones sin cortapisa alguna, mientras que pirómanos y leñadores clandestinos se resisten a verse despojados de unos derechos que por tradicionales considera inalienables, a veces surgiendo colisiones entre compradores forasteros y los antiguos usufructuarios de la tierra, secundados explícitamente por apoyos

locales de diverso signo frente a los derechos esgrimidos por propietarios foráneos o caciques comarcanos. Tampoco faltan los incendios y desmontes auspiciados desde los concejos ante el aumento de la demanda de tierras cultivables, de nuevos pastos para el ganado, o del autoabastecimiento de leña o carbón, al depender estrechamente las economías aldeaniegas durante el Antiguo Régimen de las explotaciones autárquicas extensivas antes que intensivas. A este respecto, durante el periodo que nos ocupa, no es una coincidencia que el mayor índice de incendios y daños a colmenas tuviese lugar en el triángulo conformado en sus vértices por las villas de Malagón, Piedrabuena y Alcolea, territorio por el que se extiende el escaso señorío solariego laico manchego²⁸ y en donde es perceptible un intenso movimiento de enajenaciones patrimoniales.

El allanamiento de casas, batanes, molinos, cortijos y recintos sagrados, generalmente para perpetrar algún daño a la propiedad ajena o para conseguir la apropiación indebida sobre algún bien, actúa como circunstancia modificativa de la responsabilidad, agravando la calificación del delito. El concepto de "quebrantamiento", en su sentido extenso, comprende toda entrada ilegal en un inmueble; esta ilegitimidad en la entrada domiciliaria derivaba de su comisión contra la voluntad del dueño, o bien porque el sujeto que se adentrase en propiedad ajena albergara intenciones nocivas contra la vida o pertenencias de sus moradores²⁹.

Aunque son relativamente frecuentes los allanamientos de viviendas en poblado o en inmuebles donde tenían lugar actividades económicas típicamente rurales, aún más reiteradas son las violencias contra las casas de labor campesinas, casi siempre para sustraer reses, mieses o robar a sus habitantes, amparándose en el descampado circundante y la

certidumbre en la falta de resistencia; por lo común cuando atacan quinterías y cortijos habitados suelen maniatar a los guardeses o a sus propios dueños para perpetrar con mayor comodidad sus raterías, aunque desgraciadamente tampoco escasean los casos de violencia gratuita en determinados asaltos -bien por venganza, para atemorizar a sus víctimas e impedir su persecución o retrasar la denuncia, bien por reprimir por la fuerza alguna resistencia-; he aquí dos ejemplos dieciochescos dispares de lo expuesto: hacia 1764 Manuel López, Juan Francisco Félix "Eras", Cristóbal Huerta y Francisco "Rufián", sustraen de la casa de Pedro Rodríguez, en Llerena, una cantidad imprecisa de dinero en monedas de oro y plata atesoradas por la familia, y aprovechándose de la facilidad con que se desarrollaba su plan, logran llevarse parte del grano almacenado en la cámara, sin herir a ninguno de los presentes; en cambio en marzo de 1765 penetraban en un cortijo daimieleño cuatro hombres a caballo disparando sus escopetas, matando a un bracero y ahorcando a otro que esbozó un mínimo intento de resistencia, todo para terminar llevándose cinco mulas de labor³⁰.

Especial atención nos merece el robo en templos y ermitas, perpetrados normalmente por personas con escasos escrúpulos religiosos y que a cambio de obtener un valioso botín -por otra parte con problemas para ser enajenado a no ser que fundiesen los objetos de culto o lo vendiesen en un lugar distante- arrostraban de por vida la condena espiritual aparejada a los sacrílegos. Suele tratarse de individuos bien informados sobre las riquezas litúrgicas contenidas en santuarios y parroquias -a menudo ricamente dotadas por el celo de la Iglesia y la caridad de los fieles- y que apenas si cuentan con la protección brindada por la solidez del edificio y la eventual salvaguarda de santeros, ermitaños y párrocos, pero sobre todo con la

severa condena moral de la comunidad y con la automática censura eclesiástica. Ello explica que pese a ser las riquezas eclesiásticas eran relativamente fáciles de expoliar así como una de las formas de riqueza más cercanas y accesibles a sus coetáneos -a veces prácticamente la única en la esfera del mundo rural donde no abundaban los signos representativos de opulencia-, tales saqueos no fuesen particularmente reiterados, aunque en último extremo es perceptible un cierto cambio en dicha tendencia ante la paulatina laicización de minoritarios sectores sociales y la relajación achacada a determinados miembros del clero.

Las conductas penadas por ley, normas de buen gobierno, dictadas desde la Corte mediante pragmática sanción, suponen asimismo la condena de las estafas, del esteolínato, del contrabando, de la falsificación de moneda, de la vagancia, etc, conductas éstas por lo general atribuidas a la minoría gitana. Esta minoría social, étnica y cultural inasimilable ofrece una tenaz resistencia a su aculturación, obteniendo por ello el desdén de los autoproclamados cristianos viejos, siendo objeto de una severa, continuada e indiscriminada coerción legal y económica al ilegalizarse de un plumazo sus modos tradicionales de vida, intentando infructuosamente de despojarles formalmente de todo su acervo ancestral con la prohibición del uso de su indumentaria y lengua, vedándoles el trato de cabalgaduras, condenando su vagabundeo en grupos familiares y obligándoles a tomar vecindad y oficio fijo, tratándolos inútilmente de adscribirlos a la tierra o cuanto menos de integrarlos en el sector poblacional productivo.

En realidad lo único que lograron tales providencias fue lanzarlos de derecho a una marginalidad delictiva en la que ya se presumía desde

tiempo atrás que permanecían de hecho. Objetos del recelo, del temor, del odio por parte de la mayoría poblacional en apariencia uniformizada racial y religiosamente, serán acusados de todo tipo de engaños, sacrilegios, impiedades y crímenes, convirtiéndose la Santa Hermandad en el enemigo por antonomasia de este castigado grupo social, secular crisol de incomprensiones y desconfianzas, cabeza de turco de frustraciones personales y estamentales.

Por último, aunque no se trata propiamente de una delincuencia común en el sentido estricto del término, el Santo Tribunal tendrá que hacer frente al enjuiciamiento y sanción de sus propios integrantes, sobre todo de sus numerosos dependientes repartidos por todo el Reino y con demasiada frecuencia inculpados de hurtos menores, estafas a convecinos, extorsiones a gitanos, embargos irregulares, secuestro de bienes para fines de lucro personal, ampararse en su título en su enfrentamiento con los poderes locales, enajenaciones de embargos sin cumplir los trámites estipulados, abusos deshonestos contra las arrestadas, cohechos, resistencia a la justicia ordinaria, inobediencia a sus superiores y un largo etcétera de acusaciones reales o fingidas.

Predominan ostensiblemente los delitos perpetrados colectivamente, o al menos que cuentan con la complicidad de terceros, a las actuaciones en solitario -a menudo motivadas éstas por la ofuscación del momento-, de lo que presume de su inmensa mayoría dolo en la comisión de la falta. Aunque la casuística criminal estudiada abarca todo tipo de circunstancias espacio-temporales, es perceptible un predominio de los asaltos en el camino a transeuntes en las primeras horas de la mañana y al finalizar la jornada, durante las estaciones de primavera, verano y primeros meses del otoño, momentos en donde se

incrementa la afluencia de trajinantes y se dan las condiciones adecuadas para asegurarse su huida o mantener oculta su identidad.

Ciudades, villas y aldeas están estrechamente ligadas al agro circundante, por lo que sus habitantes están sujetos de las variaciones climáticas anuales; en este contexto el hurto o robo de reses, la sustracción de mieses, uvas, aceituna, productos apícolas, la comisión de incendios y de talas es perfectamente advertible una acusada estacionalidad de acuerdo a los ciclos biológicos y laborales agropecuarios: el expolio de animales de labor y aperos de labranza es más reiterada en otoño -posiblemente para efectuar o impedir las faenas de roturación de tierras- y en verano -con motivo de la recolección-; los ganados vacuno, ovino y caprino suelen sufrir sus mayores menoscabos durante la primavera, poco antes o después de su periodo de cría; mientras que siempre suelen desaparecer cabezas de las pjaras a fines de año; la sustracción de mieses es más frecuente en los meses de junio y julio, cuando aún permanecen en los campos; los pagos deben ser celosamente guardados en septiembre de la rapiña de pastores y forasteros; mientras que en diciembre y enero peligran cosechas enteras de aceituna de la recogida ilegal realizada por gitanos y vagabundos; los quebrantamientos de las posadas de colmenas, con la consiguiente pérdida de miel y cera suele tener lugar entre los meses de mayo a junio, siendo el hurto de corchos una falta común de principios de primavera; los incendios pueden reducir a cenizas montes y dehesas durante el verano, realizando carboneros y leñadores mondas de árboles durante el invierno.

En cambio no guardan una cadencia estacional visible robos y estafas en poblado -eventualmente vinculados de alguna manera con la afluencia de un mayor público y el aumento de los intercambios durante

ferias y mercados-; así como los asaltos a viviendas y casa de labor, los robos sacrílegos -en ocasiones conectados al periodo inmediatamente posterior a peregrinaciones y romerías-, los robos de caballerías, alhajas, dinero, mercancías, etc., pese a advertirse un ligero incremento de los mismos durante la época invernal.

A diferencia de los delitos contra la propiedad, los delitos de sangre, por lo general producto de una violencia injustificada -fuese o no premeditada-, está íntimamente ligada a los primeros, siendo más una consecuencia que la causa de los mismos. Por otro lado, únicamente venganzas personales o familiares explican reyertas que terminan en contusiones y traumatismos, e incluso con homicidios en descampado; tales pendencias se corresponden a respuestas inmoderadas a antagonismos larvados que degeneran, a veces, en malos tratos de palabra u obra, injurias y peleas que suelen terminar en magulladuras, heridas por arma blanca de diversa entidad, o pedreas, pero también en muertes y en enemistades difícilmente solventadas sin transigir o confiar en la buena voluntad de la parte contraria.

Víctimas propiciatorias de las comisiones delictivas son viajeros, comerciantes, carreteros, buhoneros, romeros, arrieros y correos que suelen transitar por los peligrosos caminos de la época; mayoriales, pastores y serranos que desempeñan sus oficios en el yermo; guardas de campo concejiles o particulares que celan por la integridad de las explotaciones agrícolas; clérigos que caminan desarmados fuera de sus feligresías; pasajeros que hacen uso del embrionario servicio de diligencias; paisanos con los que se tiene un frecuente trato y con los que se mantienen litigios de lindes; forasteros que son víctimas de engaños y extorsiones; viudas que viven solas en sus casas y que apenas cuentan con la protección de sus familiares más cercanos y de

un corto servicio doméstico; santeros que cuidan de apartadas ermitas; personas solitarias que vagan por el monte como cazadores o pescadores; los propios ministros de justicia, por los recelos que suelen despertar sus siempre controvertidas actuaciones; propietarios de las explotaciones apícolas o de hacienda agrícolas alejadas de los núcleos de población; braceros que pernoctan en el campo durante la siega; cortijeros y guardabosques; etc.

9.2. DELINCUENTES.

En la extensa área geográfica que se extiende desde el sur del Ebro hasta el extremo meridional peninsular, donde tiene lugar la actividad policial por parte de los comisarios y cuadrilleros de la Hermandad de Ciudad Real, predominaba una población campesina que depende fundamentalmente del campo para sobrevivir, disminuyendo paulatinamente el número de hidalgos de norte a sur de forma paralela al aumento del porcentaje de jornaleros sin tierras en la Corona de Castilla.

A este contingente poblacional, oriundo de la comarca donde habitualmente desarrolla su vida y que sólo en señaladas oportunidades abandona, hay que añadir un nutrido y heterogéneo grupo integrado por desplazados ocasionales o permanentes procedentes de las secularmente pobres o superpobladas áreas de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, León, La Rioja o el País Vasco-Navarro, que deben de abandonar estas zonas tradicionales de emigración para dirigirse hacia el sur -cuando no a Indias-, empleándose de acuerdo a sus posibilidades y fortuna como criados personales, sirvientes domésticos o agropecuarios, administradores de comercios, arrieros, carreteros, en el pequeño comercio, ejerciendo de tratantes ambulantes, etc.

Por último hay que considerar la presencia en el país de un relativamente elevado número de extranjeros católicos o naturalizados integrado por italianos, franceses, flamencos, alemanes, portugueses, negros, mulatos y moriscos, procedentes en su inmensa mayoría de las posesiones o naciones una vez vinculadas a la Monarquía Católica y que

pasaron a la Península en calidad de soldados, comerciantes, braceros, artistas, menestrales, buhoneros, romeros, pero también como esclavos suntuarios o como colonos de haciendas agrícolas. Este amplio abanico socioeconómico tan diverso y con unas rentas o formas de vida tan extraordinariamente dispares, será caldo de cultivo idóneo para la proliferación de amplias capas sociales de marginados más o menos coyunturales que viven al margen de la ley.

La comunidad campesina era sumamente vulnerable a las variaciones demográficas, meteorológicas o fiscales, a la especulación mercantil y a las depresiones agrarias cíclicas, a la inflación derivada de la revolución de los precios y a la depreciación del vellón. En un contexto de pauperización de una amplia base poblacional, y ante la inexistencia de resortes internos que contrarrestasen mínimamente tales imponderables, las crisis periódicas pueden lanzar al endeudamiento al pequeño campesinado con tierra y yunta, pudiéndose perder irremisiblemente su hacienda, con lo que de labradores pasan a jornaleros y de éste estado no era extraño pasar a la indigencia o al vagabundeo. Los límites entre la pobreza y la criminalidad menor siempre han sido imprecisos: braceros que trabajan medio año por cuenta ajena, el resto del tiempo tienen que encomendarse a la caridad pública o privada; mendigos errantes que arrastran su miseria por caminos y pueblos arrancando por la fuerza lo que la piedad o el destino parece denegarles; trabajadores marginales como alimañeros, carniceros, carboneros, saltimbanquis, o cazadores que malviven de sus actividades y que pueden llegar a cometer pequeñas raterías y estafas; trabajadores no agremiados que están desprovistos de las prestaciones solidarias proporcionadas por las corporaciones profesionales; sujetos con oficio e incluso de una cierta posición que frecuentan casas de juego y otros lugares de mala reputación; amancebados; alborotadores y

camorristas; amigos de resolver por la fuerza lo que la razón no les concede; falsos peregrinos; estudiantes licenciosos; soldados desmovilizados; menores escapados de los domicilios paternos en busca de aventuras o huyendo de las arbitrariedades de sus progenitores; pícaros y una legión de desahogados y automarginados pululan por todo el Reino, siendo casi siempre identificados con los transgresores del orden establecido, autores de pequeños hurtos y de faltas menores que por reiteradas traspasan el umbral de lo permitido, desembocando a veces en la delincuencia común.

El desposeído se someterá a su suerte mientras acepte que su inferioridad estamental está sujeta a la autoridad pública, siendo imprescindibles en alguna medida sanciones exteriores que propicien el mantenimiento del orden social establecido y sancionado por una mayoría. A este respecto la Iglesia ejerce un papel relevante, inculcando desde el púlpito un espíritu de resignación cristiana conducente en último extremo a la perpetuación de las estructuras que sustentaban el complejo ordenamiento prototípico del Antiguo Régimen. Los más disconformes expresarán su resentimiento por la penuria que soportan apelando en último extremo a la violencia como válvula de escape de resentimientos o inquietudes frustradas. Por otro lado, siempre existen individuos dispuestos, o cuanto menos predispuestos, por variados motivos a cuestionar lo establecido -como las ordenanzas legales, seguir la conducta asignada por su nacimiento en un determinada medio, la obediencia debida a sus superiores jerárquicos...-, entrando a corto o largo plazo en conflicto con el grupo humano en el que se desenvuelve, autoalienándose o abandonando sus raíces en busca de un ideal de libertad y de autoafirmación personal que a veces termina en una vida de proscrito.

Las fuentes coetáneas son ciertamente alarmistas: masas flotantes de pobres que afluyen a las ciudades; vagabundos que recorren campos y villas en años de carestía; cadáveres en las lindes del camino pertenecientes a indigentes que se dirigían a los núcleos urbanos en pos de un socorro que nunca hallaron; segadores en busca de trabajo estacional; soldados desmovilizados que retornaban a sus hogares o permanecían sin tomar vecindad al albur de lo que el destino les brindase; y desocupados de diversa procedencia ya perfectamente diferenciados durante el Quinientos, adquieren tintes dramáticos durante el Seiscientos, en el momento de que una polarización social, fruto de la esclerosis político-económica existente durante el gobierno de los Austrias Menores, propicia el que fiscalmente se califique de pobre de solemnidad entre un veinte y cuarenta por ciento del total poblacional. En el Setecientos mejorará apreciablemente esta situación, pero siguen en los límites de la subsistencia multitud de personas, abandonados económicamente a su suerte pero sujetos a una legislación que pondrá particular interés en reprimir severamente los delitos contra la propiedad y en controlar las formas de conducta desarregladas a lo que se entendía como patrón homogéneo ideal.

Entre los procesados por el Santo Tribunal es apreciable el predominio de los miembros de los escalones socioeconómicos inferiores frente a un reducido grupo integrado por hidalgos empobrecidos -cuya condición suele denotarse hasta mediado el Siglo de las Luces por el tratamiento de "don" que precede a sus patronímicos-, y de miembros hacendados del tercer estado. Aunque no suele expresarse implícitamente, tales hidalgos bien pudieran ser hidalgos "de bragueta", es decir de pecheros fiscalmente privilegiados por su contribución al desarrollo demográfico de la decadente Castilla, siendo en todo caso hidalgos de sangre o consortes pero cuya

situación financiera dista mucho de ir pareja a su distinguida situación social. Un caso paradigmático es el ejemplificado por Diego Pérez Laguna, hacendado murciano reducido a la condición de bracero y afincado en Segovia, acusado de robar caballerías en Lorca así como de hurtar trigo del granero de un mercader local con la complicidad de una criada de color del comerciante; con hábito de romero manifestaba su intención de ir a Monserrat, cuando en realidad lo que encubría era innumerables raterías en el reino de Murcia, y desde principios del Seiscientos hasta 1606 se lucrará vendiendo en Valencia las caballerías robadas en la comarca toledana; cuando es encausado por el tribunal ciudarrealeño su procurador alegará como eximente que siendo como era persona de distinguida extracción había recalado su situación actual de fuera de la ley víctima de la

"...desesperacion y deseo de morir por librarse de muchos trabaxos que ha pasado y pasa y aviendose salido de su tierra siendo de gente honrrada y llegado a grande pobreza y desventura..."³¹.

En 1684 se dirimía el recurso de fuerza por pretender inmunidad local el reo hermandino don Antonio Pretel Miñán, vecino de Torres de Segura -Jaén-³²; hacia 1694 se procedía contra don Cristóbal Mohedano, gobernador de la villa de Conquista -Córdoba-, por encubrir los excesos de un pariente salteador de caminos en Sierra Morena³³; entre 1768-1770 el italiano don Luis de Olivares y Tori sería atormentado y luego ejecutado por el homicidio de un vecino de Puertollano, etc.

Quienes ejercen un negocio próspero raras veces tienen que rendir cuentas a los comisarios hermandinos, constituyendo un grupo diferenciado posaderos y venteros. La imagen literaria de dicho oficios se sustenta tanto en la deshonra profesional de sus empleos como en una visión distorsionada popular de los mismos, a los que se

atribuyen una conducta cuanto menos sospechosa, siendo calificados por la mayoría de pendencieros, estafadores, encubridores e informantes de criminales. En 1599 era condenado por el alcalde mayor de El Viso del Marqués -Ciudad Real- Bartolomé Díaz, hijo del ventero local, acusado de extorsionar tras salir de su posada en la que se albergaba a "una mulata negra vestida con abito de hombre y que traia con ella un rufian", aprovechándose de que su acompañante había huido al conocer que en la venta había un alguacil³⁴. A fines de 1607 es apercebido por el Santo Tribunal manchego Pedro Jiménez, ventero del Herrero -Almodóvar del Campo (Ciudad Real)-, por exigir violentamente la devolución de una caballería que le había sido extraviada por unos gitanos a su nuevo dueño, al que le llega a amenazar con la muerte³⁵. Andrés Palacios, ventero de la posada de Palacios y dependiente de la entidad ciudarrealeña, no solamente osa incumplir su ministerio, sino que se atreve a encubrir a una partida de bandoleros acaudillada por Jerónimo de Cuéllar, albergando en su inmueble sus amores ilícitos; cuando en 1611 es prendido el famoso bandido junto a otros dos sospechosos en la citada venta, uno de sus sirvientes libera al criminal arrestado al estar emparentado con dicho mesonero de Baeza, desapareciendo luego el arrendatario del albergue, cerrando el establecimiento que regentaba y abandonando a su esposa e hijos al saberse perseguido por los cuadrilleros³⁶.

Igualmente sujetos a la jurisdicción hermandina se hallan los bataneros. Se denominaba batanes a los ingenios hidráulicos dispuestos junto a cursos caudalosos de agua donde tomaban apresto los paños que satisfacían la demanda local; pues bien, los dueños o arrendatarios de tales batanes se encuentran eventualmente envueltos en pleitos criminales acusados de competencia desleal y quebrantar los batanes comarcanos. En 1613 Pedro Hernández -batanero de Perosancho, en el

término de Moral de Calatrava- es acusado por un colega de haberle hurtado unas telas de su inmueble de la ribera del Guadiana, siendo públicamente reputado "por hombre de malas manos", por lo que se enjuiciado y condenado en primera instancia a cuatro años de destierro de los ingenios de Perosancho, el Batanero, Higuera, Elvirabrabo y el resto de los comarcas, a la que se añadía una sanción pecuniaria que su padre recurrirá en Granada³⁷. En 1618 se querellaba el hijo de un batanero de su igual Antón García -afincado en El Moral (Ciudad Real)- por decir haber entrado sin permiso en un batán de su propiedad, ubicado en el término de Almagro; en dicho pleito parece más evidente la intención de vengar a un profesional de la competencia que de hacer pagar las culpas a un delincuente, ya que el inculcado alega que el edificio estaba abierto y sólo pretendía conocer el estado de la ropa que le había confiado, por lo que será absuelto por los magistrados manchegos, aunque la parte litigante apelará a la Real Chancillería³⁸.

Otros profesionales también serán objeto de la severa justicia de la Hermandad Vieja: si en 1631 era encartado el vinatero Francisco López de Moya³⁹; en 1701 era amonestado un joven ayudante del molinero de Almadén -Ciudad Real- al ser sorprendido con un gitano que se ganaba el sustento acarreando grano al molino con un pollino⁴⁰. Mucho más a menudo se trata de labradores o braceros autores de pequeños robos y abigeatos al verse imposibilitados de trabajar en las faenas agrícolas. En 1709 se condenaba a Roque Rodríguez a cuatro años de presidio en Melilla en atención a sus más de sesenta años ya, que contaba desde hacía aproximadamente una década en la comarca circundante a Hinojosa de Córdoba⁴¹ con una carrera delictiva cuajada de pequeñas infracciones como sustracciones de pequeñas cantidades de dinero, reses, cargas de vinos, etc.

Los comisarios hermandinos implicados en irregularidades en el uso de su oficio e involucrados en auténticos crímenes bajo el amparo de su calidad profesional son relativamente numerosos; he aquí una muestra: en 1610 los alcaldes ordenaban al cuadrillero Francisco Brabo que entregase su nombramiento, rompiéndoselo públicamente el notario del Santo Tribunal antes de ser excarcelado bajo fianza el infractor⁴²; en 1702 un dependiente de Jerez de los Caballeros al que se atribuía una conducta venal y secuestraba bienes sin instruir sumaria, era desposeído de su título y desterrado dos años de la villa por mandato de la justicia ordinaria⁴³; en 1705 se investigaba a Juan García, ministro hermandino antequerano, indiciado de diversos hurtos⁴⁴; en 1709 era patente la negligencia de Marcos González y de sus compañeros en la fuga de un gitano valenciano, quedando retenido el susodicho en la cárcel de linares como medida cautoria, lo que parece provocarle un serio perjuicio al manifestar el comisario ser pobre y tener que sustentarse de su trabajo⁴⁵; por entonces el también comisario infanteño Bernabé de Contreras incautaba bienes de unos gitanos asilados en sagrado, haciendo llegar a Ciudad Real únicamente parte de las caballerías aprehendidas⁴⁶; a fines de 1711 el cuadrillero Francisco Sánchez comandaba una partida de la ronda de tabacos ciudarrealeña que pese a secuestrar tres asnos en el Campo de Montiel, se excusó de llevarlos ante el mayordomo por ser malos y flacos⁴⁷; en mayo de 1715 se emplazaba en la sede hermandina al cordobés Pedro Requero para que justificase el embargo de unos bueyes legítimamente adquiridos en un mercado rural⁴⁸; en octubre del citado año unos paisanos elevan al Consejo de Castilla queja contra el comisario jerezano don Juan de la Rosa Herrera por incoarles sumaria arbitrariamente⁴⁹; en 1716 se despachaba auto de prisión y embargo contra dos comisarios de Huelma huidos de la galera manchega y que se

dedicaban al contrabando en el Campo de Gibraltar⁵⁰; hacia 1718 el cabildo de Alcohujate se pronunciaba unánimemente contra la designación como comisario a Antonio de las Heres, por considerarlo inadecuado al ser un sujeto vengativo y encausado por la justicia, temiendo la ruina del pueblo si se aprobaba su pretensión⁵¹; y en Montilla, en 1719, se condenaba a un juez comisario por considerar probados sus hurtos de aves de corral⁵².

Si en 1718 eran sancionados con diez ducados tres comisarios de Puebla de Guzmán y uno de Cartaya por desacato a los requerimientos de sus superiores⁵³; al año siguiente se recogía título a Gabriel Fernández, juez de Javalquinto -Jaén-, por desempeñar las diligencias encomendadas sin el celo debido⁵⁴. La evasión de cinco gitanos de la cárcel pública de Lillo -Toledo- supone en primer término la inhabilitación de don Pedro Ravoso Zevallos como representante de la corporación ciudarrealeña⁵⁵. En 1722 un juez comisario de Alcázar de San Juan informaba sobre su colega Manuel de Lara, al no querer ayudarle en una diligencia policial, considerando que "ministros que no sirven lo mejor -es- mandarles entreguen los despachos"⁵⁶. Objeto de numerosas quejas, es detenido el ministro Micael Moreno, acusado de embargos indiscriminados a castellanos nuevos, teniéndose la certidumbre de que se apropió de una yegua en Valdepeñas con el pretexto de decir haber sido hurtada en Úbeda⁵⁷. Al hallarse un comisario valenciano con la sorpresa de que su homónimo Domingo Lobayla se negaba en redondo a supeditarse a sus órdenes escudándose en su avanzada edad y pretextando problemas respiratorios, el primero no duda en solicitar a los alcaldes manchego que retirasen el título al segundo⁵⁸; en 1725 el ministro Pedro Fernández actuaba por lo regular requisando antes de averiguar la comisión de un delito, siendo injustificables la celeridad de tal proceder⁵⁹. Entre 1725 y 1727 don

Juan de Padilla Jaramillo expoliaba en Extremadura cuantos patrimonios ajenos podía bajo el paraguas protector de su condición de ministro superior⁶⁰. Juan Quintana, en compañía de dos paisanos, actuaba por su cuenta y riesgo, haciendo secuestros, incoando sumarias, enajenando embargos y perpetrando tales abusos que terminará encausado por el Supremo Consejo⁶¹.

En 1741 se imputan actos delictivos al juez comisario de Peñalsordo Agustín Jiménez⁶²; hacia 1745 el Santo Tribunal substanció la causa criminal contra su dependiente Cristóbal Hidalgo de Calcerrada al ser acusado por el alcalde mayor de Belalcázar de haber cometido diversos desafueros⁶³. En 1760 el labrador Pedro Quesada Ballesteros se excusaba de asistir a una salida integrada por representantes de la entidad manchega alegando

"...averle ocurrido despues que adquirio su titulo de tal juez comisario otras dependencias y ocupaciones que no le dan lugar a poder continuar en dicho empleo, por lo que desde luego se desistia y desistio de el y ofrecio entregar el titulo que se le despacho...luego que se le debuelva de la Villa y Corte de Madrid donde se ha remitido por el efecto de pasarle por el Consejo..."⁶⁴.

En 1762 un comisario murciano era encargado de esclarecer las culpas imputadas a don Francisco Muso, ministro superior de Lorca, acusado de recibir sobornos para tolerar los trueques y cambios de caballerías por parte de los gitanos en las cuerdas locales⁶⁵. Hacia 1782 se procedía contra Julián de Haro, natural de Estepa -Sevilla-, por obrar sin licencia de los alcaldes manchegos, recogién dose asimismo el título de hermandad concedido a un vecino de Llerena⁶⁶, y a otro juez comisario de Esparragosa tachado de incompetente⁶⁷.

En otras ocasiones se trata de personas honradas, a veces con ocupaciones tan poco sospechosas como la docencia, que se ven arrastrados en una espiral de pequeñas rapiñas para poder malvivir y que paulatinamente aumentan la cadencia y entidad de sus faltas. En 1612 Juan Argote se hallaba en Montiel -Ciudad Real- dedicado a enseñar "leer y escribir a los niños", siendo por entonces indiciado del hurto del cerrojo de la antigua fortaleza local, intentando su venta en la cercana Almedina, siendo por ello puesto por la justicia ordinaria "en un asno a la puerta de la carcel no save si a la verguenga si a açotalle y por ruegos de gente honrrada de la dicha villa no lo sacaron"; años después lo encontramos indiciado del hurto de mieses, siendo perseguido por un alcalde de la Hermandad General, por lo que hubo de ausentarse durante años de dicha localidad; en enero de 1628 residía en Castellar de Santisteban, sirviendo como guarda de campo del condado y, por denunciar a varios convecinos acusándolos de llevar ganados a herbajear en panes y viñas, hurtar hortalizas y cometer talas de montes, es inculcado por uno de los denunciados de que sus acusaciones no tenían fundamento al proceder de un reputado ladrón, aunque "de ninguno a sido castigado"; como quiera que fuese posteriormente detenido en base a tales incriminaciones, estalló la competencia entre el alcalde mayor del condado y el Santo Tribunal, aprovechándose el reo para huir de la cárcel señorial⁶⁸.

Acontecido algún incendio o hurto de colmenares, loberos, pastores, carboneros, cazadores y campesinos en general son automáticamente puestos en la mira de las sospechas y se centran sobre ellos las pesquisas de los dependientes ejecutivos de la entidad apícola⁶⁹.

Con relativa frecuencia los caídos en las redes de la justicia hermandina son militares en tránsito por las poblaciones, soldados sin

recursos al ser desmovilizados o desertores que viven del pillaje⁷⁰. En 1664 unos mercaderes expoliados aprehenden a dos desertores del regimiento de caballería de Extremadura inculpados de diversos robos y asesinatos; trasladados heridos a la cárcel ciudarreal de Alcañices, se alquila una muda de cama, un jergón y el colchón a un mesón local, siendo custodiado el peor parado en la celda de enmedio; tomada declaración a los detenidos resultan ser el puertollanense Agustín Escudero y Francisco Vidal -natural de Reus- acuartelados en Don Benito⁷¹, que habían abandonado la milicia al disparar contra un camarada que les solía hurtar la cebada de sus caballos; junto a otros compañeros habían vagado por los campos, evitando pasar por los núcleos poblacionales más importantes y dirigiéndose a la Corte; en Almohadín tienen un incidente con los guardabosques y deciden separarse; cerca de la venta de San Juan de Dios -Los Yébenes (Toledo)- vuelven a tener otro tropiezo con los guardabosques, permaneciendo semanas vagando por las dehesas de Guadalerza haciendo pillajes a los trajinantes del camino real; condenados a muerte pretenden apelar el fallo en tanto que su procurador consideraba nulo el veredicto por reclamar su fuero privativo castrense, pero desestimados tales recursos dilatorios serán ajusticiados en Peralvillo⁷².

Cuando se crearon las milicias provinciales por la administración ilustrada borbónica, sus integrantes serán ocasionalmente fuente de desestabilización del orden público; en 1759 Antonio Martínez robó en la casa de su tío antes de desaparecer de su vecindad, hasta que en 1761 nos lo encontramos huyendo de dos sargentos enviados en su busca por el coronel de la milicia provincial de Jaén de la que había desertado⁷³. Otras veces el arbitrario sistema de quintas y levadas desencadenaba una vida de proscrito que terminaba en el delito; en 1709 Gaspar Fernández, oriundo de Villanueva de Córdoba, se hallaba

prófugo de la justicia al no acudir a servir a filas en lugar de otro quinto que pudo exonerarse comprando tal merced, desde entonces había llevado una vida agitada, cometiendo pequeños hurtos en los términos de Conquista, Fuencaliente y Sierra Morena⁷⁴.

No es infrecuente que sean encartados criados acusados de robar a sus amos, justificando a veces su proceder por los abusos que dicen soportar de sus señores. He aquí dos ejemplos: en 1683 se procedía contra el carretero Manuel Ibáñez -natural de Villapalacios (Soria)-, sirviente de un hacendado ciudarrealeño y quien había hurtado una yunta de bueyes a don Cristóbal Muñoz Treviño de Loaysa para resarcirse de la soldada impagada desde hacía año y medio, no pudiendo reclamarla por ser pobre y el robado miembro del Santo Instituto y teniente de corregidor de la ciudad; tres meses después el trajinante es condenado a servir un año como forzado en las minas de Almadén y a cuatro años de destierro de la capital manchega⁷⁵. A principios del siglo XVIII fue arrestado por un ministro hermandino en Alosno el portugués Esteban Fernández, considerado sospechoso por pernoctar en un pajar y llevar "mala ropa, sin camisa el qual traia una mula parda; abiendole hecho varias preguntas y complicandose"; el reo declara haber trabajado por cuenta ajena como pastor de ovejas por el salario anual de una moneda de oro y un vestido entero, pero su amo había incumplido el trato verbal y solo se había limitado a mantenerlo y a entregarle una ropa estropeada, por lo que huye de Portugal con la mula cargada del trigo que debía conducir al hijo de su señor; cuando ya se había fugado de la cárcel local de Alosno llega a la villa una requisitoria en portugués mediante la cual el agraviado daba las señas de la caballería y de su aparejo, reclamando al sirviente y lo hurtado, explicando sus versión del incidente⁷⁶.

Buhoneros, saltimbanquis y personas supuestamente malentretenidas son objeto de especial celo por parte de los comisarios hermandinos. En 1747 permanecía bajo custodia de la Hermandad de Ciudad Real el lobero de Valdepeñas Simón de Justos, quien solía utilizar para ganarse su sustento una perra amaestrada cuyas cabriolas suscitaba la caridad de las personas pladosas, manifestando haber "estado en tierra de Madrid por donde a acostumbrado pedir limosna valiendose de dicho medio"⁷⁷; y a fines del Siglo de las Luces se incoaba sumaria a Francisco Rojas, vecino de Viso del Marqués, indiciado de diversos abigeatos y cuya ocupación declarada era vender peines durante las ferias rurales de Úbeda y Baeza, siendo arrestado en la romería de la Virgen de la Cabeza⁷⁸.

Los vagabundos, hombres errantes sin oficio ni beneficio, constituyen para sus coetáneos una auténtica plaga a extinguir y como tales fueron tratados en el Antiguo Régimen. Merodeadores de campos y ciudades, se refugian en caseríos abandonados o en albergues donde por una exigua cantidad logran alojamiento, aunque a veces los vemos pedir licencia para pernoctar en pajares y caballerizas de los cortijos. Cuando alguien rehusa darles hospitalidad o ayuda de cualquier tipo pueden ensayar amenazas para lograr sus propósitos; esta "mendicidad insolente", como la han calificado algunos autores⁷⁹, es uno de los elementos que hacen temibles a tales indomiciliados, particularmente en los dispersos cortijos y casas de labor donde sus moradores se hallan al albur de sus exigencias, acusándoles de perpetrar incendios, robar aves de corral, romper vallados o destrozar viñas y sembrados.

Entre estos vagos hay multitud de cristianos viejos, desarraigados del solar patrio y sospechosos por el mero hecho de desconocerse su identidad y medios de vida. Aunque a menudo pasan a disposición de los

alcaldes manchegos, su propia condición errante hace difícil su captura. En 1731 un ministro superior de Fregenal de la Sierra, sabedor que se había avistado un jinete perdido en el monte preguntando por el camino más corto hacia la vecina Portugal, inicia las diligencias para su captura, registrando montes, hospitales y bodegones en busca de información sobre el desconocido; cuando por fin le da alcance logra precipitarse el sospechoso por un despeñadero y aunque le requisa la cabalgadura desiste de perseguirle, remitiendo a Ciudad Real el producto de su venta al no aparecer el dueño⁸⁰. En 1741 llega a Almodóvar del Campo -Ciudad Real- una partida de la Hermandad Vieja con motivo de la feria de Alcudia; mientras que un grupo se dirige a Brazatortas y Tirteafuera a reconocer la zona, el resto permanece en la cabeza de partido informándose sobre los excesos cometidos en su circunscripción; pasados dos días vuelven a la sede hermandina tras haber recibido los testimonios de informantes que hablan de multitud de ladrones y vagabundos en Sierra Morena, siendo vanos sus intentos por acreditar la veracidad de tales declaraciones⁸¹.

Los extranjeros son considerados a priori individuos sospechosos: en 1623 es ejecutado un napolitano, homicida involuntario⁸²; hacia 1709 un comisario de Guadalcanal prendió a dos franceses que vendían asnos de dudosa procedencia⁸³. Años después, en 1721, era arrestado un gitano lisboeta cuya vida resulta paradigmática: sirviente durante cinco años del duque de Palma y, antes, ayuda de cámara de don Joseph de Mendoza Hurtado, casado con una extremeña, hubo de marcharse de Villanueva del Fresno malvendiendo su casa al despojarle de su huerta un coronel de caballería que les hacía la vida imposible; traslada a su mujer, hijas y cuñada a Portugal y cuando pretendía retornar a Castilla el alcaide de la plaza de Pamurgo le desvía al paso de

Huelva; separado de su familia hubo de sobrevivir haciendo trueques por los que a la postre será encausado por el Santo Instituto⁸⁴. En enero de 1725 se despachaba auto de captura contra un portugués que había asesinado en descampado al padre mercedario descalzo fray Fernando de Santo Tomás⁸⁵; y dicho mes y año era capturado Félix Pín y su cómplice, acusados del hurto de paños a un mercader de Talarrubia-Badajoz-, vendidos luego a un buhonero⁸⁶. Por último, entre los encartados entre 1763-1765 se menciona a un tal Joseph, "mozo italiano", preso en Baeza por hurtos y estafas y cuya causa estaba pendiente de conclusión al estar la sentencia consultándose en la Real Chancillería de Granada⁸⁷.

Frecuentemente se trata de delincuentes comunes que hacen de tales actividades ilícitas su medio habitual de vida, su profesión podía decirse. En 1656 se seguía auto criminal contra Juan Díaz, vecino de Pozuelo de Calatrava -Ciudad Real- y autor de innumerables excesos entre los cuales se hallaba su evasión de las reales minas de Almadén; su historial delictivo es amplio, pese a contar en el momento de su ejecución en Peralvillo únicamente con treinta y seis años, pero por ceñirnos sólo a sus últimas fechorías cabe destacar que habiendo servido durante un tiempo como tratante de yeguas en Bienservida de Plasencia bajo esta apariencia perpetró multitud de robos de cabalgaduras, engaños y esteolinos, llegando su maldad a matar de un arcabuzazo -por los sesenta reales que le dio su amo- a uno de los alcaldes ordinarios de Bayona, cortándole la cabeza y piernas y sepultándole en el yermo bajo un improvisado túmulo de piedras⁸⁸. En 1721 eran indagadas por cuenta de la entidad apícola las actividades de un hortelano valenciano -manco y tullido del hombro izquierdo como secuela de una herida de bala-, cuya profesión itinerante le permitía ofrecerse como bracero de pueblo en pueblo, pero cuya ocupación

realmente lucrativa consistía en vender por el reino de Valencia el producto de sus fechorías perpetradas en La Mancha⁸⁹. Hacia 1728 don Carlos Mondragón -ministro superior de Segura de la Sierra-, acosó durante semanas a un estafador que, fingiendo ser un rico indiano, había cometido numerosos fraudes por el norte de Córdoba⁹⁰.

Junto a esta delincuencia individual o, todo lo más, ocasionalmente secundada por algunos cómplices, existe una criminalidad colectiva representada por el bandolerismo⁹¹. La extracción socioeconómica de estas paridas de malhechores a caballo que asolan comarcas enteras ante la impotencia, cuando no connivencia, de la autoridades, es ciertamente heterogénea, aunque invariablemente su núcleo operativo está abrumadoramente compuesto por marginados sociales procedentes de las capas estamentales inferiores, siendo asimismo diversa su procedencia geográfica y la extracción ocupacional de sus efectivos. He aquí cuatro muestras cronológica y geográficamente distantes: durante el periodo 1608-1612 actuaron entre el paso de Despeñaperros y Castellar de Santiago una partida integrada por el vaquero de Andújar Jerónimo de Cuéllar, el mulato Juan de Ledesma -autocalificado jornalero de Úbeda-, los pastores de Aldeaquemada Alonso Fernández y Antón Rubio, Juan de Baeza "el Manco", y el arrendatario de la venta de Palacios Andrés Garrido⁹²; por su parte, hacia 1704, la partida acaudillada por Antonio Ruiz "Carabinas", encarcelada en la prisión real de Murcia protagoniza una fuga masiva gracias a la cual conocemos algo de sus secuaces: don Jacinto Sandoval, don Alejandro Fontes, Marcos y Antonio Hernández, Joseph Pablo de los Ríos, Francisco Antonio "Turco", Joseph López, Salvador Gregorio, Francisco de Jódar, Sebastián Veniel "el Berberisco", Juan de la Concepción, Juan de Flores, Alonso Molina, Juan López, Benito Moreno, Joseph y Sebastián Cortes -castellanos nuevos-⁹³; en 1730 por la Mancha merodeaban los

bandoleros Joseph Fernández "el Zurdo" -gitano de Saelices-, Juan "el Merino", el esclavo Juan Antonio, el alférez de caballería de Tarragona don Gabriel de Hermosilla y, al menos, otros seis u ocho facinerosos cuyo nombre desconocemos pero que llegan a hacer frente con éxito a algunos escuadrones militares⁹⁴; por último, mediada la centuria, se apresan a unos asaltadores de caminos que actuaban por Sierra Morena, integrando dicha partida habitualmente Manuel Rico "el Duro", su esposa Francisca García -quinquillera-, su yerno y prófugo de la justicia Francisco Hernández, Juan "el Madrileño", Andrés Jiménez y Cosme Díaz -gitanos hojalateros-, así como Francisco "el Pájaro", siendo perseguidos por las ferias de San Marcos de Talavera de la Reina y en el mercado celebrado los martes en la Ciudad Imperial en 1757-1758⁹⁵.

Durante el último tercio del Seiscientos y todo el Setecientos se gestará lo que cristalizaría en el Ochocientos en una corriente de solidaridad, e incluso de exaltación, de la figura del contrabandista o del bandido "generoso" que robaba a los poderosos para distribuirlo entre los necesitados, glosándose sus correrías en romances populares donde se resaltaba su valentía y entereza para afrontar los reveses del destino⁹⁶. La Hermandad Vieja asumió gran parte del peso de la represión de este fenómeno que tanto alarmaba a las autoridades y afectaba a la población por el auge que llega a adquirir en determinadas coyunturas y su carácter endémico en amplias áreas marginales de la Monarquía. Numerosos son los bandidos perseguidos y castigados por el Santo Tribunal ciudarreal de Sevilla pero tal vez ninguno se acerca más al prototipo de bandolero que ha llegado hasta nosotros como Fernando Martín Ortiz, "Fernandillo", cuyas famosas andanzas tienen lugar en las postrimerías del Seiscientos.

Acusado en por la justicia local de Llerena de haber perpetrado diversos escándalos y homicidios, el 18 de julio de 1692 huía de su cárcel tras haber permanecido en ella nueve meses recluso, acaudillando desde entonces una partida de bandidos a quienes se atribuyen todo tipo de excesos: extorsiones a pastores, asalto a un arriero de Valverde del Camino que terminan por degollar en el camino a Montemolín e innumerables atrocidades en el condado de Niebla y Extremadura, hasta ser arrestado por un juez comisario de Saelices. En 1694, cuando un ministro de Llerena pretendía hacerse cargo de este peligroso criminal, se halla con la sorpresa de que el teniente de gobernador local había remitido a los reos a la prisión de Villanueva de los Infantes, de donde se había fugado. Vuelto a capturar en abril de 1695, se extremarán las precauciones en su tránsito hasta Ciudad Real⁹⁷. En la sede hermandina, los alcaldes se hacen acompañar como asesor letrado por el mismo corregidor manchego a instancias del Consejo de Castilla, dada la calidad del encausado; pasándose a tomarle de inmediato declaración: "Fernandillo" dice tener veinticuatro años, haber oficiado como cortador en Monesterio y como zapatero en Aracena, negando su autoría del cúmulo de cargos imputados, a continuación testifican varios arrieros y mercaderes de Zafra, siendo reconocido en una rueda de presos semanas más tarde, y nombrando curador. En noviembre se le vuelve a tomar confesión, negando haber vivido "como gitano" amancebado con una mujer; días después su curador alega que al ser pobre su defendido desistía de su labor en el proceso, solicitando que se librasen de las arcas hermandinas los caudales suficientes para su delicado trabajo. Cuando en 1696 el fiscal presenta el pliego de cargos se hace evidente que sus "delitos y atrocidades son tantos en numero que no se pueden mencionar"⁹⁸.

El repertorio de sus crímenes fue impresionante: cerca de Montemolín robó a un trajinante que transportaba sardinas en salazón trescientos reales, degollándole luego de expoliado; casado des veces, una de ellas con una gitana, asesina a ambas; en Sierra Morena atracó al torero Pedro Marín de Balboa, vecino de Quesada, sustrayéndole ochocientos reales, sus escopetas y un caballo y hubiese matado al joven diestro y a su esposa si no se le hubiese encasquillado su trabuco⁹⁹; en las proximidades de Llerena disparó contra un pasajero, haciéndose con cien ducados y dejándole maniatado apartado del camino; un pintor que se dirigía a Badajoz salvó su vida al darse a conocer en el momento de ser asaltado, quitándole "solo treynta reales y le dixo que fuese con Dios que a buen santo le habia rogado"¹⁰⁰; en la venta de San Blas se apropia de diez doblones de unos religiosos, así como de otros mil quinientos reales y unos jumentos cargados de loza de unos tratantes; a un sevillano le apaleó para despojarle de sus zapatos; en la dehesa del Tocino asesinó al arriero Antonio Colado y maniató a un chaval para quitarle un pan y los maravedís obtenidos de la venta de una lechuga; robó y maltrató a un criado del notario de Montemolín; sustrajo todas las pertenencias a un dominico del convento sevillano de San Pablo que se dirigía a Badajoz a través de las marismas. En suma, acompañado de un tal Trujillo y de dos cuñados suyos asoló durante años la Baja Extremadura, las marismas del Guadalquivir y las estribaciones meridionales de Sierra Morena, exponiendo el fiscal que

"...para que se reconozca las sumas maldades del referido reo y el horror que de toda la Extremadura y otras partes le tenían que en tiempo de agosto los labradores y demas personas que cuidaban de recoxer sus siembras no se atrebian a quedarse a dormir en las heras; aunque estaban cerca de los lugares - poblados-..."¹⁰¹.

En octubre de 1696 se interpone pleito de inmunidad local, a instancia del visitador del partido de Montiel, por decir haber sido extraído de la parroquia local al tiempo de su prisión, siendo por ello conducido meses después al sagrado del convento ciudarreal de San Francisco¹⁰². A las pocas semanas se hallaba de nuevo el delincuente tras las rejas, acudiendo su defensa letrada a la mediación de la dignidad arzobispal toledana y ésta a la Real Chancillería de Granada¹⁰³, y justo un año después en vuelto a detener en Capilla por dependientes del Santo Tribunal manchego, siendo conducido ante su audiencia¹⁰⁴.

En este trance su defensa sólo puede aducir el testimonio exculpatorio del torero -quien, por su parte, dice contar solamente con dieciséis años de edad (!)- y que pese a haber sido reconocido en una rueda de presos no concordaban las señas aportados por los testigos de cargo. En marzo de 1698 vuelve a tomarse declaración al reo en la sala capitular, consignándose ahora que

"...por el grande temor que le tenían al confesante y a sus compañeros y era de tal calidad que para acallar los muchachos sus madres solo les bastaba el decir mira que biene el Fernandillo."¹⁰⁵

Se reciben en Ciudad Real los autos acumulados desde 1693 en Llerena, Montemolín y Monesterio, y en base a ellos y a las diligencias practicadas se somete a tormento sin consulta previa a tribunal superior alguno, pero pese a ser torturado en tres ocasiones consecutivas se reafirma pertinazmente en su declaración de inocencia¹⁰⁶. Condenado a ocho años de forzado a minas, el Supremo Consejo reducirá a seis el veredicto interlocutorio y el 9 de junio de 1700 era recibido por el alcaide de Almadén como esclavo de Su Magestad.

Junto a esta delincuencia cualificada había un infinidad de encubridores, receptores de objetos robados o peristas, colaboradores esporádicos, informantes, deudos y amigos de quiénes perpetraban las fechorías que, aunque igualmente merecedores de la coerción legal¹⁰⁷, no siempre serán encartados por el Santo Instituto al permanecer en un segundo plano, siendo en todo caso su condena normalmente inferior al del reo principal, aunque su dureza variará ostensiblemente en razón del grado de vinculación con el mismo y la gravedad de sus culpas, a menudo engrosadas por delitos menores que considerándose agravantes espolean la severidad de los magistrados ciudarrealeños.

A la sombra de esta criminalidad, típicamente masculina, se hallan las esposas, hijas, amantes, parientes o vecinas de los reos harmandinos, ocasionalmente detenidas junto a ellos y casi siempre encartadas por su conducta desordenada por la misma corte de justicia que sus allegados. Por lo general los cargos que se les imputan suelen ser cualitativa y cuantitativamente menores: amancebamiento, aprontarles dinero obtenido mediante la mendicidad o la prostitución, encubrimiento de sus actividades delictivas, guardar bajo depósito armas, objetos u animales robados, facilitarles la huida de cárceles y presidios, realizar conjuros maléficos y hechicerías, proporcionarles información sobre posibles víctimas o los movimientos de las justicias, etc. En la mayoría de las ocasiones se dirime su culpa con mayor brevedad que las de los varones, destinándose a destierro o privándoles de libertad en las casas de recogidas o en la galeras de mujeres; únicamente de forma extraordinaria serán afligidas con tormento y casi nunca ejecutadas. Entre reas sometidas a tortura se hallaba en 1692 María Ceron -esposa del reo Manuel Felipe de Morales

"Cerón"-, inculpada junto al resto de los vecinos de Santa Cruz de Mudela arrestados del homicidio del hidalgo don Antonio de Sosa¹⁰⁸.

Especial atención nos merece los crímenes sacrílegos, es decir los perpetrados contra propiedades o personas que gozaban del especial fuero eclesiástico¹⁰⁹, pues la condena moral y penal que concitaban era unánime, suscitando automáticamente la excomunión mayor de los delincuentes junto con los más severos castigos temporales contemplados por los derechos canónico y real. Es perceptible un aumento de los delitos sacrílegos encartados por el Santo Tribunal durante el Dieciocho, siendo en fechas anteriores más esporádicos, motivados tal vez por la relajación de la moral tridentina que hacía impensable tales excesos salvo para los herejes, descreídos, o miembros de las minorías étnicorreligiosas. Atemperado el secular rígido control social ejercido por el Santo Oficio, en el Siglo de las Luces los denominados cristianos viejos toman el relevo de estos grupúsculos en la comisión de las fuerzas contra la Iglesia y sus representantes terrenales. En 1710 Francisco Delgado -jornalero de Puebla de Guadalupe- cometió junto a Juan Amigo -zapatero y exsoldado onubense-, numerosos excesos calificados en Extremadura y la Alta Andalucía; temporeros en labores de siega de la localidad de Fuenteovejuna y de la vendimia de Guadalcanal, al quedar sin trabajo amenazan a la santera de la ermita de Nuestra Señora del Remedio -en el término de Hinojosa de Córdoba- quien, por haber escondido las llaves del santuario en una tinaja de aceite para las lámparas del templo, recibe dos cuchilladas y le roban su ropa de cama; extraídos de las inmediaciones de la ermita de San Sebastián, el vicario de Bélmez exige su restitución a sagrado, y a pesar de que la agraviada en último extremo fue la Iglesia hace que la justicia acate su mandato¹¹⁰. Más atroz resulta ser la sangrienta venganza de Bartolomé

Tocados contra el ermitaño de Nuestra Señora de la Candelaria -Llerena-, quien por haberle denunciado es asesinado de un hachazo a las semanas de informar del expolio perpetrado en la ermita, a pesar de lo cual el homicida gozó durante meses de asilo eclesiástico en diversas ocasiones¹¹¹. En 1733 un tratante de Calzada de Calatrava roba un macho cabrio al cura de Ballesteros en las proximidades de la ermita de Nuestra Señora del Socorro -Argamasilla de Calatrava- para festejar un banquete con sus amistades, lo que motivó al reiterar tales abigeatos su destierro de la villa manchega¹¹². De mayor calado fue el robo realizado en la iglesia de Fuenteovejuna en 1744 por parte de uno vecinos de Hinojosa del Duque, descerrajando el arca de caudales que contenían los censos eclesiásticos y obras pías de la mencionada población cordobesa¹¹³.

Que tampoco faltaron los gitanos autores de similares fechorías lo demuestra que en abril de 1748 unos gitanos asaltasen en el yermo al vicario del convento de La Merced, sustrayéndole cinco pesos¹¹⁴. Un año más tarde se quebrantaba la reja de la ermita de Nuestra Señora de Finisterre -Los Yébenes (Toledo)-, desapareciendo una lámpara de plata, encarcelándose por ello a un bracero y a un barbero de Madridejos¹¹⁵. Durante el verano de 1749 se notificaba al Santo Instituto que una partida de bandidos que actuaban en el camino de Almagro una noche de agosto se atrevieron a robar al "prior del convento de San Juan de Dios de dicha ciudad, y para ello sacado del camino, lo avian degollado y muerto."¹¹⁶ A medianoche de un día cualquiera de octubre de 1750 hurtaron cuatro lámparas de plata de la parroquial de Abenójar, arrestando luego el corregidor de Guadalupe a cuatro hombres que vendían alhajas de iglesia en su jurisdicción¹¹⁷. Hacia 1764 se encausó a Antonio Cabo, afincado en Barcarrota, por robar en la iglesia de la localidad los objetos de plata de culto,

elevándose los autos a Granada por estar pendiente la resolución de un recurso de fuerza del cual pretendía beneficiarse el reo.

De la sucinta exposición de estos casos cabe colegirse que tales actos sacrílegos son mayoritariamente producto de la desesperación de los más indigentes y perpetrados en lugares ajenos a los de su vecindad habitual, siendo aparentemente incomprensible desde la óptica actual la actitud de los jueces apostólicos al amparar a tales delincuentes, anteponiendo el derecho de asilo a la purgación de sus culpas a través de la justicia real, seguros en cambio de la perdición eterna de sus almas. La realidad era que en un contexto en el que la Iglesia se creía amenazada por el regalismo borbónico parece considerarse preferente la afirmación de sus recortadas atribuciones jurisdiccionales respecto a la administración laica que el condigno castigo terrenal y erradicación de tales desafueros.

Producto de la desesperación o de una opción -premeditada o forzosa- de vida, lo cierto es que amplias capas poblacionales viven eventual o permanentemente en los márgenes de la legalidad, a un paso de una clandestinidad a la que factores endógenos o exógenos podían precipitarlos en cualquier momento. Lejos de ser conscientes de esta situación, quiénes se hallaban en esta difícil textura pretenden justificarla refugiándose en valores tan dispares como la autoafirmación de su ego, recurriendo a la criminalidad aduciendo razones de supervivencia o negándose a reconocer dolo en su conducta, bien por no acatar las autoridades que la imponen, negar legitimidad a la norma conculcada, bien apelando a la novedad de tales directrices.

9.3. LOS GITANOS Y LA HERMANDAD VIEJA DE CIUDAD REAL.

La comunidad gitana, grupo humano de origen indoeuropeo desplazado de su ancestral lugar de asentamiento, empieza a aparecer en Europa en pequeñas bandas hacia el siglo XV. En un principio concita la curiosidad y el respeto -no exento de temor- por parte de la población debido a su exotismo y supuestas dotes adivinatorias, nunca desmentidas por tales sujetos. Pero, paulatinamente, y a la par que iba aumentando su número, empieza a ser considerada una minoría problemática en los lugares donde decide permanecer de forma más o menos estable.

En la Corona de Castilla comienzan a instalarse los primeros grupúsculos gitanos durante el reinado de Enrique IV, contribuyendo el esplendor del Siglo de Oro a atraer a mayores contingentes poblacionales, pese a las reiteradas providencias segregacionistas dictadas por los últimos Trastámara y sus continuadores, los Austrias Mayores. En los siglos XVII y XVIII se extremarían las disposiciones legales específicamente dirigidas al control cuando no a la simple extirpación de una minoría que daba ostensibles muestras de su ingobernabilidad efectiva, oscilando los intentos de la administración desde la más severa coerción a su siempre frustrada asimilación, pasando por la negación de su existencia al asignarles el eufemístico calificativo de castellanos nuevos para diferenciarlos de una mayoría social pretendidamente homogénea¹¹⁸.

Los gitanos, siempre que pudieron, se dedicaron a la compraventa de caballerías, trueque de bestias, esquileo y herraje de cabalgaduras y

trabajos marginales como espartería, cestería, confección de tejidos, hilandería, hojalatería, empleándose como taberneros, braceros, buhoneros, etc¹¹⁹; es decir los que permiten llevar una vida errante o cuanto menos caracterizada por frecuentes desplazamientos; su religiosidad es calificada de sospechosa por muchos cristianos viejos al saberse cuajada de supersticiones, teniendo a los ojos de todos unas peculiaridades ético-culturales marcadas, y siendo interpretada su inasimilación laboral como ociosidad, por lo que comúnmente se granjearán la reputación de delincuentes menores e impíos.

Frente a esta predisposición negativa generalizada contra los gitanos, ya en los siglos XV y XVI, pero sobre todo luego en las centurias posteriores, puede afirmarse que las Hermandades Viejas y los jueces de comisión son prácticamente los únicos que tratan seriamente de hacer cumplir las disposiciones prescritas por las reales pragmáticas contra tal contingente poblacional¹²⁰. En efecto, las acusaciones veladas de cuadrilleros y comisarios respecto a la impunidad con la que se desenvuelven los gitanos son frecuentísimas, a menudo justificadas por la pasividad o el abierto amparo prestado por las autoridades locales y la Iglesia. Las razones últimas de este hecho, cuanto menos curioso, son múltiples: sometimiento de determinadas comunidades gitanas a los poderes fácticos del lugar¹²¹; protección ofrecida por clérigos y personas piadosas como reflejo de la caridad cristiana hacia los miembros más menesterosos y asimilados de dicha minoría¹²²; connivencia con los magistrados y alguaciles, ocasionalmente por razón de intereses inconfesables¹²³; temor a sus correrías que pueden llegar a inhibir determinadas actuaciones judiciales¹²⁴; y un largo etcétera en el que confluyen en igual medida la desconfianza mutua con los recelos atávicos hacia quienes mantienen marcadas diferencias respecto a la mayoría.

En la segunda mitad del Seiscientos comienzan a redoblar los procesos contra los gitanos por parte del Santo Tribunal manchego: en 1652 se fugan de la cárcel de Carrión de Calatrava cinco castellanos nuevos, presumiblemente sobornando a sus guardianes¹²⁵, y otro tanto sucede en Villahermosa en 1662¹²⁶; hacia 1658 eran encartados Francisco Ramírez, Sebastián de Acosta, Alonso de Guzmán, Pedro Galán, Francisco Asensio y Antonio de la Parra¹²⁷; en 1662 estaban presos del Santo Instituto Juan García de la Torre, Juan Fernández Rosales, Francisco Tello, Francisco de Malla, Pedro Galán y Diego de los Reyes¹²⁸; y en 1683 ingresaban en la cárcel hermandina los afincados en Yeste, Gabriel Gómez y Manuel Fernández¹²⁹; deteniéndose en 1695 a Juan Bautista Arbo y Diego Jiménez por tenencia ilícita de armar cortas, remitiendo al primero a Granada y al segundo a Úbeda para su enjuiciamiento¹³⁰.

Progresivamente se restringieron los espacios dejados para que sobreviviese esta comunidad, sumandose a la automarginación de sus propios miembros una xenofobia generalizada por parte de la población. Un ejemplo: si en 1678 unos gitanos arrestados, al serles imputados diversos hurtos y homicidios en La Mancha, aún pueden declarar que

"...por el día del Corpus pasado deste año se juntaron todos en la villa de Alcazar para hacer unas danzas...asta que de poco tiempo a esta parte fueron citados para venir a danzar en fiestas de Nuestra Señora del Prado desta Ciudad -Real-..."

Al ser reclamados por los mismísimos don Cristóbal Treviño y don Cristóbal Velarde -capitulares ciudarrealeños y hermanos de la Fraternidad apícola-¹³¹; décadas después esta situación es impensable, y así cincuenta años más tarde una misiva del presidente del Supremo

Consejo prohibía las danzas de gitanos para evitar los escándalos que solían acontecer en tales solemnidades religiosas¹³².

En las postrimerías del Seiscientos aumentó la presión socio-política contra la citada comunidad. En 1690 un testigo de cargo de Membrilla declaraba en el pleito incoado a cuatro vagabundos gitanos

"...aunque el testigo determinadamente no puede decir si an cometido algun robo o salteamiento tuvelos porque biben de urtar por la mala fama que semejante genero de gente tiene y le parece sera mas del serbizio de Dios limpiar la tierra de ellos pues... ninguno puede ir con seguridad por los caminos."¹³³

En este sentido, las pragmáticas de 1692 y 1695 suponen el reconocimiento del fracaso de las justicias y la asunción de la inoperancia de las anteriores normativas sobre gitanos, permitiendo ahora a los ministros de todas las jurisdicciones proceder contra ellos indiscriminadamente, recordándose en 1705 el preceptivo encartamiento en la instancia que los aprehendiese, sin necesidad de consultar sus fallos a los tribunales superiores.

Los Borbones encararon el problema planteado por esta minoría mediante medidas severísimas, continuistas de las arbitradas por sus predecesores, dejando al Triple Instituto gran parte del peso de la represión y prevención de sus supuestos desafueros¹³⁴. Las extralimitaciones por una u otra parte serían notorias, ya que incluso los gitanos asimilados serán el objeto inquisitivo de los cuadrilleros: en 1714 eran arrestados el anciano Juan Tirado con sus dos hijos de corta edad cuando se dirigían a Aldea del Rey a esquila unas mulas, haciendo por el camino algunos trueques pero constando entre sus licencias el reconocimiento formal de su condición de cristianos viejos, viviendo del acarreo de la leña, usuarios de "traje

castellano y en lengua de tal", siendo por ello únicamente apercebidos para que se sujetasen al sistema de licencias que controlaba sus movimientos¹³⁵.

El grado de postración legal y social ante las arbitrariedades tanto de las justicias como de sus propios convecinos era impresionante. En 1717 testificaban en la sala capitular hermandina dos gitanas detenidas en Villacañas -Toledo- cuando volvían de Villanueva de los Infantes de cumplir una promesa; se trataba de una viuda que vagaba con sus nueras e hijos por Extremadura desde que se escaparon del regimiento de gitanos en que fueron encuadrados éstos para la guerra contra Portugal, asegurando que vivían del esquileo de caballerías, el porteo de leña y otras ocupaciones semejantes, por lo que serían deportadas al país vecino¹³⁶. En 1718 Juan de Heredia y su suegro serían encarcelados por concurrir a ferias y mercados malagueños, usar indumentarias gitanas, esquilar bestias, transportar tejas y ladrillos, vendiendo las canastas que confeccionaban sus esposas y haciendo trueques, incumplimiento en todo la reciente pragmática promulgada el 30 de agosto de 1717¹³⁷.

Ante la prohibición legal que pesaba contra sus actividades tradicionales su respuesta fue triple: la integración a la mayoría cristiano vieja, con todas las consecuencias que ello comportaba de aceptación de sus pautas de convivencia y supeditación incondicional a sus actitudes segregacionistas; encubrir sus oficios y comportamientos ancestrales bajo la apariencia del supuesto acatamiento de las normativas impuestas; o autoexcluirse de la sociedad, viviendo gregariamente en bandas armadas, vagando por el descampado atemorizando a transeuntes y expoliando a los habitantes del yermo.

Entre los primeros y los segundos caben incluir los casos antes apuntados del Setecientos y a la mayoría de la comunidad gitana, consciente de la indefensión real en la que se encontraban, tomando vecindad e intentando acomodarse a una forma de vida sedentaria, desempeñando oficios marginales que les aseguran una precaria subsistencia, afrontando el menosprecio y la intransigencia en el núcleo poblacional donde deciden asentarse.

Pese a la dispersión documental existente hemos seguido los pasos de una cuadrilla gitana integrada por Andrés Díaz Palacios, su mujer Teresa Asensio, sus dos hijos, Manuel González, su yerno Joseph Nieto y su cónyuge Josefa Palacios, Manuel Montoya "el Valenciano", Antonio Losada, sus hijos Mariana y Diego Losada, Diego Asensio y su esposa Manuela Díaz con su prole de seis hijos, Miguel Asensio y Margarita Gracia, oriundos la mayoría de ellos de La Solana y de Villanueva de los Infantes y que hacia 1721 habían logrado tomar vecindad en la capital manchega, solicitando y obteniendo algunos de ellos el estatuto de castellanos viejos entre 1728-1730¹³⁸. El citado patriarca, Andrés Díaz Palacios, natural de Puebla de Alcocer, tenía a sus espaldas una intensa y accidentada existencia: preso en la cárcel de la Real Audiencia de Sevilla durante un año, fue restituido a sagrado en 1724, de donde huyo a caballo disfrazado de eclesiástico, siendo luego capturado en el camino de Santa Olalla con los bienes hurtados a un clérigo; amonestado y llevado a un presidio gaditano, se acoge al sagrado de la propia capilla de la penitenciaría; extraído con engaños de la ermita de la Guaitoca, en 1725 se encontraba en la galera hermandina conducido por una nutrida comitiva de comisarios andaluces¹³⁹, intentando una frustrada evasión aserrando sus grillos¹⁴⁰. En abril de 1726 era devuelta toda la cuadrilla a sagrado, pese a manifestar los alcaldes haberlos apresado en profano y que

aunque hubiesen quebrantado la inmunidad eclesiástica la bula pontificia le negaba indulto transcurridos dos años del hecho. En verano del citado año se notificaba que Andrés Díaz Palacios y su cuñado habían sido avistados cerca de Puebla de Alcocer, atemorizando cortijos y aldeas, amedrentando ganaderos y extorsionando a los arrieros, robando el caballo a un religioso para abandonar el convento de San Francisco donde estaban asilados¹⁴¹; dos años después asolaban los reinos de Murcia y Granada, siendo amparados por la justicia de la villa de Güeciza¹⁴². En octubre de 1732 el corregidor ciudarrealeño, a quien le estaba encomendado su control, es informado por un ministro hermandino de que los gitanos antes mencionados se hallaban en Alhambra -Ciudad Real-, despachando auto de prisión y embargo¹⁴³, intentándoles retirar sus cédulas de vecindad, pero los gitanos vueltos a la capital manchega se refugian en el convento de la Purísima Concepción, protestando ante el Consejo de Castilla por lo que interpretan perniciosa actuación del corregidor, apelando a su recién adquirido status de castellanos viejos¹⁴⁴.

Cuando a principios de 1745 los también gitanos Manuel Lozano y Manuel Gutiérrez pretendiesen tomar vecindad en Ciudad Real, teniendo en cuenta los excesos anteriormente expuestos, deberán hacer descripción jurada de sus bienes y caudales, dando cuenta de la casa que tomaban para vivir y obligándose a informar puntualmente de todos sus movimientos y cambios de residencia al corregimiento¹⁴⁵.

La eficacia del Santo Instituto manchego era tan patente a estas alturas de la centuria que, en 1740, la familia de Luis de Montoya, afincada desde hacía dos décadas en Villanueva de los Infantes, para continuar gozando de su vecindad declaraba su procurador que nunca habían sido encausados sus miembros por los dependientes del Santo

Tribunal "que persiguiendo como siempre a perseguido a los gitanos dañosos en las republicas...jamás a perturbado a mis partes"¹⁴⁶.

Lo habitual es que los castellanos nuevos optasen por la segunda de las posibilidades; así, no faltan los que habiendo tomado vecindad y afirmando tener oficios honrados, interrogados luego por los cuadrilleros en despoblado aseguran ser "de profesion gitano". Éstos debían decidir si actuaban por su cuenta o si se ponían bajo la protección, o la tolerancia al menos, de algún determinado justicia o hacendado local, plegándose a sus exigencias. Entre los primeros destacan quienes se hacen pasar por comisarios hermandinos para portar armas y vagar libremente por caminos o yermos¹⁴⁷, y los que se aprovechaban de su servidumbre en posadas o mesones para, fingiéndose incluso por ministros del Santo Instituto¹⁴⁸, poder perpetrar sus fechorías¹⁴⁹. Los segundos debían contar, para no verse importunados por la justicia local, con valedores en la comarca donde actuaban para que en caso de necesidad pudiesen interceder en su favor cuando la tolerancia por parte de los magistrados o sus alguaciles se trocase en persecución; dicha tolerancia es ostensible en amplias zonas de Andalucía, particularmente en las áreas rurales donde su densidad poblacional es mayor, permitiéndoles conservar sus tradiciones ancestrales a cambio de no cometer excesos notables y de servir como temporeros en las faenas agrícolas comarcanas.

Yendo por Ronda -Málaga- en 1718 una partida hermandina encabezada por el ministro superior malacitano don Diego Melgarejo y Mena, y secundada por un receptor de la Real Chancillería tras unos delincuentes, comunican a Ciudad Real el fracaso de sus diligencias, hallando en cambio a numerosos gitanos de Sevilla, Córdoba, Antequera y Jaén trocando cabalgaduras, contraviniendo la pragmática de 1717,

excusándose su alcalde mayor de instruir sumaria contra ellos aduciendo que dichos gitanos gozaban de idéntico privilegio que los naturales de la localidad para concurrir con sus tratos a la feria. Sintiendo burlados los comisarios, éstos achacan su actitud obstruccionista a que la noche anterior habían detenido a un rondín de la Renta de Tabacos local al confundirlo con un desertor, motivando el malestar de las autoridades concejiles, quienes reprenden a los paisanos que reforzaban la partida hermandina por llevar armas prohibidas y recomiendan al ministro superior que no se excediese en su comisión. Informado el Consejo de Castilla de la pasividad del alcalde mayor de Ronda ante los aludidos gitanos, impone una sanción de cien ducados contra su titular, apelando el justicia a la Corte argumentando haber estado en todo momento presto para colaborar con los dependientes manchegos y ser incierto su patrocinio a los gitanos, a los que siempre que podía perseguía con saña. Mientras tanto, tres gitanos andaluces, dos de ellos herreros, permanecían en las cárceles locales, y ante la evidencia de la tolerancia hacia los castellanos nuevos en la comarca malagueña, el Supremo Consejo nombra juez pesquisidor a don Pedro de Reina -relator de la Chancillería granadina-, quien entre 1718-1723 sanciona a las justicias ordinarias de Cartajima, Igualaja, Azozáina, Yunqueras, El Burgo, y Zúcar con la privación perpetua de sus oficios y la pérdida de la mitad de sus bienes en concepto de gastos de justicia y pena de cámara¹⁵⁰.

En el sentido opuesto, el celo con que se conducen algunos comisarios en castigar sus supuestos excesos conduce a veces a que se abuse de un título para su propio lucro. Por continuar en la misma zona, el Miércoles Santo de 1736 unos vecinos de Ronda que acarreaban leña se cruzaron con cuatro gitanos que huían apresuradamente montados en unos asnos; horas después se toparon con unos comisarios

ciudadarrealenos que iban en su busca, obligándose a uno de los paisanos a servir de guía a dichos ministros. Alcanzados los perseguidos, son apremiados a detenerse en nombre del Rey, e interceptados los comisarios les muestran sus títulos para que les entreguen sus espadas; el guía reconoce ser los aprehendidos hombres de bien, mediando por ellos, y logrando los arrestados excusarse de mayores males entregándoles treinta reales en aras de un supuesto "refresco y ayuda para herrar los caballos". En abril del citado año, los extorsionados presentan queja en tal sentido ante el alcalde mayor de Ronda, acreditando sus respectivas fes bautismales y el auto que les confería status de cristianos viejos¹⁵¹, pese a lo cual son apresados los gitanos en cuestión por los alguaciles ante la inhibición de los sobornados.

Desde Estepona se comunica al Santo Tribunal que los títulos despachados a favor de Miguel Ángel Infante y a su hijo Benito¹⁵², no eran ajustados a derecho, por haberse recurrido a notario forastero, ya que sus antecedentes personales dejaban mucho que desear, habiendo permanecido en Gibraltar tras caer en manos británicas y efectuar desde allí frecuentes rapiñas de ganados así como contrabandos, siendo su origen genovés y ser público que su hermana despacha legumbres y licores en una taberna, concurriendo asimismo la eventualidad de que había en la villa otros tres comisarios de la Hermandad manchega aparte de los expresados¹⁵³. Conocedor de la misiva el ministro superior de Ronda, don Francisco Gutiérrez, el mismo día escribe un memorial a sus superiores informando que por haberse excarcelado a dichos gitanos se juntaron más de ciento cincuenta a la feria de Morón, exponiendo sus fricciones con el asistente de Sevilla y negando veracidad a la acusación formulada contra él por los detenidos en Ronda. El 5 de octubre de 1736 eran retirados los títulos a los jueces

comisarios de Estepa indiciados en el presunto soborno y unas semanas después una carta orden del Consejo de Castilla dictaba el castigo correspondiente a comisarios y gitanos infractores¹⁵⁴, confiando a las autoridades la ejecución de tales diligencias. En diciembre siguiente un juez superior sevillano delegaba en su homólogo don Bernabé de Molina el cumplimiento del auto de prisión y embargo a los comisarios de Estepona, pretextando achaques para montar a caballo, y días más tarde junto a un escribano público y un juez comisario comarcano proceden contra padre e hijo, encarcelándolos en la prisión local y denegándoles la libertad bajo fianza¹⁵⁵. El 4 de enero de 1737 llegaban los encartados a la ciudarrealeña puerta de Granada, siendo recibidos los reos por los alcaldes hermandinos, un escribano corporativo y varios cuadrilleros, quienes le conducen a las celdas de la sede apícola. Nombrado de oficio el ministerio fiscal, el juez superior don Francisco Gutiérrez es declarado en rebeldía al ignorarse su paradero. Los autos originales permanecieron en Estepona y siete meses después aún eran ratificados los testimonios sumariales efectuados en Málaga¹⁵⁶. Desconocemos cual fue la sentencia, pero probablemente no pasaría de una sanción pecuniaria, la retirada perpetua de sus títulos y el apercibimiento privado para que moderaran su irregular conducta.

Asimismo, casi siempre que los gitanos proscritos o errantes asumen su condición de perseguidos por todos los medios a su alcance, intentarán escapar de una condena segura o, cuanto menos, de un mal trance: en 1718 unos gitanos lusitanos se amparaban en la proximidad de la cercana frontera para perpetrar sus fechorías en toda la línea limítrofe con la Corona de Castilla entre Ayamonte y Extremadura, huyendo luego con sus rapiñas a sus bases operacionales, llegando a actuar en nutridas cuadrillas y robando incluso a sus hermanos de

étnia¹⁵⁷; otros vagaban disfrazados para evitar los contratiempos con las justiciase¹⁵⁸; la mayoría se asilaban en iglesias y ermitas cuando se veían acosados por cuadrilleros o alguaciles de diverso signo¹⁵⁹; algunos daban a sus hijos varones nombres típicamente femeninos para eludir quintas¹⁶⁰; en suma, todos pretendían escapar de una u otra forma de la asfixiante actitud inquisitiva y xenófoba de que eran objeto, aunque no siempre lograran su pretensión de quedar fuera de las redes de la indiscriminada justicia de la época.

9.4. DIMENSIÓN REAL DE LA DELINCUENCIA Y SU COERCIÓN.

Tradicionalmente la historiografía ha considerado la Edad Moderna como un periodo violento producto de una sociedad militarizada y convulsionada por multitud de factores desestabilizadores de todo orden. La realidad es que el tejido social estaba habituado a un proceder, cuanto menos, agresivo: palizas conyugales, cencerradas nupciales que terminan en reyertas, venganzas sangrientas en defensa del honor familiar, una vida fuera de los hogares que facilita la publicidad de las disputas, particularmente en las pequeñas comunidades rurales donde era inútil guardar un secreto; vecindarios predispuestos a intervenir o tomar partido en las mismas de acuerdo a la red de solidaridades locales imperantes; reputaciones perdidas que acaban en bodas forzadas; enemistades vecinales saldadas con pedreas; vulnerabilidad de la precaria situación de los pecheros a las exacciones fiscales o a las arbitrariedades de los 'poderosos que hallan en la algarada la válvula de escape por excelencia ante la opresiva tensión estamental; embriaguez y juegos de azar que dan lugar a pependencias pasionales; etc, son las formas habituales en que suele expresarse el difícil y sutil equilibrio existente en todos los ámbitos del comportamiento, ya sea político, administrativo, municipal, corporativo, familiar o interpersonal.

Estos elementos de violencia, algunos de ellos tolerados si no admitidos, aunque la mayoría reprendidos por los mecanismos de coacción externos -administración, Iglesia- e internos -solidaridad de grupo, fraternidades familiares, religiosas y profesionales- que pretenden restablecer la difícil correlación de fuerzas existente para

garantizar la restitución del derecho lesionado, satisfaciendo al agraviado y obviándose a menudo acudir a una justicia considerada como recurso último al que acudir cuando no hay otra forma viable de conducta para salvaguardar la necesaria paz social. Los denominados casos de hermandad se hallan en su mayor parte ajenos a este amplio espectro procedimental extrajudicial más o menos tolerado, situándose en un ámbito de interrelación humana basado en el uso de la fuerza pública, es decir del recurso al poder real sancionado por las leyes divinas y humanas y comúnmente aceptado por todos como garante último de los intereses del Reino y de sus vasallos.

El campo actuacional de la jurisdicción hermandina entra en de lleno en el mantenimiento de la seguridad y erradicación de prácticamente cualquier desorden público en despoblado, encomendándole a sus ministros el siempre difícil objetivo de hacer respetar la justicia en el medio rural, contando para ello con unos recursos humanos insuficientes y con unos resortes jurídico-procedimentales adecuados aunque asistemáticos y a menudo conculcados tanto por sus potenciales colaboradores como por sus propios miembros. Producto de la infradotación de medios y a la acostumbrada obstaculización de su ministerio es la inevitable impunidad que gozan la mayoría de los infractores, esforzándose en compensar el carácter excepcional de su actuación con la ejemplaridad de sus sentencias.

Por otra parte lo que podríamos denominar idiosincracia rural, caracterizada por el asumido sentimiento de aislamiento, inseguridad y autarquía, tiende a encontrar un equilibrio defensivo en los elementos activos a su alcance: la defensa a ultranza de sus intereses económicos, mayoritariamente ligados a la tierra, y su férrea disciplina interna frente a las agresiones exógenas. Las tensiones

notables carencias jurídico-administrativas coetáneas y la desfavorable coyuntura de los tiempos. Los siglos XVII y XVIII se prestaban a todo tipo de arbitrariedades que llegarían a caracterizar la administración de justicia en este marco histórico contradictorio y agitado.

A lo largo del periodo que nos ocupa es perceptible un cambio en la orientación de la política represora del Santo Tribunal ciudarrealeño, a tenor de los imperativos concretos que mediatizan su actuación. En los primeros años del Seiscientos se siguió esencialmente la corriente iniciada en el Quinientos de extender su jurisdicción a los delitos menores como ofensas rurales y pequeños delitos contra la propiedad, para, a partir de 1630, hacerse cargo de la represión de un bandolerismo en alza que parece resurgir al mostrarse ostensible la decadencia de la Monarquía Católica; en los años en los que la Guerra de Sucesión incide con más fuerza en su circunscripción territorial se orientará, en cambio, a la coerción sobre la masa de desarraigados por la contienda que infestaban caminos y campos, manteniéndose unos altos niveles de conflictividad generalizada hasta 1720 aproximadamente, cuando parece corregirse esta delincuencia marginal producto de la contienda; a partir de entonces, y durante todo el Setecientos, dos serán los objetivos básicos de la entidad manchega: la defensa de la propiedad y el control de la minoría gitana, en cierto modo secuela de la primera.

Es prácticamente imposible cuantificar el grado de efectividad de esta organización jurídico-policial, pues a la valoración de sus actuaciones hay que sumar su innegable efecto disuasorio en amplias áreas geográficas, faltando en todo caso la documentación precisa para adelantar conclusiones absolutas al respecto. Sí podemos asegurar

respecto a las primeras que se evidencia que el volumen de detenciones es relativamente elevado, si bien este primer balance puede estar distorsionado por el hecho de que casi siempre que parten sus ministros en comisión de justicia se realiza algún arresto o embargo, aunque no se tratase de la persona buscada, bien para justificar ante sus superiores su celo en la labor encomendada o/y por la enorme discrecionalidad de su proceder¹⁶³. Es también constatable que cuando algún integrante o deudo de la Santa Hermandad se ve perjudicado por alguna comisión delictiva se extremen las diligencias para poner a los responsables o sus cómplices ante la audiencia hermandina¹⁶⁴, siendo invariablemente la pena impuesta tanto mayor cuando más marginado socioeconómicamente sea el enjuiciado¹⁶⁵.

Los delitos atroces raramente serán infravalorados u olvidados. Habiéndose encartado en 1654 a una partida de bandoleros, a fines de 1669 se capturaba en Herencia al cómplice del robo cualificado perpetrada por dicha partida quince años atrás¹⁶⁶; en 1700 se procesaba a un vecino de Malagón que había asesinado hacía cuatro años a un guarda de montes y maltratado a otro en la daimieleña dehesa de Zacatena¹⁶⁷; y aún mas extraordinaria es el arresto de Mateo Castro, a quien se le imputaba el homicidio de un francés en las cercanías de la venta del Torno -Porzuna- hacía diecinueve o veinte años (1)¹⁶⁸.

Por lo que atañe a su efectividad disuasoria las noticias son contradictorias. Mientras que la documentación institucional del propio Santo Tribunal hace hincapié en su importante y visible labor preventiva¹⁶⁹, las instancias enfrentadas con la organización apícola ponen el acento diametralmente opuesto¹⁷⁰, pasando por los datos existentes en el Consejo de Castilla siempre vigilante en el cumplimiento de sus institutos a las entidades bajo su órbita.

Seguramente entre apreciaciones tan dispares lo único que nos queda es consignar que una entidad de tan dilatada vigencia cronológica como extenso marco de implantación territorial estaría estrechamente sujeta al devenir de los tiempos y a su propia evolución corporativa. Probablemente la mayor efectividad y expeditividad de esta asociación apícola halla que buscarla en los siglos XIII al XV, cuando prácticamente se erigía como la única fuerza supralocal garante de la seguridad en despoblado en los extensos yermos de la meseta meridional; la expansión de su área actuacional durante los siglos XVI y XVII, al albur en mayor medida de la debilidad de entidades semejantes y de su prestigio pasado que de su auténtica efectividad coercitiva, traería como secuela un siglo XVIII en el que los resultados serían mediocres pese a los notables esfuerzos encaminados por encauzar racionalmente su desproporcionada "inflación de títulos". La atomización de los efectivos hermandinos sería tal que un control efectivo de los mismos excedía con mucho sus propias posibilidades, al heredar esencialmente los mismos resortes jurídico-administrativos de los que había disfrutado en tiempos pasados; las innovaciones introducidas desde el reinado de los Reyes Católicos siempre fueron a remolque de los acontecimientos, resultando en la práctica insuficientes para cubrir unas necesidades tan complejas como desarticuladas en la España del Antiguo Régimen.

Solamente en las cercanías de la sede del Santo Tribunal apícola es perceptible su continuada labor coercitiva ejercida por sus ministros, en tanto que a lo largo del Setecientos paulatinamente iría tomando cuerpo la conciencia de que su capacidad para asumir los nuevos retos que le planteaba una sociedad en cambio eran imposibles de cubrir ante la descoordinación de las fuerzas de seguridad públicas. En 1761, cuando hacía unos lustros que ya se había mostrado ineficaz la presión

antigitana suscitada por la real pragmática de 1749, los alcaldes manifiestan su imposibilidad de hacer frente a las misiones requeridas desde la Corte por cuestiones meramente estructurales, diciendo estar el presente "con gran numero de presos, y sin calabozos correspondientes para que se custodien segun corresponde"¹⁷¹, aunque por descontado no admitían públicamente que su labor, presidida por la inercia procedimental, contribuía a agravar esta caótica situación.

Por último, no sólo sería inexacto sino engañoso, comparar cuantitativamente los logros obtenidos por la Hermandad Vieja manchega con la tarea desempeñada por otros tribunales locales o territoriales de la Monarquía Católica debido a su propia especificidad y las adversas condiciones en la que hubo de desempeñarlas. Algo más realista, con todos los matices y precauciones, sería parangonar procedimientos y resultados con la tarea llevada a cabo por sus homónimas de Toledo y Talavera -particularmente la primera-, aquejadas de los mismos defectos formales aunque asimismo con particularidades que condicionan su desarrollo paralelo, no siempre convergente. Los datos que disponemos al respecto son parciales, y por lo tanto meramente orientativos, aunque creemos que esclarecedores: entre octubre de 1680 y enero de 1682 la fraternidad toledana reconocía haber condenado a veintiséis reos a galeras, presidios y minas; mientras desde 1692 a 1716 se había procedido en dicha corte de justicia a ciento veinte delincuentes, únicamente ocho de los cuales son calificados sin ningún género de dudas como gitanos¹⁷². Teniendo en cuenta que a este número habría que sumar las diligencias infructuosas y los reos absueltos, así como los únicamente condenados a penas aflictivas corporales o pecuniarias sus logros globales pueden considerarse en ese periodo concreto de tiempo como ligeramente superiores a los alcanzados por el Santo Tribunal de Ciudad Real durante el mismo periodo¹⁷³. A partir de

esas fechas es perceptible un cierto giro en esta tendencia, cayendo el número de los encartados por la corporación apícola de la Ciudad Imperial en relación al fluctuante, pero sostenido, incremento de la actividad desarrollada por la entidad manchega¹⁷⁴, estabilizada mediada la centuria como lo demuestra que entre el 1 de octubre de 1763 y el 20 de marzo de 1765 los ciudarrealeños habían instruido diecisiete procesos criminales frente a los seis tramitados por los toledanos¹⁷⁵. En la década de 1770 la diferencia entre ambas instituciones se incrementa, consignándose en un memorial elevado en 1773 a los Reales Consejos por el cabildo hermandino ciudareraleño que dos años a esa parte habían encausado a

"...algo mas de veinte personas, con execucion de sus respectivas sentencias de azotes, tortura y otros, existiendo actualmente en sus Reales Carzeles, diez y seis reos de graves delitos, e con otros que estan mandados conducir -a sus celdas- ..."¹⁷⁶.

Sin contar con la certidumbre de que por entonces destinaba parte de sus rentas a gratificar a individuos para que realizasen rondas por Ciudad Real y extramuros de su casco urbano¹⁷⁷. Espoleados por su ventajosa y solvente situación financiera e institucional, los ministros manchegos seguirán ostentando unos relativamente elevados índices de actividad judicial y policial¹⁷⁸, hasta que el colapso financiero finisecular y el desvio de sus rentas al tesoro nacional en los albores del Ochocientos arruínase definitivamente la capacidad operativa de las Hermandades Viejas, reducidas prácticamente al recuerdo desde la invasión francesa hasta su abolición formal en 1835.

NOTAS AL CAPÍTULO 9.

¹ AHN. Div. Her., leg. 58, nº 5.

² Ib., leg. 58, nº 8.

³ Ib., leg. 59, nº 5.

⁴ Un ciudadano británico recapacitaba sobre el periplo de sus viajes a finales del siglo XVIII, que en el camino real entre Madrid y Sevilla:

"Constantemente he observado, al viajar por España, que por doquier donde se teme peligro, los viajeros se reúnen en sociedad y forman algunas veces conjuntos considerables sin ninguna comunicación previa y sin ningún compromiso verbal de defensa mutua ni ningún otro lazo de unión más que el temor. Pero por esa sola razón unen sus fuerzas y hacen un acuerdo tácito para sostenerse los unos a los otros o por lo menos para intimidar a los ladrones por su número...De este modo escoltados seguimos nuestro viaje en confianza pero también en circunspección, esperando por lo menos descubrir a los bandidos que hacía poco habían robado sobre ese camino..."

Cit. J. TOWNSED, "Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787", en J. GARCIA MERCADAL, op. cit., t. 3, p. 1528.

⁵ 8/13-VI-1708 (AHN. Div. Her., leg. 39, nº 8).

⁶ 14-XI-1651, Almodóvar del Campo -Ciudad Real- (AMAC. caja 13, 1651, nº 2).

⁷ AHN. Div. Her., leg. 34, nº 4, f. 78vº.

⁸ Ib., s.f.

⁹ 24-IX-1711 (Ib., leg. 41. nº 13). Tal vez recordando estas infructuosas diligencias policiales, en 1726 dicho noble ordenó la salida de un ministro superior hermandino, tres jueces comisarios y otros tantos paisanos tras los pasos de Juan Núñez "Seis Uñas", asesino de un guarda de campo del duque y malhechor "sumamente temido en la Extremadura donde campaba como quería", siendo apresado al sur de la actual provincia de Badajoz; 30-XII-1726/4-VII-1727 (AHN. Consejos, leg. 38, nº 4).

¹⁰ 5-IX-1692 (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 205, ff. 86r-vº).

¹¹ 29-X-1692 y 6-IX/5-XI-1694, Ciudad Real (Ib., legs. 204, ff. 62r-vº; 208, ff. 62r-vº y 82r-vº).

¹² 18-XII-1718/26-I-1719 (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 3).

¹³ En los autos procesales se consigna que "dixo que todos los de Malagon heran ladrones", aludiendo al conocido adagio manchego de que "En Malagón, en cada casa un ladrón, y en casa del alcalde el hijo y el padre" ya recogido por M. ALEMÁN en *Guzmán de Alfarache*, t. 1 (1ª ed., Madrid, 1599), ed. B. BRANCAFORTE, Madrid, 1979, pp. 304 y ss.

¹⁴ 2/14-VI-1602, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 29, nº 3).

¹⁵ 5/14-1603, Ciudad Real (Ib., leg. 30, nº 3).

¹⁶ 16/17-V-1607 (Ib., leg. 32, nº 1).

¹⁷ vid. apéndice documental, texto nº 17.

- ¹⁸ AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 71r.
- ¹⁹ Auto de prisión y embargo, 8-XI-1756, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 50, nº 22).
- ²⁰ 31-VIII-1724, Ciudad Real (Ib., leg. 45, nº 10).
- ²¹ 4-VII-1632, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 192, ff. 167r-vº).
- ²² 23-VIII/17-XI-1728 (AHN. Div. Her., leg. 47, nº 5).
- ²³ 18-V-1610, Ciudad Real (Ib., leg. 31, nº 4).
- ²⁴ 11/19-VI-1708 (Ib., leg. 40, nº 8).
- ²⁵ Hasta fines del Setecientos la jurisprudencia no empieza a distinguir en la práctica entre ambos términos, aunque ya en el Ordenamiento de Montalvo se diferenciaba conceptualmente entre ambos supuestos legales, siendo el uso de la fuerza el elemento diferenciador. En este sentido, la Novísima Recopilación y la doctrina ilustrada apenas contemplaba distingos entre hurto y robo, considerándolos como un mismo delito en distinto grado de gravedad; vid. G. RODRÍGUEZ MOURULLO, "La distinción hurto-robo en el Derecho Histórico español", en *AHDE*, nº 32 (1692), pp. 25-111.
- ²⁶ 2/9-X-1675, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 38, nº 1).

27 A. ABIETACCI, "Les incendiaires devant le Parlement de Paris; essai de typologie criminelle (XVIIIe Siècle)", en AA.VV., *Crimes et criminalité en France. 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 13-32.

28	<u>DELITO</u>	<u>LOCALIDAD</u>	<u>AÑOS</u>	<u>REFERENCIA DOCUMENTAL</u>
	Incendio montes	Malagón	1510	AHN. Div. Her., leg. 24, nº 22
	Hurto de colmenas	Piedrabuena	1521	Ib., leg. 24, nº 26
	Incendio montes	Malagón	1602	Ib., leg. 29, nº 4
	Fuego en montes	Piedrabuena	1603	Ib., leg. 57, n 93
	Robo de colmenas	Malagón	1699	AHPCR. Protocolos Notariales, leg 208, ff. 97r-vº
	Incendio montes	Malagón	1715	AHN. Div. Her., leg 42, nº 6
	Hurtos de colmenas	Piedrabuena	1724/1727	ADPCR, s.c.
	Hurto miel y cera	Alcolea	1751	AHN. Div. Her., leg. 50, n 916
	Robo miel y cera	Piedrabuena	1754	Ib., s.f.
	Destrozo colmenas	Piedrabuena	1754	Ib., leg. 51, nº 16

29 Cf. J. ORLANDIS, "La Paz de la Casa en el derecho histórico español de la Alta Edad Media", en *AHDE*, nº 15 (1944), p. 143.

30 Ante dicho exceso el alcalde don Gaspar del Forcallo y Aguilera, junto a otros siete ministros más de hermandad partirán en su busca el 20-III-1765 (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 73vº).

31 A pesar de tales descargos será dondenado a ocho años de galeras, al pago de costas procesales, gastos de justicia y devolución de las cabalgaduras requisadas a sus legítimos dueños; 7-VIII/19-X-1606 (AHN. Div. Her., leg. 31, nº 2, ff. 216r y s.f.).

32 5-II-1684, Ciudad Real (AHPCR, leg. 204, ff. 6r-7r).

33 5-XI/3-XII-1694 (Ib., leg. 208, ff. 82r-vº y 103r-vº).

34 1-XII-1599/31-III-1600 (AHN. Div. Her., leg. 29, nº 1).

- ³⁵ 13-XI/14-XII-1607 (Ib., leg. 31, nº 3).
- ³⁶ 29-IV-1611 (Ib., leg. 32, nº 3).
- ³⁷ 15-IV/29-VII-1613 (Ib., leg. 32, nº 5).
- ³⁸ 28-II/19-VI-1618 (Ib., leg. 32, nº 10).
- ³⁹ 19-VIII-1631 (Ib., leg. 33, nº 5).
- ⁴⁰ 16-V/24-VI-1701 (Ib., leg. 39, nº 2).
- ⁴¹ 16-IX-1709 (Ib., leg. 41, nº 3).
- ⁴² 18-V-1610, Ciudad Real (Ib., leg. 31, nº 5, f. 71r).
- ⁴³ Se trata del comisario Juan Núñez Duarte, de 46 años de edad, quien declara que su oficio "era buscar su vida dezentemente" (Ib., leg. 39, nº 4).
- ⁴⁴ 24-XI-1705, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nº 8).
- ⁴⁵ Ib., leg. 41, nº 1, f. 25r.
- ⁴⁶ 8-XII-1708/3-II-1709 (Ib., leg. 41, nº 2).
- ⁴⁷ 28-VIII/5-XI-1711 (Ib., leg. 41, nº 14).
- ⁴⁸ 8-V-1715, Ciudad Real (Ib., leg. 4, nº 23).

⁴⁹ 29-X-1715, Jerez de la Frontera -Cádiz- (Ib., leg. 42, nº 9).

⁵⁰ Ib., leg. 45, nº 14,

⁵¹ Concurría también el hecho de que en la citada aldea conguense que no excedía los 50 vecinos había dos alcaldes de la Hermandad General, Joseph del Pozo -adscrito a la Hermandad apícola de Talavera- y un tal Adriano, dependiente a su homónima de Ciudad Real; 12-VIII-1718, Alcohujate (Ib., leg. 4, nº 28).

⁵² 12-VI-1719 (Ib., leg. 43, nº 12).

⁵³ En los autos incoados consta que "aunque fueron citados y repetida la instancia no vinieron con el resto de los ministros", encargándose a un ministro superior de Gibraltor que les exigiese el monto de dicha sanción; 22-IX-1718 (Ib., leg. 43, nº 11).

⁵⁴ 15-VI-1719 (Ib., leg. 43, nº 13).

⁵⁵ Título concedido el 17-VI-1720, requerido en agosto de dicho año; inserto en Ib., leg. 44, nº 3, ff. 32-33.

⁵⁶ 20-VIII-1722 (Ib., leg. 44, nº 11).

⁵⁷ 16-III/ 16-IV-1722 (Ib., leg. 4, nº 33).

⁵⁸ 26-VIII-1721, Valencia (Ib., leg. 44, nº 6).

⁵⁹ 23-VIII-1725, Ciudad Real (Ib., leg. 45, nº 17).

⁶⁰ Ib., leg. 46, nº 5.

⁶¹ 3-VI-1728 y 19-III-1729 (Ib., leg, nº 11 y 2).

⁶² Ib., leg. 51, nº 16.

⁶³ 6-IV/3-VIII-1745 (Ib., s.f.).

⁶⁴ 17 ó 19-V-1760 (Ib., legs. 4, nº 68 y 52, nº 2.

⁶⁵ Ib., leg. 60, nº 4.

⁶⁶ Ib., leg. 62, nº 1. Dicho comisario entre 1795-1796 se vería envuelto en otro escándalo, al ser acusado de robar cerdos de montanera en el término de dicha villa sevillana (Ib., leg. 62, nº 4).

⁶⁷ 10-IV-1782 (Ib., leg. 62, nº 2).

⁶⁸ 25-XI-1627/27-IV-1628 (Ib., leg. 34, nº 1).

⁶⁹ Abenójar, 1602 (Ib., leg. 29, nº 5); Malagón, 1715 (Ib., leg. 42. nº 6), Valdepeñas, 1747 (Ib., leg. 51, nº 16)...

⁷⁰ Aunque a lo largo del siglo XVIII mejoró parcialmente la solvencia socioprofesional de la oficialidad, no ocurriría otro tanto con la soldadesca, tan vilipendiada como insustituible en su servicio a la Monarquía. A este respecto, OYA Y OZORES, miembro destacado del Consejo de Guerra, señalaba atinadamente que

"En los reclutas voluntarios se admiten sin discreccion quantos vienen, porque como se hacen con el fin de completar los regimientos para devengar la gratificacion que por ello tienen los oficiales, no se paran en las costumbres y vida de los reclutas, sino en llenar el numero de sus compañías, y asi vienen al servicio hombres fugitivos, facinerosos o procesados por sus delitos, dejando no menos frustrada que agravada la justicia por parecerles ser la milicia el mejor puerto para la deshecha tormenta de sus almas."

Cf. *Tratado de levas, quintas y reclutas*, Madrid, 1734, cap. 2; cit.

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Barcelona, 1876, p. 82.

⁷¹ La ubicación de esta esta localidad extremeña de dicho regimiento no resulta casual, al unir a su condición de plaza fuerte estratégicamente cercana a Portugal la mala fama de sus moradores, de quienes el jesuita Pedro de LEÓN aseguraba a principios del Seiscientosque eran "gente de mala vida, foragidos, matadores y muchos mas sin confesar ni acordarse que son cristianos"; cf. *Parte Primera de las misiones*, Sevilla, 1619, ms., cap. 27, f. 86vº, cit. P. HERRERA PUGA, *Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro. Aspectos de la vida sevillana de los siglos XVI y XVII*, Granada, 1971, p. 431.

⁷² vid, apéndice documental, texto nº 18.

⁷³ 23-IV-1761 (Ib., leg. 53, nº 6).

⁷⁴ 10-IV/21-VIII-1709 (Ib., leg. 41, nº 5).

⁷⁵ 9-V/27-VII-1683 (Ib., leg. 37, nº 6).

⁷⁶ 3/15-XI-1716, Alosno y Safara (Ib., leg. 42, nº 10). a lo largo de la Edad Moderna se mantuvieron y estimularon acuerdos diplomáticos bilaterales que contemplaban la posibilidad de extraditar delincuentes

entre Castilla y Portugal (Nov. R., lib. 12, tit. 36, leyes 3 a 5). Desde 1569 la recíproca remisión de criminales entre ambos reinos admitía este supuesto en el caso de quienes "pasaran a otro Reino, llevando hacienda, o cosas urtadas, o robadas" (AHN. Consejos, lib. 1.481, nº 20, s.f.).

⁷⁷ AHN. Div. Her., leg. 51, nº 16. El citado reo y su esposa son víctimas de un curioso incidente suscitado por el alcaide de la galera hermandina. Vid. apéndice documental, texto nº 14.

⁷⁸ S.d. (ADPCR., s.c.).

⁷⁹ Vid. R.M. PÉREZ ESTÉVEZ, *El problema de los vagos en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1976, p. 37.

⁸⁰ 19-V/10-VI-1731 (AHN. Div. Her., leg. 47, nº 12).

⁸¹ 25/28-III-1741 (Ib., leg. 50, nº 1).

⁸² Ib., leg. 33, nº 1.

⁸³ Ib., leg. 40, nº 9.

⁸⁴ Ib., s.f.

⁸⁵ 3-I-1725 (Ib., leg. 45, nº 14).

⁸⁶ 14-IV/10-V-1725 (Ib., leg. 45, nº 15).

⁸⁷ AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 71r.

⁸⁸ 4-I/18-IX-1656 (AHN. Div. Her., leg. 35, nº 1).

⁸⁹ Ib., leg. 44, nº 6.

⁹⁰ 16-IV-1728, Quesada -Jaén- (Ib., leg. 46, nº 2).

⁹¹ Este fenómeno, motivado en el área y tiempo estudiado por razones puramente socioeconómicas, muy alejadas de las reivindicaciones político-estamentales de algunas cabecillas de la Corona de Aragón de tiempos pasados, pasó a adquirir una preocupante implantación durante los siglos XVII y XVIII al sur de la línea imaginaria formada por Extremadura, Montes de Toledo y Valencia. J. ZUGASTI señaló entre los apoyos recibidos por esta renovada delincuencia que:

"Despues del bandolerismo violento, y por así decirlo belicoso de los antiguos nobles y hombres de armas, al que los Reyes Catolicos pusieron coto por medio de la Santa Hermandad, llegó a operarse con el tiempo una trasformación tan importante como funesta, que consistía en que la curia amañaba de tal manera los procesos, que de nada servía la persecución armada..."

Cit. *El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas*, Madrid, 1877, t. 5, p. 69. Para una visión más actualizada sobre el tema vid. E. MARTÍNEZ RUIZ, "Estado y delincuencia a fines del siglo XVIII. Algunos datos sobre el bandolerismo anadaluz y su persecución", en *Del Antiguo al Nuevo Régimen. Estudios en homenaje al profesor Cepeda Adán*, 1986, Granada.

⁹² AHN. Div. Her., legs. 31, nº 3 al 6 y 32, nº 5.

⁹³ 6-II-1704, Murcia (Ib., leg. 41, nº 11).

⁹⁴ Ib., leg. 47, nº 8.

⁹⁵ Ib., leg. 51, nº 10 y 11.

⁹⁶ Acertadamente señala J. CARO BAROJA que los romances antiguos pueden servir al estudioso para tener un idea aproximada de la posición social del pueblo ante el crimen; cf. *Ensayo de la literatura de cordel*, Madrid, 1969, p. 147. Tal aceptación tuvieron dichas coplas que la Real Cédula de 21-VII-1767 prescribía que

"Para evitar las impresiones perjudiciales que resultan en el publico con la lectura de los pronosticos, romances de ciegos, y coplas de ajusticiados, se prohíbe por punto general que se puedan imprimir tales papeles, de ninguna utilidad a la publica instruccion."

Cit. S. SÁNCHEZ, *Extracto puntual...*, op. cit., t. 1, p. 79.

⁹⁷ El juez comisario manchego Martín Picazo Alba partió con 10 guardas escoltando al reo desde Saelices hasta Villamayor; entre Villamayor y Quintanar de la Orden le acompañaron 5 guardas y el reo atenazado por dos pares de grillos; en Alcázar de San Juan su alcaide local se niega a hacerse cargo del bandido, alegando problemas de seguridad por haber echo "fuga muchos presos quebrantando puertas"; de dicha localidad partirán hasta Villarta, y desde allí con diez guardas armados hasta Daimiel, llegando a continuación por tránsitos a Ciudad Real; 5/15-IV-1695 (Ib., leg. 38, nº 5, s.f.).

⁹⁸ Ib., f. 111vº.

⁹⁹ 8-VII-1693 (Ib., leg. 38, nº 9).

¹⁰⁰ Ib., leg. ff. 112r-vº.

¹⁰¹ Ib. leg. 113r.

- 102 3-X/14-XII-1696 (Ib., s.f. y AHPCR. Protocolos Notariales, legs. 205, ff. 126r-vº y 208, ff. 90r-vº).
- 103 10-I-1697 (Ib., leg. leg. 208, ff. 127r-vº).
- 104 25-I-1698 (AHN. Div. Her., leg. 38, nº 5).
- 105 24-III-1698 (Ib., f. 142r).
- 106 17-IX-1698 (Ib., ff. 216r-223vº).
- 107 Ib., legs. 21, nº 37; 36, nº 1; 42, nº 5; 45, nº 26, 26 y AHPCR. Protocolos Notariales, legs. 193, ff. 75r-vº y 205, ff. 68r-vº.
- 108 Ib., leg. 205, ff. 68r-vº y AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, f. 37r-38vº.
- 109 El juriconsulto J. BERNI Y CATALÁ escribía en el siglo XVIII sobre el sacrilegio que
- "Se comete de cuatro modos. El primero poniendo las manos ayradas contra clerigo, o persona religiosa. El segundo, hurtando o forzando cosa sagrada. El tercero, tomando cosa sagrada de alguna casa particular, donde se halle depositada; y el quarto hurtando cosa depositada de la Iglesia..."
- Cf. *Práctica criminal*, op. cit., lib. 1, cap. 30, p. 65.
- 110 15/26-IV-1711 (Ib., leg. 41, nº 12).
- 111 15-XI-1723 (Ib., leg. 45. nº 14).
- 112 15-V-1733/4-IV-1734 (Ib., leg. 48, nº 9).

- 113 7-XII-1744 (Ib., leg. 50, nº 5 y AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 554, ff. 55r-56vº).
- 114 19-V-1748, Herencia -Ciudad Real- (Ib., leg. 50, nº 10).
- 115 14-III-1749, Los Yébenes -Toledo- (Ib., leg. 50, nº 12).
- 116 5/19-VIII-1749, Granada (Ib., leg. 51, nº 16).
- 117 26-VIII/16-XI-1750.
- 118 Asegura J. ZUGASTI, en el tono sesgado de gran parte de la historiografía del siglo XIX, que

"Ciertamente los gitanos por su vida nómada, por sus instintos, hábitos, costumbres y por su misma condición social, no ya de parias, sino de zíngaros, que como he dicho eran inferiores aun a aquellos, a cuya circunstancia debe añadirse el desvalimiento propio de extranjeros, se hallaban en la situación mas desfavorable para vivir con regularidad y honradez, pero es necesario reconocer que la legislación, lejos de contrariar sus funestísimas tendencias y naturales instintos, vino solo a favorecer su desarrollo y manifestaciones con inevitable inercia, por decirlo así fuera de la sociaedad y en un estado en permanente guerra contra ella"

Op. cit., t. 5, pp. 88-89.

- 119 Algunas de tales ocupaciones eran campo abonado para todo tipo de estafas, abusos y desmanes. Así V. MARTÍNEZ ESPINEL escribía que

"Las mujeres -gitanas- vendian buhoneria (que todas eran casadas) entraban en sus casas a vender su mercaderia mirabanlas muy bien y daban el punto a sus maridos de las señas de toda la casa, y a la mañana siguiente amanecía robada."

Vid. *Vida del escudero Marcos de Obregón*, op. cit., t. 1, descanso 13, p. 188.

120 En 1569, una partida de gitanos en tránsito por la villa manchega de Torralba no despertó el recelo de las autoridades locales, pese a ser notorio que algunos de ellos vestían "avito de mugeres", pero al abandonar sus cercanías salen a la luz algunos de sus hurtos y estafas, saliendo en su busca los cuadrilleros, para entrometerse luego en el caso la gobernación de la localidad calatraveña; 15-IV-1569, Ciudad Real (ACG. cab. 321, leg. 4.403, nº 14, ff. 3r-5vº).

121 A este respecto consignaba acertadamente J. ZUGASTI que

"...las mismas leyes que ordenaban que los gitanos tomasen asiento en los lugares y sirviesen a señores, que les suministrasen lo que hubiesen menester, crearon precisamente el protectorado que había de impedir los efectos de la legislación misma y salvar a la vez a los proscritos."

Op. cit, t. 5, p. 85.

122 La labor del clero es doble, al proteger de forma efectiva a los miembros de dicha étnia en sus casas y templos, así como al abogar a su favor en los procesos seguidos por parte de las justicias seculares. Entre quienes se conmueven de la postración en la que se encontraban los gitanos cabe citar a los cirujanos; en efecto, en 1720 un cirujano de la villa de Bariente compró la libertad de tres gitanas arrestadas por un dependiente hermandino auxiliado por unos paisanos (AHN. Div. Her., leg. 44, nº 5), y en 1722 unos ministros apodados "los Nietos", que habían extraído a unos gitanos asilados en sagrado, son reprendidos por otro cirujano, librándose los detenidos de un peor trato al ya infligido gracias a su mediación (Ib., leg. 44, nº 11).

123 Las quejas de los representantes hermandinos son reiteradas, tomando particular relevancia las dirigidas contra el marqués de la Rambla, sus justicias y los presbíteros de Baeza con motivo de la feria de San Andrés de 1705 (Ib., leg. 40, nº 3); las vertidas contra

el alcalde mayor de Baza, en 1706 (Ib., leg. 40, nº 4); el teniente de corregidor de Linares, en 1708 (Ib., leg. 39, nº 10); los alcaldes ordinarios de Paterna de la Rivera, en 1714 (Ib., leg. 21, nº 1); el hidalgo Jerónimo de Santiago, vecino de Baza, en 1715 (Ib., leg. 42, nº 5), el alcalde mayor de Carmona, en 1727 (Ib., leg. 46, nº 2); las justicias de Cabezas Rubias -Huelva-, en 1724 (Ib., leg. 4, nº 36); o las de Guadalcanal, en 1726 (ADPCR., s.c.) por citar algunas de ellas.

¹²⁴ En la salida protagonizada por el juez comisario Micael Moreno en 1721 por el valle de Alcudia consta que muchos aldeanos tenían a los castellanos nuevos acuadrillados. Por ejemplo en la aldea de Brazatortas, acompañado el dignatario hermandino por el guarda mayor de dichas dehesas, su alcalde ordinario les confiesa su zozobra ya que

"...le tenían quitado la salud a el y a su mujer a causa de que estos jitanos hiban y venian mucho a dicho lugar de Abrazatortas y que no los havia querido consintir en dicho lugar si tratar de gardar -sic- y por este motibo se la juraron diciendole que el se acordaria de los jitanos, y que desde aquella ocasion el susodicho y su mujer perdieron la salud..."

(AHN. Div. Her., leg. 45, nº 4).

¹²⁵ Ib., leg. 34, nº 2.

¹²⁶ Ib., leg. 36, nº 2.

¹²⁷ 18-IX-1658, Ciudad Real (Ib., leg. 21, nº 37).

¹²⁸ 28.XI-1662, Ciudad Real (Ib., s.f.).

¹²⁹ 25-X-1683, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 204, ff. 125r-126r).

130 26-XI-1695, Ciudad Real (Ib., leg. 208, ff. 123r-vº).

131 16-VII-1678 (AMCR. Actas Capitulares, leg. 22, ff. 16-17).

132 1-II-1690, Membrilla -Ciudad Real- (AHN. Div. Her., leg. 38, nº 3). Los gitanos encartados son: Sebastián Ferández, toledano de 18 años de edad, bracero segador de la hacienda de Alfonso Ramírez "el Marqués", abandonó su vecindad por un pleito matrimonial y dice desconocer las pragmáticas sobre vagos y gitanos; Diego Fernández, vecino de El Toboso -Toledo-, de 30 años de edad, casado con una gitana y que declara ignorar la lengua jergonza; Antonio Fernández, muchacho que cuida los pollinos familiares desde hacía tres años, confiesa haber presenciado los trueques de sus compañeros en el Reino de Toledo; y Gabriel Antonio, vecino de Lozoya -Madrid-, errante por Madrid y el priorato de San Juan, ganándose la vida trabajando en el campo con un azadón. Para eludir la aplicación de las pragmáticas contra la vagancia afirman ser romeros en peregrinación a la imagen del Santísimo Cristo del Valle. Los citados Diego y Sebastián serán condenados a minas; 18-II-1690 (Ib., s.f.).

134 Tal fue el empeño puesto por alcaldes y comisarios que alrededor de la mitad de los reos de la Hermandad manchega resultan ser gitanos en el siglo XVIII. A tal punto llegó la coerción sobre esta minoría que un memorial de la fraternidad toledana consideraba

"El principal motivo con que se instituyo la Santa Hermandad Vieja por el Santo Rey Don Fernando fue el seguimiento de los jitanos cuja sediziosa y depravada xente se a continuado y permanezido en estos Reynos...estos reos, son los que fatigan y tienen cosumidos los caudales de las Hermandades porque sus prisiones son las mas costosas y arriesgadas porque sus personas siempre estan protexidas de la maior autoridad y de los principales de los pueblos por el miedo de sus stafas -sic- y resguardo de sus vidas en los caminos...y- porque siempre tienen el resguardo del sagrado que llaman frio..."

- 17-V-1717, Toledo (Ib., leg. 70, nº 1, s.f.).
- ¹³⁵ 4/22-I-1714 (Ib., leg. 41, nº 16).
- ¹³⁶ 3/20-VI-1717 (Ib., leg. 43, nº 1).
- ¹³⁷ Ib., leg. 43, nº 2.
- ¹³⁸ AHN. Consejos, leg. 49.692; cf. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, *Los gitanos españoles...*, op. cit., pp. 459-462.
- ¹³⁹ AHN. Div. Her., leg. 45, nº 23.
- ¹⁴⁰ Ib., leg. 45, nº 19.
- ¹⁴¹ 8-VII-1726 (Ib., leg. 46, nº 1).
- ¹⁴² 3-IX-1728 (Ib., s.f.).
- ¹⁴³ 17-X-1732; cf. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, *Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII*, Madrid, 1977, pp. 130-132.
- ¹⁴⁴ AHN. Consejos, leg. 54, nº 1.
- ¹⁴⁵ AMCR, leg. 23, ff. 1.116-1.117.
- ¹⁴⁶ AHN. Consejos, leg. 49.688; Pub. M.H. SÁNCHEZ ORTEGA, *Los gitanos españoles...*, op. cit., pp. 467-470.

147 Málaga, 1718 (AHN. Div. Her., leg. 43, nº 2) y Socuéllamos, 1731 (Ib., leg. 47, nº 10).

148 En 1746 se seguía causa criminal de oficio contra el gitano Estrada, arrendatario de la venta de Eras Viejas -Zafra (Badajoz)- por tenencia ilícita de armas prohibidas, trocar ganados, no guardar vecindad, comerciar con caballerías hurtadas y decir pertenecer al Santo Instituto ciudarrealeño sin ser cierto (Ib., leg. 51, nº 2).

149 Francisco Montoya, hijo del arrendatario del mesón del Emperador - Socuéllamos-, fue prendido en 1731 acusado de perpetrar diversos latrocinios al amparo de su servicio en el citado bodegón (Ib., leg. 47, nº 10).

150 Los alcaldes ordinarios de Cartajima, el 6-XI-1718 se lamentaban de que incluyo les habían secuestrado sus aperos de labranza, aduciendo su inocencia de los cargos que se les imputaban por su

"...ignorancia de dicha Pragmatica por no haberse publicado...y ser unos pobres hombres rusticos y sin mas inteligencia que la del campo, y quando alguna culpa por la tolerancia de dichos gitanos muy leve y no posible por necesario en el pueblo para el manejo y apronto para los aperos de labranza..."

(AHN. Consejos, leg. 24, nº 5, s.f.).

151 31-III-1719, Madrid (AHN. Div. Her., leg. 48, nº 11).

152 Nombramientos de jueces comisarios despachados el 20-XII-1735 (Ib., s.f.).

153 14-V-1736, Estepona -Málaga- (Ib., s.f.).

154 23-X-1736, Madrid/22-XI-1736, Ciudad Real (Ib., s.f.).

155 Ib., legs. 3, nº 11 y 4, nº 56.

156 1-VII-1737 (Ib., leg. 48, nº 12).

157 En septiembre de 1718 una partida de castellanos nuevos roba una yegua a un portugués afincado en Zafra casado con una gitana, siendo su oficio reconocido el de ejercer

"...en el arte de leer y escribir con casas propias y averle tenido todos los vezinos por tal -cristiano viejo- por haver contribuido a nuestra Real Hazienda con todos los debitos reales."

La cabalgadura antes citada sería trocada un mes después con un alcalde ordinario; perseguidos los acusados, lograrán cruzar la frontera por el paso de Ayamonte (Ib., leg. 43, nº 11).

158 5-III-1740; vid. apéndice documental, texto nº 14.

159 En enero de 1722, acompañado el cuadrillero mayor ciudarrealeño con su sobrino al mediodía en el molino de Balquerza, paraje poco transitado, topan con un jinete gitano y otro que marchaba a pie; sospechando de ellos los acosaron hasta que se asilaron en el santuario de Don Benito de la siguiente traza: "uno se asio al Santo que ay en dicha ermita y otro de-l- ara donde se zelebra la misa diciendo iglesia nos llamamos"; se les toma declaración de tal guisa, declarando ser vecinos de Puertollano que tenían unos asnos incautados por la Hermandad Vieja, requisándoles ahora una mula aparejada y varias armas; el sobrino del oficial manchego testifica que "el traje de estos dos hombres eran de jitanos y aunque querian disimular la boz y la pronunciacion sin embargo se les reconozia" (Ib., leg. 45, nº 5). Por una vez el recurso al sagrado surtió efecto, tal vez más por estar

las fuerzas parejas y haberse procedido contra sus bienes que por el respeto hacia el mismo. El 20-VI-1748 el nuncio transigió al expedir edicto que permitía que los gitanos requeridos por la justicia real fuesen extraídos de los templos.

160 En 1799 eran encartados Alfonsa Francisco y María Rodríguez, cónyuges gitanos dedicados a la buhonería, vacilando los captores al anotar el nombre del primero, y optando por referirse a él indistintamente con los nombres de Alfonso y de Alfonsa (Ib., leg. 62, 5 y ADPCR, s.c.).

161 M. WEISSER, *Crime and Subsistence...*, op. cit., p. 119; cf. H. KAMEN, op. cit., p. 310.

162 A fines del Seiscientos un diplomático magrebí constataba que

"A pesar de la prosperidad del gran número de aldeas, pueblos y ciudades que existen en España, nadie puede viajar solo mientras duran los trabajos agrícolas en la Sierra Morena, y en toda la provincia de La Mancha; tan grande es el temor que allí reina, tantos son los bandidos que allí hay."

Vid. "Un embajador Marroquí (1690-91)", en J. GARCÍA MERCADAL, op. cit. t. 2, p. 1.233.

163 He aquí un ejemplo: estando en Cabezarados el ciudarrealeño Juan Paz, comisario receptor del derecho de asadura hermandino, es informado por un arriero de Úbeda de que saliendo de la posada de Villamayor un hombre con un asno se había negado a acompañar a la comitiva formada por los trajinantes a tal efecto, sospechándose entonces de sus intenciones; siendo motivo suficiente dicha noticia para ser detenido de inmediato por el propio recaudador, auxiliado por unos paisanos, siendo acusado de vagar por el yermo; 12/15-XII-1733 (AHN. Div. Her., leg. 48, nº 8).

¹⁶⁴ Ib., legs. 27, nº 4; 29, nº 4; 34, nº 3; 38, nº 2; 39, nº 8; 44, nº 8; 50, nº 15 y 16; 51, nº 8 y 16...

¹⁶⁵ En el primer tercio del Setecientos, Juan Moreno, presuntamente involucrado en el robo de colmenas y de unas cargas de cáñamo en el término de Miguelturra, solamente será multado con 1.500 rs. al haber sido abonado como persona honrada; 7-VII-1723, Ciudad Real (Ib., leg. 44, nº 8).

¹⁶⁶ 9-XII-1669, Ciudad Real (Ib., leg. 34, nº 4)

¹⁶⁷ 10-V-1700, Ciudad Real (AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 244 bis, ff. 24r-vº).

¹⁶⁸ 13-XI-1657, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 31, nº 37),

¹⁶⁹ En Navidad de 1709 una salida de ministros hermandinos por la Mancha Alta recogen el apoyo de los venteros de la comarca, quienes aseguran que el camino a Toledo está expédito gracias a la labor de los cuadrilleros (Ib., leg. 41, nº 29); mientras tanto en 1722 el ministro superior don Francisco Joseph de Ojeda elevaba un informe a sus superiores en el que manifiesta su descontento por la indefensión de su ministerio, augurando que las cercanías de Gibraleón volverían a infestarse de gitanos acampados "que oy contiene el miedo de las rondas que e executado"; 15-II-1722, Gibraleón (Ib., leg. 4, nº 31).

¹⁷⁰ El pleito llevado ante el Supremo Consejo por el Honrado Concejo de la Neta en 1718 señalaba entre las quejas de los ganaderos para cuestionar la legitimidad del cobro de la asadura sobre sus ganaderos

"...por no recorrer la dicha Hermandad -de Ciudad Real- la cañada y terminos asi a la vajada de los ganados como a las suvidas pues con esta obligacion se le havia concedido el derecho que percivia de los ganados..."

(AHN. Mesta, leg. 64, nº 12, s.f.).

¹⁷¹ 20-XI-1761, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 53, nº 3).

¹⁷² Memorial 17-V-1717, Toledo (Ib., leg. 70, nº 1). Según el informe llevado al Consejo de Castilla el 7-II-1716, unos 65 reos habían sido destinados a galeras, 53 a presidios y 2 a las Reales Minas de Almadén (AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, s.f.).

¹⁷³ Las condiciones existentes en la propio Ciudad Real distaban mucho de ser las óptimas. Desde 1647, fecha cuando acontece posiblemente la peor cosecha de la centuria, hay un periodo de fuerte mortalidad y carestías que cristaliza en un nuevo ciclo catastrófico entre 1679-1680 con su secuela de peste endémica al menos hasta 1685. La Guerra de Secesión de principios del Setecientos elevaría ostensiblemente los niveles de delincuencia e inseguridad, debiéndose emplear a fondo los cuadrilleros para el mantenimiento de unos mínimos de seguridad en el descampado en estos momentos tan criticos para la Monarquía Católica.

¹⁷⁴ Coincidiendo también con la postración económica de la población que lo albergaba, la fraternidad apícola manchega aseguraba en 1742 que "desde el dia nueve de septiembre hasta el diez y ocho de diziembre...no hubo reos" (Ib., leg. 59, nº 5, s.f.).

¹⁷⁵ AHN. Consejos, leg. 3.163, nº 9, ff. 60 vº y ss. y 74r-75r. Aún peor era la relidad procedimental de la Hermandad de Talavera, empeñados sus caudales desde 1758 en la reconstrucción de los puentes

sobre el río Alberche, lo "que esta suspenso por mucho tiempo", permaneciendo sus ministros y oficiales "en total inaccion en sus casas", a tenor de lo representado en la década de 1770 (Ib., ff. 205vº-206r).

¹⁷⁶ 7-VI-1773, Ciudad Real (AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, ff. 82vº-92vº).

¹⁷⁷ Ib., leg. 61, nº 2.

¹⁷⁸ Unos años más tarde el memorial elevado a los Reales Consejos por el alcalde don Álvaro Maldonado de Treviño exponía que

"...el celo y espíritu de justicia con que se procede y ha procedido este tribunal, expecialmente de siete u ocho años a esta parte es notorio...actualmente se hallan dentro de sus carzeles en esta ciudad treze reos, en la de Jaen dos, en la de Luzena uno, en la de Daimiel otro...-ya que- habiendo ministros repartidos por los pueblos se excusan muchos gastos a la Hermandad porque no es necesario en tal caso despachar persona comisionada para las probanzas ni otras dilixencias de la administracion de justicia, pudiendose evacuar los tales ministros sin mas costa que una carta de abiso por el correo...-nutriendose sus arcas- de lo que ba percibiendo de la tenue renta de la asadura..."

26-III-1777, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 1.236, nº 3).

10. LAS HERMANDADES VIEJAS EN EL SIGLO XIX.

La Santa Hermandad, que desde su periodo fundacional había contado con el respaldo regio, la aquiescencia de las autoridades locales y la colaboración de la población, orgánica y económicamente autogestionada, que siempre había dado muestra de una eficacia encomiable y de su denodado empeño , con mayor o menor fortuna, en el cumplimiento de su instituto; en las postrimerías del Setecientos ya mostraba los síntomas inequívocos de un agotamiento institucional inexorable que se traducía en un incremento de su vertiente honorífica en detrimento de su operatividad como entidad garante de la seguridad en despoblado.

Desvirtuada su función coercitivo-preventiva de forma acelerada, es perceptible en el área territorial nominalmente cubierta por la Hermandad manchega el escaso "control de la tierra" ejercido por sus ministros por entonces: el ejército asume , muy a su pesar, labores policiales, debiéndose hacer cargo del control del despoblado ante el recrudecimiento del bandolerismo; villas y ciudades organizan, a cargo de sus propios, unidades armadas de paisanos para defenderse de las continuas agresiones de que eran objeto por parte de los forajidos, creándose, o consolidándose en su caso, partidas de escopeteros o rondines; etc. Entre la información proporcionada por las respuestas dadas al cuestionario del cardenal Lorenzana -1782/1788- se puede colegir que las localidades manchegas no tenían una idea precisa sobre la pervivencia y atribuciones de la Hermandad ciudarrealuña, recordada más por su exacción pecuaria que por la eficacia de sus actuaciones coetáneas contra la delincuencia rural.

Desde que la minoría ilustrada cuestionase la viabilidad de las Fraternidades apícolas manchegas, no abolidas durante los reinados de Carlos III y Carlos IV tal vez al depender su futuro de unas instituciones tan anquilosadas como aquellas -la administración polisinodial-, y al no contarse con un dispositivo de seguridad alternativo en sus demarcaciones territoriales, era cuestión de tiempo la desaparición efectividad de unos entidades tan esclerotizadas. En efecto, principiado el siglo XIX ya era patente que las estructuras heredadas del Antiguo Régimen estaban caducas, y que su previsible caída arrastraría consigo todo lo vinculado de una u otra forma con su ordenamiento jurídico-institucional. Pero pese a los substanciales cambios acontecidos en el ámbito internacional, la España de principios del siglo XIX seguía una política interior comprometida con las antiguas estructuras heredadas de un añejo y glorioso pasado al que parecían seguir apegadas la inmensa mayoría poblacional.

Dentro de este aparente continuismo se enmarca la actuación hermandina de Ciudad Real, que aunque en 1804 seguía las diligencias pertinentes para capturar a seis contrabandistas que llevados de su osadía pernoctaron en Aldeaquemada¹, y por entonces ejecutaba a un bandolero en Peralvillo², ya manifestaba un colapso casi total de su actividad judicial, por otro lado aún cuajada de las mismas rémoras que la habían afectado en los siglos anteriores³. Remodelada recientemente la cárcel pública ciudarrealeña, por ser la de la capital provincial manchega, cuya obra se tasó en 1800 en cinco mil quinientos ochenta reales⁴ y, dada la infrautilización de la galera hermandina, ésta paulatinamente pasa a adquirir preferentemente el uso como depósito de levas⁵ y de reos de otras jurisdicciones. Sin duda fue decisivo en el acelerado declinar de la Hermandad manchega el

despojo de sus rentas pecuarias, destinadas ahora íntegramente a la hacienda regia, en quiebra técnica ante el fracaso de los vales reales como fundamento financiero de la maltrecha Corona.

Los traumáticos sucesos que afectaron a España por entonces son de todos conocidos; la invasión napoleónica trastoca formalmente el orden vigente a la vez que precipita la descomposición del complejo entramado sobre el que se sustentaba el Antiguo Régimen. El alcance de esta subversión de lo establecido tuvo un efecto fulminante para las Hermandades Viejas, entidades medievales que encarnaban todos los defectos procedimentales atribuidos al antiguo ordenamiento estamental. El rechazo a su existencia sería compartido por afrancesados y renovadores: José Bonaparte con la Carta Otorgada de Bayona y la subsiguiente labor normativa dejaba en precario su continuidad corporativa al crear en abril de 1809 las Milicias Urbanas de Toledo y La Mancha⁶, en tanto que las Cortes de Cádiz suspendían sus actividades sine die. Ya entonces se hacía patente que sus estructuras orgánicas, los valores que las animaban, la postración en que se hallaban sumidas y hasta su propio nombre resultaban incompatibles con el nuevo orden perfilado en el horizonte.

Aún antes de que se hubiese conjurado definitivamente la amenaza francesa sobre España, los destinos del Triple Instituto parecían sellados. A principios de 1813 los alcaldes ciudarrealeños don Juan Hidalgo y don Félix Mesía de la Cerda dirigen una representación al cuestionado Consejo de Castilla expresando sus dudas sobre la pervivencia del propio tribunal hermandino "por la nueva Constitución política de nuestra Monarquía Española"⁷. La consulta no podía ser más oportuna, ya que un día después de ser remitida a la Corte tomaba posesión de su cargo don Jerónimo Zamboráin y Roncales, juez interino

de Primera Instancia provincial, quien de inmediato pasó a revisar las cárceles de la ciudad.

Franqueada la puerta de la penitenciaría hermandina por su alcaide Manuel Barrasa, valora sus calabozos y dependencias "seguras y decentes", pero ordena quemar los instrumentos de tortura hallados en el edificio -a saber, el potro, tres sortijas y una alcallata o argolla de hierro-. Respecto de los doce reos que albergaba, les pregunta rutinariamente si tenían alguna queja del trato proporcionado, hallando la callada por respuesta; acompañado por un alcalde ordinario y dos regidores, decide que los custodiados por cárcel segura pasaran a ser mantenidos por cuenta de la ciudad, en lugar de por la jurisdicción que los entregó⁸.

Cuatro días después el alcaide arrojaba a la pira el potro de tortura, en tanto que la prepotencia y arrogancia del Juez de Instrucción despertaba el profundo malestar de los rectores hermandinos, sintiéndose presionados mediante amenazas "a fin de que le entreguen una escribanía de plata y demas efectos del serbicio de la carcel de la expresada Hermandad despues de haberse introducido en ella", manifestando que puesto habían logrado ocultarla de los franceses durante cuatro años dichos efectos deberían ser destinados en beneficio de la nación⁹.

El 14 de junio de 1813 don Jerónimo de Zamboraín se pronuncia decididamente en la controversia suscitada con los dignatarios apícolas: desea incautar sus bienes para poder alimentar a los detenidos; solo debería existir una jurisdicción en su partido y ésta debería ser lógicamente la que él representaba por haberse abolido el fuero hermandino en las Cortes de 1812, pasando los reos a depender de

la justicia real y sus bienes al Tesoro Público; aunque reconoce que el edificio esta sin expropiar, en sus mazmorras no hay reos encausados por sus alcaldes, sino reclusos pertenecientes a justicias ajenas que deben pasar a la custodia del Estado, por lo que solicita que se mantenga a su alcaide y sotalcaide mediante salarios provistos por la ciudad para que no desatendiesen sus obligaciones, aún consideradas precisas¹⁰; el intendente debería asumir las nóminas del alcaide, su ayudante, el capellán y el bastimento de la decencia de los objetos de culto para el oratorio; por último, todos los presos existentes deberían pasar a sus celdas por ser las más seguras y evitarse así para salarios a dos alcaldes, por ser la cárcel pública "muy mala e insegura", bien podría enajenarse para casas y habitaciones particulares.

Meses después, desde el Consejo de Castilla se responde que habían cambiado substancialmente las circunstancias desde la Regencia hasta la vuelta del Deseado, desestimándose lo expuesto por el juez instructor¹¹. En efecto, Fernando VII había propiciado una involución ya anunciada; retomando sus conocidas aspiraciones absolutistas, el 18 de septiembre de 1814, confirmaba los reales privilegios, jurisdicción y las franquizas de la Hermandad de Ciudad Real, y el 14 de noviembre de dicho año refrendaba sus atribuciones fiscales pecuarias¹².

Para dotarles de un respaldo oficial más sólido se nombraba honoríficamente, en 1816, al infante don Carlos María de Borbón "Alcalde Perpetuo Protector y Hermano mayor" de cada unos de los tribunales integrantes del Triple Instituto. En 1817 se procedió, en el marco de la psicosis antiliberal, a depurar sus miembros de afrancesados y constitucionalistas, insertando en el cuestionario de 1740 una cláusula que los excluía¹³. La falta se solicitudes de

ingreso a unas entidades de las que no se derivaban beneficios económico-profesionales algunos¹⁴, hace representar al cabildo apícola talaverano como más perjudicado por la decadencia de tales instituciones que

"...se halla reducido el numero de sus dependientes en lo exterior, con tanto extremo, que tal vez no cuenta media docena, y ninguno a la parte de mediodia por donde la vaña el Tajo...donde se sitúan los asperos Montes de Toledo y Guadalupe mas apto receptaculo y abrigo de ladrones..."¹⁵.

Seguro el Triple Instituto del aval regio, las organizaciones toledana y ciudarrealeña se enzarzan a principios de 1718 en una agria controversia por las supuestas extralimitaciones de la primera en la circunscripción de la segunda, pues aunque reconocían los manchegos que el auto de 27 de noviembre de 1786 facultaba a su homónima de Toledo a librar títulos a pretendientes en Madrid y al sur del Tajo, no era menos cierto que en muchos pueblos de Andalucía, Extremadura y La Mancha habían introducido abusivamente ministros, mientras que la asociación ciudarrealeña no había hecho lo propio al norte de dicha línea, aludiendo a su postura respecto de la añeja disputa sobre la preeminencia de una y otra entidad en el seno de la confederación¹⁶.

Minadas por estériles controversias interinstitucionales e inactivas en sus tradicionales procederes jurisdiccionales, la real orden fechada el 27 de julio de 1818 imponía el enésimo interdicto de auxiliatorias sobre los nombramientos despachados por la Hermandad de Ciudad Real que provocó que en casi veinte meses no se levantase dicha resolución emanada del Supremo Consejo. Viendo peligrar su misma continuidad corporativa, los cabildos integrantes del Triple Instituto llegan al acuerdo interno de respetar la distribución espacial de sus miembros en sus tradicionales áreas de influencia, aludiéndose a la

imperiosa necesidad de contar con subordinados, no tanto en atención a su posible contribución a dotar de operatividad a sus cortes de justicias, sino por el beneficio "que resulta a la causa publica... del aumento de las rentas de este tribunal por la cuota o cantidad que aprontan a la entrada"¹⁷. Y es que reasumida la renta de la asadura por el Tesoro Público, lo que hacia 1813 representaba unos veinte mil reales anuales devengados únicamente en el término de la entidad manchega, su precariedad financiera estaba en consonancia con su insuficiente grado de eficiencia.

En un postrero, podría decirse desesperado, intento por reactivar su ministerio y ante la preocupante proliferación del bandolerismo tras la Guerra de Independencia, en 1817 se ordena respetar su jurisdicción real especializada, ratificándose su competencia para encartar a los ladrones prendidos con ayuda de las fuerzas militares.

Un memorial de la corporación apícola de la Ciudad Imperial expresaba a fines de 1819 las pretendidamente buenas relaciones entre las Hermandades coaligadas, diciendo obrar armoniosamente y manifestando el deseo común de coordinar sus acciones con las justicias municipales, sin olvidar mencionar subrepticamente que la proliferación de sus miembros había dejado, hacía tiempo, de suponer una carga para la nación¹⁸. Tarde llegaba la reconciliación del Triple Instituto si lo que se esperaba era su revitalización, ya que en enero de 1820 triunfaba el levantamiento de Riego, abriendo un corto paréntesis constitucional poco receptivo a privilegiar todo lo que remotamente recordara a una herencia del Antiguo Régimen.

Como quiera que en octubre de 1823 fuese derogada toda la obra legislativa del Trienio, desbancándose por la fuerza los postulados

reformistas y abriéndose una "caza de brujas" antiliberal que tuvo su reflejo en la pretendida "purificación" en el seno de las Hermandades Viejas¹⁹. En 1824, secundando el tribunal manchego lo prevenido por reales cédulas y decretos expedidos por Fernando VII para determinar la postura política de sus vasallos y funcionarios públicos durante el Trienio, se designará a don Diego Muñoz Pereiro como presidente de la comisión hermandina que calificase la conducta de sus integrantes²⁰.

Vegetando las organizaciones hermandinas durante la denominada por la historiografía Década Absolutista -1823-1833-, la muerte del monarca precipitará los acontecimientos. Pero no será hasta el quince de enero de 1835 cuando se consensuó en la cámara baja de las Cortes el proyecto de disolución del Triple Instituto junto al resto de los tribunales especiales. La mayoría liberal, prácticamente sin oposición, el 7 de mayo de 1735 logró que la Reina Regente María Cristina refrendase la abolición definitiva por real decreto de las Hermandades Viejas de Toledo, Talavera y Ciudad Real, cesando automáticamente sus oficios, quedando sus ministros desaforados pero conservando su uniforme; sus archivos serían entregados a los ayuntamientos y sus propiedades inmuebles desamortizadas o incorporadas al patrimonio público²¹ y las causas pendientes de sus reos pasan a depender de los juzgados de primera instancia o a las audiencias judiciales de su partido.

No es una casualidad que entre 1835-1837 se procediese a desmontar formalmente gran parte del entramado emblemático del Antiguo Régimen, como las órdenes religiosas, la Mesta, la desamortización de las propiedades en régimen de manos muertas, la supresión de los monopolios industriales, los diezmos y primicias señoriales, y un largo etcétera. La España Liberal terminaba de esta manera expeditiva

con muchas de las realidades heredadas de la Edad Moderna que, a estas alturas de la historia, constituían un pesado lastre para la renovación del país, aboliendo de un plumazo unas entidades que, como las fraternidades apícolas, permanecían ancladas en un devenir procedimental manifiestamente ineficaz para afrontar con éxito los nuevos retos planteados por una sociedad en transformación.

Habiendo quedado desde tiempo atrás despojada de su sentido vital, la Santa Hermandad Vieja y Real de Ciudad Real terminaba su larga vigencia institucional de más de cinco siglos con más pena que gloria, pasando prácticamente imperceptible su desaparición por el cúmulo de acontecimientos y transformaciones que acometía la nación. El espacio dejado por su desaparición sería cubierto poco después por otra fuerza de seguridad, la Guardia Civil, más acorde con el espíritu de los tiempos que impregnaba la reorganización judicial y policial del siglo XIX español.

NOTAS AL CAPÍTULO 10.

¹ 10-IX-1804 (AHN. Div. Her., leg. 54, nº 12).

² Ejecución de la pena de horca en el reo Fernando Piña, natural de Zafra -Babajoz-; s.d. (Ib., leg. 54, nº 13).

³ A finales de 1802 surge una nueva competencia jurisdiccional en la que se halla involucrada la Hermandad manchega, esta vez con las autoridades civiles y criminales de Jerez de la Frontera -Cádiz-, al encausarse al juez comisario don Juan Durán por herir involuntariamente a un soldado durante el arresto de unos ladrones; 25-XI/17-XII-1802 (Ib., leg. 54, nº 1).

⁴ AMCR. Actas Capitulares, leg. 29, nº 3, ff. 8-11.

⁵ En el verano de 1803 permanecieron custodiados en la sede del Santo Tribunal ciudarrealeño de 60 a 70 jóvenes procedentes del reemplazo de la provincia de La Mancha para el ejército de Su Magestad, confiados al alcaide por el intendente provincial (Ib., leg. 54, nº 5).

⁶ Vid. E. MARTÍNEZ RUIZ, "Las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del siglo XIX", en *Cuadernos de Historia*, nº 4 (1973), pp. 83-161.

⁷ 8-III-1813, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 3.162, nº 9, s.f.).

⁸ Es significativo que hubiese igual número de reclusos en las prisiones real y hermandina, lo que puede interpretarse como una coordinación de las fuerzas de orden público en la capital manchega, sin duda prácticamente asumida ahora por la jurisdicción ordinaria. En ésta última permanecían encarcelados Tomás Romero y Ramón García, vecinos de Villanueva de los Infantes; José Sánchez y Antonio Muñoz, oriundos de Carrión de Calatrava y entregados en depósito por la justicia de su localidad; Victoriano Navarro, Vicente Sánchez, Francisco Yndela e Isabel Fernández, afincados en Fuente el Fresno; el ciudarrealeño Jerónimo Cruz, reo de la jurisdicción ordinaria, así como los migueltureños Román Fernández, José Ramos y Antonio Castellanos, pertenecientes a la justicia real; 9-III-1813, Ciudad Real (Ib., s.f.).

⁹ 18-III-1813, Ciudad Real (Ib., s.f.).

¹⁰ En su informe se consignaba que "entre las cargas de la Hermandad era una mantener un alcaide con seis reales diarios, un sota-alcaide con dos, contribuyendoles ademas con casa, medico y botica" (Ib., s.f.).

Que resultaba vital el tener perfectamente cubierto este puesto de responsabilidad lo ejemplifica bien el siguiente caso: la provisión de la alcaidía pública ciudarrealeña desde el 24-XII-1803 pertenecía por juro de heredad al sucesor legítimo de don Luis Bermúdez Mesía de la Cerda, al haber enajenado dicho oficio aportando 94.000 rs. para la guerra de Italia; confirmado dicho privilegio el 23-VI-1807 por la marquesa consorte y viuda de Castellanos -a la sazón residente en Madrid-, su apoderado conservaba la prerrogativa de su nombramiento. Iniciada la Guerra de Independencia muere el carcelero y el ayuntamiento designa a Ramón Cueto, quien recibiendo en un principio

como única gratificación el encarcelaje después reclamará un sueldo diario de 5 rs. y medio, viéndose luego envuelto en diversas irregularidades que terminan en la evasión de algunos reos. Procesado por el corregidor, a fines de 1808 el apoderado de la marquesa propone para el empleo al indiciado y "a otro que no tenía nada que perder", siendo desestimados ambos por un tercero presentado a instancias del corregimiento; el nombrado resulta ser Antonio Díaz Melón, quien acepta el cargo interinamente dependiendo del sueldo que se le ofreciese. Tras unas tensas negociaciones con el alguacil mayor se acuerda unilateralmente que la marquesa le aprontaría 8 rs. diarios, a lo que se negará su apoderado, llegando el caso al Supremo Consejo para que mediase en el conflicto suscitado; 6/9-XII-1814, Ciudad Real (AHN. Consejos, leg. 3.162, nº 30).

¹¹ 4-XII-1813, Madrid (Ib., leg. 3.162, nº 9).

¹² AHN. Códices 964B.

¹³ En su punto sexto se especifica como cláusula sine qua non:

"Que el Pretendiente no ha obtenido empleo asalariado por el gobierno de los Franceses, durante el tiempo de su dominacion, solicitado Cruz, Medalla ni otra condecoracion, antes ha observado una conducta politica irreprehensible, acreditandose el mejor Español, contribuyendo por su parte a la defensa de la cusa justa en favor del Rey y de la Nacion."

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 243, s.f.).

¹⁴ Se conservan 77 expedientes pertenecientes a ministros de la Hermandad Vieja manchega entre 1800-1815 (AHN. Div. Her., legs. 15 al 18), pero no hay constancia de su despacho a pretendiente alguno entre 1816-1822 en su archivo. Sí tenemos en cambio noticia de que se denegó auxilioria en 1816 al nombramiento despachado por parte de los

toledanos a favor de don Tomás de Añoria Honojosa, vecino de Cazalla de la Sierra -Sevilla- (AHN. Consejos, le. 3.163, nº 9).

15 24-V-1818, Talavera de la Reina (Ib., s.f.).

16 En la representación manchega se recoge la tradición apócrifa de que la Hermandad Vieja fue fundada en 1249 por el rey Fernando III el Santo, distribuyendo espacialmente las cuadrillas entre don Gil y sus deudos, dejando constancia de los denodados intentos de la entidad

"...de Toledo -para- sobresalir y quererse distinguir de las otras apellidándose la mas antigua, con toda falsedad, pues que semejante circunstancia concurre en esta de Ciudad Real..."

13-III-1818, Ciudad Real (Ib., leg. 46vº).

17 7-I-1820, Ciudad Real (Ib., ff. 59vº).

18 Esta afirmación era cierta toda vez que, según su propio escrito

"...sirven al Estado sin ningun gravamen, y sin otra remuneracion, ni otro aliciente que el uso de escarapela y uniforme...no gozan en el dia los demas ministros exencion alguna de quintas aloxamientos bagajes ni de las demas cargas vecinales..."

(Ib., f. 57vº).

19 Correspondientes al periodo 1823-1825 hay constancia de la apertura de 63 expedientes, entre disciplinarios, expurgatorios y aprobatorios de ingresos instruídos a otros tantos sujetos por parte de los alcaldes ciudarrealeños (AHN. Div. Her., leg. 19 y 20).

20 El articulado de estos cuestionarios impresos reza así:

"Articulo 1º. Si Don (...) ha pertenecido a la clase de Masones, Comuneros, Anilleros, Carbonarios, u otras de las sectas prohibidas por la Ley.

Artículo 29. Si ha concurrido a asociaciones clandestinas, secretas y nocturnas, o de cualquiera otra denominacion.

Artículo 30. Si se le ha oído hablar contra el REY Nuestro Señor, o de algun modo se ha manifestado enemigo de S.M. practicando gestiones contra los sagrados derechos de su soberania.

Artículo 40. Si se ha alistado o a pertenecido a batallones sagrados u otros semejantes, o la llamada Milicia Nacional local.

Artículo 50. Si ha solicitado ir a batir a los Realistas, o habiendo sido nombrado para ello lo ha admitido voluntariamente.

Artículo 60. Si ha sido empleado o solicitado serlo durante el Gobierno revolucionario Constitucional.

Artículo 70. Y ultimamente cual ha sido la conducta politica que ha observado durante la dominacion de dicho gobierno, y por ello qué concepto ha merecido en el publico."

(AHPCR. Protocolos Notariales, leg. 233, s.f.).

21 Durante los debates parlamentarios sobre su disolución, el ministro de Hacienda estimó el precio de cada una de las sedes hermandinas del Triple Instituto en unos 100.000 rs. Mientras que la cárcel toledana se convirtió en una posada vendida a un particular y actualmente acoge una una exposición permanente de objetos de tortura; en Ciudad Real tenemos constancia que mediado el Ochocientos

"...la carcel de la Hermandad se reunio a la de la Ciudad, formandose de este modo un buen local, con divisiones para los presos, salas, patios y capilla, siendo el mejor establecimiento de su clase que existe en la provincia"

Vid. P. MADOZ, *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de todos los pueblos de España*, t- 4, 1837, p. 438; coincidiendo esencialmente su antiguo emplazamiento con el de la actual sede de la Delegación Provincial del Ministerio de Hacienda.

11. CONCLUSIONES.

Acabamos de realizar un estudio de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real durante el reinado de los Austrias Menores partiendo de unas fuentes en su mayor parte inéditas, através de las cuales nos hemos adentrado en el devenir institucional y actuacional de un tribunal especial de justicia cuya trayectoria durante la Edad Moderna había pasado hasta la fecha prácticamente desapercibida.

Hacia el siglo XIII toman forma en el área fronteriza meridional castellana una serie de organizaciones que comparten como elemento aglutinador el único colectivo que contaba con los suficientes medios para articular una fuerza estable y continuada de control: los propietarios apícolas. Su ministerio se anunciaba problemático, al extenderse sobre un descampado en el que vacío de poder real había permitido que se enseñorease de él un bandolerismo endémico de difícil erradicación. En efecto, en esta amplia zona productivamente marginal, orográficamente hostil, estratégicamente insegura y demográficamente débil los colmeneros se erigen como núcleo en torno al cual cristalizaría una red de seguridad permanente lo suficientemente operativa como para emprender la necesaria tarea de proteger sus bienes y la continuidad de las explotaciones rurales. En definitiva, lo que se dirimía era la propia supervivencia del patriciado urbano como clase económica y socialmente rectora, conformando para ello un instrumento ejecutivo de dicha oligarquía para controlar el medio donde se enclavaban sus posesiones que hasta entonces escapaba a su dominio efectivo.

Dichas solidaridades gremiales coercitivas no surgirían de un vacío institucional ni procedimental absoluto, sino que adaptarían a sus necesidades realidades vigentes refrendadas por la práctica. Concretas por lo respecta a sus fines, orgánicamente abiertas a cuantos quisieran adherirse a su estructura corporativa o a sus labores ejecutivas -por otra parte tan rudimentarias como expeditivas-, sus eficaces procedimientos fundacionales estimuladas por los concejos, el arzobispado de Toledo, sus todavía pobladores y la misma Corona, darían paso a la incorporación de cuantos resortes formales y funcionales resultasen aplicables a tan loable ministerio: institucionalmente tomaron el aspecto, gobierno y terminología de los cabildos civiles y eclesiásticos; sus pautas y comportamiento preventivo-coercitivo toman el carácter del empleado por los caballeros de la Sierra, haciendo uso del extendido procedimiento del apellido. Como la mayor parte de las entidades de su carácter en la época aunó competencias jurídico-policiales imprecisas por asistemáticas y, con demasiada frecuencia, conculcadas.

Paulatinamente, y como fruto de la tendencia general a dotar de ciertas garantías a los judicialmente encartados, su tribunal procedió de acuerdo a derecho, un derecho en principio consuetudinario que de manera progresiva incorporará el espíritu de los preceptos emanados del derecho canónico que daría lugar al juicio sumarial para sustanciar las causas menores, incorporando en los casos de cierta entidad el procedimiento ordinario abreviado castellano -conjunto de normas y tácticas derivadas del derecho romano y de la práctica forense de los órganos legislativos del Reino así como de unas disposiciones legales que arrancan del siglo XI-, haciendo gala de una

notable versatilidad judicial y una flexibilidad coercitiva muy adecuadas a su ministerio.

Esta organización se despojaría a lo largo del Cuatrocientos de la connotación federal que había impregnado su evolución institucional durante toda la Baja Edad Media; así cuando los Reyes Católicos crearan la Hermandad Nueva, las entidades colmeneras manchegas contaban con unas atribuciones jurídico-criminales y preventivas perfectamente regladas en cuanto su funcionamiento orgánico y jurisdicción de su competencia, pero difusas respecto al sistema procesal a emplear y la penalidad a imponer, dejadas ambas al arbitrio de sus alcaldes, siendo su mecánica actuacional fiel reflejo de las peculiaridades de la jurisprudencia y la magistratura en las cortes de justicia inferiores supralocales de la época.

Pronto se hizo evidente que cuando dicha entidad se hubo fraguado y consolidado en el tejido social, perduraría pese a que las circunstancias cambiantes le hiciesen oscilar en un sentido u otro; las actitudes, los hábitos procedimentales y el prestigio alcanzado propiciaría que se mantuviese y potenciase su red de seguridad hasta adaptarse a las necesidades impuestas por cada periodo histórico. Si en un principio procedía indiscriminadamente contra toda infracción en despoblado que hiciese peligrar la integridad de las explotaciones apícolas o del personal adscrito a tales labores, posteriormente desde la Corona se trató de encauzar este potencial mediante su reordenación y potenciación de acorde a un espíritu ordenancista que restringiría su jurisdicción a los denominados casos de hermandad. A partir del Quinientos es perceptible la asunción de unas categorías delictivas cada vez más amplias, si bien con la connivencia de una Monarquía que orientaba todo su esfuerzo en la consecución de unas metas hegemónicas

imperiales pero cuya administración era consciente del deterioro del orden público interior, al compás de las vicisitudes históricas que afectaban a la extenuada Castilla.

Durante el gobierno de los Autrias Mayores la reorganizada Hermandad Vieja manchega pasó por una etapa de consolidación jurisdiccional y de tímida expansión territorial, pese a la crisis demográfica y económica que soportaba el núcleo urbano ciudarrealeño durante el Quinientos. En efecto, con la atomización de la Hermandad General del Reino en las descoordinadas Hermandades concejiles -que en conjunto sufrirían un acelerado proceso de esclerotización-, se pone de manifiesto la necesidad ineludible de contar con las añejas fraternidades apícolas heredadas del Medievo, previa revitalización de su instituto y potenciación de su propagación fuera de su ámbito territorial tradicional.

Las Cortes se erigieron en caja de resonancia de los abusos y arbitrariedades de tales ministros, empujando a los monarcas castellanos a extender a los oficiales apícolas el mismo control ejercido por el juicio de residencia al que se sometían desde hacía décadas los empleos públicos concejiles. De esta forma, el Estado Moderno esbozado por los Reyes Católicos y desarrollado por los Habsburgo trató -a nuestro entender infructuosamente- de imponer un cierto control sobre unos organismos que adquirirían tanta notoriedad en el mantenimiento de unos ciertos niveles de seguridad en el yermo del antiguo Reino de Toledo, seguramente más por el agotamiento del modelo descentralizado y localista que representaba la Hermandad General que por méritos propios.

Lo cierto es que en las postrimerías del siglo XVI, coincidiendo con la muerte del Rey Prudente, la Hermandad Vieja de Ciudad Real se hallaba tan esclerotizada como decadente la capital manchega que albergaba su Santo Tribunal. Del mismo modo que en el primer tercio del Seiscientos la crisis de la ciudad se nos aparece en toda su magnitud, la corporación colmenera local por entonces está sumida en la inercia procedimental provocada o, en último extremo, agravada por la patrimonialización de sus cargos rectores y que la depresión de la cabaña trashumante coetánea no hace sino empeorar; paradójicamente este momento coincidía con un periodo en el que se atisbaba una salida a la embarazosa conflictividad jurisdiccional suscitada en tiempos pasados y cuando se esbozaba la figura del comisario como figura clave de la expansión hermandina fuera de su demarcación secular.

Cuando la degradación de los anteriores niveles de seguridad, conseguidos gracias a la política reordenancista de los epígonos Trastámara, a duras penas conservado por los Austrias Mayores, se pone ostensiblemente de manifiesto en la década de 1640 -con una Monarquía Hispánica en precario política, militar y hacendísticamente-, se hace patente la descarnada realidad de una población depauperada, descontenta, agobiada por unas cargas fiscales y militares cada vez más gravosas e insostenibles, caldo de cultivo de algaradas y desafueros. En este contexto de compartimentalización de la administración gubernativa y judicial, quebrada la confianza de los gobernados en los instrumentos de su tutela, igualmente desvirtuados quedarían los resortes de control sobre la Hermandad cristalizados en los juicios de residencia, que si bien no pasaron de testimoniales durante la primera mitad de Seiscientos, desaparecerían llanamente en las décadas siguientes por dejación, omisión o imposibilidad de ejercerlos con garantías.

A la luz de nuestras investigaciones el siglo XVII puede ser considerado, de esta manera, como una etapa de transición para la corporación apícola de Ciudad Real, durante la cual sin embargo se sentarán las bases para su inesperada revitalización durante buen aparte del Setecientos: los Austrias Menores, tanto o más que sus predecesores, potenciaron mediante el privilegio a este tipo de entidades, potencialmente tan loables para el bien público; pudiendo considerarse las directrices emanadas de los Consejos y los fallos de las chancillerías castellanas como el acicate necesario para que tomasen cuerpo los deshilvanados pero necesarios refrendos regios a tales institutos que garantizaban su continuidad institucional.

La instauración en el trono de la dinastía borbónica sería a la postre tan trascendental para el futuro de las Hermandades Viejas como importante la subsiguiente expansión pecuaria registrada durante la centuria. Tempranamente, y amparados por la atención interesada prestada por Felipe V, ninguna de las fuerzas integrantes del Triple Instituto se mostraron proclives a ninguna de las fuerzas en liza durante la contienda Sucesoria, optando por aguardar al desarrollo de los acontecimientos hasta pronunciarse implícitamente sus órganos rectores por el bando que a la postre sería el vencedor.

Superada esta guerra fratricida, momento en el que la coyuntura no aconsejaba a la Corte excederse en el celo sobre estos institutos armados para no enajenarse su favor, se planteó el problema de la forma de reconducir a unos parámetros racionales la inflación de honores auspiciada por la anterior coyuntura, arbitrándose desde la postrada administración sinodial las líneas maestras para intentar fiscalizar eficazmente dichas asociaciones: supervisión directa de su

vida institucional a través del Supremo Consejo a través de la obligatoriedad de remitir informes periódicos sobre el estado de su hacienda y de su labor penal; control indirecto de sus veredictos judiciales al continuar sujetando las sentencias interlocutorias de sus cortes de justicia a la revisión de las causas por parte de las Reales Chancillerías; adopción y fijación de los requisitos que debían observar los candidatos a un título; validación de su reordenamiento estatutario; y, por último el establecimiento del sistema de provisiones auxiliatorias, que si bien en un primer momento se limitan a legitimar en Madrid lo representado desde los lugares de vecindad de los pretendientes para engrosar el número de aforados y verificado/ aprobado en Ciudad Real, hacia 1760 -cuando definitivamente la administración ilustrada tomó conciencia de la falta de recambio de la densa, que no homogénea, retícula de seguridad entretejida por dichas organizaciones-, se comportaría como un auténtico filtro en virtud del cual se duplicaban las diligencias precisas para el ingreso ante esta suprema instancia castellana.

Siendo las asambleas periódicas los órganos por excelencia en el que dirimir los asuntos internos de las Hermandades Viejas, en realidad los resortes deliberatorios, consiliares y decisorios se hallaban en manos de la oligarquía hidalga que controlaba su vida corporativa, trasunto de lo socialmente consagrado por el ordenamiento estamental y refrendado por la práctica gubernativa concejil de Ciudad Real. En este mismo sentido, sus estatutos se convierten en los parámetros normativos a cuyo tenor se habría de desenvolver normalmente su devenir institucional. El conjunto ordenancista pergeñado en los años 1485-1486, los Capítulos de Maldonado, tendrán a grandes rasgos una vigencia muy superior a lo previsible, pues refrendados en 1551, sus preceptos se mantendrán casi indemnes hasta

que avanzado el Setecientos se tomase conciencia de lo desfasadas de algunas de sus disposiciones; la necesaria revisión ordenancista fue acometida durante la década de 1740, no dándose por terminada hasta 1756, con tan mala fortuna que hacia 1782 se presentaba en Madrid el esbozo de lo que habrían de ser sus postreros reglamentos, por considerar a los anteriores inadecuados. Hasta una década más tarde no se daría el fiat a tales estatutos por parte de los consejeros del real Castilla, cuando ya demasiado tarde para que de su preceptiva aplicación se derivase beneficio alguno a una Hermandad en ostensible decadencia operativa y cuyos miembros solapadamente parecen optar por relanzar sus connotaciones honoríficas en detrimento de sus cada vez más esclerotizadas atribuciones coercitivas y judiciales.

La estructura corporativa de la Hermandad ciudarrealeña aparece ya conformada substancialmente a fines del siglo XV al estar integrada orgánicamente por hermanos que desempeñan los cargos estipulados para el funcionamiento interno de sus resortes gubernativos gremiales y coercitivos judiciales, manteniéndose una posición aperturista respecto a los colaboradores eventuales en tareas ejecutivas, y recabando en todo momento la asistencia de personal cualificado -escribanos, abogados, cirujanos- en ocasiones puntuales. Conforme cristalice la tecnificación del proceso penal y en un intento por prestigiar la función de la justicia, el Santo Tribunal se hizo permeable a la integración profesional en su seno de letrados para asesorar a unos magistrados hermandinos normalmente legos, que sólo su preeminencia estamental y su posición económica legitimaban en tales empleos.

Durante el Quinientos, la Hermandad Vieja fijó definitivamente y desarrollo un organigrama funcional que permanecería vigente, en

líneas generales, hasta la abolición de dichas organizaciones. Los hermanos hidalgos -la oligarquía local- siguen copando las dignidades rectoras, dejando a los ciudadanos las labores ejecutivas. Paulatinamente personal cualificado ajeno a la entidad será incorporado a los puestos que precisaban de una cierta preparación previa -juriconsultos, personal sanitario-, colocando a personas de la confianza del cabildo en aquellas tareas más penosas e ingratas -alcaides y verdugos-, quedando únicamente las notarías numerarias al albur de unos individuos que, si bien profesionalmente capacitados, sus intereses podrían diferir de los marcados por sus dirigentes, dejando la puerta abierta a medio plazo a su enajenación por sujetos que escapasen a su control.

El Santo Tribunal manchego ejerció su influencia en una extensa circunscripción territorial muy superior a la que se creía hasta ahora -extendiéndose por toda La Mancha, gran parte de Andalucía y Extremadura, así como zonas muy concretas de la Meseta Superior y, en menor medida, por el resto de las posesiones peninsulares de la Monarquía Católica salvo Cataluña (donde ya existían los mossos d'esquadra), las posesiones insulares, Portugal y la significativa excepción de las Nuevas Poblaciones (donde se eludió implantar la estructura de poderes tradicionales)-, por otro lado pareja a la amplitud de sus atribuciones y prerrogativas. Para hacer frente a sus obligaciones jurídicas y policiales contó con su tradicional aparato rector centralizado en Ciudad Real, que cuando fue preciso complementó con una tardía estructura periférica jerarquizada, semiautónoma en la práctica, que garantizaba la presencia constante de sus dependientes por gran parte de la geografía nacional. Esta política de presencia redundaba en un control más o menos directo en una amplísima base

territorial a través de unos representantes jerarquizados según su calidad estamental y con unas atribuciones ejecutivas determinadas.

La desarticulada expansión de la Hermandad Vieja fuera de su ámbito tradicional de implantación obedecía más a motivaciones de promoción personal de los pretendientes y de lucro de los notarios o de los mismos rectores hermandinos que a una racional política institucional o supracorporativa orquestada para cubrir el vacío dejado por las esclerotizadas fuerzas de seguridad del despoblado existentes a estas alturas de la Edad Moderna poco más que nominalmente, no estando respaldada por una adecuada expansión financiera de sus rentas pecuarias. En este sentido la "inflación de títulos" del Setecientos comportaría a medio plazo más problemas que ventajas para el Triple Instituto, pues serviría más de motivo de escándalo y de desprestigio que para potenciar su operatividad actuacional, auspiciando la proliferación de los litigios competenciales y propiciando una mayor autonomía efectiva de sus ministros en un periodo de compleja multiplicidad jurisdiccional.

En todo caso, la voluntad de contar con delegados en áreas alejadas al núcleo primigenio de la corporación apícola nunca fue contemplada por los rectores ciudarrealeños como un resorte de imposición o de extensión de su jurisdicción en aquellas zonas, sino como un sistema de abaratar unas diligencias procesales que consumían la mayor parte de sus rentas, procurando, siempre que era posible, captar a individuos de total solvencia personal y acreditado respeto en su comarca. De este modo cabe interpretar la facilidad de acceso a su estructura periférica de hidalgos o cuanto menos de pecheros que desempeñasen ocupaciones que coadyugasen al buen ejercicio del ministerio delegado. En el Setecientos, cuando la prodigalidad en el

despacho de tales comisiones se dispara, junto a la verificación de sus cualidades familiares e individuales, será norma el informe de concejos y justicias que no tanto legitimasen los testimonios presentados -por otro lado susceptibles siempre de ser manipulados e incluso falseados- como para que se pronunciasen sobre la conveniencia de la concesión de la merced solicitada por el candidato, es decir, conocer si estaban proclives a permitir el desempeño del instituto conferido y respetar las franquicias derivadas de su comisión.

Tales dependientes, llevados a menudo por su exceso de celo en la ejecución de un ministerio más soportado que deseado, cuando no mostrándose remisos a desempeñar las comisiones confiadas por sus superiores, oscilaron entre el uso arbitrario de sus prerrogativas o a limitarse a gozar de los privilegios inherentes a su título, contemplando la inmensa mayoría de ellos la adhesión a dichas fraternidades como un sistema alternativo -que no dudamos en calificar de accesible- de promoción socioeconómico dentro del intrincado ordenamiento estamental vigente. Su comportamiento, con reiteración tildado de venal, o cuanto menos de irregular, tenía como marco de referencia una institución que en todo momento velaba por el buen nombre de su ministerio, provocando la lógica repulsa corporativa, aunque se asumiría sin complejos la veracidad de tales acusaciones siempre que fueran probadas y flagrantes, erosionándose la protección brindada por el aparato hermandino a sus infractores ante la asiduidad de los abusos perpetrados en su nombre por un personal no asalariado y difícilmente controlable por la atomización de sus efectivos.

Sin embargo sería inexacto colegir que toda actuación hermandina estaba irremisiblemente teñida de lenidad o servía a intereses inconfesables, de la misma forma que sus diligencias no terminaban

ineludiblemente en choques jurisdiccionales con las autoridades eclesiásticas o laicas, aunque las fuentes insisten sobre el delicado equilibrio de la correlación de fuerzas existentes en la época, sumamente quebradizo y que solía redundar en perjuicio de la misma administración de justicia a la que decían representar. Lo cierto es que la defensa a ultranza de las particularidades forales en el marco del confuso ámbito judicial y coercitivo de la Edad Moderna era habitual y no un mal achacable en exclusiva a los representantes del Santo Instituto, aunque no por ello su culpa sea menor. Tanto las autoridades locales como las hermandinas son tanto víctimas de su proceder aparentemente intransigente y descoordinado, como competidores por el prestigio del que se hallaban investidos, siendo su objetivo último la reafirmación de su poder y la consecución, o la conservación en su caso, de la estima de sus convecinos, en definitiva, frutos de su tiempo.

A pesar de ello, no podemos correr el riesgo de trivializar o de desdramatizar la cuestión, interpretando que la conflictividad jurisdiccional o los desarreglos en su proceder perderían en realidad importancia por su misma reiteración, siendo asumida por los protagonistas como parte consubstancial -o al menos como imponderable ineludible- inherente a su ministerio, no es menos cierto que tales choques competenciales y excesos suponen una continua agresión a la legalidad vigente, esencialmente intolerables si lo que se pretendía era erradicar la delincuencia del despoblado y no participar en el intrincado juego de intereses y equilibrios, a menudo descompensados por sus actuaciones cotidianas.

La adecuación financiera del siglo XV entre ingresos y gastos, precarizada durante el XVI por los efectos de la llamada revolución de

los precios, se desequilibró peligrosamente en el XVII por la coyuntural decadencia de la trashumancia de la que dependía estrechamente la hacienda hermandina y por la graves repercusiones que tuvo el proceso inflacionista y las sucesivas devaluaciones del vellón a pesar de optarse por la reducción de sus labores operativas a unos niveles mínimos que no dudamos en calificar de mediocres, que apenas si justifican su mera subsistencia, lo que auguraba si no su desaparición institucional a corto plazo sí su desnaturalización conforme al proceso seguido por la Hermandad general del Reino. Nada más lejos de la realidad; tras el inevitable paréntesis abierto por la guerra de Sucesión de los albores del Setecientos, ingresos y gastos se incrementarán notablemente al albur de la expansión de la cabaña ganadera trashumante y del amparo regio, apareciendo las décadas centrales de la centuria como el periodo en el que el Santo Tribunal logra sacudirse el letargo en el que se hallaba sumido, revitalizándose buena parte de su aparato operativo y acometiéndose un necesario remozamiento patrimonial de sus inmuebles urbanos, largo tiempo demorado.

La delincuencia perseguida era fundamentalmente de tipo rural, con toda la problemática que ello comporta de estacionalidad de las infracciones, imposibilidad material de su prevención y erradicación, protección de sus protagonistas por la intrincada y a menudo inexpugnable red de solidaridades locales, dificultad para hallar evidencias probatorias, colectivización de los delitos, necesidad de colaboración entre unas justicias no siempre tan diligentes ni colaboradoras como cabría suponer, etc. Los justiciables, mayoritariamente, suelen ser miembros de los escalones estamentales inferiores, integrantes de minorías étnico-culturales y desheredados, sin valedores entre las justicias concejiles y marginados por una

sociedad esencialmente discriminatoria en la que late un germen de violencia, a duras penas reprimido por los convencionalismos religiosos y morales recordados desde los púlpitos e impuestos mediante la fuerza por parte de la justicia y la red de solidaridades locales imperante.

Derivada del especial instituto de la Santa Hermandad, fue la difusa concepción funcional del castigo penal. Ésta implicaba que, en la economía del castigo, parece predominar las razones de justicia sobre las de oportunidad coyuntural, como no podía ser menos en un ordenamiento penal profundamente imbuido de los valores postridentinos, orientado preferentemente hacia una concepción más retributiva que utilitarista de la pena en el Seiscientos, para girar en el Setecientos hacia la rentabilización de tales sanciones en aras de un interesado y cambiante bien común.

La presente investigación quería superar, lo que ha sido una constante historiográfica hasta la fecha, es decir, el considerar que desde el reinado de los Reyes Católicos las Hermandades Viejas habían entrado en una dinámica de decadencia irremisible si no de desaparición institucional ante el respaldo regio otorgado a la Hermandad Nueva tanto como por su propio anquilosamiento corporativo. La realidad es que durante el Quinientos la entidad manchega mantuvo una apreciable actividad, seguramente auspiciada por el fracaso de la Santa Hermandad General del Reino y la degradación de los aceptables niveles de seguridad presumiblemente logrados hasta la fecha.

Los condicionantes socioeconómicos que afectaron a las sedes del Triple Instituto durante la Edad Moderna, en plena decadencia durante el siglo XVI y que se prolongaría en Ciudad Real hasta bien avanzado

el siglo de las Luces, sin duda no favorecían la necesaria reactivación de estos cabildos. Los primeros Borbones, conscientes de la utilidad que aún tenían los dispositivos conformados por las asociaciones apícolas antaño tan eficaces, impulsaron decididamente su expansión pero no en el marco de referencia del desordenado crecimiento que observaron durante la contienda sucesoria, sino intentado supeditarlo a unos parámetros de una mínima racionalidad; dicha labor sólo daría sus frutos al coincidir con un notable incremento de las rentas pecuarias sobre las que se sustentaba su autofinanciación, aunque sus resultados a la postre no pasarían de discretos.

La supeditación de la Santa Hermandad a los altos tribunales territoriales castellanos de justicia, perfectamente regulada mediante la norma, se halló siempre al albur de los acontecimientos y de la indiscriminada política aplicada por unos y otros de hechos consumados, dado el amplio margen de discrecionalidad existente. Los criterios del Consejo de Castilla suelen imponerse, no sin problemas, confiando a la Real Chancillería de Granada el control de su labor represiva, asumiendo la Corte la fiscalización de sus rentas y su supervisión institucional a través del corregimiento en el Seiscientos y directamente durante la siguiente centuria. Únicamente mediado el Siglo de las Luces es perceptible que el pretendido férreo control sobre dicha entidad empezaba a arrojar sus primeros resultados, aunque en todo momento fue prácticamente imposible de encauzar algo más que las líneas maestras de una actividad tradicionalmente autónoma en sus resoluciones corporativas y judiciales.

Difícilmente puede pensarse en una institución, de este o de cualquier otro tipo, que hubiera podido mantenerse durante tan

dilatado espacio de tiempo sin sufrir alteraciones de diverso calado y enfrentada a un entorno hostil o víctima de su propio proceder; la Hermandad de Ciudad Real, como sus homónimas de Toledo y Talavera, se mantuvieron durante siglos al servicio de intereses colectivos, aunque no siempre del mismo signo: empezaron siendo unos tribunales gremiales populares para, posteriormente, ser encauzados por la Corona con la intención de dotarse de una estructura interna y de unos recursos que asegurasen su continuidad; si en un principio la razón de su existencia fue la erradicación de los golfinos, obedeciendo a unos móviles de autodefensa, pronto se pondrá en evidencia la precisión de su pervivencia por motivos político-militares y poblacionales estratégicos; de manera que progresivamente el radio de acción de sus dependientes rebasará su área natural de expansión en la prevención y coerción de la delincuencia rural, para luego pasar a controlar a las capas sociales marginales, erigiéndose como enemigo capital de gitanos y bandoleros desde mediados del siglo XVII hasta su extinción.

Resulta paradigmático que la tradicionalmente considerada centralista administración Borbónica mantuviese la descentralizada política jurídico-policial heredada del pasado, tal vez por no contar ni con los medios, ni con una decidida voluntad al respecto, por lo que no pudo entreverse una alternativa lógica a esta situación. Los ilustrados españoles eran, en el mejor de los casos, moderados reformadores antes que abiertos rupturistas y para ello no hay más que volver la vista hacia el pasado y valorar en qué quedaron sus proyectos, particularmente aquellos que pasaron de la mera utopía.

A fines del siglo XVIII, agotada su coyuntural recuperación económica y operativa operada en las décadas centrales de la centuria, era ya incuestionable que el modelo de seguridad del territorio

encarnado por la Hermandades Viejas había llegado a su fin. A estas alturas de su desarrollo, los tribunales manchegos mostraban inequívocas señales de que hacía tiempo habían tocado techo y el nuevo contexto histórico no haría sino terminar de sepultar lo que ya carecía de sentido. Asignadas sus rentas pecuarias al Tesoro Nacional, despojados sus miembros del contenido fiscal que antaño comportaban sus privilegios personales, los vaivenes políticos e institucionales derivados del traumático tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen no hicieron sino precipitar una muerte institucional largamente anunciada.

12. APÉNDICE DOCUMENTAL.

12. 1. TEXTOS.

1

1621, abril, 27. Madrid. AHN. Div. Her., leg. 2, nº 2, ff. 8vº 16r; y
AGS. Mercedes y Privilegios, leg. 278, nº 26

Sobrecarta de privilegio y confirmación otorgada por Felipe IV a la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real. (Copia).

Pub. L. DELGADO MERCHÁN, op. cit., pp. 328 y ss.

Sepan quantos esta carta // de Privilexio y confirmacion vieren como nuestro señor Don Phelipe Quarto de este nombre por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon , de Aragon, de las Dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, etc. Vimos una nuestra cedula firmada de nuestra mano sobre la orden que emos dado para que solamente se escriba de nuevo, en pliego o pliegos, el pergamino que fuere menester por la caveza y privilexio que de nos se confirman y no a la letra y una carta de Privilexio y confirmacion que el Rey Don Phelipe mi señor, y padre (que este en Gloria) escrita en pergamino y signada con su sello de plomo // pendiente en hilos de seda a colores; e librada de los concertadores y escrivanos mayores de los sus privilexios y confirmaciones y de otros ofiziales de su Casa: Dada en Madrid a veinti y un dias de el mes de Febrero de el año pasado de mil seiscientos y uno: el thenor de la dicha nuestra cedula y el la dicha

carta de Privilexio y confirmacion original aqui incorporada es este que se sigue= El Rey nuestro señor. Concertadores y escrivanos mayores de los privilexios y confirmaciones saved que aviendo sido informado que si obiesen de escribir de nuevo // a la letra todos los privilexios que de Nos se confirman por su caso; es la escritura comunmente mucha y averse de escribir de buena letra y en pergamino; necesariamente habria mucha dilacion en el Despacho de ellos; en que las partes recibirian molestias y vejacion y aviendose platicado en el nuestro consexo del remedio que en ello podria haver fue acordado que deviamos mandar esta nuestra cedula, por la qual vos mandamos proveieis y deis, que de aqui adelante, en los privilexios que havieremos de confirmar, solamente se escriba de nuevo el pliego, o pliegos de pergamino, que fueren menester // para la caveza y pie de confirmacion; con lo qual se cosa y junte el privilexio que se confirma; segun y como antes estava sin lo escribir ni trasladar de nuevo, haciendose de manera, que el dicho pliego o pliegos de confirmacion vengan a el justo y plana y renglon en quanto ser pueda, con la otra escritura de los privilexios viexos que se confirmaron, en donde esta escrito y ampliado, y de nuevo empleamos y confirmamos la jurisdiccion que tienen, y an de tener, para siempre jamas los ministros, juezes, comisarios, y quadrilleros que tuvieren titulo de la // Santa Hermandad Viexa de Ciudad Real que es que ningun Juez ni Alcalde pueda conocer no conosca en sus causas civiles ni criminales por ninguna manera, que solo a de conocer de esta causa los nuestros alcaldes mayores y ordinarios de la dicha Santa Hermandad Viexa de Ciudad Real; y no otro alguno, devajo de las penas, y gravamenes que estan expresados en las Ordenanzas y fundacion de dicha Santa Hermandad Viexa de Ciudad Real; que son privacion de ofizios, y de diez mil maravedis de condenacion y denagada la nuestra merced para siempre jamas, // a qualquier Juez o Alcalde, u otra qualesquier

persona que lo contrario hiziere o pusiere algun estorvo o impedimento a cada uno de los vuestros ministros de la dicha Santa Hermandad y si escrivieren alguna cosa contra ellos, an de remitir todo lo escrito orixinal a el dicho tribunal de Ciudad Real, y no a otra parte alguna, para que alli se determine y castigue la culpa que resultare, contra el que lo cometiere; como tambien que a ninguno de los dichos nuestros ministros // juezes, comisarios, quadrilleros, y otros qualesquier que sean de dicha nuestra Hermandad de Ciudad Real no se les pueda, ni a de poder, repartir ni hechar ningun tributo, pecho ni gavela alguna, ni derrama , en que pechan y pagan los hombres buenos, llanos, a nuestra Real Hazienda; ni se les a de poder embargar nungunos bienes, muebles ni raizes suios, ni de sus muxeres vestidos, ni cavallo, ni armas ofensivas, ni defensivas, que tengan en sus cassas; antes vien si se hallaren sin ellas a el tiempo, y quando // quisieren salir en seguimiento de ladrones, publica o secretamente, si las tuviere otra alguna persona se las podra quitar prestadas para semexantes ocasiones, bolviendoselas despues, si no las huviere perdido en las refriegas que suele acontecer, en las prissions de los tales ladrones, ni se les a de hechar ninguna carga concexil, ni tutelas ni curadurias, ni vagaxes, ni ospedajes de soldados, aunque sean de los mismos que acompanian mi Real Persona, ni otra cosa alguna de ningun // jenero de tributo por quanto an de estar siempre promptos de dia y de noche, con sus personas, armas y cavallos para el limpiamiento de los caminos reales y montes y brechas en donde salen y andan los ladrones, para que los caminantes y traxinantes puedan pasar libremente y sin ningun temor ni riesgo= que tambien devaxo de las mismas penas, todos los dichos juezes y Alcaldes y demas ministros de Justicia de estos nuestros Reinos y señorios de España les an de hazer, dar y den, todos los mantenimientos, // y camas, y lo de mas necesario para sus personas, y cavallos, polvora y vala a moderados precios, sin exceder

en cosa superflua; y toda la jente que pidieren para su resguardo y prision de ladrones por ser conveniente a mi real servicio y de la Santa Hermandad y de todos los pueblos y caminantes, y pasaxeros, y esta se a de observar assi para siempre jamas, que assi es nuestra determinada voluntad; sin embargo de qualquier pragmatica o decreto, que contra ello haya auido, e aiga, porque a de visto por conveniente este acuerdo y decreto de buen gobierno se escriba de nuevo, el pliego o pliegos de pergamino que fueren menester para la caveza y pie de confirmacion, en la qual se cosa y siente el Privilexio viexo que se confirmara; segun y como antes estava; sin los escribir ni trasladar de nuebo, haciendose de manera que el dixo pliego o pliegos de pergamino de la dicha caveza y pie de confirmacion, venga a el justo y a la plana y renglon, en quanto ser pueda, con la dicha escritura de los privilexios viejos que se confirmaron, quitando de el privilexio el sello que tuviere porque se an de sellar de nuevo, como adelante ira declarado; // y rubricareis a el pie del pliego o pliegos de tal confirmacion, y de el privilexio viejo porque en ello no puede haver fraude= y porque podia ser que alguna de las partes no embargante la dicha dilacion, y lo que por Nos se manda, quisiesen que sus privilexios se escribiesen a la letra; mandamos que se haga assi quanto las partes lo pidieren= assimismo se traen otros privilexios rotos y maltratados y algunas provisiones // que ninguno puede tener ni pretender tener ignorancia pues llega a el servicio de Dios y de el vien comun; y se a de observar, y observe para siempre jamas, devaxo de dichas penas, y gravemente, conforme de la manera que esta instruido...y otrossi mandamos a el nuestro rexistrador de esta corte, y a los Chancilleres de las nuestras Audiencia y Chancillerias que residen en las ciudades de Valladolid y Granada, que rexistren, y sellen los dichos privilexios y confirmaciones que livraredes y despacharedes en la manera que dicho es, sin que por razon de no

llevar el sello antiguo; pongan impedimento alguno, todo lo qual
queremos y mandamos que assi se guarde y cumpla, y // que los tales
privilexios rexistrados, y sellados, en la dicha orden nuestra, se les
de entera fee y credito, segun y como se les diera, y deviera dar, si
estuvieran todos escritos de nuevo; y esta nuestra cedula a de ir
inserta en las cavezas de las tales confirmaciones para que no se
pueda adelante, ni en tiempo alguno, poner duda o sospecha en los
dichos privilexios; por ser la dicha confirmacion y pliegos de
diferente letra, y tinta, aunque esto mismo se hizo en tiempo de el
Rey don Phelipe mi señor padre (que este en Gloria) en virtud de una
su cedula= e los unos ni los otros // no hagais cosa en contrario por
alguna manera= dada en Madrid a veinte y siete dias del mes de abril
de mil seiscientos veinte y un años. Yo el Rey. Por mandado del Rey
nuestro señor. Pedro de Contreras.

1655, mayo, 14. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 21, nº 37, s.f.

Designación de procuradores por parte del cabildo hermandino para resolver el conflicto suscitado con el corregidor de Ciudad Real, al pretender el delegado regio tomar residencia a los oficiales apícolas sin la preceptiva comisión.

En la Ciudad Real en catorce dias del mes de mayo de mil seyscientos y cinquenta y cinco años, estando en su cavildo como lo an de usso y costumbre a saver los señores don Diego Muñoz y Molina y don Antonio de Aguilera Ladron de Guevara alcaldes de la Santa Hermandad Vieja desta ciudad por S. Mgd. en todos los Reynos y Señorios don Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa cavallero de la orden de Calatrava= don Juan de Aguilera y Guevara= don Alvaro Muñoz de Figueroa cavallero de la Orden de Santiago= don Juan del Forcallo y Guevara= don Pedro del Saz Correa hermanos de la dicha Santa Hermandad dijeron que por quanto el señor licenciado don Rodrigo de Cantos Royo corregidor y juez de residencia en esta ciudad por S. Mgd. pretende tomarla a los alcaldes y ministros que an sido de esta dicha Santa Hermandad en virtud de la comision hordinaria que trae para tomar residencia al lizenziado don Diego de Palacios y Tovar su antezesor en dicho oficio y sus ministros y no pudiendolo hazer en virtud de la dicha comision de residencia ordinaria no teniendo expecial y particular de S. Mgd. para residenciar a esta dicha Santa Hermandad y sus ministros como siempre se a hecho y se les a dado por los señores del Real Consejo a los correjidores sus antecesores que le an residenciado como fue a el doctor Lazaro de Ocaña correjidor que fue en esta villa que se le dio a pedimiento del señor fiscal el año pasado de mil y seyscientos y

quinze años y a don Fernando de Peñafiel Ortiz correjidor assimismo que fue de la dicha ziudad el año pasado de mil seyscientos y beinte y dos // a el licenciado don Antonio Laynez de Torreluenga correjidor que fue desta ziudad que tomo la ultima el año pasado de seyscientos y quarenta y seys siendo asy que los demas correjidores que an sido en esta villa como fueron don Francisco de Angulo= don Antonio Ruyz de Navamuel= y el doctor don Gutierre Marquez de Cañaga= Marco Antonio de Oviedo= Pedro Sevil de la Oreja= don Gabriel de Gallegos= don Fernando Gil del Valle= y el dicho licenciado don Antonio Laynez de Torreluenga tomo la dicha residencia en virtud de la comision ordinaria que trujo para residenciar su antecesor asta que despues de haver ejercido el oficio de correjidor mas tiempo de dos años se le dio comision particular por S. Mgd. y señores de su Real Consejo para que tomase la dicha residencia con los ministros de su juzgado sin que el ni ellos llevasen salarios algunos ni tampoco la tomo el dicho licenciado don Diego de Palacios y Tovar antecesor del dicho don Rodrigo de Cantos Royo a quien esta residenciando acordava y acordaron que para la defensa de la jurisdiccion de esta Santa Hermandad se acuda ante los señores del Real Consejo de Castilla y se den las querellas y hagan todos los pedimientos nezesarios para que el dicho señor correjidor se abstenga de tomar la dicha residencia a los alcaldes y ministros desta Santa Hermandad como lo tiene yntentando y ba persiguiendo y probeyendo autos y ympuniendo penas para que parezcan a dar la dicha residencia en virtud de la dicha comision ordinaria // y en casso que S. Mgd. sea servido de mandar que la tome se le de para dicha comision expecial como siempre se a hecho y usado de tiempo ynmemorial a esta parte como consta de las tres provisiones arriba referidas y de otras mas antiguas que estan en los archivos desta Santa Hermandad y atento a que las rentas de ella son muy cortas y de presente estan consumidas y gastadas en salidas que han hecho los otros señores alcaldes para

asegurar los caminos montes yermos y despoblados de la Sierra Morena deesas de Guadalerza y otros sitios y partes de la Extremadura saliendo por sus personas los dichos señores alcaldes acompañados de muchos señores del estado de caballeros hijosdalgo y ziudadanos escrivanos y otros ministros desta Santa Hermandad que solamente se gasto lo nezesario con mucha moderacion sin que persona alguna aya llevado salarios ni se acostumbra a darlos en semejantes salidas con tan buen efecto que despues de las dichas salidas no an subzedido rovos salteamientos ni muertes en la dicha Sierra Morena y deesas de Guadalerza ni otras partes donde los años pasados an subzedido tantos rovos y salteamientos como es notorio, y en los gastos de hacer las honrras que por ejecutoria mandatos de S. Mgd. se han hecho y hazen cada un año en al parroquia de San Pedro con tremulo y mucho gasto de zera y pompa por los señores reyes // predecesores de S. Magd. que Dics guarde y limosnas que acostumbran hacer las pasquas de Natividad a pobres honrrados de solenidad bergonzantes en sus cassas de la renta de la dicha Santa Hermandad que de ordinario de muchos años a esta parte ymporta en cada año ciento y setenta mill maravedis poco mas o menos no alcanza a los dichos gastos= y porque en las quantas qua asta agora se an tomado por los juezes particulares de residencia no a avido alcanzes algunos ni se les an hecho cargos a ningunos de los ministros se suplique a S. Mgd. y dichos señores de su Real Consejo que por agora y por el tiempo que fuesen servidos se suspenda el dar comision para que se tome la dicha residencia a los dichos alcaldes y ministros desta Santa Hermandad y para que parezca ante S. Mgd. y dichos señores e todo lo contenido en este acuerdo y qualquier cossa y parte dello dijeron que davan y dieron su poder cumplido quan bastante de derecho se requiere a el dicho señor don Antonio de Aguilera Ladron de Guevara alcalde y a don Joseph de Zisneros vecinos de la villa de Ziudad Real ambos a dos y a cada uno ynsolidum y con facultad que lo que el uno

comengare el otro lo pueda fenezer y acavar y que lo puedan cada uno
ynsolidum sustituir en uno dos // y mas procuradores y ajentes y para
que en razon de lo referido presenten petiziones pedimientos
testimonios y siendo nezesario saquen traslados del sello real de las
dichas provisiones y comisiones particulares con que se an tomado las
dichas residenzias haziendo las demas dilijenias judiciales y
extrajudiziales que combengan y sean nezesarias asta que lo contenido
en este acuerdo y poder tenga cumplido efecto que el poder para todo
lo referido y lo anejo y dependiente se requiere y es necesario esse
mismo lo dan y otorgan con sus yncidencias y dependencias que si otro
poder mas expecial o jeneral se requiere esse mismo le dan sin
ecepccion ni limitacion alguna con obligacion y relevacion en forma a
cuya firmeça y de todo aquello que en virtud de este poder hizieren
obrasen y actuasen obligaron los propios y rentas desta Santa
Hermandad y lo otorgaron y firmaron siendo testigos Andres Fernandez=
Francisco de Belasco y Martin de Alva vezinos desta ziudad y yo el
escrivano doy fee conozco a los dichos señores otorgantes y que los
dichos señores don Diego Muñoz y molina y don Antonio de Aguilera
Ladron de Guebara son tales alcaldes.

(r) D. Antonio de Aguilera Ladron de Guevara. Don Juan de Aguilera y
Guevara. Ante mi Raphael de Macaya.

30, enero, 1706. Madrid. AHN. Div. Her., leg. 4, nº 57, ff. 5v9-6r.

Privilegio de Felipe V concediendo a los ministros de la Santa Hermandad Vieja ciudarrealeña la facultad para portar de oficio armas prohibidas.

Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Murcia, de Jaen, señor de Vizcaya y de Molina, etc: Saved se nos a dado noticia, que en la villa de Siruela avian robado al cura de ella una quadrilla de gitanos, quitandole unos seis mil ducados, sin poderlo impedir, onze hombres que à la sazón se hallaban dentro de la casa del mismo cura, à causa de que los ladrones aunque no eran mas de cinco, llevaban mucha prevencion de armas de fuego, con las quales violentaron, y sujetaron à la gente de dicha casa: y aunque avia llegado el caso à noticia de la Hermandad, no os atreviades à salir en seguimiento de los ladrones referidos, ni de otros que executaban las mismas violencias, respecto de que no se os permitia llevar armas de fuego cortas, assi para la seguridad de vuestras personas, como para las dichas prisiones: y para que por este medio no se dexe de acudir al remedio de semejantes daños, y que nuestros vasallos estén con la quietud y sosiego que conviene: visto por los del nuestro Consejo, se acordo dar esta nuestra carta, por la qual os concedemos licencia y permission para que quando salieredes con los Alcaldes de la // dicha Hermandad, o ministro superior, à la prision, y persecucion de gitanos, y otra qualquier gente de malvivir, podais sin incurrir en pena alguna, llevar armas de fuego cortas de las prohibidas, sin embargo de las leyes, y pragmaticas destos Reynos,

que hubiere en contrario; con las quales, para en quanto à esto toca, y por esta vez, dispensamos, dexandolas en su fuerça y vigor para en lo demas, y queremos, que no podais usar de dichas armas quando salieredes sin asistencia de vuestros superiores; y mandamos à las justicias ordinarias de las ciudades, villas y lugares de estos nuestros Reynos, y señorios, no os impidan, ni embarazen en manera alguna, pena de la nuestra merzed, y de cada treynta mil maravedis para la nuestra Camara: so la qual mandamos a qualesquier escrivano os la notifique y de ello de testimonio. Dada en Madrid à 30 de Enero de mil setecientos y seis años. Don Francisco Ronquillo= lic. Don Juan Antonio de Torres. Don Garcia de Araciel. Don Gaspar de Quintana Dueñas. Don Sevastian Antonio de Ortega. Yo Bernarbe de Solis, secretario de Camara de nuestro Señor, y su escrivano de Camara la hize escribir, con acuerdo de los de su Consejo.

1698, marzo, 29. Ciudad Real.

AHPCR. Protocolos Notariales,
leg. 208, ff. 22r-vº.

Contrato de Juan Sastre como verdugo del Santo Tribunal manchego.

En la ciudad de Ciudad Real en veinte y nueve de marzo de mil y seiscientos y noventa y ocho años ante mi el escribano de S. Mag. público del numero y del ayuntamiento desta dicha ciudad y propietario de la Santa Hermandad biexa della. Parecio Juan Sastre executor de la real Justicia y dijo que con los señores D. Gaspar Sancho Barona y D. Manuel Jedler Lison Gamez cavallero del orden de Calatrava alcaldes de la Santa hermandad biexa desta dicha ciudad y en todos los reinos y señorios de S. Mag. por el estado de cavalleros hijosdalgo tiene trato y ajustado con sus mercedes de que a de asistir en esta dicha ciudad sin hacer ausencia de ella por tiempo y espacio de seis años para las execuciones que se ofreciesen a dicha Santa Hermandad con calidad y condizion que los dichos seis años an de correr y contar desde el dia segundo domingo de septiembre primero que bendra deste presente año desta fecha y deste dicho dia se le a de dar por su asistencia quarenta ducados de salario en cada un año y las execuciones que se ofrecieren a dicho tribunal de tormentos açotes afrenta y otras de muerte se le an de pagar aparte luego que las execute y en su conformidad se obliga a no haçer ausencia desta ciudad por dicho tiempo sin orden ni licencia de dichos señores alcaldes presentes y otros que sucedan an dichos oficios en adelante y si por alguna raçon o causa hiciere ausencia de mi boluntad dichos señores Alcaldes presentes y benideros puedan despachar ministro deste tribunal a la parte donde estubiere y residiere y apremiarme con prission y todo

rigor de derecho a traerme a esta dicha ciudad hasta que aya cumplido el dicho tiempo todo a mi costa // y del dicho salario se me pueda quitar lo que ymportare el traerme a esta dicha ciudad= y estando presentes dichos señores alcaldes en nombre de la Real Jurisdizion que sus mercedes estan exerciendo obligan los bienes y rentas de dicha Santa Hermandad a que los que sucedieren en dicho oficios estaran y pasaran por lo contenido y ajustado por sus mercedes con el dicho Juan Sastre y que se le pagara puntualmente como se acostumbra el dicho salario y execuciones de por si que se le ofrecieren hacer a dicho tribunal. Y dicho Juan Sastre al cumplimiento desta escritura y obligacion que hace se obliga a estar y pasar por su contenido sin yr ni venir en cosa alguna y quiere y consiente y execute si llegare el caso segun y como en ella se contiene con el apremio que conbenga y sumission a dichos señores alcaldes para que lo executen como en ella se contiene y puedan despachar su Carta de Requisitoria para todo ello a las partes donde residiere= Y se declara que las execuciones que se hicieren se a de pagar por dicho tribunal en esta manera= si fuere de afrenta dos ducados= si fuere de açotes quatro ducados= si fuere question de tormento dos ducados= de tormento cumplido quatro ducados y una prenda del reo= y si fuere de muerte en Peralvillo diez ducados y despojos del reo si los tuviere= y en esta conformidad dicho Juan Sastre otorgo esta escritura y dichos señores Alcaldes binieron en ello segun y como en ella se contiene y asi lo otorgo siendo testigos Antonio Serrano Luis Moreno y Juan Grande vecinos desta dicha ciudad. Y por el otorgante que doy fe conozco lo firmo un testigo por no saver y dichos señores Alcaldes por lo que les toca= Siendo testigos Antonio Serrano Luis Moreno y Juan Grande vezinos desta dicha ciudad y por el otorgante que doy fe conozco lo firmo un testigo por no saver y dichos señores Alcaldes por lo que les toca= Ante mi (r) Juan de Arenas sº.

1755, diciembre, 18. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 4, nº 67, s.f.

Traslado del acta capitular de la corporación apícola de Ciudad Real donde se trata de los perjuicios derivados del interdicto de títulos hermandinos y en el que se regula su concesión, así como los derechos que en adelante se cobrarían sobre los mismos.

En la ciudad de Ciudad Real en diez y ocho del mes de Diciembre de mil setezientos cinquenta y cinco años estando juntos en la Sala Capitular del tribunal de la Santa Hermandad vieja de ella como lo han de uso i costumbre los señores D. Francisco Rodríguez de Ledesma y D. Juan del Forcallo y Aguilera alcaldes del dicho Santo Tribunal y demas cavalleros hermanos que aqui firmaron dixerón que con el motivo de las providencias que se an dado por los señores del Real y supremo Consejo de Castilla, se suspendio a sus ministros que estan nombrados el uso de la jurisdizion que exercian por cuiu rason careze esta Santa Hermandad de personas a quien hazer los encargos que cada dia se ofrezan de prisiones, persecuciones de gente facinerosa y otras dilixencias para el seguimiento de las causas pendientes, como asimismo el convocarlos para las salidas que frecuentemente se hacen a fin de castigar y contener los malhechores por cuiu rason se ocasionan crecidos gastos, siendo mas facil el conseguir qualquier empresa teniendo ministros que por la ynnediacion de su bezindad, a los parages donde se cometen los delitos, notiziosos de ellos, mas promptamente podran prozeder al seguimiento de los que fuesen reos y tomar conozimiento de sus causas, lo que zedera en beneficio a la causa publica, en cuiu birtud atendiendo esta Santa Hermandad a todo quanto responde a su Santo Instituto, y que se ebiten los daños que

pueden ocasionarse mediante que al presente ai barios pendientes para el exerzicio y encargo de comisarios de este Tribunal que tienen dado ynformazion del conozimiento y zircunstancias que concurren en sus prisiones baxo lo prebenido en los capitulos insertos en la Real Provision librada por dicho Real Consejo su data en Madrid a diez y ocho dias del mes de Junio del año pasado // de mil setezienteos y quarenta, que se a suspendido su reconozimiento y determinazion en su expediente a causa de estar remitidas las Ordenanzas formadas por esta Santa Hermandad de que ha de usar, a dicho Real Consejo, para su aprobazion que contienen capitulo sobre este asunto, teniendo presente ser util y conveniente la nominazion de dichos ministros por las razones que ban expresadas y lo mandado por dicho superior tribunal en su Real Probision su data veinte y tres de Julio de año pasado de mil setezientos zinquenta y quatro, en que se conzede a dicha Santa Hermandad que en los pueblos de cabeza de partido pueda nombrar un ministro superior que goze del fuero de hijodalgo y tres comisarios o quadrilleros en el quinientos bezinos hasta mil dos comisarios en el de menos de quinientos bezinos un comisario o quadrillero, y en el que exzeda de mil bezinos aunque no sea cabeza de partido, un comisario y dos quadrilleros, los que deban dar primeramente justificazion arreglada a dicha Real Ynstruzion, en cuiu observanzia haviendose hecho presente en este cabildo barias ynformaciones de los que son sus pretendientes se an bisto y recozido y se aprueban los que se allan arregladas a la zitada Real Ynstruzion, por justificarse de ellas sus personas benemeritas los contenidos en ellas, para el ejerzizio de sus respectivos encargos, en cuiu consecuenzia se acordo que dichas ynformaciones se custodien en el Archivo de esta Santa Hermandad en el que asimismo a de estar todos los titulos ympresos que se libran a los dichos ministros con los sellos que se usa y se acostumbra a ponerles, y que se sienten en el

libro formado a este fin los titulos que se an de dar en adelante se expidieren con la fecha del dia nombre apellido y vezindad de los nombrados, para que en todo tiempo conste y se tengan presentes de forma que no se exzeda a lo prebenido por dicho Real Consejo y que quando se ofrezca se les haga los encargos que por esta Santa Hermandad se tenga por conbeniente propio // de su Ynstituto=

En este cabildo se han bisto distintos memoriales dados por personas que pretenden ser ministros de esta Santa Hermandad los quales se an admitido, y para que justifiquen ser benemeritos a su ynstancia se libren los correspondientes despachos a las justizias de los pueblos de su bezindad en cuia bista se resolbera lo conbeniente en cuio estado se fenezio este cabildo que firman sus señorias que los presentes escrivanos damos fe=

Asimismo se acordo en este cabildo que siendo conveniente reglar los derechos que se an de llevar por razon de los titulos que se despachen para ministros de esta Santa Hermandad y ebitar los exzesos que se puedan causar en este asunto, respecto de estar reduzido a numero fijo segun la bezindad de pueblos por el titulo de ministro superior que solo debe nombrarse en las cabezas de partido se llebaran y cobraran doze pesos, y por el de comisario ocho pesos en cuio prezio no se debiera hazer ninguna alterazion y lo firmaron sus señorias que damos fe=

(r) D. Francisco Rodriguez de Ledesma. D. Joseph Velarde y Muñoz.
D. Juan del Forcallo y Aguilera. D. Luis Antonio Treviño y Carbajal.
D. Bernardino Muñoz de Loaysa. Don Diego Muñoz y Vera.

1744, febrero, 24. Arroyomolinos.

AHN. Div. Her., leg. 11, nº 2

ff. 9r-10r.

Informe secreto de los capitulares de Arroyomolinos -Cáceres- desaconsejando la expedición de título a un pretendiente del lugar.

Mediante el ynforme que se nos pide por la requisitoria y ynterrogatorio puesto por cabeza de la ynformación hecha por Phelipe Collado, en ella contenido, nosotros Matheo Xil, Diego Garrido, alcaldes ordinarios, Pablo Moreno y Juan Mateos Ribero rexidores todos de este lugar de Arroio Molinos; Devemos informar y dezir: que aunque es zierto que este sujeto referido Phelipe Collado, sus padres y abuelos, son y an sido christianos viejos sin macula alguna, tambien es zierto, que el dicho Phelipe Collado, no se haze merezedor de obtener el empleo que solicita de Juez comisario de la Hermandad de Ziudad Real a causa de ser un sujeto rustico, operario del campo poco esperto, de poca edad, madurez y bastante velicoso, y que semejantes empleos los deven tener sujetos de seso y peso, madurez y prudencia, para que en materia de tanto peso y encargos que les haze la Santa Hermandad, caminen con el azierto que corresponde, y tener sus mercedes, sin la menor dilazion de dudas, entendido y echo juicio, que si consiguieren dicho titulo, le daria motivo su poca prudencia, tener cada dia mil desazones contra justicias, llevado de su jenio imperativo, y que con su corto conozimiento subzederan muchas quimeras, y que al dicho Phelipe Collado // no lleva obtener semejante empleo el zelo de servir a la Santa Hermandad, si solo exonerarse de servir y contribuir -a- las cargas penosas desta corta republica, que por ser tan limitada su vecindad que apenas llegara a zien vezinos y

estos todos rusticos operarios del campo, no a lugar que aia sujetos, que puede ayudar y contribuir, y quedando este libre, las cargas que el puede sufrir recaeran sobre otros pobres. // Ademas que no es tan extensiva su hazienda, pues es su limitazion, no le da lugar a que queden libres de sus cultivos, quinientos reales, y para mantener en este pais, como nezesita un caballo y armas, son nezesarios lo menos, zien ducados, con que mas bien acredicta querer gozar de esta exenzion que no servir a la Santa Hermandad. Y si hubiere bienes suficientes para su manutenzion y familia, no se sujetara a andar echo arriero con un macho, ganando su vida en saber arrendar un caballo, ni manejar armas, ni tampoco su inteligencia diera lugar, en usar de las precauciones que se requieren azer en su empleo alguna prision, que como poco respetuoso, si se le ofreciera se malograra: que es lo que podemos y debemos ynformar como fuere es veridico testimonio, con lo demas que es este asunto, por nuestros antezedentes thenemos representado al señor d. Bernardino Muñoz de Loaisa. Arroio Molinos y Mayo zinco de mill setezientos quarenta y quatro años, y lo firmamos los que savemos=

(r) Matheo Xil. Diego Garrido.

S.a (principios s. XVIII), junio, 6. Ciudad Real AHN. Div. Her.,
leg. 4, nº 71, ff. 1r-3r.

Traslado de despacho-comisión a favor de don Jerónimo de Vargas para que desempeñe el oficio de ministro superior del Santo Instituto.

Nos el Cavildo y Alcaldes de la Santa Hermandad Biexa de la M(uy) N(oble) y M(uy) L(eal) ciudad de Ciudad Real= y para poner remedio en lo referido allandose este Santo Tribunal noticioso que en la villa de Andujar sita en la falda de Sierra Morena a la bista de las Andalucias en al misma sierra y zercanias se cometen muchos e ynornes delitos por lo fragoso de la tierra y aver para llegar a ella distintos parages peligrosos y expecialmente al tiempo que los fieles xriptianos van a la zelebridad de la Milagrossissima ymaxen de Nuestra Señora de la Caveza que esta en la jurisdizion de dicha ciudad en la Sierra Morena donde esta Santa Hermandad de ymmemoriables tiempos tiene asiento y lugar en dicha Santa Hermita y sitio de tienda de campaña y respecto de ocurrir en dicha funzion mucha jente de trato y comercio con sus caudales y con este motivo tambien concurren jente foraxida y de graves delitos, y muchos jitanos a trocar y cambiar i con sus falazias y jeringonza a estafar y engañar lo que les esta proivido como el andar vagando en quadrillas y con este pretexto cometiendo los mismos delitos que quedan expresados que con // solo el nombre de jitanos por reales pragmaticas promulgadas a este fin se prebiene el severo castigo que a estos se les deve ymponer y para remediar estos daños y siendo uno de los prinzipales ynstitutos desta Santa Hermandad poner remedio y no pudiendo este cabildo concurrir con nuestras personas a todas partes a remediar tan grandes ynconvenientes y deviendo poner

remedio a ello a acordado nombrar juezes subdelegados en todas las ciudades villas y lugares de estos reynos y que fuesen los primeros hombres de las republicas y siendo preciso en la dicha ciudad de Andujar tener y proveer de este remedio acordo este cabildo y sus alcaldes subdelegar esta Real Jurisdizion que en nombre de S.M. estamos administrando como la subdelegamos sin limitazion alguna en Don Geronimo Vargas yxodalgo notorio vezino de dicha ciudad de Anduxar= aqui las señas= en el qual este Santo Tribunal subdelega real jurisdizion en atenzion a sus meritos y conozidas obligaciones y ser una de las cassas ylustres de dicha ciudad cuias señas basten para el conozimiento de su persona y para que con todos los nuestros juezes comisarios que ubiere en dicha ciudad de Anduxar y seis leguas en contorno de ella y los que nezesitare por donde fuere formando quadrilla baxo de las hordenes que les encargamos pueda recorrer todos los territorios yermos y despoblados donde tenga noticia de semexante jenero de jente y para ello y su cumplimiento les pueda ymponer // a los dichos jueces comisarios las penas y multas que le pareciere conbenientes reconociendole por juez y ministro subdelegado superior a todos los que aia en aquellos territorios que an de estar promptos con sus armas y cavallos a las providenzias que diere el dicho D. Geronimo de Vargas y de otra suerte contraviniento prozeda contra los ministros a los que aia lugar y nosotros desde aora para quando llegue el caso los privamos de sus oficios de tales juezes comisarios y de que les recoxeremos sus titulos lo contrario haziendo para por este remedio se logre la seguridad del comercio y quietud de los caminantes y se entienda este titulo en los cassos que toquen y pertenezcan a esta Santa Hermandad y no en otros y para ello pueda con vara alta o corta de justicia en publico o en secreto recorrer y recorra todas las ciudades, villas, etc= haziendo las averiguaziones de los delitos que ubieren cometido y constando por las sumarias que haga prenda los

cuerpos de los delinquentes agresores envargue sus vienes los que ara
conduzir a poder del mayordomo de los vienes y rentas de // esta Santa
Hermandad y los reos a estas carzeles y para escusar estos gastos les
conzedemos que las causas asegurados los reos en la carzel y prision
segura las sustanzie en forma y conforme derecho y estando conclusa
por las unas y otras partes zitadas para la definitiva las remita a
este Santo Tribunal el dicho D. Geronimo de Vargas para sentenziarlas
definitivamente porque solo esto queda reservado para este Santo
Tribunal= y asimismo aunque los tales delinquentes que fuese siguiendo
se allaren en poblado ara las dichas prisiones aunque sea sin
intimidar este nuestro despacho y titulo que le cometemos por el
sijilo que esto requiere y fecho yntimar los señores juezes y justizia
de la jurisdizion donde se allare para que le conste a sus señorias y
mercedes aver executado las dichas prisiones en virtud de nuestro
nombramiento como nuestro subdelegado aziendo todas las demas
dilixencias judiciales y extrajudiciales que convengan dandonos cuenta
de todo lo que fuere obrando por nombre del ynfraescripto escrivano
mas antiguo para proveer y siendo nezesario consultar a S.M.= y
asimismo pueda nombrar y nombre para todos los autos y causas el //
escrivano y escrivanos que bien visto le sea= y asimismo le damos
comision en toda forma como la tenemos de S.M. para lo que ha
expresado y por el grave riesgo que a de tener en estos cassos para
semejantes prisiones pueda llevar y lleve todas las armas de fuego y
de yerro publicas o secretas: y los que le acompañaren para el logro
de dichas prisiones sin que incurra en pena alguna ni tampoco los que
dan ausiliando esta Real Jurisdizion de S.M. de cuia parte requerimos
y exortamos a todos los señores juezes y justizias de S.M. de la
nuestra encargamos, etc= y lo demas en la conformidad regular de la
conclusion de semexantes titulos=

2, febrero, 1779. Ciudad Real.

AMCR. Actas Capitulares, leg. 26,
ff. 41-44.

Don Agustín de Madrid, procurador de don Alvaro Maldonado Treviño, presenta memorial ante el ayuntamiento ciudarrealeño clamando contra la patrimonialización de oficios en el seno de la corporación apícola.

Agustin de Madrid familiar del Santo Oficio y Alcalde de la Hermandad por su estado de ciudadanos desta ciudad. Dize ya consta a ustedes los encargos que le estan echos por el Real y Supremo Consejo de Castilla para el seguimiento de lso puntos que tiene propuestos de cuya enmienda y reforma se sigue notoria utilidad a este comun y siendo uno de ellos perteneciente a la Santa Hermandad bieja no haviendo podido proporcionar el seguimiento para hazer notorio su estado manejo de caudales sy ymbersion y despojo que el estado general y parte del noble padeze a la mitad de ofizios de Alcaldes que por su ynstitution le corresponde, esperimentando allarse el todo de estos perpetuado en dos o tres familias que se componen de 12 ó 13 personas con una continuacion de empleos que oy se experimenta por continuar los mismos alcaldes // del año pasado en el presente y ser capitanes de Reximiento de Milizias desta ciudad contra las ordenanzas y su primitiba fundazion y pudiendo resultar de aqui (y de las ynconsecuencias que se esperimentan notoriamente entre dichas personas con titulo de Hermanos que se tienen apropiado) una elancion (sic) de dicha Santa Hermandad bieja contra el onor y gloriosos timbres que por ella se an granjeado esta ciudad siendo por ello una de las mas respetuosas del Reyno en esta atenzion y en la de que a el tiempo y quando se alla(ban) establezidas en ella la Real Chanzilleria que oy

reside en la de Granada y Santa Inquisicion de Merida se componia de 187 vezinos que fueron minorando desde la remozion de estos tribunales si oy se consume el desta Santa Hermandad sera de consiguiente una losa decadenzia de aquellos y quedaran reducidos a un numero limitado y no siendo justo el que se experimenten daños ni que las dos o tres familias continuen con la perpetuidad del manejo y todo de los empleos en despojo de los de el estado llano. Lo aze presente a ustedes para que se sirva tomar a su cargo como tan ynteresada en la subsistenzia // de sus moradores aplicando todo el poder e influxo como columna que se afianza para que no se acabe de perder los timbres que le an echo laudable y gloria por los echos de sus vezinos del estado llano con el mismo tribunal y que del caudal de propios y arbitrios u de otros que parezca mas proporcionados se ynforme del estado en que se alla dicha Santa Hermandad nombrando persona o personas que a su nombre ajiten y promueban las ynstancias correspondientes en todos tribunales competentes para que el estado llano se reintegre a la mitad de ofizios que le corresponde aziendo que las ordenanzas se cifñan a la observanzia de las leyes del Reyno y primitiba fundacion rebocando las que actualmente usa dicho tribunal con todo lo demas que parezca conduzente pues no es justo el que todo un comun carezca de los privilexios y regalias que las dos o tres // familias se tienen apropiados en descredito y desestimazion de los muchos vezinos abiles y venemeritos para usar de la mitad de ofizios en lo que esta Muy Noble ciudad es ynteresada para mantener su lustre y honrras que en todos los tiempos se a merezido por las azañas del estado general quando se allaba posesionado (de) la mitad de ofizios segun demuestran los muchos pribilexios que a dicha Santa Hermandad estan conzedidos.

Dios de a Vuestras Señorias los muchos años que este comun apeteze y necesita. Ciudad Real Henero 29 de 1773.

(r) Agustín de Madrid.

1779, febrero, 2. Ciudad Real.

AHN. Consejos, leg. 804, nº 25,
ff. 32r y ss.

Memorial de don Agustín Pérez de Madrid elevado al Consejo de Castilla denunciando las supuestas irregularidades de la organización colmenera ciudarrealeña en el despacho de comisiones y nombramientos.

M(uy) P(oderoso) S(eñor)

Don Agustin Perez de Madrid familiar del Santo Oficio de la Inquisicion, procurador sindico general de la ciudad de Ciudad Real a V.A. como mas haia lugar, hace presente, que han sido repetidas las ordenes qye en varios tiempos ha tenido a bien dar V.A. sobre que los alcaldes de la Santa Hermandad Vieja de dicha ciudad se abstuviesen de despachar titulo alguno de quadrilleros, ni ministros superiores por ser tan grande el exceso en conferir tales despachos que estan inundando el Reyno de dependientes del mismo Tribunal, careciendo quasi todos de la aprobazion de S.M. este afan tan continuado de dar semejantes titulos, distava muchisimo del fin laudable que podia a ello impelerlos que era el exterminio de malhechores, y castigo de delincuentes pues se los davan indistintamente a todas clases de personas los mas inutiles para el caso sirviendo en algunos los indicados titulos de capa para ejercitar robos en lugar de evitarlos, no reparando el dicho Tribunal o sus Alcaldes en franquearlos a mesoneros, carniceros porque no necesitavan otro requisito, que los cien pesos, // cien ducados, o la cantidad que el pretendiente deva para su logro: como este cebo de adquirir por medios tan ilicitos tantas sumas de dinero se les acababa a los dichos Alcaldes y escribano con el interdicto que V.A. se sirvio poner en el despacho de

dichos titulos de quadrilleros o ministros superiores, discurrio la codicia otros medios mas reprehensibles de continuar en percibir tan crecidas sumas, y fue el dar en lugar de los Titulos, unos despachos de comision que les conferian las mismas facultades que en aquellos, ecepcion de cargas concejiles, facultad de traer armas prohibidas, y otras: haviendo sido tanto el exceso qué ha tenido en ello y expecialmente en cinco o seis años que fue alcalde D. Miguel de Fuentes, que se puede asegurar el que quasi en todo aquel tiempo no se ocupava en otra cosa el escribano del mismo Tribunal (que lo es Joseph Garcia Alarcon) que en formar los citados despachos, y yendo ambos a una, pues parece que parten por iguales partes: se han hecho fuertes, y con caudales, sin embargo de ser antes los dos sugetos de ningunos posibles: Noticiar a V.A. de que davan semejantes comisiones, por cuenta que dio el alcalde ordinario de la villa de Talavera la Real, con testimonio de unos autos que havia formado, en razon de unos despachos dados a Juan Muñoz Cabrera, se sirvio V.A. expedir su superior orden que la comunico // D. Antonio Martinez Salazar con fecha de ocho de abril de mil setezientos y setenta y siete, y es la que acompaña testimoniada numero 2 y mandamos que los Alcaldes de dicha Santa Hermandad se abstuviesen en adelante de conceder semejantes comisiones generales ni particulares: que se ciñeran a sus facultades, y arreglasen a la instruccion del año de mil setecientos y sesenta y demas providencias posteriores, con apercivimiento de la mas cebera (sic) providencia; pero nada de eso ha bastado para contenerlos, para abandonando tan responsable orden, y haciendo poco caso de los preceptos de V.A. continuar con tanto exceso de dar las dichas comisiones, segun es publico en aquella ciudad, y se acredita de testimonios que acompañan, bajo los numeros 1 y 3 en favor de Juan Mateos Sanguino, vecino de la villa de Arroyo del Puerco, provincia Extremadura, el qual por una rara casualidad ha podido adquirir: de

forma, señor, que todo el que pretende, como traiga dinero y la cantidad que tiene prefinida (sic), lo lograra, sea el sujeto de la clase que fuere, y asi esta lleno el Reyno de semejantes comisiones, siendo doloroso a las Justicias de los pueblos, ver tal juez en un hombre vil, o criminoso, facultades tan amplias, como se confieren en las dichas comisiones, sin que lo puedan remediar, porque como ignoran la superior orden de V.A. en que se proibien. Y van estendidos los despachos con palabras tan conminatorias, y clausulas prestantisimas (las) temen, y les dejan usar sus comisiones, y traer armas, que es el objeto unico con que pretenden // aquello; cosa que esta patente, porque para obtenerlos con el fin de perseguir malechores se requiere en los sujetos una eroicidad de animo mas que mediana y posibles para hacer salidas, y egercer las demas funciones necesarias al asunto: No dudando que si semejantes comisiones se concedieran a personas aptas del todo para ello, producirian buenos efectos, pero resultaba muy pernicioso en que los obtenga semejante clase de hombres, como son los de la Santa Hermandad a quien se les dan: y cediendo todo en desorden de este Santo Tribunal, y de su laudable instituto, es muy digno de compasion, y de que V.A. se tome sobre ello la mas cebera (sic) providencia que vaste a contener a dichos alcaldes y escribano en el espotismo (sic) absoluto en darles comisiones, castigandolos desde luego por la fraccion de vuestro regio mandato; pareciendo al suplicante que convendria el que V.A. se sirviese despachar ordenes generales, especialmente a las provincias de Andalucia, Mancha y Extremadura, para que las justicias recogiesen quantos despachos de tales comisiones haya en todos los pueblos, dando comision al corregidor de la misma // ciudad de Ciudad Real, para que reasumiendo la jurisdiccion del mismo Santo Tribunal establezca el metodo orden y gobierno, con arreglo a ordenanzas y leyes del Reyno, poniendo en uso otros dos oficios de escribano, que maliciosamente tiene comprados el

mismo Tribunal, para que no use mas que el dicho Joseph Alarcon, tomando cuenta de los caudales, que aunque en expediente separado V.A. lo tiene mandado, no ha tenido efecto, a causa de que, aunque se dio traslado de dichas cuentas a mi el suplicante como procurador sindico; y como no he podido conseguir se me libren maravedices (sic) algunos para pagar al patrono que me dirija, se halla dicho expediente sin el curso debido: y dando las demas providencias que la savia comprension de V.A. tenga por conducentes al remedio de tan graves daños.

Ruego a Dios que guarde la C(ristiana) R(eal) P(ersona) de V.A. los muchos años que el Reyno necesita. Ciudad Real y febrero 2 de 1799.

{r) Agustin de Madrid

1690, octubre, 1. Ciudad Real AHN. Div. Her., leg. 22, nº 25, s.f.

Contrato de arrendamiento general de la percepción de la asadura mayor y menor perteneciente a la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real.

Nos los alcaldes de la Santa Ermandad Bieja de la ciudad de Ciudad Real por S.M. en todos sus Reynos y señorios por el estado de cavalleros ijosdalgo= hacemos saver a Juan de Rodas vecino de la ciudad de Ciudad Real a quien nombramos por nuestro comisario de ella para que con bara alta, y corta, de justicia o sin ella, cobre el derecho de la asadura mayor y menor, perteneciente a la dicha Santa Ermandad de todas las personas que lo an adeudado desde el segundo domingo de septiembre pasado deste año, asta el otro tal dia segundo domingo de setiembre del año que biene de mil y seiscientos y nobenta y uno= de todos los ganados que ubieren ollado e ollaren el Campo de Calatrava, priorato de San Juan, maestrazgo de Santiago, puertos de Villaarta, Socuellamos, la Perdiguera, Bal de Algodor, Sierra Segura, y sus anejos, la Torre de Juan Abad y los suyos, en esta manera= de todos los ganados cavañiles como son carneros, borregos, machos, cabras, y obejas de quinientas cavezas asta mill una por asadura, y no llegando a quinientas cavezas, lo que tocara por rebujo y de bueyes bacas cavañiles de cien cabezas una por asadura y no llegando a cien cavezas, de cinquenta media, y de beinticinco un quarto de res, y no llegando a veinticinco, lo que tocara por rebujar= y de carneros, borregos, machos, cabras, ovejas de trabesios y merchaniegos, de cien cavezas una por asadura, y de cinquenta media y de beinticinco un quarto de res y no llegando a veinticinco lo que tocara por rebujar= y de bueyes bacas y puercos los travesios y merchaniegos de cinquenta

cavezas una por asadura, y de veinticinco media y de doce un cuarto de res y no llegando a doce lo que tocara por rebujar demas de el quarto si se la diere de mas de doce y el dicho derecho los puede ber y recibir y cobrar de todos los ganados que trasterminaren terminos para ir a erbajar a otras dehesas y condados de Santisteban, y se quedaren bajando en el Campo de Montiel por trasterminando terminos= asi los cavañiles travesios merchaniegos como son de los moreneros del suelo // de Santiago y suelo de Cuenca que para haber de erbajar trasterminen terminos= y ansimismo puede tomar quantas a qualquiera cobradores que estan en los puertos cobrando dicho ganado por quanto es arrendador de por mayor= Y mandamos a los dueños de los dichos ganados, pastores, mayores, rabadanes, que paguen el dicho derecho de dicho ganado en la dicha forma por lo deber assi pagar a esta dicha Santa Ermandad Bieja conforme a los reales privilegios que esta dicha Santa Ermandad tiene en sus archibos= Y assi para todo lo susodicho favor y ayuda obiere menester el dicho Juan de Rodas nuestro comisario, de parte de S.M. a v. mdes. todos los señores jueces y justicias della esortamos y requerimos y de la nuestra pedimos y encargamos asi en la villa de...y demas partes donde este nuestro mandamiento fuere presentado en raçon de la dicha cobrança y lo demas que se le ofreciere le den y agan dar a dicho Juan de Rodas nuestro comisario todo el fabor y ayuda que pidiere y obiere menester, so las penas contenidas en los Reales Pribilegios que esta dicha Santa Ermandad Bieja tiene y que de nuestra parte se les pusieren tomando testimonio de todo lo referido= Otrosi por quanto el procurador Jeneral de los serranos de la cavaña real y demas ganaderos moreneros que deben el dicho derecho se quexan de que los caminos y beredas por donde pasan los dichos ganados para entrar en los puertos Reales que ban a erbajar no estan seguros de ladrones, y que les hacen en dichos ganados muchos años para remedio de lo qual le damos comision para que

pueda correr todos los caminos, y beredas, con la persona o personas que señalare, y acer las aberiguaciones y prisiones necesarias, y remitir los presos que parecieren ser culpados a este juzgado y carzel Real de la dicha Santa Ermandad Bieja para sustanciarles las causas que contra los delincuentes se le ycieren y castigar los que resultaren culpados, y por convenir al serbicio de S.M. y buena administracion de su Real Justicia y seguridad de los caminos y pasajeros= Y para la seguridad de su persona y de los demas que llebare puedan traer y traigan todas y qualesquier armas ofensivas y defensivas publicas o secretas de dia o de noche con la gente de guarda necesaria sin incurrir en pena alguna conforme a los reales pribilegios que esta dicha Santa Ermandad bieja tiene en su archibo usados y guardados en todos sus Reynos y señorios, confirmados por S.M. y mandamos a qualesquiera escribano asista a todos los autos y diligencias que se le ofreciere y de todo le de testimonio en dichos autos, pena de diez mil maravedis lo contrario aciendo. Dada en Ciudad Real en primero de Octubre de mill seiscientos y nobenta años=

(r) Don Francisco Aguilera y Mesia. D. Antonio Xedler Lison y Gamez.
Por mi de sus mercedes Juan de Torres escrivano.

1739, marzo, 13. Argamasilla de Alba. AHN. Div. Her., leg. 23, nº 10.

Misiva de un ministro superior comentando al Santo Instituto manchego los efectos en el priorato de San Juan de una sentencia desfavorable a los intereses de la entidad apícola relativa a la recaudación de la asadura en sus términos.

Muy notorio recibo de v.md. por mi escribano y en vista de su contenido y de los despachos que ha traído el criado de D. Carlos Martin Parreño no dexo de extrañar semejantes providencias del Consejo de la Mesta y tanto y mas se ayan dado despues de lo que v.md. nos tiene dicho y asegurado en este asunto pero contemplo la toda floxedad en defender el tribunal de la Santa Hermandad su jurisdizion que ya no sacando la cara y diziendo esta cossa con brevedad y teson sobre dicho D. Martin hara como haze vurla de nosotros, y del derecho de asadura, sino es tambien lo van bociferando todos los pastores de la villa del Campo de Criptana y que los amos deben gozar el mismo pribilegio, y mejor dicho Don Martin Parreño vecino de la Puebla siendo assi que a comun sentir // de algunos caballeros desta villa y sobrada inteligencia en estos negocios ha sido una ambocada (sic) de dicho Parreño y negoziacion a fuerza de dinero y no hallar resistencia de parte legitima a que se allega la siniestra relazion con que se a sacado el despacho de la Mesta falsos supuestos en que se ha fundado la concesion despues, es fixo y corriente por los pribilegios y papeles desta villa que dicho D. Martin ni los vecinos de la villa de la Puebla no tienen ni an tenido la mancomunidad que se supone con esta villa ni con tal villa de la Puebla debe gozar aqui de exepzion alguna, ni como alcaide de Peñarroya no tiene mas montes jurisdiccion

ni terminos que son desde hera una en contorno del dicho Castillo y otro que llaman de la Moraleja, para prueba desto ha pagado en esta villa D. Martin Parreño los derechos de travesios, otros que pagan los extraños deste pueblo y consta en el archivo // tener echo y pagado los registros de sus ganados para entrar en esta jurisdiccion, y esto ha sido despues que es tal theniente de alcayde de Peñarroya, que anteriormente en jamas entro, ni penso entrar en este termino y asi a pasado asta que aviendo venido este alcalde que ay actualmente por amistad suya como no le duele el defender esta tierra se lo ha permitido a dicho Parreño el entrar con sus ganados sin pagar, ademas que quando pagan los del campo y los de Alcazar y demas villas del Priorato aun siendo de un suelo que el derecho de asadura como los demas que ay en esta villa pertenecientes al mismo señor Gran Prior dueño de todas las villas en pasando de una parte de tierra en que puedan entrar que es mui corta porque con mas razon no han de pagar los vecinos de la Puebla asi el mismo derecho del Gran Prior como los demas dichos que son los mios y mas quando los ganados de D. Martin Parreño fueron aprehendidos en el termino en donde pagan // todos los dichos los mismos del suelo de San Juan, todos los zircumbecinos de mis suelos; en este supuesto y zerteza remito mi testimonio a ber con v.mds. y que disponga sobre lo que le ordena por la suia segun dira por este y que cada uno de nos en el pasaje que nos corresponde, pero no olvido suplicar ay menester ponernos calderos en la cabeza para huir de las fanfarronadas de los criados de D. Martin Parreño, pastores del Campo de Criptana para despues de tener yo muchos dineros gastados para cuidar la jurisdiccion de la Santa Hermandad que aora parece se abandona pero no creo lo permita el tribunal ni admitira quantas actibas diligencias que con dineros sean conzernientes a que bea este asunto con el Concejo de la Mesta, de ministro superior que le compete, que oi quanto debe dezir y suplicar a v.md. a su

disposicion quedo rogando a Dios mucho años. Argamasilla y Marzo 13 de 1739.

(r) Luis Camacho de Leon (dirigida a) Sr. Juan de la Paz.

1778, abril, 24. Ciudad Real.

AMCR. Actas Capitulares, leg. 26,
nº 7, ff. 31-36.

Suplicatorio del cabildo hermandino al concejo de Ciudad Real solicitando la concesión de un préstamo para costear la persecución de unos delincuentes. La petición sería aceptada el 27 de abril de 1778.

En la ciudad de Ciudad Real a veinte y quatro de Abril de mil setezientos setenta // y ocho años se presento D. Diego Bustillo y Zevallos alcalde por su estado de cavalleros hixosdalgo notorio del tribunal de la Santa Hermandad Viexa de ella dixo: que como se acredita de la carta de abiso antecedente dirixida a Su Señoría por D. Fernan Saenz de la Camara administrador general de las rentas probinciales de esta dicha ciudad y su probincia de la Mancha parece que en las ynmediaciones de la ciudad de Alcazar, Villanueva de la Fuente, Ynfantes, Villahermosa, y otras de aquel partido anda cierta quadrilla de ladrones compuesta de seis hombres a caballo armados cometiendo graves excesos dignos de seberos castigos, y entre los que han yntentado executar es uno el de querer, robar los caudales de la tesoreria administracion de dichos efectos con los del tabaco de la nominada ciudad de Alcazar que se transportaban a las generales de estas yncorporandose con yguales fondos del partido de Ynfantes; cuio lance no pudieron lograr por equivocacion del camino y en su verdad yntentaron dichos foraxidos asaltar las casas de D. Fernando Ballesteros, administrador de la Encomienda de referida Villanueba de la Fuente donde estaban los citados reales fondos, // sin que tampoco lograsen el robo, porque advertido por la jente del pueblo se bieron en precision de hazer fuga. Y respecto a que es ynnegable que los

tales ladrones havian cometido siguiendo su deprabada vida otros yguales excesos en los pueblos o sitios donde no encuentren tanto resguardo, que es presumible, yntenten algun asalto en las reales tesorerias particulares o casas acendadas, quitando las vidas a quienes se les resistan como es semejantes casos se ha berificado; tocando y perteneciendo la enmienda de estos excesos y castigo de sus autores a esta Santa Hermandad conforme a los reales pribilexios que le estan concedidos con cuio obsequio y desempeño se ocupa yncesantemente con sus yndibiduos segun es publico y notorio en esta ciudad y demas del Reino por cuia razon son tan laudables los efectos que se han experimentado que se han desecho, perseguido, y aprisionado diferentes quadrillas de ladrones y reos de otros delitos siguiendoles sus causas por los tramites regulares de derecho hasta la ymposizion de pena debida que // se ha executado con aprobacion de S.M. (que Dios guarde) y señores de su Real Sala del Crimen de la ciudad de Granada adbirttiendose dedicados a presidio de pocos años a esta parte mas de cinquenta reos, otros que han sufrido la pena de muerte en el sitio propio destinado de Peralbillo y muchos de los primeros que han sido puestos en rigurosa question de tormento execucion de azotes en sus personas y verguenza publica en argolla ademas del grande numero que hai en prision siguiendoles sus causas, y otros que se persiguen con grande eficacia, cuia captura esta decretada: en todo lo qual que solamente lo ejecuta este Santo Tribunal cumpliendo con su ynstituto por libertar de semejantes riesgos a los reales basallos de S.M. ha invertido la existencia de maravedis que tenia de fondo en sus arcas ademas del producto a que anualmente ascienden sus rentas de modo que en el dia se halla en el desconsuelo // de no serle facil acudir a la enmienda de los excesos propuestos y otros de que se tiene noticia por falta de caudales; Y mediante a que en su señoria obran todas las facultades debidas para administrar medios conducentes a que no se

omita serbicio tan ymportante como es el de perseguir y castigar la tal quadrilla de bandidos y otras; teniendo en consideracion que esta Santa Hermandad, quando a tenido fondos a suplado por prestamo a esta M(uy) N(oble) y M(uy) L(eal) ciudad de Ciudad Real cinquenta mil reales en una ocasion para hacer compra de trigo, otra gran porcion para los gastos que se le ofrecieron en la proclamacion de S.M. que este en gloria el señor D. Fernando Sexto, y veinte y quatro mill reales para las quatro dotes que nuestro Catolico Augusto Monarca (que Dios guarde) el señor Don Carlos Tercero mando dar a quatro doncellas pobres y que al presente se halla sin arbitrio de poder desempeñar la salida que debe hazer a la persecucion, y castigo de otros foraxidos que tanto urje su exterminio, o captura: debia de mandar y mando que con ynsercion de dicho suplicatorio exorto de Justicia se de conocimiento a esta ciudad a fin de que en su ynteligencia coabyugando a tan recomendable particular // se sirba probeer que por bia de prestamo y hasta Navidad del corriente año se den a este Santo Tribunal un mil ducados de vellon sobre que se afianzaria con sus rentas en debida forma, y que sea con la brebedad que el caso urje, para que en la madrugada del dia veinte y siete del presente salgan los Yndibiduos que se destinen a yncorporarse con los deemas que tienen en los pueblos, a quienes ya esta dada noticia del triste punible exceso referido; y que sigan hasta la captura o destierro de estos paises y otros del reino, de semejantes facinerosos, bien sea de sus fondos de propios y arbitrios, Posito Real, u otro que le sea facultatibo, en que executara un particular serbicio a la causa comun del Reino, administrando Justicia, segun acostumbra en quanto decreta; y conmina el buen exicto que sus señorias se promete se determinara lo conbeniente en uso de la // Jurisdiccion de esta Santa Hermandad y cosas pertenecientes a su Ynstituto y pues por este asi lo mando y

firme de que yo el escrivano doy fee= Albaro de Maldonado Treviño=
Ante mi= Joseph Garcia Alarcon=

1716, junio, 21. Ciudad Real

AHN. Div. Her., leg. 42, nº 7, s.f.

Toma de posesión de la alcaidía por parte de Antonio Sánchez de Huertos, sustituyendo a su antecesor en el cargo, Cristóbal de Soto, relevado ante las reiteradas fugas realizadas por un reo de hermandad.

Inventario y entrega de presos y demas recaudos de esta carcel:

Y luego incontinenti su merced dicho D. Francisco Triviño Calderon de la Varca alcalde desta Santa Hermandad estando en dichas carceles hizo inventario de presos prisiones y demas recaudos della para entregarlos al dicho Antonio Sanchez de Huertos el qual hizo su merced en la forma y manera siguiente=

Primeramente se abrio el calabozo primero que llaman de la calle y en el reconocio ester presos Vartolome Tocados con dos pares de grillos y una cadena=

Asimesmo en dicho calavozo a Gregorio Lopez con dos pares de grillos y una cadena pendiente de las maderas con su candado=

Asimesmo se reconocio en dicho calabozo a Sebastian Rodriguez presso en el con dos pares de grillos=

En el calavozo de enmedio se renocio a Juan Gonzalez Bazan con un par de grillos y una cadena su caussa en el Consexo=

Asimesmo en dicho calavozo se renocio preso en el a Juan Bravo con un par de grillos= //

Asimesmo en dicho calavozo se reconocio a Sebastian Pasqual con otro par de grillos=

Asimesmo se reconocio el calabozo de Baldinfierno a Juan Calvache con dos pares de grillos y una cadena amarrado en las maderas de dicho calavozo con un candado=

Asimesmo se renocio en dicho calavozo de Baldinfierno a Juan de Espadas preso con dos pares de grillos y una cadena afianzada al candado=

Prisiones sueltas: Dos pares de grillos= quatro mastiles para los candados= tres candados que estan ocupados con las dichas cadenas como esta expresado.

LLaves= catorce llaves de diferentes guardas y tamaños de los calavozos candados y puertas de la carcel.

Aora se sigue con los demas bienes que ai en estas Carzeles=

Oratorio= un misal= un atril= una vinajera de vidrio= dos candeleros de azofar= una campanilla= una cruz de plata con su peana de madera= una cruz con su patena de plata y purificador= unas volsas de damasco berde con sus corporales= un frontal de damasco verde= una cortina de tafetan verde= unos manteles para dicho altar= una caja de oja de lata para ostias= una casulla de damasco verde con su manipulo y estola= un alva con su avitto= un zingulo que estan en la sala capitular= una mesa con sus cajones donde estan ornamentos de dicho oratorio= siete escaños que estan en la sala capitular= un befete (sic) de nogal con dos cajones en que se escribe= un potro de madera para dar tormentos= dos dardos y tres vallestas= una lanza // para de azofar=

Asimesmo una vigornia de yerro con su zoquete y su martillo para her(r)ar y deser(r)ar los presos que entran y salen en dicha carcel= en todos los quales dichos bienes dicho Antonio Sanchez de Huertos y en los dichos presos y prisiones que quedan expresados se da por entregado dellos por averlos recibido realmente de mano de vuestra merced y del presente escrivano y se obliga en forma de dar buena quenta de todo para que se obliga su persona y vienes en renunziacion de las leyes en su favor y asi lo otorga siendo testigos Juan de Rodas Francisco Carneros y Pedro de Sotto vecinos de esta ziudad y lo firmo su merced= (r) D. Francisco Treviño. Antonio Sanchez.

1747, febrero, 11. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 51, nº 16, s.f.

Declaración jurada de una testigo de cargo en la causa incoada contra el alcaide Sebastián Gómez, expedientado al abusar de su cargo.

En la Ziudad Real a dicho dia mes y año el señor Alcalde de la Santa Hermandad para averiguazion de lo contenido que esta por caveza recivio juramento por Dios u una cruz en forma de derecho a Maria Perea vezina de la villa de Inoxosa de Cordoba y estante en esta ciudad quien lo hizo como se requiere y so cargo del ofrezio dezir verdad, y siendo preguntada al thenor del auto de ofizio dijo= que con el motibo de hir a llevar la comida a Antonio Morales su marido y Antonio su hijo a la carcel real deste tribunal donde se allan presos, supo como en uno de los dias de la semana ultima del mes de Henero proximo pasado como Sevastian Gomez alcaide della solizito engañar a Cathalina de los Rios muger de Joseph Alcazar presso en dicha carcel para que entrase a cuabitar (sic) con su marido en al capilla donde se celebra la // misa y con efecto los havia introducido sin manifestar el fin hasta que los tuvo enzerrados y clamando la susodicha que como se ejecutaba tal maldad, que aunque fueren brutos como havian de ejecutar en la capilla semejante torpeza y a instancias y puras persuaziones la venzio el alcaide las susodichas con lo que abrio, y a este tiempo salio de la sala capitular Joseph Panizo que estava encerrado en ella lo que les sirvio de quebranto diziendo que como ejecutava tal maldad, que lleva mucha malizia aquel casso que es lo que save y puede dezir la verdad so cargo de juramento que lleva Pedro y que es de hedad de cinquenta años poco mas o menos no firmo que dijo no saver firmolo su señoria= Muñoz= Ante mi Jazinto Prieto.

1597, diciembre, 19. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 56, nº 23, s.f.

Relación de beneficiarios de las limosnas repartidas por la Hermandad Vieja con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la O.

En la Ciudad Real en diez y nueve días del mes de diciembre de mill quinientos e noventa y siete años los señores D. Francisco de Zespedes e Xptobal de Poblete Oviedo alcaldes de la Santa Hermandad Vieja de la dicha ciudad por el rey Nuestro Señor por ante mi Alonso de Velasco y Arriaza escribano publico de la dicha Santa Hermandad mandaron que en lugar de la comida de pobres que en cada un año se acostumbra a dar a los pobres el día de Nuestra Señora de la O de la renta desta Santa Hermandad se den limosnas a pobres naturales desta ciudad lo que se hiço en la forma siguiente

La de Matas vibda zestero dos reales
a la bibda de Anton Ruiz Derecho quatro reales
a una casa de unas personas honrradas seis reales
a una hija de Jimeno el que mato Rua un real
a Isabel de Castillo tres reales
la Grisalda dos reales
la de Salbatierra dos reales
Alonso Casado viejo dos reales
la de Juan Fernandez vibda dos reales
la bibda Cariquemada un real
Ysabel de Ureña la de Clavel dos reales
la de Alonso Martinez bibda dos reales
la bibda de Mendez dos reales
Ysabel de Mora dos reales

Mari Hernandez un real
la de Francisco de San Juan y su cuñada quatro reales
la de Francisco Ruis tres reales
la de Franco un real //
Francisco de Funez quatro reales
la bibda de Hordonez dos reales
a la de Molina quatro reales
Pedro de Funez quatro reales
a la de Herrera el mayor dos reales
Maria de Mora bibda un real
la de Ruiz dos reales
Maria Sanchez dos reales
Maria Hernandez un real en la calle
Maria Hernandez otra dos reales
Anton Sanchez Viejo dos reales
Ana Sanchez Viejo dos reales
Maria de Enebro un real
la muger de Francisco Martinez dos reales
Ana de Leon un real la de Felipe dos reales
la de Lucas Sanchez dos reales
Juan de Funez dos reales
la de Juan Gomez y una biexa dos reales
la de Aguilera un real
la de Luna dos reales
Francisco Martinez dos reales
la de Muñoz dos reales
la de Graviel Gomez dos reales
Pedro Sanchez dos reales
Juan Gomez y su hermana quatro reales //
Ysabel Casado dos reales

la de Oviso dos reales
la de Lança un real
otra bibda dos reales
Maria Ruiz dos reales
Maria Sanchez bibda dos reales
Segura y su muger dos reales
Lucia de Funez dos reales
Francisca Martinez dos reales
la de Anton Serrano dos reales
Mari Diaz dos reales
Maria de Lucas dos reales
Juana Ruis y Juan de Mora del Saz ocho reales
la bibda de Francisco Sanchez dos reales
Miguel Fernandez viejo pobre un real
dos bibdas que se le dieron ocho reales
Lucia Martinez bibda dos reales
Lazaro un real
Catalina de Salcedo quatro reales
la bibda de Navarro dos reales
la bibda de Josepe Lopez dos reales
la bibda de Melchora de los Reyes dos reales
la de Alexo de Herrera quatro reales
Ynes Hernandez quatro reales
Ynes de Piedrabuena dos reales
la de Rodrigo Fernandez dos reales
Maria de Soto y Mari Lopez dos reales
Ana Ruiz un real
las bibdas del Armero quatro reales
la madre de la de Aguado dos reales
la de Orgaz el tintorero y su hermano quatro reales

la de Romerico dos reales
la de Catalan dos reales
Juan Fernandez quatro reales
la madre de Sigura dos reales
a una bibda honrrada quatro reales
Mari Hernandez dos reales
la de Pablo Molina quatro reales
la de Pisa un real.

Los quales dichos doçientos reales en nombre de nos los dichos
alcaldes y de mi el dicho escrivano se repartieron a las personas de
susocntenidas los quales mandamos se recivan y paguen en cuenta al
dicho mayordomo fecha en Ciudad Real en dicho dia mes y año.

(r) D. Francisco Luis de Cespedes. Xptoval de Poblete de Oviedo.

Diego de Cespedes.

Fernando Xuarez.

Por su mandado Alonso de Velasco Arriaza sº.

1602, diciembre, s.d. Ciudad Real.

AHN. Div. Her., leg. 21, nº 37.

Distribución de cera para asistir a la procesión y de aguinaldos navideños entre los dependientes de la fraternidad ciudarrealena.

Los hermanos de la Santa Hermandad a quien se a de dar vela y perdizes

D. Fernando de Valdes alcalde	Juan del Forcallo Carrillo
D. Xptobal de Prado alcalde	Pedro del Saz Jordan
D. Melchor Fernadez Treviño alguacil mº	Rodrigo del Saz Jordan
D. Pedro Treviño procurador general	Diego de Valdepeñas
D. Antonio Fernandez Treviño contador	D. Luis Bermudez Berrio
D. Geronimo Bermudez Regidor	Garcia de Arriaga
Alonso de Avila Carrillo	Diego de Valdelomar
Garci Iusephe de Loaysa	Alexo Messia
D. Diego Messia de Loaysa	Xptobal Mesia de Aguilera
Agustin Barba Treviño	ldo. Joachim Bastante
Diego Caveza de Vaca	D. Juan Treviño el mozo
D. Francisco Correa	D. Juan Fernandez Treviño
Pedro de Cisneros y Avila	Jilberto Arias Mexia
D. Juan de Coca y Mendoza	Alonso de Velasco Arriaza sº
D. Luis Fernandez Treviño	Francisco de Urefia notario
El ldo. Pedro de Valdelomar	Simon Romero
Pedro de Gamez	Juan Lopez de la Jurada
Sebastian de Arriaga	Hernando de la Serna
Mateo del Saz de Guevara	Xptobal de la Zerda
D. Francisco Galiana Bermudez	Francisco de la Serna
Antonio Velez de Molina	el doctor Leon
D. Xptobal Bermudez	Hernando Pinedo

D. Luis Davila
Pedro del Saz Jordan
Agustin Ruiz Fuenteencalada
Antonio de Belmar
Gonzalo Muñoz de Loaysa
Juan de Mora del Saz
Bernardino de Mena
Luis Caveza de Vaca Vilches
ldo. Alonso de Rojas
Luis Correa de Loaysa
Francisco Ruiz Hidalgo
Francisco Ruiz Hidalgo su hijo
Luis Cabeza de Vaca el moço
Jhoan Perez
Antonio de Arebalo
Don Lorenzo Suarez de Figueroa
ldo. Juan de Torres Treviño
Francisco Mesia de Triana
Juan Ruiz de Fuenateencalada sº
Luis Mesia de Poblete
Diego de Cespedes Villaguiran
D. Juan de Gamez
D. Luis de Luxan
Luis Mesia de Valdelomar
Pedro del Saz de Balboa
D. Antonio de Aguilera
Agustin de Arriaga
D. Diego del Carcamo
D. Gonzalo de Guevara
ldo. D. Juan Bermudez

Gaspar de Oviedo
Hernando Xuarez
Juan de Padilla
Hernan Garcia del Rio
Juan Rodriguez del Rio
Francisco Serrano de Arevalo
Luis Rodriguez
Alonso de Poblete
Francisco de Poblete
Hernando de Poblete
Juan Martinez Matallana
Xptobal Sanchez Aguado
Xptobal Martinez Poblete
Juan Manchado Labrador
Juan Manchado de Valberde
Gonzalo de Paredes sº
Alonso Despinar
Gavriel Lopez
Pedro de la Orden
Sebastian Fernandez de Jurada
Juan Martinez de Aguilera
Gavriel de Valeros
Xptobal de Berrio
Antonio Ruiz Labrador
Xptobal Lopez
Michael de Quiroga
Juan Lopez
Gregorio de las Casas

D. Luis del Carcamo
 Juan de Salazar Pacheco
 D. Fernando de Valdes
 Pedro Valdes de la Plata
 Antonio Mesia de Mora sº
 Xptobal de Funez
 Francisco Treviño de Hoçes //

Biudas mugeres de hermanos desta Santa Hermandad

Dª Maria Treviño de Cespedes	Dª Ysabel de Galiana
Dª Madalena Treviño de Mediano	Dª Ana Ortega
Dª Geronima Treviño	Pedro de Funez
Dª Bernardina Mesia de la Cerda	Jironimo de Lis
Dª Biolante de Vera	Matheo de Piedrabuena
Dª Antonia Maldonado	Maria de Funez
Dª Elvira Maldonado	Dª Ysabel bibda de Fº Valderas
Dª Ysabel de Gamez	Marga Lopez bibda de Blas Mº
Dª Ysabel Carrillo	Maria Rodriguez
Dª Juana Estrada	Margarita de Padilla
Dª Leonor de Armenta	Ana Francisca de Her(r)era
Dª Maria del Forcallo	Dª Beatriz de Cri(p)tana
Dª Ysabel de Poblete	la de Juan de Lara
Dª Maria de Arriaga	la de Francisco de Dueñas
Dª Francisca de Molina	la de Juan Arias sº
Dª Maria Davila	la de Francisco Mesia Poblete
Dª Estefania de Prado	la de Anton Martines de la Cerda
Dª Ana Carrillo	la de Xptobal Rodriguez platero
Dª Maria de Porras	la de Lucas Alonso
Dª Mª Carrillo bibda de Juan Vilches	Juana Garcia bibda de Juan Davila
Dª Juana de Mesa	Dª Catalina de Valladolid

Juana de Morillas	las de Jurado Diaz
Dª Ysabel Barba	la de Alonso Hervas
Dª Catalina de Carcamo	la de Diego de Calahorra
Dª Catalina Carrillo	la vibda de Pedro de la Horden
Dª Eufemia Carrillo	la madre de Luis Lopez
Dª Francisca de Ayllon	

Acompañamiento

el doctor Diego de Acevedo correjidor	El prior de Santo Domingo
el doctor Martin Sanchez	D. Pedro de Poblete
fray Antonio de Cervera, sacristan mº	Pedro Chico de Guzman
D. Martin de Guevara comisario	Dª Maria de Mansilla
D. Jhoan de Laguna	las dondellas de Olivos

1730, s.m., s.d. Cabra. AHN. Div. Her., leg. 4, nº 53, fr. 1vº-3r.

Descripción de un accidentado traslado a cárcel segura realizado por un juez comisario dependiente del Santo Tribunal manchego.

Francisco Lozano Carrillo escrivano del numero desta villa de Cabra aprobado por el Rey Nuestro Señor doy fee y berdadero testimonio a los señores que el presente vieren como por una causa seguida de oficio de la Real Justicia de esta villa que tubo principio en ella en primero día del mes de nobiembre del año pasado del mil setezientos veinte y seis años por el señor lizenziado D. Francisco Lorenzo y Aguilar abogado de la Real Chancilleria de la ciudad de Granada correxidor que fue desta villa contra Alonso Sanchez de Hernandez vezino de la ciudad de Lucena y natural de la ciudad de Salamanca de qual consta que el referido en el dicho día fue conducido a la carcel de esta villa por Venito de los Reyes y otros moradores del partido de Gaena esta jurisdizion para traer hurtada una puerca en el dicho sitio de Gaena a media noche fue detenido por el dicho Venito de los Reyes como ministro quadrillero de la Santa Hermandad viexa de Ciudad Real y aprehendio dicha puerca con cuio monto lo avia asegurado en su cortijo con algunas sogas // ynterim que pasaba la noche que aviendolas roido dicho reo se avia apoderado de diferentes armas blancas y de fuego propias de dicho Venito de los Reyes que tenia para los lances oportunos del seguimiento de su ministerio atropellando y hiriendole hasta que tomo la puerta de dicho cortijo y aviendole seguido avia podido ser preso con favor de otras personas qua avia conbocado y por declaracion de dicho Venito de los Reyes consta como a cosa de media ora de aver estado maniatado dicho reo avia empezado a clamarle que

(por) todos los santos le afloxasen las muñecas que se le avian hinchado las avia afloxado de las manos y se avian recoxido en su cama puniendo un chafarote que tenia de canto y una pistola a la cabecera para si acaso se soltava dicho ombre forastero tener con que defenderse y como a dos oras despues de lo referido aviendose quedado dormido el dicho Venito de los Reyes avia oido decir entre sueños abre aqui aora los beras y vida de Dios y el dicho Venito de los Reyes a esta vez se avia puesto en pie en camison sin otra ropa alguna echando mano del chafarote y a la pistola y no la avia hallado y echo mano a una escopeta larga y al salir por la puerta hacia donde estava dicho reo le salio a recibir con el dicho chafarote del dicho Venito de los Reyes con ella y con la pistola que estava cargada con balas y la desamartillo al dicho Venito de los Reyes con ella y solo salieron dos chispas de lumbre del pedernal y no le avia dado fuego para poder // disparar y el dicho Venito de los Reyes se defendia con dicha escopeta dandole un golpe con ella y cicho reo le tirava cuchilladas con el chafarote y acudia a la puerta a ver si podia abrir y el dicho Venito de los Reyes sobre el para que no lo hiciera saliendo de la puerta y en esta lucha estuvieron bregando mas de media ora y el dicho Venito de los Reyes saco cinco cortaduras cutaneas las quatro en la mano derecha y una en la siniestra y un golpe en el brazo derecho y otra cortadura en la muñeca derecha y dos heridas de piquete en el pecho y en este tiempo se entro dicho reo en el cuerpo segundo de cocina y con el chafarote apago el candil y viendo que no podia salir se avia buelto a la puerta del campo y dicho Venito de los reyes sobre el y viendose acosado y sin poder salir dijo el dicho reo= señor comisario abrame usted la puerta que doy a usted mi palabra de darle un doblon y el dicho Venito de los Reyes para asegurarle le dijo suelta las armas y abre hixo y el dicho reo respondio quita perro que me engañas por vida de Dios y el dicho Venito de los Reyes le avia respondido no te

engaño suelta las armas que yo soltare las mias // y saldremos juntos y el dicho reo respondio que me engañas en cuya ocasion Doña M^a Adrami muger del dicho Venito de los Reyes viendo la casa a oscuras y el riesgo que estaba dicho su marido la dijo al dicho forastero que metiera la mano y tirara del pestillo y se fuera y el dicho Venito la riño a la dicha mu muger y con esta advertencia el dicho reo abia abierto la puerta y salido a el campo y el dicho Venito de los Reyes tras el y a los treinta pasos se rebolbio contra el y bolbio a correr y como a otros treinta pasos havia tirado el chafarote a un arroyo y avia perseguido huyendo con la pistola y una espada de dicho Venito de los Reyes a cuio tiempo avia salido un chiquillo hijo del referido llamado Juan Reimundo (sic) y avia ydo a dar cuenta al cortijo de Juan Palomeque y acudio la gente y se avia cercado a dicho reo y preso se avia traído a la carcel de esta villa y substanciado la causa lexitimamente resulto que la dicha puerca era hurtada y el dicho correxidior le probeyo de auto definitivo.

(r) Francisco Lozano s9.

1664, noviembre, 17. Ciudad Real.

AHN. Div. Her., leg. 36, nº 3,
ff. 178vº-181vº.

Ejecución y reconciliación pública, en Peralvillo, de dos desertores autores de graves delitos.

En la ciudad de Ciudad Real en diez y siete dias del mes de nobiembre de mil seiscientos y sesnta y quatro años como a las onze oras de la mañana poco mas o menos estando en el patio de la carzel real de esta Santa Hermandad presentes los señores D. Antonio de Aguilera Ladron de Guevara y D. Antonio Ramirez de Aguilera alcaldes de la dicha Santa Hermandad y en presencia de mi el presente escrivano fueron puestos los dichos Agustin Escudero y Francisco Vidal sobre las // cabalgaduras menores en forma de justicia acompañandolos quatro sacerdotes religiosos para exsortarlos y disponerlos y estando en la dicha forma se abrio la puerta de la dicha carcel donde avia muchos caballeros hermanos de la dicha Santa Hermandad y otra mucha juente a caballo y por boz de Andres de Alcala ejecutor de la justicia se dio un pregon haziendo notorio la causa porque se ajustizian los dichos delinquentes y en forma de justicia fueran llevados por las calles acostumbradas para semejantes castigos con boz de dicho pregonero que manifestava sus delictos y en la misma forma fueron sacados fuera desta ciudad por la puerta de Toledo de ella y llebados al sitio de Peralvillo donde se acostumbra hazer semejantes justicias por la dicha Santa Hermandad que es termino y jurisdiccion de la villa de Miguelturra del Campo de Calatrava y en dos cuartones nuevos que estaban fijos en el dicho sitio se avian de dar garrote a los dichos Agustin Escudero y Francisco Bidal= y estando en la dicha forma y

Agustin Escudero y Francisco Bidal= y estando en la dicha forma y habiendo hecho apearse de la cavalgadura menor al dicho Francisco Bidal se reconcilio al fin de la escalera con uno de los religiosos de la Orden de Santo // Domingo cuyo nombre es el padre fray Juan Montañes y luego el dicho Andres de Alcala ejecutor de la dicha justicia fue ayudando a subir por la dicha escalera a el dicho Francisco Bidal y theniendolo aorcajado en un palo que salia fuera de dicho cuarton el dicho religioso le dijo hermano Francisco Bidal dame licencia para que diga en publico en su nombre lo que me tiene comunicado y pedido que diga en esta ocasion y el dicho Francisco Bidal respondio se la doy padre y entonces el dicho religioso dijo aunque Francisco Bidal no mato al hombre fue el que le aconsejo que le matasen y dio favor para ello y a cometido otros treinta robos en diferentes ocasiones y bolvio a preguntarle es esto asi Francisco Bidal el qual respondio assi es padre y muero justamente y el dicho religioso dijo que el dicho Francisco Bidal le avia declarado que la sentencia de muerte que estava condenado era justa y la tenia bien merecida y perdonava a las justicias y con esto el dicho Andres de Alcala que le tenia hechado // el cordel al pescuezo y ligado el cuerpo al dicho madero le dio garrote y le torcio asta que el dicho Francisco Bidal quedo muerto naturalmente y luego le clavo las saetas acostumbradas y le puso la barvillera de yerro clavada al dicho madero como es costumbre con que se bajo de la escalera donde estava para ejecutar la dicha sentencia= Y luego mudo la dicha escalera y la otra por la qual avia subido el dicho Francisco Bidal al otro palo que estava prevenido de la otra parte del camino en el dicho sitio enfrente de el en que estava puesto y ajusticiado el dicho Francisco Vidal para ajusticiar al dicho Agustin Escudero y apeando el susodicho de la cavalgadura menor en que avia ydo se reconcilio con otro religioso del dicho orden de Santo Domingo que se llama padre fray Jeronimo de Valenzuela y luego el

dicho Andres de Alcala le ayudo a subir por la escalera que estaba frente a la parte adelante del dicho palo y le sento aorcajado en el que salia de el // y le ligo y ato con sogas a el dicho palo y le hecho el cordel con que le avia de dar garrote al pescuezo y estando en esta forma el dicho religioso fray Juan Montañes que estaba al pie de dicha escalera en el suelo con voz alta dijo hermano Agustin Escudero dame licencia para que diga en publico lo que me a pedido que diga en esta ocasion y el dicho Agustin Escudero respondio si la doy y entonces el dicho religioso a voz alta dijo Agustin Escudero me a dicho que diga en esta ocasion que el fue quien hizo la muerte que le esta provada y que demas de aquel rovo a hecho y cometido otros veinte y ocho robos diferentes y que merecia muy bien la muerte que estaba condenado y que los señores alcaldes azian justicia y que los perdonava y alço la cara al dicho Agustin Escudero // y le dijo hermano Agustin esto es asi y lo que me a dicho que diga y dicho Agustin Escudero respondio que si y entonces el dicho Andres de Alcala ejecutor de la justicia diziendo que dijessen el Credo y hiziesen lo mismo todos los que estaban presentes le torcio el garrote y se le apreto hasta que murio naturalmente y luego le clavo las saetas acostumbradas y le puso y clavo al madero la barbillera de yerro que es costumbre y los señores alcaldes lo mandaron poner por auto y diligencia y lo firmaron.

(r) Don Antonio Aguilera Ladron de Guevara. Ante mi Raphael Macaya sº.

Estando en el dicho sitio de Peralvillo en el dicho mes y año dicho, acavada de ejecutar la dicha sentencia de muerte en la forma dicha por mandado de los dichos señores alcaldes y por boz de dicho Andres de Alcala se dio un pregon // diciendo que los dichos señores alcaldes mandaron que ninguna persona fuere osada a quitar los cuerpos de los dichos Francisco Bidal y Agustin Escudero de los palos y sitio donde estaban asta que se consumiese la carne de ellos como siempre es

costumbre desta Santa Hermandad pena de ducientos azotes y seys años de galeras a el remo y sin sueldo y lo mandaron poner por diligencia y lo firmaron.

(r) Don Antonio Aguilera Ladron de Guevara. Ante mi Rafael de Macaya.

1724, abril, 24. Ciudad Real.

AHN. Div. Her., leg. 45, nº 10,
ff. 29vº-30r.

Apartamiento de la querella criminal interpuesta ante los alcaldes.

En la ciudad de Ciudad Real en siete dias del mes de abril de mill setezientos y veinte y quatro años ante mi el escrivano de la Santa Hermandad vieja desta dicha ciudad parecio Juan de Cañizares vecino de la villa de Almagro de ofizio batanero, residente al presente en esta ciudad y dijo que por quanto el otorgante dio querella ante el señor D. Pedro Triviño Vaillo alcalde de dicha Santa Hermandad en el dia veinte y uno del mes de marzo proximo pasado por comparezencia que hizo contra Manuel y Simon de Pisa vecinos de la villa de Bolaños sobre hurto y extracion de paños que de su cuenta tenia en el vatan que esta en la rivera de Guadiana a cuio pedimiento se an hecho las dilixencias que constan en estos autos // en los que a el otorgante se a dado traslado en auto proveido por dicho señor en el dia primero del corriente con acuerdo de asesor y entendido el otorgante de la dicha notificacion dijo= que no tiene que pedir cosa alguna contra los expresados reos por hallarse satisfecho y restituido de dos pedazos de paño que le faltaban los mismos que constan en su declaracion, que se a dado satisfaccion por medio de un sacerdote, y respecto de estar satisfecho del dicho daño, y allarse pobre y no tener medios con que seguir este pleito se aparta de la querella en forma que mas aia lugar, los remite y perdona qualquiera agravio que por esta razon a el otorgante, se le aia causado se desiste y aparta del derecho que le pertenece y pide y suplica a dicho Señor Alcalde le aia por apartado y que esta causa se siga de oficio de la justicia que su merced

administra y se le tenga por no parte en ella, y asi lo otorgo y firmo siendo testigos Juan Ramos Gabriel Ruiz Carneros y Alphonso de Mena vecinos de dicha ciudad.

(r) Juan de Cañizares. Ante mí Matheo Ruiz escrivano.

1602, diciembre, 16. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 29, nº 5, s.f.

Recusación del alcalde instructor por la parte enjuiciada en un caso de hermandad substanciado por el Santo Tribunal ciudarrealeño.

En la Ciudad Real en diez dias del mes de diciembre de mil y seiscientos y dos años ente el señor D. Christobal de Prado y Armenta alcalde de la Santa Hermandad hay la siguiente nota=

Don Melchor Treviño vecino de esta ciudad en el pleyto con Pero Hernandez Juan Ruvio Juan Perez sobre el yncendio del colmenar de la Viñuela digo que para qualquier auto que uviese de proveer en este pleito yo tengo por sospechoso al señor D. Christobal de Prado y Armenta alcalde de la Santa Hermandad Vieja desta ciudad y por tal hablando con el devidamiento que devo le recuso y juro en mi anima la dicha sospecha a v. md. suplico le haya por recusado y que no provea algun auto sin se acompañar con el asesor de la Santa Hermandad en otra manera protesto la nulidad de los autos que provea sin el dicho asesor y lo demas protestan me conbiene y lo pido por testimonio.

(r) D. Melchor Fernandez Treviño

1761, diciembre, 30. Ciudad Real. AHN. Div. Her., leg. 53, nº 6, s.f.

Dos gitanos arrestados por ministros de la Hermandad de Ciudad Real se acogen al indulto general concedido con motivo del juramento regio.

En la ciudad de Ciudad Real a treinta dias del mes de diciembre de mill setezientos sesenta y un años el señor D. Pedro Tribiño y Baillo alcalde de la Santa Hermandad Vieja de ella, habiendo visto estos autos que penden entre partes de el una el ofizio fiscal de la Real Jurisdizion pribilegiada de Tribunal de la dicha Santa Hermandad y de la otra reos acusados Juan Joseph de Acosta i Diego Cortes castellanos nuevos gitanos , presos en la Real Carzel de la villa de Campillos, sobre andar bagando y contrabener a las Reales Pragmaticas de S.M. promulgadas, decretos y otras ordenes, por los que esta prebenido y mandado que semexante xenero de gente prezisamente se aplique a la cultura de los campos, prohibiendoles el que no usen otro oficio algunos y expezialmente el de herrero, como asimismo el que no puedan salir de los pueblos de sus dominios sin lizencia por escrito de sus justizias, y esta que sea con expezial motibo permisible, y limitazion de tiempo; pribandoles absolutamente que puedan hazer trueques cambios de caballerias ni el concurrir a ferias con tal fin, resultando de los autos que les fueron aprehendidos por tales vagantes, no llebando lizencia por escrito como debieran de las justizias de los pueblos de sus domizilios o que despues ha manifestado el referido Juan Joseph de Acosta, una que parece le fue dada por el señor Don Antonio de Guzman y Bobadilla, coronel de los Reales Exercitos de la ciudad de Tarifa refrendado de Antonio Chico Perez escribano publico su fecha siete de abril del año pasado de mil setezientos y sesenta, con el motivo de

pasar a la ciudad de Ezija a buscar que trabajar, y Diego Cortes, la que le fue dada por la justizia de la villa de Gabia la Grande refrendado de Joseph de Arjona Hernandez su fecha onze de marzo del año proximo pasado expresando en una y otra lizencia ser de buena vida y // costumbres aplicados a su trabajo, beneficiandose de sus declaraciones y confesiones que les toman grande variedad i mendazion no habiendo justificado en el plenario cosa que les sea favorable antes si haber dado por ratificados los testigos sumarios, y renunziando los terminos de el en cuiu atenzion y la dilatada prision que se les ha ocasionado, y que el yndulto xeneral concedido por S.M. (Dios le guarde) asi por la gloriosa exaltacion al trono de esta Monarquia como por el expedido y publicado en zelebridad de la funzion del juramento fecho por S.M. por estos Reinos, y el de S.A.R. del Principe D. Carlos Antonio conzediendo muchas grazias y concesiones a los reos que se allaban en prision al tiempo de su publicacion, que los referidos legitimamente les an comprendido como de los autos de justifica, sobre lo que han hecho indebidias instancias dijo su señoria que por los motivos expresados debia declarar y declaro haberles comprehendido dichos Reales Indultos, y que sus exzesos fueron causados antes de las dichas conzesiones en cuiu consecuenzia los daba y dio por libres de los dichos exzesos porque han sido prozesados y que virtud porque han sido prozesados y que en su virtud sean sueltos de la prision en que se allan pagando las costas causadas teniendo bienes de que se puedan exigir, o posibilidad para ello, apercibiendoles que en adelante biban con arreglo a las Reales Pragmaticas promulgadas, y ordenes superiores posteriormente libradas contra los que se dicen i llaman gitanos, y en su contrabenzion se les castigara con arreglo a las penas que se les impone por las zitadas pragmaticas, y para la execuzion de esta providenzia se libre el correspondiente despacho, y a dichos reos el testimonio que se

requiere // para su resguardo que por parte de nosotros sera definitivo, o como mas haia lugar en derecho lo mando y firmo su señoria de que fueron testigos Antonio Romero Juan Lopez y Manuel de Ochoa bezino de esta ziudad i lo firmo su señoria de que doi fe=
(r) D. Pedro Triviño y Baillo

1695, junio, 25. Madrid. AHN. Div. Her., leg. 2, nº 10 (copia 1705).

Despacho exhortatorio para que los ministros de la Hermandad Vieja de Ciudad Real cumplan sus oficios, contando con el debido auxilio.

Don Carlos por la gracia de Dios Rey de Castilla de Leon de Aragon de las dos Sicilias de Jereuslem de Navarra de Granada de Valencia de Galicia de Mallorca de Sebilla de Zerdeña de Cordova de Corzega de Murzia de Jaen Señor de Vizcaya e de Molina etc= A vos los alcaldes de la Santa Hermandad de la ciudad de Ciudad Real salud e grazia, saved somos ynformados que los comisarios quadrilleros y demas ministros y ofiziales de la Santa Hermandad son omisos en el cimplimiento de la obligazion y reztitud de sus ofizios y porque conviene a nos servicio que los exerzan muy puntualmente con toda interinidad y que a los que no lo hubieren como se le previene por sus titulos se los recojais para que huviesen dellos ni los exerzan en manera alguna quedando privados del goze de las exepziones y preeminencias que por ellos les estan conzedidas y para que assi se cumpla: Visto por los del nuestro Consejo se acordo dar esta nuestra carta por la qual os mandamos que luego que la rezivais agais que los comisarios quadrilleros y demas ministros y ofiziales de la Santa Hermandad cumplan con la obligacion ynstituto de sus ofizios en la conformidad que se les previene por sus titulos y no lo haziendo y executando assi queremos se los recojais para que no aian ni exerzan los dichos // ofizios en manera alguna y que no gocen de las ezcepciones y preeminencias que por ellas les estan concedidas en tiempo alguno= y por esta nuestra carta manmdamos a todas las Justizias de las Ciudades, Villas y Lugares destos nuestros Reinos y Señorios donde llegaren comisarios y quadrilleros y

demas ministros y ofiziales desta Santa Hermandad que siendo requeridos les den y agan dar todo el favor y ayuda que hubieren menester y pidieren por sus personas y ministros las carzeles y prisiones de que necesitasen sin poner en ello escusa ni dilazion alguna= y asimismo mandamos a los escrivanos de las Ciudades, Villas y Lugares les a(d)mitan puntualmente todos los autos y diligenzias que se ofrezieren hacer con execuzion de sus comisiones con a(d)bertimiento que seran cargadas graciosamente= y los unos ni los otros non fagades endeal pena de la nuestra Real merzed y de zinquenta mill maravedis para la nuestra Camara so la qual dicha pena mandamos a qualquier escrivano la notifique, y dello de testimonio. Dada en Madrid a veinte y zinco dias del mes de julio de mill seiszientos y nobenta y zinco años. Frei Don Manuel Arias= Don Juan de Sanvenitez Guevara= Don Mateo de Castillo= Don Rodrigo de Miranda= Don Joseph de Ledesma= yo Joseph Francisco de Aguirre Cano escrivano de Camara del Rey nuestro Señor la ize escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo= Registrado Don Garzia de Villaquiran y Marban= Chanciller Mayor Don Garcia de Villaquiran y Marban.

1715, mayo, 1. Cabeza del Buey.

AHN. Div. Her., leg. 4, nº 22,
ff. 6r-7vº.

Misiva de un ministro superior extremeño a sus superiores de Ciudad Real, informandoles sobre la insubordinación de algunos comisarios y de los excesos cometidos por las justicias ordinarias de la zona.

Ylustrissimo Señor. Abiendome hecho usia la onr(r)a de averme dado el titulo de juez comisario de ese tribunal para conozer los casos que a el competen, y en vista de algunas salidas que e hecho acompañado de usia y prisiones que e ejecutado, espuniendo (sic) mi vida accidentes riesgos y gastado parte de mis caudales que por no cansar a usia no los espezifico y en caso nezesario usia se puede ynformar de Mateo Ruiz escrivano de este tribunal y aviendo decreto de usia que todos los despachos manuiescriptos (sic) se recogiesen y diesen de molde fue usia servido onr(r)ar mis servizios dandome comision de tal juez comisario con la clausula de que todos los ministros de ese tribunal, que unidos conmigo, me asistiesen a las diligencias que ubiese de ejecutar de esa Santa Hermandad= y aviendo venido de esa ziuudad de llebar a Juan Blasco Barna en virtud de orden de usia ynmediatamente se me dio aviso luego que llegue a esta villa como en los cortijos de Fuenteobejuna, distantes de estas zinquenta y seis leguas avia muchos gitano, con sus familiares, muy prevenidos de cavallos, y armas, y muchas cavallerias mayores y menores que andavan cambiando y apriandose a la feria de Medellin que se zelebra el dia de // la Santissima Cruz de Maio presente y abian algunos robos que suelen acontezzer en tal tiempo probeer el expediente que ba puesto por caveza de esos autos (que remito a usia para que en su bista se execute lo

que fuese justizia) y aviendo adquirido unas ziertas notizias, de lo que llebo referido pues las tube de tres bezinos desta villa, como en Monterrubio distante de esta villa tres leguas, que davan el dia 29 del passado, parte de dichos jitanos, grandes picarones, y el uno de ellos traia en su poder su cavallo, yze segundo requerimiento como usia hera savido a en el primero requerimiento que se hizo a Gabriel Fernandez Ximeno dijo que aunque gastara parte de su caudal, no avia de salir pues el no avia destar sujeto a que siempre que usia se diese el gusto o a que otro sudelegado de usia tubiese tal notificazion= que azia renuncia de su nombramiento siendo asi que asta aora que no se le a ordenado nada en el servicio de ese tribunal sea sido bueno el Despacho pues a estado gozando de las franquezas que se tienen conzedidas por su titulo y porque ogaño los señores alcaldes ordinarios an yntentado, biendo no cumplan con su obligacion desaforarlos de sus pribilegios comparezemos todos ante vuestra señoria quejandonos de este agravio como consta por autos y pedimientos hechos ante vuestra señoria alegando estar prontos siempre que se le ofrezca= y en el segundo requerimiento se sale con la respuesta que vuestra señoria bera siendo asi que debe ser despreziabile junto con la zertificazion de el medico por prozesar estrecha amistad siendo // zierto lo que vuestra señoria debe creer que esta sano pues el dia 28 y 29 de el pasado estubo arando= y a supuesto esta ficzion a fin de despreziar las ordenes de vuestra señoria y oy dia de la fecha asistido en publico a misa y prozision (sic), y a contenido converzacion en la plaza asta medio dia= Joseph Sanchez Arebalo reconocera vuesa señoria el poco aprezio que a echo por el, pues aviendo estado conmigo ayer tarde y toda esta mañana asta medio dia no se a dado por entendido antes si oyendo lo mismo que ejecuto quando paso por esta villa Alonso Barna lo requeri segun ordenava el despacho que acompañava dicho reo y tampoco quiso salir=

de que en caso nezesario ofrezco ynformzion de todo= Diego Ruiz Munido este si es zierto esta azidentado en cama y sangrando lo mismo que pareze en los autos= y mi animo a sido y es perder mi bida y hazienda en serbizio de este tribunal mas todo esto lo omitire ynterim vuestra señoria no me saque con luzimiento de este lance y que entiendan estos ministros y otros que asi como vuestra señoria sabe premiar a los subditos y buenos ministros save castigar los omisos e inobedientes en esta villa unos se rien de este caso, y otros aguardan el paradero, y io me mantengo en la azertada justificacion con que vuestra señoria castiga y premia= con una funcion antes de esta perdi // cavallo y armas y estar retirado en una ermita que azerme prender el señor correjidor de Cordova= el despique de esto no se logro por vuestra señoria por estar el Marques de las Minas con su gente en esa ziudad= poco puedo perder en esta pues lo actuado y 70 reales que me queta ese propio lo gasto de buena gana solo a fin de mirar por la jurisdizion que vuestra señoria administra a quien suplico me atienda= y condene en la multa que se hallase de derecho a los referidos con mas las costas causadas y que se causaren; pues quando estos siendo ministros de ese tribunal desprezian las ordenes de vuestra señoria que se espera que ejecuten los jueces ordinarios asi lo espero de la gran justificacion de vuestra señoria (que no se bendra el propio sin despacho bastante) a quien en su grandeza procure el zielo dilatados años. Caveza del Buei Maio 1º de 1715 años.

(r) Gabriel Delgado. (dirigido a) Ylmo. Cabildo y alcaldes de la Santa Hermandad de Ziudad Real.

1717, enero, 22. Madrid. AHN. Div. Her., leg. 43, nº 1, ff. 12r-13r.

Carta-orden del Consejo de Castilla autorizando a los ministros hermandinos a extraer de las casas de los párrocos a los delincuentes.

El Consejo en vista de la representacion de D. Francisco Tribiño Calderon de la Barca alcalde que fue de esa Santa Hermandad que executo en 17 de septiembre del año proximo pasado donde cuenta con el motivo del desorden que se experimenta de urtar y escalar colmenas poner majadas de ganados y traerlos pastoreando en los sitios ynmmediatos sin guardar el distrito zerrado que esta prevenido // y asimesmo en poner fuego y caussar yncendios en los montes destruiendolos y aniquilandolos de que se seguia gran daño y perjuicio a la causa publica por lo que despacho el quadrillero maior de esa Santa Hermandad con audiencia a diferentes villas y lugares donde se executavan estos exzesos para el castigo de ellos y resultando culpados entre ellos Juan y Jeronimo Fernandez vecinos de la villa de Malagon por aver hecho en el año de 1712 una roza en el monte del termino de ella pegandole fuego que se extendio y quemó mucho monte ardiendo los vados de unas posadas de colmenas y el monte de ella y de otra posada de diferentes vecinos de aquella villa sin que la xusticia della procediese al castigo que por la toleranzia el año proximo pasado en dicho sitio y monte executaron otra roza y le pegaron fuego y que por huir estos reos en las casas del lizenziado D. Diego Sanchez Cordobes cura de la parroquial de dicha villa hixo y ermano de los referidos porque no le embaraze la prision dellos despacho exorto al juez eclesiastico de esa ziudad que con el pretexto de que mandava a dicho cura no acojiese ni refugiase en sus casas a dichos reos //

denego el ympartimiento de ausilio por lo qual remitio los autos al quadrillero y haviendo este proveido uno para el cura la hallanase sus cassas para executar la prision de ambos respondio que respecto de las casas de los eclesiasticos no gozan de inmunidad eclesiastica sin despacho del juez eclesiastico pudo y devio el ministro de la Santa Hermandad y prender los reos en las casas del lizenciado D. Diego Sanchez Cordobes sin envargo de qualesquier pretexto que se hubieran hecho por este u ordena a v.mds. asi en este casso como en los que en adelante se ofrecieren que hallandose reos refuxiados en casas de eclesiasticos que no esten dentro de sagrado se extraigan y prendan, y theniendo los minsitros de esa Santa Hermandad el debido respeto a las personas de dichos eclesiasticos; lo que participo a v.mds. para que en esta yntelixencia lo executen assi: Dios guarde a v.mds. muchos años como deseo Madrid 22 de Henero de 1717= El abad de Vibanco=

(dirigido a) Sres. Alcaldes de la Santa Hermandad Vieja de Ziudad Real

1719, noviembre, 4. Mérida.

AHN. Div. Her., leg. 43, nº 14, s.f.

Irregularidades en el arresto de unos sospechosos extraídos de sagrado. El captor, para evitar ser enjuiciado, acuerda con el intendente de Extremadura capturar gitanos incumplidores de las reales pragmáticas, lo que a la postre no ejecutaría tras su excarcelación.

Mui señor mio. Recivi la de v.md. y respondienddo a su contenido digo que desde que passo lo que ya consulte a ese Santo Tribunal bolvi a la busca de jitanos (por aver dado orden el Sr. D. Juan de Holiver intendente interino desta probinzia para que de todas las cabezas de partido se saliese a buscar unos jitanos que estaban en el partido de Montanchez en el lugar de Alcuescar) por aver hecho algunas cosas no muy bien hechas y puesto fuego a los montes, y assi sali en compañía del alguacil mayor desta ziudad y otras personas que se prezisaron y aviendo llegado a dicho lugar de Alcuescar nos dixerón que el dia ante(rior) avian estado en las minas a que luego incontinenti marchamos en su busca y parezio la tierra se los avia tragado pues no tan solo no podiamos dar con ellos pero ni aun nueva de quien lo hibiese visto no descubrimos estos amedrentos resultaron en la Villanueva en la Yglesia: y el dicho Francisco Alonso por justificarse alguna manera y echar una capa de buen todo a sus infamias saco un despacho de dicho señor yntendente contra jitanos y biendo estos les tenian la justicia y vezinos de la dicha villa (mediante la orden expedida) en la yglesia acorralados fue alla y escalando la yglesia por los texados entro disparando y dando cuchilladas en quien no tenia otra defensa mas que la de la yglesia que fue y es lo que ynbocavan, y despojandolos de lo que tenian los // truxo a la carzel desta ziudad y

aviendo llegado a mi notizia que dicho Juan Alonso estaba aqui (ygnorando el despacho que tenia pues este no llevo a mi noticia hasta despues de preso) passe a estos con el señor Alcalde mayor y le dixe necesitava prender este sujeto por tenerle echa sumaria aunque no muy plena por faltar la intelixencia del escrivano y que assi baia hazerle otra era preziso prenderle que si despues no resultare culpado era fasil echarle fuera; a que me dixo que estava bien y dandome a D. Francisco de Robles por escrivano y a tres ministros fuymos en su busca a las diez del dia y aunque izimos las dilixencias no fue posible dar con el y yo no quise nadie fuese a comer hasta que a las dos tuvimos noticia del y que posava en casa de Juan Gutierrez mandadero de las monjas de Santa Clara y pregundado por el dixo que yo estava alli y el escrivano y otro ministro fueron por otra parte y yo me queda hasta que bino y llegando a entrar a el mismo tiempo le pregunte donde era dixo que de Balmorales y replique como se llama dixo que Francisco Alonso y le dixe oyendo esto le eche la mano al cavezon y le dixe que se diese a prision y el con gran desverguenza dixo que se entendia prenderlo a el haziendo resistenzia y yo viendo esto por estar ynformado que estava cargado de pistolas le abraze por los brazos dixe favor a la justizia y el respondio con gran atrevimiento que justizia ni que justizia y sacando una pistola del zinto le quiso levantar el muelle en la rodilla y yo porque no subzediese desgrazia le agarre la pistola // por el cañon con gran riesgo y conozido peligro de mi bida y dixo favor a el Rey y el que se dezia de desvergonzado dixo que rey ni que rey y los ministros a el mismo tiempo lo agarraron por detras y yo le saque la pistola de la mano porque no hubiera ninguna desgrazia solo atendiendo a hazer prision y se le quito la otra pistola que traia al zinto y el biendose sin armas tiro una puñada a un ministro y le baño en sangre a lo qual el ministro le dio con la coz de la pistola en los dientes y bino el

escribano y le llevamos a la carzel y se empezo la sumaria ante dicho
escrivano de la resistencia y el viendose tan culpado hizo memorial al
señor yntendente y en el dezia que se obligava limpiar la Extremadura
de jitanos y este cavallero llevado del buen zelo al bien comun y no
saviendo que sus maldades eran tantas le mando echar fuera a que yo me
opuse y estube con el señor governador y señor alcalde mayor ante
quien corrio esta causa hasta que yo traxese orden de ese Santo
Tribunal: y lo requeri y dicho señor governador fue a estar con el
dixo señor yntendente y le dixo la fuerza que yo hazia para que no se
le echase fuera a que respondio que dexasse que trajese otros jitanos
y que luego se quedaria con ellos cosa que asta aora no ha hecho ni
mas se ha savido del y biendo dicho señor yntendente que no es
cumplido lo que ofrezio mando recoger el despacho y que se le prenda
donde quiera que se alle y al mismo tiempo al prior de Villanueva
biendo que biolo la yglesia con sangre y saca de jitanos le ha mandado
descomulgar como lo // esta de las muchas yglesias de su partido y lo
que yo tengo que suplicar a este Santo Tribunal que en caso de que se
aya de bolber a prender este sujeto se me remita orden de que si se
resistiese se le pueda tirar a matar sin por por ello me benga peligro
alguno pues el ya esta (ar)restado y yo puse una vez mi vida a peligro
tan conozido no es para siempre y asi espero de ver a ese Santo
Tribunal en esta firmeza junto a las ordenes de su agrado que
executare gustoso= no puedo dexar de dezir a v.md. y a esos señores
que miran esta causa con el apercivimiento de que yo soy vezino desta
ziudad y que de tomar ese Santo Tribunal a pechos este negozio y que
resulta en contra de los juezes; se pueden ynclinar contra mi y por
qualquier causa que me pueda suzeder bengarse en mi a lo que yo no
tengo culpa (...). Merida y nobiembre 4 de 1719 años.

Beso las manos de v.md. su mayor servidor.

(r) Antonio Gonzalez Marques.

1726, febrero, 25. Llerena. AHN. Div. Her., leg. 45, nº 19

Información en la que se notifica las diligencias realizadas para verificar la supuesta inmunidad local de unos gitanos en Guadalcanal.

Muy señor mio y mi amigo a su segunda respuesta a vos que he recibido de v.md., una inclusa en otra las que recibí el día veinte y tres del corriente a las quatro de la tarde y luego que las recibí como el trasumpto en que se me previene ciertas diligencias en el y luego incontinenti que las recibí pase a ver un abogado de mi satisfaccion el qual respondió por y a mi propuesta y encargo de los señores lo que v.md. vera en la inclusa lo que costo parecer y costo quatro reales= y viendo io no adelantavamos nada en lo que los señores y v.md. me otorgan tome la resolucion de pasar el día veinte y quatro a la villa de Guadalcanal a ver si podía indagar algunas noticias concernientes a el encargo de los señores y solo pude inquirir lo siguiente= luego que llegue con todo sigilo a la villa de Guadalcanal solo por no dar a entender a nadie (a) lo que iba me fui a una posada desde donde con el guespede invie a llamar a un D. Juan de Flores que asiste en dicha villa en la ronda de tabaco quien dice es comisario de esta Santa Hermandad y pregundele si savia si avia hecho en aquellas villas una informacion de iglesia ante el vicario jeneral D. Bernabe de Chaves y Porras a pedimiento de Palacio Diaz, Pedro Andres y Francisco Perez jitanos me respondió que gitano de aquella villa avia hecho la informacion de Palazios Diaz dixo como haziendo mofa de la Hermandad que con jitanos no habia partido y que habia hecho la informacion, y que si fuera necesario aria otras veinte de iglesia para cualquier gitano que no fuera castigado, que tenia en aquella

villa compadres y amigos que por un quartillo de vino juraria lo que el quisiera y lo mas que pude llegar a penetrar fue que los testigos fueron vuscados por dicho gitano // con que es cierto que la informacion es por su naturaleza nula y no puede saber los nombres de los testigos por razon de allarse fuera de la villa de Guadalcanal el dicho gitano por una quimera que tuvo en la dicha villa de Zafra y -por- esto io le vuscare para que me diga quienes son los testigos y quando no quiera por vien me sera preziso formarle caveza de procso pues tiene muy bastante delito para dar con el en la Santa Hermandad= y despues desta dilixencia pase a ver a el alcalde que fue cuando sucedio la quimera de Nuestra Señora de Guaitoca y preguntandole suvercticia(mente) si se acordava de quando fue alcalde lo que avia pasado en Guaitoca quando la riña de los paisanos a lo que vinieron algunos jitanos a meter paz de que resulto de dicha quimera algunos heridos y se retraxeron algunos jitanos a dicha hermita y que si despues de aver pasado la quimera avian querido sacar o distraer del sagrado a dichos jitanos, y me respondio que no que se avian quedado en la iglesia y que luego que falto la jente ellos mismos se fueron sin violentarles nadie= ademas de decir otros sujetos amigos mios de dicha villa quie siendo tantos los gitanos que avia por la feria y muchos de ellos estar en la hermita come era capaz en aquel concurso conocer por sus nombres y apellidos a los que pretenden esta inmunidad= y haciendo dilixencia en Guadalcanal quien era el notario que avia hecho la informacion me dixeran no lo avia hecho ninguno de aquella villa y que una vez que hubiera hecho informacion pasaria ante notario Antonio Rodriguez de Olivera notario maior de la visita de la provincia que se hallo en aquella villa en ocasion que se pudiera haver hecho dicha informacion es lo mas que he podido llegar a saver y esto es lo que pongo en noticia de v.md. para que lo ponga // en noticia de los señores= como tambien en este correo recibira v.md. una

carta mia y otra recibiran los señores en que les insinuo lo que v.md.
vera i le he de dever que ciadiuve con mi pedimiento pues es muy en
servicio de Dios y del Rey, y para que tengamos paz los que mantenemos
comisaruos en este pueblo y no ofreciendose otra cosa pido a Dios le
guarde muchos años. Llerena y febrero 25 de 1726 años.

Besa las manos su mayor servidor y amigo.

(r) Francisco de Silize. (dirigido a) Amigo y señor D. Matheo Ruiz.

1740, marzo, 5. Ciudad Real.

AHN. Div. Her., leg. 51, nº 16, s.f.

Comisión a un ministro superior para proceder contra unos gitanos.

En la ciudad de Ciudad Real en cinco dias del mes de marzo de mill setezientos y quarenta años el señor Don Francisco Rodriguez de Ledesma Alcalde de la Santa Hermandad Vieja de esta ciudad y en todos los Reynos y señorios de S.Mag. por el estado noble de caballeros hijosdalgo dijo= que a su señoria se le a dado notizia, y queja como andan dos gitanos que tendran como de veinte y quatro y veinte y seis años vestidos de muger cargados de armas cortas, y largas, y cavallos, todo en contravencion de las leyes, y reales pramaticas de S. Mag. para las xurisdicciones, y despoblados de las villas de Lanchete, Valverde y Val de Santo Domingo y otras comarcas haziendo trueques y canvios de caballerias, hablando la lengua jeringonza, ni guardar vecindad, si solo viviendo a su libertad no temiendo a la xusticia, escandalizando a lo pueblos, y para poner el remedio condigno, y que se castiguen semejantes excesos cumpliendo con el instituto de este Santo Tribunal mando: se libre despacho cometido a Don Juan Ximenez y Villalba ministro superior de este tribunal y alguazil maior de la villa de Santa Olalla, para que // pase a las dichas villas y demas partes donde convenga, y haga sumaria informazion sobre lo referido, y justificandose en bastante forma el cuerpo del delito asi por la aprension de armas, como andar en abitto de muger vestidos, los prenda y asegure sus personas en la carcel real del pueblo mas inmediato embargara y depositara sus vienes, y fecho les recibira declaracion y haciendoles las preguntas, y repreguntas necesarias, y recibidos que sean remitira los autos originales al ofizio del presente escrivano

para en su vista, dar la providencia mas correspondiente en xusticia y por este su auto asi lo proveio mando y firmo.

(r) Don Francisco Rodriguez de Ledesma. Ante mi Vicente Garcia Prieto.

1762, abril, 10. Ciudad Real.

ADPCR., s.c.

Tolerancia de las justicias de Baeza a los tratos de los gitanos.

Ni las Reales Pragmaticas, ni las Ordenes de V.S.I. ni los desvelos de la Santa Hermandad de esta ciudad de la que nos hallamos Alcaldes, bastan a remediar los robos de las caballerias en despoblado, ni los que sufren los traginantes; porque en las justicias y poderosos de los pueblos hallan abrigo y proteccion los gitanos comerciando desmesuradamente en la venta y cambio de caballerias de todas classes, de forma que es rara la que se hurta que no salga algun gitano author o complice en darle salida, validos todos de las inapelables maximas y cautelas que acostumbran.

Consiguiente a los estrechos encargos con que se hallan nuestros Ministros y Subalternos en todas las ciudades villas y lugares para averiguar, prohibir y castigar este pernicioso comercio en que si no tienen interes las Justicias la disimulan y toleran, y noticioso Joseph Sanchez de Madrid nuestro comisario en la villa de San Esteban del Puerto que en la ciudad de Baeza se hallaban entre otros el gitano Juan de Bargas tan mal opinado como que esta justificado author del hurto de ocho cabalerias menores, sobre el que se formalizaron autos poe esta Santa Hermandad, y se le dirigieron a dicho comisario para su continuacion y para la captura del referido y complices, se constituo en la citada ciudad, y puesto el cumplimiento a su titulo por el Alcalde Mayor, asistido de otros dos comisarios de la misma y de otros que en calidad de guardas le auxiliaban al emprender la prision se hallaron todos rodeados y asaltados de otros siete o ocho jitanos, que con las temibles armas de sus tigas, hicieron calificada resistencia hiriendo al guarda Andres Moreno, y habiendo recibido uno de los

jitanos un peligroso balazo sin saber quien le disparo en la trabada pendencia, y paso lo demas que enuncia la carta original del mismo comisario que pasamos a manos de V.S.I.

El hallazgo de ocho jitanos con treinta y siete caballerias en Baeza descubre un escandaloso permiso del trueque y cambio, en la justicia, y el cumplimiento al titulo de nuestro comisario le dejo sin facultades para la prision y resultas, pero tal vez el considerar aseguradas las costas con el producto de aquellas, desde auxiliante que debiera ser, se ha apropiado conocimiento privativo el Alcalde maior quando el comisario substituto en otro su principiado exercicio, y no parara hasta tratar como a los reos a nuestros dependientes, bien hallado con las gratificaciones de los jitanos a quienes por la de un doblon a cada uno concedio licencia para que traficasen con caballerias (en) la ultima feria de San Andres suspendiendo hasta que se fenecio el cumplimiento que se avia pedido de respeto a las Reales Pragmaticas en la dicha villa ni hizo sacar el expresado titulo.

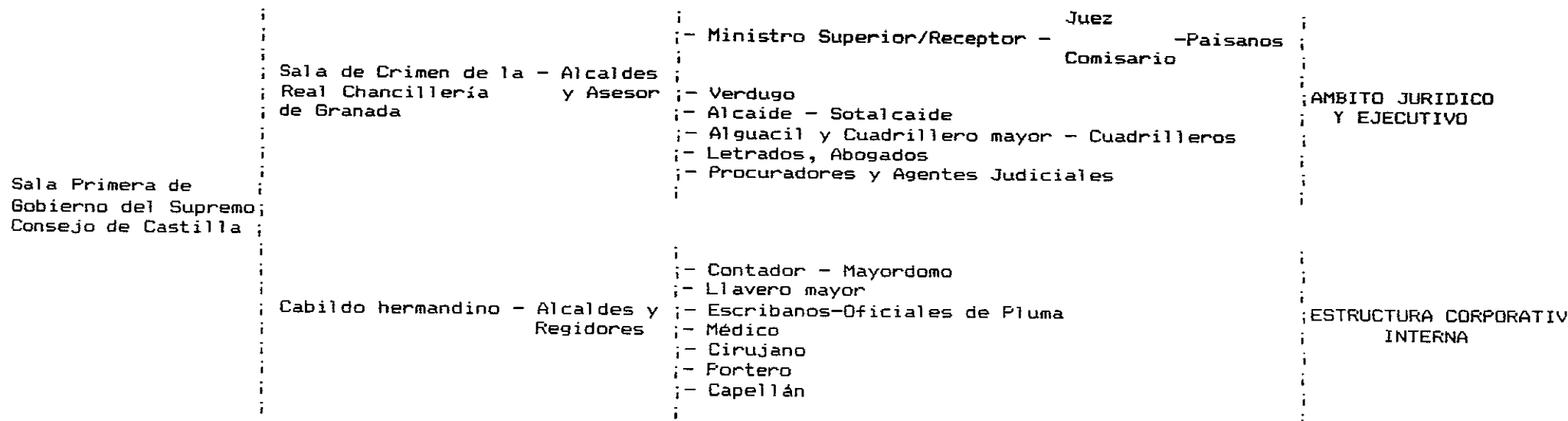
Las Hermandades Señor Ilmo. como se logre el fin de su instituto no espera a mas prerrogativas que el remedio de los daños, pero si no se sostienen sus facultades, desmaian sus ministros, y no avra quien sirva si en lances de esta clase se les priva del conocimiento, inhibiendola con deshonor, y debemos esperar en la distincion con que V.S.I. la trata, que expida su orden para que el dicho Alcalde maior y demas justicias de Baeza, entreguen autos, presos y bienes ha disposicion de don Juan Francisco del Rio veinte y quatro de la ciudad de Jaen, secretario del Secreto de la Inquisicion de Cordoba y Ministro Superior de esta Santa Hermandad, a quien en este dia dirigimos testimonio de la enunciada carta con la correspondiente comision para que formalice la sumaria, e inhibicion de aquella Justicia pues a lo menos esclarecera la continuacion de los atentados que recelamos, y puede V.S.I. asegurarse de que si dicho Joseph

Sanchez de Madrid, o algun ministro hubiesse cometido exceso, le corregiremos conforme a derecho, y de que si en este lance no queda airosa la Hermandad se obscureceran sus regalías en las Andalucias, donde estan bien hallados los jitanos con la proteccion de las Justicias.

V.S.I. resolvera lo que fuere servido, exerçitando nuestra obediencia en su obsequio.

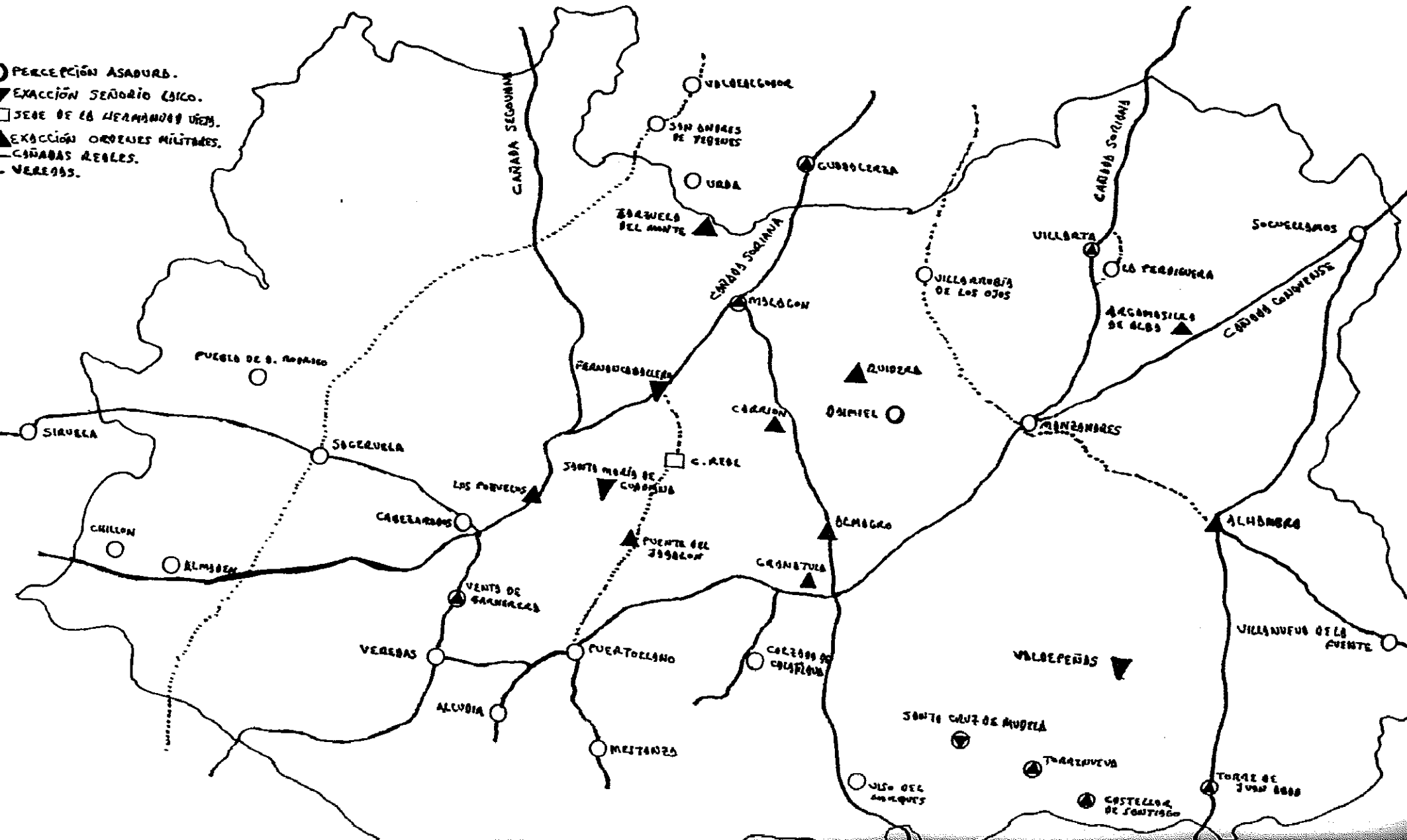
Nuestro Señor guarde a V.S.I. dilatados años. Ciudad Real y Abril 10 de 1762.

12.2 ORGANIGRAMA JERARQUICO INSTITUCIONAL Y PERSONAL DEL SANTO TRIBUNAL MANCHEGO

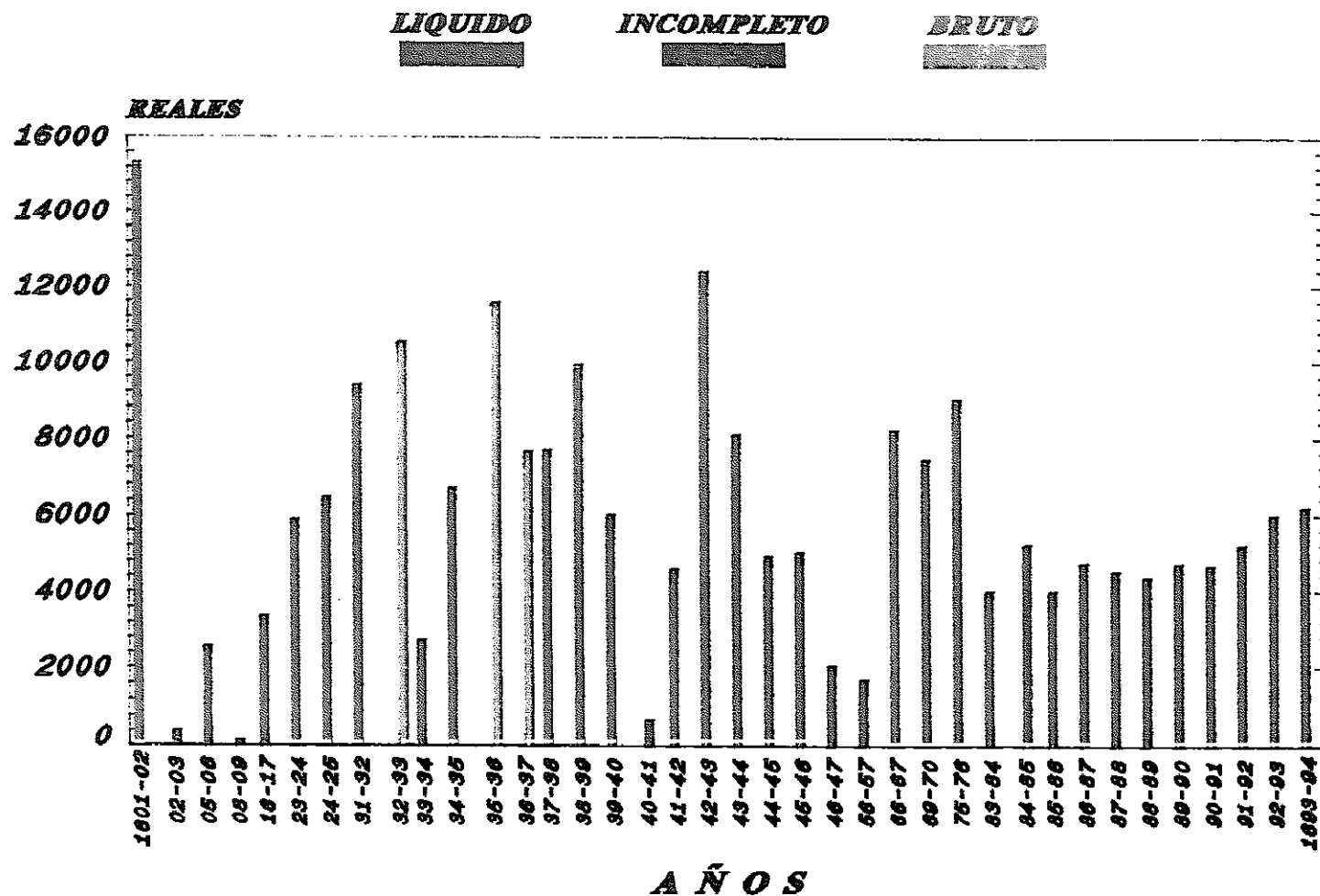


LUGARES DE EXACCIONES PECUARIAS

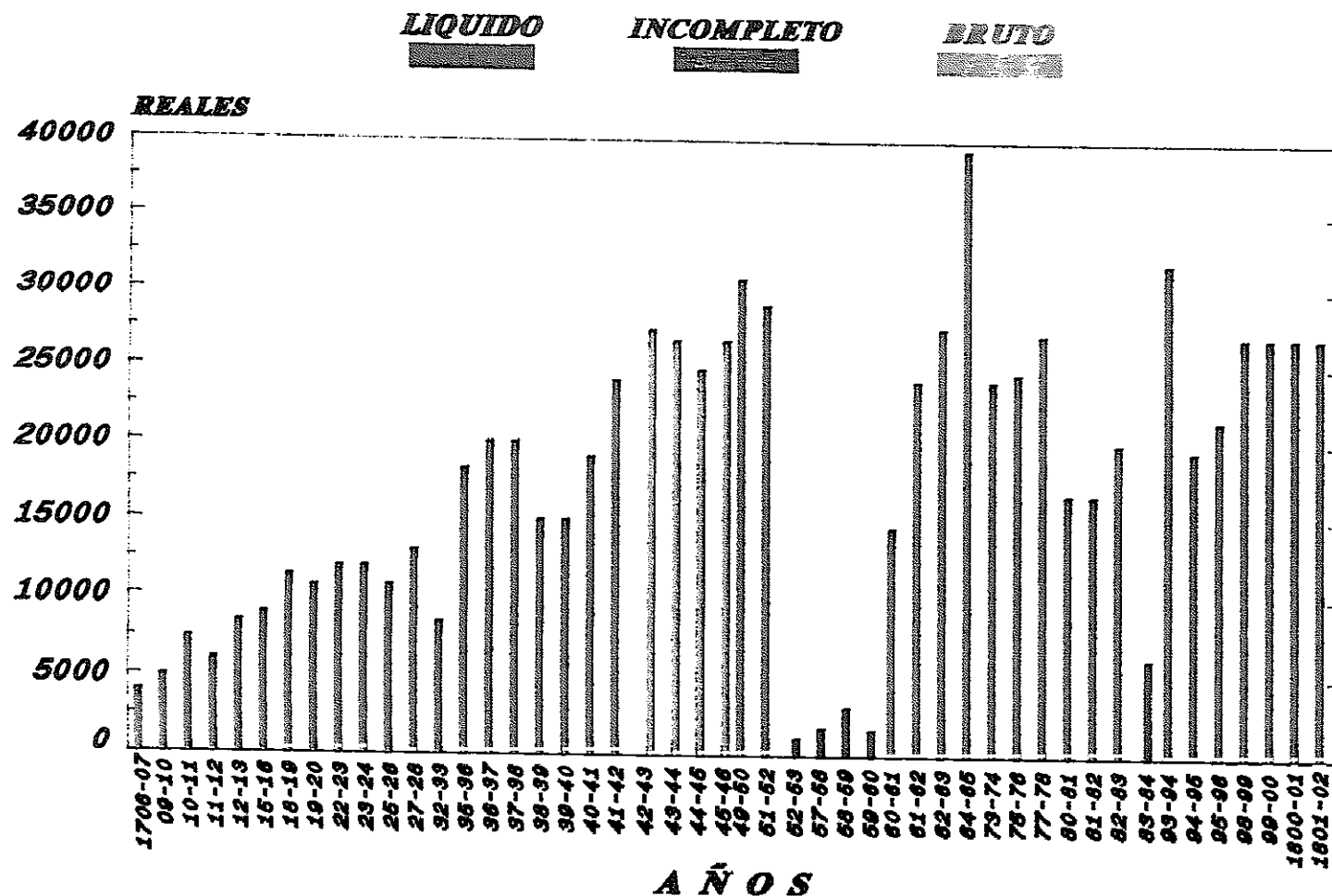
- PERCEPCIÓN ASABUR.
- EXACCIÓN SEÑORIO (SICO).
- SEDE DE LA HERMANDAD UZUR.
- EXACCIÓN ORDENES MILITARES.
- CANABAS REALES.
- VEREGAS.



12.4. GRAFICA EVOLUCION PERCEPCION DE LA ASADURA SIGLO XVII



12.4. GRAFICA EVOLUCION PERCEPCION DE LA ASADURA SIGLO XVIII



12.4 EVOLUCION PERCEPCION DE LA ASADURA

S. XVII	Importes	S. XVIII	Importes
1601-02	15328,00	1706-07	4000,00
1602-03	406,00 *	1709-10	4950,00
1605-06	2550,00 *	1710-11	7416,00
1608-09	144,00 *	1711-12	6000,00
1616-17	3354,40	1712-13	8500,00
1623-24	5882,00	1715-16	9000,00
1624-25	6447,00	1718-19	11300,00
1631-32	9366,00	1719-20	10600,00
1632-33	10513,19 **	1722-23	11900,00
1633-34	2720,17	1723-24	11900,00
1634-35	6685,25	1725-26	10660,00
1635-36	11562,14 **	1727-28	13000,00
1636-37	7631,00 **	1732-33	8500,00
1637-38	7673,50	1735-36	18200,00
1638-39	9920,17	1736-37	20000,00
1639-40	6000,00	1737-38	20000,00
1640-41	690,00 *	1738-39	15000,00
1641-42	4564,20	1739-40	15000,00
1642-43	12391,50	1740-41	19000,00
1643-44	8075,30	1741-42	24000,00
1644-45	4900,00	1742-43	27346,26 **
1645-46	5000,00	1743-44	26622,22 **
1646-47	2042,00	1744-45	24725,00 **
1655-57	1700,00	1745-46	26631,17 **
1666-67	8200,00	1749-50	30695,26
1669-70	7400,00	1751-52	28960,25
1675-76	9000,00	1752-53	1200,00 *
1683-84	4000,00	1757-58	1875,00 *
1684-85	5212,17 *	1758-59	3125,00 *
1685-86	4000,00	1759-60	1800,00 *
1686-87	4717,25	1760-61	14505,24
1687-88	4500,00	1761-62	24000,00
1688-89	4350,00	1762-63	27500,00
1689-90	4700,00	1764-65	39395,10
1690-91	4650,00	1773-74	24000,00
1691-92	5200,00	1775-76	24531,11
1692-93	6000,00	1777-78	27100,00
1693-94	6200,00	1780-81	16653,18
		1781-82	16635,80
		1782-83	20000,00
		1783-84	6262,00 *
		1793-94	31833,11
		1794-95	19500,00
		1795-96	21500,00
		1798-99	27000,00
		1799-00	27000,00
		1800-01	27000,00
		1801-02	27000,00

Sin asterisco : Importe líquido.

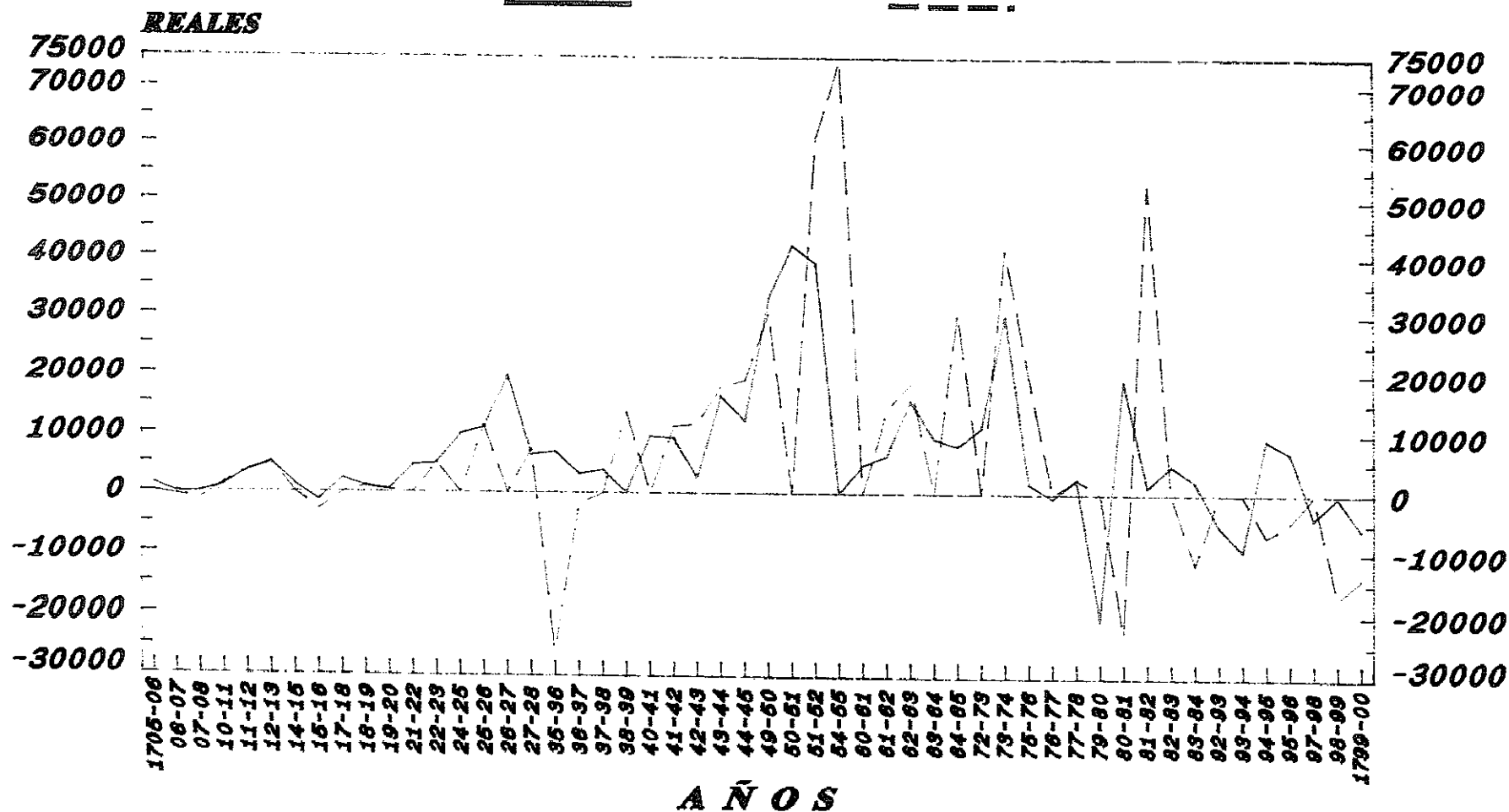
Un asterisco : Importe incompleto.

Dos asteriscos : Importe bruto.

13.6. EVOLUCION DE LOS BALANCES CONTABLES SIGLO XVIII

**DATOS
INSTITUCIONALES**

**ELABORACION
PROPIA**



PERIODO	INGRESOS						GASTOS										DEBITOS	PRESTAMOS	
	ASADURA	RENTAS INMOBIL.	SUPER-AVITS	INCAUTACIONES	PENAS PECUNARIAS	OTROS	NOMINAS- DERECHOS	COMPRAS Y PROPIOS	ADMIN. DE JUSTICIA	DEFICITS	CENSOS	ACTOS LITURGICOS	SOCORROS	ELECCIONES	ASADURAR	AGUINALDOS	OTROS	DEBITOS- IMPAGOS	PRESTAMOS
1597-98							1298,13	1819,04	8228,11			361,00	200,00	30,30	200,00				
1600-01							1089,09	24,00	2478,04	156,04		388,00	132,00	118,00			22,00		
1602-03			479,00				3790,07	72,00	20276,00			1310,00	358,00	273,00	81,08	605,00	228,17	+406,00	
1603-04							3644,00	1289,00	8294,09			1440,17	236,07		1225,14	6243,17	275,02		
1606-07							1883,14	27,17	5446,33			1003,17	154,00	110,00	301,00		86,00	+66,01	
1608-09	144,00		2804,02				2063,13	802,24	2001,17			1505,00	220,00	931,00	211,00	286,00			
1609-10							3070,05	691,00	8090,20			1687,08	240,00	168,00	1009,00	276,00	40,00		
1610-11							2934,04	231,00	6398,11	1279,06		1733,17	316,00	183,05	877,04	372,00	253,20		
1611-12			941,10				1911,05	29,00	8246,05			3031,20	250,00	740,00	804,03	244,00	198,02		
1612-13			817,00				1265,07	993,17	3252,04			1196,00	400,00	188,00	132,03	1031,00	296,02		
1616-17	3354,4(?)		4032,20				1234,07	13,00	204,00			598,00	200,00	190,00	168,00		48,00	+1325,02	+2500,00
1617-18							870,05	206,00	110,00			444,00	300,00	244,00	132,00	126,00			
1618-19							3610,09	293,00	1316,00			1505,17	305,00			300,00	15,00		
1631-32	9366,00	331,15		191,00	88,23	211,17	2876,25		4425,00	1258,00	220,20		588,04	271,17	1125,23	164,00	350,00		
1632-33	10513,19	6083,00	594,00				3040,10	1192,17	1891,30		210,00		678,00	188,30	1289,00	360,00	155,14	+512,00	
1633-34	2720,17	4949,26	594,00	966,17	50,00	564,20	940,11	577,17	2522,00		110,00		400,00	331,08	408,24	419,00		+512,00	
1634-35	6509,25	462,19		460,00			1856,17	807,00	1965,07		110,00		248,00	302,00	1026,14	330,00	98,00		
1635-36	11562,14	448,12		1544,00	29,12	86,00	2595,25	107,00	3629,09		110,00		300,00	294,00	3123,08	417,00	1584,00	+1035,08	
1636-37	7631,00	407,21					3146,00	388,00	2353,19		92,17		688,00	338,00	912,08	808,07	179,19	+9,15	
1637-38	9673,05	397,12		878,00	29,12		1961,18	1480,00	9809,02		17,00		698,00	246,00	294,03	619,00	154,00	+728,32	
1638-39	9920,17	417,04		109,00	105,25		1707,10	169,00	2262,00	196,08	220,00		900,00	785,00	188,00		132,00		
1639-40	6000,00	320,17	7607,21				1282,00	3431,03	3123,14				650,00		338,00	700,00	1902,00		
1640-41	690,00	15008,00	413,19			180,00	280,00	484,00	1660,00								864,20	+308,23	
1641-42	4564,02		137,20	201,00	537,19		1412,14	707,14	1200,20		420,00	408,00	522,00	266,00		640,00	242,00	+854,15	
1642-43	12391,05	419,00		1831,22			1334,00		6888,00	546,27		684,00	639,00	196,00	446,00	684,00	80,00	+290,00	
1643-44	8075,03	445,18	361,15	300,00	354,00	324,00	1284,20	196,00	2499,13			637,00		224,00		674,00	683,00	+269,00	
1644-45	4900,00	339,20					677,19		2801,18			513,17	585,00			468,00	5063,32		
1645-46	5000,00	264,21					913,05	472,00	209,12				515,00	264,21		432,00	110,00	+2237,14	
1666-47	8200,00	584,00		1000,00			1716,00		7620,00	300,00	110,00	165,00		246,00	150,00		475,00		
1669-70	7400,00	650,00	500,00	1640,00		75,00	1550,00	331,00	5424,17		110,00	132,00	100,00	294,00			530,00	+250,00	
1675-76	9000,00	1157,00	3822,00			2356,00	1162,00	1318,00	7127,00		2212,00	205,00	600,00	330,00			106,00	+6672,00	
1683-84	4000,00	534,32		937,00			1653,00		3455,00			67,00	12,00	270,00		360,00	100,00	+5383,32	
1684-85	5212,17	125,00		1952,00			1727,25	4,00	2753,07	58,00	4,00	100,00		300,00		486,00		-93,00	
1685-86	4000,00			350,00			1178,00	894,17	6782,00				90,00	370,00		538,00	354,00	+12481,17	
1686-87																		-1842,00	
1686-87	4712,25	215,17		1760,00		310,00	1617,17	7,17	3465,00			90,00	37,17		791,00	480,00		+4205,00	
1687-88	4500,00	125,28		1680,00			2021,00	4,00	3211,17			109,00		330,00		480,00	86,00	+4745,00	
1688-89	4350,00	300,28	47,00	1796,00			2606,00	337,00	2662,00			94,00		330,00		444,00	281,00	+4745,00	
1689-90	4700,00	255,00		1875,00			1821,00	268,00	3611,24			96,00	98,00	330,00		442,00	240,00	+4725,00	
1690-91	4650,00	441,00		662,00		344,00	1614,00	73,00	4017,20			94,00						+4755,00	
1691-92	5200,00	310,00		70,00		80,00	1356,00	1240,00	2689,00			96,00	65,00			368,00		-87,00	
1692-93	6000,00	350,00	227,00	987,00		240,00	1019,00	293,00	4415,17			94,00	450,00			396,00	50,00	+4753,00	
1692-94	6200,00	487,00	566,00	4372,00		400,00	2646,00	68,17	11822,17									-305,00	
1692-94	6200,00	487,00	566,00	4372,00		400,00	2646,00	68,17	11822,17									-305,00	

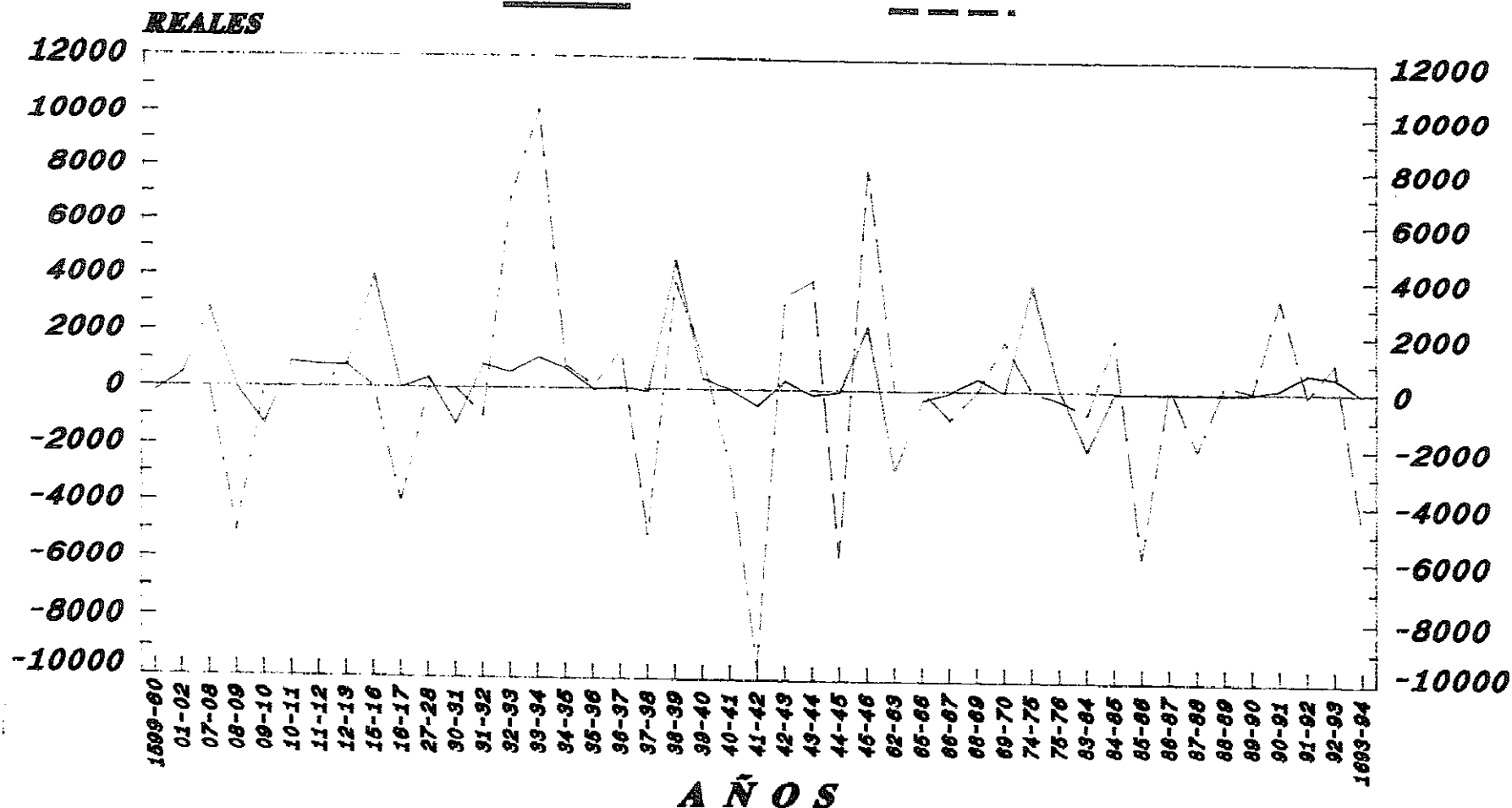
DESGLOSE DE INGRESOS Y GASTOS
(en reales de vellón y maravedís)

PERIODO	INGRESOS						GASTOS										DEBITOS	PRESTAMOS	
	ASADURA	RENTAS IMMOBIL.	SUPER-AVITS	INCAUTACIONES	PENAS PECUNIARIAS	OTROS	NOMINAS-DERECHOS	COMPRAS Y ADMON. DE PROPIOS	ADMN. DE JUSTICIA	DEFICITS	CENSOS	ACTOS LITURGICOS	SOCORROS	ELECCIONES	ASADURAR	AGUINALDOS	OTROS	DEBITOS-IMPAGOS	PRESTAMOS
1706-07	4000,00	451,00	1373,00	592,05			1472,00		4636,00			96,00		300,00		456,00	50,00		
1707-08				1231,00			848,00		884,17								711,00		
1710-11	7416,00	264,00		80,00			1454,00	51,00	3587,00			94,00		300,00		528,00	306,00	+3744,00	
1711-12	6000,00	302,00	9706,00	1894,17			1628,00	407,00	1929,00			94,00		337,00		660,00	190,00	+3517,00	
1712-13	8500,00	270,00	3727,00				2025,00	172,00	4381,00			106,00		168,00		504,00			
1715-16	9000,00	270,00	1242,00	288,00			2327,17	2534,17	7133,17			94,00		307,00		600,00	150,00	+1191,00	
1718-19	11300,00		2363,13	700,00			1788,20	6119,31	3883,10			94,00		400,00	384,00	686,00	90,00	+1437,00	
1719-20	10600,00	138,00	256,00	490,00			1722,00	3796,24	4298,00			106,00		400,00		686,00	90,00	+4053,00	
1722-23	11900,00	375,00	4662,00	182,00	44,04		2511,00	503,00	7978,24			94,00		405,00		616,00	90,00	+5055,00	
1725-26	10660,00	108,00	9915,03				2431,00	918,17	4952,17			106,00		415,24		616,00	90,00	+4558,00	
1727-28	13000,00	332,00	10676,00	1030,00	255,00		4112,00	2240,17	7034,00		3000,00	106,00		441,00		840,00	90,00	+1308,00	
1735-36	18200,00	570,00		1433,17			27822,22	892,00	16494,00			150,00		421,22	667,00	770,00	150,00	+1389,00	
1736-37	20000,00	387,00		1405,26	330,00	1200,00	4457,00	341,00	7624,00	7075,22		108,00		521,00	3409,80	770,00	90,00	+1383,00	
1738-39	15000,00	908,24		300,00			4617,27	994,00	5576,10	3956,31		100,00		750,00	460,00	785,00	350,00	+1383,00	
1741-42	24000,00	432,00	9664,17	335,00			4284,10	253,00	15362,00			120,00		420,00	1590,00	900,00	210,00	+2182,12	
1742-43	27346,26	432,00	9317,32	2075,00			3675,00	9757,17	4617,03			194,00		691,12	1076,00	700,00	2039,00	+6357,00	+4502,00
1743-44	26622,22	443,00	2554,00				2832,00	305,17	2935,17			112,00		585,00	4184,19	620,00	210,00	+1469,00	
1744-45	24725,00	427,00	6393,04	2570,00			3162,00	3286,00	9599,00			102,00		575,00	7504,16	560,00	254,30	+442,00	
1745-46	26631,17		60253,21				2737,08	124,00	1681,00			122,00			6033,14	980,00		+22780,05	
1749-50	30695,26	339,00	24556,09				5580,00	144,00	6566,17		3000,00	114,00		524,00	4466,00	770,00	90,00	+1964,24	+9660,00
																		+5895,21	
1751-52	28960,25	369,00	42263,23			10248,06	11922,18	45,00	6622,08			195,27		544,00	84,00	980,00		+28000,20	
1761-62	14505,24	185,00	4316,03	260,00		43208,20	1603,04	18375,13	26190,31			149,00		686,22		727,00	132,00	+572,00	+4681,17
1762-63	27500,00	317,00	6538,17			8000,00	5914,20	4511,00	10865,00			152,00		650,00		440,00	1084,00	+447,00	
1764-65	39399,10	397,00	9376,24	500,00		18,00	3714,00	528,00	12628,10			149,00		669,10	126,00	1013,17	120,00	+7430,17	
1773-74	24000,00	322,00	11298,07			21789,16	9037,11	914,00	24995,26			153,00			1348,00			+24000,00	
1775-76	24531,11						7696,00	512,30	24201,23			261,00		417,24	366,00	1532,00		+19064,16	
1777-78	27100,00	376,00		27229,00			10674,16	988,25	37493,26	727,00		265,00				1890,00		+19064,16	
1780-81	16653,18	381,00				5900,00	8691,00		15946,08	20838,30		261,00					120,00	+24505,16	
1781-82	16635,08	383,00	19064,00	180,00	1500,00	35924,00	6607,00		11832,17			261,00					1783,24		
1783-84	6262,00	381,00	4971,26	4161,00			12746,30	818,09	7242,27		246,00	261,00						+14537,31	
1793-94	31833,11	403,00		1955,22			8363,00	2257,20	26224,17	5174,09		261,00			3300,11			+21942,07	
1794-95	19500,00	160,00					5584,00	475,00	10806,23	9490,00		261,00						+24895,19	
1795-96	21500,00			6530,00			9834,00	245,00	15604,11		48,00	261,00					80,00	+24955,28	
1798-99	27000,00	480,00		2254,31			8535,00	2856,21	14128,30	4000,00		261,00				300,00	9962,00	+25006,19	
																		-6864,02	
1799-00	27000,00	585,00					9443,00	4747,15	13504,28	13104,16		261,00				328,00		+25229,19	

13.6. EVOLUCION DE LOS BALANCES CONTABLES SIGLO XVII

**DATOS
INSTITUCIONALES**

**ELABORACION
PROPIA**



13.6 EVOLUCION DE LOS BALANCES CONTABLES

S. XVII			S. XVIII		
Datos	Elaboracion		Datos	Elaboracion	
Instituc.	Propia		Instituc.	Propia	
1599-00	-156,04		1705-06	1373,00	
1601-02	479,00		1706-07	-226,00	-593,22
1607-08	2804,02		1707-08		-1212,17
1608-09		-5071,06	1709-10	264,00	
1609-10	-1279,06		1710-11	1082,00	1485,00
1610-11	941,10		1711-12	3727,00	3434,17
1611-12	817,00		1712-13	4993,00	5041,00
1612-13	817,00	817,00	1714-15	1242,00	
1615-16	4032,21		1715-16	-1462,00	-2929,17
1616-17		-4032,02	1717-18	2363,13	
1627-28	400,00		1718-19	943,00	1027,00
1630-31	-1258,00		1719-20	397,17	385,11
1631-32	879,31	-989,26	1721-22	4662,00	
1632-33	594,02	6960,02	1722-23	5025,00	4965,31
1633-34	1158,11	10088,29	1724-25	9915,03	
1634-35	737,08	826,00	1725-26	11098,09	11264,13
1635-36		100,21	1726-27	19676,00	
1636-37	105,50	1413,05	1727-28	6399,00	7429,17
1637-38	-48,00	-5159,21	1735-36	7075,00	-25956,07
1638-39	4667,04	3823,00	1736-37	3079,29	-1636,00
1639-40	413,19	1091,06	1737-38	3956,31	
1640-41	27,70	-2677,01	1738-39		13663,17
1641-42	-546,27	-9671,11	1740-41	9664,17	
1642-43	361,15	3345,24	1741-42	9317,32	11292,16
1643-44	-158,00	3932,13	1742-43	2554,00	11797,07
1644-45	0,00	-5870,00	1743-44	16393,04	17835,04
1645-46	2307,04	7983,26	1744-45	12203,02	19072,08
1662-63	-2814,00		1749-50	32963,03	30461,07
1665-66	-300,00		1750-51	42263,23	
1666-67	10,02	-998,00	1751-52	39066,10	61358,01
1668-69	500,00		1754-55		74697,18
1669-70		1764,17	1760-61	4816,03	
1674-75	3822,00		1761-62	6538,17	14021,32
1675-76	95,32	-320,00	1762-63	15673,10	18634,15
1683-84	-2049,32	-802,02	1763-64	9376,24	
1684-85	0,00	1858,17	1764-65	8041,21	30558,31
1685-86		-5856,17	1772-73	11298,07	
1686-87	-14,24	209,09	1773-74	30124,19	41292,20
1687-88	0,28	-2035,11	1775-76	1730,09	19577,27
1688-89	0,28	301,28	1776-77	-727,00	
1689-90	19,00	24,00	1777-78	2567,21	2570,01
1690-91	208,00	3351,14	1779-80	-20838,31	
1691-92	743,00	-114,00	1780-81	19064,00	-23171,04
1692-93	596,00	1086,17	1781-82	1107,00	52934,11
1693-94	0,00	-4733,00	1782-83	4971,26	
			1783-84	2088,22	-11790,21
			1792-93	-5174,09	
			1793-94	-9490,28	
			1794-95	9416,17	-6950,11
			1795-96	7142,16	-4481,23
			1797-98	-4000,00	
			1798-99	-63,10	-17167,17
			1799-00	-5717,21	-13812,90

12.7. LISTADO DE ALCALDES, MAYORDOMOS Y DEPOSITARIOS (SS. XVII-XVIII).

<u>PERIODO</u>	<u>ALCALDES/TENIENTES</u>	<u>MAYORDOMO/DEPOSITARIO</u>
1589-90	Francisco de Céspedes Francisco Tribiño	-
1590-91	Francisco de Salazar	-
1593-94	Lorenzo Suárez de Figueroa Cardona Alonso Dávila Carrillo	-
1594-95	Pedro de Arriaga	-
1596-97	Pedro de Gámez Alexo García	-
1597-98	Fernando de Céspedes Cristóbal de Poblete Oviedo	Cristóbal Sánchez Aguado
1598-99	Francisco Correa Diego Mesía de Loaysa	-
1599-00	Juan de Salazar Pacheco Fernando Treviño	Gonzalo de Paredes
1600-01	Luis Bermúdez de Berrio Luis Correa de Loaysa	Francisco de la Serna
1601-02	Luis Correa de Loaysa Luis Bermúdez Treviño	-
1602-03	Cristóbal de Prado y Armenta Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa	Fco Serrano de Arévalo
1603-04	Juan de Torres Juan de Gámez	Cristóbal Sánchez Aguado
1604-05	Juan Carrillo (?)	-
1605-06	Juan Forcallo Carrillo Fernando Valdés	Fernando García del Río
1606-07	Sebastián de Arriaga Esquivel Pedro de Gámez	Fernando Pinedo
1608-09	Fernando Treviño Muñoz de Loaysa Juan del Forcallo y Carrillo	Fco Serrano de Arévalo/ Simón Romero
1609-10	Agustín Ruiz de Fuenteencalada	Pedro López Caballero

	Gabriel de Guzmán	
1610-11	Agustín Ruiz de Fuenteencalada Fernando Valdés Mendo Céspedes	Cristóbal Sánchez Aguado
1611-12	Pedro Treviño de Hoces Jerómino Bermúdez	Diego Martínez Huertas
1612-13	Francisco Mesía Cristóbal de Prado Armenta	Juan López de Brianda
1613-14	Fernando de Céspedes	-
1614-15	Antonio de Aguilera Luis Correa Loaysa	-
1615-16	Gabriel de Guzmán Pedro Treviño de Hoces	Fco Serrano de Arévalo
1616-17	Francisco Mesía Antonio de Aguilera	Francisco de Poblete
1617-18	Manuel Jedler/Melchor Fdez Treviño Antonio de Aguilera	Alonso Moreno de Ortega
1618-19	Sebastián de Arriaga Cristóbal Bermúdez/Gabriel de Guzmán	Fco Serrano de Arévalo
1622-23	Sebastián de Arriaga Esquivel Fernando de Valdés y Mendoza	-
1623-24	Pedro Ceballos Escobedo Jerónimo Bermúdez	-
1624-25	Luis Treviño Carrillo	-
1625-26	Fernando Triviño Muñoz de Loaisa Antonio de Berrio Salcedo	-
1626-27	Alonso de Céspedes Fernando Triviño Bermúdez de Loaisa	-
1627-28	Pedro Ceballos Escobedo Gabriel de Céspedes	-
1630-31	Francisco de Céspedes Fernando Triviño/Manuel Gedler	Francisco Quixada (?)
1631-32	Antonio de Aguilera Agustín Bermúdez Mesía de la Cerda	Gabriel de Padilla
1632-33	Francisco Treviño Carrillo Loaysa Luis Mesía de la Cerda	Esteban Cordobés (?)/ Gregorio de Córbova

1633-34	Juan Correa/Gabriel Muñoz de Prado Gonzalo Muñoz de Loaysa	Gregorio de Córdoba
1634-35	Gonzalo Muñoz de Loaysa Juan Correa Loaysa/ Pedro Saz Treviño	Gregorio de Córdoba
1635-36	Cristóbal Treviño Carrillo Gonzalo Muñoz de Loaysa	Cristóbal Rodríguez de Sotomayor
1636-37	Cristóbal Triviño Carrillo Gonzalo Muñoz de Loaisa	-
1637-38	Agustín Bermúdez Mesía de la Cerda Carneros	Cristóbal Sánchez de Jacinto Fernando de Céspedes los
1638-39	Agustín Bermúdez Mesía de la Cerda Manuel Xedler	Juan de Prado
1639-40	Cristóbal Treviño Carrillo Luis Bermúdez de la Cerda	Juan de Prado
1640-41	Cristóbal Treviño Carrillo Luis Bermúdez Mesía de la Cerda	Juan de Prado
1641-42	Andrés de Villaquirán Francisco Treviño Carrillo Loaisa	Cristóbal Sánchez de los Carneros
1642-43	Cristóbal Velarde Treviño Juan de Aguilera y Guevara	Cristóbal Sanchez de los Carneros/ Jacinto Fdez.
1643-44	Agustín Bermúdez García de Arriaga/Gómez de Aguilera	Francisco Sánchez
1644-45	Luis Bermúdez Mesía de la Cerda Cristóbal Treviño Carrillo	Juan de Prado
1645-46	Juan del Forcallo y Guevara Gonzalo Muñoz Treviño/Luis Bermúdez	Juan de Prado
1648-49	Cristóbal Velarde Juan Velarde Ceballos	-
1651-52	Francisco de Oviedo Gallego Cristóbal Bermúdez de Torres	-
1652-53	Juan Treviño de Loaysa Martín Bermúdez Mesía de la Cerda	-
1653-54	Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara Juan Cristóbal Velarde y Ceballos	-
1654-55	Diego Muñoz y Molina Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara	-

1655-56	Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara Diego Muñoz de Molina	-
1656-57	Juan de Aguilera Ladrón de Guevara Antonio Velarde Cevallos	-
1658-59	Gonzalo Muñoz de Loaisa Luis Treviño Carrillo	-
1659-60	Álvaro Muñoz de Figueroa Cristóbal Tribiño Bermúdez	-
1661-62	Cristóbal Treviño Carrillo Antonio Velarde Ceballos	-
1662-63	Juan Cristóbal de Velarde Ceballos Luis Treviño Carrillo	-
1663-64	Álvaro Muñoz de Figueroa Cristóbal Treviño/Fco Bermúdez Rivera	Martín de Torres
1664-65	Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara Diego Ramírez de Aguilera	-
1665-66	Juan de Aguilera y Guevara Francisco Treviño Bermúdez	-
1666-67	Luis Treviño Carrillo/Juan Jedler Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda	Juan de Salcedo
1668-69	Diego Muñoz y Molina Rodrigo Bermúdez de la Cerda	-
1669-70	Gonzalo Muñoz Treviño de Loaisa Juan de Aguilera Guevara/Fco Treviño	Cristóbal de Ureña
1670-71	Manuel Gédler Gámez/ José Torres Molina Gonzalo Muñoz Treviño de Loaysa	-
1671-72	Gómez de Aguilera	-
1672-73	Diego Muñoz y Molina	-
1673-74	Juan de Aguilera y Guevara Francisco Treviño Bermúdez	-
1674-75	Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda	-
1675-76	Francisco Bermúdez de Rivera Cristóbal Treviño Carrillo	Juan de Salcedo
1676-77	Antonio de Aguilera Ladrón de Guevara Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda	-

1677-78	Juan de Aguilera y Guevara Francisco Treviño Bermúdez de Rivera	-
1678-79	Juan de Aguilera Guevara	Martín de Torres
1679-80	Gómez de Aguilera Tribiño Guevara Francisco Treviño de Hocés	-
1680-81	Antonio de Aguilera y Guevara Diego Muñoz y Molina	-
1682-83	Francisco de Aguilera y Ureña Mesía Antonio Gedler Lisón y Gámez	-
1683-84	Cristóbal Treviño de Terán Flores Juan Triviño de Loaysa y Masa	Juan de Rojas
1684-85	Juan Lucas del Forcallo y Manzolo Antonio Damián de Aguilera	Cristóbal de Ureña
1685-86	Diego del Forcallo y Guevara Juan de Aguilera y Guevara	Dionisio de Palacios Calderón
1686-87	Álvaro Muñoz de Figueroa Antonio Xedler Lisón y Gámez	Juan de Rodas
1687-88	Cristóbal Treviño Guarnizo Cristóbal Velarde y Céspedes	Eugenio de Almansa
1688-89	Manuel Xedler Lisón y Gámez Antonio Ramírez Aguilera	Eugenio de Almansa
1689-90	Pedro Gómez Treviño Dávila Diego Forcallo y Guevara	Juan Durán
1690-91	Francisco de Aguilera Ureña Mesía Antonio Xedler Lisón y Gámez	Alfonso Ximénez Pimentel
1691-92	Cristóbal Fco Treviño Guarnizo Gómez de Aguilera y Guevara	Juan de Poblete
1692-93	Cristóbal Treviño y Guarnizo Gómez de Aguilera y Guevara	Juan de Poblete
1693-94	Luis Treviño Dávila Francisco Treviño Bermúdez y Castro	Francisco de Plaza
1694-95	Álvaro Lorenzo Muñoz de Figueroa Rodrigo Bermúdez Mesía de la Cerda	-
1695-96	Gaspar Sancho Barona y Loaysa Manuel Jedler Lisón y Gámez	-

1696-97	Antonio de Jédler Lisón y Gámez Cristóbal Velarde y Céspedes	-
1697-98	Manuel Xédler Lisón y Gámez Gaspar Sancho Barona	-
1698-99	Juan Francisco Treviño Castro y Bermúdez	-
1699-00	Álvaro Muñoz de Figueroa Francisco Treviño Castro y Bermúdez	-
1700-01	Antonio Xédler Lisón y Gámez Francisco Triviño Guarnizo	-
1701-02	Juan Francisco Velarde Zéspedes Gaspar Sancho Barona y Loaisa	-
1702-03	Juan Francisco Velarde Zerbantes Juan Triviño de Loaisa	-
1703-04	Manuel Xédler Lisón y Gámez	-
1705-06	Cristóbal Velarde y Céspedes Juan de Aguilera Pretel	-
1706-07	Juan Treviño Loaisa y Masa Juan Francisco Velarde Bermúdez	Juan de Camborda Francisco Serrano
1707-08	Juan Treviño Loaisa y Masa Francisco Velarde Castro Bermúdez	-
1708-09	Gómez Treviño Dávila Gaspar Sancho Barona	-
1709-10	Juan de Aguilera Pretel Diego Muñoz y Torres	-
1710-11	-	Juan Isidro Granados
1711-12	Juan Francisco Velarde Bermúdez Gaspar del Forcallo y Heredia	Juan Isidro Granados
1712-13	Antonio de la Cruz Bermúdez Francisco Triviño Calderón de la Barca	Juan Isidro Granados
1713-14	Gaspar Sancho Varona y Loaysa Francisco Treviño de Castro Bermúdez	Juan Isidro Granados
1714-15	Juan Franciscio Velarde Biedma Agustín Bermúdez de la Torre	-
1715-16	Luis Ledesma Salazar Juan Francisco Velarde y Biedma	-

1716-17	Gaspar Sancho Barona Gaspar del Forcallo y Heredia	-
1717-18	Luis Ledesma Salazar Juan Lucas del Forcallo y Manzolo	Juan Isidro Granados
1718-19	Luis Ledesma Salazar Juan Lucas del Forcallo y Manzolo	Juan Isidro Granados
1719-20	Diego Julián López de Haro y Osma Francisco Treviño y Castro	-
1720-21	Francisco Triviño Calderón de la Barca Diego Zapata Carbajal y Rocha	-
1721-22	Francisco de Cárdenas Treviño Antonio de la Cueva y Bermúdez	-
1722-23	Gaspar Sancho Barona Juan Treviño de Cárdenas	Juan Isidro Granados
1723-24	Álvaro Muñoz y Torres Luis Velarde y Viedma	José Fernández Durán
1724-25	Tomás de Aguilera Enríquez de los Ríos Fernando de Aguilera	-
1725-26	Juan Muñoz de Loaisa y Campo Tomás de Aguilera Enríquez de los Ríos	Juan Isidro Granados
1726-27	Francisco Treviño Calderón de la Barca Diego Zapata Carbajal y Rocha	-
1727-28	Gaspar del Forcallo y Heredia Álvaro Muñoz y Torres	-
1728-29	Gaspar Sancho Barona Tomás de Aguilera y de los Ríos	Juan Isidro Granados
1730-31	Francisco de Cárdenas Treviño	-
1731-32	Gaspar Sancho Barona y Loaysa Álvaro Muñoz y Torres	Juan Isidro Granados
1732-33	Gaspar Sancho Barona Luis José Velarde y Biedma	-
1733-34	Luis Antonio Treviño Carbajal Tomás de Aguilera y de los Ríos	-
1734-35	Narciso de la Cueva y Forcallo	-
1735-36	Pedro Treviño y Baillo Diego Muñoz y Vera	Fco de Torres Aguila

1736-37	Francisco de Cárdenas y Treviño Álvaro Muñoz y Torres	Fco de Torres Aguila
1737-38	Francisco Calderón de la Barca José Velarde Muñoz	-
1738-39	Gaspar Sancho Barona Juan Tomás Velarde y Muñoz	Fco de Torres Aguila
1739-40	Francisco Rodríguez Ledesma Juan Tomás Velarde y Muñoz	Fco de Torres Aguila
1740-41	Gaspar del Forcallo y Heredia	-
1741-42	Gaspar del Forcallo y Heredia Marqués de Peñafuente	Juan Isidro Granados, el menor.
1742-43	Narciso de la Cueva y Forcallo Bernardino de Loaisa	-
1743-44	Diego Julián López de Haro y Osma -	Juan Isidro Granados, el menor.
1744-45	Francisco Treviño -	Juan Isidro Granados, el menor
1745-46	Juan Tomás Velarde y Treviño Diego Muñoz y Vera	-
1746-47	Álvaro Muñoz y Torres	-
1747-48	Luis Treviño Carbajal Joaquín de Cárdenas y Robles	-
1748-49	Bernardino Muñoz de Loaisa Diego Julián López de Haro	-
1749-50	Luis Velarde y Biedma Francisco Rodríguez de Ledesma	Juan Isidro Granados, el menor.
1750-51	Francisco Treviño Calderón Barca José Velarde y Muñoz	Juan Isidro Granados, el menor
1751-52	Gaspar del Forcallo y Heredia José Velarde y Muñoz	Juan Isidro Granados, el menor
1752-53	Luis Cristóbal Velarde Luis Triviño Carbajal	-
1753-54	Gaspar Sancho Barona Gijón Pacheco Álvaro Muñoz y Torres	-
1754-55	Francisco Rodríguez de Ledesma	Juan Isidro Granados,

	-	el menor
1755-56	Francisco Rodríguez Ledesma Juan del Forcallo y Aguilera	-
1756-57	Luis José Velarde y Biedma Luis Antonio Treviño y Carbajal	-
1758-59	Diego Muñoz y Vera Joaquín José de Cárdenas Treviño	Juan Bernardo Granados
1759-60	José Luis Velarde y Biedma José Velarde y Muñoz	Juan Isidro Granados, el menor
1760-61	Francisco Rodríguez de Ledesma Miguel de Fuentes Beraet	-
1761-62	Pedro Treviño de Baillo Miguel de Fuentes Beraet	Félix Eugenio de León
1762-63	Luis Antonio Treviño Luis Treviño Carbajal	Félix Eugenio de León
1763-64	Luis Treviño Carbajal Álvaro Muñoz y Teruel	Félix Eugenio de León
1764-65	-	Félix Eugenio de León
1765-66	Diego Muñoz y Vera Francisco Rodríguez de Ledesma	-
1766-67	Luis José Velarde y Biedma Gaspar del Forcallo y Aguilera	-
1767-68	Álvaro Muñoz y Teruel	-
1768-69	Luis José Velarde y Viedma	-
1769-70	Gaspar del Forcallo y Aguilera Pedro Muñoz de Teruel	-
1771-72	Antonio de Fuentes Beraet	-
1773-74	-	Sebastián Gómez Comino
1774-75	Miguel de Fuentes Beraet	-
1776-77	Álvaro Maldonado Treviño Salcedo	Sebastián Gómez Comino
1777-78	Álvaro Maldonado Treviño	Sebastián Gómez Comino
1778-79	Álvaro Muñoz y Teruel Álvaro M ^a Maldonado Treviño	-

1780-81	-	Sebastián Gómez Comino
1781-82	Álvaro Muñoz de Teruel Gaspar del Forcallo Aguilera	Sebastián Gómez Comino
1782-83	Álvaro Muñoz y Teruel Gaspar del Forcallo Aguilera	Jerónimo Soriano
1783-84	-	Jerónimo Soriano
1792-93	Álvaro Muñoz y Teruel Juan Regis Hidalgo	-
1793-94	Álvaro Mesía de Maldonado Julián Alarcón Treviño	Jerónimo Soriano
1794-95	Álvaro Maldonado y Treviño Teruel	Jerónimo Soriano
1795-96	Gaspar Monroy y Castillo	Jerónimo Soriano
1796-97	Álvaro Muñoz de Teruel Diego Bartolomé Dávila Mirabal	Jerónimo Soriano
1797-98	Diego Muñoz y Pereiro	Jerónimo Soriano
1798-99	Diego Muñoz Pereiro Juan Regis Hidalgo	-
1799-00	Gaspar Monroy Juan Regis Hidalgo	Juan Cruz Catalán

12.8. REPERTORIO DE CONFLICTOS JURISDICCIONALES.

<u>PERIODO</u>	<u>LITIGANTE</u>	<u>CAUSA DEL CONFLICTO</u>	<u>RESOLUCIÓN</u>
1589	Alcaldes Luciana	Prender cuadrilleros	+
1590	Corregidor Ciudad Real	Injerencia en asuntos apícolas	+
1594-15	Gran Prior San Juan	Inmiscuirse en pleitos	+
1597-98	Justicia Martos	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1599	Corregidor Ciudad Real	Incoar causa a mayordomo	+
1600-03	Gobernador Alcázar	Injerencia en pleitos	+
1601	Justicia Calzada Cva	Impedir quejas de vecinos	?
1601	Alcalde mayor Torralba	Prender a guardas de campo	?
1602-03	Autoridades Piedrabuena	Inhibir a Hermandad en incendio	?
1602-03	Gobernador Malagón	Retener causa de pirómanos	+
1602-03	Tte.gobernador Abenojar	Proteger crímenes de pariente	+
1602-04	Gobernación Almagro	Retener reos y autos	+
1603	Alcaldes Quero	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1603-04	Alcaldes Cerral Cva	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1603-04	Corregidor Belmonte	Retener cómplices de reo	?
1603-04	Justicia Viso Marqués	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1603-04	Justicia Manzanares	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1603-04	Justicia Miguelturra	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1603-04	Gobernador Almagro	Detener a cuadrillero	+
1605	Justicia Alcázar	Vejar a comisario	-
1606-07	Gobernador Almodóvar	Detener a recaudador asadura	+
1608-09	Alcaide minas Almadén	Retener reo de hermandad	+
1608-09	Justicia Alcolea	Inhibir a Hermandad Vieja	?

1608-09	Alcalde Piedrabuena	Prender cuadrillero	?
1608-09	Justicias Villafranca	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1608-09	Autoridades Daimiel	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1609-10	Alcaldes Corral Cva	Prender escribano hermandino	+
1609-10	Clérigos de Ballesteros	Impedir prisiones	+
1609-11	Justicia Miguelturra	Retener homicida	+
1610	Gobernador Alcázar	Prender comisario	+
1610	Alcalde mayor Almadén	Despojar autos criminales y reo	+
1610-11	Justicias Almagro	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1610-11	Autoridades Daimiel	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1610-11	Justicia Calzada Cva	Vejar partida hermandina	+
1612	Corregidor Baeza	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1612	Alcalde mayor Membrilla	Prender cuadrillero en yermo	+
1613-16	Corregidor Ciudad Real	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1616-17	Gobernadores de Villarrubia y Alcázar	Prender a ministros hermandad	?
1616-17	Alcalde ordinario Moral	Quitar gitanos a cuadrilleros	+
1621-24	Justicias andaluzas	Cuestionar poder subdelegar	+
1622	Hermandad Nueva Almagro	Arrogarse jurisdicción y reos	+
1623	Justicias Daimel	Cuestionar jurisdicción	-
1623	Alcaldes El Moral	Impedir denuncias de vecinos	+
1624	Justicia Lucena	Conculcar privilegios	+
1624	Alcalde Vélez-Málaga	Vejar a ministros hermandinos	+
1626	Gobernador Almagro	Cuestionar jurisdicción en Cva	+
1626	Justicias Archidona	Vejar a ministros hermandinos	+
1627	Alcalde Gulema	Obstaculizar prisión de gitanos	+
1627	Corregidor Antequera	Obstaculizar captura cuatreros	+
1627-28	Alcaldes ordinarios	Prender cuadrillero y	+

	Castellar Santisteban	entorpecer diligencias	
1633-34	Corregidor Ciudad Real	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1633-34	Justicia El Toboso	Falta colaboración	?
1633-34	Alcalde mayor de Huete	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1635	Gobernador Almodóvar	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1635	Justicia Campo Criptana	Acumular autos criminales	-
1636	Alcalde Tinajas	Proteger tratos de gitanos	?
1636	Alcalde ordinario de Villaescusa de Haro	Despojar embargos	+
1637-38	Alcalde mayor Úbeda	Retener a un bandolero	+
1638	Justicia Puebla Alcocer	Falta de colaboración	+
1638	Señor de Picón	Retener gitanos detenidos	+
1639-40	Gobernador Alcázar	Obstaculizar sumaria	+
1642-43	Autoridades Chillón	Prender a un cuadrillero	?
1645	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1652	Alcalde Carrion	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1654	Justicias Piedrabuena	Despojo violento de reos	+
1656	Superintendente Almadén	Reclamar reo fugado	+
1659	Alcaide Guadalerza	Negativa a cooperar y amenazas	+
1662	Vicario Vva Infantes	Inmunidad local	+
1665	Corregidor Ciudad Real	Encarcelar alcalde hermandad	?
1666-67	Gobernador Almagro	Despojar embargos	+
1667	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local ladrón	?
1675	Gobernador Guadalupe	Retener reos hermandad	?
1678	Corregidor Ciudad Real	Acumular autos contra gitanos	?
1680	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local de gitanos	-
1680-81	Vicario Ciudad Real	Despojo asilo eclesiastico	-
1683	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local gitanos	+

1683	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local gitanos	?
1683-85	Audiencia Sevilla	Arrogarse primera instancia	?
1683-88	Vicarios C. Real/Toledo	Inmunidad local cuatrero	?
1684	Alcalde mayor Cañete	Retener gitanos detenidos	+
1684	Gobernador Almagro	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1684	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local ladrón	?
1684	Justicia Argamasilla	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1686-87	Corregidor Baeza	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1687	Gobernación Infantes	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1688	Justicias Caravaca	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1688	Alcaldes Herencia	Cuestionar validez elección	+
1688-89	Gobernador Almagro	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1691	Alcalde Santa Cruz	Entrometerse en caso hermandino	?
1692	Autoridades Lucena	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1692-95	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local homicida	-
1693-94	Vicario Vva Serena	Inmunidad local	?
1694	Corregidor Ciudad Real	Acumular autos contra bandido	?
1695	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1695	Vicario Montilla	Inmunidad local	+
1696	Vicario Infantes	Inmunidad local	+
1696-97	Vicarios C. Real/Toledo	Inmunidad local bandido	-
1698	Justicia El Moral	Acumular autos criminales	?
1700	Concejo Agudo	Intromisión en causa hermandina	+
1702	Alcalde mayor Lucena	Excusarse de prestar auxilio	-
1704	Vicario C. Real	Despojo de asilo	?
1705	Autoridades Baeza y marqués de la Rambla	Proteger gitanos	-

1705	Comisario Hermandad Vieja de Toledo	Prender ministro ciudarrealeño	?
1705	Justicia Antequera	Enjuiciar comisario venal	+
1706	Alcalde mayor Baza	Apadrinar gitanos	-
1706	Vicario Baza	Inmunidad local	-
1707	Alcalde ord. Azuaga	Inhibir a Hermandad Vieja	
1708	Capellán interino Hermandad Vieja	Proponer inmunidad local	?
1708	Alcaldes Arenas S. Juan	Demora de ayuda	+
1708	Alcalde Manzanares	Apropiarse causa de reo	-
1708	Tte. corregidor y vicario Linares	Inhibir a Santa Hermandad/ inmunidad local	-
1708	Vicario Orden Santiago	Inmunidad local	-
1708	Chancillería Valladolid	Cuestionar franquezas comisario	+
1708-09	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local salteadores	-
1709	Alcaldes Hurda	Tolerancia de gitanos	-
1709	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local prófugos	+
1710	Vicario Hinojosa Duque	Inmunidad local sacrílego	-
1710	Alcalde ordinario y escribano Chiva	Intromisión en causa hermandad	-
1711	Justicias Guadix y Villacarrillo	Inhibir Hermandad Vieja y apadrinar delincuentes	+
1712	Justicia Rus	Vejaciones a comisarios	?
1712	Alcaldes Valdepeñas	Vejaciones a comisario	+
1712(?)	Alguaciles Casa y Corte	Embarazar comisiones policiales	-
1714	Alcalde Mayor Infantes	Advocarse causa reo en tránsito	?
1715	Corregimiento Córdoba	Incautar armas a comisarios	-
1715	Corregidor Pto Sta Mª	Embarazar diligencias policiales	+
1715	Vicario Pto Sta Mª	Inmunidad local	+
1715	Justicias locales y	Apadrinar gitanos	-

conventos Baza

1715-16	Tte. corregidor Tobarra	Apadrinar gitanos	?
1716	Alcalde ordinario Teba	Despojar armas y rea hermandad	+
1716	Corregidor Ávila	Obstaculizar arresto	+
1716	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local	+
1717	Alcalde mayor Ronda	Prender comisarios por abusos	-
1717	Alcaldes Santa Cruz	Encausar a ministro superior	-
1717	Vicario Toledo	Inmunidad local	+
1717	Justicia Fuenteovejuna	Detener comisarios	+
1717-20	Alcalde mayor Ronda	Apadrinar gitanos/demorar autos	+
1717-25	Vicario Ciudad Real	Inmunidades locales sacrílego	-
1718	Alcaldes Niebla	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1718	Cabildo Alcohujate	Denunciar excesos de comisario	+
1718	Alcaldes Gibraleón	No prestar carcelajes	-
1718	Justicia Beas de Segura	Incautar armas e impedir captura	-
1718	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1718	Gobernador Daimiel	Proceder contra comisarios	-
1718-19	Alcalde mayor Cieza	Proceder contra comisario	+
1718-23	Corregimiento Ronda	Tolerancia de gitanos	+
1719	Audiencia Sevilla	Arrogarse primera instancia	-
1719	Gobernador Montánchez	Tolerancia a prófugo	?
1719	Alcaldes Casa y Corte	Prender supuesto comisario	+
1720	Alcaide/guardas Lillo	Pasividad en fuga de gitanos	+
1720	Ministros Hermandad Vieja de Toledo	Detener comisario por excesos	+
1720	Justicia Úbeda	Acumular pleito y fuga reo	+
1720	Alcalde ord. Pto Real	Injerencia en causa hermandina	+
1721	Justicias/notarios	Retener autos y fuga de reo	?

Puebla de Guzmán

1721	Alcaldes ord. Rute	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1721	Alcaide Porzuna	Evasión alcaide Marmolejo	+
1722	Justicia Cádiz	Onstaculizar tránsitos de reos	-
1722	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local gitanos	?
1722	Alcaldes ord. Lucena	Apadrinar sospechosos	-
1722	Justicias Gibráleón	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1723	Chancillería Granada	Reclamar causa criminal	-
1723	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local	-
1723	Vicario Almagro	Inmunidad local	+
1723	Alcalde Torre del Campo	Estafar a ministro superior	-
1723	Corregidor Ronda	Incautar armas y liberar reos	-
1723	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local	-
1723	Autoridades Peñalsordo	Protección a pariente indiciado	?
1723-25	Alcalde mayor Coca	Encubrir venta de bienes robados	?
1724	Pesquisidor Campo Cva	Injerencia en causa hermandad	?
1724	Corregimiento Andújar	Incautar armas a comisarios	-
1724	Justicia Cabezas Rubias	Protección de gitanos	-
1724	Alcalde mayor Uguíjar	Acumular pleitos criminales	-
1724(?)	Alcaldes Busquítar	Inhibir a Hermandad Vieja	-
1725	Gobernadores Miguelturra y Fernáncaballero	Injerencia en causa hermandad	?
1725	Chancillería Granada	Advocarse primera instancia	-
1725	Gobernador Vva Mesía	Apadrinar delincuente	-
1725	Chancillería Granada	Reclamar causa de parricida	-
1725	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local	-
1726	Justicia Hinojosa Duque	Intromisión en causa hermandina	?
1726	Audiencia Sevilla	Prender comisarios armados	?

1726	Justicia Guadalcanal	Apadrinar gitanos	?
1726	Arzobispo Toledo	-	?
1726	Justicia Guecija	Negativa a colaborar	+
1726	Alcalde mayor Sevilla	Incautar armas e impedir captura	+
1726-27	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local	-
1726-27	Audiencia Sevilla	Encausar a comisarios	-
1726-27	Justicia Utrera	Enjuiciar a ministros	-
1726-27	Notario Quintanilla	Falta coladoración con ministro	-
1727	Chancillaería Granada	Arrogarse substanciación causa	-
1727	Chancillería Granada	Advocar primera instancia	-
1727	Justicia Antequera	Apadrinar delincuentes	-
1727	Chancillería Granada	Reclamar gitano amancebado	-
1727	Alcalde mayor Castuera	Demorar cumplimiento título	+
1727	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1727	Justicia Quintanilla	Retener autos y vejar ministros	?
1727	Corregidor Gibraleón	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1727	Alcalde ord. Alcolea	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1727	Alcalde Alanís	Pasividad con reo emparentado	+
1727	Vicario Toledo y Chancillería Valladolid	Inmunidad local fugados de reales minas Almadén	+
1727	Alcaldes Castillejos	Vejar a comisarios comarcanos	-
1727	Justicias Villalba	Obstaculizar captura	-
1727	Alcalde Cazalla	Negar auxilio a comisarios	-
1727	Alcalde mayor Málaga	Entorpecer sumaria	+
1727	Audiencia Sevilla	Prender comisarios armados	-
1727	Tte. asistente Sevilla	Inhibir a Hermandad Vieja	-
1727	Alcaldes Úbeda	Encausar a juez comisario	-

1727	Gobernador y escribano Castrifinojo	Tolerancia hacia reo evadido	+
1727	Tte. corregidor Huelva	Proteger a deudo cuatrero	-
1727-28	Vicario Toledo y Chancilleria Valladolid	Inmunidad local gitanos	?
1728	Alguacil mayor Alanís	Entorpecer diligencias	-
1728	Justicia Gabaldón	Prender comisarios armados	+
1728	Alcaldes La Granja	Prender comisarios	+
1728	Justicia Villarubia	Prender comisario	-
1728	Alcaldes Juan Abad	Prender comisarios armados	+
1728	Gobernador Vva Serena	Tolerar gitanos y vagabundos	?
1728	Corregidor Carmona	Interceptar despachos	?
1728	Autoridades Utrera	Prender jueces-comisarios	+
1729	Autoridades Carmona	Incumplir pragmáticas gitanos	?
1729	Corregimiento Segovia	Impeler a comisarios a rondar	+
1729	Audiencia Sevilla	Prender comisarios armados	+
1730(?)	Justicia Andújar	Advocar causa de hermandad	+
1731-32	Alcaldes Alía	Prender comisarios	+
1732	Alcaldes Campillo	Acumular autos criminales	+
1732	Vicario Villaminaya	Inmunidad local gitano	+
1732-34	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local gitano	?
1733	Vicario Villajoyosa	Inmunidad local cuatrero	?
1733	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local gitano	-
1736	Escribano Garlitos	Excusar colaboración	?
1736	Vicario Ciudad Real	Inmunidad local bandido	+
1739	Justicia Pozo Estrecho	Obstaculizar prisión de gitanos	+
1741	Vicario Los Pedroches	Inmunidad local gitanos	?
1741	Vicario Cádiz	Inmunidad local forzado	+

1742	Alcaldes Casa y Corte	Arrogarse primera instancia	-
1745	Vicario Écija	Inmunidad local cuatrero	?
1747	Justicia Urda	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1752	Gobernador Agudo	Injerencia en causa hermandad	?
1752	Autoridades Luciana	Proteger sospechoso homicidio	-
1753	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1761	Tomás de Sierra (?)	Desacato a comisarios	+
1761	Regimiento Igualeta	Desaconsejar concesión título	-
1762-63	Justicia Vva Arzobispo	Inhibir a Hermandad Vieja	-
1764	Chancillería Granada	Arrogarse primera instancia	-
1766	Alcalde mayor Úbeda	Enjuiciar a comisario venal	-
1768	Justicia Linares	Vajaciones a comisarios	-
1771	Alcalde Bujalance	Sospecharse de alcalde ord.	-
1773	Alcalde Villacarrillo	Acumular autos criminales	+
1776	Gobernador Cádiz	Vejaciones a comisarios	-
1776	Alcalde Cádiz	Vejaciones a ministros	-
1776-79	Alcalde Talavera Real	Despojar de títulos y comisiones	-
1777	Alcalde ord. Linares	Encausar a comisario	+
1777	Alcalde ord. Siruela	Impedir uso de jurisdicción	+
1777	Corregimiento Coín	Prender comisario	?
1780	Alcalde Jerez Frontera	Vejaciones a comisarios	+
1781-82	Corregidor de Huete	Incautar título a comisario	+
1782	Justicia Villafranca	Inhibir a Hermandad Vieja	+
1796	Intendente Ciudad Real	Retener a cómplices de ladrón	+
1796-97	Gobernador Mil. Málaga y alcalde mayor Estepa	Inhibir a Hermandad Vieja	?
1797	Justicia Estepa	Encausar comisario venal	-
1797	Alcalde mayor Estepa	Ostaculizar salida preventiva	-

s.XVIII	Alcades Miguelturra	Pasividad daños a panes/viñas	?
s.XVIII	Audiencia Oviedo	Encausar a comisario	-
s.XVIII	Alcaldes Villamanrique	Obstaculizar tránsito reos	?

12.9. RELACIÓN DE ENCAUSADOS POR EL SANTO TRIBUNAL CIUDARREALEÑO.

<u>PERIODO</u>	<u>NOMBRE/SEÑAS PERSONALES</u>	<u>CARGOS IMPUTADOS</u>	<u>SENTENCIA</u>
1590	Pedro Pastor, v. Luciana.	-	-
1590	Francisco de la Zarza, mercader ciudarrealeño.	Desacato a alcalde.	-
1594	Hernando de Montalvo, 24 años, v. Villacarrillo, paje de notario hermandino.	Robo de 200 ducados.	Vergüenza pública+ 6 años galeras.
1594	Blas de Prado, v. Almagro.	Heridas a convecino.	Rebeldía.
1594	Ana López, esposa de Blas de Prado.	Complicidad en fuga de su marido.	-
1594	Catalina Prado, 25 años, v. Miguelturra.	Complicidad en fuga de su hermano.	-
1594	Francisco, esclavo de un regidor de Almagro.	Auxilio a evasión.	-
1594	Mateo de Piedrabuena, alcaide hermandino.	Neglicencia en oficio.	-
1594	Gaspar de Luna, v. Ciudad Real.	Homicidio.	-
1594	Diego Delgado, v. Baeza.	-	-
1594	Francisco Pérez.	-	-
1595	Miguel García de Benito, v. Miguelturra, labrador de 24 años de edad.	Homicidio de paisano.	-
1595	Palcual García, cazador y hortelano, v. Baños.	Adulterio y amenazas.	Apartamiento
1597-98	Francisco Márquez.	Salteador de caminos.	-
1597-98	Martín Fernández, v. Osuna.	Salteador de caminos.	Rebeldía.
1597-98	Juan de Tobar.	Salteador de caminos.	Rebeldía.
1597-98	Pedro Ochoa.	Salteador de caminos.	Rebeldía.

1597-98	Gonzalo Hernández.	-	Muerte.
1597-98	Diego de León.	-	Libertad.
1597-98	Francisco Martínez.	-	Azotes.
1597-98	Don Gonzalo Suárez Figueroa.	-	-
1597-98	Pedro Bahamonde, lacayo del Hurto. corregidor de Ciudad Real.		Rebeldía.
1598	Fernán Martínez, v. Alcalá la Real.	-	-
1598	Pedro García, pobre.	-	Galeras.
1598	Pedro y Miguel de Castilla, vs. Cabeza del Buey.	-	-
1599-00	Rodrigo Sevillano, jornalero de 30 años.	Agresión y extorsión.	2 años de destierro+ 30.000 mrs.
1599-00	Miguel de la Leona, Diego López y Pedro G ^a Francés, porqueros de Vva Infantes.	Apedrear y robo a un guarda de campo.	4 años de destierro+ azotes+costas
1599-00	Bartolomé Díaz, hijo del ventero del Viso.	Robar a clienta mulata.	Condenado por alcaldes Viso
1599-00	Juan Martín Paniagua, v. Alcázar de San Juan.	Abigeato de bueyes.	-
1599-00	Juan López Rubio, v. Los Hinojosos.	Latrocinios/excesos.	-
1599-03	Diego de Prado e hijos, vs. Membrilla.	-	Costas procesales.
1599-05	Antón Ruiz Pardo, v. Alcázar de San Juan.	Agresión en yermo.	-
s.XVII	Juan de Monsalve.	-	-
s.XVII	Esteban Rodríguez Campillo. Pedro Fernández de Serrana, vs. Membrilla.	Heridas en yermo.	-
1600-01	Pedro Gil, Pablo Antón y Pedro Montero, guardas de Alcudia.	Abigeatos.	-
1600-01	Pedro Velázquez.	Homicidio.	-

1600-01	Pedro Simón, pobre.	Violación.	-
1600-01	Pirómanos de Piedrabuena.	Incendio montes.	Rebeldía.
1601-02	Andrés de las Heras, v. Villanueva de Infantes.	Abigato de cerdos.	Rebeldía.
1602	Juan Fernández, mayoral.	Incendios de montes y colmenares Malagón.	Costas procesales.
1602	Miguel Gómez, zagal.	Pirómano.	2 años de destierro+ 1.000 mrs.
1602	Francisco López Artiaga, 50 años, mayoral de Malagón.	Pirómano.	Absuelto.
1602-03	Francisco de la Orden, v. Alhambra,	Pendencia por mulas ajenas en sembrado.	Rebeldía.
1602-03	Juan Pérez, mayoral de Chillón.	Incendiar montes y corchos en Abenójar.	Vergüenza pública+ 6 años galeras.
1602-03	Juan Rubio, zagal de Chillón.	Incendios de montes.	200 azotes+ 6 de destierro.
1602-03	Pedro Fernández, pastor.	Pirómano.	Absuelto.
1602-03	Juan López.	Encubrir cuatreros.	-
1602-03	Andrés Francés, v. Piedrabuena (?).	Pirómano.	Libertad.
1602-03	Pirómanos de Malagón.	Incendio montes.	Rebeldía.
1602-03	Vecinos de Fernáncaballero.	Incendio montes.	Rebeldía.
1602-03	Zagal de Fernando Velasco v. Mata de Robledo.	Incendio colmenas.	-
1603	Martín López Rubio e hijo, v. Los Hinojosos.	Cuatreros.	-
1603	Juan de Espinosa, v. Porzuna.	Ofensas y heridas.	1 año destie- rro+ gastos.
1603-04	Alonso Sánchez, Antonio López, Alonso López Corcobado, Alonso Sánchez, Francisco Chacón, Pedro Izquierdo Chaves	Hurtos y violencias.	Rebeldía.

vs. Los Hinojosos.

1603-04	Jerónimo Delgado, Francisco Serrano.	Vagabundos (?).	-
1603-04	Alonso Hernández, v. Viso del Marqués.	Incendio colmenas.	-
1603-04	Juan Rodríguez del Río.	-	Galeras.
1603-04	Francisco Escudero, v. Almodóvar del Campo.	-	-
1603-04	Esteban Izquierdo, v. Mota del Cuervo.	-	-
1603-04	Juan García Privado, Diego Ruiz y Juan de Salas, vs. Madridejos.	-	-
1603-04	Pedro González Muñoz, M ^a López, su esposa, vs. Valdepeñas.	-	-
1603-05	Juan López Rubio, 60 años, Cuatrero de yeguas. labrador de los Hinojosos.		-
1606	Gabriel García de Romana 30 años, labrador toledano.	Cuatrero.	Absolución+ costas.
1606	Diego Pérez Laguna, bracero de Lorca, v. Espinar del Rey, 27 años de edad.	Trocar mulos robados.	8 años gale- ras+ costas.
1606	Juan Ibáñez, pregonero de Yepes, 38/40 años de edad.	Receptar bienes hurtados.	Inhabilitado+ 1 año destie- rro + costas.
1606	Andrés Rodríguez, portugués v. Madrid, 38/40 años.	Perista.	Costas+ pena 2.000 mrs.
1606-07	Luis Calderón de Arte, v. Madrid.	Abigeato de puercos.	6 años de galeras.
1606-07	Luis Jerónimo Díaz, pobre v. Castilblanco.	Latrocinios.	Azotes.
1606-07	Justo de Laredo.	-	Muerte.
1606-07	Gaspar Román.	Complicidad criminal	-
1606-07	Diego Pérez Laguna, pobre.	Encubridor.	Galeras.

1606-07	Hernando del Cárcamo, pobre.	-	Galeras.
1606-07	Juan López Rubio.	-	-
1606-07	Juan Juárez, gobernador de Alcázar.	Falta de colaboración.	-
1606-07	Juan Gallego, ventero Sierra Morena.	Falta de auxilio.	-
1607	Pedro Jiménez, ventero.	Agresión a arriero.	1 año destie- rro+ costas+ 400 mrs. pena
1607	Sebastián Sánchez, y "la Calderona", vs. Carrión.	Hurto de sarmientos y malos tratos.	-
1608	Juan de Ledesma, 20 años, v. Úbeda, bracero mulato, alias "Juan Barrero", pobre.	Robos y hurtos en descampado.	Absuelto.
1608	Alfonso Fernández, pastor de Santísteban.	Bandidaje.	-
1608	Antón Rubio, v. Aldeaquemada.	Bandidaje.	-
1608	Tomás de Gámez, v. Mengíbar.	Abigeato de bueyes.	-
1608	Pedro García, v. La Guardia.	Expolios a pastores.	-
1608	Antón de Parras y hermano.	Capedores en Bailén, matan a un corchete.	-
1608	Luis Martín y Manuel Vaquero, alcaide Andújar.	Homicidio de dos trajinantes.	-
1608	Andrés Garrido, ventero de Palacios (Sierra Morena) comisario hermandino.	Encubrir bandoleros.	Despojado de título.
1608-09	Don Diego Ruiz, v. Ballesteros.	-	-
1608-09	Diego García, yegüero.	Cuatrero.	-
1608-09	Diego de la Rubia.	-	-
1608-09	Bataneros del Guadiana.	-	-
1608-09	Antón Fernández.	-	-
1608-09	Juan Díaz, molinero.	-	-

1608-09	Mulato.	Heridas en yermo.	Rebeldía.
1608-09	Pirómanos de Malagón.	Incendio colmenas.	Rebeldía.
1608-09	Vecino de Andújar.	Salteador de camino.	Rebeldía.
1608-09	Juan de Baeza, pobre v. Mengíbar.	Latrocinios.	-
1608-09	Alonso Bodoque Serrano, "el Gato".	Hurtos y Robos.	Galeras.
1608-09	Martín Ximénez, bracero.	Allanar morada/hurto.	-
1608-09	Alonso Manrique, v. Villafranca.	Azotar a una viuda.	-
1609-10	Alonso Sánchez, v. Ballesteros.	Hurto de trigo.	Libertad+ 14 rs. costas
1609-10	Alonso Palomeque.	Encubrir hurtos.	-
1609-10	Gregorio Morales.	Encubrir hurtos.	-
1609-10	Juan Fernández Treviño y 2 de sus criados,vs. C. Real.	-	-
1609-10	Juan Gallego, ventero de Puerto Lápice,v.Villafranca.	Robos y estafas.	-
1609-10	Juan de Lana/Juan Novalbos clérigos de Ballesteros.	Obstaculizar comisión.	-
1609-10	Juan de Ochoa, yangüés, pobre.	Incendiar montes.	Azotes+ galeras.
1609-10	Lucas Fernández, pobre v. Caracuel.	-	-
1609-10	Soldados en Sancho Rey.	Cuatreros.	-
1609-10	Gregorio Morales, v. Ballesteros.	-	-
1609-10	Pedro Calvillo, v. Daimiel.	-	-
1609-10	Antón García de la Rosa.	-	-
1609-10	Asesino de Fco Balderas.	Homicidio.	Rebeldía.
1609-10	Soldados en Poblete,	Robos/Hurtos.	-
1609-10	Tomás Martín, herrero de Cabezarados.	-	-

1609-10	Jerónimo de Cuéllar, vaquero de Andújar.	Salteador en Sierra Morena.	Rebeldía
1609-10	Ana Morente, amante del anterior bandido, pobre.	Amancebamiento.	Apercibida.
1609-10	Andrés Garrido.	Salteador.	-
1609-10	Serranos.	Agresión a batanero.	-
1609-10	Alonso de Velasco	-	-
1609-11	Julián Martínez, v. Miguelturra.	Homicidio de viuda.	-
1609-10	Francisco de Copa, pobre.	Herir a hospitalero.	-
1609-10	Domingo Poveda.	Agresión a acemilero.	-
1609-10	Diego Martín.	-	-
1609-10	Juan Martín, v. Almagro (?).	-	-
1609-10	Don Diego de Céspedes.	-	-
1610	Juan Sánchez de la Graja, v. Fontanarejo, labrador de 30 años, con antecedentes.		1 año destie- rro+ costas+ 1.000 mrs.
1610-11	Don Diego Ruiz Francés.	-	-
1610-11	Pero Martín Gallego	-	-
1610-11	Alonso Bodoque.	Latrocinios.	-
1610-11	Francisco Rubio, pastor, v. Hinojosa del Duque.	Heridas en yermo.	-
1610-11	Juan García, pastor, v. Vinuesa.	Heridas en yermo.	-
1610-11	Juan de Valdivieso, v. Pancorbo, pobre.	Abigeato de pollina.	-
1610-11	Alonso Martín.	Latrocinios.	-
1610-11	Asesinos en Ciruela.	Homicidio.	-
1610-11	Asesinos en Almodóvar.	Homicidios.	-
1610-11	Vecinos de Cañada de Cva.	Incendio colmenas.	-
1610-11	Salvador de la Jara, gitano.	-	-

1611	Cristóbal Esteban, v. Valdemoro, mayoral.	Cuadrero.	100 azotes+ 2 años galeras+ 4.000 mrs.
1611-12	Juan de Ledesma, mulato, pobre de Daimiel.	Latrocinios.	-
1611-12	Domingo y Francisco, portugueses.	Hurtos.	-
1611-12	Criado del ldo. Velarde.	-	-
1611-12	Martín García, Alonso Camacho, Juan Torres, vs. Membrilla.	Heridas en yermo.	-
1612-13	Agresores en despoblado.	-	-
1612-13	Andrés Delgado.	Heridas a ciudarrealeño.	-
1612-13	Antonio de Herrera, portugués.	Rapto de mujer casada.	-
1613	Pedro Hernández, criado del batanero del Moral.	Hurto de paños en batán de Perosancho.	4 años des- tiero+costas +1.000 mrs.
1614	Joseph Sánchez, v. Ballesteros.	Hurtar colmenas de sus paisanos.	6 años des- tiero+costas
1615	Diego Delgado, sastre y barbero de Torralba.	Cuadrero y allanar morada para robar.	-
1615	Diego Fernández, Sebastián y Francisco Cortés, gitanos.	Cuadreros.	-
1616-17	Sebastián, gitano.	Latrocinios y estafas.	-
1617-18	Juan Redondo.	Hurtos en batanes.	Muerte.
1618	Antón García, batanero de Moral de Calatrava.	Allanar batán.	Absolución+ costas.
1618	Juan de Sitra, v. Almagro.	Allanar batán.	Absuelto.
1618	Martín de Monsalve, v. Viso del Marqués.	Robo de una mula.	-
1618-19	Francisco Vázquez, mulato.	Cómplice de asesino.	Muerte.
1618-19	Diego Maldonado.	Homicidio carnítero.	Muerte.

1618-19	Juan Roldán, v. Úbeda.	Cómplice de asesino.	-
1618-19	Juan Redondo.	-	200 azotes+ 10 años de galeras.
1618-19	Francisco de Albacete.	Latrocinios.	-
1618-19	Ana Ximénez y compañera.	Vagabundear.	Libertad
1618-19	Pedro Ortiz.	-	Secuestro de bienes
1621-23	Luis de Zambrana, v. Sabiote.	Cuatrero de yeguas.	-
1623	Domingo, napolitano, bracero de 28 años, residente en Andújar.	Homicidio involuntario.	Muerte.
1624	Diego Fernández y Sebastián Cortes, gitanos.	Hurtos y excesos.	-
1624-25	Blas Marqueño, guarda de campo de Baeza.	Estafas a labradores.	-
1624-25	Juan Garvín, tintorero de Alcázar, estante en Baeza.	Expolios a serranos.	-
1624-25	Lorenzo Sánchez Verdejo (o Bermejo), tejedor morisco de Calzada de Calatrava.	Robo con asesinato.	-
1627	Álvarez Sebastián Enríquez gitano.	Cuatrero y ladrón.	-
1627	Mateo Serrano, gitano de Almagro.	Cuatrero y ladrón.	-
1627	Cristóbal y Francisco de Luna, cabreros de Caracuel.	Abigeatos de cabras.	-
1627-28	Juan de Argote, guarda de campo de Castellar de Santísteban.	Hurtos y allanamiento de cortijos anadaluces.	-
1727-28	Juan de Huertas, maestro de primeras letras.	Hurtos, ladrón sacrílego y evasión de cárcel.	-
1631	Francisco López de Malla, tratante de vinos.	-	-

1631-32	Alonso Bastante.	Incendio de montes.	-
1631-32	Alonso Martínez Parreño.	-	-
1631-32	Diego Fernández, gitano.	Latrocinios/abigeato.	-
1631-32	Juan Serrador.	Robos en Fontanosas.	-
1631-32	Alonso Herrador(o Serrador)	Robos en Fontanosas.	-
1631-32	Juan de Parras, v. Caracuel.	Robos en Fontanosas.	Inmunidad.
1631-32	Ana Ximénez	-	-
1632	Pedro Díaz Romo, v. Madridejos.	Estupro de doncella.	-
1632-33	Francisco Martínez.	Latrocinios.	Inmunidad.
1632-33	Fernán Sánchez.	Cómplice.	-
1632-33	Alonso Martínez Parreño.	-	Inmunidad.
1632-33	Juan García y 3 carreteros.	-	-
1632-33	Antón Ruiz de Montoro.	Cuadrero.	-
1632-33	Francisco Porras, María de Abiar, Juan Fernández.	-	-
1632-33	Juan Martín, mesonero.	Hurtos.	-
1632-33	León, bodeguero de Almadén.	Hurtos reiterados	-
1632-33	Juan de Parras.	Hurtos.	Inmunidad.
1632-33	Francisco Rodríguez.	Hurtos.	Inmunidad.
1632-33	Gaspar de Malla, gitano.	-	Muerte.
1633-34	Manuel Fernádes, Francisco Rodríguez, portugueses.	Hurto de trigo/cebada.	-
1633-35	Juan Muñoz "Poca Ropa", Fco Fernández "Atahona".	"Por delitos graves.	Presidio de Larache
1633-34	Francisco Sánchez Morano.	Encubridor.	-
1633-34	Alonso Rodríguez.	-	-
1633-34	Pedro de Oviedo.	-	-

1633-34	Fco Rodríguez, portugués.	-	-
1633-34	Alberto, v. Huete.	-	-
1634	Francisco Aragonés, Baltasar Hernández, Juan Bautista, gitanos.	Latrocinios y daños a colmenares de Malagón.	-
1634-35	Francisco Gonzáles, portugués, ex-criado de Bernabé Valderas.	Prófugo.	-
1634-35	Francisco, esclavo de don Luis Treviño Carrillo.	Hurto de caballo/joyas.	-
1634-35	Alonso y Ángela Rodríguez.	-	-
1635	Marina Zamorano.	-	-
1635-36	Baltasar Gallardo, gitano.	-	-
1635-36	Manuel Páes, portugués.	-	1.000 mrs. de costas.
1635-36	Antón García de la Braba, v. Espíritu Santo.	Prófugo de Garlitos.	-
1635-36	Juan López de la Martina.	Hurtos.	-
1635-36	Luis Hernández, v. Puebla de Alcocer.	Robos y asaltos.	-
1635-36	Ángela Gutiérrez, gitana.	-	-
1635-36	Cristóbal Alberto Giménez.	-	-
1635-36	Baltasar Faxardo, gitano.	-	-
1635-36	Juan Cervantes.	-	-
1635-36	Cristóbal de Espinosa.	-	-
1635-36	Martín Ximénez, gitano.	-	Inmunidad.
1635-36	Francisco Hernández.	Hurto de trigo/cebada.	-
1635-37	Alonso Herrador, Mariía de Beas, su esposa.	Prófugo.	-
1636	Bartolomé, v. Almadén.	-	-
1636	Francisco García, v. Ciudad Real.	-	-

1636-37	Sebastián de Flores, Juan Torres, Juan Ruiz Infante, gitanos de Almagro.	Latrocinios/homicidio.Inmunidad.	
1636-37	Alonso Martínez Parreño.	Hurtos.	-
1636-37	"Vaquilla".	Hurto de trigo.	-
1636-37	Juan López de la Marina Zamorano, v. Campo Criptana.	-	Presidio de Orán.
1636-37	Francisco de Oviedo.	-	Absuelto.
1636-37	Juan Garrido, portugués, pobre.	Allanar casa/robo.	Destierro.
1636-39	Juan Fernández "el Manco" v. Zafra.	Hurtos.	Galeras.
1637-38	Antón Martínez Pulgar.	-	1.000 mrs. de costas.
1637-38	Francisco Romero"Vigornia".	Salteador de caminos.	Galeras.
1637-38	Benito García Gil, v. Baterno.	Ladrón/abigeatos.	-
1637-38	Luis de Pinca, gitano.	Robos/homicidio.	-
1637-38	Palomo, ventero de Torrecilla.	Hurtar a cliente.	-
1637-38	Francisco Martínez Febrero.	Cómplice/encubridor.	-
1637-38	Ana Conde.	-	-
1637-38	Diego Díaz/Bartolomé Cuenca.	-	-
1637-38	Benito García.	-	-
1637-38	Juliana.	-	-
1637-38	Sebastián Cortes, gitano(?).	-	-
1637-38	Alonso Álvarez, Juan Pucheril.	Asesinato de serrano.	-
1637-39	Ginés Armero, Luis Rivera, Alonso García de Munillos "Rompeventanas", ventero.	Bandidos, asesinos, violadores.	Muerte.
1638	Juan Navarro, pobre,	Cuatrero.	Muere en

	v. Las Casas.		cárcel.
1638	Juan Sánchez, Francisco Fernández.	Asesinato de serrano.	-
1639-41	Francisco Lorenzo, andaluz.	Cuadrero de yeguas.	-
1640	Andrés Fernández, 63 años notario ciudarealeño.	No acatar empleo como tesorero de Millones.	-
1641	Francisco Morales, criado de Alcázar de San Juan.	Abigeato de vacas.	3.000 mrs. de costas.
1641-42	Diego de Martos, Francisco Manuel e hijo, gitanos de Iznatoraf.	Hurtos/estafas.	-
1641-42	Juan Bullo, v. Villacarrillo.	-	-
1641-42	Juan Chocante.	Salteador de caminos.	-
1641-42	Ana, criada de Don Juan de Jédler.	-	-
1641-42	Gonzalo Buezo.	-	-
1642-43	Cosme, valenciano	-	-
1642-43	Francisco de Vidarte.	-	3.000 mrs. pena cámara.
1642-43	Juan de Resa (o Pisa), v. Tarazona.	Robos/homicidios.	-
1642-43	Francisco Lorenzo, v. Viso del Marqués.	-	-
1642-43	Juan Pantoja, toledano.	-	Muerte.
1642-43	Juan Delgado, gitano pobre de Ballesteros.	-	-
1642-43	Manuel Rodríguez.	-	-
1642-43	Martín Díaz, v. Bodonal.	Bandolero.	-
1643	Don Juan y Don Diego Xédler Gámez, vs. C. Real.	Choque con alguacil.	A corregidor.
1643-44	Sebastián Álvarez.	-	Muerte.
1643-44	Juan de Pareja,	-	Costas

	Pedro Martin Quirós, vs. Conquista.		procesales.
1643-44	Juje "Bocas".	-	-
1643-45	Martín "Cavilos".	-	-
1643-44	Jacinto de Morales, pobre.	-	-
1644-45	Cristóbal Sánchez, aguardentero.	-	-
1644-45	Juan Delgado, gitano.	-	-
1644-45	Diego Martín, Diego de Zafra, Antonio Tobar.	Latrocinios.	-
1645-46	Andrés de Uceda.	-	-
1652	5 gitanos de Carrión Cva.	Sobornos a justicia.	-
1652	Pedro Portillo, cabrero de Ciudad Real.	Cuatrero de yeguas.	Absuelto.
1652	Martín Jiménez, v. Ciudad Real.	Cuatrero.	Rebeldía.
1652-66	Juan. Jiménez, 50 años, v. Madrid, ganadero.	Cuatrero.	200 azotes+2 años galeras + costas.
1654-57	Alonso Rodríguez Coronado, Jerónimo Fernández, Juan Briazal, v. Madrideojos Francisco "el Fiero", Juan Salcedo "el Alférez" Domingo Hernández, mayoral, Jerónimo Cervantes "Cerrajero".	Bandoleros, abigeatos expolios, robos, extorsiones y asesinatos en yermo.	Rebeldía.
1654-69	Diego Ruiz, v. Madrideojos.	Bandolero.	Muerte.
1655	Juan García Clemente, v. Los Yébenes.	-	-
1656	Juan Díaz, v. Pozuelo de Calatrava.	Prófugo de Almadén.	Muerte.
1656-57	Domingo Fernández, v. Alcázar de San Juan.	Salteador de caminos.	-
1656-57	Mateo de Castro.	Asesina para robar.	-

1658	Diego de Orantes, carretero de Ciudad Real.	Complicidad en fuga.	-
1658	Francisco Ramírez, Sebastián de Acosta, Alonso de Guzmán, Pedro Galán, Francisco Asensio, Antonio de la Parra, gitanos de Alcázar.	Hurtos, robos y asaltos en yermo.	-
1658	Francisco Gabriel Ramos, gitano.	Asaltos en despoblado.	-
1659	Cristóbal Muñoz Motril, Enrique Fernández, cazadores de Villacañas.	Asaltos en yermo.	Secuestro de bienes + costas.
1659	Francisco Ginder y Juan de Berroja, Juan Jiménez, labradores toledanos.	Cómplices en robos.	-
1659	Francisco Yomaro, pastor.	Encubridor de robos.	-
1659	Sebastián Martín "el Zaíno" mercader de Madridejos.	Perista.	-
1659	Pedro de Chalerní, v. Huesca.	Abigeato de carneros.	-
1659-60	María López "la Pelusa", 36 años, con un hijo de 15.	Encubrir robos.	-
1659-61	Juan Jiménez, menor.	Homicidios y robos.	10 años de galeras.
1660	Juan Rodríguez de Ávila y Juan Joseph López Serrano, vs. Ciudad Real, pobres.	Expolios a pastores.	10 años de destierro.
1660	Juan de la Cueva, Cristóbal Sánchez Belmonte Juan de la Cueva, menor, Isabel de la Cueva, vs. Miguelturra.	Ladrones y cómplices en robo a hacendada miguelturreña.	-
1660	Bartolomé de Ávila v. Ciudad Real.	Expolios a pastores.	4 años de destierro.
1662	Frutos González, v. Puebla de Don Fadrique.	Ocultar robos.	-

1662	Mechor Castellanos.	Latrocinios.	-
1662	Juan de Baños, v. Fernáncaballero.	Hurto de colmenas.	-
1662	Juan Sánchez de Villafañe, Melchor Castellanos y Cristóbal Rodríguez.	Salteadores, robos y asesinatos.	-
1662	Cristóbal de Pila, v. Ciudad Real.	-	-
1662-63	Francisco Téllez(o Téldez), Juan Guerrero, Juan Fernández, gitanos.	Incumplimiento de pragmáticas.	-
1662-63	Juan Fernández Rosales, Pedro Galán, Francisco de Malla Diego de los Reyes, gitanos.	Sobornar a alcaldes de Villahermosa para escapar a Hermandad.	Inmunidad.
1663	Diego López "el Viejo".	Ocultar gitanos.	-
1663	Juan García de Torres, gitano.	Incumplir pragmática.	Muere en cárcel.
1663	Miguel Alcaide, v. Aldea del Rey.	Perjuro y falsedad de acusación.	-
1664	Agustín Escudero menor, v. Puertollano; Francisco Vidal, v. Reus; soldados de caballería.	Multitud de robos calificados y salteamientos.	Muerte+secues- tro bienes+ costas/gastos
1666-67	Josephe de Torres v. Campo Real.	Doble asesinato, hurto uvas, abigeato.	Muerte.
1666-67	Rosales y 6 gitanos.	-	Inmunidad.
1667	7 extremeños.	Salteadores/homicidas.	-
1667-94	Juan Bernabé.	-	-
1668	Juan Sánchez Mancheño, v. Puebla de Don Fadrique.	Robo con asesinato.	-
1669	Esclavo del alcalde hermano dino Diego Muñoz y Molina.	Fugitivo.	Devuelto a su amo.
1669	Juan García, el mayor, mayoral, 28 años; Juan García Negrillo,	Abigeatos y heridas en descampado, huidos.	Rebeldía.

zagal, 18 años, vs. Mora.

1669-70	Joseph Cueto.	Bandolero.	-
1669-70	Gonzalo de Sotomayor, v. Sevilla.	-	-
1669-70	Miguel Fernández Toledano, Prófugo. v. Manzanares.		-
1673-74	Francisco Medina, salmantino, v. Madrid, 30 años, soldado cia. chamberga; Bartolomé Albiñana, valen- ciano, v. Santos de Maimona, 34 años, casado, dulzainero; Jaime de Cirera, alicantino, v. Madrid, 22 años, criado duque de Abero, aprendiz sastre, tamborilero.	Vagancia, portar vara de justicia.	Absueltos.
1675	Matías Fernández, gallego, criado y guarda.	Hurto de ropa en casa de labor.	2 años de destierro.
1675-76	Andrés Sánchez, valenciano.	-	-
1678	9 gitanos.	-	-
1678	Gaspar Antonio de Montoya, v. Valdepeñas, esquilador, y homicidio. casado, 26 años de edad; Francisco Asensio, mayor v. Valdepeñas, espartero; Jacinto Asensio, v. Daimiel, esquilador; Sebastián de Salazar, v. El Toboso, esquilador, 22 años de edad.	Vagar acuatrillados y homicidio.	Absueltos+ costas+tomen vecindad.
1679	Juan de Hilos, v. Zaragoza, soldado; Manuel Ponce de León, avulense, v. Madrid, soldado; Andrés del Campo, v. Madrid, soldado.	Desertores del trozo del Rosellón y asaltos a trajinantes.	A Consejo de Guerra.
1679	Joseph Cueto, v. Miguel Esteban.	Quebrantar cortijo y perjurio.	-
1680	Felipe Saldaña, Pascual de Campos, Sebastián Quirós y Salazar, gitanos de Ossa de la Vega.	Asesinatos/abigeatos.	-

1680	Juan de Campos, Roque Pacheco, Sebastián Lozano, gitanos de Ossa de la Vega.	Robos y homicidios.	Inmunidad.
1680	Francisco Rodríguez "el Gordo", labrador, 30 años de edad, casado; Diego Ramírez, 18 años, esquilador, casado, gitanos de Consuegra.	Robar a arriero.	Inmunidad.
1783	Gabriel Gómez y Manuel Fernández, vs. Yeste.	-	Inmunidad.
1683	Bernabé Sánchez, "el Hidalgo", v. Piedrabuena.	Robo de yegua de alcalde hermandino.	Rebeldía.
1683	Francisco de Segura, v. Torres del Alberche.	-	Inmunidad.
1683	Manuel Ibáñez Serrano, v. Villapalacios.	Abigeato de yunta a hidalgo de C. Real.	1 año Minas + 4 años de destierro .
1683-84	Pedro Roldán y Pedro Jiménez, su suegro.	-	Almadén.
1683-84	Joseph García.	-	-
1683-84	Marcos García Bermejo, v. Porzuna, pobre.	-	-
1683-84	Juan de Bolaños, Pedro Díaz Antonio Romero, vs. Porzuna.	-	-
1683-84	Francisco Toledano, v. Santa Cruz.	-	-
1683-84	Juan Ramírez/Juan Fernández.	-	-
1683-84	Baltasar González, gitano.	-	Destierro.
1683-84	Pedro Bermúdez.	-	Azotes+ Galeras.
1683-84	Pedro Díaz.	-	-
1683-84	Francisco de Segura.	-	Inmunidad.
1683-84	Francisco Merino, v. Valdepeñas.	-	-

1683-84	Joseph García, Juan de Madrid.	-	-
1684	Don Antonio Pretel Miñán, v. Torres de Segura.	-	Inmunidad.
1684-85	Gabriel Camacho.	-	Almadén .
1684-85	Gabriel de Heredia, gitano.	-	Almadén.
1684-85	Blas Camacho.	-	Azotes+Minas.
1684-85	Juan Beas "Vellón".	-	-
1685-86	Pedro Ponce, enfermo.	-	-
1686-87	Felipe Encinas.	-	Muere en cárcel.
1686-87	5 gitanos.	-	Galeras.
1687-88	Francisco Navarrete.	-	Presidio.
1687-88	Gaspar Antonio, Fco Malla, Diego Asensio, Sebastián Álvaro, gitanos.	-	-
1687-88	Don Antonio Pretel.	-	-
1687-88	Gabriel García "el Noble", v. Herencia.	-	Azotes.
1687-88	Francisco Moreno.	-	Almadén.
1688-89	Diego Asensio, Sebastián y Francisco Álvaro, gitanos.	-	-
1688-89	Blas Martín, v. Castillo de Guadalerza.	-	-
1688-89	Juan Méndez y Agustín Robles, vs. Toledo.	-	-
1688-89	Juan Moreno, menor.	-	-
1688-89	Cosme Denia (o Damián), v. Caravaca.	-	Muerte.
1689-90	Gabriel Antonio Fernández, gitano de Membrilla.	-	Muere en cárcel.
1689-90	Gitanos.	-	Almadén.

1690	Diego Fernández, v. El Toboso, 30 años, casado, esquilador; Sebastián Gaspar Fernández, v. Corral de Almaguer, bracero; Antonio Fernández, muchacho, cuida pollinos; gitanos.	Incumplir pragmáticas.	2 años a Almadén+ pérdida de bienes+costas
1690	Gabriel Antonio, v. Lozoya, bracero gitano.	Incumplir pragmáticas.	Muere en cárcel.
1690-91	Juan López Fernández, Pedro Pérez, vs. Villaescusa de Haro.	-	A Madrid.
1690-91	3 vecinos de Vva de la Fuente.	-	-
1690-91	Juan Revejido, Pedro Marte Bartolomé Arriaza Cortés.	-	Almadén.
1690-92	Miguel de León, andaluz, enfermo.	-	3 años de galeras.
1692	Juan Bernabé García, v. Montilla.	Homicidio de hidalgo.	Inmunidad.
1692	Francisco Cañaveras.	Perjurar en causa de inmunidad local.	6 años de destierro.
1692	Manuel de Morales, v. Bailén	-	-
1692	Marcos García, Juan Fernández, Francisco Pérez, Francisco Real, vs. Montilla.	Homicidio de regidor y familiar del Santo Oficio.	-
1692	María de León, Mateo Sánchez, Juan García "Torillo", v. Santa Cruz de Mudela.	Cómplices homicidio.	-
1692-93	Juan García Turrillo.	Homicidio.	Muerte.
1692-93	Mateo Sánchez "Sastre"	Homicidio.	200 azotes+ 10 años de galeras.
1692-93	Teresa Laguna, Lucía Martínez, vs. Santa Cruz Mudela.		Apercibidas/ excarceladas perdida bien.
1692-93	Manuel Felipe de Morales,	-	Muere en

	gitano de Daimiel.		cárcel.
1692-93	Miguel de Morales, Luis Moreno, vs. Santa Cruz Mudela.	-	-
1692-95	Francisco de Luque Romero Perjurar en causa Pedro de Aguilar Romero, de inmunidad local. Don Ignacio de Aguilar, Don Cristóbal de Soto, Juan de Almogavar, vs. Montilla.		Rebeldía .
1693	María Cerna, pobre.	-	-
1693	Francisco García Maldonado.	-	-
1693	Melchor García.	-	-
1693-94	Manuel Felipe.	-	Muerte.
1693-94	Gabriel García Morato, v. Alcázar de San Juan.	-	-
1693-94	Juan Bautista, milanés.	-	-
1693-94	Gitanos de Vva de la Serena.	-	-
1693-94	Juan Amador, gitano de Baeza.	-	Azotes.
1693-94	Francisco del Real.	-	-
1693-94	Baltasar y Francisco González.	-	-
1693-94	Francisco de Soto.	-	-
1693-94	Juan Manchado, andaluz.	-	-
1694	Francisco Pérez Cañaveras, Cómplices de Marcos García Cañaveras bandoleros. vs. Montilla.		4 años de destierro.
1694	Juan Fernández Rionegro, Francisco del Real.	-	-
1694	Juan Mohedano y Mediavilla Robo con violencia. v. Conquista.		-
1694	Cristóbal de Mohedano, Protección a hermano gobernador de Conquista. delincuente.		-
1695	Don Francisco de Aguilar.		
1695	Juan Bautista Arbo y Portar armas Diego Jiménez, gitanos. prohibidas.		A Granada.

1695	Francisco y Domingo Martínez, v. Bornos.	-	-
1695-00	Francisco Martín Ortiz, v. Monesterio, 24 años cortador y zapatero.	"Ladrón famoso", amancebado, prófugo.	6 años a Almadén.
1698	Bernabé Ruiz Lozano y Cristóbal Fernández Camacho, vs. Moral de Calatrava.	-	-
1699	Juan Martín "Carmona", su esposa Luisa Martínez.	Robos y asesinatos.	-
1699	Pedro Laguna del Amo, Juan Martínez de la Güerta, Francisco Carrasco, vs. Santa Cruz de Mudela.	Asaltos en yermo.	Libres+ fianzas.
1699	Marcos García Moreno.	Robos y asesinatos.	-
1699	Alfonso García.	Hurto de miel y cera.	-
1699	Miguel Collado "Miguelón", v. Jerez de la Frontera.	Latrocinios diversos.	6 años de galeras.
1700	Cristóbal Donaire, v. Malagón.	Homicidio y agresión.	10 años de galeras+ 2 ducados pena.
1701	Juan Bautista, v. Esparragosa, gitano, 60 años, casado, manco; Juan Bejarano, v. Almadén, criado de un molinero local.	Incumplimiento de pragmáticas.	Absueltos.
1701	Manuel Merino, Pedro Salazar, Benito Barba, guardas de campo Bujalance.	Hurto de una mula.	Absueltos + costas.
1701-02	Miguel García, v. Villanueva de Infantes bracero, casado, guía reses.	Hurto de dinero a mayoral.	Absuelto.
1702	Juan Núñez Duarte, comisario Jerez de Caballeros 46 años, sin oficio concreto.	Abusos en ejercicio.	Devuelva título.
1702	Juan Mestre, v. Jerez de los Caballeros.	Abigeatos.	2 años de destierro.
1702	Alfonso Merino,	Calumnias a paisano,	-

	Juan Antonio Merino daimieleños, v. Monturque.	rapto y adulterio.	
1702	Pedro Romero, soltero Ana López de Belmar, casada vs. Daimiel.	Amancebamiento, tomar nombre falso, vagar.	-
1702-04	Domingo Juan Antonio Lostado.	-	Inmunidad.
1702-10	Antonio Ruiz "Carabinas" v. Tobarra.	Bandolerismo.	6 años a Almadén.
1705	Jerónimo Torrecillas, comisario de Toledo.	Prender a ministro hermandino de Lorca.	-
1705	Juan García, comisario andaluz.	Hurtos.	-
1705	Juan de Pastrana, v. Antequera.	Latrocinios.	-
1705	Juan Francisco Miguel de Iglesia y otros 3 gitanos.	Incumplir pragmática y agresión en yermo.	200 azotes+ 8 años de galeras.
1706	Gitanos de Baeza.	Faltar a pragmáticas.	Absueltos.
1706	Pedro Fernández, asturiano, criado del alguacil mayor de Jaén.	Robar a su amo.	A ejército (alcaldes de Manzanares).
1706	Cuadrilla de gitanos.	Robo al cura Siruela.	-
1706	Juan Sastre, verdugo hermandino, 42 años.	Abandono de oficio.	Absuelto.
1706-07	Miguel, Bernardo Antonio y Ana de Campos, gitanos.	-	Azotes+ Almadén.
1706-07	Juan Rico.	-	Presidio.
1706-07	Francisco Gâ y Joseph Rivero.	-	-
1706-25	Bartolomé Tocados González, albardonero/espartero.	Desertor, abigeatos, robos sacrílegos, homicidios, prófugo.	-
1707	2 vecinos de Azuaga.	Pirómanos protegidos.	-
1707	Manuel Cortés y Diego Gâ, gitanos.	-	Almadén.
1707	Pedro López del Río.	-	-

1707	Alfonso Moreno.	-	-
1707-09	Pedro Salido, soldado de Úbeda; Diego Rodríguez, v. Andújar.	Hurto de tabaco a contrabandista.	Inmunidad.
1708	Bernabé García, v. Níjar.	Falsificar título.	-
1708	Cristóbal de los Reyes, gitano, enterrador, 60 años.	Robos y trueques.	2 años Minas /Suicidio.
1708	Joseph Rivero, v. Daimiel.	-	Inmunidad.
1708	4 vecinos de Abenójar.	Salteamientos.	-
1708	Juan Francisco Cortés, soldado de Medellín; Francisco Cordón, soldado de Talarrubia.	Abigeatos en La Mancha Alta.	6 años de destierro+ 2.000 mrs.
1708	Cristóbal Jurado, v. Santaella, pobre.	Encubrir abigeatos.	Absuelto.
1708	Francisco Nieto de Salazar, Andrés Bernardo Díaz Palacio Pedro Cuartero, Luis de Montoya, Juan Zarco, Pedro Salazar, Francisco Díaz Palacios María Fernández Montoya, Ana de Montoya, Manuela de Montoya, Beatriz de Montoya; gitanos.	Faltar a pragmáticas.	Inmunidad.
1708	Diego García, Francisco Antonio de Aranda, gitanos de Castuera.	Cuaterros y ladrones.	200 azotes+ 6 años Minas.
1708-09	Sebastián Baena, v. Estepa; Bartolomé Gª Aparicio, v. Usagre, gitanos.	Hurto de trigo, dinero y reses.	200 azotes+ 6 años de galeras.
1708-09	Francisco Antonio Blanco, v. Chillón, ex-militar.	Hurtar yunta bueyes, intento de soborno.	-
1708-09	Andrés Moraleda y Pedro Calero, braceros de Almadenejos.	Abigeatos en Almadén.	-
1708-09	Cristóbal, Manuel, y Juan Manuel Rosales,	Estafas, vagar en grupo, hurtos, robos	6 años a Almadén.

	Alonso del Arroyo.	y amparar gitanos.	
1708-09	Ana y Espinosa, María Manuela, Ana de Salazar, Sebastiana Bermúdez, gitanos de Linares.	Vagar acuatrilladas.	Absueltas.
1708-09	Pedro Rosales "el Valenciano", gitano.	Prófugo.	Rebeldía.
1708-09	Antonio de Arribas, v. Hinojosa de Córdoba.	Hurtar caballos y dinero.	200 azotes+ 6 años de galeras.
1709	Antonio Blanco, jornalero, pobre.	Abigeatos.	6 años a Melilla.
1709	2 franceses.	Abigeato.	-
1709	Manuel de Salas Doriga, juez superior hermandino; Francisco de la Torre, comisario de Valdepeñas; Marcos González, comisario de Linares; Francisco Díaz Maroto, ministro de Manzanares.	Fuga de reo durante conducción.	-
1709	Sebastián Cortés, gitano, + 50 años.	Faltar a pragmáticas.	6 años a Almadén.
1709	Simón de Donaire "Banquete" gitano, + 50 años.	Faltar a pragmáticas.	4 años a Almadén.
1709	Roque Rodríguez, + 60 años v. Hinojosa de Córdoba.	Robos reiterados.	4 años a Melilla.
1709	Bernabé de Contreras, comisario de Vva Infantes.	Secuestros irregulares de bienes a sospechoso.	-
1709	Francisco Molina, Juan de Loja, vs. Medinasidonia, pobres.	Bandolerismo.	2 años a Ceuta.
1709	Gitanos de Malagón.	Faltar a pragmáticas.	Inmunidad.
1709	Gaspar Fernández, v. Vva Córdoba, desertor; Juan Francisco del Rey.	Bandoleros en Sierra Morena.	-
1710	Francisco Serrano, v. Montoro.	Robo de corchos y diversas raterías.	4 años a Melilla+ 6 de destierro.

1710	Juan González, soldado.	Prófugo.	-
1710	Juan de Oreja y Juan García.	-	Almadén.
1710-11	Juan Fernández.	-	-
1710-11	Francisco Delgado, segador, 35 años de edad, v. Puebla de Guadalupe; Juan Amigo, v. Niebla, 30 años, zapatero/bracero; Diego Ruiz Murillo, v. Cabeza del Buey, temporero.	Robo sacrílego.	Inmunidad.
1710-11	Martín Rabadán.	-	-
1710-11	Vicente Prieto, andaluz.	-	-
1710-11	4 gitanos de Carrión de Cva.	-	-
1710-30	Bartolomé Tocados, v. Mérida.	Hurtos y robos.	Galeras.
1711	Juan de Oñoro.	-	Presidio.
1711	Matías Laín.	-	-
1711	Cuadrilla de gitanos.	Merodear por Sierra del Segura.	-
1711-12	Martín Rabadán, v. Campo Alto.	-	-
1712	Juan González Bazán.	-	-
1712	Francisco García Pozuelo v. Montoro.	Quebrantar lagares.	3 años a Melilla.
1712	Cebrián de Quiñones.	-	-
1712	Francisco Nieto e hijo.	-	-
1712	García Treviño de Mallas, Juan Antonio, gitanos.	Cuatreros.	-
1712	Juan de Martos, gitano (?).	Reclamado en Andalucía.	-
1712	Juan y Jerónimo de Frías, vs. Malagón.	Rozar y quemar monte.	-
1712-13	Alonso Mateos.	-	-

1712-15	Sebastián Rodríguez, v. Nérpio.	-	Inmunidad
1712-15	Andrés González Urriaga.	-	Presidio.
1713-15	Juan Vayón, v. C. Real.	-	Presidio.
1714	Andrés "el estudiante de Oreja", v. Daimiel.	-	Preso por H. Toledo.
1714	Juan Tirado, 60 años, e hijos: niño Diego, y Juan, de 16 años; esquiladores, gitanos de Almodóvar Campo.	Incumplimiento de pragmáticas.	Gastos+ costas.
1714	Luis Lozano, v. Villanueva de Infantes.	Abigeatos.	-
1714	Juan de Argibes, su cuñado, v. Villanueva de Infantes.	Abigeatos.	Muere en detención.
1714	Cuadrilla de 20 gitanos.	Bandolerismo.	-
1714-15	Domingo Palomares de Campos v. Úbeda; Mateo Guerrero, v. Ibros.	Hurtos y abigeatos.	4 años de presidio.
1714-15	Juan Jiménez, n. Carca (Navarra), 60 años zapatero remendón; Joseph Jiménez, su esposa, aragonesa, 60 años de edad; M ^{te} Josepha Jiménez, "se alimenta de ylar y coser" Antonia de Aranda, de 10 años e hijas de los anteriores; Tomás Urtazábal, v. Briones, 40 años, zapatero remendón, tamborilero errante.	Quebrantamiento de pragmáticas.	-
1714-15	Juan Fernández, 40 años, herrero andaluz; Salvador Flores, bracero sevillano, 30 años; castellanos nuevos.	Trueques de bestias en feria Villacarrillo.	-
1715	Alonso García Recio, Juan Pérez Montero, alcaldes de Paterna de la Rivera.	Tolerancia de gitanos.	-
1715	Miguel Montoya, gitano de Andújar .	Encubrir a ladrón fugado.	-

1715	2 gitanos.	Suplantar a comisarios y robos en descampado.	-
1715	Luis de Vargas e hijos: Juan Miguel, Ignacio, Diego y Luis; Pedro Romero y 3 hijos; gitanos de Baza.	Hurtos acuatrillados.	-
1715	Eusebio y Pedro Martínez, vs. Urda.	Incendios en montes, dehesas y colmenares.	-
1715	Francisco Santos e hijo vs. Jerez de la Frontera.	Triple asesinato, auxilio a deserción.	Rebeldía.
1715	Pedro Recuero, comisario de Córdoba.	Embargos irregulares.	-
1715	Cuadrilla de gitanos.	"trueques y baratas".	-
1715-16	Sebastián Rodríguez.	Abigeato.	-
1715-16	Alonso Mateos, v. Puerto de Santa M ^a , gitano contrabandista.	Prófugo, mata a madre del alcaide hermandino.	Rebeldía.
1715-16	Don Gabriel Rico Valle, comisario de 40 años; don Bartolomé de Baena Laso vs. Huelma; contrabandistas.	Abusar de su cargo y excesos contra cabildo.	Rebeldía.
1715-16	Juan Calvache.	Homicidio en yermo.	200 azotes+ 10 años de galeras.
1715-16	Gregorio López.	Robo con asesinato.	idem.
1715-16	Sebastián Pascual.	Robo calificado.	2 años de destierro.
1716	Juan Blasco Barba.	Robo con asesinato, prófugo.	10 años a Melilla.
1716	Juan Brabo.	Prófugo.	-
1716	Juan de Espadas, v. Córdoba.	-	-
1716	Gabriela, gitana.	Hechicera amancebada.	Excrcelada.
1716	Joaquín Fernández, "ombre de mucho arresto".	Violador y homicida.	-
1716	Blas Fernández,	Homicidio.	8 años a

	v. El Romeral.		galeras.
1716	Felipe Fernández, padre del anterior.	Homicidio.	Inmunidad.
1716	Juan González Bazán.	Robos y asaltos.	6 años a galeras.
1716	Esteban Fernádes, pastor portugués.	Hurta enseres a amo, prófugo.	-
1716	Sebastián Carbonell.	-	-
1716-17	Antonio de Montoya; su esposa Jerónima de Frías su hija Melchora y su cuñada Catalina Josepha, gitanos.	Faltar a pragmáticas.	Gitanas desterradas.
1716-17	Bernardo José, gitano.	Vagabundear acuadrillado.	6 años a galeras.
1716-22	Juan y Luis de Montoya, gitanos Jerez de la Frontera.	Abigeatos y tratos.	-
1717	Gitanos de Antequera.	Comerse a un niño (!).	-
1717	Antonio del Hoyo, criado de Santa Cruz Zarza.	Hurto de semillas y aperos a su amo.	6 años a galeras + costas.
1717	Francisco Muñoz v. Alcalá La Real.	Heridas en yerno.	-
1717	Sebastián Fernández, Sebastián León, su hijo gitanos del Toboso; Francisca de Estrada, viuda e hijos: Diego y Andrés, Josepha y Francisca; su cuñada Angela Terré, gitanos esquiladores.	Cuatreros.	Destierro de gitanas a Portugal.
1717-18	Juan del Arroyo, Juan de Heredia, su yerno, canasteros, esquiladores, temporeros gitanos de Málaga.	Infringir pragmáticas.	-
1717-18	Alonso Mateos, v. Quintanar de la Orden; Sebastián Rodríguez.	Prófugos de galera hermandina.	-
1717-20	Andrés Farfán, Juan Martín, Jerónimo y Agustina,	Vagar acuadrillados.	-

Pedro González,
 Pablo Joseph Chacón,
 Antonio Merino,
 Juan Antonio Rodríguez,
 gitanos (?).

1718	Corregidor Torre de Alchime.	Estafar a comisario.	A Granada.
1718	José Pacheco "Pulga", Francisco Pacheco su hermano.	Homicidios y robos.	-
1718	Don Ildefonso Cervantes "el Cojo", v. Santa Cruz de la Zarza.	Cuadrero y bandolero.	-
1718	Juan González, 34 años, ex-soldado del reg. Nápoles.	Bandolero en Sierra Morena y Badajoz.	-
1718	Andrés de Acosta Ferreiro, gitano portugués, v. Zafra, casado, maestro de niños.	Contrabando bestias.	-
1718-19	Matías Azañón "Tierra", v. Granátula.	Abigeatos.	6 años a galeras+ costas.
1718-19	Alonso Pérez Carrasco, su esposa M ^a Ribera, vs. El Almendro; Manuel, pastor portugués.	Parricidio.	-
1718-19	Francisco de Fuentes.	-	-
1718-19	Matías Azañón.	-	Galeras.
1718-20	Antonio del Hoyo.	-	Galeras.
1718-23	Felipe, Blas, y Francisco Fernández.	-	-
1718-23	Sebastián Rodríguez.	-	-
1718-23	Juan Fernández, gitano de Jimena Frontera.	Contravenir pragmáticas.	-
1718-23	Juan Ximénez Baraona, gitano herrero de Yunquera.	Contravenir pragmáticas.	-
1718-23	Juan Jiménez de Heredia, hitano herrero de Coín.	Contravenir pragmáticas.	-
1719	Gitanos de Úbeda y Baeza.	Cuadreros protegidos.	-
1719	Gabriel Fernández,	Tolerar excesos de	Recogida de

	comisario de Javalquinto.	castellanos nuevos.	su título.
1719	Francisco Alonso.	Resistencia a justicia asesino sacrilego.	-
1719-20	Francisco Fajardo, Roque y Francisco de Herédia, gitanos de Lebrija.	-	-
1719-20	Bartolomé Jurado Rabel, v. Espejo.	Hurtar aves de corral.	4 años de destierro+ 4 de presidio
1719-20	Alonso Montero "Pajarito", alcalde Espejo y comisario.	Hurtar aves de corral.	Recoge título + 100 ducados
1719-21	Juan Navarro, Mª de Encarnación "Bayona" gitanos de Sevilla.	Amancebamiento y asesinato.	A Audiencia sevillana.
1719-21	Pedro Gómez, Pedro de Torres, parientes de "la Bayona".	Intentar vengarse de amancebado.	-
1720	Manuel Sánchez Portilla, herrero/armero de Pozuelo; Juan Sánchez, ciudarrealeño primo del anterior.	Pendencia en camino.	Absolución por apartarse
1720	Francisco Ramos, v. Puerto Real, ventero.	Negar auxilio a ministro hermandino.	-
1720	Francisco Fajardo, v. Logroño; Roque y Francisco de Heredia vs. Almazán, hermanos pobres.	Robos y trueques de cabalgaduras.	Pérdida bienes para costas.
1720	Gonzalo Martín, alias "don Mauro de León", v. Canillas del Aceituno.	Asaltar acuadrillado.	-
1720	Toribio de Grijuela, juez-comisario santanderino, v. Navalcarnero, 28 años, carpintero, soltero; Manuel Gª de la Dehesa, criado del anterior; Andrés de Carratala, valenciano; Joseph de Soto, burgalés.	Extorsionar gitanos.	-
1720	Francisco, v. Madrid.	Asalto a mercader.	-
1720	Antonio del Hoyo.	-	Presidio (?).

1720-21	Juan de Montoya, patriarca Luis de Montoya y esposa; Manuela de Montoya Antonia y Agustina Asensio; Diego Asensio y esposa; Francisco Asensio.	Incumplimiento de pragmáticas.	Costas y apercibimiento
1720-21	Luis Miguel Montilla; Martín de Quesada, gitanos de Úbeda.	Cuatreros.	-
1720-21	Juan Ortiz Donador, v. Luque.	Cuadrero, prófugo.	-
1720-21	Miguel de los Reyes, gitano de Baena.	Cuadrero, prófugo.	Inmunidad.
1721	2 gitanos de Puertollano.	Estafas.	Absueltos.
1721	Alcaide de Marmolejo.	Cohecho.	200 ducados.
1721	Andrés Días Palacios, gitano de Ciudad Real.	Encubrir gitanos.	-
1721	Juan de Oñoro, v. Malagón.	Reiterados abigeatos.	"Difunto".
1721	Diego de Soto, 16 años, herrero, gitano de Triana (Sevilla).	Trocar caballerías,	-
1721-22	Joseph Sancho, manco v. Burgasot (Valencia).	Cuadrero y ladrón.	10 años de destierro+ costas.
1721-22	Alfonso y Pedro de Rama, padre e hojo, vs. Iznájar.	Abigeatos, hurtar trigo, prófugo.	Rebeldía.
1721-22	Francisco Almeida, criado del conde de Palma, casado con 2 niñas, gitano lisboeta.	Faltar a pragmáticas fugado al sobornar al alcaide.	-
1721-23	Juan de Fuentes, + 50 años, v. C. Real, colmenero, manco.	Hurto de colmenas y de cáñamo.	12 años de destierro+ gastos/costas
1721-23	Juan Moreno, menor curtidor de Villarrubia.	Ocultación robos.	1.500 mrs+ gastos/costas
1721-23	José de Calahorra Poblete, notario ciudarreal.	Encubrir robos.	Absuelto+ costas.

1722	Alfonso y Pedro de Rama, vs. Linares.	Portar armas ilegales.	-
1722	Francisco Hidalgo y Carlos González, vs. Lucena.	Portar armas ilegales y hurto de mieses.	-
1722	Francisco, v. Salamanca; Eugenio Martín Leganés, v. Quintanar de la Orden, "los Nietos", comisarios.	Estafar y abusos de autoridad en empleo.	-
1722	Salvador del Arroyo, Don Diego Corona y Rojas, vs. Linares.	Hurto de trigo y reses.	-
1722	Antonio Ramírez y Joseph Jiménez, andaluces.	Allanar cortijos.	-
1722	Joseph Tirado, v. Lucena (?).	-	-
1722	Miguel Gª Cebrián Castro, v. Villa del Río, temporero acarreador/esquilador.	Trocar caballerías.	Absuelto+ costas/gastos
1722	Manuel Barahona.	-	-
1722	Diego Giménez.	-	Galeras.
1722	Francisco Bautista.	-	Presidio.
1722-23	Juan Moreno, v. Villarrubia de los Ojos.	Hurto de colmenas.	-
1722-23	Juan de Fuentes.	-	-
1722-23	Joseph Casado "el Valenciano", v. Miguelturra.	Homicidio de arriero.	Absuelto.
1722-23	Juan de Oñoro.	-	Libre+Fianzas
1722-23	Juan Gª de León "el Valenciano".	-	-
1722-23	Blas Fernández.	-	Inmunidad
1722-23	Manuel Díez Torrero v. Valdepeñas.	Cuadrero.	-
1722-23	Joseph Corada y hermano, vs. Santa Cruz Mudela.	-	-

1722-23	Felipe Ruiz.	-	-
1723	Bernardo G@ Caballero.	-	-
1723	Blas de Merlo, v. Valdepeñas.	-	-
1723	Juan Torres Carrillo, Manuel de Heredia, Luis Cortés, Manuel Fernández de Montes, Joseph y Sebastián de Molina.	Cuatreros, escaladores, portar armas prohibidas.	-
1723	Antonio Gómez, v. Grazalema.	Portar armas de fuego. A Granada.	
1723	Joseph y Fco de Aguilera, v. Alozáina.	Desertores bandoleros.	-
1723	Pedro y Francisco Linares, Pedro Martín, vs. Campillos.	Estafas, homicidios, resistencia a justicia.	-
1723	Joseph Molina, gitano.	Bandolerismo.	Libre+Fianza
1723	Sebastián de Molina, Juan Torres Carrillo, Manuel de Heredia, Luis Cortés Manuel Fernández Montes, gitanos andaluces.	Bandolerismo.	-
1723	Joseph de Aguilar "Guitarrón", andaluz.	Desertor reg. Rosellón, prófugo y bandolero.	-
1723	Cristóbal Rivero "el Mariano", v. C. Real.	Cuatrero de yeguas.	-
1723	Felipe Fernández de Simón, v. El Romeral.	Robo y homicidio.	-
1723	Blas Fernández, menor hijo del anterior.	-	Inmunidad.
1723(?)	Blas Barba, v. Capilla.	Sustraer mieses.	Rebeldía.
1723	Manuel de Coca, escribano de Miguelturra.	Falsificar autos procesales.	-
1723-24	Pedro Ramalejo, v. Úbeda; Ginés de Ramos, andaluz.	Cuatreros	-

1724	Francisco Bonilla, v. Mecina de Bomacón (?).	Homicidio en yermo.	A Uguíjar.
1724	Alono Rodríguez, gitano de Llerena.	Trocar cabalgaduras.	-
1724	Roque Díaz de Roque, v. El Moral.	Cuadrero.	-
1724	Manuel de Pisa, v. Bolaños; Simón de Pisa, v. C. Real.	Hurto de paños en batán y raterías.	Apartamiento.
1724-27	Joseph Morales e hijo, vs. Piedrabuena.	Hurto de colmenas y evasión de cárcel.	-
1725	Don Francisco de Ojeda, juez superior granadino.	Cohecho y apadrinar castellanos nuevos.	-
1725	3 Gitanos y ventero Cazín.	Salteadores caminos y amancebados.	Azotes + galeras.
1725	6 gitanos en Retamar.	Robo sacrílego.	-
1725	Portugués.	Homocida sacrílego.	-
1725	Gitanos de las Alpujarras.	Cuadreros y robos.	-
1725	Felipe de Campos, su esposa M ^a de Gálvez y su cuñada Fca Ximénez Gálvez, casada con Fco Bermúdez.	Engaños diabólicos y hechicerías.	-
1725	Joseph y Domingo Corada, jueces-comisarios; Juan de Muelas, santero; Jerónimo Garrido.	Homicidio.	Absueltos al apartarse la querella.
1725	Juan de Torres, v. Villamejía.	Cuadrero, escalador, hurto de grano.	A Granada.
1725	Francisco Moreno, mayoral andaluz.	Hurto 600 cabras a amo, estupro, envenenar a esposa.	Excarcelado en Granada.
1725-26	Antonio Tirado, su esposa Francisca Vargas e hijos, gitanos de Almagro.	Trueques y estafas.	Absueltos.
1725-26	Juan de la Cruz.	-	-
1725-26	Diego Francisco, gitano.	-	-
1725-26	Gaspar Melo, Diego Francisco de Aranda, gitanos.	-	-

1725-26	Martín de Quesada y Miguel de los Reyes, vs. Andújar.	-	-
1725-26	Ignacio Ruiz, v. Chiclana.	-	-
1725-26	Juan Álvarez, v. Ballesteros (?).	-	Inmunidad.
1725-26	Félix Pín y compañero.	Robar paños a tratante.	-
1725-26	Rodrigo Vázquez Valdeón "Galván", v. Jimena Frontera.	Cuadrero y raterías.	6 años de presidio.
1725-27	Francisco Pérez, gitano de Gibraltor (?).	Latrocinios.	6 años de destierro.
1725-30	Andrés de Palacios, Pedro Andrés Pérez, Martín Pérez, Alejandro Fernández, gitanos de Puebla Alcocer.	Prófugos.	Rebeldía.
1726	Francisco Simón.	Ladrón sacrilego, huido.	-
1726	Joseph "el Capón", su esposa Antonia; Pedro Alonso González "el Saludador, su esposa Josefa Sánchez, tenderos extremeños.	Hurtar lienzos.	-
1726	Don Matías de Aguilera, v. Miguelturra.	Agresión en descampado.	-
1726	Juana de Asensio "la Rabona" gitana andaluza.	-	-
1726	Pedro Fernando, Diego Agustín de Montoya Francisco Antonio de Aranda Antonio Gaspar González gitanos andaluces.	Robos, asesinatos y extorsiones.	-
1726	Pedro Carrasco, v. Torremilano.	Trocar caballerías.	Absuelto.
1726	Manuel de Quirós, labrador de 80 años, e hijos: Juan, bracero de 30 años; Manuel, bracero de 19 años; Nicolás, bracero de 18 años; Juan Manuel, niño.	Vagabundear.	Absueltos+ costas.

1726	Gitano de Fuente del Maestre, bracero de 20 años.	Faltar a pragmáticas.	Inmunidad.
1726	Juan Moreno, v. Medellín, gitano bracero de 20 años.	Faltar a pragmáticas.	Absueltos+ costas.
1726	Pedro Villalón, granadino.	Heridas en descampado.	-
1726	Juan Antonio de la Cruz.	Asaltar en yermo.	10 años a galeras.
1726	Don Juan de Moya, v. Almadrones.	Asaltar en yermo.	Rebeldía.
1726	Bartolomé Muñoz "Cabrero".	Asaltar en yermo.	Rebeldía.
1726	Francisco García, Joseph de Malla, Alfonso del Campo, Juan Antonio, gitanos.	Allanar morada.	Galeras+ azotes+ pérdida de bienes.
1726	Felipe Ventura, esclavo africano, 22 años, soltero.	Fugitivo.	Devuelto a su amo.
1726	Miguel de Cabrera	Estupro de doncella.	-
1726	Juan Sánchez, v. Ballesteros.	-	-
1726	Apolonia María, Rosa Flores, gitanas de Trujillo.	Vagabundear.	Excarceladas.
1726	Antonio Oliva, v. Habla (Cenete).	Bandolero, prófugo.	-
1726-33	Don Juan Bruno de Aranda y Puertas, juez-comisario de Antequera.	Excesos en su oficio.	A Granada.
1726-27	José Díaz, v. Guadalupe, Alfonso Pérez, v. Burgos.	Robo en feria Zalamea.	Inmunidad.
1726-27	Juan Núñez "Seis Uñas", v. Cabeza del Buey.	Bandolero homicida, incendio de montes.	A Granada.
1726-28	Leonor M ^a de Malla, gitana, + 60 años.	Auxilio a evasión.	10 años de destierro.
1727	Francisco Torre, Francisco Salazar.	Prófugos de Minas.	Inmunidad.
1727	Sebastián Alonso,	Cuatrero.	-

v. Huelva.

1727	Francisco Pérez, gitano.	-	Azotes.
1727	Joseph Rodríguez, v. Las Casas.	Abigeato y venta de reses robadas.	-
1727	Joseph de Roxas, gitano de Carcabuey.	Prófugo, ladrón, amancebado.	Galeras+ azotes.
1727	Francisco Cabrera "Flores" gitano herrero/bracero.	Portar armar cortas e intento de homicidio.	-
1727	Francisco Córdoba, v. Archidona.	Abigeatos.	Libre+fianza.
1727	Don Gaspar Gómez Navarrete Gutierrez, v. Riogordo.	Encubrimiento robos.	-
1727	Don Francisco de Artiaga, alcalde de Antequera.	Cohecho, encubrir a yerno encausado.	-
1727	Joseph Salcedo, escribano de Antequera.	Tolerar excesos.	-
1727	Don Alonso Gutiérrez, v. Antequera.	Ladrón y encubridor.	200 ducados
1727	Don Francisco Gómez, v. Antequera.	Connivencia con ladrón.	-
1727	Francisco Antonio Guerrero v. Archidona.	Intento de soborno.	-
1727	Sebastián Segura, andaluz.	Cuatrero.	Inmunidad.
1727	Juan Jiménez.	Robos, agigeatos y quebrantar destierro.	-
1727	Antonio y Alonso Segura, hermanos carniceros.	Vender/pesar reses hurtadas.	-
1727	Francisco Simón, v. Castrofinojo.	Latrocinios.	A justicia ordinaria.
1727	Juan Adjimiro de Aguilera, v. Aracena, con antecedentes.	Abigeatos.	-
1727	Juan Cristóbal Albarracín, Mateo Sastre, vs. Zufre.	Hurtos y robos.	-
1727	Diego Musgo, Francisco Serrano, vs. Alanís.	Cómplicidad en robos y abigeatos.	Absueltos + gastos.

1727	Joseph Solís, estanquero de Alanís.	Perista.	Rebeldía.
1727	Pedro García Caballero, v. La Calzada.	Abigeato yunta bueyes.	-
1727-28	Martín Gómez, esclavo de +50 años, v. Don Benito.	Hurto de un pollino.	20 años de destierro.
1727-28	Don Juan de Padilla.	-	-
1727-28	Juan Antonio de la Cruz.	-	Azotes.
1727-28	Antonio Tocados.	-	-
1727-29	Antonio Manzano v. Constantina.	Latrocinios	Muere en cárcel.
1728	Juan de Quirós, Francisco Bautista, gitanos.	-	-
1728	3 pastores de Consuegra.	Forzar doncella.	Rebeldía.
1728	Vecino de Valdepeñas.	Hurto de bueyes.	Rebeldía.
1728	Juan Martín Peinado "el Mono", v. Arroba (?).	-	-
1728	Tomás Hernández, v. Jerez de los Caballeros.	-	-
1728	Don Pedro de Sotomayor.	Estafar fingiéndose indiano acaudalado.	-
1728	Bartolomé Arroyo, gitano.	-	-
1728(?)	Miguel de Calatrava.	"Delitos atroces".	-
1728	Alonso Cañavero Picazo v. Villagarcía.	Estupro de doncella, fugado de cárcel local.	-
1728	Blas Navarro y Gregorio Villena, vs. Villagarcía.	Auxilio a evasión.	-
1729	Juan Quintanar, comisario Robar a aguadores. Andrés González de Urriaga vs. Torrelobatón(Palencia).		Devolver su título.
1729	Ignacio Agustín Cuevas, v. Cazorla.	Latrocinios.	-
1729	Alfonso de Rama.	Prófugo.	-
1729	Tomás Antonio Fernández,	Robos y asesinatos	10 años de

	asturiano v. Usagre.		presidio.
1729-30	Santiago Salgado, Pedro Casado, gallegos vs. Granada.	Intentar asaltar a paisanos en camino.	Absueltos.
1729-30	Juan de la Orden Bartolomé v. Lugar Nuevo.	-	-
1729-30	Antonio Hernández.	-	-
1729-30	Bartolomé de Manzanares.	-	-
1729-30	Gabriel Gil, gitano de Alía.	-	-
1730	Juan "el Merino"; Joseph Fernández "el Zurdo" y homicidios alevosos. v. Saelices; un mulato; Juan Antonio; don Gabriel de Hermosilla, alférez caballería v. Tarragona.	Asaltos en yermo, robos	-
1730	Alonso Sánchez Hernández, Resistencia a justicia. salmantino, v. Lucena, con antecedentes penales.		-
1730(?)	Juan Baeza, guarda de campo.	-	-
1730-31	Alonso Páramo, v. Córdoba Antonio Medina, v. Valladolid.	Sustracción de paños a mercader en feria de la Guaitoca.	-
1730-33	Antonio de Quirós "el Sordo", v. Arroyo de San Serván.	Contravenir pragmática hurtos, resistencia a la justicia.	200 azotes+ 10 años de galeras.
1730-33	Francisco Fernández, Luis de Vargas, gitanos.	-	8 años de galeras.
1730-33	Francisco Romero.	-	10 años de galeras.
1730-33	Juan Francisco González.	-	8 años de galeras.
1731	Cristóbal de Vargas.	-	-
1731	Juan y Pedro Tirado.	-	-
1731	Sebastián Alarcón.	Hurto de cera en Lezuza.	-

1731	Francisco Montoya, gitano.	Latrocinio.	Absueltos+ gastos.
1731	Don Francisco Herraor.	Homicidio alevoso.	-
1731-32	Gabriel Gil Moreno, v. Navalucillos.	Hurtos de cera.	200 azotes+ 8 años de galeras+costa
1732	Francisco Romero, gitano.	Asaltar acuadrillado.	-
1732	Miguel Sabuquillo González v. Campillo Altobuey.	Prófugo, cuatrero, ladrón de colmenas.	Rebeldía .
1732	Juan Sabuquillo Real, juez superior de Campillo.	Protección a pariente delincuente.	Libre+fianza
1732	Francisco Pozuelos, v. Ciudad Real.	Heridas a convecino.	Apartamiento Libre+costas.
1732	Sebastián Heredia, Antonio Jerónimo Maldonado, gitanos braceros Villaminaya.	Hurtos y trueques.	200 azotes+ 6 años de galeras.
1732-33	Francisco Reyes Cortés, Francisco de los Santos, gitanos braceros de Castuera.	Trocar caballerías y vagar acuadrillados.	6 años de galeras + requisa bien.
1732-34	Manuel González, gitano.	-	Inmunidad.
1732-34	Andrés Bautista, Manuel de Heredia, gitanos de Campanario.	Prófugos.	Rebeldía.
1733	Cristóbal Rodríguez.	Abigeato de 3 cerdos.	3 años de destierro + costas.
1733	Juan de Montoya, gitano.	-	8 años de galeras.
1733	Diego Morales.	Cuatrero y abigeo.	-
1733-34	Juan Serrano Rivera, comisario Villahermosa; Felipe Villar.	Homicidio en Socuéllamos.	-
1734	Alfonso Carrillo, tratante de La Calzada.	Abigeatos reiterados, vagar acuadrillado.	2 años de destierro.
1734	Alonso Salvador, v. Rena (?).	Prófugo.	-
1734	Juan de Malla,	Prófugos.	Rebeldía.

Diego Morales,
vs. Calzada de Calatrava.

1734	Juan del Río, su esposa Manuela Romero, vs. Ciudad Real.	Receptar bienes de un gitano indiciado.	Destierro perpetuo+ costas.
1734-35	Juan Pizarroso "Mariquera" v. Almadén.	Cuadrero, hurto grano.	6 años de galeras.
1734-35	Juan Parral, v. Gargantiel.	Abigeatos y hurtos.	6 años a presidio.
1734-35	Juan Sánchez, zapatero.	Complicidad en abigeato.	-
1734-35	Antonio de la Calle, v. Almadén.	Complicidad en abigeato.	-
1735	Juan del Ama, Francisco Cerrato.	-	-
1735	Juan Vaquero, su hijo Bernardo López, Juan Fco Caja Cabanillas.	Ladrones, huir de la cárcel de Garlitos.	Rebeldía.
1735	Miguel "el Seco".	-	-
1735	"El manco de Ballesteros".	-	-
1735	Pantaleón Talavera, ciudadrealeño, mayoral del marqués de Peñafuente.	Abigeato de 8 cerdos.	8 años de destierro+ costas.
1735-36	Miguel Cabanillas, v. Saceruela.	-	330 rs. multa
1735-36	Juan Serrano "Montero".	Prófugo.	Rebeldía.
1735-36	Juan de Luque.	-	-
1735-36	Juan Sánchez Serrano, enfermo, v. Zalamea.	-	-
1735-36	Gitanos de Murcia y Orihuela.	-	-
1735-36	Felipe Villar, v. Vva de los Infantes.	-	-
1735-36	Juan del Río, v. Villahermosa.	Homicidio de convecino.	-
1735-36	Pedro de Vera.	-	Presidio.
1735-36	Juan Sánchez Barroso.	-	Presidio.
1735-36	Juan Romero,	-	Absuelto.

v. Fernán Núñez.

1735-36	Diego Losada.	-	-
1735-36	Manuel "el Valenciano".	-	-
1735-36	Diego Pardo.	-	-
1735-37	Francisco Jaén.	-	-
1735-37	Felipe Villar, enfermo.	-	-
1736	Pedro y Juan Chinchilla.	-	-
1736	Miguel Calvo y Juan Ávila. Prófugos.		Inmunidad.
1736	Juan Calvo. Prófugo.		Inmunidad.
1736	Francisco Vicente Antequera.	-	-
1736	Diego de Malla, gitano (?).	-	-
1736	Juan Pizarro, Juan Parras y Diego de Vega.	-	-
1736	Diego Rallón, v. Miguelturra.	-	-
1736	Luis de los Reyes Salazar Resistencia a justicia. Heredia y su yerno Gaspar, gitanos de Morón Frontera afincados en Ronda.	-	-
1736-37	Juan de Luna.	-	-
1736-37	Don Miguel Angel Infante Tolerancia a gitanos. don Benito Infante, comisarios de Estepona.		Despojo de títulos.
1736-37	Juan Nicolás Serrano.	-	-
1736-37	Diego Pardo.	-	-
1736-37	Francisco Vicente.	-	-
1636-37	Juan Manuel Serrano Robos en yermo, huido. Chacón "Juan Montero".		Rebeldía.
1736-37	Juan Francisco de Luque.	-	6 años de destierro.
1736-37	Bartolomé Salán, v. Fernán Núñez; Tomás de Aranda, Acudrillarse para asaltar a trajinantes en caminos anadaluces.		Rebeldía.

v. Marchena;
 Antonio Moyano,
 v. Montilla;
 su cuñado Romero,
 v. Marchena;
 Juan Rejano y su hermano,
 vs. Estepa.

1736-38	Antonio Vicente del Río.	-	-
1737	Juan López del Barco Grande Trocar cabalgadura. Barajas, v. Campo de Criptana trajinante de géneros de paño.		Absolución+ costas.
1738	Mateo, v. Pozuelo de Cva.	-	-
1738	Juan Lozano, Cristóbal de Campos, Andrés Moreno, Alonso Pitielano, vs. Lucena.	Hurtos de aceituna, aceite y carne.	-
1738-39	Francisco Sánchez de Pablo.	-	Ejército.
1738-39	Juan Muñiz (o Núñez) v. Don Benito.	Expolios a pastores.	10 años de destierro.
1738-39	Juan Muñiz (o Núñez), menor hijo del anterior, v. Don Benito.	Expolios a pastores.	6 años de presidio.
1738-39	Juan Ruiz de la Capellana.	-	-
1738-39	Felipe Villar.	-	-
1739	Marcos del Castillo, 43 años colmenero ciudarrealeño.	Hurtar en colmenas de su amo.	4 años a pre- sidio Ceuta.
1739	Francisco Ruiz, el menor, Diego Gallego, vs. Capilla.	Robo de colmenas a convecinos.	-
1739	Francisco, Juan y Manuel Sánchez de Pablo, hermanos de Espinoso del Rey.	Hurto de colmenas en Navalucillos, prófugos salvo uno.	Rebeldía; Manuel a ejército.
1740	2 gitanos de 24 y 26 años.	Vagar vestidos de mujer faltando a pragmáticas.	-
1740-41	Juan Tiburcio de Heredia, Joseph Tirado, Manuel Casado, gitanos de Heredia.	Robar a una viuda.	-

1741	Diego González "Chicharrón".	Ladrón prófugo.	Libre+fianza.
1741	Pedro de la Vega, Joseph Fernández, Cristóbal Mogaño.	Cuatreros.	-
1741-42	Gonzalo del Moral Pedro Aznar, vs. Alcázar de San Juan.	Armas prohibidas, homicidio para robar.	A Corte.
1741-42	Juan, Miguel y Andrés Buitrago.	-	-
1741-42	Juan Tiburcio e hijo, gitanos de Herencia.	-	Muere padre asilado.
1741-42	Joseph Tirado "Pelos", su esposa M ^a Fernández, su suegra Ana González, gitanos.	Incumplir pragmática.	Inmunidad.
1742	Pedro Aznar "el Manco" y Manuel Fernández, gitanos.	Incumplir pragmática.	Presidio de Orán.
1743-44	Cosme Damián.	-	Presidio.
1744	Antonio Morales Monje v. Hinojosa de Córdoba, arrendatario "diezmo menudo"; Juan de Velasco, Juan Tomás Durean, vs. Fuenteovejuna; Francisco Mateos, v. Constantina.	Robos sacrilego del arca censos eclesiásticos.	-
1744-45	Cristóbal Hidalgo de Calcerrada, juez superior v. Ciudad Real.	Embargos irregulares de caballerías a gitanos.	-
1744-45	Joseph Panizo.	-	-
1744-45	3 vecinos de Urda.	-	-
1744-45	Joseph Cantero.	-	-
1745	Diego Lozano, Juan Joseph y Juan Suárez, Diego de Vega, gitanos.	Cuatreros en Fuenteovejuna.	-
1745	Teresa de Jesús Quirós, Catalina Fernández, gitanas.	Vagadundear.	Libres+fianza
1745	Juan Miralles, Juan Ignacio Rincón.	Abigeatos, portar armas prohibidas.	-

1745-50	Joaquín del Campo, arrendador	Incumplir contrato.	-
	asadura del Viso del Marqués.		
1746	Estrada, ventero gitano de Eras Viejas.	Portar armas vedadas, fingirse comisario, trocar caballos robados.	-
1746	Agustín Solache, v, Olvera (Sevilla).	Robar paño en feria de Consuegra.	-
1746	Manuel de Simancas Herrada "el de la Felipa".	Raterías.	Libre+aper- cibimiento.
1746	Juan Flores, colmenero de Malagón.	Hurtar un jamón.	Libre+aper- cibimiento.
1747	Juan de Dios, ventero de Guadalerza, perceptor de la asadura hermandina.	Incumplir contrato.	Apercibido + costas.
1747	Joseph Alcázar.	-	-
1747	Antonio Morales.	-	-
1747	Simón de Justos, lobero de Valdepeñas, limosnea con una perra amestrada en la Corte.	-	-
1748	Partida de gitanos.	Robos en caseríos.	-
1748	Antonio Almansa.	Robo en Madridejos.	-
1749	Joseph Díaz, calderero ciudarrealeño.	Impago arriendo tienda.	-
1749	Francisco García, hortelano ciudarrealeño, albéitar.	Impago arriendo tienda.	-
1749	Francisco de Roscas.	Pirómano en Malagón.	-
1749	Diego Merle Notario, barbero Francisco Martín de Aranda, jornalero, vs. Madridejos.	Robo sacrílego	-
1749-50	Joseph de Alcázar.	-	-
1749-50	Francisco Delgado, juez comisario de Écija.	Excesos en el empleo.	-
1749-50	Francisco Muñoz de Vergara.	-	-
1749-50	Don Manuel Delgado,	-	-

	v. Sevilla.		
1749-50	Antonio Morales Monje e hijo, vs. Hinojosa Córdoba.	Robos, asalto con escalo, sacrílegos.	-
1749-50	Vecino de Herencia.	-	Presidio.
1749-50	Baltasar Carrión	Abigeato de una oveja.	-
1749-50	Antonio Morales Monje.	-	-
1750	Cuatro hombres.	Robo a parroquia Abenójar.	-
1750	Juan Muñoz de Vergara, notario de Écija.	Estafador.	Libre+fianzas
1750	Francisco Xavier de Gálvez.	Hurto de miel y cera, quema corchos en Córdoba.	-
1750-51	Juan de Muras, enfermo v. Vélez Rubio.	Asesinato de un vecino de Ajofrín.	-
1751	Santiago Ruiz de la Pasión v. Piedrabuena.	Hurto miel y cera en término de Alcolea.	-
1751	Don Diego Muñoz y Vera, hermano del Santo Tribunal.	-	Libre+fianza
1751	Juan de Muras, v. Vélez Rubio.	-	-
1751	6 vecinos de Carrión de Cva.	-	-
1751	3 vecinos de Ciudad Real.	-	-
1751	Alfonso Corto.	Prófugo.	Rebeldía.
1751	Vicente Oreja, alcaide hermandino.	Negligencia en empleo.	-
1751	Sebastián Joseph Flor y su hijo Manuel Martín, vs. Santa Cruz de Mudela.	Robo de cera.	Excarcelados.
1751	Francisco Javier García, labrador de Picón.	Quebrantar pajar.	Libre+fianza
1751	Sebastián de Espadas, Antonio Moreno, Francisco Ruiz, vs. Ciudad Real.	Hurto de tela.	-
1751	Alfonso Corto, Francisco de Burgos.	Robar aceite en molino.	-

1751	Juan Bermúdez de Mestanza.	Falsificar título de la Hermandad y estafar.	-
1751-52	Francisco Delgado.	-	-
1751-52	Juan Muñoz de Vergara.	-	-
1751-52	Vecino de Ciudad Real.	Cuadrero.	-
1751-52	Pedro Bernal.	-	Vergüenza pública+ 4 años a hospital presidio.
1751-52	Francisco "Mal Pelo", Joseph Chacón, vs. Azuaga; Bartolomé Moral, v. La Granja; Joseph Moreno, v. Navalucillos.	Robos en despoblado.	A Córdoba.
1752	Pedro y Manuel Roldán, Juan Sánchez, Francisco Serrano, Diego Jurado, Joseph de Rivas, vs. Miguelturra.	Resistencia a la justicia.	Inmunidad.
1752-54	Antonio Cardos, Juan Vera, vs. Luciana.	Hurto colmenar, robos y asesinatos.	-
1753	Félix Mellado, Antonio Rivera, vs. Écija.	Asaltar a zapateros ciudarrrealeños.	-
1753	Francisco Javier, v. Jerez de la Frontera.	Asalto en despoblado.	Rebeldía.
1754	Antonio Gómez Rabadán.	Destrozar colmenas en 6 años de término Piedrabuena.	destierro.
1754	Andrés y Eugenio Cepeda.	Destrozar colmenas en 4 años de término Piedrabuena.	destierro.
1754	Juan de Miguel, Antonio "el Soldado", vs. Villamayor de Calatrava.	Hurto de cera y destrozo de corchos.	Rebeldía.
1754-55	Manuel Ordóñez, Catalina Muñoz.	-	-

1754-55	Manuel Ordóñez, Catalina Muñoz.	-	-
1754-55	Antonio Cardos.	Prófugo.	Rebeldía.
1754-55	Juan Damián "Juanaco", gitano.	Incumplir pragmática, robos y estafas.	-
1754-55	Joaquín Laguna, v. Almagro.	-	-
1754-55	Juan de la Herrera Garrido.	-	Presidio.
1754-55	Manuel de Vargas.	-	Presidio.
1754-55	Lucas Gascón.	-	-
1754-55	Francisco de Ortega, Manuel Antonio Godino, vs. Jaén.	-	4 años de presidio.
1754-55	Juan Pedro García.	-	-
1754-55	Juan Navarro, Sebastián Ximénez e hijos, gitanos.	-	-
1754-55	Marcelo Lobato.	-	-
1754-55	Juan Calancha.	-	Arsenales
1754-55	Pedro Hohedo.	-	-
1754-55	Francisco Mejía y Rozas.	-	-
1754-55	Benito Pardo.	-	8 años de presidio
1754-55	Juan de Vargas, gitano de Baeza.	-	-
1754-55	Antonio Gallego, enfermo.	-	-
1754-55	Don Francisco Muso, ministro superior de Lorca.	Cohecho y tolerancia a excesos de gitanos.	-
1755	Bartolomé y Andrés Sánchez Cano, Pablo de Quadros, pastores de Beas de Segura.	Destrozo de corchos.	-
1755	Partida de 8 gitanos	Asolar La Mancha Alta	-
1756	Joseph y Domingo Farras, hermanos de Almagro.	Robos en Alcudia y resistencia a justicia.	Inmunidad.
1757	Silvestre Ruiz Mora, pobre	Hurto y destrozo de	-

	v. Abenójar.	colmenares, prófugo.	
1757	2 vecinos de Madridejos.	Homicidio de paisanos.	-
1757-59	Manuel Rico "el Duro".	Bandolero.	10 años a presidio+ costas.
1757-59	Francisco Hernández; Diego Jiménez Colmenero; Cosme Díaz, hojalatero; Francisco "el Pájaro"; Francisco Quevedo, gitano Juan "el Madrileño", hojalatero.	Bandoleros.	Rebeldía.
1757-60	Francisca García.	Vagar acuadrillada.	6 años de reclusión+ costas.
1758	Joaquín y Joseph Laguna.	Homicidas entregados por la justicia real; prófugos.	Rebeldía.
1758	Diego Joseph de Arias, v. Puertollano.	Homicidio alevoso (?).	-
1759-60	Juan Jinés Sánchez "el Arcediano", 60 años, buhonero murciano, en arsenales al pegar a esposa.	Vagancia, intentar fugarse de cárcel.	Indultado de azotes+vuelta a arsenal de Cartagena.
1759-61	Antonio Martínez, v. Iznatoraf.	Miliciano desertor, roba en casa de su tío.	-
1760	Alfonso Padilla, andaluz.	Cuadrero en Jimena.	-
1760	Sebastián Joseph Cano, v. Tobarra (?).	Cuadrero.	-
1760	Francisco Gallego "el mozo de la vara".	Abigeatos y raterías.	-
1760-61	Antonio Saavedra, v. Baeza.	-	-
1760-61	Sebastián Jiménez, capataz de gitanos de La Graña, esposa Manuela Castrejos; hijos: Luis Jiménez y esposa Agustina Tirado, Antonio Jiménez; Juan Joseph Saavedra, Juan Correa,	Faltar a pragmáticas.	Indultados+ costas/gastos

Juan Navarro,
gitanos de Mancha Real.

1760-61	Benito Pardo, v. Fregenal de la Sierra.	Hurtos reiterados, prófugo.	-
1760-61	Juan de Acosta, Diego Cortés, gitanos.	Infringir pragmáticas.	Indultados+ gastos/costas
1760-61	Joseph Cano y cómplices.	Cuatreros.	-
1761	Matías y Gaspar González de Oviedo, polvoristas, vs. Ifnatoraf, antecedentes.	Robo con violencia.	Excarcelados.
1761	Juan de Herrera Garrido, gitano de Vilches, ordenado de menores, temporero, cazador y esquila mulas.	Vagar tras segundas nupcias de su padre.	-
1761	Juan Jiménez, Sebastián Cortés, gitanos de Vva Arzobispo.	Vargar acuadrillados.	Absueltos.
1761	Pedro Majuelo.	Robar reses en un cortijo de Bujalance.	-
1761	Juan Calleja "Canalejo".	Ocultar objetos robados.	-
1761-62	Diego de Arias, Antonia de la Cuesta, vs. Puertollano.	Homicidio.	-
1761-62	Juan Damián de Montoya "Juanaco" gitano.	Bandolero de Alcaraz.	-
1761-62	Juan Antonio Moreno, bracero de Terrinches.	Hurtar colmenas en término Ballesteros.	A Granada/ Libre+fianza.
1761-62	Tomás de Anaya, enfermo.	-	-
1762	Lorenzo Fernández Adán, Juan de la Torre "el Chico", Tomás de Anaya, vs. Chiclana.	Abigeato de 3 yeguas.	-
1762	Juan Manuel de Huete.	-	-
1762	Alonso Joseph Ruiz "Mentirola", v. Jaén.	Cuatrero, prófugo.	Rebeldía.
1762	Pedro de Mata, v. Écija.	Cuatrero, prófugo.	Rebeldía.
1762	Juan Antonio Gallego,	Cuatreros.	-

	su hijo Antonio Gallego, Sebastián Cano, enfermo, Alfonso Padilla, enfermo, vs. Jaén.		
1762	Juan Calacha, v. Villanueva del Arzobispo.	-	-
1762-63	Juan de Vargas, gitano de Baeza.	Abigeato de 8 pollinos.	-
1762-63	Manuel Rico, Francisco Fernández.	Latrocinios.	-
1762-63	Francisco Mejía de Rojas.	-	-
1762-63	Francisco García.	-	-
1762-63	Cristóbal Sevilla.	-	-
1762-63	Luis Cobo, v. Baena.	Robar arrieros en Sierra Morena.	Libre+fianza.
1762-63	Benito Pardo.	-	-
1764	Luis del Arroyo/cómplices vs. Espejo y Torredonjimeno.	Abigeato de cerdos.	6 años de destierro.
1764	Antonio Cabo, v. Barcarrota.	Robo sacrílego.	Inmunidad.
1764	Eusebio Jaramillo, Domingo Crespo.	Hurtos en Jaén.	A Granada.
1764	Juan Moreno, v. Genabe.	Cuatrero.	6 años de destierro.
1764	Juan Gómez, v. San Esteban del Puerto.	Robo de dinero.	6 años a ejército.
1764	Tomás Fernández Siles, v. Venatre, sordo.	Hurtos de corchos y de ropa.	6 años de destierro.
1764-65	Manuel Monleón.	Ladrón, resistencia a la justicia.	-
1764-65	Ignacio y Miguel Morcillo.	Hurto en granero.	-
1764-65	Enrique Fajardo de la Huerta, v. Alconey.	Latrocinios a paisanos.	-
1764-65	Joseph Berengüela.	-	-
1764-65	Francisco Navarro y	Latrocinios.	-

Francisco Segura,
vs. Jaén.

1764-65	Sebastián Tirado.	-	8 años de arsenales.
1764-65	3 valencianos.	-	-
1764-65	Sospechoso.	Contrabando tabaco.	-
1764-65	Gitano de Marmala.	-	-
1764-65	Diego de Malla, Miguel Peláez, Juan de Vargas, gitanos.	Vagabundear.	-
1764-65	Crispín y Manuel Castro Francisco de los Reyes, Diego de la Malla "Chan", Manuel de Cetros, gitanos de Jaén.	Contravenir pragmáticas y estafas reiteradas.	-
1764-65	Joseph, mozo italiano.	Hurtos y estafas en Baena.-	-
1765	Francisco y Antonio Segura vs. Jaén.	Latrocinios.	-
1765	Manuel Moreno.	Latrocinios.	Muere en detención.
1765	Ignacio de Sierra, v. Piedrabuena.	Homicidio de familiar Santo Oficio.	-
1765	Manuel López, Juan Francisco Félix"Eras" Cristóbal Huerta, Francisco Rufián.	Allanamiento de morada, y asaltos en camino.	-
1765	4 bandoleros.	Asaltar con muertes un cortijo.	Rebeldía.
1765-66	Juan Gallego, tendero y buhonero de Jaén.	-	-
1766-68	Antonio Pagán, criado en Alcantarilla.	Intentar robar a amo, 8 años de hiriendo a su hija.	presidio.
1768	Cristóbal Corchero "Cuenca".	-	-
1768	Antonio Segura.	Prófugo.	-
1768	Diego Callejas, bracero de 34 años, soltero.	Reo de la justicia real	-

1768	Miguel Sánchez Plazuelo, v. Torremilano, 23 años.	-	-
1768	Bartolomé Pérez de la Encajera, 73 años edad (!).	-	-
1768	Fernando de Céspedes, 52 años de edad.	-	-
1768	Cristóbal Isidro Cerrajero, 48 años de edad.	-	-
1768	Diego Ramón	-	-
1768	Francisco y Ramón Cortés, esparteros, casados.	-	-
1768-70	Don Luis Oliveras y Tori, n. Forsana, -25 años edad.	Homicida y ladrón.	-
1769	Sebastián Tirado, gitano.	-	-
1771	Francisco Fontecha "Cepillo".	Contrabando de tabaco.	-
1773	Francisco Almazán.	-	Absuelto.
1773	Diego Pulido.	-	Arsenales.
1773	Francisco Valor.	-	-
1773-74	Francisco Verdura.	-	Arsenales.
1773-74	Alonso Ramos Salido.	-	-
1773-74	Juan Calvo Mansilla v. Cabeza del Buey.	Robos/homicidio.	Azotes.
1773-76	Juan Rodríguez Ruano "Conejo".	Robos/Asesinatos.	Azotes/Muerte
1773-74	Jerónimo Martínez.	-	-
1773-74	Juan Fco Miguel de Céspedes.	-	Azotes.
1773-74	Manuel Cerdán y Vicente vs. Villacarrillo.	Latrocinios.	-
1773-74	Manuel Moya.	-	-
1773-74	Don Juan Jurado de Avilés.	-	-
1773-74	Diego de Mesa.	-	-

1773-74	Bernardo Pérez/Pedro López, vs. Écija.	-	-
1773-74	Alfonso Martín.	-	-
1773-74	Manuel Francisco de Ochoa v. La Calzada.	-	Vergüenza pública.
1773-74	Francisco Bazán.	-	Arsenales.
1773-74	Alonso Moreno.	-	Arsenales.
1773-74	Juan de la Peña, Francisco Salteadores de caminos, Patera, Jerónimo Martínez, vs. Córdoba.	-	-
1774	Manuel García Caballero.	-	-
1774	Juan García.	-	-
1774	"Pisaflores".	-	-
1774-76	Juan de Mora Gª "Candonga" Homicidio/robos. v. Villacarrillo.	-	Azotes+ muerte.
1774	Juan de Burgos.	-	-
1774	Juan Mozos.	-	-
1774-75	Antonio Orozco.	-	Presidio.
1774-75	Francisco Garzón.	-	-
1775-77	Pedro Nicolás de Frutos.	-	Presidio.
1777	Félix Antonio Bermúdez, gitano.	Insultos a labradores.	Indultado.
1777	Juan Macías, 46 años edad, Cuatrero. v. Coín, arriero casado.	-	-
1777-78	Vicente Cerro.	Contrabandista tabaco.	-
1777-78	Manuel y Joseph Navarro "los Pichones", gitanos de Moral de Calatrava.	Cómplices en asaltos.	-
1777-78	Manuel Montenegro v. Villacarrillo.	-	-
1777-78	Alfonso y Jerónimo Palacios, y otros 9 gitanos.	-	-
1777-78	Manuel Cuevas.	-	-

1777-78 Agustín González y 4 gitanos de Membrilla.	-	-
1777-78 Joseph del Rey, gitano v. Almansa (?).	Heridas a un comisario y a una gitana.	-
1777-78 Manuel Martín de Quadra.	-	-
1777-78 Joseph Jiménez "Malillo", Juan Ruiz Barbanca "Rizo".	-	Presidio.
1777-78 Francisco Garzón.	-	
1777-78 Pedro Montoya, gitano.	-	Presidio.
1777-78 Santiago Jaime Puch, Alonso de Luque "Borrascas".	-	Presidio de Melilla.
1777-78 Juan de Morales, Anastasio de la Cruz.	-	Arsenales de Cartagena.
1777-81 Mateo Gómez "Mosca", v. Villacarrillo.	Prófugo.	Muere en cárcel.
1778-82 Manuel Montenegro, v. Villacarrillo.	-	Presidio.
1779-80 Francisco de Fuentes.	-	Presidio.
1779-80 Joseph de Riba.	-	-
1779-80 Vicente Cerro, María Solís.	-	Mueren en cárcel.
1779-81 Francisco Chacón "Casquete".	-	A Estepa.
1779-81 Jacinto Ortiz Parra.	-	Presidio.
1779-83 Francisco Alberto Ximénez v. Daimiel, enfermo.	-	Azotes.
1780 Juan Lozano.	-	-
1781 Melchor de Pliego.	-	-
1781-82 Francisco Enrique Figueroa.	-	-
1781-82 Francisco Corredera.	-	-
1781-82 Melchor de Pliego.	-	Presidio.
1781-82 Juan Ovejero.	-	-

Antonio Roldán.		presidio.
1781-82 2 mozos levos.	"presos sin delito".	Absueltos.
1781-82 Juan López.	-	Azotes+ presidio.
1781-82 Agustín Granados.	-	Excarcelado.
1781-82 Manuel Trabado.	-	-
1781-82 Juan Sabariego.	-	-
1781-82 Miguel Rejano/Fco Gálvez.	Hurto de un cochino.	-
1781-82 Francisco Carrero Monjón y esposa, vs. Vva Arzobispo.	Raterías.	-
1781-82 Manuel de Iglesia, v. Cacerla.	Hurtos reiterados.	-
1781-82 Pablo Muñoz, Joseph Corchado.	Hurtos reiterados.	-
1781-82 Castro y "Tartaja", vs. Piedrabuena.	-	-
1781-82 Mateo Labrador y Salvador Ruiz.	Abigeato de vacunos.	Presidio.
1781-82 Juan Velasco.	-	-
1781-82 Juan de Vargas.	-	6 años de presidio.
1781-82 Francisco Sordero.	-	-
1781-82 Manuel y Angel Vallejo vs. Alcázar de San Juan.	Bandoleros.	-
1783-84 Cristóbal, Antonio, Ginés y Expósito Ruiz.	-	-
1783-84 Antonio Solano.	-	Rebeldía.
1783-84 Fernando y Francisco Molina.	-	Rebeldía.
1783-84 Antonio Navarrete.	-	Rebeldía.
1783-84 Pedro Vicente de Almela.	-	Rebeldía.
1783-84 Manuel y Bernardino de Castro, vs. de Martos.	-	-

1783-84	Manuel y Bernardino de Castro, vs. de Martos.	-	-
1783-84	Cristóbal Rodríguez "Culo de Lobo".	-	-
1783-84	Manuel Iglesias, v. Iruela.	-	Presidio.
1783-84	Bernardino de Castro, v. Porcuna.	Hurto de lienzo.	-
1783-84	Cristóbal Jiménez y Manuela de Castro, vs. Jaén (?).	-	-
1783-84	Diego Toribio.	-	Rebeldía.
1783-84	Antón Fernández "el Cabañil", Pedro y Manuel Castro, "Pimiento" y Bermúdez.	-	-
1784	Juan Romero, v. Aranzueque.	Hurto de vacunos.	-
1793	Pedro Caballero.	Contrabando de tabaco.	-
1793-94	Matías Lechuga.	Hurtar aperos en Jaén.	-
1793-94	Antonia Toledo, hija soltera del alcaide hermandino.	Colaborar en evasión.	4 años de reclusión en hospicio.
1793-94	Jerónimo y Manuel Palacios, vs. Almansa.	-	Arsenales de Cartagena.
1793-94	Manuel Dorado Panadero, v. FernánCaballero.	-	200 ducados de multa.
1794	Tomás Rivilla, Fco Rueda, Manuel Melón, Antonio Pavón y Antonio Velázquez.	Extorsiones a serranos.	-
1794-95	Bartolomé Chacón, v. Almagro.	-	-
1794-95	Juan de Elvira, v. Porzuna.	Homicida.	-
1794-95	Juan de Prado "el Sordo", andaluz.	-	-
1794-95	Jerónimo Palacios.	Asesinato.	6 años de galeras o de presidio.
1794-95	Agustín Toledo, alcaide	Colaboración en fuga.	Reclusión.

hermandino e hija.

1794-95 Miguel e Isidro Gutierrez.	-	A Corte.
1794-95 Felipe García de Ceca.	-	A Corte.
1794-95 Antonio de Parra "Baqueta".	-	A Corte.
1794-95 Alfonso Rivas "Centeno".	-	A Corte.
1794-95 Juan de Parada "el Zurdo".	-	A Corte.
1794-95 Vicente Jiménez y Pedro Paz, vs. Fernáncaballero.	Abigeato de cabras.	-
1794-95 Joseph Mata.	-	-
1794-95 Julián Ximénez y Almansa.	-	-
1795-96 Juan Gutierrez y Francisco Gallardo Rivas, vs. Campillo.	-	-
1795-96 Cristóbal Martín, v. Campillo.	-	4 años de presidio.
1795-96 Juan Romero, v. Málaga.	-	4 años de presidio.
1795-96 Manuel Becerra, Josef Ricardos, vs. Málaga.	-	A Antequera.
1795-96 Francisco Montoya, v. Montilla, gitano (?).	-	-
1795-96 Manuel de Castro.	-	-
1795-96 Juan Romero, v. Campillos.	-	Indultado
1795-96 Francisco Gallardo.	Cuadrero.	-
1795-96 Manuel Becerra.	-	-
1795-96 Juan de Aro, juez comisario de Estepa.	Abigeato de cerdos.	-
1795-96 Nicolás Salcedo, v. Chiclana.	Abigeato de una vaca.	-
1795-96 Josef Poblete.	-	A Corte.
1795-96 Juan Fernández e hijo.	Abigeato de ovejas.	-
1795-96 Juan Gutiérrez	-	A Sevilla.

1795-96	Francisco Montoya, gitano. Prófugo de arsenales.	A Granada
1795-96	Plácido Antonio Correa, v. Porzuna.	- -
1795-96	Juan de Elvira, v. Córdoba. Homicidio.	-
1795-96	Juan Fernández, Manuel Díez, Plácido Antonio Correa.	Contrabandistas de tabaco. A justicia del Estanco.
1795-96	Agustín Pardo.	- -
1795-00	Tomás Rebilla.	Contrabando de tabaco. -
1796	Juan Pérez "Fachenda".	- Muerto en detención.
1796-97	Manuel Díez "Recaldolas" v. Ubilla (León).	Encubrir contrabandista. -
1796-97	Manuel Gaspar García, jornalero de Valverde; Manuel de Castro, v. Villacañas.	Asalto en descampado. -
1796-97	Manuel Becerra, Josef Ricardos, Juan Clavijo, Manuel del Rey, vs. Málaga.	Homicidio. A Granada.
1796-98	Francisco "el Cristiano".	- A Almadén.
1796-98	Manuel Montoya "Botón" alcazareño v. Villafranca, esquilador de 28 años edad.	Asaltar en yermo. 10 años al arsenal de Cartagena.
1796-98	Miguel Losada "Chiriví", toledano v. Alcaudete, jornalero de 23 años edad; Juan García Mura, bracero.	Cuatreros y ladrones. 10 años al arsenal de Cartagena.
1796-98	Juan Luis Quirós, labrador endeudado y esquilador, v. Villanueva de San Carlos; Eusebio Fernández.	Asaltos en despoblado. 6 años de presidio.
1796-98	Francisco Salazar, v. Villarejo de Fuentes; Pedro de Malla, 18 años, malagueño v. Alcaudete, esquilador, soltero.	Ladrones, intentan fugarse de galera hermandina. Libres+costas

1797	Nicolás y Sebastián Palacios, jiennenses.	"Graves delitos".	A Granada.
1797	Nicolás Testes, v. Segorve (Valencia), fabricante de papel.	Complicidad con ladrón.	-
1797	Juan Morales.	Desertor reg. caballería.	-
1798-99	Francisco Nicolás Yllana, quincallero de Yepes; Francisco Rodríguez "Cepeda", burgalés, cesterero, amancebado.	Asalto frustrado en despoblado.	8 años al arsenal de Cartagena.
1798-99	María Rodríguez.	Receptar caballerías hurtadas en Miguelturra.	-
1798-99	Alfonso Cortés, v. Vva del Arzobispo, revendedor de naranjas.	Asalto frustrado en despoblado.	6 años de arsenales.
1798-99	Cándido Almagro, leñero v. Fuente el Fresno, trabajador del cáñamo.	Asalto frustrado en yermo; desertor reg. infantería de Jaén.	4 años de arsenales/ A justicia militar en 1802.
1798-99	Manuel López "Raspa".	-	Libre+fianza.
1798-99	Antonio Fernández Parra "Baqueta", v. Manzanares.	-	-
1798-99	Juan Josef "Terriza", Francisco "Terriza", Diego "Terriza".	-	Libre+fianza.
1798-99	Antonio Noguera, v. Carrión de Calatrava.	-	-
1799-00	Pedro López Sánchez.	Prófugo.	-
1799-00	Jerónimo Barroso, v. Pruna.	Hurto de un jumento.	Presidio
1799-00	Francisco Portillo, Josef Matamoros.	-	10 años de arsenales.
1799-00	Josef Aquilino.	-	Rebeldía.
1799-00	Alfonsa/o Francisco, gitano quincallero.	-	Secuestro de bienes.
1799-00	María Rodrigo, gitana.	-	-

1799-00	Antonio Jurado, Bartolomé Muñoz Cabanillas Juan Roldán, andaluces.	Robos y abigeatos.	-
s.XVIII	Francisco Mejía, v. Viso del Marqués, vendedor de peines en ferias y romerías.	Cuatrero.	-
s.XVIII	Pedro Muñoz de Dios, gitano.	Trocar cabalgaduras.	-

13. FUENTES MANUSCRITAS.

13.1. ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. (AHN.)

Este depósito tiene una importancia capital para nuestro trabajo por la cantidad y calidad de los documentos conservados, que cronológicamente abarcan desde el año 1312 hasta el primer tercio del siglo XIX. La mayor parte de dicha documentación puede consultarse en las secciones de Diversos, Hermandades y la de Consejos.

13.1.1. SECCIÓN DE DIVERSOS. (Div.)

Bajo el epígrafe de DIVERSOS, HERMANDADES (Div. Her.) se halla una copiosa colección diplomática perteneciente a las Hermandades Viejas de Ciudad Real y Toledo, así como diversos manuscritos relativos a pleitos civiles y criminales del corregimiento ciudarrealeño junto a dispersos informes hacendísticos dieciochescos de la antigua intendencia de La Mancha. Los escritos concernientes a la fraternidad manchega son los más cuantiosos, conformando en conjunto la más completa serie documental referente a su funcionamiento durante más de cinco siglos.

El archivo institucional de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real, durante su existencia se custodió en sus propias dependencias, salvo algunos libros registros del personal que quedarían eventualmente en manos de sus escribanos, en la actualidad irremisiblemente perdidos. El real decreto de 1835 que abolía formalmente la Santa Hermandad hizo que el grueso de tales fondos quedasen celosamente guardados en unas arcas en su antigua cárcel reconvertida en prisión provincial, y sus llaves a buen recaudo en el Gobierno Civil de Ciudad Real, pasando los autos criminales pendientes a los juzgados de lo penal correspondientes. En 1853 tales fondos son reclamados por la Real Academia de la Historia, procediéndose a la remisión de su mayor parte bajo inventario realizado por dos concejales con la ayuda de un oficial municipal. No debió de ser muy minuciosa su labor cuando hasta la década de 1910 albergaba el palacio de la Excmo. Diputación Provincial de Ciudad Real un buen número de legajos pertenecientes a la entidad apícola local, siendo por entonces trasladados al archivo central de Alcalá de Henares por el archivero sr. Foluche. De aquí se llevaron la práctica totalidad a la actual sede del Archivo Histórico Nacional de Madrid, recibándose los últimos expedientes trasapelados en Alcalá de Henares el 23 de diciembre de 1949.

Referente al Santo Tribunal ciudarrealeño han sido consultados los siguientes documentos:

.leg. 1. Cartas reales y ejecutorias (1312-1599).

- .leg. 2. Confirmaciones de privilegios, órdenes del Supremo Consejo y autos de conflictos jurisdiccionales (1621-1781).
- .leg. 3. Provisiones, residencias, actas capitulares, ordenanzas y noticias diversas sobre dependientes (1652-1792).
- .leg. 4. Reales cédulas, defensa de franquezas e informes sobre sus ministros y oficiales (1502-1806).
- .legs. 5 al 16. Expedientes sobre pretendientes al ingreso (1706-1806)
- .leg. 21. Miscelanea sobre ejecutorias, causas civiles y criminales, visitas a posadas, libro registro de poderes notariales (1479-1800).
- .legs. 22-23. Documentación diversa sobre el derecho de asadura hermandina -percepción y defensa judicial- (1469-1802).
- .legs. 24-54. Autos procesales criminales (1500-1806).
- .legs. 56-62. Relación de limosnas, justificantes de cuentas, balances financieros e inventarios de cárceles (1501-1800).

En cuanto a los fondos pertenecientes a la Hermandad Vieja de Toledo su trayectoria desde la Ciudad Imperial a Madrid tampoco está exenta de vicisitudes. Cuatro libros capitulares llegaron en 1897, siendo objeto de atención por parte de don Antonio Paz y Meliá; pero no fue hasta principios del siglo XX cuando se remitieron desde Toledo el resto de los manuscritos de los siglos XVII y XVIII relativos a privilegios, autos procesales y actas de su cabildo custodiados actualmente en esta sección. Concretamente hemos examinado parte de los acuerdos hermandinos recogidos en los legajos nº 63 (1602-1612); 64 (1659-1671); 66 (1681-1687); 68 (1701-1708); 69 (1709-1715); 70 (1717-30); y 71 (1732-1740), atendiendo a razones tan diversas como la

existencia de vacío documental durante tales periodos en su homónima ciudarrealena o a su coincidencia con las etapas más problemáticas en sus relaciones interinstitucionales. Dichos fondos se hallan pendientes de recatalogación.

En esta misma sección de DIVERSOS, entre la documentación relativa a CONSEJOS Y CIUDADES, hemos consultado igualmente el leg. 44, correspondiente a Ciudad Real, en el que hallan algunas ejecutorias sobre pastos, junto a una interesante información sobre el devenir histórico del Hospital de la Concepción (siglos XVI-XIX).

13.1.2. SECCIÓN CÓDICES.

- 817E. Ordenanzas de la Santa Hermandad Vieja de Talavera (1523).
- 819B. Sobrecarta sobre el derecho de asadura del Triple Instituto (1695).
- 933B. Estatutos de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (1792).
- 964B. Confirmación de privilegios de la entidad manchega por parte de Fernando VII (1814). Copia de la documentación tomada de la intendencia provincial por el notario Manuel Joaquín Juncosa el 23-IX-1819. Códice donado a la Biblioteca de la Escuela Superior de Diplomática por el catedrático P. F. Monlau el 1-V-1862.

13.1.3. SECCIÓN CONSEJOS.

Entre el cúmulo documental perteneciente al Consejo de Castilla han sido consultados los siguientes libros, que contienen una variada colección de disposiciones legales relativas al gobierno del reino:

lib. 1.477, nº 28 y 30. Anulación exenciones fiscales de cuadrilleros. (1728-1737) nº 42. Tropas de caballería auxilien en diligencias policiales y judiciales.

nº 84 y bis. Reales cédulas sobre asilo eclesiástico.

lib. 1.478, nº 58. Tribunales inferiores consulten sentencias (1742).

lib. 1.481, nº 20. Refrendo y ampliación supuestos extradición luso-castellanos (1754).

nº 60. Memorial mesteño contra arbitrios sobre tránsito pecuario.

lib. 1.521, nº 54. Indulto por parto de la Princesa de Asturias (1771)

De inestimable interés para nuestra investigación fueron la relación de causas dirimidas en la Sala de Gobierno del Supremo Consejo, registradas en los Libros Matrícula -una copia de los cuales se encuentran en la sala general del archivo-, siendo revisados íntegramente los relativos a los siglos XVII y XVIII, así como algunos de las postrimerías del Quinientos y otros de los albores del siglo XIX. Gran número de los legajos a los que se remitían y que directa o indirectamente aludían a los asuntos tratados han sido consultados; por lo prolijo que llegaría a resultar su mera mención destacaremos únicamente el leg. 3.163, nº 9, en donde se recopila una voluminosa información relativa a los cabildos apícolas de Ciudad, Toledo y Talavera durante el Setecientos y principios del Ochocientos, no faltando las alusiones al Seiscientos.

Otras fuentes de interés para la comprensión de la cuestión abordada se hallan, entre otros en AHN. Consejos, legs. 2.666; 4.409, n.º 19, 30, 38, 65; 4.859; 4.870; 5.924, n.º 26; 5.943, n.º 2; 5.947, n.º 16, 104, 105; 7.199, n.º 25 y 42.

13.1.4. SECCIÓN MESTA.

Entre los pleitos elevados por el Honrado Concejo contra los intereses de la Hermandad Vieja manchega destacan los expedientes contenidos en el leg. 64:

- N.º 6. Memorial de los carreteros segovianos pretendiendo su exención (1531).
- N.º 7. Ejecutiva regulando la percepción de la asadura por parte de la entidad apícola (1543-1565).
- N.º 9. Apercibimiento a un ganadero mesteño adscrito al Santo Instituto (1586).
- N.º 11. Pleito suscitado por tomar asadureros reses escogidas (1620).
- N.º 12. Condena de los excesos cometidos en recaudación asadura (1718)

13.1.5. SECCIÓN ÓRDENES MILITARES (OO.MM.).

Al coincidir que algunos de los máximos dirigentes hermandinos ciudarrealeños gozaban de un hábito de las Órdenes Militares no dudamos en recurrir a la información personal, familiar y patrimonial proporcionada por los expedientes originales instruidos en el momento se presentar su solicitud de dicha indumentaria honorífica. Tales

documentos no sólo contienen importantes datos genealógicos y sobre la red de deudos de los pretendientes a dicha distinción honorífica, sino que también nos proporcionan noticias diversas -particularmente minuciosas en el Setecientos- sobre depósitos documentales y provisión de distinciones municipales, eclesiásticas o de instituciones privadas de diverso signo -principalmente hermandades y cofradías cuya pertenencia se interpretaba como prueba positiva de nobleza-.

Han sido provechosamente examinadas las siguientes Pruebas de Caballeros de las reglas citadas a continuación:

-Montesa, exp. 38;

-Alcántara, exp. 1.038;

-San Juan, exps. 23.307; 23.615; 23.316 y 23.648;

-Calatrava, exps. 1.317; 1.757; 1.758; 1.759; 2.637; 2.740; 4.129;

-Santiago, exps. 1.638; 1.922; 5.630; 8.641; 8.642.

13.2. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. (AGS.)

13.2.1. REGISTRO GENERAL DEL SELLO. (RGS)

Provisiones, sobrecartas, correspondencia y ejecutorias libradas por el Consejo Real y los Reyes Católicos sobre asuntos concernientes a la Hermandad Vieja ciudarrealeña entre los años 1475-1496. Se conservan numerosas noticias que nos ilustran sobre la pugna del Santo Tribunal con las autoridades de las Órdenes Militares, en especial con las justicias del Campo de Calatrava y los maestros de su orden.

13.2.2. CÁMARA DE CASTILLA. (CC.).

Pueblos. leg. 6, nº 58 al 88. Documentos pertenecientes a Ciudad Real (audiencia, ayuntamiento, clero, oficios), abarcan cronológicamente de 1475 al 1514. Directamente alusivos a la Hermandad local son:

- Nº 67. Remisión toma de cuentas al cabildo hermandino (1513);
- Nº 70. Memorial a la reina sobre competencias jurisdiccionales (1501)
- Nº 72. Confirmación de privilegios por doña Juana I (1514);
- Nº 73. Traslado de los capítulos de Maldonado (1516);
- Nº 74. Modificación temporal de uno de sus estatutos (1498);
- Nº 80. Traslado de las Ordenanzas hermandinas de 1435 (1457).

Memoriales:

-leg. 125, nº 72. Delimitación jurisdiccional entre Ciudad Real y la
Mitra toledana (1501)

-leg. 199, nº 22. Expediente relativo a la Hermandad General (1536).

.Diversos de Castilla: Se recoge un ejemplar de las ordenanzas concejiles ciudarrealeñas, documentos diversos sobre la Hermandad del Reino, la audiencia local, y una miscelanea de cédulas, pragmáticas, informes del corregimiento, etc., relativa al periodo de tiempo comprendido entre los años 1497 y 1575. Han sido revisados los legs. 1, nº 4, 70; 2, nº 18, 20 y 22; 8, nº 6 y 8; 9, nº 30; 25, nº 1; 28, nº 1; y 42, nº 79.

.Patronato Real: en el leg. 78, nº 307-317 se conservan misivas y memoriales de corregidores y magnates concernientes a la figura del Alcalde General de la Hermandad General (1588).

13.2.3. MERCEDES Y PRIVILEGIOS.

De particular interés para nuestra labor ha sido la información aportada la documentación conservada en el leg. 278, nº 26, en el que se contienen diplomas sobre asuntos económicos y profesionales de la capital manchega, así como la carta de privilegio y confirmación de Felipe IV a la corporación apícola de Ciudad Real en 1623.

13.2.4. GRACIA Y JUSTICIA.

Ciertamente útiles para nuestro estudio son los edictos promulgados de indultos reales otorgados entre los años 1762-1778 que se hallan en los legs. 874 y 875 de dicha sección.

13.3. BIBLIOTECA NACIONAL DE MADRID (BN.).

Antigüedades de Talavera, mss. 13.084 -contiene la historia de la villa escrita por el licenciado Cosme Tejada de los Reyes (ff. 23r-32vº); así como los traslados de la concordia entre los cabildos municipal y eclesiástico, 25-II-1515 (ff. 33r-vº); y de la carta de hermandad entre Talavera y Plasencia contra Ávila, 3-XI-era 1286 (ff. 63r-64r)-.

GRACIA DEI, P. (comp.), *Genealogía Universal. Cuaderno antiguo de linages*, mss. 11.773.

Hermandades Vieja y Nueva de Toledo, mss. 13.030 -copia del siglo XVIII de sus más importantes privilegios, ejecutorias y acuerdos internos conservados en el archivo municipal de la Ciudad Imperial-.

LOAYSA, G., *Sermones manuscritos*, mss. 5.739.

LOIO LASO DE LA VEGA, *Relación puntual, y tanteo que el Rey Nuestro Señor tiene cada un año en todos sus Reinos, islas, estados y señoríos...*, años 1620-1625, mss. 6.494.

Órdenes Militares. Acuerdos, Consultas y Difiniciones, mss. 2.692.

Órdenes Militares. Acuerdos, Consultas y Difiniciones, mss. 2.431.

Privilegios Reales (1351-1367), mss. 13.100.

Privilegios Reales. Donaciones. Cortes (1220-1252), mss. 13.094.

RIOL, A.S., *Historia de los papeles de España y fundación de los Consejos y Chancillerías*, Madrid, año 1727.

RIOL, A.S., *Representación de...del origen y estado de los Consejos, Tribunal y Archivos reales de la Corte y Chancillerías, el de Roma y Simancas*, ms. Osuna 10.389.

ROZAS, P., *Sucesos de Castilla en tiempo del Rey don Henrique IV*, ms. 1.619.

TORREJÓN, A., *Libro de las Antigüedades de Talavera*, Talavera de la Reina, año 1596, ms. 1.498 -copia de 23-III-1795-.

13.4. ARCHIVO DE LA REAL CHANCILLERÍA DE GRANADA (ACG).

Los pleitos criminales de este alto tribunal castellano han sufrido en el pasado el descuido y la enajenación indiscriminada de muchos de sus valiosos fondos. Si la mayor parte de los procesos pertenecientes a la Real Audiencia de Sevilla se consumieron en el desafortunado incendio de 1913, la Guerra Civil supuso la pérdida de multitud de documentos de la chancillería granadina -entre los que cabe lamentar especialmente la destrucción de sus valiosos Libros de Acuerdo así como el grueso de los autos criminales-.

Custodiados actualmente en el edificio que albergó la propia corte de justicia andaluza desde su anterior emplazamiento hacia 1963, la mayor parte de los fondos documentales pertenecientes a la Hermandad Vieja de Ciudad Real se hallan catalogados bajo el epígrafe de Cofradías. Hemos examinado la documentación concerniente de una u otra forma a dicha organización y a la administración de justicia en la antigua provincia de La Mancha durante los siglos XVI al XVIII, entre los que destacan los siguientes expedientes:

- Cab. 321, leg. 4.399, nº 88. Excesos de la justicia de Alhambra
(1782-1783);
- Cab. 321, leg. 4.403, nº 14. Conflicto competencial hermandino en
el Campo de Calatrava (1569).
- Cab. 321, leg. 4.411, nº 1. Ordenanzas impresas de la entidad apícola
de 1792 (1793);

- Cab. 321, leg. 4.411, nº 23. Ejecutoria para que el cabildo manchego
se cifa al Auto Único de 1740 (1781);
- Cab. 501, leg. 175, nº 3. Conflictos jurisdiccionales hermandinos
(1777-1780);
- Cab. 513, leg. 2.486, nº 5. Pleito por asadura con el gobernador de
Almagro (1548-1604);
- Cab. 513, leg. 2.510, nº 1. Pugna en Priorato de San Juan (1594-1615)

Documentos asimismo importantes para nuestra investigación en Cabs.
3, leg. 1.337, nº 4; 503, leg. 572, nº 2; y 513, leg. 579, nº 2.

13.5. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (AHPCR.).

Durante casi tres décadas olvidados en los sótanos de la Biblioteca Municipal ciudarrealeña, recientemente han sido rescatados sus fondos del habitáculo inapropiado en el que se encontraban para pasar a ser albergados en un edificio de nueva construcción y recatalogados por un equipo de profesionales que permiten una mayor accesibilidad a los fondos conservados.

13.5.1. PROTOCOLOS NOTARIALES.

En dicha sección, que abarca en el caso concreto de la capital manchega la serie notarial prácticamente ininterrumpida entre los siglos XVI al XIX, se guarda una abundante y rica documentación referente a asuntos jurídicos, socio-económicos, religiosos o familiares, clasificada por escribanos y localidades. Este inmenso potencial para futuros investigadores ha sido hasta ahora casi siempre postergado historiográficamente, o cuanto menos infrutilizado y escasamente valorado para la investigación ante la caótica y asistemática organización de sus fondos, cuando la experiencia nos demuestra que una metódica aproximación a los mismos nos permiten calar en la vida cotidiana del vecindario, del sujeto anónimo ignorado por eruditos y estidiosos hasta fechas relativamente recientes. Desgraciadamente, la inapropiada apilación de los legajos y los efectos de la humedad han dejado inutilizables bastantes expedientes y

muy mermados otros, pero aún así constituye uno de los mayores fondos históricos provinciales por explorar, inapreciable para conocer el devenir de la antigua provincia de La Mancha durante las Edades Moderna y Contemporánea.

Por nuestra parte, hemos polarizado nuestra atención exclusivamente sobre los protocolos de la capital manchega durante los siglos que nos ocupan, habiendo manejado prácticamente todos los pertenecientes a la capital manchega del siglo XVIII y buena parte de los del siglo XVII. Así, hemos examinado metódicamente los siguientes legajos:

-Siglo XVII: nº 100, 142 y bis, 146 y bis, 151, 162, 170, 171 y bis, 175, 176, 177, 188 al 200.

-Siglo XVIII: nº 200 al 207, 211 al 213, leg. 227 al 231; 234 al 245, 343, 345, 349, 356, 538 al 575.

13.5.2. CATASTRO DE LA ENSENADA.

De vital importancia para conocer el patrimonio financiero de los miembros de la Santa Hermandad Vieja a mediados del Setecientos resultan los Libros del Personal y Casas del Estado Secular, perfectamente conservados, consultables en los legs. 454, 619, 622, y 703.

Esta sección arroja luz sobre importantes aspectos socioeconómicos y fiscales de gran parte de los hermanos de la fraternidad local hacia 1751-1752, así como una somera descripción de sus inmuebles.

13.6. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CIUDAD REAL (ADPCR.).

Durante más de un siglo se han ido acumulando en las dependencias de la Excma. Diputación manchega una gran cantidad de documentación de variada procedencia y heterogénea condición. Trasladado hace unos años a los sótanos del antiguo Hospital Provincial, de aquí han sido llevados a su antigua sala general, en donde permanecen en proceso de catalogación hasta su -confiamos- próximo acomodo en un lugar especialmente habilitado a tal efecto. La inmensa mayoría de sus fondos son de época relativamente reciente, pero se custodian dos legajos, hasta hace escasas fechas trasapelados, pertenecientes a la Hermandad Vieja local.

En avanzado estado de catalogación, aunque hasta la fecha inconclusa, pueden consultarse manuscritos relativos al balance contable de 1512; pleitos suscitados por la recaudación de la asadura de la primera mitad del Setecientos; inventarios de cárcel de dicha centuria; pleitos criminales datados y sin fechar desde 1576 hasta principios del Ochocientos; e informes sobre pretendientes a ingresar en dicha entidad del siglo XVIII y principios del XIX.

13.7. ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL (AHMCR.).

Ubicado en el archivo-museo Elisa Cendrero, la documentación preservada se corresponden a fuentes manuscritas e impresas desde la fundación de Villa Real hasta bien entrado el siglo XIX. Tal colección diplomática nos proporciona una información heterogénea sobre personal y asuntos internos de la Hermandad Vieja local, junto con numerosos documentos oficiales de su concejo de los años 1506 al 1748 que pueden consultarse en sus cajas 3 a la 11.

Particularmente importante son las actas capitulares de la corporación hermandina ciudarrealeña del periodo 1622-1623, las únicas que sabemos nos han llegado del periodo que nos ocupa, en su Caja 7, nº 202.

13.8. ARCHIVO MUNICIPAL DE CIUDAD REAL (AMCR.).

Sito en las dependencias del Excmo. ayuntamiento ciudarrealense, se conservan las Actas Capitulares practicamente íntegras de su cabildo entre los años 1502-1900. Se han consultado los siguientes volúmenes de acuerdos concejiles:

-Legs. 9, 11, 13 al 19. Actas Capitulares de los años 1599-1699.

-Legs. 20 al 29. Actas Capitales de los años 1700-1829.

13.9. ARCHIVO MUNICIPAL DE ALMODÓVAR DEL CAMPO -CIUDAD REAL- (AMAC.).

Durante décadas amontonados de mala manera sus importantes fondos documentales en la última planta de la casa consistorial; últimamente se ha impulsado desde el ayuntamiento su reordenación, realizándose una actuación de alcance por parte personal cualificado. siguiendo a grandes rasgos los criterios cronológicos aplicados por el erudito local Edgardo AGOSTINI BANÚS. Trasladados a la capilla de la Trinidad -hasta la Guerra Civil esporádicamente abierta al culto la festividad de la Asunción-, los fondos pertenecientes a los años 1412 al 1753, el resto permanecen postergados en el dicho edificio municipal.

Han sido revisados uno por uno los 105 legajos accesibles al investigador, lo que nos ha proporcionado valiosa información sobre la administración de la justicia local en dicha villa y en su amplio partido judicial. De particular interés para nuestro estudio ha sido la documentación concerniente a la Santa Hermandad Vieja de Almodóvar del Campo durante la Edad Moderna y sobre la cual volveremos en un próximo estudio.

13.10. ARCHIVO MUNICIPAL DE PUERTOLLANO -CIUDAD REAL- (AMP.).

Testimonialmente hemos consultado el único legajo conservado de la Edad Moderna en el depósito concejil, sito actualmente en los sótanos del ayuntamiento local y pendiente de ser reubicado en las dependencias de la remozada antigua casa consistorial.

-leg. 34. Actas Capitulares de finales del siglo XVIII -nos centramos en la elección de oficios concejiles-.

13.11. ARCHIVO MUNICIPAL DE TOLEDO (AMT.).

Emplazado en las dependencias superiores del inmueble consistorial toledano, sus fondos han sido mayoritariamente bien conservados, hallándose actualmente en pleno proceso de catalogación, siendo su embarazosa consulta para el investigador suplida por la profesionalidad del personal a su servicio.

La documentación del Archivo Secreto registrada a fines del Setecientos fue encomiablemente transcrita sin apenas variaciones por la anterior archivera E. PEDRAZA RUIZ, respetando la nomenclatura de la época, de lo que derivan algunos errores de bulto. De esta sección proceden la mayor parte de los manuscritos consultados, que abarcan desde el siglo XV hasta principios del XVIII y que topográficamente se encuentran en la caja 2, legs. 1 al 12, en la cual indiscriminadamente aparecen englobados documentos de la Hermandad Nueva, la General del Reino y la Vieja, junto a un voluminoso volumen de asambleas anuales y ejecutorias pertenecientes a la de San Martín de La Montaña transcrito por copistas del Setecientos.

La archivera interina nos facilitó el acceso a tres cajas sin catalogar pertenecientes a dichas organizaciones y actualmente ubicadas en la Sala III, estantería 1ª, así como una interesante serie de expedientes sobre verdugos locales del Siglo de las Luces, localizados en la Sala IX, estantería 10ª.

13.12. ARCHIVO DIOCESANO DEL ARZOBISPADO DE TOLEDO (ADAT.).

En el palacio arzobispal toledano se conserva un ingente número de manuscritos e impresos, parcialmente catalogados por el personal eclesiástico adscrito a su mantenimiento en una paciente labor de años. Han sido examinados, gracias a la total colaboración de sus encargados, dos legajos sin catalogar que bajo el epígrafe de "Cofradías. Ciudad Real", guardan una importante fuente hasta ahora ignorada sobre la fundación y desarrollo de gran parte de las asociaciones piadosas provinciales durante la Edad Moderna, siendo especialmente abundantes las de los siglos XVIII y XIX. Entre este cúmulo de expedientes se guardan los acuerdos, pleitos y reglamentación interna de algunas fraternidades religiosas ciudarrealeñas que como las de la Santa Caridad o la de Santiago están íntimamente vinculadas a la oligarquía local que conforma los cuadros rectores del Santo Instituto manchego, pero que institucionalmente dependían de la Mitra Primada de Toledo.

14. FUENTES IMPRESAS Y BIBIOGRAFÍA.

AA.VV., "La Repoblación en La Mancha", en *Actas VII Centenario del Infante don Fernando de la Cerda (1275-1975)*, Congreso celebrado en Ciudad Real, en abril de 1975, Madrid, 1976, 107-116.

AA.VV. *Registro General del Sello. Catálogo*, vv.vv., Valladolid, 1980-1984.

ABEL, V., *Crises agraires en Europe, XIII^e-XX^e siècles*, París, 1973.

ABIETACI, A., "Les incendiaires devant le Parlement de París: essai de typologie criminelle (XVIII^e siècle)", en AA.VV., *Crimes et criminalité en France sous l'Ancien Régime. 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 13-32.

ACEVEDO, A.M., *Reorum absolute onmina negantium apud equuleum ac de huius cuo eliminando, prasertim, ab ecclesiasticis tribunalibus Exertitatio*, Madrid, 1770.

Actas de las Cortes de Castilla, vv.vv., Madrid, 1877-1980.

AGOSTINI Y BANÚS, E., *Historia de Almodóvar del Campo y glosa de su antiguo Archivo Municipal*, Ciudad Real, 1972.

AGUADO SÁNCHEZ, A., "Antecedentes históricos del cuerpo de la Guardia Civil", en *Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil*, año 1, nº 2 (1968), pp. 9-37.

AGUIRRE, D., *El Gran Priorato de San Juan de Jerusalén en Consuegra, en 1769*, (ms. 1769), facs., Toledo, 1973.

AITKEN, R., "Rutas de la tra shumancia en la meseta castellana", en P. GARCÍA MARTÍN y J.M. SÁNCHEZ BENITO (comp., prol. y bibl.),

Contribución a la Historia de la trashumancia en España, Madrid, 1986, pp. 169 y ss.

ALCALÁ ZAMORA, N. y LEVENE, R., *Derecho procesal penal*, Buenos Aires, 1950.

ALCALÁ-ZAMORA QUEIPO DE LLANO, J. (dir), *La vida cotidiana en la España de Velázquez*, Madrid, 1989.

ALEJANDRE, J.A., "La función penitenciaria de la galera", en *Historia* 16, extra nº 7 (octubre, 1976), pp. 47-54.

ALEMÁN, M. Guzmán de Alfarache, 2 vv. (1ª impr. Madrid, 1599 y Lisboa, 1604), en B. BRANCAFORTE (ed.), Madrid, 1979-1984.

ALFARO, F., *Tractatus de officio Fiscalis, deque Fiscalibus privilegiis*, Valladolid, 1606.

ALONSO PACHECO, J., "El pensamiento penalógico de Lardizábal (Breve comentario al "Discurso sobre las Penas")", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 107 (febrero, 1954), pp. 64-71.

ALONSO ROMERO, M.P. *El proceso penal en Castilla (siglos XIII al XVIII)*, Salamanca, 1982.

ALONSO ROMERO, M.P. y HESPANHA, A.M., "La peine. Peninsule Iberique", en *Actas coloquio Societè Jean Budin pour l'histoire comparative des institutions*, sobre "La Pena", Barcelona, mayo, 1987.

ÁLVAREZ GUERRERO, A., *Liber Aureus per utilis ac necessarius. De administratione et executione Justicia*, Valencia, 1536.

ÁLVAREZ DE MORALES, A., "La Hermandad de Vitoria, Alava, Val de Lana y otras", en *Congreso Estudios Históricos: Vitoria en la Edad Media*, Vitoria, 1982, pp. 341 y ss.

ÁLVAREZ DE MORALES, A., *Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en Castilla*, Valladolid, 1974.

ÁLVAREZ DE MORALES, A., "La evolución de las Hermandades en el siglo XV", en *La Ciudad Hispánica entre los siglos XIII al XVI*, Actas del coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla, 14/19 de septiembre de 1981, t. 1, Madrid, 1985, pp. 93-103.

ÁLVAREZ Y POSADILLA, J., *Práctica criminal por principios o modo y forma de instruir los procesos criminales en sumaria de las causas de oficio de justicia contra los abusos cometidos*, 3 vv., Valladolid y Madrid, 1798-1802.

AMOR DE SORIA, J., *Enfermedad Crónica y peligrosa de los Reynos de España y de las Indias*, Viena, 1741.

ANES ÁLVAREZ, G., *El Antiguo Régimen: los Borbones*, Madrid, 1979.

ANES ÁLVAREZ, G., *Las crisis agrarias en la España Moderna*, Madrid, 1970.

ANES ÁLVAREZ, G., "Los pósitos en la España del siglo XVIII", en *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, Barcelona, 1969.

ANES ÁLVAREZ, G., "Tendencias de la producción agrícola en tierras de la Corona de Castilla (siglos XVI a XIX)", en *Hacienda Pública Española*, nº 55 (1978), pp. 97-111.

ANTEQUERA, J.M., *La legislación española desde los tiempos más remotos hasta la época presente*, Madrid, 1894.

ARANDA PÉREZ, F.J., "Prosopografía y particiones de bienes: una propuesta metodológica para el estudio de las oligarquías urbanas castellanas en la Edad Moderna", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 12 (1991), pp. 259-276.

ARCO Y GARAY, R., "La crítica social en Cervantes", en *Estudios de Historia Social de España*, t. 2, 1952, pp. 209-291.

ARCO Y GARAY, R., "La crítica social en Cervantes", en *Estudios de Historia Social de España*, t. 2, pp. 291-324.

ARCO Y GARAY, R., "La justicia criminal en Huesca durante el siglo XVIII", en separata *Revue Hispanique*, t. 24, París, 1911.

ARCO Y GARAY, R., *La sociedad española en las obras de Cervantes*, Madrid, 1951.

ARGENTE DEL CASTILLO, C., "Las hermandades medievales en el reino de Jaén", en *Actas I Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval*, t. 2, Córdoba, 1978, pp. 21 y ss.

ARIAS DE BALBOA, V., "Las glosas al Fuero Real de Castilla", en *AHDE.*, nº 21-22 (1951), pp. 731-1.139.

ARIES, Ph. y DUBY, G. (dirs), *Historia de la vida privada*, vv.vv., Madrid, 1989.

ARIÑO ORTIZ, G., *La administración institucional. Sus fuentes normativas*, Alcalá de Henares, 1972.

ARTOLA, H., *La Hacienda del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982.

ARTOLA, H., *La legislación del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982.

ASENSIO RUEIO, H., "Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres en Ciudad Real (siglos XVII-XVIII). Aproximación a una realidad desconocida", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1885, t. 8, pp. 105-111.

BAENA DEL ALCÁZAR, M., *Los estudios sobre Administración en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1968.

BALLESTEROS SAN JOSÉ, P., "Hermandades de Zorita, Almoguera y sus tierras", en *La Ciudad Hispánica entre los siglos XIII al XVI*, Actas

- del coloquio celebrado en la Rábida y Sevilla, 14/19 de septiembre de 1985, pp. 973-990.
- BALPARDA, G., "las hermandades de Vizcaya y su organización provincial", en *AHDE.*, nº 9 (1932), pp. 190-199.
- BALTANAS, D., *Compendio de sentencias morales y de muchas cosas notables de la tierra de España*, Sevilla, 1552.
- BARBADILLO DELGADO, O. *Historia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*, vv.vv., Madrid, 1956.
- BARREIRO MALLÓN, B., *La jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII*, Santiago de Compostela, 1978.
- BECCARIA BONESANA, C., *De los delitos y las penas*, (1ª impr., 1764), ed. F. TOMÁS Y VALIENTE, Madrid, 1982.
- BEINART, H., *Records of Trials of the Spanisch Inquisition in Ciudad Real*, 4 vv., Jerusalén, 1977-1985.
- BENEYTO, J., "Apuntes sobre las relaciones entre la jurisdicción y administración en la España Moderna", en *Anali della Fondazione italiana per la Storia Amministrativa*, nº 1 (1964), pp. 297-396.
- BENITO RUANO, E., *Hermandades en Asturias durante la Edad Moderna*, Oviedo, 1971.
- BENNASSAR, B., *Inquisición española. Poder político y control social*, Barcelona, 1981.
- BENNASSAR, B., *La España del Siglo de Oro*, Barcelona, 1983.
- BENNASSAR, B., *Los españoles, actitudes y mentalidad*, Barcelona, 1979.
- BERMEJO CARRERO, J.L., *Estudios sobre la administración central española (siglos XVII-XVIII)*, Madrid, 1982.
- BERMÚDEZ AZNAR, A., "La abogacía de pobres en la España Medieval, en *A pobreza e a assistência aos pobres na Península Iberica durante a Idade*

- Media*, Actas 1ª Jornada Luso-Española de Historia Medieval, t. 1, Lisboa, 25/30 de septiembre de 1972, pp. 135-155.
- BERNALDO DE QUIRÓS, C., *Colonización y subversión en la Andalucía de los siglos XVIII-XIX*, ed. A. GARCÍA BENÍTEZ, Barcelona, 1986.
- BERNALDO DE QUIRÓS, C., *El bandolerismo*, Madrid, 1934.
- BERNALDO DE QUIRÓS, C., *Figuras delincuentes con ocho reproducciones de antiguos rollos jurisdiccionales*, Madrid, 1908 (?).
- BERNALDO DE QUIRÓS, C., *La picota. Crímenes y castigos en el país castellano en los tiempos medios*, Madrid, 1907.
- BERNAVEU NOVALBOS, E., *Inventario del archivo del Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real hecho en el año de 1595*, Ciudad Real, 1952.
- BERNÍ Y CATALÁ, J., *Práctica criminal, con nota de los delitos, sus penas, presunciones o circunstancias, que los agravan, y disminuyen: y ritual para juzgar, acriminar, y defender en los tribunales reales de España. y en los particulares de residencia*, 2ª impr., Valencia, 1763.
- BISHKO, Ch.J., "El castellano, hombre de llanura. La explotación ganadera en el area fronteriza de La Mancha y Extremadura durante la Edad Media", en *Homenaje a Vicens Vives*, t. 1, Barcelona, pp. 201-218.
- BLÁZQUEZ, A. y AGUILERA DELGADO, A., *Historia de la provincia de Ciudad Real*, Ciudad Real, 1898.
- BLÁZQUEZ MIGUEL, J., *La Inquisición de Castilla-La Mancha*, Madrid, 1986.
- BO, A., y CARLE, M.C., "Cuándo empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas", en *CHE.*, t. 4 (1946), pp. 114-124.

BOADA DE LAS COSTAS Y FIGUERAS, O., *Adiciones y repertorio general de la Práctica Universal forense de los Tribunales Superiores e Inferiores*, 2 vv., Madrid, 1793.

BONGERT, Y., "Délinquance juvénile et responsabilité penale du mineur au XVIII^e siècle", en AA.VV., *Crimes et criminalité en France sous l'Ancien Regime, 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 49-90.

BONILLA Y MIR, J.A. y VELÁZQUEZ GAZTELU, F., "Alcaldes de la Santa Hermandad por el estado noble de Jaén, 1780-1835", en *Boletín de Estudios Jiennenses*, año 22, nº 87 (enero-marzo, 1976), pp. 31-70.

BORDES, M., *L'administration provinciale et municipale en France au XVIII^e siècle*, París, 1972.

BORREGUERO BELTRÁN, C., *El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII*, Valladolid, 1989.

BORREGUERO BELTRÁN, C., "Reclutamiento militar en el ejército borbónico en el siglo XVIII", en *CHI*, Madrid, 1989, pp. 91-101.

BORROW, G., *Los zíncali. Los gitanos en España*, Madrid, 1979-

BOWLES, G., *Introducción a la Historia Natural y a la geografía física de España*, Madrid, 1775.

BRUMONT, F., *Campo y Campesinos de Castilla la Vieja en tiempos de Felipe II*, Madrid, 1976.

CAAMAÑO BOURNACELL, J., *Historia de la Policía Española*, Madrid, 1972.

CABRERA BOSCH, J., "El poder legislativo en la España del siglo XVIII (1716-1808)", en *Economía española al final del Antiguo Régimen*, t.4, pp. 322-514.

CADENAS y VICENT, V., *Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo XVIII*, 5 vv., Madrid, 1972.

CALLAHAN, J.W., "Caridad, sociedad y economía en el siglo XVIII", en *Moneda y Crédito*, nº 146 (diciembre, 1978), pp. 65-77.

CALLAHAN, J.W., "La estimación del trabajo manual de la España del siglo XVIII", en *Revista Chilena de Historia y Geografía*, nº 132 (1964), pp. 72 y ss.

CALVO POYATOS, J., "Sierra Morena, como gozne entre la Mancha y Andalucía en la Guerra de Sucesión durante el año 1710", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 183-190.

CAMPILLO Y COSSIO, J., *Lo que hay de más y de menos en España, para lo que debe ser y no es*, ed. A. ALORZA, Madrid, 1969.

CAMPOS CARRANZA, F., *De las Hermandades al somatén*, Madrid, 1957.

CANO VALERO, J., "La policía rural castellana en el siglo XVI: los caballeros de la Sierra de las Peñas de San Pedro (Albacete)", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 165-171.

CANTERA, D., *Questiones criminales tangentes iudicem, accusatiorem, rerum, probationem punitiomque delictirum*, Salamanca, 1589.

CARANDE, R., *Carlos V y sus banqueros*, 2 vv. (ed. abrev.), Barcelona, 1977.

CARDILLAC, L., *Moriscos y cristianos. Un enfrentamiento polémico*, Madrid, 1977.

CARLE, H.C., "El bosque en la edad media (Asturias, León, Castilla)", en *CHE.*, nº 59-60 (1976), pp. 297-374.

CARO BAROJA, J., *Ensayo sobre la literatura de cordel*, Madrid, 1969.

CARRETERO ZAMORA, J.M., *Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515)*, Madrid, 1988.

CARRETERO ZAMORA, J.M., "La Hacienda municipal de Ciudad Real a fines del Antiguo Régimen (1751-1804)", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t.8, pp. 455-485.

CARRETERO ZAMORA, J.M., "las peticiones particulares de Cortes, fuente para el conocimiento de la vida concejil castellana", en *La ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, Coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla, 14/19 de septiembre de 1981, t. 1, Madrid, 1985, pp. 105-123.

CASADO RUIZ, J.R., "Los orígenes de codificación penal en España: el plan de Código Criminal de 1787", en *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, nº 22 (mayo-agosto, 1969), pp. 313-342.

CASAS TORRES, J.M., *España, atlas e índices de sus términos municipales*, Madrid, 1969.

CASTAN, N., *Justice et repression en Languedoc a l'époque des Lumieres*, París, 1980.

CASTAN, N., "La criminalité familiale dans le ressort du Parlement de Toulouse, 1690-1730", en AA.VV., *Crimes et criminalité en France sous l'Ancien Regime, 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 91-107.

CASTAN, Y., *Magie y sourcellerie à l'époque moderne*, París, 1979.

CASTAN, Y., "Mentalités rurale et urbaine á la fin de l'Ancien Regime dans le ressort du parlement de Toulouse d'après les proces criminiaux, 1730-1790", en AA.VV., *Crimes et criminalité en France sous l'Ancien Regime, 17^e-18^e siècles*, París, 1971, pp. 110-186.

CASTILLO DE BOVADILLA, J., *Política para Corregidores y Señores de Vassallos, en tiempo de paz y de guerra, y para jueces eclesiásticos y seglares, y de sacas, y aduanas, y de residencias, y sus Oficiales*,

- y para Regidores, y Abogados y del valor de los Corregimientos, gobiernos realengos y de las Órdenes, (1ª impr. Madrid, 1597), ed. B. GONZÁLEZ ALONSO, 2 vv., Madrid 1978.
- CASTILLO PINTADO, A., "Los juroes de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento de crédito", en *Hispania*, nº 23 (1973), pp. 43-70.
- CASTRO, A., "Algunas observaciones acerca del concepto del honor en los siglos XVI y XVII", en *Revista de Filología Española*, nº 3 (octubre-diciembre, 1916), pp. 1-50 y 357-386.
- CASTRO, P., *Defensa de la tortura y leyes patrias que la establecieron*, Madrid, 1778.
- CELISO, H., *Repertorio Universal de todas las leyes destos Reynos, abreviadas y reduzidas en forma de repertorio decisivo, por el doctor...*, Medina del Campo, 1553.
- CERDA RUIZ FUNES, J., "Hombres buenos, jurados y regidores de los municipios castellanos en la Baja Edad Media", en *Actas I Simposio de la Administración*, Madrid, 1970, pp. 161-206.
- CERDÁN DE TALLADA, T., *Visita de la cárcel y de los pobres*, Valencia, 1574.
- CERVANTES SAAVEDRA, M., *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, 2 vv. (1ª impr. Madrid, 1599 y 1605), Madrid, 1965.
- CERVANTES SAAVEDRA, M., "Entremés de los alcaldes de Daganzo", en M. HERRERO Y SORIANO, *Entremeses*, Madrid, 1966.
- CLEMENTE, D., *Guía de Ciudad Real*, Ciudad Real, 1869.
- CORCHADO Y SORIANO, M., "El camino de Toledo a Córdoba", en *Anuario de Historia Económica y Social*, nº 1 (1968), pp. 621-634.

CORCHADO Y SORIANO, M., *La Mancha en el siglo XVI. Adiciones al estudio del dr. Salomón sobre las Relaciones Topográficas*", en *Hispania*, t. 33, nº 123 (1973), pp. 141-158.

CORONAS GONZÁLEZ, S.M., "La Audiencia y Cancillería de Ciudad Real (1494-1505)", en *Cuaderno de Estudios Manchegos*, nº 8 (1978), pp. 109-139.

Cortes de los Antiguos Reinos de León y de Castilla, Madrid, 1883-1903.

COS GAYÓN, F., "La Mesta", en P. GARCÍA MARTÍN y J.M. SÁNCHEZ BENITO (comp., prol. y bibl.), *Contribución a la Historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1986, pp. 209-282.

COXE, W., *España bajo el reinado de la Casa de Borbón*, 3 vv. (1ª impr. Londres, 1813), Madrid, 1846.

CHABES, C., *Relación de la cárcel de Sevilla*, (reed.), Madrid, 1983.

CHAVES, B., *Apuntamiento legal sobre el dominio solar que por expresas y reales donaciones pertenece a la Orden de Santiago con todos sus pueblos* (Madrid, 1770), facs., Barcelona, 1974.

CHICHIZIOLA, M.L., "La pena de prisión", en *Revista del Instituto de Investigación y Docencia Criminológica*, nº 8 (1964), pp. 87-115.

DANVILA y COLLADO, F., "Origen, naturaleza y extensión de la Mesa Maestral de la Orden de Calatrava", en *BRAH.*, t. 1 (1989), pp. 116-163.

DANVILA y COLLADO, F., *Trajes y armas de los españoles desde los tiempos prehistóricos hasta el siglo XIX*, vv.vv., Madrid, 1877.

DE LAS HERAS SANTOS, J.L., *La justicia penal de los Austrias en la Corona de Castilla*, Salamanca, 1991.

DE LA PUENTE, J., "La visión de la realidad española en los viajes de Antonio Ponz", en *Moneda y Crédito*, nº 10 (1968), pp. 56 y ss.

DELEITO Y PIÑUELA, J., *La mala vida en la España de Felipe IV*, (1ª ed. Madrid, 1950), Madrid, 1987.

DELEITO Y PIÑUELA, J., *Solo Madrid es Corte*, Madrid, 1942.

DELGADO MERCHÁN, L., *Historia documentada de Ciudad Real (La Inquisición, La Audiencia y la Santa Hermandad)*, (1ª ed. 1869), 2ª ed., Ciudad Real, 1907.

DESDEVISES DU DEZER, G., *L'Espagne de l'Ancien Régime*, 2 vv. París, 1899 (trad. Madrid, 1989).

DEYON, P., *Les temps des prisons. Essai sur l'histoire de la délinquance et les origines du système pénitentiaire*, París, 1875.

DÍAZ DE MONTALVO, F., *Solemne repertorium seu secunda compilatio Montalvi*, Salamanca, 1549.

DÍAZ PINTADO, J., "Climatología de La Mancha durante el siglo XVIII", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 12 (1991), pp. 121-166.

DÍAZ PINTADO, J. *Conflicto social, marginación y mentalidades de La Mancha*, Ciudad Real, 1987.

Diccionario de Autoridades, Madrid, 1737.

Difiniciones de la orden y Caballería conforme al capítulo general celebrado en Madrid, Madrid, 1652, Madrid, 1661.

DOBADO GONZÁLEZ, R., "Salarios y condiciones de trabajo en las minas de Almadén", en P. TEDDE (ed. e intr.), *La economía española al final del Antiguo Régimen*, t.2, Madrid, 1982.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *El Antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los Austrias*, Madrid, 1979.

- DOMÍNGUEZ ORTIZ; A., *Hechos y figuras del siglo XVIII español*, Madrid, 1973.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., *Sociedad y Estado en el siglo XVIII español*, Madrid, 1976.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VICENT, B., *Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría*, Madrid, 1978.
- DOMÍNGUEZ VICENTE, J.M., *Ilustración y continuación a la Curia Philípica y corrección de las citas que en ella se hallan erradas*, vv. vv., Madrid, 1736-1739.
- EGIDO, T., "El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII", en F. MESTRE SANCHÍS (dir), *Historia de la Iglesia Española*, t. 4, Madrid, 1972.
- ELIZONDO y ÁLVAREZ, F.A., *Práctica Universal Forense de los Tribunales de España y de las Indias*, vv.vv., Madrid, 1786-1788.
- ELORZA, A., "La polémica sobre los oficios viles en la España del siglo XVIII", en *Revista del Trabajo*, nº 22 (1968).
- ENRIQUE DE SALAMANCA, C., *Ciudad Real*, Ciudad Real, 1973.
- ESCANDELL, B., "La investigación de los conflictos de préstamo hipotecario (censos). aportación a la metodología de series documentales uniformes", en *Actas I Jornadas de metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, t. 3, Vigo, 1975, pp, 751-762.
- ESCOBAR RAGGIO, J.A., *Historia de la Policía. Desde sus orígenes hasta fines del siglo XVIII*, Madrid, 1947.
- ESCOLANO DE ARRIETA, P., *Práctica del Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos, con distinción de los que pertenecen al Consejo pleno, a cada Sala particular, y las*

- fórmulas de las Cédulas y Proviisiones y Certificaciones respectivas*, Madrid, 1796.
- ESCUADERO, J.A., (dir), "Cinco siglos de cárceles", en *Historia* 16, extra 7 (octubre, 1976), pp. 6-46.
- ESPADAS BURGOS, H., "Ciudad Real 1774: Una grave crisis agrícola", en *Boletín de Información Municipal*, Ciudad Real (agosto, 1964).
- ESPÍN CÁNOVAS, D., *Las nociones de orden público y buenas costumbres como límites de la voluntad de la doctrina francesa*, Madrid, 1963.
- EVANS, R.J.W., *La monarquía de los Habsburgos (1500-1700)*, Barcelona, 1989.
- FAIRÉN GUILLÉN, V., *El juicio ordinario y los plenarios rápidos. Los defectos en la percepción del derecho procesal común: sus causas y consecuencias en al doctrina y legislación actuales*, Barcelona, 1953.
- FAYARD, J., "Fortune e hierarchie au Conseil de Castille au XVII^e et XVIII^e siècles", en *Actas I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, Santiago de Compostela, 1976, t. 3, pp. 441-559.
- FAYARD, J., "La tentative de reforme du Conseil de Castille (1713-1715)", en *Melanges de la Casa de Velázquez*, t. 2 (1968), pp. 269-279.
- FAYARD, J., *Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746)*, Madrid, 1972.
- FEIJÓO Y MONTENEGRO, B.J., "Artes Adivinatorias", en A. MILLARES CARLOS y G. MARAÑÓN (eds.), *Obras escogidas*, t. 2, BAE., t. 141.
- FEIJÓO Y MONTENEGRO, B.J., "La ociosidad desterrada y la milicia socorrida", en *Teatro Crítico y Universal o discursos varios de todo género de materias, para desengaño de los errores comunes*, t. 8, Madrid, 1726.

- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M., *La sociedad española en el Siglo del Oro*, Madrid, 1983.
- FERNÁNDEZ BETHENCOURT, F., *Anales de la nobleza de España*, vv.vv., Madrid, 1880-1884.
- FERNÁNDEZ DURO, C., "Viaje a La Mancha", en *Boletín de la Real Sociedad Geográfica de Madrid*, t. 21 (1886), pp. 114-137.
- FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLARROEL, J., *Práctica Criminal*, Madrid, 1672.
- FERNÁNDEZ DE OTERO, A., *Tractatus de officialibus republicae, nec non oppidorum utriusque Castellae*, Lugduni, 1700.
- FIESTAS LOZA, A., "Las cárceles de mujeres", en *Historia 16*, extra 7 (octubre, 1976), pp. 91-99.
- FIGUEROA Y MELGAR, A., "La Orden de Caballería de Santiago", en *Hidalguía*, t. 15 (1976), pp. 785-808.
- FORONDA, V., *Cartas sobre los asuntos más exquisitos de la Economía-Política, y sobre las leyes criminales*, 2 vv., Madrid, 1789-1794.
- FOUCAULT, M., *Vigilar y Castigar*, (1ª ed. París, 1975) Madrid, 1986.
- FRAILE, P., *Un espacio para castigar. La cárcel y la ciencia penitenciaria en España (siglos XVIII-XIX)*, Barcelona, 1987.
- FRANCO ORTIZ, J.M. y BRAVO Y TUDELA, A., *Novísima legislación comentada sobre las capellanías colativas de sangre y fundaciones análogas*, Madrid, 1868.
- FRIGOURG, A., "La trashumancia en España", en P. GARCÍA MARTÍN y J.M. SÁNCHEZ BENITO (comp., prol. y bibl.), *Contribución a la Historia de la trashumancia en España*, Madrid, 1986, pp. 137-154.
- GALLEGO ANABITARTE, A., *Administración y jueces: gubernativo y contencioso. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el estado*

constitucional y fundamentos de derecho administrativo español, Madrid, 1971.

GARCÍA CARRAFFA, A. y A., *Diccionario Heráldico y Genealógico de apellidos Españoles y Americanos*, vv.vv., Madrid, 1919-1953.

GARCÍA DE LA TORRE, M., "Diversos aspectos de un grupo social marginado: los arrieros en la España de los Austrias", en *Revista Internacional de Sociología*, nº 48 (1983), pp. 641-653.

GARCÍA DE LA TORRE, M., "Movimientos de mercancías y precios del transporte a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII en Castilla-La Mancha", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 7, pp. 183-189.

GARCÍA GALLO, A., "La división de competencias administrativas en España en la Edad Moderna", en *II Simposio de Historia de la Administración*, Alcalá de Henares, 1971, pp. 293-300.

GARCÍA MARTÍN, J., *La burocracia castellana bajo los Austrias*, Sevilla, 1976.

GARCÍA MARTÍN, P., "Los campesinos del siglo XVI", en *Historia 16*, nº 182, pp. 3-32.

GARCÍA MARTÍN, P., *La ganadería mesteña en la España Borbónica (1700-1836)*, Madrid, 1988.

GARCÍA MARTÍN, P., "La ganadería mesteña en el area castellano-manchega durante la Edad Moderna", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 7, pp. 115-153.

GARCÍA MARTÍN, P., y SÁNCHEZ BENITO, J.M., "Arbitrios locales sobre la propiedad semoviente en Castilla durante los siglos XIV y XV", en

Contribución a la Historia de la trashumancia en España, Madrid, 1986, pp. 285-299.

GARCÍA MERCADAL, J. (comp., trad., prol. y not.), *Viajes de extranjeros por España y Portugal*, 3 vv., Madrid, 1952.

GARCÍA SANZ, A. (y otros), "La Mesta", en *Historia* 16, nº 7, pp. 5-96.

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., "Carta de Hermandad entre los concejos de la Extremadura Castellana y del arzobispado de Toledo", en *Revista Portuguesa de Historia*, t. 12 (1969), pp. 58-75.

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., *Curso de Historia de las Instituciones españolas. De los Orígenes al final de la Edad Media*, Madrid, 1984.

GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., "El Apellido. Notas sobre el procedimiento "in fraganti" en el Derecho español medieval", en *CHE.*, nº 7 (1947), pp. 67 y ss.

GARRIGÓS PICÓ, E., "Organización territorial a fines del Antiguo Régimen", en *La economía española al final del Antiguo Régimen*, t. 4, Madrid, 1982.

GASCÓN BUENO, F., *El valle de Alcudia. Un ejemplo de economía agropecuaria en la España del siglo XVIII*, La Solana, 1978.

GASCÓN BUENO, F., *La villa de Argamasilla de Calatrava a finales del siglo XVIII*, Puertollano, 1882.

GATREILL, V.A.C. y HADDEN, T.B., "Criminal Statistics and Their Interpretation", en E.A. WRITLEY, *Nineteenth-Century Society; Essays in the use of the Quantitative Methods for the study of social data*, Cambridge, 1972

GIBERT, R., "El ordenamiento de Villa Real. 1346", *AHDE.*, nº 25 (1955), pp. 703-729.

GIBERT, R., "La paz del camino en el Derecho Medieval español", en *AHDE.*, nº 27 y 28 (1957-1958), pp. 833-852.

GIBERT, R., *El Antiguo Consejo de Castilla*, Madrid, 1964.

GIL AYUSO, F., *Noticia bibliográfica de textos y disposiciones legales de los reinos de Castilla, impresos en los siglos XVI y XVII*, Madrid, 1935.

GOLDSCHMIDT, J., *Problemas jurídicos y públicos del proceso penal*, Barcelona, 1935.

GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F., "Caridad y asistencia pública de la Santa Hermandad Vieja Vieja de Ciudad Real. Siglos XVI-XVIII", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 12 (1991), pp. 47-65.

GÓMEZ VOZMEDIANO, M.F.: *Casuística jurisdiccional de la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real en el siglo XVIII*, memoria inédita de licenciatura, UCM., 1990.

GONZÁLEZ ALONSO, B., *El corregidor castellano (1348-1808)*, Madrid, 1980.

GONZÁLEZ ALONSO, B., "La Justicia", en AA.VV., *Historia de España*, Madrid, 1988.

GONZÁLEZ ALONSO, B., "El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII", en *Revista de Estudios de la Vida Local*, nº 190 (abril-junio, 1976), pp. 249-276.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., "La Hermandad entre Sevilla y Carmona (siglos XIII-XVI)", en *Actas I Congreso de Historia de Andalucía: Andalucía Medieval*, t. 2, Córdoba, 1978, OO. 3 y ss.

GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C., *Contribución al estudio de las Hermandades en el reinado de Fernando IV de Castilla*, Vitoria, 1971.

GONZÁLEZ DE SALCEDO, P., *Tratado jurídico-político del contrabando*, 3ª impr. (corr.), Madrid, 1779.

GONZÁLEZ ORTIZ, J., "Museo archivo histórico municipal Elisa Cendrero", en *Cuaderno de Estudios Manchegos*, nº 14 (diciembre, 1983), pp. 313-331.

GONZALO MARTÍNEZ DÍEZ, S.J., "La tortura judicial de la legislación histórica española", en *AHDE.*, nº 32 (1962), pp. 223-300.

GOUBERT, P., *El Antiguo Régimen*, 2 vv., Madrid, 1979-1980.

GUARDIOLA Y SÁEZ, L., *El corregidor perfecto y juez exactamente dotado de las calidades necesarias y convenientes para el buen gobierno económico y político de los pueblos, y la más recta administración de justicia en ellos*, Madrid, 1785.

GUERRERO, A.C., "Castilla-La Mancha en las Relaciones de los viajeros ingleses del siglo XVIII", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre, t. 8, pp. 423-428.

GUERRERO VENTAS, P., *El gran priorato de Castilla y León de la Orden de San Juan de Jerusalén en el Campo de La Mancha*, Toledo, 1969.

GUILARTE, A.M., *El régimen señorial en el siglo XVI*, Madrid, 1962.

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, J., *Honor y honra en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1981.

GUILLAMÓN ÁLVAREZ, J., *Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. Un estudio sobre dos reformas administrativas de Carlos III*, Madrid, 1980.

GUISADO LÓPEZ, J.M., "La propiedad de la tierra y su jurisdicción en el reino de Granada hacia 1750. Un ensayo de cuantificación de la

- magnitud del régimen señorial", en *Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX*, Madrid, 1984.
- GUTIÉRREZ, J., *Praxis criminalis, civilis et canonica, in librum octavum Novae recopilationis regiae*, Salamanca, 1634.
- GUTIÉRREZ NIETO, J.L., "Puntos de aproximación al movimiento hermandino (Relaciones entre la Santa Hermandad y la Santa Hirmadade)", en *I Jornadas de Metodología aplicada a las Ciencias Históricas*, Santiago de Compostela, 1973, pp. 313-322.
- GUTTON, F., *La chevalerie militaire en Espagne*, París, 1969.
- GUTTON, F., *L'Ordre de Calatrava*, París, 1955.
- GUZMÁN, P., *Bienes del honesto trabajo y daños de la ociosidad*, Madrid, 1614.
- HEREDIA, A., *Dechado de jueces en el qual se hallará la muestra de qual deve ser un buen juez*, Valencia, 1566.
- HERNÁNDEZ IGLESIAS, F., *La beneficencia en España*, 2 vv., Madrid, 1876.
- HERRERA PUGA, P., *Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro. Aspectos de la vida sevillana en los siglos XVI y XVII*, Granada, 1971.
- HERVÁS Y BUENDÍA, I., *Diccionario histórico, geográfico, biográfico y bibliográfico de la provincia de Ciudad Real*, 3ª ed., Ciudad Real, 1914.
- HESPANHA, A.M., *Vísperas de Leviathán. Instituciones y poder político (Portugal. Siglo XVII)*, (1ª ed. Lisboa, 1986), Madrid, 1989.
- HESPANHA, A.M., "Savants et rustiques. La violence douce de la raison juridique", en *Ius Commune*, nº 10 (1983), pp. 1-118.
- HEVIA BOLAÑOS, J., *Curia Philípica*, (1ª impr. 1612), Madrid, 1717.

- HINOJOSA Y NAVEROS, E., *Documentos para la historia de las Instituciones de León y Castilla (siglos X-XIII)*, Madrid, 1919.
- HOBSBAWN, E.J., *Rebeldes primitivos*, Barcelona, 1968.
- IGNATIEFF, M., *A just measure of pain: the penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*, Londres, 1978.
- ILLANA SOLANA, A.M., *Delincuencia y Orden Público en Madrid y Sitios Reales en el siglo XVIII*, memoria inédita de licenciatura, UAM., 1982.
- IMBERT, J. (dir.), *Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles présentés pour un groupe d'étudiants sous la direction de...*, París, 1964.
- INSA RIBELLES, M.D., "La justicia municipal en el condado de Cocentaina durante el siglo XVI, problemas jurisdiccionales", en *La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI*, t. 2, pp. 1.645-1.659.
- JAGO, C., "La crisis de la Aristocracia en la Castilla del siglo XVII", en AA.VV., *Poder y Sociedad en la España de los Austrias*, (1ª ed. Cambridge, 1979), Barcelona, 1982, pp. 248-286.
- JAVIERRE MUR, A. y ARROYO, C.G., *Catálogo de los documentos referentes a los conventos de Santiago, Calatrava y Alcántara que se conservan en el Archivo Secreto de las Órdenes Militares*, Madrid, 1958.
- JIMÉNEZ DE GREGORIO, F., *Toledo a mediados del siglo XVIII*, Toledo, 1959.
- JIMÉNEZ DE LA LLAVE, L., "La Santa Hermandad de Talavera de la Reina", en *BRAH.*, nº 22 (1893), pp. 96-99.
- JIMÉNEZ SALAS, M., *Historia de la asistencia social en España en la Edad Moderna*, Madrid, 1958.

- JORDÁN DE ASSO, M. y RÍO, I., *Instituciones del Derecho Civil de Castilla*, Madrid, 1780.
- JUAN LOBERA, C., "Hermandad entre Alcalá la Real y Priego (1345)", en *Boletín del Instituto de Estudios Jiennenses*, año 22, nº 3, 87 (enero-marzo, 1976, pp. 71-75.
- JUAN Y COLÒM, J., *Instrucción de escribanos en orden a lo judicial*, 10ª ed., Madrid, 1787.
- KAGAN, L.R., *Lawsuits and litigation in Castilla. 1500-1700*, Chape Hill, 1981.
- KAGAN, L.R., *Students and Society in Early Modern Spain*, Londres, 1974.
- KAGAN, L.R., "Pleitos y Poder Real. La Chancillería de Valladolid (1500-1700)", en *CHI.*, nº 2 (1978), pp. 291-316.
- KAMEN, H., "El establecimiento de los intendentes en la administración española", en *Hispania*, t. 24, nº 95 (1964), pp. 368-395.
- KAMEN, H., *La España de Carlos II*, Barcelona, 1987.
- KELLENBENZ, H., "El valor de las rentas de las encomiendas de la Orden de Calatrava en 1523 y en 1573", en *Anuario de Historia Económica y Social*, t. 1 (1968), pp. 584-598.
- KLEIN, J., *La Mesta. Estudio de la historia económica española, 1273-1836*, (1ª ed. Cambridge, 1920), Madrid, 1985.
- LALINDE ABADÍA, J., *Derecho histórico español*, Madrid, 1974.
- LALINDE ABADÍA, J., *Iniciación histórica al derecho español*, Barcelona, 1974.
- LALINDE ABADÍA, J., "Los gastos del proceso en el Derecho histórico español", en *AHDE.*, nº 34 (1964), pp. 249-416.
- LARDIZÁBAL Y URIBE, M., *Discurso sobre las penas contrahído a las leyes criminales de España para facilitar su reforma*, Madrid, 1782.

LASALA NAVARRO, G., *La mujer delincuente en España y su tratamiento correccional*, Buenos Aires, 1948.

LASLETT, P., *El mundo que hemos perdido, explorado de nuevo*, (1ª ed., 1965), 3ª ed. ampl. y corr., Madrid, 1983.

LE FLEM, J.P., "El valle de Alcudia en el siglo XVIII", en *Congreso de Historia Rural, Siglos XIII al XIX*, Madrid, 1984, pp. 235-250.

LIS, C., y SOLY, H., *Pobreza y capitalismo en la Europa Preindustrial (1350-1850)*, Madrid, 1979.

LÓPEZ DE AZCUTIA, M., *La jurisdicción real en su actual relación con las demás jurisdicciones privativas*, Madrid, 1865.

LÓPEZ GONZÁLEZ, C., "Presión fiscal y crisis económica en las encomiendas manchegas de la Orden de Santiago en el siglo XVII", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 47-53.

LÓPEZ MARTÍNEZ, C., *La Santa Hermandad de los Reyes Católicos*, Sevilla, 1921.

LÓPEZ REY, M., "La jurisdicción común castellana en el siglo XVI. Un intento de reconstrucción histórica", en *Revista General de la Legislación y Jurisprudencia*, t. 4, nº 166 (1935), pp. 447-503.

LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., *Estructuras agrarias y sociedad rural en La Mancha. Siglos XVI-XVII*, 2 vv., Madrid, 1986.

LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., "Evolución demográfica de La Mancha en el siglo XVIII", en *Hispania*, nº 36 (1976), pp. 233-299.

LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., "La Mancha según el Censo del Conde de Aranda", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 2ª época, nº 5 (1974), pp. 101-202.

- LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., *La Mesta, pastos y conflictos en el Campo de Calatrava (siglo XVI)*, Madrid, 1987.
- LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, J., "Una empresa agraria capitalista en la Castilla del XVII. La Hacienda de Don Gonzalo Muñoz Treviño de Loáisía", en *Hispania*, nº 148 (1981), pp. 355-407.
- LUNENFELD, M., *The Council of the Santa Hermandad*, Coral Gables, 1970.
- LUYANDO, J., "Instrucción Criminal", en M. FERNÁNDEZ DE AYALA AULESTIA, *Práctica y formularios de la Chancillería de Valladolid*, Zaragoza, 1733.
- MACANAZ, M., *Auxilios para bien gobernar una Monarquía Católica, o documentos, que dicta la experiencia y aprueba la razón, para que el monarca merezca justamente el nombre de Grande*, Madrid, 1787.
- MADOZ, P., *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de los pueblos de España*, vv.vv., Madrid, 1847.
- MADRID MEDINA, A., *Ciudad Real en el archivo de la Chancillería de Granada*, Ciudad Real, 1983.
- MALDONADO, J., "Líneas de la influencia canónica de la historia del proceso español", en *AHDE.*, nº 23 (1953), pp. 467-493.
- MALDONADO, J., "Los recursos de fuerza en España", en *AHDE.*, nº 24 (1954), pp. 281-381.
- MALDONADO Y COCAT, R.J., *Almagro. Cabeza de la Orden y Campo de Calatrava*, Madrid, 1978.
- MALDONADO Y COCAT, R.J., *Crónica de la familia y linaje del capitán D. Juan Maldonado y Ordóñez de Villaquirán, fundador de la ciudad de San Cristóbal de Venezuela*, Almagro, 1959.

MALDONADO Y COCAT, R.J., "El mayorazgo de Valdarachas. Familias de Treviño, Medrano y Henríquez de Luna", en *Hidalguía*, separata nº 9 (marzo-abril, 1955).

MALDONADO Y COCAT, R.J., "La Casa de Treviño en Ciudad Real", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, nº 10 (1980), pp. 73-108.

MARAVALL, J.A., *Estado Moderno y mentalidad social. Siglos XV a XVIII*, 2 vv., Madrid, 1972.

MARAVALL, J.A., "Las tendencias de la reforma política en el siglo XVIII español", en *Revista de Occidente*, (julio, 1967).

MARAVALL, J.A., *Poder, honor y élites en el siglo XVII*, Madrid, 1984.

MARCOS GONZÁLEZ, M.D., "Castilla La Nueva y Extremadura", en M. ARTOLA, *La España del Antiguo Régimen*, t. 4, Salamanca, 1971.

MARCOS MARTÍN, A., *Economía, sociedad, pobreza en Castilla: Palencia, 1500-1814*, 2 vv., Palencia, 1985.

MARÍN BARRIGUETE, F., "La Mesta: las cañadas y pasos castellano-manchegos en el primer tercio del siglo XVII", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 65-74.

MARÍN BARRIGUETE, F., "La trashumancia en Castilla-La Mancha a fines del siglo XVI: Pasos y Pastos", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1895, t. 7, pp. 155-164.

MARINA BARBA, J., "Disputas protocolarias y penuria económica en el ayuntamiento manchego a mediados del siglo XVIII. La proclamación de Fernando VI en Ciudad Real", *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985; t. 8, pp. 209-215.

- MARINA BARBA, J., *El ayuntamiento de Ciudad Real a mediados del siglo XVIII*, Ciudad Real, 1987.
- MARINA BARBA, J., *La reforma municipal de Carlos III en Ciudad Real*, Ciudad Real, 1985.
- MARONGIU, A., "Un momento típico de la monarquía medieval: el rey juez", en *AHDE.*, nº 23 (1953), pp. 677-711.
- MARTÍN GALÁN, M., "Fuentes y Métodos para el estudio de la demografía histórica castellana durante la Edad Media", en *Hispania*, nº 151 (1981), pp. 231-325.
- MARTÍNEZ ESPINEL, V., *Vida del escudero Marcos de Obregón*, 2 vv., (1ª impr. Madrid, 1618), en M. GILI GAYA (ed. prol. y not.), Madrid, 1969-1970.
- MARTÍNEZ MARINA, F., *Ensayo histórico crítico sobre la Antigua legislación y principales cuerpos legales de los Reinos de León y Castilla*, Madrid, 1808.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Apuntes sobre la policía de Madrid en el reinado de Carlos IV", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 7 (1986), pp. 65-84.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "El mantenimiento de la seguridad pública antes de la creación de la Guardia Civil", en *I Seminario La Guardia Civil: Pasado, Presente y Futuro*, Actas de las jornadas celebradas en Aranjuez, 24/26 de abril de 1989, pp. 27-35.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Estado y delincuencia a fines del siglo XVIII. Algunos datos sobre el bandolerismo andaluz y su persecución", en *Del Antiguo al Nuevo Régimen. Estudios en homenaje al profesor Cepeda Adán*, Granada, 1986.

- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Incidencia de la revolución francesa en el dispositivo de seguridad del estado borbónico español", en *Revista Portuguesa de Historia*, t. 23 (1988), pp. 53-80.
- MARTÍNEZ RUIZ, "La covertedura territorial en el reinado de Carlos III. Perfiles históricos y dinámica de actuación", en *Nuevas Poblaciones en la España Moderna*, Córdoba, 1991, pp. 47 y ss.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., *La seguridad pública en el Madrid de la Ilustración*, Madrid, 1988.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "las fuerzas de seguridad y orden público en la primera mitad del siglo XIX", en *Cuadernos de Historia*, nº 4 (1973), pp. 83-161.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Los temas de la seguridad pública en la prensa y la literatura de la Ilustración", en *Seguridad Pública en el reinado de Carlos III*, Madrid, 1989, pp. 123-182.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Orden público, poder y conflictividad social en el Madrid de la Modernidad", en *Visión histórica de Madrid (siglos XVI al XX)*, Madrid, 1991, pp. 87-120.
- MARTÍNEZ RUIZ, E., "Sociedad y seguridad en el Madrid de Carlos III", en *Carlos III y la lustración*, Madrid, 1988, pp. 212-239.
- MARTÍNEZ RUIZ, E. y DE PAZZIS PI CORRALES, M., "Creación y organización de la Compañía de Fusileros y Guardabosques Reales, en *Coloquio Internacional Carlos III y su siglo*, Madrid 14 al 17 de noviembre de 1988, t. 2, pp. 61-74
- MARTÍNEZ SALAZAR, A., *Colección de las memorias y noticias del gobierno general y político del Consejo: lo que se observa en el despacho de los negocios que le competen: regalías, preeminencias y*

- autoridad de este supremo tribunal y las pertenecientes a la Sala de los Alcaldes de Casa y Corte, Madrid, 1764.
- MATHEU Y SANZ, L., *Tractatus de Re criminali*, Venecia, 1750.
- MATILLA TASCÓN, A., *Historia de las Minas de Almadén*, 2 vv., Madrid, 1958-1987.
- MAURO, F., "Le développement de la puissance de l'État au Portugal, entre 1500 et 1650", en *Colloque sûr le développement de la puissance de l'État, entre 1500 et 1650*, Tours, 1975; resumen en *Information Historique*, nº 38 (1976), pp. 113-119.
- MEDINA, J., *La ociosidad discreta, practicada con los mendigos, y utilidades que logra la República en su recogimiento*, Madrid, 1545.
- MEDRANO Y TREVIÑO, D., *Consideraciones sobre el estado económico-moral y político de la provincia de Ciudad Real*, (1ª impr. Madrid, 1843), reed. Madrid, 1972.
- MELA MARTÍN, C., *Los Golfines. Malhechores de la frontera castellana (siglo XIII-XV)*, memoria inédita de licenciatura UCM., 1984.
- MELGAREJO MANRIQUE DE LARA, P., *Compendio de contratos públicos, autos de peticiones, executivos, y de residencias, con el género de papel sellado que a cada despacho toca*, Valencia, 1707.
- MENDO, A., *De las Órdenes Militares, de sus principios, gobierno, privilegios, obligaciones y de todos los casos morales que pertenecen a los cavalleros y religiosos de las mismas Órdenes*, Madrid, 1681.
- MESTRE SANCHÍS, A. (dir.), *Historia de la Iglesia Española*, vv.vv., Madrid, 1979.
- MIRANDA, L., *Ordinis Judiicii, et de modo procedendi in causis criminalibus tam in foro ecclesiastico, quam in saeculari agitantis*, Salamanca, 1601.

MOLAS RIBALTA, P., *Consejos y Audiencias durante el reinado de Felipe II*, Valladolid, 1984.

MOLAS RIBALTA, P., "La Chancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico", en *CHI.*, nº 3 (1979), pp. 231-257.

MOLAS RIBALTA, P. (y otros), *Historia Social de la administración española*, Barcelona, 1980.

MOLLAT, M., *Études sùr l'histoire de la pauvreté (Moyen Age-XVIIe siècle)*, 2 vv., París, 1974.

MONCADA, S., *Restauración Política de España*, (1ª impr. Madrid, 1619), en J. VILAR (ed.), Madrid, 1974.

MONTALVO Y JARDÍN, L., *Hermandades de Castilla. Juicio de esta institución. Apoyo que prestaban a la unidad monárquica*, discurso pronunciado en la la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, 1862.

MONTEROSSO Y ALVARADO, G., *Práctica Civil y Criminal e instrucción de Escribanos*, Alcalá de Henares, 1571.

MORALES MOYA, A., *Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la posición de la nobleza*, Madrid, 1983.

MORENO BARRANCO, J.A., *La mala vida en el Madrid de Felipe V. Delincuencia y marginación social en Madrid, 1701-1715*, memoria inédita de licenciatura UAM., 1984.

MORENO GARBAYO, N., *Colección de Reales Cédulas del Archivo Histórico Nacional, Catálogo*, Madrid, 1977.

MORETA VELAYOS, S., *Malhechores feudales*, Madrid, 1978.

MOXÓ, S., "Los orígenes de la percepción de alcabalas por particulares", en *Hispania*, separata nº 72 (1958).

MOXÓ, S., "Relaciones entre la Corona y las Órdenes Militares en el reinado de Alfonso XI", en *VII Centenario del Infante Don Fernando de*

la Cerda (1275-1975), Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, abril de 1975, pp. 117-158.

NAVAL MAS, A., y MANSILLA PÉREZ, I., "Exequias Reales en Ciudad Real: Dos túmulos del siglo XVIII", en *Villa Real, 1255*, Ciudad Real, 1989, pp. 211-127.

NÖEL, S., *La vida rural castellana en tiempos de Felipe II*, (1ª ed. 1964), Barcelona, 1982.

NORMANTE Y CARACAVILLA, L., *Proposiciones de Economía Civil y Comercio*, (13ª impr. Zaragoza, 1785), ed. A. PEIRÓ ARROYO, Barcelona, 1984.

Novísima Recopilación de las leyes de España, mandada formar por el Señor Don Carlos IV, 6 vv., (1ª ed. Madrid, 1804), reed. Madrid, 1976.

OLIVER Y ESTELLER, B., "Las hermandades de Castilla en tiempo de Enrique IV", en *BRAH.*, nº 14 (1889), pp. 382-387.

ONECA, A., "El derecho penal de la Ilustración y Don Manuel de Lardizábal", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 174 (1966), pp. 597-626.

ONECA, A., "Los fines de la pena según los penalistas de la Ilustración", en *Revista de Estudios Penitenciarios*, nº 166 (1964).

Ordenanzas, cédulas, privisiones de los Señores Reyes Cathólicos y Emperador Don Carlos y Don Felipe II concernientes a la administración de justicia y buena governación de la Real Audiencia y Chancillería que reside en la ciudad de Granada, Granada, 1601.

Ordenanzas del Ilustre Cavildo de la Hermandad Real de Talavera, 1749.

Ordenanzas de Su Magestad de treinta y uno de Enero de mil setecientos y treinta y cinco para el gobierno de la fábricas y minas de Azogue de Almadén, Madrid, 1735 (?).

Ordenanzas, que los muy ilustres y muy magníficos señores de Granada mandaron guardar, para la buena governación de su República, impresas en el año de 1552. Que se han vuelto a imprimir por mandado de los señores presidente y oydores de la Real Chancillería de esta ciudad de Granada, año de 1670, Granada, 1672.

ORDÓÑEZ, P.J., *Monumento triunfal de la Piedad Católica*, Zaragoza, 1672.

ORLANDIS, J., "La Paz de la Casa en el derecho español de la Alta Edad Media", en *AHDE.*, nº 15 (1944), pp. 107-161.

PALACIO ATARD, V., *Los españoles de la Ilustración*, Madrid, 1964.

PALAU Y CULCET, A., *Manual del librero hispano-americano*, Barcelona, 1948.

PALENCIA FLORES, C., *El archivo municipal de Talavera de la Reina, relación de sus más importantes documentos*, Toledo, 1959.

PALENCIA FLORES, C., *Robos famosos perseguidos por la Santa Hermandad Vieja de Talavera*, Toledo, 1981.

PARES Y FRANQUÉS, J., *Descripción phisico-médico mineralógico mercurial de las reales minas de Azogue de la villa de Almadén*, 1785.

PAZ y MELIÁ, A., "La Santa Hermandad Vieja y la Nueva Hermandad del Reino", en *RABM.*, año 1, nº 3 (1897), pp. 97-108.

PEDRAZA RUIZ, E., *Catálogo del Archivo Secreto*, Toledo, 1985.

PELLEJERO SOTERAS, C., *Delincuencia en Castilla (desde Fernando III hasta Juan II)*, Zaragoza, 1916.

PEREIRA GARCÍA, J., "La Santa Hermandad Real y Vieja de Talavera de la Reina", en *Revista de Estudios de la Vida Local*, nº 81 (mayo-junio, 1955), pp. 412-420.

PÉREZ, J., *L'Espagne du XVI^e siècle*, París, 1963.

- PÉREZ, J., *La España de los Reyes Católicos*, San Lorenzo del Escorial, 1986.
- PÉREZ BÚA, M., *Las reformas de Carlos III en el régimen local de España*, Madrid, 1919.
- PÉREZ ESTÉVEZ, R.M., "Delincuencia en al España del siglo XVIII: los presidiarios de marina", en *CIH.*, nº 3 (1979), pp. 259-273.
- PÉREZ ESTÉVEZ, R.M., *El problema de los vagos en la España del siglo XVIII*, Madrid, 1976.
- PÉREZ DE HERRERA, C., *Amparo de Pobres*, en M. CAVILLAC (ed., intr. y not.), Madrid, 1975.
- PÉREZ Y LÓPEZ, A.J., *Discurso sobre la honra y la deshonra legal*, Madrid, 1781.
- PÉREZ Y LÓPEZ, A.J., *Teatro de la legislación universal de España e Indias*, 9 vv., Madrid, 1791-1797.
- PÉREZ MARTÍN, A. y SCHOLZ, J.M., *Legislación y jurisprudencia en la España del Antiguo Régimen*, Valencia, 1978.
- PÉREZ PRENDES, J.M., "Una visión de la Administración Local en el siglo XVIII", en *Revista de la Facultad de Derecho*, t. 3, nº 6 (1959), pp. 323-348.
- PÉREZ UNZUETA, J., *El Somatent a través de la historia*, Barcelona, 1924.
- PÉREZ VALERA, I., *Argamasilla de Alba en el siglo XVIII. Datos , Notas y Transcripción del catastro que mandó hacer el marqués de la Ensenada*, Ciudad Real, 1978.
- PÉREZ VALERA, I., *Ciudad Real en el siglo XVIII*, Ciudad Real, 1979.
- PÉREZ VALERA, I., *Índice de documentos del Archivo Municipal de Ciudad Real, 1255-1899*, 1962.

- PESCADOR DEL HOYO, M.C., "La caballería popular en León y Castilla", en *CHE.*, nº 33-34 (1961), pp. 101-238; 35-36 (1962), pp. 56-201; 37-38 (1963), pp. 88-198; 39-40 (1964), pp. 169-260.
- PESCADOR DEL HOYO, M.C., "Los orígenes de la Santa Hermandad", en *VII Centenario del Infante Don Fernando de la Cerda, 1275-1975*, Actas del congreso celebrado en Ciudad Real, abril de 1975, pp. 171-178.
- PESCADOR DEL HOYO, M.C., "Madrid y la Santa Hermandad Vieja de Ciudad Real (siglos XVIII-XIX)", en *Anales del Instituto de Estudios Madrileños*, nº 8 (1972), pp. 309-353.
- PESET, M., "Derecho Romano y Derecho Real en las Universidades del siglo XVIII", en *AHDE.*, nº 45 (1975), pp. 273-339.
- PHILLIPS, C.R., *Ciudad Real, 1500-1750. Growth, crisis and readjustement in the Spanish economy*, Indiana, 1976.
- PHILLIPS, C.R., "Urban Control of the Castellian Countryside: Additional Evidence from Seventeenth Century Ciudad Real", en *Societas-A. Review of Social History*, 1973, pp. 313-335 (trad. "La propiedad urbana en Castilla: un testimonio adicional de Ciudad Real en el siglo XVII", en *Moneda y Crédito*, nº 144 -marzo 1977-, pp. 46-65).
- PHILLIPS, W., *Enrique IV and the crisis of fifteenth century Castile*, Mass., 1978.
- PILLET CAPDEPON, F., *Geografía urbana de Ciudad Real (1255-1980)*, Madrid, 1984.
- PIKE, R., "Crime and Punishment in Sixteenth Century Spain", in *The Journal of European Economic History*, nº 5 (1976).
- PIKE, R., "Penal Labor in Sixteenth Century Spain: the mines of Almadén", en *Societas-A. Review of Social History*, nº 3 (1973).

- PIKE, R., "Penal Servitude in Early Modern Spain", en *Review of Wisconsin University*, 1983.
- PIKE, R., "Penal servitude in the Spanish Empire: Presidio Labor in the Eighteenth Century", en *Hispanic American Historical Review*, nº 58 (1978),
- PISKORSKI, W., *Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Moderna. 1188-1520*, (1ª ed, París, 1897), en J. BALDEÓN BARUQUE (est. prel.), Barcelona, 1977.
- PONZ, A., *Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse, que hay en ella*, vv.vv., Madrid, 1778-1794.
- POSTIGO CASTELLANOS, E., "Hábitos de violencia en la nobleza castellano-manchega del siglo XVII. Los caballeros de las órdenes Militares", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 33-38.
- POSTIGO CASTELLANOS, E., *Honor y privilegio en la Corona de Castilla: El Consejo de las órdenes y los caballeros de Hábito en el siglo XVII*, Soria, 1988.
- PRADILLA BARNUEVO, F., *Suma de todas las leyes penales, eclesiásticas, civiles y de estos Reynos*, Madrid, 1921.
- PRO RUIZ, J., "Tratamientos de las capellanías en los estudios de Historia de la propiedad en tierra de Castilla", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 327-330.
- PUY MUÑOZ, F., *Las ideas jurídicas en la España del siglo XVIII (1700-1760)*, Granada, 1968.

- PUYOL Y ALONSO, J., *Las Hermandades de Castilla y León. Estudio histórico seguido de las ordenanzas de Castronuño, hasta ahora inéditas*, Madrid, 1913.
- QUEVEDO DONIS, A. Y SIDRO SURGA, J., *La Guardia Civil. Historia de esta institución y de todas las que se han conocido en España con destino a la persecución de malhechores desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*, Madrid, 1858.
- QUEVEDO Y HOYOS, A., *Libro de Indicios y Tormentos: que contiene toda la práctica criminal, y modo de sustanciar el proceso indicativamente hasta descubrir el delito y delincuente y ponerle en estado de condenarle, o absolverle*, Madrid, 1632.
- QUEVEDO Y HOYOS, A., *Recopilación de las Leyes destos Reynos, hecho por mandado de la Magestad Católica del rey Don Phelipe V*, Madrid, 1723.
- QUEVEDO Y VILLEGAS, F., *Obras de...Poesías*, en F. JANER (comp. y corr.), t. 3, BAE., nº 69, Madrid, 1953.
- QUINTANO Y RIPOLLÉS, A., *La criminalidad en la literatura universal*, Barcelona, 1951.
- QUINTERO OLIVARES, G., *Introducción al Derecho penal*, Barcelona, 1981.
- RADBUCH, G. y GWINNER, E., *Historia de la criminalidad (Ensayo de una criminología histórica)*, en A. MAJADA (not. y adic.), Barcelona, 1955.
- RADES Y ANDRADA, F., *Catálogo de las obligaciones que los comendadores, cavalleros, priores y otros religiosos de la órden, y cavallería de Calatrava tienen en razón de su ávito y profesión*, Toledo, 1571,
- RAMÍREZ DE ARELLANO, R., *Ciudad Real artística; estudio de los restos que quedan en la capital de La Mancha*, Ciudad Real, 1893.

RAMÍREZ RODRIGO, M.P., *Cultura y religiosidad popular en el siglo XVIII: Censo de las Hermandades, Gremios y Cofradías del Conde de Aranda en al provincia de Ciudad Real*, Ciudad Real, 1984.

RAU, V., y SAEZ, F (eds.), *A pobreza e a Assistência dos Pobres na Península Ibérica durante a Idade Media*, 2 vv., Lisboa, 1973.

RECIO, A.E., "las hermandades de Álava y la lucha antiseñorial a fines de la Edad Media", en *Congreso de Estudios Históricos: Vitoria en la Edad Moderna*, Vitoria, 1982, pp. 519 y ss.

REGLÁ CAMPISTOL, J., *El bandolerismo Catalá del Barroc*, Barcelona, 1966.

RIAZA, R., "El derecho romano y el derecho nacional de Castilla durante el siglo XVIII", en *Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales*, nº 12 (1929), pp. 104-124.

RICO GIMÉNEZ, J., "Legislar y administrar. El despotismo ilustrado y los gitanos", en *Coloquio Internacional Carlos III y su siglo*, Madrid, 14 al 17 de doviembre de 1988, t. 2, Madrid, 1990, pp. 151-166.

ROBERTSON, I., *Los curiosos impertinentes, viajeros ingleses por España desde la accesión de Carlos III hasta 1855*, Madrid, 1956.

RODRÍGUEZ CASADO, V., *La política y los políticos en el reinado de Carlos III*, Madrid, 1962.

RODRÍGUEZ FLORES, M.I., *Posibles clasificaciones del Perdón*, fragmento de su tesis doctoral *El perdón real en Castilla (siglos XIII al XVIII)* Salamanca, 1971.

RODRÍGUEZ MOURULLO, G., "La distinción hurto-robo en el derecho histórico español", en *AHDE.*, nº 32 (1962), pp. 25-111.

- ROJAS GIL, F., "Geografía del alojamiento en La Mancha en el siglo XVIII", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, nº 8 (1978), pp. 197-131; y 9 (1979), pp. 73-89.
- ROMERO SAMPER, M., "Delito, Policía, estado y sociedad. Tendencias actuales de la investigación y debate historiográfico", en *Cuadernos de Historia Moderna*, nº 9 (1988), pp. 229-248.
- ROMERO VELASCO, A., "De cómo Felipe II vuelve a conceder jurisdicción civil y criminal a los pueblos de las Órdenes Militares que él mismo se las había quitado", en *Cuadernos de Estudios Manchegos*, 2ª época, nº 8 (1978), pp. 223-232.
- RUDÉ, G., *Europa en el siglo XVII. La aristocracia y el desafío burgés*, Madrid, 1981.
- RUIZ JOSUÉ, T., "Las cartas de Hermandad en España", en *AHDE.*, nº 15 (1944), pp. 387-463.
- RUIZ RODRÍGUEZ, J.I., "Ejercicio del poder jurisdiccional y crisis de tierras de la Orden de Santiago en la segunda mitad del siglo XVII", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 8, pp. 41-45.
- RUMEU DE ARMAS, A., *Historia de la Previsión Social en España. Cofradías, Hermandades, Montepíos*, Madrid, 1944.
- SAINZ CANTERO, J.A., *La ciencia del derecho penal y su evolución*, Barcelona, 1970.
- SAINZ SAMPELAYO, M., "Los presidios españoles del Norte de África y su aprovisionamiento de víveres durante el siglo XVIII", en *Anuario de Historia Moderna y Contemporánea*, nº 4-5 (1977-1978).
- SALAZAR Y CASTRO, L., *Los comendadores de la Orden de Santiago*, 2 vv., Madrid, 1979.

SALES, N., *Historia de los Mossos d'Esquadra. La dinastía Veciana i la política catalana del siglo XVII*, Barcelona, 1952.

SALGADO Y CORREA, A., *Libro nombrado regimiento de Juezes...En el qual se contienen algunos acuerdos y avisos de cosas que los buenos corregidores y juezes deven considerar y hazer y evitar para administrar bien sus oficios y dar buena y loable cuenta de sí y dellos*, Sevilla, 1556.

SALILLAS Y PANZANO, R., *Golfines y golfos*, Madrid, 1905.

SALILLAS Y PANZANO, R., *La Cárcel Real de esclavos y forzados de las minas de azogue de Almadén y las características legales de la penalidad utilitaria*, Madrid, 1913.

SALVÁ, A., *Páginas histórico-burgalesas. los Fueros. Las Hermandades. La Inquisición*, Burgos, 1907.

SAN ROMÁN, T., "¿Hay un lugar para el pueblo gitano?", en M. IZARD (comp.), *Marginados, fronterizos, rebeldes y oprimidos*, t. 1, pp. 130-157.

SANTOS, S., *Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provisines, circulares, autos acordados, bando y otras providencias publicadas en el actual reinado del señor don Carlos IV, con varias noticias instructivas y curiosas*, 4 vv., Madrid, 1894.

SANTOS, S., *Extracto puntual de todas las pragmáticas, cédulas, provisiones, circulares, autos acordados y otras providencias publicadas en el reinado de...Carlos III*, 2 vv., Madrid, 1794.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., "Carta de Hermandad entre Plasencia y Escalona", en *AHDE.*, nº 3 (1926), pp. 502-507.

SÁNCHEZ BENITO, J.M., "Aproximación al estudio de un sector económico en Castilla a fines de la Edad Media. La explotación colmenera", en

Congreso Hernán Cortés y su tiempo, jornadas celebradas en Cáceres, en noviembre de 1985 (en prensa).

SÁNCHEZ BENITO, J.M., *Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad real (siglos XIII-XV)*, Tarancón, 1987.

SÁNCHEZ BENITO, J.M., "Poder y propiedad. Los hermanos de la Santa Hermandad Vieja de Toledo, Talavera y Ciudad Real en el siglo XV", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, congreso del celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 4, pp. 95-100.

SÁNCHEZ BENITO, J.M. y MELA MARTÍN, C., "Para el estudio del bandolerismo medieval. Golfines y seguridad de los montes", *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 4, pp. 52-57.

SÁNCHEZ GÓMEZ, I., "Los alcaldes de Casa y Corte y la vigilancia en Madrid (segunda mitad del siglo XVIII)", en *I Seminario La Guardia Civil: Pasado, Presente y Futuro*, actas de las jornadas celebradas en Aranjuez, 24/26 de abril de 1989, pp. 47-54.

SÁNCHEZ GRANJEL, L., *La medicina española del siglo XVII*, Salamanca, 1978.

SÁNCHEZ GRANJEL, L., *La medicina española del siglo XVIII*, Salamanca, 1979.

SÁNCHEZ LILLO, J., *El recinto amurallado de Ciudad Real y puertas de acceso*, 2ª ed. (corr. y aum.), Ciudad Real, 1986.

SÁNCHEZ ORDÓÑEZ, A., "Sociología y política criminal", en *Revista de Estudios Políticos*, nº 73 (1954), pp. 145-155.

SÁNCHEZ ORTEGA, M.H., *Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII*, Madrid, 1977.

SÁNCHEZ ORTEGA, M.H., *La Inquisición y los gitanos*, Madrid, 1988.

SÁNCHEZ ORTEGA, M.H., *Los gitanos españoles. El periodo borbónico*, Madrid, 1977.

SANDOVAL, B., *Tratado del cuydado que se deve tener de los presos pobres. En que se trata de su obra para proveer a las necesidades que padecen en las cárceles*, Toledo, 1564.

SANTAYANA BUSTILLO, L. *Gobierno político de los pueblos de España, y el Corregidor, alcalde y Juez en ellos*, Zaragoza, 1742,

SANZ FUENTES, M.J., "Cartas de hermandad concejil en Andalucía: el caso de Écija", en *Historia, Instituciones, Documentos*, nº 5 (1978), pp. 403 y ss.

SARRAILH, J., *La España Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII*, (1ª ed. París, 1954), Madrid, 1978.

SASTRE SANTOS, E., *La Orden de Santiago y su Regla*, tesis inédita UCM., 1982.

SEMPERE Y GUARINOS, J., *Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reinado de Carlos III*, 6 vv., Madrid, 1785-1789.

SERRA RUIZ, R., "Notas sobre el juicio de residencia en tiempos de los Reyes Católicos", en *Anuario de Estudios Medievales*, nº 5 (1968), pp. 531-546.

SEVILLA Y SOLANAS, F., *Historia penitenciaria de España. La galera. Apuntes de archivo*, Segovia, 1917.

SISTERNES Y FELIÚ, M., *Dictamen sobre los medios de desterrar la ociosidad y exterminar a los vagos*, Barcelona, 1774.

SOLANO RUIZ, E., *La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los señoríos castellanos de la Orden al fin de la Edad Media*, Sevilla, 1978.

SOTO Y MONTES, J., "Organización militar de los Reyes Católicos", en *Revista de Historia Militar*, nº 14 (1943), pp. 7-47.

SOUBEYROUX, J., *Pauperisme et Rapports sociaux à Madrid au XVIII^e siècle*, (tesis univ. Montpellier, noviembre 1976), París, 1978.

SOUBEYROUX, J., "Pobreza y asistencia social en el siglo XVIII español", en *Revista de Estudios de Historia Social*, nº 12-13 (1980).

SOUBEYROUX, J. (y otros), "Pobreza y conflicto social en la crisis del Antiguo Régimen", en *Estudios de Historia Social*, nº 12-13 (1980) y 20-21 (1982).

STURGILL, C., *L'Organisation et l'Administration de la Maréchausé et de la Justice prévotale dans la France des Bourbons: 1720-1730*, Vicennes, 1981.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., "Evolución histórica de las Hermandades Castellanas", en *CHE.*, nº 16 (1951), pp. 5-78.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., *Los Trastámara y los Reyes Católicos*, Madrid, 1985.

TEIJÓN, V., *Colección legislativa sobre las cárceles, presidios, arsenales y demás establecimientos penitenciarios (1572-1886)*, Madrid, 1886.

TOBIAS, J.L., *Crimes and Industrial Society in the Nineteenth-Century*, Londres, 1967.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *El Derecho Penal de la Monarquía Absoluta (siglos XVI-XVII y XVIII)*, Madrid, 1969.

TOMÁS Y VALIENTE, F., "El perdón de la parte ofendida en el Derecho Penal castellano (siglos XVI-XVII y XVIII)", en *AHDE.*, nº 31 (1961), pp. 55-114.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *Gobierno e instituciones en la España del Antiguo Régimen*, Madrid, 1982.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *La tortura en España. Estudios Históricos*, Barcelona, 1973.

TOMÁS Y VALIENTE, F., "Las cárceles y el sistema penitenciario bajo los Borbones", en *Historia* 16, extra 7 (octubre, 1976), pp. 70-88.

TOMÁS Y VALIENTE, F., "Las ventas de oficios de regidores y la formación de oligarquías urbanas en Castilla (siglos XVII y XVIII)", en *Historia. Instituciones. Documentos*, nº 2 (1975), pp. 525-547.

TOMÁS Y VALIENTE, F., *Manual de Historia del Derecho Penal Español*, Madrid, 1979.

TOMÁS Y VALIENTE, "Origen medieval de la patrimonialización de los oficios públicos en Castilla", en *Actas I Symposium de la Administración*, Madrid, 1970.

TORRAS, J., "Los Moriscos", en M. IZARD (comp.), *Marginados, fronterizos, rebeldes y oprimidos*, t. 1, pp. 49-59.

TOWNSEND, J., *Viaje por España en la época de Carlos III (1786-1787)*, Madrid, 1988.

TREVOR DAVIES, R., *La decadencia española, 1621-1700*, (1ª ed. Londres, 1969), Barcelona, 1972.

UHAGÓN GUARDAMINO, F.R., "Índice de documentos de la Orden Militar de Calatrava existentes en el Archivo Histórico Nacional", en *BRAH.*, nº 35 (1899), pp. 5-167.

ULLOA, M., "Disertación sobre el origen de los duelos, desafíos y leyes de su observancia con sus progresos hasta su total extinción", en *Memorial de la Real Academia de la Historia*, Madrid, 1796, pp. 35-98.

- USTÁRIZ, J., *Theoría y Práctica de Comercio y de Marina*, Madrid, 1742.
- VALBUENA PRAT, A., *La vida española en la Edad de Oro según sus fuentes literarias*, Barcelona, 1943.
- VALDEÓN BARNUEVO, J., "El Honrado Concejo", en *Historia* 16, nº 7 (1981), pp. 11-17.
- VALDEÓN BARUQUE, J., *Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV*, Madrid, 1976.
- VALDEÓN BARUQUE, J., "Problemática para un estudio de los pobres y de la pobreza en Castilla a fines de la Edad Media", en *A pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade Media*, actas de las Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval celebrada en Lisboa, 25/30 de septiembre de 1972, t. 2, pp. 889-918.
- VARÓN VALLEJO, E., "Rondas de los Alcaldes de Casa y Corte en los siglos XVII y XVIII", en *RAMB.*, (1924), pp. 149-154.
- VARONA GARCÍA, M.A., *La Chancillería de Valladolid en el reinado de los Reyes Católicos*, Valladolid, 1981.
- VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, L., "Privilegio de no expulsión de los moriscos antiguos en las cinco villas del Campo de Calatrava (Ciudad Real)", en *I Congreso de Historia de Castilla-La Mancha*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 7, pp. 289-299.
- VEGA, L., "Obras de Lope de Vega", en M. MENÉNDEZ PELAYO (ed. y est. prel.), *Crónicas y leyendas dramáticas de España*, BAE, t. 20, nº 211, Madrid, 1967.
- VÉLEZ DE GUEVARA, L., *El diablo cojuelo*, (1ª impr. Madrid, 1641) en A.R. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ e I. ARELLANO (ed., intr. y not.), Madrid, 1988.

VIGNAU, V y UHAGÓN; F.R., *Índice de Pruebas de los caballeros que han vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y Montesa desde el siglo XVI hasta la fecha*, Madrid, 1903.

VILLADIEGO DE VASCUÑANA Y MONTOYA, A., *Instrucción política y práctica judicial conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyno, utilíssimo para los Gobernadores, y Corregidores, y otros Jueces Ordinarios, y de comisión, y para los Abogados, Escrivanos, Procuradores y Litigantes*, Madrid, 1766.

VILLALOBOS Y MARTÍNEZ-PONTREMULI, M.L., "Régimen dominical de la provincia de Ciudad Real desde el siglo XII hasta fines del Antiguo Régimen", en *VII Centenario del Infante Don Fernando de la Cerda, 1275-1975*, actas del congreso celebrado en Ciudad Real en abril de 1975, pp. 191-216.

VILLAR PALASÍ, J.L., "Poder de la policía y precio justo. El problema de la tasa de mercado", en *Revista de Administración Pública*, nº 16 (enero-abril, 1955).

VILLAR PALASÍ, J.L., "Problemática de la historia de la Administración", en *Actas I Congreso de Historia de la Administración*, Madrid, 1970, pp. 29-38.

VILLEGAS DÍAZ, L.R., *Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus hombres (1255-1500)*, Ciudad Real, 1981.

VILLEGAS DÍAZ, L.R., "Coste de vida y alimentación en La Mancha", en *Almud*, nº 2 (1980), pp. 171-188.

VILLEGAS DÍAZ, L.R., "La Hermandad de Ciudad Real, instrumento de colonización del territorio", en *I Congreso de Historia de Castilla-La*

Mancha, actas del congreso celebrado en Ciudad Real, 16/20 de diciembre de 1985, t. 6, pp. 87-93.

VILLEGAS DÍAZ, L.R., "Pobreza y beneficencia en Ciudad Real a fines del reinado de los Reyes Católicos. Las limosnas de la Hermandad Vieja en 1501", en *Almud*, nº 4 (1981), pp. 121-132.

VILLEGAS DÍAZ, L.R., "Sobre la financiación de la Hermandad de Ciudad Real. Sus ingresos (1491-1525)", en *La Ciudad Hispánica entre los siglos XIII al XVI*, actas del coloquio celebrado en La Rábida y Sevilla, 14/19 de septiembre de 1981, t. 2, Madrid, 1985, pp. 911-928.

VILLEGA, P.J., *Repertorio de todos los caminos de España*, Medina del Campo, 1546.

VIZCAÍNO PÉREZ, P., *Código y práctica criminal arreglado a las leyes de España*, 3 vv., Madrid, 1797.

VINAS Y MEY, C. y PAZ, R., *Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa de Felipe II*, Ciudad Real, Madrid, 1971.

WARD, B., *Obra Pía. Medio para remediar la miseria de la gente pobre de España*, Madrid, 1767.

WEBER, M., *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Barcelona, 1977.

WEISSER, M.R., *Crime and Subsistence: The peasants of the Montes of Toledo 1550-1700*, Chicago, 1976.

WEISSER, M.R., "Crime and punishment in Early Modern Spain", en V.A.C. GATRELL, B. LENNON y G. PARKER, *Crime and Law. The Social History of crime in western Europe since 1500*, Londres, 1980.

WRIGHT, L.B., "Las órdenes Militares en la sociedad española de los siglos XVI y XVII. La encarnación institucional de un atradición

histórica", en J.H. ELLIOT (comp.), *Poder y Sociedad en la España de los Austrias*, Barcelona, 1982, pp. 1858.

YUSTRES, M.S., "Status jurídico y condición social de la mujer en el Ciudad Real del siglo XV", en *Villa Real, 1255*, Ciudad Real, 1989, pp. 51-73.

ZUGASTI, J., *El bandolerismo. Estudio social y memorias históricas*, 10 vv., Madrid, 1876-1890.